

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento de Historia Antigua



TESIS DOCTORAL

**El centro en la periferia: las competencias y actividades de los
gobernadores romanos en las provincias hispanas durante el
Principado (27 a.C.-235 d.C.)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Rubén Olmo López

Directores

Estela García Fernández
Pedro López Barja de Quiroga
Dario Mantovani

Madrid, 2016



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

MADRID

***El centro en la periferia: Las competencias y actividades
de los gobernadores romanos en las provincias hispanas
durante el Principado (27 a.C.-235 d.C.)***

Autor: Rubén Olmo López

Directores: Dra. Estela García Fernández

Dr. Pedro López Barja de Quiroga

Dr. Dario Mantovani

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

***El centro en la periferia: Las competencias y actividades
de los gobernadores romanos en las provincias hispanas
durante el Principado (27 a.C.-235 d.C.)***

Memoria presentada para optar al grado de Doctor por:

Rubén Olmo López

Bajo la dirección de los Doctores:

Estela García Fernández

Pedro López Barja de Quiroga

Dario Mantovani

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Departamento de Historia Antigua

Madrid, 2015

*A mis padres
y a mis abuelos.*

Quam iucunda tandem praetoris comitas (...) potest esse!

*In qua tanta multitudo ciuium, tanta sociorum,
tot urbes, tot ciuitates unius hominis nutum intuentur...*

Cicerón, *Ad Q. fr.* I, 1, 22.

*L'admirable Julius Bassus, premier gouverneur de cette province nouvellement organisée, était mort à la
peine, comme j'avais failli moi-même succomber durant mon année aux frontières sarmates, tué par cette
tâche sans gloire qui consiste à pacifier inlassablement un pays cru soumis.*

Marguerite Yourcenar, *Mémoires d'Hadrien*.

*Andamos por galerías de ecos,
entre imágenes rotas:
nuestra historia.*

Octavio Paz, "Nocturno de San Ildefonso".

Agradecimientos

Este estudio no habría sido el mismo sin el apoyo y el consejo desinteresados de algunas personas a las que deseo expresar aquí mi más profunda gratitud. En primer lugar, a mis directores Estela García Fernández, Pedro López Barja y Dario Mantovani. En estos años he tenido la fortuna de enriquecerme –además de con sus conocimientos– de su vivo espíritu crítico, su talante abierto siempre al diálogo y al debate constructivo, su rigor y honestidad profesionales y personales, y por ello los considero unos verdaderos maestros en el alto sentido del término.

El Departamento de Historia Antigua de la UCM al que pertenezco me dio una cálida acogida y he de agradecer el trato amable y cordial de todos sus miembros, desde mis compañeros becarios y doctorandos hasta sus más antiguos profesores. Sin embargo, quiero expresar mi gratitud especial hacia su jefa de negociado de administración, Marga Sánchez, siempre generosa y dispuesta a ofrecer su ayuda y consejo y a hacernos a todos más llevadero el peso de la burocracia. También quiero agradecer a su Director, Santiago Montero, y a los profesores Julio Mangas, Rosario Hernando y Ana Rodríguez Mayorgas su disponibilidad cuando necesité su ayuda y su interés por el avance de mi trabajo. La documentación epigráfica hispana manejada en mis investigaciones fue recabada en gran parte gracias a los exhaustivos ficheros del Archivo Epigráfico de Hispania de la UCM. Allí José Luis Gamallo y Paloma Balbín me dieron una gran acogida y me guiaron en una tarea que parecía interminable.

También debo mucho a la consulta directa de los valiosos fondos de la biblioteca del Departamento de Derecho Romano de la UCM. Mi deuda con su secretaria administrativa, Lidia García Ríos, y con el profesor José María Coma Fort es grande, no sólo por haberme ofrecido su ayuda constante desde el primer día que fui a consultar *Le droit public romain* de Mommsen, a inicios de mi investigación, sino por haberme honrado con su amistad. La repentina desaparición de José María –que nos ha dejado a los que le conocimos un poco más huérfanos– me ha privado de la alegría de haberle entregado un ejemplar de este estudio que él me animó a tejer día tras día sin desesperar de que fuese como la tela de Penélope (*Sit tibi terra levis*). También quiero extender mi agradecimiento a los profesores Faustino Martínez, Lorna García Gérboles, José Antonio González Romanillos, José Domingo Rodríguez Martín, Ana Jiménez Sancristóbal, Alberto Bernabé, Michael Peachin, Tammo Wallinga y Manolita Iglesias.

Gracias a la Beca de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España mi formación predoctoral se vio reforzada no sólo por mi inserción como personal investigador en formación en el Departamento de Historia Antigua de la UCM, sino porque me permitió realizar varias estancias de investigación en centros europeos que enriquecieron la calidad de mi trabajo de investigación y mi propio crecimiento intelectual y personal. Las más largas y cruciales fueron las desarrolladas en la Università di Roma 1 “La Sapienza” con el profesor Elio Lo Cascio y el Centre ANHIMA de la École Pratique des Hautes Études de París con el profesor Jean-Louis Ferrary. A ambos los considero también mis maestros y quiero reiterarles aquí mi más sentido agradecimiento por su generosa atención y cordialidad cotidianas y por el interés que demostraron por mis investigaciones en los meses que tuve el honor de exponerles los frutos de mi trabajo y de enriquecerme con su magisterio. También quiero recordar aquí la magnífica experiencia del *X Cedant* del IUSS de Pavía (2012) y la buena acogida que me dieron en la Université Catholique de Louvain el profesor Marco Ferreri y mi buen amigo Pierre Assenmaker y en la Scuola Normale Superiore di Pisa el profesor Carmine Ampolo, así como las gratas conversaciones que tuve con Alberto Dalla Rosa en la EPHE de París y los inolvidables momentos pasados en París con Rafa, Antonio, David, Gabi, Tere, Manu, Lorena, Inma y Anahí y el resto de residentes del Colegio de España y con Philip, Xavier, Luigi, Annelise y Salvatore en los descansos de la biblioteca de la École Française de Rome en Palazzo Farnese.

En estos años ha sido muy importante para mí el apoyo incondicional recibido de mi familia y de todos mis amigos aun en la distancia. En particular, quiero recordar los felices y siempre vivificadores momentos pasados con mis amigos Miriam, Luisa, Pepe, David Varela, Nacho, Pablo y Felipe *e i miei fratelli romani* Stefano, Luciano, Gianluca, Andrea y Laura, que hicieron de Roma mi hogar y me bautizaron en la *romanità*. También la generosa disponibilidad de mis primos Iria y Fran.

Finalmente, merecen mi más cariñoso reconocimiento las dos personas que más quiero, mis padres, Eva y Emeterio, a quienes —como no podía ser de otro modo— está dedicada esta tesis. Sin su cariño, esfuerzo y fe en mí valía no habría llegado hasta aquí; sin nuestra complicidad hoy no sería un día tan feliz. Gracias.

ÍNDICE

| | |
|--|-----|
| <i>Agradecimientos</i> | 7 |
| Índice..... | 9 |
| Abreviaciones..... | 11 |
| INTRODUCCIÓN: Presentación, estado de la cuestión, objetivos, metodología y fuentes, estructura del estudio..... | 17 |
| PRIMERA PARTE: Las funciones jurisdiccionales del gobernador y su poder coercitivo..... | 41 |
| Capítulo 1: El edicto provincial..... | 43 |
| Capítulo 2: <i>Circumire prouinciam</i> : El sistema conventual en Hispania..... | 77 |
| Capítulo 3: La jurisdicción “no criminal” del gobernador..... | 119 |
| Capítulo 4: La jurisdicción penal del gobernador y su poder coercitivo..... | 169 |
| Capítulo 5: Los gobernadores y el ejército estacionado en Hispania: <i>Officium</i> y poder militar..... | 223 |
| Reflexiones finales..... | 289 |
| SEGUNDA PARTE: Tutela del sistema municipal e intervención en el censo y la ordenación territorial. | 297 |
| Capítulo 1: Control de las finanzas municipales..... | 301 |
| Capítulo 2: Supervisión y promoción de las obras públicas..... | 345 |
| Capítulo 3: Intervención en la acuñación monetaria..... | 397 |
| Capítulo 4: Intervención en el sistema tributario provincial..... | 413 |
| Capítulo 5: El censo y la ordenación del territorio provincial..... | 431 |
| Reflexiones finales..... | 469 |
| TERCERA PARTE: El gobernador y las élites locales: Del fomento de la fidelidad de los provinciales al patronato..... | 479 |

| | |
|--|-----|
| Capítulo 1: El papel de los gobernadores en el desarrollo del culto imperial provincial..... | 481 |
| Capítulo 2: La intervención de los gobernadores en las otras manifestaciones de lealtad hacia el emperador y su familia..... | 531 |
| Capítulo 3: Las relaciones personales del gobernador con las comunidades y los individuos de su provincia. El patronato y otros honores..... | 557 |
| Reflexiones finales..... | 603 |
| CONCLUSIONES FINALES..... | 607 |
| CONCLUSIONI FINALI..... | 619 |
| Bibliografía..... | 631 |
| ANEXO I: <i>Fasti</i> de los gobernadores provinciales de Hispania durante el Principado (27 a.C.-235 d.C.)..... | 701 |
| ANEXO II: Epigrafía de las provincias hispanas relativa a sus gobernadores..... | 717 |
| Resumen..... | 767 |
| Riassunto..... | 771 |
| Abstract..... | 775 |

Abreviaciones

AE: L'Année Épigraphique.

AEspA: Archivo Español de Arqueología.

AHDE: Anuario de Historia del Derecho español.

AJAH: American Journal of Ancient History.

AJPh: American Journal of Philology.

ANRW: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms in Spiegel der neueren Forschung, Berlín, 1972-.

CAH² X: A. K. Bowman – E. Champlin – A. Lintott (eds.), The Cambridge Ancient History, vol. X: The Augustan Empire: 43 B.C.- A.D.69, Cambridge, 1996.

CAH² XI: A. K. Bowman – P. Garnsey – D. Rathbone (eds.), The Cambridge Ancient History, vol. XI: The High Empire, Cambridge, 2000.

CCG: Cahiers du Centre Gustave Glotz.

CIBal: C. Veny, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, Madrid-Roma, 1965.

CIIAE: J. L. Ramírez Sádaba, Catálogo de las inscripciones imperiales de Augusta Emérita, Mérida, 2003.

CIL: AA.VV. Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlín, 1863-.

CIL II²/5: A. U. Stylow et alii, Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. II: Inscriptiones Hispaniae Latinae, editio altera, Pars V: Conventus Astigitanus, Berlín-Nueva York, 1998.

CIL II²/7: A. U. Stylow *et alii*, *Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. II: Inscriptiones Hispaniae Latinae, editio altera, Pars VII: Conventus Cordubensis*, Berlín-Nueva York, 1995.

CIL II²/14: G. Alföldy *et alii*, *Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. II: Inscriptiones Hispaniae Latinae, editio altera, Pars XIV: Conventus Tarraconensis, fasciculus I-III*, Berlín-Nueva York, 1995-2012.

CILA: AA.VV. *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía*, Sevilla, 1991-.

CRAI: *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*.

CuPAUAM: *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid*.

DECAR: J. M. Abascal Palazón – S. F. Ramallo Asensio, *La ciudad de Carthago Nova: La documentación epigráfica*, Murcia, 1997.

Diz. Epig.: E. de Ruggiero (cura), *Dizionario epigrafico di antichità romane*, Roma, 1895-1941.

Diz. Giurid.: *Dizionario giuridico romano*, Nápoles, 2006.

DHA: *Dialogues d'Histoire Ancienne*.

Ehrenberg – Jones: V. Ehrenberg – A. H. M. Jones, *Documents illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius*, Oxford, 1955.

EJER: A. D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid, 1953.

ELRH: B. Díaz Ariño, *Epigrafía latina republicana de Hispania*, Barcelona, 2008.

ERAE: L. García Iglesias, *Epigrafía romana de Augusta Emérita*, extracto de tesis doctoral, Madrid, 1973.

ERPLugo: J. Gómez Vila, *Epigrafía romana de la provincia de Lugo*, Lugo, 2009.

ERPSo: A. Jimeno Martínez, *Epigrafía romana de la provincia de Soria*, Soria, 1980.

ERSg: J. Santos Yanguas – A. L. Hoces de la Guardia – J. del Hoyo, *Epigrafía romana de Segovia y su provincia*, Segovia, 2005.

EClu: P. de Palol – J. Vilella, *Clunia II: La epigrafía de Clunia*, Madrid, 1987.

ERItal: A. Canto, *Epigrafía romana de Itálica*, Madrid, 1985.

ERPLe: M. A. Rabanal Alonso – S. M^a. García Martínez, *Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualización*, León, 2001.

ETF II: *Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua*

Fasti Hispanienses: G. Alföldy, *Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden, 1969.

FHA 5: A. Schulten, *Fontes Hispaniae Antiquae 5: Las guerras de 72-19 a. de J.C.*, Barcelona, 1940.

FIRA: S. Riccobono – J. Baviera – C. Ferrini – J. Furlani – V. Arangio-Ruiz, *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*, Florencia, 1940-1943.

Fishwick, The Imperial Cult: D. Fishwick, *The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire*, vol. I-III, Leiden-Boston/Nueva York-Colonia, 1987-2005.

HEp: *Hispania Epigraphica*.

HSCPh: *Harvard Studies in Classical Philology*.

IGRRP: R. Cagnat, *Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes*, París, 1906-1927.

IL Afr: R. Cagnat – A. Merlin, *Inscriptions latines d'Afrique: Tripolitaine, Tunisie, Maroc*, París, 1923.

IL Alg: S. Gsell, *Inscriptiones latines de l'Algerie*, París, 1922.

ILER: J. Vives, *Inscripciones latinas de la España romana*, Barcelona, 1971-1972.

ILS: H. Dessau, *Inscriptiones Latinae Selectae*, Berlín, 1892-1906.

- ILTun*: A. Merlin, *Inscriptions latines de la Tunisie*, París, 1944.
- IRC*: G. Fabre – M. Mayer – I. Rodà, *Inscriptions romaines de Catalogne*, París, 1984-2002.
- IRCP*: J. d'Encarnação, *Inscrições romanas do conventus Pacensis: subsídios para o estudo da romanização*, Coimbra, 1984.
- IRG*: AA.VV. *Inscripciones romanas de Galicia*, I-IV, Santiago de Compostela, 1949-1968.
- IRPLu*: F. Arias Vilas – P. Le Roux – A. Tranoy, *Inscriptions romaines de la province de Lugo*, París, 1979.
- IRPV*: J. Corell, *Inscripciones romanes del País Valencià*, Valencia, 2002-2008.
- IRT*: J. M. Reynolds – J. B. Ward-Perkins, *The Inscriptions of Roman Tripolitania*, Roma, 1952.
- JRA*: *The Journal of Roman Archeology*.
- JRS*: *The Journal of Roman Studies*.
- MEFRA*: *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité*.
- PBSR*: *Papers of the British School at Rome*.
- PIR²*: E. Groag – A. Stein – et alii, *Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III*, fasc. I (A-B)-VIII (T), Berlín, 1933-2009.
- RAP*: J. M. García, *Religiões antigas de Portugal: aditamentos e observações às "Religiões da Lusitânia" de J. Leite de Vasconcelos: fontes epigráficas*, Lisboa, 1991.
- RE*: A. F. Pauly – G. Wissowa (dir.) *Real-Encyclopädie der classischen Altertumwissenschaft*, Stuttgart, 1893-1974. *Supplement*, 1903-1978.
- REA*: *Revue des études anciennes*.
- REL*: *Revue des études latines*.
- RHDFE*: *Revue historique du droit français et étranger*.

*RIC*²: C. H. V. Sutherland – R. A. G. Carson, *The Roman Imperial Coinage*, Londres, 1984-2003.

RIDA: *Revue internationale des droits de l'Antiquité*.

RIT: G. Alföldy, *Die römischen Inschriften von Tarraco*, Berlín, 1975.

RMD I: M. Roxan, *Roman Military Diplomas, 1954-1977*, Londres, 1978.

RMD III: M. Roxan, *Roman Military Diplomas, 1985-1993*, Londres, 1994.

RMD V: P. Holder, *Roman Military Diplomas*, Londres, 2006.

RPC: A. M. Burnett – M. Amandry – P. P. Ripollès, *Roman Provincial Coinage*, Londres-París, 1992-.

SDHI: *Studia et Documenta Historiae et Iuris*.

SEG: *Supplementum Epigraphicum Graecum*, Leiden, 1923-.

TAPhA: *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*.

TLL: *Thesaurus Linguae Latinae*, Leipzig-Munich-Berlín-Nueva York, 1900-.

ZPE: *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*.

ZSS: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*.

INTRODUCCIÓN:

Estado de la cuestión, objetivos y estructura del estudio, metodología y fuentes

Un imperio se puede definir como el control efectivo, formal o informal, que un Estado extranjero ejerce sobre la soberanía de otro Estado, dominando tanto su política interna como la exterior¹, o sobre un pueblo al que somete absolutamente a su política. Se trata, pues, de una forma de ejercicio de influencia y poder propia de una relación asimétrica entre un centro dominante y una periferia dependiente de él y subordinada a sus decisiones. Las otras dos características que distinguen a un imperio son su notable extensión territorial y su dilatada perduración en el tiempo. El proceso por el que se establece y mantiene un imperio es lo que se denomina imperialismo. Las dos posibles manifestaciones del control imperial sobre la soberanía de las sociedades políticas o pueblos subordinados, la formal y la informal, se diferencian en los actores de los que se vale la potencia imperial para controlar la periferia subordinada a ella. El imperialismo informal deja el proceso de control de la periferia en manos de gobiernos legalmente independientes, mientras que el formal implica una intervención directa en la toma de decisiones en la periferia de enviados oficiales del poder central —esto es, altos oficiales y burócratas—, los llamados “men on the spot”. Éstos, sin embargo, cuentan con la colaboración de los nativos, bien en los puestos inferiores de la administración (control formal directo), bien concediéndoles la gestión de ciertos distritos bajo la supervisión del máximo mandatario enviado por el poder imperial: el gobernador².

El Imperio Romano del período del Principado es un buen paradigma de los imperios que desarrollaron un control formal de su periferia. A partir de Augusto Roma superó la mera dominación militar de sus provincias que había caracterizado el período

¹ Los estados hegemónicos, en cambio, sólo controlan la política exterior de sus subordinados. Según H. Münckler, *Empires: The Logic of World Domination from Ancient Rome to the United States*, Cambridge, 2007, p. 6: “Hegemony is supremacy within a group of formally equal political players; imperality, by contrast, dissolves this—at least formal—equality and reduces subordinates to the status of client states or satellites. They stand in a more or less recognizable dependence in relation to the centre”.

² M. Doyle, *Empires*, Cornell, 1986, pp. 19 y 30-38.

republicano y fundamentó su imperio en dos importantes pilares: un sistema administrativo ordenado y perfectamente jerarquizado en la cúspide del cual se hallaba el emperador y el desarrollo de fuerzas e instituciones políticas, sociales, económicas y culturales en todas las provincias que propiciaron la colaboración de sus élites y la integración social paulatina de su población³. Como señaló R. Syme, la integración plena de las élites provinciales –manifestada en su acceso a los más altos cargos del gobierno central, incluso al trono imperial desde el siglo II– garantizó la perdurabilidad del Imperio Romano⁴.

En el ejercicio de control formal que Roma desarrolló en sus provincias a partir de Augusto, los gobernadores provinciales jugaron un papel crucial, no sólo por ser los “men on the spot” que gozaban de más poder en virtud de su *imperium* y jurisdicción superior, sino también porque en un imperio preindustrial y poco burocratizado como el romano ellos fueron, como veremos, los principales intermediarios entre el poder imperial y los representantes de las comunidades de sus provincias en el marco de las relaciones centro-periferia.

Sin embargo, el estudio de las competencias y actividades de los gobernadores provinciales romanos ha sido desigual, generalmente englobado en obras de carácter general que examinaban los distintos niveles de la administración imperial romana desde una perspectiva “macro” o bien siendo objeto de estudios demasiado específicos que se interesaban más en algún aspecto concreto de sus funciones, especialmente sus poderes jurisdiccionales en relación bien con la autonomía de las ciudades del imperio, bien con el desarrollo del derecho romano en las provincias. Esto resulta paradójico si se tiene en cuenta que forman parte de una de las más clásicas líneas de investigación de la historiografía especializada: la de las estructuras político-administrativas del Estado romano y su imperio⁵.

³ *Idem* pp. 94-97.

⁴ R. Syme, *Colonial Élites: Rome, Spain and the Americas*, Londres, 1958, pp. 1-23.

⁵ Ya en el siglo XVII, el Cardenal Scipione Maffei (1675-1755) dedicó una rica disertación a este tema. Véase: Scipione Maffei, *Del Governo de' Romani*, a cura di G. Ramilli, Verona, 1977.

Desde que la Historia de Roma se convirtió en una disciplina verdaderamente científica en la segunda mitad del siglo XIX las investigaciones dedicadas a la administración provincial en época republicana e imperial han ocupado un lugar central –como consecuencia del protagonismo que los historiadores de esta época otorgaron al Estado como sujeto histórico⁷– y se han caracterizado por unas firmes bases metodológicas: el riguroso conocimiento de las estructuras jurídicas y políticas romanas, la crítica filológica en el examen de las fuentes literarias, y el constante recurso a la disciplina auxiliar de la epigrafía. Las líneas de investigación han sido dos: la jurídico-política y la prosopográfica.

Los estudios de carácter jurídico-político según los nuevos principios científicos tienen su punto de partida en las obras monumentales de J. Marquardt y, sobre todo, Th. Mommsen⁸. La influencia en la historiografía del *Römisches Staatsrecht* o *Derecho público romano* de Mommsen se debe, por un lado, al excepcional trabajo recogido en ella, en el que demuestra un profundo conocimiento de las fuentes y un rigor metodológico ejemplar; por otro, a la autoridad de que gozó desde su época este autor, al que puede atribuírsele el título de “padre de la Historia de Roma” científica. En la parte correspondiente a las magistraturas, Mommsen dedica un capítulo a trazar la evolución institucional, de la República al siglo III, del cargo de gobernador provincial, prestando especial atención a los cambios que sufrió durante el Principado en aspectos tales como los tipos de gobernadores, sus títulos, su forma de elección y sus poderes, en particular los jurisdiccionales y militares⁹. No en vano, la administración de las provincias fue uno de los ámbitos en que mejor se reflejó el cambio de régimen.

En las mismas fechas en que Mommsen publicó su obra, vio la luz la primera obra relevante expresamente dedicada al sistema administrativo provincial de Roma, a

⁶ Aquí se presentan un recorrido por las principales obras y corrientes historiográficas que han abordado la figura de los gobernadores provinciales. Aunque nuestro estudio se concentra en el período del Principado, se mencionan también obras dedicadas al período republicano cuando su ausencia desvirtuaría el repaso. El tratamiento de los debates historiográficos serán abordados en los capítulos del estudio cuando proceda.

⁷ J. Fontana, *La historia de los hombres*, Barcelona, 2001, pp. 165-172.

⁸ J. Marquardt, *Römisches Staatsverwaltung*, 1873-1878; Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig, 1887-1888, y *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899. En lo sucesivo estas obras serán citadas por sus versiones francesas, al ser las que hemos manejado habitualmente.

⁹ *Le droit public romain III*, París, 1892, pp. 274-312.

cargo de W. T. Arnold, que desde entonces ha conocido varias ediciones y sigue siendo a día de hoy el manual de referencia en las universidades británicas¹⁰. Asimismo, en Francia C. Halgan publicó un *Essai sur l'administration des provinces senatoriales sous l'Empire romain* (París, 1898) y E. Marx, poco antes, elaboró una monografía sobre las funciones de los gobernadores provinciales¹¹. Este último, empero, a pesar de plantear un recorrido sistemático por cada una, el estudio de Marx adolece de una carencia importante: la escasa cita de las fuentes empleadas, lo que provocó que pronto fuese relegada a un segundo plano.

En sus obras Marquart y, sobre todo, Mommsen realizaron una exhaustiva reconstrucción del “edificio” político romano, siguiendo los presupuestos de la “historia científica” alemana –Mommsen fue uno de los máximos representantes de la llamada “escuela prusiana”¹²–, y legaron a los futuros estudiosos dedicados a las instituciones romanas unas sólidas bases metodológicas de las que partir. Sin embargo, su imponente obra resultó en cierto modo avasalladora para sus sucesores, que vieron en ella una reconstrucción de la organización del Estado romano sin fisuras aparentes. Esto provocó que los estudios posteriores siguiesen las líneas marcadas en estas obras hasta que los años 50-60 comenzaron a revisarse sus hipótesis y a reexaminarse las fuentes en que se habían basado.

En lo que respecta a los gobernadores provinciales, hasta los años setenta no volverá a aparecer una monografía dedicada a sus poderes y funciones: la tesis inédita de G. P. Burton acerca de los procónsules entre época flavia y el 260, que profundizó en el grado de discrecionalidad que tenían éstos para intervenir en los asuntos de las ciudades a través de sus poderes jurisdiccionales, privilegiando, empero, los ejemplos procedentes de las provincias helenófonas¹³. Esto no significa que el interés de la historiografía por los gobernadores decayese, sino que recibieron una atención secundaria dentro de estudios de más largo alcance dedicados a la administración provincial o la “constitución” romana. Entre el primer tipo caben ser señaladas las obras

¹⁰ W. T. Arnold, *The Roman System of Provincial Administration till the Accession of Constantine the Great*, Londres, 1879. La edición que se sigue reeditando es la de 1914, revisada por E. S. Bouchier.

¹¹ E. Marx, *Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province sous la République romaine et jusqu'à Dioclétien*, París, 1880.

¹² Mommsen fue “un hombre de 1848”, en palabras de C. Nicolet. Cf. Fontana, *La historia de los hombres* cit. pp. 165-172.

¹³ G. P. Burton, *The Powers and Functions of Proconsuls in the Roman Empire 70-260 AD*, Oxford, 1973.

generales de G. H. Stevenson (1945) y G. I. Luzzato (1985)¹⁴, o monografías sobre provincias concretas, como la de R. Thouvenot sobre la Bética (1940) o las de P. Romanelli sobre el África romana en los años 40 y 50¹⁵, que examinaban su inserción en la política en el imperio a través de la combinación de testimonios literarios, epigráficos y arqueológicos. De las obras publicadas en este momento, sin embargo, la que mejor ha soportado el paso del tiempo ha sido la de D. Magie, *Roman Rule in Asia Minor, to the End of the Third Century after Christ* (Princeton, 1950), estudio ejemplar no sólo por el excelente manejo de las diversas fuentes antedichas sino por añadir a la narración factual y arqueológica un profundo análisis de las herramientas utilizadas por el poder romano en su administración provincial y su adaptación a la realidad asiática. En cuanto a los estudios “constitucionales” destaca con luz propia la magnífica *Storia della costituzione romana*, obra en varios volúmenes del maestro F. De Martino, el último romanista que ha intentado ofrecer un estudio omnicomprendivo de la evolución político-institucional de Roma. En él, dedica varios capítulos de diferentes volúmenes a la organización y administración provincial republicana y altoimperial, en los que se detiene en la figura del gobernador y en las relaciones entre las comunidades locales y el poder romano¹⁶.

En la segunda mitad de los años 50 y en la década de los 60 los historiadores anglosajones A. H. M. Jones, A. N. Sherwin-White, P. Garnsey¹⁷ abordaron en diversos artículos el problema de la aplicación del derecho romano –en particular de los derechos de los *ciues Romani*– y de la administración de justicia en las provincias durante la República y el Principado, dedicando especial atención a los poderes jurisdiccionales y coercitivos de los gobernadores provinciales, y, en particular, a su poder de vida o muerte sobre los habitantes de sus provincias en función del status jurídico de éstos

¹⁴ G. H. Stevenson, *Roman Provincial Administration till the Age of the Antonines*, Oxford, 1939; *Roma e le province I: Organizzazione, economia e società*, Bolonia, 1985.

¹⁵ R. Thouvenot, *Essai sur la province romaine de Bétique*, París, 1940. P. Romanelli, *Roma e l'Africa*, Roma, 1943; *La Cirenaica romana (96 a.C.-642 d.C.)*, Verbania, 1943; *Storia delle province romane dell'Africa*, Roma, 1959.

¹⁶ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Nápoles, 1958-1972, esp. vol. II, pp. 399-411; III, pp. 382-401; IV/2, pp. 800-835.

¹⁷ A. H. M. Jones, *Studies in Roman Government and Law*, Oxford, 1968, donde recopila artículos publicados desde los años 50; A. N. Sherwin-White, “Coercitio, Cognition, and Imperium in the First Century A.D.”, en *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford, 1963, pp. 1-21; P. Garnsey, “The lex Iulia and Appeal under the Empire”, *JRS* 56, 1966, pp. 167-189, “The Criminal Jurisdiction of Governors”, *JRS* 58, 1968, pp. 51-59, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970.

(véase *infra* la importante polémica en torno a la extensión del *ius gladii*). Asimismo, el protagonismo de los gobernadores en sistema de administración de justicia a través de sedes de *conuentus iuridici* fue analizada por A. J. Marshall y G. P. Burton¹⁸.

En segundo lugar, como decíamos, ha gozado de gran protagonismo la prosopografía. Entre la numerosa bibliografía a que ha dado lugar, existen importantes estudios dirigidos a rescatar los *Fasti* de los gobernadores de las provincias hispanas durante el Principado. Al margen de estudios previos parciales¹⁹, destacan principalmente los trabajos de A. Balil, C. Castillo²⁰ y, sobre todo, los *Fasti Hispanienses* del gran epigrafista G. Alföldy (Wiesbaden, 1969), que, con algunas correcciones y añadidos hechos por él mismo u otros²¹, son aún la referencia ineludible para el estudio de la estructuración de los gobiernos provinciales de Hispania y su situación dentro del *cursus honorum* senatorial durante el Principado, y tanto para el conocimiento de los senadores que gobernaron la Hispania Citerior, la Lusitania y la Bética como de aquéllos que ocuparon cargos inferiores a su servicio (legados y, en el caso bético, también cuestores).

En los últimos quince años aproximadamente los gobernadores provinciales han recobrado el protagonismo en la literatura especializada gracias al creciente interés por el análisis teórico de la naturaleza de los imperios históricos y la comparación entre ellos –entre los cuales el Imperio Romano es tomado como paradigma y constante referencia– que ha supuesto un punto de inflexión en la historiografía y no ha tardado en manifestarse en nuestra disciplina²². Las relaciones centro-periferia han ido ocupando

¹⁸ A. J. Marshall, “Governor’s on Move”, *Phoenix* 20/3, 1966, pp. 231-246; G. P. Burton, “Proconsuls, Assizes and the Administration of Justice under the Empire”, *JRS* 65, 1975, pp. 92-106.

¹⁹ E. Darquenne – Y. Davio – R. De Leener – R. Devigne-Squibin – R. Leclercq, “Les Gouverneurs de la Lusitanie et leur administration”, *Latomus* 2/4, 1938, pp. 256-278; R. Szymkiewicz, *Les gouverneurs de province à l’époque augustéenne: contribution à l’histoire administrative et sociale du Principat*, París, 1975-1976, donde dedica una parte a los gobernadores de Hispania. A pesar su título, ambos trabajos son eminentemente prosopográficos.

²⁰ A. Balil, “Los procónsules de la Bética”, *Zephyrus* 13, 1962, pp. 75-89, “Los legados de la Lusitania”, *Conimbriga* 5, 1965, pp. 13-57, “Los gobernadores de la Hispania Tarraconense durante el Imperio Romano”, *Emerita* 32, 1964, pp. 19-34. C. Castillo, *Prosopographia Baetica*, Pamplona, 1965.

²¹ Por ejemplo: G. Alföldy, “Fasti und Verwaltung der hispanischen Provinzen”, en R. Haensch – J. Heinrichs (Hg.), *Herrschen und Verwalten: der Alltag des römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, Colonia-Weimar-Viena-Böhlau, 2007, pp. 325-356; F. J. Navarro, “Nuevos magistrados senatoriales en la Península Ibérica. Un complemento a los Fasti Hispanienses”, en J. González (ed.) *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano*, Sevilla, 1999, pp. 443-465; B. M. Kreiler, *Statthalter zwischen Republik und Prinzipat*, Frankfurt-am-Main, 2006. Para el resto de referencia bibliográfica véase el Anexo I *infra*.

²² Véase: G. Woolf, “World-systems Analysis and the Roman Empire”, *JRA* 3, 1990, pp. 44-58, que es un intento de aplicación de las teorías del “sistema-mundo” de I. Wallerstein al Imperio Romano; G. P.

cada vez un lugar más relevante en los estudios dedicados a las provincias romanas, convirtiéndose en un eje interpretativo fundamental en los estudios sobre los mecanismos jurídico-administrativos de que disponía el imperio para perpetuar su dominio.

En este sentido, una de las líneas de investigación más fructíferas ha sido la centrada en el estudio de las relaciones establecidas entre el poder imperial y las comunidades locales, que en las provincias orientales se ha centrado en el análisis de la coexistencia entre la autonomía de las ciudades privilegiadas y el intervencionismo del poder imperial, mientras que en las occidentales se ha dirigido hacia el estudio de las fases del proceso de municipalización. Buena prueba de ello son la monografía de D. Nörr, *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatzeit* (Munich, 1966) y la obra colectiva dirigida por W. Eck, *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert* (Munich, 1999). En España, destaca la producción científica del Grupo de Investigación en Ciudades Romanas (GICiuR), dirigido primero por J. Mangas y a día de hoy por E. García Fernández, al que yo mismo pertenezco. También caben ser mencionados los trabajos del Grupo *Ordo*, vinculado a la Universidad de Córdoba, por ejemplo los recogidos en el reciente volumen *Poder central y autonomía municipal: la proyección pública de las élites romanas de Occidente* (Córdoba, 2006), editado por E. Melchor Gil y J. F. Rodríguez Neila.

Actualmente, se puede decir que la historiografía francesa ha tomado el testigo de la anglosajona en la investigación acerca de la administración provincial –cuyos últimos grandes estudios sobre la administración imperial pertenecen a la pluma de F. Millar en los años 60-70 y M. Crawford entre finales de los 80 e inicios de los 90²³– y ha sido especialmente prolífica en los estudios dedicados a los poderes y competencias de los gobernadores provinciales durante la República y el Principado. Siguiendo el camino abierto por C. Nicolet y J.-L. Ferrary, entre otros, una nueva generación ha

Burton, “The Roman Imperial State (A.D. 14-235): Evidence and Reality”, *Chiron* 32, 2002, pp. 249-280; F. Hurllet (ed.) *Les Empires. Antiquité et Moyen Âge. Analyse comparée*, Rennes, 2008 y “(Re)penser l’Empire romain. Le défi de la comparaison historique”, *DHA* suppl. 5, 2011, pp. 107-140; A. Dalla Rosa, “Non seulement les empires. Un bref regard critique sur les plus récentes études d’histoire comparée de l’Antiquité”, *Anabases* 15, 2012, pp. 101-114.

²³ F. Millar, “The Emperor, the Senate and the Provinces”, *JRS* 56, 1966, pp.156-166; y *The Emperor in the Roman World*, Londres, 1977. M. Crawford, (cura), *L’impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, Como, 1986; y “Origini e sviluppi del sistema provinciale romano”, en *Storia di Roma*, vol. 2, *L’impero mediterraneo I: La repubblica imperiale*, Torino, 1990, pp. 91-121.

dedicado importantes trabajos de investigación a los gobernadores provinciales dentro del esquema centro-periferia y la dicotomía gobernantes-gobernados. Entre estos historiadores descolla Hurlet, autor de varios artículos de referencia²⁴ y de la importante monografía *Le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien* (Burdeos, 2006), en la que analiza el proceso paulatino de subordinación de los procónsules al emperador desde época de Augusto y la definición del nuevo rol de los primeros en el régimen del Principado. Hurlet también ha dirigido la obra colectiva *Rome et l'Occident (IIe siècle av. J.-C. – IIe siècle ap. J.-C.). Gouverner l'Empire* (Rennes, 2009). La otra autora de referencia es A. Bérenger, quien, además de numerosos artículos, ha publicado recientemente *Le métier de gouverneur dans l'Empire romain. De César à Dioclétien* (París, 2014), donde propone un repaso a todas las funciones generales compartidas por los diferentes tipos de gobernadores (senatoriales y ecuestres) en el plano de la *longue durée* y desde una perspectiva “macro”²⁵. También cabe ser mencionado el interesante artículo de M. Dondin-Payre sobre la intervención de los procónsules de África en los asuntos internos de sus ciudades²⁶. Las actividades de los gobernadores republicanos y su relación con los provinciales han sido objeto de dos coloquios que han dado lugar a sendas obras colectivas editadas por N. Barrandon y F. Kirbihler²⁷. Por último, hay que mencionar el importante lugar reservado por J. Fournier a la figura de los gobernadores en su monografía *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)* (Paris – Atenas, 2010).

En Italia, los estudios acerca de los gobernadores provinciales han seguido estrechamente ligados a la escuela de juristas romanistas. La obra colectiva *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminales dei governatori di provincia (II sec. a.C.-II d.C.)* (Pavía, 2010), dirigida por D. Mantovani y L. Pellicchi es un excelente muestra de la salud de que goza. En lo que respecta a los historiadores, su más reciente representante, A. Dalla Rosa, ha realizado una tesis doctoral sobre la

²⁴ Véase Bibliografía.

²⁵ Véase mi recensión en *Athenaeum* e. p. Véanse sus artículos citados en nuestra Bibliografía.

²⁶ M. Dondin-Payre, “L'intervention du proconsul d'Afrique dans la vie des cités”, en *L'Afrique dans l'Occident romain (Ier s. av. J.-C.-IVe s. ap. J.-C.). Actes coll. Rome (3-5 décembre 1987)*, Roma, 1990, pp. 333-349.

²⁷ *Administrer les provinces de la République romaine*, Rennes, 2010, y *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, Rennes, 2011.

consolidación de la autoridad del emperador en las provincias proconsulares²⁸, y ha colaborado con F. Hurlet. Su maestro, C. Letta, ha publicado recientemente un manual colectivo sobre las provincias romanas²⁹.

Por su parte, la historiografía alemana, que durante muchas décadas ha tenido como máxima autoridad sobre la administración imperial a G. Alföldy y W. Eck³⁰, tiene hoy dos nuevos representantes de primer nivel en este ámbito: R. Haensch, discípulo de Eck y gran conocedor de la documentación epigráfica y literaria referente a la administración provincial, y E. Meyer-Zwiffelhofer. La labor investigadora del primero ha dado lugar a un extenso volumen dedicado a las capitales y cabeceras administrativas a través de las cuales el poder romano articuló su administración provincial: *Capita provinciarum: Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit* (Mainz, 1997). La exhaustividad documental de esta obra sigue la mejor tradición germana y la ha convertido en un punto de obligada referencia. Asimismo, Haensch se ha interesado por los cuadros administrativos imperiales de las provincias en varios artículos, contestando la teoría de que el Imperio Romano careció de una burocracia propiamente dicha³¹. Suyo es el más importante estudio dedicado a los archivos provinciales hasta la fecha³². Asimismo es coeditor junto a J. Heinrichs de la obra colectiva *Herrschen und Verwalten: der Alltag des römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, Colonia-Weimar-Viena-Böhlau, 2007. En cuanto a Meyer-Zwiffelhofer, ha estudiado el gobierno de las provincias griegas en *Politikos archein. Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen* (Stuttgart, 2002), centrándose en la relación entre sus ciudades y los

²⁸ Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari, Stuttgart, 2014.

²⁹ C. Letta – S. Segenni (cura), Roma e le sue province. Dalla Prima Guerra Punica a Diocleziano, Roma, 2015.

³⁰ Véanse sus trabajos de prosopografía y sus síntesis de la organización administrativa provincia en Bibliografía.

³¹ R. Haensch, “A commentariis und commentariensis: Geschichte und Aufgaben eines Amtes im Spiegel seiner Titulaturen”, en Y. Le Bohec (ed.) *La hiérarchie (Rangoordnung) de l’armée romaine sous le Haut-Empire*, París, 1995, pp. 267-283; “Le rôle des officiales de l’administration provinciale dans le processus de décision”, *CCG* 11, 2000, pp. 259-276; “‘Dans tout le prétoire...’ Le personnel du préfet d’Égypte sous le Haut-Empire”, *CCG* 18, 2007, pp. 93-100, esp. pp. 99-100; “Des empereurs et des gouverneurs débordés. À propos des lettres d’Hadrien aux technites dionysiaques récemment publiées”, *CCG* 19, 2008, pp. 177-186.

³² “Das Statthalterarchiv”, *ZSS* 109, 1992, pp. 209-317.

representantes del poder imperial, y es también autor de un manual acerca de la evolución de la administración las provincias romanas³³.

En cuanto a la historiografía española –además de dar a la imprenta manuales actualizados acerca de la situación de sus provincias bajo el Imperio Romano³⁴– ha hecho importantes contribuciones al conocimiento de la administración provincial y de las funciones y actividades de los gobernadores en particular, sobre todo centradas en el ámbito peninsular. En primer lugar destacan los estudios de P. López Barja, pues a través de él la historiografía española ha entroncado con las más renovadas corrientes internacionales relativas tanto a la administración provincial como a los estudios comparativos entre imperios y las teorías centro-periferia³⁵. J. C. Saquete Chamizo ha dedicado un prolijo artículo a las actividades de los gobernadores de la Lusitania durante el Principado, en el que resalta la relevancia de su itinerario conventual y apunta la relevancia que tenía su contacto personal con las élites locales³⁶. F. J. Navarro ha contribuido al perfeccionamiento de los *Fasti Hispanienses* y a los ámbitos de intervención más frecuentes de los gobernadores de la Hispania Citerior³⁷. P. Ozcáriz se ha especializado en el estudio de la administración de la Hispania Citerior y, en particular, en las funciones asumidas por las sedes conventuales que el gobernador visitaba anualmente. En lo que respecta al período republicano se puede mencionar la conocida monografía de M. Salinas de Frías y el reciente artículo de J. Andreu acerca del *imperium* de los gobernadores provinciales republicanos y su reflejo en su actividad jurisdiccional y militar en Hispania³⁸.

³³ E. Meyer-Zwiffelhofer, *Imperium omanum. Die Geschichte der römischen Provinzen*, Munich, 2009, que aquí citaremos por su traducción italiana (Bologna, 2011).

³⁴ Para el período del Principado véase: D. Plácido, *Las provincias hispanas durante el Alto Imperio romano*, Madrid, 2008.

³⁵ P. López Barja, “El gobernador provincial romano de Cicerón a Plinio el Joven”, en M. Campagno – J. Gallego – C. García MacGaw (eds.), *Política y religión en el Mediterráneo antiguo*, Buenos Aires, 2009, pp. 289-304; “Patronato y clientela: el gobernador provincial romano”, en M. Campagno – J. Gallego – C. García MacGaw (dir.) *Rapports de subordination personelle et pouvoir politique dans la Méditerranée antique et au-delà. XXXIVe Colloque International GIREA-III Coloquio Internacional PEFSCEA*, Besançon, 2013, pp. 141-160; y P. López – R. Máiz – J. M^a. Portillo (ed.) *Imperios: luz y tinieblas*, Santiago de Compostela, 2011.

³⁶ J. C. Saquete Chamizo, “El gobernador provincial de Lusitania y sus actividades: viajes, calzadas, ‘conventus’ y relaciones sociales”, en E. Melchor Gil – J. F. Rodríguez Neila (eds.), *Poder central y autonomía municipal: la proyección pública de las élites romanas de Occidente*, Córdoba, 2006, pp. 81-111.

³⁷ F. J. Navarro, “Los gobernadores de la provincia Citerior como agentes de la romanización”, en *Idem* (ed.), *Pluralidad e integración en el mundo romano*, Pamplona, 2010, pp. 189-205.

³⁸ M. Salinas de Frías, *El gobierno de las provincias hispanas durante la República romana (218-27 a.C.)*, Salamanca, 1995; J. Andreu Pintado, “*Imperium* del magistrado provincial: límites administrativos,

Como se puede apreciar, hasta los últimos quince años los estudios dedicados a las competencias y funciones de los gobernadores provinciales han sido escasos y parciales. La mayoría de contribuciones han tenido la forma de artículos o de capítulos que formaban parte de obras de temática más amplia como los distintos niveles de la administración provincial, la administración de justicia en las provincias o la historia de la integración de una provincia en el imperio. Esto, sin duda, ha dado lugar a grandes avances en la comprensión de la estructura organizativa general del Imperio Romano en sus diferentes niveles, su articulación en el territorio provincial –fundamentalmente en los períodos republicano y altoimperial (Diocleciano suele ser el *terminus post quem*)– y la evolución de una provincia en su integración en el imperio. La prosopografía, por su parte, ha proporcionado un conocimiento más profundo del funcionamiento del *cursus honorum* senatorial y del acceso de las élites provinciales al mismo durante el Principado. Sin embargo, el esquema elaborado en torno a las funciones de los gobernadores provinciales conforma una suerte de engañosa foto fija válida para todo el imperio, cuya funcionalidad, empero, no ha sido probada a través del análisis detallado de su desarrollo en provincias concretas excepto en contadas ocasiones y en estudios de extensión reducida.

En el nuevo siglo, la historiografía ha otorgado mayor protagonismo a las diferentes realidades provinciales y a la interacción de los diferentes actores políticos que intervenían en la administración de la periferia, abriendo un camino apenas explorado en profundidad. Hurlet, Bérenger o Meyer-Zwiffelhofer han resituado a los gobernadores provinciales en el lugar que les corresponde como intermediarios entre el poder imperial y las autoridades locales, pero otorgando aún demasiado protagonismo a las provincias orientales en detrimento de las occidentales al ser más ricas en testimonios que éstas y manteniendo aún en general una perspectiva excesivamente maximalista³⁹.

Por tanto, existe un vacío en la investigación en lo que se refiere al análisis de los gobernadores “at work” en las provincias occidentales, tanto en lo que se refiere a su intervención en los asuntos de los municipios y colonias como en su incidencia en el

réditos políticos, conquistas territoriales. El caso hispano”, en J. Santos Yanguas – G. Cruz Andreotti (eds.) *Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: El caso hispano*, Vitoria, 2012, pp. 32-54.

³⁹ A excepción de algunos estudios dedicados a las actividades de los gobernadores de África, como el ya citado de Dondin-Payre o el de F. Hurlet, “Le proconsul d’Afrique et le prince de Auguste a Dioclétien”, *Pallas* 68, 2005, pp. 145-167.

proceso de romanización –o, si se prefiere, de integración– de las poblaciones recién conquistadas o apenas asimiladas.

Objetivos, metodología y fuentes utilizadas en este estudio

La presente tesis doctoral busca profundizar en la nueva línea de investigación abierta por la historiografía francesa reciente y en la española por López Barja, poniendo el foco de atención en una de las regiones occidentales en las que el proceso de municipalización y la romanización dejaron más huella, Hispania, en un período crucial de la historia de Roma como es el Principado, en el que pasó a convertirse de una ciudad-estado imperialista a un proyecto político de vocación universal.

El objetivo de esta investigación es desentrañar el grado de influencia y el impacto que, a través del desempeño de sus funciones oficiales y actividades sociales cotidianas, tenían los gobernadores de las provincias hispanas en el desarrollo de la vida de sus comunidades y en la conformación de una sociedad provincial bajo el régimen del Principado. Este objetivo tiene una doble vertiente: Por un lado, se analiza el poder de intervención que tenían los gobernadores en las colonias romanas y en los municipios romanos y latinos existentes en Hispania durante este período, examinando el grado de responsabilidad que tuvieron en el desarrollo y sostenimiento del sistema municipal y en el papel que jugaron en su misión de hacer llegar el amparo del poder central a la población local. En ello fueron cruciales las relaciones que establecían con los magistrados locales, los consejos municipales y los concilios provinciales. Por otro, analizamos su intervención en el desarrollo cívico de las comunidades recién conquistadas o menos romanizadas de la península, en la difusión de las reglas del nuevo marco jurídico que regiría su vida cotidiana y en el fortalecimiento de su adhesión al emperador, deteniéndonos particularmente en el caso de las comunidades del Noroeste. A partir de esas evidencias, pretendemos obtener una imagen completa, exhaustiva y de calado del papel que jugaban estos gobernadores de rango senatorial en las relaciones establecidas entre el centro del imperio que ellos representaban y las comunidades de la periferia en Hispania y, a través de ella, interrogarnos acerca de la naturaleza del Imperio Romano y de los mecanismos políticos y sociales que favorecieron su consolidación en Occidente durante el Principado. Se trata, en suma, de

un estudio acerca de los modos que adoptó y los efectos que produjo en la periferia la iniciativa del poder central romano a través de sus más importantes “men on the spot”, los gobernadores, en el caso concreto de Hispania en un período crucial del desarrollo cívico de sus comunidades.

La elección del Principado (27 a.C.-235 d.C.) como marco temporal se debe a que es precisamente a partir de Augusto cuando el Imperio Romano superó el umbral de la mera dominación militar de sus provincias por el control a través de la integración de sus élites en el gobierno del imperio gracias a la culminación del proceso de municipalización y de la paulatina extensión de su ciudadanía⁴⁰. Precisamente, la conquista de Hispania se completó bajo Augusto y con su principado comenzó el paulatino ascenso social de las élites de sus áreas más romanizadas. Además, paralelamente al creciente fortalecimiento del poder imperial, en este período se dotó a la administración provincial de una estructura y organización estables con una verdadera implantación territorial. Hemos situado el límite en la muerte de Alejandro Severo, último emperador de la dinastía Severa, dado que después el imperio no sólo entró en una larga fase de inestabilidad política –conocida tradicionalmente como la “anarquía militar”– en la que se desmoronó el régimen político fundado por Augusto y se estableció un tipo de monarquía más autoritaria de tendencias absolutistas y orientalizada, alejada del modelo de “*primus inter pares*” y del respeto por las instituciones republicanas. Asimismo, el *ordo senatorius* perdió su protagonismo político y los gobiernos provinciales cayeron sistemáticamente en manos de *equites*⁴¹. Esto afectará al carácter de las relaciones centro-periferia y al sistema administrativo implantado en las provincias.

A pesar de estos claros límites temporales, se realizan alusiones a los precedentes más relevantes del gobierno provincial del período republicano allí donde procede con el fin de establecer las raíces de la praxis de gobierno en las provincias y de los expedientes jurídicos establecidos, señalando las líneas de continuidad y ruptura que presentan las funciones de los gobernadores provinciales durante el Principado.

Se ha elegido como marco espacial Hispania porque es un territorio que ya los autores antiguos consideraron que tenía una entidad propia (bautizándola con un nombre genérico, *Iberia*, *Hispania*) y a la vez ofrece una notable heterogeneidad

⁴⁰ Doyle, *Empires* cit.

⁴¹ G. Alföldy, *Nueva historia social de Roma*, Sevilla, 2012, pp. 235-291.

regional en el grado de romanización y, por tanto, un marco propicio para la comparación. La Península Ibérica presenta algunas de las regiones más romanizadas y urbanizadas de Occidente, como el valle del Betis (Guadalquivir) o la costa levantina, con otras recién conquistadas a inicios del Principado como el Noroeste, todas ellas con importantes testimonios epigráficos y referencias en las fuentes literarias. Asimismo, desde Augusto hasta Alejandro Severo Hispania tuvo un lugar preeminente dentro del Occidente del imperio –como muestra el ascenso de sus élites hasta conformar un grupo muy influyente dentro del propio Senado– y ya a finales del siglo I d.C. se la consideraba una de las regiones más prósperas y poderosas del imperio⁴². Por ello, resulta muy interesante examinar el papel que los gobernadores jugaron en esa movilidad social. Finalmente, –salvo experimentos efímeros– durante todo el Principado la península estuvo dividida administrativamente en tres provincias estables gobernadas por senadores: la Hispania Citerior, la Lusitania y la Bética; las dos primeras bajo el control directo del emperador; la última proconsular. Esta circunstancia proporciona la posibilidad de comparar, dentro de la península, la actividad de los dos tipos diferentes de gobernadores de rango senatorial: los *legati Augusti pro praetore* y los procónsules y de calibrar el grado de penetración de la autoridad imperial en ambos tipos de provincias. Como se verá, las evidencias indican que no hubo ninguna diferencia entre ambos tipos de gobernadores en lo que se refiere a sus competencias, actividades y *modus operandi* cotidianos.

La metodología empleada tiene como pilar maestro la combinación de las fuentes de diversa naturaleza que ofrecen información acerca de nuestro de los gobernadores provinciales durante el Principado: las obras literarias de los autores antiguos, la epigrafía, las fuentes jurídicas clásicas y, en menor medida, la numismática. Se trata de una rica variedad, pero ninguna de estas fuentes es exhaustiva en lo que respecta a las actividades de los gobernadores provinciales y todas están condicionadas por su naturaleza y la finalidad para la que fueron creadas, así como lo está la forma en que han llegado hasta nosotros por el azar de la historia. Por ello nuestros análisis parten siempre de una crítica textual y, en el caso de la epigrafía y la numismática, también del contexto arqueológico en que fueron hallados los testimonios. Asimismo, nuestra

⁴² Tac. *Hist.* III, 53: *Suis exhortationibus Gallias Hispaniasque, ualidissimam terrarum partem, ad Vespasianum conuersas*. Son palabras que Antonio Primo dirigió a Vespasiano en 69 d.C. haciendo valer sus méritos en la guerra civil.

reflexión parte de una aproximación interdisciplinar, combinando el análisis jurídico-político con el sociológico y cultural, siempre dentro de una perspectiva histórica que intenta retratar las estructuras y los procesos políticos, sociales y culturales que tuvieron lugar en Hispania en los que intervinieron los gobernadores de sus provincias. En todo momento se mantiene una comparación de las evidencias hispanas con las de otras provincias con el fin de cubrir las lagunas dejadas por las primeras a través del método hipotético-deductivo y también para situar adecuadamente la actividad de los gobernadores de Hispania en el contexto general de la época y en los procesos históricos que tuvieron durante el Principado. Como veremos, Roma empleó los mismos expedientes en todas las provincias, pero adaptándolos a las realidades específicas de cada una.

Es preciso que dediquemos unas palabras a los condicionantes de nuestras fuentes. Las fuentes literarias grecolatinas están impregnadas por la mentalidad e intereses de sus autores, lo que convierte su discurso en un objeto de estudio en sí mismo que debe ser deconstruido. Estas obras que nos aportan información acerca de los gobernadores provinciales pertenecen a géneros literarios diversos y fueron escritas en diferentes momentos a lo largo del Principado, por lo que ofrecen la oportunidad de observar la visión que sus autores tuvieron de la actividad de los gobernadores en este período. Hemos utilizado las ediciones críticas de *Les Belles Lettres* (CUF), salvo en casos particulares como las cartas de Cicerón o las *Acta Martyrum*⁴³.

En primer lugar, hemos de detenernos en las cartas de Plinio el Joven pues, además de proporcionar información sobre algunos procónsules de la Bética de su época, ofrece una fuente de información excepcional que brilla con luz propia: la correspondencia que mantuvo con Trajano mientras gobernó la provincia de Bitinia-Ponto. En ella se recoge una rica casuística relacionada con las competencias y actividades de su labor como gobernador. Se trata de una evidencia única que ha sido objeto de importantes estudios desde Mommsen⁴⁴ en adelante. Caben ser destacadas las monografías de L. Vidman, *Étude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan*

⁴³ En la correspondencia ciceroniana hemos consultado también las ediciones de D. R. Shackleton Bailey: Cicero, *Epistulae ad Quintum fratrem et M. Brutum*. Cambridge, 1980 y *Cicero's Letters to Atticus*, Cambridge, 1965-1970. en Cambridge University Press. También hemos recurrido a la edición de la Loeb Classical Library de la Historia romana de Diógenes Casio. En cuanto a las *Acta Martyrum* véase el Capítulo 4 de la Primera Parte.

⁴⁴ Th. Mommsen, *Étude sur Pline le Jeune*, París, 1873, pp. 25-30, 70-73 y 83-89. Edición original en alemán de 1869.

(Praga, 1960) y, sobre todo, A. N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny: A Historical and Social Commentary* (Oxford, 1966), que sigue siendo el análisis más exhaustiva de los diez libros de cartas de Plinio, en el que se dedica una atención especial al libro X de Bitinia-Ponto. Asimismo, han sido importantes los artículos de J. Gaudemet y F. Millar⁴⁵. Al igual que estos autores pensamos que –al margen de las condiciones particulares de la sociedad de su provincia– la casuística que recoge la correspondencia de Plinio el Joven acerca de su actividad como gobernador en Bitinia-Ponto y su relación epistolar con el emperador puede ser utilizada como evidencia representativa de la labor de los gobernadores senatoriales del resto de provincias del imperio durante el Principado (y, particularmente, en el siglo II).

Recientemente, sin embargo, G. Woolf ha pretendido refutar esta validez del libro X de la correspondencia pliniana como testimonio de la actividad administrativa de un gobernador, argumentando que su composición estuvo condicionada por su adopción de modelos retóricos (en concreto el epistolario ciceroniano) y su contenido es parcial e interesado y, en su opinión, tiene, como las cartas privadas, el principal propósito de la auto-representación de su protagonista ante sus lectores⁴⁶. Según Woolf, la idea de que el libro X sea una suerte de archivo de las cartas oficiales reales cruzadas entre un gobernador y el emperador es una “fantasía moderna”. Para él, el “Pliny’s government is the product of careful rethorical design” basado en un modelo ideal perpetuado por la literatura de su tiempo y, por tanto, el valor histórico de esta correspondencia radica en que revela la ideología del gobierno imperial y la mentalidad de la aristocracia senatorial⁴⁷. No estamos de acuerdo con él.

La argumentación de Woolf es hipercrítica y suspicaz y olvida que todos los testimonios del pasado son producto de la cultura de su período y están mediatizados por la ideología o mentalidad de sus autores o promotores, sean obras literarias o artísticas, testimonios privados o documentos oficiales. Negar su validez lleva irremisiblemente a negar la posibilidad de alcanzar cualquier conocimiento histórico. El hecho de que las cartas que se cruzaron Plinio el Joven y Trajano fuesen seleccionadas y

⁴⁵ J. Gaudemet, “La juridiction provinciale d’après la correspondance entre Pline et Trajan”, *RIDA* 1964, pp. 335-353. F. Millar, “Trajan: Government by Correspondance”, en González, J. (ed.), *Traiano emperador de Roma*, Roma, 2000, pp. 363-388.

⁴⁶ G. Woolf, “Pliny’s Province”, en T. Bekker-Nielsen (ed.) *Rome and the Black Sea Region: Domination, Romanisation, Resistance*, Aarhus, 2006, pp. 93-108.

⁴⁷ Woolf, “Pliny’s Province” cit. p. 104.

adaptadas para su publicación –quizá por su amigo Suetonio⁴⁸– y de que en su composición se tuviesen presentes ciertos presupuestos retóricos y precedentes (como la correspondencia ciceroniana), no las invalida como testimonio de las actividades de Plinio como gobernador provincial ni como ejemplo representativo de las relaciones establecidas entre el emperador y los gobernadores. Sabemos con certeza que Plinio gobernó Bitinia-Ponto⁴⁹ y resulta absurdo pensar que cuando preparó sus cartas para su publicación alterase o inventase el contenido de las referidas a Bitinia-Ponto hasta el punto de alejarlas de su realidad cotidiana. Adaptación retórica no debe confundirse con adulteración de la información contenida. Además, las respuestas de Trajano que recoge muestran un vocabulario y una fraseología reiterativos y una uniformidad de estilo propios de los documentos administrativos⁵⁰. Asimismo, la coherencia de su testimonio viene probada por su comparación con otras fuentes. La información dada por Plinio acerca de sus actividades, competencias y *modus operandi* como gobernador no sólo concuerda con la que proporcionan otras fuentes de carácter literario –como las cartas de Cicerón desde Cilicia o las obras de Tácito, por ejemplo, así como la realidad de las ciudades de su provincia coincide también con la imagen ofrecida por su coetáneo Dión de Prusa–, sino que encuentra constantes analogías en otras de diferente naturaleza como son las epigráficas y los textos de los juristas clásicos y los rescriptos imperiales compilados en el *Digesto*. La concordancia con fuentes de distinta autoría y naturaleza es la prueba inequívoca de la veracidad de un testimonio.

Otro punto de debate ha sido el carácter de la misión de Plinio en Bitinia-Ponto. Dado que fue enviado como legado imperial con potestad consular en sustitución de los procónsules que hasta entonces la habían gobernado, los autores antedichos se han planteado si también su misión sería excepcional y, por tanto, también lo fue su relación epistolar con Trajano. En nuestra opinión, todas las actividades de Plinio en Bitinia-Ponto entraban dentro de las competencias generales de todos los gobernadores de rango senatorial, como veremos, tienen paralelos en otras provincias gobernadas por senadores. Tampoco es extraño que Trajano decidiese convertir Bitinia-Ponto en una provincia imperial. Estos cambios no fueron infrecuentes durante el Principado⁵¹ y las

⁴⁸ R. Winsbury, *Pliny the Younger: A Life in Roman Letters*, Londres-Nueva York, 2014, pp. 189-191. Este autor también acepta la autenticidad de las cartas como documentos de carácter administrativo.

⁴⁹ *CIL* V, 5262 = *ILS* 2927 (Como)

⁵⁰ Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 537-542.

⁵¹ R. J. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, pp. 395-399.

propias cartas plinianas ofrecen una explicación sencilla: las ciudades de la provincia parecen haber estado sumidas en graves problemas económicos y en ciertos conflictos internos entre facciones rivales⁵². En nuestra opinión, Trajano consideró necesario intervenir personalmente enviando como gobernador a un legado propio al que poder consignarle *mandata* con instrucciones muy precisas. Además, como ha señalado J. Gaudemet, la campaña pártica era inminente y era necesario asegurar la estabilidad interna de las provincias desde las que se lanzaría la ofensiva⁵³.

La única excepcionalidad del gobierno de Plinio fue el título oficial que se le dio: *legat(us) pro pr(aetore) prouvinciae Pon[ti et Bythiniae] consulari potesta[t(e)] in eam prouinciam e[x s(enatus) c(onsulto) missus ab] Imp(eratore) Caesar(e) Nerua Traiano Aug(usto)*...⁵⁴ La decisión de investirlo de una potestad consular en vez de pretoria sin duda se debió a la necesidad de dotarlo de mayor autoridad y equipararlo en categoría a los procónsules que hasta entonces habían gobernado la provincia⁵⁵. Pero, como veremos en nuestro estudio, Plinio tuvo las mismas competencias y desarrolló las mismas actividades oficiales que los gobernadores de rango senatorial del resto del imperio. Simplemente dedicó una atención sistemática y detallada a la revisión de las cuentas públicas de las ciudades y al control de las facciones aristocráticas (*eranoi*, etc.), siguiendo las instrucciones de Trajano⁵⁶, ocupación que habitualmente se dejaba a la discrecionalidad del gobernador.

Las siguientes obras que más información aportan son las de los historiadores Tácito, Casio Dión, Flavio Josefo (centrado en las provincias orientales), Suetonio, Floro, Velejo Patérculo, Paulo Orosio y la *Historia Augusta*. Destacan sobre todo los dos primeros.

Tácito demostró un interés especial en sus *Annales* e *Historiae* por las relaciones entre los gobernadores de rango senatorial y el emperador, pero siempre dentro de su intención de revelar la naturaleza autoritaria del Principado y la pérdida de la iniciativa senatorial, lo que le hace fijar su atención en las en la obra biográfica de carácter encomiástico que dedicó a su suegro Gneo Julio Agrícola se detiene con detalle en su

⁵² Sherwin-White, *The Letters*... cit. pp. 526-528.

⁵³ Gaudemet, "La juridiction provinciale..." cit. p. 337.

⁵⁴ *CIL* V, 5262 = *ILS* 2927 (Como)

⁵⁵ Mommsen, *Étude*... cit. pp. 72-73; Vidman, *Étude*... cit. p. 42. Plinio tendría seis lictores y no cinco como el resto de legados imperiales.

⁵⁶ Véase, por ejemplo: Plin. *Ep.* X, 18, 3.

gobierno de Britania, ofreciendo datos de suma importancia acerca de sus actividades y de su influencia en la vida cotidiana de una provincia occidental en su primera fase de integración en las estructuras políticas y sociales del imperio⁵⁷. Esto ofrece un buen ejemplo comparativo para acercarnos a lo que sucedió en el Noroeste de Hispania.

Casio Dión, por su parte, en su historia general de Roma desde sus orígenes ofrece datos de gran valor acerca de la constitución y funcionamiento del Principado y de la organización administrativa provincial existente desde Augusto. Sin embargo, su visión del Principado está muy influida por su experiencia personal bajo la dinastía de los Severos –con la que el régimen se volvió más autoritario y centralista– que tiende a trasponer hasta sus orígenes⁵⁸.

En cuanto al resto de fuentes literarias, la *Apologia* de Apuleyo nos ofrece un valioso testimonio directo de la actividad jurisdiccional del procónsul de África en su tribunal penal durante el siglo II. También algunos fragmentos de su *Florida* y del *Asno de oro* arrojan luz sobre el poder judicial y coercitivo de los gobernadores. Otros autores relevantes son Frontón, Estrabón, Plinio el Viejo (fuente principal para conocer el sistema conventual de las provincias hispanas), Filón de Alejandría, Filóstrato o Marcial. También se recurrirá a las cartas de Cicerón y a sus principales discursos judiciales relacionados con gobernadores provinciales (*Verrinas*, *Pro Flacco*, *In Pisonem*) y a los comentarios de Julio César –en particular el *de bello Gallico*– con el fin de perfilar los precedentes tardo-republicanos de la actividad de los gobernadores y así trazar las continuidades y las rupturas que se produjeron en sus funciones y capacidad de acción con la instauración del nuevo régimen del Principado.

La epigrafía y las fuentes jurídicas clásicas son las otras dos grandes fuentes de información de que disponemos. Los testimonios epigráficos que mencionan a los gobernadores de las provincias hispanas tienen un carácter público y se pueden dividir en dos tipos: aquéllas referidas a sus competencias y actividades oficiales y aquéllas que revelan una manifestación crucial de sus relaciones sociales con las élites dirigentes de las comunidades locales como son los vínculos de patronato. Como veremos, la mayoría de inscripciones relacionadas con los gobernadores de Hispania son honoríficas, jurídicas (sobre todo relacionadas con sus competencias jurisdiccionales) y votivas. Se

⁵⁷ Véase: R. Syme, *Tacitus*, 1958; R. Ash (ed.) *Tacitus. Oxford Readings in Classical Studies*, Oxford, 2012.

⁵⁸ F. Millar, *A Study of Cassius Dio*, Oxford, 1964.

han hallado ejemplos de estos tres tipos de epígrafes en todas las provincias estudiadas. La Bética, sin embargo, destaca por el número excepcional de broncees jurídicos que se han encontrado en lo que fue su antiguo territorio: las *epistulae* imperiales de Vespasiano, Tito y Antonino Pío, las leyes municipales flavias, la *lex* de la colonia de Urso, la copia del senadoconsulto relativos a los honores fúnebres dedicados a Germánico (la llamada *Tabula Siarensis*), las copias del que recogía la condena de su asesino Gneo Calpurnio Pisón, y la del *SC de pretiis gladiatoribus* del 177 hallada Itálica.

Todos estos testimonios epigráficos no sólo confirman la información proporcionada por las antedichas fuentes literarias y por las fuentes jurídicas, sino que muestran la aplicación del sistema jurídico y los expedientes administrativos romanos que contaban con la intervención de los gobernadores en Hispania. Ahora bien, no son testimonios neutros, sino que están marcados por la ideología de sus promotores y determinados formalismos que las condicionan, lo cual tendremos en cuenta en su examen. Asimismo, con el fin de complementar estos testimonios allí donde presenten incógnitas, para cubrir las lagunas que dejen y también para contextualizar adecuadamente las evidencias hispanas y ponderar sus particularidades recurrimos a la comparación constante con las evidencias epigráficas de otras partes del imperio. Las ediciones que hemos seguido provienen del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, a las *Inscriptiones Latinae Selectae* y otros compendios y revistas especializados de inscripciones de diferentes regiones o ciudades de España, Portugal y de otros países, que se citan siempre abreviadas⁵⁹.

En cuanto a las fuentes jurídicas, la información relativa a las competencias de los gobernadores provinciales está recogida principalmente en el *Digesto*, obra elaborada en época de Justiniano en las que se recogieron pasajes seleccionados de los tratados de los principales juristas de la llamada época clásica del Derecho romano según los intereses de sus compiladores. Esta obra, como en general todo el *Corpus Iuris Civilis*, tiene un valor incalculable. Sin ella y sin las *Instituciones* de Gayo (jurista del siglo II) no podría haber existido la disciplina del Derecho Romano. Sin embargo, ya desde el Renacimiento los romanistas fueron conscientes no sólo de que se trataba de una colección parcial, sino de que existían interpolaciones en los pasajes compilados en

⁵⁹ Véase el apartado “Abreviaciones”.

el *Corpus Iuris Civilis*. Por ello, desde entonces los expertos han llevado a cabo una ardua y rigurosa labor exegética que ha purgado estas fuentes, logrando un profundo conocimiento de la evolución de la doctrina de los jurisconsultos romanos. En este estudio se recurrirá recurrentemente a la información proporcionada por los pasajes de diferentes tratados de estos autores, entre los que destacan el *de officio proconsulis* de Ulpiano (época severa) y de Venuleyo Saturnino (época antonina) y el *de officio praesidis* de Macro (siglo III). En ellos está recogidos las competencias de los gobernadores y ejemplos de su *modus operandi* (sobre todo en sus consultas al emperador) en los períodos de mayor desarrollo de la administración provincial del Principado. La edición de referencia del *Digesto* que utilizaremos será la de Mommsen⁶⁰. También recurriremos a otras compilaciones fuentes jurídicas como las *Fontes Iuris Romani Anteiusiniani*, edición de referencia de senadoconsultos normativos y *constitutiones* imperiales.

Estructura de este estudio

El presente estudio está dividido en tres partes, cada una dedicada a uno de los grandes bloques temáticos. En la Primera Parte analizamos los poderes jurisdiccionales y el poder coercitivo de los gobernadores provinciales de Hispania, dado que su *imperium* y su jurisdicción superior (sólo subordinada a la del propio emperador) fueron los pilares fundamentales de su autoridad, garantizándoles un amplio margen de acción y, al mismo tiempo, marcando los límites de su intervención en los asuntos de las comunidades provinciales. Primero comenzamos con un capítulo sobre el edicto provincial, al ser éste el marco normativo en el que los gobernadores plasmaban su programa jurisdiccional y al cual estaban sometidas todas las comunidades provinciales excepto las libres. En el segundo capítulo se exponen las características del sistema de *conuentus iuridici* en Hispania y su articulación territorial a través de las sedes conventuales, así como la coordinación entre los gobernadores de Hispania y sus legados. El tercer capítulo está dedicado a la jurisdicción no criminal de los gobernadores, tanto en lo que atañe a los particulares como a las diferentes comunidades

⁶⁰ Seguimos la siguiente edición: *Corpus Iuris Civilis I: Institutiones, recognovit P. Krueger. Digesta, recognovit T. Mommsen, retractavit P. Krueger*, Hildesheim, 1993. Mommsen publicó los *Digesta Iustiniani Augusti* en Berlín en 1870.

provinciales (privilegiadas o no privilegiadas). Se presta especial atención a las intervenciones jurisdiccionales de los gobernadores en los municipios a través del examen de los capítulos de la *lex* del municipio latino de *Irni* en la Bética. El cuarto capítulo aborda la jurisdicción penal del gobernador y en él se dedicará un importante apartado al problema historiográfico del *ius gladii*. Por último, el quinto capítulo trata acerca del poder militar de los gobernadores de Hispania y de la relevancia de los soldados legionarios en la conformación de su *officium*. En ambas cuestiones tiene mucho mayor protagonismo el gobernador de la Hispania Citerior al ser el único que tuvo legiones a su mando.

La Segunda Parte está dedicada a la intervención de los gobernadores en lo que hemos denominado la “tutela del sistema municipal”. Es decir, aquéllos aspectos que atañen a su intervención en el buen funcionamiento de la autogestión de las colonias y municipios existentes y del desarrollo cívico de las comunidades de los territorios recién conquistados o poco romanizados. También se examina la responsabilidad de los gobernadores de Hispania en la implantación y desarrollo del censo provincial y en la sanción de la ordenación territorial. El primer capítulo trata acerca de su supervisión de las *rationes ciuitatum* y de la sostenibilidad económica de las ciudades en riesgo de quiebra. En el segundo se analiza su control de las construcciones públicas sufragadas por las comunidades o particulares y su papel en aquéllas financiadas por el poder imperial. En el tercer capítulo examinamos la intervención de algunos gobernadores en la acuñación monetaria provincial, en concreto el caso de las llamadas monedas de la *caetra*. En el cuarto capítulo se analiza el papel ejercido por los gobernadores de Hispania en la recaudación de los tributos, a pesar de que ésta fue transferida a los procuradores en las provincias imperiales y, con el tiempo, también a las proconsulares. Por último, en el quinto capítulo se trata la intervención del gobernador en la elaboración del censo y en la ordenación del territorio provincial.

La Tercera Parte analiza el calado que tuvo la actividad de los gobernadores de Hispania en la consolidación de la fidelidad de las élites locales hacia el imperio, a través de la difusión de diferentes actos de demostración de lealtad hacia el emperador y su familia. Asimismo, se estudia la formación de vínculos de patronato-clientela entre los gobernadores y las comunidades locales o particulares. El primer capítulo está dedicado al importante papel jugado por los gobernadores de Hispania en la

implantación y supervisión del culto imperial, que no sólo favoreció la consolidación del régimen del Principado sino que contribuyó decisivamente a la configuración de una identidad compartida por todos los habitantes del imperio. El segundo examina los otros actos de demostración de fidelidad al emperador impulsados por los gobernadores que han dejado huella epigráfica (homenajes *ius iuranda*, difusión de retratos de la familia imperial y de documentos relevantes para la dinastía, etc.). El tercer capítulo se dedica al patronato.

Cada parte presenta unas Reflexiones finales en torno a sus capítulos en conjunto. Luego, en las Conclusiones que cierran el estudio realizamos una reflexión general unitaria acerca de la significación que los aspectos abordados en cada una tienen en el grado de influencia de los gobernadores de Hispania en la vida de sus comunidades y, como decíamos, lo que ello revela de la naturaleza del Imperio Romano y de la forma en que aseguró su estabilidad y perduración. Tras ella el lector encontrará dos anexos. En el Anexo I presentamos una actualización de los *fasti* de los gobernadores de las provincias hispanas durante el Principado, añadiendo las novedades proporcionadas por la epigrafía y algunas modificaciones propias o que aceptamos de las propuestas de otros autores. El Anexo II es un elenco de las fuentes epigráficas halladas en el territorio de las antiguas provincias hispanas que se refieren directamente a sus gobernadores.

PRIMERA PARTE

LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES DEL GOBERNADOR Y SU PODER COERCITIVO

CAPÍTULO 1: EL EDICTO PROVINCIAL.

*Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in prouinciis iurisdictionem praesides earum habent.*⁶¹

Los magistrados romanos tenían *ius edicendi*, que es el derecho de manifestar sus decisiones al pueblo. El edicto, por tanto, se fundamenta en la palabra del magistrado, de carácter imperativo (*ex-dicere*), y representa un programa de actuación que se plasmaba por escrito en un *album*, en origen una tabla blanqueada⁶². Existían dos clases de edictos: por un lado, aquéllos que transmitían las decisiones tomadas por cualquier magistrado en respuesta a eventualidades (los mal llamados *edicta repentina*⁶³); por otro, el edicto jurisdiccional, que sólo era publicado por los magistrados que, desde la República, estaban encargados de la jurisdicción civil: los pretores, los ediles curules y los gobernadores provinciales. Ese edicto de carácter jurisdiccional contenía las normas y directrices que seguirían en el desempeño de sus

⁶¹ Gai. *Inst.* I, 6.

⁶² Th. Mommsen, *Le droit public romain* I, París, 1892, pp. 230-231; J. Iglesias, *Derecho romano. Instituciones de derecho privado*, Madrid, 1969, p. 49; J. M^a. Blanch Nougues, *El edicto de los magistrados en el lenguaje de la jurisprudencia romana* ('pars edicti' – 'clausula' – 'edictum'), Madrid, 1998, p. 71; D. Mantovani, "L'editto come codice e da altri punti di vista", en *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Nápoles, 1998, pp. 129-178. A partir de ahora las obras que se citen en nota por segunda vez serán abreviadas.

⁶³ El término *edictum repentinum* es una creación de los autores modernos que no tiene ningún ejemplo en las fuentes antiguas. Cf. A. Guarino, *Storia del diritto romano*, Nápoles, 1987, p. 272, y "*Edictum Perpetuum*", en *Pagine di diritto romano* IV, Nápoles, 1994, pp. 211-217, esp. p. 211. N. Palazzolo, "La 'propositio in albo' degli 'edicta perpetua' e il 'plebiscitum Cornelium' del 67 a.C.", en *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, V, Nápoles, 1984, pp. 2434-2437 señala que la distinción se daba entre edictos *de iurisdictione* (los *perpetua*, propios de los magistrados con funciones jurisdiccionales) y el resto, propios de la actividad política de todos los magistrados (como el edicto por el que se convocaban los comicios). Como ejemplo de estos edictos no jurisdiccionales y puntuales usados por gobernadores provinciales, podemos mencionar el edicto por el que L. Fulvio Flaco, en el 61 a.C., prohibió a los judíos de Asia enviar a Jerusalén el oro que destinaban a su templo (Cic. *Pro Flacco* 67), o el que emitió como gobernador de la Galia Cisalpina Décimo Junio Bruto el 20 de diciembre del 44 a.C., en el que, ante la ofensiva militar de Antonio para hacerse con la provincia, proclamó que la mantendría en manos del Senado y del Pueblo Romano (Cic. *Phil.* III, 4, 8).

funciones jurisdiccionales y tenía validez durante todo su mandato (por lo cual se le conocía como *edictum perpetuum*)⁶⁴.

Una de las principales funciones de los gobernadores provinciales durante la República y el Principado fue la administración de justicia y la presidencia de determinados actos jurisdiccionales como máxima autoridad que eran en su provincia en virtud de su *imperium* y de su *iurisdictio* superior. Por ello, su edicto jurisdiccional reviste una importancia de primer orden, ya que era el marco de referencia del programa jurisdiccional de los gobernadores, cuyas normas ni ellos mismos podían contravenir⁶⁵, ofreciendo así a quienes estaban sometidos a su potestad ciertas garantías legales. Dado que el edicto jurisdiccional caducaba al final del mandato del magistrado que lo había publicado, cada nuevo pretor y, en las provincias, cada nuevo gobernador debía hacer el suyo propio, pero pronto comenzaron a existir cláusulas traslaticias; es decir, aquéllas que, dada su eficacia y pertinencia, fueron mantenidas en el edicto por sucesivos magistrados hasta que acabaron configurando una parte fija e inalterable del mismo. No obstante, los magistrados gozaban de discrecionalidad para introducir las variaciones que creyesen necesarias en su edicto.

Como señaló hace tiempo R. Martini en su obra de referencia acerca del edicto provincial, los estudios que se han realizado sobre su naturaleza en época republicana han buscado establecer las diferencias existentes entre los edictos de los gobernadores y los de los pretores urbanos, mientras que aquéllos que se han centrado en el Principado se han dirigido a conocer si de los diferentes edictos de cada provincia se pasó a uno único válido para todo el Imperio al igual que sucedió con la codificación del edicto del pretor urbano (el “edicto perpetuo”) en época de Adriano. En ambos casos, empero,

⁶⁴ Mommsen, *DPR* I, cit. pp. 236-237.

⁶⁵ Tal y como estableció la *lex Cornelia de iurisdictione* del 67 a.C.: *ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent* (Ascon. In *Cornel.* p. 59). Cf. F. De Martino, *Storia della costituzione romana III*, Nápoles, 1966, p. 131; Guarino, *Storia...* cit., pp. 272-273, y “*Edictum Perpetuum*” cit. p. 213, señala que este plebiscito fue propuesto por el tribuno Cornelio con el fin de poner fin a los abusos provocados por los diversos criterios (es decir, por su excesiva discrecionalidad en el uso de *decreta*) que los pretores adoptaban en la aplicación de su jurisdicción. Véase también: A. Schiavone, “Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell’editto fra tarda Repubblica e primo Principato”, en *La codificazione del diritto dall’antico al moderno*, Nápoles, 1998, pp. 51-72, esp. pp. 68-69; G. Rotondi, *Leges publicae populi romani*, Milán, 1912, p. 371. También da noticia de la medida de Cornelio Dió Casio XXXVI, 40, 1-2, cuyo testimonio suscitó un interesante debate; para las principales interpretaciones véase: A. Metro, “La *lex Cornelia de iurisdictione* alla luce di Dio Cass. 36.40.1-2”, *IURA* 20, 1969, pp. 500-524; Palazzolo, “La ‘propositio in albo’...” cit.; B. Albanese, “Riflessioni sul ius honorarium”, en *Estudios Hernández-Tejero II*, Madrid, 1992, pp. 1-18; J. M. Coma Fort, “Sobre los límites de la potestad jurisdiccional de los magistrados romanos”, *Anuario Facultade Dereito Universidade da Coruña* 5, 2001, pp. 269-288.

existe un importante obstáculo: la escasez de fuentes que nos hablen de él. Para la República sólo contamos con la información que Cicerón ha dejado en la *oratio secunda* de las *Verrinas* y en dos cartas escritas durante su gobierno de Cizia⁶⁶. Para el Principado, se cuenta con el comentario del jurista Gayo *ad edictum prouinciale*⁶⁷, pero éste plantea varias incógnitas acerca de su propósito y contenido, muy similar al de los comentarios de Ulpiano y Paulo al edicto del pretor urbano⁶⁸. Con todo, es posible alcanzar una idea aproximada de los contenidos y las partes que componían el edicto de un gobernador provincial en la República tardía y durante el Principado y valorar la relevancia que para los habitantes de una provincia tenía su publicación.

El edicto provincial en época republicana.

El 20 de febrero del 50 a.C. Cicerón, mientras se hallaba en Laodicea de Cilicia, escribió una carta a su querido amigo Ático en la que, entre otras cosas, le describió de forma somera y sin ninguna pretensión de exhaustividad las partes en las que había dividido su edicto jurisdiccional como gobernador de la provincia:

*Breue autem edictum est propter hanc meam διαίρεσιν quod duobus generibus edicendum putaui. Quorum unum est prouinciale in quo est de rationibus ciuitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, uendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent. Tertium de reliquo iure dicundo ἄγραφον reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accommodaturum.*⁶⁹

Cicerón dividió su edicto en tres partes. La primera era exclusivamente provincial (el *genus prouinciale*), en la que trataba cuestiones relacionadas con las

⁶⁶ Cic. *Ad Att.* VI, 1, 15 y, en menor medida, V, 21, 11.

⁶⁷ Estamos de acuerdo con G. Chalon, *L'édit de Tiberius Julius Alexander*, Olten-Lausana, 1964, pp. 69-78 y Martini, *Idem*, p. 53, que el largo edicto que el prefecto de Egipto Tiberio Julio Alejandro publicó en 68, en el contexto de la guerra civil, no puede ser tomado como un ejemplo de edicto jurisdiccional como sostenía O. W. Reinmuth, "The Edict of Tiberius Julius Alexander", *TAPhA.* vol. 65, 1934, pp. 248-259, pues era gobernador desde el 66 y es imposible que hubiese desarrollado su actividad jurisdiccional sin él. El texto del edicto de Alejandro en F. F. Abbott – A. C. Johnson, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Nueva York, 1926, pp. 510-513, nº 165.

⁶⁸ R. Martini, *Ricerche in tema di editto prouinciale*, Milán, 1969, pp. 1-9.

⁶⁹ *Ad Att.* VI, 1, 15.

finanzas de las ciudades (*rationes ciuitatum*), los asuntos relativos a préstamos, intereses y contratos varios contraídos en la provincia entre romanos y peregrinos (*aes alienum*, *usura* y *syngraphae*), y todo lo relacionado con los publicanos. La segunda estaba centrada en asuntos fundamentales del derecho civil romano como las herencias, la *possessio bonorum*, la venta de bienes, etc., cuya presencia en el edicto era obligada⁷⁰. Por último, Cicerón reservó para la tercera parte el resto de aspectos jurisdiccionales, reenviando al edicto urbano. La expresión *tertium...ἄλλαφον reliqui* a menudo se ha interpretado en un sentido literal, entendiendo que Cicerón habría dejado en blanco esta parte⁷¹. Sin embargo, en nuestra opinión el Arpinate está refiriéndose a que él no añadió nada en esta parte y que realizó una traslación directa de esas cláusulas de los edictos urbano y peregrino al suyo, según la costumbre generalizada en todas las provincias:

*Ac, per deos immortales! Quid est quod de hoc dici possit? Iterum enim iam quaero abs te, sicut modo in illo capite Anniano de mulierum hereditatibus, nunc in hoc de hereditatum possessionibus, cur ea capita in edictum prouinciale transferre nolueris. Vtrum digniores homines existimasti eos qui habitant in prouincia quam nos qui aequo iure uteremur, an aliud Romae aequum est, aliud Sicilia? Non enim hoc potest hoc loco dici, multa esse in prouinciis aliter edicenda; non de hereditatum quidem possessionibus, non de mulierum hereditatibus. Nam in utroque genere uideo non modo ceteros, sed te ipsum totidem uerbis edixisse quot uerbis edici Romae solet. Quae Romae magna cum infamia pretio accepto edixeras, ea sola te, ne gratis in prouincia male audires, ex edicto Siciliensi sustulisse uideo.*⁷²

⁷⁰ Precisamente, una de las imputaciones que configuraron la acusación *de repetundis* que se hizo contra Lucio Valerio a su regreso de Asia fue la de haber sido beneficiario de la herencia de Valeria, esposa de Sextilio Andrón (ciudadanos romanos residentes en la provincia), incurriendo con ello en el delito de concusión. Cic. *Pro Flacc.* 84-85.

⁷¹ W. W. Buckland, "L'Edictum provinciale", *RHDFE* 1934, pp. 81-96; G. Pugliese, "Riflessioni sull'editto di Cicerone in Cilicia", en *Synthese Arangio-Ruiz*, Nápoles, 1964, pp. 972-986; B. D. Hoyos, "Lex provinciae and Governor's Edict", *Antichthon* 7, 1973, pp. 47-53, que opina que "the edict was shorter because his promised reliance on the urban edicts enabled him to omit what would have been the 'tertium genus' entire" (p. 51); G. H. Stevenson, *Roman provincial administration till the age of the Antonines*, Westport, 1975, p. 69; J. Muñoz Coello, *Cicerón y Cilicia. Diario de un gobernador romano del siglo I a.C.*, Huelva, 1998, p. 186; L. Maganzani, "L'editto provinciale alla luce delle Verrine: profili strutturali, criteri applicativi", en J. Dubouloz – S. Pittia (dir.), *La Sicile de Cicéron. Lectures des Verrines*, Besançon, 2007, pp. 127-146, esp. p. 127.

⁷² Cic. 2 *Verr.* I, 46, 118.

De haber dejado en blanco esta parte del álbum edictal, ¿cómo podrían haber conocido los provinciales el contenido del *tertium genus*? Ningún autor, excepto L. Peppe, se ha planteado este problema, pero su solución de que podrían haber recurrido a los edictos de los gobernadores precedentes⁷³ resulta poco factible, pues tras la partida de cada gobernador su edicto dejaba de tener validez y ya no estaba expuesto públicamente⁷⁴. No nos parece viable que el edicto de Cicerón careciese de contenidos explicitados, lo cual supondría una grave deficiencia que entorpecería la labor de Cicerón y abocaría a los ciudadanos romanos de su provincia a una inseguridad jurídica⁷⁵. Si el anterior pasaje de las Verrinas se pone en relación con la carta a Ático, la decisión de Cicerón de adaptar la tercera parte de su edicto a los edictos urbanos ya no aparece como una novedad, sino como una costumbre administrativa más⁷⁶.

Cierto es que Cicerón revela a Ático haber realizado variaciones en la composición de su edicto empleando el método de la διαίρεσις, que había aprendido de Mucio Escévola. Esta διαίρεσις, sin embargo, no supone un cambio en su contenido, sino una presentación diferente de él, más ordenada y sintética según el Arpinate. La única diferencia de su edicto con respecto al resto es que era más breve en sus dos primeras partes, gracias a que en él había agrupado sus contenidos de forma diversa. Por ello, el ejemplo del edicto ciceroniano puede ser tomado como ejemplo representativo – aunque no exhaustivo – del contenido del edicto provincial en su época. De él, nos centraremos en su parte eminentemente provincial, que es la que ha suscitado mayor interés en la romanística.

La idea que Mommsen tenía de que el *genus prouinciale* estaba dirigido solamente a los peregrinos de la provincia, mientras que el resto del edicto atañería a los *ciues Romani* fue pronto superada, sobre todo a partir del importante artículo de W.W. Buckland, que fue el primer gran análisis de *Ad Att.* VI, 1, 15. Éste entendía que el edicto provincial estaba enteramente dirigido a los ciudadanos romanos residentes en la provincia y que el *genus prouinciale* sería de naturaleza administrativa, dado que trataba

⁷³ L. Peppe, “Note sull’editto di Cicerone in Cilicia”, *Labeo* 37, 1991, pp. 14-93, esp. p. 93.

⁷⁴ R. Olmo López, “Nuevas perspectivas en torno al edicto provincial en época republicana”, *Latomus*, e.p.

⁷⁵ A. J. Marshall, “The structure of Cicero’s Edict” *AJPh*, 85, 1964, pp. 185-191, esp. p. 188; Hoyos, “*Lex Provinciae*...” cit.; Peppe, “Note sull’editto...” cit. p. 92, quien señala la importancia técnico-jurídica de la operación llevada a cabo por Cicerón mediante la *diairesis*.

⁷⁶ Martini, *Ricerche*... cit.

aspectos de las *rationes ciuitatum*⁷⁷. Buckland tuvo el acierto de reconocer la presencia de los *ciues* también en el *genus prouinciale*, pero se mostró demasiado restrictivo en la definición de su contenido, como señaló G. Pugliese. El romanista italiano demostró que los asuntos *de aere alieno*, *de usura* y *de syngraphis* podían pertenecer tanto al ámbito administrativo como al privatístico, dependiendo de si las partes implicadas eran la ciudad y sus ciudadanos o uno de estos dos y la autoridad romana⁷⁸. Para él, la diferencia entre el *genus prouinciale* y el segundo *genus* no se basaba, por tanto, en la naturaleza administrativa del primero y privatística del segundo, sino “sulla specifica destinazione del primo a risolvere problemi particolari della provincia di Cilicia e sull’aperta derivazione del secondo da modelli romani, ai quali anzi, in buona parte, Cicerone direttamente rinviava”⁷⁹.

Los contenidos del *genus prouinciale* estaban dirigidos tanto a los peregrinos como a los *ciues Romani* de la provincia, pues miembros o comunidades de ambos colectivos podían verse afectados por préstamos (*aes alienum*), intereses (*usura*) y *syngraphae*, que eran asuntos relacionados con operaciones de crédito realizadas por hombres de negocios romanos en favor de *ciuitates* provinciales⁸⁰. Un ejemplo de causa *de syngraphis* entre una ciudad peregrina y acreedores romanos nos la ofrece el mismo Cicerón en la otra carta a Ático en la que menciona su edicto provincial⁸¹. El asunto era el siguiente:

Una serie de prestamistas romanos –detrás los que se hallaba Marco Bruto– reclamaban a la ciudad de Salamina de Chipre el pago de una deuda con unos intereses del 48%, inasumibles por los salamanios que, por ello, se negaban a saldarla. Cicerón convocó a ambas partes a una vista en Tarso, capital de Cilicia, para tratar de dictaminar una sentencia definitiva al conflicto, y hubo de hacer frente a las presiones de los romanos M. Escapcio y P. Matinio. En la vista habló el primero, con el que Cicerón mantuvo una actitud deferente y claramente favorable (pues era un hombre de Bruto), hasta el punto de aceptar interrumpir el proceso para hablar con él en privado prometiéndole que obligaría a los salaminios a pagar la suma más alta posible. Todo

⁷⁷ Buckland, “L’Edictum provinciale”, cit. pp. 81-96.

⁷⁸ Pugliese, “Riflessioni sull’editto...”, cit. pp. 972-986.

⁷⁹ Pugliese, “Riflessioni sull’editto...” cit. p. 986, seguido por Peppe, “Note sull’editto...” cit. p. 67, que señala que “quanto raccolto da Cicerone nel *genus provinciale* non avesse valore meramente esemplificativo, ma con tutta probabilità indicasse i titoli dell’*edictum* contenuti nel *genus provinciale*”.

⁸⁰ Martini, *Ricerche...* cit. p. 39.

⁸¹ *Ad Att.* V, 21, 11.

discurre bien hasta que Escapcio exige a Cicerón que aplique el interés del 48% sobre lo adeudado, lo cual contravenía la disposición de su edicto que fijaba el interés de los préstamos en un 12%. La respuesta de Cicerón fue la siguiente: “*'quid ais?' inquam, 'possumne contra meum edictum?'*”. En efecto, no podía actuar contra lo que había dispuesto en su edicto, como la *lex Cornelia* del 67 a.C. había establecido, pues estaría incurriendo en una injusticia que, además, podría costarle caro si pensamos en la aplicación del llamado edicto “de retorsión”⁸². Ante esto, Escapcio juega una baza imprevista: existía un decreto senatorial del 56 a.C. que obligaba al gobernador de Cilicia a dictar justicia de acuerdo con las cláusulas del acuerdo que regulaba el préstamo y que habían situado el interés en el 48 %. Sin embargo, una *lex Gabinia* invalidaba esa cláusula al impedir que ciudadanos romanos hiciesen préstamos a los provinciales, negando, por tanto, efectividad a *syngraphae* como esta⁸³. Así pues, Escapcio hubo de contentarse con el 12% y Cicerón pudo evitar contradecir su propio edicto⁸⁴.

El caso de Escapcio contra los salaminios no sólo confirma que las cláusulas del edicto provincial relativas a las *syngraphae* y otras operaciones de crédito implicaban a peregrinos, sino también que se trataba de asuntos que podían afectar gravemente a la sostenibilidad económica de las ciudades provinciales. Asimismo, aunque los gobernadores velaban en primer lugar por los intereses de los ciudadanos romanos asentados en la provincia o con negocios en ella, no dejaban de proteger a los provinciales; y esta actitud tenía su reflejo en las disposiciones de su edicto. Cicerón muestra estar muy preocupado por evitar el endeudamiento y bancarrota de las comunidades provinciales⁸⁵ y su decisión de fijar el interés máximo en un 12% es una muestra de las medidas que tomó para evitarla. Él, como otros de sus colegas senatoriales, fue consciente de la necesidad de mantener en paz la provincia a través de un trato ecuánime de los aliados, sobre todo en el mundo griego, cuya tradición políada tanto respetaban. A sus ojos, era justo que, a cambio de la paz que les garantizaba

⁸² Coma Fort, “Sobre los límites...” cit, pp. 269 y 277-287.

⁸³ La llamada *lex Gabinia de uersura Romae prouincialibus non facienda*, del 67 a.C.: Rotondi, *Leges publicae...* cit. p. 373.

⁸⁴ El asunto completo en *ad Att.* 5.21.10-12. Cicerón vuelve a mencionarlo en *ad Att.* VI, 1, 5-7, insistiendo en que se atiene constantemente a su edicto.

⁸⁵ *Ad Att.* V, 21, 12: *Cohorruí primo; etenim erat interitus ciuitatis.* en *ad Q. fr.* I, 1, 25, el Arpinate felicita a su hermano Quinto por haber liberado de sus deudas a las ciudades de Asia y haber respetado las fortunas de los hombres más acaudalados de la provincia.

Roma, los aliados contribuyesen con hombres y tributos al sostenimiento del Imperio, pero no debían esquilmados⁸⁶. Esto obligaba a los gobernadores a mantener un difícil equilibrio entre los intereses de los publicanos y demás prestamistas romanos y los de las comunidades locales⁸⁷. Ya en el Principado, el emperador Tiberio pensaba de manera similar cuando respondió a algunos gobernadores que le aconsejaban aumentar los impuestos provinciales que se debía esquilmar el rebaño, no desollarlo⁸⁸. Muchos gobernadores responsables, tanto a fines de la República como durante el Principado, se dedicaron a revisar las cuentas públicas de las ciudades de su provincia (las *rationes ciuitatum*)⁸⁹, estableciendo, como Cicerón, disposiciones específicas sobre ellas en sus edictos.

Los gobernadores tardo-republicanos también juzgaban causas que enfrentasen a particulares peregrinos. Al igual que en el caso de los ciudadanos romanos, las más numerosas serían las relacionadas con herencias y con contratos, como se observa en los ejemplos ofrecidos por Cicerón en las *Verrinas* y en el *Pro Flacco*: Verres juzgó los casos de herencias de Dión de Halesa, los hermanos Sosipo y Filócrates, Heraclio de Siracusa o Epícrates de Bidis⁹⁰. Que todos ellos saliesen mal parados no invalida la potestad jurisdiccional que tenía Verres para intervenir en tales asuntos; sólo muestra el mal uso que hizo de ella. Cuando Metelo sucedió a Verres en el gobierno de Sicilia resarció a estos dos últimos, aplicando una institución jurídica típica del derecho civil romano, la *restitutio in integrum*⁹¹, que hubo de hacer extensible a los peregrinos en su edicto. Por su parte, Lucio Valerio Flaco, cuando gobernó Asia en 62 a.C., designó unos

⁸⁶ *Ad Q. fr.* I, 1, 13; 25; y 34, donde dice: *Simul et illud Asia cogitet, nullam ab se neque belli externi neque domesticarum discordiarum calamitatem afuturam fuisse, si hoc imperio non teneretur; id autem imperium cum retineri sine uectigalibus nullo modo possit, aequo animo parte aliqua suorum fructuum pacem sibi sempiternam redimat atque otium*. En época de Trajano, Plinio el Joven dedicó atención especial a las finanzas de las ciudades de Bitinia-Ponto mientras gobernó esta provincia (*uid. infra* Segunda Parte).

⁸⁷ *Ad Q. fr.* I, 1, 2; 7 y 32, donde dice: *Hic te ita uersari, ut et publicanis satisfacias, praesertim publicis male redemptis, et socios perire non sinas, diuinae cuiusdam uirtutis esse uidetur, id est tuae*.

⁸⁸ *Suet. Tib.* 32, 2: *Praesidibus onerandas tributo prouincias suadentibus rescripsit boni pastoris ed tondere pecus, non deglubere*.

⁸⁹ En *ad Q. fr.* I, 1, 25, el Arpinate felicita a su hermano Quinto por haber liberado de sus deudas a las ciudades de Asia y haber respetado las fortunas de los hombres más acaudalados de la provincia. Más adelante en esa misma carta (32) sintetiza el difícil equilibrio que Quinto debe mantener en su gobierno: *Hic te ita uersari, ut et publicanis satisfacias, praesertim publicis male redemptis, et socios perire non sinas, diuinae cuiusdam uirtutis esse uidetur, id est tuae*. De todas formas, lo cierto es que los gobernadores romanos gobernaban por y para las élites.

⁹⁰ *Cic.* 2 *Verr.* II, 19 y ss. (Dión de Halesa); 25 (Sosipo y Filócrates); 35-46 (Heraclio); 53-45 (Epícrates).

⁹¹ 2 *Verr.* II, 63.

recuperatores para que juzgasen a causa por estafa que enfrentaba al griego Hermipo contra Heraclides, ciudadanos de Temnos⁹².

Asimismo, gracias a las *Verrinas* sabemos también que en los edictos provinciales se exponía la *iudicis datio* y que ésta afectaba tanto a romanos como a peregrinos, pues, como muestra el caso siciliano, la asignación de jueces dependía del estatuto jurídico del individuo encausado⁹³:

*Verum ut totum genus amplexamini iudiciorum, prius iura Siculorum, deinde istius instituta cognoscite. Siculi hoc iure sunt ut, quod ciuis cum ciue agat, domi certet suis legibus, quod Siculus cum Siculo non eiusdem ciuitatis, ut de eo praetor iudices ex P. Rupili decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam uocant, sortiatur. Quod priuatus a populo petit aut populus a priuato, senatus ex aliqua ciuitate qui iudicet datur, cum alternae ciuitates reiectae sunt; quod ciuis Romanus a Siculo petit, Siculus iudex, quod Siculus a ciui Romano, ciuis Romanus datur; ceterarum rerum selecti iudices ex conuentu ciuium Romanorum proponi solent. Inter aratores et decumanos lege frumentaria, quam Hieronicam appellant, iudicia fiunt*⁹⁴.

En Sicilia, los pretores que hasta el año 70 a.C. habían sucedido en el gobierno de la provincia al cónsul Publio Rupilio habían incluido en su edicto jurisdiccional las disposiciones acerca de la *iudicis datio* que éste había promulgado en un decreto del 132 a.C. junto a otras relativas al diezmo sobre la producción agrícola que las comunidades sicilianas debían tributar anualmente a Roma. Esto refuerza el argumento de que los gobernadores tenían muy presentes a los peregrinos en las disposiciones de su edicto, algo natural si tenemos en cuenta que los ciudadanos romanos residentes en una

⁹² Cic. *Pro Flacc.* 46-49.

⁹³ J. Fournier, “L’apport de l’oeuvre de Cicéron à la connaissance du système judiciaire provincial au Ier siècle av. J.-C.”, en N. Barrandon – F. Kirbihler (dir.), *Administrer les provinces de la République romaine*, Rennes, 2010, pp. 181-194, esp. p. 184: “c’est le statut juridique personnel des parties en litige, plutôt que la qualification des causes, qui constitue le critère discriminant dans la répartition des procès entre les différentes instances judiciaires de la province”.

⁹⁴ Cic. 2 *Verr.* 2, 32, cuya información se complementa con lo dicho en 2 *Verr.* 2, 39: *Cum id quod omnes intellegebant diceret Heraclius, ius esse certum Siculis inter se quo iure certarent, legem esse Rupiliam quam P. Rupilius consul de decem legatorum sententia dedisset, hanc omnis semper in Sicilia consules praetoresque seruasse, negauit se e lege Rupilia sortiturum: quinque iudices, quos commodum ipsi fuit, dedit.*

provincia eran una minoría en esta época y, por ende, que la mayoría de litigios se producirían entre peregrinos (particulares o comunidades) o entre éstos y romanos.

En la Hispania Citerior, contamos con un valioso testimonio epigráfico de esta época que nos muestra que su gobernador en el año 87 a.C., Cayo Valerio Flaco, aplicó el procedimiento formular, vigente en Roma desde el siglo anterior (como alternativa a las *legis actiones*), para que se juzgase un litigio territorial que enfrentaba a dos comunidades peregrinas asentadas en torno a la actual Zaragoza, los *Salluienses* y los *Allauonenses*⁹⁵. No se usó el derecho romano (ya que se trataba de peregrinos), sino los recursos formales del procedimiento legal romano. Flaco decidió que los jueces que deberían dirigir la fase *apud iudicem* del proceso habrían de ser elegidos entre los miembros del senado de una tercera ciudad neutral, Contrebia, donde se expuso el bronce que ha llegado hasta nosotros (la llamada *Tabula Contrebiensis*)⁹⁶. Advuértase que esta solución concuerda con una de las posibilidades que el decreto de Rupilio ofrecía a los sicilianos en la *iudicis datio*: *Quod priuatus a populo petit aut populus a priuato, senatus ex aliqua ciuitate qui iudicet datur*, aunque en el proceso hispano se trata de dos comunidades. Es muy probable, pues, que Flaco, a pesar de presentarse en el bronce como imperator y no con su título oficial de procónsul, hubiese promulgado un edicto jurisdiccional para las comunidades peregrinas y los romanos asentados en el territorio pacificado de la Citerior, que sin duda sería más sencillo que el que exigían provincias con un desarrollo cívico superior (como Sicilia o Asia) e incluiría cláusulas relativas a la *iudicis datio* menos complejas. No olvidemos, además, que ciertos *Salluienses* habían obtenido, en 89 a.C., la ciudadanía romana de manos de Pompeyo

⁹⁵ Se disputaban por los derechos de los primeros a realizar un canal de riego que llevara agua desde el territorio de los *Sosinestani* a través de unos terrenos previamente adquiridos a éstos por los *Salluienses* que los *Allauonenses* reclamaban como suyos.

⁹⁶ Sobre este proceso y la *Tabula Contrebiensis* véase: G. Fatás, *Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)*. Vol. 2: *Tabula Contrebiensis*, Zaragoza, 1980; A. D'Ors, "Las fórmulas procesales del 'Bronce de Contrebia'", *AHDE* 50, 1980, pp. 1-20; A. Torrent, "Consideraciones jurídicas sobre el Bronce de Contrebia", *Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma* 15, 1981, pp. 95-104; J. L. Murga, "La *addictio* del Gobernador en los litigios provinciales", *RIDA* 30, 1983, pp. 151-183; J. S. Richardson, "The *Tabula Contrebiensis*: Roman law in Spain in the Early first century B.C.", *JRS* 73, 1983, pp. 33-41; P. Birks – A. Rodger – J. S. Richardson, "Further aspects of the *Tabula Contrebiensis*", *JRS* 74, 1984, pp. 45-73; F. Beltrán Lloris, "*Vltra eos palos*. Una nueva lectura de la línea 7 de la *tabula Contrebiensis*", en *Espacios, usos y formas de la epigrafía hispana en épocas antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr. A. Stylow*, (=Anejos de *AEspA* XLVIII), Madrid, 2009, pp. 33-42. Bibliografía completa sobre el bronce en: *ELRH*, p. 96.

Estrabón en recompensa por su actuación en el *Bellum Sociale* en un contingente auxiliar de caballería, la *turma Salluitana*⁹⁷.

Así pues, como señalan M. Coudry y F. Kirbihler: “les fortes ressemblances entre les dispositions imposées à des régions différentes en matière d’institutions locales, à savoir l’infléchissement de modèles, certainement adaptés aux conditions locales, mais sans doute régulièrement repris”⁹⁸. La clave está en la adaptación de los modelos romanos a las diversas realidades de cada provincia.

Los gobernadores gozaban de discrecionalidad para elegir el grado en el que intervendrían en los asuntos de las comunidades peregrinas. Escévola en Asia y Cicerón en Cilicia, por ejemplo, decidieron no intervenir en todas aquellas causas que los griegos de su provincia pudiesen resolver con sus leyes, mientras que C. Verres y Apio Claudio Pulcro (predecesor del Arpinate en Cilicia) se mostraron mucho más intervencionistas. Verres obvió, por ejemplo, las cláusulas de Rupilio acerca de la *iudicis datio* y la llamada *lex Hieronica*, a pesar de formar parte de las cláusulas traslaticias del edicto provincial de los gobernadores de Sicilia⁹⁹, y se otorgó a sí mismo un gran protagonismo en la dirección de los procesos:

*Edictum enim hominis cognoscite, quo edicto omnia iudicia redegerat in suam potestatem, SI QVI PERPERAM IUDICASSET, SE COGNITURUM; CVM COGNOSSET, ANIMADVERSUM. Idque cum faciebat, nemo dubitabat quin, cum iudex alium de suo iudicio putaret iudicaturum seque in eo capitis periculum aditurum, uoluntatem spectaret eius quem statim de capite suo putaret iudicaturum.*¹⁰⁰

Todo gobernador podía hacer las modificaciones que creyese oportunas en su edicto. Si Cicerón y sus coetáneos criticaron a Verres fue por haber usado los amplios poderes jurisdiccionales que le otorgaba su cargo en su propio beneficio, incurriendo en lo que hoy calificaríamos como prevaricación. Ahora bien, no debemos engañarnos pensando que un buen gobernador sería aquel que interviniera poco en los asuntos de

⁹⁷ En el famoso Bronce de Áscoli: *CIL* I 709.

⁹⁸ M. Coudry – F. Kirbihler, “La *lex Cornelia*, une *lex provinciae* de Sylla pour l’Asie” en Barrandon Kirbihler, *Administrer les provinces...* cit. pp. 133-169, esp. p. 169.

⁹⁹ 2 *Verr.* II, 34.

¹⁰⁰ 2 *Verr.* II, 33.

las comunidades locales. Ni Escévola ni Cicerón, haciendo que los peregrinos de sus provincias se rigiesen por sus leyes (*suis legibus uti*), pretendieron concederles una mayor autonomía¹⁰¹. En primer lugar, no tenían capacidad para hacer tales concesiones¹⁰², y Cicerón deja claro que eso era lo que los griegos de Cilicia habían interpretado a raíz de sus medidas; no su intención real¹⁰³. Un buen gobernador debía velar por que reinase el orden y la paz en su provincia y, para ello, era más efectivo proteger a los peregrinos para que la colaboración de sus élites fuese más decidida. De hecho el Arpinate no dejó de supervisar las *rationes ciuitatum* o de asumir la vista de las causas en las que una de las partes fuese peregrina y la otra romana, pues eran asuntos que habrían provocado una situación de verdadero desgobierno. Sólo eran ajenas a la jurisdicción del gobernador las *ciuitates liberae*, a no ser que sus autoridades se lo pidiesen o algunos de sus ciudadanos llevasen su caso ante él por iniciativa propia¹⁰⁴.

Este fue el caso de las herencias de Heraclio de Siracusa y Epícrates de Bidis, reclamadas por las palestras de sendas ciudades ante Verres. El hecho de que quienes reclamaban estuviesen en connivencia con Verres y que éste incurriese en lo que denominaríamos como prevaricación, no es óbice para admitir la validez de este testimonio como prueba de una práctica que será cada vez más habitual, con el permiso del Senado romano o del gobernador. Asimismo, esa posibilidad de recurrir a los tribunales romanos podía venir concedida a título individual en calidad de privilegio, como en el caso del llamado *Senatusconsultum de Asclepiade et sociis* del 78 a.C., por el que se otorgó a tres navarcas griegos que habían dado un valioso servicio a Roma en

¹⁰¹ Autonomía: *ad Att.* VI, 2, 4. La expresión '*suis legibus uti*' se halla en *ad Att.* VI,1,15. También los municipios romanos se regían por sus leyes, tal y como dice Au. Gell. XVI, 13, 6 ('*legibus suis et suo iure utentes*'), pero Roma podía intervenir en ellos a su arbitrio.

¹⁰² Correspondían al Senado y el pueblo Romano: Cf. Caes. *B.G.* I, 45, 3: *si iudicium Senatus obseruari oporteret, liberam debere esse Galliam, quam bello uictam suis legibus uti uoluisset*. Asimismo véase la expresión formal que aparecía en todos los pactos realizados por los generales romanos con comunidades provinciales: "*dum Senatus Populusque Romanus uellet*"; por ejemplo en la llamada *Tabula de Alcántara*: R. López Melero – S. García Jiménez – J. L. Sánchez Abad, "El bronce de Alcántara: una dedictio del 104 a.C.", *Gerión* 2, 1984, pp. 265-323. En la interpretación de esta fórmula seguimos a P. López Barja, *Epigrafía latina: las inscripciones romanas desde los orígenes al siglo III d.C.*, Santiago de Compostela, 1993, pp. 194-196, quien ha señalado que debe traducirse como "siempre que el Senado y el Pueblo Romano quieran", tomando el '*dum*' en su sentido condicional restrictivo.

¹⁰³ Cic. *ad Att.* VI, 1, 15: *Graeci vero exsultant quod peregrinis iudicibus utuntur. 'nugatoribus quidem' inquires. quid refert? tamen se autonomian adeptos putant.*

¹⁰⁴ Sobre la relaciones de las ciudades libres con el poder romano durante la República: J.-L. Ferrary, "Le statut des cités libres dans l'Empire romain à la lumière des inscriptions de Claros", *CRAI* 135/3, 1991, pp. 557-577; L. Boffo, "La libertà delle città greche sotto i romani (in epoca repubblicana)", *Dike* 6, 2003, pp.227-249. Esta situación pervivió durante el Alto Imperio: véanse las ciudades privilegiadas de Bitinia Amiso (Plin. *Ep.* X, 92) y Apamea (*Ep.* X, 47-48).

la Guerra de los Aliados (o a Sila contra Mitrídates) la posibilidad de escoger entre la jurisdicción de su ciudad, la romana y la de otra ciudad aliada de Roma para resolver futuros litigios¹⁰⁵.

El caso de Sicilia es muy elocuente: los sicilianos gozaban de una jurisdicción autónoma general a nivel local, pero ésta hubo de ser reconocida por el poder romano –a través del decreto de P. Rupilio del 132 a.C. recogido en los edictos jurisdiccionales de todos los gobernadores posteriores– para tener validez. Además, ni los sicilianos encausados ni Cicerón en su acusación cuestionan el derecho que tenía Verres de intervenir en los litigios entre peregrinos si una de las partes se lo pedía. Valgan como ejemplo las palabras de Cicerón referentes a la *iudicis datio* efectuada por Verres en el caso de Heraclio de Siracusa: de ellas se desprende que no lo censuraban por haber dirigido la designación de los jueces, sino por la elección interesada de las personas que había hecho para formar parte del tribunal¹⁰⁶, personas que, además de pertenecer a su ‘*cohors*’, no contaban con el *status* social que se entendía que debían tener para poder realizar esa tarea¹⁰⁷.

Por tanto, el edicto jurisdiccional de los gobernadores provinciales tardo-republicanos era el marco de referencia de su programa jurisdiccional en el que se explicitaban los recursos procesales y las normas jurídicas –relativas a los ámbitos de lo que hoy calificaríamos como derecho privado y derecho administrativo– que todos los habitantes libres de su provincia debían acatar en función de su estatuto jurídico. Sus disposiciones eran también vinculantes para el propio gobernador –que no podía contravenirlas desde la *lex Cornelia de iurisdictione* del 67 a.C. –, lo cual ofrecía una

¹⁰⁵ Véase edición del *S.C. de Asclepiade et sociis* en *Les lois des romains* (a cura di V. Giuffrè), Camerino, 1977, pp. 28-33; también A. Raggi, “*Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*”, *ZPE* 135, 2001, pp. 73-115; L. Maganzani, “Juridiction romaine et autonomie locale dans les provinces au dernier siècle de la République”, *RHDFE* 85/3, 2007, pp. 353-373, esp. pp. 369 y 372; V. Arangio-Ruiz, “Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell’Impero Romano”, en *Scritti di diritto romano* IV, Camerino, 1977, pp. 165-181. (= *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti* IV, Padua, 1950, pp. 55-77), quien concluye que los tribunales locales tenían competencia sólo cuando las dos partes en litigio eran ciudadanos de la misma ciudad; el resto de litigios serían asumidos por el gobernador, juzgando él mismo en virtud de su capacidad cognitoria o designando un juez (p.172).

¹⁰⁶ Cic. 2 Verr. II, 13, 33. Cf. D. Mellano, *Sui rapporti tra governatore provinciale e giudici locali alla luce delle Verrine*, Milán, 1977, pp.52-55.

¹⁰⁷ El sorteo o elección de los jueces se producía entre un número cerrado de individuos seleccionado en función de su renta y su *dignitas*. J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l’Empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)*, Paris/Athènes, 2010, pp. 34-38.

suerte de seguridad jurídica tanto a los *ciues Romani* como a los peregrinos residentes en la provincia. Sólo las *ciuitates liberae* escapaban a su jurisdicción, pero cabía la posibilidad de que recurriesen al gobernador cuando sus autoridades lo creyesen necesario o cuando un particular de esa ciudad decidiese llevar su causa ante el gobernador por iniciativa propia en pos de un juicio más justo.

La promulgación de este edicto supuso la difusión del derecho romano en las provincias, siendo en Occidente uno vehículo importante de romanización, pues a través del edicto se implantaron las nuevas reglas que regirían las relaciones entre individuos y comunidades. Una parte del edicto estaba dedicada específicamente a las realidades de la provincia, a las que el poder romano adaptó los expedientes que solía emplear en su organización. Por ello, no sólo el edicto del gobernador contenía partes que los diferenciaban del edicto del pretor, sino que el contenido del edicto provincial variaba de una provincia a otra, sobre todo entre las provincias helenófonas y el resto. La publicación del edicto en una provincia suponía un cambio en la consideración de sus habitantes peregrinos, pues señalaba la transición del estado de guerra – en el que los sometidos eran tratados de manera arbitraria en el marco del *ius belli* y la *deditio*– a un estado de paz en el que eran considerados como “gobernados” y no como meros conquistados¹⁰⁸.

El edicto provincial y la cuestión de la llamada *lex prouvinciae*.

Cicerón dice que los sicilianos tomaron el decreto de Rupilio como si fuera una *lex*, lo cual ha sido interpretado por la historiografía como una prueba de una *lex prouvinciae Siciliae*. Como hemos manifestado en otras páginas¹⁰⁹, en nuestra opinión, el concepto de *lex prouvinciae* –tan asentado en la historiografía¹¹⁰– ha de ser

¹⁰⁸ R. Olmo López, “*Pacisque imponere morem*: los gobernadores provinciales y la imposición del orden romano a los conquistados en Occidente (siglos I a.C. - I d.C.)”, en G. Bravo – R. González. Salinero (eds.) *Conquistadores y conquistados: Relaciones de dominio en el mundo romano*, Madrid, 2014, pp. 485-498.

¹⁰⁹ Olmo López, “Nuevas perspectivas...” cit.

¹¹⁰ Cf. Arnold, *The Roman System of Provincial Administration to the Accession of Constantine the Great*, Oxford, 1979, pp. 26-28; Stevenson, *Roman Provincial Administration...* cit. p. 68; De Martino, *Storia della costituzione...* cit. p. 285; C. Nicolet, *Rome et la conquête du monde méditerranéen*, 2: *La genèse d'un empire*, Paris, 1978, pp. 883-920; M. Crawford, “Origini e sviluppi del sistema provinciale romano”, en *Storia di Roma*, vol. 2, *L'impero mediterraneo I: La repubblica imperiale*, Turín, 1990, pp. 91-121; F. Millar, *The Roman Empire and its Neighbours*, Londres, 1993, p. 65; G. P. Burton, “The Roman Imperial State (A.D. 14-235): Evidence and Reality”, *Chiron* 32, 2002, pp. 249-280; F. Kirbihler,

reconsiderado y redefinido, pues la teoría sobre la que se sustenta presenta dos importantes lagunas. Por un lado, que ese término no es de cuño romano, sino que se trata de un constructo historiográfico; por otro, su difícil conciliación con la *formula prouinciae* –el elenco de comunidades de las provincia en el que se especificaba el estatuto de cada– y el edicto provincial, pues el contenido abarcado por ambos haría innecesaria la promulgación de una ley orgánica que organizase una provincia. De hecho, autores como R. M. Kallet-Marx y J.-L. Ferrary han puesto en duda que el proceso de constitución de una provincia debiese necesariamente concluir en la composición de una *lex prouinciae*¹¹¹.

B.D. Hoyos fue el primero en señalar las similitudes existentes entre el contenido del edicto provincial y el que se atribuye a la *lex prouinciae*. Además, llamó la atención sobre la contradicción lógica entre una ley-marco orgánica que recogía la organización administrativa de la provincia y el hecho de que los gobernadores, según la historiografía, pudiesen hacer modificaciones en ella si las circunstancias lo exigían y que, incluso, no estuviesen obligados a regirse por ella¹¹². Todo esto lo llevó a redefinir la *lex prouinciae* como un edicto provincial más amplio y detallado¹¹³.

No estamos de acuerdo con la conclusión a la que llegó Hoyos, pero sí con sus críticas a la teoría tradicional acerca de la *lex prouinciae*, que llevan a cuestionar la pertinencia de seguir usando este término. Resulta muy extraño y contrario a su tradicional pragmatismo que Roma hubiese decidido implantar una ley general para cada provincia que se solapaba con el edicto jurisdiccional de sus gobernadores sin aportar nada nuevo al contenido de éste. Además, las noticias de leyes que se han tomado como ejemplo de *lex prouinciae* –la *lex Rupilia* de Sicilia, la *lex Pompeia* de Bitinia, la *lex Lentuli* de Chipre, la *lex Cornelia* de Asia, etc.¹¹⁴– parecen más bien

“Les lois provinciales en Occident: état de la question”, en F. Hurlet (dir.), *Rome et l’Occident (IIe s. av. J.-C. – II apr. J.-C.): Gouverner l’Empire*, Rennes, 2009, pp. 25-34, donde realiza un estupendo estado de la cuestión; Coudry – Kirbihler, “La *lex Cornelia*...” cit.; Fournier, *Entre tutelle...* cit. pp. 264-266, aunque admite que la *lex Rupilia* es un decreto y prefiere hablar de *leges* en plural; A. Dalla Rosa, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart, 2014, pp. 44-49, que sigue a Fournier y, como éste, revisa y matiza algunas de las ideas admitidas sobre las *leges prouinciarum*.

¹¹¹ R. M. Kallet-Marx, *Hegemony to Empire: The Development of the Roman Imperium in the East from 149 to 62 B.C.*, Berkeley, 1995, pp. 18-20; J.-L. Ferrary, “La liberté des cités et ses limites à l’époque républicaine”, *Mediterraneo Antico* 2/1, 1999, pp. 69-84, esp. p.73.

¹¹² Hoyos, “*Lex prouinciae*...” cit. pp. 50-52, algo que, paradójicamente, ya reconocía Arnold, *The Roman System...* cit. p. 28, a pesar de ser una ley, según él, aprobada por los comicios.

¹¹³ *Idem*, p. 53.

¹¹⁴ Un elenco completo en Coudry - Kirbihler, “La *lex Cornelia*...” cit. pp. 135-137.

disposiciones *ad hoc* promulgadas por algunos gobernadores con el fin de resolver u organizar asuntos precisos que partes de ordenamientos generales por lo demás desconocidos. Ciertamente es que no se trata de leyes dirigidas a una sola ciudad o comunidad, sino al conjunto de una provincia y, excepto la *lex Pompeia*, tampoco ninguna se puede encuadrar dentro de los *acta* que realizaban los generales tras una conquista¹¹⁵. A pesar de que se trata de leyes de alcance general, se refieren siempre a asuntos muy concretos y, por ende, no pretenden organizar todos los aspectos de la provincia. El intento de reconstruir el contenido de la *lex prouinciae* a partir de cada una de estas leyes antedichas, asumiendo que cada una reflejaría un pedazo de su contenido, parece un camino poco seguro que aboca a una tautología.

En este sentido, D. Mellano ya demostró con eficacia que la llamada *lex Rupilia* no podía ser tomado como un ordenamiento administrativo general para Sicilia, sino un decreto con el que Rupilio, asesorado por una comisión de diez senadores, había querido regular la *iudicis datio* en todos los casos que se pudiesen presentar en la provincia teniendo en cuenta los diferentes estatutos jurídicos de sus habitantes y comunidades. Además, con el fin de restaurar el orden tradicional que las guerras serviles habían alterado, Rupilio también decidió confirmar las disposiciones acerca de la recaudación de la *decuma* sobre la producción agraria vigentes en Sicilia desde el rey Hierón II de Siracusa¹¹⁶. Así, esta *lex Rupilia* sería similar a otras disposiciones como las *Scipionis leges* (2 Verr. II, 50, 123) y *Claudii leges* (2 Verr. II, 49, 122)¹¹⁷. El respeto que los gobernadores posteriores de Sicilia demostraron hacia este decreto de Rupilio indica que sus disposiciones habrían sido incluidas en sus edictos, convirtiéndose en cláusulas traslaticias. Esta perennidad en su aplicación fue lo que sin duda condujo a los sicilianos a tomar el decreto de Rupilio como una *lex*¹¹⁸.

Lo mismo sucede con las otras supuestas *leges prouinciarum* que mejor conocemos: la *lex Pompeia* de Bitinia y la *lex Cornelia* de Asia. Según nos cuenta nuestra única fuente acerca de la primera, Plinio el Joven, esta ley regulaba la composición de los senados locales y el acceso a las magistraturas en las ciudades de la

¹¹⁵ Crawford, "Origini e sviluppi..." cit. pp. 112-113, diferenció con acierto las leyes generales para la provincia de estos otros dos tipos de disposiciones (*leges* para comunidades individuales y *acta*).

¹¹⁶ J. Carcopino, *La loi de Hiéron et les romains*, París, 1914; R. T. Pritchard, "Cicero and the *lex Hieronica*", *Historia* 19/3, 1970, pp. 352-368.

¹¹⁷ Mellano, *Sui rapporti...* cit. p. 12-20 y 120-126.

¹¹⁸ Cic. 2 Verr. II, 13, 32: *Ex P. Rupili decreto quod is de decem legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam uocant.*

provincia¹¹⁹, asuntos conciernen al mismo ámbito, lo que refuerza la idea de que se trataba de una disposición dirigida a solucionar un problema concreto. También los sucesivos gobernadores de Bitinia hasta Plinio el Joven respetaron esta disposición de Pompeyo, aunque Augusto incluyó una modificación en ella relativa a la edad mínima exigible para el ingreso en los senados locales.

En cuanto a las disposiciones de la *lex* de Sila para Asia todas ellas (el control de las embajadas, la regulación de la evergesías, la indicación de qué día debía comenzar el año nuevo) podían ser abarcadas por un edicto provincial e, incluso, por un edicto no jurisdiccional eventual. Además, al igual que el decreto de Rupilio, la *lex Cornelia* de Asia¹²⁰ y la *lex Pompeia* fueron promulgadas por justo después de un período excepcional de guerra –en el caso de Bitinia, de conquista– tras el cual la actividad de la máxima autoridad romana en la provincia debía tomar ciertas medidas para reinstaurar el orden. Es más, al menos en el caso de Rupilio y de Sila, que gobernaron provincias ya constituidas, es muy probable que el conjunto de disposiciones que componen la ‘*lex*’ de cada uno hubiesen sido incluidas por ellos en sus respectivos edictos jurisdiccionales, pues no cabe duda de que los habrían promulgado. Y no es descabellado pensar que Pompeyo publicase el suyo propio tras la constitución de la provincia de Bitinia.

Por último, resulta esclarecedor que, ya en época altoimperial, las leyes municipales de la Bética y, en concreto, la de *Irni*, se refiera al edicto del gobernador provincial como marco de referencia mientras que no existe mención alguna en ella a la *lex prouvinciae*. De haber existido como marco del ordenamiento administrativo general de la provincia, sería impensable ese silencio.

El marco de referencia tanto en asuntos administrativos como en cuestiones de derecho privado, era el edicto jurisdiccional promulgado por cada gobernador provincial al inicio de su mandato, que se complementaba con la *formula prouvinciae*. Por tanto, a nuestro juicio el término *lex prouvinciae* debería ser redefinido como la ley/es de alcance general que en cada provincia era/n introducida/s por su gobernador (con o sin ayuda de

¹¹⁹ Plin. *Ep.* X, 79-80 y 114-115.

¹²⁰ Tras la Primera Guerra Mitridática (88-85 a.C.), en la que se había producido una invasión de Asia por parte del rey del Ponto, que ordenó el asesinato masivo de los romanos e itálicos residentes en la provincia (App. *Mithrid.* 22).

una comisión senatorial) con el fin de corregir o reorganizar aspectos concretos de su administración, pero nunca con una vocación ordenadora general¹²¹.

El edicto provincial en el Principado.

En el primer siglo del Principado, los edictos jurisdiccionales de los gobernadores de cada provincia continuaron existiendo con las mismas características que tenían a finales de la República. Así, en el capítulo 85 de la *lex* del municipio flavio de *Irni* se estipula que el edicto del procónsul de la Bética debía estar expuesto públicamente, pues era tenido como el marco jurisdiccional de referencia al que se debían atener sus magistrados en la aplicación de su *iurisdictio*:

R(ubrica). Magistratus ut in publico habeant album eius qui prouinciam optinebit, exque eo ius dicant. // Quaecumque edicta, quasue formulas iudiciorum, quasque sponsiones, stipulationes, satis acceptiones, ((praescriptiones)) exceptiones, praescriptiones, quaeque interdicta ((i))is qui ei pro-/uinciae praerit in ea prouincia proposita habebit, quae eo-/rum ad iuris dictionem eius magistratus qui <in> municipio Fla-/uio Irnitano i(ure) d(icundo) p(raerit) pertinebunt, ea omnia is in eo munici-/pio, in suo magistratu, quotidie maiorem partem cuiusque di-/ei proposita proscriptaque habeto ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint), et ad ea inter-/dicta, edicta, easque formulas, sponsiones, stipulationes, satis ac-/ceptiones, ((esceptiones)) exceptiones, praescriptiones in eo mu-/nicipio ius dicatur, iudicia dentur fiant exerceanturue, et / it quod aduersus h(anc) l(egem) non fiat utique ex hac lege licebit / [fiat sine] d(olo) m(alo).¹²²*

La exposición pública del edicto del gobernador era una medida fundamental en un sistema judicial que pretendía ser garantista, y otorgaba al gobernador una función tutelar sobre el funcionamiento de los procesos presididos por los magistrados municipales. Asimismo, la *lex Irnitana* también nos revela que la *iudicis datio* seguía teniendo una gran relevancia en su contenido y que incluso competía a los gobernadores

¹²¹ Para todo lo antedicho remitimos a Olmo López, “Nuevas perspectivas...” cit.

¹²² Seguimos la lectura de F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae: Municipalità e ‘ius romanorum’*, Nápoles, 1993, pp. 350-353. Véase también: A. D’Ors – X. D’Ors, *Lex Irnitana (Texto bilingüe)*, Santiago de Compostela, 1988.

de la Bética la fijación del número de jueces de que podía disponer un municipio¹²³. Por última el capítulo 70 de esta ley establece que la elección del representante judicial de los munícipes (*actor*) estaba sujeta también a las disposiciones del edicto del gobernador¹²⁴.

Así pues, la doctrina es unánime en reconocer que en época de Domiciano los gobernadores de cada provincia todavía promulgaban independientemente un edicto jurisdiccional del mismo modo que sus homólogos tardo-republicanos, aunque sin duda la experiencia acumulada haría que las cláusulas traslaticias fuesen cada vez más numerosas.

En la consideración del edicto provincial a partir del siglo II, sin embargo, no existe ya consenso entre los romanistas. El hecho de que Adriano, en torno al 130 d.C., encargase al senador y jurista Salvio Juliano la codificación del edicto del pretor urbano ha planteado el interrogante de si también habría sucedido lo mismo con el edicto provincial. Al gran jurista alemán O. Lenel se debe la reconstrucción más rigurosa y exhaustiva del llamado “Edicto Perpetuo” de Juliano. Según él, la misma preocupación de dar un orden definitivo al copioso *corpus* que componía el edicto del pretor hubo de llevar a Adriano en esa época a encargar también la codificación del edicto provincial¹²⁵; teoría que ha sido seguida por insignes romanistas como V. Arangio-Ruiz, M. Kaser o P. de Francisci¹²⁶.

¹²³ Cap. 86. *Vid. infra*.

¹²⁴ Cap. 70: *R(ubrica). De actore municipum constituendo <deque> praemio mercede-/ue eius. / Quoi quibusque mandetur permittaturue ut nomine munici-/p((i))um municipi Flau(i) Irnitani agant petantue quit is, aut, si cum iis agetur petetur<ue> quit ab <ii>, nomine eorum iudicium / accipiat, decurionum conscriptorumue cognitio consti-/tutioque esto, cum eorum non minus quam duae tertiae / partes ader[u]nt, d[um] e[um] el*i*gant cui per edictum eius qu*i* prouin-/ciae praerit [p]rocu[rat]ori aut cognitori esse licebit, idemque conti-/tu<u>nto quantu[m] ei ei)((u))sue, qui municipibus municipi Flau(i) Irni-/tani petet pet[en]t petiturus petitoriue erunt petierit <petierintue> iudicium-/ue eorum nom[i]ne acceperit acceperint accepturus erit acce[e]p-/turiue erunt, p[r]aemi opere((ue)) nomine dari oportet((b))at. Anexo II: n° 59.*

¹²⁵ O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig, 1883, pero introdujo modificaciones en la segunda y tercera ediciones, de 1907 y 1927. Algunos avances de la segunda edición fueron incluidos ya en la versión francesa: *Essai de reconstitution de l'Édit Perpétuel*, París, 1901, según reconoce él mismo en el prefacio (p. VII-VIII). Desbancó como obra de referencia a la precedente de A. A. F. Rudorff, *De iuris dictione edictum: Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Leipzig, 1869.

¹²⁶ V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Nápoles, 1977, pp. 285-286; M. v. Kaser, *Römische Rechtsgeschichte*, Göttingen, 1978, p. 129; P. De Francisci, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma, 1965, pp. 304-305 (cito las ediciones más recientes que he podido manejar). Recientemente: F. J. Andrés Santos, “Poderes jurisdiccionales del gobernador provincial en la Hispania de los Antoninos”, en L. Hernández Guerra (ed.), *Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua: La Hispania de los Antoninos*, Valladolid, 2004, pp. 11-20, esp. p. 13.

Ahora bien, A. Guarino mostró en repetidas ocasiones los puntos débiles de esta teoría, sosteniendo que no se puede hablar de ‘codificación’ sino de ‘ordenación’ del edicto y poniendo en duda que tal cosa pueda atribuirse a Juliano, dado que ninguno de los testimonios que dan noticia de ello son de época de Adriano ni ningún jurista clásico menciona la redacción del edicto por parte de Juliano. En efecto, las fuentes que a este hecho se refieren, como Eutropio, no son anteriores al siglo IV, y una de las menciones más importantes pertenece a una constitución de Justiniano cuyas versiones latina y griega presentan tantas diferencias entre sí que hicieron pensar a Guarino que se trataría de una ‘fantasía’ del emperador. Por tanto, según el romanista italiano, habrían sido los pretores y gobernadores provinciales quienes, a lo largo de generaciones, habrían ido dando un orden a su edicto¹²⁷.

La teoría de Guarino no ha sido seguida entre los romanistas. Los manuales de derecho romano siguen atribuyendo el *Edicto Perpetuo* a Salvio Juliano, aunque se ha tendido a dar menor importancia a la labor de este jurista, calificándolo de mero *ordinator edicti*¹²⁸. Lo cierto es que es admisible que el edicto urbano conociese en época de Adriano una ordenación, seguramente bajo la supervisión de Juliano, que con probabilidad no consistió sino en la oficialización de una obra que los pretores habrían ido realizando de manera oficiosa a lo largo del tiempo con el fin de dotar de una mayor coherencia y sencillez su labor jurisdiccional y, por ende, de hacerla más pulcra a ojos de sus beneficiarios. La claridad en el proceso es siempre prueba de la vigencia de una seguridad jurídica y de unas garantías procesales. Lo mismo sucedería, a nuestro juicio,

¹²⁷ Guarino, *Storia...* cit. pp. 400-401, donde expone de manera sintética la teoría que desarrolló en diversos artículos, recogidos en *Pagine di diritto romano* IV cit.: “Edictum Perpetuum”, cit. ; “La pretesa codificazione dell’editto”, pp. 218-252, donde profundiza en sus planteamientos, haciendo un exhaustivo análisis de las fuentes, mediante el cual desarmó punto por punto la doctrina establecida; “La leggenda sulla codificazione dell’Editto e la sua genesi”, pp. 253-266; “Gaio e l’edictum provinciale”, pp. 279-295, donde recalca que el hecho de que Gayo aún diferencie entre *edictum praetoris urbani* y *edictum praetoris peregrini* prueba que su unificación y la codificación del edicto no habían tenido lugar aún en época de Antonino Pío (p. 285). Las fuentes mencionadas son: Eutrop. VIII.17: *Post eum Saluius Iulianus rem publicam inuasit, uir nobilis et iure peritissimus, nepos Saluii Iuliani, qui sub Diuo Hadriano perpetuum composuit edictum; Iust. const. Tanta* 18. En lo que respecta al edicto del pretor, C. Giachi, “*Storia dell’editto e struttura del processo in età pre-giuliana*”, *Rivista di Diritto Romano – Atti del Convegno ‘Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico’ in memoria di A. Biscardi*, Pontignano, 2001, pp. 113-129, defiende (p. 128) que “l’editto era stabile sin dall’ epoca di Labeone, ma stabile nella sua complessità, nei suoi contenuti, non certo nelle articolazione della sua struttura”, e incluso ya desde el tiempo de Cicerón, a tenor de lo expuesto en *ad Att.* VI, 1, 15 (nt. 28).

¹²⁸ En España, por ejemplo, dos manuales de referencia, obra de señeros romanistas, reproducen la teoría ‘projuliana’: A. D’Ors, *Derecho privado romano*, Pamplona, 1968, pp. 69-70; Iglesias, *Derecho romano...* cit. pp. 49-50. Para una reflexión española favorable (aunque moderada) a la teoría de Guarino ver: P. Fuenteseca, “La necesidad de retomar el estudio del edicto pretorio”, en *Investigaciones de derecho procesal romano*, Salamanca, 1969, pp. 67-92, esp. p. 70, nt. 2.

con el edicto de los gobernadores de cada provincia. Con todo, el problema radica en saber si perduró durante el siglo II un edicto provincial ‘con entidad propia’ para cada provincia o estos fueron asimilados al urbano.

Se puede afirmar positivamente que Gayo, en los treinta libros que dedica ‘al edicto provincial’¹²⁹, menciona al procónsul a propósito de los siguientes temas: demandas en nombre de una sociedad o corporación¹³⁰, casuística en torno a las herencias¹³¹, préstamos a menores de veinticinco años¹³², la alteración perjudicial de las partes del juicio¹³³, el daño injusto y el hurto cometidos por un esclavo¹³⁴, el negocio realizado con un individuo *in aliena potestate*¹³⁵, los enterramientos irregulares¹³⁶. Asimismo, usa el término genérico ‘*praeses*’ al tratar el nombramiento de un *curator* para efectuar discretamente, en una *actio tributaria*, el pago a los acreedores de un individuo de rango senatorial¹³⁷ y la designación de tutores¹³⁸. Pero, ¿es esto suficiente para afirmar la existencia de un edicto provincial con entidad propia?

Lenel se decantó por aceptarla, fundando su posicionamiento en una serie de disposiciones que en su opinión eran propias de los edictos provinciales y que resultaban suficientemente poderosas. Estas eran: 1) Las cláusulas edictales relativas a los *conuentus* y el *uadimonium* en la provincia; 2) la fórmula de la *uindicatio* de los *praedia* provinciales; 3) la fórmula de la tutela de las servidumbres en los pactos y estipulaciones; 4) las disposiciones concernientes al derecho sucesorio de los

¹²⁹ Como señala E. Valiño, *El comentario de Gayo al edicto provincial*, Valencia, 1979, p. 14, nt. 1, la obra consta de treinta y dos libros en total, pero los dos últimos están dedicados al edicto de los ediles curules.

¹³⁰ *Dig.* III, 4, 1, 2-3 (Gai. 3 *ad ed. prou.*).

¹³¹ Gai. 4 *ad ed. prou.* = *Dig.* IV, 2, 19 (intimidación); *Dig.* IV, 3, 26 (*dolo malo*); 15 *ad ed. prou.* = *Dig.* XXIX, 1, 2 (*bonorum possessio ex testamento militis*), pasaje en el que, además, se menciona el conocimiento que los gobernadores tenían de las *constitutiones* de los emperadores y la aplicación que de ellas hacían; de 16 *ad ed. prou.* = *Dig.* XXXVIII, 8, 2 (*bonorum possessio cognatorum*); 17 *ad ed. prou.* = *Dig.* XXIX, 3, 7 (apertura del testamento); 22 *ad ed. prou.* = *Dig.* XXIX, 2, 57 (condiciones del permiso de abstención de la herencia para los púberes e impúberes).

¹³² *Dig.* IV, 4, 27, 1 (Gai. 4 *ad ed. prou.*).

¹³³ *Dig.* IV, 7, 1 y IV, 7, 3 (Gai. 4 *ad ed. prou.*).

¹³⁴ *Dig.* IX, 2, 32 (Gai. 5 *ad ed. prou.*).

¹³⁵ *Dig.* XIV, 5, 1 (Gai. 9 *ad ed. prou.*).

¹³⁶ *Dig.* XI, 7, 7 (Gai. 19 *ad ed. prou.*).

¹³⁷ *Dig.* XXVII, 10, 5 (Gai. 9 *ad ed. prou.*).

¹³⁸ *Dig.* XXVI, 5, 5 (Gai. 12 *ad ed. prou.*).

provinciales; 5) las cláusulas del edicto urbano que habrían de ser adaptadas a la realidad provincial¹³⁹.

Contra esta teoría reaccionó Martini, observando, en un minucioso análisis en el que se valió de los comentarios de Paulo y Ulpiano al edicto urbano y de documentos papiráceos de Egipto, que o bien esas disposiciones tenían su paralelo en el edicto del pretor, o bien podían haber sido plasmadas fuera del álbum edictal, en edictos puntuales del gobernador, como por ejemplo la determinación de los lugares y los tiempos en los que se realizaría el *conuentus*¹⁴⁰. Sin embargo, ya Guarino mostró los errores a los que había conducido ese rechazo radical de un edicto provincial diferenciado y a él nos remitimos¹⁴¹. Simplemente, hemos de agregar que, en lo que respecta a la fijación de los lugares en que se produciría los *conuentus iuridici*, los testimonios epigráficos hispanos demuestran que, al menos en Hispania, las sedes conventuales fueron en general las mismas; si el gobernador tenía alguna dificultad para administrar justicia en alguna de ellas –por ejemplo, en el caso de la Citerior, en las lejanas sedes del Noroeste peninsular– enviaba a uno de los legados que tenía a su mando, que en las provincias imperiales a partir de un momento recibieron el nombre de *iuridicus*¹⁴². Además, Lenel ya demostró en su momento que el *uadimonium* estaba incluido tanto en el edicto del pretor como en el provincial, y junto a él la designación de las sedes conventuales. Ambas cosas estaban directamente vinculadas a la jurisdicción y no tendría ningún sentido posponer la última a un edicto particular ajeno al jurisdiccional, salvo ante una eventualidad.

En esta controversia, por tanto, lo más sensato parece adoptar una vía intermedia entre ambas posiciones; es decir, ni tan formalista como la de Lenel, ni tan unívoca como la de Martini. A nuestro juicio, la existencia de un edicto provincial absolutamente autónomo no es sostenible en el Principado, como tampoco en la República, pues es innegable su dependencia del modelo que representaba el edicto urbano. En lo que respecta a la tesis contraria, además de la prueba que supone la

¹³⁹ Lenel, *EP*, cit. pp. 4-5. A favor de un edicto provincial autónomo se posicionó también F. Kniep, *Der Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktskommentare*, Jena, 1910, p. 175, partiendo de las menciones que Gayo hace del procónsul en lugar del pretor en su comentario.

¹⁴⁰ Martini, *Ricerche...* cit. pp 72-83.

¹⁴¹ Guarino, “Gaio e l’edictum...” cit. pp. 279-295. Por su parte, R. Martini, “Su un preteso ‘katholikon diatagma’ egizio”, en *La codificazione del diritto dall’antico al moderno*, Nápoles, 1998, pp. 179-189. se ha mantenido firme en sus posicionamientos.

¹⁴² Sobre los *legati iuridici* vid. *infra*.

existencia del comentario al edicto provincial de Gayo¹⁴³ —prueba que, de ser la única, resultaría demasiado endeble¹⁴⁴—, aun admitiendo que el edicto del pretor urbano era tomado como modelo y parte de él se trasladaba al provincial, tampoco resulta satisfactoria la idea de un edicto único válido tanto en Roma como en las provincias (ni siquiera desde Adriano), desde el momento en que no se puede negar la existencia de disposiciones particulares, propias de cada provincia y fruto de las necesidades derivadas de la realidad de cada una¹⁴⁵.

No es éste un punto sin importancia. Ha de tenerse en cuenta que existía una gran diversidad entre las provincias, derivado de las costumbres vernáculas de las poblaciones de cada una, de su grado de integración en el imperio (de ‘romanización’) y de la variedad de estatutos jurídicos que podían disfrutar sus comunidades, en función de su modo de vinculación o sometimiento al poder romano. En época de Adriano, no podía tener el mismo tratamiento —ni por tanto, el mismo edicto— la Dacia recién conquistada por Trajano que la Galia Narbonense, por poner dos ejemplos extremos, o la Lugdunense (si se prefiere un caso de provincia imperial). Asimismo, podían existir diferencias notables entre los territorios de una misma provincia, como en el caso del noroeste y la zona costera de la Hispania Citerior: las relaciones que mantenía con las poblaciones del noroeste el *legatus Augusti pro praetore* no podían seguir los mismos cauces que las habidas con los *ciues Romani* de la capital, *Tarraco*, o con las comunidades que gozaban de *ius Latii*¹⁴⁶. Si se admite que el proceso provincial sufrió una evolución propia en cada provincia como resultado de las particularidades internas de cada una¹⁴⁷, no se puede negar, siguiendo esa lógica, que ocurriese lo mismo con el edicto, que es el referente jurisdiccional de las normas del proceso y de los actos jurídicos presididos por el gobernador en las provincias.

¹⁴³ La cita constante del procónsul ha llevado a identificarlo con el edicto de una provincia proconsular, cf. Guarino, “Gaio e l’edictum...” cit. p. 294.

¹⁴⁴ Además, Buckland, “L’Edictum...” cit. p. 90, comenta que si bien la diferencia entre el pretor y el procónsul era importante para Gayo, carecería de significación para Justiniano. Durante el Bajo Imperio estas magistraturas se habían vaciado de contenido.

¹⁴⁵ En este sentido: De Martino, *La giurisdizione nel diritto romano*, Nápoles, 1937, p. 158; Guarino, “Gaio e l’edictum...” cit., desarma la teoría de Martini, concluyendo que “gli *edicta provincialia*, ben distinti da quelli cittadini, erano ai tempi di Gaio ancora una realtà” (pp. 281-286 y n. 18), y prueba con suficiencia la existencia de *edicta provincialia* diferenciados de los *edicta urbana* (pp. 288-290). Sin embargo, como se verá más adelante, no compartimos la idea del autor acerca de un edicto uniforme para las provincias imperiales dado por el emperador.

¹⁴⁶ Que Vespasiano concedió a toda Hispania alrededor del 73/74 d.C., según da noticia Plin. *N.H.* III, 30.

¹⁴⁷ G. I. Luzzatto, “In tema di processo provinciale e autonomia cittadina”, *RIDA* 11, 1964, pp. 355-362.

Si bien las fuentes altoimperiales que mencionan el edicto de los gobernadores provinciales son parcas, contamos, sin embargo, con indicios de la diversidad que reflejaría el edicto del gobernador de cada provincia, conteniendo, al margen de las cláusulas tomadas del modelo del edicto urbano, una parte específicamente dirigida a cada provincia concreta (el *genus prouinciale*), sólo válida para ella y no aplicable al resto.

La correspondencia pliniana vuelve a ser una fuente muy valiosa. En la antedicha carta X, 96, 7, Plinio cuenta que había incluido en su edicto provincial para Bitinia-Ponto una nueva disposición acerca de las *hetaeriae*, en cumplimiento de una de las instrucciones que Trajano había incluido en los *mandata* que le había entregado antes de su partida a la provincia. Que Plinio aluda a los *mandata* del emperador (*quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse uetueram*), ya de por sí significa que se trataba de una disposición destinada exclusivamente a Bitinia-Ponto, como respuesta a ciertos problemas internos, y no al resto de provincias. Si hubiese sido una disposición de carácter general para todo el Imperio o, al menos, para sus provincias orientales, Trajano habría recurrido a un edicto imperial para darla a conocer. Ciertamente es que el problema de ese tipo de ‘asociaciones’ de corte aristocrático que eran las *hetaeriae griegas* no pertenece al ámbito de los estatutos jurídicos de las comunidades provinciales, pero sí redundaba en la idea de que la diversidad que presentaba la casuística de las realidades sociales (y relaciones interpersonales e intercomunitarias, con sus consiguientes implicaciones jurídicas) de cada provincia obligaba al poder romano a ofrecer respuestas particulares en cada una, que se recogían en las pautas jurisdiccionales del edicto de su gobernador.

Otra carta que revela que se seguían produciendo añadidos al edicto de cada provincia (o, al menos se seguía considerando con naturalidad la posibilidad de hacerlos) es la 108. En ella, Plinio le consulta a Trajano si sería oportuno hacer perpetua (es decir, introducirla en el edicto provincial anual) la disposición relativa a las *rationes ciuitatum* que había sido renovada por cada uno de los procónsules que le habían precedido en Bitinia-Ponto y que había permitido a las ciudades de la provincia exigir el pago de lo que se les adeudaba con preferencia al resto de acreedores¹⁴⁸. La noticia es muy valiosa, pues muestra que en esa época, como en la República, se concebía de

¹⁴⁸ Plin. *Ep.* X, 108-109.

manera dinámica el edicto, al cual los gobernadores agregaban nuevas cláusulas (por pocas que fueran) con el fin de resolver problemas imprevistos¹⁴⁹. La discrecionalidad de los procónsules parece haber tenido cierto vigor aún en época de Trajano.

Además, la situación de las ciudades privilegiadas de Bitinia, como Amiso, *ciuitas libera et foederata*, y Apamea¹⁵⁰, colonia (probablemente cesariana) que disfrutaría de privilegios propios de una *ciuitas libera*¹⁵¹, debía de tener su reflejo las disposiciones procesales del edicto jurisdiccional de Plinio, al igual que en época republicana. Para el buen desarrollo de las relaciones jurídicas entre el poder romano y las comunidades provinciales era necesario que el edicto del gobernador recogiese las variantes procesales que afectaban tanto a las comunidades privilegiadas como a las que no lo eran (las *stipendiariae*), cuyo número y circunstancias variaban de una provincia a otra y, sobre todo, de la parte oriental a la occidental del Imperio, en atención a la trayectoria y condiciones de las relaciones de las comunidades de cada provincia con el poder romano desde la República. Por ello, para la composición de su edicto el gobernador habría usar la *formula prouinciarum* en la que se recogía el estatuto de cada comunidad provincial.

En lo que respecta a las comunidades de derecho latino, resulta muy valiosa la información aportada por la *lex* del municipio flavio de *Irni*. En dos de sus capítulos —el 70 y el 85— se hace referencia al edicto del procónsul de esta provincia: En el capítulo 70 se dice que el nombramiento del defensor de los munícipes debe ser realizado por los decuriones de acuerdo con lo dispuesto por el gobernador en su edicto¹⁵², mientras que el 85 (“*Magistratus ut in publico habeant album eius qui prouinciam optinebit, exque eo ius dicant*”) indica que los magistrados del municipio debían tener expuestos públicamente el edicto, las fórmulas judiciales, las promesas, las estipulaciones, las garantías, las excepciones, las prescripciones, y los interdictos del gobernador. En ambos casos, tales acciones jurisdiccionales del gobernador derivan directamente de las

¹⁴⁹ Martini, *Ricerche...* cit. p. 62 deduce de todo esto que tales concesiones difícilmente formarían parte de un edicto provincial general, lo que le lleva, más adelante (p. 67), a negar la existencia de un edicto provincial autónomo. Ya hemos criticado la teoría de este autor en el texto principal.

¹⁵⁰ Amiso: Plin. *Ep.* X,92-93; Apamea: X,47-48.

¹⁵¹ A. N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny: A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966, pp. 629-630.

¹⁵² ...decurionum conscriptorumue cognitio consti-/tutioque esto, cum eorum non minus quam duae tertiae / partes ader[u]nt, du[m] e]um el*i*gant cui per edictum eius qu*i* provin-/ciae praeit [p]ocu[rat]ori aut cognitori esse licebit. (II.38-41). Cf. Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit. p. 329-330.

del pretor¹⁵³, y, por tanto, son un ejemplo de la trasposición a la provincia de las cláusulas del edicto urbano. Sin embargo, lo más significativo es el hecho de que esos actos jurisdiccionales del procónsul afectasen a población no romana, sino latina.

Como ha expuesto E. García, el único derecho inherente a la latinidad del que hablan las fuentes es la posibilidad que tenían las oligarquías de estos municipios de acceder a la ciudadanía romana *per magistratum*¹⁵⁴, mientras que para el resto de la población latina “ningún derecho sustantivo puede ser detraído de la documentación más que por procedimientos indirectos”, es decir, considerando que disfrutaban de dos derechos o capacidades reconocidos a la antigua condición latina, el *conubium* y el *commercium*¹⁵⁵. El resto de derechos serían los propios de cada municipio latino en cuanto que municipio, esto es, una comunidad que se rige a través de sus propios *iura* e *instituta* locales, que darían cauce a la latinidad a través de ciudadanía concretas (irnitana, malacitana, etc.)¹⁵⁶. Con todo, tal y como dice el capítulo 93 de la *lex Irnitana*, los latinos tenían derecho a valerse del *ius civile* como si fuesen ciudadanos romanos seg cuando ello no contraviniese ningún de las otras disposiciones de la ley¹⁵⁷.

Las leyes municipales de la Bética no hacen alusión directa al edicto del gobernador en más ocasiones que las citadas, pero es indudable que éste actúa como referente jurisdiccional en muchas de sus disposiciones. La ejecución de las manumisiones o la *tutoris datio*, por ejemplo, correspondía a los *duoviri iure dicundo*¹⁵⁸, cuya jurisdicción se basaba en el edicto del gobernador y era ejercida a través de los cánones establecidos en él¹⁵⁹. Es verosímil pensar, por tanto, que el edicto del procónsul de la Bética recogería las aclaraciones que fuesen necesarias para regular las relaciones jurídicas entre los habitantes de su provincia, en función de su condición jurídica, ofreciendo cauces legales para la interrelación entre individuos de diferente estatus.

¹⁵³ Gai, IV, 101 y ss. Véase el comentario de J. González, “The lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law”, *JRS* 76, 1986, pp. 147-243, esp. pp. 222 y 230-231.

¹⁵⁴ *Lex Irni*. cap. 21 ll. 39-40.

¹⁵⁵ E. García Fernández, *El municipio latino: Origen y desarrollo constitucional*, Madrid, 2001, p. 145.

¹⁵⁶ *Idem*, p. 146.

¹⁵⁷ *R(ubrica). De iure municipum. // Quibus de rebus in h(ac) l(ege) nominatim cautum ue<l> scriptum / non est quo iure inter se municipes municipi [Flau] / Irnitani agant, de iis rebus omnibus [i]i inter [se eo iure] / agunto quo ciues Romani inter se iure ciuili / agunt agent, quod aduersus h(anc) l(egem) non fiat. Quod/-que ita actum [erit, nisi d(olo) m(alo) actum fact]umque erit, id / ius ratumque esto.*

¹⁵⁸ Manumisiones: *lex Irnitana* capp. 28 y 72 = *lex Salpensana* cap. 28; *tutoris datio*: *lex Irnitana* = *Salpensana* cap. 29.

¹⁵⁹ A. Torrent, *La iurisdictio de los magistrados municipales*, Salamanca, 1970, p. 127.

De todo ello se deduce que en el Principado el edicto del gobernador de una provincia occidental como la Bética afectaba directamente no sólo a los ciudadanos romanos de su provincia, sino a los latinos, lo cual redundaría en la idea antedicha de que este edicto jurisdiccional no fue una mera trasposición de los contenidos del urbano que le sirvió de modelo ni tampoco existió un edicto provincial único o unificado en su totalidad, dadas las particularidades que el edicto de cada provincia tendría al recoger las especificidades de sus comunidades, que podían ser romanas, latinas o peregrinas (aunque técnicamente, las latinas contaban ‘*in numero peregrinorum*’). Si tenemos en cuenta que en la parte oriental del imperio no se empleó el expediente municipal latino, éste se convierte en un elemento que caracteriza solamente a determinadas provincias y, por ende, es en un argumento más que conduce a entender que era necesario un edicto para cada provincia. El proceso de municipalización de Occidente provocó una paulatina uniformización de sus realidades cívicas y, por ende sociales, lo cual tendería a reducir las diferencias entre los edictos de cada provincia. No obstante, una verdadera uniformización de los edictos provinciales sólo se produciría a partir de la *Constitutio Antoniniana* del 214, al conceder la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio.

Es innegable la importancia que tuvo la política reformista de Adriano, cuyo principado aparece como un momento “bisagra” entre la dinámica gubernativa de sus predecesores, que procedían de un modo más personal y menos técnico, apegado al sentido de la clemencia, de la moderación, etc., y el de los emperadores que le sucedieron, sobre todo los Severos, que contaron con una cancillería desarrollada, provista de expertos juristas y de importantes precedentes en los que apoyarse desde un punto de vista jurídico-técnico¹⁶⁰. Adriano, sin duda, fue el primero en apostar decididamente y potenciar ese nuevo carácter técnico de la administración, lo cual se trasluciría también en la ordenación de los edictos urbanos y provinciales. Sin embargo, ‘ordenación’ no implica ‘fossilización’, al menos de manera inmediata, ni excluye la posibilidad de realizar adiciones. Además, no parece viable pensar que se pudiese proceder a ninguna unificación de las disposiciones específicas de cada provincia en un texto único, sino, más bien, a la ordenación de esa parte propia del edicto de cada provincia por separado. Se ha pensado, por ello, que Gayo comentó el edicto de una

¹⁶⁰ J. Gaudemet, “La juridiction provinciale d’après la correspondance entre Plinie e Trajan” *RIDA* 11, 1964, pp. 335-353, esp. pp. 351 y 353.

provincia concreta, quizá el de la suya, pero son meras especulaciones, pues no conocemos más de la vida de este jurista que su simple nombre de pila. En nuestra opinión, parece que Gayo está complementando un comentario al edicto urbano con menciones de los edictos de procónsules y gobernadores en general (*praeses*), con el fin de hacerlo más exhaustivo y extensivo a todo el Imperio.

Por tanto, es verosímil que hasta época de Caracala los edictos de los gobernadores de cada provincia presentasen cláusulas o disposiciones en su *genus prouinciale* particulares, sólo destinadas a esa provincia en concreto, tal y como sucedía durante el período republicano. Así, aun aceptando que los gobernadores no introducirían ningún cambio en la parte derivada del edicto urbano desde la upuesta codificación de éste bajo Adriano, seguirían teniendo la capacidad de hacer nuevas adiciones en el *genus prouinciale*, que sólo afectaba a su provincia. Esas adiciones, empero, serían escasas, dado el gran desarrollo del edicto de cada provincia desde los tiempos de Cicerón.

El problema del edicto provincial de los legati Augusti pro praetore.

Una cuestión muy debatida es si los *legati Augusti pro praetore* promulgaban su edicto jurisdiccional o éste emanaba del propio *princeps*¹⁶¹. Aquéllos, como es sabido, gobernaban sus provincias por delegación del *princeps*, verdadero titular del *imperium* proconsular en las mismas, y bajo los auspicios de éste. Es innegable, por tanto, que eran subordinados del emperador desde un punto de vista legal. Pero, ¿tal subordinación les privaba del *ius edicendi*?

En los estudios que han tratado este problema, se ha insistido en negar que estos legados imperiales gozasen de *ius edicendi*, o, al menos, que la posesión de este derecho no probaría que pudiesen publicar el edicto provincial anual, asimilándolos más a los *legati pro praetore* que actuaban como delegados de los procónsules que a estos últimos¹⁶². Asimismo, se ha defendido que la subordinación de los gobernadores de las provincias imperiales al *princeps* implicaría que el *ius edicendi* pertenecería a éste y no a ellos y que tal circunstancia daría lugar a una uniformidad entre los edictos de estas

¹⁶¹ Como opinaba Guarino, *Storia...* cit. p. 401.

¹⁶² Martini, *Ricerche...* cit. p.136-137, aunque al final parece dejar en el aire su opinión definitiva; Guarino, “Gaio e l’edictum...” cit. pp. 287-288.

provincias¹⁶³. No obstante, estos argumentos no resultan definitivos y, en nuestra opinión, tampoco prueban que estos gobernadores imperiales carecieran del *ius edicendi* ni que no lo ejercitaran.

En sus *Instituciones*, Gayo establece con claridad que el *ius edicendi* pertenecía a los magistrados del Pueblo Romano, cuya jurisdicción, en las provincias, estaba en manos de los gobernadores, a los que se refiere genéricamente utilizando el término '*praeses*', en el que se incluye los legados imperiales¹⁶⁴. Además, con Mommsen y De Martino, entendemos que los *legati Augusti pro praetore* eran considerados (pro)magistrados de pleno derecho, al igual que los procónsules, como especificaba su propia titlatura (*pro praetore*)¹⁶⁵.

Asimismo, se sabe que al *Praefectus Aegypti* se le confirió, mediante una ley especial, un *imperium ad similitudinem proconsulis*, que, entre otras cosas, probablemente le permitiría promulgar un edicto propio¹⁶⁶. Ciertamente es que éste es un caso

¹⁶³ Guarino, "*Edictum Perpetuum*" cit. p. 214, n. 15, e *idem*, "Gaio e l'edictum..." cit. pp. 288-289, que entiende que, frente a los procónsules, que seguirían actuando en la composición del edicto como sus predecesores republicanos, los *legati Augusti pro praetore* recibirían el edicto de manos del *princeps* y éste sería igual para todas las provincias imperiales.

¹⁶⁴ Gai. *Inst.* I, 6. Véase, asimismo, la definición del término *praeses* dada por Macro: *Praesidis nomen generale est eoque et proconsules et legati Caesaris et omnes prouincias regentes, licet senatores sint, praesides appellantur: proconsulis appellatio specialis est* (*Dig.* I, 18, 1 = *Macer 1 de off. praes.*). Al inicio de este estudio ya se ha señalado, siguiendo a De Martino, que es natural la identificación del edicto con la *iurisdictio* del magistrado (ver *supra*). Por otro lado, cuenta Suetonio que Julio Vándex, cuando se levantó en armas contra Nerón en el 68, publicó una serie de edictos contra el emperador. Si bien es cierto que estas acciones pertenecen a un período de guerra civil, lo importante es que Vándex, como *legatus Augusti pro praetore* de la Galia Lugdunense, parece habituado a valerse del *ius edicendi* (*Suet. Nero* 41).

¹⁶⁵ Mommsen, *DPR* III, París, 1893, p. 280; De Martino, *Storia...* cit. IV, p.720., donde corrige su opinión (antes negativa) expuesta en *La giurisdizione...* cit. p. 157.

¹⁶⁶ *Ulp. 11 ad ed.* (*Dig.* I, 17, 1); *Tac. Ann.* XII, 60. Cf. Reinmuth, "The Edict..." cit. pp. 251-252 y 255-256, quien vio similitudes entre el edicto del prefecto de Egipto Tiberio Julio Alejandro y el *genus prouinciale* del de Cicerón, al tiempo, sin embargo, que definía el primero como un 'edicto fiscal' (p. 257) por su contenido, sin tener en cuenta que no se ha conservado la totalidad del mismo. Por su parte, R. Katzoff, "The Provincial Edict in Egypt", *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review* 37, 1969, pp. 415-437, siguiendo la estela de V. Arangio-Ruiz, negó la existencia de un edicto provincial emanado por el prefecto de Egipto, interpretando las apariciones del término 'edicto' que se hallan en los papiros conservados como menciones del edicto del pretor urbano, así como la expresión '*ex edicto*' como una fórmula preestablecida equivalente a "validly given" (p. 429). A Katzoff no le falta razón cuando evidencia las incertezas en torno al edicto al que los testimonios papiáceos aluden, pero su interpretación o traducción de la fórmula '*ex edicto*' es demasiado libre. En nuestra opinión, esa fórmula no tiene un significado vago, sino muy concreto y explícito: indica que la medida tomada en el asunto tratado (en el ejemplo que menciona el autor, la *bonorum possessio*) proviene 'del edicto'. Ese edicto, a nuestro juicio, sería el del *Praefectus Aegypti*, que, sin duda, tendría como modelo el del pretor urbano, muchas de cuyas cláusulas habrían sido copiadas directamente, como se ha visto, en el edicto provincial. Por tanto, no es erróneo decir que se está hablando de uno u otro edicto, pues ambos, en muchas ocasiones, se confunden. En contra de la existencia de un edicto propio del Prefecto de Egipto: Martini, "Su un preteso..." cit.

especial de gobernador¹⁶⁷, pero no parece concebible que este prefecto gozase de tal derecho, siendo de rango ecuestre y gobernando una provincia imperial y, en cambio, los *legati Augusti pro praetore* estuviesen privados de ello.

En cuanto a la comparación establecida entre los *legati Augusti pro praetore* y los legados de los procónsules –aun admitiendo su similitud, dado que el propio emperador era oficialmente procónsul de las provincias imperiales¹⁶⁸–, es un hecho aceptado que los *legati Augusti pro praetore* tenían como precedente a los veinticuatro legados *pro praetore* de rango senatorio de que pudo disponer Pompeyo gracias a una de las cláusulas de la *lex Gabinia de bello piratico* del 67 a.C., dentro del mando extraordinario que esta ley le concedió en toda la costa del Mediterráneo¹⁶⁹. Tales legados gobernaron sus provincias en calidad de propretores, sin que su condición mermara alguno de los poderes y atribuciones connaturales al ejercicio del gobierno provincial (entre ellos, entendemos, la publicación de un edicto anual). Años después, tras conseguir, durante su consulado del 55 a.C., que se le asignase el gobierno de Hispania, Pompeyo volverá a recurrir al mismo tipo de legados para que se encargasen de las dos provincias en que se dividía; este proconsulado *in absentia* sobre Hispania lo fue renovando en períodos de cinco años y lo disfrutó hasta la guerra civil, estableciendo de nuevo, con ello, un precedente extraordinario del futuro *modus operandi* triunviral y augusteo¹⁷⁰.

Por otra parte, contamos con tres epígrafes que mencionan edictos emitidos por *legati Augusti pro praetore* de diversas provincias imperiales. Nos referimos a un

¹⁶⁷ D. Faoro, *Praefectus, procurator, praeses: genesi delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero romano*, Florencia, 2011, pp. 1-40.

¹⁶⁸ Una prueba del uso del título de procónsul por parte del emperador es el Edicto de Augusto hallado en El Bierzo, del 15 a.C.: *Imp(erator) Caesar diui fil(ius) Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) / VIII{I} et proco(n)s(ule) dicit*: F. J. Sanchez-Palencia – J. Mangas, *El Edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, León, 2000; también: G. Alföldy, “Das neue Edikt des Augustus aus El Bierzo in Hispanien”, *ZPE* 131, 2000, pp. 177-205. Ha puesto en duda la autenticidad del documento, sin éxito, P. Le Roux, “L’edictum de Paemeiobrigensibus un document fabriqué?”, en *Le toge et les armes: Rome entre Méditerranée et Océan*, Rennes, 2011, pp. 113-131 (aparecido primero en *MEP* 6, 2001, pp. 331-363).

¹⁶⁹ Dio XXXVI, 23-37; Plut. *Pomp.* 26; Ap. *Mithr.* 94. Cf. De Martino, *Storia...* cit. III, p. 135 y IV p. 720; Rotondi, *Leges publicae...* cit. p. 371, donde hace una reseña exhaustiva de las fuentes que mencionan esta ley.

¹⁷⁰ Ap. *B.C.* II, 18; Dio XXXIX, 54; XL, 56, 2; XL, 59, 2. También el triunviro Lépido, tras el reparto de las provincias occidentales que acordó con M. Antonio y Octaviano en el llamado pacto de Bolonia del 43 a.C. (luego confirmado por la *lex Titia*), permaneció en Roma como cónsul en 42 a.C. y envió legados a Hispania para que la gobernasen en su nombre (Ap. *B.C.* IV, 3-9). Sobre el proceder de los triunviros en el gobierno de las provincias como precedente del principado augusteo: F. Millar, “Triumvirate and Principate”, *JRS* 63, 1973, pp. 50-77; J. M. Roddaz, “*Les triumvirs et les provinces*”, en E. Hermon (dir.), *Pouvoir et Imperium (IIIe av. J.-C. – Ier ap. J.-C.)*, Nápoles, 1996, pp. 77-96.

edicto del *legatus Augusti pro praetore* de Pisidia (de época de Domiciano)¹⁷¹, el interesantísimo edicto *de Pizo condenda* del gobernador de Tracia (del 202)¹⁷² y la llamada *lex riui Hiberiensis*, de época de Adriano¹⁷³. Esta última, hallada en el territorio del antiguo *conuentus Caesaraugustanus* de la Hispania Citerior, menciona el edicto del gobernador de esta provincia a tenor del *uadimonium*, en este caso en el contexto de los posibles pleitos que pudiesen surgir en torno al uso de este canal del río *Hiberus* (el actual Ebro) entre las comunidades de riego interesadas¹⁷⁴. Este edicto, a nuestro juicio, no es otro que el jurisdiccional del gobernador, pues era necesario, como en el caso del edicto del pretor, que las condiciones del *uadimonium* quedasen fijadas desde la entrada en el cargo del gobernador¹⁷⁵.

Así pues, no hay razones para negar que los *legati Augusti pro praetore* tuviesen *ius edicendi*. Tampoco, en nuestra opinión, que éste incluyese la posibilidad de publicar el edicto jurisdiccional; lo contrario llevaría a plantear la existencia de diferentes tipos de *ius edicendi* entre los gobernadores de rango senatorial, idea que no cuenta con ningún apoyo documental. En cambio, tanto el edicto mencionado en la *lex riui Hiberiensis* como el uso que Gayo hace del término *praeses*¹⁷⁶ en su comentario *ad edictum prouinciale*, probarían precisamente que los gobernadores (senatoriales al menos) de las provincias imperiales publicaban un edicto jurisdiccional con validez durante todo su mandato a semejanza de los procónsules. El poder jurisdiccional – aunque delegado por el *princeps*– debía ser pleno para resultar eficaz, lo mismo que su *imperium*. La historiografía, sin embargo, ha caído en ocasiones en una simplificación, no reconociendo los dos niveles discursivos diferentes que se hallan en la condición de los *legati Augusti*: Por un lado, el jurídico (de índole teórica), en el que el *ius edicendi*, como el *imperium*, pertenecen al emperador en tanto que procónsul titular y nominal, con auspicios propios, de sus provincias; por otro, el nivel ejecutivo (práctico), en el que

¹⁷¹ Martini, *Ricerche...* cit. pp. 135-137.

¹⁷² *IGRRP* I, 766.

¹⁷³ F. Beltrán Lloris, “An Irrigation Decree from Roman Spain: The *Lex riui Hiberiensis*”, *JRS* 96, 2006, pp.147-197.

¹⁷⁴ [Si (?) quis (?) ab (?) aliquo (?) p]oenam ex hac lege petet, is a quo poe-/na petita (?) fuerit (?) uadimonium ad eum qui proxumae / [iurisdic]tio[ni] (?) municipi aut coloniae praeerit / [promittat (?) --- pr]oxumae (?) rationis habita ex edicto Mi/[nuci] (?) ---[ani] (?) leg(ati) Aug(usti) clarissimi uiri (III.29-33). Seguimos la lectura de la edición de Beltrán Lloris (cit. *supra*). Se trata del gobernador pues era el único que publicaba un edicto jurisdiccional en la provincial, como ha señalado D. Nörr, “Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis” *ZSS* 125, 2008, pp. 108-188, esp. pp. 109-110. Anexo II: n° 16.

¹⁷⁵ Como el propio Lenel, *EP* cit. demostró.

¹⁷⁶ *Dig.* XXVII, 10, 5 (Gai. 9 *ad ed. prou.*).

estos poderes son ejercidos plenamente por los *legati Augusti pro praetore*¹⁷⁷. En el caso de estos gobernadores, y a diferencia de otros legados¹⁷⁸, el hecho de que reciban sus poderes por delegación no implica que estén limitados a la hora de aplicarlos.

De todas formas, lo cierto es que desde Adriano se evidenció oficialmente que la discrecionalidad de los gobernadores senatoriales –procónsules incluidos– en la composición de su edicto era muy limitada, como resultado de un proceso de ordenación oficiosa llevado a cabo por los sucesivos gobernadores de cada provincia que dejaba poco que agregar al edicto. Asimismo, los *mandata* específicos que el emperador entregaba a cada gobernador –también a los procónsules, de lo que tenemos noticia ya en época de Claudio, aunque no sabemos si por entonces era una práctica generalizada y sistemática¹⁷⁹– condicionarían, sin duda, el contenido del edicto provincial, aunque sin anular cierta iniciativa de los gobernadores.

Conclusiones.

De Cicerón a Gayo, el edicto jurisdiccional que emitían los gobernadores en sus provincias existió con una entidad propia, diferenciado de los edictos jurisdiccionales urbanos, y fue concebido de una manera dinámica, natural en un *corpus* cuyas partes se

¹⁷⁷ Si Plinio el Joven incluyó una parte de los *mandata* del emperador en su edicto provincial (*Ep.* X, 96, 7) es porque tenía capacidad para promulgarlo siendo, como era, *legatus Augusti* (en su caso no *pro praetore*, sino *consulari potestate*).

¹⁷⁸ Los legados de los procónsules, que no podían ejercer el *ius gladii* ni delegar la jurisdicción que habían recibido: *Solent etiam custodiarum cognitionem mandare legatis, scilicet ut praeauditas custodias ad se remittant, ut innocentem ipse liberet. sed hoc genus mandati extraordinarium est: nec enim potest quis gladii potestatem sibi datam vel cuius alterius coercionis ad alium transferre, nec liberandi igitur reos ius, cum accusari apud eum non possint* (Ulp. 1 *de off. procos.* = *Dig* I, 16, 6, pr.).

¹⁷⁹ Según se desprende de *AE* 1974, 629, cuando Corbulón fue procónsul de Asia recibió *entolai/mandata* de Claudio. Sobre la problemática de los *mandata* remitimos a: G. P. Burton, “The Issuing of *mandata* to Proconsuls and a New Inscription from Cos”, *ZPE* 21, 1976, pp. 63-68; F. Millar, “The Emperor, the Senate and the Provinces”, *JRS* 56, 1966, pp. 156-166; *Idem*, *The Emperor in the Roman World*, London, 1977, pp. 313-328 y 643; *The Roman Empire...* cit. p. 55; *Idem*, “State and Subject: The Impact of Monarchy”, en F. Millar – E. Segal (eds.) *Caesar Augustus. Seven Aspects*, Oxford, 1984, pp. 37-60, esp. p. 48, quien entiende que los procónsules recibirían *mandata* desde el 27 a.C., de acuerdo con Dio LIII, 15, 4; V. Marotta, *Mandata principum*, Turín, 1991; W. Eck, “Provincial Administration and Finance”, *CAH*² XI, pp. 266-292, esp. p. 272; C. Ando, “Petition and Response, Order and Obey: Contemporary Models of Roman Government”, en H. D. Baker – M. Jursa – B. Palme – S. Procházka – S. Tost (eds.), *Governing Ancient Empires*, Vienna, 2015, e. p. Por su parte, R. J. A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, pp. 394 y 401-405, señala que aunque no cabe duda de algunos procónsules recibieron *mandata* imperiales desde época de Claudio y de que otros ejecutaron órdenes específicas del emperador desde inicios del Principado, no existen evidencias suficientes para afirmar que recibirían *mandata* regulamente. Para este autor resultaría difícil de encajar en el reparto provincial del 27 a.C. y en la conducta formalista de Augusto tal intromisión del emperador. En cambio, propone que el Senado también los entregara, aunque con la aquiescencia del *princeps*.

fueron conformando mediante el método de agregación de cláusulas, al calor de la actividad administrativa. En este aspecto, se constata, pues, una continuidad en el Alto Imperio de las dinámicas gubernativas en las que se insertaba la actividad de los gobernadores provinciales republicanos. Sin embargo, durante este período – de mediados del siglo I a.C. a mediados del siglo II d.C–, la inercia administrativa, que convirtió muchas de las cláusulas del edicto de cada provincia en traslaticias (al igual que pasó con los de los pretores de Roma) y las exigencias de gobierno a las que tenían que hacer frente los gobernadores hicieron que se fuese produciendo una paulatina ordenación del edicto provincial, efectuada por los sucesivos gobernadores de cada provincia y que conoció su refrendo oficial probablemente en época de Adriano. Esto provocó que la discrecionalidad de los gobernadores en la composición del edicto se fuese reduciendo notablemente, aunque sus efectos reales habrían de revelarse con posterioridad a la época de Gayo. El comentario de éste al edicto provincial, o bien comentaba un edicto concreto –¿el de Asia?–, o bien una abstracción teórica de las partes comunes de todos los edictos provinciales, opción ésta más justificada si pensamos en su utilidad y en el hecho de que también, como se ha visto antes, menciona en él la figura del *praeses* junto a la del procónsul y la del pretor.

Aun así, como en época de Cicerón, en los dos primeros siglos del Principado el edicto provincial y el urbano nunca fueron un único edicto, ni tampoco parece que conociesen una ‘codificación’ que los petrificara. Es más, en propiedad, todo apunta a que debería hablarse de tantos edictos provinciales como provincias había más que de uno solo unitario, pues las realidades particulares de cada provincia, derivadas tanto de la costumbre de sus gentes como de la forma en que se sometieron a Roma y de su diverso grado de romanización hacían imposible, impracticable, que se pudiese formular un edicto provincial único para todas ellas, fuesen del Pueblo Romano o imperiales. Evidentemente, las partes del edicto provincial tomadas del urbano serían iguales para todas las provincias del Imperio, pero siempre existió un apartado de amplitud variable dedicado a cuestiones específicas de cada provincia, que Cicerón denominó como *genus prouinciale*, cuya casuística resultaría inaplicable a las demás. Por ello, la subordinación legal de los *legati Augusti pro praetore* al *princeps* no significa que el edicto, aun admitiendo que fuese obra de este último, fuese igual para todas las provincias gobernadas por aquéllos. Las realidades provinciales obligaron al poder romano a una

constante adaptación y, en el caso del edicto, su naturaleza dúctil proporcionó un vehículo muy fructífero de ordenación y difusión de los modelos y normas jurídicos que el gobernador, como máximo representante del poder imperial en su provincia, llevaba a efecto. Los destinatarios del edicto jurisdiccional del gobernador eran los ciudadanos romanos residentes en la provincia, pero no debemos olvidar que los *peregrini*, aunque fuese en el papel de convidados de piedra, se veían afectados por las antedichas cláusulas específicamente provinciales. Al fin y al cabo, el edicto provincial, como plasmación de un programa jurisdiccional, participaba del propósito esencial del derecho: la ambición de armonizar la convivencia de los habitantes de la provincia.

CAPÍTULO 2: CIRCVMIRE PROVINCIAM: EL SISTEMA CONVENTUAL EN HISPANIA.

Uno de los grandes problemas a los que el Imperio Romano hubo de hacer frente fue el de administrar justicia entre los habitantes de las provincias, al menos la mínima necesaria para mantener el orden interno, partiendo, además, de la desventaja de ser un imperio poco burocratizado¹⁸⁰. Como hemos visto, desde el final del período republicano los gobernadores dedicaban su edicto anual a cuestiones jurisdiccionales, como la determinación de las normas que regían la designación de los jueces, delimitando las competencias de las ciudades y su propia intervención en los procesos de mayor envergadura en función de los diversos estatutos de que gozaban las comunidades de su provincia.

La solución que se halló para proceder a la vista de aquellos asuntos que entraban dentro de la jurisdicción del gobernador –los penales¹⁸¹ y los no criminales de mayor cuantía y aquéllos que implicasen a comunidades en litigios territoriales– fue la implantación de un sistema basado en la agrupación de las comunidades provinciales en circunscripciones dependientes de un centro que actuaba como cabecera administrativa y al que debían dirigirse los habitantes que necesitasen presentar su caso ante la máxima autoridad provincial: lo que se conoce como el sistema de los *conuentus iuridici*, nacido con el fin de facilitar la labor jurisdiccional del gobernador en la provincia. En efecto, una de las acepciones del término latino *conuentus*, según Festo, es *cum a magistratibus iudicii causa populus congregatus*¹⁸², la convocatoria del pueblo hecha por el

¹⁸⁰ P. Garnsey – R. Saller, *The Roman Empire: Economy, Society and Culture*, Londres, 1987, pp. 20-40, aunque estos autores tienden a ser un demasiado reduccionistas en su valoración de la capacidad de gestión y el intervencionismo a nivel local de la administración provincial; R. Haensch, *Capita provinciarum: Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz, 1997, p. 861.

¹⁸¹ También en Oriente los procesos penales eran competencia exclusiva de los gobernadores romanos (a excepción de las *ciuitates liberae*), como muestra el *IV Edicto de Augusto de Cirene*, cf. J. H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors*, Philadelphia, 1989, nº 11, ll. 62-71.

¹⁸² Festo, *De sig. uerb.* 36: *Conuentus quattuor modis intellegitur. Uno, cum quemlibet hominem ab aliquo conuentum esse dicimus. Altero, cum significatur multitudo ex conpluribus generibus hominum contracta in unum locum. Tertio, cum a magistratibus iudicii causa populus congregatu. Quarto cum*

magistrado con el fin de impartir justicia y, por extensión, el área geográfica en que se procedía a ello, cuyos habitantes eran convocados a una ciudad de referencia¹⁸³.

El gobernador realizaba un recorrido periódico, seguramente anual¹⁸⁴, por su provincia, deteniéndose en estas sedes donde se producían los *conuentus*. El sistema conventual no está atestiguado en todas las provincias, pero probablemente estaría implantado de manera generalizada en el imperio¹⁸⁵. En Occidente, lo conocemos bien en las provincias hispanas gracias a Plinio el Viejo y, en época republicana, en Sicilia y la Galia Cisalpina¹⁸⁶, territorios en los que podemos deducir sin temor a equivocarnos que perduraría durante el Alto Imperio, a tenor del ejemplo de Hispania. Un fragmento del *Bellum Alexandrinum* y el testimonio de Suetonio muestran que tanto *Corduba* como *Gades* ya funcionaban como sedes judiciales de la Hispania Ulterior en época de

aliquem in locum frequentia hominum supplicationis aut gratulationis causa conligitur. Véase el tercer significado.

¹⁸³ Este sistema se ensayó ya a finales de la República: D. Magie, *Roman Rule in Asia Minor*, Princeton, 1950, pp. 171-172; A. J. Marshall, "Governors on move", *Phoenix* 20/3, 1966, pp. 231-246; G. P. Burton, "Proconsuls, Assizes and the Administration of Justice under the Empire", *JRS* 65, 1975, pp. 92-106, esp. p. 92. Para referirse a la actividad jurisdiccional se usaba la fórmula *conuentum indicare/agere/edicere*, o *forum agere*: G. D. Merola, *Autonomia locale – governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari, 2001, p. 143; Fournier, *Entre tutelle...* cit. pp. 42-46 (en donde analiza la traducción griega de esta expresión).

¹⁸⁴ Al menos en el caso de los procónsules, que por lo general gobernaban su provincia sólo un año: Burton, "Proconsuls..." cit., pp. 97-99; F. Amarelli, "Il *conuentus* come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano", en Idem (ed.), *Politica e partecipazione nelle città dell'Impero Romano*, Roma, 2005, pp. 1-12, esp. p. 3.

¹⁸⁵ Haensch, *Capita provinciarum* cit. pp. 29-33.

¹⁸⁶ *Conuentus iuridici* en época tardo-republicana en la Bética: B. Alex. 48, 1: *Cassius, legionibus in hiberna dispositis, ad ius dicendum Cordubam se recepit...*; Suet. *Diu. Iul.* 7, 1: *...cum mandatu praetoris iure dicundo conuentus circumiret...*; véase la vinculación esencial entre la función jurisdiccional y la red conventual. Sicilia: Verrinas, *Orat. Sec.* (véase, por ejemplo, Cic. 2 *Verr.* V, 28); también Liv. XXXI, 29; Galia Cisalpina: Caes. *B.G.* I, 54, 2-3; V, 1, 5 y 2, 1; VI, 443; VII, 1, 1 y VIII, 46, 5; Suet. *Diu. Iul.* 30, 1 y 56, 5. Del pasaje liviano –que dice: *et Messanam et Syracusas et totam Siciliam ipsi habent uectigalemque prouinciam securibus et fascibus subiecerunt. Scilicet sicut uos Naupacti legibus uestris per magistratus a uobis creatos concilium habetis, socium hostemque libere quem uelitis lecturi, pacem ac bellum arbitrio habituri uestro, sic Siculorum ciuitatibus Syracusas aut Messanam aut Lilybaeum indicitur concilium. Praetor Romanus conuentus agit: eo imperio euocati conueniunt, excelso in suggestu superba iura reddentem, stipatum lictoribus uident, uirgae tergo, secures ceruicibus imminet; et quotannis alium atque alium dominum sortiuntur*– M^a. D. Dopico, "Los *conuentus iuridici*: Origen, cronología y naturaleza histórica", *Gerión* 4, 1986, pp. 265-283, esp. p. 275, ha deducido que en Sicilia en época republicana no existían sedes fijas para la realización de estos *conuentus*, interpretando que Livio indicaba que el gobernador elegía entre las tres ciudades mencionadas. En nuestra opinión, este pasaje, por el contrario, no hace sino confirmar la existencia de sedes estables, aunque, como señaló Burton, el sistema aún no estaría plenamente desarrollado y el itinerario podría sufrir ciertas variaciones. Para el sistema conventual en Hispania durante el Alto Imperio: Plin. *N.H.* III, 7-28; Suet. *Galba* 9; como ejemplo del registro epigráfico que menciona a los *conuentus* de la provincia de Hispania Citerior: *RIT* 24-27; *AE* 2001, 1257.

César y sugieren la existencia de un sistema conventual en esta provincia¹⁸⁷, aunque probablemente su articulación definitiva estuviese todavía en vías de desarrollo. Asimismo, Nicolás Damasceno nos informa de que en el 45 a.C. el propio Julio César, regresando del sur de la península tras haber vencido a los restos de la resistencia pompeyana, se detuvo en *Carthago Noua* para administrar justicia, claro indicio de que por entonces también funcionaba como sede judicial¹⁸⁸. Ya en el Principado, gracias a varias inscripciones conservadas en *Lucus Augusti* y *Bracara Augusta* sabemos que Paulo Fabio Máximo, mientras gobernó la Hispania Citerior (4-1 a.C.), visitó ambas ciudades, lo que revela que ya por entonces funcionaban como sedes conventuales y que los gobernadores realizaban un recorrido por la provincia¹⁸⁹. Además, Estrabón señala que, en época de Augusto y Tiberio, el gobernador de la Hispania Citerior pasaba el invierno entre *Tarraco* y *Carthago Noua*, donde el clima era más benigno, y dedicaba el verano a recorrer el resto de la provincia para atender a los problemas que hubiesen surgido, sin duda siguiendo el itinerario conventual¹⁹⁰. En cuanto a la Lusitania, dado que sus tres sedes conventuales conocidas –*Augusta Emerita*, *Pax Iulia* y *Scallabis*– o son fundaciones augusteas (como *Emerita*) o fueron promocionadas al estatuto colonial tras el 31 a.C. por Octaviano/Augusto¹⁹¹, todo apunta, de nuevo, hacia una implantación de los *conuentus* en esa época.

Así, contrariamente a la teoría que postulaba que el sistema conventual en las provincias hispanas era una creación flavia¹⁹², se observa que en época augustea ya estaba establecido en las tres provincias hispanas y hay indicios muy elocuentes de que en la Bética, y probablemente al menos en la parte costera de la Hispania Citerior, ese

¹⁸⁷ Suet. *Diu. Iul.* 7, 1: Siendo César cuestor en la Hispania Ulterior en 68 d.C., el pretor que gobernaba la provincia delegó en él la jurisdicción de determinados asuntos (todos de carácter no criminal, por razones que veremos más adelante) para que recorriese la provincia en su lugar con el fin de administrar justicia. Una de las ciudades que César visitó fue *Gades*, futura sede conventual en el Alto Imperio. Sobre la función de *Corduba* como *caput prouvinciae*, centro de atracción de las élites locales y su desarrollo urbano en época cesariana ver: S. Panzram, *Stadtbild und Elite: Tarraco, Corduba und Augusta Emerita zwischen Republik und Spätantike*, Stuttgart, 2002, pp. 138-145.

¹⁸⁸ Nic. Dam. *Vit. Aug.* 12. *Carthago Noua* habría alcanzado el estatuto de colonia romana en 54 a.C. y por obra de Pompeyo, cf. J. M. Abascal, “Los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con la promoción jurídica de ciudades”, *Iberia* 9, 2006, pp. 63-78, esp. p.67.

¹⁸⁹ *IRPLu* 19-21; *ILER*, 1028; *Fasti Hispanienses* p. 9. Anexo II: n° 9 y 13-15.

¹⁹⁰ Strab. III, 4, 20.

¹⁹¹ D. Osland, *The Early Roman Cities of Lusitania*, Oxford, 2006, pp. 26-27 (*Scallabis*), 41 (*Pax Iulia*) y 45 (*Emerita*); J. de Alarcão, “*Scallabis e o seu território*”, en *De Scallabis a Santarém*, Lisboa, 2002, pp. 37-46, esp. p. 37-42; e *Idem*, *L’Antiquité romaine au Portugal*, París, 2008, p. 82.

¹⁹² A. Tranoy, *La Galice romaine*, París, 1981, pp. 150-153; Alarcão, *L’Antiquité...* cit. p. 71-72. Por su parte, E. Albertini, *Les divisions administratives de l’Espagne romaine*, París, 1923, pp. 49-53, sostenía que los *conuentus* habrían sido implantados en época de Claudio.

sistema existió ya a finales de la República, produciéndose una continuidad del mismo en el Principado. Augusto, por tanto, no creó el sistema conventual, sino que, tras consumir la conquista de toda la península, lo perfeccionó y extendió a toda ella siguiendo el *modus operandi* habitual en la constitución de una provincia¹⁹³.

También parece clara la existencia del sistema conventual en el África Proconsular durante el Alto Imperio gracias a los testimonios de Apuleyo y Tertuliano. Tal y como nos transmite en su *Apologia*, Apuleyo, acusado de practicar la magia, fue juzgado por el procónsul Claudio Máximo en la ciudad de *Sabratha*. Por entonces, Apuleyo residía en Oea, ciudad de su esposa, y la capital provincial era Cartago¹⁹⁴, de lo que se deduce que Oea, en época antonina, pertenecería al *conuentus* de *Sabratha*¹⁹⁵. Por otra parte, en la *Florida* Apuleyo se felicita porque la ausencia de Cartago del procónsul Severiano¹⁹⁶, amigo suyo, debida a la obligación que tenía de recorrer la provincia, se había visto atenuada por la grata presencia de su hijo, utilizando la misma expresión de la que se vale Plinio el Joven para referirse al *tour* por las sedes conventuales de Bitinia-Ponto: *prouinciam circumire*¹⁹⁷. Por su parte, Tertuliano nos transmite la existencia de un *conuentus* con sede en Útica, cuando, para atacar en un discurso al procónsul Escápula, perseguidor de los cristianos, interpretó un eclipse de sol que se había producido mientras se hallaba en esa ciudad como una señal funesta (*portentum*) que condenaba su actuación¹⁹⁸. C. Lepelley ha propuesto, además, otras

¹⁹³ Sitúan en época augustea el establecimiento del sistema conventual para toda Hispania: L. Sancho Rocher, *El convento jurídico caesaraugustano*, Zaragoza, 1981, p. 32; P. Le Roux, “La question des conventus dans la péninsule Ibérique d’époque romaine”, en C. Auliard – L. Bodiou (eds.), *Au jardin des Hespérides: Histoire, société et épigraphie des mondes anciens. Mélanges A. Tranoy*, Rennes, 2004, pp. 337-356, esp. p. 348, atribuye explícitamente la creación de los *conuentus* judiciales a Augusto, a pesar de que antes reconoce que el ejercicio itinerante de la justicia está atestiguado desde César en la Península Ibérica, así como en Cilicia, Chipre o Sicilia a través del testimonio de Cicerón (p. 338). En nuestra opinión, al menos en el siglo I a.C. la itinerancia del gobernador por su provincia para, en primer lugar, impartir justicia, no puede desligarse de la existencia de una red conventual, aunque su consolidación se produzca en época augustea.

¹⁹⁴ Apul. *Apol.* I, 1-3 (mención del procónsul) y 59, 3 (mención de *Sabratha*). Claudio Máximo gobernó África en 158/159: R. Syme, “Proconsuls d’Afrique sous Antonin le Pieux”, *Roman Papers* I, Oxford, 1979, pp. 461-469, esp. p. 467 (= *Revue des Etudes Anciennes* 61, 1959, pp. 310-319); G. Alföldy, *Konsulat und Senatorenstand unter der Antoninen*, Bonn, 1977, p. 208.

¹⁹⁵ Que sería el centro judicial de la Tripolitania, como ya sostuvo Burton, “Proconsuls...” cit., p. 96.

¹⁹⁶ Sexto Coceyo Severiano Honorino, que gobernó la provincia en 162/163 d.C.: Syme, “Proconsuls d’Afrique...”, cit., p. 468; Alföldy, *Konsulat...* cit., p. 209.

¹⁹⁷ Apul. *Flor.* IX, 37; Plin. *Ep.* X, 33, 1.

¹⁹⁸ Tert. *Ad Scapulam* 3. Publio Julio Escápula Tértulo Prisco fue procónsul de África en 212/213, Thomasson, *Fasti Africani*, n°113, p. 83. Su estancia en Útica tuvo lugar el 14 de agosto del 212. Cf. Burton, “Proconsuls...” cit., p. 96; C. Lepelley, “Les sièges des *conventus* judiciaires de l’Afrique Proconsulaire”, en *Aspects de l’Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme*, Bari, 2001, pp. 55-68, esp. p. 62, ha explicado convincentemente la designación de Útica como sede conventual, a pesar

sedes conventuales para el África Proconsular altoimperial, como *Thysdrus* y *Hadrumetum*¹⁹⁹.

Las ciudades que gozaban del estatuto de sedes conventuales no parecen haber sido siempre las mismas en cada provincia durante el Principado, aunque todo apunta a que habría cierta estabilidad. En Asia se han documentado algunas pérdidas de esta condición de sede de *conuentus* (*dioikesis* en griego) por parte de alguna ciudad y la consiguiente promoción de otra –cuestión que sólo podía ser decidida por el emperador²⁰⁰. Asimismo, a consecuencia de una discutida expresión de Dión Crisóstomo existe un debate en torno a si en esta provincia existirían dos itinerarios que funcionarían en años alternos, siendo bianuales las visitas de los gobernadores a las sedes conventuales²⁰¹. Las palabras de Dión, por desgracia, son ambiguas, y resulta imposible decantarse por una u otra interpretación. Sin embargo, a nuestro parecer, aceptar la teoría de un doble circuito conventual implicaría complicar el sistema en sí

de su cercanía a Cartago, como una medida adoptada por Augusto con el fin de paliar su pérdida de la capitalidad (que había desempeñado desde la creación de la provincia en 146 a.C.) en favor de Cartago, colonia cesariano-augustea, en 29 a.C.

¹⁹⁹ Lepelley, “Les sièges...” cit., pp. 62-63. Por su parte, Haensch, *Capita provinciarum*, cit., pp. 81-91, ha propuesto otras ciudades como posibles sedes conventuales: *Lepcis Magna*, *Theveste*, *Cirta*, *Sicca Veneria*, *Hippo Regius* (donde residía uno de los legados del procónsul desde finales del siglo II), *Ammaedara* (primer cuartel general de la legión III Augusta durante el Alto Imperio, bajo el mando del procónsul hasta el 39 d.C.). Ha sido seguido por F. Hurlet, “Le proconsul d’Afrique d’Auguste à Dioclétien”, *Pallas* 68, 2005, pp. 145-167, esp. pp. 157-158, quien, sin embargo, admite que son puras conjeturas, dada la falta de testimonios que corroboren que esas ciudades funcionaron como sedes conventuales.

²⁰⁰ C. Habicht, “New Evidence on the Province of Asia”, *JRS* 65, 1975, pp. 64-91, dio noticia de una inscripción en la que se mencionaban trece diócesis en Asia. Véase también Merola, *Autonomia locale...* cit., p. 145 ss. Sobre el monopolio del emperador en la concesión o privación de la condición de sede conventual: Lepelley, “Les sièges...” cit., p. 55, que menciona un rescripto de Antonino Pío de Cirene (AE 1979, 636), siguiendo al edición de J. M. Reynolds, “Hadrian, Antoninus Pius and the Cyrenaican cities”, *JRS* 68, 1978, pp. 111-121, esp. pp. 114-115. Recientemente, Fournier, *Entre tutelle...* cit., pp. 79-85, ha observado una cierta estabilidad en ese número de sedes conventuales de Asia (entre 10 y 13) y la perduración de las mismas ciudades como tales, sin cambios, entre los siglos I a.C. y I d.C. Los cambios se darían a partir del siglo II d.C.

²⁰¹ El pasaje es Dio Chrys. XXXV, 15 y 17. A favor de la interpretación de la expresión de Dión como “en años alternos”: W. M. Ramsay, *Cities and Bishoprics of Phrygia*, Oxford, 1897; A.H.M. Jones, *Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford, 1971, pp. 67-68; Haensch, *Capita provinciarum* cit., pp. 310 y 749; E. Meyer-Zwiffelhofer, *Politikos archein. Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen*, Stuttgart, 2002, p. 232, n. 42; Fournier, *Entre tutelle...* cit., pp. 60-61. A favor de un recorrido anual único: Burton, “Proconsuls...” cit., pp. 98-99; A. Heller, “*Les bêtises des Grecs*”. *Conflits et rivalités entre cités d’Asie et de Bithynie à l’époque romaine (129 a.C.-235 p.C.)*, Burdeos, 2006, p. 138. Añadamos que, en su edición crítica de este discurso, C. Bost-Puderon, *Dion de Pruse, Oeuvres: Orations XXXIII-XXXVI*, Les Belles Lettres, París, 2011, pp. 97-98, traduce la expresión dionea como ‘cada año’ (‘chaque année’). Por su parte, J. W. Cohoon – H. Lamar Crosby, *Dio Chrysostom III: Discourses XXXI-XXXVI*, Loeb, Cambridge-Massachusetts-London, 1979, pp. 404-407, contradictoriamente, traducen la expresión como ‘every year’ en 35.15. y como ‘alternate years’ en 35.17, claramente influenciados por Ramsay, al que citan a pie de página (nt. 1). No existe, pues, una solución definitiva a este problema de interpretación.

mismo sin verdaderos motivos prácticos. Se ha aducido que, así, las sedes conventuales no tendrían que realizar grandes gastos con motivo de la visita del procónsul todos los años; empero, la contrapartida era grande: disminuir a la mitad las oportunidades que una ciudad tenía de acceso al procónsul y al máximo tribunal de la provincia. Además, un testimonio de Elio Arístides parece reflejar la existencia de un solo itinerario que se repetiría todos los años: Si aceptamos, como parece, que en su Segundo discurso de Esmirna se está dirigiendo al procónsul y no al emperador²⁰², el hecho de que diga que “se podría considerar como un buen augurio que tú llegues al mando de nuestras ciudades y que tu itinerario se haya desarrollado de tal manera que hayas renovado perfectamente el mandato de tu padre por sus estancias en Esmirna”²⁰³ indicaría que los procónsules iban todos los años a las mismas ciudades. Recientemente, A. Dalla Rosa ha propuesto una nueva explicación a este problema, más verosímil que la de ‘doble circuito’: que el procónsul de Asia pudiese ‘reagrupar’ los numerosos *conuentus* de la provincia, concentrando varios de ellos en uno en función de las necesidades de cada año²⁰⁴.

Más adelante veremos esta problemática en el caso concreto de la Hispania Citerior, pero, dejando esto al margen, lo cierto es que el recorrido por las sedes judiciales de la provincia era conocido por los habitantes de la misma –al ser publicitado en el edicto anual del gobernador– y gracias a ello Cipriano logró ser martirizado donde quería, en Cartago, ciudad en la que era obispo, escondiéndose mientras el procónsul de África estaba en Útica, y reapareciendo en la capital cuando ya había regresado a ella este último²⁰⁵.

En las provincias hispanas, la relación de *conuentus* dada por Plinio el Viejo – que utilizó la información contenida en la *formula prouinciae* compuesta en época de

²⁰² Sostiene esto C. A. Behr, *Aelius Aristides and the Sacred Tales*, Amsterdam, 1968, pp. 91-92, que sigue a E. Rohde, “Die asianische Rhetorik und die zweite Sophistik”, *Rheinische Museum* 41, 1886, pp. 170-190, y U. Wilamowitz, “Der Rhetor Aristides”, *Sitzungsberichte der preussischen Akad. Der Wissenschaften* 28, 1925, p. 352.

²⁰³ Ael. Arist. *Sec. Orat. Smirn.* 46.

²⁰⁴ A. Dalla Rosa, “Praktische Lösungen für praktische Probleme: Die Gruppierung von *conuentus* in der Provinz Asia und die Bewegungen des Prokonsuls C. Iulius Severus (*procos.* 152/53)”, *ZPE* 183, 2012, pp. 259-276, quien toma como paradigma lo que hizo Cicerón en Cilicia y, en época imperial, se centra en el recorrido realizado por el procónsul de Asia Cayo Julio Severo. La pregunta es si la decisión ciceroniana de ‘reagrupar’ *conuentus* es extrapolable a otras provincias como una práctica habitual o se debe a las necesidades prácticas derivadas de la especial situación de Cilicia como provincia de un frente de guerra en su momento. El autor es prudente y sólo la aplica a Asia, que por lo demás es la provincia con mejores fuentes sobre el itinerario conventual de su gobernador.

²⁰⁵ Ciprian. *Ep.* LXXXI, 1, 1-3. Cipriano será ejecutado en 258 d.C.

Augusto²⁰⁶, con ciertas actualizaciones– se ve confirmada parcialmente por el registro epigráfico en la Citerior. De todas formas, esa *formula prouvinciae* augustea se habría elaborado tras la definitiva reorganización de las provincias hispanas decidida en el curso del viaje que Augusto realizó por la Galia e Hispania en los años 16-13 a.C. Antes de esta fecha, además de ser la Ulterior una única provincia todavía, el Noroeste peninsular, aún bajo los efectos de las guerras que lo habían sometido al control directo de Roma, también había conocido una organización diferente. En su famosa descripción de la reorganización administrativa del Imperio acaecida en el 27 a.C. –en el que se produjo el consiguiente reparto de la administración de las provincias entre el *princeps* y el Senado– Dión Casio presenta la Península Ibérica dividida en las tres provincias que la caracterizarán durante todo el Alto Imperio: la Ulterior Bética, la Ulterior Lusitania y la Citerior²⁰⁷. Sin embargo, una importante inscripción recientemente hallada ha revelado que –como ya intuía R. Syme²⁰⁸– la transición de las dos provincias existentes en Hispania durante la República a las tres antedichas altoimperiales fue un proceso más complejo que lo que se deducía del testimonio dioneo.

Nos referimos al llamado Edicto de Augusto del Bierzo (León), que ha dado a conocer la existencia, en el 15 a.C., de una *Transduriana prouincia* que englobaría las poblaciones y territorios del Noroeste peninsular sometidos tras las Guerras Astur-Cántabras (26-19 a.C.). P. López Barja ha propuesto una nueva evolución de la organización provincial de Hispania, situando la ‘vida’ de la provincia Transduriana desde el 22 a.C. hasta una fecha situada entre el 15-13 a.C., momento en el que el *princeps* estuvo presente en la península²⁰⁹. Una vez decidida la pertinencia de su creación, la tarea de organizar la provincia Transduriana habría recaído, siguiendo a este autor, en el *legatus Augusti pro praetore* Lucio Sestio Quirinal (*cos.* 23 a.C. y

²⁰⁶ En 12 a.C y gracias a la labor de Agripa: B. Galsterer-Kröll, “Zu den spanischen Städtelisten des Plinius”, *AEspA* 48, 1975, pp. 120-128, esp. p. 121; J.M. Roddaz, *Marcus Agrippa*, Roma, 1984, pp. 573-591; Abascal, “Los tres viajes...” cit. p. 71.

²⁰⁷ Dio Cass. LIII, 12, 5.

²⁰⁸ R. Syme, “The Conquest of North-West Spain”, *Roman Papers* II, Oxford, 1979, pp. 824-854, esp. p. 828, que muestra su disconformidad con Albertini, *Les divisions administratives...* cit. quien aceptaba al pie de la letra la noticia dada por Dión Casio.

²⁰⁹ P. López Barja, “La provincia Transduriana”, en Sánchez-Palencia – Mangas, *El edicto del Bierzo...* cit. pp. 31-45. La cronología de las provincias hispanas que ha propuesto (p. 38) es: 1) 39-28 a.C.: Hispania, provincia única gobernada por legados de Octaviano; 2) 27 a.C.: Restablecimiento de la vieja división en dos provincias, Ulterior y Citerior; 3) 22-19 a. C: Creación de la Transduriana, separada de la Ulterior; 4) 15-13 a. C.: División de la Ulterior en Lusitania y Bética, pasando esta última al control senatorial. La Transduriana desaparece y se integra probablemente en la Ulterior; 5) 7-3/2 a. C: *Gallaecia et Asturia* se integran en la Citerior y los límites de la Bética se modifican.

gobernador de esta provincia en 22-19 a.C.²¹⁰), dado su rango consular, quien habría afrontado la tarea de fijar los límites entre las comunidades y las obligaciones de cada una, información toda ella que sería recogida en la *formula* de la nueva provincia, tal y como dejan traslucir las propias palabras de Augusto en el edicto del Bierzo, cuando, al referirse a la concesión de inmunidad a los *castellani Paemeiobrigenses*, señala que mantuviesen las tierras y límites que poseían cuando Quirinal había gobernado la provincia²¹¹.

La provincia Transduriana fue creada, pues, no como un mero distrito militar, sino como una verdadera provincia territorial²¹², poco después de que la derrota definitiva de los astures en 22 a.C. hubiese confirmado el fin de la guerra en el Noroeste que Augusto se había precipitado en dar por hecho ya en 25 a.C.²¹³. El posterior levantamiento de los cántabros –que, a pesar de haber sido vendidos como esclavos, habían logrado reagruparse con gran rapidez²¹⁴– fue suficientemente vigoroso como para suponer un riesgo serio para la estabilidad de la zona y requerir la intervención del segundo hombre del imperio. Aplastada la rebelión, Agripa vio la necesidad de reorganizar de otra manera estos territorios, incluyéndolos en una provincia con más recursos humanos. A nuestro juicio, frente a la opinión tradicional que sostenía una inclusión de *Asturia* y *Callaecia* en la Lusitania previa a su definitiva integración en la Hispania Citerior²¹⁵, estos territorios, junto con el área cántabra, pasaron a formar parte de la Citerior directamente una vez que Agripa decidió eliminar la Transduriana.

²¹⁰ *Fasti Hispanienses* p. 133, aunque, al no haberse descubierto por entonces el Edicto del Bierzo, el autor lo situó como gobernador de Lusitania.

²¹¹ *Itaque eos uniuersos im/munitate perpetua dono quosq(ue) agros et quibus finibus possede/runt Lucio Sestio Quirinale leg(ato) / meo eam provinciam optinente{m} / eos agros sine controuersia possi/dere iubeo* (Il.10-14). Anexo II: n° 37.

²¹² P. López Barja, “La reorganización de la Hispania Citerior bajo Augusto” e.p.

²¹³ Dio LIV, 5, 1-3. Que Augusto dio por terminada la guerra en 25 a.C. se deduce de que la octava salutación imperial de Augusto se corresponde con la campaña del 25 a.C., que tras el 19 a.C. no recibiese ninguna salutación y que Agripa declinase celebrar el triunfo que merecía para no desdecir la propaganda oficial del *princeps*. Cf. T. D. Barnes, “The Victories of Augustus”, *JRS* 64, 1974, pp. 21-26. Roddaz, *Marcus Agrippa*, cit., p. 409, agrega que la idea de que Hispania había sido definitivamente pacificada viene confirmada por la representación de la Península como una “gracieuse captive” en el trofeo de Saint-Bertrand de Comminges. Sobre la Transduriana como provincia territorial y no meramente militar: López Barja, “La provincia...”, cit., pp. 35-38.

²¹⁴ Dio LIV, 11, 2-6.

²¹⁵ Tranoy, *La Galice...* cit. p. 146; Roddaz, *Marcus Agrippa*, cit. pp. 402-412; L. A. Curchin, *Roman Spain: Conquest and Assimilation*, Londres-Nueva York, 1991, p. 53; D. Plácido, *Las provincias hispanas durante el Alto Imperio*, Madrid, 2008, p. 25 y 28. Por su parte, G. Alföldy, “Il nuovo editto di Augusto da El Bierzo in Spagna”, *Minima Epigraphica et Papyrologica* 6, 2001, pp. 365-418, esp. pp. 377-378 (= *ZPE* 131, 2000, pp. 177-205) hace depender a la Transduriana de la Hispania Ulterior hasta el 13 a.C., convirtiendo a Quirinal en legado de esta última.

La teoría de la breve pertenencia de estos territorios a la Lusitania se sostiene sobre dos testimonios –uno de Estrabón, otro de Plinio el Viejo– que han sido objeto de una sobreinterpretación²¹⁶. En primer lugar, la mención que hace Estrabón de que los indígenas que vivían al norte del Duero eran llamados antes lusitanos y en su tiempo galaicos (τὴν πέραν τοῦ Δουρίου πᾶσαν ἐπὶ τὰς ἄρκτους, ἣν οἱ μὲν πρότερον Λυσιτανούς ἔλεγον, οἱ δὲ νῦν Καλλαϊκούς καλοῦσι)²¹⁷ no parece que deba interpretarse en el sentido de su pertenencia a una provincia u otra; de ser así, su nombre se habría derivado del de la provincia Citerior. Estrabón quiere decir otra cosa: al señalar que antes eran llamados lusitanos, está haciendo referencia a una época anterior, el siglo II a.C., cuando Roma tuvo su primer contacto con los galaicos en el contexto de las guerras que mantenía con los lusitanos²¹⁸. Entonces se usaría la denominación de lusitanos también para referirse a los galaicos, algo habitual en el proceder romano²¹⁹. En segundo lugar, el modo en que Plinio el Viejo se refiere a las medidas que tomó Agripa de la longitud del extremo occidental de la península (que luego se emplearon en el *Orbis pictus* de la *porticus Vipsania*²²⁰), mencionando que eran las de *Lusitania cum Asturia et Callaecia*, ha sido tomado como indicio de que ambos territorios formaban parte de esta provincia²²¹. Sin embargo, Plinio no está hablando de la organización administrativa, sino de la geografía (dentro de las medidas generales de la península). Además, la propia expresión *cum Asturia et Callaecia* prueba que estos dos territorios, ya en época de Agripa, formaban parte de la Citerior; si no, se habría referido sin más a la Lusitania de entonces. A ello hay que sumar que no existen razones político-administrativas evidentes que expliquen el cambio de estos territorios de una provincia a otra.

²¹⁶ Así lo ve también J. M. Roddaz, “Le Douro: Ligne de frontière ou lieu de contact”, en M. Navarro Caballero – J. J. Palao Vicente (eds.), *Villes et territoires dans le bassin du Douro à l’époque romaine*, Burdeos-París, 2007, pp. 15-25, esp. p. 22.

²¹⁷ Strab. III, 4, 20.

²¹⁸ En 137 a.C., Décimo Junio Bruto, procónsul de la Hispania Ulterior, fue el primero en entrar en territorio galaico y vencer a este pueblo, por lo que se le concedió el triunfo y el sobrenombre de *Gallaicus*: Liv. *Per.* 55. Cf. Tranoy, *La Galice...* cit., p. 127.

²¹⁹ El propio nombre de galaicos designa al conjunto de muchos otros pueblos. Prevaleció este nombre dado que fue el primer pueblo de relevancia que encontró D. Junio Bruto en su campaña en el Noroeste.

²²⁰ C. Nicolet, *L’inventaire du monde: Géographie et politique aux origines de l’Empire romain*, Paris, 1988.

²²¹ Plin. *N.H.* IV, 118. Los últimos que han defendido esto: C. Fernández Ochoa – A. Morillo Cerdán, “El Convento Araugustano y las Aras Sestianas: reflexiones sobre la primera organización administrativa del noroeste hispano”, *Latomus* 61/4, 2002, pp. 889-910, esp. p. 900; J. Velaza, “La provincia *Transduriana* et l’organisation augustéenne des Hispanies”, en I. Piso (ed.), *Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung*, Cluj-Napoca, 2008, pp. 107-121, esp. p. 110.

Así pues, todo conduce a simplificar la cronología de la organización de los territorios peninsulares, circunscribiendo la reorganización definitiva de Hispania al 15-13 a.C., sin cambios ulteriores: la Transduriana habría sido integrada en la Citerior y la Ulterior se habría dividido en dos, la Lusitania y la Bética, pasando a ser provincia proconsular esta última²²². Esa reorganización se debería a Agripa, quien, además, hizo descender de las montañas a los pueblos del norte, reordenó los repartos territoriales entre sus poblaciones y reforzó el papel de los campamentos como centros de control del área ‘transduriana’, modificando, con ello, la obra de Quirinal.

El Edicto del Bierzo también ha arrojado luz sobre una noticia recogida en varias fuentes literarias. Plinio el Viejo, Pomponio Mela y Ptolomeo nos informan de la existencia de unas aras ‘sestianas’ o ‘de Sestio’ que estarían situadas en una península del litoral astur, cerca del *oppidum* de Noega, según Mela, o donde vivían los *Neri* (Ptolomeo) o éstos últimos y los *Supertamarici* (Plinio)²²³. Ese apelativo de ‘sestianas’ ha inducido razonablemente a atribuir su erección a Lucio Sestio Quirinal²²⁴, y, por tanto, ello formaría parte de su labor en la organización de la Transduriana. No cabe duda de que el lugar donde se hallaban las *Arae Sestianae* se convirtió en un centro de referencia para las poblaciones del Noroeste peninsular, creado por Quirinal para afianzar la lealtad de las élites indígenas de la nueva provincia al poder romano, al igual que haría Druso con la dedicación de un altar a *Roma et Augusto* en *Lugdunum*, en la confluencia de los ríos Ródano y Saona, y de otra ara en el *oppidum Vbiorum*, en el emplazamiento de la actual Colonia, probablemente en una isla del Rin. En torno a estos altares se crearon sendos santuarios y se constituyó un sacerdocio que debían desempeñar, anualmente y por elección conciliar, los miembros de las élites locales: en *Lugdunum* las pertenecientes a las *Tres Galliae* (la antigua *Gallia Comata*) –es decir,

²²² A favor de la inclusión directa de la Transduriana en la Citerior sin pertenecer previamente a la Lusitania: Roddaz, “Le Douro...” cit. pp. 21-22 y 24; López Barja, “La reorganización...”, cit. después de haber expresado ya sus dudas sobre la teoría tradicional en “La provincia Transduriana”, cit. pp. 36-38. Ya habían mostrado sus dudas sobre la pertenencia del Noroeste a la Ulterior F. Costabile – O. Licandro, *Tessera Paemeiobrigensis: un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana Provincia e l'imperium proconsolare del princeps*, Roma, 2000, p. 59, nt. 79.

²²³ Plin. *N.H.* IV, 111: *Neri et Supertamar(i)ci, quorum in paeninsula tres arae Sestianae Augusto dicatae*; Mela, 3.13: *In Astyrum litore Noega est oppidum, et tres arae quas Sestianas uocant in paeninsula sedent et sunt Augusti nomine sacrae inlustrantque terras ante ignobiles*; Ptol. II, 6, 3.

²²⁴ Desde E. Hübner, s.v. “*Arae Sestianae*”, *RE* II, 1, 1895, col. 340-345. Véase también: Syme, “The Conquest...”, cit., p. 829, quien ya data su gobierno en 22-19 a. C, aunque en la Lusitania (dado que por entonces se desconocía la existencia de la Transduriana), seguido por Alföldy, *vide supra*.

las provincias de la Galia Lugdunense, la Bélgica y la Aquitania– y en el *Oppidum Vbiorum* las de Germania. La decisión de Quirinal de erigir estas aras –probablemente tres y ligadas a los tres *conuentus* conocidos del Noroeste– es muy coherente con el propio proceso de creación de la nueva provincia Transduriana.

Las tres sedes conventuales conocidas del Noroeste –*Bracara Augusta*, *Lucus Augusti* y *Asturica Augusta*– son, como su nombre indica, fundaciones augusteas, y habrían tenido lugar poco después de la conquista del Noroeste, sin duda paralelamente a la constitución de la provincia Transduriana. En la elección de los centros territoriales de referencia para la administración solía tener gran relevancia, además de su situación estratégica, la presencia cercana de legiones. Sabemos que en *Asturica Augusta* estuvo el campamento de la *legio X Gemina* durante las guerras Astur-Cántabras²²⁵, y no se puede descartar que hubiese importantes destacamentos militares en *Lucus* y *Bracara*. De hecho, un indicativo de la presencia militar en *Lucus* sería el descubrimiento de cospeles con los que se acuñó la moneda de la *caetra*, probablemente bajo la supervisión del *legatus Augusti pro praetore* C. Antistio²²⁶. Así, los *conuentus* se comenzarían a realizar en las inmediaciones de los campamentos, para poco después dar lugar a la creación de una verdadera ciudad en esos lugares.

Cuenta Floro que, una vez finalizada la guerra (19 a.C.), Augusto obligó a los vencidos a bajar de las montañas en las que se habían hecho fuertes y a residir en el

²²⁵ Tranoy, *La Galice...* cit. p. 192; J. Mangas, “Dioses y cultos en *Asturica Augusta* antes de su cristianización”, en *Actas del Primer Congreso Internacional Astorga Romana*, Astorga, 1986, pp. 55-58; V. García Marcos – J. Vidal, “*Asturica Augusta* y *Castra legionis VII Geminae* en la antigua Asturia cismontana”, en *Astures. Pueblos y culturas en la frontera del Imperio Romano*, Gijón, 1995, pp. 222 ss.; Haensch, *Capita provinciarum*, cit., p. 169; A. Morillo Cerdán, “Los campamentos romanos de Astorga y León”, en Navarro – Palao, *Villes et territoires...* cit. pp. 59-90, esp. pp. 62-68, ha confirmado tanto el origen campamental de *Asturica* como el establecimiento en ella de esta legión. Sin embargo, este autor niega que el campamento fuese anterior al 15/10 a.C (es decir, que se crease durante las Guerras Cántabras) y refuta el testimonio de Floro, argumentando que los restos materiales más antiguos de los hallados han sido fechados en esos años. También es de esta opinión M^a L. González Fernández, “Origen militar y desarrollo urbano de *Asturica Augusta*”, en J. Beltrán Fortes – O. Rodríguez Gutiérrez (eds.) *Hispaniae urbes: Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas*, Sevilla, 2012, pp. 257-294, esp. pp. 260-262. En nuestra opinión, los restos materiales marcan un *terminus* mínimo en la datación del campamento de *Asturica*, pero no son suficientemente definitivos como para anular la validez de la noticia dada por Floro y Dión Casio.

²²⁶ S. Ferrer Sierra, “El posible origen campamental de *Lucus Augusti* a la luz de las monedas de la *caetra* y su problemática”, en *Lucus Augusti I. El amanecer de una ciudad*, A Coruña, 1996, pp. 425-446; A. M^a. Suárez Piñeiro, “O desenvolvemente territorial dunha cidade con 2000 anos de historia: *Lucus Augusti*”, *Boletín do Museo Provincial de Lugo* 13, 2006-2008, pp. 311-323, esp. p. 312.

llano, donde se hallaban los campamentos de sus legiones²²⁷. El registro arqueológico ha confirmado el origen campamental de *Asturica*, sede de la *legio X Gemina*, y resulta muy congruente que, en el contexto del viaje de Augusto a Hispania (15-13 a.C.) en el que se procedió a la reorganización provincial, *Asturica* fuese potenciada como centro regional, sin duda siguiendo los consejos de Agripa, quien había concluido la guerra en el Noroeste mientras gozaba de un mando extraordinario sobre las Galias y las Hispanias entre el 20 y el 18 a.C.²²⁸ y, por tanto, tendría un conocimiento de primera mano de los puntos estratégicos de la región. Augusto simplemente habría ratificado, con su autoridad, las medidas adoptadas por Agripa, como antes había hecho con las de Quirinal.

Otros gobernadores posteriores, cuando ya el Noroeste había sido integrado en la provincia Hispania Citerior, se dedicaron a impulsar estas sedes conventuales como centros territoriales. Al menos sabemos que uno de estos *legati Augusti pro praetore*, Paulo Fabio Máximo, amigo personal de Augusto que gobernó la Citerior en 4-1 a.C.²²⁹, intervino activamente en *Lucus Augusti* y *Bracara Augusta*, fomentando la adhesión de los lugareños al *princeps* y, probablemente, ayudándolos a introducirse en los modos de vida romanos, animándolos a embellecer la nueva ciudad y, quizá, contribuyendo a ello con su propio peculio. Esta suerte de patronazgo explicaría que los *Bracari* escogiesen la fecha del natalicio de Fabio Máximo para realizar un voto en honor de Augusto, hecho que, además, demuestra la vinculación que establecían los indígenas entre la figura del gobernador y el poder imperial como encarnación del uno en el otro.

Hasta aquí todo resulta muy coherente, pero una inscripción, la llamada *Tabula Lougeiorum*, sobre cuya autenticidad ha caído desde su aparición la sombra de la duda²³⁰, introduce un problema en la evolución del sistema conventual del Noroeste. La

²²⁷ Florus, *Epit.* II, 59: *tum consilio Caesaris, qui fiduciam montium timens in quos se recipiebant, castra sua, quia in plano erant, habitare et incolere iussit*. La política de asentar a estos pueblos en el llano es también señalada por Dión Casio (LIV, 11, 2-5), que atribuye la medida directamente a Agripa.

²²⁸ Roddaz, *Marcus Agrippa...* cit. pp. 405-406 y 637-638 (esquema cronológico). Dopico “Los conuentus...” cit. p. 280, ve problemática la transformación de un campamento en ciudad, pero no explica el porqué, y olvida los ejemplos arqueológicos que certifican tales procesos.

²²⁹ A. Rodríguez Colmenero – C. Carreño Gascón, “Sobre Paulo Fabio Máximo y la fundación de *Lucus Augusti*”, *Finis Terrae. Estudios en lembranza do Prof. Dr. Alberto Balil*, Santiago de Compostela, 1992, pp. 389-415, sostienen que Fabio Máximo fundó *Lucus Augusti* en 15-13 a.C., pero su hipótesis carece de fuentes que la apoyen.

²³⁰ Tanto que dos historiadores la dieron por falsa: P. Le Roux, *AE*, 1987, 561, que aún mantiene sus reservas en “La question des conventus...” cit. pp. 345-346; y A. Canto, “La *Tabula Lougeiorum*. Un documento a debate”, *CuPAUAM* 17, 1990, pp. 267-275. Los argumentos esgrimidos por esta última

Tabula Lougeiorum recoge el pacto de hospitalidad y patronato establecido, en el año 1 d.C., entre una comunidad indígena situada en el territorio de la actual provincia de Lugo (su procedencia exacta es desconocida), la *ciuitas Lougeiorum*, y el romano Cayo Asinio Galo²³¹ –que había gobernado años antes la Citerior y quizá por entonces formaría parte de la *cohors amicorum* del gobernador²³²– y en ella la comunidad indígena dice pertenecer al *conuentus Arae Augustae*²³³. De este *conuentus* no se vuelve a tener noticia en las fuentes²³⁴. Se ha propuesto identificarlo con la primera denominación dada al *conuentus Asturum*²³⁵, pero nada impide aceptar que se tratase de dos *conuentus* diferentes²³⁶. *Asturica*, como campamento de las tropas romanas, era un lugar muy idóneo para impartir justicia durante la conquista del Noroeste y después de ella, cuando el poder romano estaba implantando su propia administración del territorio²³⁷. A pesar de mencionarse en genitivo singular, esta *Ara Augusta* podría ser una nueva alusión a las *arae Sestianae* antedichas, lo que significaría que el *conuentus* se realizó en este santuario. Como refleja Plinio el Viejo, la sede de cada *conuentus*

fueron rebatidos por A. Rodríguez Colmenero, “La nueva *tabula hospitalitatis* de la *Civitas Lougeiorum*. Problemática y contexto histórico”, *ZPE* 117, 1997, pp. 213-225.

²³¹ P. Balbín Chamorro, *Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante la Antigüedad*, Salamanca, 2006, pp. 201-204.

²³² G. Alföldy, “Fasti und Verwaltung der hispanischen Provinzen”, en R. Haensch – J. Heinrich (Hg.), *Herrschen und Verwalten: der Alltag des römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, Colonia-Weimar-Viena-Böhlau, 2007, pp. 325-356, esp. p. 339, ha situado su gobierno entre el 7 y el 4 a.C.

²³³ *Ex gente Asturum conuentus Arae / August(a)e / ciuitas Lougeiorum hospitium fecit cum / C(aio) Asinio Gallo libereis postereisque eius / eumque liberos posterosque eius sibi libe/reis postereisque suis patronum cooptarunt* (II. 2-6).

²³⁴ La inscripción honorífica en bronce dedicada en época de Galba a un individuo que fue ‘*quaestor gentium Araugustanor(um)*’ se tiene por falsa. Cf. A. Canto, *HEp* 6, 1996, 1005; 7, 1997, 1112-1116; y 9, 1999, 712-715, donde repasa el extraño y sospechoso modo (dibujos enviados por fax anónimamente) en que esta inscripción, junto con otras cuatro, llegaron a conocimiento de la comunidad científica, y señala la rareza de una “*gens Araugustana*”, pues el nombre de una tribu o pueblo indígena nunca es de cuño romano. Ver también: *AE* 1997, 766; Fernández Ochoa – Morillo Cerdán, “El Convento Araugustano...” cit. p. 899.

²³⁵ Dopico, “Los *conuentus*...” cit., p. 281 y *La Tabula Lougeiorum: Estudios sobre la implantación romana en Hispania*, Vitoria, 1988, pp. 61-62, quien ha propuesto que las *Arae Augustae* se hallarían en *Asturica*.

²³⁶ De los cuatro *conuentus*, dos ocuparían el territorio galaico y dos el astur. Cf. Rodríguez Colmenero, “La nueva *tabula hospitalitatis*...”, cit.; Alföldy, “Fasti und Verwaltung...”, cit., pp. 333-338; P. Ozcáriz Gil, *Los conuentus de la Hispania Citerior*, Madrid, 2006, pp. 60-61, acepta la posibilidad de que existiesen cuatro *conuentus* en el Noroeste y de que hubiese cambios en el sistema conuentual en época flavia, pero no adopta una postura clara.

²³⁷ Durante la guerra el legado imperial que estuviese al mando, como por ejemplo C. Antistio, podía administrar justicia en el campamento sobre los sometidos en virtud de su *imperium*. Así había hecho L. Emilio Paulo, quien en 189 a.C. –como recuerda la tésera de bronce en la que mandó grabar su decisión– decretó “*in castreis*” (l. 8) que se diese la libertad de los habitantes de la *Turris Lascutana* hasta entonces dependientes de *Hasta Regia*, en la Hispania Ulterior (*CIL* II, 5041). Y así habría hecho también durante la Segunda Guerra Púnica Gneo Cornelio Escipión, el primero en enseñarles a los hispanos la justicia romana según Liv. XXV, 36, 16.

daba nombre al mismo, así que es verosímil deducir que ésta se correspondiese con el lugar en el que se hallaban las *Arae Augustae*.

Otro problema radica en situar dónde se hallaban estas *arae*. Plinio, y luego Ptolomeo, las sitúan en una península en la que habitaba los pueblos de los *Neri* y los *Celtici Supertamarici*, que se ha identificado con el cabo Finisterre. Esto se vería confirmado por el *Ravennate*, en el que se menciona un punto del trazado viario en la costa gallega llamado *Are Augusti*, entre *Turaqua* y *Quecelenis* (i.e. las mansiones de *Turoqua* y *Aquis Celenis*, según el Itinerario de Antonino)²³⁸, además de por la probable pertenencia de los *Celtici Supertamarici* al *conuentus lucensis*, como se deduce de la llamada estela de Apana hallada en el pueblo de Crecente, cerca de la actual Lugo²³⁹. Otra posibilidad, propuesta por F. J. Fernández Nieto, es que la península en la que se hallaban esas *arae sestianae* fuese la de la actual A Coruña²⁴⁰. Sea como fuere, con la elección de este emplazamiento y la consagración de estas aras a Roma y Augusto, Quirinal estaría marcando simbólicamente que bajo Augusto el Imperio Romano había alcanzado el dominio del orbe hasta sus límites²⁴¹, idea muy repetida por los poetas augusteos, especialmente por Virgilio²⁴². En ese aspecto, el cabo Finisterre parece, sin duda, un lugar muy oportuno para ello, como anuncia su nombre actual, revelador de la consideración de fin del mundo occidental que ha tenido históricamente. Sin embargo, en su *Chorographia* Pomponio Mela indica que “*in Astyrum litore Noega est oppidum et tres arae quas Sestianae uocant in paeninsula sedent et sunt Augusti nomini sacrae*” (3,13). La descripción de las aras y del lugar es muy detallada y señala una nueva ubicación, en la costa astur. J. Velaza se ha inclinado por preterir el testimonio de Mela al de los otros dos autores antiguos argumentando que resultaría muy oportuno que Quirinal hubiera consagrado los tres altares en donde comenzaba el límite que él mismo habría establecido entre la nueva provincia Transduriana y la Hispania Citerior, al igual

²³⁸ 308,1. Cf. Fernández Ochoa – Morillo Cerdán, “El Convento Araugustano...”, cit. p. 901. Plinio habla de una península. Para las fuentes sobre las vías romanas: J. M. Roldán Hervás, *Itineraria Hispana: Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la península Ibérica*, Valladolid, 1975, pp. 214-215 y 274.

²³⁹ *HEp* 7, 1997, 397.

²⁴⁰ F. J. Fernández Nieto, “El trofeo de Augusto en Occidente”, en M^a. P. García Ruiz – C. Alonso del Real Montes – J. B. Torres Guerra – A. Sánchez Ostiz (coords.), *Vrbs aeterna. Actas y colaboraciones del Coloquio Internacional “Roma entre la Literatura y la Historia”*. Hom. Carmen Castillo, 2003, pp. 43-63, esp. pp. 58-62, quien, en concreto, opina que estarían situadas en el emplazamiento de la actual Torre de Hércules. La hipótesis de que las aras funcionasen a modo de faro nos parece un tanto forzada.

²⁴¹ A. Grüner, “Die Altäre des L. Sestius Quirinalis bei Kap Finisterre. Zur geopolitischen Konstruktion des römischen Herrschaftsraums”, *Madridrer Mitteilungen* 46, 2005, pp. 247-266.

²⁴² Virg. *Aen.* VI, 790-798.

que en 197 a.C. habían hecho los primeros pretores enviados a las dos Hispanias de época republicana²⁴³.

Los argumentos aportados por Velaza son sugerentes. Sin embargo, estamos de acuerdo con varios autores de relieve en que el testimonio más fiable es el de Plinio el Viejo, pues, de los tres autores que mencionan la ubicación de las aras, él fue el único que conocía de primera mano el Noroeste de Hispania ya que había actuado allí como procurador imperial²⁴⁴. Además, al parecer existían dos Noegas, una en la costa galaica y otra en la astur²⁴⁵, y quizá Mela confundió una con otra²⁴⁶. Por ello, parece más probable que las *arae Sestianae* se hallasen en la costa gallega y, en concreto, en el entorno de Finisterre.

Volviendo al problemática de un *conuentus Arae Augustae*, en nuestra opinión, admitir la autenticidad de la *Tabula Lougeiorum* –ya de por sí sospechosa– y, con ella, la de un *conuentus Arae Augustae*, desdibuja el sistema conventual del Noroeste sin que exista una explicación rotunda de la necesidad práctica de que hubiese un cuarto *conuentus*. Además, resulta muy difícil situar el momento en que desapareció ese *conuentus*, englobado dentro del *Lucensis* (o del *Asturum*, si se opta por la teoría de situar las aras en el límite oriental de este territorio). No parece que Plinio olvidara mencionarlo de haber existido en su época dado que conocía la Hispania Citerior de primera mano²⁴⁷ y el hecho de que se guiase por la *formula prouinciae* de época augustea nos hace aún más difícil aceptar su existencia. Sin embargo, si a pesar de todos los problemas que entraña la pieza y su contenido aceptamos su autenticidad, existe, a nuestro juicio, otra explicación a la referencia que hace a un *conuentus Arae Augustae*.

Es muy probable que, si no todos, algunos gobernadores de la Citerior acudiesen al santuario de las aras dedicadas a Roma y Augusto por Sestio Quirinal –siguiendo la costumbre atestiguada en otros lugares– para celebrar determinados rituales en los que

²⁴³ Velaza, “La provincia Transduriana...” cit. p. 117.

²⁴⁴ R. Syme, “A Governor of Tarraconensis”, en *Roman Papers* II, cit. pp. 732-741, esp. p. 735; Tranoy, *La Galice...* cit. pp. 179 y 327; Grüner, “Die Altäre...” cit.

²⁴⁵ Plin. *N.H.* IV, 111; Strab. III, 4, 17-20.

²⁴⁶ R. Étienne, *Le culte impérial dans la péninsule ibérique d'Auguste à Dioclétien*, Paris, 1958, p. 381, que no duda en situar estas aras sestianas en el *conuentus lucensis*; D. Fishwick, *The imperial cult in the latin West I/1*, Leiden/Nueva York/Copenhague/ Colonia, 1987, p. 142; Fernández Ochoa – Morillo Cerdán, “El Convento Araugustano...” cit. pp. 901-902.

²⁴⁷ Discrepamos, por tanto, con la opinión de Ozcáriz Gil, *Los conuentus...*, cit., p. 59. En cambio, L. A. Curchin, “L’administration romaine dans la vallée du Douro”, en Navarro – Palao, *Villes et territoires...* cit. pp. 91-96, esp. p. 94, recuerda que el primer *procurator ducenarius* conocido para Asturia et Callaecia fue precisamente Plinio el Viejo, quien por ello demuestra un gran conocimiento de la zona en su obra.

se harían votos *pro salute principis*, la salvación del Imperio, etc. En determinados casos en que supiesen que iban a detenerse allí durante ciertos días, podrían haber previsto en su edicto jurisdiccional, o en un edicto *ad hoc*, que realizarían en ese lugar un *conuentus* judicial, bien a mayores de los tres del Noroeste, bien en sustitución del Lucense (el más cercano), como se ha propuesto para Asia²⁴⁸. Es posible también que el propio Galo acompañara al gobernador del 1 d.C. a este santuario como miembro de su *cohors amicorum* –siendo, por tanto, un asesor sin título oficial– y que la *ciuitas Lougeiorum* enviara unos legados allí, bien para presentar al gobernador alguna petición, bien para asistir a las ceremonias religiosas vinculadas con el culto imperial. Entonces los representantes de los *Lougei* habrían establecido un pacto de hospitalidad con Galo por haber obtenido algún tipo de *beneficium* de él o en espera de recibirlo en el futuro. Que los miembros de la *ciuitas Lougeiorum* fueran astures en vez de galaicos no impide que formasen parte del *conuentus Lucensis* en función de su situación geográfica (dentro de la provincia actual de Lugo, donde se halló el bronce). Lamentablemente, no contamos con testimonios que prueben estas suposiciones, pero lo cierto es que el sistema conventual no era tan férreo como se ha querido ver y en ocasiones podían darse, como en Asia, modificaciones en el itinerario del gobernador por la provincia.

Una vez reordenada la provincia Citerior, la situación en Hispania sería la siguiente, tal y como la describe Plinio: La Bética contaba con cuatro *conuentus*, el *Cordubensis*, el *Hispalensis*, el *Gaditanus* y el *Astigitanus*, tres de cuyas sedes eran *coloniae ciuium Romanorum* (la capital, *Corduba*, *Hispalis* y *Astigi*²⁴⁹) y una *municipium ciuium Romanorum* (*Gades*²⁵⁰); la Lusitania con tres, el *Emeritensis*, el *Pacensis*, el *Scallabitanus*, cuyas cabeceras, *Augusta Emerita* (capital), *Pax Iulia* y

²⁴⁸ Dalla Rosa, “Praktische...” cit. *supra*.

²⁴⁹ La *Colonia Patricia Corduba* (Plin. *N.H.* III, 10; Strab. III, 2, 1); la *Colonia Hispalis Romulensis* (Plin. *N.H.* III, 11; Strab. III, 2, 1) y la *Colonia Astigi Augusta Firma* (Plin. *N.H.* III, 12).

²⁵⁰ Plin. *N.H.* III, 15. *Gades* recibió la ciudadanía romana en 49 a.C. de manos de César (Dio XLI, 24, 1, que utiliza el término ‘*politeia*’), que previamente ya había concedido *beneficia* y *iura* a la ciudad gracias a la influencia de su amigo y colaborador Balbo el Mayor (Cic. *Pro Balbo* 43); de ahí probablemente el título que recoge Plinio de *Vrbs Iulia Gaditana* (*N.H.* IV, 119). Estrabón cifra la relevancia de *Gades* en los tratados que suscribió con Roma desde la Segunda Guerra Púnica (III, 2, 1), su actividad marítima y el alto número de miembros de *ordo equester* con que contaba (III, 5, 3).

Scallabis eran colonias romanas²⁵¹; y la Citerior, la provincia más extensa territorialmente, con siete, el *conuentus Tarraconensis*, el *Carthaginensis*, el *Caesaraugustanus*, el *Cluniensis*, el *conuentus Asturum*, el *Lucensis* y el *Bracarensis*, de los cuales tres eran colonias romanas (la capital, *Tarraco*, *Carthago Noua* y *Caesaraugusta*) y una *municipium ciuium Romanorum* (Clunia)²⁵². Nada sabemos del estatuto jurídico de *Asturica Augusta*, *Lucus Augusti* y *Bracara Augusta*, pero se podría pensar que en un período inicial funcionarían como meros centros de reunión – *conuentus* en su sentido más básico (*vide supra*)– de la población local en los que se hallaría un reducido número de “funcionarios” imperiales junto con un destacamento militar y en los que se producirían las primeras relaciones entre el poder imperial y los sometidos. La evolución urbanística posterior de estos tres centros y la consideración de *Asturica* como ‘*urbs magnifica*’ por parte de Plinio (palabras que, de todas formas, han de ser entendidas moderadamente y en un contexto de escasa urbanización como el noroccidental), hacen pensar que se habrían visto beneficiadas por el decreto de Vespasiano que en el 73/74 d.C. concedió el *ius Latii* a toda Hispania²⁵³.

El estatuto peregrino de una ciudad no la inhabilitaba para funcionar como sede conventual, como en el caso del Noroeste hispánico o las ciudades de Asia²⁵⁴, pero todo apunta a que este sistema en Hispania tomó como puntos de apoyo a las colonias romanas existentes en la provincia²⁵⁵. Esto no es de extrañar si pensamos en que la principal preocupación del gobernador, desde el período republicano, era la protección de los ciudadanos romanos que se hallasen bajo su jurisdicción y para los cuales administraba justicia en primer lugar. El resto de la población, peregrina, también estaba sometida a su autoridad (a excepción de las comunidades libres y federadas, y aun éstas

²⁵¹ Plin. *N.H.* IV, 117; Strab. III, 4, 20 (donde se resalta la capitalidad de *Emerita*); III, 2, 15 (donde menciona a la colonia de *Pax Iulia* como *Pax Augusta*).

²⁵² *Tarraco*: Plin. *N.H.* III, 21; *Carthago Noua*: *N.H.* III, 19; *Caesaraugusta*: *N.H.* III, 24 y Strab. III, 2, 15. Clunia alcanzará el título de colonia en el 68 d.C. Cf. J. Mangas, *Aldea y ciudad en la Antigüedad hispana*, Madrid, 1996, p. 55; G. Alföldy, “Spain”, *CAH X2*, pp. 449-463, esp. p. 457. Estrabón (III, 4, 20), por su parte, resalta en su descripción de Iberia la relevancia que tenían en la Citerior *Tarraco* y *Carthago Noua*.

²⁵³ Plin. *N.H.* 3.30: *Vniuersae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit*. Mangas, *Aldea y ciudad...* cit. p. 56; García Fernández, *El municipio latino...* cit.

²⁵⁴ Para Asia: Fournier, *Entre tutelle...* cit., pp. 68-78.

²⁵⁵ F. Millar, “*Civitates liberae, coloniae* and Provincial Governors under the Empire”, *Mediterraneo Antico* 2, 1999, pp. 95-113, esp. p. 108. Las colonias fueron fundamentales en la estructuración y control del territorio provincial; véase el caso del sudoeste hispano estudiado por V. Clément, “Le territoire du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique à l’époque romaine. Du concept au modèle d’organisation de l’espace”, en J.-G. Gorges – F. G. Rodríguez Martín (eds.) *Économie et territoire en Lusitanie romaine*, Madrid, 1999, pp. 109-120.

con matices) y recurría a él como juez superior en la provincia, pero en origen, el sistema conventual parece haber sido establecido para proporcionar la justicia a la que tenían derecho los ciudadanos romanos residentes en ella, aunque en muchos casos implicarían también a población peregrina²⁵⁶. Asimismo, la elección de las colonias –o, en su defecto, de municipios romanos– como escalas y centros de referencia del itinerario del gobernador por la provincia resulta lógica si tenemos en cuenta los escasos medios humanos con que contaba el *officium* del gobernador, que le obligaban a recurrir, por un lado, a los cuerpos del ejército asentados en la provincia y, por otro, a las autoridades locales para la realización de instrucciones preliminares de los casos que debería tratar en persona, así como a confiar en las instalaciones (archivos, cárceles) y espacios idóneos (foros, basílicas) de estas colonias. Las autoridades de las colonias, que eran entendidas como un trozo de Italia en la provincia²⁵⁷ y que estaban organizadas institucionalmente según el modelo cívico romano (véase la *lex Vrsonensis*)²⁵⁸, serían las mejor preparadas para colaborar con el gobernador y facilitarle su tarea.

Resulta, por tanto, muy coherente que Augusto, dentro su plan de organización administrativa de Hispania, decidiese fundar una serie de *coloniae ciuium Romanorum* no sólo con el propósito de conceder a sus veteranos las tierras que les había prometido, sino con la idea de implantar un entramado de ciudades privilegiadas que, como cabeceras regionales, favoreciesen la mejor estructuración y control del territorio hispano. Y, en particular, algunas de estas fundaciones augusteas –*Augusta Emerita* (capital de la Lusitania), *Pax Iulia*, *Caesaraugusta* y *Astigi*²⁵⁹– fueron destinadas a completar el número de sedes conventuales que debían visitar los gobernadores de sus provincias, perfeccionando el así el sistema ya ensayado a finales de la República. Las capitales de la Hispania Citerior y de la Bética, *Tarraco* y *Corduba*, eran enclaves fundamentales del poder romano ya durante el período republicano, pero Augusto se encargó de confirmar su capitalidad y de promocionar su desarrollo cívico y urbano. Según admite la historiografía, *Tarraco* sería una *colonia ciuium Romanorum* desde César. En cuanto a *Corduba*, su evolución estatutaria no está clara pero parece que

²⁵⁶ Cic. *Ad Att.* V, 21, 10-12.

²⁵⁷ Au. Gell. *N.A.* XVI, 13, 3-6.

²⁵⁸ J. Mangas, *Leyes coloniales y municipales de la Hispania romana*, Madrid, 2001.

²⁵⁹ A. García y Bellido, “Las colonias romanas de Hispania”, *AHDE* 29, 1959, pp. 447-512, esp pp. 481-492 y 495-498; J. González, “De nuevo en torno a la fundación de la colonia *Astigi Augusta Firma*”, *Habis* 26, 1995, pp. 281-293

podría haber alcanzado el estatuto de colonia romana con César y haber sido objeto de una segunda deducción coloniar por parte de Augusto²⁶⁰. También fueron potenciadas por Augusto otras dos sedes conventuales que habían alcanzado el estatuto de colonias romanas con César *Hispalis* y *Carthago Noua*: la primera recibió una segunda deducción con veteranos y la segunda se benefició del patronazgo de miembros de la familia imperial y conoció un importante crecimiento económico gracias al impulso otorgado por el poder imperial a su puerto²⁶¹.

En aquellos lugares donde no se hallasen colonias ni municipios romanos –y ni siquiera un desarrollo cívico en las comunidades existentes–, como en *Asturia* y *Callaecia*, es natural que el poder imperial decidiese usar los lugares donde estaban situados sus campamentos como cabeceras, dado que disponían de un personal preparado para las diversas tareas administrativas y que ya durante la conquista habían funcionado como centros referenciales del poder romano en el territorio.

En la otra provincia occidental que más información nos ofrece de su sistema conventual, África Proconsular, vemos, sin embargo, que el estatuto de sus sedes conventuales parece haber sido más variado, aunque Roma tendió siempre a dar preeminencia a las comunidades privilegiadas. Cartago, la capital, era una colonia romana desde la refundación iniciada por Julio César y completada por Augusto y mantuvo este estatuto durante todo el Alto Imperio²⁶². *Sabratha*, que por su apoyo al

²⁶⁰ García y Bellido, “Las colonias de Hispania”, cit. pp. 452-454 y 459-460; G. Alföldy, “Introducción histórica”, en X. Dupré (dir.) *Las capitales provinciales de Hispania 3: Tarragona*. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Roma, 2004, pp. 7-14, esp. p. 8; J. F. Rodríguez Neila, “Introducción histórica”, en X. Dupré (dir.) *Las capitales provinciales de Hispania 1: Córdoba*. Colonia Patricia Corduba, Roma, 2004, pp. 7-20, esp. p. 10; D. Vaquerizo – J. A. Garriguet – J. F. Murillo, “Novedades de arqueología en Corduba, colonia Patricia”, en J. González – J. C. Saquete Chamizo (eds.) *Colonias de César y Augusto en la Andalucía romana*, Roma, 2011, pp. 9-46, esp. p. 19. Alföldy, “Spain”, *CAH* X², cit. p. 457 sostiene que *Corduba* habría alcanzado el estatus de colonia bajo Augusto, pero no se detiene en la problemática. Sobre la fundación de *Corduba* véase: E. García Fernández, “Estrabón (III,2,1) y la fundación de Córdoba. Una nueva propuesta de interpretación”, en M. Chiabà (cura), *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste, 2014, pp. 173-187.

²⁶¹ S. Ordóñez Agulla – D. González Acuña, “*Colonia Romula Hispalis*. Líneas esenciales de su dinámica histórica y arqueológica”, en González – Saquete Chamizo (eds.), *Colonias...* cit. pp. 47-97, esp. p. 55; *DECAR* pp. 14-15.

²⁶² Plin. *N. H.* V, 24. Una de los problemas constantes con lo que la investigación sobre las ciudades de África se enfrenta es la dificultad de diferenciar qué fundaciones han de atribuirse a César y cuáles a Augusto: C. R. Whittaker, “Roman Africa: Augustus to Vespasian”, *CAH* X, pp. 587-589; Y. Le Bohec, *Histoire de l'Afrique romaine (146 avant J.-C. – 439 après J.-C.)*, Paris, 2005, p. 53; J. Gascou, *La politique municipale de l'Empire romain en Afrique Proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère*, Roma, 1972, pp. 229-230, señala que Septimio Severo le concedió el *ius Italicum* en compensación por la reducción de territorio (*pertica*) que había sufrido la colonia.

bando pompeyano durante la guerra civil es probable que fuese castigada con la pérdida de su condición de *ciuitas libera*, recuperaría este estatuto bajo Augusto. Más adelante, hay indicios de que pudo haber sido promocionada a municipio latino bajo Vespasiano y, por último, en el siglo II –probablemente bajo Trajano– pasó a ser *colonia ciuium Romanorum*²⁶³. Útica aparece en Plinio como *municipium ciuium Romanorum*, estatuto que alcanzó por concesión de Julio César o de Augusto, como induce a pensar el título de *municipium Iulium* que esta ciudad usó en sus acuñaciones monetales en época de Tiberio²⁶⁴. En cuanto a las otras sedes que se han propuesto, *Thysdrus*, *oppidum liberum* en época augustea²⁶⁵, conoció su promoción a municipio en época de Septimio Severo, como culmen del desarrollo urbano que conoció en virtud de su condición de importante nudo de comunicaciones en el sistema de carreteras africano y su vocación comercial²⁶⁶; *Hadrumentum*, también mencionado como *oppidum liberum* por Plinio²⁶⁷, acabó siendo colonia bajo Trajano²⁶⁸, pero es incierto su estatuto entre ambos momentos. Por último, *Hippo Regius*, ciudad vinculada a la familia real nómada con Masinisa, fue promocionado a municipio (¿latino?) por Augusto y a colonia en época flavia²⁶⁹. Como vemos, en África existía una mayor diversidad estatutaria, pero ello no impidió a estas ciudades funcionar como sedes conventuales.

Respecto a la división conventual propiamente dicha, la historiografía apenas ha podido ir más allá de meras indicaciones orientativas, relacionando las ciudades con las regiones geográficas que gozaban de cierta entidad en época romana, fundamentalmente la costa norte, *Byzacium* (que se corresponde con el centro del Túnez actual) y

²⁶³ Gascou, *La politique...* cit., p. 82. La evolución jurídica de la ciudad hacia el estatuto de municipio latino bajo Vespasiano vendría corroborada por tres inscripciones (IRT 95, 96, 112) en las que sus ciudadanos pertenecen a la tribu Quirina (nt. 3). La presencia de la tribu Papiria indicaría, por su parte, la promoción a colonia de *Sabratha* bajo Trajano o Marco Aurelio. La evolución de *Sabratha* sería, así, similar a la sufrida por *Lepcis Magna*.

²⁶⁴ RPC 721-726 y 729-730. Como en el caso de Cartago, existe la duda de si fue César o Augusto el artífice de su promoción. Vid. *supra* nt. 63.

²⁶⁵ Plin. N. H. V, 30: *Oppidum Thusdritanum*.

²⁶⁶ P. Salama, *Les voies romaines de l'Afrique*, Alger, 1951; Gascou, *La politique municipale...* pp.192-193; Bullo, *Provincia Africa. Le città e il territorio dalla caduta di Cartagine a Nerone*, Roma, 2002, p. 111.

²⁶⁷ N.H. V, 25.

²⁶⁸ CIL VI, 1687: *coloni coloniae Concordiae Vlpiae Traianae / Augustae Frugifera Hadrumentinae* (ll. 4-5).

²⁶⁹ ILaI I, 109: *Munic(ipium) Aug(ustum) Hipp(onensium) Reg(iorum)*. Cf. Gascou, *La politique municipale...* cit., pp. 25 y 34-25; Bullo, *Provincia Africa*, cit., p. 153, nt. 542.

Tripolitania (sudeste del Magreb)²⁷⁰. Agreguemos que es notoria la concentración de ciudades en la costa, con importantes puertos comerciales, en contraste con un interior menos urbanizado, excepto en el valle del Bagradas²⁷¹. De todas formas, como ya hemos dicho, los *conuentus* no tenían una naturaleza territorial, sino que eran reuniones de un conjunto de población provincial convocada por el magistrado jurisdiccional competente (principalmente el gobernador) con el fin de administrar justicia. Su proyección en el territorio se deduce de las comunidades adscritas a cada sede.

A pesar del cuadro tan ordenado que nos ofrece Plinio el Viejo, hay indicios de que, al igual que en Asia, el elenco de sedes conventuales de las provincias hispanas pudo haber sufrido cambios durante el Alto Imperio, al menos en la Citerior. Una inscripción honorífica dedicada por los calagurritanos a un *legatus iuridicus* que estuvo en la provincia en 100-103 y otra con la que honraron a un *legatus Augusti* anterior (del 85-88 d.C.), identificado también como *iuridicus*²⁷², ha sido tomado por U. Espinosa como indicio de que la ciudad de *Calagurris, municipium ciuium Romanorum* desde época augustea, funcionó como sede conventual al menos entre los principados de Domiciano y Trajano. En efecto, el resto de testimonios de los otros legados jurídicos conocidos de la Citerior han aparecido siempre en sedes conventuales, y es muy probable que estos dos legados fuesen tomados como patronos por decreto de los decuriones del municipio²⁷³ –y honrados con sendas estatuas en sus ciudades de origen, *Augusta Taurinorum* y *Nemausus*²⁷⁴– precisamente porque estuvieron presentes en esta

²⁷⁰ Las ciudades más relevantes de estas tres regiones durante el Alto Imperio eran: en la costa norte, Cartago y Útica; en *Byzacium*, *Hadrumetum*, *Thysdrus*, *Leptis Minor* (*oppidum liberum* en época augustea) y Tapso; en la Tripolitania, *Sabratha*, *Lepcis Magna* (*municipium* bajo los Flavios, colonia con Trajano) y *Oea*, que se hallaban *inter duas Syrtis* (Plin. *N.H.* V, 27-28). También cabe ser señalada la relevancia de Cirta en Numidia, capital del reino en época de Yugurta, que fue promocionada a colonia por Augusto; cf. Gascou, *La politique municipale...* cit. pp. 22-23. Sobre la deducción colonial de *Lepcis Magna* bajo Trajano: F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Nápoles, 1972, p. 15.

²⁷¹ Precisamente Plinio, *N.H.* V, 23-24, comienza a describir el África Proconsular desde la costa, señalando que está compuesta de tres golfos (el de Hipona, el de Cartago y el que se extiende hacia la Tripolitania), luego menciona el valle del Bagradas y, finalmente, se refiere a las antedichas regiones y sus pueblos, entre los que se destacan los libiofenicios de *Byzacium* (*Libyphoenices uocantur qui Byzacium incolunt*; *N.H.* V, 24). Remitimos a los mapas de Haensch, *Capita provinciarum...* cit. Para una descripción geográfica moderna: S. Bullo, *Provincia Africa*, cit. p. 1-3.

²⁷² *Fasti Hispanienses* p. 75. Cuestión que discutiremos más abajo.

²⁷³ Siguiendo el procedimiento de la *cooptatio patronus* que estaría expuesto en toda ley municipal, como muestran la *lex Vrsonensis*, capp. 97 y 130 y las *leges Irnitana* y *Malacitana*, cap. 61.

²⁷⁴ U. Espinosa, “*Iuridici de la Hispania citerior y patroni en Calagurris*”, *Gerión* 1, 1984, pp. 305-325, esp. p. 312-321. Los senadores honrados son, por orden cronológico, *Quintus Glitius Atilius Agricola*,

ciudad y la favorecieron de algún modo (quizá simplemente con el mero hecho de realizar allí un *conuentus*, hecho que otorgaba prestigio por sí solo). Esta hipótesis de Espinosa encuentra un importante apoyo, a nuestro juicio, en la *epistula* de Claudio Quartino dirigida a los Pompaelonenses, pues fue escrita en *Calagurris* mientras se hallaba allí este *iuridicus* de época de Adriano²⁷⁵. Así pues, las evidencias invitan a concluir que estos legados habrían realizado *conuentus* en *Calagurris* en un período (entre Domiciano y Adriano) en el que los gobernadores probablemente necesitaron ayuda en la administración de justicia en el extenso *conuentus Caesaraugustanus*, quizá a consecuencia del crecimiento poblacional que hubo de conocer la ciudad en época flavia a la par que su constatado desarrollo urbanístico²⁷⁶.

Así pues, es muy probable que el elenco de sedes conventuales que Plinio el Viejo recoge no se mantuviera inmutable durante todo el Alto Imperio, al igual que, antes de él, pudo realizarse un *conuentus* en el santuario de las *Arae Augustae* del Noroeste.

Si se observa un mapa en que aparezcan representados los límites territoriales de los *conuentus* hispanos²⁷⁷, llama la atención la diversidad existente en las dimensiones entre unos y otros en el caso de la Citerior. El *conuentus Carthaginiensis*, por ejemplo, ocupa una extensión territorial enorme, equiparable a la que juntos componen los tres *conuentus* del Noroeste, y englobaba también a los habitantes de las islas Baleares²⁷⁸. Cabe preguntarse a qué se debe esta diferencia.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el territorio noroccidental fue conquistado en una fase más tardía y formó, aunque de forma efímera, una provincia en sí mismo, lo cual condicionó su organización como un sector con entidad propia, aun después de ser integrado en la Citerior. Por otra parte, las características geográficas

natural de *Augusta Taurinorum* (CIL V, 6987), y *Titus Iulius Maximus Manlianus* (CIL XII, 3167), de *Nemausus*. En realidad, Atilio Agrícola no es mencionado explícitamente como *iuridicus* en la línea 11 de su inscripción, sino simplemente '*leg(atus) Hispan(iae) C[iterior(is)]*'. Este hombre es también honrado en CIL V, 6974-6979.

²⁷⁵ CIL II, 2529: ll. 13-15. *Fasti Hispanienses* pp. 79-81.

²⁷⁶ A. R. Birley, *The Roman Government of Britain*, Oxford, 2005, p. 268, relaciona la presencia de *iuridici* en Britania con períodos en que los gobernadores estarían ocupados en operaciones militares en el norte de la provincia. La Hispania Citerior era una provincia que estaba plenamente pacificada cuando tenemos noticia de *legati iuridici* (esto es, a partir de época de Trajano), aunque uno de sus gobernadores, Cayo Aufidio Victorino, hubo de hacer frente a la invasión de *mauri* que sufrió la Bética en 171-172, gobernando simultáneamente también esta última provincia. Cf. *Fasti Hispanienses* pp. 38-42.

²⁷⁷ Véase el mapa en Haensch, *Capita provinciarum...* cit.

²⁷⁸ Plin. *N.H.* III, 25.

debieron de tener un peso decisivo en la división conventual y, también, las vías de comunicación existentes o las posibilidades que los territorios peninsulares ofrecían para la apertura de nuevas carreteras. El pragmatismo condujo a establecer los límites conventuales donde se hallaban los físicos (por ejemplo, el sistema montañoso ibérico) y a abrir nuevas carreteras con el fin principal de facilitar la labor itinerante del gobernador uniendo sedes conventuales²⁷⁹.

Empero, si bien esto explica el porqué de los límites conventuales y la variedad en las dimensiones de unos y otros, sigue dejando en el aire la razón del tamaño del *conuentus Carthaginensis* o del *Caesaraugustanus*. P. Ozcáriz Gil ha propuesto que ello se debería al interés de que todos los *conuentus* de la Hispania Citerior tuviesen salida al mar, pero no aporta ningún argumento que lo apoye²⁸⁰. En nuestra opinión, conviene ser recordado –retornando a Festo– que los *conuentus* no tienen, en primer término, una naturaleza territorial, sino que ésta se deriva de su carácter de ‘reunión’ de un grupo dado de personas o de “convocación” del pueblo por decisión del magistrado. Es decir, la implantación territorial del sistema conventual no ha de hacernos perder de vista su propósito, que no es otro que el de acercar al gobernador la población que tenía bajo su jurisdicción. Así, sólo se puede entender la extensión de los *conuentus* más grandes de la Citerior como consecuencia de la concentración de la población que los componía en determinadas áreas, por ejemplo en la costa mediterránea o en torno a los principales cauces fluviales (fundamentalmente el río Ebro)²⁸¹. Las áreas con escaso poblamiento o sin recursos naturales que interesasen al poder romano serían “desatendidas” por éste, que no vería la necesidad de proporcionarles una sede conventual más cercana.

De todas formas, Estrabón nos informa de que los gobernadores de la Citerior, en época de Tiberio, solían pasar el invierno entre *Tarraco* y *Carthago Noua*, ciudades costeras con un clima más cálido, dedicando su tiempo a la administración de justicia, mientras aguardaban a que llegase el verano para recorrer el resto de la provincia²⁸². No cabe duda de que esta dedicación específica en la mitad del año a ambas sedes conventuales no sólo estaba condicionada por su clima, sino por el importante número de procesos que entraban dentro de la jurisdicción del gobernador, tanto de los

²⁷⁹ Marshall, “Governors...” cit. p. 238.

²⁸⁰ Ozcáriz Gil, *Los conventus...* cit. p. 100.

²⁸¹ Una síntesis de la evolución de los asentamientos romanos en Mangas, *Aldea y ciudad...* cit.

²⁸² Strab. III, 4, 20.

habitantes de estas ciudades (una de ellas, además, capital provincial) como de la población adscrita a su *conuentus*. Ello compensaría los problemas derivados de la gran extensión territorial en las que se hallaban las comunidades de ambos *conuentus*. Es más, con su presencia durante medio año, el gobernador privilegiaba a estas ciudades por encima del resto de sedes conventuales, dado que las posibilidades de acceso a su persona se multiplicaban, así como su intervención en los asuntos locales que lo necesitasen.

De este mismo pasaje de Estrabón antedicho surgió una polémica historiográfica cuando se intentó conjugar con el sistema conventual lo que el autor bitinio dice de las áreas de influencia de los tres legados que en época de Augusto y Tiberio tenía bajo su mando el *legatus Augusti pro praetore* de rango consular que gobernaba la provincia. El texto completo sobre la Citerior es el siguiente:

Ἡ δὲ λοιπὴ, αὕτη δ' ἐστὶν ἡ πλείστη τῆς Ἰβηρίας, ὑπὸ τῷ ὑπατικῷ ἡγεμόνι, στρατιάν τε ἔχοντι ἀξιόλογον τριῶν που ταγμάτων καὶ πρεσβευτὰς τρεῖς· ὧν ὁ μὲν, δύο ἔχων τάγματα, παραφρουρεῖ τὴν πέραν τοῦ Δουρίου πᾶσαν ἐπὶ τὰς ἄρκτους, ἦν οἱ μὲν πρότερον Λυσιτανοὺς ἔλεγον, οἱ δὲ νῦν Καλλαϊκοὺς καλοῦσι· συνάπτει δὲ τούτοις τὰ προσάρκτια μέρη μετὰ τῶν Ἀστύρων καὶ τῶν Καντάβρων. Πεῖ δὲ διὰ τῶν Ἀστύρων Μέλσος ποταμός, καὶ μικρὸν ἀπωτέρω πόλις Νοῖγα, καὶ πλησίον ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ ἀνάχυσις ὀρίζουσα τοὺς Ἀστυρας ἀπὸ τῶν Καντάβρων· τὴν δ' ἐξῆς παρόρειον μέχρι Πυρήνης ὁ δεῦτερος τῶν πρεσβευτῶν μετὰ τοῦ ἑτέρου τάματος ἐπισκοπεῖ. Ὁ δὲ τρίτος τὴν μεσόγαιαν, συνέχει δὲ τὰ τῶν {τογάτων} ἤδη λεγομένων ὡς ἂν εἰρηνικῶν καὶ εἰς τὸ ἡμερον καὶ τὸν Ἰταλικὸν τύπον μετακειμένων ἐν τῇ τηβεννικῇ ἐσθῆτι²⁸³

²⁸³ Strab. III, 4, 20: “El resto [la Citerior], que es la mayor parte de Iberia, se halla bajo el mando de un gobernador consular que cuenta con un ejército considerable de tres legiones y tres legados. Uno de éstos, con dos legiones, mantiene la vigilancia sobre todo el territorio situado más allá del Duero hacia el norte, que unos llamaban anteriormente lusitanos y otros en la actualidad llaman galaicos; pues se hallan contiguas a éstos las regiones septentrionales con los astures y los cántabros (a través del territorio de los astures fluye el río Melso; y a escasa distancia de allí la ciudad de Noiga, y en sus proximidades un estero del Océano que delimita a los astures de los cántabros). La región que viene a continuación, situada a lo largo de la cadena montañosa hasta el Pirineo, la tiene a su cargo el segundo de los legados con la otra legión, el tercero vigila las tierras del interior; se ocupa de los llamados ya <togados>, como si se les denominara «pacíficos» y han cambiado su modo de vida a la civilización y a la manera itálica en su vestimenta togada (éstos son los celtíberos y los que habitan en las proximidades del Íber a una y otra orilla hasta las regiones situadas junto al mar)...” (trad. F.J. Gómez Espelosín, en *Estrabón, Geografía de Iberia*, Madrid, 2008).

A partir de estas palabras se elaboró una teoría que postulaba la existencia de unos distritos militares y/o judiciales que se llamaron diócesis, a cuya cabeza estaría cada uno de los tres legados del gobernador de la Hispania Citerior: uno en el Noroeste, otro en el área cantábrica hasta los Pirineos, y el tercero en el valle del Ebro; los dos primeros con dos y una legiones respectivamente y el último sin ninguna, dado que era un territorio plenamente pacificado²⁸⁴.

Como ya vio en su momento L. Sancho, Estrabón, en el pasaje citado, no utiliza en ningún momento el término *dioikesis* para referirse a las áreas protegidas por cada legado²⁸⁵. El problema, por tanto, se reduce a una construcción historiográfica, enraizada a partir de Mommsen, Kornemann y, sobre todo, de la influyente obra de Albertini²⁸⁶. No hay indicios que señalen la existencia de un tipo de distrito administrativo en la provincia diferente del *conuentus* que englobase varios de ellos. Siguiendo a L. Harmand, Lomas propuso que los distritos de Estrabón, de naturaleza militar, no se coordinarían administrativamente con los *conuentus*, sino que los precederían en el tiempo, inclinándose por situar la implantación del sistema conventual en época de Vespasiano²⁸⁷. Si bien podría resultar verosímil una administración temporal posterior al período de guerra dejada en manos de legados militares, los testimonios antedichos revelan una inmediata extensión del sistema conventual a toda la península en época augustea. Las palabras que Estrabón dedica a la actividad del gobernador de la Citerior en el mismo pasaje son muy claras y existen epígrafes que confirman la existencia de *conuentus* en esa época²⁸⁸.

²⁸⁴ El uso del término ‘diócesis’ para denominar las áreas asignadas a cada legado parte de Th. Mommsen, *Le droit pénal romain*, I, París, 1907, p. 264, nt. 4. Fue seguido, entre otros, por J. Marquardt, *Organisation de l’Empire romaine II. Manuel d’Antiquités romaines IX*, París, 1892, pp. 70-71; E. Kornemann, s.v. ‘Dioecesis’, *RE* 5, 1905, p. 716 y ss; R. K. McElderry, “Vespasian’s Reconstruction of Spain”, *JRS*, 8, 1918, pp. 53-102 y ‘Addenda’, *JRS* 9, 1919, pp. 86-94; M. Marchetti, s.v. “Hispania”, *Diz. Epig.* p. 811 ss.; Albertini, *Les divisions administratives...* cit. pp. 44-49, quien propuso que esta división en diócesis sería sustituida por la de los *conuentus*, cuya creación situó en época de Claudio (pp. 53-66). Hoy aún defiende la existencia de diócesis Le Roux, “La question des conventus...” cit., pp. 342-343, que sigue a Albertini.

²⁸⁵ L. Sancho Rocher, *El convento jurídico caesaraugustano*, Zaragoza, 1981.

²⁸⁶ P. Ozcáriz Gil, “The ‘dioceses’ of Hispania citerior in the High Empire: A historiographical invention”, *Studia Humaniora Tartuensia* 12, 2011, pp. 1-18, donde realiza un exhaustivo repaso historiográfico.

²⁸⁷ L. Harmand, *L’Occident romain: Gaule-Espagne-Bretagne-Afrique du Nord*, París, 1960, p. 124; F. J. Lomas Salomonte, *Asturia prerromana y altoimperial*, Gijón, 1989, pp. 206-208. En la misma línea: N. Santos Yanguas, *El ejército y la romanización de Galicia: conquista y anexión del noroeste de la Península Ibérica*, Oviedo, 1988, pp. 68-71.

²⁸⁸ La *Tabula Lougeiorum* (si es auténtica) y una inscripción de Sagunto, datada en el siglo I, que menciona el *conuentus Tarrachon(ensis)* (*CIL* II, 3840 = *CIL* II²/14, 333).

En nuestra opinión, Estrabón está describiendo sencillamente las áreas asignadas a cada uno de los tres legados subordinados al gobernador de la Hispania Citerior, que tenían la misión de mantener el orden, reprimiendo el bandidaje y posibles revueltas y administrando justicia cuando no estuviese el gobernador, habida cuenta de lo extensa que era la provincia²⁸⁹. Asimismo, supondrían un enlace importante con el gobernador a través del cual hacerle llegar a alguna petición. Que el legado encargado del valle del Ebro no tuviese ninguna legión a su mando no significa que no dispusiese de tropas (un destacamento, una cohorte, etc.) con las que ejercer su poder coercitivo, como en el caso de los propios gobernadores de la Lusitania o la Bética; pero en su caso, evidentemente, no había peligro de sublevaciones de la población contra el dominio romano, pues, a diferencia del Noroeste y la franja cantábrica, era un área sometida desde hacía tiempo a Roma. Asimismo, resulta natural que la población de cada una de estas áreas recurriese de manera espontánea a estos legados para resolver asuntos judiciales en primera instancia, como en el caso de herencias que fue juzgado por el legado de la legión VIII Augusta de Germania Superior en época de Cómodo²⁹⁰. El *imperium* que poseían les capacitaba para ello. Además, el área del Noroeste probablemente se correspondería con lo que había sido la antigua provincia Transduriana²⁹¹ y el legado sería visto como el sustituto natural de su antiguo gobernador²⁹². Aun así, sabemos que desde el primer momento el gobernador de la Citerior se acercó a estos lugares y visitó sus sedes conventuales, como atestiguan las inscripciones lucenses de Paulo Fabio Máximo, quien con su presencia potenció la afirmación de *Lucus Augusti* como centro de referencia para las poblaciones adscritas a su *conuentus*, y como también nos dice Estrabón (*vid. supra*). Fuera del tiempo variable que el gobernador se detenía en la sede conventual, el legado más cercano sería un punto de referencia durante el resto del año, y, con sus intervenciones jurisdiccionales menores, precedió en esa labor a los *legati iuridici* enviados a *Asturia* y *Callaecia* a partir de Adriano y/o Antonino Pío (138-141), o el que visitó *Calagurris* bajo Trajano.

²⁸⁹ M. I. Henderson, "Iulius Caesar and *Latium* in Spain", *JRS* 32, 1942, pp. 1-13, esp. p. 4, resaltó la función militar de estos legados, pero su visión resulta reductiva, pues nunca existió una división tajante entre los poderes militares y jurisdiccionales de aquellos que poseían *imperium*.

²⁹⁰ AE 1981, 691. Cf. A. Bérenger, *Le métier de gouverneur dans l'empire romain*, París, 2014, p. 233.

²⁹¹ Costabile – Licandro, *Tessera Paemeiobrigensis* cit. p. 55.

²⁹² Roddaz, "Le Douro..." cit. p. 24.

Desde Augusto, todos los gobernadores provinciales de rango senatorial tenían legados subordinados a su mando que los sustituían en aquellos lugares de la provincia a los que no pudiera acudir, bien para administrar justicia, bien para resolver asuntos de otra índole. Sin embargo, estos legados no tenían la misma naturaleza en las provincias proconsulares que en las imperiales o, dicho de otro modo, la relación de subordinación que se establecía entre un procónsul y su legado no era la misma que la de un *legatus Augusti pro praetore* y otros legados que hubiese en su provincia. Mientras que los procónsules como el de la Bética poseían *imperium* y *auspicia* propios, los *legati Augusti pro praetore* habían recibido el primero del emperador por delegación y actuaban bajo los auspicios de éste. Así pues, los procónsules podían delegar su *imperium*²⁹³ y los *legati Augusti pro praetore* no, como recuerda el jurista Paulo: *Mandatam sibi iurisdictionem mandare alteri non posse manifestum est*²⁹⁴. Además, según Venuleyo Saturnino, todas las sentencias de los legados de los procónsules –y probablemente de los que estaban subordinados jerárquicamente a los *legati Augusti pro praetore*– podían ser recurridas ante éstos, que también podían anular las multas impuestas por los legados que considerasen injustas²⁹⁵. Tampoco tenían la jurisdicción necesaria para presidir la *manumissio*²⁹⁶.

Cuenta Dión Casio que desde las reformas augusteas los procónsules tenían a su mando un legado (*presbeutés*) si eran de rango pretorio, y tres si eran consulares²⁹⁷. Esto concuerda con el antedicho pasaje de Estrabón (III, 4, 20) referido a la división provincial de Hispania en su época y, por tanto, probaría que también se puede aplicar a los senadores que gobernaban las provincias imperiales. En efecto, así como el procónsul que gobernó la Bética desde el 16-13 a.C., de rango pretorio, tuvo un legado propio, *el legatus Augusti* de la Lusitania, también ex pretor, tuvo otro, mientras que el de la Hispania Citerior, consular, contaba con tres, al menos en época del autor bitinio²⁹⁸. Los legados subordinados a los gobernadores de las provincias imperiales hispanas recibían su *imperium* por delegación del *princeps*, al igual que sus

²⁹³ Y así lo hacían en un legado o legados tras su ingreso en la provincia: *Post haec ingressus provinciam mandare iurisdictionem legato suo debet* (Ulp. *1 de off. procos.* = *Dig.* I, 16, 4, 6).

²⁹⁴ *Dig.* I, 21, 5 pr.

²⁹⁵ *Dig.* XLIX, 3, 2 (=Ven. Sat. *2 de off. procos.*): *Apellari legatis proconsul potest et, si multam dixerit, potest de iniquitate eius proconsul cognoscere et quod optimum putaverit statuere.*

²⁹⁶ *Dig.* I, 16, 2, 1. Sobre las manumisiones volveremos más adelante.

²⁹⁷ Dio LIII, 14, 7.

²⁹⁸ López Barja, “La reorganización...” cit.

gobernadores, pero estaban por debajo de éstos jerárquicamente²⁹⁹. Al igual que los legados de los procónsules, estos legados imperiales al servicio de los *legati Augusti pro praetore* parece que tampoco tendrían *ius gladii*³⁰⁰. En el caso de la Citerior el rango consular de su gobernador lo situaba automáticamente por encima de estos legados de rango pretorio. En la Lusitania, en cambio tanto el gobernador como su legado era de rango pretorio, pero bastaría con que el emperador especificase en el *mandatum* que entregaba al segundo que debía someterse siempre a la autoridad del primero.

Los legados subordinados al gobernador están atestiguados epigráficamente tanto en la Bética (aunque sólo en el siglo II) como en la Citerior. En la Bética son denominados *legatus prouvinciae Hispaniae Baeticae*³⁰¹. En cambio, en la Citerior son *legati Augusti*, y partir del siglo II habrían sido sustituidos por unos *legati iuridici* de rango pretorio, cuya actividad parece haber sido importante en *Asturia* y *Callaecia*³⁰². Alföldy incluye sistemáticamente dentro del grupo de los *iuridici* a estos *legati Augusti*³⁰³; sin embargo, aun admitiendo que éstos fueron los predecesores de aquéllos en sus funciones jurisdiccionales, cabe preguntarse el por qué del cambio de título. De hecho, ambos títulos coexistieron en época de Domiciano y en los propios

²⁹⁹ Mommsen, *DPR* III cit. p. 282, quien señala en nt. 1 que por eso mismo eran denominados ὑποστρατηγός por Dión Casio (LII, 21; LX, 20; LXII, 23; LXXII, 11, etc.); Felice – Costabile, *Tessera Paememiobrigensis...* cit. p. 61.

³⁰⁰ Ulp. 1 *de off. procos.* = *Dig* I, 16, 6, pr. (*vid. supra*). Los autores de los tratados *de officio proconsulis* probablemente tomaron en consideración tanto a los procónsules como a los gobernadores de las provincias imperiales, según M. Talamanca, “Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici” en G. G. Archi, *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero (III-V sec. d.C.)*, Milán, 1976, pp. 95-246, esp. p. 99, nt. 14. Véase también: Andrés Santos, “Poderes jurisdiccionales del gobernador...” cit. p. 12.

³⁰¹ *Fasti Hispanienses* pp. 175-180. Quinto Cecilio Marcelo es denominado *leg(atu)s pro pr(aetore) prou(inciae) Baeticae* (*CIL* XIV, 2498); es decir, el mismo título que usaban los gobernadores de la Citerior y la Lusitania, en tanto que legados, en su caso del emperador, que era el procónsul de sus provincias. Sobre el lugar de esta legación el *cursus honorum* senatorial: F. J. Navarro, “Los legados del procónsul de la Bética durante el Imperio Romano”, en M. Mayer i Olivé – G. Baratta – A. Guzmán Almagro (eds.) *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae*, Barcelona, 2007, pp. 993-998, con un elenco de los legados conocidos o hipotetizados en p. 998.

³⁰² De ahí los *legati iuridici Asturiae et Callaeciae*, cf. *Fasti Hispanienses* p. 81 ss. Por otra parte, a veces resulta difícil saber si los *legati Augusti* son los legados de los gobernadores o estos mismos, pues en ocasiones aparecen mencionados sin el “*pro praetore*”. Vid. Paulo Fabio Máximo, *legatus Caesaris* (*IRPLu* 19-20); Tiberio Plautio Silvano Eliano, *legatus in Hispania* (*CIL* XIV, 3608); Salvio Juliano, *legatus Aug(usti) Hispaniae Citerioris* (*CIL* VIII, 24094); cf. *Fasti Hispanienses*, pp. 212-214.

³⁰³ *Fasti Hispanienses* p. 75 y ss. Seguido por P. Ozcáriz Gil, “Los *iuridici* de la provincia *Hispania citerior*: cuestiones acerca de su origen y naturaleza”, *ETF II* 19-20, 2006-2007, pp. 525-533, y *La administración de la provincia Hispania citerior durante el Alto Imperio*, Barcelona, 2013, p. 168-170. Por otra parte, en nuestra opinión el título de *legatus Augusti* atestiguado epigráficamente puede hacer referencia también, en ocasiones, al propio gobernador. Piénsese que en el siglo I a.C. la nomenclatura oficial no estaba asentada y, así, tenemos a un Paulo Fabio Máximo que se intitula *legatus Caesaris* en Lugo (*IRPLu* 19-20 y Rodríguez Colmenero – Carreño, “Sobre Paulo Fabio Máximo...” cit. p. 390) y es denominado *legatus pro praetore* en una inscripción de *Bracara Augusta* (*ILER* 1028).

siglos II y III. Bajo Domiciano, mientras en la Citerior tenemos un *legatus prouvinciae Hispaniae Citerioris* en *Calagurris* (en 85-88 d.C.)³⁰⁴, en Britania conocemos a dos *legati iuridici* que sirvieron en esa provincia, Gayo Salvio Liberal Nonio Baso (78-81 u 81-83) y Gayo Octavio Tidio Tosiano Lucio Javoleno Prisco (84-86 d.C.)³⁰⁵. Asimismo, Lucio Coelio Festo fue *legatus imp(eratoris) Antonini Aug(usti) / Astu[ri]ae et Callaeciae* en 143-145 y Lucio Albinio Saturnino *leg(atus) Aug(usti) Asturiae et Callaecia* bajo Marco Aurelio; esto es, dos períodos en los que ya se está usando epigráficamente el título de *legatus Augusti iuridicus* para algunos de los enviados al Noroeste³⁰⁶. En el siglo III están documentados epigráficamente dos *legati Augusti prouvinciae Hispaniae Citerioris* que parecen haber fallecido mientras desempeñaban el cargo, Lucio Tadio Símplex³⁰⁷ y Quinto Úmbrico Próculo³⁰⁸. ¿Se trata, pues, de un descuido del lapicida, de un uso arbitrario de ambos títulos o de dos cargos diferentes? El adjetivo *iuridicus* parece marcar una mayor especificidad funcional, como en el caso de los *iuridici* que desde Marco Aurelio actuaron en Italia. Según W. Eck, estos *legati iuridici* se dedicaron exclusivamente a funciones jurisdiccionales de carácter no criminal, sin tener otras competencias administrativas³⁰⁹.

En nuestra opinión, la diferencia que pudo existir entre los legados mencionados por Estrabón (*legati Augusti* en la epigrafía) y los *iuridici* de la Citerior es la siguiente: Los primeros estarían a disposición del gobernador para sustituirlo en cualquiera de sus funciones –aunque con ciertas restricciones jurisdiccionales y estando obligados a mantener informado al gobernador de todo– cuando éste lo creyese necesario, y los enviaría sobre todo a aquellas áreas más lejanas como el Noroeste o la cordillera cantábrica. Así sucedía ya en época a finales de la República: durante la conquista de la Galia, cuando César estaba concentrado en determinadas operaciones militares o hubo de ocuparse de los asuntos de sus provincias oficiales (la Galia Transalpina y Cisalpina

³⁰⁴ Espinosa, “*Iuridici...*” cit. p. 307.

³⁰⁵ Birley, *The Roman Government...* cit. pp. 269-272.

³⁰⁶ *Fasti Hispanienses* pp. 84-87.

³⁰⁷ *RIT* 147; *Fasti Hispanienses* p. 111.

³⁰⁸ *RIT* 148; *Fasti Hispanienses* p. 112.

³⁰⁹ W. Eck, “La decentralizzazione parziale della giurisdizione della città di Roma con gli *iuridici*”, en *L'Italia nell'Impero Romano: Stato e amministrazione in época imperiale*, Bari, 1999, pp. 253-275, esp. p.265-275. Existen epígrafes (muy pocos) que refieren la intervención de alguno de estos legados en otros ámbitos administrativos como la *cura annonae* en determinadas ciudades que pasaban por dificultades de abastecimiento, pero Eck interpreta estas intervenciones como acciones esporádicas derivadas de circunstancias concretas, pero no como competencias administrativas vinculadas al cargo (pp. 271-274)

y el Ilírico) delegó en sus legados diversas misiones diplomáticas o militares³¹⁰. En la Hispania altoimperial contamos con dos ejemplos de intervención de un *legatus Augusti* en un ámbito ajeno al jurisdiccional. En primer lugar, en época de Tiberio Cayo Caetronio Miccio favoreció el asentamiento y las actividades de *negotiatores* romanos en *Bracara Augusta* y por ello este colectivo lo honró en una inscripción honorífica años después, cuando ya había progresado en su *cursus honorum*, en el curso del cual fue procónsul de la Bética³¹¹. Es muy probable que mantuviera este apoyo cuando fue procónsul de la Bética, por ejemplo en el comercio de productos de esta provincia en el Noroeste.

En segundo lugar, tenemos la inscripción de época flavia que conmemora la construcción del puente de *Aquae Flaviae* (Chaves), adscrita al *conuentus Bracarensis*, en la que, además del gobernador Valerio Festo, se menciona a su legado, Décimo Cornelio Meciano, revelando que éste tuvo un papel relevante en la supervisión de las obras. El gobernador era el responsable último, pero dado que sólo visitaba una vez al año el Noroeste su legado habría estado encargado del seguimiento de las obras, manteniéndolo informado por carta³¹².

Se ha tendido a dar por sentado que las áreas que Estrabón asigna a cada legado del gobernador de la Citerior fueron siempre las mismas, pero en nuestra opinión sólo se está refiriendo a las que uno o varios de sus gobernadores decidieron que necesitaban de la presencia de uno de sus legados en el momento en que el autor bitinio escribió su obra, en época augusteo-tiberiana³¹³. No cabe duda de que en este reparto de los legados por el territorio tuvo mucha relevancia el estado aún inestable de los territorios recién asimilados de astures y cántabros, y por ello el legado destacado en el Noroeste contó con dos legiones a su mando y el de la cordillera cantábrica con una. Sin duda,

³¹⁰ Caes. *B.G.* II, 34 (Publio Licinio Craso sometió a los pueblos de la Bretaña francesa); III,1 (Servio Sulpicio Galba aseguró el importante paso comercial de los Alpes y sometió a los pueblos hostiles).

³¹¹ *CIL* II, 2423: *C(aio) Caetronio C(ai) [f(ilio)] / Cam(ilia tribus) tr(ibuno) / pl(ebis), pr(aetori), legato Aug(usti) [Hisp(aniae)] / C(ite)rrioris, leg(ato) Aug(usti) legi(o)-ni[s] II A[ugu]st(ae), proco(n)s(uli) / pr(ouin)ci(ae) B[ae]ticae, / p[raef]ecto aerar(ii)], mil(i)-t[ar]is, prae]fecto reliquo-rum exigendorum popul[i] / Romani, / ciues Romani qui nego-/tiantur Bracaraugust[ae]*. Alföldy, *Fasti Hispanienses* p. 67-70, fecha su legación en la Citerior entre el 25-33 d.C., y la inscripción a partir del 49 d.C., fecha en que se creó la *praefectura reliquorum exigendorum*.

³¹² *CIL* II, 2477. Véase Segunda Parte: Capítulo 2. Se comunicarían por carta, igual que Publio Craso y César cuando el primero se hallaba en la Armórica (Caes. *B.G.* III, 9, 1).

³¹³ N. Mackie, *Local Administration in Roman Spain, AD 14-212*, Oxford, 1983, p. 19, nt. 27, también pensaba que no debía deducirse de la descripción de Estrabón que el legado sin legiones que se encargaba del interior de la Hispania Citerior estuviese siempre limitado al área concreta del *conuentus Caesaraugustanus*.

recibieron instrucciones de los gobernadores de preocuparse especialmente por el control del espacio y el sofoco de las previsibles revueltas o actos de bandidaje de los restos de la resistencia indígena. Sin embargo, los gobernadores podían decidir enviar a sus legados allí donde entendiesen que hacían más falta, a veces para resolver casos particulares en determinadas comunidades a las que ellos no pudiesen acudir personalmente.

En cuanto a los *legati iuridici* de la Citerior, a nuestro juicio tuvieron una misión más concreta, que era la de sustituir al gobernador en sus competencias jurisdiccionales –excepto, quizá, en los procesos penales capitales– allí donde fuese necesario. El hecho de que su presencia en la Citerior sólo esté documentada a partir de Trajano se derivaría, por un lado, de que toda la provincia estaría plenamente pacificada y sus comunidades habrían alcanzado un desarrollo suficiente (vinculado, sin duda, a su promoción jurídica desde la concesión flavia del *ius Latii*) como para no necesitar más presencia que la del gobernador una vez al año, excepto en la administración de justicia. Por ello comenzaron a enviarse *iuridici*, decisión que entronca con la política general que desde el siglo II buscó volver más eficaz la administración de determinadas regiones, como el Noroeste hispánico, donde hay documentados más *iuridici*. Precisamente, la presencia de dos legados no jurídicos en el Noroeste bajo Antonino Pío y Marco Aurelio indicaría que, en ocasiones, esta región necesitó agentes imperiales que interviniesen en otros ámbitos y no sólo en el jurisdiccional. El testimonio epigráfico de un *legatus iuridicus Asturiae et Callaeciae* que también fue legado de la *legio VII Gemina* a inicios del siglo III³¹⁴, no implica que ejerciese ambos cargos de forma simultáneamente. De hecho, la ausencia de la conjunción ‘et’ entre uno y otro invita a pensar que los ejerció de forma consecutiva³¹⁵. Con todo, el que hubiese simultaneado ambos cargos no haría sino confirmar que para asumir otras competencias fuera de las estrictamente jurisdiccionales habrían necesitado un mandato especial.

La necesidad de administrar más eficazmente la *Gallaecia* llevó poco después a Caracala a separarla de la Citerior y convertirla en una provincia, la *Hispania Superior*,

³¹⁴ *CIL* VI, 32412: Quinto Hedio Loliano Plautio Avito (en 202-205). Cf. Alföldy, *Fasti Hispanienses* p. 94, que también atribuye el mando de la *legio VII Gemina* a otro *iuridicus* anónimo conocido por *CIL* XII, 3172. También sabemos que Quinto Mamilio Capitolino fue *legatus Augusti per Asturiam et Callaeciam* y *dux leg(ionis) VII G(eminae) P(iae) F(elicis)* en 197 (p. 90-92). Este último mando excepcional debe atribuirse al contexto de guerra civil entre Septimio Severo y Clodio Albino.

³¹⁵ Como en el caso del gobierno simultáneo de la Hispania Citerior y la Bética por parte de Cayo Aufidio Victorino en 171-172 a.C. Cf. *Fasti Hispanienses* p. 38.

que parece haber perdurado hasta el reinado de Maximino el Tracio³¹⁶. Alföldy ha relacionado la división de la Citerior con la política administrativa general de Caracala, que –siguiendo el ejemplo de su padre en Siria– también dividió Britania con el fin de debilitar el poder de sus gobernadores; el recuerdo de los peligrosos alzamientos de gobernadores durante la guerra civil que había llevado al trono a Septimio Severo era aún reciente³¹⁷. Sin embargo, como reconoce el propio autor húngaro, la pérdida de *Gallaecia* no restaría poder militar ni recursos económicos al gobernador de la Hispania Citerior, pues seguía conservando el mando sobre la legio VII Gemina y la producción de las minas de oro galaicas había decaído. En nuestra opinión, las razones que llevaron a Caracala a desgajar la *Gallaecia* de la Hispania Citerior se debieron a factores de pragmatismo administrativo: esta última era la provincia más extensa del imperio y su gobernador podía dedicar poco tiempo a los *conuentus* más occidentales³¹⁸. Es más, se volvía a recurrir a una solución administrativa similar a la ensayada por Augusto en la primera fase de dominación de esta área.

Alföldy propuso que esta provincia estaría gobernada por procuradores ducenarios como Diodoro, argumentando que la *Gallaecia* era “demasiado pequeña e insignificante políticamente”³¹⁹, pero esta hipótesis necesita de nuevas fuentes para ser confirmada y el propio ejemplo de *Sardinia* que él usa como paralelo demuestra que provincias poco relevantes podían ser otorgadas a gobernadores de rango senatorial. Además, en la inscripción honorífica monumental de *Lauinium* que nos ha transmitido la existencia de la Hispania Superior se dice que el homenajeado, Cayo Servilio Diodoro, fue *proc(urator) CC (ducenarius) prouinciarum Hispaniar(um) / Citerioris et*

³¹⁶ Esta provincia *Hispania Superior* se conoce gracias a una inscripción editada por D. Nonnis, “Un patrono dei dendrofori di *Lauinium*. Onori e munificenza in un dossier epigrafico di età severiana”, *Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Serie III. Rendiconti* 68 (anno accademico 1995-1996), 1999, pp. 1235-1262. Sobre su administración y duración: G. Alföldy, *Provincia Hispania Superior*, A Coruña, 2002, pp. 23-44, donde usa como *terminus post quem non* AE 1929, 158, inscripción honorífica de Rutilio Prudente Crispino, que fue gobernador de *Hispania Citerior et Callaecia* (Il. 6-7), proponiendo que habría dejado de existir bajo Maximino el Tracio, pues hay miliarios del gobernador precedente a Crispino, Decio Valeriano, tanto en el *conuentus Bracarensis* como en otras partes de la Hispania Citerior. La cronología en: *Fasti Hispanienses*, cit. pp. 56-59.

³¹⁷ Alföldy, *Provincia Hispania Superior*, cit. pp. 45-48.

³¹⁸ Alföldy, *Provincia Hispania Superior* cit. p. 48, ve una causa secundaria de la división las dificultades de comunicación entre *Gallaecia* y las regiones vecinas de la Hispania Citerior, pero esto es relativo. La potenciación de las vías terrestres en el Noroeste desde los Flavios había mejorado mucho las comunicaciones. *Vid.* Segunda Parte de ese estudio.

³¹⁹ *Idem* pp. 19-20, seguido por Nonnis, “Un patrono...” cit. p. 254 (que contó con su asesoramiento en este aspecto) y P. Ozcáriz Gil, “Algunas consideraciones acerca de la provincia Hispania superior y su administración”, *Pyrenae* 38/2, 2007, pp. 33-46.

*Superioris*³²⁰, lo cual no implica que gobernase esta última, como tampoco lo hizo en la Citerior. En cambio, el hecho de que hasta entonces se hubiese tendido a enviar a *legati Augusti* y *legati iuridici* a *Asturia* y *Callaecia* invita a plantear si la nueva provincia podría haber contado con un gobernador de rango senatorial.

Por último, cabe preguntarse cómo ofrecería el gobernador de la Citerior su amparo jurisdiccional a los habitantes de las islas Baleares, que estaban adscritos al *conuentus Carthaginiensis*. La isla más grande, Mallorca, contaba con dos *oppida ciuium Romanorum*, Palma y *Pollentia*³²¹. Gracias a una *tabula patronatus* hallada cerca de Pedret de Boquer (Mallorca) que nos informa de que el gobernador Marco Licinio Craso Frugi acordó ser el patrono de la *ciuitas Bocchoritana* sabemos que al menos él estuvo en la isla durante su mandato (en concreto, el 17 de marzo del 10 a.C.)³²², quizá con el fin de realizar un *conuentus* en *Pollentia*, colonia que estaba no muy lejos del lugar del hallazgo. Sin embargo, desconocemos si otros gobernadores visitaron la isla para impartir justicia y atender a las peticiones de sus habitantes. Dado que Plinio el Viejo no menciona ninguna sede conventual en esta isla –sino que la adscribe al *conuentus Carthaginiensis*–, lo más verosímil es que los gobernadores de la Hispania Citerior hubieran optado, en general, por enviar allí a uno de los antedichos legados con los que contaba, tal y como Cicerón hizo con Chipre mientras gobernó Cilicia³²³, cuando no fuese suficiente con recibir a los pleiteantes baleáricos en la sede conventual a la que pertenecían o, en su defecto, en *Tarraco*, la capital provincial³²⁴.

La diferencia, empero, es que Cicerón podía delegar su *imperium* y el *legatus Augusti pro praetore* de la Hispania Citerior no. Una posibilidad es que la administración de las islas se confiase al *praefectus insularum Baliarum* de rango ecuestre que está documentado epigráficamente desde época julio-claudia³²⁵, aunque

³²⁰ l. 2-3 del frontal del pedestal. Cf. Nonnis, “Un patrono...” cit. p. 248. Habría desempeñado este cargo en torno aal En el epígrafe el nombre y el cargo de Diodoro se desarrollan en dativo.

³²¹ Plin. *N.H.* III, 80.

³²² *CIBal* 21; Balbín Chamorro, *Hospitalidad y patronato...* cit. pp. 231-232, nº64.

³²³ Cic. *Ad Att.* V, 21, 6.

³²⁴ También sabemos que Cicerón administraba justicia a los chipriotas en la capital provincial, Tarso: véase el testimonio ya tratado de *Ad Att.* V, 21, 11.

³²⁵ *CIBal* Apéndice 2-3 y 8 (este último prefecto también se encargó de vigilar la costa de la Hispania Citerior): *CIL* XI, 7427 y *RIT* 168. Cf. R. Zucca, *Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto il dominio romano*, Roma, 1998, pp. 136-137. Por su parte, N. A. Doenges, *Pollentia. A Roman Colony on the Island of Mallorca*, Oxford, 2005, pp. 16-17, interpreta la estructura como la base de un monumento ecuestre.

siempre estaría subordinado al gobernador de la Citerior³²⁶. Una inscripción fragmentaria de *Pollentia* (datada en el siglo I d.C.) recuerda que lo que parece ser un templo fue erigido en el foro de la ciudad por iniciativa del gobernador de la Citerior, pero fue dedicado por un subordinado de éste: [---] *Aug. leg. pro pr. f. c. / [---]ro leg. dedicauit*³²⁷. Algunos autores han indentificado al dedicante con el prefecto de las islas, tomando como paralelo un epígrafe honorífico dedicado a Popea por parte de L. Titinio Glauco Lucretiano, que fue *[p]raef(ectus) [pro leg]ato insularum Baliarum*³²⁸. Por su parte, Alföldy y Abascal entienden que se trataba de un *legatus*³²⁹. En nuestra opinión, el estado excesivamente fragmentario del epígrafe dificulta mucho su interpretación, pero el paralelo de Lucretiano prueba que el prefecto de las islas a veces fue *pro legato*, y parece natural que se recurriese a él en ausencia del gobernador antes que enviar a unos de los legados de la península. Con todo, fuese uno u otro cargo, lo cierto es que el dedicante era un subordinado del gobernador que probablemente se hallaba en la isla con la misión de atender también las causas no criminales de su población cuando no pudiesen acudir a su sede conventual. Por otra parte, es posible que a partir del siglo II un *legatus iuridicus* como el que está atestiguado en la epigrafía de *Tarraco, Carthago Noua, Caesaragusta, Clunia, Bracara* o *Calagurris* pudiese ser enviado a las Baleares.

Conclusiones

Este, pues, es el marco en el que el gobernador desarrollaba su actividad. El sistema conventual vertebraba su labor en la provincia, condicionando la forma en que se aproximaba a las comunidades y en la que sus gobernados podían acceder a él y marcando una serie de espacios y tiempos de referencia. No en vano existía un calendario más o menos establecido que era ratificado seguramente en el edicto anual de cada gobernador y a él se debía atener³³⁰.

³²⁶ Faoro, *Praefectus...* cit. pp. 130-131.

³²⁷ *HEp* 2, 1990, 62, en donde se habla, simplemente, de un legado del gobernador.

³²⁸ Zucca, *Insulae...* cit. p. 138; E. García Riaza – M^a. L. Sánchez León, *Roma y la municipalización de las Baleares*, Palma de Mallorca, 2000, p. 91; Faoro, *Praefectus...* cit. p. 185-185.

³²⁹ Alföldy, *Provincia Hispania Superior* cit. pp. 41-42; J. M. Abascal, “La administración itinerante en la Hispania citerior. El funcionamiento y su familia”, en J. M. Iglesias – A. Ruiz (eds.), *Viajes y cambios de residencia en el mundo romano*, Santander, 2011, pp. 289-317, esp. p. 299.

³³⁰ Marshall, “Governors...”, cit. pp.243-244, ha reconstruido los días en que Cicerón se detuvo en cada ciudad de Cilicia en su itinerario por ella, a partir de sus cartas. Por su parte, Lepelley, “Les sièges...” cit.

En esas visitas a las sedes conventuales, el gobernador, además de administrar justicia, aprovechaba su estancia para realizar las otras tareas vinculadas a sus funciones, como las relativas a las *rationes ciuitatum* o a las obras públicas, tal y como reflejan muchas de las cartas del libro X del epistolario de Plinio el Joven, que trataremos con detenimiento en lo sucesivo. Asimismo, las élites, a través del *hospitium*, tenían una oportunidad de oro para establecer valiosos lazos personales con él o su séquito, de actuar como mediadores entre el gobernador y su comunidad y de presentarle peticiones o llegar, a través de él, al emperador mismo³³¹. Ese contacto estrecho que se establecía entre las oligarquías locales y el gobernador fue lo que llevó a Augusto, en el momento crítico que atravesó el Imperio tras el desastre de Varo en 9 d.C. a prolongar el mando de todos los gobernadores, dado que, según expresa Suetonio, eran personas expertas en el trato con ellos (*praesidibus provinciarum propagauit imperium, ut a peritis et assuetis socii containerentur*)³³². Un buen conocedor de las costumbres locales garantizaba que la provincia sería gobernada en armonía con sus élites y, además, que el gobernador no correría el riesgo de estar a merced de consejeros locales que pudiesen manipularlo, sobre todo en la administración de justicia³³³.

Esta labor del gobernador resultaba crucial para la asimilación del nuevo marco cívico romano por parte de los indígenas, pues precisamente a través de la actividad jurisdiccional del gobernador los pueblos recién integrados entraban en contacto con el derecho romano, que implicaba una nueva forma de organizar las relaciones jurídicas y, por ende, sociales, así como una nueva configuración de las relaciones de poder³³⁴. Era,

p. 68, ha tratado de elaborar un esquema del calendario establecido en África Proconsular en el período altoimperial.

³³¹ Marshall, “Governors...” cit. p. 238; F. Hurlet, “Les modalités de la hiérarchie et de la délégation. Les rituels de médiation entre le prince et le gouverneur sous le Haut-Empire romain”, en A. Bérenger – F. Lachaud (eds.) *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l’Antiquité et au Moyen Âge*, Metz, 2012, pp. 161-177, esp. p. 172. Un ejemplo paradigmático es el del poderoso *Titus Semnius Solemnis*, notable de la comunidad de los Viducasses (en Caen, Normandía) de principios del siglo III que desarrolló una exitosa carrera política en la Galia Lugdunense, culminada con su elección como *sacerdos Romae et Augusti* del santuario de las Tres Galias. Gracias ha llamado “mármol de Thorigny” (*CIL XIII*, 3162) conocemos no sólo su *cursus honorum*, sino su estrecha relación con dos gobernadores de su provincia, los servicios que les prestó y los beneficios que recibió de ellos. Cf. G. Woolf, *Becoming Roman. The Origins of Provincial Civilization in Gaul*, Cambridge, 1998, pp. 34-35. Sobre este personaje volveremos en la Tercera Parte.

³³² Suet. *Diu. Aug.* 23.

³³³ Philost. *V.A.* V, 36.

³³⁴ Woolf, *Becoming Roman...* cit., pp. 24-25.

por tanto, una piedra clave de su romanización³³⁵. No en vano, Aristóteles entendía que un cambio de *politeía* conllevaba una transformación en la comunidad que lo sufría³³⁶; idea que también refleja Dión Casio cuando dice que los germanos, antes de que el gobierno despótico de Varo los llevara a la rebelión, estaban asumiendo unas nuevas costumbres de vida pacíficas y “se estaban transformando en otras personas” bajo la atenta “vigilancia” de los gobernadores:

οἱ βάρβαροι μετερρυθμίζοντο καὶ ἀγορὰς ἐνόμιζον συνόδους τε εἰρηνικὰς ἐποιοῦντο. οὐ μέντοι καὶ τῶν πατριῶν ἡθῶν τῶν τε συμφύτων τρόπων καὶ τῆς αὐτονόμου διαίτης τῆς τε ἐκ τῶν ὅπλων ἐξουσίας ἐκλελησμένοι ἦσαν. καὶ διὰ τοῦτο, τέως μὲν κατὰ βραχὺ καὶ ὁδῶ τινι μετὰ φυλακῆς μετεμάνθανον αὐτά, οὔτε ἐβαρύνοντο τῇ τοῦ βίου μεταβολῇ καὶ ἐλάνθανόν σφας ἀλλοιούμενοι³³⁷

El Imperio Romano superó, así, la mera dominación por la fuerza de las armas, valiéndose del derecho que le era propio como herramienta más eficaz en la que cimentar el orden y la paz en las provincias occidentales, cuyas comunidades (salvo las de origen griego o fenicio-púnico, como *Masalía*, *Emporion* o *Gades*) carecían de una cultura jurídica propia y de una tradición políada. Esto condujo a Roma a llevar a cabo una política de difusión de su modelo cívico –esto es, el consabido “proceso de municipalización”³³⁸. Todo ello llevó a Floro a constatar en el siglo II –momento en el que las provincias occidentales están plenamente consolidadas– que *difficilius est prouincias optinere quam facere; uiribus parantur, iure retinerentur*³³⁹.

³³⁵ H. Inglebert, “Le droit romain”, en *Histoire de la civilisation romaine*, París, 2005, pp. 113-154, esp. p. 154.

³³⁶ Arist. *Pol.* III, 1276b. Cf. P. López Barja, “El gobernador provincial romano de Cicerón a Plinio el Joven”, en M. Campagno – J. Gallego – C. García MacGaw (eds.), *Política y religión en el Mediterráneo antiguo*, Buenos Aires, 2009, pp. 289-304.

³³⁷ Dio LVI, 18: “Los bárbaros, por su parte, estaban asumiendo el orden romano, frecuentaban los mercados y organizaban reuniones pacíficas. No obstante, todavía no se habían olvidado de sus costumbres ancestrales, de sus modos de comportamiento innatos, de su régimen de vida independiente y de que el poder proviene de sus armas. Y por esa razón, mientras poco a poco, y siguiendo una senda bajo vigilancia, olvidaban sus antiguas costumbres y aprendían las nuevas, no mostraron su descontento por el cambio de régimen de vida y no percibieron que se estaban transformando en otras personas.” (trad. J.M. Cortés Copete, *Dión Casio, Historia romana. Libros L-LV*, BCG, Madrid, 2011).

³³⁸ M.W. Doyle, *Empires*, Ithaca/Londres, 1986, que sitúa la superación de la mera dominación militar en época de Augusto, lo que le lleva a acuñar la expresión “umbral augusteo” para los imperios que lo lograron (el chino de la dinastía Han y el español, según este autor).

³³⁹ Flor. *Epit.* II, 30, 29. Precisamente también a propósito de Germania en tiempos del desastre de Varo.

Por otro lado, la sede se beneficiaría de la llegada de individuos del resto de comunidades de su *conuentus*, propiciando el desarrollo económico³⁴⁰. Todo ello coadyuvaba, paralelamente, a su desarrollo urbanístico, dado que era necesario dotar a este centro regional de un lugar en el que situar el tribunal del gobernador; así sucedió en Britania, en la que Gneo Julio Agrícola promovió la construcción de *fora* sufragados por las élites indígenas³⁴¹. Ese interés en que los principales centros de sus comunidades contasen con foros a pesar de no ser todavía comunidades promocionadas jurídicamente (esto es, ni municipios ni colonias) tiene un claro objetivo práctico: facilitarle el ejercicio de sus tareas jurisdiccionales dotando de estructuras romanas a los centros que visitaba. Como ha expresado P. Gros con gran acierto, estos lugares no eran meros escenarios arquitectónicos o espacios habitacionales, sino que se erigían con un claro propósito funcional: la existencia de un foro implicaba, por tanto, una incipiente organización jurídica y administrativa que le daba sentido³⁴². Por ello, Agrícola también se preocupó de animar a las élites indígenas aliadas a que educasen a sus hijos en las llamadas “artes liberales”, a lo que éstas respondieron favorablemente³⁴³. El poder romano necesitaba de la cooperación de las élites locales surgidas tras la conquista para mantener la adhesión en sus comunidades, y a los notables locales les interesaba conocer no sólo el latín, sino también la oratoria, la retórica o ciertas nociones de jurisprudencia en las que la aristocracia romana era instruida, dado que constituían la herramienta básica a través de la cual podían acceder al conocimiento de los códigos sociales y políticos inherentes a la nueva organización jurídica en la que desarrollarían sus vidas, reforzando, así, su relación con el poder romano y, por ende, la consolidación de su propia preeminencia a nivel local³⁴⁴.

Esta actividad jurisdiccional de los gobernadores provinciales fue igual en todas las provincias occidentales recién asimiladas y, sin duda, muchos de ellos adoptaron medidas similares a las de Agrícola tanto para “acondicionar” los centros regionales que visitaban a sus actividades jurisdiccionales como para animar a las élites a que educasen

³⁴⁰ Dio Chrys. XXXV, 15.

³⁴¹ Tac. Agr. 21.

³⁴² P. Gros, “La ville comme symbole. Le modèle central et ses limites”, en Inglebert (dir.), *Histoire...* cit., pp. 155-232, esp. p. 210.

³⁴³ Tac. *ibídem*.

³⁴⁴ P. A. Brunt, “The Romanization of the Local Ruling Classes in the Roman Empire”, *Roman Imperial Themes*, Oxford, 1990, pp. 267-281, esp. pp. 268, 273 y 276; C. Ando, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley-Los Angeles-Londres, 2000, p. xiii.

a sus hijos “a la romana”. Prueba de esto último la tenemos en que a la famosa escuela de retórica de Masalia, en la Galia Narbonense, acudían tanto galos como romanos³⁴⁵, distinguiéndose los primeros en el dominio de la elocuencia³⁴⁶; y que en el certamen de elocuencia que se celebró en *Lugdunum* con motivo de la visita de Calígula participasen galos de estatus peregrino³⁴⁷. En la Hispania Citerior, los gobernadores se conducirían de una manera similar a Agrícola cuando visitaron el Noroeste recién conquistado, propiciando el conocido desarrollo de las sedes conventuales de *Bracara*, *Lucus* y *Asturica*³⁴⁸.

Por todo ello, la condición de sede conventual resultaba un privilegio que favorecía el florecimiento de una ciudad o comunidad y multiplicaba las posibilidades de promoción social y de cercanía al poder imperial de su aristocracia³⁴⁹.

En cambio, aquéllos que vivieran lejos de su sede –salvo en el caso de potentados– quedaban marginados de la posibilidad de recibir los beneficios de la justicia imperial. Este problema, empero, preocupó más a los juristas que a los propios mandos imperiales, que sobre todo gobernaban para los grupos privilegiados de la sociedad (senadores, *equites*, decuriones, centuriones), que fueron con el tiempo cada vez más protegidos por los emperadores, notablemente desde época de Adriano³⁵⁰. El

³⁴⁵ Strab. IV, 1, 5.

³⁴⁶ Strab. IV, 4, 2 y Tac. Agr. 21.

³⁴⁷ Suet. Calig. 20: *sed hic certamen quoque Graecae Latinaeque facundiae, quo certamine ferunt uictoribus praemia uictos contulisse, eorundem et laudes componere coactos; eos autem, qui maxime displicuissent, scripta sua spongia linguae delere iussos, nisi ferulis obiurgari aut flumine proximo mergi maluissent*. Sabemos que trataba de peregrinos porque Calígula amenazó a los participantes cuyos discursos no fuesen de su agrado con ser azotados con varas, castigo tradicionalmente impropio de ciudadanos romanos. Vid. Cic. Ad Att. V, 11, 2, donde se menciona el caso del ciudadano decurión de *Nouum Comum* al que el enemigo de César Marco Claudio Marcelo, siendo cónsul en 51 a.C., mandó azotar con varas para demostrar que no lo tenía por un *ciues* y, por tanto, refutar la validez de colonia romana fundada por César, en virtud de la *lex Vatinia*, con población local, la cual gozaba de *ius Latii* desde el 89 a.C. Suet. Diu. Iul. 28 recuerda que Marcelo denunció en 52 la invalidez de esa fundación cesariana en la Galia Cisalpina.

³⁴⁸ Vid. Segunda parte.

³⁴⁹ Dio Chrys. XXXV, 15 y XL, 33.

³⁵⁰ En su tratado *de officio proconsulis*, Ulpiano recalca que el gobernador debía atender por igual a todos los habitantes de su provincia, sin hacer diferencias basadas en el honor de cada individuo: *Obseruare itaque eum oportet, ut sit ordo aliquis postulationum, scilicet ut omnium desideria audiantur, ne forte dum honori postulantium datur uel improbitati ceditur, mediocres desideria sua non proferant, qui aut omnino non adhibuerunt, aut minus frequentes neque in aliqua dignitate positos aduocatos sibi prospexerunt* (Dig. I, 16, 9, 4). Sobre el desigual acceso a la justicia y los desequilibrios existentes en el ámbito de los derechos judiciales y la gradación de las penas derivados del status social la monografía de referencia sigue siendo la de P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970.

resto de la población (la gran mayoría) dependería de la asignación a su región de *iudices pedanei* o viviría condenada a la triste realidad de la autodefensa³⁵¹.

En principio, las únicas ciudades en las que intervenía el gobernador tomando él la iniciativa, al menos de manera habitual, eran las sedes conventuales. Para que el gobernador interviniese en los asuntos de las otras ciudades, la iniciativa habría de partir de los magistrados de éstas, que debían enviar una legación a la sede de su *conuentus* o a la capital provincial, sin saber si el gobernador tendría tiempo para ellos, en un tipo de relación que se asemeja al que Millar ha propuesto en su estudio de la actividad del emperador³⁵². La injerencia del gobernador en sus asuntos, por tanto, se produciría siempre de manera reactiva y sólo en determinados casos emprendería *motu proprio* alguna acción en ellas; estamos pensando en dos causas principalmente: instrucciones precisas que hubiese recibido en los *mandata* del emperador, o bien en circunstancias excepcionales (la necesidad inmediata de ayudar a una ciudad dañada por un terremoto, por ejemplo). Existía, pues, *a priori* un desequilibrio en el grado de intervencionismo en unas ciudades y otras. Esto podía llevar a las ciudades a tomar la decisión de dirigir la embajada directamente al emperador, pero el gobernador debía tener conocimiento de ello y, en casos en que no actuase en favor de la ciudad ningún vínculo personal o de patronato (más o menos encubierto) o un poderoso magnate local, incluso tenía la capacidad para bloquear su salida hacia Roma³⁵³.

Recientemente, F. Amarelli ha planteado la posibilidad de que existieran viajes del gobernador específicamente dedicados al control ‘administrativo-financiero’ de las ciudades, y, por tanto, al margen de la *tournée* judicial conventual³⁵⁴. De ser cierto, supondría ampliar notablemente la movilidad del gobernador por la provincia y su intervención en las ciudades que no fuesen sedes conventuales, resolviendo una de las

³⁵¹ Millar, “The World of The Golden Ass”, *JRS* 71, 1981, pp. 63-75, aunque el autor es demasiado extremo en sus conclusiones.

³⁵² El llamado modelo de ‘petición y respuesta’: Millar, *The Emperor...* cit. C. Sin embargo, este modelo ha de ser usado con flexibilidad, pues no explica todas las facetas del gobierno imperial, como ha señalado recientemente Ando, “Petition and Response...” cit.

³⁵³ Aunque se refiere concretamente al bloqueo continuado de la apelación a Roma, es muy elocuente el testimonio de la carta de Severo Alejandro al *koinon* de los helenos de Bitinia (222 d.C.). Cf. Oliver, *Greek Constitutions...* cit. n° 276 (= *P. Oxy.* XVII 2104).

³⁵⁴ Amarelli, “Il conuentus...”, cit. p. 4, diferencia tres tipos de viajes realizados por el gobernador: 1) el que efectuaba recién llegado a la provincia para familiarizarse con el territorio y sus problemas; 2) el itinerario por los conuentus con el fin de administrar justicia; 3) “quello che, al di fuori di ogni periodicità, viene compiuto per il controllo amministrativo-finanziario delle attività svolte dai funzionari locali”. Más adelante (p. 5), sin embargo, admite que en la *tournée* judicial el gobernador atendía otros asuntos, por ejemplo, como también dijimos más arriba, los relativos a las obras públicas.

taras del sistema conventual. Lamentablemente, Amarelli no aporta ninguna fuente en la que apoyar su hipótesis.

Con todo, a pesar de que fuesen esporádicas las visitas de los gobernadores a ciudades que no fuesen sedes conventuales, ello no impidió que algunas de ellas eligiesen a algunos de ellos como patronos, lo que revela el establecimiento de relaciones personales con sus élites y, quizá, una intervención en los asuntos de sus ciudades mientras estuvieron en Hispania³⁵⁵. No olvidemos que la ley de la colonia de Urso contemplaba la posibilidad de que el gobernador provincial la visitara, estableciendo el puesto que debería reservársele en los espectáculos públicos³⁵⁶. En el plano administrativo, lo cierto es que este grado de intervencionismo le bastó al Imperio Romano para asegurar la gobernabilidad de sus provincias y a los gobernadores para mantener el orden y la estabilidad en el seno de las comunidades sometidas a su autoridad.

Por otra parte, no se ha conservado ningún testimonio que recoja una queja de una comunidad por una dejación de funciones o una falta de atención por parte del gobernador. Por el contrario, las reclamaciones que le llegaban al *princeps* siempre estaban relacionadas con abusos cometidos por los máximos representantes del poder romano. La condición de sede conventual podía ser una carga onerosa bajo el gobierno de un hombre falto de escrúpulos o codicioso, aunque sus acciones solían afectar al conjunto de la provincia; no en vano las denuncias *de repetundis* eran presentas en Roma por delegados de la provincia y no de determinadas ciudades³⁵⁷. Aun así, los casos de corruptela cometidos por los gobernadores altoimperiales no constituyen la norma general. La pervivencia en las fuentes de noticias de procesos contra gobernadores corruptos no debe llevarnos a engaño acerca de la generalización de estos comportamientos en las provincias. Si autores como Tácito o Plinio el Joven dedican un espacio de sus escritos a tales procesos es porque éstos tuvieron una gran resonancia en su tiempo dada su excepcionalidad y, en el caso del segundo, porque participó en la acusación de forma activa. En cambio, el poder imperial parece haber tenido especial interés en vigilar que no se produjesen malversaciones en las comunidades provinciales. El propio Plinio ha dejado constancia en su correspondencia de varios casos de

³⁵⁵ Véanse los casos de *Ilici*, *Ercauica*, *Segobriga*, *Uxama*, *Sagunto*, *Valentia*, *Nertobriga* o *Malaca*, que trataremos en la Tercera Parte.

³⁵⁶ Cap. 127. Anexo II: nº 72.

³⁵⁷ Plin. *Ep.* II, 11; III, 4, 2; VII, 33.

supuestas malversaciones que implicaban a notables de las ciudades de su provincia que hubo de juzgar, así como del interés que mostraba Trajano por estos asuntos³⁵⁸.

Así, más que el temor a sufrir la rapacidad del gobernador, lo que inducía a Plutarco a criticar que los magistrados de las ciudades griegas recurriesen excesivamente a él, era animar a los jóvenes a asumir las magistraturas ciudadanas, pasada la época de esplendor de la tradición políada helena³⁵⁹. En Occidente, cuyas comunidades habían nacido o se habían desarrollado apoyadas en el modelo cívico (municipal) romano, la injerencia del gobernador se veía con más naturalidad, como parte de un cuadro administrativo general rutinario, tal y como se desprende de las leyes municipales de la Bética. El procónsul no se acercaba a *Irni* todos los años, pero sus magistrados locales sabían que para determinados asuntos que sobrepasaban los límites de su jurisdicción habían de recurrir obligatoriamente a él y entendían que su intervención en los asuntos ciudadanos era necesaria.

³⁵⁸ Por ejemplo: Plin. *Ep.* X, 38; 82, 2.

³⁵⁹ Plut. *Praec. r. p. ger.* 19.

CAPÍTULO 3: LA JURISDICCIÓN “NO CRIMINAL” DEL GOBERNADOR.

En el capítulo anterior, hemos visto que, de manera destacada, el gobernador había de dedicar gran parte de su estancia en la provincia a la administración de justicia, tarea que condicionaba el itinerario anual que realizaba por las sedes conventuales. En efecto, en virtud de su *imperium*, que comprendía, en su sentido técnico más general, la jurisdicción y el mando militar³⁶⁰, tanto los procónsules como los *legati Augusti pro praetore* eran la máxima autoridad de su provincia, el más alto tribunal al que quienes estaban sometidos a su jurisdicción podían acudir. Sin embargo, mientras los procónsules de las provincias públicas o del Pueblo Romano gozaban de auspicios propios³⁶¹ y eran herederos directos de las promagistraturas tardo-republicanas destinadas al gobierno provincial³⁶², los *legati Augusti pro praetore* eran delegados del emperador y, por tanto, sus subordinados legales que recibían de éste –verdadero procónsul de las provincias imperiales– sus poderes para que gobernasen en su nombre, sin tener auspicios propios. Este dato no es banal, pues implicaba que todo éxito militar que cosechasen dependía de los auspicios del *princeps* y era a éste y no a ellos a quien

³⁶⁰ Mommsen, *DPR*, cit. I, p. 24; Nicolet, *Rome et la conquête...* cit. pp. 394-396. Los gobernadores provinciales senatoriales entraban dentro de los magistrados *cum imperio*. Sobre las dimensiones del *imperium* de los gobernadores de Hispania en época republicana véase: “*Imperium* del magistrado provincial: límites administrativos, réditos políticos, conquistas territoriales. El caso hispano”, en J. Santos Yanguas – G. Cruz Andreotti, G. (eds.) *Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: El caso hispano*, Vitoria, 2012, pp. 32-54.

³⁶¹ F. Hurlet, *Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien*, Bordeaux, 2006, pp.161-177.

³⁶² Mommsen, *DPR*, cit. II, p. 320; III, 229 y 277 atribuía a Sila una reforma de la designación de los gobernadores provinciales, entendiendo que a partir de entonces los pretores y cónsules debían permanecer durante su año de mandato en Roma, siendo destinados a las provincias una vez agotado su año de mandato en calidad de promagistrados. J.-L. Ferrary, “La législation comitiale en matière de création, d’assignation et de gouvernement des provinces”, en Barrandon – Kirbihler, *Administrer les provinces...* cit. pp. 33-44, esp. pp. 40-41, partiendo (con correcciones) de A. Giovannini, *Consulare imperium*, Bâle, 1983, pp. 75-101 –que demostró la inexistencia de una *lex Cornelia de provinciis*–, ha situado la verdadera reforma sobre la designación de los gobernadores provinciales en 52 a.C., cuando una ley promovida por Pompeyo (que retomaba un senadoconsulto del año anterior) introdujo un intervalo de cinco años entre el desempeño de una magistratura y el gobierno de una provincia. Esto convirtió a los gobernadores en *priuati cum imperio*. Abolida por César, esta ley fue reestablecida por Augusto en 27 a.C. Véase también del mismo autor “À propos des pouvoirs d’Auguste”, *CCG* 12, 2001, pp. 101-154, magistral artículo en el que expone sus acertadas críticas y modificaciones a la teoría de Giovannini, probando que, contrariamente a lo que éste piensa, también entraron dentro de la reforma pompeyana las provincias consulares (pp. 102-108).

le correspondía el mérito final de su consecución³⁶³. Asimismo, a pesar de que su potestad estaba estrictamente circunscrita a los límites de su provincia, la *iurisdictio* de los procónsules entraba en vigor desde que abandonaban la *Vrbs* hasta que regresaban a ella de la provincia –pudiendo llevar a cabo manumisiones y adopciones–, mientras que la de los *legati Augusti pro praetore* empezaba cuando entraban en su provincia y finalizaba cuando la abandonaban al fin de su mandato³⁶⁴; cuestión ésta de no poca importancia que analizaremos más adelante.

En el ámbito jurisdiccional, el *imperium* dotaba al gobernador de la capacidad de proceder a determinados actos jurisdiccionales y juzgar en primera instancia todos los casos pertenecientes al derecho penal que implicasen tanto a los peregrinos como a los ciudadanos romanos o latinos, así como presidir los procedimientos civiles de mayor cuantía. Prueba de esto último se halla en las leyes conservadas de los municipios flavios de derecho latino de la Bética –principalmente, *Irni*, *Malaca*, *Salpensa*– que muestran en algunos de sus capítulos la precisa delimitación de la competencia de los magistrados locales y del gobernador en los procesos civiles. La *iurisdictio* del gobernador tenía por fundamento último al *imperium*, el cual era más patente en su caso que en el de los pretores de Roma, dado que, a diferencia de la *iurisdictio* de éstos, la suya cubría un espectro más amplio de tareas, llegando a identificar con su propia actividad administrativa. Por ello, antes de entrar a hablar del rol del gobernador en los procesos civiles y penales y en otras acciones jurisdiccionales que se producían en su provincia, resulta necesario detenerse un momento en exponer –de manera sintética y ni mucho menos exhaustiva, cosa que ocuparía una monografía entera– la naturaleza de la *iurisdictio* y su evolución en las provincias.

La iurisdictio del gobernador provincial.

La *iurisdictio* es un concepto fundamental en Roma que, según común acuerdo de la romanística, se puede individuar desde un punto de vista técnico a partir del 367

³⁶³ Véase lo dicho sobre la naturaleza de los *legati Augusti pro praetore* en el apartado dedicado al edicto provincial.

³⁶⁴ *Dig.* I, 16, 2 pr. (Marcian. 1 ins.): *Omnes proconsules statim quam urbem egressi fuerint habent iurisdictionem, sed non contentiosam, sed uoluntariam: ut ecce manumitti apud eos possunt tam liberi quam serui et adoptiones fieri.* Sobre los poderes, símbolos externos (vestimenta, lictores), etc. de los procónsules y legados imperiales: Dio LIII, 13, 1-8. Cf. Mommsen, *DPR*, III, p. 298.

a.C., cuando las leyes Licinio-Sextias atribuyeron a la pretura la suprema función jurisdiccional en Roma que en adelante le será característica³⁶⁵. Sin embargo, como demostró F. De Martino en su estudio clásico sobre el tema, el concepto de *iurisdictio* no se mantuvo monolítico, sino que evolucionó paralelamente al desarrollo histórico sufrido por el sistema procesal romano, adquiriendo –en su adaptación al mismo– unos contenidos y un papel diversos en cada etapa. Así, a su función constitutiva del proceso –esto es, la indicación vinculante de la norma a seguir en cada caso³⁶⁶–, bien en las *legis actiones*, bien en el procedimiento formular que las sucedió desde la *lex Aebutia*³⁶⁷, la *iurisdictio* pasó a corresponderse, durante el Principado, con la propia actividad jurisdiccional del magistrado, a la par que se afirmaba el nuevo procedimiento de la *cognitio extra ordinem*³⁶⁸.

Concretamente en la etapa del derecho romano que nos concierne –la clásica– la *iurisdictio* parece señalar en las fuentes tres actos diversos del magistrado. En primer lugar, designaba, en sentido estrictamente técnico, el antedicho papel del magistrado en el proceso formular, determinando el derecho en base al cual se podía llevar adelante la acción. En segundo lugar, en un contexto menos técnico, también se refería a los actos del magistrado en el proceso *in iure*: *iudicium dare*, *iudicem dare* e *iudicare iubere*. Por último, en sentido más laxo y general, *iurisdictio* equivaldría también a la emanación de las normas contenidas en un *edictum* jurisdiccional³⁶⁹. La primera noción, muy específica y restrictiva, habría caído en desuso en época de Cicerón, manifestando los primeros indicios de una evolución del uso del término que durante el Alto Imperio llegaría a asimilarse no sólo con la función del magistrado en el proceso formular, sino con toda la función del mismo; es decir, con el *ius dicere* en un sentido amplio³⁷⁰.

³⁶⁵ De Martino, *La giurisdizione...* cit. p. 23 ss; G. I. Luzzatto, *Procedura civile romana* II, Bolonia, 1948, p. 166; A. Torrent, *La iurisdictio de los magistrados municipales*, Salamanca, 1970, pp. 83-85.

³⁶⁶ G. I. Luzzatto, *Il problema d'origine del processo extra ordinem*, I, Bologna, 1965, pp. 122-123.

³⁶⁷ *Lex Aebutia de formulis*, mencionada por Gayo IV, 30 y Au. Gell. XVI, 10, 8. Cf. Rotondi, *Leges publicae...* cit. p. 304, quien resume el debate suscitado en torno al contenido y la fecha de esta ley. En lo primero, Rotondi se decanta por seguir a M. Wlassak, *Römische Prozessgesetze*, I, Leipzig, 1888, pp. 171 y 188, quien entendía que se limitaría a permitir la elección entre el proceso *per formulas* y el viejo de las *legis actiones*; en lo segundo, a P. F. Girard, “La date de la loi Aebutia”, *ZSS* 14, 1893, pp. 11 ss., que la sitúa entre el 149 a.C. (es decir, posterior a la *lex Cornelia de repetundis*) y el 125 a.C.

³⁶⁸ De Martino, *La giurisdizione...* cit. Nótese, sin embargo, que, como señaló R. Orestano, “La ‘cognitio extra ordinem’: una chimera”, *SDHI* 46, 1980, pp. 236-247, en puridad, más que de una ‘*cognitio extra ordinem*’, ha de hablarse de ‘*cognitiones extraordinariae*’, pues el término en singular es una categoría jurídico-historiográfica moderna utilizada por comodidad pero que no es usada en las fuentes antiguas.

³⁶⁹ De Martino, *La giurisdizione...* cit. p. 133.

³⁷⁰ De Martino, *La giurisdizione...* cit. p. 149.

La bibliografía acerca de la *iurisdictio* es muy copiosa, dado que todos los autores que se han dedicado al estudio del sistema procesal romano han abordado este concepto, tan ligado, como hemos dicho, al mismo³⁷¹. La rigurosa delimitación de la *iurisdictio* hecha por De Martino conoció un gran seguimiento en las décadas sucesivas, no exento de crítica y de correcciones. Pueden ser señalados aquí tres miembros destacados de la romanística italiana que complementaron su teoría: C. Gioffredi, G. I. Luzzatto y G. Pugliese. Gioffredi, en su contribución al estudio del proceso romano, insistió en que el *ius dicere* no tenía un simple carácter declarativo, sino fundamentalmente constitutivo³⁷². Pugliese, por su parte, se decantó por entender el *ius dicere* como la actividad de “statuire il diritto nel caso concreto”³⁷³ y Luzzatto, finalmente, propuso una concepción de *iurisdictio* amplia, cuya manifestación no se agotaría con la declaración de la norma aplicable³⁷⁴.

Como se puede apreciar, el debate en torno a la *iurisdictio* ha sido tratado por estos y otros autores siempre dentro de estudios acerca del sistema procesal de las *legis actiones* y, en época clásica, con el formular, dejando en un segundo plano al procedimiento de la *cognitio extra ordinem*. Esto se debe a que, como ya señaló De Martino, la generalización de la *cognitio extra ordinem* vino precedida de una concepción cada vez más amplia de la *iurisdictio*, identificada con la función jurisdiccional del magistrado³⁷⁵.

Un problema que ha generado un notable debate es el del fundamento de la *iurisdictio* del magistrado y la relación de ésta con el *imperium*. Mommsen diferenció en términos básicos la *iurisdictio* del *imperium* en que la primera se refería a la actuación de ley del magistrado en el proceso —es decir, su función en la fase *in iure*—, mientras que el segundo se correspondería, en esencia, con el poder soberano, libre de toda atadura legal, aunque atenuado por las sucesivas concesiones de derechos a los

³⁷¹ Un elenco de los principales autores que han tratado el problema de la *iurisdictio* del magistrado en A. Fernández de Buján, “El problema de la naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria a la luz de la experiencia histórica”, *Revista General de Derecho Romano* 5, 2005 (www.iustel.com). Más recientemente: C. A. Cannata, *Profilo istituzionale del processo privato romano II, Il processo formulare*, Turín, 1982; I. Buti, *Il ‘praetor’ e le formalità introduttive del processo formulare*, Nápoles, 1984.

³⁷² C. Gioffredi, *Contributi allo studio del processo civile romano*, Milán, 1947, pp. 10-43, quien señala, a propósito de la manifestación del *ius dicere* en los *tria verba do (iudicem), dico, addico (rem)* que “in tali provvedimento (...) non v’è alcuna enunciazione di norme, bensì manifestazione di volontà, funzione dunque non dichiarativa, ma volitiva” (p.11).

³⁷³ G. Pugliese, *Il processo civile romano II: Il processo formulare*, Roma, 1963, pp.155-161.

³⁷⁴ Luzzatto, *Procedura civile romana II*, cit. p. 196 ss.

³⁷⁵ *Vid. supra*.

ciudadanos³⁷⁶. Sin embargo, con esto el problema del fundamento de la *iurisdictio* no quedó resuelto. Hasta De Martino, dos teorías antagónicas conocieron una importante difusión. Someramente, planteaban cada una lo siguiente: Por un lado, Leifer propuso que la *iurisdictio* era un mero aspecto del *imperium*, en concreto su vertiente jurisdiccional³⁷⁷; por otro, Lauria estableció una clara distinción entre ambos, descartando su interconexión e identificando la *iurisdictio* con el acto de declaración de los *tria verba solemnia* (*do, dico, addico*)³⁷⁸. De Martino, por su parte, intentó hallar una vía intermedia, más moderada, y planteó que, si bien la *iurisdictio* del magistrado tenía por fundamento el *imperium*, se fue configurando como un conjunto de atribuciones cada vez más específicas y autónomas³⁷⁹. Así, frente al *imperium* del que emanaba, que era un conjunto de potestades que en su totalidad, según la teoría clásica, no se podía transmitir, la *iurisdictio* era una única potestad que sí se podía delegar³⁸⁰. Esta teoría ha sido seguida, con ciertos matices, por autores posteriores como Luzzatto³⁸¹, quien intentó arrojar luz sobre el proceso de individuación de la *iurisdictio* con respecto al *imperium*, señalando que en él se fueron distinguiendo varias categorías de actos magistratuales: “atti fondati meramente sull’*imperium*, atti fondati sulla semplice *iurisdictio*, e atti, infine, che, pur essendo qualificati *magis imperii quam iurisdictionis*, hanno alcune delle caratteristiche degli atti di giurisdizione, e ai quali, quindi, possono riferirsi talune delle regole proprie di questi ultimi”³⁸².

Se puede concluir, por tanto, que la *iurisdictio*, si bien se deriva indiscutiblemente del *imperium*, conoció un fuerte proceso de individuación (esto es, de

³⁷⁶ Mommsen, *DPR* cit, I, p. 212 ss.

³⁷⁷ F. Leifer, *Die Einheit des Gewaltgedankes im römischen Staatsrecht*, Munich-Leipzig, 1914, p. 68 ss.

³⁷⁸ M. Lauria, “*Iurisdictio*” en *Studi in memoria di P. Bonfante nel XL anno d’insegnamento*, II, Milano, 1930, pp. 479-538, p. 481 ss.

³⁷⁹ De Martino, *Storia della costituzione romana*, Napoli, 1974.

³⁸⁰ De Martino, *La giurisdizione*, cit., pp. 258-264, quien utiliza las siguientes fuentes: Paul. *17 ad Ed.* (*Dig.* V, 1, 12, 1); Ulp. *2 de off. quaest.* (*Dig.* II, 1, 3) y Pap. *1 quaest* (*Dig.* I, 21, 1, 1). De Martino (pp. 262-263) entiende que en estos pasajes Ulpiano y Papiniano se ocupaban de examinar un mismo problema, la concesión de poderes. Sin embargo, en un magnífico análisis de las fuentes, muestra que el texto de Ulpiano está muy alterado por los compiladores postclásicos, a los que pertenece el uso de los términos *merum imperium* e *imperium mixtum*, ajenos a la teoría clásica. Ulpiano, a juicio de De Martino, probablemente examinaba las varias emanaciones del *imperium* (entre ellas la *iurisdictio*) y distinguía los actos vinculados al proceso civil (como la *bonorum possessio*) y aquéllos ajenos a la *iurisdictio*. Por su parte, el texto más original de Papiniano (“*qui mandatam iurisdictionem suscepit, proprium imperium non habet, sed imperio eius qui mandavit iurisdictionem utitur*”) deja claro que la delegación de la *iurisdictio* emanaría de los magistrados *cum imperio*.

³⁸¹ Luzzatto, *Procedura civile romana* II, cit. 186 ss. Por su parte, M. Lemosse, *Cognitio. Étude sur le rôle du juge dans l’instruction du procès civil antique*, Paris, 1944, pp. 181-182, esp. nt. 3, pocos años antes de Luzzatto, seguía manteniendo una postura muy cercana a Leifer.

³⁸² Luzzatto, *Procedura civile romana* II, cit. p. 191.

clarificación de sus contornos y límites), paralelo a la evolución del sistema procesal romano, lo que conllevó que se concibiese en un modo cada vez más autónomo o, si se prefiere, que ella misma fuese tomada por el fundamento más directo de un ámbito concreto de la actividad de los magistrados (de los pretores, con más exactitud) de Roma y de los gobernadores de las provincias: el jurisdiccional. Después de la *lex Iulia iudiciorum priuatorum*, aprobada en el 17 a.C., el término *iurisdictio* se empleó para señalar la actividad procesal del magistrado en el ámbito del procedimiento formulario que esta ley asentó –eliminando definitivamente las *legis actiones*–, si bien ya desde el principado de Augusto comenzó a desarrollarse de forma paralela, como se ha dicho antes, el nuevo procedimiento de la *cognitio extra ordinem*, cuyo fundamento legal parece provenir del poder que se le concedió a Octaviano en el 30 a.C. para juzgar todas las apelaciones³⁸³. En el siglo II d.C., la concepción unitaria del proceso llevó a que la *iurisdictio* se identificase con todos los actos habidos del inicio al fin del proceso y abarcara todas las controversias, civiles, penales y administrativas³⁸⁴. Se puede decir que el predominio de la *cognitio extra ordinem* (y, por extensión, del más amplio significado del término *iurisdictio*) se produjo primero en las provincias, dado que fue el procedimiento usado por los gobernadores en los procesos penales desde los inicios del Principado. En los procesos civiles, en cambio, la generalización de la *cognitio extra ordinem* en las provincias llegaría más tarde, manteniéndose en un principio el procedimiento formular³⁸⁵.

³⁸³ Dio LI, 19, 7. Cf. D. Mantovani, “Il diritto da Augusto al Theodosianus”, en Gabba, E. – Foraboschi, D. – Mantovani, D. – Lo Cascio, E. – Troiani, L. *Introduzione alla storia di Roma*, Milán, 1999, pp. 490-503, esp. p. 493.

³⁸⁴ A. Fernández Barreiro – J. Paricio, *Fundamentos de derecho privado romano*, Madrid, 2011, pp. 46, 51 y 94; Mantovani, “Il diritto...”, cit., pp. 490-503. Es muy elocuente que cuando Suetonio narra el episodio del litigio por la propiedad de una mula que, como procónsul de África, vio Galba valiéndose del procedimiento de la *cognitio*, se refiera a la actividad de éste como *iurisdictio*: *At in iure dicendo cum de proprietate iumentum quaereretur, leuibus utrimque argumentis et testibus ideoque difficili coniectura ueritatis, ita decreuit ut ad lacum, ubi aduari solebat, duceretur capite involuto atque ibidem reuelato, eius esset, ad quem sponte se a potu recepisset*. Suet. *Galba* 7. Galba gobernó África en 44/46 a.C.: Thomasson, *Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian*, Estocolmo, 1996, p. 35.

³⁸⁵ Para una visión general del nuevo orden judicial que existió bajo el Principado véase: H. Galsterer, “The Administration of Justice”, *CAH*² X, pp. 397-413; Mantovani, “Il diritto...” cit., pp. 491 y 500.

El gobernador y los procesos no criminales³⁸⁶.

Los gobernadores provinciales se ocupaban de los procesos no criminales de mayor cuantía que se produjeran entre ciudadanos romanos, entre un ciudadano romano y un peregrino y entre dos ciudadanos de comunidades diferentes³⁸⁷. Asimismo, les competían de manera exclusiva los conflictos entre comunidades, muchas veces de índole territorial, que desembocaban en procesos judiciales³⁸⁸.

En las leyes municipales flavias de la Bética –al igual que en las de la colonias, como se observa en Urso–, gran parte de sus capítulos estaba relacionada con la tipificación de las competencias de sus magistrados (y decuriones) y los límites de su jurisdicción³⁸⁹. La mayor parte de las tareas expuestas en la ley eran competencia exclusiva de los *duumviri iure dicundo*, máxima magistratura municipal, cuya titulación ya anuncia su vocación jurisdicente. Los capítulos 84, 85, 86 y 89 ofrecen una información muy valiosa acerca de su actividad en el ámbito judicial y, en concreto, de los límites que marcaban la divisoria entre su *iurisdictio* y la de *qui prouinciae praerit* (es decir, el procónsul de la Bética).

En primer lugar, es sumamente indicativo de la relevancia que para el funcionamiento interno de un municipio latino (y romano) tenía el poder jurisdiccional del gobernador el hecho de que el edicto anual de éste fuese tenido, junto con la propia ley municipal, por el fundamento de toda acción judicial habida en esa comunidad. Como se dice en el capítulo 85 de la ley, el edicto jurisdiccional del gobernador debía estar expuesto públicamente y los magistrados municipales habían de administrar

³⁸⁶ Uno de los problemas a los que el historiador se enfrenta es el de la difícil tarea de encajar la casuística del mundo antiguo en los esquemas conceptuales de hoy en día. Hemos preferido hablar de procesos ‘no criminales’ y no de procesos civiles con el fin de evitar malos entendidos, puesto que no siempre las partes fueron dos individuos, sino dos comunidades o una comunidad y un individuo, lo que iría en contra de la definición actual de derecho civil. Además, en la antigua Roma el *ius ciuile* era el derecho de los ciudadanos romanos, y en las provincias una de las partes o ambas estuvo formado, en no pocas ocasiones, por *peregrini*.

³⁸⁷ Mommsen, *Le droit pénal...* I, cit. p. 272, quien traza un paralelismo con los pretores urbanos. Tanto los procónsules como los *legati Augusti pro praetore* tenían el mismo *imperium* ‘jurisdiccional’ (p. 268).

³⁸⁸ Cuando gobernó la Hispania Ulterior en 61 a.C. Julio César se preocupó, entre otras cosas, de solucionar las disputas que enfrentaban a las comunidades de su provincia. Cf. Plut. *Caes.* 12, 2: θέμενος δὲ τὰ τοῦ πολέμου καλῶς, οὐ χεῖρον ἐβράβευε τὰ τῆς εἰρήνης, ὁμόνοιάν τε ταῖς πόλεσι καθιστὰς καὶ μάλιστα τὰς τῶν χρεωφειλετῶν καὶ δανειστῶν ἰώμενος διαφοράς.

³⁸⁹ Véanse los capítulos de la *lex Irnitana* 18, 19 (ediles), 20 (cuestores), 24 (prefecto), 25 (prefecto), 27 (derecho de veto de los magistrados), 28, 29, 31, 41, 42 (decretos de los decuriones), 45, 46, 47, 49, 62 (política edilicia, bajo el control de los decuriones), 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 86, 89. Excepto los señalados, el resto de capítulos hacen referencia sólo a los duoviros. *Lex Vrsonensis*: Cap. 65, 69, 91, 96 (asuntos financieros), 75 y 77 (política edilicia), 95 (jurisdicción).

justicia en base al mismo. Asimismo, tenían la obligación de ajustarse a las directrices contenidas en sus otros edictos, interdictos³⁹⁰, *formulae iudicariae* y a sus decisiones en torno a las *sponsiones*³⁹¹, estipulaciones³⁹² y prescripciones varias³⁹³.

Asimismo, el capítulo 86 de la *lex Irnitana* nos revela que, dentro de las cláusulas relativas de la *iudicis datio*, el gobernador también dedicaba un espacio a la fijación del número de jueces de los que dispondría anualmente este municipio³⁹⁴, cuyo ejemplo es extrapolable a los demás municipios latinos y, seguramente, a los de ciudadanos romanos y las colonias de la provincia. La relevancia de estos aspectos viene demostrada por la gran atención que se le presta en la ley de Irni: en los capítulos 86, 87 y 88 se establecen las normas y requisitos que habían de tenerse en cuenta en la elección y recusación de los jueces que impartirían justicia en el municipio, bien en calidad de *iudex unus*, bien en la de *reciperatores* (*sic*), que parecen ser elegidos de una única lista. En el 89 se especifica para qué asuntos debía nombrarse un *iudex* y para

³⁹⁰ Los *interdicta* eran “ordinanze di urgenza” emitidas por el magistrado *cum imperio* con el fin de evitar, en una controversia, la *litis contestatio* y el procedimiento *apud iudicem* cuando se trataba de determinados casos evidentes. Era, por tanto, un recurso utilizado para resolver situaciones que podían ser solventadas en poco tiempo sin tener que pasar por el procedimiento habitual. Cf. A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli, 1981, pp. 232-233.

³⁹¹ Las *sponsiones* formaban parte del expediente general de la *stipulatio*, que era el contrato verbal más importante. Consistía en un intercambio contextual de pregunta y respuesta entre los futuros prestamista y deudor, expresado en la fórmula “*spondes dari centum (o aliquid fieri)?; spondeo*”. Quien preguntaba era el “*reus stipulandi*” y quien respondía, el “*reus promittendi*”. La *stipulatio* fue adecuada a diversas necesidades como la constitución de la obligación de *dare* (“*stipulationes in dando*”), o de *facere* (“*in faciendi*”), la promesa de la dote al marido (“*promissio dotis*”), la promesa de una cantidad indeterminada de prestaciones (“*stipulationes incerti*”); o garantizar subsidiariamente que la obligación de un tercero sería cumplida (“*sponsio*”, “*fideipromissio*”, “*fideiussio*”). Estas últimas estaban abiertas a los peregrinos. Cf. Guarino, *Diritto privato*... cit. pp. 720, 723 y 731-733.

³⁹² A lo dicho en la nota anterior, súmense las denominadas *stipulationes pretoriae* (también llamadas *cautiones*). Eran remedios cautelares consistentes en *stipulationes* que el pretor, a petición del interesado, ordenaba *contraer* a un individuo bajo la amenaza de llevar contra él una acción desfavorable, como una *denegatio actionis* o una *missio in possessionem*. La obligación era de índole económica, y el destinatario de la orden debía pagar una suma de dinero a la otra parte como garantía previsorio de un evento temido. Cf. Guarino, *Diritto privato*... cit. p. 235.

³⁹³ El texto completo en Capítulo 1.

³⁹⁴ *Lex Irnit. cap. 86: R(ubrica). De iudicibus legendis proponendis. / Qu[i II]uiri in [e]o municipio i(ure) d(icundo) prae(runt de communi sententia, / aut, si u[ter eo]rum aberit, aliaue quae causa ei inciderit quo / minus [eam] rem agere possit, alter, in diebus quinque proxi-/ [mis qui]bus iure dicundo praesse coeperit poteritque, iudi-/ [ces legi]to ex decurionibus conscriptisue tot quod ei uidebi-/ [tur qui ei] prouinciae prae(rit, qui eo anno non debebunt / [munere alio simul fu]ngi, ex reliquis municipibus qui praeter / [dec]urion[es conscriptos]ue ingenui erunt tot quod ei uidebitur / [q]ui ei pro[u]inciae prae(rit, non minores quam XXV annorum, / quibus ip[s]is quorumu[e] cui[u]s patri auoue paterno proauoue / patern*o* aut patri cuius in potestate erit non minor quam HS (sestertium) V (milia)/ res sit, quos maxime idoneos arbitratur l[e]gique iudices pro <re> com-/muni municipum eius municipi ((ese)) iurauerint coram decurionibus conscriptisue non paucioribus quam decem ...* (El texto epigráfico continúa, tratando los requisitos que se debían cumplir para ser nombrado juez). Anexo II: nº 63.

cuáles unos *reciperatores*³⁹⁵, en el 90 y 91 se regula las condiciones de comparecencia ante el tribunal constituido y en el 92 se establece en qué días no se podía juzgar (festividades, días vinculados a la familia imperial, días nefastos, respeto del calendario agrícola...). De la supervisión de todo ello debían encargarse los duoviros municipales, y en la ley se precisa que el álbum de jueces había de estar listo en los primeros cinco días de su mandato, lo que confirma que el gobernador habría de señalar el número de jueces disponible para cada municipio en su edicto jurisdiccional³⁹⁶. Ello tuvo sin duda una repercusión no desdeñable en la injerencia del gobernador en los asuntos judiciales municipales menores.

Todo ello es natural y se corresponde con el funcionamiento rutinario de la administración provincial. Sin embargo, cabe preguntarse por qué era competencia del gobernador tal cosa y no de los duoviros. Las razones que pudieron llevar a encargar al gobernador la determinación del número de jueces que habían de ser elegidos en cada municipio se debe, a nuestro juicio, a dos motivos. Por un lado, la necesidad de que una autoridad superior y externa al municipio fijase de manera imparcial un número que podía ser modificado por los magistrados locales con el fin de favorecer a sus allegados descargándolos de un *munus* que resultaba oneroso, ya que ocupaba mucho tiempo y podía traer quebraderos de cabeza, o bien de arrebatar ese honor a quien quisiese ostentarlo³⁹⁷. Por otro lado, el gobernador, como veremos, si no decidía ver el caso en persona a través de la *cognitio extraordinaria*, debía asignar un juez o un tribunal a la causa dentro del procedimiento formular (o del extraordinario a partir del siglo II), y para ello debía contar con listas de jueces romanos residentes en la provincia³⁹⁸. En vez de elaborar una propia *ex nihilo*, en la Bética podría haber servido de las listas de jueces de cada municipio y colonia (plenamente capacitados en virtud de los exigentes requisitos recogidos en la ley municipal) para constituir la suya propia –si es que, como en el caso de la Cirenaica, tenía una y no se valía de las ya existentes³⁹⁹– y por eso era aconsejable

³⁹⁵ Siempre tomando como referencia la cantidad límite de 1000 sestercios y remitiendo al modelo de lo que se hace en Roma, lo cual sólo podía ser conocido en la provincia a través del edicto jurisdiccional del gobernador.

³⁹⁶ Lamberti, *Tabulae Irnitanae*... cit. p. 169.

³⁹⁷ Plin. *Ep.* X, 58.

³⁹⁸ *Dig.* I, 16, 9 (Call. 1 *de cogn.*).

³⁹⁹ En Cirene, en cambio, era competencia del gobernador la elaboración misma de la lista de jueces a la que él podía derivar los casos que se le presentaban. Cf. Primer Edicto de Cirene: Oliver, *Greek Constitutions*... cit. n° 8.

que él mismo fijase el número de los que podía tener cada uno de ellos⁴⁰⁰. Asimismo, Gayo dice que la *lex Aemilia Aelia Sentia* del 4 d.C. establecía que los *recuperatores* estuviesen siempre presentes cuando el gobernador acudía a un *conuentus iuridicus*⁴⁰¹. Estos jueces también podían formar parte del *consilium* del gobernador⁴⁰².

La intervención del gobernador en el ámbito jurisdiccional era, por tanto, determinante ya desde su llegada a la provincia y se canalizaba, como la del pretor en Roma, en una serie de soluciones jurídicas y directrices prácticas contempladas en su edicto general. Por ello, la ley municipal necesitaba complementarse con el edicto, pues se nutría de muchas de sus cláusulas, al igual que de las pertenecientes a la *lex Iulia iudiciorum priuatorum* del 17 a.C.⁴⁰³.

Ha de ser señalado, además, que las *stipulationes (pretoriae)*, junto con las *restitutiones in integrum* y los *interdicta*, formaban parte de lo que los juristas severianos denominaron como actos '*magis imperii quam iurisdictionis*', que abarcaban una serie de providencias magistratuales inherentes a la tutela de situaciones *de facto*, no *de iure*. De estos remedios pretorios quedaban excluidos los magistrados locales, que tenían una *iurisdictio* limitada dado que no contaban con el *imperium* necesario para realizar determinados actos⁴⁰⁴. La idea de unos actos que pertenecían más al *imperium* que a la *iurisdictio* se debe a que, en el contexto de una ampliación de la concepción de *iurisdictio* como consecuencia de la afirmación del procedimiento de la *cognitio extra ordinem*, los juristas de época de los Severos vieron la necesidad de justificar jurídicamente las limitaciones de la *iurisdictio* de los magistrados locales recurriendo al *imperium*. Con ello, pretendieron salvar la idea *iurisdictio* municipal a la par que la autoridad suprema del pretor⁴⁰⁵.

⁴⁰⁰ La existencia de un álbum de jueces ya provenía de la República: Cic. *Pro Flacco* 11: '*e numero recuperatorum*'.

⁴⁰¹ Gai. *Inst.* I, 20.

⁴⁰² Fournier, *Entre tutelle...* cit. pp. 34-39.

⁴⁰³ W. Simshäuser, "La juridiction municipale a la lumière de la lex Irnitana" *RHDFE* 67, 1989, pp. 619-650, esp. pp. 624-626; D. Johnston, "Three Thoughts on Roman Private Law and the lex Irnitana", *JRS* 77, 1987, pp. 62-77; esp. p. 64; H. Galsterer, "Municipium Flavium Irnitana: A Latin Town in Spain", *JRS* 78, 1988, pp. 78-90, esp. p. 88; Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit. pp. 145-146.

⁴⁰⁴ Dig. L. 1, 26 pr.-1 (Paul. 1 ad ed.): *Ea, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest*. Torrent, *La iurisdictio...* cit., pp. 97-110, quien señala más adelante (p. 98) que, no obstante, la *lex Rubria de Gallia Cisalpina* autorizaba a los magistrados municipales a tomar determinadas providencias relacionadas con estos actos.

⁴⁰⁵ Luzzatto, *Il problema d'origine...* cit. p. 125; Torrent, *La iurisdictio...*, cit. pp. 101-103. Como recuerda este autor (p. 104), el *imperium* era privativo de los magistrados *maiores* de la *Urbs* (cónsules, pretores, *dictator*). Cf. Festus, p. 50: *Cum imperio est dicebatur apud antiquos, cui nominatim a populo dabatur imperium*.

El capítulo 84 –que no por casualidad antecede al 85– es muy rico en información en torno a la limitación de los poderes judiciales de los magistrados locales y la intervención del gobernador en la esfera jurisdiccional municipal⁴⁰⁶. En él se establece que los duoviros de Irni sólo podrán tratar los asuntos que no superen los 1000 sestercios⁴⁰⁷, y se especifican de manera exhaustiva los tipos de causas que no les competían por su naturaleza (*ratione materiae*), aun cuando fuesen inferiores a esa suma. Así, quedaban fuera de su jurisdicción los asuntos que tuviesen que ver con la condición jurídica de un individuo, acciones *de ui*, de *fiducia* o *mandatum*, depósitos, tutelas, cuestiones de dolo o fraude, el *furtum* cometido por una persona libre o por un esclavo con implicación de su dueño y las causas que implicasen *iniuria* para una persona libre (poniendo en riesgo su libertad). Todas estas causas entraban dentro de la jurisdicción del gobernador. Sin embargo, la ley recoge una posibilidad de que los duoviros juzgasen las causas superiores a 1000 sestercios: cuando ambas partes quisiesen que fuese vista su causa localmente por uno de estos magistrados. Entonces podían juzgarla, siempre y cuando no existiera una de las excepciones antedichas, que afectaban a las causas iguales, inferiores o superiores a los mil sestercios⁴⁰⁸.

Al final del capítulo, se dice que los ediles, al igual que los duoviros, tengan la capacidad de *iudicis arbitri re/ciperatorum ex eodem genere, iudicique datio*

⁴⁰⁶ *R(ubrica). Quarum rerum et ad quantam pecuniam in eo municipio i(uris) d(ictio) sit. // Qui eiu*s* municipi municipes incolaeue erunt q(ua) de(e) r(e) ii inter se suo alte-/riu[s]ue nom*i*n<e> qui munic*eps* incola((e))ue sit priuatim intra fines eius / municipi agere petere persequi uolent, quae res HS (sestertium) ∞ (mille) minorisue / [eri]t, neque ea res diuidua quo fraus huic legi fieret facta sit fiatue / aut de capite libero, deue maiore pecunia quam HS (sestertium) ∞ (mille) praeiudicium / futurum erit sponsioue (([s]ponsioneue)) facta futuraue erit, neque / ea res agetur qua in re u*i* factum sit quod non ((eius)) ex interdicto /decretoue iussue eius qui iure dicundo praeerit factum sit, ne-/que de libertate, neque pro socio aut fiduciae aut mandati qu-/od d(olo) m(alo) factum esse dicatur, aut depositi, aut tutelae cum quo / qui((s)) suo nomine quid earum rerum fecisse dicatur, aut lege / Laetoria, aut de sponsione quae in probum facta<m> esse dic*a*-/tur, aut d(e) d(olo) m(alo) et fraude, aut furto cum homine libero libera-/ue, aut cum seru[o] d[um i]d <furtum> ad dominum dominamue perti-/nebit, aut iniur[iaru]m cum homine libero liberaue / agetur, eaue de re [aliquid] praeiudicium futurum sit de capite libero: de is re[bus etia]m, si uterque, inter quos ambigeretur, / uolet, de ceteris quo[que o]mnibus de quibus priuatim age-/tur neque in iis prae[iudici]um de capite libero futurum / erit, et omnium rerum q(uae) [s(upra) s(crupta) sun]t de uadimonio promittendo in eum / lo[cum q]uo is erit qui ei prouinciae praeerit, futurusue esse ui-/debitur eo die in quem ut uadimonium promittatur postula-/bitur, Huir(i) qui ibi i(ure) d(icundo) praeerit iuris dictio iudicis arbitri / recuperatorum ex is qui ibi propositi erunt, iudici datio / addictio, it[e]m eadem condicione, de eo quod HS (sestertium) ∞ (mille) minoris-/ue erit, aedilis qui ibi erit iuris dictio, iudicis arbitri re-/ciperatorum ex eodem genere, iudicique datio addictioq(ue) / esto. Anexo II: n° 61.*

⁴⁰⁷ La misma cantidad aparece estipulada en el cap. 69 de la *lex Malacitana (De iudicio pecuniae communis)* como límite para la jurisdicción de los magistrados locales. Cf. T. Splitz, *Lex municipii Malacitani*, Munich, 1984.

⁴⁰⁸ A. Rodger, “The Jurisdiction of Local Magistrates: Chapter 84 of the Lex Irnitana”, *ZPE* 84, 1990, pp. 147-161, esp. p. 150.

addictio(ue) esto. Esta cláusula final no viene a decir que los ediles tuviesen la misma jurisdicción que los duoviros, sino que hasta la cantidad de 1000 HS podían realizar del mismo modo (esto es, con las mismas restricciones) la *iurisdictio*, siempre que hubiera un acuerdo previo de las partes. Por lo general, la jurisdicción de los ediles tenía como límite los 200 sestercios⁴⁰⁹. Y a diferencia de los duoviros, bajo ninguna circunstancia podían ver causas superiores a los 1000 HS⁴¹⁰.

Estas disposiciones en torno a los límites pecuniarios de la jurisdicción de los magistrados de Irni refleja un sistema que, por un lado, potenciaba la autogestión del municipio y, por otro, contemplaba la injerencia judicial del gobernador cuando se produjesen condicionantes especiales o una de las partes en litigio no quisiera que la causa fuese vista localmente a partir de 1000 HS. Es decir, en ella se plasma la búsqueda de un equilibrio entre los derechos de la comunidad y los de los particulares, cuestión que siempre preocupó al poder imperial. En dos cartas de la correspondencia de Plinio con Trajano relativas a deudas contraídas por particulares con su ciudad, el emperador le señalaba que, a pesar de que era necesario velar por la salud de las cuentas públicas, no se debía favorecer a las comunidades en detrimento de los particulares⁴¹¹. El mismo principio está vigente en este capítulo de la *lex Irnitana*: los casos que implicasen sumas de dinero superiores a los 1000 sestercios, una o ambas partes tenían la posibilidad de acudir al gobernador, que aparece como una figura de consenso que garantizaba en su tribunal la ecuanimidad que podía faltar en los tribunales municipales.

Este recurso al gobernador no atentaba en absoluto contra la autonomía municipal, sino que garantizaba una suerte de seguridad jurídica para sus ciudadanos. La *lex Irnitana* tipifica un sistema perfectamente organizado y jerarquizado en el que coexistían en armonía los tribunales municipales y el del gobernador. En Oriente, las amargas quejas de Dión de Prusa y Plutarco sobre la derivación de los asuntos ciudadanos al tribunal del gobernador prueban que se trataba de una costumbre generalizada que estos dos autores veían como signo de la decadencia de las instituciones y el autogobierno de las *póleis*⁴¹². Su opinión, empero, no era la predominante entre sus coetáneos, que veían necesario acudir al gobernador siempre

⁴⁰⁹ *Lex Irni*. Cap. 19.

⁴¹⁰ Rodger, "The jurisdiction...", cit., p. 151.

⁴¹¹ Plin. *Ep.* X, 109 y 111.

⁴¹² Plut. *Praec. r. p. ger.* 19; Dio Chrys. *Or.* XLV, 8; XLVIII, 3.

que fuera pertinente e incluso como una forma de garantizarse un juicio ecuaníme⁴¹³. En Occidente, la injerencia del poder imperial era vista con mayor naturalidad, dado que pocas eran las comunidades con una cultura jurídica de entidad y una tradición cívica anterior al dominio romano: Roma trajo para la gran mayoría de comunidades una estructura cívica, la municipal, cuyo esquema esencial implantó en todas las provincias, dotando al Occidente de cierta uniformidad jurídica que facilitaba el cometido de los gobernadores, lejos de las cautelas que debían tener con los inveterados derechos de las comunidades griegas.

La posibilidad que se contempla de que los duoviros viesan causas cuya cuantía fuese superior a 1000 HS si ambas partes así lo deseaban (y no existía ninguna de las limitaciones antedichas) no es reflejo, en nuestra opinión, de la defensa de la autonomía municipal, sino que refrenda la antedicha política romana que pretendía proporcionar las mayorías garantías procesales posibles a los provinciales al tiempo que tendía a simplificar el acceso a la justicia y su administración. El gobernador ya tenía que atender, por defecto, a un número elevado de causas de manera exclusiva, en virtud de su *iurisdictio* y, en fin, de su *imperium*. Cuantas más causas se pudiesen resolver en sede local sin su concurso, más tiempo podría dedicar a los casos de mayor gravedad; es decir, los que tuviesen una influencia decisiva en el orden provincial (las causas criminales y los conflictos entre comunidades). De hecho, el gobernador podía decidir remitir a un *iudex datus* o *iudex pedaneus*, o a un grupo de jueces designados por él la resolución de estas causas no criminales cuando lo creyese necesario, que probablemente escogía del álbum del municipio en cuestión del de otro neutral⁴¹⁴. Como recuerda el jurista Juliano, Adriano solía decir que los gobernadores, en las causas que les competían, no tenían la obligación de juzgarlas en persona, sino que podían nombrar a un juez que se ocupase en su lugar de ellas⁴¹⁵. En el siglo II ese juez

⁴¹³ F. Hurlet, “Tra giurisdizione cittadina e giurisdizione imperiale: La sfera di competenza del proconsole”, *Studi Classici e Orientali* 56, 2010, pp. 231-253, esp. p. 239.

⁴¹⁴ G. P. Burton, *Powers and Functions of Proconsuls in the Roman Empire, 70-260 A.D.*, Oxford, 1973, p. 122; Fournier, *Entre tutelle...* cit. p. 33. La práctica de nombrar jueces locales provenía de época republicana: Durante su gobierno de Asia, Valerio Flaco había nombrado unos *recuperatores* que juzgasen la reclamación de dinero que el particular Hermipo le hacía al estafador Heraclides, ambos de Temnos (Cic. *Pro Flac.* 46-49).

⁴¹⁵ Jul. *1 dig.* = *Dig.* I, 18, 8. Este principio es también recogido por Call. *1 de cogn.* (= *Dig.* I, 18, 9).

seguramente actuaría en el marco de la *cognitio extra ordinem*. También podía confiar su resolución al legado que tuviese a su mando⁴¹⁶.

Un importante ejemplo epigráfico procedente de la provincia Hispania Citerior nos ofrece un ejemplo de la actuación de un *legatus iuridicus* que sustituyó al gobernador en cuestiones relativas a la jurisdicción de un municipio, y muestra hasta qué punto los magistrados locales interaccionaban con los representantes del poder central y les consultaban dudas acerca de los límites de su propio poder jurisdiccional. Nos referimos a la denominada *epistula* de Claudio Quartino, que fue *legatus iuridicus* de la Citerior aproximadamente entre 117-122⁴¹⁷:

*Claudius Quartinus / Huiris Pompe[lonensibus] salutem / et ius magistratus uestri /
exequi aduersus contumaces / potestis et nihilominus qui / cautionibus accipiendis
de/sunt sciant futurum ut non / per hoc tuti sint nam et non / acceptarum cautionum
peri/culum ad eos respiciet et quid/quid praesentes quoque egerint / id communis oneris
erit bene / ualete dat(um) Non(is) Octubri(bu)s(!) Ca/llogori Imp(eratore) Caes(are)
Traiano / Hadriano Aug(usto) III co(n)s(ule).*⁴¹⁸

En esta carta, escrita en 119 en *Calagurris*, este *legatus iuridicus* ha de resolver una duda que le han planteado los duoviros del municipio de Pompaelo acerca de su propia capacidad jurisdiccional para intervenir en un proceso de contumacia; es decir, en el juicio de aquellos que no comparecían (como era obligatorio) en un proceso judicial en el que estaban encausados. Como señaló F. Camacho-Evangelista, la duda estaba justificada dado que los duoviros de un municipio, sujetos al sistema formulario, no podían resolver una situación de contumacia, que, además, implicaba el embargo de los bienes del culpable en favor de la otra parte⁴¹⁹. Quartino les indica que sigan adelante con el proceso y que los contumaces serán responsables de no haber entregado la caución exigida en la fase *in iure* y no podrán escapar a los efectos que la sentencia tenga sobre ellos⁴²⁰.

⁴¹⁶ Ulp. 1 *de off. procos.* (Dig. I, 16, 4, 6).

⁴¹⁷ *Fasti Hispanienses* p.79. En la carta nada se dice de su cargo de *iuridicus*, pero lo sabemos gracias a *CIL* VI, 1567 (Ostia) y *CIL* XIII, 1802 (*Lugdunum*).

⁴¹⁸ *CIL* II, 2959.

⁴¹⁹ F. Camacho-Evangelista, "La epistula de Claudio Quartino y el proceso de contumacia en las provincias (provincia Tarraconense)", *RIDA* 11, 1964, pp. 299-319, esp. p. 313.

⁴²⁰ Camacho-Evangelista, *Idem*, pp. 315-319. Sobre la '*cautio*' véase: *Diz. Giurid.* p. 93.

A pesar de tratarse de un *iuridicus*, su actuación en este tipo de cuestiones no se diferenciaría de la del propio gobernador. Como éste –y al igual que los magistrados municipales– el *iuridicus* tendría al edicto jurisdiccional del gobernador como marco jurisdiccional de referencia, aunque en este caso decidió de manera extraordinaria. Su decisión de permitir a los duoviros continuar con el proceso abierto a pesar de la contumacia, revelaría dos cosas: Por un lado, la decadencia de la *litis contestatio* privada en favor del protagonismo absoluto del magistrado, en una clara contaminación de los modos de la *cognitio extra ordinem* en el procedimiento formulario⁴²¹. Por otro, la tendencia de las autoridades enviadas por el poder central romano a evitar una sobrecarga de trabajo. En primer lugar, la presencia de un *iuridicus* en *Calagurris* muestra que en el siglo II el volumen de cuestiones jurisdiccionales a las que debía hacer frente el gobernador en esta región del valle del Ebro era excesivo para el tiempo que pasaba, durante su *tour* provincial, en *Caesaraugusta*, sede del *conuentus* correspondiente. En segundo, que el propio *iuridicus* tenía instrucciones del gobernador al que servía de facilitar la labor jurisdiccional de los magistrados municipales dentro de los límites estipulados por la ley. En último lugar, la *epistula* ejemplifica la tutela que ejercía sobre las ciudades de su provincia el gobernador o, en su defecto, los *iuridici* (o sus legados en el caso de los procónsules).

Un ejemplo hispánico significativo de causas pecuniarias vistas por los gobernadores lo proporciona la llamada *epistula Titi ad Muniguenses*. En ella Tito responde a la apelación que había recibido por parte del municipio bético de Munigua de una sentencia del procónsul del año anterior, Sempronio Fusco, que obligaba a la comunidad a pagar una deuda que le reclamaba Servilio Polión, personaje de cierta relevancia dado que tenía en arriendo el cobro de los impuestos (*uectigalia*) sobre las tierras de la ciudad. El texto es el siguiente:

Imp(erator) Titus Caesar Vespasianus Aug(ustus), pontif(ex) max(imus), / trib(unicia) potest(ate) VIII, imp(erator) XIII, co(n)s(ul) VII, P(ater) P(atriciae) salutem / dicit (vacat) IIIuir(is) et decurionibus Muniguens(ium) / Cum ideo appellaueritis, ne pecuniam, quam debebatis Seruilio / Pollioni ex sententia Semproni Fusci, solueretis, poenam iniustae / appellationis exsigi a uobis oportebat, sed ego malui cum in-

⁴²¹ *Idem*, p. 316.

/dulgencia mea quam cum temeritate uestra loqui et sester-/tia quinquaginta millia nummorum tenuitati publicae / quam praetextis, remisi. Scripsi autem Gallicano, amico / meo, proco(n)s(uli), pecuniam, quae adiudicata est Pollioni, nume-/rassetis ex die sententiae dictae, usurarum uso computa-/tione{m} liberaret (uacat) / redditus uectigaliorum uestrorum, quae conducta habuisse Pol-/lionem indicatis, in rationem uenire aequom est, ne quid / hoc nomine rei publicae apsit (vacat) uale<te> / dat(um) VII idus septembr(es).⁴²²

Como se ve, Tito no sólo confirma la sentencia del procónsul Fusco, sino que reprende a los Muniguenses por su *'iniusta appellatio'*, por la cual debería imponerles un castigo pecuniario que, sin embargo, en un acto de indulgencia, decide no aplicar⁴²³. El caso se había agravado, además, por otros motivos. El primero, que el municipio atravesaba por dificultades económicas y ahora debía no sólo la deuda sino los intereses derivados de la demora en el pago; el segundo, que Polión, teniendo la concesión de la recaudación de los *uectigalia* de Munigua⁴²⁴, parece ser que había retenido la suma cobrada como medida de presión o para cubrir parte de lo que se le adeudaba. Ante estos dos problemas, Tito decide condonar los intereses de la deuda a Munigua e insta a que, bajo la supervisión del nuevo procónsul, se llegue a un acuerdo compensatorio en lo que respecta a los *uectigalia* para que la ciudad (que no en vano llama *respublica*) no saliese dañada. A Tito le preocupaba sobremanera mantener un equilibrio entre los intereses y derechos de los particulares y la supervivencia económica de las comunidades del Imperio, como también lo hará a Trajano.

Cuando Plinio fue gobernador de Bitinia-Ponto, solicitó a Trajano, en una de sus cartas, que instituyera una regla que rigiese los derechos de las ciudades de su provincia sobre la llamada *locatio-uenditio*; esto es, la reclamación de arrendamientos y ventas. La mayoría de procónsules que le habían precedido había concedido preferencia en tales reclamaciones a las ciudades frente a los particulares, pero Plinio señala que esas disposiciones son efímeras e ineficaces sin la sanción imperial, mostrando con ello

⁴²² CIL II, 1052. Los restos de Munigua se hallan en el municipio de Villanueva del Río y Minas (Sevilla). Anexo II: nº 66.

⁴²³ Sobre la *iniusta appellatio*: Paul. Sent. V, 33, 1. Cf. Burton, *Powers and Functions...* cit. pp. 204-205.

⁴²⁴ En efecto, los municipios cedían parte de su *ager* a particulares durante un tiempo determinado para su explotación a cambio del pago de un canon periódico, el *uectigal*, dentro del régimen jurídico de la *locatio-conductio*. Cf.: 'ager uectigalis' y 'locatio-conductio' (s.v.), en Diz. Giurid. pp. 51 y 322-323, respectivamente.

cierta debilidad de la autoridad de los procónsules⁴²⁵, como en el caso de la *epistula Titi ad Muniguenses*. Trajano le responde que el derecho de las ciudades en la reclamación de dineros que se les adeudaran depende de las leyes de cada una (recuérdese que se trata de un provincia oriental, con una fuerte tradición políada)⁴²⁶, alegando que no quiere favorecer a las comunidades en detrimento de los particulares⁴²⁷. En todas las provincias las ciudades, como se puede apreciar, tenían dificultades en hacer que los privados que tenían arrendadas sus tierras públicas les pagasen⁴²⁸.

El hecho de que la *epistula* de Tito fuese inscrita en bronce y publicitada en el foro de *Munigua* y que, asimismo, el emperador explicitara en ella que también había escrito sobre el asunto al procónsul que gobernaba en ese momento la Bética, Galicano, muestra, por una parte, que Tito quería dar ejemplo y sentar un precedente legal en la provincia⁴²⁹; por otra, revela que la ciudad sostenía una conducta censurable a ojos del poder imperial, no sólo por no reconocer la deuda probada que tenía con Polión, sino por no haber aceptado la sentencia del procónsul Sempronio Fusco a pesar de que los hechos eran irrefutables. La apelación a Roma no sólo había sido improcedente, sino que escondía tras de sí un cuestionamiento del máximo representante del poder imperial en la provincia.

La *appellatio ad Caesarem* era un recurso que fue usado ya desde época de Augusto por particulares o comunidades provinciales y pronto se generalizó⁴³⁰. Empero, era necesaria una regulación en su uso que evitase un recurso injustificado al

⁴²⁵ Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 718.

⁴²⁶ En cambio, en Occidente se tendía a la uniformidad en la norma. Las disposiciones hechas en este sentido por la *lex Irnitana*, cap. 63, son extrapolables al resto de municipios y colonias de manera general.

⁴²⁷ Plin. *Ep.* X, 108-109.

⁴²⁸ Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 718.

⁴²⁹ No estamos de acuerdo con la interpretación de A. D'Ors en *EJER* –seguida por F. Bueno, “Las constituciones imperiales de Hispania”, en J. González (ed.) *Roma y las provincias: Realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid, 1994, pp. 169-188, esp. p. 172– de que fue la ciudad la que decidió publicar la *epistula* como forma de reconocer la indulgencia del emperador. En nuestra opinión, fue el emperador quien decidió esto, con el fin de sentar un precedente y reforzar la autoridad del procónsul, o bien el procónsul, pero a sugerencia de Tito o, al menos, siendo consciente de la necesidad de hacer pública la respuesta del emperador a una ciudad que se había mostrado temeraria y obstinada en un asunto que claramente tenía perdido. Los magistrados y decuriones muniguenses no debían volver a recaer en esta mala conducta.

⁴³⁰ Véase el II Edicto de Augusto de Cirene, del 7/6 a.C.: Oliver, *Greek Constitutions...* cit. n° 9. En este edicto, Augusto, como Tito en nuestra *epistula*, también pretende reforzar la autoridad del procónsul de Cirene, P. Sextio Esceva, refrendando sus decisiones. Sin embargo, el problema parece haber sido más grave y haber causado preocupantes desórdenes en la provincia, al tratarse de luchas entre facciones políticas en la provincia que entrecruzaban acusaciones de lesa majestad (el grave delito de *maiestas*). Cf. M. Peachin, “Augustus’ Emergent Judicial Powers, the *crimen maiestatis* and the Second Cirene Edict”, en J.-L. Ferrary – J. Scheid (cura), *Il princeps romano, autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia, 2015, pp. 497-554.

emperador. Es muy significativo que Tito, al mencionar al procónsul que entonces se hallaba en la Bética, Galicano, lo señale como ‘*amicus meus*’. Con esta expresión, Tito busca reforzar la autoridad del procónsul, sin duda dañada por el cuestionamiento que se había hecho de la sentencia de su antecesor. Debía quedar claro que, a pesar de que se trataba de una provincia proconsular, las decisiones del procónsul estaban siempre respaldadas por el emperador⁴³¹. La *appellatio* debía servir como un medio de protección de los provinciales o de corrección de una sentencia equivocada del gobernador, no como una forma de retardar la ejecución de una sentencia ni de desacato a la autoridad.

Otra muestra de la intervención de un procónsul de la Bética en litigios relacionados con las finanzas municipales en la que de nuevo una de las partes recurrió en segunda instancia a la *appellatio* al *princeps* la tenemos en la llamada *Epistula Antonini Pii ad Obulculenses*:

[Imp(erator) Caesar Diui Hadriani filius Diui Traiani ne]pos Diui Neruae pronepos T(itus) Aelius Hadrianus A[ntoninus] / [Aug(ustus) Pius pontifex maximus tribunicia potestate X]XII co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriciae) salutem dicit IIIIuir(is) et d[ecurionibus Obulculensium?] / [--- a] Lucilio Africano proco(n)s(ule) c(larissimo) u(iro) aduersus +[---] / [--- exempl]um decreti mei subici iussi. Haec legato [---] / [--- bene] ualete. (vac. 4?) Quintillo et Prisco co(n)s(ulibus) +[---.] / [--- be]neficiu[m] cuius auctor non probat[us esset ---] / [--- Obulcu]lensium et longa huius exaction[is consuetudine? ---] / [--- uice?]simam exigi. Post quae adiecit ++[---] / [---?] (vac.) / [Imp(erator) Caesar Diui Hadriani filius Diui Traiani nepos Diui Neruae pr]onepos T(itus) Aelius Had[rianus Antoninus Aug(ustus) Pius] / [pontifex maximus tribunicia potestate --- co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriciae) salutem dicit II]IIuir(is) et de[curionibus Obulculensium?]. ---] ⁴³²

Este bronce contenía dos *epistulae* de Antonino Pío dirigidas al municipio de *Obulcula*, pero sólo se ha conservado una parte del contenido de la primera. El estado fragmentario de la pieza no permite afirmar con seguridad quién fue el que apeló a Antonino Pío y en qué consistió exactamente su reclamación respecto a la sentencia del

⁴³¹ Véase *supra* lo dicho sobre el II Edicto de Cirene. También: Burton, *Powers and Functions...* cit. pp. 204-205.

⁴³² *CIL* II²/5, 1322, donde J. González y A. U. Stylow corrigen algunos detalles de la edición del primero en *CILA* II, 835. Anexo II: n° 67.

procónsul, pero la hipótesis de J. González –seguida en la última edición de referencia, en *CIL* II²/5, 1322– resulta muy verosímil: se trataría de una controversia que enfrentó a uno o varios particulares con el municipio flavio latino de *Obulcula* (Castillo de la Monclova, Fuentes de Andalucía, Sevilla) –representado por sus magistrados y decuriones– en torno a un legado pecuniario concedido en favor de esta comunidad tiempo atrás por un pariente de los primeros que éstos no creían estar obligados a seguir manteniendo tras su muerte⁴³³. Según E. Melchor Gil, se trataría de una fundación perpetua que garantizaría a la ciudad unas rentas anuales, quizá obtenidas del usufructo de unas tierras. Este autor plantea la posibilidad de que los herederos del benefactor siguiesen poseyendo esas tierras y la ciudad de *Obulcula* tuviese derecho a percibir una renta derivada de su arriendo o explotación; los nuevos propietarios habrían pretendido recuperar su usufructo⁴³⁴. Ambas partes llevaron el litigio ante el procónsul que por entonces (159 d.C.) gobernaba la Bética, Lucilio Africano, que falló a favor del municipio de *Obulcula*. Esta ciudad estaba adscrita al *conuentus Astigitanus*, y, por tanto, el juicio se habría llevado a cabo en su sede, la colonia *Augusta Firma Astigi*. El/los particular/es perjudicado/s, sin duda miembro/s de una familia de la aristocracia local con cierta influencia, viendo que las pruebas en su contra no eran decisivas, decidieron apelar al emperador alegando que no había sido demostrado con claridad quién era el ejecutor de tal *beneficium* (l. 6: *cuius auctor non proba[tus erat]*). Antonino Pío confirmó la sentencia del procónsul, argumentando que era prueba suficiente de su obligación hacia su municipio el hecho de que éste hubiese percibido hasta entonces y durante largo tiempo ese *beneficium* (l. 7: *longa huius exactio*)⁴³⁵.

Las ciudades pudieron ser beneficiarias de legados a partir de Nerva, cuya autorización fue confirmada definitivamente por Adriano⁴³⁶. Desde entonces, estas donaciones pasaron a figurar entre los principales actos evergéticos de las élites locales,

⁴³³ W. Eck interpretó el contenido de forma de diversa, entendiendo que la reclamación versaba acerca de la obligación de cumplir unas legationes. Ha sido rebatido por J. González, “*Epistula* de Antonino Pío”, *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma, 2008, pp. 293-295.

⁴³⁴ E. Melchor Gil, “Evergetismo testamentario en la Hispania romana: legados y fundaciones”, *Memorias de Historia Antigua* 15-16, 1994-1995, pp. 215-228, esp. p. 220.

⁴³⁵ *CIL* II, 835, p. 209.

⁴³⁶ *Tituli ex corpore Ulpiani* 24, 28: *Ciuitatibus omnibus quae sub imperio Populi Romani sunt legari potest; idque a Diuo Nerua introductum, postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitutum est*. Cf. Melchor Gil, “Evergetismo testamentario...” cit. p. 217; y *La munificencia cívica en el mundo romano*, Madrid, 1999, p. 29; R. Mentxaka, “Aproximación a la personalidad jurídica de las *civitates* romanas en época imperial”, *Revista Vasca de Administración Pública* 99-100, 2014, pp. 2055-2082, esp. p. 2019.

tanto en vida como *ex testamento*. En el caso que nos ocupa, parece que el benefactor instituyó este legado pecuniario en favor de la comunidad mientras vivía y especificó que se mantuviese tras su muerte. Estos legados podían tener un fin concreto –la construcción de algún edificio, o su inversión en otra necesidad que tuviese la comunidad beneficiaria–, o simplemente tratarse de una donación de ciertas rentas sobre unas tierras o de una cantidad monetaria concreta de libre disposición. Asimismo, el evérgeta podía disponer alguna condición que las autoridades municipales debían cumplir para recibir el legado, y que, de no satisfacerse, implicaba su revocación. Este tipo de pleitos debieron de ser frecuentes si tenemos en cuenta que a lo largo del siglo II el poder imperial se esforzó en promulgar una serie de disposiciones legales relativas a las donaciones y los legados con el fin de garantizar el cumplimiento de la voluntad del testador, tanto por parte de sus herederos como de las comunidades⁴³⁷. Desafortunadamente, el estado fragmentario de este bronce nos impide conocer los pormenores del legado en disputa.

Esta *epistula* confirma la consolidación en las provincias proconsulares del *modus operandi* administrativo que hemos expuesto: el gobernador es la instancia judicial superior en la provincia a la que siempre se debían presentar las causas no criminales que enfrentaban a particulares con sus comunidades, pero siempre cabía una apelación al poder central. Además, revela nuevamente que el poder romano prestaba especial atención a las comunidades promocionadas de las provincias y se preocupaba mucho de garantizar que contasen con los recursos económicos necesarios para su subsistencia y el buen funcionamiento de sus instituciones.

Pasemos ahora a las excepciones. En primer lugar, sobresale la prohibición reiterada de que los magistrados municipales vieses los casos relativos a la libertad de un individuo; esto es, cuando estuviese en cuestión la condición jurídica de una persona. Se excluye, por tanto, el *praeiudicium de libertate* de la *iurisdictio local*⁴³⁸. Lamberti señala que las razones de esta prohibición se hallan en que las controversias *de libertate*

⁴³⁷ Por ejemplo: Dig. L, 8, 1 y 6. Cf. F. Jacques, *Le privilege de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Roma, 1984 pp. 695-699; Melchor Gil, *La munificencia cívica...* cit. pp. 29-30.

⁴³⁸ J. González, "The lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law", *JRS*, 76, 1986, p. 147-243, esp. p. 229; Rodger, "The Jurisdiction of Local..." cit. p. 150; Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit., p. 149.

habían sido complicadas por la intervención en la materia de los emperadores. Por un lado, Claudio había establecido que una causa de *status* no podía ser depender de un *praeiudicium per questionem nummariam*⁴³⁹; por otro, Domiciano, a través del *Senatusconsultum de collusione detegenda*⁴⁴⁰ que se le atribuye, había dispuesto que el esclavo declarado *ingenuus* en un juicio con la connivencia del amo pasase a pertenecer a quien descubriera este fraude o *collusio*⁴⁴¹. Para evitar que los procesos de *status* inundasen los tribunales locales y que se buscara premeditadamente la *collusio* para apoderarse de los esclavos de otro, todos estos *praeiudicia de libertate* pasaron a depender exclusivamente de la jurisdicción del gobernador⁴⁴². Pero además de esto, hay que tener presente que estos casos podían acabar entrando dentro de la esfera criminal y, por tanto, sólo correspondía al gobernador su vista y sentencia, como veremos en el siguiente capítulo.

En relación a la condición del individuo, también hallamos en la correspondencia pliniana otro tipo de casos, en concreto el reconocimiento de los hijos. Las demandas *de agnoscendis liberos* venían reguladas por un senadoconsulto y, al menos, eran competencia de los procónsules. En Bitinia, existía un precedente, una carta de Domiciano al procónsul Minucio Rufo, en la que el emperador le permitía hacerlo; empero, Plinio no sabe si él, en tanto que legado imperial, tenía la misma competencia que un procónsul en este asunto, y por ello escribe a Trajano. Éste, sin embargo, tampoco sabe qué decidir e, incluso, le pide a Plinio que le envíe una copia del senadoconsulto⁴⁴³. Evidentemente, casos de este tipo serían habituales en las provincias y, por tanto, no cabe duda de que otros legados imperiales se tuvieron que ocupar de ellos antes de Plinio. Éste parece manejar los dos precedentes legales que más le podían ser de utilidad –el senadoconsulto general *de agnoscendis liberos* y la respuesta de Domiciano a un procónsul de Bitinia que lo antecedió–, pero ello no quiere decir que

⁴³⁹ Se trata de un rescripto de Claudio dirigido a Claudiano: *Dig.* XL, 15, 4. (Call. 1 *de iure fisci*).

⁴⁴⁰ *Dig.* XL, 16, 1 (Gai. 2 *ad ed. Pr. Urb.*).

⁴⁴¹ *Il.* 26-28.

⁴⁴² Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit., pp. 152-153.

⁴⁴³ Plin. *Ep.* X, 72-73. El hecho de que le sea más fácil a Trajano pedirle a Plinio una copia del senadoconsulto que mandar que la buscasen en los archivos de la cancellería de Roma es muy revelador del funcionamiento administrativo y del estado de los archivos imperiales. Esto hizo pensar a Gaudemet, “La juridiction provinciale...”, cit. p. 341, que la cancellería imperial no disponía del texto de todos los senadoconsultos aplicables en las provincias. Esta posibilidad resulta un tanto extraña y conduciría al problema de qué criterios de discriminación se aplicaban para decidir conservar y archivar una *constitutio* o no. Resulta más verosímil pensar en que era más rápido recibir por correo la copia del senadoconsulto que buscarla en Roma.

fuesen los únicos. Es muy probable que existiesen algunas cartas de anteriores *principes* a legados de otras provincias tratando este problema jurisdiccional que Plinio desconocía. Sea como fuere, sólo se puede asegurar que los procónsules tenían competencia sobre estos casos, aunque no existe motivo alguno que induzca a pensar que los legados imperiales estuviesen privados de ella. Parece más una cuestión de formalismo.

Otra categoría importante la constituyen las acciones que podían conllevar *infamia*. En el derecho romano, eran declarados *infames* aquéllos que realizaban actividades consideradas moralmente bajas (prostitutas, gladiadores, actores), los soldados licenciados con deshonor (*inhonesta missio*), aquéllos que violaban las reglas del ‘buen matrimonio’ (incestuosos, adúlteros) y los condenados por cometer *crimina* públicos y por algunos privados ilícitos, así como los que no respetaban los deberes de fidelidad conectados con ciertas instituciones como la tutela, la *fiducia*, la *societas* o el *mandatum*⁴⁴⁴. De estas causas de infamia, la *lex Irnitana* menciona, concretamente, las acciones *pro socio*, *fiduciae* y *mandati*, la inobservancia de las reglas de los depósitos y la tutela, el fraude, el delito de *furtum* y la *iniuria*. Recordemos brevemente en qué consiste cada una.

La *societas* era el contrato entre dos o más *socii*, en virtud del cual cada uno estaba obligado a poner a disposición común una cierta entidad de *res* u *operae* con el fin de llevar a cabo las operaciones económicas, compartiendo los gastos y los ingresos según previo acuerdo. Por tanto, la *societas* implicaba una serie de obligaciones que debían ser cumplidas⁴⁴⁵. La *fiducia* consistía en la transferencia del dominio de una *res mancipi* de un individuo a otro, denominados fiduciante y fiduciario, mediante *mancipatio* o *in iure cessio*, con el pacto de devolverla al fiduciante si se produjesen ciertas condiciones. Como en el caso de la *societas*, ese *pactum fiduciae* conllevaba una obligación⁴⁴⁶. Por su parte, el *mandatum* era un tipo de *contractus* entre un *mandator* y un *mandatarius*, en fuerza del cual este último contraía la obligación de realizar gratuitamente determinados actos solicitados por el *mandator* en beneficio de éste o de terceros, con el compromiso por parte del *mandator* de compensarlo por posibles daños

⁴⁴⁴ Guarino, *Diritto privato*... cit. p. 285.

⁴⁴⁵ *Idem*, p. 813.

⁴⁴⁶ *Idem*, pp. 761-762.

sufridos en la ejecución de tales empeños⁴⁴⁷. El *depositum* está vinculado a la *fiducia cum amico*, y consistía en la transferencia de un bien mueble del *depositor* al *depositarius* con la condición de que éste la poseyera por él y que se la devolviera cuando le fuese requerida; no se transfería el dominio, sino sólo la tenencia de la cosa⁴⁴⁸. El *fraus creditorum* consistía en la alienación dolosa por parte del deudor de sus propias fuentes de ingresos patrimoniales con el fin de agravar su situación en detrimento de los acreedores⁴⁴⁹. La tutela era la *potestas* sobre los impúberes y las mujeres ejercitada con el fin de lograr que pudiesen llevar a cabo ciertos actos jurídicos fundamentales que se consideraba que eran jurídicamente incapaces de cumplir por sí solos⁴⁵⁰. Finalmente, el *furtum* (el hurto) era la sustracción no violenta de un bien mueble⁴⁵¹ y sólo escapaba a la jurisdicción municipal cuando era cometido por una persona libre o por un esclavo a instigación de un libre; y la *iniuria* era toda ofensa al honor y el decoro del individuo⁴⁵².

Estas causas eran consideradas más graves, pues, o bien comportaban infamia por sí mismas, o bien la prueba de que se habían cometido con *dolus malus* las volvía infamantes. Esa infamia conllevaba una degradación ética del individuo de la que se derivaba su degradación social. La pérdida de la *publica aestimatio* hacía que el afectado careciese de determinadas capacidades jurídicas, como el *ius suffragii* o la posibilidad de representar a otro en un juicio⁴⁵³; es decir, lo privaba de sus plenas capacidades como ciudadano. En el caso de los grupos privilegiados municipales, esa degradación se manifestaba en el veto a presentarse y desempeñar cualquier cargo público y, por tanto, la exclusión del gobierno de la ciudad y del lugar que, por estatus, antes le habría correspondido. Por ello las causas que podían entrañar infamia se reservaban al gobernador, con el fin de evitar que algo tan delicado como la pérdida del *ius honorum* hubiese de ser decidido localmente y, por tanto, por rivales en potencia. De todas formas, en el caso de los asuntos que no comportasen infamia por defecto (por ejemplo, la *iniuria*), sino sólo si se producía en ellos el *dolus malus*, las partes acudían

⁴⁴⁷ *Idem*, pp. 822-823.

⁴⁴⁸ *Idem*, p. 771.

⁴⁴⁹ *Idem*, p. 896-897.

⁴⁵⁰ *Idem*, p. 539. En el caso de los *furiosi* y *prodigi* se hablaba de *cura*, aun siendo la misma institución jurídica.

⁴⁵¹ *Idem*, p. 868 y 872-873.

⁴⁵² s.v. "Iniuria", en *Diz. Giurid.* cit.

⁴⁵³ s.v. "Infamia", en *Diz. Giurid.* p. 247.

en primer lugar al duoviro, y la causa sólo se trasladaba al tribunal del gobernador si la acusación alegaba que se había producido *dolus malus*. Entonces el duoviro procedía a fijar el *uadimonium* para la vista de la causa por parte del gobernador, siguiendo el modelo del pretor en Italia⁴⁵⁴.

Una inscripción votiva de *Lepcis Magna* recuerda la cognición del procónsul de una causa que comportaba infamia. El sacerdote *Tullus*, víctima de una *iniuria* cometida por *Boccius Copo*, había llevado su caso ante el procónsul Marcelo. Con el fin de asegurar el éxito de su denuncia, el sacerdote hizo un voto a Mercurio y Minerva que dio los frutos esperados, pues Marcelo decretó que *Boccius* era culpable y debía compensar económicamente a *Tullus*, quien, con el dinero recibido, cumplió su voto⁴⁵⁵.

Finalmente, están los conflictos territoriales entre comunidades o entre éstas y particulares⁴⁵⁶. Como muestra la *Tabula Contrebiensis*, ya desde la República se produjeron constantes conflictos de índole territorial entre comunidades a los que los gobernadores concedieron una atención especial. El poder romano, en su organización de los territorios conquistados, se preocupó sobremanera por la delimitación de las tierras de las comunidades y su registro catastral con fines fiscales⁴⁵⁷. Asimismo, la amenaza siempre latente de posibles usurpaciones de territorio por parte de grandes terratenientes o comunidades más pujantes en detrimento de particulares o comunidades más débiles obligó al poder romano a mantener una vigilancia constante en esta materia y a castigar sin miramientos tales acciones. El sostenimiento económico de las comunidades provinciales, así como el orden, dependían de ello.

En este sentido, los emperadores, desde Augusto, no dejaron de fomentar una política de ordenación del territorio y de creación de *formae* que lo registrasen y de

⁴⁵⁴ Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit., p. 156-157; G. P. Burton, "The lex Irnitana, ch. 84, the Promise of vadimonium and the Jurisdiction of Proconsuls", *Classical Quarterly* 46/1, 1996, pp. 217-221.

⁴⁵⁵ *IRT* 304.

⁴⁵⁶ Las disputas entre comunidades competían exclusivamente a la jurisdicción del gobernador o, en su defecto, a la de un mando imperial, por ejemplo los legados que comandaron la *legio III Augusta* de África con independencia del procónsul desde Calígula. Cf. G. P. Burton, "The Resolution of Territorial Disputes in the Provinces of the Roman Empire", *Chiron* 30, 2000, pp. 197-215, esp. pp. 205-212 (apéndices); T. Elliott, *Epigraphic Evidence for Boundary Disputes in the Roman Empire*, PhD Thesis dissertation, Chapel Hill, 2004; A. Dalla Rosa, "Sulle fonti relative a dispute confinarie nelle province romane", *ZPE* 160, 2007, pp. 235-246.

⁴⁵⁷ C. Moatti, *Archives et partage de la terre dans le monde romain: IIe siècle avant – Ier siècle après*, Roma, 1993; Burton, "The Resolution...", cit. pp. 197-199; I. Sastre – A. Orejas, "Fiscalité et organisation du territoire dans le NO de la Péninsule Ibérique: *ciuitates*, tribut et *ager mensura comprehensus*", *DHA* 25/1, 1999, pp. 159-188.

termini (augustales) que marcaran los límites territoriales entre comunidades, cuyo mayor número se han hallado, precisamente, en Hispania. Esta política también se refleja también a escala local en las provincias, como dan testimonio los documentos catastrales de la colonia de *Arausio*, en la Galia Narbonense, o el capítulo 76 de la *lex Irnitana*⁴⁵⁸.

Una inscripción de *Sardinia* nos ofrece la mejor descripción del carácter de estos litigios y el desarrollo del pleito presidido por el gobernador⁴⁵⁹. El 13 de marzo del año 69, el procónsul de *Sardinia*, L. Helvio Agripa, emitió una sentencia condenatoria contra el pueblo de los *Galillenses*, que habían ocupado mediante la violencia el territorio que pertenecía a los *Patulcenses Campani*. En el bronce en el que hizo inscribir su sentencia, Helvio Agripa expone las vicisitudes del proceso, que había sido visto previamente por un procurador imperial y por el procónsul que le había precedido en el cargo. El procurador M. Juvencio Rixa había señalado que los límites del territorio de los *Patulcenses* debían ser respetados, cosa que no hicieron los *Galillenses*, sin que Rixa se atreviera a castigarlos por respeto a la clemencia que el emperador Galba había demostrado hacia éstos. Es más, envalentonados en la impunidad, recurrieron a *posteriori* al procónsul Cecilio Símples, alegando que existía en los archivos imperiales de Roma un documento diverso al conservado en el archivo provincial en el que se probaba que esos territorios eran suyos. Simplex les concedió tres meses para aportar esa prueba, tiempo que su sucesor, Helvio Agripa, prolongó hasta el 1 de febrero. Una vez finalizado el plazo sin ningún resultado, este último, con la ayuda de su *consilium* (cuyos miembros aparecen mencionados al final del texto⁴⁶⁰), comprendió que los *Galillenses* sólo pretendían demorar el proceso y los condenó a retirarse de las tierras que habían ocupado, amenazándolos con castigarlos severamente si persistían en no acatar su sentencia (es decir, si caían en *contumacia*)⁴⁶¹.

Como en el caso de la *epistula Titi ad Muniguenses*, esta sentencia del procónsul de *Sardinia* fue inscrita en bronce con el fin no sólo de que se publicitase, sino para que

⁴⁵⁸ *Idem*, p. 94-95; A. Piganiol, *Les documents cadastraux de la colonie d'Orange*, París, 1962.

⁴⁵⁹ *CIL* X 7852 = *ILS* 5947. Seguimos la lectura de E. Cardoni, "La *Tabula* broncea di Esterzili (*CIL* X 7852 = *ILS* 5947)", en A. Mastino, *La Tavola di Esterzili. Conflitti tra pastori e contadini nella Barbaria sarda: convegno di studi 13 giugno 1992, Esterzili (Italia)*, Sassari, 1993, pp. 77-98.

⁴⁶⁰ Formaban su *consilium* dos miembros de su estado mayor (un legado propretor y un cuestor propretor) y seis ciudadanos romanos seguramente residentes en la provincia (ll. 23-25).

⁴⁶¹ A. N. Sherwin-White, "Coercitio, Cognition, and Imperium in the First Century A.D.", en *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford, 1963, pp. 1-23, esp. p. 20, ha señalado, con acierto, que este documento ilustra el *arbitrium iudicantis* del que gozaban los procónsules.

sirviese como advertencia a los *Galillenses* y el resto de pueblos que en la provincia pretendiesen ignorar los límites territoriales registrados en el catastro del archivo provincial.

Estos problemas también están atestiguados en Hispania. Un *terminus augustalis* hallado en Guardão (Viseu, Portugal), en el territorio de la antigua Lusitania nos informa de que en época de Augusto (en un momento impreciso posterior al 2 a.C.) Quinto Articuleyo Régulo, legado imperial que gobernaba la Lusitania, vio la causa que enfrentaba a dos comunidades que se han tomado por *ciuitates stipendiariae*, identificadas por J. de Alarcão como los *Elbocori* y los *Interanienses*, pertenecientes al *conuentus Scallabitanus*⁴⁶². Ha habido diferentes reconstrucciones del texto y del desarrollo de determinadas abreviaciones, como en el caso de la mención del gobernador, que unos autores ponen en dativo y otros en nominativo⁴⁶³. Por nuestra parte, estamos de acuerdo con C. Cortés Bárcena en que resulta más conveniente esta última opción, ya que es el gobernador quien vio la causa (*causa cognita*):

*Imp(erator) Caesar Diu[i f(ilius) Augustus co(n)s(ul)] / XIII trib(unicia) potest(ate) [--- p(ater) p(atriciae) terminus] / august(alis) inter [--- et ---]ieses Q(uintus) Artic<u>le[ius Regulus leg(atus) Aug(usti)] causa cogni[ta] [---]*⁴⁶⁴

Así pues, el gobernador Quinto Articuleyo Régulo dispuso en su sentencia judicial que fuese erigido este *terminus* —y probablemente otros similares— con el fin de delimitar, definitivamente, el territorio en disputa entre ambas comunidades y evitar futuros conflictos entre ellas.

Es posible también que tengamos otro indicio de intervención de un gobernador de Hispania en una disputa confinaría en un *terminus augustalis* del municipio flavio de *Cisimbrium*, en la Bética. La inscripción de este hito dice lo siguiente:

⁴⁶² J. de Alarcão, “Notas de arqueologia, epigrafia e toponímia-IV”, *Revista Portuguesa de Arqueologia* vol. 7/2, 2006, pp. 131-147, esp. pp. 131-136. Sin embargo, como se señala en *HEp* 2006, n°451, esta reconstrucción es muy hipotética.

⁴⁶³ Véase la reciente edición crítica de C. Cortés Bárcena, *Epigrafía en los confines de las ciudades romanas: Los Termini Publici en Hispania, Mauretania y Numidia*, Roma, 2013, pp. 66-69, n°12.

⁴⁶⁴ *Idem*. Anexo II: n° 44.

*Imp(eratore) Domitiano Ca[es(are) Aug(usto)] / Aug(usti) f(ilio) X co(n)s(ule) term[inus] / Augustalis municipi[pi Fla]-/ui Cisimbrensis [ex] / decreto L(uci) Antisti [Rus]-/tici pro co(n)s(ulis)*⁴⁶⁵.

En el año 84 d.C. el procónsul Lucio Antistio Rústico decretó que se delimitase con mojones como el conservado el territorio adscrito al recientemente promocionado municipio flavio de *Cisimbrium*. Según C. Cortés Bárcena, ese decreto sería el resultado de una sentencia judicial del gobernador en un litigio territorial que enfrentaría a *Cisimbrium* con otra comunidad local (que podría ser *Ipolcobulcula*, Carcabuey)⁴⁶⁶, pero, en nuestra opinión, la no mención de la otra parte –como en el caso lusitano antedicho–, aunque no invalida su propuesta, resulta extraña. Como veremos en el Capítulo 5 de la Segunda Parte, ese decreto pudo no haber sido necesariamente el resultado de un litigio, sino que podría haberse debido a una medida preventiva del gobernador en favor del nuevo municipio o a una decisión derivada de una petición de este último. Con todo, esta inscripción es una prueba más de la intervención decisiva de los gobernadores de Hispania en la fijación de los límites del territorio de las comunidades de su provincia, y de la relevancia y frecuencia de los conflictos intercomunitarios en torno a ellos.

En la Bética se ha conservado también un *terminus* con una inscripción que recuerda que una disputa confinaría entre tres comunidades locales, *Sacili*, *Epora* y *Solia* –las dos primeros municipios flavios y la tercera probablemente también⁴⁶⁷– fue resuelta por vía judicial:

*Trifinium / in[t]er Sacilienses, Eporenses / Solienses ex sentent[ia] / Iuli Proculi iudic(is) / confirmatu(m) ab / Imp(eratore) Caesar(e) / Hadriano / Aug(usto)*⁴⁶⁸.

La decisión del juez que vio el caso, Julio Próculo, fue confirmada por el emperador Adriano, lo que ha hecho pensar a Alföldy que éste intervendría en tal asunto

⁴⁶⁵ *CIL* II²/5, 302. F. J. Navarro, “Nuevos magistrados senatoriales en la península Ibérica. Un complemento a los Fasti Hispanienses”, en J. González (ed.), *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano*, Sevilla, 1999, pp. 443-463, esp. p. 454, ha propuesto una lectura diferente en la titulación de Domiciano, en la línea 2, por entender que Vespasiano debería ser mencionado como *Diuus* en esa época: *Aug(usto) IX co(n)s(ule)*. Anexo II: n° 54.

⁴⁶⁶ Cortés Bárcena, *Epigrafía en los confines...* cit. p. 74.

⁴⁶⁷ Cortés Bárcena, *Epigrafía en los confines...* cit. pp. 83-84.

⁴⁶⁸ *CIL* II²/7, 776. Hallada en Villanueva de Córdoba (Córdoba). Anexo II: n° 75.

mientras se hallaba de visita en Hispania en 122-123 d.C. El autor húngaro identificó a Julio Próculo con el cónsul sufecto del 109 d.C., proponiendo que su nombramiento extraordinario como gobernador de una provincia a la que eran destinados senadores de rango pretorio se podría deber al súbito fallecimiento del procónsul que por entonces la administraba. Julio Próculo sería uno de los *comites* que acompañaron al emperador en su viaje por Hispania y por ello Adriano echó mano de él extraordinariamente para resolver sin demora el vacío en el gobierno de la Bética hasta la llegada del siguiente procónsul ordinario⁴⁶⁹. En efecto, como ha señalado R. J. A. Talbert, a partir de Domiciano existen ejemplos de que los emperadores designaron personalmente a los sustitutos temporales de los procónsules que fallecían durante el ejercicio de sus funciones sin consultar al Senado⁴⁷⁰. La elección de Próculo en particular ha de atribuirse a que era un hombre de confianza del emperador. Gracias a una inscripción de Anzio que recoge su *cursus honorum* sabemos que desempeñó diversas misiones de especial relevancia; por ejemplo el censo en la Lugdunense mientras fue su gobernador⁴⁷¹.

Existe también la posibilidad de que este Julio Próculo no fuese el senador con el que Alföldy lo identificó sino un notable de la Bética en el que delegó la resolución de este litigio el procónsul, acutando en calidad de *iudex pedaneus*⁴⁷². Es extraño que no mencione su título oficial sino sólo el de *iudex*, y, además, el *nomen* y el *cognomen* de este individuo eran bastante comunes. Sin embargo, en nuestra opinión, el hecho de que se trate de un litigio territorial de cierta complejidad y que implicara a tres comunidades privilegiadas lleva a pensar que sería visto en persona por el gobernador. Además, estas comunidades estaban adscritas al *conuentus Cordubensis*, lo que facilitaría su acceso al gobernador y el trabajo de éste.

La inscripción del *terminus* dice que la sentencia de Próculo fue confirmada por el emperador. La posición excepcional de este senador al frente de la provincia podía generar ciertas dudas en los provinciales y ser aprovechada por éstos para dilatar la ejecución de la sentencia. No sabemos si la intervención de Adriano se produjo como respuesta a una reclamación de los afectados o por iniciativa de Próculo, pero no cabe duda que su confirmación dotaba a la sentencia de un respaldo oficial definitivo que

⁴⁶⁹ Alföldy, *Fasti Hispanienses* p. 167.

⁴⁷⁰ Talbert, *The Senate...* cit. p. 397.

⁴⁷¹ *CIL* X, 6658.

⁴⁷² P. López Paz, *La ciudad romana ideal I. El territorio*, Santiago de Compostela, 1994, p. 22.

zanjaba la incertidumbre en torno a la autoridad de que gozaba Próculo. Es una incógnita el título que éste utilizó mientras estuvo al frente de la Bética. Es posible que fuese designado como legado imperial proconsular.

Por último, hemos de mencionar el bronce hallado en Fuentes de Ropel (Zamora) cuyo texto –datado en época altoimperial, quizá flavia– recoge el *acta* de una sentencia en torno a una “*delimitatio inter agros publicos*” que afectó a varias comunidades locales y parece que también a un particular:

Columna A:

[Limitatio inter] publicos / [et--- Fr]ontonem / [---]NO(---) L(ucio) LVC / [---]VANDIS / [---]R
PRI / -----

Columna B:

Vsque Burrilligiam Voligobend[am per(ticae) -c. 3- inde] / sinistro uersus limite ipso
per[t(icae) -c. 3- usque] / collem in conspectu Seguisona[bendae?] / pert(icae)
CXXXV inde sinistro uersu[s usque la-]/cunas citra Cillobendam per[t(icae) -c. 4-
usque] / Vagabrobendam LXII inde in co[llem] / pert(icae) C inde rectum dextra cliuo
[a Vagabro-]/benda usque Gadarnauregium C [-c. 5-] / Ab Amala uia Cariensi uetere
usq[ue -c. 8-] / dextra inde dextro uersus [-c. 11-] / p(erticae) CX inde rectum usque
uiam [-c. 11-] /idinensis p(erticas) CXXXIII inde tran[siunt dextro] / uersus pert(icae)
XXXV item XXXXII it[em -c. 5- in-]/de secundum Cauldobendam [pert(icae) -c. 8-
dextro] / uersus per limitem in cli[uo pert(icae) -c. 7-] / idem L usque uiam Ca-
/riensem dextra in[de rectum pert(icae) -c. 5-] / idem tran[siunt dextrouersus
pert(icae) -c. 3- in] / de usque [D o R o B -c. 27-] / qui est [-c. 30-] / TERE[-c. 32-]
sex[-c. 33-] / V[-c. 35-]⁴⁷³.

El estado fragmentario del bronce dificulta su interpretación –más allá de la referencia a unas lagunas, una colinas y a vías entre diversas comunidades indígenas y las mediciones en *perticae*. También impide conocer el nombre de la autoridad que dictó la sentencia, pero es posible que hubiese sido dictada por el gobernador de la

⁴⁷³ Vid.: HEp. 8, 1998, 502, donde se recoge la nueva edición y el comentario de este epígrafe realizados por M. Mayer – R. García – J. A. Abásolo – E. Rodríguez Almeida, “El Bronce de Fuentes de Ropel (Zamora)”, *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 64, 1998, pp. 161-174.

Hispania Citerior o, en su defecto, uno de sus legados, pues era la autoridad competente en este tipo de causas judiciales.

También eran habituales los pleitos territoriales entre un particular y una comunidad. Un decreto del *legatus Augusti pro praetore*, Lucio Novio Rufo, que gobernó la Citerior bajo el efímero principado de Pértinax, da noticia de un litigio sobre confines entre los *compagani riui Larensis* (*Lauarensis* según D’Ors) y Valeria Faventina:

Imp(eratore) Caes(are) P(ublio) Heluio / Pertinace princip(e) / senatus, patre patriae / co(n)s(ule) II / Q(uinto) Sosio Falcone, / C(aio) Iulio Eruci-/o Claro co(n)s(ulibus) III Idus Febr(uarias). / Sententiam, quam tulit / L(ucius) Nouius Rufus leg(atus) Aug(usti) pr(o) / pr(aetore) u(ir) c(larissimus) inter compaganos ri-/ui Larensis et Val(eriam) Fauentinam / descriptam et propositam pr(idie) Non(as) / Nouembr(es) in u(erba) i(nfra) s(cripta). Rufus leg(atus) c(um) c(onsilio) c(ollocutus) / decretum ex tilia recitauit: / Congruens est intentio mea qua / [---]tus proximae argumentis / [---] parte prolatis rei / [---] aput me actu<m> est de / [---]i[n]spectio itaq[ue] / [---]qui in priua[t-] / [---]a mox [---] / -----⁴⁷⁴

Por desgracia, dado el estado fragmentario de la última parte de la inscripción, desconocemos cuál fue la sentencia del gobernador. A. D’Ors planteó en su momento una restitución de esta última parte, interpretando que Novio Rufo fallaría en favor de Faventina, siéndole restituidas unas tierras que los *compagani* —es decir, los campesinos que habitaban las aldeas en el valle de este río⁴⁷⁵— habían ocupado⁴⁷⁶. No obstante, su propuesta resulta demasiado hipotética y no ha sido seguida por Alföldy en la edición más reciente de la inscripción, que es la que nosotros seguimos. Con todo, esta inscripción es una muestra de que, al igual que el procónsul de *Sardinia* que actuó en el litigio recogido en la “Tabula de Esterzili”, este gobernador de la Hispania Citerior también dictó sentencia tras haber consultado en privado con su *consilium*. Se trataba, en efecto, de una práctica generalizada entre los gobernadores.

⁴⁷⁴ *CIL* II²/14, 989 = *RIT* 143. Anexo II: n° 2.

⁴⁷⁵ Según A. Schulten, “*Larensis*” (s.v.), *RE* XII, 1924, col. 805, los *compagani riui Larensis* se hallarían en el entorno de la actual Lara, cerca de *Tarraco*. Recuérdese que la inscripción fue hallada en Tarragona y, sin duda, el juicio tuvo lugar en la capital provincial.

⁴⁷⁶ *EJER*, p. 364.

Otro ejemplo de este tipo de disputas vistas por los gobernadores de Hispania lo tenemos en tres *tabellae defixionis* halladas en la necrópolis ‘Ballesta’ situada al oeste de *Emporiae*. En ellas un personaje anónimo realiza una execración contra sus enemigos a consecuencia de haber salido perjudicado de lo que parece ser una disputa territorial mantenida con las comunidades de los *Indicetani* y *Olossitani* que juzgó el gobernador provincial, Tito Aurelio Fulvo, con la colaboración de su *consilium*, en 75-78 d.C.⁴⁷⁷. El texto, similar en las tres *tabellae*, además de parco, se reduce casi en su totalidad a una sucesión de nombres de personas (*cognomina*, en general) acompañados de la aclaración de su función o cargo (*legatus, procurator, aduocatus*), así como de la mención de las antedichas comunidades de los *Indicetani* y los *Olossitani*. No sabemos, pues, cuáles eran las circunstancias ni qué sentenció el gobernador.

En el África Proconsular los conflictos territoriales entre comunidades y particulares parecen haber sido muy habituales, quizá debido a las extensas propiedades que en ella había⁴⁷⁸. También los enfrentamientos entre comunidades derivados de disputas relativas a los confines entre unas y otras, que podían llegar a poner en peligro el orden interno⁴⁷⁹. Una inscripción procedente de Henchir-Kern-el-Kebch recoge un pleito entre la comunidad de los *Aunobaritani* y el particular Julio Regilo en torno a unos límites territoriales. El procónsul Marcelo⁴⁸⁰, tras reunirse con su *consilium* (citado en una inscripción que apareció en el bloque de piedra contiguo al que recoge la sentencia), simplemente decidió ratificar la sentencia tomada por un tal Cornuto (sin decir cuál era), del que desconocemos su cargo pues sólo se lo menciona como *uir clarissimus*⁴⁸¹. Está claro que Marcelo emite su decreto en respuesta a una reclamación o apelación hecha ante su tribunal, quizá con nuevas pruebas o argumentos, por la parte perjudicada en la sentencia primera. La incógnita es qué cargo ocupaba Cornuto. Según

⁴⁷⁷ IRC III, 172-174. Al igual que los autores de esta obra (p. 161), también por nuestra parte seguimos la hipótesis de Alföldy, *Fasti Hispanienses* p. 19, para la identificación de este gobernador y la datación (que en su obra, a diferencia de IRC, sitúa entre los años 75-78). A tenor de sus *trianomina*, huelga decir que este personaje es un antepasado del emperador Antonino Pío. Según el sabio húngaro, se trataría de su abuelo (p. 20). Anexo II: nº 19-21.

⁴⁷⁸ Burton, “The Resolution...”, cit. pp. 201-202.

⁴⁷⁹ Como en el caso del enfrentamiento entre las comunidades de Leptis Magna y Oea en 69 d.C., que derivó en una verdadera guerra en la que los oeenses pidieron ayuda a los garamantes. El legado propretor que estaba al mando por entonces de la legión III Augusta, Festo, fue quien puso fin al problema, dado que el procónsul Pisón había sido asesinado por orden suya en el contexto de la guerra civil. Cf. Tac. *Hist.* IV, 50.

⁴⁸⁰ Que con toda probabilidad es el mismo procónsul que aparece en Reynolds – Ward Perkins, cit. nº 304, como indica B. E. Thomasson, *Fasti Africani* cit. p. 53, nº 64.

⁴⁸¹ *ILAfr.* 591 y 592.

la opinión de Cagnat *et alii*, se trataría de un legado del procónsul⁴⁸², opción verosímil al tratarse de una causa de derecho civil que podía ser resuelta a través de la jurisdicción delegada del procónsul. Sin embargo, podría tratarse de uno de los procónsules que precedieron en el cargo a Marcelo. En efecto, en sus *Fasti Africani*, Thomasson plantea la posibilidad de que se trate de C. Julio [Plancio Varo?] Cornuto Tértulo, que habría gobernado la provincia en 116/117⁴⁸³. A nuestro juicio, esta identificación es la más verosímil, y nos indicaría, como en el caso anterior de *Sardinia*, que no era extraño que la parte damnificada por una sentencia del gobernador probase suerte apelando a uno de sus inmediatos sucesores en vez de recurrir a Roma.

Como vemos, dentro de las disputas territoriales se halla, en ocasiones, un conflicto en torno al uso de los ríos y principales cursos fluviales, sobre todo en aquellas provincias o regiones donde las tierras fértiles estaban más concentradas y existían zonas desérticas. No sólo el norte de África presentaba estos problemas. En la Hispania Citerior, el valle del río *Hiberus* (actual Ebro) era la principal área fértil del interior de la provincia, y no es de extrañar que el usufructo de sus aguas con fines agrícolas trajera consigo conflictos entre particulares o entre comunidades⁴⁸⁴. Gracias a la denominada *lex riui Hiberiensis* –también conocida como Bronce de Agón, por la localidad donde fue hallado el bronce–, de época adrianea, conocemos la intervención de un legado imperial –[Fu(?)]ndanus Augustanus Alpinus⁴⁸⁵– en las regulaciones en torno al uso y cuidado de los canales que derivaban las aguas del *Hiberus* a las tierras de los *compagani* de la comunidad de los *Belsinonenses*, del territorio del municipio de *Cascantum*, y los del *pagus Gallorum* y el *pagus Segardenensis*, del de la colonia de *Caesaraugusta*⁴⁸⁶.

En concreto, en este epígrafe se menciona en dos ocasiones a un legado imperial y en ambas su nombre no se puede leer completo. Los títulos usados –*leg(atus) Aug(usti) clarissimus uir*⁴⁸⁷ y *leg(atus) / [pr(o)? pr(aetore)? Imperatoris Caes(aris) Trajiani Hadriani Aug(usti)]*⁴⁸⁸– han hecho dudar acerca de su cargo: ¿gobernador o jurídico? Estamos de acuerdo con D. Nörr y Beltrán Lloris en que se trata de dos

⁴⁸² *Idem*.

⁴⁸³ Thomasson, *Fasti Africani* cit. p. 52, n° 62.

⁴⁸⁴ Ya desde época republicana, véase la *Tabula Contrebiensis* (*supra*).

⁴⁸⁵ Col. III, ll. 44-45. Cf. Beltrán Lloris, “An Irrigation Decree...” cit. p. 157.

⁴⁸⁶ Beltrán Lloris, “An Irrigation Decree...” cit. pp. 160-162.

⁴⁸⁷ En genitivo en el texto: col. III, ll. 32-33. Véase la lectura del fragmento completo *supra*.

⁴⁸⁸ Col. III, ll. 44-45.

personas diferentes, pues, además de la diferencia en los *cognomina*, resultaría extraño que el gobernador, al mencionar su edicto, se citase a sí mismo, como sucede en las líneas 32-33 de la columna III. Según estos autores, el primero sería el gobernador –dado que se lo menciona a propósito de su edicto jurisdiccional– y el segundo el *legatus iuridicus* que estaría a sus órdenes y, por tanto, la reconstrucción de su título pasaría a ser *leg(atus) / [iuridicus Imp(eratoris) etc.]*⁴⁸⁹. Beltrán Lloris ha propuesto identificar al gobernador como Cayo Minicio Fundano –amigo de Plinio el Joven⁴⁹⁰– y al *iuridicus* con su hijo adoptivo Cayo Minicio Fundano Augustano Alpino⁴⁹¹.

A pesar de que las controversias territoriales –como hemos visto en los ejemplos anteriores– solían ser vistas en persona por los gobernadores y de que, según Ulpiano, aquéllas relativas al uso de las aguas y a la construcción ilícita de canales debían ser llevadas siempre ante los gobernadores⁴⁹², nada impedía a éstos pasar el caso a sus legados subordinados. El propio Adriano estableció en un rescripto que los gobernadores no estaban obligados a juzgar todas las causas que les competían, sino que podían elegir las que verían personalmente y cuáles transferir a otros jueces⁴⁹³. Sin embargo, no deja de resultar extraño que el *iuridicus* lo sustituyese también en la sanción de unos estatutos⁴⁹⁴ que influían tanto en la vida cotidiana de varias comunidades locales y en la ordenación del territorio al implicar una reorganización profunda del uso de las aguas y la institución de una comunidad de riego. Ahora bien,

⁴⁸⁹ Nörr, “Prozessuales...” cit. p. 109-110 y 115, seguido por F. Beltrán Lloris, “(C.) Mi[nicio Fund]ano y [¿C. Minicio?] Fundano Augustano Alpino, gobernador y legado jurídico de la Hispania Tarraconense en época de Adriano”, en M. L. Caldelli – G. L. Gregori (cura) *Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo*, Roma, 2014, pp. 727-734, esp. pp. 727-728; y Ozcáriz Gil, *La administración...* cit. pp. 150-151.

⁴⁹⁰ Plin. *Ep.* IV, 15, 10 y V, 16, 8.

⁴⁹¹ Beltrán Lloris, “(C.) Mi[nicio Fund]ano...” cit. pp. 727-734. También barajó la identificación de este gobernador con el amigo de Plinio C. Castillo, “La Hispania de Adriano: nuevos datos”, en F. J. Navarro (ed.) *Pluralidad e integración en el mundo romano*, Pamplona, 2010, pp. 9-14, esp. pp. 11-12.

⁴⁹² Ulp. 1 op. (*Dig.* L. 13, 2: *De usu aquae, de riuis nouis inciuliter institutis, item de equis alienis a sciente possessis fetuque earum, et de damno dato per immissos in praedium suum uniuersos homines eos, qui in plurium praedia distribui debuerunt, si modo id non ex auctoritate eius qui iubere potuit factum est, praesidem prouinciae doceri oportere responsum est, ut is secundum rei aequitatem et iurisdictionis ordinem conuenientem formam rei det.* Cf. R. Mentxaka, “*Lex riui Hiberiensis*, derecho de asociación y gobernador provincial”, *Revista Internacional de Derecho Romano* 2, 2009, pp. 1-46, pp. 44-45, que se inclina en favor de la posibilidad de que Augustano Alpino sea el gobernador.

⁴⁹³ *Dig.* I, 18, 8 (Jul. 1 *dig*): *Saepe audiui Caesarem nostrum dicentem hac rescriptione: “eum qui prouinciae praeest adire potes” non imponi necessitatem proconsuli uel legato eius uel praesidi prouinciae suscipiendae cognitionis, sed eum aestimare debere, ipse cognoscere an iudicem dare debeat.*

⁴⁹⁴ Col. III, ll. 44-47): [*Hanc legem –c. 4– Fu(?)ndanus Augustanus Alpinus leg(atus) / [pr(o) (?) pr(aetore)? Imp(eratoris) Caes(aris) Tra]iani Hadriani Aug(usti) aditus a magis-/ [tro pagi pagano]rum Caesaraugustanorum L(ucio) Man-/ [lio (?) L(uci) f(ilio) (?) Ani(ensi tribu) (?) Mate(?)rno sancxit(!) ratamque esse iussit.* Cf. Beltrán Lloris, “An Irrigation Decree...” cit. p.157.

un *legatus iuridicus* tenía los poderes jurisdiccionales necesarios para abordar tales asuntos si se los encomendaba el gobernador⁴⁹⁵.

En nuestra opinión, los *pagani* en litigio llevaron su reclamación en primer lugar ante el gobernador provincial Cayo Minicio Fundano cuando éste realizó el *conuentus* anual en *Caesaraugusta*, sede a la que estaban adscritos. No es posible especificar más dado el estado lacunoso del texto, pero probablemente no fue la primera ocasión en que se producían conflictos entre ambas partes por el uso de las aguas, lo que explicaría que el gobernador decidiese llevar a cabo una reorganización de los modos y las normas que debían regir el uso de las aguas del *Hiberus* con fines agrícolas a través de canales de irrigación y las relaciones entre los usufructuarios⁴⁹⁶. Si es correcta la identificación de Augustano Alpino como *iuridicus*, su intervención se debería a que el gobernador Minicio Fundano carecía del tiempo necesario para realizar en persona las tareas que conllevaba la elaboración del nuevo estatuto regulador.

No nos detendremos aquí en la descripción y análisis de la información contenida en el bronce acerca de la irrigación de las tierras de estas comunidades –algo que escapa al objeto de este estudio y, por lo demás, ya ha sido realizado por los autores antedichos–, pero sí nos interesa señalar el oneroso trabajo que suponía la elaboración del estatuto que contiene. Resultaba una tarea demasiado larga y absorbente para el gobernador al comprender disposiciones en torno a las obligaciones de los usuarios, el establecimiento de unos *magistri* responsables de su mantenimiento con la indicación de sus competencias y de las reglas que se debían seguir para su elección, así como de una serie de normas relativas al cuidado y limpieza de dichos canales, además de las cláusulas legales que se aplicarían en caso de nuevos litigios o contravenciones de las normas contenidas en el estatuto⁴⁹⁷. Todas estas disposiciones hubieran obligado al gobernador a recorrer las tierras realizando inspecciones y a detenerse en *Caesaraugusta* más de lo que su calendario oficial le permitía. Por ello, Minicio Fundano siguió la tendencia establecida desde Trajano de enviar un *legatus iuridicus* al área del valle del Ebro, que parece haber requerido una presencia más constante de

⁴⁹⁵ Beltrán Lloris, “An Irrigation Decree...” cit. pp. 162-163.

⁴⁹⁶ Nörr, “Prozessuales...” cit. p. 109; Mentxaka, “*Lex rivi...*” cit. p. 9.

⁴⁹⁷ Obligaciones de los usuarios: col. I, ll. 1-8; elección y funciones de los *magistri* (que eran dos): col. I, ll. 38-39; mantenimiento de las infraestructuras: col. I, ll. 21-26; *concilium*: col. I, ll. 39-46 y col. I, l. 47-col. II, l. 11; disposiciones procesales que debían seguirse para resolver posibles conflictos futuros o contravenciones del estatuto: col. III, ll. 8-14 y 23-43.

agentes imperiales durante siglo II. La misión de estos *iuridici*, como su título indica, consistía en atender aquéllas causas no criminales que el gobernador no pudiese ver en su itinerario conventual. En este caso, el *iuridicus* hubo de ocuparse además de los detalles del nuevo estatuto regulador de esta comunidad de regadores, sancionándolo él mismo, pero no cabe duda de que hubo de contar con la aquiescencia del gobernador. El propio texto nos revela que actuó en todo momento teniendo como marco de referencia legal el edicto jurisdiccional de éste, por ejemplo en las reglas que se debían seguir en caso de nuevas reclamaciones, entre las que se hallaba, como no podía ser de otro modo, las relativas al *uadimonium*⁴⁹⁸. Además, un trabajo como el recogido en este bronce no puede ser resultado de la labor de un solo hombre y no cabe duda de que el *iuridicus* contó con la colaboración de miembros del *consilium* y del *officium* del gobernador Minicio Fundano.

Como muestran los ejemplos de Valeria Faventina contra los *compagani riui Larensis* o el del particular que realizó las tres *tabellae defixionis* ampuritanas, en la resolución de las disputas territoriales los gobernadores se apoyaron mucho en los consejos y opiniones de los miembros de su *consilium*, formado por su legado, su *cohors amicorum* (que podía incluir a expertos en jurisprudencia) y también por notables locales que fuesen ciudadanos romanos y conocesen de primera mano los problemas de la misma, la historia de las relaciones entre sus comunidades y sus costumbres⁴⁹⁹. La presencia de estos últimos parece que provocó no pocos casos de tráfico de influencias y intereses, pues a principios del siglo III el poder imperial decidió prohibir que formasen parte del *consilium* de los gobernadores hombres naturales de su provincia⁵⁰⁰. En el caso ampuritano, también formó parte del consejo asesor el procurador imperial de la Hispania Citerior, Maturo, indicio de la colaboración que existió entre los titulares de este cargo y los gobernadores de la provincia ante determinados problemas.

⁴⁹⁸ Col. III, II. 29-37.

⁴⁹⁹ Sobre la composición de la *cohors amicorum* de un gobernador: Fronto *Ad Antoninum Pium* 7 (Van den Hout pp. 166-167), carta en la que describe al emperador sus preparativos antes de asumir el proconsulado de Asia (aunque su salud le obligó a renunciar a ejercerlo). Asimismo, véase la importancia que para Julio César tenían los ciudadanos romanos naturales de la Galia, dado que conocían las costumbres locales, la lengua vernácula y tenían relaciones personales con los líderes indígenas: *B.G.* I, 19, 3; 47, 4.

⁵⁰⁰ Macer *1 de off. praes.* (Dig. I, 22, 3). Sobre la composición del *consilium* del gobernador: Mommsen, *DPR* I, p. 315-318; H. G. Pflaum, "Le *consilium* du préfet d'Egypte. Sa composition", en *Scripta varia II: Gaule et Empire Romain*, París, 1981, pp. 250-257.

Tanto la *lex riui Hiberiensis* como el caso de Valeria Faventina contra los *compagani riui Larensis* revelan que en no pocas ocasiones sería necesario –si no imprescindible– que el gobernador o un legado suyo realizaran una inspección del territorio que había suscitado la disputa y de la disposición de los mojones que demarcaban sus límites, que muchas veces habían sido establecidos por gobernadores anteriores⁵⁰¹. En esta tarea, la figura del *ensor* adquiriría una gran relevancia, como especialista en la ordenación y delimitación de los campos de las comunidades provinciales que luego se registraban (por escrito y gráficamente) y se custodiaban en los archivos de la provincia (desde la que se enviaba una copia a los archivos imperiales de Roma) y en los de cada comunidad⁵⁰². Moatti ha negado que en el *tabularium prouinciae* se recogiesen estas *formae* catastrales, argumentando que los documentos que en él se conservaban eran de naturaleza censitaria, fiscal y judicial. En su opinión, “entre la cité et le *tabularium principis*, il n’y a pas d’intermédiaire”⁵⁰³. A nuestro juicio, resulta difícil aceptar esta afirmación, dado que era necesaria la intermediación de un cargo imperial en el envío a Roma de una copia de estos documentos. ¿Y quién mejor que el gobernador para hacerlo? Además, las palabras del procónsul de *Sardinia* Helvio Agripa indican con claridad que se contaba con una copia del documento que recogía los límites del territorio de los *Galillenses* y el de los *Patulcenses* en los archivos de la provincia (...*trium mensium spatium dederit in-/tra quam diem nisi forma allata esset se eam quae in prouincia esset secutum*⁵⁰⁴), que no podían ser otros que los existentes en la capital, quizá en el pretorio o palacio del gobernador. Moatti lleva razón al señalar la importancia que en los archivos provinciales tenían los documentos de naturaleza fiscal, pero no tiene en cuenta que también los registros catastrales se usaban en el ámbito de la fiscalidad.

⁵⁰¹ *CIL* II²/5, 302 (Bética); *AE* 1954, 88 (Lusitania); *CIL* VIII, 4845 (África Proconsular); *CIL* XII 113 (Germania Superior/*Alpes Graiae*). Cf. Burton, “The Resolution...”, cit. p. 211; A. Dalla Rosa, “Sulle fonti relative alle dispute confinarie nelle province romane”, *ZPE* 160, 2007, pp. 235-246. Sobre la intervención de los gobernadores en la ordenación territorial véase el Capítulo 5 de la Segunda Parte.

⁵⁰² Moatti, *Archives et partage...* cit., pp. 31-91; Dalla Rosa, “Sulle fonti...”, cit. pp. 235-237. Un buen ejemplo de la labor del *ensor* en *IG* V 1, 1431, en la delimitación del territorio por el que estaban enfrentadas las comunidades de Esparta y Mesenia. En Occidente se producirían operaciones agrimensorias similares.

⁵⁰³ Moatti, *Archives et partage...*, cit. p. 78.

⁵⁰⁴ *Tabula di Esterzili*, l. 17 (*CIL* X, 7852). La negrita es mía.

Esta era, pues, la casuística a la que se tenían que enfrentar los gobernadores en el ámbito de las causas no criminales. A pesar de que el procedimiento formular pervivió en provincias hasta el siglo II, todos los testimonios que hemos visto antes se encuadran dentro de la *cognitio extra ordinem*, lo que prueba que desde los inicios del Principado ésta fue usada de manera habitual tanto por los procónsules como por los *legati Augusti pro praetore* de Hispania y de otras provincias en la resolución de los litigios no criminales ya en el siglo I d.C.⁵⁰⁵. Esto se debió sin duda a la ductilidad de este procedimiento, que favorecía la agilización del proceso. A diferencia del procedimiento *per formulas* –dividido en dos fases, muy rígido y predeterminado, y de carácter acusatorio– la *cognitio extra ordinem*, que se desarrollaba en una única fase, se define por su naturaleza inquisitoria, dotando al gobernador de un papel activo en la dirección del proceso y de una gran discrecionalidad decisoria en su sentencia⁵⁰⁶. En ella, el papel del *consilium* es fundamental, dado que en él se apoya el gobernador para valorar los hechos y las pruebas y decidir su sentencia, aunque la decisión última le competía en exclusiva a él.

Todo lo antedicho nos lleva a concluir que el gobernador es tenido por una instancia judicial no sólo superior, sino más ecuánime. Su jurisdicción, situada por encima de la de los magistrados municipales, lo convierte en árbitro de las más importantes disputas locales y le hace asumir un papel de contrapeso en los posibles conflictos entre miembros del orden decurional, velando por el correcto funcionamiento de sus instituciones. La posibilidad de que, a petición de las dos partes, la causa pudiera ser vista por los magistrados locales, no es óbice para reconocer la capacidad de intervención del gobernador. Al contrario. Tal disposición venía dictada por la necesidad de descargarle de trabajo, con el objetivo de que el máximo tribunal provincial pudiese atender sin demora las causas de mayor relevancia para la estabilidad y el orden provinciales. A diferencia del Oriente, no existía una competencia entre los

⁵⁰⁵ Probablemente su uso estuvo generalizado ya en época Julio-Claudia, como induce a pensar la aplicación de la *cognitio* por parte de Galba, cuando fue proconsul de África, en el litigio menor que enfrentó a dos hombres por la posesión de una mula. Cf. Suet. *Galba* 7.

⁵⁰⁶ B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milán, 1989, pp. 111-114; Sherwin-White, "Coercitio..." cit. p. 17; '*Cognitio extra ordinem*' (s.v.), en *Diz. Giurid.* pp. 107-108.

magistrados locales y el gobernador, como tampoco entre las ciudades y el poder imperial, sino una abierta colaboración⁵⁰⁷.

El cúmulo de causas a las que el gobernador de la Citerior debía atender tuvo que ser bastante importante si tenemos en cuenta que desde Tiberio están documentados en la provincia *legati Augusti*, a secas, que Alföldy ha interpretado como predecesores de los *legati iuridici*⁵⁰⁸ atestiguados en Hispania Citerior a partir de Trajano⁵⁰⁹. Estos eran enviados a las áreas en las que se requiriese una mayor presencia del poder romano, más allá de la visita anual del gobernador; sobre todo en aquellas más alejadas de la capital provincial, como los *conuentus* del Noroeste, en los que conocemos la presencia de *legati iuridici per Asturiam et Callaeciam* en el siglo II⁵¹⁰. El gobernador de la Citerior y el de la Lusitania, como *legati Augusti* que eran, no podía delegar el *imperium* que había recibido ya del emperador (a diferencia de los procónsules), así que estos legados habían recibido sus poderes por delegación del propio *princeps*, pero estarían subordinados jerárquicamente a ellos y, como hemos dicho antes, al igual que los legados de los procónsules carecerían probablemente de *ius gladii*, capacidad de manumitir y sus sentencias podrían ser recurridas ante el *legatus Augusti pro praetore* que gobernaba la provincia.

La misión de los legados jurídicos del siglo II, como su propia titulatura indica, se encuadraba en el ámbito judicial, y por ello no nos parece que su envío a *Asturia* y *Callaecia* estuviera ligado a la explotación de las minas de oro, como ha sido propuesto por A. Orejas⁵¹¹. En cambio, sí estamos de acuerdo con esta autora en que la asignación del mando de la *legio VII Gemina* a los *iuridici per Asturiam et Callaeciam* a partir de

⁵⁰⁷ Estamos, pues, de acuerdo con Jacques, *Le privilege...* cit. p. 346, en que el poder imperial, durante el Principado, no atentó en Occidente contra las instituciones ni la autonomía municipales, sino que tendió a tutelarlas en aras de su buen funcionamiento. Véase también L. A. Curchin, "Juridical Epigraphy and Provincial Administration in Central Spain", en González (ed.), *Roma y las provincias...* cit. pp. 87-102, esp. p. 87-89, donde define esta relación como una "strategy of participation".

⁵⁰⁸ *Fasti Hispanienses* p. 67-106 (hasta Caracala; los siguientes que reseña, posteriores a su principado, se conocen peor).

⁵⁰⁹ *Vid. supra*: Espinosa, "*Iuridici...*" cit.

⁵¹⁰ El primero conocido es Quinto Fuficio Cornuto (*ILS* 8975), cuyo mandato ha sido fechado por Alföldy, *Fasti Hispanienses* pp. 81-84; a este seguirían, según el mismo autor (p. 84-98), los siguientes *iuridici* entre el 141 y el reinado de Caracala (es una lista con lagunas): Lucio Novio Crispino Marcial Saturnino, Lucio Coelio Festo, Sexto Pedio Hirruto Lucilio Polión, Lucio Albinio Saturnino y Quinto Mamilio Capitolino, Gayo Fulvio Máximo, Quinto (Hedio) Loliano, Polión Plaucio Avito, Lucio Ranio Optato Novato Aconcio. Alföldy incluye en esta lista al futuro emperador Septimio Severo, partiendo de una referencia de la *Historia Augusta* (*Severus* 3, 3), pero nos parece que el testimonio es más bien oscuro., pues, como su denominación oficial indica, se cometido era jurisdiccional.

⁵¹¹ A. Orejas, *Estructura social y territorio: El impacto romano en la cuenca noroccidental del Duero*, Madrid, 1996, p. 112.

Septimio Severo (el primer testimonio es, precisamente, el del antedicho Mamilio Capitolino) indica que el poder imperial central comenzaba a entender que esta región tenía una entidad propia.

La situación periférica del extremo occidental de la Hispania Citerior, agravada por el tiempo probablemente insuficiente que el gobernador le dedicaba en su *tour* provincial –ocupado como estaba la mitad del año en el eje *Tarraco-Carthago Noua* y la gran extensión que configuraba el resto de la provincia–, fue lo que llevó a que se crease, bajo Caracala, la *Prouincia Hispania Superior*⁵¹², retomando la vieja idea augustea de una provincia noroccidental (la Transduriana), aunque más reducida. Como en el caso de esta última, su existencia fue efímera, pero el hecho de que Diocleciano, en su reorganización administrativa general del Imperio, decidiera crear una *prouincia Gallaecia* prueba que la incidencia y eficacia del gobierno provincial en el Noroeste no dejó de presentar deficiencias en comparación al resto de la Hispania Citerior⁵¹³.

Otras acciones jurisdiccionales propias del ius ciuile: Manumisiones, adopciones, emancipaciones y tutoris datio:

Cuenta Suetonio que Galba se hallaba en *Carthago Noua* cuando se enteró de la sublevación de las Galias contra Nerón a través una carta del gobernador de la Lugdunense, Julio Vindex, en la que éste le exhortaba a asumir el liderazgo del levantamiento. Una vez que Galba decidió aceptarlo, su primer acto fue subir al tribunal en el que estaba impartiendo en esos días justicia en la ciudad, sede conventual, *cum quasi manumissioni uacaturus*, haciendo que se dispusiesen en él los retratos disponibles de aquellos personajes relevantes que habían sido condenados o asesinados por el tirano⁵¹⁴.

Dejando a un lado el carácter simbólico de este acto tan teatral, con el que Galba pretendía presentarse como un libertador, el pasaje revela que la manumisión era una

⁵¹² Alföldy, *Provincia Hispania Superior*, cit.

⁵¹³ En época de Diocleciano también se desgajó el antiguo *conuentus Carthaginensis* de la Tarraconense, pasando a ser una nueva provincia, como consecuencia de nuevo de la necesidad de una mayor intervención y control en esta región. Sin embargo, a diferencia de la *Callaecia*, esto no significa que durante el Principado el gobernador de la Hispania Citerior no se bastase para resolver los problemas de esta área, sino que la creación de la nueva provincia ha de entenderse dentro del plan de Diocleciano de devolver la estabilidad al gobierno de las provincias después de cincuenta años de inestabilidad en el trono imperial y en las fronteras.

⁵¹⁴ Suet. *Galba* 10, 1; Plut. *Galba* 5, 1.

tarea habitual de los gobernadores que entraba dentro del ámbito de la jurisdicción voluntaria. Así lo confirma Ulpiano, cuando dice:

*Praeses apud se adoptare potest, quemadmodum et emancipare filium et manumittere seruum potest*⁵¹⁵.

Los gobernadores de rango senatorial, al igual que los cónsules y los pretores, estaban encargados de presidir la llamada *manumissio uindicta*, que era, junto con la *manumissio censu* y la que se realizaba por testamento, una de las tres plenamente reconocidas por la ley en Roma⁵¹⁶. Su denominación se deriva de la vara (*uindicta*) con la que el dueño del esclavo tocaba a éste cuando declaraba, al inicio del proceso, que era de su propiedad *ex iure Quiritium*. Luego manifestaba su deseo de liberarlo (*liberum esse iubeo*) y un lictor cogía la *uindicta* y la arrojaba al suelo en señal de anulación de esa propiedad. La ceremonia concluiría con la *addictio* del magistrado –en nuestro caso el gobernador–, quien sancionaba la manumisión, declarando al esclavo libre y ciudadano romano. Cumplidos estos actos formales, que se realizaban en el tribunal del gobernador⁵¹⁷, se procedía al pago del impuesto de la *uicesima libertatis* (el 5%) y se consignaba todo en unas *tabulae ceratae* que se sellaban, como sucedía en otros actos jurídicos⁵¹⁸. Es probable que una copia de estas tablillas fuese depositada en los archivos municipales y provinciales, pero no hay constancia de ello⁵¹⁹. Según el jurista Gayo, en las provincias las manumisiones se realizaban en cada sede conventual el último día de *conuentus* y ante un *consilium* compuesto por veinte ciudadanos romanos, frente a los cinco senadores y otros tantos *equites* que componían el de los pretores de Roma, aunque en los casos de esclavos mayores de treinta años la manumisión podía realizarse allí donde se encontrase el gobernador, incluso en los baños y en las termas:

⁵¹⁵ *Dig.* I, 18, 2 (*Ulp. 26 ad Sab.*).

⁵¹⁶ *Cic. Topica* 10.

⁵¹⁷ Véase la antedicha cita de Galba.

⁵¹⁸ P. López Barja, *Historia de la manumisión en Roma: de los orígenes a los Severos*, Madrid, 2007, pp. 20-26, en donde hace un buen repaso de los principales intentos de reconstrucción de esta ceremonia. Sobre el simbolismo de este procedimiento: S. Tondo, *Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della manumissio vindicta*, Milán, 1967.

⁵¹⁹ R. Haensch, “Das Statthalterarchiv” *ZSS* 100, 1992, pp. 209-317; López Barja, *Historia de la manumisión...* cit. p. 28.

*Consilium autem adhibetur in urbe Roma quinque senatorum et quique equitum romanorum puberum; in prouinciis autem uiginti recuperatorum ciuium romanorum. Idque fit ultimo die conuentus sed Romae certis diebus apud consilium manumittantur. Maiores uero triginta annorum serui Semper manumitti solent, adeo ut uel in transitu manumittantur, ueluti cum praetor aut pro consule in balnea uel in theatrum eat*⁵²⁰.

Todos los gobernadores de rango senatorial tenían el poder de realizar manumisiones, pero existía una diferencia entre los procónsules y los *legati Augusti pro praetore* en lo que respecta a su aplicación: los procónsules podían realizarlas desde el momento en que abandonaban Roma. Así lo establece Marciano:

*Omnes proconsules statim quam urbem egressi fuerint habent iurisdictionem, sed non contentiosam, sed uoluntariam: ut ecce manumitti apud eos possunt tam liberi quam serui et adoptiones fieri. Apud legatum uero proconsulis nemo manumittere potest, quia non habet iurisdictionem talem.*⁵²¹

El porqué de este derecho no está claro, pero, a nuestro juicio, ha de relacionarse con el hecho de que los procónsules poseen su *imperium* desde que abandonan la *Vrbs* y hasta que regresan a ella⁵²². Los legados imperiales, en cambio, se convertían en simples particulares cuando se hallaban fuera de su provincia⁵²³. Quizá todo ello sea consecuencia de que unos tenían auspicios e *imperium* propios –derivados, en la tradición republicana, de una *lex curiata*– y otros fuesen delegados del *princeps* para una región concreta y dependiesen de sus auspicios⁵²⁴.

Esto implicaba que un procónsul podía ser requerido en una provincia que no era la suya mientras realizaba el viaje de ida o vuelta, dándose la posibilidad de que en una misma provincia los ciudadanos romanos pudiesen recurrir a otra persona además de su gobernador para proceder a una manumisión, lo cual descargaría a este último de una

⁵²⁰ Gai. *Inst.* I, 20.

⁵²¹ *Dig.* I, 16, 2 (Marc. *1 inst.*). No está claro si los legados del procónsul podían manumitir. Vemos que Marciano lo niega, así como Ulpiano parece negarles toda jurisdicción voluntaria (*Dig.* I, 16, 3), pero Paulo opina lo contrario (*Dig.* XL, 2, 17). López Barja, *Historia de la manumisión...* cit. p. 17, admite que el legado podía realizar manumisiones al menos dentro de la provincia.

⁵²² *Dig.* I, 16, 16 (Ulp. *2 ed.*).

⁵²³ *Dig.* I, 18, 3 (Paul. *13 ad Sab.*).

⁵²⁴ Sobre la relevancia de los auspicios en el poder de manumisión cf. López Barja, *Historia de la manumisión...* cit. p. 16.

tarea que le quitaría bastante tiempo (las manumisiones serían numerosas durante el año), al mismo tiempo que beneficiaría a aquellos ciudadanos que no hubiesen podido (o no pudiesen en el futuro) acercarse a la capital provincial o sede conventual más cercana. Por ejemplo en el caso de ancianos. Plinio el Joven, al saber que su amigo Calestrio Tirón había sido nombrado procónsul de la Bética, le pidió que durante su viaje hacia la provincia, aprovechando su paso por *Ticinum*, en la Galia Cisaplina, fuese a visitar al abuelo de su mujer, Calpurnio Fabato, que vivía cerca de *Mediolanum* y quería oficializar mediante el procedimiento de la *uindicta* la manumisión de unos esclavos que previamente ya había realizado, de manera informal, *inter amicos*⁵²⁵.

Los ciudadanos romanos provinciales sólo podían realizar una *manumissio uindicta* ante su gobernador, pues ni sus magistrados ni los legados del procónsul tenían jurisdicción para ello⁵²⁶. En cambio, los de los municipios de derecho latino sí lo podían hacer dentro de su propia comunidad, tal y como reflejan las leyes de los municipios flavios de la Bética *Irni* y *Salpensa*, que dedican dos capítulos a esta función de sus duoviros: el 28, sobre la manumisión de esclavos de particulares, y el 72 (conservado sólo en la copia irnitana), sobre la liberación de esclavos públicos⁵²⁷. Esa diferencia entre las competencias de los magistrados de los municipios y colonias romanos y los de los municipios latinos no es tan extraña como en un principio pudiera parecer. Como bien ha señalado López Barja, hay que atribuirla a que, mientras que los esclavos manumitidos por los magistrados de los primeros se convertían en ciudadanos romanos, privilegio que debía ser controlado y, por ello, su concesión se limitaba a los magistrados y titulares de un *imperium* pleno, los libertos de una comunidad de derecho latino pasaban a formar parte de los *latini*⁵²⁸. Gracias al expediente de la latinidad no existió riesgo alguno de que el número de ciudadanos romanos aumentase de manera incontrolada en las provincias y, al mismo tiempo, se descargó a los gobernadores de la

⁵²⁵ Plin. *Ep.* VII, 16, 23 y 32.

⁵²⁶ Para los legados del procónsul: *Dig.* I, 16, 2, 1: *apud legatum uero proconsulis nemo manumittere potest, quia non habet iurisdictionem talem*. Por su parte, Paulo (*Dig.* I, 16, 5) dice que *apud proconsulem, postquam urbe egressus est, uindicta manumittere possumus: sed et apud legatum eius manumittere possumus*, lo que a nuestro juicio quiere decir que los legados del procónsul no podían realizar la *manumissio uindicta*, pero sí presidir otros tipos, como la *manumissio censu*, si habían sido encargados de supervisarlos.

⁵²⁷ Vid. Lamberti, *Tabulae Irnitanae* p. y, para la *lex Salpensana*: *CILA* II, 964. Los municipios romanos tuvieron derecho a manumitir a sus esclavos públicos a partir de un senadoconsulto del 129 d.C. Cf. López Barja, *Historia de la manumisión...* cit. pp. 89-90.

⁵²⁸ López Barja, *Historia de la manumisión...* cit. p. 18.

presidencia de una importante cantidad de manumisiones formales. Estamos, de nuevo, ante la aplicación de la política del equilibrio y del pragmatismo.

De todas formas, no eran pocas las manumisiones a las que debía atender el gobernador. La manumisión era una práctica extendida, motivada, por una parte, en el beneficio económico que podía deparar a su dueño, dado que en muchas ocasiones el esclavo compraba su libertad o bien porque mediante ella se desembarazaba de los ancianos, niños o mujeres cuyo trabajo no compensaba los gastos de su manutención; por otra, en el prestigio social que la concesión de la libertad le otorgaba como benefactor⁵²⁹. En la realización de esta tarea, los gobernadores se toparon con problemas derivados de las diferentes circunstancias que podían haber condicionado la manumisión, a veces con un propósito delictivo, y, como en la administración de justicia, se verían en la necesidad de consultar al emperador acerca del modo en que debían actuar. Esas consultas representarían una parte importante de los casos que luego llevarían a los emperadores a establecer, a través de la legislación, un control de las manumisiones llevadas a cabo con el fin de eludir el cumplimiento de la ley, como, por ejemplo, cometer un fraude o evitar que el esclavo fuese torturado para arrancar un testimonio contra su dueño en un proceso judicial⁵³⁰.

En el pasaje que mencionamos más arriba, Ulpiano afirmaba que competía al gobernador no sólo presidir las manumisiones, sino también las adopciones y las emancipaciones del *filius familias*. En ambas cuestiones, tanto la *lex Vrsonensis* como las de los municipios latinos guardan silencio, lo que hace pensar en que sus magistrados carecerían de potestad para llevar a cabo tales actos. Ello se debe, probablemente –como sucedía con las causas judiciales *de libertate* (vd. *supra*)–, a que conllevaban un cambio en la condición del individuo. La *adoptio* hacía pasar al individuo a depender de la *potestas* de un nuevo *paterfamilias*, y sus hijos (si tenía) junto con él, así como a ser un futuro beneficiario de otra herencia⁵³¹, y la *emancipatio* lo liberaba de esa *potestas* y lo convertía en un hombre *sui iuris*, a través de una suerte

⁵²⁹ K. Hopkins, *Conquerors and Slaves*, Cambridge, 1978, pp. 115-132; López Barja, *Historia de la manumisión...* cit. pp. 45-67.

⁵³⁰ Fraude: *CJ* 7, 11, 1. Como medio de evitar la tortura: *Dig.* XLVIII, 18, 1, 13.

⁵³¹ Como establece Modestino 2 *reg.* (*Dig.* I, 7, 1), la *adoptio* es la adopción del que es *filius familias*, mientras que si se trata de un individuo *sui iuris*, se habla de *adrogatio*.

de compra-venta ficticia basada en la institución jurídica de la *mancipatio*⁵³². Ese hombre podía ser desde entonces, a su vez, *paterfamilias*.

Gayo, en sus *Institutiones*, es muy claro cuando se refiere a los modos en que se puede realizar la adopción: a través de la *auctoritas* del emperador, del que dependen las *adrogationes*, o a través del *imperium* del magistrado, que se encarga de las *adoptiones*⁵³³. Dado que los magistrados de los municipios latinos y romanos y de las colonias carecían de un *imperium* pleno no podían presidir estos actos jurisdiccionales. Lo que en Roma hacía el pretor, en las provincias, como es habitual, correspondía al gobernador. Sin embargo, como en el caso de las sentencias judiciales, la última palabra la tenía el emperador, al menos desde el siglo II. Así, por ejemplo, como dice Marcelo, jurista de época de Antonino Pío y Marco Aurelio, *adoptio non in iure facta a principe confirmari potest*⁵³⁴

A todo esto hay que añadir, por último, que el gobernador debía velar porque tanto los libertos como los hijos cumpliesen sus deberes con sus patronos y padres, respectivamente y, si no lo hacían, reprender a los hijos y castigar a los esclavos mandando que los golpeasen con varas⁵³⁵. Las obligaciones familiares entraban dentro del orden social, que podía afectar al orden general dentro de una ciudad y, por ende, de la provincia. El poder imperial, desde Augusto, se preocupó por castigar los malos ejemplos morales en aras de proteger los *mores maiorum* que debían regir también la vida familiar. Las palabras de Ulpiano revelan una visión paternalista del cometido del gobernador provincial, similar, *mutatis mutandis*, a la del propio *princeps*.

Finalmente, los gobernadores también se habían de ocupar de la *tutoris datio*⁵³⁶, tal y como establece Gayo:

⁵³² Guarino, *Storia...* cit. p. 238; P. López Barja, “La triple venta del *filius familias* (XII Tablas 4, 2)”, en M. M. Myro – J. M. Casillas – J. Alvar – D. Plácido (eds.) *Las edades de la dependencia durante la Antigüedad. XXIV colloque du GIREA (Madrid 1997)*, Madrid, 2000, pp. 211-221. Sobre la potestad del padre sobre el hijo: Gai. *Inst.* 1, 55 (= *Dig.* I, 6, 3).

⁵³³ Gai. 1 *Inst.* = *Dig.* I, 7, 2, pr. El emperador ocupa el lugar que durante la República tuvieron los comicios. Recuérdese que en 59 a.C. P. Clodio, con la ayuda de César, entonces cónsul, se valió de una *adrogatio* para ser adoptado por un plebeyo y así poder optar al tribunado de la plebe. Suet. *Diu. Iul.* 20.

⁵³⁴ Marcell. 26 *dig.* (*Dig.* I, 7, 38).

⁵³⁵ Ulp. 1 *de off. procos.* (*Dig.* I, 16, 9, 3)

⁵³⁶ Ulp. 39 *ad Sab.* (*Dig.* XXVI, 5, 1 pr.): *Siue proconsul siue praeses siue etiam praefectus Aegypti siue proconsulatum optineat prouinciae uel temporis causa praeside defuncto uel quia ipsi prouincia regenda commissa est, tutorem dare poterit.*

*Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege Atilia a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis, qui Atilianus tutor uocatur; in prouinciis uero a praesidibus prouinciarum lege Iulia et Titia.*⁵³⁷

En efecto, la *lex Atilia de tutore dando* –cuya promulgación no pudo haber sido posterior al 186 a.C.⁵³⁸– reguló de manera definitiva la designación de tutores y estableció que, en ausencia de un *tutor testamentarius* o *legitimus*, correspondía al pretor urbano la elección del tutor a petición del interesado. Más adelante, esta norma fue extendida a las provincias por una *lex Iulia et Titia* de la que no se sabe nada más⁵³⁹. Y quedó determinado, como nos transmite Gayo, que el gobernador debía intervenir en una tutela cuando el individuo –mujer o menor de edad (impúber)– que la necesitara careciese de ella. Cuando él no pudiese atender alguno de estos casos, su legado podía sustituirlo, pues, según nos informan varios juristas, también tenían potestad para ello⁵⁴⁰.

Gracias a un díptico papiráceo contamos con un ejemplo de nominación de un tutor para una mujer realizada por el prefecto de Egipto en el 198 d.C. Consta de dos partes diferenciadas: en la primera, en latín, se certifica que el prefecto, Gayo Emilio Saturnino ha nombrado como tutor de Maevia Dyonisarion a Marco Julio Alejandro, a petición de Cayo Terencio Sarapamon y en virtud de la ley Julia y Titia y de un senadoconsulto:

Q(uintus) Aemilius Saturninus, praef(ectus) Aeg(ypti) postutante C(aio) Terentio Sarapammone, Meuiæ Dionusario, e llege Iulia et Ti(ti)a et ex s(enatus) c(onsulto), M(arcum) Iulium Alexandrum, quo ne ab iusto tutore tutela abeat, tutorem dedit, d(descriptorum) e(t) r(ecognitum) e(x) e(xemplo) b(reui) t(abularium) s(upra) s(criptarum)? Actum Alexandreae ad Aegyptum, VIII Kal(endas) octubre(s), Saturnino et Gallo co(n)s(ulibus), anno VII Imp(eratorum) Caesarum L(uci) Septimi Seueri Pii

⁵³⁷ Gai. *Inst.* I, 185.

⁵³⁸ Dado que por entonces se produjo la primera *datio tutoris* que siguió las disposiciones de esta ley: Liv. XXXIX, 9. Rotondi, *Leges publicae*... cit. pp. 275-276. Gayo es nuestra mejor fuente de información sobre la *tutoris datio*; véase *Inst.* I, 185-195.

⁵³⁹ Guarino, *Diritto privato*... cit. pp. 545-546. Este autor sitúa, con dudas, la *lex Atilia* en el 210 a.C.

⁵⁴⁰ Licin. 3 reg. (Dig. I, 16, 15): *Et legati proconsulum tutores dare possunt*; Ulp. 39 ad Sab. (Dig. XXVI, 5, 1, 1): *Legatus quoque proconsulis ex oratione Diui Marci tutorem dare potest*. Cf. L. Fanizza, *L'amministrazione della giustizia nel Principato*. Aspetti, problemi, Roma, 1999, p. 86.

Pertinacis Arabici Adiabenici Parthici Maximi et M(arci) Aureli(i) Antonini Aug(ustorum), mense Thoth, die XXVI.

La segunda parte, en griego, presenta la subscripción de Maevia, que por ser analfabeta tuvo que delegar la firma en Julio Heraclos. A pesar de que el gobernador de Egipto era de rango ecuestre, había sido equiparado jurisdiccionalmente a los procónsules y, por tanto, su ejemplo es válido para las provincias gobernadas por senadores como las hispanas⁵⁴¹.

Sin embargo, los gobernadores y sus legados no eran los únicos magistrados que podían proceder a la *tutoris datio* en su provincia –como tradicionalmente ha sostenido la romanística a partir de Gayo, *Inst.* I, 185⁵⁴²–, pues tanto la *lex coloniae Genetivae* Urso (cap. 109) como las leyes de los municipios latinos de *Irni* y *Salpensa* (cap. 29) atribuyen a sus duoviros la capacidad de realizarla⁵⁴³. Gayo nada dice de los magistrados locales a este respecto, pero, con Lamberti, pensamos que ello no quiere decir que los excluyese de esta competencia⁵⁴⁴; no olvidemos que Gayo está hablando de quién era el homólogo del pretor urbano en las provincias, no de todos los que tenían la capacidad de proceder a la *tutoris datio* en los municipios y colonias. Según S. Solazzi, aunque los magistrados locales tuviesen esa capacidad, deberían contar con la aprobación del gobernador o, al menos, actuar *iussu praesidis*, como se desprende de *Dig.* I, 1, 20, 4.⁵⁴⁵ Empero, ya F. Grelle apuntó que la mención del *iussum praesidum* era una adición de los compiladores justinianos⁵⁴⁶ y, como ha señalado P. Panero Oria, de ser estrictamente necesario ese permiso u orden del gobernador habría de estar especificado en las leyes municipales béticas⁵⁴⁷. Además, Ulpiano especifica que la *tutoris datio* no es un acto propio del *imperium* o la *iurisdictio* del magistrado, sino que esta competencia debe serle concedida mediante una ley, un senadoconsulto o por el

⁵⁴¹ P. F. Girard, *Textes de droit romain*, París, 1921, pp. 916-917, n° 8.

⁵⁴² *Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege Atilia a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis, qui Atilianus tutor uocatur; in prouinciis vero a praesidibus provinciarum ex lege Iulia et Titia.*

⁵⁴³ A. Gómez-Iglesias, “Lex Ursonensis Cap. 109. La tutela en la Lex Ursonensis y en la Ley Municipal”, *Studia Historica. Historia Antigua* 15, 1997, pp. 247-266.

⁵⁴⁴ Lamberti, *Tabulae Irnitanae*... cit. p. 63.

⁵⁴⁵ S. Solazzi, “Sulla competenza dei magistrati municipali nella costituzione del tutore durante l’Impero Romano”, en *Scritti di Diritto Romano* II, Nápoles, 1957, pp. 221-228.

⁵⁴⁶ F. Grelle, “Datio tutoris e organi cittadini nel Basso Impero” *Labeo* 6, 1960, pp. 216-225, esp. p. 224.

⁵⁴⁷ P. Panero Oria, “La *datio tutoris* en la *Lex Irnitana* cap. 29”, *AHDE* 81, 2011, pp. 973-995, p. 980, que sigue a V. Arangio-Ruiz, “Due nuove tavolette di Ercolano relative alla nomina di tutori muliebri”, en *Studi De Francisci* 2, Milán, 1956, pp. 3 ss.

propio *princeps*⁵⁴⁸. Así habría sucedido con los magistrados de los municipios de Italia y los gobernadores provinciales, que la recibieron a partir de la *lex Iulia et Titia* del 31 a.C. En cuanto a los magistrados de las colonias de las provincias, como Urso, y de los municipios latinos, como *Irni* o *Salpensa*, estamos de acuerdo con la hipótesis de Panero Oria, que ha propuesto que fuesen las propias leyes constitutivas de esa colonia y de esos municipios las que los habilitaron a proceder a la asignación de tutores⁵⁴⁹.

Ahora bien, esto no quiere decir, a nuestro juicio, que los magistrados de todos los municipios latinos tuviesen esta potestad, sino que es muy probable que esa concesión dependiese del grado de desarrollo cívico de la comunidad en cuestión. Los testimonios epigráficos antedichos pertenecen a la Bética y, dado que era una de las provincias más romanizadas de Occidente, se puede suponer que el resto de municipios flavios latinos de esta provincia tendrían leyes con cláusulas similares. Sin embargo, este modelo no puede ser extrapolado sin más al resto de Hispania. Como ha planteado E. García Fernández, el modelo del municipio latino que se implantó, por ejemplo, en el Noroeste peninsular en época flavia no estuvo tan desarrollado como en ella, sino que contó, en un principio, con un funcionamiento municipal más básico sin leyes tan complejas como las béticas⁵⁵⁰. En esas comunidades latinas noroccidentales, por tanto, los magistrados carecerían de potestad para asignar tutores, que sería competencia exclusiva del gobernador de la Hispania Citerior o sus legados. Los magistrados locales sólo tendrían potestad para proceder a la asignación de tutores si ésta venía especificada en su ley constitutiva. E incluso en ese caso, esa potestad sólo sería aplicable a sus conciudadanos. Si el tutor hubiese de ser escogido entre personas residentes en otra ciudad, entendemos que el único que podría realizar su elección sería el gobernador provincial. También competían en exclusiva al gobernador las tutelas relacionadas con causas judiciales pecuniarias, como vimos antes a propósito del capítulo 84 de la *lex Irnitana*.

⁵⁴⁸ Ulp. 38 *ad Sab.* (Dig. XXVI, 1, 6, 2): *Tutoris datio neque imperii est, neque iurisdictionis, sed ei soli competit, cui nominatim hoc dedit uel lex uel senatusconsultum uel princeps.*

⁵⁴⁹ Panero Oria, “La *datio tutoris*...” cit. p. 994-995.

⁵⁵⁰ E. García Fernández, “Sobre la función de la ‘*lex municipalis*’”, *Gerión* 13, 1995, pp. 141-153; “El desarrollo de la municipalización latina: la Bética y el Noroeste”, en S. Reboresda – P. López Barja (eds.), *A cidade e o mundo: romanização e cambio social*, Xinzó de Limia, 1996, pp. 147-164.

Conclusiones

Nuestro conocimiento de la intervención de los gobernadores de las provincias hispanas en las causas judiciales no criminales depende por entero de la epigrafía. Esto supone, por un lado, que las evidencias no sean exhaustivas ni cubran todos los tipos de litigios posibles, y, por otro, un desequilibrio en el reparto territorial de los hallazgos, que se concentran en la Bética y en el *conuentus Tarraconensis* de la Hispania Citerior. Sin embargo, su coincidencia con ejemplos de otras provincias occidentales, con las cartas plinianas y con el Digesto muestra que en términos generales la casuística a la que los gobernadores de cualquier provincia se debían enfrentar era muy similar, así como el *modus operandi* de todos ellos. Otra cosa es que en determinadas regiones los gobernadores debían adaptarse a ciertas especificidades locales, y, sobre todo en el mundo griego, debieron tener en cuenta la tradición políada precedente.

En Hispania se constata que el gobernador ocupaba una posición de gran relevancia en el engranaje judicial, bien como máxima instancia en los procesos no criminales, bien como intermediario entre las comunidades locales y el emperador cuando éstas recurrían a la *appellatio* de su sentencia. A diferencia de lo que a veces sucedió en el mundo griego, las comunidades de Hispania en ningún momento vieron la intervención judicial del gobernador como una pérdida de autonomía; al contrario, tanto en las comunidades peregrinas como en los municipios y colonias se entendía que era un árbitro imparcial más fiable y con mayor autoridad que los magistrados locales. En las leyes de los municipios flavios de la Bética se observa que el gobernador está perfectamente inserto en el esquema general, reconociéndose la relevancia de su edicto jurisdiccional como marco de referencia legal y símbolo de las garantías del sistema judicial provincial⁵⁵¹.

Asimismo, por parte del poder imperial existió una confianza plena en la capacidad resolutive y mediadora de los gobernadores, que habían de ocuparse de los litigios más importantes que se produjeran, sobre todo conflictos territoriales entre comunidades, o entre particulares y comunidades, y causas pecuniarias que afectasen a las comunidades. Como se observa en el capítulo 84 de la *lex Irnitana*, las causas de mayor cuantía (en este caso, 1000 sesteracios) debían ser vistas también por ellos. Los

⁵⁵¹ *Lex Irnitana* cap. 85. Anexo II: n° 62.

gobernadores tenían la misión de mantener el orden público y la paz en su provincia y en ese cometido era fundamental ofrecer una justicia aceptada por todos los habitantes de ella, evitando conflictos que pudiesen derivar en respuestas violentas. Cuando se trataba de litigios entre un particular y una comunidad –como en el caso de Servilio Polión contra *Munigua*, el de los herederos de un benefactor de *Obulcula* y esta ciudad con motivo de un legado (en la Bética) o el de Valeria Faventina y los *compagani riui Larensis* y el del anónimo autor de las *execrationes* de las *tabellae defixionum* de *Emporiae* que salió perjudicado de un litigio con los *Indicetani* y los *Olossitani* (en la Citerior)– los gobernadores tendieron a adoptar sentencias que buscaban asegurar la sostenibilidad de las comunidades aunque hubiesen perdido el juicio. Se guiaban en todo momento por lo que hemos denominado la política del equilibrio. Era muy importante garantizar la salud económica de las ciudades, pues en ellas se apoyaba la gestión cotidiana del territorio, y al mismo tiempo evitar el empobrecimiento de sus élites dirigentes.

Además, las *epistulae* imperiales de la Bética muestran que los emperadores no dejaron de reforzar la autoridad de los procónsules o de reenviar a los provinciales a ellos en cuestiones que necesitasen una atención personal. A lo largo del Principado los emperadores intentaron sistemáticamente que las causas judiciales de mayor entidad de las provincias fuesen resueltas en primera instancia por parte de los gobernadores con un doble fin: acercar la justicia imperial a los provinciales –fundamentalmente a sus élites– y evitar el colapso de la cancillería imperial. La *appellatio* al emperador fue un recurso que desde muy pronto se integró en el sistema judicial imperial sin suponer un menoscabo de la autoridad de los gobernadores, pero el poder imperial trató de que no se abusara de él y no dudó en castigar a aquéllos que lo usaron injustamente con el fin de prolongar el proceso *sine die*. Un buen ejemplo lo tenemos en la *Epistula Titi ad Muniguenses*, en la que les reprende por haber realizado una *iniusta appellatio*, liberándolos, sin embargo, de la multa que deberían haber pagado por ello.

Por último, los gobernadores de Hispania, al igual que sus homólogos de otras provincias y tal y como establecen los juristas, debieron ocuparse de presidir actos jurisdiccionales como las *manumisiones uindictae*, las adopciones, las emancipaciones y la *tutoris datio*. Sin embargo, a veces se vieron descargados de alguna de estas competencias. Según las leyes de *Irni* y *Salpensa*, los magistrados de los municipios

latinos tenían potestad para manumitir, pero esto se debía a que sus nuevos libertos se convertían en latini. Los gobernadores se ocupaban de todas las manumisiones que producían nuevos *ciues Romani*, de acuerdo con la política imperial de controlar la concesión de la ciudadanía romana, que era entendida como un privilegio que no debía rebajarse. También los magistrados de estos municipios, al igual que los de la colonia de Urso, podían proceder a la *tutoris datio*. Pero esto también ha de ser matizado. Como hemos visto, Ulpiano señala que esta potestad debe ser concedida mediante una ley y hemos de entender que sólo la tendrían aquellos magistrados de un municipio o una colonia cuya ley constitutiva lo contemplase. Con todo, el gobernador atendería las tutelas que se le presentasen.

Todas estas competencias no hacen sino corroborar el gran poder jurisdiccional de que gozaban los gobernadores provinciales y la importante incidencia que tenían, a través de ellas, en la vida cotidiana de la población provincial y de sus comunidades, especialmente en lo que respecta a la ordenación territorial, los recursos fundiarios y las finanzas de las ciudades.

CAPÍTULO 4: LA JURISDICCIÓN PENAL DEL GOBERNADOR Y SU PODER

COERCITIVO.

La represión criminal era, ya desde la República, competencia exclusiva de los gobernadores en virtud de la capacidad de *coercitio* de la que los dotaba su *imperium*⁵⁵². Sin embargo, la ley de la colonia cesariana de Urso, en la Bética, en el capítulo que dedica a los asientos reservados a los decuriones en los *ludi* que se realizaran, atribuye *imperium* a sus magistrados:

...magist<r>atus imperium potestamue colono<r(um)> / sufragio ger<e>t iussu{q}ue
C(ai) Caesaris dict(atoris) co(n)s(ulis) proue / co(n)s(ule) habebit, quiue pro quo
imperio potestaue tum / in Col(onia) Gen(enetiua) erit...⁵⁵³

Es decir: “los magistrados que hubiesen recibido su *imperium* o *potestas* por votación de los colonos o por orden del propio Julio César, o aquel que tuviese *imperium* o *potestas* y estuviese en la colonia entonces”. Excepto en el último caso, clara alusión al gobernador provincial o a un magistrado o promagistrado romano que se hallase de paso en la colonia, la mención de un magistrado de la colonia *cum imperio* presenta un evidente problema de interpretación, pues es bien sabido que sólo los magistrados mayores de Roma –cónsules, pretores y *dictator*– y los gobernadores provinciales poseían *imperium* durante la República. En su comentario a este pasaje, Crawford sorprendentemente no dice nada acerca de tal ‘*imperium*’, limitándose a constatar la otra mención que la ley hace de él en el capítulo 128⁵⁵⁴. El fragmento resulta muy oscuro, pero, en nuestra opinión, Sherwin-White acierta al relacionar estos poderes de los magistrados de la colonia de Urso con el carácter de las primeras

⁵⁵² Plut. *Caes.* 2, 6, dice explícitamente que César, una vez que encerró en Pérgamo a los piratas que lo habían hecho prisionero anteriormente cuando se dirigía a Rodas, acudió sin dilación ante el pretor de Asia para que los ejecutase, pues sólo a él competía tal decisión.

⁵⁵³ *Lex Vrsonensis* cap. 125: col. 38, ll. 14-16. Sigo la edición de M. Crawford (ed.), *Roman Statutes*, I, Londres, 1996, p. 413.

⁵⁵⁴ *Idem*, p. 450.

colonias romanas de Italia, que tenían una clara función militar⁵⁵⁵. Así pues, su *imperium*, como la potestad que tenían para organizar una partida armada con sus conciudadanos en defensa de su territorio (cap. 103), ha de entenderse como una reminiscencia del modelo primitivo que podía resultar útil en una provincia recién pacificada tras la guerra civil que había vencido Julio César. Ahora bien, esto no significa que el *imperium* de los magistrados ursonenses sea comparable al de los magistrados mayores de Roma, entre ellos los gobernadores de la Hispania Ulterior. En la realidad cotidiana, este *imperium* no sería más que la capacidad general de “mandar y ser obedecido” (significado más genérico del *imperium*)⁵⁵⁶. El poder represivo de estos magistrados dentro de su colonia se manifestaba, como mucho, en una actuación que hoy catalogaríamos como “policial”⁵⁵⁷. En este sentido, las inscripciones de Pozzuoli y Cumas relativas a una ley sobre los servicios fúnebres (la llamada *lex puteolana*, de fines de la República) demuestran que los magistrados de una colonia tenían potestad para someter a tortura a los esclavos en el desarrollo de investigaciones preliminares⁵⁵⁸.

En favor de la autonomía de decisión y de la potestad de infligir una pena de muerte sobre *ciues* de los magistrados de una colonia, M. Cébeillac-Gervasoni ha señalado que en *Minturnae* Cayo Mario fue condenado a muerte por sus magistrados cuando estaba escapado de Roma tras la entrada de Sila en ella con sus legiones en 88 a.C., y que durante las proscripciones de los triunviros, el ex cónsul Varo, también huído por hallarse entre los perseguidos, fue condenado a muerte en esta misma ciudad al ser confundido con un ladrón; es más, sus magistrados decidieron someterlo primero a tortura para que revelase quiénes eran sus cómplices, a lo cual Varo se opuso apelando a su *dignitas*. Todo terminó cuando fue reconocido por un centurión, que le cortó la cabeza⁵⁵⁹.

No obstante, en nuestra opinión estos ejemplos no hacen regla, pues se trata de dos casos de individuos declarados *hostes publici*, que, por tanto, habían perdido la

⁵⁵⁵ Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford, 1973, pp. 82-83.

⁵⁵⁶ J. Beramendi, *La historia política: Algunos conceptos básicos*, Santiago de Compostela, 1999, p.

⁵⁵⁷ Cf. A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla, 2006, pp. 134 y 286-293; P. López Barja, “Estructura compositiva de la *lex Ursonensis*”, *Studia Historia. Historia Antigua* 15, 1997, pp. 47-61, esp. pp. 60-61; *Id. Historia de la manumisión...* cit. p. 18.

⁵⁵⁸ AE 1971, 88; M. Cébeillac-Gervasoni, *Les magistrats des cités italiennes de la Seconde Guerre Punique à Auguste*, Roma, 1996, p. 90, nt. 78. Apul. *Met.* VII, 2: los magistrados de Hypata, en Tesalia, someten a tortura al esclavo de Lucio cuando piensa que éste —que está desaparecido en forma de asno— es culpable de un robo. Aunque Hypata era una ciudad peregrina, Apuleyo está reflejando una práctica que para sus lectores latínófonos era habitual en sus ciudades.

⁵⁵⁹ Plut. *Marius* 38-39; Varo: Ap. *B.C.* IV, 28. Cf. Cébeillac-Gervasoni, *Les magistrats...* cit. p. 91-92.

ciudadanía romana y todos los derechos inherentes a ella: por ello no tenían derecho a ninguna garantía legal y podían ser condenados a muerte por los magistrados locales, siguiendo las órdenes emanadas de Roma. En cuanto a la condena a muerte de Varo cuando se le creía un ladrón, la explicación radica en que fue confundido con otro individuo, seguramente peregrino.

Durante el Principado, en las provincias era competencia de los gobernadores la represión del latrocinio y el “bandolerismo”⁵⁶⁰, aunque sabemos que a veces las propias ciudades organizaban partidas para dar caza a bandidos que estuviesen asolando su territorio⁵⁶¹. Con todo, los magistrados de las colonias, en Italia y en las provincias, jamás tuvieron poder de vida o muerte sobre sus conciudadanos⁵⁶².

El gobernador, pues, era la única autoridad con *imperium* en el sentido pleno del término. Cuando se trataba de *peregrini*, el gobernador ejercía su *coercitio* sin restricción ni limitación alguna; sólo los *ciues Romani* podían recurrir a su derecho de *prouocatio* y ser enviados a Roma para que su causa fuese vista por la *quaestio* pertinente, si su crimen estaba tipificado por ley⁵⁶³. Sin embargo, este derecho sería verdaderamente efectivo en el caso de magnates locales. De otra forma, como demuestra la rápida extensión de la *cognitio* extraordinaria, los tribunales de la *Vrbs* no hubieran podido dar abasto a todos los casos que les llegarían desde las provincias.

Mientras que el sistema de las *quaestiones perpetuae* vigente en Roma e Italia quedó definitivamente fijado en la *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C. —para, paradójicamente, comenzar desde entonces su paulatino declive—, en las provincias se prosiguió con la situación habida a finales de la República, esto es, el protagonismo absoluto del gobernador dentro del procedimiento denominado como *cognitio extra ordinem* a causa de su situación al margen del marco procesual y criminal del *ordo iudiciorum*⁵⁶⁴. Así, en las provincias, tanto los crímenes estipulados por ley y adscritos a las *quaestiones* de Roma como aquéllos extraordinarios, entraban dentro de la jurisdicción del gobernador.

⁵⁶⁰ *Dig.* I, 18, 13, pr. (Ulp. 7 de off. procos.).

⁵⁶¹ *Apul. Met.* VII, 13. *Vid.* Capítulo 5 de esta Primera Parte.

⁵⁶² F. De Martino, “I ‘supplicia’ dell’iscrizione di Pozzuoli”, *Labeo* 21, 1975, pp. 211-214. J.-L. Ferrary, “*Lex Cornelia de sicariis et veneficiis*”, *Athenaeum* 77, 1991, pp. 417-434, esp. p. 423, entiende, siguiendo a Kunkel, que también estos magistrados también tendrían poder de vida o muerte sobre los *peregrini*.

⁵⁶³ Santalucia, *Diritto e processo*... pp. 79-81.

⁵⁶⁴ Santalucia, *Diritto e processo*... pp. 99 y 102-103.

Dentro del primer grupo se hallaban fundamentalmente los crímenes de *maiestas* (alta traición o lesa majestad; *vd. infra*), *ambitus* (corrupción electoral), *repetundae* (extorsión cometida por los magistrados provinciales), *falsum* (falsificación testamentaria o numaria), *de sicariis et ueneficiis* (muy amplio, englobando todo atentado contra la vida o integridad física de una persona y, por tanto, el *homicidium*), *iniuriae* (también muy amplio, que perseguía el apaleamiento, el allanamiento de morada, las ofensas al pudor de mujeres y niños, ofensas a las personas de alto linaje, vilipendio, difamación...), *adulterium*⁵⁶⁵, *uis publica et priuata*⁵⁶⁶, *peculatus* (apropiación ilícita de dinero público o malversación) o el *plagium*. La mayoría de las *quaestiones* que vieron estas causas fueron instituidas o sometidas a un primer gran ordenamiento por Sila y luego confirmadas y ampliadas por las *leges Iuliae* augusteas, por ejemplo con la creación de una *quaestio de adulteriis*⁵⁶⁷. De estos *crimina*, las *repetundae* nunca fueron juzgadas por los gobernadores, pues eran crímenes relativos a los abusos cometidos precisamente por ellos mismos sobre los provinciales. Tampoco el *ambitus*, delito relacionado con la corrupción electoral en la *Vrbs* que prácticamente se extinguió una vez que se le arrebató a los comicios la competencia de elegir a los magistrados, ya desde los inicios del Principado. Los emperadores ampliaron, a través de leyes y senadoconsultos, la casuística que debía ser asumida por estos tribunales permanentes, realizando muchas veces una mera extensión o ampliación de los crímenes antedichos⁵⁶⁸.

El *crimen maiestatis* brilla con luz propia en las fuentes. Si durante el período tardo-republicano se refería a la afrenta o atentado cometido contra la independencia, el prestigio, el honor o la seguridad del Pueblo Romano⁵⁶⁹, tras la instauración del Principado tomó un nuevo cariz, pasando a corresponderse con todo atentado contra el

⁵⁶⁵ Guarino, *Storia...* cit. p. 393.

⁵⁶⁶ El crimen de *uis publica* englobaba toda acción violenta llevada a cabo por particulares o magistrados con el fin de obstaculizar el ejercicio regular de las funciones públicas (disturbios en los comicios, abusar o dar muerte a un *ciuis* que hubiese ejercitado la *prouocatio*, imposición arbitraria de tributos, etc.). La *uis priuata* se refería a actividades tales como el bandidaje. Cf. *Idem*, p. 392.

⁵⁶⁷ Cf. Santalucia, *Diritto e processo...* cit., pp. 71-73. Recuérdese que el crimen de *repetundis* fue el que precisamente ocupó la primera *quaestio*, instituida en la *lex Calpurnia* del 149 a.C. Para las *leges iudicariae* augusteas: Dig. XLVIII, 10, 11 (*lex Iulia de repetundis*); 12, 12 (*de annona*); 12, 13 (*de peculato et de sacrilegis et de residuis*); 12, 14 (*de ambitu*).

⁵⁶⁸ *Idem*, p. 94-97. Augusto hizo que se promulgara una *lex Iulia de ui publica* y otra *de ui priuata*. También cf. Rotondi, *Leges publicae...* cit. pp. 450-451.

⁵⁶⁹ Mommsen, *Le droit pénal...* II, cit. pp. 234-235; Santalucia, *Diritto e processo...* cit. p. 72.

princeps, como resultado de que la *maiestas* de éste, cabeza del Imperio, ya desde Augusto se confundió con la del Estado⁵⁷⁰. Por ello, como muestra el Segundo Edicto de Cirene⁵⁷¹, fue uno de los crímenes que los gobernadores solieron derivar a Roma, puesto que atañía directamente al *princeps* y era conveniente que él mismo lo juzgara.

En el 96 d.C., el gobernador de Germania hizo lo mismo que el de Cirene. Ciertamente Largino Proclo había anunciado en la provincia el día en el que Domiciano iba a morir ese mismo año y el gobernador decidió enviarlo directamente a Roma para que compareciera ante el emperador. Una vez allí, repitió su profecía y, por ello, fue condenado a muerte. Sin embargo, Domiciano decidió que no fuese ejecutado antes del día en el que había fijado su muerte, decisión que acabó salvándole la vida a Proclo, dado que, según Dión Casio, el emperador fue asesinado en la fecha señalada⁵⁷².

Plinio el Joven, por su parte, también hubo de abordar un caso tras el que podía hallarse este crimen y no dudó en consultar a Trajano sobre qué debía hacer. En efecto, el orador Dión de Prusa había sido acusado por dos de sus conciudadanos, Claudio Eumolpo y Flavio Arquipo, de haber dado sepultura a su mujer y a su hija al lado de la estatua de Trajano que había erigido en una construcción de la que se había encargado en la ciudad⁵⁷³. Como en el caso que ocupa el Segundo Edicto de Cirene, la remoción o mal uso de las estatuas del emperador podían ser tomadas con facilidad como una afrenta hacia el mismo y signo de deslealtad. Plinio descarta enviar a Roma a Dión, pero se apresura a escribir a Trajano sobre el asunto, que había suscitado una gran expectación en Bitinia. El emperador, sin embargo, reprende a su legado, recordándole que bajo su principado tales denuncias no debían ser atendidas⁵⁷⁴. Trajano quería distanciarse de los tiempos de Domiciano, en los que las delaciones referentes a la alta traición eran comunes, y, por ende, de la sombra de la tiranía.

Al margen de las ofensas o atentados cometidos contra la familia imperial, el *crimen maiestatis* comprendía también, desde la República, los atentados contra los magistrados del Pueblo Romano que eran, *ex lege*, figuras inviolables. Durante el

⁵⁷⁰ Santalucia, *Diritto e processo...* cit., p.118.

⁵⁷¹ Oliver, *Greek Constitutions...* cit. nº 9 (7/6 a.C.).

⁵⁷² Dio Cass. LXVII, 16.

⁵⁷³ Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 677, hace notar, acertadamente, la diferencia existente entre las denuncias de este tipo en Roma y en las provincias: mientras en la primera se mencionaba el cargo concreto dentro del marco de las *leges publicae*, en las provincias, donde se usaba la *cognitio extra ordinem*, sólo era necesario alegar los hechos sin tipificarlos.

⁵⁷⁴ Plin. *Ep.* X, 81-82.

Principado todos los magistrados y promagistrados mantuvieron esta condición, y el asesinato de uno de ellos suponía un caso muy grave de *perduellio*⁵⁷⁵. La gravedad de un hecho como éste hizo que Tácito recogiera la noticia del asesinato del gobernador en funciones de la Hispania Citerior en 25 d.C., Lucio Calpurnio Pisón, a manos de un termestino, al parecer en represalia por la severidad con que el legado imperial había procedido a la recaudación de impuestos (*quippe pecunias e publico interceptas acrius quam ut tolerarent barbari cogebat*)⁵⁷⁶. Según Mommsen, si bien los procónsules de época imperial eran inviolables, no sucedía lo mismo con los legados –dado que no eran magistrados investidos por el Pueblo Romano, sino *priuati* con un *imperium* recibido por delegación– y por tanto el caso de la Citerior no entraría dentro del *crimen maiestatis*. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no eran unos legados comunes (como los que podía tener cualquier procónsul), sino del propio emperador y que gobernaban en su nombre y bajo sus auspicios. Así como el mérito a una victoria militar lograda por uno de ellos era atribuido al emperador, una afrenta contra los mismos podía ser entendida como una ofensa al *princeps* y, en consecuencia, un atentado contra la *maiestas* imperial. Un ataque al gobernador podía esconder tras de sí una conjura o un futuro levantamiento contra el poder romano que debía ser castigado implacablemente. Por ello el termestino fue torturado, buscando lograr una confesión que pudiera destapar una conjura oculta.

Precisamente, el asesinato⁵⁷⁷ era uno de los tipos de causas a los que el gobernador prestaría más atención, pues era uno de los atentados contra el orden de la provincia que más revuelo causarían en ella⁵⁷⁸. Por ello es uno de los tipos de crimen de los que más eco se hicieron las fuentes. En Hispania tenemos dos buenos ejemplos de la intervención de los gobernadores y de su poder de castigo sobre sus gobernados.

⁵⁷⁵ Mommsen, *Le droit pénal*... II, cit. pp. 285-286, quien entiende la *perduellio* como el más grave de los actos de lesa majestad comprendidos dentro del *crimen maiestatis* (p. 236). Cf. *Dig.* XLVIII, 4, 1, 1. (*lex Iulia*): *cuius opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus Populi Romani quive imperium potestate habet, occidatur*.

⁵⁷⁶ Tac. *Ann.* IV, 45.

⁵⁷⁷ El asesinato en sus diferentes categorías era juzgado en Roma, desde Sila, por la *quaestio de sicariis et ueneficiis*, aunque durante el Principado pronto tendió a usarse en su cognición el procedimiento extraordinario, como sucedía en las provincias. Cf. Mommsen, *Le droit pénal*... II, cit. pp. 328-329; Santalucia, *Diritto e processo*... cit. pp. 99-102, donde sintetiza las características esenciales de los dos nuevos tribunales que hubo en Roma desde Augusto: el del *princeps* y el del Senado, presidido por los cónsules.

⁵⁷⁸ Véase los problemas de orden público que trajo a la ciudad de Cnido en el 6 a.C., que obligaron a los cnidios a enviar una embajada a Roma y al procónsul a escribir a Augusto. Cf. Oliver, *Greek Constitutions*... cit. nº 6.

El primero tiene como protagonista al futuro emperador Galba. Cuando gobernó la Hispania Citerior (60-68) hubo de enfrentarse a una causa de envenenamiento en la que fue hallado culpable un tutor que envenenó al pupilo que tenía a su cargo para heredar su patrimonio. Galba lo condenó a la crucifixión, a pesar de ser ciudadano romano, con el fin de dar ejemplo⁵⁷⁹.

El segundo ejemplo fue visto por el procónsul de la Bética Egnatio Taurino, que la gobernó en un momento indeterminado del principado de Adriano. Conocemos los detalles de la causa gracias a Ulpiano, quien en su tratado *de officio proconsulis* tomó este caso como modelo, recogiendo la consulta de este procónsul y el rescripto con que le respondió el emperador:

(1) *Cum quidam per lasciuam causam mortis praeuisset, conprobatum est factum Taurini Egnati proconsulis Baeticae a Divo Hadriano, quod eum in quinquennium relegasset.* (2) *Verba consultationis et rescripti ita se habent: "Inter Claudium, optime imperator, et Euaristum cognoui, quod Claudius Lupi filius in conuiuio, dum sago iactatur, culpa Mari Euaristi ita male acceptus fuerit, ut post diem quintum moreretur. Atque adparebat nullam inimicitiam cum Euaristo ei fuisse. Tamen cupiditatis culpa coercendum credidi, ut ceteri eiusdem aetatis iuuenes emendarentur. Ideoque Mario Euaristo urbe Italia prouincia Baetica in quinquennium interdixi et decreui, ut impendi causa duo milia patri eius persolueret Euaristus, quod manifesta eius fuerat paupertas".* (3) *Verba rescripti: "Poenam Mari Euaristi recte, Taurine, moderatus es ad modum culpa: refert enim et in maioribus delictis, consulto aliquid admittatur an casu".* (4) *Et sane in omnibus criminibus distinctio haec poenam aut iustam prouocare debet aut temperamentum admittere.*⁵⁸⁰

Este proceso penal estuvo protagonizado por dos hombres que parecen ser ciudadanos romanos provinciales, Claudio y Mario Evaristo. El primero acusó al segundo ante el gobernador de haber sido el responsable de la muerte de su hijo durante una fiesta: en probable estado de ebriedad, algunos de los jóvenes presentes en ella se pusieron a jugar a mantear entre varios al hijo de Claudio. Mario Evaristo no lo recogió

⁵⁷⁹ Suet. *Galba* 9: [...] *et tutorem, quod pupillum, cui substitutus heres erat, ueneno necasset, cruce adfecit; implorantique leges et ciuem Romanum se testificantem, quasi solacio et honore aliquo poenam leuaturus, mutari multoque praeter ceteras altiore et dealbatam statui crucem iussit.* Analizaremos más adelante este pasaje a propósito del *ius gladii*.

⁵⁸⁰ *Mosaicarum et Romanarum Legum Collatio* I, 11 = Ulp. 7 *de off. procos.* = *FIRA* II, pp. 547-548.

bien cuando caía y resultó herido de gravedad, falleciendo cinco días después. Taurino Egnatio le explica a Adriano que no había descubierto la existencia de enemistad entre el acusado y el fallecido y que atribuía su muerte a los excesos que se habían cometido durante la fiesta. Sin embargo, entendía que Evaristo sí tenía culpa en la muerte – se trataba, por tanto, de un homicidio involuntario– y creía conveniente castigar estos hechos con el fin de que sirviera de ejemplo para el resto de jóvenes y se corrigiesen estas conductas nocivas. En opinión del procónsul, la pena idónea para Mario Evaristo era la *relegatio* de Roma, Italia y su provincia durante cinco años, a lo que había pensado añadir el pago de dos mil piezas de oro al padre de la víctima, porque “*manifesta eius fuerat paupertas*” y probablemente había gastado una considerable cantidad de dinero en médicos para intentar salvar la vida a su hijo⁵⁸¹. Adriano confirmó su sentencia.

Este es un ejemplo excelente del *modus operandi* de los gobernadores provinciales en procesos penales complejos que implicasen a ciudadanos romanos durante el siglo II. Cuando existían circunstancias atenuantes o extraordinarias que se salían de la casuística normativizada en las *leges publicae* los gobernadores consultaban al emperador, sobre todo si el acusado era un *ciues* que pertenecía a uno de los grupos privilegiados de la sociedad provincial. En este caso, el procónsul nos informa que la familia de la víctima no era rica, pero seguramente el acusado sí formaba parte de la élite provincial, a tenor de la pena que se le impuso. A partir de Adriano el poder imperial promulgó normas que protegieron a los grupos privilegiados de la sociedad romana –senadores, *equites*, decuriones– de las penas capitales que podían imponer los gobernadores en virtud de su poder coercitivo y precisamente la *relegatio* fue la pena más grave que un gobernador podía imponer a estos grupos privilegiados⁵⁸². Adriano también se preocupó por ampliar el tipo penal del homicidio con el fin de perfeccionar el sistema penal⁵⁸³. La aprobación del emperador dotaba de una mayor autoridad a la sentencia de Egnatio Taurino, evitando que el proceso pudiese desembocar en desórdenes en la provincia provocados por el enfrentamiento entre las poderosas familias locales implicadas.

⁵⁸¹ E. Chevreau, “*Liberum corpus nullam recipit aestimationem*: une insuffisance de la procédure civile romaine?”, en J. Hoareau-Dodinau – G. Métairie – P. Texier (ed.) *Procéder. Pas d'action, pas de droit ou pas de droit, pas d'action?*, Limoges, 2006, pp. 23-34, esp. pp. 28-29.

⁵⁸² Burton, *Powers and Functions...* cit. pp. 171-172.

⁵⁸³ Andrés Santos, “Poderes jurisdiccionales del gobernador...” cit. p. 18.

De manera similar actuó el procónsul de África Escápula Tértulo, quien escribió a Marco Aurelio y Cómodo para le aconsejasen acerca de qué sentencia era apropiada para un hombre con problemas mentales que había cometido un asesinato⁵⁸⁴. Los hechos fueron los siguientes: Elio Prisco, que era tenido por loco (*furiosus*) y vivía bajo la tutela de sus familiares, asesinó a su madre, incurriendo en el grave crimen del *parricidium*⁵⁸⁵. Inmediatamente su caso fue llevado ante Escápula, que, tras haber confirmado su culpabilidad, decidió consultar a los emperadores acerca de qué pena debía aplicar al acusado, dado que el hombre, sumido en la enajenación mental, no era dueño de sus actos. En su rescripto, Marco Aurelio y Cómodo invitan a Escápula a indagar si el culpable había cometido el crimen sumido en la locura o en un momento de lucidez y si sus familiares tuvieron algo que ver en ello, pidiéndole que les escriba con las conclusiones que hubiese sacado con el fin de tomar ellos una decisión definitiva en un caso que podía sentar un precedente legal⁵⁸⁶.

Tanto el ejemplo de Egnatio Taurino como el de Escápula Tértulo nos muestran la fluida relación epistolar que existía entre los procónsules y los emperadores durante el siglo II en el ámbito judicial. Al igual que Plinio el Joven cuando gobernó Bitinia-Ponto, los gobernadores del resto de provincias no dudaron en escribir a los emperadores para consultarles las dudas que les surgían en el ejercicio de sus funciones, en particular en la aplicación de su jurisdicción en el ámbito de lo penal y cuando los acusados formaban parte de los grupos privilegiados de la sociedad. Ahora bien, en nuestra opinión la generalización de estas consultas no supuso una merma de la capacidad de los gobernadores para juzgar procesos penales, sino que reforzó su autoridad en la provincia y refleja el alto grado de desarrollo que alcanzó la interacción entre el poder central y sus máximos representantes en las provincias. Es más, el refrendo *ab initio* de las sentencias de los gobernadores por parte del emperador en casos complejos buscaba evitar que la parte agraviada recurriese sistemáticamente a la *appellatio ad Caesarem*; con ello, los emperadores del siglo II d.C. demostraron la

⁵⁸⁴ Este personaje se ha identificado como Publio Julio Escápula Tértulo, procónsul de África em 178/179 o 179/180. Cf. Thomasson, *Fasti Africani* cit. p. 71. Sería el padre del procónsul homónimo contra el cual escribió una invectiva Tertuliano (*supra*); *PIR*² I 556 y pp. 272-273.

⁵⁸⁵ Mommsen, *Le droit pénal*.... II, cit. pp. 324-328.

⁵⁸⁶ Ulp. 7 *de off. procos.* (Dig. I, 18, 13, 1); Marcian. 2 *de iud. publ.* (Dig. I, 18, 14).

confianza que tenían en sus gobernadores y en la eficacia del sistema de “gobierno por correspondencia”⁵⁸⁷.

Esta dinámica administrativa tuvo un impacto muy importante en la evolución del derecho romano, pues los rescriptos imperiales dirigidos a resolver las dudas de los gobernadores generaron un rico *corpus* de precedentes legales que fue acotando la casuística cada vez con mayor detalle, fomentando la reflexión de los juristas de época antonina y severa acerca de ella.

También era muy común el *crimen plagii*, al que se ha aludido ya a propósito de los casos *de libertate*. La vulneración de la condición libre de una persona era un crimen muy grave y que sufrían con bastante recurrencia las gentes humildes. Por ello en su tratado *de officio proconsulis* Ulpiano se detiene en especificar que entre los *mali homines* que los gobernadores debían perseguir y castigar en su provincia (como los sacrílegos y los bandidos) se encontraban los *plagiarii*⁵⁸⁸, o, los que es lo mismo, aquéllos que cometían *plagium*. El *crimen plagii*, tipificado en las *leges publicae* desde el 63 a.C. en virtud de una *lex Fabia de plagiariis*, consistía en el rapto de un hombre libre que hubiese sido tenido en cautiverio con cadenas, vendido o comprado, o bien la venta, compra o ayuda en la fuga de un esclavo ajeno sin el consentimiento de su dueño⁵⁸⁹.

Como hemos visto antes, las causas *de libertate* excedían los límites de la jurisdicción de los magistrados locales tanto de los municipios latinos como de los romanos y de las colonias, dado que afectaban a la condición jurídica de los afectados y, en muchas ocasiones, podían derivar en procesos penales. Por ello, sólo podían ser vistos por los gobernadores, que no dejaban de solicitar el consejo o la aprobación del emperador, o incluso podían remitir a Roma a los encausados. Al testimonio ulpiano hemos de añadir algunos ejemplos conservados en la correspondencia de Plinio el Joven. A pesar de referirse a Bitinia y a una realidad social con particularidades propias, las cartas plinianas nos ofrecen ejemplos vivos de los casos *de libertate* que debía afrontar cualquier gobernador provincial.

En la *epistula* X, 29, Plinio pide consejo a Trajano acerca de qué pena debe aplicar sobre dos jóvenes esclavos que, fingiendo ser hombres libres, se habían alistado

⁵⁸⁷ F. Millar, “Trajan: Government by Correspondance”, en J. González (ed.), *Traiano emperador de Roma*, Roma, 2000, pp. 363-388; Sherwin-White, *The Letters...* cit. pp. 546-555.

⁵⁸⁸ Ulp. 7 *de off. procos.* (Dig. I, 18, 13, pr.).

⁵⁸⁹ Cf. ‘Crimen plagii’ en *Diz. Giurid.* p. 142.

como reclutas aprovechando las levas que había realizado el procurador Sempronio Celiano en Bitinia, sin duda con motivo de la campaña pártica⁵⁹⁰. Como ya habían hecho el juramento militar (*sacramentum*), Plinio no sabía cómo tratar a estos dos individuos. Trajano (X, 30) le responde que Celiano envió a estos dos esclavos a Plinio siguiendo sus propias órdenes (*secundum mandata mea fecit*), lo que indica la importancia que el *princeps* daba a tal asunto. Además, Trajano se detiene en detallar las posibilidades que Plinio, en su cognición de la causa, debía tener en cuenta para tomar una resolución. Era ciertamente grave que hubiesen sido hallados dos esclavos entre los reclutas y el gobernador debía verificar, ante todo, quién era responsable de tal error. Si se trataba de quien había realizado el reclutamiento; o bien de los dueños de los esclavos, que los habían enviado premeditadamente en sustitución de ellos mismos o de un pariente; o, en fin, si eran responsables de sus actos los propios esclavos (y por tanto culpables), en cuyo caso debían ser condenados a la pena capital. Es importante recalcar que ni siquiera el procurador encargado del reclutamiento estaba capacitado para juzgar este caso. Plinio, como gobernador de Bitinia, era el único cargo imperial que gozaba de *imperium* en su provincia o, si contaba con algún legado a su mando, el que tenía un *imperium* jerárquicamente superior.

Otro caso habitual en torno a la condición jurídica del individuo al que tuvo que enfrentarse Plinio y que es perfectamente extrapolable a Hispania es el de los *threptoi* (X, 65), definidos por Trajano como *qui liberi nati expositi, deinde sublatis a quibusdam et in servitute educati sunt* (X, 66, 1). Plinio ha buscado precedentes en *constitutiones* de anteriores emperadores –una carta de Augusto a la ciudad de Andania, una de Vespasiano a los lacedemonios y otra de Tito a éstos y los aqueos y dos de Domiciano dirigidas a los procónsules Avidio Nigrino y Armenio Broco, respectivamente–, pero duda acerca de si es posible aplicar lo que establecen en su caso⁵⁹¹. Trajano le indica que ninguna disposición de sus predecesores es aplicable a todas las provincias y, aunque está de acuerdo en el precedente de las cartas domicianeas, observa que entre las

⁵⁹⁰ Como señala Sherwin-White, *The Letters...* cit. pp. 598-599, los *dilectatores* eran legionarios o procuradores ecuestres en las provincias imperiales. Este autor hace una síntesis de las posturas encontradas en torno a si estos reclutas de Bitinia eran legionarios o formaban parte de las tropas auxiliares. A favor de lo primero está la presencia numerosa de bitinios en la *legio III Augusta* de África en época de Trajano (*CIL VIII*, 18084). A favor de lo segundo: L. Vidman, *Étude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan*, Praga, 1960, pp. 57-59.

⁵⁹¹ Nos preguntamos cómo tuvo acceso Plinio desde Bitinia a *constitutiones* imperiales dirigidas a otras provincias orientales. ¿Escribió a otros gobernadores para consultarles? ¿Había una copia de las mismas en los archivos de su provincia?

provincias que mencionan no se halla Bitinia. Así que decide que no se les niegue su condición de libres, pero tampoco se les deba mantener con los *alimenta* públicos (66, 2), creando, con ello, un nuevo precedente. En este caso, Plinio vuelve a tener plena capacidad de decisión, pero se remite a Trajano ante las complicaciones que implicaban las circunstancias de los *threptoi* y la ausencia de precedentes en los que apoyar su resolución.

Las causas *de libertate* eran muy delicadas, dado que el imputado se jugaba su condición jurídica y, con ella, sus derechos. Por ello el poder imperial no dudó en castigar con severidad la asunción ilícita de la condición de libre por parte de esclavos o la vulneración de la condición libre de un individuo, sobre todo si se trataba de un ciudadano romano. Los gobernadores provinciales, por tanto, tuvieron un gran cuidado en la vista de estas causas, pues afectaban a la seguridad jurídica de sus gobernados. De no ser cortados a tiempo, crímenes como el *plagium* podían afectar seriamente al orden interno de su provincia y a la imagen garantista del poder imperial, sobre todo en relación a los derechos de los *ciues* provinciales.

El crimen de *peculatus* era también muy común, pues abarcaba todas aquellas acciones de apropiación ilícita de dinero público, así como la no declaración en los registros públicos de la totalidad de las cantidades acordadas en una compra-venta⁵⁹² o la modificación de lo que había sido registrado (en asuntos catastrales o pecuniarios)⁵⁹³. Dentro de la apropiación ilícita se hallaba tanto el hurto o retención ilícita de dinero público de las arcas de una comunidad⁵⁹⁴ o de oro o plata procedentes de las minas imperiales⁵⁹⁵, como el robo o sustracción de los donativos realizados a una divinidad y depositados en su templo⁵⁹⁶. Asimismo, también entraba dentro de este crimen el hurto de moneda recién acuñada⁵⁹⁷.

Tenemos un ejemplo de delito de *peculatus* también relacionado con el gobierno de Galba en la Citerior. Según Suetonio, Galba hubo de juzgar el caso de un cambista (*nummerarius*) que había estafado a sus clientes y, como en el caso antedicho del tutor, actuó con extrema severidad ordenando que le amputaran las manos y las clavasen en su

⁵⁹² Dig. XLVIII, 13, 12 (10), pr. (Marc. 1 de iud. pub.).

⁵⁹³ Dig. XLVIII, 13, 10 (8) (Ven. Sat. 3 de iud. pub.).

⁵⁹⁴ Dig. XLVIII, 13, 2 (Paul. 11 ad Sab.), 48, 13, 5 (4, 3) pr.-1 [4,4] (Marc. 14 inst.).

⁵⁹⁵ Dig. XLVIII, 13, 8 (6, 1), 1 (6, 2) (Ulp. 7 de off. procos.).

⁵⁹⁶ Dig. XLVIII, 13, 4 (Marc. 14 inst.) y 11 (9) (Paul. 1 de iud. pub.).

⁵⁹⁷ Dig. XLVIII, 13, 8 (6, 1), pr.

mesa de trabajo a modo de ejemplo⁵⁹⁸. Las dos causas penales ordinarias juzgadas por Galba tienen en común no sólo los castigos extremos que impuso –con los que Suetonio quería mostrar la severidad de que hizo gala en los primeros años de gobierno en Hispania–, sino también que se trataba de crímenes que faltaban a la *fides*, bien hacia la otra parte en un negocio, bien hacia un menor que debía ser tutelado. Se trata, pues, de crímenes graves que atentaban contra las bases de las relaciones jurídicas entre los individuos y quizá por ello Galba quiso que sus castigos fuesen ejemplares, cayendo, sin embargo, en una crueldad desmesurada.

En cuanto a la apropiación ilícita de dinero público Plinio el Joven nos ha dejado testimonio de su intervención en un caso que entraba dentro de esta categoría y que sin duda tuvo paralelos en todas las provincias. El abogado público (*ecdicus*) de Amiso presentó una denuncia ante su tribunal⁵⁹⁹ en la que reclamaba a uno de los notables de la ciudad, Junio Pisón, la devolución de los cuarenta mil sesteracios que la ciudad le había donado veinte años atrás. Pisón se justificaba diciendo que había realizado numerosos actos de evergetismo a favor de la comunidad y rogaba que no se le hiciese caer en la ruina. Plinio ve complicaciones en el caso, puesto que no quiere dañar a la curia municipal empobreciendo a uno de sus miembros, pero tampoco quiere contradecir a Trajano, quien en sus *mandata* había señalado que se prohibieran las donaciones a particulares, con el fin de evitar los favores mutuos y el lucro a costa de la comunidad⁶⁰⁰. El *princeps*, en su respuesta, vuelve a recordarle sus palabras, pero ordena a Plinio que no actúe contra Julio Pisón. Trajano no quiere usar su disposición a algo que había sucedido hacía veinte años, pues desea *non minus enim hominibus cuiusque loci quam pecuniae publicae consultum uolo*⁶⁰¹.

Este caso muestra con claridad otro de los tipos de causas más frecuentes a los que tanto en Oriente como en Occidente un gobernador debía atender en su tribunal. Como veremos en la Segunda Parte, las leyes de la colonia de Urso y de los municipios flavios de la Bética presentaban cláusulas con las que el poder romano pretendía controlar las malversaciones de fondos públicos, pero aún así no fue suficiente y el gobernador hubo de tutelar la economía de las ciudades en no pocas ocasiones. Además,

⁵⁹⁸ Suet. *Galba* 9: *Nam et nummulario non ex fide uersanti pecunias manus amputauit mensaeque eius adfixit [...]*.

⁵⁹⁹ En la interpretación de *ecdicus* seguimos a Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 719.

⁶⁰⁰ X, 110,1 y X, 36.

⁶⁰¹ X, 111.

como le sucedió a Plinio, cuando el gobernador intervenía judicialmente su sentencia podía verse sometida a fuertes presiones cuando estaban implicados notables de la comunidad perjudicada. Castigar a un miembro de la curia de la ciudad, municipio o colonia podía ser un duro golpe para la misma, que perdía con ello a un benefactor y un posible aspirante a una magistratura. Junio Pisón se salvó por el tiempo pasado desde su acción, pero también porque, como parece desprenderse del testimonio pliniano, no habría resultado fácil encontrar a alguien con un patrimonio suficiente que le permitiera sustituirlo en la curia. Asimismo, el gobernador, a pesar de su amplia jurisdicción, debía tener en cuenta siempre las instrucciones o los decretos del emperador sobre los asuntos que trataba, lo cual suponía, en cierto modo, un límite a la discrecionalidad que le concedían sus poderes.

Vinculado al *peculatus* está el sacrilegio, entendido como el hurto de las cosas depositadas en un templo⁶⁰². A este respecto, Marciano menciona un rescripto de Septimio Severo y Caracala en el que indicaban a Casio Festo –probablemente un gobernador provincial– qué tipo de acción se daba en tales casos⁶⁰³. Por su parte, Ulpiano, en su tratado *de officio proconsulis*, señala que en la elección de la pena que se debía imponer al sacrilego el gobernador debía tener en cuenta la condición de la persona, las circunstancias del asunto, el tipo de cosa robada, el tiempo, la edad y el sexo. La máxima pena aplicable era la *damnatio ad bestias* –e incluso la hoguera o la horca–, destinada a aquéllos que hubiesen violado los templos por la fuerza y con nocturnidad, llevándose los donativos hechos a la divinidad. Si se trataba de cosas de menor valor, el castigo sería la *damnatio ad metalla*; y si se trataba de un individuo de un *status* alto, la *deportatio*⁶⁰⁴.

La correspondencia pliniana también nos ha transmitido la noticia de un proceso *de falsis*. Un procónsul de Bitinia anterior a Plinio, Velio Paulo, condenó a las minas al filósofo Flavio Arquipo –el mismo que en el caso anterior había formado parte de la acusación contra Dión Crisóstomo– por falsedad (supuestamente testamentaria), pero la pena no se ejecutó ya que Arquipo fue favorecido por Domiciano y Nerva, como mostraban las cartas que estos enviaron a los procónsules sucesivos, Lapio Máximo y

⁶⁰² Labeo 38 *post.* (*Dig.* XLVIII, 13, 11 (9), 2 = Paul. 1 *de iud. pub.*).

⁶⁰³ Marc. 1 *de iud. pub.* (*Dig.* XLVIII, 13, 6 (5)).

⁶⁰⁴ Ulp. 7 *de off. procos.* (*Dig.* XLVIII, 13, 7(6)). La pena capital es también mencionada por Paul. *de iud. pub.*

Tulio Justo, respectivamente. El caso fue nuevamente presentado ante Plinio, que a su vez consulta, como sus predecesores, al emperador, que decidió confirmar la indulgencia imperial hacia el filósofo⁶⁰⁵.

En el capítulo 84 de la *lex Irnitana* que hemos analizado antes a propósito de la jurisdicción civil o no criminal, se menciona, entre las excepciones que los duoviros no podían juzgar y, por tanto, competían al gobernador, las causas estipuladas en la *lex Laetoria*. Ésta, también conocida como *lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium*, promulgada en 193-192 a.C.⁶⁰⁶, protegía a los menores de veinticinco años de posibles estafas: quien se aprovechara de ellos proponiéndoles un negocio desventajoso podía estar sujeto a una acción penal popular⁶⁰⁷. En las provincias, como se ha dicho, las causas penales sólo podían ser vistas por el gobernador, y es natural que este caso específico que podía implicar, además, infamia cayese dentro de su jurisdicción.

En cuanto a las *iniuriae* –también citadas en *Irni* 84–, una parte de ellas entraba dentro de las causas criminales, como por ejemplo el allanamiento de morada o el apaleamiento. De todas formas, desde el momento en que siempre habían de ser juzgadas por el gobernador en el marco de la *cognitio extra ordinem*, no existió una diferenciación entre *iniuriae* no criminales y criminales. Únicamente la gravedad de las mismas se reflejaba en la pena o multa elegida.

Por último, hemos de mencionar la cognición de causas criminales que tenían como víctimas a esclavos que se dio desde el siglo II. Los gobernadores tuvieron que velar por el cumplimiento de la política imperial antonina que limitaba los castigos que los dueños podían imponer a sus esclavos y punir a aquellos que no la respetasen⁶⁰⁸. De todas formas, las dudas en la aplicación de estas nuevas directrices no tardaron en presentarse.

Un ejemplo paradigmático se produjo en la Bética. Varios esclavos de un tal Julio Sabino, probablemente ciudadano romano, se dieron a la fuga y buscaron

⁶⁰⁵ *Ep.* X, 58-60.

⁶⁰⁶ Rotondi, *Leges publicae...* cit. pp. 271-272, quien señala que la denominación de *lex Plaetoria* aparece en la *Tabulae Heracleensis*. Véase también: *FIRA* I, p. 80

⁶⁰⁷ M. J. García Garrido, *Diccionario de jurisprudencia romana*, Madrid, 2000, p. 220.

⁶⁰⁸ Esta política estaba inspirada en principios estoicos. Cf. D. Plácido, “*Graecia capta*, integradora de la romanidad”, *Studia Historica. Historia Antigua* 8, 1990, pp. 97-106, esp. pp. 103-104; López Barja, *Historia de la manumisión...* cit. p. 92. A los motivos humanitarios hay que añadir un objetivo de orden político como el mantenimiento del orden público, según Andrés Santos, “Poderes jurisdiccionales del gobernador...” cit. p. 20, nt. 34.

protección en una imagen del emperador que se hallaba en su ciudad. Su dueño, sin embargo, hizo caso omiso de este amparo y los castigó. Estos sucesos llegaron a conocimiento del procónsul de la Bética, Elio Marcelo, quien decidió consultar a Antonino Pío si debía intervenir. Sus dudas eran fundadas, dado que las imágenes del emperador eran sagradas y protegían a quien se amparase en ellas, pero se trataba de esclavos, sobre los cuales los dueños tenían una potestad absoluta. Antonino Pío le confirma que debe atender el caso y, si averiguaba que Julio Sabino se había excedido en su castigo o había actuado injustamente, debía quitarle a sus esclavos y venderlos a otro dueño⁶⁰⁹.

Por su parte, el jurista Paulo dispone que los gobernadores han de castigar con severidad la corrupción de un esclavo o esclava, tanto si era objeto de una violación como si, en el caso de las esclavas, se les hacía perder la virginidad sin permiso del dueño⁶¹⁰.

Un último ejemplo del poder de represión penal que tenían los procónsules de la Bética se deduce de un pasaje de Tácito, que cuenta que en el 23 d.C. el procónsul de la Vibio Sereno incurrió en crímenes relativos al ámbito *de ui publica* y, en concreto, *ob atrocitatem morum*, siendo condenado por Tiberio a ser deportado a la isla de Amorgos⁶¹¹. Dado que el crimen general que se le atribuye es *de ui publica*, se puede deducir que esta “atrocidad de sus costumbres” se manifestó en abusos de su poder coercitivo hasta la extrema crueldad, y, por tanto, sirve de ejemplo de los excesos que podían cometer los gobernadores, incluso en una provincia muy romanizada como la Bética, cuando actuaban como jueces penales, pues era en ellos donde más a menudo ejercían su poder coercitivo e *ius gladii*, que analizaremos más adelante. Desafortunadamente, Tácito no ofrece datos suficientes para precisar su conducta y qué crímenes ordinarios o extraordinarios juzgó.

⁶⁰⁹ Dig. I, 6, 2 = Ulp. 8 *de off. procos.* que recoge el rescripto completo de Antonino Pío. Véase también: *Mosaic. et Rom. Leg. Collat.* III, 3, 1-4 = *FIRA* II, pp. 551-552.

⁶¹⁰ Paul. 1 *de off. ads.* (Dig. I, 18, 21).

⁶¹¹ Ann. IV, 13: *et Vibius Serenus pro consule ulterioris Hispaniae de ui publica damnatus ob atrocitatem morum in insulam Amorgum deportatur*. Vuelve a hablar de él en IV, 28-30.

Los crímenes ‘extraordinarios’

Los crímenes extraordinarios –esto es, los no contemplados ni tipificados en las *leges publicae*– no pueden, por definición, ser catalogados de manera exhaustiva, pero sí es posible señalar los que tuvieron mayor repercusión y, por ello, fueron objeto del interés de los autores antiguos. En concreto nos detendremos en dos, el cristianismo y la magia, de los que tenemos importantes testimonios en las provincias occidentales.

La magia en sus diferentes formas y sus practicantes fueron motivo de preocupación para las autoridades romanas desde los tiempos de la República arcaica. Con Mommsen, podemos establecer la siguiente lista de actos de magia penados por las autoridades: 1) las ceremonias religiosas realizadas por la noche, a excepción de las que pertenecían a viejos cultos; 2) los que implicaban sacrificios sacrificios humanos; 3) la necromancia y todos los actos mágicos que supusiesen la utilización de cadáveres y tumbas; 4) los actos religiosos llevados a cabo para causar un daño o la muerte a una persona⁶¹². En la Ley de las XII Tablas se estableció una legislación penal sobre la magia, como instrumento a través del cual se podía dañar a un individuo o sus bienes y que se encuadraba dentro de la *iniuria*⁶¹³. Durante el Principado, los magos y astrólogos serán expulsados varias veces de la ciudad de Roma e Italia, dado que los *principes* no deseaban que se divulgasen sin su permiso noticias sobre su futuro o sobre el destino del Imperio⁶¹⁴. Bajo los Antoninos, se desarrolló la legislación que perseguía la magia y Ulpiano menciona un rescripto de Antonino Pío dirigido al *legatus Augusti pro praetore* de la Galia Lugdunense, Pacato, en el que le indicaba qué debía hacer con los *uaticinatores*⁶¹⁵. En época severa, se continuó con esta política, destacando el comentario que el jurista Paulo dedica en sus *Sententiae* a las *lex Cornelia de sicariis et ueneficiis* (con la que estaba vinculada la magia en cierto modo, aunque la ley no la

⁶¹² Mommsen, *Le droit pénal....* II, cit. pp. 359-360. Cf.: 1) Paul. 5, 23, 15; 2) Paul. 5, 23, 16; 3) Suet. Nero 34; Tert. Apol. 43, 4) CIL X, 1604 (fórmula execratoria en pieza de plomo).

⁶¹³ Tabula VIII, 1 (“*Si quis occentas sit quod alteri flagitium faciat*”) y 8 (“*Qui fruges excantassit... b... neue alienam segetem pellexeris*”); cf. FIRA I, pp. 52 y 55. Confirmado por Cic. Tusc. IV, 2, 4: *XII Tab. declarant condi iam tum solitum esse carmen, quod ne liceret fieri ad alterius iniuriam lege sanxerunt*. Cf. E. Massoneau, *La magie dans l’antiquité romaine: La magie dans la littérature et les mœurs romaines, la répression de la magie*, Paris, 1934, pp. 136-140; L. Gil, *Censura en el mundo antiguo*, Madrid, 1961, p. 146.

⁶¹⁴ Véanse los ejemplos de Vitelio (Tac. Hist. II, 62; Suet. Vit. 14) o Vespasiano (Dio LXVI, 9).

⁶¹⁵ Coll. XV, II, 1, 4.

incluía⁶¹⁶), así como a los vaticinadores y matemáticos⁶¹⁷. No es de extrañar, por tanto, que fuera un tema que atrajo la atención de los historiadores romanos, de Livio a Tácito, sin olvidar a Dión Casio, sobre todo en lo que se refiere a la astrología y la adivinación no oficial como factores perturbadores de la vida política⁶¹⁸. Al ser un crimen muy grave que podía poner en peligro la vida de una persona, la magia llegó a ser castigada con la pena capital, y, por ello, su cognición en las provincias correspondía sólo a los gobernadores⁶¹⁹.

El proceso por magia más importante del que tenemos noticia es el que tuvo lugar en África Proconsular en el invierno del 158/159 d.C.⁶²⁰. El acusado fue nada menos que el escritor Lucio Apuleyo, natural de Madaura. Gracias a la publicación de la apología que pronunció ante el procónsul Claudio Máximo contamos con el testimonio de su proceso. Las circunstancias fueron las siguientes: Cuando Claudio Máximo, en su recorrido anual por las sedes conventuales de la provincia, se hallaba en la ciudad de *Sabratha*, Sicinio Emiliano, hermano del primer marido de Pudentila –la esposa de Apuleyo– presentó una demanda contra ésta ante el tribunal del gobernador en nombre de su sobrino Prudente –que era menor de edad– cuyo contenido desconocemos. Una vez que estuvo ante Claudio Máximo, Emiliano descubrió sus verdaderas intenciones al acusar a Apuleyo de manipular a Pudentila a través de artes mágicas, lo que provocó el comienzo del proceso contra el escritor. La naturaleza de la *accusatio* de Emiliano ha sido ya estudiada *in extenso*⁶²¹ y queda fuera de nuestro objeto de interés, que es la actuación del gobernador. Sobre ésta, sin embargo, la *Apologia* deja algunas pincelas muy interesantes, que recalcan su discrecionalidad y protagonismo en el procedimiento de la *cognitio extra ordinem*⁶²².

⁶¹⁶ Mommsen, *Le droit pénal...* II, cit. p. 358.

⁶¹⁷ Paul. *Sent.* XXI y XXIII. Cf. Massoneau, *La magie...* cit. p. 192.

⁶¹⁸ M. W. Dickie, “Magic in the Roman Historians”, en R. L. Gordon – F. Marco Simón (ed.) *Magical Practice in the Latin West*, Leiden/Boston, 2010, pp. 79-103.

⁶¹⁹ Cf. Tac. *Ann.* II, 32; Apul. *Apol.* 26, 9, define como capitales los procesos incoados contra magos.

⁶²⁰ J. Guey, “Au théâtre de Lepcis Magna. Le Proconsulat de Lollianus Avitus et la date de l’*Apologie* d’Apulée”, *REL* 29, 1951, pp. 307-317, seguido, recientemente, por L. Pellecchi, “L’accusa contro Apuleio: linee retoriche e giuridiche”, en D. Mantovani – L. Pellecchi (dir.), *Eparcheia, autonomia e civitas Romana: Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. – II d.C.)*, Pavia, 2010, pp. 171- 334, esp. p. 172.

⁶²¹ Cf. Pellecchi, “L’accusa...”, cit.

⁶²² B. Santalucia, “*Praeses provideat*. Il governatore provinciale fra *iudicia publica* e *cognitiones extra ordinem*”, en Mantovani – Pellecchi, *Eparcheia...* pp. 69-88, esp. pp. 76-77, ha observado que este proceso extraordinario está estructurado formalmente como un *iudicium publicum* ante una *quaestio*, puesto que hay una *accusatio* solemne o las partes son las que buscan las pruebas. Sin embargo, esto es sólo mera apariencia. Los procesos de la *cognitio extra ordinem* no siempre eran iniciados por el

Del gobernador dependía, en primer lugar, que el proceso tuviese lugar y que se agilizaran los interrogatorios y las vistas, así como la selección de los testimonios y las pruebas procesales⁶²³. Así, por ejemplo, Máximo admitió como prueba de la defensa, a falta del original, la copia de una carta de Pudentila en la que se probaba que Apuleyo no la había ‘encantado’ para lograr desposarse con ella⁶²⁴. El gobernador dirigía el proceso a su antojo y su capacidad oratoria era tenida como una cualidad fundamental, dada la naturaleza inquisitoria de este tipo de procesos⁶²⁵. Asimismo, las varias apelaciones que Apuleyo hace al procónsul, alabando su clemencia y rectitud, no son sino prueba de la necesidad que las partes tenían de congraciarse con un juez prácticamente absoluto⁶²⁶. Por otra parte, al igual que en las inscripciones que vimos en el apartado de las causas no criminales, la presencia del *consilium* es también mencionada por Apuleyo, quien conocía la relevancia que podía tener la opinión de sus miembros en la decisión del procónsul, aunque no fuese vinculante⁶²⁷.

Los procesos incoados contra los cristianos ofrecen también ricos ejemplos del funcionamiento de la *cognitio extraordinaria*; no en vano el cristianismo es, en las fuentes, el más sobresaliente de los ‘crímenes’ extraordinarios, aunque siempre estuvo vinculado al *crimen maiestatis*⁶²⁸. Las llamadas *Actas de los Mártires*, a pesar de la

magistrado competente, sino por una acusación. Que el gobernador hubiera decidido dar más protagonismo a las partes es un hecho que sólo redundaría en su discrecionalidad.

⁶²³ Apul. *Apol.* 84, 6.

⁶²⁴ *Apol.* 78, 6: *Quas tamen litteras tabulario Pontiani praesente et contra scribente Aemiliano nudius tertius tuo iussu, Maxime, testato descripsimus; in quibus omnia contra praedicationem istorum pro me reperiuntur.* [La negrita es mía].

⁶²⁵ *Apol.* 94, 6-8 y 95, 2-6. ‘*Vir bonus dicendi peritus*’ (94.6). Sobre la importancia de la oratoria en los emperadores vd. Millar, *The Emperor...* cit.

⁶²⁶ Apuleyo no deja de recalcar la centralidad del procónsul en el proceso; vd. *Apol.* 2, 5-6: *Quod tu cum sollertissime animaduertisses et iccirco eum denuo iussisses proprio nomine accusationem delatam sustinere, (6) pollicitus ita facturum ne sic quidem quitus est ut comminus ageret percelli, set iam et aduersum te contumaciter eminus calumniis uelitur.* [La negrita es mía].

⁶²⁷ *Apol.* 1, 1-3: *Certus equidem eram proque uero obtinebam, Maxime Cl. quique in consilio estis, Sicinium Aemilianum, senem notissimae temeritatis, accusationem mei prius apud te coeptam quam apud se cogitatum penuria criminum solis conuiciis impleturum; (2) quippe insimulari quiuis innocens potest, reuinci nisi nocens non potest. (3) Quo ego uno praecipue confisus gratulor medius fidius, quod mihi copia et facultas te iudice optigit purgandae apud imperitos philosophiae et probandi mei.* [La negrita es mía]. Así comienza su apología Apuleyo.

⁶²⁸ Mommsen, *Le droit pénal...* II, cit. pp. 278-280. Discrepamos con F. Millar, “The Imperial Cult and the Persecutions”, en W. den Boer (ed.) *Le culte des souverains dans l’Empire Romain*, Ginebra, 1973, pp. 145-165, esp. p. 164, que concluye que “The persecutions cannot be explained in political terms, as demands for formal displays of loyalism. They were motivated by feelings which we must call religious”. En nuestra opinión, el componente religioso no anula su significación política o su importancia como expresión de la lealtad hacia el poder imperial. En el mundo antiguo, religión y política están íntimamente

carga ideológica que encierran, son documentos valiosos para el estudio del funcionamiento de un proceso extraordinario en las provincias, dado que tienen su origen en las actas reales de los juicios contra los cristianos⁶²⁹. Recurriremos a ellas como complemento de otras fuentes para esbozar cómo se desarrollaría un proceso extraordinario y la fase previa al mismo, desde la denuncia y apresamiento de los sospechosos hasta su condena⁶³⁰.

En primer lugar, si los cristianos descubiertos (por medio de una delación o no) no se hallaban en la capital provincial, solían ser detenidos bien por los soldados que se hallasen en el lugar —de haber allí una guarnición, como en el caso de San Pablo, conducido ante el tribuno militar que estaba en Jerusalén—, bien por orden de los magistrados del municipio o colonia en el que se encontraran⁶³¹. Éstos los mantenían bajo custodia hasta que el gobernador pasara por la ciudad o la sede conventual más cercana, si es que ésta no era la propia capital provincial. Como ya se ha dicho, sólo el gobernador tenía la jurisdicción y el poder coercitivo necesarios para juzgar y condenar a los acusados por crímenes o delitos penales, pero los magistrados locales o los legados militares o jurídicos podían realizar una instrucción preliminar, a partir de la cual

entrelazadas. Sin embargo, los cristianos no fueron condenados durante el Principado por sus creencias en otro dios, sino por rechazar el culto a los dioses tradicionales y el culto imperial, que eran un elemento fundamental de la cohesión social e ideológica del imperio (*vid.* Tercera Parte). El propio Tertuliano relaciona estas condenas con el *crimen maiestatis*, según ha señalado J. Beaujeu, “Les apologètes et le culte du souverain”, en Den Boer (ed.) *Le culte des souverains...* cit. pp. 103-136, esp. pp. 117- 120. Añádase que cualquier desprecio hacia las imágenes del emperador podía ser entendido como un insulto hacia su majestad; véase Plin. *Ep.* X, 81-82. Véase también la polémica entre G. E. M. de Ste. Croix, “¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos?”, en M. I. Finley (ed.) *Estudios sobre Historia Antigua*, Madrid, 1981, pp. 233-274; “¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos? Una réplica”, en *Idem*, pp. 281-314; y A. N. Sherwin-White, “¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos? Una corrección”, en *Idem*, pp. 275-280.

⁶²⁹ Cf. Sherwin-White, “*Coercitio...*” cit. p. 22; M^a. M. Novás Castro, *El discurso de la tortura en las Actas de los Mártires*, Santiago de Compostela, 1995 (tesis doctoral inédita); R. Migliorini, *La giurisdizione criminale romana tra principato e dominio. Gli atti dei martiri come testimonianze processuali*, Città del Vaticano, 2008, pp. 184-188; M. Spinelli (ed.), *Minucio Felice, Octavius / Atti e Passioni dei martiri africani*, Roma, 2012, pp. 139-141, quien señala la diferencia fundamental entre el género de las *Actas* y el de las *Pasiones*: Las primeras se basan, casi *ad litteram*, en los registros de los procesos contra los cristianos, mientras que las segundas son reelaboraciones narrativas que, aunque parten también de las actas oficiales, se basan más en los testimonios de testigos oculares. En los textos usados seguimos la edición de este autor.

⁶³⁰ Varias de estas actas y pasiones de mártires hablan de hechos que se produjeron fuera del marco temporal en el que se encuadra este estudio (el Alto Imperio), pero serán usadas puntualmente cuando la información que aporten se refiera al Occidente (en concreto, África Proconsular) y resulte perfectamente aplicable a nuestro período. Asimismo, no se renunciará a usar la valiosa información sobre el proceso de Pablo Tarso contenida en los *Hechos de los Apóstoles*, 21-26, a pesar de haberse producido en Judea, provincia oriental gobernada por un prefecto (luego procurador) imperial.

⁶³¹ *Passio Sanct. Saturnini, Dativi et sociorum*, 2, 6. A pesar de que estos hechos tuvieron lugar en época de Diocleciano, este aspecto del proceso es aplicable a nuestro período.

componían un informe con el fin de facilitar la tarea al gobernador. El caso de San Pablo es paradigmático: El tribuno militar de Jerusalén, Claudio Lisias, realizó un primer interrogatorio tanto al apóstol como a los miembros del Sanedrín que lo perseguían y, a partir de la información que recabó, envió a Pablo a Cesarea, capital de la provincia, acompañado de un informe para el gobernador Antonio Félix⁶³². Según los *Hechos de los Apóstoles*, el tribuno actuó así con Pablo porque éste había declarado ser ciudadano romano, acogiendo a una protección legal de la cual carecían los *peregrini*⁶³³. Pero de esto hablaremos más tarde.

Una vez que el/los cristiano/s se hallaban ante el gobernador, comenzaba el proceso en sí, caracterizado por una dinámica de inquisición y respuesta presidida por él, en la que se conducía con una gran discrecionalidad. El proceso, que se realizaba por lo general en el foro de la ciudad y al que acudía a veces numeroso público⁶³⁴, duraba el tiempo que estimase oportuno el gobernador, quien, como veíamos en la *Apología* de Apuleyo, decidía libremente qué testimonios y pruebas aceptar y privilegiar.

La carta X, 96 del epistolario pliniano es un inmejorable ejemplo de la actitud del gobernador frente a los cristianos. En ella, Plinio le relata a Trajano cómo ha actuado con los cristianos que habían sido denunciados en su tribunal. Era la primera vez que Plinio se veía obligado a juzgar a unos cristianos y por ello escribe al emperador en busca de consejo. Sus palabras son muy elocuentes en su forma de proceder como juez:

Nec mediocriter haesitavi (...). Interim <in> iis qui ad me tamquam Christiani deferebantur, hunc sum secutus modum. Interrogaui ipsos an essent Christiani. Confitentes iterum ac tertio interrogaui supplicium minatus; perseuerantes duci iussi. Neque enim dubitabam, quaecumque esset quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri. Fuerunt alii similis amentiae, quos, quia ciues Romani erant, adnotaui in urbem remittendos.

Luego pasa a exponer a Trajano el problema de los libelos anónimos que comenzó a recibir con denuncias y cómo decidió dejar en libertad a quienes negasen ser cristianos o abjurasen realizando ofrendas a los dioses oficiales delante de él. Entre las

⁶³² Act. Ap. 23, 26-30.

⁶³³ Act. Ap. 22, 25.

⁶³⁴ Eus. H.E. V, 1, 10.

imágenes de los dioses colocó también una del emperador, hecho que muestra la vinculación que el culto a los dioses oficiales tenía con la fidelidad al emperador y la lealtad al Imperio. A los cristianos que se mostraban contumaces en su posición a pesar de sus amenazas y de las oportunidades que Plinio les daba de arrepentirse, los condenó a muerte, excepto a los que eran ciudadanos romanos, que envió a Roma. En el caso de dos diaconisas que eran esclavas, las torturó con el fin de que dieran información sobre la naturaleza de sus reuniones, que podía ser de interés para el orden provincial. En su carta, Plinio pide a Trajano que le confirme si ha actuado correctamente y que le diga cómo proceder en los sucesivos.

Trajano da el visto bueno al proceder de Plinio: *Actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutus es. Neque enim in uniuersum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest*⁶³⁵. En esta última frase, el emperador define espontáneamente la esencia de la *cognitio extra ordinem*, al decir que no puede establecerse una regla general para aquello que carece de una forma concreta; es decir, para aquello que nos está estipulado en el ordenamiento legal. Por otra parte, le indica que no dé crédito a las denuncias anónimas para no generar inseguridad entre la población de su provincia.

Una conducta similar a la de Plinio mostró el procónsul de África Saturnino, quien, a pesar de ser criticado por Tertuliano como uno de los primeros perseguidores de los cristianos⁶³⁶, comienza el proceso contra los llamados mártires *Scilitani* ofreciéndoles a éstos el perdón del emperador si volvían a pensar correctamente; es decir, demostrando su fidelidad al emperador a través de la realización de sacrificios por la salud del mismo⁶³⁷. El acta completa de este proceso, que se produjo en Cartago en el 180 d.C., refleja la mutua incompreensión existente entre el gobernador pagano y el cristiano acusado. Manejan dos discursos opuestos y están condenados a no entenderse; así, el gobernador demuestra perplejidad ante el fanatismo del cristiano y lo toma por un

⁶³⁵ Plin. Ep. X, 97, 1.

⁶³⁶ Tert. Ad Scap. 3, 4.

⁶³⁷ Act. Martyr. Scilitanorum, 1-3: Saturninus proconsul dixit: "Potestis indeulgentiam domini nostri imperatoris promereri, si ad bonam mentem redeatis". Speratus dixit: "Nunquam malefecimus, iniquitati nullam operam praeuimus; numquam malediximus, sed male accepti gratias egimus; propter quod impepratores nostrum obseruamus". Saturninus procónsul dixit: "Et nos religiosi sumus, et simplex est religio nostra, et iuramus per genium domini nostri imperatoris, et pro salute eius supplicamus, quod et uso quoque facere debetis". El interrogatorio continúa en términos similares: Speratus proclama que no creen en ningún poder terrenal y Saturnino lo conmina a abandonar tales creencias consideradas subversivas.

loco. Finalmente, ante la posición inamovible del cabecilla, *Speratus*, y el resto de cristianos encausados, Saturnino los condena a la pena capital, propia de los juicios *de maiestate* cuando se trataba de personas de baja condición o *peregrini*. La respuesta de los cristianos a la sentencia es estremecedora: dan gracias a Dios⁶³⁸.

El problema del *ius gladii* de los gobernadores.

Hemos visto que, aparte de las *Actas de los Mártires*, la carta X, 96 de Plinio es una fuente importante para el conocimiento de los procesos contra los cristianos que se dieron durante el Principado. Junto a ella, sobresale la *Historia Eclesiástica* de Eusebio de Cesarea, y, en concreto, un episodio recogido en ella: el de los llamados ‘mártires de Lyon’. Ambos autores no sólo nos ofrecen, desde diferentes géneros literarios, una descripción de sendos procesos extraordinarios, sino informaciones muy valiosas para reflexionar en torno al poder coercitivo que los gobernadores podían ejercer sobre los habitantes de su provincia en función de su *status* jurídico.

Al igual que el procurador Festo en el caso de San Pablo, Plinio decidió enviar a los cristianos que eran ciudadanos romanos a Roma. Éstos ostentaban un derecho exclusivo como era el de no ser torturados ni sufrir ningún tipo de violencia física por parte de las autoridades, estipulado en la *lex Iulia de vi publica*, pero existe una verdadera polémica historiográfica en torno a su derecho a ser enviados a Roma para ser juzgados, lo cual entronca con otro problema fundamental: ¿tenían los procónsules y *legati Augusti pro praetore ius gladii* sobre los ciudadanos romanos de su provincia o su poder coercitivo sobre los mismos era limitado?

Mommsen entendía que los gobernadores tenían jurisdicción criminal sólo sobre los ‘no ciudadanos’ y estaban obligados a enviar a Roma a los ciudadanos romanos amenazados de una pena capital u otros castigos físicos no mortales si apelaban⁶³⁹. Como prueba de ello, en su *Derecho Público* cita cuatro fragmentos de fuentes antiguas (dos de juristas y dos de historiadores). En primer lugar, un pasaje de Paulo relativo a la

⁶³⁸ *Act. Martyr. Scilit.*, 8-15.

⁶³⁹ Mommsen, *DPR* III, p. 309.

lex Iulia de ui publica y otro de Ulpiano paralelo⁶⁴⁰. A continuación, menciona el caso del gobernador de la Germania Inferior, Capitón, que fue condenado a muerte por Galba porque no había respetado una apelación al César que había hecho un ciudadano romano de su provincia⁶⁴¹. Finalmente, utiliza la noticia que da Suetonio sobre el ciudadano romano de la Hispania Citerior que, culpable de envenenamiento, fue condenado a la crucifixión por Galba cuando fue gobernador de esa provincia⁶⁴². A primera vista, resulta sorprendente que Mommsen haya escogido este último pasaje, pues es un ejemplo de apelación no atendida por el gobernador, que, además, salió impune. Pero más adelante veremos que tenía sus razones. Asimismo, en su *Derecho penal*, el sabio prusiano remarca que la *lex Iulia de ui* había reforzado la prohibición de que ningún magistrado con *imperium* pudiera infligir a un ciudadano romano la pena de muerte o la flagelación, por ejemplo, obligándolo a admitir la *prouocatio*⁶⁴³.

Empero, ¿qué sucedía si el ciudadano no apelaba? Mommsen afirma que en los procesos criminales en los que el encausado fuese ciudadano romano, los gobernadores debían abstenerse de toda condena formal y remitir al reo a Roma, donde se hallaban los únicos tribunales competentes para tratar estas causas⁶⁴⁴. Sin embargo, también admite la posibilidad de que el gobernador, en determinadas circunstancias, pudiese ejecutar a un ciudadano romano bajo su propia responsabilidad. A ello le conduce el caso del procónsul de África Mario Prisco, quien, entre otras cosas, fue juzgado en el Senado por haber aceptado sobornos por condenar a muerte a un *eques*. Plinio (nuestra fuente y parte de la acusación) no pedía la condena de Prisco por haber dado ese fin a un ciudadano romano, sino por haber aceptado un soborno que condicionó su sentencia⁶⁴⁵.

Mommsen continúa su discurso enlazando con el famoso pasaje de Dión Casio sobre las reformas administrativas augusteas del 27 a.C. y afirma, partiendo del historiador bitinio, que desde el siglo I los gobernadores con mando sobre legiones recibieron la jurisdicción capital “sur les citoyens, au moins en matière militaire”⁶⁴⁶. En

⁶⁴⁰ Ulp. 8 de off. procos. (Dig. XLVIII, 6, 7): *Lege Iulia de ui publica tenetur, qui, cum imperium potestatemue haberet, ciuem romanum aduersus prouocationem necauerit verberauerit iusseritue quid fieri aut quid in collum iniecerit, ut torqueatur.*

⁶⁴¹ Dio Cass. LXIV, 2.

⁶⁴² Suet. *Galba* 9.

⁶⁴³ Mommsen, *Le droit pénal*... I cit. p. 283, y cita, como apoyo: Paul. 5, 26, 1; Ulp. Dig. XLVIII, 6, 7; Act. Ap. 22-25 (proceso contra Pablo).

⁶⁴⁴ Mommsen, *Le droit pénal*... I, cit. p. 283.

⁶⁴⁵ Mommsen, *DPR* III, p. 309; Plin. *Ep.* II, 11.

⁶⁴⁶ Dio LIII, 13. Mommsen, *DPR* III, p. 310.

el siglo III, los emperadores habrían delegado el *ius (potestas) gladii* en todos los gobernadores, incluidos los de las provincias públicas, tal y como se desprende, en opinión de Mommsen, de la aserción de Ulpiano: *qui uniuersas prouincias regunt, ius gladii habent et in metallum dandi potestas iis permissa est*⁶⁴⁷. Sin embargo, Mommsen puntualiza que esa jurisdicción capital no era inherente al gobierno provincial, sino que era conferida a título especial⁶⁴⁸, y advierte que este *ius gladii* no debe ser confundido con la vieja jurisdicción criminal que los gobernadores republicanos tenían sobre los no ciudadanos y los esclavos, sino a la jurisdicción capital que el emperador podía ejercer sobre los ciudadanos y que delegaba por motivos prácticos, pero de la que quedaban excluidos los *principales* y los centuriones, los *equites*, los decuriones de los municipios y los senadores⁶⁴⁹.

Como hemos dicho, esta teoría quedó establecida como la doctrina a seguir. A mediados de los años 50, A.H.M. Jones intentó afinar algunas de sus ideas y presentó una teoría más compleja. Según este autor, el derecho de todo ciudadano a ejercer la *prouocatio ad Populum*, que habría funcionado en el período republicano también en las provincias y se vio reforzado con la *lex Iulia de ui publica* augustea, durante el Principado fue sustituido por la *appellatio ad Caesarem* –quizá ya a partir del 30 a.C., cuando al futuro Augusto se le concedió el *ius auxilii* propio de los tribunos de la plebe⁶⁵⁰. El caso de San Pablo ejemplificaría todo ello, dado que, como ciudadano, se acogió al derecho de no sufrir ninguna violencia por parte de las autoridades de la provincia que le garantizaba la *lex Iulia*, y, después, ejerció su derecho de apelar al César. Sin embargo, en opinión de Jones, si Pablo hubiese aceptado ser juzgado en Judea y hubiese sido condenado allí, podría haber sido ejecutado legalmente sin mediación del emperador⁶⁵¹.

En el siglo II los gobernadores habrían adquirido la costumbre de remitir las causas que implicasen a ciudadanos romanos al emperador, como mostraría, según Jones, la actuación de Plinio y del gobernador de la Lugdunense con los cristianos, en

⁶⁴⁷ Dig. I, 18, 6, 8 (Ulp. 1 op.).

⁶⁴⁸ Mommsen, *Le droit pénal...* I cit. p. 286.

⁶⁴⁹ Cf. Ulp. Dig. I, 18, 6, 8; Mommsen *DPR* III, cit. p. 310-312.

⁶⁵⁰ A.H.M. Jones, "I Appeal unto Caesar", en *Studies in Roman Government and Law*, Oxford, 1960, pp. 53-54. Sobre *ius auxilii* de Octaviano cf. Dio LI, 19. Contra esta teoría cf. M. Ravizza, "*Kaisara epikaloumai*. L'appello di Paolo di Tarso all'imperatore", en Mantovani – Pellicchi (dir.) *Eparcheia...* cit. pp. 113-131, esp. pp. 128-131, con la que estamos de acuerdo.

⁶⁵¹ Jones, "I Appeal..." cit. p. 55.

cuyos casos no hay noticia de que los encausados apelasen al emperador⁶⁵². Sin embargo, el historiador británico admitía que no siempre era respetada la ley, como en el caso del procurador de Judea que había crucificado a *equites*⁶⁵³, el de Galba y el de Fonteyo Capitón (ambos ya referidos por Mommsen). Jones, además, entiende que existe una diferencia entre los procónsules y los *legati Augusti pro praetore*: mientras que no se cuestionaba el derecho que los primeros tenían de condenar a muerte a un ciudadano⁶⁵⁴, los legados imperiales (como los procuradores) tenían la obligación de atender a las apelaciones hechas al César. Por tanto, sería la categoría del gobernador y no el *status* jurídico del encausado la que condicionaría la remisión de su causa a Roma. En el siglo III, con la extensión de la ciudadanía a casi todos los habitantes libres del Imperio con la *constitutio Antoniniana*, el derecho a la *appellatio* se universalizaría, y, con ella, se extendería el *ius gladii* a todos los gobernadores. La protección frente a la violencia de los magistrados pasó a ser un privilegio de los *honestiores*, al igual que la *appellatio* previa al proceso. El resto de la población sólo podría apelar tras la sentencia⁶⁵⁵.

Jones propuso que los crímenes tipificados en la categoría de *iudicia publica* no contemplaban la posibilidad de realizar una apelación. La *exercitio publici iudici* habría abolido en las provincias el derecho de *prouocatio* cuando se tratase de crímenes tipificados por ley (en el *ordo iudiciorum publicorum*), como respuesta a la imposibilidad de enviar a Roma al número cada vez mayor de *ciues* provinciales. Determinados magistrados habrían sido investidos de manera especial con poderes que los capacitaban para juzgar estos crímenes y condenar sin *prouocatio*. Pablo de Tarso y los cristianos de Bitinia no pudieron ser condenados por los gobernadores porque no estaban acusados de un crimen tipificado en el *ordo iudiciorum publicorum*. En cambio, Flavio Arquipo sí lo fue, dado que estaba acusado de un crimen ordinario (en concreto, de *falsum*, recogido ya en una *lex Cornelia* de Sila). Y lo mismo sucedería con el *eques* ejecutado por Mario Prisco.

⁶⁵² *Idem*, p. 56. Para los mártires de Lyon cf. Eus. *H.E.* V, 1, 9 ss. Jones, empero, se equivoca cuando dice que el ciudadano romano Atalo de Pérgamo fue condenado a las fieras. Eusebio (como veremos más adelante) explicita que cuando el gobernador supo que era un *ciuis romanus*, lo sacó de la arena.

⁶⁵³ Jos. *B. J.* II, 308.

⁶⁵⁴ Jones, "I Appeal..." cit. p. 56. Para probar esto recurre a los hechos de Mario Prisco (Plin. *Ep.* II, 11) y al caso de Flavio Arquipo (*Ep.* X, 58).

⁶⁵⁵ Jones, "I Appeal...", cit. p. 57.

No obstante, el propio Jones reconoce que el caso de la apelación del acusado por *ueneficium* que Galba obvió era difícil de conciliar con su teoría. Él planteó dos posibles soluciones: O esos poderes especiales se concedieron a determinados gobernadores entre Nerón y Domiciano, o bien sólo estaban reservados a los procónsules, quedando excluidos los legados imperiales como Galba. Este autor se inclina por la última opción siguiendo a Papiniano⁶⁵⁶. Empero, sus argumentos no son plenamente convincentes y su teoría resulta demasiado alambicada.

En cuanto al *ius gladii*, Jones entiende que, en origen, fue un poder destinado a ser aplicado por los gobernadores sobre sus soldados en calidad de jefes militares, pero no sobre los ciudadanos civiles. Los gobernadores poseerían este poder de vida y muerte desde los inicios del Principado y la *coercitio* sobre los soldados que implicaba sería ilimitada. En cuanto a los civiles, probablemente los procónsules podrían juzgar y condenar sin apelación a los *ciues* por cargos tipificados en las leyes⁶⁵⁷. La *lex Iulia de ui publica*, al tiempo que reforzó el viejo derecho de *prouocatio*, habría limitado su campo de acción al extender a los procónsules la jurisdicción capital sin derecho a apelar en los *crimina iudiciorum publicorum*⁶⁵⁸. Tras el 212, todos los gobernadores sin excepción recibieron ese poder ilimitado de *coercitio* sobre los civiles, salvo los *honestiores*, siendo denominado *merum imperium* (término que parece en las fuentes jurídicas). Así, los *honestiores* gozaron de derechos que antes pertenecían a todos los *ciues Romani*, mientras que los *humiliores* se vieron degradados a una condición ligeramete superior a la de los viejos *peregrini*. El *ius gladii* mantendría siempre su carácter militar⁶⁵⁹.

A principios de los años 60, A. N. Sherwin-White, en el contexto de una serie de conferencias sobre la sociedad y el derecho romanos en el Nuevo Testamento que dieron lugar a un libro, dedicó un espacio a los poderes coercitivos y la jurisdicción criminal de los gobernadores provinciales en el siglo I d.C.⁶⁶⁰. A pesar de que se interesa más por los *peregrini* que por los ciudadanos romanos, el autor realiza una serie de valiosas reflexiones en torno a la independencia de los procónsules en su toma de

⁶⁵⁶ *Idem*, pp. 58-59. El pasaje de Papiniano en *Dig.* I,21,1.

⁶⁵⁷ *Idem*, pp. 60-61.

⁶⁵⁸ A. H. M. Jones, "Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate", en *Studies...* cit. pp. 69-98, esp. pp. 90-92.

⁶⁵⁹ Jones, "I Appeal...", cit. pp. 62-65.

⁶⁶⁰ Sherwin-White, "Coercitio...", cit.

decisiones respecto al emperador en el ámbito de la represión criminal con las que estamos sustancialmente de acuerdo. Según Sherwin-White, en el siglo I d.C. los procónsules, en virtud de su *imperium* y prosiguiendo con las dinámicas tardo-republicanas, gozaron de independencia y de un poder prácticamente absoluto en su provincia. Frente a los abusos en los que pudiesen caer, los hombres comunes peregrinos estaban indefensos –a excepción de la mínima protección que les concedían las leyes *de repetundis* y *de maiestate minuta*–, mientras que los ciudadanos romanos provinciales estaban amparados, además, por la *lex Iulia de vi publica*, que salvaguardaba su integridad física. Más allá de esto, el *imperium* de los procónsules no conocía, según Sherwin-White, ninguna limitación⁶⁶¹.

En cuanto a su relación con el *princeps*, el historiador británico sitúa al reinado de Domiciano como un momento bisagra entre la independencia y libertad de acción de la que gozaron los procónsules en época julio-claudia y el control e intervencionismo imperiales en sus tareas que se dieron abiertamente desde Trajano y Adriano, cuya muestra más significativa sería la generalización de los *mandata*⁶⁶². Pero en el siglo I, al menos, el procónsul no estaría obligado a consultar nada al emperador. Sherwin-White incide acertadamente en la importancia del *imperium* de los procónsules, que durante todo el Principado fue absoluto. Era el fundamento del que se derivaba su poder de represión, expresado en los términos *animaduversio* y *coercitio*. Ese *imperium*, además, sería igual en el caso de los *legati Augusti pro praetore*, cuya subordinación al *princeps* se reflejaría sólo en la forma en la que eran designados y no en sus poderes⁶⁶³. Así, el autor entiende que la afirmación de Ulpiano en torno al *ius gladii* y *alterius coercionis* recogida *Dig. I, 16, 6, pr.*, es aplicable a ambos tipos de gobernadores de rango senatorial y su vigencia se puede retrotraer a los dos siglos anteriores, como muestran tanto el Segundo Edicto de Augusto de Cirene como diversos testimonios del siglo II⁶⁶⁴. En vista de estos poderes, concluye que “there was no automatic right for the provincial subject to appeal from the tribunal of the governor to that of the princeps. He could only do so if he possessed some special privilege”⁶⁶⁵.

⁶⁶¹ *Idem*, p. 1.

⁶⁶² *Idem*, p. 2.

⁶⁶³ *Idem*, cit. 5, nt. 3.

⁶⁶⁴ *Idem*, p. 4. Cf. Plin. *Ep.* X, 30, 1, donde Trajano ordena que se envíe a Plinio a aquellos cuyas causas pudiesen conllevar *capitale supplicium*; Ven. Sat. en *Dig. I, 15, 11*.

⁶⁶⁵ Sherwin-White, “*Coercitio...*” cit., p. 9.

En la segunda mitad de los años sesenta, P. Garnsey publicó un par de artículos en los que pretendió desmontar la doctrina tradicional⁶⁶⁶. El primer estudio lo dedicó al problema de la apelación en el Imperio, y es una reacción directa contra la teoría de Jones acerca de la *prouocatio* y su hipótesis de que se extinguiría en provincias en los casos incluidos en las *leges publicae*. Para Garnsey, la eficacia de la apelación (que, en su opinión, siempre fue posterior a la sentencia) dependía de la discrecionalidad del gobernador, pues “the man who gave judgement in the provinces in criminal cases had the power, but not the right, to refuse an appeal against his own sentence”⁶⁶⁷. Este autor niega que no se pudiese apelar en los casos estipulados en las *leges publicae*, puesto que la *cognitio extra ordinem* de los gobernadores abarcaba tanto las causas y delitos ordinarios como los extraordinarios⁶⁶⁸.

Garnsey plantea en su estudio que se produjo una continuidad sustancial en el funcionamiento de la apelación a Roma (bien al Pueblo, bien al César) y en los poderes coercitivos de los gobernadores entre la República y el Alto Imperio. Éstos eran quienes decidían si una apelación era admitida o no. Asimismo, los ciudadanos romanos no tenían la garantía de ser enviados a Roma si, como acusados, solicitaban tal cosa, sino de que su causa fuese vista por un tribunal romano en su provincia. A esto, el autor añade el derecho a escoger tribunal que Roma concedió a determinados individuos en pago por sus servicios prestados y en lugar de darles la ciudadanía, como el navarca Seleuco de Rosos, premiado por Octaviano⁶⁶⁹. Instaurado el Principado, nacería una nueva alternativa: el tribunal del emperador⁶⁷⁰. Para este autor, la *prouocatio* republicana nunca llegó a funcionar, como dejarían en evidencia el intento de Cayo Graco de revitalizarla con la *lex de capite ciuium* o, ya en época augustea, la promulgación de la *lex Iulia de ui publica*⁶⁷¹. Además, observa que los pocos casos de apelación conocidos no van más allá del primer siglo de nuestra era, y que los emperadores de los siglos II-III dejaron de lado las leyes sobre la apelación y sólo

⁶⁶⁶ P. Garnsey, “The *lex Iulia* and Appeal under the Empire”, *JRS* 56, 1966, pp. 167-189; “The Criminal Jurisdiction of Governors”, *JRS* 58, 1968, pp. 51-59.

⁶⁶⁷ *Idem*, “The *lex Iulia*...” cit. p. 167.

⁶⁶⁸ *Idem*, p. 175.

⁶⁶⁹ *Idem*, “The Criminal Jurisdiction...”, cit. p. 56.

⁶⁷⁰ *Idem*, “The *lex Iulia*...” cit. p. 183.

⁶⁷¹ *Idem*, pp. 187-188.

regularon, mediante *constitutiones*, la inmunidad de los sectores privilegiados frente a determinadas penas⁶⁷².

En su segundo artículo, dedicado a la jurisdicción de los gobernadores provinciales, Garnsey continuó desarrollando su teoría de unos gobernadores que tanto durante la República como el Alto Imperio gozaron de una gran libertad de acción. Frente a la doctrina mommseniana sobre el *ius gladii*, Garnsey propone que este derecho de vida y muerte fue poseído por todos los gobernadores provinciales desde finales de la República y que la idea de que se trataba de un poder delegado por los emperadores pertenece a los juristas severianos, pero no es válido para los dos primeros siglos del Principado⁶⁷³.

En su exposición de estas enmiendas a la teoría tradicional, Garnsey comienza examinando dos famosos pasajes de Dión Casio en los que, dentro de las reformas administrativas augusteas del 27 a.C., el historiador se detiene en los poderes de los gobernadores⁶⁷⁴. En ellos, Dión habla, por un lado, del derecho a llevar la espada y vestir el *paludamentum* que poseían los *legati Augusti pro praetore* dado que contaban con legiones a su mando. Por otro, el historiador indica de manera indefinida que los gobernadores senatoriales tenían el poder de ‘*θανατοῦν τοὺς ἀρχομένους*’, expresión que fue interpretada por Garnsey como una referencia al *ius gladii* y a que éste era poseído también por los procónsules. Asimismo, entiende que el ‘*ius animaduertendi*’ del que Venuleyo Saturnino hablaba en el *De officio proconsulis* que compuso en época antonina era un sinónimo del *ius gladii* ulpiano⁶⁷⁵. Esto probaría que al menos en el siglo II ya los procónsules, como los legados imperiales senatoriales, tenían *ius gladii*. Según Garnsey, este poder de condenar a ciudadanos romanos ya lo tuvieron los gobernadores desde el período tardo-republicano. Los ciudadanos no tenían el derecho de ser enviados a Roma, sino de ser objeto de un juicio legítimo, no sumario, en su provincia. La *prouocatio* los protegía de los abusos y las ejecuciones sumarias, no de ser condenados por los gobernadores legalmente. Además, si entendían que ningún tribunal de la provincia era imparcial —es decir, si consideraban que todos eran *iniqua*—,

⁶⁷² *Idem*, p. 189.

⁶⁷³ Garnsey, “The criminal jurisdiction...”, cit. p. 52.

⁶⁷⁴ Dio LIII, 13, 6-7; LIII, 14, 5.

⁶⁷⁵ Garnsey, “The criminal jurisdiction...”, cit. pp. 52-53. Cf. Dio LIII, 13, 6-7; 14, 5; Ulp. *Dig.* I, 16, 11; Venul. Saturn. *Dig.* XLVIII, 19, 15: *Si quid erit quod maiorem animaduersionem exigat, reicere legatus apud proconsulem debet: neque enim animaduertendi coercendi uel atrociter uerberandi ius habet.*

tenían la posibilidad de rechazarlos (*reiectio*), con lo cual sólo restaba la opción de ir a Roma. Así sucedería en el caso de Pablo de Tarso⁶⁷⁶.

Las enmiendas que Garnsey realizó a la doctrina tradicional resultan, en general, convincentes, aunque, como veremos, las propias fuentes que él utilizó y alguna nueva refutan alguna de sus hipótesis. Sus estudios tuvieron la virtud de reabrir el debate en torno al *ius gladii* y los poderes coercitivos de los gobernadores provinciales, y su teoría ha conocido cierto éxito entre los historiadores⁶⁷⁷. En cambio, sus argumentos no consiguieron modificar la adhesión a la teoría mommseniana de los romanistas, más rígidos que el propio sabio prusiano, que siempre dejó algunas puertas abiertas⁶⁷⁸.

El último gran esfuerzo de síntesis sobre el problema del *ius gladii* se debe a T. Spagnuolo-Vigorita, dentro de un largo artículo acerca del *imperium mixtum* publicado en 1990. El estudio toca muchos puntos, pero ahora sólo nos interesan las conclusiones a las que llegó en su análisis de los conceptos *merum imperium* e *imperium mixtum* usados por los juristas severianos: “*Imperium merum* è la giurisdizione criminale maggiore (*ius gladii*), che meglio sarebbe non chiamare *iurisdictio*: essa spetta, almeno in linea di principio e in provincia, ai titolari di *imperium*, che ne sono considerati investiti con provvedimento normativo e che non possono delegarla se non nei casi specificamente previsti; *imperium mixtum* sono gli atti che rientrano (da sempre o da tempo) nella *iurisdictio more maiorum*, o sono comunque a questa connessi, ma che sono riservati ai titolari di *imperium* (*magis imperii quam iurisdictionis*)”, pudiendo ésta

⁶⁷⁶ Garnsey, “The criminal jurisdiction...”, cit. pp. 56-57.

⁶⁷⁷ Burton, “The *lex Irnitana*...”, cit. pp. 219-220; Hurlet, *Le proconsul*... cit., p. 158, quien defiende que los procónsules gozaron de *ius gladii* sobre sus soldados durante todo el Alto Imperio, pero no entra a tratar qué sucedía con los civiles; Fournier, *Entre tutelle*... cit. pp. 341-347; A. Bérenger, “Formation et compétences des gouverneurs de province dans l’Empire romain”, *DHA* 30/2, 2004, p. 35-56, esp. p. 40, y *Le métier*... cit. pp. 68-73.

⁶⁷⁸ D. Liebs, “Das *ius gladii* der römischen Provinzgouverneure in der Kaiserzeit”, *ZPE* 43, 1981, pp. 217-223; V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milán, 1988; Santalucia, *Diritto e processo*... cit. pp. 102-106; V. Giuffrè, *La repressione criminale nell’esperienza romana*, Nápoles, 1998 (5ª ed. rev.), pp. 55-56 y 98-100, aunque se pregunta si la remisión del acusado a Roma se producía sólo cuando éste la requería (p. 99). Marotta y Santalucia rechazan tanto la teoría de Jones como la de Garnsey. Sí aceptó la teoría de Garnsey A. T. Sartori, “Sulla repressione penale nelle province”, *Acmé* 13/3, 1970, pp. 349-358; Frente a la convicción que muestran estos autores en torno a la teoría tradicional, su padre, Mommsen, deja traslucir en su obra ciertas dudas, cf. *DPR* III, p. 310 (citado *supra*).

ser delegada permanentemente (el caso de los magistrados municipales) o de manera especial⁶⁷⁹.

En cuanto al problema en torno al *ius gladii* propiamente dicho, al que se enfrenta en la larga nota 46, Spagnuolo-Vigorita toma como eje de su discurso el pasaje de Papiniano que dice:

*Qui mandatam iurisdictionem suscepit, proprium nihil habet, sed eius, qui mandauit, iurisdictione utitur. Verius est enim more maiorum iurisdictionem quidem transferri, sed merum imperium quod lege datur non posse transire: quare nemo dicit animaduersionem legatum proconsulis habere mandata iurisdictione. Paulus notat: et imperium, quod iurisdictioni cohaeret, mandata iurisdictione transire uerius est.*⁶⁸⁰

A partir de él, repasa los principales estudios dedicados al *ius gladii* y el poder coercitivo de los gobernadores (incluidos los procuradores). Así, niega que, como sostenía Jones, la *lex Iulia de ui publica* contuviese normas generales sobre los *iudicia publica* y, con Santalucia y Marotta, ve equivocada la teoría de que la *exercitio publici iudici* y el *ius gladii* sean dos cosas diferentes⁶⁸¹. Para Spagnuolo-Vigorita, en época severa el *ius gladii* designaba el conjunto de poderes jurisdiccionales penales de los gobernadores y, por extensión, en ciertos casos, la entera función del gobierno provincial. Asimismo, entiende que Papiniano, a pesar de establecer que el *ius gladii* era un poder ‘dado’, reconocía que no siempre lo era ni sólo por parte del emperador. Para el jurista severiano, el *ius gladii* de los procónsules se derivaba de su propio *imperium*, a su vez obtenido por ley⁶⁸².

Como se puede apreciar, el problema del poder coercitivo de los gobernadores provinciales se convirtió, a partir de Jones y Garnsey, en una verdadera polémica historiográfica, que en ocasiones ha adolecido de cierta tendencia al ‘escolasticismo’.

⁶⁷⁹ T. Spagnuolo-Vigorita, “*Imperium mixtum*. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria”, *Index* 18, 1990, pp. 113-166, esp. p. 125.

⁶⁸⁰ *Dig.* I, 21, 1, 1 (Pap. 1 *quaest.*).

⁶⁸¹ Spagnuolo-Vigorita, “*Imperium mixtum...*” cit. p. 140.

⁶⁸² Spagnuolo-Vigorita, “*Imperium mixtum...*” cit. p. 142. El autor piensa que “la spiegazione papiniana non mirasse affatto a giustificare lo strapotere imperiale, ma piuttosto a rivendicare una qualche autonomia alla giurisdizione criminale dei governatori ed anche formulare un auspicio político, che cioè una funzione di tale rilievo fosse in linea di principio riservata ai titolari di *imperium*” (p. 143).

En nuestra opinión el del *ius gladii* es un problema de fuentes y de terminología. Porque, ¿a qué se referían los autores antiguos cuando hablaban de *él*, al poder represivo o coercitivo general de los gobernadores sobre los provinciales o bien al que aplicaban sobre sus soldados que eran ciudadanos romanos? La doctrina tradicional, con Jones a la cabeza, sostiene esta última posibilidad, pero, a nuestro parecer, queda invalidada por una sencilla razón: es sabido que desde la República los *ciues*, una vez reclutados, realizaban un juramento solemne de fidelidad al magistrado que sería su general (el *sacramentum*) que los situaba bajo su potestad y arbitrio absolutos⁶⁸³, anulándose los derechos que les correspondían como civiles frente al poder de los magistrados con *imperium*, como se manifiesta en la práctica extendida entre los generales de diezmar a la legión cuyo comportamiento durante una batalla hubiese sido indigno⁶⁸⁴. En el caso de los *legati Augusti pro praetore*, los soldados habían dirigido su juramento no a ellos, sino al emperador, pero eso no cambiaba nada: los legados imperiales actuaban en su nombre bajo sus auspicios. No había, por tanto, ninguna necesidad de especificar con un término el poder de vida y muerte que los generales tenían sobre sus soldados; se daba por descontado. El problema vendría cuando hubo gobernadores que no gozaban de *imperium*, como los prefectos o procuradores imperiales de rango ecuestre. Cuando fue necesario, el emperador hizo que se les concediera el poder coercitivo necesario, bien igualándolos a los procónsules (como en el caso del *Praefectus Aegypti*), bien concediéndoles un poder represivo más concreto, como la *potestas gladii*. Cuando Dión Casio escribe su obra, en época severa, siente la necesidad, como los juristas más o menos coetáneos, de especificar qué cargos senatoriales gozaban de *imperium* y *potestas gladii* en las provincias y cuáles no, al igual que con los *equites*, pues el panorama administrativo de su época se había complicado notablemente.

El *ius gladii* ha de entenderse como el poder de vida y muerte sobre aquellos civiles y militares que estaban bajo la autoridad del gobernador. No ha de confundirse, sin embargo, con el poder coercitivo general, sino con su más trascendental concreción. El propio Ulpiano diferencia claramente entre la *potestas gladii* y *alterius coercionis* cuando remarca que los poderes represivos sólo pertenecen a los gobernadores y no pueden ser delegados⁶⁸⁵. Y, como veremos, a la pena capital sólo podrán escapar, como

⁶⁸³ Una descripción del contenido del juramento realizado por los nuevos reclutas en Liv. XXII, 38, 1-5.

⁶⁸⁴ C. Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, 1976, pp. 141-149.

⁶⁸⁵ Dig. I, 16, 6, pr. (Ulp. 1 de off. procos.).

ya sucedía durante la República, no todos los ciudadanos romanos, sino aquellos que pertenecían a los grupos privilegiados de la sociedad.

En cuanto a las fuentes, la primera dificultad se halla en que los dos autores principales en los que se ha apoyado la historiografía desde Mommsen son Dión Casio y Ulpiano, un historiador y un jurista que escribieron sus obras bajo los Severos; es decir, a finales del Principado. Ciertamente es que Dión está hablando de las reformas administrativas augusteas, pero tiende a concentrar en un único momento (27 a.C.) ciertos cambios que se dieron más adelante y de manera progresiva, como la pérdida del mando sobre legiones por parte de los procónsules, hecho que no sucedió de manera definitiva hasta Calígula. Además, plasma una visión del poder imperial (más centralizador e intervencionista) y de la consideración de las provincias que es deudora de su tiempo. Por su parte, Ulpiano simplemente pretende sistematizar las competencias y poderes de los gobernadores provinciales en el contexto del importante impulso que los Severos dieron al proceso de fortalecimiento del poder del emperador. No debe caerse en la trampa de asumir que determinadas aseveraciones del jurista se refieren a cambios que se produjeron en su época. Así como resultaría impensable afirmar, en base a *Dig. I, 16, 7, 1* (= Ulp. 2 *de off. procos.*), que sólo a partir del siglo III los procónsules se dedicaron a supervisar el estado de los templos y edificios de las ciudades de su provincia –pues las fuentes literarias y epigráficas muestran que esta tarea fue una constante desde la República, como veremos en otro capítulo–, asimismo no está justificado atribuir al siglo III la concesión del *ius gladii* a los gobernadores provinciales de rango senatorial, pues, a diferencia de los de rango ecuestre, tenían pleno *imperium*⁶⁸⁶. Además, este presupuesto resulta contradictorio con el proceso de fortalecimiento del poder del emperador⁶⁸⁷.

Al margen de los antedichos autores, contamos con referencias significativas del poder de represión criminal de los gobernadores de rango senatorial en Suetonio o Plinio el Joven, y más tardíamente en Eusebio. Además, ninguno de ellos se cuestionaba los límites del poder de los gobernadores provinciales, porque en su época no existía duda alguna en torno a ello y era innecesario realizar un excursus acerca de estas cuestiones. Sólo Flavio Josefo se ve en la necesidad de explicar que el primer gobernador de Judea, el prefecto ecuestre Coponio, había recibido de Augusto una

⁶⁸⁶ Con todo lo que implicaba, cf. Sherwin-White, “*Coercitio...*” cit., pp. 2-4.

⁶⁸⁷ Garnsey, “*The criminal...*”, cit. p. 55.

delegación especial del poder de condenar a la pena de muerte⁶⁸⁸ —que, como bien ha visto Ravizza, ha de identificarse con un *ius gladii* aplicable tanto sobre sus soldados como sobre el resto de la población de la provincia (incluidos los ciudadanos romanos)— precisamente porque se trata de una categoría de gobernador que, por defecto, carecía de ese poder. En cambio, cuando la narración de Josefo llega al momento en que los gobernadores de Judea son procónsules, el autor no se detiene a hacer ninguna precisión en torno a sus poderes coercitivos, ya que le resultaban evidentes.

Pero comencemos por la República. Los testimonios que se han conservado sobre la represión criminal que los gobernadores republicanos podían ejercer sobre los ciudadanos residentes en su provincia son escasos, y básicamente se reducen a los que aporta Cicerón. Éste, en su primer discurso contra Verres, no deja de recordar, con indignación, que el acusado había crucificado a ciudadanos romanos, había hecho ejecutar con el hacha a un comerciante y a otro lo había condenado a trabajos forzados en las canteras⁶⁸⁹. Y sobre la condena de un *ciues* versa, además, una de las partes más famosas de su *oratio secunda*: el suplicio sufrido por Gavio de Consa⁶⁹⁰.

¿Pero qué es lo que Cicerón denuncia con tanto vigor: la condena a muerte de ciudadanos o la imposición de penas inapropiadas e infamantes a éstos? Garnsey sostuvo en su día que el hecho de que el Arpinate haga hincapié en la naturaleza de las penas (por ejemplo, la crucifixión, que estaba destinada a esclavos o individuos de condición humilde) y en la crueldad de Verres⁶⁹¹ indicaría que es la categoría del castigo y no el poder de aplicarlo lo que resulta contrario a la ley. Para el historiador británico, el caso de Publio Gavio resultaba muy elocuente: no dejó de declarar en todo momento que era ciudadano romano, pero siempre con la intención de escapar a la tortura que se le estaba infligiendo (azotes con varas) y la pena de la crucifixión a la que Verres le había condenado. Cicerón deja muy claro que el crimen de Verres radicó en que no quiso llamar al *eques* L. Recio, que podía certificar la condición jurídica del acusado, a pesar de que hallaba en Panormo, y, además, en que trató a Gavio como a un

⁶⁸⁸ Flav. Jos. *B.J.* II, 8, 1 (117); *Ant.* XVIII, 1, 1 (2).

⁶⁸⁹ Cic. 2 *Verr.* I, 7; 9 y 13-14.

⁶⁹⁰ 2 *Verr.* V, 161-169

⁶⁹¹ Cic 2 *Verr.* I, 9: *Non enim furem sed ereptorem, non adulterum sed expugnatorem pudicitiae, non sacrilegum sed hostem sacrorum religionumque, non sicarium sed crudelissimum carnificem ciuium sociorumque in vestrum iudicium adduximus...* Verres abusó de los poderes que legalmente tenía en virtud de su *imperium* también en la represión criminal.

esclavo, acusándolo falsariamente de ser un espía de los esclavos fugitivos⁶⁹². Era un castigo desproporcionado y deshonesto para un ciudadano⁶⁹³. Y Cicerón recalca:

*In crucem tu agere ausus es quemquam qui se ciuem Romanum esse diceret?*⁶⁹⁴

*...apud te nomen ciuitatis ne tantum quidem ualuisse ut dubitationem aliquam [crucis], ut crudelissimi taeterrimique supplicii aliquam paruam moram saltem posset adferre*⁶⁹⁵.

*...ille, quisquis erat, quem tu in crucem rapiebas, qui tibi esset ignotus, cum ciuem se Romanum esse diceret, apud te praetorem si non effugium, ne moram quidem mortis mentione atque usurpatione ciuitatis asequi potuit*⁶⁹⁶.

Sin embargo, a pesar de que en estos pasajes Cicerón se centra en el carácter vejatorio que tal pena tenía para un ciudadano romano, en contra de lo sostenido por Garnsey el Arpinate sí deja claro en las *Verrinas* que un gobernador provincial no podía bajo ningún concepto condenar legalmente a un ciudadano romano a muerte. En concreto, se trata de dos pasajes del libro primero de la *oratio secunda*:

*...— cum fana spoliarit, cum tot homines innocentis necarit, cum ciues Romanos morte, cruciatu, cruce adfecerit, cum praedonum duces accepta pecunia dimiserit—...*⁶⁹⁷

*Credent omnes V et XXX tribus homini grauissimo atque ornatissimo, M. Annio, qui se praesente ciuem Romanum securi percussus esse dixit; audietur a populo Romano uir primarius, eques Romanus, L. Flauius, qui suum familiarem Herennium, negotiatorem ex Africa, cum eum Syracusis amplius centum ciues Romani cognoscerent lacrimantesque defenderent, pro testimonio dixit securi esse percussus; probabit fidem et auctoritatem et religionem suam L. Suettius, homo omnibus ornamentis praeditus, qui iuratus apud uos dixit multos ciuis Romanos in lautumiis istius imperio crudelissime per uim morte esse multatos.*⁶⁹⁸

⁶⁹² 2 Verr. V, 161.

⁶⁹³ En cambio, el azote con varas sí se usaba para castigar a los peregrinos, como hizo Flaco con Atenágoras de Cime durante su proconsulado en Asia, cf. Cic. *Pro Flacco* 17.

⁶⁹⁴ 2 Verr. V, 163.

⁶⁹⁵ 2 Verr. V, 165.

⁶⁹⁶ 2 Verr. V, 166.

⁶⁹⁷ Cic. 2 Verr. I, 9.

⁶⁹⁸ 2 Verr. I, 14.

Cicerón no puede ser más explícito: en su enumeración de los crímenes de Verres en el primer fragmento no sólo menciona el asesinato de inocentes –tanto peregrinos como ciudadanos romanos residentes en la provincia–, sino que a continuación cita específicamente la condena a muerte de ciudadanos romanos (*ciues Romanos morte*). Asimismo, en el segundo pasaje su indignación es máxima cuando recuerda que, según el testimonio de dos ciudadanos romanos de rango ecuestre, dos *ciues*, uno de ellos mencionado por su *nomen*, Herennio –*negotiator* en África que con toda probabilidad era también un *eques*, ya que era familiar del testigo de estos hechos, L. Flavio, y era muy conocido por los otros *ciues* residentes en Sicilia (más de cien, según Cicerón), lo cual redundaría en su relevancia social– fueron condenados a muerte por Verres y ejecutados con el hacha; es decir, fueron decapitados. Y la decapitación, como el propio Garnsey explica en su clásica monografía sobre el tema, era la pena de muerte reservada a los ciudadanos romanos tanto durante la República como durante el Principado⁶⁹⁹. Por tanto, queda claro que lo que Cicerón critica es la condena a muerte de estos ciudadanos y no la forma de llevarla a cabo. Pero no hemos de olvidar que siempre se trata de *equites*.

Otra cuestión es que ese derecho que tenían los ciudadanos de ser enviados a Roma fuese respetado en todos los casos y que, si se trataba de ciudadanos de extracción humilde, no fuese tenido como una ilegalidad digna de mención. No cabe duda de el poder que tenían los gobernadores republicanos sobre todos aquellos que residían en su provincia era prácticamente absoluto. Cicerón lo expresó de forma muy viva en la extensa carta que escribió a su hermano Quinto para aconsejarle sobre qué conducta debía mantener en su segundo año al frente del gobierno de Asia. En concreto, comenta:

Quam iucunda tandem praetoris comitas in Asia potest esse! In qua tanta multitudo ciuium, tanta sociorum, tot urbes, tot ciuitates unius hominis nutum intuentur, ubi nullum auxilium est, nulla conquestio, nullus senatus, nulla contio: quare permagni hominis est et cum ipsa natura moderati, tum uero etiam doctrina atque optimarum

⁶⁹⁹ Garnsey, *Social Status*... cit.

*artium studiis eruditi sic se adhibere in tanta potestate, ut nulla alia potestas ab iis, quibus is praesit, desideretur*⁷⁰⁰.

Todos los ciudadanos, los aliados y las ciudades de la provincia estaban pendientes de la decisión de un solo hombre, el gobernador, contra el que no existía ninguna protección, excepto la propia contención de aquél. A diferencia de lo que sucedía en Roma, en las provincias no había tribunos de la plebe que pudiesen ejercer el *auxilium* en favor de los ciudadanos, y era impensable realizar una queja o lamentación ante otra instancia oficial. Todo lo decidía el gobernador, que poseía un poder casi autocrático al no existir ningún otro poder en la provincia que pudiese contener y contrapesar el suyo, papel que en la *Vrbs* representaban el Senado y el Pueblo dentro de la constitución mixta⁷⁰¹. En las provincias, *nullus Senatus, nulla contio*... Sólo se podía esperar de él, como de un monarca, que se comportase con moderación y no abusase de su poder.

Estos amplios poderes de los gobernadores republicanos conocieron también su reconocimiento legal, tal y como aparecen recogidos en un testimonio epigráfico de gran valor: la *lex de prouinciis praetoriis* del 100 a.C., en una de cuyas partes se expone lo siguiente en referencia a los pretores destinados al gobierno de Asia y Macedonia:

ἐὰν οὗτος ὁ στρατηγὸς ὦι τῆς Ἀσίας Μακεδονίας τε / ἐπαρχεῖα ἐγένετο τῆς ἀρχῆς
αὐτὸν ἀπείπη ἢ ἀπείπη-ται, ὥς ἐν ἐπιταγῇ ἐξουσία πάντων πραγμάτων ἐπιστροφὴν
τε ποιεῖσθαι κολάζειν δικαιοδοτεῖν / κρείνειν κριτὰς ξενοκρίτας διδόναι ἀναδοχῶν
κτημάτων τῶν ΤΕ[-]ΓΑΡΟΔΟΣΕΙΣ ἀπελευθερώσεις ὡσαύτως κα-/τὰ τὴν δικαιοδοσίαν ἔστω
καθὼς ἐν τῇ ἀρχῇ ὑπῆρ-/χεν οὗτος ὁ ἀνθύπατος ἕως τούτου ἕως ἄν / εἰς πόλιν
Ῥώμην ἐπανέλθῃ ἔστω.⁷⁰²

Su traducción latina sería:

Si is praetor, cui Asia Macedoniae prouincia obuenerit, a magistratu se abdicauerit, uti in mandatis omnium rerum potestas, animaduertere, coercere, ius dicere, iudicare, iudices, recuperatores dare, praedium praediorum <subsignationes>, manumissiones,

⁷⁰⁰ *Ad Q. fr.* I, 1, 22.

⁷⁰¹ Polib. VI,

⁷⁰² Copia de Cnido, col. IV, ll. 31-39. Seguimos la edición de Crawford, *Roman Statutes*... cit. p. 242.

*ita e iurisdictione, uti (ei) in magistratu erat, esto isque ??? usque eo quoad in urbem Romam redierit esto.*⁷⁰³

Esta cláusula de la ley pretende ser exhaustiva en la exposición de los poderes y funciones jurisdiccionales y coercitivos de los gobernadores tardo-republicanos. De las manumisiones y del registro de las tierras nos ocuparemos más adelante; ahora hemos de detenernos en el primer poder que se menciona, *κολάζειν*, que en la versión latina es traducido con dos términos: *animaduertere* y *coercere*⁷⁰⁴.

El verbo *κολάζω* significa, en su sentido primero, “castigar”⁷⁰⁵, y en este pasaje de la ley se utiliza para hacer referencia al poder coercitivo de los gobernadores de Asia y Macedonia. En el lenguaje jurídico romano, el poder de represión criminal del que gozaban los gobernadores desde la República se expresaba técnicamente a través de los conceptos de *animaduersio* y *coercitio*, que seguirán siendo usados por juristas de época antonina como Venuleyo Saturnino⁷⁰⁶ y severa (Papiniano y Ulpiano)⁷⁰⁷. Ambos términos son prácticamente sinónimos, pero mientras la *coercitio* suele ser usada más para referirse a los actos represivos que el magistrado realiza con el fin de hacer que su autoridad sea obedecida, así como su derecho a actuar contra todo acto de rebeldía contra su *imperium* (dentro de lo cual no sólo se halla la represión física, sino la imposición de una multa), la *animaduersio* se entiende como el derecho a aplicar castigos o medidas punitivas, capitales o no, como respuesta a acciones criminales⁷⁰⁸.

Ante estos poderes represivos sólo los *ciues* tenían ciertos derechos, entre éstos la *prouocatio*, pero no está claro si estaba vigente en las provincias ni si era respetada siempre en la propia Roma⁷⁰⁹. De todas formas, no se puede olvidar que durante la República eran pocos los ciudadanos romanos que residían en las provincias, lo cual significaba, en la práctica, que los gobernadores habrían de ocuparse, sobre todo, de causas criminales que implicaban a peregrinos. De esa minoría de *ciues*, el gobernador

⁷⁰³ Traducción latina en Crawford, *Roman Statutes...* cit. p. 251.

⁷⁰⁴ *Idem*, p. 266.

⁷⁰⁵ Cf. H.G. Liddell – R. Scott, *A Greek English Lexicon*, Oxford, 1968.

⁷⁰⁶ *Dig.* I, 16, 11.

⁷⁰⁷ Pap. *1 quaest.* (*Dig.* I, 21, 1, 1); Ulp. *1 de off. procos* (*Dig.* I, 16, 6, pr.) y *7 de off. procos.* (*Dig.* I, 18, 13, pr.)

⁷⁰⁸ Cf. ‘*Coërcitio*’ (s.v), *Diz. Giurid.* p. 106. *Coercitio*: Cic. *De leg.* III, 6; Suet. *Aug.* 45, 3; Pomp. *Dig.* I, 2, 2, 16 y Ulp. *Dig.* XLII, 8, 6, 8 (ambos a propósito de los poderes de los cónsules). *Animaduversio*: Gell. X, 8, 1.

⁷⁰⁹ Cf. Garnsey, “The *lex Iulia*...” cit. pp. 187-188; Sartori, “La repressione...”, cit. pp. 352-358.

se preocupaba sólo de los publicanos o *negotiatores* (en general, *equites*)⁷¹⁰ o de algún potentado provincial que hubiese sido premiado con la ciudadanía *ob honorem* y cuya renta le permitiera formar parte del censo ecuestre, como el gaditano L. Cornelio Balbo el Viejo⁷¹¹. En la inscripción de Cnido se enumeran los poderes de los pretores de manera general, sin puntualizar ninguna limitación, lo cual induce a pensar que la remisión a Roma de las causas de determinados personajes importantes de la provincia, ciudadanos o no, era una práctica sancionada por la costumbre y sujeta al arbitrio del gobernador. La realidad provincial trajo consigo la aparición de nuevos problemas administrativos y legales a los que Roma hubo de hacer frente adaptándose a la situación política y social de cada provincia, sobre todo cuando se consolidó su administración directa a partir del siglo I a.C. Dentro de esos problemas estaba la difícil conciliación entre el *ius prouocationis ad Populum* que tenía todo *ciuis* frente a los posibles abusos de los magistrados *cum imperio*, y la lejanía de la *Vrbs* de aquéllos que se hallasen en las provincias. Parece que desde un comienzo se optó por *laissez faire* a los gobernadores provinciales, y sólo las *leges repetundarum* les impusieron ciertos límites con el fin de controlar sus desmanes. Pero poco más. Salvo en casos de abusos desmedidos o de importantes enemistades políticas, los gobernadores, durante la República, escaparon a todo control de sus acciones. Los informes que debían enviar al Senado acerca de su gestión podían ser fácilmente manipulados⁷¹², así como la rendición de cuentas a que estaban obligados desde la *lex Iulia repetundarum* del 59 a.C.

Cuando Quinto Tulio Cicerón gobernó Asia en 60-59 a.C., ejerció sus poderes coercitivos de manera ilimitada tanto sobre peregrinos como sobre ciudadanos romanos⁷¹³. Estos actos preocupaban a Marco, que temía que el carácter atrabiliario de su hermano les pudiese acarrear problemas en Roma y, quizá, una nueva condena por abuso de poder. Sabía demasiado bien que ambos estaban en el punto de mira de determinados senadores adversarios y que cualquier desliz podía ser aprovechado contra ellos. Sin embargo, jamás lo censuró por haber hecho algo que no le competía, sino por sus formas.

⁷¹⁰ Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 6.

⁷¹¹ Tac. *Ann.* XII, 60.

⁷¹² N. Barrandon, "Les modalités des échanges épistolaires entre les gouverneurs et le Sénat de la deuxième guerre punique à 43 av. J.-C.", en *Administrer les provinces...* cit. pp. 77-98.

⁷¹³ Cic. *Ad Q. fr.* 1, 2, 5-6.

Con la instauración del Principado no se suprimió ninguno de los poderes que los gobernadores habían tenido durante la República. Al contrario; a pesar del establecimiento de un régimen autocrático, los gobernadores de rango senatorial no sólo no vieron mermados sus poderes coercitivos, sino que todo apunta a que a partir de Augusto poco a poco el poder central fue reconociendo tácitamente la capacidad de estos gobernadores para condenar a muerte a ciudadanos romanos, dado que se produjo un notable y progresivo aumento de la presencia de éstos en las provincias como consecuencia de la política de asentamiento de veteranos y miembros de la plebe urbana más humilde en colonias provinciales comenzada por César y continuada por los triunviros y, luego, por Augusto⁷¹⁴. Dión Casio recuerda que la reforma administrativa del 27 a.C. estableció que sólo los *legati Augusti pro praetore* tenían derecho a llevar la espada y vestir el *paludamentum*, y que sólo ellos podían condenar a muerte a sus soldados, cierto, pero sus palabras hay que ponerlas en relación con su época, donde había una clara distinción entre provincias sin presencia de legiones (las proconsulares), por un lado, y con presencia de legiones (las imperiales), por otro; distinción inexistente en época augustea. Hasta el principado de Calígula el procónsul de África tuvo el mando sobre una legión, la III Augusta⁷¹⁵, y, una vez que ningún procónsul tuvo legiones a su cargo, ello no implicó que perdiesen su *imperium* militar, sino que se bloquearon las posibilidades materiales de que lo desarrollaran en toda su amplitud⁷¹⁶. Por otra parte, Dión Casio cierra su descripción de los poderes de los gobernadores de rango senatorial diciendo:

ταῦτα μὲν οὕτω τότε περὶ τοὺς βουλευτὰς τοὺς γε καὶ θανατοῦν τοὺς ἀρχομένους ἐξουσίαν ἔχοντας ἐνομίσθη⁷¹⁷

Es decir: “Estas fueron las normas que se establecieron sobre los senadores que tenían la potestad de condenar a muerte a quienes estaban bajo su autoridad”, pasando a hablar inmediatamente después de los que no la tenían (en primer lugar, los cuestores

⁷¹⁴ Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, cit. p. 225. Un inmejorable ejemplo de la fundación de colonas en el período cesariano-triunviral es la *lex Coloniae Genetivae Iuliae Vrsionensis*

⁷¹⁵ M. Bénabou, “Proconsul et légat: le témoignage de Tacite”, *Antiquités Africaines* 6, 1972, pp. 129-136; Y. Le Bohec, *La troisième légion Auguste*, París, 1989, pp. 119-124.

⁷¹⁶ Hurlet, *Le proconsul...* cit. pp. 131-160.

⁷¹⁷ Dio LIII, 14, 5.

provinciales). Esto último, a pesar de la ambigüedad de la primera parte de la oración, parece dar a entender, sin embargo, que tanto los procónsules como los *legati Augusti pro praetore* podían condenar a muerte a los habitantes de su provincia, incluidos los ciudadanos romanos, y que, a mayores, los legados imperiales, dado el mando que tenían sobre una o varias legiones, contaban con el poder de vida o muerte sobre sus soldados (pues Dión obvia el caso del procónsul de África). Por tanto, contra la opinión de Jones, no parece que antes del siglo III existiesen diferencias entre los procónsules y los *legati Augusti pro praetore* en el grado, la extensión y el modo en que podían ejercer la represión criminal sobre los ciudadanos romanos. La única diferencia radicaba en la fuente de su *imperium*: los procónsules tenían uno propio, por ley, y los *legati Augusti* lo recibían del *princeps* por delegación.

Todo lo antedicho encaja perfectamente con la actuación de Galba en la Hispania Citerior, donde, como *legatus Augusti pro praetore*, no sólo podía sentenciar a muerte a sus soldados, sino también a ciudadanos romanos, como el envenenador que crucificó⁷¹⁸. Suetonio da noticia de este hecho para ofrecer un ejemplo de la extrema severidad de la que Galba hizo gala durante su gobierno, pero es muy elocuente que el condenado no apelara a Roma, sino simplemente mencionase su condición de ciudadano romano: no cuestionaba la legitimidad que Galba tenía para condenarle, sino la pena infamante, propia de esclavos, que le había impuesto, como había hecho P. Gavio con Verres más de un siglo antes. Por ello, el futuro emperador, con una sangre fría estremecedora, hizo que su cruz fuese más grande y llamativa, dada la ‘relevancia’ del condenado. Dejando a un lado su crueldad, la decisión de Galba de condenar al reo a una pena infamante puede explicarse como un castigo ejemplar para quien había cometido un crimen doble: había envenenando a la víctima porque quería beneficiarse de las disposiciones testamentarias que ésta había hecho en su favor, vulnerando, con ello, la *fides* y, por tanto, incurriendo en un delito infamante. Recuérdese que, como estipulaba la *lex Irnitana*, tales delitos sólo competían al gobernador, quien, además, lo juzgaría en persona a través de la *cognitio extra ordinem*, que le daba libertad para elegir la pena que considerase más apropiada. Lo cierto es que Galba, a diferencia de Verres, no fue perseguido por esta y otras sentencias similares, quizá porque la molicie

⁷¹⁸ Suet. *Galba* 9.

en la que cayó lo hizo pasar desapercibido, como quería, a ojos de Nerón y sus secuaces.

Esta acción de Galba parece entrar en contradicción con la medida que adoptó, cuando ya era emperador, en contra del *legatus Augusti pro praetore* de la Germania Inferior Fonteyo Capitón, quien había condenado a muerte a un ciudadano romano sin haber respetado la apelación al César que había hecho. Sin embargo, la acción de Capitón y la de Galba no son comparables. En el caso del primero, el ciudadano apeló y no fue escuchado; es más, Capitón le respondió que ante sí tenía al César. El condenado de Galba, en cambio, sólo mencionó que era ciudadano romano, lo cual comportaba una pena diferente, no la inmediata remisión a Roma.

Esto mismo sucede con el caso de San Pablo, que utilizó varias veces su condición de *ciuis Romanus* para ir escapando a la posibilidad de ser juzgado por tribunales ante los que no tendría ninguna posibilidad de salir bien parado. Así, en primer lugar, menciona su ciudadanía para evitar la tortura y los abusos físicos; el tribuno de Jerusalén, como no tenía potestad para juzgarlo, después de realizar una rápida investigación, lo envía al único que podía, el procurador imperial que gobernaba la provincia, Félix. En Cesarea, Félix decide recabar más información sobre el asunto y retiene bajo custodia a Pablo durante dos años, lo que provocará que el proceso sea reabierto por su sucesor, Festo. Sólo cuando el apóstol entiende que no va a recibir un juicio justo, apela al César como último recurso. Pablo será enviado a Roma, pero resulta muy interesante que Festo, en vez de aceptar automáticamente la *appellatio*, consulte primero a su *consilium*⁷¹⁹. Si la remisión a Roma fuese un derecho de todo ciudadano, Festo no tendría que haber tenido ninguna duda acerca de qué debía hacer. Este hecho parece indicar que los gobernadores tenían potestad para condenar a muerte a un ciudadano romano y que la admisión de una apelación al emperador dependía también de ellos.

Contra esto podría usarse la condena de los actos de Fonteyo Capitón, pero parece que éste fue castigado no tanto por no atender a una *appellatio*, sino por haber querido ocupar el lugar del César; es decir por un delito de *maiestas*⁷²⁰. Delito en el que, en nuestra opinión, Capitón no incurrió realmente, pues, como legado del emperador, en verdad actuaba en su nombre y bajo sus auspicios, y en ese sentido ha de entenderse la

⁷¹⁹ Act. Ap. 25, 9-12.

⁷²⁰ Tac. Hist. I, 7, 1, dice que acusaron a Capitón de un intento de sedición.

respuesta que dio al *ciuis*. Por otro lado, Dión Casio es el único que menciona este comportamiento de Fonteyo en la impartición de justicia. Tácito, en cambio, relaciona su caída en desgracia con las malas relaciones que mantenía con sus legados militares, que tuvieron su origen en que no se había dejado convencer por uno de ellos, Fabio Valente, cuando le había incitado a levantarse contra Galba. Para evitar que esto se supiese, Valente y los demás legados decidieron denunciarlo antes a Galba, que, movido por la desconfianza, habría actuado contra él con una severidad premeditada⁷²¹. La noticia que recoge Dión Casio procedería, pues, de una fuente que recogió una de las falsas denuncias de Valente y sus compañeros.

Llegados a este punto, es necesario remarcar que no se debe confundir la *prouocatio* con la *appellatio ad Caesarem*. En contra de lo que pensaba Jones, la segunda no es resultado de la evolución de la primera, sino un nuevo recurso nacido con el Principado⁷²². La *prouocatio* era un derecho que pertenecía exclusivamente a los ciudadanos romanos, nacido durante la República con el objetivo de protegerlos de los abusos de los magistrados en la aplicación de la *coercitio* de que les dotaba su *imperium*. En cambio, la *appellatio ad Caesarem* es un derecho que, por un lado, permitía recurrir ante el emperador sentencias judiciales que se consideraban injustas⁷²³, y, por otro, la posibilidad de ser remitido a Roma para ser juzgado por el emperador. Esta tercera posibilidad ha sido planteada recientemente por M. Ravizza, quien se refiere a ella como la ‘apelación no técnica’, puesto que se daba cuando el acusado solicitaba que su causa fuese vista por el *princeps* antes de que comenzase el proceso. Así es como esta autora interpreta, siguiendo a varios autores, las palabras de Dión Casio referentes al poder de avocar cualquier causa civil y criminal a su tribunal concedido a Octaviano en 30 a.C⁷²⁴. Esta explicación aclara muchos pasajes y obliga a diferenciar entre apelaciones contra sentencias y apelaciones entendidas como solicitudes de remisión del caso al emperador. Dentro de estas últimas se hallarían los casos de Pablo de Tarso y del ciudadano ejecutado por Capitón. Cuando se trataba de un

⁷²¹ Tac. *Hist.* I, 7; III, 62, 2. Suet. *Galba* 11, 2, sin embargo, acepta la versión de que Capitón, como otros gobernadores, estaba conspirando contra Galba.

⁷²² G. Pugliese, *Appunti sui limiti dell'imperium nella repressione penale. A proposito della Ilex Iulia de bi publica*, Turín, 1939, pp. 66-67 y 77-78, aunque admite que acabaron confundándose; Santalucia, *Diritto e processo...* cit. p. 101.

⁷²³ Fanizza, *L'amministrazione...* cit. pp. 9-60, quien argumenta con precisión la diferencia existente entre *prouocare* y *appellare*, relacionando la apelación al César con la antigua *appellatio* a los tribunos de la plebe; Ravizza, “*Kaisara epikaloumai...*”, cit. p. 116.

⁷²⁴ Dio LI, 19, 6-7. Ravizza, “*Kaisara epikalouma...*” cit. pp. 127-131.

ciudadano romano medio, como el propio San Pablo, el gobernador tenía que decidir si convenía o no enviarlo ante el emperador, con el fin de no sobrecargarlo de trabajo⁷²⁵.

Así pues Garnsey se equivoca cuando entiende que la apelación se dio siempre *a posteriori* de las sentencias. Igualmente es errónea su idea de que la apelación había dejado de estar vigente después del siglo I d.C. Garnsey se basaba en la inexistencia de testimonios que lo probasen; sin embargo, en el *P. Oxy.* XVII 2104 se recoge un edicto de Severo Alejandro del 222 en el que, en respuesta a una reclamación del *koinon* de los helenos de Bitinia, prohíbe a los procuradores y gobernadores provinciales de todo el Imperio valerse de insultos, violencia o guardias armadas con el fin de impedir que los provinciales apelasen al emperador, remarcando que la libertad de sus súbditos era tan importante como la obediencia de los gobernadores y subordinados⁷²⁶.

La apelación (en este caso, la previa al inicio del proceso) seguía funcionando aún en el siglo III. Nótese, sin embargo, que el *koinon* de los helenos de Bitinia, como los *concilia* provinciales del Occidente, no representaban los intereses de toda la población, sino los de las élites. Desde Adriano, los sectores privilegiados (senadores, *equites*, decuriones municipales y centuriones) fueron protegidos por el poder imperial, quedando exentos de la pena capital (en su lugar, eran castigados, como mucho, a la deportación⁷²⁷). Bajo los Severos, además, toda condena de un miembro de estos grupos privilegiados por parte del gobernador debía ser confirmada por el emperador antes de ser ejecutada. Las únicas apelaciones tenidas en consideración eran las de los grupos privilegiados.

A todo esto hay que añadir que justamente los dos únicos casos que conocemos en los que el emperador castigó o reprendió a gobernadores por no haber respetado la apelación realizada por ciudadanos romanos se dieron en momentos en los que la posición de quien ocupaba el trono imperial era muy delicada. En efecto, Galba, que acababa de llegar al trono imperial y era el primer emperador que no pertenecía a la dinastía Julio-Claudia, no podía permitirse faltas de autoridad en un momento convulso como el del 68. En cuanto a Severo Alejandro, también era un recién llegado al poder en

⁷²⁵ Garnsey, *Social Status...* cit. pp. 75-76, opina que la relevancia social de Pablo y su influencia social, además de su ciudadanía, hicieron que Festo se decantara por enviarlo a Roma, con el fin de evitar ulteriores desórdenes en la provincia.

⁷²⁶ Oliver, *Greek Constitutions...* cit. n° 276. Este papiro, según Oliver, formaría parte de los archivos del Prefecto de Egipto.

⁷²⁷ La deportación se comenzó a usar en el siglo II d.C., Garnsey, *Social Status...* cit. pp. 115-118.

222, después de que su primo Heliogábalo hubiese sido derrocado y asesinado por haber generado una situación de desgobierno. Ambos, pues, necesitaban demostrar firmeza y no tolerar ninguna muestra de desafección a su persona.

Otro caso muy usado para negar el poder de represión criminal de los gobernadores sobre los *ciues* es el de Mario Prisco, y resulta interesante que repasemos las imputaciones que se le hicieron, tal y como las recuerda Plinio. En 100 d.C., este senador, procónsul de Africa en 97/98, fue juzgado en el Senado por el cargo de extorsión sobre los provinciales (*repetundae*). Plinio el Joven y Tácito dirigieron la acusación en representación de los africanos⁷²⁸. La causa cobró mayor importancia cuando acusaron a Prisco de haber recibido sumas de dinero por la condena de inocentes (2-3), lo que introducía también el cargo *de ui publica*. Se llamó a dos testigos, uno acusado de haber comprado el destierro de un caballero romano y la muerte de siete amigos suyos, y el otro de haber sobornado al gobernador para que otro *eques* fuese torturado, condenado a minas y finalmente estrangulado (8-9). El debate senatorial en torno al juicio duró tres días, y desde la segunda sesión fue presidido por el emperador Trajano en calidad de cónsul, dada la magnitud del caso: Prisco estaba acusado de haber violado los privilegios legales de *equites*, condenándolos a penas capitales que correspondían a las capas más bajas de la población (e incluso a esclavos), y había utilizado su poder con brutalidad y por codicia.

De nuevo, no se cuestiona el poder coercitivo del gobernador, sino que hubiese elegido penas inapropiadas para los *equites* condenados y, además, que hubiese aceptado sobornos que condicionaron sus sentencias. Los provinciales que sobornaron a Prisco, al igual que él mismo, parecen conocer con seguridad hasta dónde podía llegar el gobernador en la aplicación de sus poderes coercitivos. De no haber podido condenar a muerte y ejecutar legalmente a ciudadanos romanos, ni los sobornadores, ni el propio Prisco habrían actuado de tal manera, sobre todo con *equites*. En cambio, casi sesenta años después, resultó absolutamente natural que el proceso por magia incoado contra Apuleyo –que éste, recordemos, califica como un proceso capital⁷²⁹– fuese presidido por el procónsul de África, Claudio Máximo. Si Apuleyo hubiese sido hallado culpable, el procónsul lo podría haber condenado legalmente a muerte, a pesar de ser ciudadano romano. Entonces le quedaría la posibilidad de apelar al emperador, recurso que en su

⁷²⁸ *Ep.* II, 11.

⁷²⁹ *Apul. Apol.* 26, 9: *Enimuero qui magum qualem isti dicunt in discrimen capitis deducit...*

caso probablemente hubiera sido admitido dado que era un *eques* y bajo Antonino Pío estarían plenamente vigentes las leyes adrianeas que protegían a los grupos privilegiados. Además, su aparentemente buena relación con Claudio Máximo habría facilitado las cosas, como lo hizo durante el proceso.

Asimismo, el propio desarrollo de la política de protección de los grupos privilegiados frente a los abusos de los magistrados que se produjo desde Adriano prueba que durante el siglo anterior ni siquiera éstos escaparon en ocasiones a la jurisdicción criminal y el poder represivo de los gobernadores en las provincias. De hecho, el jurista Venuleyo Saturnino menciona, a propósito del poder coercitivo de los procónsules, un *mandatum* de Adriano en el que prohibía que se infligiese la pena capital a los decuriones municipales⁷³⁰. Si hubiesen sido inmunes en tanto que ciudadanos romanos, no tendría sentido esa política imperial.

Finalmente, hemos de referirnos al proceso incoado contra los llamados mártires de Lyon, que fue visto por el *legatus Augusti pro praetore* de la Galia Lugdunense, en 177, bajo el principado de Marco Aurelio. En su extensa narración, Eusebio de Cesarea cuenta que entre los encausados se encontraban ciudadanos romanos que, como tales, recibieron un trato mejor. Por ejemplo, uno de ellos, Vetio Epágato, pidió ser escuchado por el gobernador y se le concedió⁷³¹. Otro,⁷³² Atalo de Pérgamo, en el momento que llegó a conocimiento del gobernador que era ciudadano romano, fue sacado de la arena del anfiteatro al que habían sido llevados los cristianos que no eran ciudadanos para ser entregados a las bestias y se le condujo a los calabozos con los otros *ciues*. El gobernador había decidido escribir al emperador Marco Aurelio antes de tomar una decisión definitiva⁷³³. La respuesta de éste en su rescripto fue similar a la de Trajano a Plinio: perdonar a quienes renegasen de sus ideas y condenar a la pena capital a los que persistiesen. Sabido esto, el gobernador volvió a convocar a su tribunal a los

⁷³⁰ Ven. Sat. 1 *de off. procos* (D. XLVIII, 19, 15).

⁷³¹ Eus. *H.E.* V, 1, 9.

⁷³² Su nombre es muy sospechoso (el nombre de Atalo de Pérgamo resulta demasiado tópico si pensamos en la dinastía que reinó allí hasta el 133, y poco apropiado para un ciudadano romano, a no ser que sólo se esté mencionando su *cognomen*) e invita a pensar que se trata de una invención de Eusebio. De todas formas, aunque así fuese, ello no invalidaría la noticia general que da acerca del transcurso de un proceso extraordinario y los poderes del gobernador.

⁷³³ *H.E.* V, 1, 43-44.

cristianos y les comunicó su sentencia: de entre los culpables, los ciudadanos romanos debían ser decapitados, mientras que los demás serían condenados *ad bestias*⁷³⁴.

El hecho de que, al igual que Plinio el Joven cuando fue gobernador de Bitinia, el *legatus Augusti pro praetore* de la Galia Lugdunense recurriese al emperador cuando tuvo que juzgar a cristianos que eran *ciues Romani*, no significa que ambos no tuviesen potestad para juzgarlos y condenarlos a muerte. Plinio los envía a Roma porque es la primera vez que se enfrenta a un juicio de este tipo y no sabe qué hacer⁷³⁵. No se trata, por tanto, de una acción mecánica, sino espontánea. En casos complejos que podían desestabilizar el orden de la provincia, los gobernadores podían optar por derivarlos a Roma⁷³⁶.

Por su parte, el gobernador de la Lugdunense, seguramente con más experiencia en la presidencia de procesos criminales, no duda de sus poderes, pero prefiere tener una confirmación de Marco Aurelio en su elección de la pena, dado el revuelo que el proceso había producido en la provincia, como dejan entrever la presencia de un gran número de espectadores y los insultos que la muchedumbre no dejaba de proferir contra los cristianos durante sus declaraciones. Asimismo, el legado demuestra en todo momento un gran escrúpulo procesal –que Eusebio, que pretende ensalzar el martirio, ve negativamente– llamando ante su tribunal a los encausados para pronunciar en público su sentencia, sin duda tras haber leído la respuesta del emperador que otorgaba a su autoridad un gran respaldo.

Las causas de los cristianos no eran las únicas que podían llenar de dudas al gobernador. Al igual que el legado imperial de la Lugdunense, el gobernador Escápula Tertio –como vimos más arriba– escribió a Marco Aurelio y Lucio Vero en torno a la pena que debía imponerse sobre un ciudadano, Elio Prisco, que había asesinado a su madre en plena enajenación mental. En el rescripto de los emperadores es evidente que ni ellos ni el gobernador dudan acerca del poder que tenía éste para imponer la pena capital al ciudadano. La duda radica en qué hacer con Prisco si en verdad está loco (*furiosus*), sin duda porque Escápula jamás se había visto ante un caso de este tipo, que, a pesar de entrar dentro de la categoría del *parricidium* –contemplada en las *leges publicae*–, implicaba un elemento extraordinario como era la locura que anulaba el

⁷³⁴ H.E. V, 1, 47.

⁷³⁵ Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 695.

⁷³⁶ Véase los casos recogidos en el II y IV edictos de Cirene, fechados en 7/6 a.C., Oliver, *Greek Constitutions...* cit. nº 6 y 9.

juicio del asesino. Marco Aurelio y Lucio Vero se limitan a aconsejarle que, de ser cierta su locura, bastante castigo conllevaba la misma y, por tanto, que la pena se limitase a una reclusión vigilada. La consulta del gobernador fue muy pertinente, pues los propios emperadores le piden que continúe investigando para esclarecer los hechos y ver si están implicados (con alevosía o por negligencia) quienes debían vigilar al encausado y si éste había cometido el crimen en un momento de lucidez momentánea o no. Si se había producido esto último, el gobernador debía escribir nuevamente a los emperadores, pero no porque no tuviese capacidad para condenarlo él mismo, sino porque esta causa podía sentar un precedente, dado que se debía estimar si debía ser condenado a la pena capital como un ciudadano normal o tenerse en cuenta su locura como atenuante⁷³⁷. El hecho de que Ulpiano aludiese a este rescripto en su tratado *de officio proconsulis* y Marciano lo recogiese en su totalidad muestra hasta qué punto este caso fue tenido como un referente en la literatura jurisprudencial⁷³⁸.

Hemos de dedicar un último punto al sistema de penas existente en el proceso extraordinario. La discrecionalidad inherente a la *cognitio extra ordinem* comporta la inexistencia de unas penas fijas, tipificadas en la ley, como en los procesos formularios. En la *cognitio*, el gobernador tiene libertad decisoria en el tipo de pena que se debía aplicar sobre el reo hallado culpable. Según cuenta Suetonio, el futuro emperador Galba, durante los ocho años que fue *legatus Augusti pro praetore* de la Hispania Citerior, se comportó de manera excesivamente severa y cruel en la punición de algunos delitos. En relación a un delito pecuniario como los que se mencionan en la *lex Irnitana*, mandó cortar las manos a un cambista que ejercía de manera fraudulenta su oficio, contrariamente a las obligaciones de la *fides* que debía sancionar los acuerdos⁷³⁹. Como deja entrever Suetonio en sus palabras, este tipo de resoluciones no eran habituales, pero la acción de Galba revela la capacidad punitiva y la discrecionalidad de que gozaban los gobernadores no sólo en la represión de los crímenes capitales sino también en los delitos pecuniarios.

⁷³⁷ Dig. I, 18, 14 (Marcian. 2 de iud. publ.).

⁷³⁸ Dig. I, 18, 13, 1 (Ulp. 7 de off. procos.). Cita de Marciano *vd. supra*.

⁷³⁹ Suet. Galba 9,1: *Per octo annos varie et inaequaliter provinciam rexit, primo acer et vehemens et in coercendis quidem delictis uel immodicus. Nam et nummulario non ex fide uersanti pecunias manus amputauit mensaeque eius adfixit.*

Sin embargo, a pesar de esta discrecionalidad que a veces traía consecuencias brutales, existían límites derivados del *status* jurídico y social del individuo⁷⁴⁰. El sistema penal romano no era igualitario, sino que tenía en consideración la categoría social de los encausados⁷⁴¹. Por ello sus defensores se remiten constantemente al abolengo de su familia y a su *dignitas* cuando se trata de aristócratas⁷⁴². Siguiendo a Santalucia⁷⁴³, podemos individuar las siguientes penas, de mayor a menor gravedad:

En primer lugar, la pena de muerte –sustituida a fines de la República por la *interdictio aqua et igni*, al menos en lo que respectaba a los grupos privilegiados– volvió a implantarse con la reforma judicial augustea. La decapitación por espada fue, a partir de entonces, la forma de ejecución capital que se usó con los ciudadanos romanos y de ahí procede la expresión *iudicium capitis* o *poena capitalis*⁷⁴⁴. Como se ha dicho reiteradamente, los grupos privilegiados gozarán de una protección especial por parte del poder imperial, notablemente desde Adriano, que instituyó de manera definitiva que la pena más grave que se podía aplicar sobre un senador, *eques*, decurión municipal o un veterano del ejército era la deportación o la relegación⁷⁴⁵. De todas formas, estos privilegios comenzaron antes.

Conocemos un gobernador de Hispania que aplicó la pena de la *relegatio* gracias a Plinio el Joven, que nos informa en una carta que a finales del principado de Domiciano el procónsul de la Bética Cecilio Clásico condenó a un notable local, Norbano Liciniano, a la *relegatio*, aunque no revela los cargos de los que se le halló culpable⁷⁴⁶. Asimismo, el propio Plinio se encontró en Bitinia con que algunos condenados a una *relegatio* de tres años por el procónsul Servilio Calvo no habían cumplido su pena y ni siquiera habían abandonado la provincia. Aunque estos hombres le explicaron a Plinio que el propio Calvo los había indultado y le leyeron el edicto de éste que lo probaba, aquél le pide consejo a Trajano, puesto que en sus *mandata* venía

⁷⁴⁰ Véanse las conclusiones de Garnsey, *Social Status*... cit. pp.277-280.

⁷⁴¹ Cic. *De rep.* I, 43: *tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habet nullos gradus dignitatis*.

⁷⁴² Véase, por ejemplo, el panegírico que Cicerón hace de Lucio Flaco y la gens Valeria a la que pertenecía, ya desde el exordio: *Pro Flacco* 1. Sobre el “vocabulario del privilegio”: Garnsey, *Social Status*... cit. pp. 222-233.

⁷⁴³ Santalucia, *Diritto e processo*...cit. pp. 114-117.

⁷⁴⁴ D. XLVIII, 19, 8, 1 (Ulp. 9 de off. procos.).

⁷⁴⁵ Garnsey, *Social Status*... cit., p. 107 y pp. 154-172. Según Santalucia, *Diritto e processo*... cit. pp. 116-117, la *deportatio* era perpetua y la *relegatio*, temporal, pero vemos que Plinio se refiere a una *relegatio perpetua*. Un ejemplo de senadores condenados al destierro por decisión del emperador en Tac. *Ann.* XV, 71.

⁷⁴⁶ *Ep.* III, 9, 31.

especificado que no tomase ninguna decisión en torno a condenas al destierro. También le consulta el caso de un relegado a perpetuidad por otro procónsul, Julio Baso, cuyos actos fueron anulados por el Senado. El condenado no había cumplido su pena, pero tampoco había recurrido la sentencia de Baso en los dos años siguientes, tal y como había dictaminado el Senado que se procediese con aquellos condenados por ese procónsul⁷⁴⁷. Mientras que Trajano decide meditar –seguramente con su *consilium*– el caso de los primeros relegados, no duda en imponer un castigo ejemplar al condenado a una *relegatio perpetua*, indicándole a Plinio que lo enviase encadenado a Roma⁷⁴⁸. A tenor de lo que dice Ulpiano, en el siglo III (aunque quizá desde época de Adriano) les fue prohibido a los gobernadores condenar a una *relegatio perpetua*⁷⁴⁹.

En la otra cara de la moneda, los grupos más humildes y los esclavos, si habían cometido un crimen de especial gravedad, podían ser castigados con los denominados *summa supplicia*⁷⁵⁰: la crucifixión (*damnatio in crucem*), ser devorados por las fieras en el anfiteatro (*damnatio ad bestias*) o, incluso, quemados vivos (*uiui crematio*).

En un segundo nivel se hallaban las penas que no conllevaban la muerte inmediata del condenado, pero sí la supresión de su libertad y de sus derechos, y podían acabar, con el tiempo, con su vida. Se trata, principalmente, de la condena a trabajos forzados en minas (*damnatio ad metalla*)⁷⁵¹ o en obras públicas en general (*damnatio in opus publicum*)⁷⁵². Nuevamente, un ejemplo de estas penas impuestas por procónsules lo tenemos en Plinio el Joven, quien se encontró con que en algunas ciudades de Bitinia, sobre todo Nicomedia y Nicea, antiguos condenados a trabajos forzados o al anfiteatro (*in opus damnati uel ludum*), desempeñaban trabajos propios de esclavos públicos, siendo muchos de ellos ya ancianos. Habiendo indagado sobre el asunto, Plinio parece creer la versión que le han dado de que fueron procónsules anteriores quienes los liberaron de sus penas, pero quiere que Trajano le clarifique qué debe hacer. El emperador es tajante y exige que las cumplan, aunque acepta que sean más leves las de aquellos que fuesen ancianos⁷⁵³. Problemas con el incumplimiento de penas se darían en todas las provincias, aunque parece que Bitinia había sufrido un notorio desgobierno,

⁷⁴⁷ Plin. *Ep.* X, 56-57.

⁷⁴⁸ *Ep.* X, 57, 2.

⁷⁴⁹ *Dig.* XLVIII, 22, 7, 10.

⁷⁵⁰ *Dig.* XLVIII, 19, 28, *pr.*

⁷⁵¹ *Dig.* XLVIII, 19, 8, 4-6.

⁷⁵² *Dig.* XLVIII, 19, 34, *pr.*

⁷⁵³ Plin. *Ep.* X, 30-31.

como indican las palabras de Trajano en X, 32, 1 o la condena antedicha de los actos del procónsul Julio Baso⁷⁵⁴.

Asimismo, existían una serie de castigos corporales, como el azote con varas o la flagelación. La primera (*fustium ictus*) estaba reservada a los grupos privilegiados (conocidos, con el tiempo, con el nombre de *honestiores*); la segunda (*flagellorum ictus*), a los humildes y esclavos, pues era considerada una pena infamante⁷⁵⁵. Las penas más leves se reducían a multas pecuniarias o a la limitación de determinados derechos; en el caso de los grupos privilegiados, el veto a desempeñar cargo públicos.

Complementariamente a las penas antedichas podía ser impuesta una confiscación total o parcial del patrimonio al condenado⁷⁵⁶. En Roma esta medida fue habitual en los casos de los senadores condenados por *maiestas*, dado que se les consideraba enemigos del Estado, o de *repetundae*, como compensación por sus exacciones ilícitas que hubiesen realizado en la provincia que habían gobernado⁷⁵⁷.

Conclusiones

Durante el Principado los gobernadores de las provincias hispanas –al igual que el resto de gobernadores de rango senatorial– monopolizaron la jurisdicción criminal provincial, dado que eran los únicos que poseían *imperium*. En el ejercicio de esta jurisdicción hubieron de atender una amplia casuística, desde los crímenes tipificados en las *leges publicae* (*maiestas*, *peculatus*, *ueneficium*, *homicidium*, *plagium*...) hasta los extraordinarios –entre los que sobresalió la variante del *crimen maiestatis* protagonizada por los cristianos–, siempre a través del procedimiento de la *cognitio extra ordinem*, que los dotaba de una amplia discrecionalidad en la dirección del proceso –de carácter inquisitorio– y en la elección de las penas.

Este último aspecto está íntimamente relacionado con el problema de la extensión del llamado *ius gladii* de los gobernadores, esto es su poder de vida y muerte

⁷⁵⁴ *Ep.* X, 56, 4-5.

⁷⁵⁵ *Dig.* XLVIII, 19, 6, 2.

⁷⁵⁶ Por ejemplo, en relación al *peculatus*: Ulp. 1 *de adult.* (= *Dig.* XLVIII, 13, 3).

⁷⁵⁷ Recuérdese que ya en la República aquel que era declarado *hostis publicus* perdía la ciudadanía, los derechos inherentes a ésta y sus propiedades. Un caso paradigmático de senador al que se le arrebató parte de su patrimonio fue el de Estatilio Tauro, quien, a instigación de Agripina (que deseaba poseer sus jardines), fue acusado en 53 d.C. de haber incurrido, durante su proconsulado en África, en los crímenes de *repetundae* y magia. Cf. Tac. *Ann.* XII, 59.

sobre los habitantes de su provincia. Los *peregrini* estaban sometidos al poder absoluto de los gobernadores, pero existen dudas acerca de la capacidad de éstos para condenar a penas capitales a los ciudadanos romanos. En nuestra opinión, no existe una solución definitiva a esta incógnita, pero nos inclinamos por la hipótesis de que tanto los *legati Augusti pro praetore* como los procónsules tenían poder legal para condenar a una pena capital a *ciues* provinciales y que el derecho de apelar al emperador sólo era respetado en los casos de aquéllos que pertenecían a los grupos privilegiados de la sociedad provincial –esto es, los senadores, *equites* y miembros de los senados municipales–, aunque no de manera sistemática, como prueban las leyes imperiales que a partir de Adriano buscaron reforzar su protección frente a los poderes de los gobernadores. El incremento constante de ciudadanos romanos en las provincias –gracias al servicio militar y al expediente de los municipios latinos, fundamentalmente– no haría sino confirmar la necesidad de que sus gobernadores tuviesen un poder coercitivo pleno sobre toda la población, puesto que la remisión a Roma de todos los *ciues* sería imposible en la práctica.

Los gobernadores de Hispania gozaron, por tanto, de un gran poder coercitivo en el ámbito de la jurisdicción criminal. El hecho de que durante el siglo II aumentase la frecuencia con la que consultaban al emperador acerca de las causas penales dudosas o novedosas y, en particular, acerca la idoneidad de sus sentencias no indica, a nuestro juicio, una merma de su capacidad de acción y de resolución, sino que constante el desarrollo de los instrumentos administrativos a los que los gobernadores podían recurrir y la consolidación del sistema de gobierno centro-periferia cada vez más complejo pero que ya fue ensayado desde época de Augusto.

No cabe duda de que el régimen del Principado evolucionó siempre hacia una mayor concentración de poder en manos del emperador y, por tanto, hacia la subordinación de todos los gobernadores a éste. Pero esa subordinación no supuso que los gobernadores asumiesen menos responsabilidades ni competencias en su gobierno, sino a que estableciesen una conexión más frecuente y fluida con el poder central y a que reclamasen de forma natural el refrendo imperial a sus sentencias cuando se tratase de casos poco claros o que podían conllevar desórdenes en la provincia. A nuestro juicio, la relación epistolar fluida entre gobernadores y emperadores no es síntoma de la decadencia de los primeros, sino de la confianza que el poder central depositaba en

ellos, siendo uno de los pilares maestros de la administración del imperio y de su sistema penal.

CAPÍTULO 5: LOS GOBERNADORES Y EL EJÉRCITO ESTACIONADO EN

HISPANIA: OFFICIUM Y PODER MILITAR.

Un elemento directamente vinculado al poder coercitivo del gobernador provincial es el ejército. En virtud de su *imperium*, los gobernadores de rango senatorial tenían el mando supremo sobre las legiones o destacamentos militares acuartelados en su provincia, y sólo eran superados en la escala jerárquica militar por el mismo emperador o, en circunstancias puntuales, por miembros de la familia imperial que hubiesen recibido poderes extraordinarios a nivel supraprovincial, a veces como resultado de su asociación al trono⁷⁵⁸. Como hemos repetido anteriormente, la subordinación de los legados imperiales era evidente *de iure*, pues habían recibido el *imperium* del propio *princeps* por delegación y actuaban bajo sus auspicios. Los procónsules, en cambio, tenían un *imperium* y unos auspicios propios; no obstante, su subordinación efectiva al *princeps* comenzó desde los mismos inicios del Principado pues, como cuenta Dión Casio, en el 23 a.C. le fue concedido a Augusto “un poder superior al de quienes gobernaban todas las provincias”⁷⁵⁹, afirmación que ha de ser interpretada, tal y como ha expuesto J.-L. Ferrary en su magistral artículo acerca de los poderes de Augusto, como una alusión al *imperium* superior que Augusto tenía respecto al de los procónsules que le permitía, si se hallaba en sus provincias, tomar decisiones acerca de ellas que debían ser acatadas por los procónsules. Ahora bien, en origen ese *imperium maius* no dotó a Augusto de la capacidad de intervenir en las provincias proconsulares desde Roma, como pensaba Mommsen, sino que tal cosa se forjará paulatinamente como resultado del progresivo fortalecimiento del poder imperial⁷⁶⁰.

⁷⁵⁸ F. Hurlet, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère*, Roma, 1997.

⁷⁵⁹ Dio LIII, 32, 5.

⁷⁶⁰ Ferrary, “À propos des pouvoirs...” cit. pp. 130-137; Mommsen, *DPR*, cit. V, pp. 128 y 395; Hurlet, *Le proconsul...* cit. pp. 187-195; Dalla Rosa, *Cura et tutela...* cit. pp. 121-131, donde examina los primeros indicios de la intervención de Augusto en las provincias proconsulares. Sobre el Edicto de *Kyme*

A pesar de que Dión Casio atribuye al *princeps* el mando sobre todas las provincias con legiones desde la reparto del 27 a.C., sabemos que durante el principado de Augusto siguieron teniendo una legión a su mando los procónsules de Macedonia, Iliria y África, y que ello provocó cierta inquietud en el *princeps*. Sabedor de la relevancia que tenía la *uirtus* en la política romana y de su poca pericia como general, Augusto, a inicios de su principado, vio con recelo los éxitos militares de los procónsules, pues algunos de ellos siguieron celebrando triunfos hasta el 19 a.C. e incluso un procónsul de Macedonia, Marco Licinio Craso, se atrevió a reclamar el derecho a depositar los *spolia opima* en el templo de Júpiter Feretrio, aunque sin éxito. Pronto, sin embargo, el *princeps* logró hacerse también con el “monopolio de la victoria”. El último procónsul que tendrá una legión a su cargo será el de África, hasta que en el 39 d.C. Calígula transfirió el control de la legión III Augusta a un legado imperial. A partir de entonces ningún procónsul volvió a tener una legión a su cargo, aunque jamás perdieron el poder militar de que les dotaba su *imperium*, por lo demás indivisible, sino sólo la posibilidad material de ejercerlo en su totalidad⁷⁶¹. Sin embargo, como ha mostrado W. Eck, los diplomas militares hallados en provincias proconsulares prueban que sus gobernadores sí tuvieron, al menos, una o dos unidades militares menores a su mando⁷⁶². En la Bética sabemos que el procónsul contaba al menos con una cohorte: en la carta en que describe el proceso contra Cecilio Clásico, Plinio el Joven dice que uno de sus colaboradores encausados, Estilonio Prisco, ejerció el cargo de *tribunus cohortis* durante su proconsulado (97/98 d.C.)⁷⁶³. Asimismo, es posible que la *cohors III Gallorum* mencionada en un epígrafe fragmentario de Itálica hubiese estado al servicio del procónsul de la Bética⁷⁶⁴.

Hispania fue ajena a estos problemas. Entre el 27 y el 16-13 a.C. toda ella dependió directamente del *princeps*, que gobernó sus provincias a través de legados y, tras su reorganización definitiva, el único gobernador que tuvo legiones a su mando fue el *legatus Augusti pro praetore* de la Hispania Citerior. Tras el fin de las Guerras Astur-

véase también: N. Charbonnel, “À propos de l’inscription de Kymé et des pouvoirs d’Auguste dans les provinces au lendemain du règlement de 27 av. n. è.”, *RIDA* 26, 1979, pp. 177-225.

⁷⁶¹ Hurlet, *Le proconsul...* cit. pp. 131-195.

⁷⁶² W. Eck, “Prokonsul und militärisches Kommando. Folgerungen aus Diplomen für prokonsulare Provinzen”, en W. Eck – H. Wolff (ed.) *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Colonia-Viena, 1986, pp. 518-534.

⁷⁶³ Plin. *Ep.* III, 9, 18.

⁷⁶⁴ *CIL* II, 1127; Eck, “Prokonsul...” cit. p. 533.

Cántabras, las provincias hispanas fueron durante el resto del Principado *prouvinciae pacatae*, y su *quietas* sólo se vio alterada por las guerras civiles del 68-69 y del 193-197 y por las dos invasiones de los *Mauri* en época de Marco Aurelio. Esto provocó que las legiones asentadas en la Citerior, a diferencia de las destinadas en los *limes* renano y danubiano o en Britania, no tuviesen la misión constante de extender o defender la fronteras contra enemigos exteriores, sino que se dedicaron a colaborar en el mantenimiento del orden interno, asumiendo, además, otras funciones vinculadas al desarrollo provincial, como la construcción de infraestructuras o la realización del censo en las regiones subdesarrolladas y, por supuesto, aportando personal para el *officium* de los gobernadores de las provincias hispanas.

De la intervención del ejército en las obras públicas o el censo siguiendo las órdenes de los gobernadores hablaremos en los siguientes capítulos. Ahora nos interesa abordar, por un lado, la relevancia que el personal militar tuvo en tiempo de paz en las actividades administrativas generales del gobernador como parte de su *officium* y, por otro, la vertiente militar del poder del gobernador. En lo que respecta a esto último, a pesar de que el ejército romano de Hispania fue, en general, una “*armée de la paix*”, sobre todo desde época flavia⁷⁶⁵, los conflictos bélicos antedichos que afectaron a la península nos ofrecen la posibilidad de analizar la actividad militar de los gobernadores en Hispania en todas circunstancias posibles: la conquista de un territorio⁷⁶⁶, la represión de las amenazas internas, la defensa frente a una invasión y la guerra civil.

El personal militar y el *officium* del gobernador

En el Principado, el *officium* de los gobernadores provinciales de rango senatorial sufrió una importante evolución y especialización derivada del empleo sistemático de personal procedente de las legiones. A pesar de que los procónsules siguieron teniendo a su servicio a los *apparitores* que ya existían en época republicana (*lictors, accensi, scribae, praecones*)⁷⁶⁷, el protagonismo tendió a recaer en el personal

⁷⁶⁵ P. Le Roux, *L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'invasion de 409*, París, 1982, p. 128 y ss.

⁷⁶⁶ Sin embargo, las Guerras Astur-Cántabras serán tratadas sólo a propósito de las amenazas externas y sin entrar en la descripción detallada de su desarrollo, que ya ha sido abordada por otros autores.

⁷⁶⁷ Cic. 2 Verr. II, 27: *Comites illi tui delecti manus erant tuae; praefecti, scribae, accensi, medici, haruspices, praecones manus erant tuae. Apparitores* del procónsul de África durante el Principado: *ILAFr* 591-592. Sobre los *apparitores*: Mommsen, *DPR* I cit. p. 383; N. Purcell, “The *apparitores*: a study

militar, sobre todo en los *officia* de los *legati Augusti pro praetore* que tenían legiones a su mando⁷⁶⁸. Como ha señalado B. Rankov, los legados imperiales encargados del gobierno provincial hubieron de formar su *officium* con el personal de sus legiones pues, al igual que los *legati pro praetore* usados por Pompeyo y los triunviros a finales de la República, no contaban con *apparitores* salidos de las *decuriae*, ya que no eran magistrados electos, sino delegados de un procónsul oficial, que en el Principado era el propio emperador⁷⁶⁹. Sí tenían, no obstante, lictores: cinco, lo que les valió el apelativo de ‘*quinquefascales*’⁷⁷⁰. Los autores que recientemente han abordado el estudio del *officium* de los gobernadores coinciden en subrayar que este recurso al personal militar coadyuvó a una mejora de la administración provincial, dado que se trataba de un personal técnico cualificado y jerarquizado. Según Rankov, a partir del siglo II se puede hablar de tres grandes categorías plenamente establecidas en las que se integraron los miembros del *officium* del gobernador, cuyos nombres provienen de la propia jerarquía legionaria.

En primer lugar, los *principales*, en los que los gobernadores confiaban las mayores responsabilidades relativas a la administración directamente vinculada a su persona. Estaba formado por *cornicularii*, *commentarienses*, *speculatores*, *beneficiarii* y *frumentarii*, además del *princeps praetorii*, un centurión encargado del palacio del gobernador, que tenía un *optio* como ayudante. Como se puede observar, algunos mantenían los nombres vinculados a sus funciones originales en la legión o a ciertas condecoraciones (en el caso de los *cornicularii*), pero sólo a efectos de determinación de su rango jerárquico. Los *cornicularii* eran los jefes que coordinaban el trabajo del resto de miembros del *officium*. Los *commentarienses* actuaban como secretarios del gobernador y tendrían un importante protagonismo como secretarios en los procesos judiciales presididos por éste. Su presencia en el *officium consularis* no está atestiguada epigráficamente hasta el siglo II. Según ha planteado Haensch, estos *commentarienses*

in social mobility”, *PBSR* 51, 1983, pp. 125-173; J. Muñiz Coello, “Empleados y subalternos de la administración romana, 2. Los *praecones*”, *Habis* 14, 1983, pp. 117-145; I. di Stefano Manzella, “Accensi: Profilo di una ricerca in corso. (A propósito dei “poteri colaterali” nella società romana)”, *CCG* 11, 2000, pp. 223-257.

⁷⁶⁸ Haensch, *Capita provinciarum*... cit. pp. 710-714; B. Rossignol, “Entre le glaive et le stylet. Armée et administration des provinces dans l’Occident romain (197 av. J.-C.-192 ap. J.-C.)”, en Hurlet (dir.) *Rome et l’Occident*... cit. pp. 77-106, esp. p. 84.

⁷⁶⁹ B. Rankov, “The Governor’s Men: the *officium consularis* in Provincial Administration”, en A. Goldsworthy – I. Haynes (eds.) *The Roman Army as a Community*, Portsmouth, 1999, pp. 15-34, esp. pp. 16-17.

⁷⁷⁰ Mommsen, *DPR* III cit.

existirían primero en las provincias asignadas a procuradores ecuestres, que utilizaban esclavos imperiales como secretarios y custodios de su documentación (*a commentariis*). Con el tiempo, serían sustituidos en sus funciones más delicadas por soldados que llevarían el título de *commentarienses* y acabaron siendo empleados también en las provincias gobernadas por senadores⁷⁷¹. Los *speculatores* y *frumentarii* eran los principales encargados del correo oficial, sobre todo desde el siglo II⁷⁷², aunque también podían usarse para mantener el orden en labores “policiales”⁷⁷³. El colectivo más numeroso era el de los *beneficiarii*; esto es, aquellos soldados promocionados por un *beneficium* del gobernador que quedaban exentos de ciertos *munera*⁷⁷⁴ y eran utilizados en diferentes cometidos administrativos⁷⁷⁵. Los *principales* gozaban de privilegios derivados de su promoción a estos cargos administrativos, y estaban exentos de realizar determinados *munera* onerosos.

Por debajo de los *principales* estaban los llamados *immunes*, nombre que revela que también gozaban de ciertas exenciones del servicio militar, pero en su caso no se trataba tanto de un premio como del resultado de haber asumido nuevas funciones⁷⁷⁶. Este grupo estaba constituido, en efecto, por *adiutores* (asistentes), *exceptores*, *notarii* (secretarios), *librarii* (encargados de los libros) o *exacti* (archiveros)⁷⁷⁷, personal subordinado a los *commentarienses* que estaba dedicado a la consignación por escrito no sólo de las actas de los procesos judiciales presididos por el gobernador y otros actos jurisdiccionales, sino también a la ordenación, archivo y conservación de los documentos relativos a la correspondencia y los edictos (el jurisdiccional y el resto) del gobernador, las *constitutiones* imperiales que afectasen a la provincia, los documentos

⁷⁷¹ R. Haensch, “A *commentariis* und *commentariensis*: Geschichte und Aufgaben eines Amtes im Spiegel seiner Titulaturen”, en Y. Le Bohec (ed.) *La hiérarchie (Rangordnung) de l’armée romaine sous le Haut-Empire. Actes Con. Lyon (15-18 sept. 1994)*, París, 1995, pp. 267-283.

⁷⁷² *Speculatores* como correos: Tac. *Hist.* II, 73; *ILS* 2379; *frumentarii* como correos: Dio LXXIX, 14, 1 y 15,1; *CIL* III, 1451; *ILS* 2370. Rankov, “The Governor’s Men...” cit. p. 27-29 y “Les *frumentarii* et la circulation de l’information entre les empereurs et les provinces”, en L. Capdetrey – J. Nelis-Clément (eds.), *La circulation de l’information dans les états antiques*, Burdeos, 2006, pp. 129-140, donde menciona que los *frumentarii* también fueron utilizados como espías por los emperadores (p. 139).

⁷⁷³ *SHA Pescenius Niger* 10. Cf. Rankov, “The Governor’s Men...” cit. p. 27, nt. 79 y p. 29.

⁷⁷⁴ Fest. *De sig. uerb.* 30.

⁷⁷⁵ J. Nelis-Clément, *Les beneficiarii: Militaires et administrateurs au service de l’Empire (Ier s. a.C. – Ve s. p. C.)*, Burdeos, 2000, pp. 61-81, que realiza un análisis de su definición, *status* y funciones. Véase también: J. Gómez-Pantoja, “La estación de Segisamo”, *Gerión* 10, 1992, pp. 259-273, esp. pp. 263-265.

⁷⁷⁶ J. J. Palao Vicente, *Legio VII Gemina (Pia) Felix. Estudio de una legión romana*, Salamanca, 2006, p. 134, que menciona como ejemplo de las exenciones de *munera* de que gozaban los principales la carta del soldado Julio Apolinar, acuartelado en Bosra (Arabia) ca. 107 d.C.: *P.Mich.* 466.

⁷⁷⁷ D. L., 6, 7. Cf. Haensch, *Capita provinciarum...* cit. pp. 713-724; Rankov, “The Governor’s Men...” cit. pp. 18-22.

censuales y catastrales, la *formula prouinciae*, etc⁷⁷⁸. Tenían, pues, la importante responsabilidad de proceder a la redacción y certificación de los documentos oficiales derivados de la actividad del gobernador, así como de supervisar su correcta ordenación –junto con los documentos llegados de Roma– en el archivo provincial por parte de los libertos y esclavos imperiales que en él trabajaban, con el fin, por un lado, de asegurar el cumplimiento de sus decisiones y facilitar su consulta, y, por otro, de dejar poco margen a las posibles falsificaciones⁷⁷⁹.

Probablemente también hay que incluir en el grupo de los *immunes* a los *quaestionarii* (interrogadores) y los arúspices. Los intérpretes eran muy relevantes sobre todo en aquellas regiones menos romanizadas en las que la población desconociese el latín, como por ejemplo la *Gallaecia* a inicios del Principado⁷⁸⁰.

Aparte tenemos a los *stratores*, que formaban una suerte de guardia de corps o escolta del gobernador y, según recoge Ulpiano, debían ser elegidos entre los soldados estacionados en la provincia, pues el gobernador no podía tener unos propios⁷⁸¹. Era ésta una medida contra la creación de guardias personales ajenas a los cuadros oficiales del ejército.

Por último, el grupo inferior sería el de los *singulares*, *auxilia* que estarían encargados de labores de “policía” y mantenimiento del orden público en los lugares que visitase el gobernador. Rankov estima que servirían en el *officium* una media de tres años y luego se reintegrarían en sus unidades de origen⁷⁸².

El *officium* mejor documentado en Hispania es el del gobernador de la Citerior, que no en vano era el único que tuvo legiones a su mando durante el Principado –si exceptuamos el corto período de las Guerras Cántabras. Tras la reorganización provincial augustea del 16-13 a.C. la Citerior contó con tres legiones, la IV Macedónica, la VI *Victrix* y la X *Gemina*, que, como veremos más adelante en este estudio, dejaron su impronta en la provincia⁷⁸³. Sin embargo, la legión que más tiempo estuvo en

⁷⁷⁸ A veces su cometido venía especificado en su título, como en el caso de *Gargilius Rufus, commentariensis ab actis ciuilibus* (RIT 229).

⁷⁷⁹ El ejemplo mejor conocido es el de Egipto: F. Burkhalter, “Archives locales et centrales en Egypte romaine”, *Chiron* 20, 1990, pp. 191-216.

⁷⁸⁰ Véase la relevancia de los intérpretes en Caes. *B.G.* I, 19, 3 y 47,4.

⁷⁸¹ Ulp. *1 de off. procos.* (Dig. I, 16, 4, 1): *Nemo proconsulum stratores suos habere potest, sed uice eorum milites ministerio in prouinciis funguntur.*

⁷⁸² Sobre estas categorías: Rankov, “The Governor’s Men...” cit. p. 18-22.

⁷⁸³ Sobre la historia de estas legiones y su estancia en Hispania véanse las contribuciones recogidas en Y. Le Bohec (ed.) *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, Lyon, 2000: J. Gómez-Pantoja, “*Legio III*

Hispania durante el Principado fue la VII *Gemina* –destinada aquí en solitario de forma permanente desde comienzos de época flavia en adelante– y es por ello la que más incidencia tuvo en la composición del *officium* del gobernador de la Citerior y la que más rastro ha dejado, con diferencia, en la epigrafía peninsular. Así, por ejemplo, conocemos a un *beneficiarius* del gobernador Junio Hómulo (ca. 133 d.C.)⁷⁸⁴ y otro que también sirvió en esa época⁷⁸⁵; dos *speculatores* de la VII *Gemina* que alcanzaron el puesto de *commentariensis*, uno en el siglo II⁷⁸⁶ y otro a inicios del III⁷⁸⁷; un *adiutor* del jefe del *officium* en el siglo III⁷⁸⁸; un *strator* que dedicó una inscripción de notable tamaño a su antiguo gobernador en época de Septimio Severo⁷⁸⁹; y un centurión que hizo otro tanto bajo Alejandro Severo⁷⁹⁰. También tenemos noticia de la existencia de un *collegium stratorum* en la capital de la Hispania Citerior⁷⁹¹.

La epigrafía de Tarraco ha dado a conocer muchos otros soldados, oficiales y veteranos de la *legio VII Gemina*; es, de hecho, el lugar donde se concentra la mayor parte de la documentación epigráfica relativa a esta legión⁷⁹². Sin embargo, como ha señalado J. J. Palao Vicente, esto no implica que todos ellos desempeñasen sus funciones en la capital provincial ni mucho menos, y conviene ser cautelosos en su interpretación⁷⁹³.

Macedonica”, pp. 105-117, esp. pp. 108-111; *Idem*, “*Legio X Gemina*”, pp. 169-190, esp. pp. 172-180; A. Morillo Cerdán – V. García Marcos, “Nuevos testimonios acerca de las *legiones VI Vixtrix* y *X Gemina* en la región septentrional de la península Ibérica” pp. 589-607; Morillo Cerdán, “La *legio IIII Macedonica* en la península Ibérica. El campamento de Herrera de Pisuerga (Palencia)”, pp. 609-624. También: J. Rodríguez González, *Historia de las legiones romanas*, Madrid, 2003, pp. 166-173, 217-228 y 291-304.

⁷⁸⁴ CIL XII, 3168 (Nemauso): *D(is) M(anibus) / Vmidii Auiti milit(i) / leg(ionis) VII Gemin(ae) Felicis / beneficiari / Iunii Omulli consular(is) / cura T(iti) Vitrasii Pollion(i) / legat(i) Aug(usti)*. Para la datación del gobierno de Junio Hómulo: *Fasti Hispanienses* p. 26

⁷⁸⁵ RIT 187: *D(is) M(anibus) / L(ucio) Aufidio / Felici b(ene)fficiario / co(n)s(ularis) / municipi / Gargilius / Rufus / speculator / leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis) / bene meri/to*.

⁷⁸⁶ RIT 187 y 229: *D(is) M(anibus) / L(ucio) Gargilio Rufo / com(mentariensi) ab actis / ciuilib(us) homini / optimo et hones-/tissimo*.

⁷⁸⁷ HEp 7, 1997, 958 = HEp 9, 1999, 536 = AE 1998, 803 = AE 1999, 967: *I(oui) O(ptimo) M(aximo) et / Fortunae Reduci et / Genio leg(ionis) VII G(eminae) P(iae) F(elicis) / Q(uintus) Cael(ius) Felix / aram / quam specul(ator) uouerat / accepta / honesta missione / ex comment(ariensi) / praesidis / p(rouinciae) H(ispaniae) C(iterioris) / l(ibens) posuit*.

⁷⁸⁸ RIT 62: *Vlp(ius) / Marcianus / adiutor / principis / posuit*.

⁷⁸⁹ CIL II²/14, 975 = RIT 130. Esta inscripción la analizaremos en otro punto de este capítulo.

⁷⁹⁰ CIL II²/14, 972 = RIT 128: *Q(uinto) Atrio Clonio / leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / prouinciarum / Thraciae, Cappadociae, / Syriae Maioris, / Hispaniae Citerioris. / Claudius Iustus (centurio) / leg(ionis) VII Gem(inae) P(iae) F(elicis) / Seuerianae / [[Alexandrianae]] / presidi absti-/nentissimo*. Anexo II: n° 8.

⁷⁹¹ RIT 43.

⁷⁹² G. Alföldy, “El ejército romano en Tarraco”, en A. Morillo (ed.), *El ejército romano en Hispania. Guía arqueológica*, León, 2007, pp. 503-521.

⁷⁹³ Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 284-285.

Pero al margen de los testimonios individuales de miembros del *officium*, conservamos dos inscripciones tarraconenses de inicios del siglo III que nos ofrecen no sólo un ejemplo de la presencia de estos *officiales* en Hispania, sino sobre todo una valiosa muestra de los estrechos vínculos que como colectivo podían unirles a sus gobernadores a raíz de su colaboración cotidiana con él. Se trata de sendas estatuas dedicadas en honor de los gobernadores Quinto Hedio Rufo Loliano Gentiano y Tito Flavio Titiano por sus respectivos *officia*. En ambos casos se trata de dos epígrafes, uno situado en la cara principal del pedestal en el que se menciona al homenajeado y otro en el lateral izquierdo que cita a los dedicantes.

El epígrafe principal del pedestal dedicado a Gentiano dice lo siguiente:

*Q(uito) Hedio L(uci) f(ilio) Pol(lia tribu) / Lolliano Genti-/ano leg(ato)
[A]u[g]g(ustorum) / pr(o) pr(aetore) p(rouinciae) H(ispaniae) C(iterioris) / praesidi
op[timo] / cornicula[r(ii)] / eius et com[mentar(ienses)] / et specul[atores] / leg(ionis)
VII Gem(inae) [P(iae) F(elicis)].*

Y en el lado izquierdo se menciona a estos dedicantes:

*Cornicul(arii): / Pompeius Agri[ppa], / Iulius Auitus. / Comm(entarienses): / C(aius)
Iulius Crassus / T(itus) Publius Lupus / Specul(atores): / Q(uitus) Alfius Ianuarius, /
C(aius) Valerius Marcianus, / L(ucius) Maenaius Sementius, / C(aius) Caecilius
Restitutus, / C(aius) Aurelius Octavius, / C(aius) Aufidius Hilarus, / L(ucius) Aurelius
Phileterus, / L(ucius) Alfidius Vrbanus, / C(aius) Iulius Florentinus, / L(ucius)
Sempronius Firmanus.⁷⁹⁴*

En cuanto la inscripción principal del pedestal de Titiano, dice:

*T(ito) Fl(auius) Titiano / leg(ato) Augg(ustorum) nn(ostrorum) / pr(o) pr(aetore)
c(larissimo) u(iro) / proconsuli / prou(inciae) Africae / praesidi / prou(inciae)
Hisp(aniae) / C(iterioris) / M(arcus) Aurelius / Modestinus / [---]*

El lado izquierdo del pedestal presenta dos listas:

a)

⁷⁹⁴ CIL II²/14, 985 = RIT 140. Anexo II: n° 4.

[---] (vacat) [---]on / [Val]erius(?) (vacat) Restitutus / [C]aecilius (vacat) Dexter / Granius (vacat) Sabinianus / Aurelius (vacat) Tyrannus / Laberius (vacat) Marcianus / Flavius (vacat) Atimetus? / Manlius (?) (vacat) Cornelius / Valerius (vacat) adiutor / [Ca]ssiu[s] (?) (vacat) Suau[i]s / Cornelius (vacat) [Fel]ix / Aelius (vacat) [---]r[.]sta / Titu[leiu]s (?) (vacat) Vio[le]n[s] / [---] (vacat) IOI[---] / [---] (vacat) IV[---]S / [---] (vacat) [.I]I[---]S / [---] (vacat) [---] / [---] (vacat) [---] / [---].

b)

Aelius(?) (vacat) [---]an[i]anus / Peduc(a)eus (vacat) Pr(a)epos[i]tus / Calidius (vacat) Melior / Annaeus (vacat) [Secu]ndus / [---]us (vacat) Melepo[n]us(?) / [---]s (vacat) Satyrius / Ael[ius] (?) (vacat) Philotimus / Valerius (vacat) Maximinus / Au[reliu]s (?) (vacat) Restitutus / [---] (vacat) Aurelianus / [---] (vacat) [---]ianus / [---] (vacat) Va[le]n[s] / [---] (vacat) Celsus / [---] (vacat) Hilarianus / [---] (vacat) Barbarus / Minius (?) (vacat) Rufus / Valerius (vacat) Iulius / [---] (vacat) Domitianus / [---].⁷⁹⁵

A diferencia de los dedicantes del pedestal de T. Flavio Titiano, que no especifican su cargo, los que tributan el homenaje a Q. Hedio Rufo Loliano Gentiano sí lo indican. Son todos ellos *principales*, lo que nos ofrece la posibilidad de conocer el número de *officiales* superiores de que disponía el gobernador de la Citerior a finales del reinado de Cómodo⁷⁹⁶: dos *cornicularii*, dos *commentarienses* y diez *speculatores*. A partir de la comparación de los testimonios de los miembros de *officia* conocidos epigráficamente en otras provincias como Numidia o las dos Panonias y Germanias, Rankov ha podido realizar una reconstrucción verosímil del número de integrantes de un *officium*, que dependería del número de legiones presentes en la provincia. Según este autor, habría un *cornicularius*, un *commentariensis* y diez *speculatores* por legión,

⁷⁹⁵ CIL II²/14, 979 = RIT 135. Anexo II: n° 6.

⁷⁹⁶ Gentiano habría gobernado la Hispania Citerior en 189-192, según Alföldy, “Fasti und Verwaltung...” cit. p. 341, donde corrige la cronología que había propuesto en *Fasti Hispanienses* p. 64 (202-205), aceptando la hipótesis ya planteada por M. Christol, “La carrière de Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus”, *REA* 33, 1981, pp. 75-84, esp. pp. 77-78. El problema para aceptar esta datación es el título de *legatus Agg(ustorum)* que atribuyen a Gentiano esta inscripción y otra honorífica de Tarraco (CIL II²/14, 984 = RIT 139), que en un principio llevó a Alföldy razonablemente a situar su gobierno de la Hispania Citerior en 202-205. Según Christol, a finales del siglo II-inicios del III tras el proconsulado de Asia sólo se desempeñaba o la *praefectura Urbis* o un segundo consulado, y, por tanto, se trataría de una torpeza del lapicida, como consecuencia de la dedicación de la inscripción en época severa, mientras Gentiano gobernaba Asia o después del proconsulado (p. 78). Esta hipótesis ya había sido propuesta por F. Jacques, “Le cens en Gaule au II^e siècle et dans la première moitié du III^e siècle”, *Ktèma* 2, 1977, pp. 285-328, esp. p. 303, nt. 94. Cf. también M. Christol, *Essai sur l'évolution des carrières sénatoriales dans la II^e moitié du III^e s. ap. J.-C.*, París, 1986, pp. 23-34.

aunque podían darse variaciones como en el caso tarraconense. Asimismo, partiendo del ejemplo de la epigrafía de la *legio III Augusta* acuartelada en *Lambaesis* en el siglo III, llegó a la conclusión de que cada legión aportaría sesenta *beneficiarii*. El cálculo indica que habría un *speculator* por cohorte y un *beneficiarius* por centuria. A ellos habría que sumar los *frumentarii*, lo cual daría una cifra en torno a 72-74 *oficiales principales*. El número de *immunes* sería mayor, puesto que había que pagarles menos y el gobernador gozaba de más libertad para nombrarlos⁷⁹⁷. Rankov estima que el cuerpo principal del *officium* de un gobernador que tuviese una legión a su mando estaría en torno a las cien personas⁷⁹⁸, más cien *stratores* y quinientos *singulares*. En esta categoría estaría el *officium* del gobernador de la Hispania Citerior o el de Arabia. Los de las Germanias y las Panonias tendrían un *officium* con un núcleo de doscientas personas y los de Britania o Siria, de trescientas. El número de *stratores* y *singulares* también se multiplicaría por el número de legiones. La comparación de dos inscripciones de *Lambaesis*⁷⁹⁹ de diferentes épocas indica que el número de miembros del *officium* sería estable⁸⁰⁰.

En una provincia sin legiones, como la Lusitania o la Bética, el *officium* del gobernador estaría compuesto, según Haensch, por aproximadamente veinte personas⁸⁰¹, lo cual supone *a priori* una notable desventaja frente a los otros gobernadores de rango senatorial. Sin embargo, sus cuadros administrativos se completarían también con legionarios de las legiones estacionadas en la Citerior ya desde el siglo I d.C. La epigrafía de *Augusta Emerita* ha revelado la presencia en la capital de la Lusitania de un *beneficiarius consularis* procedente de la *legio VI Victrix*⁸⁰² y, en los dos siglos posteriores, de los siguientes legionarios de la *VII Gemina*: un *frumentarius*⁸⁰³ y dos centuriones a mediados del siglo II⁸⁰⁴, y dos *beneficiarii*, uno bajo

⁷⁹⁷ Los *principales* cobraban doble paga. Cf. Rankov, “The Governor’s Men...” cit. p. 23; D. Breeze, “The Organisation of the Career Structure of the *immunes* and *principales* in the Roman Army” en D. J. Breeze – B. Dobson, *Roman Officers and Frontiers*, Stuttgart, 1993, pp. 11-58.

⁷⁹⁸ Haensch, *Capita provinciarum...* cit. p. 720.

⁷⁹⁹ AE 1917, 18.57 y CIL VIII 2586.

⁸⁰⁰ Rankov, “The Governor’s Men...” cit. p. 23-31.

⁸⁰¹ Haensch, *Capita provinciarum* cit. p. 720.

⁸⁰² CIL II, 491: *D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Maelonius Aper / uet(eran)us leg(ionis) VI Vic(tricis) P(iae) F(idelis) an(norum) LXX / militauit b(eneficiarius) co(n)s(ularis) / L(ucius) Maelonius Primitiuos / et Maelonia Caesiola et Mae/lonia Malla lib(erta) patrono / piissimo / d(e) s(ua) f(aciendum) c(urauit) h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(euis)*

⁸⁰³ AE 1905, 25: Marcus Valerius Secundus.

⁸⁰⁴ J. C. Saquete – A. Velázquez, “Dos nuevos centuriones de la *legio VII Gemina* en *Augusta Emerita*”, *AEspA* 72, 1999, pp. 265-271 = AE 1999, 872: *D(is) [M(anibus)] s(acrum) / C(aio) Va[l(erio) F]lauto /*

Septimio Severo⁸⁰⁵ y el otro en un momento indeterminado a principios del siglo III⁸⁰⁶. El *frumentarius* también sirvió en el *officium* del gobernador de la Hispania Citerior⁸⁰⁷.

En la Bética sucedería lo mismo, como se deduce de los ejemplos de *officia* de otras provincias proconsulares. Gracias a un discurso del emperador Adriano conservado en una inscripción de *Lambaesis* sabemos que la legión asentada en ese campamento, la III Augusta, enviaba regularmente una cohorte al procónsul de África para que usara a sus integrantes en su *officium*⁸⁰⁸. Asimismo, un epígrafe de Samotracia nos revela la presencia de personal militar en el *entourage* del procónsul de Macedonia, P. Antio Orestes, en 165 d.C., junto con sus *lictors*, *amici* y esclavos⁸⁰⁹. También existen testimonios de *beneficiarii* en la Galia Narbonense⁸¹⁰. Estas evidencias indican que las provincias no eran compartimentos estancos, sino que existía una importante colaboración entre sus gobernadores y un movimiento de personal administrativo y militar entre ellas, claro está que siempre en número reducido y con el necesario permiso imperial⁸¹¹.

Haensch ha llamado la atención acerca de la posibilidad de que el *officium* del gobernador de cada provincia contase con cargos específicamente adaptados a las necesidades de ésta. Así sucede en Egipto, donde el personal del prefecto que lo gobernaba presenta características particulares derivadas de la adaptación romana a la administración ptolemaica preexistente. Este autor se pregunta, con acierto, si el caso egipcio es extrapolable a otras provincias y cómo se han de interpretar los *officiales* conocidos sólo en una provincia, como, por ejemplo, el *barcarius consularis* atestiguado en Germania Inferior o el *equisio consularis* conocido en Britania:

centur[i]oni / leg(ionis) VII [G(eminae)] F(elicis) / Q(uintus) Fl(auius) Restitutus / centurio, heres, / faciendum) c(urauit).

⁸⁰⁵ AE 1983, 487 = Alföldy, “Epigraphica Hispanica XIII. Eine Inschrift Aus Emerita Augusta: Rätsel Oder Steinmetzirrtum?” *ZPE* 87, 1991, pp. 168–172: *D(is) M(anibus) s(acrum) / G(aio) M(---) Zosimo b(ene)ff(iciario) leg(ionis) / VII Gem(inae) P(iae) F(elicis) natione / Italo stipe(n)dioron (sic) / XX q(ui) vixit ann<i>s / XXXVII mensibus VII / diebus XXXXVIII (sic) Iunia / Vera coniug(i) benignissi/mo [p]<i>iissimo> posui<t> / h(ic) [s(itus)] e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(euis).*

⁸⁰⁶ AE 1976, 275: *Miniciae Paternae ann(or)um XXXV / coniugi dulcissimae et castissimae / Geminius Gargilianus mil(es) leg(ionis) VII G(eminae) b(ene)ff(iciarius).* Cf. Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 288–291.

⁸⁰⁷ *RIT* 183.

⁸⁰⁸ *CIL* VIII, 2532.

⁸⁰⁹ AE 1965, 205 y 1967, 444.

⁸¹⁰ Nelis-Clément, *Les beneficiarii...* cit. p. 106.

⁸¹¹ Nelis-Clément, *Les beneficiarii...* cit. pp. 84 y 104–106. Cesión de personal especializado: Plin. *Ep.* X, 43–44. Véase el control que el poder imperial tenía de los salvoconductos oficiales (*diplomata*) necesarios para usar los recursos del *cursus publicus*: *Ep.* X, 45–46; 120–1.

¿existirían en otras provincias o eran específicos de éstas? Como Haensch mismo dice, la epigrafía impone unos límites difícilmente superables, pero es muy probable que algunos cargos naciesen de la adaptación a las especificidades locales⁸¹². Estamos de acuerdo con él: Roma se caracterizó por adaptar sus expedientes administrativos a las realidades de cada región de su Imperio y es muy verosímil que existiesen algunos puestos administrativos que hubiesen sido creados con el fin de resolver problemas surgidos en la administración cotidiana. Ahora bien, estos puestos fueron, sin duda, excepciones que se integraron en el cuadro general del *officium* de los gobernadores, que fue implantado en todas las provincias.

Basándose en el título empleado por los *officiales* en la epigrafía, que pasó de ir acompañado por el nombre del gobernador en genitivo a la fórmula fija de '*b(ene)f(iciarius) consularis*' a mediados del siglo II, R. L. Dise Jr. propuso que hasta los Antoninos no habría existido un *officium* permanente en las provincias, sino que cada gobernador elegiría a los miembros del suyo, que cesarían en sus funciones tras su partida. A partir de Antonino Pío, el poder imperial habría tratado de romper los vínculos personal que unían al personal del *officium* de los gobernadores favoreciendo su permanencia en sus puestos⁸¹³. Esta teoría, sin embargo, ha sido bien rebatida por Rankov, quien ha mostrado que no hay evidencias de que los *officiales* sirviesen sólo a un gobernador antes de los Antoninos, y sí ejemplos de lo contrario (como *CIL* XII, 2602). Este autor ha señalado con acierto que tal sistema no sólo sería inviable administrativamente, sino que iría en contra del sistema de promociones y jerarquías del ejército –en el que, por ejemplo, los puestos de *principales* solían ser permanentes⁸¹⁴.

Así pues, la estimación del personal mínimo que compondría el *officium* del gobernador de la Hispania Citerior (el mejor conocido del ámbito hispánico) arroja unas cifras considerables: cien personas, más cien *stratores* (parte de los cuales lo acompañarían en su recorrido por la provincia) y quinientos *milites singulares* a su libre disposición que podían usarse como una suerte de policía en la capital provincial o donde él se hallase. Asimismo, los *beneficiarii* podían destinarse allí donde hiciese falta

⁸¹² R. Haensch, “‘Dans tout le prétoire...’ Le personnel du préfet d’Égypte sous le Haut-Empire”, *CCG* 18, 2007, pp. 93-100, esp. pp. 99-100.

⁸¹³ R. L. Dise Jr, “Trajan, the Antonines and the Governor’s Staff”, *ZPE* 116, 1997, pp. 273-283, esp. pp. 281-283.

⁸¹⁴ Rankov, “The Governor’s Men...” cit. pp. 20-21.

una mayor presencia de personal militar que pudiese desempeñar labores administrativas básicas, bien a las sedes conventuales, bien a *stationes* situadas en otros lugares clave, como veremos más adelante.

El *beneficiarius consularis* atestiguado a inicios del siglo III en *Carthago Noua*⁸¹⁵ no sería el único caso durante el Principado, sino que, además de aquellos *officiales* que sin duda acompañarían a los gobernadores en su itinerario conventual, es muy probable que éstos, al menos en la Citerior, destinasen a algunos de los *beneficiarii* e, incluso, centuriones de su *officium* en las sedes conventuales cuando hiciese falta un responsable administrativo más vinculado a su persona que los meros esclavos o libertos imperiales allí presentes. Los centuriones que formaron parte de la *statio* establecida en *Lucus Augusti* en época de Caracala habrían tenido, pues, una misión no sólo militar, sino también administrativa, siguiendo las instrucciones del gobernador de la recién creada *prouincia Hispania Superior*. S. Perea Yébenes lleva razón en que el testimonio de *Carthago Noua* no es una prueba suficiente de que en esta colonia y sede conventual existiese por entonces una *statio beneficiarorum*, pero el hecho de que se trate de un epitafio dedicado por este *beneficiarius consularis* a su difunta mujer hace pensar que éste residiría allí. Ciertamente es que la presencia de un *beneficiarius* en una ciudad no implica que esté destinado en ella de manera permanente, sino que podía ser enviado a cumplir una misión concreta y regresar luego a la capital provincial, pero resulta impropio que se hiciese acompañar de su mujer⁸¹⁶. Otra posibilidad es que la mujer viviese en *Carthago Noua* y Hermócrates en *Tarraco*, aunque lo natural sería que siguiese a su marido allí donde estuviese destinado.

Con todo, hemos de preguntarnos si este personal era suficiente para ayudar al gobernador en sus tareas cotidianas. Si se compara con otros imperios –incluso más o menos coetáneos como el chino de la dinastía Han– el Imperio Romano, durante el Principado, presenta un número muy inferior de personal administrativo en general⁸¹⁷. Esto llevó a P. Garnsey y R. Saller a definirlo como un “gobierno sin burocracia”, entendiendo que no sólo contaba con poco personal, sino que éste, y sobre todo sus altos

⁸¹⁵ *D(is) M(anibus) s(acrum) / Memmiae Coelianae annorum / XVIII m(ensium) VII d(ies) XXV. L(ucius) Septimius / Hermocrates b(ene)ficiarius co(n)s(ularis) uxo/ri bene meritae / h(ic) s(ita) est s(it) t(ibi) t(erra) l(euis)*. Cf. S. Perea Yébenes, “Reflexiones sobre la inscripción del *Beneficiarius Consularis* de *Carthago Nova*”, *Hispania Antiqua* 37-38, 2013-2014, pp. 165-192.

⁸¹⁶ Perea Yébenes, “Reflexiones sobre la inscripción...” cit. pp. 176 y 190.

⁸¹⁷ López Barja, “El gobernador provincial...” cit.

cargos (ocupados por senadores y *equites*), carecían de un perfil profesional y, por tanto, no podían ser tomados por funcionarios. Asimismo, hicieron hincapié en la importancia que las relaciones de patronazgo, las *commendationes* y las relaciones familiares tenían en la progresión de un individuo en el *cursus honorum* senatorial o ecuestre, al margen de su mayor o menor preparación para los cargos a los que optaba. Estos autores tuvieron el acierto de arrojar luz sobre nuevos factores que condicionaban el funcionamiento del gobierno imperial, abriendo un debate necesario en torno a su naturaleza y objetivos. Sin embargo, condicionados por su visión “primitivista” de los procesos socio-económicos del mundo antiguo⁸¹⁸, cayeron en una excesiva minusvaloración de la capacidad de gestión de la administración romana, llegando a decir que el Imperio “remained undergoverned”⁸¹⁹, no sin cierto ánimo de polémica y siendo deudores en exceso de un concepto de Estado demasiado restrictivo y propio del mundo industrial.

Esta idea de que el Imperio Romano careció de un sistema burocrático al menos hasta el siglo III ha tenido bastante seguimiento en la historiografía hasta hoy⁸²⁰, pero también ha recibido una importante revisión que ha modificado sus conclusiones. En lo que respecta al *officium* de los gobernadores provinciales, recientemente Haensch y Rankov han revalorizado su capacidad de gestión y el importante grado de especialización de su personal. Rankov ha defendido que la entrada de personal militar en los *officia* de los gobernadores con mando sobre legiones profesionalizó la administración provincial y la hizo más eficaz, dada la cualificación de estos legionarios. En ese sentido se podría hablar de la existencia de una burocracia provincial, pues, como ha señalado Haensch a partir del estudio de los papiros con contenido administrativo de Egipto, los subalternos más importantes del personal de la administración provincial asumían una parte del trabajo de sus superiores (los gobernadores, en su caso el prefecto de Egipto) de una manera que “est typique des bureaucraties relativement développées”. Según este autor, en época severa un número

⁸¹⁸ La polémica entre “primitivistas” y “modernistas” comenzó a finales del siglo XIX e inicios del XX con K. Bücher, E. Meyer y M. Weber, y se reanimó con la publicación de M. I. Finley, *The Ancient Economy*, Cambridge, 1973. Un repaso a ella en: P. F. Bang, “Antiquity between ‘primitivism’ and ‘modernism’”, <http://www.hum.au.dk/ckultur/f/pages/publications/pfb/antiquity.htm> (última consulta: 07/04/2015)

⁸¹⁹ Garnsey – Saller, *The Roman Empire...* cit. p. 20-26, esp. p. 20.

⁸²⁰ W. Eich, *Zur Metamorphose des politischen Systems in der römischen Kaiserzeit. Die Entstehung einer ‘personal Bürokratie’ im langen dritten Jahrhundert*, Berlín, 2005; Hurlet, “Les modalités de la hiérarchie...” cit. p. 171.

creciente de documentos muestra que estos *officiales* superiores actuaron con independencia en la realización de las tareas administrativas menores cotidianas y eran una pieza clave en la redacción y control de los documentos oficiales. Esto era sabido por el poder imperial, lo que llevó a que les obligara a dejar constancia de su nombre en los documentos de los que se habían ocupado, como se ve en los ejemplos egipcios⁸²¹.

En esta línea P. López Barja ha abogado por superar las definiciones de “funcionariado” o “burocracia” excesivamente restrictivas –como lo es, por ejemplo la influyente categoría weberiana de “dominación legal con administración burocrática”⁸²², inaplicable a sociedades preindustriales– por otras más amplias, como la de S. P. Finer, que propone “los siguientes criterios: jerarquizada, en funciones permanentemente, especializada en ámbitos diferentes, cualificada por vocación o educación, retribuida por su trabajo a tiempo completo, y, por último, sometida a normas”⁸²³. Y en esta definición encaja perfectamente la administración provincial romana.

Por tanto, aunque las cifras del personal que trabajaría en la administración provincial y, en concreto, en el *officium* de un gobernador, son reducidas en comparación con otros imperios, es innegable la existencia de una administración romana jerarquizada y especializada durante el Principado que sirvió con eficacia en la administración cotidiana. Como suele señalar Y. Le Bohec, el ejército romano altoimperial basó su composición en dos principios fundamentales que aseguraron su excelencia: selección y elitismo⁸²⁴. Lo mismo puede decirse del *officium* de los gobernadores provinciales, que precisamente se nutría de personal militar. Se trataba de personal letrado, con experiencia en misiones de intendencia, documentación y organización en el seno de una legión: estaban habituados a llevar las cuentas de la legión, ejercer de secretarios del legado tanto en el cuidado de su correspondencia como levantando acta de sus decisiones judiciales en la aplicación de la disciplina militar, realizar labores de control del territorio, etc., lo que los convertía en un personal cualificado y preparado para cooperar con el gobernador en las funciones que le

⁸²¹ Haensch, “Le rôle des *officiales*...” cit. p. 274.

⁸²² M. Weber, *Economía y sociedad*, Madrid, 1967, pp. 177-179. Seguido, junto con Marx, por Garnsey – Saller, *The Roman Empire*... cit. p. 199.

⁸²³ López Barja, “El gobernador provincial...” cit. p. siguiendo a S. P. Finer, *The History of Government from the Earliest Times*, I, Oxford, 1997, p. 64, quien considera que a partir del siglo II el Imperio Romano cumplió todos estos requisitos (p. 550).

⁸²⁴ Y. Le Bohec, *Le guerre romaine, 58 avant J.-C. – 235 après J.-C.*, París, 2014, p. 75.

competían, siendo cruciales en la gestión de la documentación oficial⁸²⁵. Para lo demás, bastaría con asegurarse de que las autoridades de las comunidades locales cumpliesen con sus deberes en el nivel básico de administración territorial, manteniendo una viva cooperación con ellas. La estabilidad interna de las provincias occidentales y, en concreto, de las hispanas durante el Principado es la mejor prueba de la viabilidad de este sistema y del cuerpo administrativo que ayudaba en sus funciones a los gobernadores.

La leva y el licenciamiento de los soldados.

A los gobernadores provinciales les competía dirigir la realización de la leva de nuevos reclutas para el ejército imperial (*dilectus*)⁸²⁶ y su licenciamiento cuando habían cumplido los años de servicio exigidos, pero no podían actuar por su propia iniciativa. En palabras de Casio Dión, no podían proceder al *dilectus* “cuando el Senado no lo había decretado o el emperador no lo había ordenado”⁸²⁷; si actuaban por su cuenta podían ser acusados del *crimen maiestatis*, pues su acción se equiparaba a iniciar una guerra sin permiso imperial⁸²⁸. Los riesgos de dejar al arbitrio de los gobernadores una cuestión tan delicada como ésta son evidentes, ya que podía propiciar el reclutamiento de un ejército provincial para dar un golpe de estado.

En las provincias de mayor extensión, el gobernador solía contar con ayudantes designados por el poder central, los llamados *dilectatores* (o *missi dilectus causa*)⁸²⁹. Se

⁸²⁵ Haensch, “Le rôle des *officiales*...” cit. supra. tenían la importante responsabilidad de proceder a la redacción y certificación de los documentos oficiales derivados de la actividad del gobernador, así como de supervisar su correcta ordenación en el archivo provincial por parte de los libertos y esclavos imperiales que en él trabajaban, con el fin, por un lado, de asegurar el cumplimiento de sus decisiones y facilitar su consulta, y, por otro, de dejar poco margen a las posibles falsificaciones

⁸²⁶ Tanto a los *legati Augusti pro praetore* como a los procónsules. Véase el ejemplo de Corbulón en Oriente en 58 (Tac. *Ann.* XIII, 35) y Muciano en Siria en 69 (Tac. *Hist.* II, 82, 1). En la Bética, como ha señalado J. González, “Cohors V Baeticae”, *Habis* 25, 1994, pp. 179-188, del numeral de esta cohorte se puede deducir que se reclutaron cinco en la Bética, probablemente bajo Marco Aurelio.

⁸²⁷ Dio LIII, 15, 6: ἐκεῖνα δὲ ἐπὶ πᾶσιν ὁμοίως ἐνομοθετήθη, μήτε καταλόγους σφᾶς ποιεῖσθαι, μήτ’ ἀργύριον ἔξω τοῦ τεταγμένου ἐσπράσσειν, εἰ μὴ ἤτοι ἡ βουλὴ ψηφίσαιτο ἢ ὁ αὐτοκράτωρ κελεύσειεν. En realidad, era el emperador el verdadero responsable de autorizar un *dilectus* como cabeza del ejército imperial, pero sabemos que Augusto y Tiberio decidieron tratar esta cuestión en el Senado (Tac. *Ann.* IV, 4, 2 y Suet. Tib. 30). Cf. G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milán-Roma, 1953, pp. 19-21.

⁸²⁸ Dig. XLVIII, 4, 3: Cf., Forni, *Il reclutamento...* cit. p. 18.

⁸²⁹ Un ejemplo de un oficial legionario inferior destinado a colaborar en la elaboración del *dilectus* en AE 1951, 88 (Cirene): *C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) Vo[l](tinia)] / Karo ex prouincia Narbo/nensi trib(un)o mil(itum) leg(ionis) III Cy[r](enaicae)] / praef(ecto) coh(ortis) II Ast<u>rum eq(uitatae) / donato bello*

trataba, en general, de personal de rango ecuestre que había hecho carrera militar⁸³⁰. Los *dilectatores* eran especialmente útiles cuando la conscripción era obligatoria, pues se encargaban de recorrer determinadas regiones o distritos de la provincia realizando una *inquisitio*, esto es, una evaluación del número de hombres movilizables en relación a las necesidades militares y las locales, etc.; cuestiones en las que el censo provincial (del que hablaremos en la Segunda Parte) tenía una gran relevancia⁸³¹. En este sentido, si es correcta la hipótesis de que las sedes conventuales del Noroeste de Hispania fueron usadas como centros en los que concentrar la información censitaria de las comunidades indígenas que estaban adscritas a ellas⁸³², es posible que también tuviesen una importante función en la realización de la leva requerida para las tropas auxiliares.

La elección de los reclutas era rigurosa. Pasaban un examen (*probatio*) en el que se exigía, aparte de haber superado la pubertad⁸³³, que estos hombres fuesen ciudadanos romanos –o, en el caso de las tropas auxiliares, *ingenui*–, que tuviesen las condiciones físicas y de salud necesarias y que no fuesen reos de ningún crimen⁸³⁴. En particular, el jurista Menenio, en su tratado *de re militari* –basado, fundamentalmente, en la casuística de época de Trajano y los rescriptos de este emperador– hace hincapié en que se evitase y castigara severamente tanto a quienes intentasen escapar a la leva (recurriendo, por ejemplo, a la automutilación), así como a los desertores que pretendiesen reintegrarse en el ejército⁸³⁵. Además, se exigía que los futuros legionarios supiesen leer y escribir, lo que los capacitaba para labores administrativas⁸³⁶. Un buen ejemplo del uso del latín por parte de los legionarios destinados en Occidente tanto en

Brittanico c[or(ona)] / murali corona uallari cor(ona) / aurea hasta pura / [c]ent<u>riones et / milites leg(ionis) III Cyr(enaicae) et leg(ionis) / [X]XII missi in prouinciam / [C]yrenensium dilectus caussa(!). Cf. Le Bohec, *La guerre romaine...* cit. pp. 75-76.

⁸³⁰ Como el procurador Sempronio Celiano, que se encargó de organizar el *dilectus* realizado en Bitinia en tiempos de Trajano con motivo de la campaña pártica. Plin. *Ep.* X, 29-30.

⁸³¹ Veg. *Epit. rei milit.* I, 5. Cf. Forni, *Il reclutamento...* cit. pp. 24-25 y 103-107 (ciudadanía de los legionarios); P. Cosme, *L'armée romaine, VIIIe s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.*, París, 2007, p. 104.

⁸³² Vid. *infra* Segunda Parte, Capítulo 5.

⁸³³ A partir de los datos proporcionados por la epigrafía, se estima que la mayoría de reclutas ingresaban en la legión entre los 18-23 años Cf. Forni, *Il reclutamento...* cit. p. 27. La edad media de los reclutas de la *legio VII Gemina* sería de unos 20 años (19,8), según Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 238.

⁸³⁴ Menen. *1 de re milit.* (Dig. XLIX, 16, 4, 10-11). Sobre la *probatio*: G. R. Watson, *The Roman Soldier*, Bristol, 1969, pp. 38-42.

⁸³⁵ La desertión, de hecho, ocupa gran parte del capítulo 16 del libro XLIX del Digesto (dedicado a cuestiones militares) y estaba penada con la muerte o, como mínimo, con la *deportatio* (sólo contemplada en tiempo de paz).

⁸³⁶ Y. Le Bohec, *El ejército romano*, Barcelona, 2008, p. 98.

cuestiones administrativas como en cartas personales se halla en las tablillas del campamento de *Vindolanda*, en Britania⁸³⁷.

Los gobernadores no sólo tenían que velar por el cumplimiento de todas las condiciones y reglas que se debían seguir en el proceso del *dilectus*, sino que también debían juzgar y castigar los casos en que se hubiesen contravenido. Las causas más numerosas, como acabamos de señalar, serían de dos tipos: la resistencia al reclutamiento (automutilación, huida, etc.) y la incorporación a filas de esclavos o desertores. Precisamente Plinio el Joven hubo de juzgar a dos esclavos que se habían alistado en el *dilectus* que, con motivo de la campaña pártica, se había realizado en Bitinia, haciéndose pasar por hombres libres⁸³⁸. Esta infracción era muy grave, pues no sólo implicaba la usurpación de la ciudadanía romana, sino que, de no ser controlada, podía introducir elementos subversivos en las legiones. Por ello se castigaba con la pena capital. En cuanto a los desertores, sólo eran readmitidos los *emansores*, es decir, aquéllos soldados que volvían por su propia voluntad, habían estado alejados de su unidad durante poco tiempo y tenían una justificación (enfermedad, cautividad, etc.)⁸³⁹. Volviendo al proceso de reclutamiento, una vez superada la *probatio* se procedía a la *signatio*, la inscripción de los nuevos reclutas en las unidades a las que habían sido destinados⁸⁴⁰. Este último trámite se realizaba generalmente en el campamento militar en que estuviese acuartelada la unidad de destino. En lo que respecta a la *legio VII Gemina*, tendría lugar en el campamento central de León, aunque luego los soldados fuesen destinados a destacamentos situados en otros enclaves. Si el gobernador de la Citerior no estaba presente, el legado de la *VII Gemina* presidiría el juramento individual en su lugar. No faltaría nunca, en cambio, al que se hacía anualmente al emperador por parte de toda la legión, dado que él era su máximo representante en la provincia.

Gracias a Tácito se puede reconstruir el ritual seguido en el juramento prestado por los soldados al emperador al inicio del año. En sus *Historiae*, con el fin de mostrar el clima de tensión que se vivía en las provincias a comienzos del 69, se detiene en

⁸³⁷ A. K. Bowman – J. D. Thomas, *Vindolanda: The Latin Writing-Tablets*, Londres, 1983; *The Vindolanda Writing-Tablets (Tabulae Vindolandenses II)*, Londres, 1994 y *The Vindolanda Writing-Tablets (Tabulae Vindolandenses III)*, Londres, 2003.

⁸³⁸ Plin. *Ep.* X, 29-30.

⁸³⁹ J. B. Campbell, *The Emperor and the Roman Army*, Oxford, 1984, pp. 303-310

⁸⁴⁰ Cosme, *L'armée...* cit. p. 105 y 111. Un ejemplo en *P. Oxy.* VII, 1022.

describir el estado de ánimo y el comportamiento de las legiones de Germania cuando se les requirió que realizaran el *sacramentum* debido al emperador Galba en las calendas de enero⁸⁴¹:

*Inferioris tamen Germaniae legiones sollemni kalendarum Ianuariatum sacramento pro Galba adactae, multa cunctatione et raris primorum ordinum uocibus, ceteri silentio proximi cuiusque audaciam expectantes, insita mortalibus natura, propere sequi quae piget inchoare. Sed ipsis legionibus inerat diuersitas animorum: primani quintanique turbidi adeo ut quidam saxa in Galbae imagines iecerint: quinta decima ac sexta decima legiones nihil ultra fremitum et minas ausae initium erumpendi circumspectabant. At in superiore exercitu quarta ac duoeticensima legiones, isdem hibernis tendentes, ipso kalendarum Ianuariatum die dirumpunt imagines Galbae, quarta legio promptius, duoeticensima cunctanter, mox consensu. Ac ne reuerentiam imperii exuere uiderentur, senatus populiue Romani oblitterata iam nomina sacramento aduocabant, nullo legatorum tribunorumue pro Galba nitente, quibusdam, ut in tumultu, notabilius turbantibus. Non tamen quisquam in modum contionis aut suggestu locutus; neque enim erat adhuc cui imputaretur.*⁸⁴²

El estado de ánimo de los soldados y la renuencia de algunas legiones a prestar juramento al emperador no son los habituales y se deben a la excepcionalidad del momento (una guerra civil). Sin embargo, en su descripción Tácito transmite los elementos esenciales de este ritual que se repetirían en todos los campamentos del imperio: situados en el lugar elevado en el que se situaba el tribunal castrense, el gobernador, acompañado del legado y tribunos de cada legión allí presente y de las imágenes del emperador, se dirigía a toda la legión, formada delante de él, y, tras unas palabras introductorias, les ordenaba repetir las palabras del juramento que él pronunciaría primero. Los centuriones y legionarios de más edad tenían una gran relevancia, pues eran seguidos por el resto de compañeros y, si demostraban dudas, estas se contaminaban a toda la legión. En el caso del juramento de las legiones de Germania Tácito presenta el negativo del ritual: las legiones no quieren realizar el juramento y llegan a derribar imágenes de Galba, los legados y tribunos de la legión no

⁸⁴¹ En una fecha posterior al 69 este juramento se realizaría el 3 de enero, como aparece en el *Feriale Duranum*: Fishwick, “Dated inscriptions...”, cit. p. 352.

⁸⁴² *Hist.* I, 55.

intentan aplacarlos y gobernador Hordeonio Flaco, a pesar de su rango consular, es un mero espectador que, al callar, demuestra la debilidad de su *auctoritas*⁸⁴³. Era fundamental que el gobernador hiciese valer su autoridad y fuese respetado por sus soldados.

Asimismo, el gobernador también realizaba votos *pro salute principis et imperii* en el campamento como parte del ritual del juramento⁸⁴⁴. En Hispania está atestiguado epigráficamente un voto de este tipo realizado por el gobernador Cayo Julio Cereal en el campamento de la *legio VII Gemina* bajo Caracala:

*Iunoni Re[ginae] / pro salute et im[peri(i)] / diurnita[te imp(eratori)] / M(arci) Aureli
Anto[nini] / Pii Fel(icis) Aug(usti) et Iu[liae] / Piae Fel(iciae) Aug(ustae) ma[tris] /
Antonini Aug(usti) [cas]-/trorum senat[us] / ac patriae. / C(aius) Iul(ius) Cerealis
co(n)s(ul) [leg(atus)] / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) pr(ouinciae) H(ispaniae) N(ouae)
C(iterioris) An[toni]-/niana post diui[sam] / prouinc(iam) primus ab eo [mi(ssus)]*⁸⁴⁵

Es probable que Cereal haya realizado este voto a Juno Reina *pro salute imperii diurnitate imperatori* el mismo día que presidió el juramento de la *legio VII Gemina* a Caracala. Como veremos en la Tercera Parte, toda manifestación de fidelidad al *princeps* venía siempre acompañada de votos a los dioses más vinculados con el culto imperial y la soberanía, de los que se pretendía obtener protección para el emperador y, por ende, para el imperio que encabezaba. El epígrafe tiene especial relevancia, no sólo por la necesidad que tenía Caracala de reforzar su posición en el trono tras haber ordenado asesinar a su hermano Geta, sino desde un punto de vista administrativo. La *Gallaecia* acababa de ser desgajada de la Citerior y convertida en una provincia independiente (la Hispania Superior, de la que ya hemos hablado), y Cereal parece haber sido el primer gobernador de la provincia *Hispania Noua Citerior Antoniniana*⁸⁴⁶. Cereal habría visto necesario refrendar con su presencia y un voto tan relevante como el realizado *pro salute principis* su autoridad sobre la legión y dar a conocer a sus oficiales el nuevo ámbito de acción y las misiones que les competían, siguiendo, sin duda, las

⁸⁴³ Tac. *Hist.* I, 55-56.

⁸⁴⁴ Herod. II, 9, 5.

⁸⁴⁵ *ERPL* 73. Hay otra copia del mismo voto en estado fragmentario (nº 74).

⁸⁴⁶ Nonnis, “Un patrono ...” cit.; Alföldy, *Provincia Hispania Superior* cit., seguido por P. Ozcáriz Gil, “Algunas consideraciones acerca de la provincia Hispania superior y su administración”, *Pyrenae* 38/2, 2007, p. 33-46.

instrucciones que el emperador había incluido en los mandata que le entregó antes de su partida.

Pasemos ahora a la composición de la *legio VII Gemina* y al de las tropas auxiliares que las complementaban. Como ha señalado J. J. Palao Vicente, esta legión contó con un importante porcentaje de soldados de origen hispano durante todo el Principado, y estuvo completada por hombres procedentes de la Italia septentrional y de la Galia Narbonense en el siglo I y por africanos en el II. En este siglo y en el III, continuó el predominio de reclutas originarios de las provincias hispanas, y, dentro de éstas, de los naturales de las comunidades privilegiadas de la provincia Citerior, donde estaba asentada la legión, con una participación cada vez mayor de ciudadanos procedentes del Noroeste, resultado de la integración jurídica de esta región en el Imperio⁸⁴⁷.

Aparte del reclutamiento local destinado a la *legio VII Gemina* y a los *auxilia* que la complementaban⁸⁴⁸, los gobernadores de las provincias hispanas también hubieron de supervisar el de aquellos reclutas que irían a formar parte de unidades utilizadas en otras provincias, así como la integración de los legionarios y de las unidades auxiliares procedentes de otras provincias.

En lo que respecta a la leva de los *auxilia*, según señaló J. M. Roldán, sus nombres oficiales indicarían la procedencia original de sus integrantes, que procederían mayoritariamente del Noroeste peninsular y de la Lusitana. Estas unidades fueron destinadas en un alto porcentaje a los frentes de Germania, Dacia y Panonia hasta finales del siglo I, momento en que el serán enviadas sobre todo a las provincias norafricanas. A mediados del siglo II son raras las nuevas unidades hispanas, que terminarán por desaparecer⁸⁴⁹. Se desconoce cómo se procedería al reclutamiento de estos *auxilia* conformados por peregrinos, pero nos inclinamos por seguir de nuevo a Roldán, quien entiende que, al menos en el Noroeste y la Lusitania, las autoridades

⁸⁴⁷ Palao Vicente, *Legio VII...* cit. pp. 114-133.

⁸⁴⁸ *Ala II Flavia Hispanorum ciuium Romanorum, ala I Gigurrorum, cohors I celtiberorum, cohors III Lucensium*. Cf. J. M. Roldán Hervás, *Hispania y el ejército romano: contribución a la historia social de la España antigua*, Salamanca, 1976, pp. 212-224. Se desconoce la procedencia de los soldados de las cohortes al mando del *praefectus orae maritimae* que guardaba la costa tarraconense.

⁸⁴⁹ *Idem*, pp. 265-270 y 272-273; cuadros detallados en pp. 330-339.

romanas se encargarían de ella de una manera similar (aunque simplificada) al *dilectus*⁸⁵⁰.

Como hemos dicho antes, es posible que las sedes conventuales del Noroeste hayan sido utilizadas como centros de reclutamiento por los enviados del gobernador encargados de él, dado que su condición de cabeceras administrativas a las que estaban adscritas las *ciuitates* indígenas las convertía en centros aglutinadores de la población local y principal referente territorial del poder romano en esta región fundamentalmente rural. Palao, además, ha propuesto que el nacimiento de la *legio VII* reclutada por Galba en 68 hubiese tenido lugar en la sede conventual de Clunia, dado que, según Plutarco, el futuro emperador, una vez que se manifestó contra Nerón en *Carthago Noua*, se dirigió a Clunia y tomó esta ciudad como sede de operaciones. Además, Suetonio recuerda que emprendió su fortificación y Palao plantea que esta sería una tarea asumida por legionarios y que podrían haberse ocupado de ella los nuevos reclutas como parte de su entrenamiento⁸⁵¹.

Precisamente el propio Suetonio, a propósito del levantamiento de Galba contra Nerón en 68, nos ofrece un buen ejemplo de la capacidad que un gobernador de la Hispania Citerior tenía para proceder a una leva de cierta entidad y de la rapidez con que ésta se podía realizar. El 2 de abril, hallándose Galba en *Carthago Noua* realizando el preceptivo *conuentus*, manifestó públicamente desde su tribunal su oposición a la tiranía de Nerón y se proclamó defensor de la república en calidad de legado de Senado y del Pueblo Romano. Inmediatamente después, declaró el *iustitium* –esto es, la suspensión de los juicios– y ordenó que se procediese a la leva de nuevos soldados entre los ciudadanos romanos y los *peregrini* de su provincia. Por entonces el gobernador de la Hispania Citerior contaba con una legión a su mando, la *VI Victrix*, dos alas de caballería y tres cohortes, y Galba logró duplicar esas fuerzas, creando una nueva

⁸⁵⁰ *Idem*, pp. 273-274, donde se muestra contrario a la hipótesis de G. Alföldy, *Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania Inferior*, Düsseldorf, 1968, p. 88, que propuso la existencia de dos tipos diferentes de formas de reclutamiento de auxilia: uno dejado en manos de las aristocracias de cada *ciuitas* indígena, propio de las zonas pacificadas, y otro que implicaba la intervención directa de agentes romanos, en las áreas apenas romanizadas.

⁸⁵¹ Plut. *Galba* 6, 6; Suet. *Galba* 10, 4. Cf. Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 47.

legión, la *VII Galbiana* (futura *VII Gemina*)⁸⁵², y varias unidades de caballería (*alae*) y cohortes formadas, por ejemplo, por vascones⁸⁵³.

El reclutamiento de estas unidades se hizo en poco tiempo, como mucho en dos meses, pues ya estaban operativas antes de la muerte de Nerón, acaecida el nueve de junio. Tres inscripciones halladas en Villalís (León) sitúan la fecha de fundación de la *legio VII Gemina* en el diez de junio. Pero esta fecha no puede corresponderse con la formación de esta legión en 68 porque es posterior a la muerte de Nerón⁸⁵⁴. Tal y como ha expuesto J. J. Palao esta fecha se correspondería con el reconocimiento oficial de la legión galbiana como *iusta legio* un día después de la muerte del tirano y la proclamación de Galba como nuevo emperador por parte del Senado. La leva sólo era legítima cuando tenía el permiso del emperador y la sanción del Senado y, por ello, hasta el ascenso al trono de Galba la legión que había reclutado en Hispania no se contaba oficialmente entre las que conformaban el ejército imperial⁸⁵⁵. P. Le Roux, por su parte, piensa que esa fecha no se refiere a la creación de esta primera *legio VII* reclutada por Galba, sino a su refundación tras la batalla de Cremona –momento en que recibió el apelativo de *Gemina* por contar con los restos de otra legión–, que él sitúa en el 10 de junio del 70⁸⁵⁶. Esta hipótesis, sin embargo, ya fue rebatida por G. Alföldy, al que sigue Palao⁸⁵⁷. Con todo, independientemente de la fecha oficial de su fundación, lo que nos interesa es que esta legión, como las unidades auxiliares, fueron reclutadas en muy poco tiempo, lo cual evidencia la eficacia del procedimiento de la leva y la capacidad de un gobernador para reclutar nuevas tropas en Hispania en un momento de crisis.

En cuanto al licenciamiento, existían tres tipos: la *honesta missio* (con honores), la *causaria missio* (motivada por problemas de salud, físicos o mentales) y la

⁸⁵² Suet. *Galba* 10.

⁸⁵³ Tac. *Hist.* IV, 33. Como han señalado varios autores, es difícil identificar las *alae* y cohortes reclutadas por Galba, así como adscribir a este período algunas de las constatadas en la epigrafía peninsular. Cf. Le Roux, *L'armée romaine...* cit. pp. 85-93; Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 45. J. Sanceru, *Galba ou l'armée face au pouvoir*, París, 1983, p. 61, ha propuesto que el *ala Sulpicia* atestiguada en Germania sería una de ellas.

⁸⁵⁴ Ha situado este diez de junio en el 68 A. Morillo, “El ejército romano en España”, en *Idem* (ed.), *El ejército romano...* cit. pp. 87-112, esp. p. 93.

⁸⁵⁵ *CIL* II, 2552 y 2554; *AE* 1911, 94, Cf. Palao Vicente, *Legio VII...* cit. pp. 47-49, nt. 28.

⁸⁵⁶ Le Roux, *L'armée romaine...* cit. pp. 152-153.

⁸⁵⁷ G. Alföldy, “Hispanien und das römische Herr. Bemerkungen zu Patrick Le Roux: *L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'invasion de 409*”, *Gerión* 3, 1985, pp. 379-410, esp. pp. 394-395.

ignominiosa missio (para aquéllos soldados que habían faltado a la disciplina militar y a los deberes que exigía el *sacramentum*)⁸⁵⁸. En cada uno de estos casos la propuesta dependía del oficial superior de cada legión o tropa auxiliar, luego pasaba por el gobernador y finalmente, si todo estaba en orden, se enviaba a Roma para que fuese confirmada por el emperador, que era el único con autoridad para conceder el licenciamiento. Este proceso aparece reflejado en los *diplomata* que se entregaban a los soldados licenciados. En ellos, el emperador aparece como la autoridad que concede el licenciamiento y los premios que lleva aparejados (para las tropas auxiliares, a menudo la ciudadanía), dado que todo ello estaba regulado por una *lex* imperial y el emperador ocupaba la cúspide de la jerarquía militar⁸⁵⁹. Sin embargo, en la práctica cotidiana el emperador o su cancillería se limitarían a dar el visto bueno al licenciamiento, depositando su confianza en el informe que les sería enviado por el gobernador provincial o, como mínimo, por el legado de la legión, que eran quienes tenían acceso al registro de los soldados y conocían sus méritos. Los procónsules, además, tenían el poder de otorgar condecoraciones a sus soldados en tiempo de guerra⁸⁶⁰.

El azar ha querido que no se haya conservado ningún diploma militar relacionado con un gobernador de Hispania, pero los testimonios relativos a Britania, Germania, África o Dacia pueden servirnos como ejemplos extrapolables a la Hispania Citerior. El modelo de estos diplomas estaba estandarizado y presenta siempre las mismas fórmulas. En ellos, la mención del gobernador se realiza con el fin de precisar bajo el mando de quién estuvieron los soldados beneficiarios del licenciamiento, *ciues* o *peregrini*⁸⁶¹. Primero se especificaban las unidades concretas de las que proceden estos individuos (*alae*, cohortes, legiones), luego la provincia en la que sirvieron y bajo qué gobernador: “[nombre de las unidades] *quae sunt in* [nombre de la provincia] *sub* [nombre del gobernador] *legato*”. A continuación, se mencionaba los años de servicio y

⁸⁵⁸ Macer 2 *de re milit.* (Dig. XLIX, 16, 13, 3): *Missionum generales causae sunt tres: honesta, causaría, ignominiosa. Honestae est, quae tempore militiae impleto datur; causaria, cum quis uitio animi uel corporis minus idoneus militiae renuntiatur; ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento soluitur. Et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest. Et si sine ignominiae mentione missi sunt, nihilo minus ignominia missi intelleguntur.* Las evidencias sugieren que los *causarii* recibían los mismos privilegios que aquéllos que obtenían la *honestae missio*, según J. B. Campbell, *The Emperor and the Roman Army*, Oxford, 1984, pp. 312-313.

⁸⁵⁹ J.-M. Lassère, *Manuel d'épigraphie romaine*, París, 2005, p. 797.

⁸⁶⁰ Tac. *Ann.* III, 21, 3.

⁸⁶¹ Ejemplo de *honestae missio* otorgada a un *ciuis*: RMD V, n° 335 (70 d.C.): *L(ucius) Titius L(ucii) f(ilius)*; ejemplos de peregrinos: RMD I, n° 3 (88 d.C.): *Dassius Dasentis f(ilius) Pannon(ius)*; III, n° 184 (178 d.C.): *Thiodus Rolae f(ilius) Dacus*. En los diplomas estos nombres están en dativo.

se exponían los premios que comportaba la *honesta missio* –la compensación económica, la ciudadanía romana (para los peregrinos), el *ius conubii* y el reconocimiento de las uniones con mujeres como matrimonio legal y de la legitimidad de los hijos habidos–, seguidos de la fecha y datación consular, el nombre del beneficiario, la mención del jefe de la unidad a la que pertenecía y la alusión al lugar donde la copia original de la ley que había confirmado este licenciamiento había sido fijada en Roma –primero en el Capitolio, luego en el Palatino y, finalmente, en el templo del Divino Augusto. En la segunda *tabella* de que se componía este diploma venían citados los siete ciudadanos romanos que habían dado fe de la fidelidad de la copia y de la autenticidad del diploma⁸⁶².

Dejando a un lado los abusos que se produjeron en la realización de la leva en los momentos posteriores a la conquista de un territorio, durante el Principado el servicio militar de los indígenas tuvo una gran relevancia más allá de su utilización en el mantenimiento de la paz y del control del territorio en el que estuviesen destacadas sus unidades; fue uno de los cauces que más coadyuvaron a la romanización de los indígenas de origen humilde.

Es innegable que, en el período posterior a la conquista de un territorio, los pueblos vencidos estuvieron obligados a proporcionar tropas auxiliares como parte de los tributos exigidos y llegaron a sufrir graves abusos por parte de los centuriones y soldados encargados de realizar la leva. Sin embargo, cuando la mera dominación militar dio paso progresivamente a la integración en las estructuras socio-políticas del Imperio, el servicio en las tropas auxiliares del ejército fue un importante medio de ascenso social e integración para los indígenas que no formaban parte de las aristocracias locales, al igual que lo fue para los *ciues Romani* plebeyos que sirvieron en las legiones.

En primer lugar, en los pueblos recién conquistados el servicio en el ejército proporcionaba un cauce por el que sus guerreros podían seguir ejerciendo como tales, y

⁸⁶² Véanse los ejemplos antedichos de *RMD*. También: R. Cagnat, *Cours d'épigraphie latine*, París, 1914, pp. 302-307, Lassère, *Manuel...* pp. 797-803.

Y los estudios reunidos en Eck – Wolff (ed.) *Heer und Integrations...* cit., en particular: E. Birley, “Before Diplomas, and the Claudian Reform”, pp. 249-257 y M. M. Roxan, “Observations on the Reasons for Changes in Formula in Diplomas circa AD 140”, pp. 265-292, estudios en los que se analizaba la evolución del sistema de licenciamiento y en las fórmulas empleadas en los diplomas durante el Principado, respectivamente.

con ello el poder romano no sólo aprovechaba de sus cualidades para el combate (muy reconocidas entre los lusitanos y los pueblos del Noroeste), sino que evitaba que una frustrante inactividad acabase conduciéndolos a una rebelión. En segundo, su convivencia o relación con soldados y mandos romanos los ponía en contacto directo con la lengua latina y las costumbres romanas, desde los hábitos de la vida cotidiana y la religión hasta ciertos principios del derecho romano y de su organización cívica que llegaban a conocer a través del reglamento y la organización militar. Asimismo, su pertenencia al ejército implicaba periódicas manifestaciones de lealtad hacia el emperador que reafirmaban su fidelidad al imperio y su sentido de pertenencia a una comunidad amplia. Finalmente, los premios y privilegios que solían acompañar al licenciamiento con honores y, sobre todo, la obtención de la ciudadanía romana, terminarían por hacer partícipe al soldado indígena de ciertos beneficios del imperio y le harían sentir con hechos que era reconocido como parte integrante del mismo. En este sentido, el servicio en el ejército romano fue una de las vías que propiciaron con más éxito la integración de parte los miembros de las comunidades indígenas del Noroeste de Hispania⁸⁶³.

En este proceso los gobernadores provinciales tuvieron un importante papel como responsables últimos de la leva y del mantenimiento de la disciplina militar en las tropas acuarteladas en su provincia, representando la personificación más alta del poder romano con la que podían tener contacto los indígenas que servían a sus órdenes. En Hispania destaca el legado imperial de la Citerior, ya que fue el único con una legión a su cargo durante el Principado y por la relevancia de las levas que se llevaron a cabo en una parte de su provincia (el Noroeste peninsular), que nutrieron numerosas unidades destacadas en diferentes frentes del Imperio. Los cuatro epígrafes votivos dedicados por gobernadores de la Citerior en León o sus cercanías –uno en época de Antonino Pío (hallado en Vegaquemada) y los demás a inicios del siglo III⁸⁶⁴– confirman su presencia periódica en el campamento de la *legio VII Gemina*, que visitarían aprovechando el viaje de ida o de vuelta a las sedes conventuales del Noroeste. Las propias relaciones

⁸⁶³ F. Jacques – J. Scheid, *Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C.-260 ap. J.-C.)*, París, 1992, pp. 156-159. Sobre el papel del ejército en la relación entre los indígenas del Noroeste y el poder romano ver: P. Le Roux, “Provincialisation et recrutement militaire dans le N.O. hispanique”, *Gerión* 3, 1985, pp. 283-308. Para el caso de África: Le Bohec, *La troisième... cit.* pp. 546-548.

⁸⁶⁴ Anexo II: nº 24-27. Tres son votos *pro salute principis* y serán analizados en la Tercera Parte. El otro (nº 25 de nuestro anexo) es una dedicación particular del gobernador T. Pomponio Próculo Vitrasio Polión y su mujer Faustina a las ninfas (*ERPL* 55).

establecidas por el gobernador con los notables indígenas locales durante sus visitas al Noroeste –unidas a las de sus legados– favorecerían, sin duda, su colaboración en el reclutamiento de hombres para el ejército, lo cual reforzaba también los lazos de fidelidad hacia el poder romano sin los que habría sido imposible mantener la paz interior⁸⁶⁵.

Los gobernadores frente a las amenazas internas: los latrones y los levantamientos locales.

Uno de los problemas más comunes entre los que podían alterar el orden interno de una provincia, tanto en Oriente como en Occidente, era el del bandidaje. Ya en el período tardo-republicano, tenemos notorios ejemplos de gobernadores provinciales que dedicaron suma atención y esfuerzo a este cometido: Cuando gobernó la Hispania Ulterior en 61 a.C. Julio César hubo de invertir bastante tiempo, según Dión Casio, en la represión de los bandidos lusitanos que asolaban las comunidades del noroeste de su provincia, hecho que dio pie a César a iniciar una nueva guerra contra los lusitanos que lo llevaría hasta la costa norte galaica⁸⁶⁶. Un año después, en Asia, Quinto Cicerón logró acabar con la amenaza de los *latrones* en la región de Misia, que hasta entonces habían asolado los caminos y llegado a saquear, incluso, templos y ciudades. Por ello, su hermano Marco no dudó en encomiar por carta su labor resaltando la importancia que ello tenía para la paz interior de la provincia⁸⁶⁷.

Durante el Principado esta amenaza interna de los bandidos o *latrones* estuvo siempre latente incluso en las provincias pacificadas más desarrolladas. En Hispania algunos epígrafes funerarios procedentes de regiones diversas informan de que el difunto fue *occisus a latronibus* (o similar)⁸⁶⁸, seguramente tras ser asaltado en el

⁸⁶⁵ Jacques – Scheid, *Rome et l'integration...* cit. p. 146.

⁸⁶⁶ Dio XXXVII, 52,1.

⁸⁶⁷ Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 25: (...) *sublata Mysiae latrocinia, caedes multis locis repressas, pacem tota prouincia constitutam, neque solum illa itinerum atque agrorum, sed multo etiam plura et maiora oppidorum et fanorum latrocinia esse depulsa.*

⁸⁶⁸ AE 1982, 512 (Algodonales, Cádiz, provincia de la Bética): *M(arci) Clodi Rufini an(norum) / XXIII [a]b(!) latroni/b(us) oc(c)isus est s(it) t(ibi) t(erra) l(euis)*; CIL II, 2968 (Oteiza, Navarra): *Calaetus Eques/i f(ilius) annorum XX / a latronibus oc/cisus Acnon ma/ter d(e) p(ecunia) [s(ua)]*; IRPV IV, 179 (Edeta, Requena, Valencia, provincia Citerior): *[-] Iunius L(uci) Iu-/ni f(ilius) Sosi/nai domo Gili/tanus h(ic) s(itus) e(st) / dolo [la]tron-/um manu o-/c(c)isus sum fili-/us et generes / hoc mihi f(ecerunt) m-/onumentum.*

camino mientras viajaba⁸⁶⁹. Esta lucha contra el bandidaje era, pues, un problema cotidiano, lo que obligaba a los gobernadores a rodearse de militares con experiencia en este tipo de situaciones incluso antes de partir hacia su provincia. Así, Frontón, una vez elegido procónsul de Asia, no dudó en incluir entre los miembros de su séquito a su amigo mauritano Julio Sénex, experto en la persecución y represión de los bandidos⁸⁷⁰. El séquito que seguía al gobernador en su itinerario por las sedes conventuales de la provincia era el mejor armado y por ello muchos viajeros decidían viajar con él⁸⁷¹. Los *latrones* eran un problema que inquietaba a todas las provincias, hasta el punto de que ocuparía un lugar permanente en los *mandata* imperiales, tal y como lo recoge Ulpiano en su tratado *de officio proconsulis*:

*Congruit bono et graui praesidi curare ut pacata atque quieta prouincia sit quam regit. Quod non difficile optinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus prouincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquerere debet et prout quisque deliquerit, in eum animaduertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest*⁸⁷².

Una de las principales misiones de los gobernadores era, pues, la represión de los bandidos, incluidos en la categoría de *mali homines*. Como ha señalado, B. D. Shaw, en el pensamiento político grecolatino el bandidismo representaba una forma de poder anterior al estado y, por tanto, un rasgo de primitivismo⁸⁷³. Desde un punto de vista jurídico, los *latrones* o *praedones* eran todos aquellos enemigos de Roma que no habían declarado (o a los que no se les había declarado) formalmente la guerra, detalle que los diferenciaba de los *hostes*⁸⁷⁴, y que indicaba de nuevo su primitivismo, pues no conformaban un estado legítimo y reconocido con el que se podía sostener una guerra

⁸⁶⁹ San Pablo, *Segunda carta a los corintios* 11, 26. Cf. B. D. Shaw, “El bandito”, en A. Giardina (cura) *L'uomo romano*, Roma-Bari, 1989, pp. 335-384, esp. p. 346.

⁸⁷⁰ Fronto *Ad Antoninum Pium* 7 (Van den Hout p. 167): *Ex Mauretania quoque uirum amantissimum mihique mutuo carum Iulium Senem ad me uocauim cuius non modo fide et diligentia, sed etiam militari industria circa quaerendos et continendos latrones adiuarer.*

⁸⁷¹ Epict. *Diat.* IV, 1, 94.

⁸⁷² Ulp. 7 *de off. procos.* (*Dig.* I, 18, 13, pr.).

⁸⁷³ Shaw, “El bandito”, cit. pp. 339 y 342-343. Eran considerados ‘outsiders’ contrarios al modo de vida civilizado que fomentaba el Estado romano, según W. Reiss, “The Roman Bandit (*latro*) as Criminal and Outsider”, en M. Peachin (ed.) *The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World*, Oxford, 2011, pp. 693-714, esp. p. 701.

⁸⁷⁴ Pomp. 2 *ad Q. Muc.* (*Dig.* L, 16, 118): “*Hostes*” *hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decreuimus: ceteri “latrones” aut “praedones” sunt.*

regular según los cánones establecidos para ello (*bellum*)⁸⁷⁵. Esta rígida categorización provocó, por tanto, que bajo la denominación genérica de *latrones* o *praedones* (λησται en las provincias helenófonas) se escondiesen fenómenos muy variados, abarcando desde los bandidos que actuaban de manera aislada organizados en pequeñas bandas de asaltadores –que encajarían en la imagen que hoy en día se tiene del bandidaje– hasta la verdadera amenaza de un poder ajeno al Estado que desafiaba a éste (es decir, el del Imperio Romano) a gran escala y de manera permanente (como, por ejemplo, lo fueron los piratas cilicios a fines de la República)⁸⁷⁶. Así pues, la calificación de *latrones* o de *hostes* dependía de la consideración que Roma tuviera de los enemigos que se le opusieran, en concreto de su reconocimiento como parte de una comunidad organizada políticamente –con la que se podían mantener las habituales relaciones oficiales entre estados– o no. En esa clasificación había, además, un juicio de valor de carácter moral⁸⁷⁷.

En Hispania, cuando las fuentes literarias antiguas hablan de la actividad de bandidos a los que el poder romano hubo de enfrentarse durante la conquista de la península, se refieren habitualmente a contingentes de guerreros pertenecientes a las comunidades indígenas enfrentadas a Roma que recurrían a una táctica propia de las guerrillas. El bandidaje podía ser consecuencia no sólo de la necesidad de una resistencia alternativa a las legiones romanas, sino de prácticas sociales propias de los pueblos indígenas: según Diodoro de Sicilia, los jóvenes lusitanos más pobres se echaban al monte con sus armas y, actuando de forma más o menos organizada en bandas de dimensiones considerables, bajaban a la llanura y se dedicaban al pillaje. Según el autor griego, el principal objetivo de estas bandas de ladrones lusitanos era el enriquecimiento personal⁸⁷⁸, pero estudios recientes han destacado el carácter iniciático de estas prácticas en el seno de una sociedad guerrera. Precisamente, en la semblanza que Dión Casio dedica al guerrero lusitano más famoso, Viriato, dice de él que fue un pastor que llegó a ser ladrón y luego, incluso, general⁸⁷⁹. En este sentido, el *latrocinium*

⁸⁷⁵ Shaw, “Il bandito” cit. p. 342.

⁸⁷⁶ Shaw, “Il bandito”, cit. pp. 338-341; Reiss, “The Roman Bandit...” cit. pp. 698 y 707.

⁸⁷⁷ Shaw, “Il bandito”, cit. pp. 343.

⁸⁷⁸ Diod. Sic. V, 34, 6.

⁸⁷⁹ Dio XXII, 73, 1. M. V. García Quintela, *Mitología y mitos de la Hispania prerromana* III, Madrid, 1999. No nos parece acertada la inclusión de Viriato en la categoría de “social bandit” o “national bandit” propuesta por S. L. Dyson, “Native Revolt Patterns in the Roman Empire”, *ANRW* II/3, pp. 138-175, esp. pp. 149-150, que sigue el modelo teórico de E. J. Hobsbawm, *Bandits*, Londres, 1969, pp. 13-49 y 63-64.

parece haber sido un mal especialmente endémico en Hispania durante el período tardo-republicano⁸⁸⁰, favorecido sin duda por la compleja orografía del territorio, que dificultaba el control de los pueblos que vivían en las montañas así como de las comunicaciones en el interior peninsular, menos poblado.

En época augustea fue muy conocido por su osadía el bandido Corocota, que llegó a presentarse ante el propio Augusto cuando se hallaba en Hispania para reclamar la recompensa ofrecida por su cabeza. Admirado de su valor, el *princeps* concedió a Corocota no sólo el dinero prometido por su captura sino que lo dejó marchar libre⁸⁸¹. A. Schulten propuso en su día que Corocota, al igual que Viriato, no era un simple bandido, sino el líder que dirigió la resistencia de los cántabros frente a Roma, dado que el término con el que lo califica Dión (ληστής) es también usado para referirse a las guerrillas y la raíz de su antropónimo sería céltica⁸⁸². Según este autor el episodio antedicho habría que fecharlo durante la estancia de Augusto en Hispania en la primera fase de las Guerras Astur-Cántabras (26-25 a.C.)⁸⁸³. Esta ha sido la tesis tradicionalmente aceptada por la historiografía.

Sin embargo, recientemente A. Canto la ha contestado en diversos foros de internet, señalando que el encuadramiento cronológico dado por Schulten a Corocota es muy especulativo, dado que Dión Casio lo menciona más tarde en su narración, en concreto cuando, a propósito de la muerte de Augusto, se detiene en hacer ciertas observaciones sobre su carácter y clemencia. Por ello, esta autora entiende que la entrevista entre Corocota y Augusto bien podría haberse producido en la segunda estancia del emperador en Hispania (16-13 a.C.). Además, Canto ha propuesto que este bandido fuese de origen norafricano, en base a paralelos de su antropónimo conocidos en este territorio, tanto en la epigrafía como en la literatura, retomando una hipótesis que en su momento fue descartada por Schulten⁸⁸⁴. Según Canto, su teoría del origen norafricano de Corocota vendría reforzada por las palabras de Dión Casio, que dice que era un ladrón que actuaba ‘en Iberia’ (Κοροκότταν γοῦν τινα ληστήν ἐν Ἰβηρίᾳ) y no

⁸⁸⁰ Así lo ve Dio, XXXVII, 52, 1.

⁸⁸¹ Dio LVI, 43, 3.

⁸⁸² *FHA* 5, p. 198.

⁸⁸³ A. Schulten, *Los cántabros y astures y su guerra con Roma*, Madrid, 1943, pp. 127 y 154-155.

⁸⁸⁴ A. Canto, "El testamento del cerdito Corocotta", <http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1149> (última visita 14/04/2015). Sobre la posible raíz norafricana del antropónimo *Corocotta*: Schulten, *Los cántabros...* cit. p. 155.

que era ‘de Iberia’⁸⁸⁵, pero, a nuestro juicio, esta interpretación resulta muy débil. Con todo, el resto de objeciones argumentadas por esta autora a la teoría de Schulten acerca del origen de Corocota resultan razonables y, de hecho, otros autores recientes son de la misma opinión⁸⁸⁶. De ser correcta, la hipótesis del origen norafricano de Corocota implicaría una reinterpretación de su figura, pasando a ser el primer bandido en sentido moderno del que conocemos sus correrías en Hispania. Pero el debate no parece estar cerrado.

Con todo, fuese o no Corocota cántabro y miembro de la resistencia indígena, lo cierto es que tras el 19 a.C. (y al menos hasta época de Nerón⁸⁸⁷) aún se mantuvieron pequeños grupos de insurgentes en las montañas que el poder romano ya no podía considerar *hostes* dado que la guerra se había dado por concluida. En este sentido ha de entenderse la noticia que da Velejo Patérculo de que el gobernador Publio Silio Nerva –que gobernó la Citerior en 19-16 a.C.– acabó con los *latrones* que rondaban por la provincia⁸⁸⁸, sin duda grupos aún activos de guerreros cántabros. En el último tercio del siglo I ya no tenemos noticia de más levantamientos ni focos rebeldes en Hispania, así que hemos de suponer que los *latrones* mencionados en la epigrafía (*vid. supra*) eran bandidos comunes, en su mayoría antiguos soldados, pastores abocados a la penuria o esclavos fugitivos⁸⁸⁹.

La noticia de Corocota revela, además, que las autoridades romanas (en este caso, excepcionalmente, el propio emperador) no sólo intentaban acabar con los *latrones* (fuesen del tipo que fuesen) por medio de las fuerzas armadas con que contaban, sino que también recurrían a la colaboración local a través de la promesa de cuantiosas recompensas. La represión del bandidaje no era una tarea sencilla en Hispania, dado que, como hemos dicho, se veía favorecido en determinadas regiones por la excesiva dispersión del poblamiento (interior de la península) o por la difícil orografía de las regiones montañosas, tanto en el Norte (Picos de Europa, las sierras de

⁸⁸⁵ *Idem.*

⁸⁸⁶ M. Cisneros Cunchillos – F. Marco Simón – F. Pina Polo – J. L. Ramírez Sádaba, “La situación de los pueblos cántabros antes de la conquista romana”, en J. R. Aja Sánchez – M. Cisneros Cunchillos – J. L. Ramírez Sádaba (coords.) *Los cántabros en la Antigüedad: La Historia frente al mito*, Santander, 2008, pp. 49-100, esp. pp. 60-63.

⁸⁸⁷ Última referencia a una revuelta astur: *CIL* XI, 395

⁸⁸⁸ Vell. II, 90: *Has igitur prouincias tam diffusas, tam frequentis, tam feras ad eam pacem abhinc annos ferme quinquaginta perduxit Caesar Augustus, ut quae maximis bellis numquam uacauerant, eae sub C. Antistio ac deinde P. Silio legato ceterisque postea etiam latrociniis uacarent.* Cronología: *Fasti Hispanienses* p. 7.

⁸⁸⁹ Shaw, “El bandito”, cit. pp. 352-356.

los Ancares y O Caurel...) como en el sur (Sierra Morena), y la semejanza de las acciones de los bandidos a las de una guerrilla: los asaltos eran imprevisibles y los bandidos locales se caracterizaban por su conocimiento del territorio y su rapidez de movimientos. La imposibilidad de un enfrentamiento en campo abierto hacía inútil el uso de una legión, sino que debían usarse pequeños destacamentos repartidos en puntos estratégicos del territorio y contar con la colaboración de la población local, que a veces se ponía del lado de los bandidos.

Un ejemplo paradigmático es el de Julio Materno, desertor del ejército que en época de Cómodo llegó a organizar un verdadero ejército de bandidos y desheredados, atraídos por las riquezas que repartía su jefe equitativamente. Con ese ejército asoló la Galia e Hispania, llegando a asaltar sus ciudades⁸⁹⁰. Según nuestra fuente, Herodiano, la magnitud de sus actividades pusieron en riesgo la paz de las provincias afectadas hasta el punto de que Materno y los suyos pasaron a ser considerados *hostes* y el emperador envió órdenes precisas a los gobernadores de la Galia e Hispania de que organizaran un ejército para acabar con ellos, acusándolos de haber permitido con su negligencia que esta amenaza hubiese ido *in crescendo*. El poder de Materno fue tal que llegó a preparar un complot para asesinar al emperador durante las *Hilariae* del 187 d.C.⁸⁹¹.

Aquellos lugares más alejados de las vías de comunicación principales y, por tanto, del itinerario conventual del gobernador (las áreas montañosas o el centro peninsular, con un poblamiento más disperso) estaban más desguarnecidos y eran presas muy succulentas para los bandidos, por lo que en ocasiones sus comunidades hubieron de organizar su propia defensa con contingentes locales improvisados como los que describe Apuleyo en su *Metamorfosis*⁸⁹². En Hispania contamos con el ejemplo de la *lex* de la colonia de Urso, en la Bética, que estipula en su capítulo 103 que sus magistrados jurisdicentes —duoviros o prefectos— debían encargarse de la defensa del territorio de la colonia, armando a sus conciudadanos si fuese necesario⁸⁹³.

⁸⁹⁰ J. Arce, “Inestabilidad política en Hispania durante el siglo II d.C.” *AEspA* 54, 1981, pp. 101-115, esp. pp. 112-113, se muestra escéptico en torno a los efectos que la revuelta de Materno tuvo sobre Hispania, interpretando las palabras de Herodiano como una “exageración típica” de este autor. Por nuestra parte, aunque es posible que sólo una parte de Hispania se viese afectada por ella (la Citerior), pensamos que la magnitud de esta revuelta no debe ser minusvalorada, teniendo en cuenta que Materno llegó a intentar el asesinato del propio emperador. Herodiano ha sido un autor despreciado durante mucho tiempo, pero en los últimos años se ha revalorizado su obra.

⁸⁹¹ Herod. I, 10, 1-3.

⁸⁹² Apul. *Met.* VII, 1. Cf. Millar, “The World...” cit.

⁸⁹³ Vid. Crawford, *Roman Statutes* I, cit. pp. 409 (texto) y 445 (pequeño comentario).

Algunas ciudades de Occidente incluso crearon magistraturas específicamente destinadas a su defensa frente a la bandidos, como la *praefectura arcendis latrocinii* de la colonia *Iulia Equestris Nouodunum* (Nyon), en la Germania Superior, asumida por ex duoviros, que habría funcionado entre finales del siglo II e inicios del III⁸⁹⁴. Y en ciertas provincias orientales llegó a existir un magistrado provincial, el irenarca, dedicado a ayudar al gobernador a mantener la provincia a salvo de bandidos. Conocemos su cometido y atribuciones concretas en Asia gracias a un fragmento transmitido por Marciano de las disposiciones acerca de este magistrado que Antonino Pío incluyó en su edicto cuando gobernó Asia en 134/135 d.C. En él estipula que el irenarca ha de encargarse de capturar a los bandidos y de proceder a un primer interrogatorio antes de remitirlos al procónsul⁸⁹⁵. Según Elio Arístides, el irenarca era elegido por el propio procónsul entre diez aspirantes propuestos por el *koinon* provincial⁸⁹⁶.

Aparte de los campamentos de las legiones que estuvieron presentes en la Hispania Citerior, en la resolución de estos problemas en la península el poder imperial se valió, por un lado, de la creación de “fuerzas” o campamentos menores en lugares estratégicos en los que situaron tropas auxiliares durante el siglo I d.C.⁸⁹⁷, y, por otro, ya en el siglo III, de las llamadas *stationes militum/beneficiarii*.

Como máxima autoridad militar provincial, los gobernadores de la Hispania Citerior y de la Lusitania, al igual que sus homólogos de otras provincias, tenían libertad para escoger la ubicación de los campamentos que necesitasen para garantizar

⁸⁹⁴ R. Frei-Stolba, “Recherches sur les institutions de Nyon, Augst et Avenches”, en M. Dondin-Payre – M.-T. Raepsaet-Charlier (eds.) *Cités, municipes, colonies: les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut-Empire romain*, París, 2009, pp. 29-95, esp. pp. 47-49; A. D. Manfredini, “*Municipii* e città nella lotta ai latrones”, en González (ed.), *Roma y las provincias...* cit. pp. 147-159, esp. pp. 151-159; L. Lamoine, *Le pouvoir local en Gaule romaine*, Clermont-Ferrand, 2009, pp. 302-303; Béranger, *Le métier...* cit. pp. 241-242. Según Shaw, “El bandito” cit. p. 360, este puesto fue también desempeñado por oficiales del ejército, siendo encargados de misiones especiales en zonas fronterizas entre provincias.

⁸⁹⁵ Marcian. 2 *de pub. iud.* (Dig. XLVIII, 3, 6, 1). Cf. V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto de Antonino Pio*, Milán, 1988, pp. 292-294; C. Brélaz, *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIème s. ap. J.-C.)*. *Institutions municipales et institutions impériales dans l'Orient romain*, Basilea, 2005, pp. 90-122.

⁸⁹⁶ Ael. Arist. *Or. Sacr.* IV, 72.

⁸⁹⁷ El conocimiento de los campamentos romanos en Hispania ha avanzado mucho gracias a recientes investigaciones arqueológicas. La problemática que entrañan excede el marco de este estudio. Remitimos a: Morillo Cerdán, “El ejército...” cit. pp. 107-109; C. Fabião, “El ejército romano en Portugal”, en Morillo Cerdán (ed.), *El ejército romano...* cit. pp. 113-134; J. M. Costa García, *Exército e território no Noroeste peninsular durante o período imperial romano*, Concello de Valga, 2011, pp. 81-90 y 129-140, y *Arqueología de los asentamientos militares romanos en la Hispania altoimperial (27 a.C.-ca. 280 d.C.)*, Santiago de Compostela, 2013 (tesis doctoral inédita), pp. 77-554; J. J. Palao Vicente, “Augusto y el ejército romano en la provincia de Hispania Citerior. ¿Nuevas respuestas a viejos interrogantes?”, *Veleia* 31, 2014, pp. 53-78, esp. pp. 55-61.

la seguridad de los viajeros y, por ende, del tráfico de mercancías y materias en los puntos clave del territorio. En este sentido, nada cambiaría con respecto al período republicano, salvo cuando el emperador en persona visitase la provincia. De hecho, un gobernador eficiente se encargaría de inspeccionar él mismo el territorio y supervisar los trabajos de construcción del campamento, según el modelo paradigmático del Agrícola taciteo. Como ha señalado D. J. Breeze, la participación personal de Agrícola en la creación de los campamentos en Britania no fue un hecho excepcional, sino que se adecuó a lo que solían hacer todos los gobernadores provinciales, sobre todo aquéllos que tenían mando sobre legiones⁸⁹⁸. Ahora bien, no cabe duda de que, una vez tomada la decisión, los gobernadores informarían puntualmente al emperador por carta y es posible que las modificaciones más relevantes en la distribución territorial de las tropas auxiliares se derivasen de la aplicación sobre el terreno de determinadas instrucciones imperiales contenidas en los *mandata* acerca de la necesidad de reforzar una u otra zona de la provincia en la que gobernadores precedentes hubiesen constatado la amenaza reiterada de bandidos y la dificultad de reprimirlos.

Las *stationes militum* fueron creadas por Augusto y confirmadas por Tiberio con la misión de luchar contra el bandidaje a lo largo de las vías de comunicación más relevantes en Italia y las provincias⁸⁹⁹. A partir de época de Trajano están atestiguadas *stationes* formadas por *beneficarii*, cuyos ejemplos más notorios son los de las *stationes* de *Sirmium* (Panonia Inferior) y *Celeia* (Nórico), en las que se han hallado numerosos altares dedicados por *beneficarii*. Sin embargo, la epigrafía indica que fue bajo Antonino Pío y Marco Aurelio cuando se extendió decididamente el modelo de las *stationes*, constituyendo una verdadera red de puestos con funciones militares y administrativas en las provincias con mayor presencia de tropas, sobre todo en aquellas fronterizas como las del *limes* renano-danubiano o Britania (cerca del muro de Adriano). El poder imperial concedió a los gobernadores provinciales la posibilidad de situar *stationes* en aquellos puntos que considerasen necesarios⁹⁰⁰. En Hispania, dos epígrafes votivos nos han revelado la existencia de dos *stationes*: una en *Segisamo*

⁸⁹⁸ Tac. *Agr.* 20. Cf. D. J. Breeze, “Agricola the Builder” en Breeze – Dobson, *Roman Officers...* cit. pp. 271-281. Otro ejemplo lo tenemos en las decisiones militares tomadas por Corbulón en Oriente: Tac. *Ann.* XIII, 35.

⁸⁹⁹ Suet. *Diu. Aug.* 32, 3 y Tib. 37, 1. Cf. Palao, *Legio VII...* cit. p. 304.

⁹⁰⁰ Dise Jr, “Trajan...” cit. p. 275 y “Variation in Roman Administrative Practice: the Assignments of *Beneficarii Consularis*” *ZPE* 116, 1997, p. 284-299 (ver tablas en p. 294-299); Gómez-Pantoja, “La estación...” cit. p. 266-280.

(Sasamón, Burgos) a finales del siglo II y otra en *Lucus Augusti* en época de Caracala. La primera dice lo siguiente:

[I(oui) O(ptimo) M(aximo) Iun(oni) Regin]a[e / et Genio] sta/[t]ionis
Segi/samonensium / [-] Aelius Mari/timus b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) / exedram /
cum basi / d(e) s(uo) f(aciendum) c(urauit)⁹⁰¹.

La de *Lucus Augusti*, por su parte:

Inuic(to) Mithrae / G(aius) Victorius Vic/torinus ((centurio)) l(egionis) VII G(emina) /
Antoniniana P(iae) F(elicis) / in honorem sta/tionis Lucensis / et Victoriorum / Secundi
et Vic/toris lib(ertorum) suor/um aram po/suit libenti / animo.⁹⁰²

Los gobernadores provinciales gozaban de libertad para crear o cerrar *stationes* en su provincia en función de las necesidades locales⁹⁰³. Pero no está claro qué funciones concretas asumiría el personal destinado en ellas. La epigrafía de las *stationes* conocidas en todo el Imperio no nos revela nada acerca de sus funciones, pues se trata, en su mayoría, de inscripciones votivas de altares dedicados a diversas divinidades, entre ellas Júpiter Óptimo Máximo, Juno, Minerva, Marte, Mercurio, Silvano, *Liber Pater*, el Genio del lugar o el de la propia *statio*, así como a dioses locales. Un notable porcentaje de los hallados en las *stationes* del área renano-danubiana –como la de *Sirmium*, o las de Stockstadt y Osterburken en los *agri decumates* de Germania Superior– incluyen la fecha y una datación consular y parecen haber sido erigidas con motivo del fin o de la renovación de su servicio en ellas. Asimismo, en *Sirmium* y Osterburken se han localizado los restos arqueológicos de dos edificios de un santuario cuidado por los *beneficarii* que sirvieron en estos lugares⁹⁰⁴. En cuanto a los dos ejemplos hispanos, la inscripción votiva de *Lucus Augusti* fue hallada en un mitreo y en

⁹⁰¹ Gómez-Pantoja, “La estación...” cit.

⁹⁰² AE 2003, 949; HEP 9, 1999, 418 y 14, 2005, 206.

⁹⁰³ Dise Jr, “Trajan...” cit. p. 283, con lo cual contradice su propia teoría del debilitamiento de los vínculos entre los gobernadores y los *beneficarii*.

⁹⁰⁴ Nelis-Clément, *Les beneficarii...* cit. p. 133-148.

Segisamo, según Gómez-Pantoja, podría haber existido un santuario similar a los citados en el limes renano-danubiano⁹⁰⁵.

Este autor ha sintetizado las diversas propuestas que la historiografía ha contemplado acerca de la misión administrativa de estos *beneficiarii* de las *stationes*: garantizar la seguridad del *cursus publicus*, vigilar las vías terrestres, proteger y administrar los *portoria*, actuar como policía o, bajo Septimio Severo, proceder al almacenamiento de la *annona militaris* en estos lugares. Empero, como bien señala este autor, “el problema es que las hipótesis avanzadas deben permitir tantas excepciones como los casos que adecuadamente resuelven”⁹⁰⁶. En el caso de *Segisamo*, el hecho de que la *statio* estuviera en el lugar que en el siglo I d.C. ocupó la *legio IV Macedonica* parece indicar que a finales del siglo II los gobernadores de la Hispania Citerior vieron la necesidad de volver a dotar a esa zona de una presencia constante de personal militar. En concreto, Gómez-Pantoja relaciona sus funciones con los *prata* militares que se hallaban delimitados allí desde el siglo anterior y, en particular, con la cría y adiestramiento de los caballos hispanos, tan apreciados, al igual que hacía la *cohors II Palmyrenorum*⁹⁰⁷. Sin descartar esta posibilidad, en nuestra opinión la situación estratégica de *Segisamo* en el recorrido viario que unía el Noroeste de la Citerior con el valle del Ebro y *Tarraco*, y la relativa lejanía de las comunidades de esta área respecto a la sede conventual a la que estaban adscritas (*Clunia*), invitarían al gobernador de la Citerior a situar en este enclave una *statio* con el fin de asegurar la presencia de agentes en la zona que mantuviesen el orden siguiendo sus instrucciones y pudiesen informarle de cualquier problema que surgiese en ella con prontitud⁹⁰⁸.

En lo que respecta a la *statio* de *Lucus Augusti*, su existencia no es de extrañar dada la relevancia de la ciudad como sede conventual y centro administrativo en época severa⁹⁰⁹. Los autores que han estudiado la inscripción han interpretado de diverso modo las funciones de esta *statio*, sin que parezca existir una postura dominante. Rodríguez Colmenero ha propuesto que funcionaría como una oficina de recaudación de

⁹⁰⁵ Gómez-Pantoja, “La estación...” cit. p. 269. *Contra*: Perea Yébenes, “Reflexiones sobre la inscripción...” cit., p. 175, que sostiene que “los modelos y funciones de las *stationes beneficiariorum* de Osterburken, *Sirmium* u otras zonas del limes danubiano en el siglo II d.C. no son extrapolables de ningún modo a una provincia periférica y pacificada en ese siglo como es Hispania”.

⁹⁰⁶ *Vid*: Gómez-Pantoja, “La estación...” cit. p. 270-271.

⁹⁰⁷ Gómez-Pantoja, “La estación...” cit. p. 272.

⁹⁰⁸ *Vid*: Plin. *Ep.* X, 74.

⁹⁰⁹ Como indica, por ejemplo, la presencia del experimentado liberto imperial Saturnino: *IRPLu* 23, p. 48-49.

los impuestos regionales, por ejemplo los *portoria*⁹¹⁰. A. Canto piensa que se trataría de una guarnición militar asentada en la ciudad, similar a la conocida en *Poetaunium* (Panonia)⁹¹¹ y la de *Segisamo*. Según esta autora, cuando una *statio* tenía una función más concreta, como la de oficina de recaudación, su cometido debía venir especificado epigráficamente en su denominación⁹¹². Por su parte, J. Mangas se inclina por la explicación de Canto⁹¹³ y Palao no descarta la de Rodríguez Colmenero, argumentando que el epígrafe fue hallado al lado de una de las puertas de la muralla (la de Santiago)⁹¹⁴. Empero, olvida que ésta fue construida más tarde, probablemente bajo Aureliano, y que el mitreo no tendría por qué estar al lado de la sede de la *statio*. Sí nos parece acertada la relación que Palao establece entre la *statio lucensis* y la situación de *Lucus* como nudo de comunicaciones en el Noroeste.

En nuestra opinión, los miembros de esta *statio* no sólo fueron empleados en el control territorial del ámbito lucense, sino que probablemente colaboraron con los gobernadores provinciales que visitaron la sede conventual en el desempeño de sus competencias jurisdiccionales. Se ignora si esta *statio* existía antes de Caracala o si perduró tras su reinado. Su asentamiento en *Lucus Augusti* podría deberse a la creación de la efímera provincia Hispania Superior, con la cual la *Gallaecia* habría quedado desgajada administrativamente de la Hispania Citerior –entonces rebautizada *Hispania Noua Citerior Antoniniana*–, perdiendo así el vínculo directo que hasta aquel momento había tenido con la *legio VII Gemina*⁹¹⁵. A nuestro juicio, el poder imperial podría haber dispuesto el establecimiento de esta *statio* en *Lucus Augusti* con el fin de dotar al gobernador de Hispania Superior de un cuerpo militar que lo ayudase en el gobierno de la nueva provincia inerme. Y nada impide pensar que se mantuviese en *Lucus* mientras existió esta provincia, probablemente durante el resto de la dinastía Severa.

⁹¹⁰ A. Rodríguez Colmenero, “Las nuevas *stationes lucensis et brigantina* en el Finisterre ibérico del Imperio Romano”, *Palaeohispanica* 5, 2005, pp. 873-892, esp. 877-878.

⁹¹¹ *CIL* XIII, 14354.30 = *ILS* 4247.

⁹¹² A. Canto, “*Frugifer Augustae Emeritae*. Algunas novedades sobre el epígrafe del procurador imperial Saturninus y el gran mitreo de Mérida”, en García Ruiz –Alonso del Real Montes –Torres Guerra – Sánchez Ostiz (coords.), *Vrbs aeterna...* cit. pp. 303-307, esp. p. 333, nt. 122.

⁹¹³ *HEp* 9, 1999, 418.

⁹¹⁴ Palao, *Legio VII...* cit. p. 295-296.

⁹¹⁵ Más detalles de la hipótesis sobre la Hispania Superior en Primera Parte. Capítulo 2. Cf. Alföldy, *Provincia Hispania Superior* cit. pp. 23-44; *Fasti Hispanienses* pp. 56-59.

La otra causa interna que podía poner en peligro la estabilidad de una provincia eran las sublevaciones o reacciones violentas de los propios habitantes locales contra vecinos o contra las autoridades romanas, que se podían producir como respuesta a diversos acontecimientos: las carestías prolongadas, las rivalidades locales (sobre todo en cuestiones territoriales)⁹¹⁶, los diferentes abusos que podían cometer los gobernadores u otros agentes imperiales, o, en fin, la inestabilidad resultante de un contexto de guerra civil (de la que hablaremos en otro punto).

En Hispania, las fuentes nos informan de dos levantamientos armados contra el poder romano, ambos en el norte y durante el período julio-claudio, que tuvieron poca repercusión. Uno se produjo, según Dión Casio, poco después de la conclusión de la última guerra contra los cántabros en 19 a.C., en concreto tres años después. No hubo de revestir un gran riesgo para la estabilidad de la región, pues el historiador bitinio se limita a decir que los levantamientos de Hispania, al igual que los de Dalmacia, fueron sofocados prontamente⁹¹⁷. Esta celeridad en su resolución se debió, sin duda, a que aún se hallaban en la Hispania Citerior las legiones que habían participado en la fase final de las Guerras Cántabras y a que se trataría de grupos armados pequeños formados por los últimos insurgentes. El hecho de que Augusto visitase Hispania un año después (15 a.C.) y procediese a sancionar su reorganización administrativa definitiva es un signo de que la península se daba por plenamente pacificada. Por precaución dejó tres legiones al mando del gobernador de la Hispania Citerior, la *IV Macedonica*, con campamento en Herrera de Pisuergra (Palencia), la *VI Victrix*, en León, y la *X Gemina*, en *Petauonium* (Rosinos de Vidriales, Zamora); dos de ellas mandadas por un legado específico que debía controlar el Noroeste. Como veremos en la Segunda Parte, la labor de estas legiones tuvo también una vertiente administrativa y una influencia fundamental en el desarrollo de las infraestructuras provinciales, siempre bajo la supervisión de los gobernadores.

El segundo levantamiento tuvo lugar en época de Nerón, según se desprende de la inscripción honorífica dedicada por la colonia de *Ariminum* en 66 d.C. a su patrono Marco Vettio Valente, quien desarrolló una brillante carrera militar. En particular, la inscripción menciona que mientras este hombre fue centurión primipilo de la *legio VI*

⁹¹⁶ Véanse las peligrosas rivalidades entre *Lepcis* y *Oea* en África (Tac. *Hist.* IV, 50), *Lugdunum* y *Vienna* en la Galia (Ann. XVI, 13) o *Barcino* y *Tarraco* en la Hispania Citerior, según R. Syme, “Rival Cities, notably Tarraco and Barcino”, en *Roman Papers* IV, Oxford, 1982, pp. 74-93.

⁹¹⁷ Dio LIV, 20, 3 (16 a.C.): τὰ τε ἐν τῇ Δελματίᾳ καὶ τὰ ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ νεοχμώσαντα δι’ ὀλίγου κατέστη

Victrix, ésta (o una parte de sus efectivos) sofocó un levantamiento de los astures, y en esas operaciones sobresalió Valente hasta el punto de recibir diversas condecoraciones (*torques*, *phalerae* y *armillae*)⁹¹⁸. Se ignoran las causas concretas de ambas sublevaciones, pero sin duda estarían relacionadas con el rechazo de la implantación del tributo sobre los vencidos y con la pervivencia de los últimos grupos menores de resistencia indígena en las montañas en unas fechas tan tempranas del dominio romano. En ambos casos, las operaciones militares llevadas a cabo contra los sublevados hubieron de ser dirigidas por los gobernadores provinciales en su calidad de máxima autoridad militar de la provincia. En el levantamiento del 16 a.C. habría intervenido no sólo el gobernador de la Hispania Citerior, sino también el de la Transduriana, y es muy probable que el beneficio de la *immunitas* concedido a los *Paemeiobrigenses* por su lealtad en el Edicto de Augusto del 15 a.C. hallado en El Bierzo se derive precisamente de estos hechos. Las acciones militares llevadas a cabo contra los rebeldes astures en época de Nerón fueron dirigidas sólo por el gobernador de la Citerior –quizá Galba, a su frente desde el 60⁹¹⁹–, que seguramente delegó las operaciones a pie de campo bien en uno de los tres *legati Augusti* que tenía a sus órdenes, bien en el propio *legatus legionis* de la VI *Victrix*, dependiendo de la entidad de la revuelta y del riesgo que entrañase para el cuadrante noroccidental y, en particular, la zona minera de El Bierzo.

Excepto la de Julio Vindex –que tuvo como objetivo acabar con la tiranía de Nerón⁹²⁰–, las sublevaciones locales que conocemos durante el Principado se debieron, en concreto, a tres causas principalmente: la desmesura de la imposición tributaria, las levys y los abusos del poder coercitivo cometidos por los gobernadores, los procuradores imperiales o los soldados. Los germanos liderados por Arminio se rebelaron contra el poder romano en 9 d.C. porque su gobernador, P. Quintilio Varo, los trató con desprecio y dureza, “como si fueran esclavos”, sobre todo en la imposición de tributos, según Dión Casio⁹²¹. La sublevación de Floro y Sacrovir en las Galias en 21 d.C. se debió –cuenta Tácito– a que las comunidades (*ciuitates*) galas estaban muy endeudadas y echaban la culpa de ello a los tributos y la crueldad y soberbia de los

⁹¹⁸ CIL XI, 395, ll. 9-11: [*p(rimi) p(ilo)*] *leg(ionis) VI / Victr(icis) donis donato ob res prosper(e) / gest(as) contra Astures torq(uiibus), phaler(is), arm(illis)*.

⁹¹⁹ Suet. *Galba* 9.

⁹²⁰ P. A. Brunt, “The Revolt of Vindex and the Fall of Nero”, *Roman Imperial Themes* cit. pp. 9-32.

⁹²¹ Dio LVI, 18.

gobernadores⁹²². Por su parte, la de Búdica en Britania del 61 d.C. fue consecuencia de los ultrajes que ésta y su pueblo (los icenos) sufrieron a manos de centuriones y esclavos imperiales, que cometieron graves abusos y rapiñas en su antiguo reino y sobre los miembros de su propia casa, llegando a ser azotada con varas la misma Búdica y sus hijas violadas⁹²³. Finalmente, los bátavos que se rebelaron con Civil en el 69 lo hicieron a raíz de la codicia mostrada por los oficiales menores encargados de realizar la leva entre sus jóvenes, llegando a extorsionar a los ancianos e inválidos con incluirlos en las listas si no les pagaban⁹²⁴. A esto se añadió que ya no soportaban más las onerosas exacciones que pesaban sobre ellos, que se entendían como un mal de la esclavitud que se escondía tras la “paz”⁹²⁵. Por entonces, los galos, que no se habían rebelado, también se quejaron de las levadas y los tributos⁹²⁶.

En nuestra opinión, en todos estos casos ha de descartarse que las rebeliones indígenas estuviesen motivadas por sentimientos “nacionalistas” –teoría sostenida durante mucho tiempo por la historiografía–, puesto que, como bien ha señalado S. L. Dyson, es una interpretación anacrónica que nada tiene que ver con la mentalidad de sus protagonistas⁹²⁷. Otra cosa es que, como ha expuesto este mismo autor, ha de tenerse en cuenta que estos fenómenos sociales fueron muy complejos “and can operate on several levels of meaning and with reference to a variety of different goals”⁹²⁸; especialmente en la rebelión de Floro y Sacrovir y la de Civil⁹²⁹. Las rebeliones de los pueblos locales no fueron antirromanas ni estuvieron motivadas por un rechazo drástico y esencial del poder romano en sí mismo o de la integración en el imperio (esto es, de la romanización)⁹³⁰, sino que fueron la forma en que se manifestó el descontento de las élites locales frente a los abusos cometidos por los agentes del poder imperial en la

⁹²² Tac. *Ann.* III, 40, 1-3.

⁹²³ *Ann.* XIV, 31, 1-4; 35, 1.

⁹²⁴ Tac. *Hist.* IV, 14, 1; 17, 2; 32, 2.

⁹²⁵ *Hist.* IV, 14, 2.

⁹²⁶ Tac. *Hist.* IV, 26, 1.

⁹²⁷ Dyson, “Native Revolt...” cit. pp. 141-142.

⁹²⁸ Dyson, “Native Revolt...” cit. p. 159.

⁹²⁹ P. A. Brunt, “Tacitus on the Batavian Revolt”, *Roman Imperial Themes* cit. pp. 33-52.

⁹³⁰ En el caso de la rebelión de los bátavos del 69, es muy significativo que su líder, Civil, hiciera que sus tropas jurasen fidelidad a Vespasiano e invitase a que las legiones acantonadas en *Castra Vetera* (Xanten), que se habían mostrado favorables a Vitelio, hicieran lo mismo (Tac. *Hist.* IV, 21, 1). Esto prueba que la rebelión de Civil, como la de Vindex en 68, no fue antirromana. Civil era ciudadano romano y no rechazaba la cultura romana; la imagen bárbara que asumió durante algún tiempo (cabellos largos, pintura corporal...) fue, a nuestro juicio, sólo una estrategia para ganarse el apoyo incondicional de los cabecillas más longevos de los bátavos, como prueba el hecho de que recuperase las costumbres romanas una vez que derrotaron a las legiones. Así se deduce de Tac. *Hist.* IV, 61, 1.

provincia⁹³¹. Es muy elocuente, por ejemplo, que los primeros focos de la ira de los bátavos – al igual que sucedió en la revuelta de Búdica en Britania pocos años antes– fuesen los campamentos, donde vivían los soldados y oficiales menores que llevaban a cabo la recaudación de impuestos y la leva⁹³².

De estos ejemplos podemos deducir que la violencia es una respuesta característica de las provincias recién integradas, y se derivó tanto del traumático recuerdo de la guerra de conquista, aún reciente, como de que los cauces legales de que disponían las élites de sus comunidades para interaccionar con el poder imperial al margen de los gobernadores y procuradores (el *concilium prouvinciae*, el flujo de legaciones) eran todavía débiles. En las provincias plenamente integradas que gozaban de una cultura cívica de larga tradición (Asia, Acaya) o en aquellas en las que las estructuras gubernativas provinciales introducidas por Roma estuviesen plenamente implantadas, paralelamente a la extensión del proceso de municipalización (Bética, África Proconsular), las élites locales tenían una importante herramienta para interactuar con los gobernadores y el propio poder central: el *concilium prouvinciae*. El *concilium* ofrecía a los notables provinciales un canal a través del cual podían atraer con más fuerza la atención del gobernador y presentarle sus quejas o proposiciones y, en caso de sufrir un mal gobierno, les proporcionaba la posibilidad de denunciarlo en Roma ante el emperador y recibir una compensación por los abusos sufridos. Era, pues, un contrapeso local al poder del gobernador.

En cambio, en las provincias recientes, la debilidad de las estructuras políticas provocaba que, cuando los gobernadores fuesen ineptos o corruptos, los habitantes de su provincia estuviesen más expuestos a su arbitrariedad y la del resto de agentes imperiales –sobre todo de los soldados y oficiales inferiores del ejército que tenían un contacto cotidiano con la población local–, ya que apenas tenían la posibilidad de denunciar ante una autoridad superior (el gobernador y, sobre todo, el emperador) sus desmanes cuando se producían. Hasta tal punto dependían de la voluntad de los gobernadores las relaciones entre el poder central y la periferia que se establecían en el

⁹³¹ Véanse las palabras que Civil dirige al prefecto Alpinio Montano, enviado ante él por Antonio Primo con el fin de hacer abandonar las armas: '*Egregium*' inquit '*pretium laborum recepi, necem fratris et uincula mea et saeuissimas huius exercitus uoces, quibus ad supplicium petitus iure gentium poenas reposco. Vos autem Treuiri ceteraeque seruientium animae, quod praemium effusi totiens sanguinis expectatis nisi ingratham militiam, immortalia tributa, uirgas, securis et dominorum ingenia?*' (Tac. Hist. IV, 32).

⁹³² Tac. Hist. IV, 18, 1.

período inmediatamente posterior a la conquista y que tenían como lugar de referencia la sede conventual.

En el discurso que pronunció ante los notables locales al inicio de la rebelión bátava, Civil recuerda con amargura que el gobernador provincial nunca los honraba con su visita y que ello los abocaba a sufrir malos tratos por parte de los prefectos y centuriones enviados a su territorio⁹³³. Los gobernadores jugaban un papel de gran relevancia en el afianzamiento de la fidelidad de las élites locales hacia el poder romano. La estabilidad interna dependía de su colaboración y los gobernadores debían esmerarse en demostrar que el nuevo contexto político beneficiaba a aquéllos que cooperaban y que el premio de la ciudadanía implicaba ventajas y derechos reales en la provincia. En este sentido, su recorrido anual por las sedes conventuales de la provincia era esencial, pues su presencia era entendida por las élites locales como una muestra del interés de Roma hacia ellos. En el origen de todas las revueltas antedichas se manifiesta un sentimiento de desprotección, de desamparo, en las élites locales ante los abusos de los agentes imperiales, que son entendidos como una traición por parte del poder imperial, sobre todo por aquéllos que ya eran ciudadanos romanos como Arminio, Floro y Sacrovir o Civil y Clásico.

Los gobernadores debían velar en todo momento por el bienestar de sus gobernados –sobre todo si se trataba de *ciues*– y asegurarse de que reinara el orden necesario en el contexto general de la provincia y en el interior de cada ciudad con el fin de que éstas no decayesen y la provincia gozara de paz. Para ello, recurrían, en primer lugar, a medidas preventivas como el control estricto de sus subordinados. Tácito, de nuevo, lo expresó de manera magistral a propósito de las acciones de su suegro Agrícola en Britania:

Ceterum animorum prouinciae prudens, simulque doctus per aliena experimenta parum profici armis, si iniuriae sequerentur, causas bellorum statuit excidere. A se suisque orsus primum domum suam coercuit, quod plerisque haud minus arduum est quam prouinciam regere. Nihil per libertos seruosque publicae rei, non studiis priuatis nec ex commendatione aut precibus centurionem militesue adscire, sed optimum quemque fidissimum putare. Omnia scire, non omnia exsequi. Paruis peccatis ueniam, magnis seueritatem commodare; nec poena semper, sed saepius paenitentia contentus esse;

⁹³³ Tac. *Hist.* IV, 14, 13.

*officiis et administrationibus potius non peccaturos praeponere, quam damnare cum peccassent.*⁹³⁴

Era fundamental que el gobernador supiese escoger hombres adecuados para los puestos de libre designación, desde los miembros de su *cohors amicorum* que lo acompañaban desde Roma hasta los propios esclavos y libertos imperiales y propios que empleaba en tareas de la administración cotidiana. Y cuando tenían pruebas de que uno de sus colaboradores había abusado de su posición y cometido delitos habían de informar al emperador y, o bien lo castigaban ellos mismos, o bien lo debían enviar a Roma⁹³⁵.

Por otro lado, los gobernadores buscaban en todo momento mantener la estabilidad en las comunidades de su provincia, supervisando el buen funcionamiento de las instituciones de los municipios y colonias, colaborando con sus magistrados e interviniendo, cuando fuese necesario, en sus cuentas y obras públicas⁹³⁶, y, en las zonas poco romanizadas, coadyuvando al desarrollo de las primeras cabeceras administrativas en las zonas poco romanizadas. Además, su papel como máxima autoridad judicial provincial y árbitro imparcial de las disputas entre comunidades o entre éstas y particulares –muchas de ellas, como hemos visto, de índole territorial– ofrecía garantías jurídicas a sus gobernados y abortaba las tensiones fruto de las rivalidades locales, que podían ser muy antiguas. Por tanto, el comportamiento de los propios gobernadores era decisivo, pues podía ser también motivo de revueltas y, peor aún para los intereses del Imperio, podían llegar a hacer cundir la deslealtad hacia el poder imperial.

El gobernador frente a las amenazas externas:

En su misión de mantener su *prouincia pacata y quieta*, los gobernadores provinciales tuvieron que hacer frente también a las amenazas provenientes del exterior

⁹³⁴ Tac. *Agr.* 19, 1, 3. Otro ejemplo en Dio LXXIII, 11, 3-4: En época de Marco Aurelio, Aufidio Victorino, tanto durante su gobierno de Germania como en el de África, tomó serias precauciones para evitar que sus legados aceptasen ningún tipo de soborno. La relevancia del control sobre los subordinados era ya resaltada por Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 10-13.

⁹³⁵ Plin. *Ep.* VI, 22, relata un ejemplo de esto a su amigo Caestrio Tirón precisamente para que tomase las debidas precauciones con sus colaboradores cuando asumiese el proconsulado de la Bética. Cf. Sherwin-White, *The Letters...* cit. pp. 381-383.

⁹³⁶ *Vid.* Segunda Parte.

de sus fronteras que podían suponer una invasión del territorio provincial. En las provincias contiguas a los *limites* del imperio era especialmente importante tomar medidas preventivas como mantener en plena forma, bien disciplinados y alerta a los soldados y tener un buen conocimiento de los movimientos de los pueblos limítrofes bárbaros y el estado de las relaciones que mantenían entre ellos, pues existía el riesgo constante de que comenzase una nueva guerra. En lo que respecta a la disciplina militar, era muy relevante el contacto directo del gobernador con sus soldados y que él mismo supervisase el estado del campamento y el juramento de fidelidad que debían prestar al emperador anualmente o en el momento de la proclamación de uno nuevo⁹³⁷. De ahí que lo primero que hacían los gobernadores de una provincia fronteriza clave como Germania tras entrar en la provincia era ir a conocer a sus legiones y asegurar su adhesión⁹³⁸.

Una de las descripciones más detalladas de la relación establecida por un gobernador con sus legiones tras su ingreso en la provincia nos la ofrece Tácito a propósito de las acciones de Gneo Calpurnio Pisón como legado de Siria. A pesar de que se trata de un retrato negativo, podemos deducir de él la conducta que en su tiempo se esperaba que asumiese un buen gobernador, pues Tácito no hace sino presentar una inversión sistemática de la imagen del buen gobernador:

*Et postquam Syriam ac legiones attigit, largitione, ambitu, infimos manipularium iuuando, cum ueteres centuriones, seueros tribunos demoueret locaque eorum clientibus suis uel deterrimo cuique attribueret, desidiam in castris, licentiam in urbibus, uagum ac lasciuientem per agros militem sineret, eo usque corruptionis prouectus est ut sermone uulgi parens legionum haberetur*⁹³⁹.

Pisón favorece con larguezas a los soldados de ínfima condición, destituye a los antiguos centuriones y a los tribunos severos, permite la desidia en los campamentos y la licencia en las ciudades, deja vagabundear a los soldados por los campos, y fomenta,

⁹³⁷ Presidencia del juramento de los soldados al emperador: Tac. *Hist.* II, 80 (Muciano en Siria, en favor de Vespasiano, 69 d.C.); Plin. *Ep.* X, 52 y 102.

⁹³⁸ Galba se destacó por su severidad en la aplicación de la disciplina militar: Suet. *Galba* 6, 2-3. También el futuro emperador Vitelio, cuando asumió el gobierno de Germania Inferior se preocupó de tomar contacto inmediato con sus soldados, aunque él pretendió ganárselos relajando la disciplina (Suet. *Vitel.* 7, 3-8, 1).

⁹³⁹ Tac. *Ann.* II, 55, 5.

en fin, la corrupción⁹⁴⁰. Es decir, acabó con el fundamento rector de una legión, la disciplina, al eliminar todas aquellas condiciones que la aseguraban: la severidad en las costumbres, el mantenimiento en los puestos clave del centurionado y el tribunado a hombres veteranos que gozaban de autoridad dentro de la legión y que garantizaban el control de la soldadesca, proclive a desmanes que podían perjudicar a la población local y llevarla a rebelarse contra el poder romano, como hemos visto antes. Este retrato del mal gobernador incide de nuevo en la gran relevancia que tenía para el poder imperial que los gobernadores mantuvieran bajo control a sus soldados y subordinados. También a los miembros de su *cohors amicorum* y a su propia esposa⁹⁴¹. Según Tácito, la esposa de Pisón, Plancina, no sólo participó activamente en sus intrigas, sino que frecuentaba el campamento de las legiones y presenciaba los ejercicios marciales de los soldados⁹⁴². El ejército asentado en las provincias debía contribuir a la seguridad interna y externa de la misma y al buen desarrollo de la administración provincial, pero una pérdida de la disciplina podía traer graves consecuencias y convertir al ejército que asegurara la paz en una plaga para la población local. El gobernador era el máximo responsable de evitar tales desmanes⁹⁴³.

En Hispania, los gobernadores de la Citerior hubieron de velar por el mantenimiento de la disciplina de los soldados de *legio VII Gemina* y las tropas auxiliares allí donde estuvieron destacados, sobre todo en el Noroeste y durante el siglo I, pues, como hemos dicho, era en los territorios recién conquistados donde las

⁹⁴⁰ Tácito vuelve a repetir estas acusaciones por boca de Tiberio más adelante: *Ann.* III, 12, 3.

⁹⁴¹ *Juv. Sat.* VIII, 127-130.

⁹⁴² *Tac. Ann.* II, 55, 6. En 21 d.C. hubo un debate en el Senado en el que se planteó la cuestión de si era conveniente que la esposa de un gobernador lo acompañase a su provincia. Algunos senadores, encabezados por Severo Cecina, pensaban que las mujeres tenían un carácter débil y podían caer en vicios que comprometerían a su marido en el desempeño de sus funciones oficiales. La mayoría, sin embargo, se opuso a esta medida, siguiendo la opinión de Valerio Mesalino (*Tac. Ann.* III, 33-34). Empero, esta cuestión no quedó cerrada. Unos años después se aprobó en el Senado la propuesta de que los gobernadores fuesen responsables de los actos de sus esposas (*Ann.* IV, 20, 4). Este senadoconsulto es recordado por Ulpiano cuando recomienda que los gobernadores dejasen a sus esposas en Roma: *Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat Senatum Cotta et Messala consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et uindicta exigatur* (*Dig.* I, 16, 4, 2).

⁹⁴³ Otro ejemplo de la importancia de la acción personal de los legados imperiales en el mantenimiento de la disciplina de las legiones se produjo en 14 d.C. Al poco de ser confirmado Tiberio como *princeps* por el Senado, las legiones de Panonia y de Germania Inferior intentaron lograr mejoras en las condiciones de su servicio mediante la fuerza. En Panonia, el legado imperial Junio Bleso se apresuró a censurar su falta de disciplina, logrando aplacarlos momentáneamente (*Tac. Ann.* I, 18, 3 y 19). Con todo, fue necesario que Tiberio enviase a su hijo Druso en su nombre. El relato completo de estos hechos en: *Tac. Ann.* I, 18-30. A las legiones de Germania Inferior las aplacó Germánico, que era su general en jefe, enmendando las malas decisiones tomadas por el legado Cécina (*Tac. Ann.* I, 31-51).

comunidades estaban más expuestas a los abusos de los cuadros inferiores de la administración.

Para controlar los movimientos de los pueblos vecinos, los gobernadores se valían de informadores, bien indígenas que pertenecían a los pueblos aliados vecinos, bien espías y exploradores que formaban parte de la legión o destacamentos militares que todo gobernador tenía a su servicio. Gracias a la rapidez con que Julio César fue informado de la decisión de los helvecios de atravesar la Galia Transalpina, pudo llegar a tiempo a la provincia desde Roma y preparar su defensa⁹⁴⁴.

Durante el Principado, como en la República, las guerras con pueblos limítrofes se iniciaron como resultado –o bajo el pretexto– de una agresión previa por parte de los bárbaros⁹⁴⁵. Un ejemplo recurrente es el de Julio César, quien justificó las acciones bélicas que le llevaron a la conquista de las Galias como medidas necesarias para la conservación de su provincia y para la defensa tanto de los intereses romanos como de los pueblos galos aliados de Roma que se veían también amenazados⁹⁴⁶.

Los gobernadores provinciales nunca tuvieron potestad para declarar una guerra sin permiso del Senado y del Pueblo Romano. Además, como consecuencia de los principios del *bellum iustum*, el inicio de la guerra (al igual que los tratados de paz) debían estar refrendados por los sacerdotes *fetiales*, que realizaban una serie de rituales con los que se buscaba la aquiescencia de los dioses⁹⁴⁷. Durante el Principado, las formalidades existentes durante el período republicano fueron respetadas. Contamos con escasos testimonios de la actuación de los *fetiales* en este período, pero sabemos que este colegio sacerdotal fue revitalizado por Augusto dentro de su política de recuperación de la tradición y de mantenimiento de la *pax deorum*. Él mismo y algunos miembros de su familia formaron parte de él y, ya en 32 a.C. fue el propio Octaviano el que realizó como *fetialis* los ritos requeridos ante el templo de *Bellona* antes de iniciar la guerra contra Cleopatra⁹⁴⁸. En el 178 d.C. Marco Aurelio hizo lo mismo antes de

⁹⁴⁴ Caes. *B.G.* I, 7.

⁹⁴⁵ W. V. Harris, *War and Imperialism in Republican Rome, 327-70 BC*, Oxford, 1985, quien desmontó la teoría del “imperialismo defensivo” romano hasta entonces arraigada en la historiografía.

⁹⁴⁶ Caes. *B.G.* I, 11 (los Eduos le piden ayuda)

⁹⁴⁷ Varro *De lin. lat.* V, 85. Cf. J. Rich, “The *fetiales* and Roman International Relations”, en J. H. Richardson – F. Santangelo (ed.) *Priests and State in the Roman World*, Stuttgart, 2011, pp. 187-242, esp. pp. 190 y 204-209.

⁹⁴⁸ Dio L, 4, 4-5.

iniciar la guerra contra los marcomanos⁹⁴⁹, de lo que se deduce que a partir de Augusto todos los emperadores se valieron de su pertenencia al colegio de los *fetiales* para controlar la vertiente religiosa de las declaraciones de guerra. Asimismo, otra forma de control del poder central sobre el mando militar que tenían los gobernadores radicaba, como hemos visto, en que ninguno podía realizar una leva o licenciar soldados sin permiso imperial.

A esto hay que sumar la importante relación establecida desde Augusto entre el emperador y los gobernadores con mando sobre legiones. Al margen de los legados imperiales, que, como delegados del *princeps*, actuaban siempre siguiendo las instrucciones y según una clara cadena de mando, los propios procónsules que mandaron legiones en época de Augusto y Tiberio, a pesar de contar con *imperium* y *auspicia* propios, mantuvieron un estrecho contacto con el emperador. Cuando el procónsul de Macedonia M. Antonio Primo fue acusado de iniciar una guerra contra el pueblo tracio de los odrisos sin permiso del Senado y el Pueblo Romano en 23 a.C., se defendió alegando que había seguido las instrucciones de Augusto⁹⁵⁰. Asimismo, los últimos dos procónsules enviados a África para acabar con la rebelión de Tacfarinas, Quinto Junio Bleso (21/23 d.C.) y Publio Cornelio Dolabela (23/24), fueron elegidos *extra sortem* en el Senado siguiendo la recomendación de Tiberio⁹⁵¹, que, según se desprende de la narración de Tácito, durante toda la guerra fue tenido como la mayor autoridad militar en Roma. En lo que respecta a la subordinación efectiva de estos procónsules al emperador es muy significativo un comentario que hace Tácito acerca de Dolabela cuando no opuso resistencia a la decisión de Tiberio de retirar la legión IX de África ante el buen curso de la guerra: según el agudo historiador, Dolabela no se quejó porque “temía más las órdenes del *princeps* que la incertidumbre de la guerra”⁹⁵². Esto confirma, además, que al menos este procónsul recibió órdenes (*iussa*) del emperador, como mínimo en lo que respecta a la estrategia que debía seguir en ella, e induce a pensar que también las habrían recibido sus predecesores en la dirección de la guerra⁹⁵³.

⁹⁴⁹ Dio LXXII, 33, 3.

⁹⁵⁰ Dio LIV, 3, 2. Cf. Hurlet, *Le proconsul...* cit. p. 137.

⁹⁵¹ Tac. *Ann.* III, 35 (elección de Bleso, 21 d.C.). Cf. Hurlet, *Le proconsul...* cit. p. 94-95.

⁹⁵² *Ann.* IV, 23: (...) *Caesar post res a Blaeso gestas quasi nullis iam in Africa hostibus reportari nonam legionem iusserat, nec pro consule eius anni P. Dolabella retinere ausus erat iussa principis magis quam incerta belli metuens.*

⁹⁵³ Otra cosa es si esas órdenes les eran consignadas antes de su partida en forma de *mandata* similares a los de los legados imperiales o por carta una vez que se hallaban en la provincia.

Según Hurlet, la subordinación de Dolabela sería también de tipo jurídico, pues habría actuado bajo los auspicios de Tiberio⁹⁵⁴.

Pero al margen de la declaración de guerra oficial por parte de Roma y de la estrategia general que debían seguir en tiempo de guerra y en tiempo de paz en las fronteras, las fuentes muestran que los gobernadores con mando sobre legiones gozaron de un gran margen de maniobra cuando tuvieron que hacer frente a las amenazas de invasión de pueblos vecinos hostiles. Ciertamente es que informaban puntualmente al emperador, pero las decisiones tomadas sobre la forma en que tratar de solventar el peligro y la táctica concreta empleada en cada acción dependían de ellos. En este sentido, las fuentes muestran que la mayoría de gobernadores intentaban evitar la guerra y solían recurrir a la diplomacia o a medidas disuasorias que atemorizasen a los enemigos. Estas medidas eran especialmente frecuentes en las tensiones que se producían con el Imperio Parto en Oriente, dado que una guerra contra él hubiera desgastado mucho a Roma. Primero se recurría a la diplomacia⁹⁵⁵. Si esta fracasaba la siguiente opción era una demostración de fuerza. Así, por ejemplo, en el 40 d.C. el gobernador de Siria Lucio Vitelio –padre del futuro emperador– logró evitar la guerra con el parto Artábano, que tras ocupar Armenia planeaba invadir la provincia, atemorizándolo al salirle al encuentro por sorpresa en la ribera del Éufrates con el grueso de sus tropas. Vitelio aprovechó su superioridad militar para obligar al rey a jurar fidelidad al emperador –realizando sacrificios en nombre del Divino Augusto y del propio Calígula–, y obtener un tratado favorable a Roma⁹⁵⁶. Siete años después, otro legado de Siria, Vibio Marso, también amedrentó al parto Vardanes con una demostración de fuerza sin violencia que le hizo desistir de sus planes de invadir Armenia⁹⁵⁷. En Occidente también hallamos acciones similares. Por ejemplo, en 50 d.C., cuando los suevos depusieron al rey que Roma les había impuesto, Claudio decidió no intervenir, pero ordenó al gobernador de Panonia, Papelio Histro, que dispusiera sobre la ribera del Danubio la legión y las tropas auxiliares que tenía a su

⁹⁵⁴ Así lo afirma Vell. Pat. II, 129, 4: *Magni etiam terroris bellum Africum et cotidiano auctu maius auspiciis consiliisque eius breui sepultum est*. Cf. Hurlet, *Le proconsul...* cit. p. 94.

⁹⁵⁵ Tac. Ann. XIII, 9, 1. Corbulón y Umidio Cuadrato enviaron unos emisarios ante el rey parto Vologeses para conminarlo a no romper la paz.

⁹⁵⁶ Dio LIX, 27, 2-3.

⁹⁵⁷ Tac. Ann. XI, 10.

mando con el fin de evitar que los suevos se atreviesen a atacar la provincia ante la falta de respuesta directa de Roma en favor de los seguidores del derrocado Vanio⁹⁵⁸.

En Hispania la amenaza de los últimos pueblos no sometidos –astures y cántabros y, probablemente, los galaicos de las zonas montañosas del interior del Noroeste⁹⁵⁹– se resolvió a principios del principado de Augusto por la vía expeditiva de una guerra de conquista que duró ocho años (26-19 a.C.), aunque en ellos hubo breves períodos de tregua y tras el 22 sólo resistieron los cántabros⁹⁶⁰. En los años anteriores parece que las incursiones de estos pueblos en la provincia romana –al sur del río Duero y al este del Esla– se incrementaron –favorecidas por el período convulso que vivía la política interior romana–, dando lugar a razias cada vez más graves, pues obligaron al gobernador Tito Estatilio Tauro, íntimo amigo y colaborador de Octaviano/Augusto, y su sucesor Cayo Calvisio Sabino a realizar contra ellos una intervención militar de cierta magnitud, tal y como se deduce del hecho de que este último obtuviese un triunfo *ex Hispania*⁹⁶¹. Estos acontecimientos han llevado a algunos estudiosos a situar el inicio de las Guerras Astur-Cántabras en 29 a.C.⁹⁶², pero nosotros nos inclinamos por fechar la declaración oficial de guerra de Roma en 26 a.C., cuando, una vez que asegurada *a lungo* su posición preeminente en Roma, Augusto pudo por fin volver su vista a esta frontera occidental y asumir personalmente el fin de la conquista de la Península Ibérica.

Aunque es innegable que la guerra contra astures y cántabros fue la consumación de una antigua aspiración romana y que Augusto pretendió con ello

⁹⁵⁸ *Ann.* XII, 29, 2.

⁹⁵⁹ N. Santos Yanguas, “La conquista romana del N.O. de la Península Ibérica”, *Latomus* 41/1, 1982, pp. 5-49, p. 20.

⁹⁶⁰ Una en 25 a.C. (Dio LIII, 26, 1); otra en 22 a.C. (Dio LIV, 5, 3). En la primera fecha Augusto ya pensó haber logrado el sometimiento pleno de estos pueblos como demuestra que a su regreso a Roma clausuró por segunda vez las puertas del templo de Jano (Dio LIII, 26, 5; *RGDA* 13) y recibió su octava salutación como *imperator*. Cf. Barnes, “The Victories of Augustus” cit. pp. 21-26; Roddaz, *Marcus Agrippa*, cit., p. 409, J. Scheid, *Res Gestae Divi Augusti. Les hauts faits du divin Auguste*, París, 2007, p. 48.

⁹⁶¹ Dio LI, 20, 5 (Estatilio Tauro venció a una coalición de astures, cántabros y vacceos); *FHA* V, p. 184 (*Fasti Triumphales* 28 a.C.: Calvisio Sabino); Santos Yanguas, “La conquista romana...” cit. p. 6.

⁹⁶² A. Schulten, en *FHA* V, p.183; Santos Yanguas, “La conquista romana...” cit. p. 16, que atribuye los triunfos obtenidos por el triunviro Lépido y varios de los gobernadores que estuvieron en Hispania durante la década de los años 30 a.C. (Gn. Domicio Calvino, C. Norbano Flaco, L. Marcio Filipo y Ap. Claudio Pulcro) a operaciones militares llevadas a cabo contra astures y cántabros. Esta hipótesis es verosímil, pero no en todos los casos. Como ya señaló Schulten Lépido habría obtenido el triunfo por su victoria sobre Sexto Pompeyo, que había sido declarado *hostis* (*FHA* V p. 174), y Domicio Calvino por haber aplastado la rebelión de ceretanos que habitaban la Cerdaña y la comarca del Puigcerdá actuales (pp. 177-178). Calvino acuñó moneda en Osca conmemorando su victoria y en esta serie dejó plasmado su título de *imp(erator)*.

controlar las fuentes de riqueza del Noroeste (las minas auríferas), también es cierto que esta guerra tuvo como objetivo la pacificación definitiva de Hispania, necesaria para asegurar la estabilidad de sus provincias con el fin de favorecer la explotación de sus recursos y el desarrollo de las emergentes comunidades que habían sido fundadas o promocionadas durante el período republicano, dentro del programa augusteo de recuperación de la prosperidad económica y de la estabilidad política que las guerras civiles habían quebrado⁹⁶³.

No vamos a realizar aquí una descripción de los acontecimientos principales de estas guerras, pues otros estudiosos ya lo han hecho en profundidad⁹⁶⁴. Hemos de señalar, sin embargo, que en todas las narraciones antiguas de este conflicto que han llegado a nosotros⁹⁶⁵ se observa que los legados imperiales encargados de la guerra⁹⁶⁶ dirigieron las operaciones con gran libertad, sin que su subordinación legal al *princeps* diferenciara su *modus operandi* como generales del de los procónsules –véase el ejemplo antedicho de los que se enfrentaron a Tacfarinas en época de Tiberio. Como hemos dicho antes, fuera de la estrategia general de la ofensiva, las decisiones en torno al uso de las legiones, la toma de determinados puntos estratégicos y la elección de los lugares en los que fijar un campamento dependían, como es natural, de los legados imperiales, pues eran la máxima autoridad militar presente en el territorio. La intervención efectiva de Augusto en la dirección de la guerra sólo se hizo sentir en sus comienzos, cuando participó en ella en persona, pero cayó enfermo enseguida y delegó el mando en Antistio antes de haber conseguido realizar ningún avance reseñable. El envío de Agripa en 19 a.C. se debió a la indisciplina demostrada por los soldados, hastiados y angustiados por la duración de esta dura guerra de desgaste⁹⁶⁷, y a que

⁹⁶³ Una síntesis de las hipótesis manejadas sobre las causas (de índole militar, político y económico) de la guerra en Santos Yanguas, “La conquista romana...” cit. pp. 5-10.

⁹⁶⁴ Entre otros: Schulten, *Los cántabros y astures...* cit.; Syme, “The Conquest...”, cit. pp. 824-854; Tranoy, *La Galice...* cit. pp. 132-144; Le Roux, *L’armée romaine...* cit. pp. 52-69; Lomas Salmonte, *Asturia prerromana...* cit. p. 103 ss; Santos Yanguas, “La conquista romana...” cit. pp. 16-26.

⁹⁶⁵ Por orden según la fiabilidad y detalle de sus contenidos: Dio LIII, 25, 7-8; 29, 1-2; LIV, 5, 1-3; 12, 2-6; Flor. II, 33; Oros. VI, 21, 1-11; Vell. Pat. II, 90.

⁹⁶⁶ Desde la Citerior: C. Antistio Veto (27-24 a.C.); L. Elio Lamia (24-22 a.C.); C. Furnio (22-19 a.C.); P. Sillio Nerva (19-16 a.C.). Desde la Ulterior: P. Carisio (27-22 a.C.). A partir del 22 sólo hubo un único frente, el cántabro, que habría sido atacado únicamente por los legados de la Citerior.

⁹⁶⁷ A pesar de que se emplearon siete legiones en esta guerra (*I Augusta, II Augusta, IV Macedonica, V Alaudae, VI Victrix, IX Hispana y X Gemina*), la imposibilidad de enfrentarse a los enemigos en campo abierto, sino en terreno montañoso y en condiciones propias de una guerra de guerrillas, hicieron muy difícil que la superioridad numérica y técnica de los legionarios romanos se impusiera con rapidez. Cf. Le Roux, *L’armée romaine...* cit. p. 68. Sobre las legiones véase: Roldán Hervás, *Hispania y el ejército...* cit. pp. 188-190, 192-193, 194, 198, 205-206 y 208; Le Roux, *L’armée romaine...* cit. pp. 61-63; Santos

Augusto no podía permitir que siguiesen existiendo focos de resistencia importantes que pusiesen en tela de juicio una conquista que ya se había precipitado a dar por hecha en el 25 a.C.⁹⁶⁸

Desde el fin de las Guerras Astur-Cántabras, las provincias hispanas no hicieron frontera con ningún pueblo no sometido a Roma y ello coadyuvó a que viviesen un largo período de paz que sólo se rompió en época de Marco Aurelio con las dos invasiones de *Mauri*⁹⁶⁹, que según acuerdo general de la historiografía, habrían puesto en grave peligro la seguridad de las ciudades de la Bética en 171-172 y 177 d.C., obligando al emperador a tomar medidas excepcionales.

Cuenta la *Historia Augusta* que durante el principado de Marco Aurelio los *Mauri* estuvieron a punto de devastar “todas las Hispanias”, pero la acción de los legados imperiales acabó con ellos⁹⁷⁰. Además, en la Vida de Septimio Severo se dice que había sido elegido cuestor del procónsul de la Bética para el 171 pero no pudo dirigirse a ella porque estaba siendo saqueada por los *Mauri*, asignándosele la provincia de *Sardinia*⁹⁷¹. Tal y como ha mostrado Alföldy, estas noticias pueden ser completadas con algunos datos proporcionados por la epigrafía. En primer lugar, con la inscripción honorífica dedicada en Roma al influyente senador Cayo Aufidio Victorino, en la que se informa de que gobernó conjuntamente la Hispania Citerior y la Bética en calidad de legado imperial:

[C(aio) Aufidio C(ai) f(ilio) Mae]c(iano?) Victorino Mul[ui]o ----] / [----Marc]ellino
Rhesio Pel[----] / [----Nu]mis[i]sio Rufo Arrio Paul]ino ----] / [Camil?]lo Iust[o
Co]cceio Gall[o co(n)s(suli) II praef(ecto) Vrbi] / [Xuir]o sacris f[aciund]is sodali
fetial[i Hadrianali Antoni-]/[niano] Verian[o Ma]rciano leg(ato) Agg(ustorum) [pr(o)

Yanguas, “La conquista...”, pp. 27-41, quien también se detiene en la individuación de las posibles tropas auxiliares participantes, proponiendo las siguientes: *Ala II Gallorum Sebosiana*, *ala II Thrachum*, *cohors IV Gallorum*, *cohors IV Thracum equitata* y el *ala I Gigurrorum* (pp. 41-45). Estos tres últimos autores ven probable que también participase en la guerra la *legio XX Valeria Victrix*, aunque no está atestiguada en las fuentes literarias.

⁹⁶⁸ Dio LIV, 12, 2-6; Hor. *Ep.* I, 12, 25-29.

⁹⁶⁹ Procedentes probablemente de las montañas del Rif y obligados por una crisis de subsistencia. Cf. M. Bénabou, *La résistance africaine à la romanisation*, París, 1976, p. 150; Arce, “Inestabilidad política...” cit. p. 107.

⁹⁷⁰ SHA, *M. Antonin.* 21, 1: *Cum Mauri Hispanias prope omnes uastarent, res per legatos bene gestae sunt.*

⁹⁷¹ SHA, *Seuerus* 2, 3-4: *Post quaesturam sorte Baeticam accepit atque inde Africam petit, ut mortuo patre rem domesticam conponeret. Sed dum in Africa est, pro Baetica Sardinia ei attributa est, quod Baeticam Mauri populabantur.*

pr(aetore) prouincia Syriae] / [proco(n)s(suli) prou]inci]ae Africae leg(ato) Au[gg(ustorum) pr(o) pr(aetore) prouinciarum] / [Hispania]e Cite[riori]s et Baeticae [simul comiti imp(eratorum)] / [Diuorum A]ugg(ustorum) Ant[onini] et Veri in [expeditione germanica] / [prima] bis don[ato do]nis mil[itaribus coronis] / [aureis II c]oroni[s uallaribus II coronis muralibus II] / [coronis n]aua[libus II hastis puris III uexillis III] / [praef(ecto) alimento (?)]rum le[g(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) in Italia] / [Transpadana in qu]a auctor[ibus imp(eratorum) Diuis Augg(ustorum) Anto-]/[nino et Vero adm]inistrati[onem dilectus tironum] / [obtinuit? Leg(ato) A]ugg(ustorum) pr(o) pr(aetore) [prouincia Germaniae] / [Superioris curator operum locorumque publicorum?] / [----] / [Huic Senatus auctore imp(eratore) Caes(are) M(arco) Aurelio Commod]o] / [Antonino Aug(usto) Pio Germanico Maximo Sarmatico] / [Maximo] Brita[nnico statuam poni] hab[itu ciuili] / [in foro] Diui T(raiani) pecunia pub]lica c[ensuit]⁹⁷²

Como bien ha deducido Alföldy, la decisión de poner temporalmente la Bética bajo el mando de Aufidio Victorino se debe relacionar, sin duda, con la primera invasión de los *Mauri*, dado que se necesitaba la intervención tanto de un contingente armado de cierta entidad como de una flota que evitase que los invasores recibiesen refuerzos a través del Estrecho. Y las unidades de mayor entidad más cercanas eran la *legio VII Gemina* y la flota que protegía la costa de la Hispania Citerior⁹⁷³. Además, a pesar de que los autores que han estudiado estos ataques los circunscriben a la Bética⁹⁷⁴, en nuestra opinión es muy probable que la incursión hubiese alcanzado el interior nororiental de la provincia hasta el punto de poner en alerta a las comunidades vecinas de la Citerior –tal y como sugiere el fragmento de la ‘Vida de Marco Aurelio’ de la *Historia Augusta* al referirse a “*omnes Hispanias*”–, lo que haría más necesaria la unificación del gobierno de ambas provincias bajo el mando de un legado imperial. La situación se veía agravada por el esfuerzo militar que se acababa de emprender con motivo de la Segunda Guerra Marcománica, iniciada precisamente en 171 a raíz de una nueva invasión del *limes* danubiano. Marco Aurelio se hallaba en *Carnuntum* y necesitaba confiar en alguien fiel y eficaz que acabase de raíz con un problema que

⁹⁷² Sigo la edición y la cronología de Alföldy, *Fasti Hispanienses*, p. 38.

⁹⁷³ C. G. Starr, *The Roman Imperial Navy, 31 B.C.-AD 324*, Londres, 1960, pp. 189 y 205, ha propuesto que también habrían participado en la lucha contra los *Mauri* la flota de Miseno y la *Syriaca et Augusta* con base en el norte de África.

⁹⁷⁴ G. Alföldy, “Spain”, *CAH XI*, pp. 444-461, esp. p. 460; Arce, “Inestabilidad política...” cit. p. 105.

podía ser muy desestabilizador en el extremo Occidente. Aufidio Victorino era un senador consular de gran prestigio y probadas dotes militares (como muestra su exitosa carrera), cercano a la casa imperial, y, por tanto, el hombre de confianza idóneo para la misión.

Por último, el envío de Septimio Severo como cuestor a *Sardinia* en vez de a la Bética en esas fechas se derivaría, precisamente, del cambio de categoría administrativa de esta última. Al haber sido asignada a un legado imperial (Aufidio Victorino) ya no necesitaba de un cuestor. Para compensar este cambio excepcional en el titular del gobierno de la Bética, Marco Aurelio –fiel a su política deferente hacia el Senado–, convirtió *Sardinia* en provincia proconsular, a la que sí pudo ser destinado Septimio Severo⁹⁷⁵.

Alföldy también sitúa en este contexto bélico la información ofrecida por otras dos inscripciones honoríficas. Una, dedicada al senador Publio Cornelio Anulino, por su ciudad natal, *Iliberris* (Granada), recuerda que, tras el desempeño del proconsulado de la Bética, fue legado de la *legio VII Gemina*⁹⁷⁶. Según el sabio húngaro, habría sido el predecesor de Aufidio Victorino en el gobierno de la Bética (en 170-171) y, cuando se produjo la invasión de *Mauri*, Marco Aurelio habría decidido nombrarlo legado de la VII Gemina. Ciertamente, tenía un buen conocimiento de la provincia al ser natural de ella y de los recursos que podían poner a disposición de su defensa sus comunidades, dado que acababa de gobernarla⁹⁷⁷.

La otra inscripción está dedicada al procurador imperial Lucio Julio Vehilio Galo Juliano, que fue [*proc(urator) Aug(usti) e]t pra[ep(ositus)] uexillationis per Achaïam et Macedoniam et in Hispanias aduersus Castabocas et Mauros rebelles*⁹⁷⁸. La invasión de Macedonia y Acaya por parte de los castabocas se produjo en el 170 d.C., lo que induce a situar la intervención de Juliano en Hispania al frente de una *uexillatio* en

⁹⁷⁵ A. R. Birley, *Septimius Severus. The African Emperor*, Londres, 1971, p. 86; Talbert, *The Senate...* cit. p. 399.

⁹⁷⁶ Publio Cornelio Anulino: *CIL* II²/5, 623: *P(ublio) Cornel(io) P(ubli) f(ilio) Gal(eria) Anullino / Iliber(ritano) praef(ecto) Vr[b]i co(n)s(uli) proco(n)s(uli) / prou(inciae) Africae p[ra]et(ori) trib(uno) / pleb(is) q(uaestori) leg(ato) prou(inciae) Nar(bonens(is) proco(n)s(uli) pro]u(inciae) / [Ba]etic(ae) leg(ato) l[e]g(ionis) VII Gem(inae) / [P(iae) F(elicis) le]g(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prou(inciae) / [Ra]et(iae) curat(ori) aluei Ti[be]/[ris] et riparum - - -] / - - - - -*

⁹⁷⁷ Alföldy, “*Bellum Mauricum*” cit. p. 102; Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 83.

⁹⁷⁸ Juliano: *CIL* VI, 31856 (ll. 8-10).

171-172 d.C., a donde sin duda fue destinado por la pericia demostrada en la lucha contra este tipo de invasiones⁹⁷⁹.

A esto hay que añadir que muy probablemente se reclutaron nuevas unidades militares entre la población local con el fin de aumentar los efectivos presentes en la Bética. Así ha interpretado J. González la mención de una *cohors V Baeticae* en un epígrafe hallado a 15 km. al sur de la actual Osuna (antigua colonia de Urso). Según este autor, bien con motivo de esta invasión, bien como consecuencia de la del 177, el poder imperial autorizó la leva de reclutas en municipios y colonias de la Bética, que habrían dado lugar, por lo menos, a cinco cohortes de ciudadanos romanos⁹⁸⁰.

Así pues, todos los recursos militares de que disponía el poder romano en Hispania fueron empleados en la lucha contra estos *Mauri*⁹⁸¹, a la que Aufidio Victorino pudo poner fin en 172. Esta fecha se deduce, por un lado, de un diploma militar del 173 procedente de Cerdeña en el que se recuerda que su beneficiario combatió contra estos invasores en Hispania⁹⁸² y, por otro, del hecho de que los altos mandos que participaron en ella ocuparon otros cargos en los años siguientes⁹⁸³.

Sin embargo, la amenaza volvió a manifestarse pocos años después. Gracias a dos inscripciones honoríficas dedicadas al gobernador ecuestre de la Mauretania Tingitana Cayo Valio Maximiano por sendas ciudades béticas, *Singilia Barba* (Antequera) e Itálica⁹⁸⁴, sabemos que en 177⁹⁸⁵ la Bética sufrió de nuevo un importante ataque de los *Mauri*, que llegaron a asediar, al menos la primera de estas dos ciudades:

⁹⁷⁹ G. Alföldy, “*Bellum Mauricum*”, *Chiron* 15, 1985, pp. 91-109, esp. pp. 101-102. También: *Idem*, “Spain” cit. p. 460.

⁹⁸⁰ González, “*Cohors V Baeticae*”, cit.

⁹⁸¹ Según Alföldy, “*Bellum Mauricum*” cit. pp. 95-108, otro posible participante en una de estas luchas contra los *Mauri* es el *primipilus* Lucio Cornelio Potito, interpretando el *bellum mauricum* que se menciona en la inscripción que le dedican su mujer y su hijo en su ciudad, Liria (Valencia) (*CIL* II²/14, 131), como una referencia a estas invasiones. *Contra*: P. Le Roux, “L’armée romaine dans la Péninsule Ibérique sous l’Empire: bilan pour un décennie”, *REA* 94, 1992, pp. 231-248, esp. pp. 243-244, que piensa que ese *bellum mauricum* se refiere a la guerra desarrollada en África bajo Antonino Pío.

⁹⁸² Arce, “Inestabilidad política...” cit. p. 107.

⁹⁸³ Aufidio Victorino fue procónsul de África en 173/174, Cornelio Anulino fue legado pretoriano de Retio o Nórico y Grato Juliano desempeñó la praefectura classis Ponticae en 175. Cf. *Fasti Hispanienses* pp. 40, nt. 187, y p. 122; Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 84.

⁹⁸⁴ *Singilia Barba*: *CIL* II²/5, 783; Itálica: *CIL* II, 1120= *CILA* II, 378.

⁹⁸⁵ La *Tabula Banasitana* recoge una carta de Marco Aurelio y Cómodo dirigida a este gobernador en 177 d.C. Cf. W. Seston – M. Euzennat, “La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Comode, d’après la Tabula Banasitana”, *CRAI* 105/2, 1961, pp. 317-324; Alföldy, “*Bellum Mauricum*” cit. pp. 103-105.

*C(aio) Vallio Maxumiano / proc(uratori) Augg(ustorum) e(gregio) u(iro) / ordo Singil(ensium) Barb(ensium) / ob municipium / diutina obsidione / et bello Maurorum / liberatum / patrono / curantibus / C(aio) Fab(io) Rustico et / L(ucio) Aemil(io) Pontiano*⁹⁸⁶

Asimismo, ha sido relacionada con esta segunda invasión una inscripción funeraria de *Lambaesis* dedicada a un centurión de la *legio III Augusta* que recuerda que éste participó en la derrota de los *Mauri* que habían invadido Hispania. Parece, pues que Marco Aurelio decidió contrarrestar esta segunda oleada máurica desde África más que desde la propia península, concediendo permiso al gobernador vecino de la Mauretania Tingitana para abandonar su provincia en persecución de los *Mauri* que la habían abandonado para penetrar en la Bética. A nuestro juicio, esta decisión pudo deberse a que los ataques de los *Mauri* afectaron simultáneamente a ambas provincias y a que no llegaron a ir más allá de Itálica en su avance hacia el interior peninsular, a diferencia de la del 171. Además, es probable que tras la primera invasión el poder imperial hubiese dado instrucciones al procurador de Mauretania Tingitana de realizar un seguimiento más riguroso de los movimientos de los *Mauri* de las montañas del Rif y aumentar los controles del Estrecho de Gibraltar. Palao Vicente ha propuesto, además, que estas tropas de la Tingitana serían especialmente adecuadas dada su experiencia en la lucha de guerrillas⁹⁸⁷.

Sin embargo, esto no quiere decir que el procónsul de la Bética no participase en las operaciones militares, algo impensable, sino que Marco Aurelio entendió que en esta ocasión sería más útil la cooperación con el gobernador de la Tingitana en vez de volver a recurrir al de la Hispania Citerior, dado que esta provincia no se habría visto afectada.

Los gobernadores de Hispania en las guerras civiles.

Los períodos de crisis, pese a su excepcionalidad (o precisamente por ella), son muy útiles para el historiador, pues en ellos se evidencian con especial nitidez los límites de un sistema político y de las estructuras y mecanismos sociales, económicos e

⁹⁸⁶ *CIL* II/5, 783.

⁹⁸⁷ Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 85. Este autor –siguiendo a Roldán Hervás, *Hispania y el ejército...* cit. p. 220– piensa que la *cohors III Gallorum* mencionada en un epígrafe de Itálica (*CIL* II, 1127) podría ser una de las unidades utilizadas por Valio Maximiano en la península, puesto que en esa época todo apunta a que estaba destinada en la Tingitana.

ideológicos que lo caracterizan. En el Principado, las guerras civiles revelan, entre otras cosas, la naturaleza del poder imperial, el papel de las élites provinciales o el poder de que disponían los gobernadores de rango senatorial con legiones a su mando. A diferencia de las monarquías europeas del Antiguo Régimen—caracterizadas por un sentido patrimonialista del poder y del Estado y basadas en un principio incuestionado de sucesión hereditaria— en el Principado romano su titular no tenía asegurado el trono por derecho de sangre y debía tratar de contar en todo momento con la “aceptación” de los diferentes grupos que configuraban la sociedad y marcaban el devenir político, en particular el Senado, la plebe y el ejército⁹⁸⁸.

Desde Augusto, el destino del imperio se vinculó a las virtudes esenciales del *princeps* —*uirtus, pietas, iustitia, clementia*— y la idoneidad de éste para regir el Imperio venía probada, en gran parte, por sus victorias en la guerra, pues de ellas se derivaba la seguridad, la prosperidad y la gloria de Roma. Augusto, además, dejó asentada la idea de que, a pesar de todo su poder legal y fáctico, el emperador era un *primus inter pares* en el Senado, logrando, con ello, un refuerzo de su preeminencia a través del consenso. La posición del emperador, por tanto, dependía de un juego de equilibrios, a veces precarios, y del refrendo constante por parte de todos los actores sociales, lo que abrió la puerta a que surgiesen candidatos alternativos a ocupar el trono entre los senadores⁹⁸⁹. En este sentido, la caída de Nerón marcó un punto de inflexión en la evolución del Principado, pues, según señaló Tácito en su famosa aseveración, en el 68 se divulgó uno de los secretos del Imperio: se podía hacer un emperador fuera de Roma⁹⁹⁰ —y fuera de la dinastía Julio-Claudia.

No sin razón, los gobiernos provinciales asignados a senadores que conllevaban el mando sobre una o varias legiones siempre fueron vistos con recelo por parte de los emperadores, pues algunos senadores obtuvieron gracias a ellos una posición de fuerza que les garantizó influencia política en Roma. Un ejemplo paradigmático lo tenemos en Léntulo Getúlico, que destacó como general durante su gobierno de Germania Superior.

⁹⁸⁸ A este respecto, destacan los estudios de E. Flaig, *Den Kaiser herausfordern: die Usurpation im Römischen Reich*, Frankfurt am Main, 1992; “How Emperor Nero lost Acceptance in Rome”, en B. C. Ewald – C. F. Noreña (eds.), *The Emperor and Rome: Space, Representation and Ritual*, Cambridge, 2010, p. 275-288; P. Veyne, *L’Empire greco-romain*, París, 2005, pp. 15-28.

⁹⁸⁹ El propio Augusto era consciente de las ambiciones al trono que podían surgir entre miembros del Senado, y así se lo hizo saber a Tiberio.

⁹⁹⁰ Tac. *Hist.* I, 4: (...) *euulgato imperii arcano posse principem alibi quam Romae fieri*.

Getúlico era suegro de Sejano y tras la eliminación de éste en 21 d.C. hubo un intento de llevarlo a juicio bajo la acusación de complicidad con él en el *crimen maiestatis*. Llegando estos rumores a conocimiento de Getúlico, decidió escribir una carta al propio Tiberio para disipar cualquier suspicacia que pudiese albergar hacia él. Sin embargo, su tono no fue de súplica o de apaciguamiento, sino que se dirigió a Tiberio sin ambages, diciéndole que la parentela con Sejano se la debía a su consejo, y manifestándole que su lealtad se mantenía intacta y así seguiría si no sufría ninguna insidia; por ejemplo el envío de un sustituto, que Getúlico habría interpretado como una sentencia de muerte. Por ello, propuso a Tiberio que le permitiese seguir gobernando su provincia sin interferencias⁹⁹¹. Sorprendido gratamente por su franqueza y, también, temeroso de las consecuencias que traería la caída en desgracia de un hombre tan popular como Getúlico, Tiberio aceptó y le siguió mostrando su favor⁹⁹².

Además de la reflexión final acerca del carácter oscuro e impredecible de Tiberio, Tácito pretende mostrar aquí, como en su *Agricola*, un nuevo ejemplo de cómo un senador de rango consular podía desarrollar una carrera política honorable bajo el Principado sin caer en el servilismo o la humillación ni perder un ápice de su *dignitas*. A nosotros nos interesa especialmente esta acción de Getúlico porque revela el poder que las legiones otorgaban a un gobernador y que la posición de fuerza de un legado imperial no se veía mermada en ningún momento por el hecho de que no gozara de *imperium* y *auspicia* propios.

La subordinación legal de los *legati Augusti pro praetore* no fue garantía de su lealtad al emperador ni tampoco impidió que, cuando alguno de ellos se rebeló, sus legiones le siguiesen. Es más, durante el Principado la mayoría de los gobernadores que se alzaron en armas contra el emperador y, lo que es más importante, todos los que alcanzaron el trono desde el gobierno de una provincia fueron *legati Augusti pro*

⁹⁹¹ Tac. Ann. VI, 30, 2-3: *Et Abudius Ruso functus aedilitate, dum Lentulo Gaetulico, sub quo legioni praefuerat, periculum facessit quod is Seiani filium generum destinasset, ultro damnatur atque Vrbe exigitur. Gaetulicus ea tempestate superioris Germaniae legiones curabat mirumque amorem adsecutus erat, effusae clementiae, modicus seueritate et proximo quoque exercitui per L. Apronium socerum non ingratus. Vnde fama constans ausum mittere ad Caesarem litteras, adfinitatem sibi cum Seiano haud sponte sed consilio Tiberii coeptam; perinde se quam Tiberium falli potuisse, neque errorem eundem illi sine fraude, aliis exitio habendum. sibi fidem integram et, si nullis insidiis peteretur, mansuram; successorem non aliter quam indicium mortis accepturum. firmarent uelut foedus, quo princeps ceterarum rerum poteretur, ipse prouinciam retineret.*

⁹⁹² Ann. VI, 30, 4.

*praetore*⁹⁹³. Al igual que en el período tardo-republicano, la fidelidad personal de los soldados a su general, derivada de su capacidad de mando, su trato cercano y la consecución de victorias, fueron determinantes y condicionaron su adhesión a uno u otro candidato al poder imperial⁹⁹⁴.

Los emperadores eran conscientes de estos riesgos, y por ello no dudaron en destituir o suprimir a los legados imperiales que tenían demasiado prestigio en el ejército. Así sucedió con el propio Getúlico, que fue asesinado por Calígula, según Casio Dión, porque gozaba de una gran reputación y, habiendo sido gobernador de Germania durante diez años, tenía una buena relación con sus soldados⁹⁹⁵.

Los gobernadores de Hispania no fueron ajenos a estas luchas por el poder. Dos de ellos alcanzaron la púrpura imperial en la crisis del 68-69, aunque Otón debió su ascenso a una conjura que preparó en Roma y no a las tropas de la Lusitania. En cambio, Galba proporciona un ejemplo del poder de acción que tenía un legado imperial. De su capacidad para realizar en breve tiempo una leva de cierta magnitud ya hemos hablado. Ahora nos interesa resaltar la relevancia que tuvo el control de la información en el ascenso de Galba y el papel que en ello jugaron sus soldados y los miembros de su *officium*.

Cuenta Suetonio que Galba decidió alzarse contra Nerón tras recibir sendas cartas de los gobernadores rebeldes de Aquitania y de la Galia Lugdunense pidiéndole ayuda. Este último era el hombre que había iniciado la rebelión, Julio Vindex, y convenció a Galba al exhortarle a que se convirtiera en “comandante y defensor del género humano” frente al tirano⁹⁹⁶. Esto indica que el contacto epistolar entre gobernadores sería bastante fluido por entonces y que sólo podía ser conocido por el emperador si ellos mismos se lo hacían saber. El único contrapeso que los emperadores podían utilizar contra ellos eran los procuradores y libertos imperiales destinados en la

⁹⁹³ Galba era *legatus Augusti pro praetore* de la Hispania Citerior; Otón, de la Lusitania; Vitelio, de la Germania Inferior; Vespasiano, de Judea; Septimio Severo, de Panonia; Pescenio Nigro, de Siria; Clodio Albino, de Britania. A estos podría añadirse Trajano, legado imperial de Germania en 97 d.C., año de su adopción por parte de Nerva, pues, si bien es cierto que no se levantó en armas ni accedió al trono mediante una guerra civil, su posición de fuerza al mando de las legiones del Rhin fue determinante en su elección como sucesor.

⁹⁹⁴ Para la República Tardía véase el excelente estudio reciente de P. Assenmaker, *De la victoire au pouvoir: Développement et manifestations de l'idéologie impériatoriale à l'époque de Marius et Sylla*, Bruselas, 2014.

⁹⁹⁵ Dio LIX, 22, 5.

⁹⁹⁶ Suet. *Galba* 9.

provincia, de los que recababan información complementaria en caso de albergar alguna sospecha hacia el gobernador. Así sucedió con Galba.

En el triunfo de Galba fue clave el control que tuvo de la correspondencia imperial dirigida a los procuradores y libertos de Nerón, y en ello sin duda jugaron un papel fundamental tanto los soldados que controlaban los nudos de comunicación y el funcionamiento del sistema de la *uehiculatio* en la provincia como los miembros de su *officium*⁹⁹⁷. Tras el apoyo de estos últimos probablemente se hallaban relaciones de clientela establecidas a lo largo de los ocho años que Galba estuvo en la Hispania Citerior. Como a Getúlico, su dilatado gobierno de la provincia le habría proporcionado fuertes adhesiones personales en el ejército y los miembros de su *officium*, así como entre la aristocracia provincial. Gracias a estas interceptaciones Galba supo que Nerón había ordenado asesinarle y que ya no había marcha atrás.

Finalmente, el nuevo líder de los sublevados se valió de su *ius edicendi* para enviar edictos a las provincias con el fin de sumar a sus aristocracias a su partido, y suponemos que también hizo llegar cartas a Roma, unas con el fin de recabar más apoyos, otras para amedrentar a Nerón, pues, según el relato de Suetonio, cuando aquél se hallaba a las afueras de Roma, en la vía Salaria, oyó a unos soldados que deseaban el triunfo de Galba⁹⁹⁸. El control de la información manejada en Roma y las provincias propició el triunfo de Galba, ya que, a pesar de que Vindex fue derrotado por Verginio Rufo, precipitó tanto la condena del Senado sobre Nerón (declarado *hostis*) como el suicidio de éste al verse abandonado por todos⁹⁹⁹. Galba se hizo con el trono sin haber entablado ninguna batalla. Las dos legiones y el resto de tropas auxiliares que tenía a su mando en Hispania no habrían bastado para imponerse a otros generales; menos aún tras la derrota de Vindex. Ante el avance de éste en la Galia Nerón se mostró desdeñoso, pero fue suficiente con que un hombre del prestigio de Galba, reconocido como *capax imperii*, iniciase los preparativos para la guerra para que el emperador se creyese en peligro¹⁰⁰⁰.

⁹⁹⁷ S. Crogiez-Pétrequin – J. Nelis-Clément, “La circulation des hommes et de l’information”, en Hurllet (dir.) *Rome et l’Occident...* cit. pp. 107-139, esp. pp. 129-132.

⁹⁹⁸ Suet. *Nero* 48.

⁹⁹⁹ Suet. *Nero* 47-49; *Galba* 11.

¹⁰⁰⁰ Plut. *Galba* 5, 4.

Una vez en Roma, Galba envió como gobernador a su antigua provincia a Cluvio Rufo, que, según Tácito, no tenía experiencia militar¹⁰⁰¹. Sin embargo, este senador jugó un importante papel en los acontecimientos que siguieron a la muerte de su promotor. Cluvio Rufo decidió jugar sus cartas pronto, confiando en las dos legiones que tenía a su mando, la *VI Victrix* y la *X Gemina*, que había sido reenviada a Hispania por Galba en sustitución de la VII legión que se había llevado consigo a Roma¹⁰⁰². Tácito cuenta que se decantó por apoyar a Vitelio por escrito, pero en público trató de ganarse el apoyo de los hispanos y nunca encabezó sus documentos oficiales con otro nombre que no fuera el suyo. De hecho, cuando supo que se había denunciado este comportamiento ante Vitelio, no dudó en reunirse con él en *Lugdunum* para demostrar su fidelidad, obteniendo un puesto en el séquito del futuro emperador¹⁰⁰³. Todo ello muestra hasta qué punto gozaba de una posición influyente el gobernador de la Hispania Citerior.

Antes de reunirse con Vitelio, Cluvio Rufo hubo de hacer frente a la amenaza de una invasión de la península por parte del gobernador de la Tingitana, Luceyo Albino, que era partidario de Otón. Para frenarlo, Rufo situó en la costa bética a la *X Gemina* y envió centuriones a África para animar a los *Mauri* a un levantamiento contra su enemigo. El asesinato de Albino a manos de vitelianos evitó el enfrenamiento armado¹⁰⁰⁴. Estos hechos muestran, una vez más, la capacidad de acción y de respuesta militar que tenía el gobernador de la Hispania Citerior, sobre todo cuando contó con más de una legión. Sin embargo, lo más interesante es que su radio de acción cubrió toda la península. La pregunta es, ¿gobernó Rufo toda Hispania, o la Citerior con la Bética, o bien recibió permiso para intervenir en esta última? Nosotros nos decantamos por la primera opción.

La historiografía ha considerado a Cluvio Rufo únicamente gobernador de la Hispania Citerior, pero Tácito, cuando se refiere a su gobierno habla en general de las Hispanias: *E prouinciis Hispaniae praerat Cluuius Rufus (...)*. Es decir, “de las provincias, Cluvio Rufo gobernó las Hispanias”, en plural. Este detalle no es un mero recurso retórico, sino que, como prueban otros indicios que veremos a continuación,

¹⁰⁰¹ Tac. *Hist.* I, 8.

¹⁰⁰² Roldán Hervás, *Hispania y el ejército...* cit. p. 207.

¹⁰⁰³ Tac. *Hist.* II, 65.

¹⁰⁰⁴ Tac. *Hist.* II, 58.

Tácito está señalando que Rufo gobernó en toda la península, algo excepcional que se derivó, sin duda, del contexto de la guerra civil.

Gracias a Alföldy, sabemos que el procónsul de la Bética en 67/68 fue Obultronio Sabino, que murió asesinado junto a su legado, Cornelio Marcelo, por orden de Galba¹⁰⁰⁵, pero se desconoce su sucesor en el cargo. En un principio, Alföldy propuso que habría sido Marco Ulpio Trajano –padre del futuro emperador–, cuyo proconsulado situaba en 68/69 ó 69/70¹⁰⁰⁶, pero la relectura de la inscripción del ninfeo de Mileto, unida a la de un miliario hallado en Israel, ha hecho que modificara la cronología de su *cursus honorum* y que anticipara su proconsulado de la Bética en torno al 65 d.C.¹⁰⁰⁷. Así, pues, no se conoce ningún procónsul de la Bética hasta diez años después (Sempronio Fusco, nombrado en la *epistula Titi ad Muniguenses*)¹⁰⁰⁸. En la Lusitania tampoco tenemos noticia de ningún legado entre Otón y Cayo Arruncio Catelio Céler, que la gobernó en torno al 77/78 (probablemente desde el 75)¹⁰⁰⁹.

Por tanto, de estas evidencias deducimos que Cluvio Rufo gobernó toda Hispania desde que fue designado por Galba en 68 hasta julio del 69. Su mando extraordinario sería consecuencia del período convulso en que se produjo, que llevó a Galba a conceder los gobiernos y mandos militares más relevantes a hombres de su confianza. Esto convirtió a Rufo en un actor muy importante de la guerra civil y explica por qué Vitelio lo trató con deferencia, a pesar de no temerle¹⁰¹⁰: su adhesión supuso el control de toda la Península Ibérica, gracias al cual pudo guardarse las espaldas en su avance hacia Italia y logró que el gobernador de la Tingitana, Albino, quedase aislado y fuese suprimido con facilidad.

Al margen del fallido golpe de estado que dio el gobernador de la Hispania Citerior Cornelio Prisciano en 145 –del que no sabemos nada más¹⁰¹¹–, sólo volvemos a tener noticias del papel de los gobernadores de Hispania en un levantamiento armado en la siguiente guerra civil (193-197), de la que salió victorioso Septimio Severo.

¹⁰⁰⁵ Tac. Hist. I, 37. *Fasti Hispanienses* pp. 155-157.

¹⁰⁰⁶ *Fasti Hispanienses* pp. 157-159.

¹⁰⁰⁷ G. Alföldy, “Trajano padre y la inscripción del ninfeo de Mileto”, en González (ed.) *Trajano emperador...* cit. pp. 7-24, esp. p. 21; “Fasti un Verwaltung...” cit. p. 326, nt. 8.

¹⁰⁰⁸ *Fasti Hispanienses* p. 159.

¹⁰⁰⁹ *Fasti Hispanienses* p. 139.

¹⁰¹⁰ Tac. Hist. II, 65, 2.

¹⁰¹¹ AE 1936, 98; SHA Anton. Pius 7, 4: *Perit et Priscianus reus affectatae tyrannidis, sed morte voluntaria. De qua coniuratione quaeri uetuit.*

En los acontecimientos de esta guerra civil el único gobernador de Hispania que volvió a tener cierto protagonismo fue el de la Citerior, Lucio Novio Rufo. Gracias a una inscripción que ya hemos analizado¹⁰¹², sabemos que este hombre desempeñó con normalidad las competencias jurisdiccionales propias de su cargo el 11 de febrero del 193, apenas un mes después de la proclamación de Pértinax, de lo que se deduce que gobernaría la Hispania Citerior desde el 192¹⁰¹³. Según la *Historia Augusta*, Novio Rufo fue uno de los senadores que Septimio Severo condenó a muerte en la terrible purga que hizo tras vencer a Clodio Albino en 197¹⁰¹⁴, de lo cual se deduce que Rufo apoyó a este último mientras estuvo al frente de la Citerior. Inmediatamente después de derrotar a Albino, Septimio Severo destituyó a Novio Rufo y envió a la provincia a Tiberio Claudio Cándido, hombre de su máxima confianza que había destacado como general en Oriente durante la guerra. Al igual que en Asia y Nórico, Cándido fue destinado a Hispania con la misión de eliminar a los últimos opositores de Severo que quedaban en la Citerior, declarados *hostes publici*, como revela una inscripción honorífica que le dedicó en Tarraco un miembro de su *officium*, el *strator* Silio Hospes:

Tib(erio) Cl(audio) Candido co(n)s(uli) / XVuir(o) s(acris) f(aciundis) leg(ato) Augg(ustorum) / pr(o) pr(aetore) prouinc(iae) H(ispaniae) C(iterioris) / et in ea duci terra marique / aduersus rebelles hh(ostes) pp(ublici) / item Asiae item Noricae / duci exercitus Illyrici / expeditione asiana item parthica / ítem gallica logistae ciuitatis / splendidissimae Nicomedensium / ítem Ephesiorum leg(ato) pr(o) pr(aetore) prouinc(iae) / Asiae cur(atori) ciuitatis Teanensium / allecto inter praetorios ítem / tribunicios proc(uratori) XX hered(itatium) per / Gallias Lugdunensem et Bel/gicam et utramq(ue) Germaniam / praeposito copiarum expediti/onis germanicae secundae / trib(un)o mil(itum) leg(ionis) II Aug(ustae) praefecto / coh(o)rtis secundae ciuium / Romanorum / Silius Hospes hastatus leg(ionis) X / Geminae strator eius / optimo praesidi.¹⁰¹⁵

¹⁰¹² La del pleito territorial que enfrentó a Valeria Faventina con los *compagani riui Larensis*. Véase Capítulo 3 de esta Primera Parte.

¹⁰¹³ *Fasti Hispanienses* p. 42; A. R. Birley, *Septimius Severus. The African Emperor*, Londres, 1967, p. 149.

¹⁰¹⁴ SHA, *Severus* 13; Herod. III, 8. 6-7.

¹⁰¹⁵ *CIL* II²/14, 975. Anexo II: n° 5.

En un principio Alföldy pensó que Claudio Cándido habría luchado contra Novio Rufo en la Citerior, pero acabó aceptando la corrección hecha por Christol, que demostró que Novio Rufo ya no se encontraba en Hispania cuando fue represaliado¹⁰¹⁶. En realidad, lo que parece haber frenado la intervención militar de Novio Rufo al lado de Albino en el enfrentamiento final contra Severo que se produjo en *Lugdunum* es la oposición de la *legio VII Gemina*, que se habría decantado por este último¹⁰¹⁷. Esto explicaría por qué esta legión introdujo en su titulación oficial el adjetivo *Pia* a partir de entonces. La primera mención epigráfica de la nueva titulación se halla en una inscripción votiva de *Asturica Augusta* fechada precisamente en el 197:

*I(oui) O(ptimo) M(aximo) / Soli Inuicto Libero / Patri Genio praetor(ii) / Q(uintus) Mamil(ius) Capitolinus / iurid(icus) per Flaminiam / et Vmbriam et Picenum / leg(atus) Aug(usti) per Asturiam et / Gallaeciam dux leg(ionis) VII G(eminae) P(iae) Fe[l(l)icis] / praef(ectus) Aer(ar)ii Sat(urni). Pro salute / sua et suorum*¹⁰¹⁸

El dedicante, Quinto Mamilio Capitolino, habría ejercido simultáneamente como *legatus iuridicus per Asturiam et Gallaeciam* y *dux* de la legión VII en ese año crítico. No es posible saber con certeza si fue nombrado antes o después de la derrota de Albino y de la llegada de Claudio Cándido a la Hispania Citerior, pero el hecho de que se presente como *dux* y no como *legatus legionis*, que era el título oficial de comandante de esa legión, nos induce a pensar que Capitolino, siendo *legatus iuridicus* en el Noroeste, habría arrebatado el mando de la VII Gemina al legado oficial, ganando a la legión para la causa de Severo. El origen norafricano (¿nómida?) de Capitolino ha llevado a algunos autores a atribuir su nombramiento a Severo, como un hombre de su confianza¹⁰¹⁹, pero no hay que olvidar que Clodio Albino era natural de *Hadrumetum*¹⁰²⁰. En nuestra opinión, Capitolino pudo haber sido nombrado *iuridicus* en *Asturia* y *Gallaecia* para el 196 con la aprobación de Albino, pues hasta poco antes de

¹⁰¹⁶ Christol, “La carrière de Q. Hédus...”, cit. p. 83. Alföldy, *Fasti Hispanienses* p. 43, y “Fasti und Verwaltung...” cit. pp. (donde acepta la propuesta de Christol).

¹⁰¹⁷ Se ha visto una prueba de la fidelidad de las unidades que conformaban la *legio VII Gemina* en la inscripción honorífica hallada en S. Pedro de la Viña (Asturias), que recuerda el *ala II Flavia ciuium Romanorum*, que allí tenía su campamento, le dedicó una estatua a Caracala (*AE* 1967, 237). Cf. *Fasti Hispanienses*, p. 42-43 y 90-92; Le Roux, *L’armée romaine...* cit. pp. 245-246; Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 87.

¹⁰¹⁸ *CIL* II, 2634 = *IRPL* 1.

¹⁰¹⁹ Alföldy, *Fasti Hispanienses* pp. 91-92; Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 88.

¹⁰²⁰ SHA, *Clodius Albinus* 1, 3.

su declaración como *hostis* (en las Saturnales del 195) Septimio Severo mantuvo buenas relaciones con él, al menos públicamente¹⁰²¹. Esto le haría aparecer como neutral una vez que comenzó su enfrentamiento, permitiéndole apoderarse por sorpresa del mando de la legión VII.

Tras el 197 y durante el resto del Principado, Hispania vivió un período de paz que no se vio roto a pesar de la inestabilidad en que vivieron los emperadores que sucedieron a Septimio Severo. Con todo, parece que Caracala habría recelado de la fidelidad de la legión VII tras haber asesinado a su hermano Geta. Por ello, habría decidido poner a su frente, en un primer momento (¿212?), un hombre de rango ecuestre, Ulpio Víctor, en calidad de *praepositus*¹⁰²². Algunos autores han relacionado su cometido con la imposición de un control más férreo a la tropa y de ciertos castigos a una parte de sus soldados¹⁰²³. Del mismo modo, para disipar las dudas que pudiese seguir albergando Caracala hacia esta legión y hacia sí mismo, el gobernador C. Julio Cereal se preocupó especialmente de dejar constancia del voto que había realizado la legión en su presencia por la salud del emperador y de su madre, Julia Domna (*vid. supra*).

Conclusiones

A través de los testimonios epigráficos y literarios hemos podido constatar la gran relevancia que tuvo el ejército para los gobernadores de las provincias hispanas y cómo la presencia de una o varias legiones en la Hispania Citerior durante el Principado dotó a sus gobernadores de una posición preeminente respecto a sus colegas en la península.

En primer lugar, el ejército jugó un papel crucial en la composición de los *officia* de los gobernadores de Hispania. En un imperio poco burocratizado como el romano, los cuadros medios de la administración provincial directamente vinculados a las funciones del gobernador estuvieron cubiertos por hombres procedentes del ejército,

¹⁰²¹ Con el fin de apaciguarlo momentáneamente, Septimio Severo había asociado al poder a Albino nombrándolo César en 193 (Herod. II, 15, 3-4; SHA, *Clodius Albinus* 10, 3). En diciembre del 195 el Senado, presionado por Severo, declaró *hostis* a Albino (Dio LXXV, 4, 2-7). Cf. Birley, *Septimius Severus*, cit. p. 159 y 188.

¹⁰²² *CIL* III, 1464.

¹⁰²³ H. G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut Empire romain*, París, 1960, pp. 692-693, que es quien propone la fecha del 212; Le Roux, *L'armée...* cit. p. 365-366; Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 89.

algunos de los cuales acabaron desarrollando una fructífera carrera ecuestre. A partir de época flavia, La Hispania Citerior ofrece un ejemplo muy representativo del personal que componía el *officium* de un gobernador con mando sobre una legión y del grado de especialización técnica de sus miembros.

Gracias a la epigrafía sabemos que el gobernador de la Lusitania cubría algunos puestos de su *officium* también con personal procedente de las legiones establecidas en la Citerior –al menos de la *VI Victrix* y, posteriormente, de la *VII Gemina*–, lo que revela una estrecha colaboración con su homólogo de la provincia vecina. En la Bética no tenemos ningún testimonio de la presencia de soldados de las legiones que estuvieron en la Hispania Citerior en el *officium* de su procónsul. Como se sabe, los procónsules tenían un equipo de gobierno diferente al de los legados imperiales, conservando el esquema republicano. Sin embargo, los ejemplos de provincias proconsulares como la Galia Narbonense o África Proconsular, donde están atestiguados *beneficiarii consularis*, invitan a pensar que en la Bética también habrían existido. Sin embargo, a diferencia de la Citerior, la escasez de datos impide calcular el número de integrantes del *officium* de los gobernadores de estas dos provincias y, por ende, analizar su impacto en el gobierno provincial.

En lo que respecta a la Citerior, el *officium* de su legado se correspondería con el común a una provincia con una legión según la estimación de Rankov: en torno cien personas dedicadas a tareas administrativas, más cien *stratores* y quinientos *singulares* que actuaban como guardia de corps del gobernador y fuerzas policiales, respectivamente. Este cuerpo de “funcionarios” no puede compararse, en efecto, al de los Estados de la era industrial, e, incluso, es inferior a un imperio coetáneo como el chino de la dinastía Han. Sin embargo, sus cifras nos revelan que no era precisamente un equipo de gobierno reducido, sobre todo si tenemos en cuenta también a los esclavos y libertos que trabajaban a las órdenes de estos *officiales*. Piénsese, además, que los *officiales* eran cien hombres destinados a servir específicamente a los gobernadores en tareas administrativas directamente vinculadas a sus funciones, sobre todo en lo que se refería a la gestión y archivo de la documentación oficial que se derivaba de ellas. Y para ello, era un número suficiente de hombres, pues estaban especializados. Como sucedía en el ejército del que procedían, el poder romano suplió la cantidad con la calidad, apostando por la selección rigurosa y la especialización de los *officiales*. La

administración a nivel local fue delegada en los gobiernos municipales y coloniales, que, a su vez, colaboraban estrechamente con el gobernador y sus legados, en particular si se trataba de sedes conventuales. Así, el poder imperial compensó el envío limitado de agentes desde Roma a las provincias sin perder eficiencia en la gestión del territorio, creando un esquema administrativo en el que los gobernadores actuaban como bisagra entre el poder central y el poder local. En ese cometido, su *officium* fue fundamental. En cuanto a la Bética, aunque el *officium* de su procónsul parece haber sido más reducido, las leyes municipales y las *epistulae* imperiales conservadas revelan que los diferentes niveles administrativos estaban plenamente asentados ya desde época flavia y que la coordinación entre los magistrados locales y el procónsul funcionaba eficientemente.

En lo que respecta al poder militar de los gobernadores, en Hispania se constata que el mando sobre al menos una legión dotó a los de la Citerior de una mayor capacidad de acción en el mantenimiento del orden interno en la provincia (*latrones*, levantamientos locales), su defensa frente amenazas externas y en el cumplimiento de otras funciones que veremos en los siguientes capítulos (promoción de obras públicas, elaboración del censo...). Además, los acontecimientos de la invasión de los *Mauri* en 171-172 y de las guerras civiles del 68-69 y 193-197 revelan la preeminencia de que gozaron los gobernadores de esta provincia sobre sus vecinos en la península, que se derivaba precisamente del poder que le otorgaban sus tropas. De hecho, la relevancia geoestratégica de la Hispania Citerior y los riesgos que para el poder imperial podían conllevar la peligrosa combinación de gobernadores de alto *status* (consulares), gobiernos dilatados en el tiempo (mínimo tres años) y los recursos humanos y económicos de la provincia, condujeron a los emperadores a otorgar este gobierno, en ocasiones, a hombres que formaban parte de su círculo íntimo¹⁰²⁴. La Hispania Citerior era la llave para el control de la península y sus gobernadores, gracias al ejército que tenían a su mando, jugaron un importante papel tanto en tiempo de paz como en períodos de crisis, hasta el punto de que sus homólogos de las otras dos provincias hispanas necesitaron contar con su colaboración en aquellas cuestiones que requerían de personal militar.

¹⁰²⁴ Véase Paulo Fabio Máximo o Gneo Calpurnio Pisón bajo Augusto (4-1 a.C. y 9-10 d.C. respectivamente), A. Cornelio Palma bajo Trajano (100-103) o C. Aufidio Victorino bajo Marco Aurelio (171-172).

REFLEXIONES FINALES

Cum plenissimam autem iurisdictionem proconsul habeat, omnium partes, qui Romae uel quasi magistratus uel extra ordinem ius dicunt, ad ipsum pertinent¹⁰²⁵ et ideo maius imperium in ea prouincia habet omnibus post principem¹⁰²⁶, nec quicquam est in prouincia, quod non per ipsum expediatur¹⁰²⁷.

Estos tres pasajes de Ulpiano –tal y como los presenta en sucesión el *Digesto* justiniano, en el esfuerzo de síntesis que caracteriza la labor de sus compiladores– expresan excelentemente la amplitud del poder jurisdiccional de los gobernadores de rango senatorial¹⁰²⁸. Todos los asuntos jurisdiccionales cuya resolución en la *Vrbs* estaba repartida entre diversos magistrados –principalmente los pretores y el *Praefectus Vrbi*–, en las provincias podían ser competencia de los gobernadores. El fundamento último de este gran poder jurisdiccional era su *imperium*, el cual tenía las mismas características y era aplicado de igual manera tanto por los procónsules como los legados imperiales, a pesar de que el de éstos era delegado. Esta actividad jurisdiccional fue tan que importante que que sus propios contemporáneos solían relacionar el gobierno provincial con la impartición de justicia¹⁰²⁹.

Los municipios y colonias de Occidente estaban dotados, como muestran la leyes municipales flavias y la *lex* de la colonia *Genetiua Iulia Vrsonensis* de la Bética, de unos magistrados propios con poderes jurisdiccionales (duoviros y ediles) que debían atender los procesos civiles menores y las relaciones jurídicas cotidianas que se producían en su comunidad, dentro del modelo de ciudad autosuficiente, tan importante en un Imperio poco burocratizado como el romano. No obstante, la intervención del

¹⁰²⁵ *Dig.* I, 16, 7, 2 (Ulp. 2 *de off. procos.*)

¹⁰²⁶ *Dig.* I, 16, 8 (Ulp. 31 *ad ed.*).

¹⁰²⁷ *Dig.* I, 16, 9 (Ulp. 1 *de off. procos.*).

¹⁰²⁸ En relación a los *praesides* en general: *Dig.* I, 18, 10 (Hermog. 2 *iur. epit.*) y 11 (Marcian. 3 *inst.*).

¹⁰²⁹ *Mart. Epig.* VII, 53; *Plin. Ep.* IX, 5, 1. Ambos testimonios se refieren a gobernadores de Hispania: el primero a L. Pompeyo Vopisco C. Arruncio Catelio Céler, que gobernó la Citerior en torno a 85/86-89/90 (W. Eck, “Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 (1)”, *Chiron* 12, 1982, pp. 281-362, esp. pp. 310-316 y nt. 310); el segundo a Caestiro Tirón, procónsul de la Bética en 107/108 (*Fasti Hispanienses* pp. 165-166).

governador era tenida por necesaria y estaba ya contemplada, como hemos visto, en las mismas leyes –y confirmada en el resto de la epigrafía y las fuentes literarias–, bien a través de la relevancia que tenía su edicto jurisdiccional como programa jurisdiccional que debía ser seguido en su actividad por los magistrados locales, bien con la disposición de que los procesos civiles a partir de determinada cuantía (en *Irni*, 1000 HS) o bajo determinadas condiciones (infamia, violencia, etc.), los conflictos habidos entre comunidades, entre éstas y un particular o entre dos individuos de diferente lugar (territoriales, por lo general), y todos los procesos criminales habían de ser remitidos automáticamente al gobernador.

Existía una armonía entre la jurisdicción de los magistrados locales y la del gobernador, que se erige en una figura tutelar que administra los asuntos jurisdiccionales –al igual que de los demás, como veremos– teniendo presentes dos objetivos confluyentes: el mantenimiento del orden en la provincia y del equilibrio entre los intereses de las comunidades y de los particulares¹⁰³⁰.

Todo ello se traduce, en el campo jurisdiccional, en la administración regular de justicia de manera itinerante, con el fin de llegar al mayor número de ciudadanos (y, aunque en segundo plano, peregrinos) a lo largo de la provincia, gracias al sistema de *conuentus iuridici*. El gobernador no sólo está por encima de los magistrados locales en virtud de su *imperium*, sino que se presenta como un juez imparcial que es ajeno a las rivalidades entre los decuriones y magnates locales. Así aparece constantemente en la *lex Irnitana* y por ello se le atribuyen las causas que podían implicar un cambio en la condición del individuo (pérdida de libertad, infamia o muerte). Los partidismos, empero, fueron inevitables, a pesar de los esfuerzos del poder imperial por evitar que los senadores que tuviesen intereses en una provincia la gobernasen¹⁰³¹.

El juego de gobierno que se daba en el ámbito jurisdiccional, sin embargo, no terminaba ahí. En los testimonios epigráficos que recogen la intervención de los gobernadores en litigios no criminales o procesos penales, se aprecia, también, un esfuerzo constante por parte de éstos y del emperador de reforzar y hacer respetar constantemente su autoridad¹⁰³². Los gobernadores tenían un gran poder jurisdiccional y

¹⁰³⁰ Objetivos que tenían muy presentes los propios emperadores. Véase Tito en la *epistula* de Munigua o Trajano en Plin. *Ep.* X, 109 y 111.

¹⁰³¹ Antes de llegar a su provincia, el gobernador debía declarar, en un edicto, los vínculos e intereses personales que tenía en ella. Cf. *Dig.* I, 16, 4, 3 (Ulp. *1 de off. procos.*).

¹⁰³² Véase la *Epistula Titii ad Muniguenses*, la *Tabula di Esterlizi* o el proceso de los mártires de Lyon.

de coerción que era reconocido por sus gobernados, pero su autoridad no siempre era respetada. El recurso al emperador, única figura con un poder y *auctoritas* superiores a los de los gobernadores, era a veces utilizado con el fin de dilatar el cumplimiento de una sentencia o de buscar una revisión más favorable de una causa por parte de una comunidad o individuo. La *tabula* de Esterzili o la *epistula* de Tito a los *Muniguenses* son dos ejemplos de los desacatos que podía sufrir la autoridad de los gobernadores, y de los intentos de los emperadores por evitar tales comportamientos. No obstante, la intervención del gobernador en los litigios o conflictos locales no era vista en Occidente como un ataque contra las instituciones de la ciudad, sino como un elemento necesario y benéfico.

El gobernador debía velar por el mantenimiento del orden en casos de relevancia dentro de las comunidades y en las relaciones que se establecían entre ellas (en general relacionadas con territorios limítrofes), pues podían poner en peligro la supervivencia y la capacidad de autogestión de las mismas. Pero también debía defender a los particulares de los abusos que sobre ellos podían cometer los gobiernos locales. Conflictos como el que hizo entrar en litigio a Valeria Favetina y los *compagani riui Lauarensis* que recoge el decreto de Tarraco del 193, o el mismo de la *epistula* de Tito, serían comunes y, dada su relevancia, el gobernador les daría preferencia, junto con los procesos criminales, por encima de otros civiles. El empobrecimiento de los propietarios podía provocar, también, un empobrecimiento de la comunidad a la que pertenecían, cuyo desarrollo dependía en gran medida del evergetismo de sus principales ciudadanos. En todo momento el gobernador no es visto como un intruso, sino como árbitro imparcial o, al menos, imprescindible. En Occidente, como ya vio Jacques, su labor jurisdiccional no es considerada una intrusión del poder central en el local¹⁰³³.

La represión criminal era una competencia exclusiva del gobernador, único poseedor de *ius gladii* en su provincia, y en virtud de su *imperium* no sólo debía juzgar las causas criminales que se le presentasen, sino que debía perseguir por iniciativa propia a todo criminal que pudiese alterar el orden interno de la provincia, como los

¹⁰³³ Jacques, *Le privilege...* cit. p. 346.

sacrílegos o los bandidos¹⁰³⁴. No existen dudas de que el poder coercitivo de los gobernadores es ilimitado sobre los peregrinos. En cuanto a los ciudadanos romanos, a pesar de que la doctrina mommseniana sigue siendo seguida por la mayoría de autores, parecen necesarias ciertas modificaciones de la misma. El propio Mommsen dejó la puerta abierta para realizarlas. Los testimonios que las fuentes literarias han hecho llegar hasta nosotros y que hemos analizado más arriba nos llevan a la conclusión de que los gobernadores provinciales de rango senatorial tenían durante el Principado (y a diferencia de la República) jurisdicción criminal plena sobre los ciudadanos romanos, al igual que sobre los que no lo eran, pudiendo condenarlos a muerte y ejecutarlos legalmente. La *lex Iulia de vi publica* protegía al ciudadano de la violencia ejercida arbitrariamente por los magistrados con *imperium* (entre ellos los gobernadores senatoriales), pero no anulaba su poder coercitivo sobre ellos. Asimismo, el derecho de los *ciues* a la *prouocatio* y el recurso de la *appellatio ad Caesarem* (previa o posterior al proceso), nacido con el Principado, no implicaban una obligatoria y automática remisión a Roma de los ciudadanos romanos encausados. Debían solicitarlo antes explícitamente, como San Pablo, y aún así la última palabra la tenía el gobernador. Sólo en el caso de los grupos privilegiados (senadores, *equites*, decuriones municipales y veteranos), se respetaría esa apelación, pero las leyes de época adrianeo-antonina y severa que los protegían, prohibiendo que fuesen condenados a una pena mayor que el exilio, son una prueba de que hasta entonces tal respeto por su dignidad no siempre les garantizó escapar al poder coercitivo o *ius gladii* de los gobernadores. De todas formas, parece que la apelación al emperador también dependía de quién fuese el gobernador y quién el *princeps*¹⁰³⁵, consecuencia natural de un régimen personalista como el del Principado y de un gobierno provincial condicionado por la centralidad de la figura de su gobernador, sobre todo en los procesos extraordinarios. La mayor frecuencia y fluidez de la relación epistolar establecida entre los gobernadores y los emperadores durante el siglo II, lejos de ser indicio de la decadencia de su capacidad de acción y de

¹⁰³⁴ Dig. I, 18, 13, pr. (Ulp. 7 de off. procos.). *Congruit bono et graui praesidi curare, ut pacata atque quieta prouincia sit quam regit. Quod non difficile obtinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus prouincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagiarios fures conquirere debet et prout quisque deliquerit in eum animaduertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest.*

¹⁰³⁵ Apuleyo, a pesar de ser un *eques* y estar acusado del grave crimen de magia (que podía conllevar la pena capital), parece confiado en la honradez y el buen hacer del procónsul Claudio Máximo, al que, de todas formas, no escatima elogios.

resolución en el ámbito judicial, indica el perfeccionamiento de los cauces administrativos usados entre el poder central y sus máximos representantes en las provincias y la confianza que los emperadores depositaron en los gobernadores como garantes del sistema judicial imperial.

Sin embargo, a pesar de estos grandes poderes antedichos, la justicia que el poder romano ofrecía a través de los gobernadores parece que llegaría de manera desigual a las diferentes comunidades y habitantes de la provincia. El sistema conventual –que en Hispania se apoyó fundamentalmente en las colonias y municipios romanos–, a pesar de su probada funcionalidad, comportaba al mismo tiempo una tara importante: aquellas personas que no viviesen en una de las sedes conventuales no tendrían acceso al gobernador salvo en casos excepcionales o si se trataba de potentados locales. Y, aun viviendo en una de esas sedes, el gobernador se detenía durante un período corto de tiempo –obligado a continuar con su itinerario dentro de los meses en que las condiciones climatológicas permitiesen que se realizara– y no podría atender a todas las demandas. Los gobernadores podían llegar a estar muy sobrecargados de trabajo: sabemos, por ejemplo, que a inicios del siglo III el prefecto de Egipto Tiberio Claudio Subatiano Aquila recibió 1804 peticiones durante los dos días y medio en que se detuvo en Arsinoé¹⁰³⁶, o que Antonino Pío denegó a la ciudad de Ptolemaide, en Cirene, su petición de convertirse en sede conventual argumentando que el procónsul no disponía de tiempo para desplazarse hasta ella y realizar un *conuentus* adicional¹⁰³⁷.

La solución que halló el poder imperial fue la delegación de funciones: Los gobernadores podían encargar a los legados que tenían a su mando en la provincia la vista de las causas no criminales que juzgasen necesarias e imponer multas a los infractores. También podían dejar en sus manos la vista preliminar de algunos procesos penales menos relevantes con el fin de agilizar el procedimiento y contar con informes que les facilitasen la elaboración de la sentencia¹⁰³⁸. En Hispania, el procónsul de la Bética contaba con un legado en el que delegaba su propio *imperium*, mientras que en la

¹⁰³⁶ P. Yale 61, cf. R. Haensch, “Le rôle des *officiales* de l’administration provinciale dans le processus de décision”, *CCG* 11, 2000, pp. 259-276, esp. p. 273.

¹⁰³⁷ R. Haensch, “Des empereurs et des gouverneurs débordés. À propos des lettres d’Hadrien aux technites dyonisíques récemment publiées” *CCG* 19, 2008, pp. 177-186, esp. p. 182. Este autor recalca especialmente el hecho de que los gobernadores habrían de atender y responder cada día un ingente número de cartas (pp. 183-186).

¹⁰³⁸ A. Béranger, “Le gouverneur de province et ses légats: délégations de pouvoirs et de compétences sous le Haut-Empire romain”, en Béranger – Lachaud (eds.) *Hiérarchie des pouvoirs...* cit. pp. 179-198, esp. pp. 191-192.

Lusitania y la Citerior, como hemos visto, actuarían legados del emperador subordinados jerárquicamente a los *legati Augusti pro praetore* que gobernaban estas provincias. Y los procesos no criminales de poca relevancia podían ser solventados por jueces locales (*iudices dati o pedanei*)¹⁰³⁹. Con todo, los procesos no criminales de mayor cuantía o los penales que implicasen a ciudadanos romanos o fuesen especialmente graves y pudiesen conllevar una pena capital siempre eran remitidos al gobernador allí donde se encontrase, sobrecargándolo de trabajo¹⁰⁴⁰.

Sin embargo, los gobernadores contaban con un *officium* eficaz formado por un número notable de “funcionarios” cualificados procedentes de la legión para asumir las tareas administrativas cotidianas, sobre todo en la elaboración, autenticación y archivo de la documentación oficial que generaba la actividad del gobernador. En Hispania, el ejemplo que mejor nos permiten conocer nuestras fuentes –de carácter epigráfico– es el del *officium* del gobernador de la Citerior a partir de época flavia. Según la estimación de Rankov, como todo gobernador con una legión a su mando, el de la Citerior contó aproximadamente con cien personas procedentes de la *legio VII Gemina* dedicadas a tareas administrativas, además de cien *stratores* que conformaban su guardia de corps y quinientos *singulares* que actuaban como fuerzas policiales. En lo que respecta a los *officia* de los gobernadores de la Lusitania y la Bética, existen evidencias de que parte de su personal también procedía de la legión VII, lo que implicaría una fluida colaboración de estos gobernadores con el de la Citerior, reforzando el papel predominante de éste en el ámbito peninsular.

A pesar de que las cifras estimadas del personal que conformaba el *officium* del gobernador de la Hispania Citerior no es comparable a las del funcionariado de los imperios de la era industrial, pensamos, al igual que Rankov, Haensh y López Barja, que este *officium* presenta un nivel de desarrollo burocrático no desdeñable y que era suficientemente grande para abarcar todas las actividades administrativas relacionadas con las competencias de los gobernadores de la Citerior, sin contar con el número de esclavos y libertos imperiales que se encargarían de tareas menores, que no ha de minusvalorarse. Para lo demás, el poder imperial confió en la administración de cada ciudad, en particular en los magistrados de las colonias y municipios que, como reflejan

¹⁰³⁹ Burton, *Powers and Functions...* cit. p. 122; Hurlet, “Tra giurisdizione cittadina...” cit. pp. 232 y 240.

¹⁰⁴⁰ A propósito del papel del gobernador en los procesos capitales véase el Cuarto Edicto de Cirene de Augusto: Oliver, *Greek Constitutions...* cit. n° 11, ll. 65-66.

las leyes municipales de la Bética, cooperaban con el gobernador de manera armónica, en un reparto de competencias perfectamente delimitado y complementario que resultó eficaz.

En un famoso artículo dedicado al “mundo” que late tras el *Asno de oro* de Apuleyo, F. Millar puso en tela de juicio la operatividad de este sistema judicial provincial y la capacidad que tenía de garantizar el acceso a la justicia a todos los habitantes de una provincia. Según el autor británico, en la vida cotidiana de la mayoría de la población reinaría la “ley del más fuerte”¹⁰⁴¹. En nuestra opinión, Millar presenta una visión exagerada de las cosas, pero acierta al mover el objetivo hacia la situación las gentes humildes, que a menudo estaban indefensas ante los abusos de los magnates y grandes terratenientes locales. Esto era sabido por el poder imperial, como demuestra el hecho de que Ulpiano asigne a los procónsules la labor de evitar que los más poderosos cometieran injusticias con los humildes¹⁰⁴². Pero el jurista hablaba en términos ideales. En la práctica no resultaba un verdadero problema para los intereses imperiales, ni hacía menos eficiente la labor jurisdiccional del gobernador, sino selectiva¹⁰⁴³. Él, como el poder imperial, gobernaba para las élites provinciales y sólo se preocupaba por los humildes cuando el orden de la provincia estaba en juego¹⁰⁴⁴.

En su misión de salvaguardar el orden en su provincia, los gobernadores fueron también los máximos reponsables de su defensa frente a las amenazas internas y externas que podían amenazarlo. Desde la conclusión de las Guerras Astur-Cántabras, ninguna de las provincias hispanas confinó con pueblos no sometidos, pero eso no evitó, como hemos visto, que sus gobernadores hubiesen de hacer frente a levantamientos internos, al problema endémico del bandidaje o, incluso, a invasiones. A pesar de que todos los gobernadores de Hispania gozaban de pleno *imperium* y tuvieron algún destacamento militar a su servicio, sólo el de la Citerior dispuso de legiones a su mando durante el Principado y pudo ejercer la vertiente militar de su *imperium*. En concreto, sabemos que los gobernadores de la Hispania Citerior hubieron de reprimir dos

¹⁰⁴¹ Millar, “The world of...” cit.

¹⁰⁴² Ulp. *1 op. (Dig. I, 18, 6, 2)*.

¹⁰⁴³ Hurlet, “Tra giurisdizione cittadina...” cit. pp. 239-240.

¹⁰⁴⁴ El hecho de que Ulpiano (*1 de off. procos. = Dig. I, 16, 9, 4*) insista en que se debía atender tanto a los magnates locales como a los humildes es una prueba de que tal cosa no se hacía. Los gobernadores tendían a dar prioridad a los grupos privilegiados. Cf. Brunt, “The Romanization of the Local...” cit.

levantamientos indígenas en el Noroeste al poco de la conclusión de las Guerras Astur-Cántabras y también prestaron especial atención al problema del bandidaje siguiendo las directrices imperiales dirigidas a todos los gobernadores. En este último empeño se valieron, por un lado, de la colaboración de los magistrados locales y, por otro, del establecimiento de campamentos o fuertes menores y, particularmente, de *stationes militum* repartidas en lugares estratégicos de la provincia. En el siglo III están atestiguadas dos *stationes beneficiarii*, una en *Segisamo* y otra en *Lucus Augusti*, con la función principal de vigilar las vías de comunicación.

Las dos invasiones de *mauri* que sufrió la Bética en época de Marco Aurelio muestran la escasa capacidad militar de que disponía su procónsul para su defensa y la dependencia que tenía del gobernador de la Citerior. Por eso en 171-172, ante la gravedad de la situación, Marco Aurelio decidió confiar el gobierno conjunto de ambas provincias al consular Aufidio Victorino. Esta decisión y los acontecimientos de las guerras civiles del 68-69 y 193-197 revelan que el gobernador de la Citerior tenía la llave del control de toda la Península Ibérica, no sólo por ser su provincia la más extensa y la que daba acceso por vía terrestre al resto del continente, sino porque su gobernador, gracias a la *legio VII Gemina* que tuvo a su mando desde época flavia, fue el único capaz de garantizar la seguridad a la misma durante el Principado.

SEGUNDA PARTE

TUTELA DEL SISTEMA MUNICIPAL E INTERVENCIÓN EN EL CENSO Y LA ORDENACIÓN TERRITORIAL.

En esta Segunda Parte analizaremos el papel de los gobernadores de las provincias hispanas en lo que hemos denominado como “tutela del sistema municipal”, un argumento que presenta dos vertientes: por un lado, su influencia en el desarrollo cívico de las comunidades poco romanizadas; por otro, su intervención en los asuntos internos de los municipios y colonias ya existentes en su provincia con el fin de garantizar su salud económica y sostenibilidad. Trataremos, por tanto, la misión de los gobernadores en el control de las *rationes ciuitatum* (capítulo 1) y la supervisión o promoción que realizaban de las obras públicas que se llevaban a cabo en la provincia – tanto por iniciativa local como por iniciativa imperial (capítulo 2). A continuación analizaremos el papel que jugaron en la acuñación monetaria realizada en las ciudades de Hispania durante el período julio-claudio. También abordaremos el papel del gobernador en la imposición fiscal de su provincia (capítulo 4) y su intervención en la elaboración del censo provincial (capítulo 5), en el que se basaba tanto el sistema impositivo vigente en la provincia como el control de la población y sus recursos. Por último, en ese mismo capítulo nos ocuparemos de su intervención en la organización del territorio provincial, fundamentalmente en lo que concierne al establecimiento de límites territoriales entre comunidades y a la fundación de colonias.

Todo ello mostrará cómo a través de los gobernadores el poder central no dejó de tutelar a la periferia, potenciando su desarrollo cívico y corrigiendo, en la medida de lo posible, los defectos inherentes al sistema municipal.

CAPÍTULO 1: CONTROL DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

La supervisión de las cuentas públicas de las ciudades de la provincia era, después de la administración de justicia, una de las principales ocupaciones de los gobernadores que estuviesen al frente de una provincia plenamente pacificada e integrada, los cuales aprovechaban su *tour* por las sedes conventuales de su provincia también para este propósito¹⁰⁴⁵. Es muy significativo que la primera de las cartas en las que Plinio informó a Trajano de sus actividades gubernamentales en Bitinia-Ponto¹⁰⁴⁶ estuviese dedicada al estado de las cuentas públicas de la ciudad de Prusa y revela la importancia que tenía esta misión para un gobernador provincial. Plinio se detuvo en Prusa al comienzo de su recorrido por la provincia y pasó gran parte de su estancia en ella examinando los documentos relativos a los gastos, las rentas y los deudores de la ciudad¹⁰⁴⁷. Esta primera toma de contacto con su cometido como gobernador y con la realidad provincial le llevó a constatar: *quod ex ipso tractatu magis ac magis necessarium intellego*¹⁰⁴⁸. Trajano, en su respuesta, reitera la necesidad de que se ocupe de ello en primer lugar: *Rationes autem in primis tibi rerum publicarum excutiendae sunt: nam et esse eas uexatas satis constat*¹⁰⁴⁹.

El mando especial que ejerció Plinio en Bitinia-Ponto, en calidad de *legatus Augusti pro praetore consulari potestate*¹⁰⁵⁰, con el fin de resolver las deficiencias en el buen funcionamiento de las ciudades que preocupaban al poder central, personificado en la figura de Trajano, no debe hacernos dudar acerca de la validez general de la correspondencia pliniana como testimonio de la rutina del gobernador. Las ciudades de

¹⁰⁴⁵ Ya desde finales de la República: Cic. *Ad fam.* XV, 4, 2: *Quibus in oppidis cum magni conuentus fuissent, multas ciuitates acerbissimis tributis et grauissimis usuris et falso aere alieno liberaui*. Sobre el Principado: G. P. Burton, "Proconsuls, Assizes and the Administration of Justice under the Empire", *JRS* 65, 1975, pp. 92-106, esp. pp. 104-106.

¹⁰⁴⁶ Las precedentes del libro X están dedicadas a relatar su viaje, felicitar al emperador y pedir algunos beneficios imperiales. Este libro parece presentar el elenco completo de las cartas cruzadas entre Plinio y Trajano, a excepción de las relativas a los preparativos de la Guerra Pártica, probablemente. Cf. Sherwin-White, *The Letters...* cit. pp. 534-535.

¹⁰⁴⁷ *Nunc rei publicae Prusensium impendia, redditus, debitores excutio*. Plin. *Ep* X, 17 a, 3.

¹⁰⁴⁸ *Ep.* X, 17 a, 3

¹⁰⁴⁹ *Ep.* X, 18, 3.

¹⁰⁵⁰ *CIL* V, 5262 = *ILS* 2927 (Como).

Bitinia-Ponto estaban especialmente afectadas por los problemas económicos derivados de malas gestiones de sus magistrados, pero la labor de Plinio no fue excepcional, sino más incisiva. Otros gobernadores provinciales conocidos también dedicaron parte de su mandato a resolver cuestiones similares.

A finales de la República ya Cicerón había manifestado la necesidad de controlar el estado de las finanzas de las ciudades provinciales, suprimir los gastos superfluos y corregir en la medida de lo posible los endeudamientos en los que hubiesen caído¹⁰⁵¹. Cuando fue gobernador de Cilicia no dudó en esforzarse en esta cuestión y llegó dedicar un capítulo de su propio edicto jurisdiccional a la disminución de los gastos de las ciudades: *Diligentissime scriptum caput est quod pertinet ad minuendos sumptus ciuitatum*¹⁰⁵². Asimismo, cuando Julio César gobernó la Hispania Ulterior en 61 a.C. se preocupó de resolver los conflictos existentes entre prestamistas y deudores¹⁰⁵³.

En el Principado tenemos otra buena evidencia de esta ocupación en la actividad del legado imperial que gobernaba Licia en 151 d.C., Rupilio Severo, quien examinó en ese año las cuentas de la ciudad licia de Limyra, que se hallaba en graves problemas financieros, y probablemente animó al rico aristócrata Opramoas, que se destacaba por sus actos evergéticos, a realizar uno más en esta ciudad para ayudarla a solventar sus deudas¹⁰⁵⁴.

La corrección de los problemas que se dieran en la provincia en general, y en sus ciudades en particular, así como el establecimiento de nuevas disposiciones que favoreciesen el buen desarrollo de la vida cívica y de las relaciones entre individuos, comunidades o entre ambos, formaba parte de la misión que los gobernadores tenían de mantener el orden en la provincia y de que ésta estuviese tranquila¹⁰⁵⁵.

¹⁰⁵¹ Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 25; *Ad Att.* V, 21, 11; *Ad fam.* III, 8, 2-4; XV, 4, 2.

¹⁰⁵² *Ad fam.* III, 8, 4.

¹⁰⁵³ Plut. *Caes.* 12, 2-4: θέμενος δὲ τὰ τοῦ πολέμου καλῶς, οὐ χεῖρον ἐβράβευε τὰ τῆς εἰρήνης, ὁμόνοιάν τε ταῖς πόλεσι καθιστὰς καὶ μάλιστα τὰς τῶν χρεωφειλετῶν καὶ δανειστῶν ἰώμενος διαφοράς. ἔταξε γάρ τῶν προσιόντων τοῖς ὀφείλουσι καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν δύο μὲν μέρη τὸν δανειστὴν ἀναιρεῖσθαι, τῷ δὲ λοιπῷ χρῆσθαι τὸν δεσπότην, ἄχρι ἂν οὕτως ἐκλυθῇ τὸ δάνειον.

¹⁰⁵⁴ Oliver, *Greek Constitutions...* cit. n° 148. Rupilio Severo informó de sus acciones a Antonino Pío, adjuntando a su carta el decreto con el que Limyra había honrado a Opramoas como benefactor.

¹⁰⁵⁵ M. Dondin-Payre, “L'intervention du proconsul d'Afrique dans la vie des cités”, en *L'Afrique dans l'Occident romain (Ier s. av. J.-C.-IVe s. ap. J.-C.)*. *Actes coll. Rome (3-5 décembre 1987)*, Roma, 1990, pp. 333-349; Y. Le Bohec, “Les activités des proconsuls d'Afrique de Trajan à Antonin le Pieux d'après l'épigraphie”, *Epigraphica* 70, 2008, pp. 229-245.

En las provincias hispanas, fuera de la ley colonial de Urso y las leyes flavias municipales –todas ellas pertenecientes a la Bética–, apenas se conservan fuentes literarias o epigráficas referidas a la gestión de las finanzas municipales en época altoimperial. Sin embargo, tal es la relevancia y precisión de la información contenida en esas leyes que se puede decir que la Bética es, después de Bitinia-Ponto, la provincia de la que más sabemos acerca de los gastos de sus ciudades¹⁰⁵⁶. Así, resulta sumamente interesante la comparación y combinación de las leyes coloniales y municipales béticas con las cartas plinianas, y en torno a ese eje vertebraremos nuestra exposición.

Como ha señalado J. Mangas, toda colonia y municipio (romano o latino) tenía que afrontar una serie ineludible de gastos: Gastos ordinarios en actividades administrativas, sobre todo en el pago de los *apparitores* que asistían a los magistrados; la adquisición y mantenimiento de esclavos públicos; el pago de las posibles legaciones; y el presupuesto destinado a la adquisición de víctimas para los obligados sacrificios públicos, junto con el resto de productos usados en los rituales, así como a la compra de animales y el pago de los gladiadores para los juegos desarrollados en el anfiteatro o, en su defecto, en el lugar donde se celebrasen los *munera*. Asimismo, los magistrados de la ciudad habrían de tener en cuenta posibles gastos extraordinarios, como los que podía acarrear la reparación de las infraestructuras y edificios públicos, al igual que las honras fúnebres o en vida dedicadas a algún notable local destacado¹⁰⁵⁷.

Las ciudades tenían diversas fuentes de ingresos. En primer lugar, el arriendo de sus tierras y bosques públicos, parte de los impuestos (*vectigalia*) que pesaban sobre ellos y que variaban de una parcela a otra de su territorio en función de su feracidad, o la subasta de su recaudación¹⁰⁵⁸, y las tasas sobre los mercados y aduanas¹⁰⁵⁹. También

¹⁰⁵⁶ Aunque es Éfeso, en Asia, la ciudad en cuyas finanzas públicas más intervenciones de los gobernadores romanos conocemos. G. P. Burton, “The Roman Imperial State, Provincial Governors and the Public Finances of Provincial Cities, 27 B.C.-A.D. 235”, *Historia* 53/3, 2004, pp. 311-342, esp. p. 311.

¹⁰⁵⁷ J. Mangas Manjarrés, *Leyes coloniales y municipales de la Hispania romana*, Madrid, 2001, pp. 57-58. Véase también J. F. Rodríguez Neila, “*Pecunia communis municipum*. Decuriones, magistrados y gestión de las finanzas municipales en Hispania”, en C. Castillo – J. F. Rodríguez Neila – F. J. Navarro, *Sociedad y economía en el Occidente romano*, Pamplona, 2003, pp. 111-198, esp. pp. 139-140.

¹⁰⁵⁸ Vid. Mangas, *Leyes...* cit. p. 58; R. Biundo, “Terre di pertinenza di colonie e municipi fuori del loro territorio: gestione e risorse”, *CCG* 14, 2003, pp. 131-142; M. Christol, “Ressources des colonies, ressources de l'état” en S. Demougin – J. Scheid (eds.), *Colons et colonies dans le monde romain*, Roma, 2008, pp. 65-86 (donde examina la información del catastro de *Arausio*), y “Le census dans les provinces, ses responsables et leurs activités”, en F. Chausson (dir.), *Occidents romains. Sénateurs, chevaliers, militaires, notables dans les provinces d'Occident (Espagne, Gaules, Germanies, Bretagne)*, París, 2009, pp. 247-275, esp. pp. 248-249. Recuérdese el caso del recaudador Polión y su conflicto con Munigua, recogido en la *Ep. Titi ad Muniguenses*.

podían obtener ingresos del alquiler o venta de otros bienes inmuebles que perteneciesen a los *bona publica*¹⁰⁶⁰. Asimismo, no eran ingresos desdeñables las multas por faltas públicas y la *summa honoraria* que pagaban aquellos que accedían a una magistratura o un sacerdocio locales, e incluso, en algunas ciudades, al propio *ordo decurionum*¹⁰⁶¹. Aparte de esta, además, era habitual que estos aristócratas prometiesen desembolsar ciertas cantidades de dinero en favor de su comunidad –usadas sobre todo en la realización de alguna obra pública– con el fin de respaldar su obtención de una magistratura, o bien ya durante el desempeño de ésta: lo que se conoce como *pollicitatio*, ampliamente constatada en África¹⁰⁶². Finalmente, también podían recibir legados hechos por particulares en favor de su comunidad en su testamento¹⁰⁶³.

Sin embargo, el proceso de desarrollo urbanístico y monumentalización que experimentaron las ciudades de las provincias hispanas durante el Principado –sobre todo las que gozaban de un estatuto privilegiado y, en particular, las que tuvieron importantes funciones administrativas¹⁰⁶⁴, como sucedió también en la Galia Narbonense y África Proconsular– las embarcó en proyectos muy costosos a los que sus

¹⁰⁵⁹ Burton, “The Roman Imperial State...” cit. p. 315; J. France, “Les revenus douaniers des communautés municipales dans le monde romain”, en *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain* (Rome, mai, 1996), Roma, 1999, pp. 95-113.

¹⁰⁶⁰ Rodríguez Neila, “*Pecunia communis municipum...*” cit. p. 120.

¹⁰⁶¹ R. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire: Quantitative Studies*, Cambridge, 1974, pp. 82-88, realizó una estimación de su coste; E. Melchor Gil, “Élites supralocales en la Bética”, en A. Caballos Rufino – S. Lefebvre, *Roma generadora de identidades. La experiencia hispana*, Madrid-Sevilla, 2011, pp. 267-300, esp. pp. 298-299 y nt. 98. Este autor sostiene que la decisión de los *ordines decurionum* de las ciudades de la Bética de admitir miembros no originarios de su ciudad no se debió a la necesidad de encontrar notables que desempeñasen los cargos y *munera*, sino a la consecución de nuevos ingresos para el municipio con el aumento de los decuriones que pudiesen pagar la *summa honoraria* (p. 298). Cf. también: E. Melchor Gil, “Aportaciones de los notables locales a las finanzas municipales”, en Castillo – Rodríguez Neila – Navarro, *Sociedad y economía...* cit. pp. 199-230. Como ha señalado C. Briand-Ponsart, “*Summa honoraria* et ressources des cités d'Afrique”, en *Il capitolo delle entrate...* cit., pp. 217-234, esp. p. 224, la *summa honoraria* exigida por ingresar en el *ordo decurionum* no está contemplada en la ley de Urso ni de los municipios flavios de la Bética (donde sólo se tendrían en cuenta criterios censitarios y la honorabilidad del individuo para que fuese admitido), y aquella no sería sino el resultado de una evolución que culminaría en el siglo II. Según L. A. Curchin, *The Local Magistrates of Roman Spain*, Toronto-London, 1990, p. 107, incluso en el siglo II la práctica de exigir la *summa honoraria* también a los nuevos decuriones nunca se generalizó en todas las ciudades.

¹⁰⁶² Era una obligación non contractual de acto lícito que entraba dentro de las *obligationes quae quasi ex contractu nascuntur*, cf. ‘Pollicitatio’ en *Diz. Giurid.* p. 401; F. Jacques, “*Ampliatio et mora*: Évergètes récalcitrants d'Afrique romaine”, *Antiquités Africaines* 9, 1975, pp. 159-180, esp. p. 159-160; P. Corbier – M. Griesheimer, *L'Afrique romaine, 146 av. J.-C.-439 ap. J.-C.*, París, 2005, pp. 380-383.

¹⁰⁶³ E. Melchor Gil, *El mecenazgo cívico en la Bética: La contribución de los evergetas al desarrollo de la vida municipal*, Córdoba, 1994, p. 83; Rodríguez Neila, “*Pecunia communis municipum...*”, cit. pp. 171-175; cuadro resumen en p. 190.

¹⁰⁶⁴ J. Andreu Pintado, “Construcción pública y municipalización en la Provincia Hispana Citerior: la época Flavia”, *Iberia* 7, 2004, pp. 39-75, esp. p. 44.

arcas públicas no podían hacer frente por sí solas. Por ello, gran parte de las nuevas construcciones de gran entidad o de los arreglos de las ya existentes –como termas, anfiteatros, bibliotecas, templos, conducciones de aguas, foros, etc.–, algunos banquetes públicos, los espectáculos, las donaciones relacionadas con la alimentación de la plebe (*epula*, *sportula*...) y las propias legaciones dependían en gran medida del evergetismo de los miembros de la élite local, que se encargaban de asumir los costes¹⁰⁶⁵. Estas donaciones no pocas veces tenían lugar *post mortem*, en calidad de legados dejados por el difunto benefactor como parte de su testamento, a veces bajo condiciones. Así, destaca, por ejemplo, el legado que dejó el notable saguntino Gneo Baebio Gémino con el fin de que se construyese un foro en su municipio, prueba del poder económico y la influencia política de esta familia en Sagunto desde finales del período augusteo en adelante¹⁰⁶⁶. En lo que respecta a aquellos que asumían magistraturas municipales, al margen de que la *summa honoraria* que aportaban por el desempeño de su cargo se destinase a veces directamente a la erección de alguna construcción que la ciudad necesitase, éstos, junto con el resto de decuriones, se preocuparon especialmente por cubrir las necesidades edilicias de su comunidad con su propio peculio. En la Bética, por ejemplo, unos duoviros de Itálica de época de Tiberio, Lucio Blatio Trajano Polio y C. T(raio/itio?) Polio pagaron de su peculio propio la *orchestra*, el *proscenium* y los *itinera* del teatro del municipio¹⁰⁶⁷; otro del municipio de *Aurgi* (Jaén) costeó la

¹⁰⁶⁵ Melchor Gil, *La munificencia cívica*... cit. pp. 31-53; Curchin, *The Local Magistrates*...cit. pp. 106-109; N. Mackie, "Urban Munificence in Roman Spain", en T. Blagg – M. Millett (ed.) *The Early Roman Empire in the West*, Oxford, 1990, pp. 179-192; Alföldy, "Spain", *CAH*² X, p. 459. Para el caso de la Bética: Melchor Gil, *El mecenazgo cívico*... cit. pp. 107-212; y "Consideraciones sobre la munificencia cívica en la Bética romana", en M. Navarro Caballero – S. Demougin (eds.), *Élites hispaniques*, París, 2001, pp. 157-171, esp. p. 165. Resulta muy difícil realizar una estimación de la capacidad económica de las élites municipales; sobre ello ver J. Edmondson, "Les fondements économiques de la puissance des élites hispaniques", en Navarro Caballero – Demougin, *Élites hispaniques*, cit. pp. 63-67 y A. Caballos Rufino, "Los recursos económicos de los notables de la Bética", en *Idem*, pp. 69-87.

¹⁰⁶⁶ *CIL* II²/14, 374: *Cn(aeus) Baebius Cn(aei) f(ilius) G(al(eria) Ge)min[us] testam[ento] foru[m] de sua pecun]ia d[onauit] Cn(aeus) Baebius Cn(aei) f(ilius) Gal(eria) ---[ni]nus?] fra[ter] heres dedicauit*. Sobre la familia de los *Baebii* de Sagunto véase: G. Alföldy, *Los Baebii de Saguntum*, Valencia, 1977.

¹⁰⁶⁷ *ERItal* n° 49 = *CILA* II, 383: *L(ucius) B[la]tius L(uci) f(ilius) Traianus Pollio G(aius!) T[raiu]s G(ai!) f(ilius) Pollio Iluir(i) desig(nati) iter(um) pontific(es) prim[i] cr[ati] / Augusto orchestram pros[caeni]um itinera aras signa d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(urauerunt)*. Menciona una lectura diferente del *nomen* del segundo duoviro, como Titio (y no Traio) Polio: O. Rodríguez Gutiérrez, "Edificios de espectáculos", en A. Caballos Rufino (ed.), *Ciudades romanas de Hispania 7: Itálica-Santiponce, Municipium y Colonia Aelia Augusta Italicensium*, Roma, 2010, pp. 67-80, esp. p. 70. Para un elenco de las evergías realizadas en la Bética por magistrados y particulares en construcciones véase: Melchor, *El mecenazgo cívico*... cit. pp. 147-171.

construcción de unas termas y de las conducciones de agua para abastecerlas¹⁰⁶⁸; y una inscripción de Munigua (Villanueva del Río y Minas, Sevilla) recuerda que un duoviro de época flavia asumió en su ciudad los gastos de las obras realizadas en el foro y en unas termas, un templo y una exedra emplazados en aquel¹⁰⁶⁹. Asimismo, en la Hispania Citerior, en época augustea, el duoviro de *Emporiae*, Lucio Cecilio Macer donó a sus expensas una suerte de plaza (*campus*)¹⁰⁷⁰. También fueron importantes los actos evergéticos de los libertos que en las ciudades alcanzaron cierta preeminencia gracias a su poderío económico, cuya influencia se manifestó, por ejemplo, en el desempeño del sevirato augustal y en las dedicaciones honoríficas que les tributaron sus ciudades¹⁰⁷¹. Cada ciudadano debía servir a la comunidad en función de sus posibilidades a través de la realización de diversos *munera*, que las élites tomaban como una obligación moral que entraba dentro de los *honores*; la propia ideología compartida por estas élites municipales las llevaba a competir entre sí en los actos evergéticos ofrecidos a su comunidad¹⁰⁷². Los desembolsos pecuniarios de los miembros de las élites locales llegaron a ser muy elevados y el gobernador hubo de preocuparse no sólo de las cuentas públicas, sino también de que las élites locales –fundamentalmente los miembros del *ordo decurionum*– no se arruinasen, con el fin de que la ciudad en cuestión pudiese continuar siendo autosuficiente.

La gestión de los ingresos y gastos públicos ocupa varios capítulos de la *lex Iritana* y de la *lex Coloniae Genetivae Iuliae Vrsionensis*. Aunque esta última es una

¹⁰⁶⁸ CIL II²/5, 30: *C(aius) Sempronius C(ai) f(ilius) Gal(eria) Sempronianus Iiur bis / pontufex(!) perp(etuus) et Sempronia Fusca Vibia Anicilla / filia thermas aqua perducta cum siluis agnuar(um) / trecentarum pecunia impensa que sua omni d(ederunt) d(edicauerunt).*

¹⁰⁶⁹ CIL II, 1076: *[L(ucius) Vale]rius Qui[r(ina) Firmus / Iiur b]is templ[um forum / p]orticus ex[edram / tabu]larium s(ua) p(ecunia)] / dedicau[it].*

¹⁰⁷⁰ IRC III, 35: *[L(ucius) C]aecilius L(uci) f(ilius) Gal(eria) / [Ma]cer aedil(is) Iiur / [ca]mpum de sua pecu(nia) / [facie]ndum coerauit / [idemq]ue probauit. Cf. J. Tremoleda, “Edificios de espectáculos”, en X. Aquilué (ed.), *Ciudades romanas de Hispania 6: Empúries, Municipium Emporiae*, Roma, 2012, pp. 55-68, esp. pp. 66-68.*

¹⁰⁷¹ La colonia de *Barcino*, por ejemplo, honró con numerosas estatuas en su foro a Lucio Licinio Secundo, liberto del tarraconense Lucio Licinio Sura, amigo íntimo de Trajano y uno de sus colaboradores más importantes. Véase: IRC IV, 84-88. Es interesante también la dedicatoria a otro liberto que fue sevir augustal en esta ciudad a inicios del siglo II: IRC IV, 109: *C(aio) Pub(licio) Meli[ss]o / [II]IIIIiur(o) ob causas / uti[lita]tesq(ue) pub(licas) / fidelit(er) et cons-/tant[er] defens(as) / Ordo Barcin(onensium) / p(ecunia) p(ublica).*

¹⁰⁷² Véase el ejemplo paradigmático de Herodes Ático en Philost. V.S. II, 1, 547. A propósito del sistema evergético cf. P. Veyne, *Le pain et le cirque: Sociologie historique d'un pluralisme politique*, París, 1976, pp. 20-25; Melchor, *El mecenazgo cívico...* cit. pp. 33-39; G. Pereira Menaut, *Munera civitatum: La vida de la ciudad romana ideal*, Sevilla, 2011.

ley colonial tardo-republicana –promulgada por Marco Antonio siguiendo el plan de asentamiento de veteranos y de miembros de la plebe urbana de Roma en las provincias occidentales que César tenía preparado antes de ser asesinado¹⁰⁷³–, el hecho de que la copia conservada en bronce sea altoimperial –del siglo I d.C. (bien de época flavia, bien de la claudia), como ha revelado el análisis del tipo de letra usado–¹⁰⁷⁴ confirma que estuvo en vigor durante el Principado y, de nuevo, remarca la continuidad existente, en el ámbito administrativo, entre uno y otro período. Ambas leyes comparten una misma preocupación normativa por la economía pública de sus respectivas comunidades.

En primer lugar, los ingresos de la ciudad y su control son tratados en los capítulos 63-66 y 79 de la *lex Irnitana* y en los capítulos 80-82 de la de Urso. En ambos casos regulan el uso de las tierras, las posibilidades de su arriendo o venta y la declaración que todo individuo debía hacer ante los magistrados de la ciudad de los negocios que desarrollaba en ella, así como la rendición de cuentas de estos últimos al final su mandato. Asimismo, se indican las multas que debían ser pagadas en caso de incumplimiento de estas disposiciones.

En la ley de *Irni*, el primer capítulo que trata acerca de los asuntos económicos es el 63 y está dedicado a la normativización de los arriendos de la recaudación de impuestos sobre las tierras públicas (*uectigalia*) y otros impuestos (*ultroque tributa*) relacionados con las ‘contribuciones para obras públicas’ y cualquier otro servicio que puedan necesitar los munícipes y sea objeto de una *locatio*¹⁰⁷⁵. Los *agri uectigales* pertenecientes a colonias y municipios eran bienes inalienables por el uso de los cuales se pagaba un *uectigal*. Serían los duoviros los encargados de llevar an cabo las subastas

¹⁰⁷³ Véase los caps. 104 y 106 de la ley y que su nombre oficial expresa un doble homenaje a César: *Iulia* y *Genetiua*, adjetivo vinculado a Venus, antepasada divina de la *gens Iulia*. Precisamente a *Venus Genetrix* estaba dedicado el templo que presidía el Foro de César de Roma. Cf. Mangas, *Leyes...* cit., pp. 18-19; A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla, 2006, p. 338, quien atribuye a Asinio Polión la ejecución sobre el terreno de la deducción de la colonia, en calidad de gobernador de la Ulterior (pp. 340-346).

¹⁰⁷⁴ Por la época flavia se decantan J. González, *Bronces jurídicos romanos de Andalucía*, Sevilla, 1990, p. 17, y Crawford, *Roman Statutes* I cit. p. 395. La datación en época Claudia ha sido propuesta por A. U. Stylow, “Apuntes sobre la arqueología de la *lex Ursonensis*”, *Studia Historica. Historia Antigua* 15, 1997, pp. 35-45. Por su parte, Mangas, *Leyes...* cit., no se inclina por ninguna de las dos posibilidades, que, de todas formas, no son muy lejanas entre sí.

¹⁰⁷⁵ A. D’Ors – X. D’Ors, *Lex irnitana (Texto bilingüe)*, Santiago de Compostela, 1988, pp. 42-44; Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit. p. 319. Como ha señalado A. Trisciuglio, “*Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare*”. *Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell’età repubblicana e augustea*, Nápoles, 1998, p. 68, esos *ultrotributa* consistirían en una contribución que el *redemptor* que hubiese ganado la contrata de una obra pública debía ingresar en las arcas públicas de una parte de las ganancias que hubiese obtenido de la obra realizada.

mediante las que se concedía a particulares estos arriendos de los *agri* de la comunidad y las contratas de obras públicas, dentro del sistema de la *locatio-conductio*¹⁰⁷⁶, y de registrarlos en el archivo municipal, indicando sus condiciones, precios y las garantías dadas por el arrendatario. Todo ello debía estar expuesto públicamente en el lugar que dispusiesen los duoviros (*quo loco decuriones conscriptiue proponenda censuerint*), probablemente el foro de la ciudad.

Un buen ejemplo de la necesidad que las ciudades hispanas tenían de ampliar sus ingresos y, en concreto, los relativos a los *uectigalia*, lo hallamos en la denominada *Epistula Vespasiani ad Saborenses*:

*Imp(erator) Cae(sar) Vespasianus Aug(ustus) Ponti-/fex Maximus tribuniciae / potestatis VIII Imp(erator) XIIII consul / VIII P(ater) P(atriciae) salutem dicit IIIIuiris et / decurionibus Saborensium: / Cum multis difficultatibus infirmita-/tem uestram premi indicetis per-/mitto uobis oppidum sub nomine meo ut / uoltis in planum extruere uecti-/galia quae ad Diuo Aug(usto) accepisse dici-/tis custodio si qua noua adicere uol-/tis de his proco(n)s(ulem) adire debebitis ego / enim nullo respondente constitu-/ere nil possum. Decretum uestrum / accepi VIII ka(lendas) Aug(ustas) legatos dimi-/si IIII ka(lendas) easdem ualete. / IIuiri C(aius) Cornelius Seuerus et M(acus) Septimi-/us Seuerus publica pecunia in aere / inciderunt.*¹⁰⁷⁷

Los magistrados de *Sabora*, en la Bética, ante sus dificultades económicas, habían solicitado al emperador Vespasiano que les permitiese trasladar su ciudad a la llanura –probablemente por ser una zona más fértil, con más recursos naturales y mejor comunicada que su viejo emplazamiento–, añadiendo el adjetivo ‘flavio’ a su título oficial (como municipio de derecho latino que era), y conservando el cobro de los *uectigalia* que Augusto les había concedido en su momento. Asimismo, le pedían que les concediera el cobro de nuevos *uectigalia*. Vespasiano da su aprobación a las dos primeras peticiones, pero para la tercera (los nuevos *uectigalia*) los remite al procónsul de la Bética, dado que era quien mejor conocía sus problemas y las condiciones a que estaba sujeto el territorio en cuestión. No cabe duda de que este decreto de los

¹⁰⁷⁶ Rodríguez Neila, “*Pecunia communis municipum...*” cit. p. 124-125; Biundo, “*Terre di pertinenza...*” cit. pp. 134-137.

¹⁰⁷⁷ *CIL* II²/5, 871 (= *CIL* II, 1423); *FIRA* I, p. 242, n°76. Anexo II: n° 68.

Saborenses le llegó al emperador a través del gobernador de la provincia, acompañado de un informe sobre el asunto.

Resulta muy interesante que, ante la petición de poder cobrar nuevos *uectigalia*, el emperador afirme que ‘*si qua noua adicere uol-/tis de his proco(n)s(ulem) adire debebitis ego / enim nullo respondente constitu-/ere nil possum*’¹⁰⁷⁸. Es decir, no sólo no podía responder acerca de ello al no conocer de primera mano el caso, sino que tampoco podía *constituere* nada. El *Thesaurus Linguae Latinae* atestigua la gran variedad de matices y usos que las fuentes latinas dieron al verbo ‘*constituo*’, y en nuestro caso cambia por completo la interpretación de este pasaje si se opta por traducirlo de una manera genérica, como ‘definir’, ‘establecer’ o más concreta, como ‘instituir’ o ‘sancionar’ legalmente¹⁰⁷⁹.

Puede arrojar algo de luz a todo ello la carta X, 108 de Plinio –tratada en la Primera Parte de este estudio–, en la que aquel exhortaba a Trajano a que instituyera una disposición general acerca de los derechos que tenían las ciudades de Bitinia-Ponto en la *locatio* y la *uenditio*, cuestión de la que hasta entonces se habían ocupado los procónsules anteriores (fallando normalmente a favor de la comunidad y en contra de los particulares), sin haber logrado poner fin al problema con sus decisiones, por lo que Plinio ve la necesidad de una constitución emanada del emperador. Trajano lo remite a las leyes de cada ciudad, que en Occidente tenderían a la uniformidad en la línea de lo que se recoge en *Irni*.

No es que Trajano careciera de poder para instituir una regla general, sino que la variedad de casos hacía imposible llevar a cabo lo que Plinio le pedía. Del mismo modo, Vespasiano deja la decisión acerca de la concesión de nuevos *uectigalia* a *Sabora* en manos del procónsul de la Bética porque era la única autoridad romana con poderes suficientes en la provincia que podía consultar los archivos tanto del municipio en cuestión como los provinciales y conocer el catastro de las comunidades circundantes y las posibilidades que había de favorecer, o no, a los *Saborenses*. Como ha señalado W. Eck, en muchas ocasiones los problemas o controversias de particulares o comunidades provinciales llegados al emperador serían remitidos por éste de nuevo a la máxima autoridad provincial, sobre todo cuando sólo pudiesen ser resueltos sobre el terreno o

¹⁰⁷⁸ Il. 9-10.

¹⁰⁷⁹ *TLL* IV, pp. 510-524.

involucrassen a varias partes, dificultando su vista en Roma.¹⁰⁸⁰ La respuesta a la petición de los Saborenses obligaba a tener un conocimiento de primera mano de la realidad local y Vespasiano carecía del tiempo necesario para hacerse informar en detalle acerca de ella y de la posibilidad consultar con la suficiente rapidez los documentos catastrales béticos necesarios, que el procónsul de la Bética, en cambio, sí tenía a mano en su archivo. Por ello, el emperador dio libertad de acción al procónsul. Ahora bien, una vez tomada la decisión, el procónsul debía solicitar la aprobación del emperador.

Esta aprobación imperial no hizo sino fortalecerse con el paso del tiempo y parece que a partir del siglo II el poder imperial tendió a dejar menos capacidad de decisión en este tipo de asuntos: Cuando la ciudad de Adrianópolis Estratonicea solicitó la cesión de nuevos impuestos (τέλη), Adriano no derivó el asunto al procónsul, sino que tomó una decisión (favorable) y sólo usó a Estetinio Quarto como intermediario¹⁰⁸¹. Asimismo, sabemos por un rescripto de Septimio Severo y Caracala que en su época este tipo de decisiones debían ser confirmadas por los emperadores¹⁰⁸². Coincidimos, pues, con Hurlet en que “le prince finissant par être très vite reconnu comme le garant suprême de la viabilité des finances de l’Empire romain et de ses nombreuses communautés”¹⁰⁸³, pero nos permitimos añadir que la actuación de los gobernadores fue crucial, actuando como informadores, asesores y ejecutores de las decisiones del poder central.

Asimismo, la *epistula* de Tito a los *Muniguenses*¹⁰⁸⁴ y la de Antonino Pío a los *Obulculenses*¹⁰⁸⁵ muestran –como vimos a propósito de la jurisdicción del gobernador en la Primera Parte– que gran parte de las causas judiciales no criminales que debían ver los gobernadores versaban sobre conflictos que afectaban a las finanzas municipales, muchas veces referidos a litigios entre un particular y su ciudad. En el primer caso, se trataba de un conflicto entre Servilio Polión, que había arrendado la recaudación de los *uectigalia* de la ciudad de Munigua, y ésta: Munigua le debía dinero a Polión y no

¹⁰⁸⁰ Eck, “Provincial Administration...” cit. p. 271.

¹⁰⁸¹ Hurlet, *Le proconsul...* cit. pp. 243-244.

¹⁰⁸² *CJ* 4, 62, 1. Cf. Hurlet, *Le proconsul...* cit. p. 270. Como ha señalado G. D. Merola, *Autonomia locale – governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari, 2001, p. 123, en época imperial las ciudades tenían una reducida autonomía financiera y las posibilidades de instituir o recaudar “impuestos municipales” se entendía como un privilegio concedido por el emperador.

¹⁰⁸³ *Idem* p. 285.

¹⁰⁸⁴ *CIL* II, 1052.

¹⁰⁸⁵ *CIL* II²/5, 1322 y *CIL* II, 835, ediciones que presentan variantes de lectura.

aceptó la sentencia del procónsul Sempronio Fusco que la obligaba a pagarla, decidiendo apelar al emperador alegando que atravesaba dificultades económicas. En la *epistula* de Antonino Pío se trata de una controversia en torno a un legado que uno o varios particulares debían al municipio latino de *Obulcula*, en la Bética, que fue confirmado primero por el procónsul de la provincia, Lucilio Africano, y luego por el emperador, en respuesta a la apelación presentada por el particular.

Tal era la importancia de estos ingresos que no sólo en ambos ejemplos una de las partes recurrió la sentencia del procónsul ante el emperador haciendo uso de la *appellatio*, sino que éste último respondió con presteza y ordenó que se plasmara su sentencia definitiva en bronce. En la *epistula* de Tito el emperador se esmera en no dejar lugar a dudas: confirma la resolución del procónsul que había visto el caso, Sempronio Fusco, y refuerza la posición y autoridad de su sucesor, Galicano, llamándolo “amigo mío”, pues será el encargado de ejecutar la multa impuesta por Fusco. Sin embargo, a pesar de que Tito confirmó la sentencia que pesaba sobre Munigua, el hecho de que le perdonara la multa que debía pagar a mayores la ciudad por haber incurrido en contumacia indica, nuevamente, la preocupación del poder imperial por no agravar su situación económica.

En la *lex Vrsonensis*, hasta donde sabemos, nada se dice a propósito de las condiciones de la *locatio* de las tierras y otros impuestos de la colonia, excepto que las tierras públicas asignadas a la colonia no podrían ser vendidas o arrendadas por períodos superiores a cinco años, disposición con la que se pretendía evitar que esas tierras cayesen en manos de los grandes terratenientes, entroncando con las leyes agrarias tardo-republicanas que se sucedieron a partir de la *lex Sempronia agraria* del 133 a.C. La vulneración de esta norma implicaba la imposición de una multa de 100 sesteracios por cada yugada vendida o arrendada¹⁰⁸⁶.

En cuanto a los ingresos y gastos públicos de la colonia, la *lex Vrsonensis* habla en términos generales, exponiendo que debían ser controlados y registrados por los duoviros y también por los ediles de la colonia. Se hace especial hincapié en el juramento a Júpiter y a los dioses Penates (*ius iurandum adigito per Iouem deosque*

¹⁰⁸⁶ *Lex Vrsonensis*, cap. 82, ll. 37-39. Seguimos la edición de Crawford (ed.), *Roman Statutes I*, cit. pp. 393-454.

Penates sese)¹⁰⁸⁷ que han de hacer los *scribae* públicamente (en una *contio*, en día de mercado, en el foro) ante estos magistrados, jurando que llevarán a cabo este cometido con arreglo a derecho, bajo el riesgo de ser multados¹⁰⁸⁸. Los duoviros, con la ayuda de *scribae*, debían registrar cuánto dinero público se empleaba y en qué actividades, pero tenían prohibido repartirlo según su arbitrio, pues su concesión atañía exclusivamente a la cámara de decuriones¹⁰⁸⁹.

En la *lex Irnitana*, en cambio, sí se proporciona una lista de las cuestiones en las que se podía producir un gasto del dinero público, en el capítulo en el que se establece el quórum mínimo que debía existir en la curia municipal para que los duoviros pudiesen presentarle a los decuriones el capítulo de gastos propuestos para su año de mandato:

*Qu[o mi]nus quantae pe[c]uniae in sacra, ludos, caenas, quibus decuriones cons[cr]/ipti municipesu[e uo]catur, aera apparitoria, legationis, opera ei[us] / municipi facienda r[e]ficienda, aedium sacrarum monumentorum-/que custodiam tu[e]n[d]am, cibaria uestitum emptionesque eorum qu[i] / municipibus [s]eruiant, item in eas res quae Iluiris aedilibus quaes[to]-/ribus sacrorum faciendorum municipium nomine, item officioru[m] / quae honoris [eiu]s nomine qu*e*m quis inierit expugnari debebunt... ”¹⁰⁹⁰*

El dinero público de la comunidad, por tanto, podía emplearse para el culto y las ceremonias religiosas (*sacra*), los juegos (*ludi*), los convites (*caenae*) públicos vinculados a las festividades locales en los que participaba toda la comunidad ciudadana, el sueldo de los *apparitores*, las embajadas, las obras edilicias (de construcción o reconstrucción), la conservación de los templos, la alimentación, vestido y compra de los esclavos municipales, y aquellos gastos relacionados con las funciones de los magistrados y los elementos necesarios para la realización de las ceremonias religiosas llevadas a cabo por éstos en nombre de los munícipes.

Con el fin de garantizar la buena fe de los decuriones en su toma de decisiones sobre el uso dado a los fondos públicos, la ley de *Irni* establece que realicen un

¹⁰⁸⁷ *Sic (sc. esse)*. Cap. 81, ll. 18-19.

¹⁰⁸⁸ Cap. 81.

¹⁰⁸⁹ ll. 39 y ss.

¹⁰⁹⁰ Cap. 79, IXA, ll. 1-8

juramento sagrado por Júpiter, los dioses Penates, los divinos Augusto, Claudio, Vespasiano y Tito, y por el genio de Domiciano, bajo el que se promulgó la ley¹⁰⁹¹.

Asimismo, los duoviros de Urso y los duoviros y cuestores de *Irni*, antes de asumir su cargo, debían entregar una fianza con la que avalasen su solvencia y su honestidad en el desempeño de sus responsabilidades en el manejo de fondos públicos¹⁰⁹². Y en el capítulo 67 de la *lex Irnitana* se especifica que los magistrados del municipio estaban obligados a realizar una *reddito rationum*, en la que debían dejar constancia, ante los decuriones, tanto de las cantidades que había administrado como de los negocios que se habían llevado a cabo durante su mandato¹⁰⁹³. Además, no sólo ningún magistrado, sino tampoco ningún pariente suyo podía tomar parte en *locationes* públicas¹⁰⁹⁴. Por tanto, un punto importante en el que ambas leyes coinciden es el control del uso de la *pecunia publica* a través de un riguroso registro de cada actividad referida a ésta, así como a la exigencia de una rendición de cuentas, a la cual estaban obligados los duoviros y los decuriones encargados de una actividad que implicase el uso de fondos públicos¹⁰⁹⁵. No es, pues, el conjunto de la comunidad, sino su oligarquía, la que controla a los magistrados y, en general, a sus iguales: un sistema calcado al que se aplicaba en la propia Roma desde la República y que, como en la *Vrbs*, generó graves conflictos internos, que en las provincias fueron sofocados por los gobernadores.

La *lex Irnitana* dedica dos capítulos –el 64 y el 65, también conservados en la *Malacitana* y, aunque muy fragmentarios, en la de *Basilipo*¹⁰⁹⁶– a los bienes inmuebles dados como garantía por parte de los arrendatarios públicos y a la reglamentación de su venta en caso de que pasaran a pertenecer definitivamente a la comunidad¹⁰⁹⁷.

¹⁰⁹¹ Il. 54-56.

¹⁰⁹² *Lex Vrsonensis*, cap. 13; *Lex Irnitana*, cap. 60. Para la primera sigo la edición de Caballos, *El nuevo bronce...* cit. pp. 181-183, en donde señala como precedente de este capítulo un pasaje de la *lex municipii Tarentini*. Ese aval que debían entregar los magistrados de estas comunidades antes de entrar a ejercer su cargo puede tomarse como una summa honoraria, según Briand-Ponsart, “*Summa honoraria...*” cit. p. 221.

¹⁰⁹³ Lamberti, *Tabulae Irnitanae* cit. p. 97. La *reddito rationum* de duoviros, ediles y cuestores también se menciona en el cap. 45.

¹⁰⁹⁴ *Lex Irnitana*, cap. 48.

¹⁰⁹⁵ Este pudo ser el caso de Julio Pisón, al que la ciudad de Amiso, en Bitinia, le reclama una gran cantidad de dinero que le había dado para que procediera a la realización de una actividad no especificada; Plin. *Ep.* X, 110.

¹⁰⁹⁶ J. González, “La *lex municipii Flavii Basiliponensis*”, *SDHI* 49, 1982, pp. 395-399; M. Crawford, en el apéndice I a “The *lex Irnitana*: a New Flavian Municipal law”, *JRS* 76, 1986, pp. 239-241; Mangas, *Leyes...* cit. pp. 27 y 29.

¹⁰⁹⁷ Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit. p. 98-106, ha tratado en profundidad estos capítulos y la polémica generada en torno a ellos desde Mommsen.

Finalmente, a los impuestos derivados de las tierras públicas o al arriendo de estos mismos por parte de particulares, hay que sumar como fuente de ingresos de las ciudades las propias multas que se derivaban de una contravención de las normas que regulaban estos asuntos, al igual que las impuestas sobre otro tipo de infracciones. También hay que contar con el pago que todo esclavo público debía hacer cuando era manumitido por decisión decurional¹⁰⁹⁸.

El gobernador solía encontrarse principalmente con dos tipos de problemas relacionados con los ingresos de las ciudades de su provincia: por un lado, los conflictos surgidos en torno al incumplimiento de los arriendos y legados, que, como vimos en la Primera Parte, se cursaban por vía judicial; por otro, los problemas e irregularidades que podían producirse en la composición de los senados locales y el desempeño de las magistraturas municipales.

En Bitinia, a pesar de que la *lex* elaborada por Pompeyo acerca de la composición de los senados locales no exigía que los miembros de los mismos pagasen una *summa honoraria*, Plinio descubrió que los que habían sido incluidos en ellas por *beneficium* del emperador habían realizado un desembolso de dinero y que un procónsul anterior, Anicio Máximo, había ordenado incluso que también los elegidos por los censores de cada ciudad debían pagar por ese honor. Plinio consultó inmediatamente a Trajano, como fuente de derecho que era, para que normalizase la situación, pero el *princeps* lo remitió, nuevamente, a la ley de cada ciudad¹⁰⁹⁹. En este caso, no pudo obtenerse, por tanto, la solución definitiva que Plinio quería.

La situación narrada por Plinio refleja muy bien el estado de necesidad de las ciudades de Bitinia, que buscaban recaudar dinero de donde fuera posible, fundamentalmente en sus notables. Que el procónsul Anicio Máximo no sólo hubiese refrendado esta decisión de las ciudades, sino que la hubiera ampliado, muestra las dificultades económicas de las ciudades para obtener ingresos. En Occidente, esa escasez en las arcas públicas fue similar y, aunque no llegasen al endeudamiento de las ciudades de Bitinia-Ponto (especialmente grave), parece que no dejaron de tomar

¹⁰⁹⁸ *Lex Irmitana*, cap. 72.

¹⁰⁹⁹ *Ep.* X, 112-113.

medidas para aprovechar cualquier fuente de ingresos. Esto no era síntoma de decadencia, sino de los puntos débiles del propio sistema municipal¹¹⁰⁰.

Un ejemplo elocuente de la rapacidad en la que podían caer las ciudades es el caso que cuenta Frontón en una carta dirigida a Arrio Antonino en 165-167: en la colonia transpadana de *Concordia* existía un enfrentamiento entre uno de sus decuriones, Volumnio Sereno, y el *ordo decurionum* de la misma, que lo acusaba de haber ingresado ilegalmente en él. Frontón defiende a Volumnio, hombre de edad avanzada que tras cuarenta y cinco años como decurión y después de haber realizado numerosos *munera* en favor de su colonia, se veía acusado injustamente por la comunidad de que no había pagado la *summa honoraria* debida por pertenecer a su *ordo* –requisito que no parece haber formado parte de su ley colonial cuando Volumnio había accedido al decurionado. Finalmente, para evitar la infamia que él y su familia estaban sufriendo y la expulsión del *ordo*, Volumnio decidió pagar lo que se le exigía¹¹⁰¹.

La *summa honoraria* que debían aportar los magistrados electos y, en ocasiones, los decuriones, dependía de las leyes de cada ciudad, pero se fue extendiendo poco a poco hasta generalizarse en el siglo II. Fue, como señala Briand-Ponsart, un ingreso esencial para la economía de las ciudades, indispensable para su buen funcionamiento, pues permitía financiar gran parte de los gastos de la comunidad y la realización de construcciones necesarias¹¹⁰². Por ello, en Occidente resulta paradigmática la previsión de ingresos de la colonia de Urso, que ya desde su deducción había estipulado en su ley que sus magistrados debían pagar por desempeñar ese *honor*¹¹⁰³.

En los siglos II y III, los aristócratas locales fueron soportando cada vez mayores cargas económicas en sus ciudades, como parte de los *munera* que se esperaba que asumiesen como miembros de la curia y en el desempeño de las magistraturas. Esto a veces puso en riesgo sus fortunas y patrimonios privados y provocó un paulatino alejamiento de la actividad pública de los notables locales en época severa. Dada la necesidad que la ciudad antigua y, en concreto en Occidente, el sistema municipal

¹¹⁰⁰ Estamos de acuerdo con P. Le Roux, “*Vectigalia et revenus des cités en Hispanie*”, en *Il capitolo delle entrate...* cit. pp. 155-173, esp. p. 169, en que “la précarité des équilibres financiers n’était pas le signe d’une crise ou d’un déclin, mais faisait partie intégrante de la vie des cités qui devaient apprendre à vivre avec elle”.

¹¹⁰¹ Fronto *Ad amicos* II, 7.

¹¹⁰² Briand-Ponsart, “*Summa honoraria...*”, cit. p. 231. Y para una estimación de la cuantía de la *summa honoraria*: pp. 231-234.

¹¹⁰³ Cap. 13. Cf. Caballos Rufino, *El nuevo bronce...* cit. p. 133.

romano tenía para su supervivencia del evergetismo aristocrático, el poder imperial decidió intervenir directamente en este problema, resolviendo la “dejación de funciones” de los aristócratas provinciales a través de la intervención directa de los gobernadores no ya solamente en la supervisión de la composición de los senados locales¹¹⁰⁴, sino también en la nominación de los magistrados municipales, bien para designar candidatos, bien para atender las apelaciones que hiciesen aquéllos que hubiesen rechazado el cargo¹¹⁰⁵. Los gobernadores tenían incluso el poder de obligarles a cumplir con sus deberes públicos: *Si quis magistratus in municipio creatus munere iniuncto fungi detrectet, per praesides munus adgnosceret cogendus est remediis, quibus tutores quoque solent cogi ad munus quod iniunctum est adgnosendum*¹¹⁰⁶.

Los gastos, como mencionamos antes, se producían en cuatro grandes ámbitos principalmente: a) las legaciones, b) las fiestas comunitarias, c) el pago de los *apparitores* de los magistrados locales y los gastos vinculados a los esclavos públicos, y d) las obras públicas.

a) La práctica del envío de embajadas, característica de la ciudad antigua, conoció un auge durante el Principado como forma de demostración de lealtad a la figura del emperador y fue un fenómeno indisociable de la vida cívica de las ciudades del Imperio. Los motivos de este incremento de las embajadas –constatado sobre todo en Oriente– parecen haber sido dos principalmente: Por un lado, eran el único medio concreto de entrar en contacto con el poder romano; por otro, se convirtieron en el principal modo de representación de las ciudades y su único cauce de representación ‘exterior’ dentro del Imperio¹¹⁰⁷.

¹¹⁰⁴ Plin. *Ep.* X, 79-80.

¹¹⁰⁵ Ulp. *1 de appell.* (Dig. XLIX, 4, 13): *Solent plerumque praesides remittere ad ordinem nominatum ut Gaium Seium creent magistratum uel alius quis honor uel munus in eum conferatur. Vtrum igitur tunc appellandum est, cum ordo decretum interposuerit, an uero a remissione, quam praeses fecerit, appellatio sit interponenda? Et magis est, ut tunc sit appellandum, cum ordo decreuerit: magis enim consilium dedisse praeses uidetur, quis sit creandus, quam ipse constituisse: denique ipse erit appellandus, non ab eo prouocandum.*

¹¹⁰⁶ Ulp. *3 de off. procos.* (Dig. L, 4, 9). Cf. Abbott – Johnson, *Municipal Administration...* cit. pp. 85-86.

¹¹⁰⁷ F. Hurlet, “Les ambassadeurs dans l’Empire romain. Les légats des cités et l’idéal civique de l’ambassade sous le Haut Empire”, en A. Becker – N. Drocourt (dirs.), *Ambassadeurs et ambassades au coeur des relations diplomatiques. Rome – Occident médiéval – Byzance (VIIIe s. av. J.-C. – XIIIe s. apr. J.-C.)*, Metz, 2012, pp. 101-126, esp. p. 109.

La reglamentación de las legaciones ocupa los capítulos 44-47 de la *lex Irnitana* y el capítulo 92 de la Ursonense. Este último capítulo ursonense tiene su correspondencia en los capítulos 44-45 de la ley de *Irni*, que tratan cómo ha de elegirse a los miembros de una legación, quiénes podían ser y señalaba la multa pecuniaria que debía pagar quien no la realizase sin justificación¹¹⁰⁸. Evidentemente, en la *lex Irnitana* se detalla más todo el proceso, que resulta más complejo. En Urso la ley se limita a decir que compete a los duoviros proponer ante los decuriones de la colonia el envío de una embajada y que éstos deben decidir y decretar quiénes la formarían. Si uno de estos miembros de la embajada no pudiese participar en ella, debería hallar un sustituto; en caso de que no lo hiciera, debería pagar una multa de 10.000 sesteracios a la comunidad en compensación por su dejación de funciones.

En *Irni* también se encargaban de este asunto los duoviros, pero el procedimiento era más complejo: debían dividir a los decuriones menores de sesenta años en tres decurias, entre las cuales se elegiría por sorteo el número de miembros de la legación, que previamente debía ser aprobada por la curia municipal, estando presentes, como mínimo, dos tercios de sus miembros. Todo apunta a que desde el principado de Vespasiano el límite de miembros que podían constituir una legación se estableció en tres, pero queda la incógnita de si sería elegido uno de cada decuria o los tres de la misma¹¹⁰⁹. Tenían prohibido formar parte de la legación tanto los magistrados en activo y los electos para el próximo año, así como aquellos decuriones que, tras el desempeño de una magistratura municipal, no hubieran presentado las cuentas de su gestión o éstas no hubiesen sido aprobadas por la cámara decurional. Estaban exentos los mayores de sesenta años y aquellos que sufriesen una enfermedad que los incapacitara para realizar la legación. Aquel que no cumpliera con la legación, no hubiese encontrado un sustituto o hecho el juramento por Júpiter, los dioses Penates, los emperadores divinizados y el Genio de Domiciano, sería castigado con una multa de 2000 sesteracios.

En sus capítulos 46 y 47 la *lex Irnitana* prosigue detallando los pormenores de las legaciones. El 46, muy escueto, indica a quién compete la fijación de la cantidad de dinero que se les dará en calidad de dietas (*uiaticum*) a los delegados: *R(ubrica)*:

¹¹⁰⁸ Cap. 44: *De decurionibus distribuendis in tres decurias, quae legationibus in uicem fungantur*; cap. 45: *De legatis mittendis excusationibusque accipiendis*.

¹¹⁰⁹ *Dig. L. 7, 5 [4], 6 (Marc. 12 inst.): Praecipitur autem edicto diui Vespasiani omnibus ciuitatibus, ne plures quam ternos legatos mittant*. Cf. Martini, *Ricerche...* cit. p. 59; Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit., pp. 129-130.

Quantum legatis detur: / Legatis singulis diariorum nomine Huir tantum dato quantum / dandum esse decuriones conscriptiue censuerint. Resulta, sin duda, más rico en información el 47, que trataba *de eo qui non ex decreto decurionum legatione functus erit*. Aquel delegado que hubiese contravenido las instrucciones decretadas por los decuriones para la embajada, provocando su fracaso o un retraso, sería condenado a pagar el coste de los daños que su mala acción hubiera conllevado a la comunidad.

Es esta última disposición acerca del viático asignado a los miembros de la legación del municipio la que precisamente más nos interesa, dado que suponía un importante gasto de los fondos públicos, tanto si la legación iba al encuentro del gobernador provincial como (sobre todo) si se dirigía a Roma o donde se hallase el emperador en ese momento. Prueba de ello son las precauciones que toma la ley para evitar que el dinero se pierda inútilmente. Así, respecto a las embajadas y deferencias (entre ellas la del *hospitium*) con que se recibía y trataba a los gobernadores cuando llegaban a una ciudad, Ulpiano recuerda un rescripto de Septimio Severo y Caracala dirigido al procónsul Aufidio Severiano en la que se establecía: *Obseruare autem proconsulem oportet, ne in hospitibus praebendis oneret prouinciam*¹¹¹⁰. Además, los gobernadores debían declinar en la medida de lo posible el ofrecimiento de embajas por parte de las ciudades a su llegada a la provincia, comunicándoles que bastaba con que los saludasen cuando visitaran cada una¹¹¹¹.

El emperador recibía frecuentemente embajadas de las ciudades de todo el Imperio (o de los *concilia prouinciarum*¹¹¹²), cuya atención ocupaba gran parte de su jornada junto con la respuesta a las cartas oficiales y las peticiones privadas que le llegaban; todo lo cual hacía de él, como ha expuesto Millar, un agente reactivo dentro del modelo de petición y respuesta en el que se basaba su actividad cotidiana¹¹¹³. El ideal de *ciuilis princeps* que el emperador quería transmitir lo obligaba a ser accesible o a fomentar una imagen de accesibilidad y cercanía a sus súbditos¹¹¹⁴. Sin embargo, en la práctica no era nada fácil acceder al *princeps* y los retrasos en la realización de la

¹¹¹⁰ Dig. I, 16, 4, pr. (Ulp. 1 de off. procos.).

¹¹¹¹ Dig. I, 16, 4, 3 (Ulp. 1 de off. procos.).

¹¹¹² De los que hablaremos en el siguiente capítulo, dedicado al culto imperial.

¹¹¹³ F. Millar, *The Emperor in the Roman World*, London, 1977, pp. 363-364, 367-368 y 375-385, seguido por Lamberti, *Tabulae Irnitanae*... cit. p. 132.

¹¹¹⁴ A. Wallace-Hadrill, "Civilis Princeps: Between Citizen and King", *JRS* 72, 1982, pp. 32-48.

audiencia eran comunes¹¹¹⁵, lo que implicaba una estancia de estos delegados fuera de la ciudad de origen que repercutía sobre las finanzas municipales, salvo que ellos mismos se hiciesen cargo de los gastos. Por ello era crucial contar con algún contacto que pudiese facilitar la recepción de la embajada, bien un patrono de la ciudad (senador o *eques*) que viviese en Roma y fuera cercano a la casa imperial, bien el propio gobernador de la provincia a través de una carta oficial en la que informara al emperador del asunto que la legación de la ciudad le quería presentar¹¹¹⁶. No olvidemos que en la sociedad romana estaba profundamente enraizadas las relaciones de clientela/patronazgo, que también condicionaban el funcionamiento de la administración imperial¹¹¹⁷.

El poder imperial se preocupó de normativizar de manera precisa las condiciones de las embajadas, tal y como se refleja en las leyes antedichas y en el capítulo del Digesto que recoge la jurisprudencia en torno a las legaciones (siendo ambos tipos de fuentes coincidentes)¹¹¹⁸. Empero, no se halló durante el Principado una solución a la problemática que las legaciones entrañaban –esto es, la sobrecarga de trabajo para el emperador y el riesgo siempre latente de un colapso del sistema, así como el endeudamiento de las ciudades en tales empeños–, como reflejan la pervivencia del debate en torno a su control y las diferentes medidas reguladoras que diversos emperadores pusieron en marcha desde Augusto. Este último optó por delegar en consulares la atención de muchas de las embajadas que llegaban a Roma, mientras que

¹¹¹⁵ Precisamente, Plinio, *Pan.* LXXIX, 6-7, alaba que Trajano sea muy accesible y reciba sin dilación a las embajadas que llegaban a Roma: *Videmus, ut prouinciarum desideriis, ut singularum etiam ciuitatum precibus occurrat. Nulla in audiendo difficultas, nulla in respondendo mora: adeunt statim, dimittuntur statim: tandemque principis fores exclusa legationum turba non obsidet.* Lo mismo ensalza de Marco Aurelio Herodiano I, 2, 4. Esta imagen era, en ocasiones, más ideal que real: F. Hurlet, “Pouvoirs et autorépresentation du prince a travers la correspondance impériale d’Auguste à Trajan (27 av. J.-C. – 117 apr. J.-C.), en I. Cogitore – I. Savalli-Lestrade (eds.), *Des rois au prince. Pratiques du pouvoir monarchique dans l’Orient hellénistique et romain (fin IVe a.C. – Ier p.C.)*, Grenoble, 2010, pp. 139-140.

¹¹¹⁶ Eck, “Provincial Administration...” cit. pp. 270-271, que señala que el notable incremento del número de respuestas imperiales a peticiones de comunidades o particulares conservadas epigráficamente desde Trajano representa “a sign that the provincial population were beginning increasingly to consider the emperor, in his role as ruler of the empire, as accessible even to individual subjects”. Sobre los rescripta véase: T. Honoré, *Emperors and Lawyers*, Londres, 1981, pp. 24-53, donde describe el funcionamiento del sistema de rescriptos y señala el notable incremento de los testimonios de rescriptos imperiales a partir de época severa.

¹¹¹⁷ El estudio de referencia sigue siendo la magnífica obra de R. Saller, *Personal Patronage under the Early Empire*, Cambridge, 1982.

¹¹¹⁸ Un análisis detallado del mismo en R. del Castro-Camero, “*Ordo decurionum* y legaciones municipales. Estudio palinagénico de D. 50, 7 de *legationibus*”, en E. Melchor Gil – A. Pérez Zurita – J. F. Rodríguez Neila, *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, Sevilla-Córdoba, 2013, pp. 69-95.

Tiberio prefirió retrasar las audiencias *sine die* con el fin de que las ciudades perdiesen la esperanza de ser atendidas y dejasen de enviar embajadas¹¹¹⁹. Desde un principio, en cambio, sí fue común el uso de los gobernadores como primer gran filtro. Bajo Calígula tenemos un ejemplo muy ilustrativo del control que ejercían sobre las embajadas enviadas a Roma: cuenta Filón que cuando los judíos orientales quisieron enviar una embajada a Calígula para rogarle que retirara su estatua del Templo de Salomón en Jerusalén fueron a pedir permiso para realizarla al gobernador de Siria, Petronio. Éste, viendo que no era oportuna desde un punto de vista político, se la denegó, pero a cambio escribió personalmente al emperador para informarle acerca del estado de ánimo de los judíos¹¹²⁰.

En el siglo II, a pesar de que Trajano quiso transmitir una imagen de príncipe accesible a todos que Plinio tanto alabó, el poder imperial siguió intentando dosificar al máximo la llegada de legaciones a Roma¹¹²¹. En concreto, gracias a los rescriptos imperiales conservados sabemos que Adriano y, sobre todo, Antonino Pío pusieron especial empeño en regularlas, concediendo a los gobernadores provinciales un importante papel de filtro¹¹²². Bajo los Severos continuó esta política de contención de las embajadas. A tenor de uno de los consejos que Dión Casio atribuye a Mecenas en el apócrifo discurso que incluyó en su obra, se constata que en el primer tercio del siglo III siguió estando vigente el problema de la afluencia de un alto número de embajadas de las ciudades del Imperio a Roma con fines poco justificados, y que de nuevo el poder imperial vio como única solución la intervención directa de los gobernadores en su control¹¹²³. Asimismo, se conservan algunos rescriptos de Severo y Caracala que confirman su preocupación por estos asuntos¹¹²⁴.

El gobernador, por tanto, como cabeza del poder romano en su provincia, debía velar por que las embajadas se ajustasen a las directrices imperiales, y, además, podía

¹¹¹⁹

¹¹²⁰ Phil. *Leg. ad Gaium* 225-253.

¹¹²¹ D. Nörr, *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatzeit*, Munich, 1966, p. 59.

¹¹²² W. Williams, "Antoninus Pius and the control of provincial embassies", *Historia* 16, 1967, pp. 470-483, esp. p. 477; Marotta, *Multa de iure sanxit...* cit.; Eck, "Provincial Administration..." cit. p. 268; J. Nelis-Clément, "Le gouverneur et la circulation de l'information dans les provinces romaines sous le Haut-Empire", en L. Capdetrey – J. Nelis-Clément (dir.), *La circulation de l'information dans les états antiques*, Burdeos, 2006, pp. 141-159, esp. p. 158; Hurlet, "Les modalités de la hiérarchie..." cit. p. 177.

¹¹²³ Dio LII, 30, 9-10.

¹¹²⁴ Williams, "Antoninus Pius and..." cit. pp. 480-482.

decidir acerca de su pertinencia, actuando como filtro¹¹²⁵. Por ello, cuando un gobernador hallaba problemas en las finanzas de una ciudad, en su intento de suprimir los gastos prescindibles (aquellos más conspicuos que útiles), solía restringir las legaciones a Roma, dado que muchas de ellas se reducían a un mero acto de adulación al *princeps*¹¹²⁶. Así actúa Plinio el Joven cuando, ante los enormes gastos que descubre que realizaba la ciudad de Bizancio, decide –con la aquiescencia de Trajano– eliminar la embajada que todos los años, por decreto del senado local, se enviaba al emperador para saludarlo –así como al gobernador de Mesia¹¹²⁷– reduciendo estos gestos al mero envío del decreto a Roma¹¹²⁸. Esta decisión de Plinio no fue excepcional: Cicerón actuó con la misma intención cuando prohibió que las ciudades de Cilicia enviasen embajadas a Roma para honrar a su predecesor, Apio Claudio Pulcro¹¹²⁹, y durante el Principado conocemos el ejemplo de otros gobernadores (también de rango ecuestre), que denegaron embajadas de los provinciales a Roma¹¹³⁰. No cabe duda de que los gobernadores de las provincias hispanas harían lo mismo.

b) Las fiestas y ceremonias religiosas que se desarrollaban periódicamente en las ciudades, además de su relevancia como rituales aglutinadores de la comunidad en los que se renovaba constantemente la *pax deorum*, eran una fuente de gasto muy relevante. Por ello, no es de extrañar la atención que a ellas dedican las leyes coloniales y municipales en sus ejemplos béticos.

La ley de Urso establece que los duoviros, al inicio de su mandato, debían hacer una propuesta en la cámara decurional acerca de la cuestión de la fijación del número de fiestas religiosas, su calendario, cuáles serían las ceremonias sagradas y qué personas realizarían estos *sacra*¹¹³¹. Y, como hemos visto, en *Irni* varios de los capítulos de gasto

¹¹²⁵ Esa labor implicaba dificultades prácticas evidentes que nunca fueron resueltas, a pesar de iniciativas normativizadoras como la de Antonino Pío. Cf. Hurllet, “Les ambassadeurs...” cit. pp. 114-115.

¹¹²⁶ Llega a la misma conclusión Hurllet, “Les ambassadeurs...” cit. p. 126.

¹¹²⁷ Esta embajada honorífica enviada al gobernador de Mesia Inferior se debe a que él era el encargado de proteger con su ejército Bizancio, puerto de especial relevancia, a pesar de que en este momento perteneciese a Bitinia. Cf. M. Durry, *Plinie le Jeune, Lettres, livre X – Panégyrique de Trajan*, Paris, 1947, p. 42, nt. 1; Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 626.

¹¹²⁸ Plin. *Ep.* X, 43-44.

¹¹²⁹ Cic. *Ad fam.* III, 8, 2 y 10, 6-7.

¹¹³⁰ Por ejemplo, el prefecto de Egipto Flaco denegó a los judíos de Alejandría el envío de una embajada a Calígula (Phil. *In Flacc.* 15). Se trataba de una práctica plenamente asentada: P. Guiraud, *Les assemblées provinciales dans l'Empire romain*, París, 1887, p. 155.

¹¹³¹ *Lex Vrsonensis*, cap. 64. Cf. D’Ors, *EJER* pp. 184-185.

de los fondos públicos que debían aprobar los decuriones a propuesta de sus duoviros estaban relacionados con el dinero que se invertiría en las ceremonias sagradas públicas, en los banquetes comunitarios (*cenae*) y en los *ludi* que se organizaran a expensas de la ciudad¹¹³². Sobre los duoviros de Urso recaía el *munus* de organizar representaciones teatrales y combates gladiatorios en honor de la tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva), mientras que los ediles debían hacer otro tanto en honor de Venus, protectora de la colonia. En estos *ludi* debían invertir no menos de 2000 sestercios, pero también podían tomar parte del dinero necesario de la caja pública hasta alcanzar esa cantidad¹¹³³. Era, pues, una combinación de inversión pública y privada.

Como bien dice Mangas, la financiación de los rituales públicos entrañaba un gran desembolso de dinero, ya sólo teniendo en cuenta el costo que supondrían todas las víctimas utilizadas –de cuyo suministro se encargaba un *redemptor* o contratista arrendatario¹¹³⁴– y las numerosas fiestas religiosas que había, como atestigua el calendario de *Dura Europos*¹¹³⁵. Por ello, en los municipios y colonias anualmente se fijarían sólo los gastos mínimos requeridos para estas ceremonias religiosas, juegos, etc. El resto del montante total al que ascenderían los gastos recaería en los notables locales. Por otro lado, la ciudad se servía también de la prestación de servicios que el resto de ciudadanos debían a la comunidad como *munera*¹¹³⁶. Toda aportación era necesaria, y por ello la *lex Vrsonensis* no deja de recordar que los fondos dedicados a los *sacra* no deben emplearse para otros fines¹¹³⁷.

Por último, en este apartado cabe hacer una mención de los gastos de los municipios y colonias en *ludi*. Vimos que la *lex Irnitana* los mencionaba dentro de su capítulo dedicado al presupuesto que cada año debía aprobarse para realizar los *sacra* y los banquetes comunitarios¹¹³⁸. No parece que la asociación de los *ludi* a los *sacra* y las *cenae* sea fortuita y nos hace pensar que el municipio sólo se haría cargo de los juegos (*ludi circenses* y, probablemente, también *ludi scaenici*) que estuviesen vinculados a

¹¹³² *Lex Irnitana*, cap. 77.

¹¹³³ *Lex Vrsonensis* cap. 70-71.

¹¹³⁴ *Idem* cap. 69. Cf. *EJER* pp. 192-193, según el cual la *locatio* se hacía por varios años, pero el pago sería anual.

¹¹³⁵ El llamado *Feriale Duranum*, recogido en el papiro *P. 54*, datado en 225-227 d.C. Cf. R. O. Fink – A. S. Hooley – W. S. Snyder, “The Feriale Duranum”, *Yale Classical Studies* 7, 1940, pp. 1-222; D. Fishwick, “Dated inscriptions and the *Feriale Duranum*”, *Syria* 65/3-4, 1988, pp. 349-361 (véase apéndice final).

¹¹³⁶ Mangas, *Leyes...* cit. pp. 59-60.

¹¹³⁷ Caps. 65, 69 y 72.

¹¹³⁸ Cap. 77.

celebraciones religiosas. El resto de los juegos que se organizaran durante el año serían costeados por los notables locales, dentro de los actos evergéticos o bien con el dinero de la *summa honoraria*¹¹³⁹.

Otra buena muestra de la preocupación del poder imperial por que se controlase también el gasto realizado por las comunidades en los *ludi* es el senadoconsulto *de pretiis gladiatoribus* promulgado en 177 a partir de una *oratio* de Marco Aurelio y Cómodo sobre el asunto, cuya copia en bronce se halló en Itálica. En él se establece una reglamentación de los precios que debían abonar los encargados de organizar los espectáculos gladiatorios –en las provincias, los notables locales, bien como particulares, bien cuando desempeñaban el flaminado provincial o una magistratura local–, en función de los tipos de gladiador y de *ludus*. Los gastos en tales espectáculos debió de alcanzar cifras exageradas¹¹⁴⁰, y por ello el senadoconsulto especifica claramente que era competencia de los gobernadores provinciales hacer que cumpliesen las disposiciones del senadoconsulto, y, además, adaptar los precios a la capacidad económica de las comunidades más modestas¹¹⁴¹.

Este último punto nos sitúa ante un problema: si el gobernador debía adecuar los precios de los gladiadores a la economía de las ciudades, ello significa que tenía que mirar las cuentas tanto de las que eran sedes conventuales como de las que no, pero, ¿cuándo visitaba estas últimas? ¿o cómo consultaba, si no, sus *rationes*? A nuestro juicio, la explicación más verosímil es que el gobernador aprovechase su estancia en cada sede conventual para solicitar a los magistrados de las ciudades adscritas a ella sus cuentas públicas o, al menos, la posibilidad de que le presentasen los problemas

¹¹³⁹ Uso de la *summa honoraria* en Urso: Cap. 70.

¹¹⁴⁰ Como señala A. Canto, *ERI* p. 554.

¹¹⁴¹ Il. 40-42: *Vtque ea opseruat<i>o a lanistis quam diligentissime exigatur, iniungendum / his qui prouinciae praesidebunt et legatis uel quaestoribus uel legatis legionum uel iis qui ius dicunt c(larissimis) u(iris) aut procuratores maximorum / principum quibus prouinciae rector mandauerit, is etiam procurator (!) qui prouinciae praesidebunt.* Y Il. 47-55: *Quod si quibus ciuitatibus / res publica tenior est, non eadem seruentur quae aput fortiores ciuitates scripta sunt, nec supra modum uirium onerent, sed hactenus in eundem ut qu<a>e in publicis priuatisque rationibus repperientur pretia summa ac media ac postrema, si quidem prouinciarum eae ciuitates sunt ab eo / qui praesidebit prouinciae opseruentur, ceterarum autem iuridico uel curatore {pro}fui{nci}ae uel classis praetoriae praefecto uel procuratori / maxumorum principum uel cuiusque ciuitatis potestas qu<a>e ibi prima erit. Atque ita rationibus decem retrouersum annorum inspectis exemplis / munerum in quaque ciuitate editorum consideratis constit[uan]tu ab eo cuius arbitratus erit de tribus pretis uel, si melius ei uidebitur / ex eo modo quem peraequ[e] fie[r]i legit et trifariam pretia diducantur, eaque forma etiam in posterum seruetur. Sciantque u(iri) c(larissimi) qui procon-/sules paulo ante profecti sunt intra suum quisque annum it negotium exequi se oportere, <e>t ii etiam qui non sortito prouincias / regunt intra annum.* J. Gómez-Pantoja, *Epigrafía anfiteatral del Occidente Romano: VII. Baetica, Tarraconensis, Lusitania*, Roma, 2009, nº 3. Anexo II: nº 65.

financieros que requerían de su intervención. En casos extremos de malversación de fondos es posible que excepcionalmente el gobernador acudiese en persona a la colonia o municipio en cuestión o, con más probabilidad, que enviase allí a algún subordinado suyo; estamos pensando en su legado y, en el caso del procónsul de la Bética, también en su cuestor. Como hemos dicho al principio del capítulo, después de la administración de justicia, la actividad más importante de los gobernadores era la supervisión de las finanzas municipales, pero ello no quiere decir que cada nuevo gobernador revisase las de todas las ciudades de su provincia sistemáticamente, sino sólo las de aquéllas que lo necesitasen. La iniciativa podía partir, entonces, tanto del gobernador —en base a informes previos que le dejarían sus predecesores o se incluirían en los *mandata* imperiales¹¹⁴²— como de una solicitud de las propias ciudades.

En este sentido, el senadoconsulto *de pretiis gladiatoribus* de Itálica sería la respuesta del poder central, con carácter general, a la notificación que habría recibido por parte de los gobernadores (y, quizá, de otros agentes imperiales de las provincias) acerca de los excesos que en ellas se estaban realizando en la organización de los juegos gladiatorios y que estaba poniendo en riesgos la sostenibilidad económica de las ciudades y de sus élites¹¹⁴³. Esos informes o cartas en torno a este asunto que la cancillería imperial habría recibido serían el resultado de la labor de vigilancia y supervisión de las *rationes ciuitatum* por parte de los gobernadores principalmente, sin duda movidos a ello por síntomas evidentes de que las ciudades estaban agotando sus recursos en tales actividades por culpa de los abusos cometidos por los lanistas en la fijación de los precios (con el fin de sacar el mayor beneficio posible y neutralizar el efecto negativo que tenía para sus intereses el impuesto que debían al Fisco imperial)¹¹⁴⁴.

¹¹⁴² Como dijimos en la Primera Parte, la entrega de *mandata* a los procónsules quizá no se generalizó hasta Trajano, pero sabemos que cuando Corbulón fue procónsul de Asia los recibió de Claudio, y es posible que ya sucediera desde Augusto. En verdad no tiene nada de extraño que recibiesen determinadas instrucciones (que no órdenes) del poder imperial antes de partir a su provincia, al igual que tampoco lo era que escribiesen al *princeps* desde inicios del Principado. Cf. Millar, “State and Subject...” cit. p. 48; Hurlet, *Le proconsul...* cit. pp. 223-233.

¹¹⁴³ Precisamente al comienzo del senadoconsulto se menciona la mala utilización de los *uectigalia* públicos en el sufragio de estos espectáculos: *in primis anima aduerterunt quae / causa illi morbo uires daret, unde foeda et inlicita uectigalia ius haberent* (cap. I, ll. 2-3).

¹¹⁴⁴ Cap. II, ll. 5-11; Canto, *ERItal* pp. 558-559. Como señala esta autora, en la *oratio* de los emperadores hay una clara intención de atribuir la responsabilidad del alza desmesurada de los precios a los lanistas para exculpar al Fisco imperial, objeto ya de por sí de especial animadversión entre los provinciales.

Algunos autores han sugerido que este senadoconsulto sería una de las medidas tomadas por el poder imperial para tratar de levantar la economía de las ciudades, que habría quedado muy maltrecha como consecuencia de las invasiones de *Mauri* que la Bética sufrió en 171-172 y 177¹¹⁴⁵. Itálica, en concreto, parece haberse visto afectada especialmente por la segunda, pues se apresuró a honrar públicamente al gobernador de la Mauretania Tingitana que había derrotado a los *Mauri*¹¹⁴⁶. Sin embargo, el senadoconsulto *de pretiis gladiatoribus* se promulgó el mismo año de esta segunda invasión y, por tanto, no vino a resolver los problemas económicos provocados por ella. En nuestra opinión, tal y como se expone en su texto, este senadoconsulto pretendía regular una práctica nociva en particular, el gasto excesivo en la organización de los *munera gladiatoria*, que había ido *in crescendo* hasta el punto de requerir una intervención directa del poder central. Claro está que este dispendio sería aún más preocupante en las ciudades que habían sufrido más las acciones de los Mauri en 171-172, pero esta resolución de Marco Aurelio y Cómodo es el resultado de un seguimiento realizado desde mucho antes por sucesivos procónsules de la Bética y de los informes que enviaron a Roma comunicando las dificultades que hallaban en su corrección.

En el siglo II, el poder imperial se dio cuenta de que las finanzas de las ciudades de todo el Imperio necesitaban de un control más detenido; empero, como dijimos antes, ello no significa que todos los gobernadores que se sucedían en una provincia se dedicasen rutinariamente a revisar las cuentas de todas sus ciudades, sino que ahora se le prestó más atención a ello, pero siempre como una reacción ante una situación de necesidad evidente. Por tanto, se puede decir que esta decisión imperial es la reacción central a las noticias recibidas de sus gobernadores, que, a su vez, habían reaccionado ante los problemas financieros que, en ese momento, las ciudades provinciales les presentaron. Con todo, ello no disminuye la relevancia de tales controles, verdaderamente vitales para la sostenibilidad económica del propio imperio, como refleja el dramatismo que se imprime al inicio de este senadoconsulto: *Tantum illam pestem nulla medicina sanari posse. Nec poterat; uerum nostri principes, quibus omne*

¹¹⁴⁵ Bénabou, *La résistance...* cit. p. 153, nt. 172 y 157, nt. 185; Alföldy, “Spain”, *CAH XP*, cit. p. 460. Ante esta hipótesis se muestran prudentes Arce, “Inestabilidad política...” cit. p. 109, y González, “Cohors V Baeticae” cit. p. 187.

¹¹⁴⁶ *CIL* II, 1120= *CILA* II, 378.

*studium est quantoli/bet morbo salutem publicam mersam et enectam refouere et integrae ualetudine reddere...*¹¹⁴⁷

c) Los municipios y colonias debían contar entre sus gastos el sueldo de los *apparitores* que ayudasen en sus funciones a los magistrados locales, el coste de los materiales que necesitasen para realizar su cometido y la manutención de sus esclavos públicos¹¹⁴⁸.

En lo que respecta a los *apparitores* el capítulo 62 de la *lex Vrsonensis* estipula que cada *duoviro* debía contar con dos *lictors*, un ayudante (*accensus*), dos escribas, dos correos o mensajeros (*uiatores*), un secretario encargado de sus documentos (*librarius*), un pregonero (*praeco*), un arúspice y un flautista (*tibicen*), estipulando el sueldo que le correspondía a cada uno de ellos: 1200 sesteracios a cada uno de los escribas, 700 al *accensus*, 600 a cada *lictor*, 400 a cada *uiator*, 300 al *praeco*, 500 al *haruspex* y 300 al *tibicen*. Por su parte, cada edil, además de cuatro esclavos públicos *cum cincto limo* (es decir, señalados con una cinta púrpura¹¹⁴⁹), debía tener a su servicio un escriba, un *praeco*, un arúspice y un flautista, que recibirían, respectivamente, 800, 300, 100 y 300 sesteracios cada uno al año¹¹⁵⁰. El gasto total en los *apparitores* de estos magistrados sería de 16.000 sesteracios al año, cifra considerable que nos ofrece un indicio del importante desembolso de fondos comunitarios que se derivaba de las funciones de sus magistrados.

Por su parte, en lo que se ha conservado de la *lex Irnitana* sólo se menciona que sus ediles tenían derecho a usar esclavos públicos que portaban como signo distintivo una cinta púrpura¹¹⁵¹ al igual que los de los ediles de Urso. En cuanto a los *apparitores*, sólo se detiene en los *scribae*, a los que dedica el capítulo 73. En él se establecen sus funciones, el juramento que debían hacer y su sueldo. Esta atención dedicada a los escribas se debe, sin duda a que su cometido era ciertamente muy relevante, pues debían consignar por escrito todas las decisiones oficiales del municipio en *tabulae* y *libri*, dentro de las cuales también se hallaban las cuentas municipales (*rationes communes*), y

¹¹⁴⁷ Cap. I, ll. 1-2.

¹¹⁴⁸ F. J. Rodríguez Neila, “*Apparitores* y personal servil en la administración local de la Bética”, *Studia Historica. Historia Antigua* 15, 1997, pp. 197-228.

¹¹⁴⁹ Lamberti, *Tabulae Irnitanae*... cit. p. 273, nt. 9, donde menciona algunas fuentes que dan pistas acerca de la etimología del término *limus*, como Seru. *Ad Aen.* XII, 120 y Au. Gell. *N.A.* XII, 3, 3.

¹¹⁵⁰ Cap. 62.

¹¹⁵¹ Cap. 19, ll. 16-17.

debían organizar el archivo público. Por ello habían de realizar el juramento solemne habitual por Júpiter, los dioses Penates, los emperadores divinizados y el Genio de Domiciano de que no cometerían falsedad alguna en los documentos que se les encargasen. Su sueldo no era fijo, sino que debía ser decidido por la mayoría de decuriones, suponemos que anualmente, seguramente para adecuarlo al estado de las arcas públicas y evitar la obligación de realizar desembolsos como los de Urso que en algunos momentos podían ser excesivos.

Los esclavos públicos implicaban tres tipos de gasto, según se desprende de la *lex Irnitana*: el que se realizaba al adquirirlos, el relativo a su manutención (cap. 79) y el que suponían los vestidos específicos que debían llevar si acompañaban a los duoviros y ediles, pues debían ir en consonancia con la dignidad de éstos (y por ello su signo distintivo era una cinta púrpura)¹¹⁵². Sabemos que algunos de estos esclavos trabajaban en los archivos municipales¹¹⁵³.

d) Finalmente, el último gran capítulo de gastos que afectaba a las arcas públicas de los municipios y colonias lo constituían las obras públicas, aunque en numerosas ocasiones los costes de éstas eran asumidos por los notables locales, que los ofrecían a su comunidad como actos propios del evergetismo aristocrático¹¹⁵⁴. Pero de la intervención de los gobernadores en las obras públicas hablaremos en el siguiente capítulo.

Las comunidades provinciales solían caer en la tentación de recurrir a préstamos para mantener su política suntuaria o para solventar algunos déficits financieros. Y precisamente una de los objetivos más importante del cometido de los gobernadores era que no se endeudasen en exceso. La *lex Irnitana* contiene un capítulo de suma importancia para conocer el grado de control que el gobernador tenía sobre las finanzas

¹¹⁵² Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit., pp. 109 y 269-273. Estamos de acuerdo con esta autora en la restitución que hace en el capítulo 18 (muy mutilado) siguiendo el paralelo del 19: *...seruos comunes municipium eius mu-/nicipii, qui is appareant, limo cinctos habere liceto*. (ll.16-17).

¹¹⁵³ Como el *seruus tabularius* constatado en la colonia bética de Augusta Firma (*CIL* II²/5, 1176).

¹¹⁵⁴ Los fondos municipales solían destinarse más al mantenimiento de los edificios e infraestructuras ya existentes, mientras que los costes de las grandes obras nuevas eran asumidos por los notables locales, como ha mostrado B. Goffaux, "Municipal Intervention in the Public Construction of Towns and Cities in Roman *Hispaniae*", *Habis* 32, pp. 257-270. Lo mismo sucedía en otras provincias y también en Italia: H. Jouffroy, "Le financement des constructions publiques en Italie: initiative municipale, initiative impériale, évergétisme privé", *Ktéma* 2, 1977, pp. 329-337.

municipales, el 80 (cuya rúbrica es *de pecunia publice mutua sumenda*), que expone lo siguiente:

*S[i] quas pecunias mutuas in usus rei publicae municipi Flauī Irnitani su-/m[en]das esse decuriones conscriptiue eius municipi, cum eorum / non [mi]nus [t]res partes adfuerint, iurati per tabellam decreuerint, ea-/eque pecuniae expensae municipibus latae erunt, dum ne plura in an-/nos singulos quam HS (sestertium) L (milia) expensa((s)) is ferantur nisi ex auctoritate eius qui / ei prouinciae praeit, ea*e* pecunia*e* quae it expensae latae((que)) erunt muni-/cipe municipi Flauī Irnitani d(ari) debe<n>to¹¹⁵⁵.*

En este pasaje de la ley se está estableciendo el modo en que se procederá a solicitar un préstamo (con la aprobación de los decuriones, estando presentes al menos los $\frac{3}{4}$ de ellos) y el límite máximo del mismo, establecido en la notable cantidad de 50000 sestercios en un año. Sólo podía ser superada esa cifra *ex auctoritate eius qui prouinciae praeit*, es decir, con el permiso del procónsul de la Bética, lo cual evidencia, nuevamente, el control al que las finanzas municipales estaban sometidas por parte del gobernador.

Si bien las disposiciones que hemos visto referidas a los ingresos y los gastos de los municipios y colonias muestran el grado alto de organización interna que alcanzaron estas comunidades en Occidente, así como los cauces por los que se canalizaba su autosuficiencia, la mención del gobernador en el capítulo referido expresamente a los préstamos que podía contraer el municipio irnitano es un indicio claro de la conciencia que tuvo el poder imperial de tutelarlas. Las ciudades no eran plenamente libres de gestionar sus recursos cuando su estabilidad económica podía peligrar, y el poder imperial era consciente de que el recurso a préstamos era una práctica habitual que podía acarrear graves consecuencias para la sostenibilidad económica de la ciudad. En la Bética, sabemos por una inscripción fragmentaria que un particular concedió un préstamo a la colonia de *Vcubi* al parecer sin intereses¹¹⁵⁶, pero porque se trataba de un

¹¹⁵⁵ Il. 15-21. Sigo la lectura de Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit., p. 344. Anexo II: n° 60.

¹¹⁵⁶ *CIL* II/5,457 (probablemente de época severa): - - - - - / *col(oniae) C(laritatis) Iul(iae) H M D P RECLM / cum ea usq(ue) ad /(denarios) CCCCXVII[- - - dedit] / populo nomine suo et Stert[inae] / Montanae filiae suae [- - -] / frumentum /(denarium) CL(milia) contulit I[- - -] / mutuum rei p(ublicae) suae semen [- - -] / saepius praestitit. Otro ejemplo de préstamo sin intereses concedido por un particular (en este caso un rico liberto) a una ciudad lo tenemos en *Nemausus* (Nîmes), *AE* 1982, 681.*

acto evergético. La realidad es que las ciudades podían aceptar intereses muy altos si se veían apuradas. Un buen ejemplo de ello nos lo proporciona Cicerón: mientras fue procónsul de Cilicia en 51-50 a.C. hubo de resolver un complicado pleito que enfrentaba a la ciudad chipriota de Salamina con sus acreedores romanos (agentes de Bruto), que le exigían unos intereses abusivos¹¹⁵⁷. A veces un notable local se ofrecía a pagar las deudas contraídas por su comunidad, como en el caso de Cártama (Málaga)¹¹⁵⁸, pero no siempre podía contarse con esta ayuda o no era suficiente. Por ello, al igual que sucedía con la vista de las causas judiciales no criminales que rebasasen cierta cantidad¹¹⁵⁹, en la solicitud de préstamos el gobernador había de ser llamado para que diese su aprobación si se quería superar un límite máximo de 50000 sesteracios. Lo riesgos que entrañaba para el Imperio el endeudamiento de sus ciudades eran demasiado altos y el poder imperial parece haber desconfiado de la fiabilidad o pericia de las élites locales.

Como hemos venido diciendo, al poder imperial le preocupaba sobremanera la preservación de la solvencia económica de las ciudades de las provincias. Las leyes coloniales y municipales antedichas son un buen ejemplo, al igual que algunas disposiciones en las que Trajano tiende a hacer hincapié en su correspondencia con Plinio. En efecto, en los *mandata* que le había entregado antes de partir hacia Bitinia, el emperador le indicaba que se prohibieran terminantemente las donaciones de dinero público hechas a particulares, con el fin de evitar los favores mutuos entre miembros de los senados locales y el lucro personal a costa de la comunidad¹¹⁶⁰.

En otra carta, Plinio quiso ir más allá y propuso a Trajano mover el dinero público que comenzaba a ser recuperado invirtiéndolo en préstamos a particulares, ya que la opción más fiable, la compra de tierras, era muy difícil en la provincia dada la escasa oferta existente¹¹⁶¹. Sin embargo, parece que nadie quería convertirse en deudor de las ciudades por culpa de los intereses exigidos habitualmente, del 12%. Para resolver esta dificultad, Plinio expuso al emperador dos posibles soluciones: o bajar el

¹¹⁵⁷ Cic. *Ad Att.* V, 21, 11.

¹¹⁵⁸ CIL II, 1957: *L(ucio) Porcio Quir(ina) / Saturnino / pontif(ici) qui pro hon(ore) / HS XX (milia) n(ummum) d(edit) ut aes alien(um) / rei p(ublicae) Cartimitan(ae) lib(eraret) / amici fac(iendum) curaverunt / L(ucius) Porcius Quir(ina) Saturnin(us) / h(onore) a(ccepto) i(mpensam) r(emisit)*.

¹¹⁵⁹ Vid. Primera Parte.

¹¹⁶⁰ *Ep.* X, 36 y 110, 1.

¹¹⁶¹ Gran parte de la tierra estaba en manos de grandes terratenientes: Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 635.

tipo de interés para hacer atractiva la inversión u obligar a los decuriones de cada comunidad a invertir en ello. Trajano se decantó por reducir los intereses, pues la segunda opción ‘*non est ex iustitia nostrorum temporum*’¹¹⁶². Aunque la decisión última competía al emperador, los gobernadores velaban constantemente por la salud de las cuentas públicas, tomando la iniciativa en medidas que potenciasen su prosperidad financiera cuando sus magistrados se revelaran incompetentes o desidiosos.

Finalmente, volviendo a Hispania, la llamada *lex riui Hiberiensis*¹¹⁶³ prueba hasta qué punto los gobernadores podían intervenir en la propia organización de las tierras de cultivo de una comunidad, en este caso, las de la comunidad de los *Belsinonenses*, perteneciente al territorio de *Cascantum*, y del *pagus Gallorum* y el *pagus Segardinensis*, integrados en el territorio de la colonia de *Caesaraugusta*. En los grandes valles fluviales peninsulares como el del *Hiberus* o el del *Baetis* el uso de las augas hubo de provocar frecuentes litigios que habían de presentarse ante el tribunal del gobernador y obligó, incluso, a la elaboración de detallados estatutos que regulasen la forma en que los usufructuarios afectados debían organizarse para compartir ese bien natural con fines agrícolas. Como hemos visto en la Primera Parte, la *lex riui Hiberiensis* muestra la complejidad que entrañaba la organización de las comunidades de riego formadas por *pagi* pertenecientes al territorio de municipios o colonias, hasta el punto que podía llevar al gobernador a derivar el asunto a un legado –que, sin embargo, actuaba siempre siguiendo las disposiciones de su edicto y con su aquiescencia. Es también muy significativo que los *magistri pagi* encargados de gestionar esta comunidad de riego, a pesar de que estaban bajo la autoridad jurisdiccional de los duoviros de *Caesaraugusta*, pudiesen apelar directamente al gobernador provincial¹¹⁶⁴. Su cercanía a la sede conventual de *Caesaraugusta* otorgaba a los *magistri pagi* la posibilidad de acudir sin grandes dificultades ante el gobernador una vez al año. En suma, vuelve a primar en estas disposiciones la política del equilibrio y la necesidad de

¹¹⁶² Plin. *Ep.* X, 54-55.

¹¹⁶³ *Vid.* Primera Parte

¹¹⁶⁴ F. Beltrán Lloris, “An Irrigation Decree from Roman Spain: the *lex riui Hiberiensis*”, *JRS* 96, 2006, pp. 147-197; “Rural Communities and Civic Participation in Hispania during the Principate”, en F. Marco – F. Pina – J. Remesal (eds.), *Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo*, Barcelona, 2006, pp. 257-272; *Idem* – M^a. A. Magallón, “El territorio”, en F. Beltrán Lloris (ed.), *Ciudades romanas de Hispania 4: Zaragoza, Colonia Caesar Augusta*, Roma, 2007, pp. 97-107, esp. pp. 101-102.

garantizar la sostenibilidad de las estructuras que gestionaban los recursos económicos de las comunidades.

Antes de pasar a hablar de la intervención de los gobernadores en las obras públicas, es conveniente recordar que, en su labor de control de la estabilidad económica de las comunidades de su provincia, tenían que tratar con otro interlocutor, el *concilium prouvinciae*, órgano en el que estaban representadas todas las comunidades y tenía competencias en la organización y celebración del culto imperial provincial, la conservación de su templo y del recinto que lo acogía (el llamado ‘foro provincial’), en el envío de embajadas y en la concesión de honores a determinados individuos por sus servicios y *beneficia*¹¹⁶⁵, fundamentalmente los flámines y flamínicas provinciales y antiguos gobernadores y procuradores de la provincia. De estos *concilia* y su funcionamiento en las provincias hispanas hablaremos en el siguiente capítulo, dedicado al culto imperial, dado que en Hispania (como en el resto de Occidente) nacieron precisamente como consecuencia de la implantación del mismo y la mayoría de sus funciones estaban relacionadas con él. Aún así, hemos de referirnos aquí a dos aspectos vinculados con el ámbito de las finanzas provinciales: sus competencias en la gestión de lo que parece haber sido una “caja” provincial y su actuación en defensa de los intereses provinciales cuando se hubiesen visto perjudicados por la actividad de los gobernadores.

El *concilium prouvinciae* era un órgano colegiado al que, desde un punto de vista jurídico, según Guiraud, se le podía aplicar lo que Gayo dice acerca de los colegios y sociedad en general:

*Quibus autem permissum est corpus habere collegii, societatis, siue cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res comunes, arcam communem, et actorem siue syndicum, per quem tanquam in re publica quod communiter agi fierique oporteat agatur, fiat*¹¹⁶⁶.

¹¹⁶⁵ Guiraud, *Les assemblées...* cit. pp. 128-132; Millar, *The Emperor...* pp. 390-392.

¹¹⁶⁶ *Dig.* III, 4, 1, 1. Guiraud, *Les assemblées...* cit. p. 134, seguido por E. Carette, *Les assemblées provinciales de la Gaule romaine*, París, 1895, pp. 163-164.

En efecto, el *concilium prouvinciae* tenía una caja propia, una organización interna con representantes y unos bienes comunes, al menos en lo que respecta a los esclavos que servían en ella¹¹⁶⁷. En este aspecto se les puede aplicar la misma capacidad jurídica ficticia que a los municipios y, por ello, los podían adquirir, vender y manumitir¹¹⁶⁸. Sin embargo, como señalaron Mommsen y Carette, no parece que los *concilia*, a diferencia de las ciudades, pudiesen recibir legados ni fideicomisos¹¹⁶⁹.

La caja de fondos comunes se nutría con las contribuciones de las comunidades y de benefactores particulares¹¹⁷⁰, entre ellos el propio emperador, aunque en los casos en que éste concedía una ayuda económica a una provincia para la construcción de alguna infraestructura o edificio, era el gobernador de la misma el que recibía directamente el dinero y quien se encargaba de dirigir las obras, como en el caso paradigmático de Plinio el Joven. Las fuentes guardan silencio en torno a la forma en que la caja provincial era administrada y cómo se procedía a la “recaudación” de sus ingresos, pero todo ello se puede deducir por analogía con lo que acontecía en los municipios y colonias provinciales. Como máxima autoridad religiosa provincial, el flamen estaba encargado de gestionar los fondos empleados en sufragar todos los gastos que exigía el culto: compra de las víctimas sacrificiales, inciensos, etc.; mantenimiento de los esclavos que lo ayudaban, conservación del templo... Es decir, sus gastos serían similares a los que realizaban los municipios y colonias en cumplimiento de sus deberes religiosos¹¹⁷¹. Así, al igual que los duoviros de Irni y Urso, el *flamen prouvinciae* presentaría un presupuesto anual para el culto que debía ser aprobado por el *concilium*, estableciéndose cuánto debía aportar cada comunidad. Al finalizar su año en el cargo, el *flamen* debía rendir cuentas de su gestión de ese dinero. Cuando era necesario enviar una embajada al emperador, se procedería a una votación de quién o quiénes la realizarían y, en el caso de que éstos no se hiciesen cargo de los gastos, también se discutiría la cuantía del viático asignado, como sucedía en las curias municipales.

¹¹⁶⁷ Guiraud, *Les assemblées...* cit. p. 135, pensaba que los *concilia* actuarían como si los templos dedicados a los emperadores divinizados fuesen de su propiedad, aunque eran inalienables y en puridad jurídica, como *res diuini iuris* que eran, no podían pertenecer a ningún hombre, sólo a los dioses. Los *concilia*, en efecto, se encargaban de construir y cuidar los templos del culto imperial (bajo la supervisión del gobernador), y en ese aspecto actuaban “como si fuesen de su propiedad”, pero no por ello se incluyen entre sus bienes.

¹¹⁶⁸ Carette, *Les assemblées...* cit. p. 163.

¹¹⁶⁹ *Idem.*

¹¹⁷⁰ *Idem*, p. 166.

¹¹⁷¹ *Vid. supra.*

Todas estas decisiones eran supervisadas por el gobernador, cuya aprobación era necesaria, por ejemplo, para erigir estatuas al emperador¹¹⁷².

La otra cara de la moneda en la relación del gobernador con estos *concilia prouinciae* era la antedicha vocación de éstos a la protección de los intereses y derechos de los provinciales frente a los abusos que pudiesen cometer los gobernadores. Conocemos la existencia de diez procesos incoados contra gobernadores de provincias occidentales durante el Principado: cuatro de África, cuatro de la Bética, uno de *Sardinia* y otro de Germania Superior¹¹⁷³. Excepto en el caso de este último, todos eran procónsules, que parecen haber sido objeto –también en la parte oriental– de una mayor desconfianza por parte del *princeps*, sin duda derivada del temor a que pudiesen convertirse en peligrosos rivales, dada su posesión de un *imperium* y unos auspicios propios, y del prestigio que gozaban, sobre todo los consulares que gobernaban Asia y África¹¹⁷⁴. Asimismo, no hay que olvidar que, a inicios del Principado, en las provincias proconsulares los gobernadores y sus cuestores siguieron encargándose de supervisar la recaudación tributaria, que podía ser realizada por éste último o por publicanos mediante concesión pública. Además, África, Asia, la Bética o la Narbonense se contaban entre las provincias más ricas y con mayores recursos, y sus aristocracias eran muy florecientes. No es de extrañar, por tanto, que, después de Bitinia, sean Asia, África y la Bética las provincias que presentan más procónsules procesados por *maiestas* y *repetundae* (aun así, pocos).

¹¹⁷² *Lex de flamonio Narbonensis*, ll. 26-28. Seguimos la edición de C. H. Williamson, “A Roman Law from Narbonne”, *Athenaeum* 65, 1987, pp. 173-189. Un ejemplo hispano de la supervisión de las estatuas dedicadas al emperador por parte del gobernador de la Lusitania: *CHIAE* 24. Véase la Tercera Parte de este estudio.

¹¹⁷³ África: Estatilio Tauro, que se suicidó tras ser acusado *de repetundis* y *de maiestate* en 53 (Tac. *Ann.* XII, 59); Sulpicio Camerino, acusado (pero absuelto) *de ui publica* en 58 (*Ann.* XIII, 52); Pompeyo Silvano, acusado (pero absuelto) *de repetundis* en 58 (*Ann.* XIII, 52); Mario Prisco, condenado por los delitos *de repetundis* y *de ui publica* (Plin. *Ep.* II, 11). Bética: Vibio Sereno, hallado culpable del crimen *de ui publica* en 23 d.C. (*Ann.* IV, 13; 28-30); Umbonio Silón, condenado por *maiestas* en 44 (Dio LX, 24); Bebio Masa, condenado en 93 por incurrir en el delito *de repetundae* (Plin. *Ep.* VII, 33); Cecilio Clásico, condenado póstumamente *de repetundis* y *de ui*, en 100 d.C. (Plin. *Ep.* III, 9). *Sardinia*: Vipsanio Lenas, condenado por delitos *de repetundis* en 56 (*Ann.* XIII, 30). Germania Superior: C. Silio, que se suicidó tras ser acusado *de maiestas* en 24 (Tac. *Ann.* IV, 19-20; Vell. II, 130). Cf. el fundamental artículo de P. A. Brunt, “Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate”, en *Roman Imperial Themes*, Oxford, pp. 53-95, esp. apéndices de pp. 90-95, que admite como procónsul de la Bética a un personaje desconocido acusado *de repetundis* mencionado por Plin. *Ep.* I, 7. Diferimos con este autor en los cargos imputados a dos procónsules de África, Camerino y Mario Prisco, que en su opinión fueron acusados solamente *de repetundis* (*saeuitia*).

¹¹⁷⁴ Véase Hurler, *Le proconsul...* cit.

De todas nuestras fuentes, Tácito es quien recoge más procesos *de repetundis* contra gobernadores provinciales senatoriales, dentro del interés que muestra en sus *Annales* por describir las relaciones entre los senadores y el emperador, dibujando el poder autoritario y lesivo para la dignidad e independencia senatoriales que comportaba el régimen del Principado¹¹⁷⁵. Sin embargo, Plinio el Joven nos ofrece en sus cartas algunas de las más vivas y detalladas narraciones de este tipo de procesos contra procónsules de Occidente al haber participado en los procesos como acusador o como juez junto con el resto de senadores. En concreto, habla de tres en los que se juzgó a procónsules por haber aceptado sobornos y/o haber cometido extorsiones o abusos sobre los provinciales, de los cuales dos fueron incoados contra procónsules de la Bética, Bebio Masa y Cecilio Clásico¹¹⁷⁶. Según Plinio, en ambos casos la acusación fue presentada por la provincia en conjunto, y no cabe duda que la decisión de llevar a Roma el caso fue tomada en una sesión del *concilium prouinciae* y que los delegados enviados a la *Vrbs* aristocráticas que formaban parte de éste.

Cronológicamente, el primero de estos procesos fue el de Bebio Masa, que se produjo en 93 d.C., bajo el reinado de Domiciano¹¹⁷⁷. La acusación fue llevada por Herennio Seneción y Plinio en representación de la provincia de la Bética, quienes consiguieron la condena de Masa por el delito de extorsión. En el escueto resumen que Plinio le hace a Tácito en su carta –con la intención de que el historiador lo incluya en la obra que estaba escribiendo, sin duda una parte perdida o inacabada de sus *Historiae*–, se centra en la tenacidad de Seneción, que no se contentaba con la sentencia, sino que quería ver que se ejecutaba, pues sospechaba que Domiciano acabaría favoreciendo, en la sombra, a Masa. Plinio lo asecundó, logrando el objetivo y recibiendo los elogios del futuro emperador Nerva¹¹⁷⁸. A pesar de que no conocemos ningún ejemplo concreto de las apropiaciones ilícitas de dinero que llevó a cabo Bebio Masa, un epigrama de

¹¹⁷⁵ En los *Annales* abundan los ejemplos de acusaciones contra procónsules de las provincias orientales. En lo que respecta a Occidente, Tácito menciona, entre otros, el caso de Vipsanio Lenas, procónsul de *Sardinia* condenado en 56 por concusión; cf. *Ann.* XIII, 30. Sobre la reflexión de Tácito en torno a la naturaleza del Principado cf. R. Syme, *Tacitus*, Oxford, 1958, pp. 408-419; y R. Ash (ed.) *Tacitus. Oxford Readings in Classical Studies*, Oxford-Nueva York, 2012.

¹¹⁷⁶ La tercera fue contra Mario Prisco, procónsul de África. Aparte de las cartas en las que se detiene en detalle en estos casos, véase la mención que hace a todas sus intervenciones como abogado en procesos habidos en el Senado en *Ep.* VI, 29, 8-11. Plinio no sólo actuó como acusador, sino también como defensor de un gobernador; en concreto, de Julio Baso, procónsul de Bitinia (*Ep.* IV, 9).

¹¹⁷⁷ Bebio Masa gobernó la Bética en 91/92: Eck, “Jahres- und Provinzialfasten... (1)”, *Chiron* 12, 1982, pp. 281-362, esp. p. 319; Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 445.

¹¹⁷⁸ Plin. *Ep.* VII, 33.

Marcial sugiere que debieron de ser escandalosas: *Hermogenes tantus mapparum, fur est, / quantus nummorum uix, puto, Massa fuit*¹¹⁷⁹.

El proceso contra Cecilio Clásico es más rico en detalles. Se produjo en 100 d.C., a pesar de que el ex procónsul ya había muerto, pues los daños habían sido graves y se había visto afectada toda la provincia por sus acciones: *Sed Marium una ciuitas publice multique priuati reum peregerunt, in Classicum tota prouincia incubuit*¹¹⁸⁰. Además, la ley permitía que se iniciasen procesos contra un muerto cuando se trataba de *repetundae* o *maiestas*¹¹⁸¹. Al igual que en el caso de Bebio Masa, los representantes del *concilium prouinciae* bético solicitaron a Plinio que fuese su defensor en el proceso ante el Senado, y éste llevó su causa junto a Luceyo Albino, con el que tuvo una gran compenetración¹¹⁸². Plinio no aporta muchos detalles acerca de qué acciones ilícitas llevó a cabo Clásico, excepto que se comportó con perversamente y que en una carta dirigida a una amante de Roma se vanaglorió de haberse liberado de sus deudas gracias a haber amasado cuatro millones de sestercios “vendiendo a una parte de los béticos”: *[...] miserat etiam epistulas Romam ad amiculum quandam, iactantes et gloriosas, his quidem uerbis: “Io io, liber ad te uenio; iam sestertium quadragiens redegi parte uendita Baeticorum”*¹¹⁸³. También sabemos que se apropió de objetos preciosos, pues antes de morir había preparado un documento que de su puño y letra en el que los quiso hacer pasar por adquisiciones legítimas¹¹⁸⁴. El caso debía de ser bastante evidente, pues se resolvió pronto a favor de los béticos. El Senado decretó que la parte de los bienes de Clásico no poseía antes de su proconsulado fuesen entregados a los provinciales como compensación económica. Fue condenado también un tribuno de cohorte que había estado a sus órdenes, Estilonio Prisco, al cual se le impidió pisar Italia durante dos años¹¹⁸⁵. La mujer, la hija y el yerno de Clásico fueron absueltos¹¹⁸⁶.

En este proceso, además, estuvieron encausados dos hombres naturales de la Bética, Bebio Probo y Fabio Hispano, que fueron acusados de colaborar con Clásico en los crímenes que se le imputaban. Este es un detalle muy interesante, que muestra hasta

¹¹⁷⁹ Mart. *Epig.* XII, 28, 1-2.

¹¹⁸⁰ *Ep.* III, 9, 2. A diferencia de Mario Prisco, ex procónsul de África juzgado en el mismo año, cuyas acciones habían afectado sólo a una ciudad y a particulares.

¹¹⁸¹ *Ep.* III, 9, 6; *Dig.* XLVIII, 2, 20. Cf. Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 232.

¹¹⁸² *Ep.* III, 9, 4-9 y VI, 29, 8.

¹¹⁸³ *Ep.* III, 9, 13.

¹¹⁸⁴ *Idem.*

¹¹⁸⁵ *Ep.* III, 9, 18.

¹¹⁸⁶ *Ep.* III, 9, 18-20.

qué punto el gobernador no actuaba solo, sino que contaba con la cooperación constante de provinciales en sus actividades e, incluso, la influencia que ellos podían tener sobre él¹¹⁸⁷. El gobernador se hallaba a menudo en medio de disputas y enemistades entre diferentes ‘facciones’ de aristócratas en su provincia que podían condicionar sus decisiones si era débil de carácter o si deseaba enriquecerse a costa de ellos¹¹⁸⁸. Es más, sabemos que el concilio provincial había enviado como delegado e *inquisitor* precisamente a un enemigo de Clásico, el aristócrata Norbano Liciniano, que había sido condenado por este procónsul a la *relegatio* de la provincia por motivos que Plinio no menciona¹¹⁸⁹. Esto demuestra hasta qué punto los procónsules de la Bética, como los de otras provincias, se podían ver inmiscuidos en las luchas entre facciones rivales de su provincia¹¹⁹⁰. El rencor de Norbano Liciniano le llevó a intentar forzar la condena de la viuda de Clásico, lo que provocó que fuese acusado, a su vez, por prevaricación con el beneplácito de los senadores, que lo odiaban por haber sido en el pasado un delator al servicio de Domiciano¹¹⁹¹.

Finalmente, el testimonio de Probo e Hispano revela el poder coercitivo de que gozaba un procónsul, pues éstos alegaron en su defensa que habían actuado movidos por el miedo a las represalias que podía tomar contra ellos en virtud de su *imperium* (*esse enim se prouinciales et ad omne proconsulum imperium metu cogi*)¹¹⁹². El Senado los halló culpables y los condenó a la *relegatio* de Italia y su provincia durante cinco años¹¹⁹³.

Estos casos de corrupción de procónsules de la Bética muestran hasta qué punto tuvieron el poder y la oportunidad de intervenir en las finanzas municipales y las de los notables locales, pues estos gobernadores juzgados por crímenes *de reptundis* y *de ui*

¹¹⁸⁷ Al antedicho Mario Prisco lo habían sobornado dos provinciales de África para lograr que condenase a las máximas penas a enemigos suyos: Plin. *Ep.* II, 11, 8: *Venerunt qui adesse erant iussi, Vitellius Honoratus et Flavius Marcianus; ex quibus Honoratus trecentis milibus exsilium equitis Romani septemque amicorum eius ultimam poenam, Marcianus unius equitis Romani septingentis milibus plura supplicia arguebatur emisse; erat enim fustibus caesus, damnatus in metallum, strangulatus in carcere.*

¹¹⁸⁸ Sobre el difícil y varipinto papel del gobernador en el contexto de la política provincial: C. Kokkinia, “Ruling, Inducing, Arguing: How to Govern (and Survive) a Greek Province”, en L. de Ligt – E. A. Hemelrijk – H. W. Singor (eds.), *Roman Rule and Civic Life: Local and Regional Perspectives, Impact of Empire 4* (Leiden June 25-28 2003), Amsterdam, 2004, pp. 39-58.

¹¹⁸⁹ *Ep.* III, 9, 29-31.

¹¹⁹⁰ C. González Román, “El proceso de *Caecilius Classicus*, procónsul de la Bética, a comienzos del reinado de Trajano”, en González (ed.) *Traiano emperador...* cit. 179-201, esp. p. 187, donde se detiene en el origen y carrera de Norbano Liciniano.

¹¹⁹¹ *Ep.* III, 9, 31.

¹¹⁹² *Ep.* III, 9, 15.

¹¹⁹³ *Ep.* III, 9, 17.

publica no sólo recurrieron a la extorsión y aceptaron sobornos, sino que también aprovecharon su posición y competencias para apropiarse ilícitamente de bienes públicos y privados y realizar amaños y fraudes en ventas y herencias. Las palabras jactanciosas de Clásico (“*iam sestertium quadragiens redegi parte uendita Baeticorum*”) son muy elocuentes.

La efectividad de la intervención de los gobernadores en las finanzas municipales y la escasa presencia de curatores rei publicae en Hispania

En el siglo II, los graves problemas económicos o gubernativos que sufrieron algunas ciudades llevaron al poder imperial a ponerlas bajo la tutela de enviados especiales conocidos como *curatores rei publicae*. Cuando las que pedían ayuda al poder central eran *ciuitates liberae*, esos enviados fueron denominados *correctores statum ciuitatum liberarum*, pero no hay nada que indique que la naturaleza de las funciones de unos y otros fuesen diferentes; sólo cambiaría el contexto político. Según se desprende de las fuentes, parece que durante el Principado sólo se enviaron *correctores statum ciuitatum liberarum* a provincias orientales gobernadas por procónsules¹¹⁹⁴.

Como ha mostrado G. P. Burton, exceptuando África, entre principios del siglo II y finales del siglo III el poder imperial envió 27 *curatores* a 28 ciudades diferentes, cifra muy pequeña sobre el total de ciudades occidentales existentes, de lo que se deduce que éstas no sufrirían ninguna decadencia económica ni institucional¹¹⁹⁵. Los

¹¹⁹⁴ Al margen del propio Plinio –cuya misión era más amplia– se pueden citar como ejemplo de legados especiales *ad corrigendum statum ciuitatum liberarum* en Oriente a los siguientes hombres: Máximo, amigo de Plinio el Joven, enviado a Acaya (*Ep.* VIII, 24), con posterioridad a la Segunda Guerra Dácica, según Sherwin-White, *The letters...* cit., p. 477; Egnacio Próculo, que fue también a Acaya, pero en época severa (cf. I. Mennen, *Power and Status in the Roman Empire, AD 193-284*, Leiden-Boston, 2011, p. 100); y Cayo Vetio Sabiniano Julio Hospes enviado a Asia en calidad de *leg(atus) Aug(usti) ad ordinandos status insularum Cycladum, legatus prouvinciae Asiae* para ocuparse de las Cícladas. Cf. B. E. Thomasson, *Legatus: Beiträge zur römischen Verwaltungsgeschichte*, Estocolmo, 1991, p. 81, nt. 18; M. Christol, “‘Statum corrigere’ ‘statum ordinare’: remarques sur l’activité de Pline en Bithynie”, en L. Lamoine – C. Berrendonner – M. Cébeillac-Gervasoni, *La praxis municipale dans l’Occident romain*, Clermont-Ferrand, 2010, pp. 93-105, esp. p. 94.

¹¹⁹⁵ G. P. Burton, “The Curator Rei Publicae: Towards a Reappraisal”, *Chiron* 9, 1979, pp. 465-487 y “The Roman Imperial State...” cit. pp. 337-339, quien señala las estrechas similitudes existentes entre las tareas de estos *curatores* y las de los gobernadores provinciales en el ámbito del control financiero de las ciudades. F. Jacques, *Le privilège de liberté*, Roma, 1984, pp. 221-226 (África) y 249-258 (el resto de provincias occidentales). Véase también: Mackie, *Local Administration...* cit. p. 104, nt. 11, que sigue a Burton.

problemas financieros o de otra índole que padeciesen podían ser resueltos por los gobernadores de sus respectivas provincias. Sólo las ciudades de África parecen haber sufrido problemas más graves que necesitasen de una tutela especial, pues, entre el 196 y el 270 fueron enviados allí 38 *curatores*¹¹⁹⁶.

En Hispania están atestiguados cuatro *curatores*, uno en la Lusitania y dos en la Bética, todos en época de Septimio Severo¹¹⁹⁷. El primero, Cayo Titio Claudio Símil, fue enviado a la capital lusitana, *Augusta Emerita*; de los conocidos en la Bética, dos de ellos se encargaron de Itálica, Marco Lucrecio Juliano¹¹⁹⁸ y Gabinio Mucro¹¹⁹⁹ y uno de *Vcubi*, Valerio Calcídico¹²⁰⁰. Saltan a la vista dos importantes detalles: se trata siempre de colonias y los *curatores*, excepto Mucro –cuya inscripción, por lo demás, está incompleta–, son procuradores imperiales, a los que sin duda se les incluyó en sus mandata la misión especial de tutelar el estado de las cuentas de estas ciudades. A pesar de que son pocos epígrafes y su representatividad resulta, por tanto, limitada, se puede deducir de ellos que el poder imperial prestó especial atención al estado de las colonias de Hispania y que optó sistemáticamente por confiar la curatela de ellas a procuradores en vez de senadores. En el caso de Itálica y *Vcubi* la designación de estos *curatores* sin duda se debió no sólo a sus graves problemas internos o desórdenes financieros, sino también a que no eran sedes conventuales y, por tanto, no serían visitadas en persona por gobernador a pesar de la necesidad que tenían de una intervención directa de él en sus asuntos¹²⁰¹. La condición de sede conventual garantizaba las ciudades una relación privilegiada con el gobernador.

¹¹⁹⁶ Vid. nt. anterior.

¹¹⁹⁷ Jacques, *Le privilège...* cit. p. 257, había ya consignado tres (desconocía el de *Vcubi*).

¹¹⁹⁸ CILA II, 379: *M(arco) Lucretio Q(uinti) f(ilio) / Q(uir)ina) / Iuliano / equo publico / proc(uratori) Auggg(ustorum trium) prou(inciae) / Baeticae item / proc(uratori) kal(endari) Vegetiani / item proc(uratori) XX her(editatium) / prouinciarum / Baeticae et Lusitaniae / curatori rei p(ublicae) Italic(ensium) splendidissima / res p(ublica) d(onum) d(edit) / ob merita / eius*.

¹¹⁹⁹ CILA II, 393: - - - - - / [- - - posu?]/it Gabinius / Mucro c(urator?) r(eipublicae) / c(oloniae) V(lpiae) Italicensi/um.

¹²⁰⁰ CIL II²/5, 441: *Imp(eratori) Caesari / Diui Marci [An]tonini Pii Germ[anici] / Sarma[ti]ci f(ilio) Diui Antonini Pii] / nepoti Diui Hadriani pronepoti Diui / Traiani Parthici abnepoti Diui Ne-r/uae adnepoti / L(ucio) Septimio Seue(ro) Pertinaci / Aug(usto) / Arabico Adiabenico patri patriae / pontifici maximo trib(unicia) pot(estate) imp(eratori) VII / co(n)s(uli) II proco(n)s(uli) fortissimo max(imoque) / omnium principum / ordo c(olonorum) c(oloniae) C(laritatis) I(uliae) / ded(icauit) [[Val(erius) Chalcididus]] / proc(urator) Aug(usti) cur(ator) r(ei) p(ublicae) c(olonorum) / c(oloniae) C(laritatis) I(uliae)*

¹²⁰¹ Burton, “The Roman Imperial State...” cit. p. 337 ha señalado con acierto las similitudes entre la labor de los *curatores* y la de los gobernadores. La diferencia estriba en que los primeros se concentraban en una sola ciudad. El *curator* se designaría cuando el gobernador de una provincia no pudiese hacerse cargo de los asuntos de una ciudad. Italia es la región de Occidente con más *curatores ciuitatim* atestiguados, lo que se debe de la inexistencia de un agente oficial que actuase como intermediario entre

La elección de procuradores como *curatores* hay que atribuirla a la política de los Severos, que tendieron a restar poder al *ordo senatorius* y confiar cada vez más misiones administrativas de relevancia a *equites*. Además, resulta muy coherente con el pragmatismo que siempre guió las decisiones imperiales que, dado que estas ciudades necesitaban de atención especial y los gobernadores de sus provincias no la podían ofrecer sin descuidar sus otras funciones, se recurriese a los procuradores, pues eran los agentes imperiales destinados en la provincia que más poderes acumulaban después de los gobernadores.

El hecho de que se trate de colonias está relacionado con la relevancia que tenía para el poder imperial la estabilidad de éstas. Dado que el poder imperial confió en Occidente la administración local y la territorial a nivel inferior a los magistrados de municipios y colonias y que, en el caso hispano, el itinerario anual que realizaba el propio gobernador por la provincia se apoyaba en estas comunidades privilegiadas como sedes conventuales, su estabilidad fue una prioridad para Roma y para el gobernador. A pesar de que el ordenamiento cívico de los municipios y colonias los dotaba de un marco funcional muy operativo, las propias dinámicas sociales inherentes al modelo de gobierno aristocrático –y, por tanto, competitivo– implantado en ellos los podía conducir a caer en gastos conspicuos excesivos e, incluso, al desgobierno, a consecuencia del enfrentamiento por la primacía entre sus familias dirigentes o de la rivalidad con ciudades vecinas. También existía el riesgo de malas gestiones derivadas de la impericia, el tráfico de influencias o la malversación interesada de caudales públicos.

La ausencia de *curatores rei publica* en Hispania hasta época de los Severos sugiere que sus ciudades no sufrieron graves problemas económicos y que la supervisión de las finanzas municipales que llevaban a cabo los gobernadores de sus provincias fue suficiente para resolver los que se produjesen y garantizar la estabilidad interna de las ciudades. Sin embargo, el temor a que cayesen en el endeudamiento crónico indujo al poder imperial a intentar prevenirlo, valiéndose para ello de la acción de los gobernadores. Los gobernadores podían intervenir sin trabas en todas las comunidades de su provincias a excepción de las libres, pero no supervisaban sistemáticamente las cuentas de todas ellas, ni siquiera de los municipios y colonias (ya

las ciudades y el poder central, papel ejercido por los gobernadores en las provincias, cf. Eck, “Provincial Administration...” cit. pp. 278-279.

que sería impracticable) sino sólo de aquéllas que se lo pidiesen o que el poder imperial le hubiese señalado en *mandata* o *epistulae*. Así pues, era necesaria la iniciativa de los magistrados o decuriones locales, que debían contar con su permiso para realizar ciertos gastos o en el caso de que ellos mismos no fuesen capaces de equilibrar las cuentas públicas por sí solos, bien por impericia, bien por problemas de corrupción o enfrentamiento entre facciones rivales.

En el primer caso, la *lex Irnitana* puede servir de modelo representativo de lo que sucedería en los ordenamientos de otros municipios y colonias: en su capítulo 80 se especifica que los magistrados del municipio debían contar con el permiso expreso del gobernador para pedir préstamos superiores a 50.000 sestericios. Esto indica que una de las medidas preventivas a las que recurrió el poder imperial para evitar el endeudamiento de los municipios, ya a finales del siglo I, fue la de responsabilizar a los gobernadores provinciales –en este caso el procónsul de la Bética– de controlar el techo de su endeudamiento.

En el segundo caso, el gobernador podía resolver estos problemas financieros a través de tres cauces: en persona, bien judicialmente cuando se trataba de casos de malversación de caudales públicos o incumplimiento de una *summa honoraria* o evergesía concertada con la curia local, bien con su revisión personal de las finanzas, buscando equilibrarlas con una nueva organización del presupuesto o solicitando al emperador nuevas fuentes de ingresos (véase Plinio *supra*); o mediante legados que se ocupasen de ello.

En cuanto a los *correctores statum ciuitatum liberarum*, sólo fueron enviados a la parte oriental del Imperio y, en concreto, a provincias proconsulares. Lo primero se explicaría por la mayor presencia de *ciuitates liberae* allí, en el contexto de la tradición políada griega y las relaciones establecidas con Roma desde época republicana. En Occidente, a pesar de que tenemos noticia de ellas, éstas acabaron siendo objeto del proceso municipalizador y pocas conservaron sus privilegios particulares como *municipia libera*¹²⁰². En Hispania, donde Plinio sitúa diez *ciuitates liberae* partiendo de

¹²⁰² La excepción de Occidente sería, África, que, junto con Asia, fue la provincia que más *ciuitates liberae* tuvo. Cf. F. F. Abbott – A. C. Johnson, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton, 1926, pp. 42-43, donde dicen que llegó a contar con treinta y nueve. Plinio, *N.H.* V, 30, menciona la existencia de treinta *oppida libera* en África Proconsular, número notable, pero sólo tenemos atestiguados cinco *municipia libera* en época severa: *Matara*, *Thysdrus* (ambas citadas por Plinio en su

las *formae prouinciae* augusteas, conocemos sólo un caso de *municipium liberum*. Se trata de *Singilis*, en la Bética, comunidad que Plinio el Viejo cataloga entre otras *celeberrima oppida*, sin más especificaciones, pero que sabemos que ostentaba el título oficial de *municipium Flauium liberum* una vez que se benefició de la concesión de *ius Latii* hecha por Vespasiano a toda Hispania en 73/74¹²⁰³. Estamos de acuerdo con Jacques en que con la inclusión del adjetivo *liberum* en su título se pretendió resaltar el estatuto diferenciado que *Singilis* había tenido previamente en su relación con Roma y en contraste con las *ciuitates stipendiariae* que fueron también promocionadas a municipios de derecho latino en esa época, al tiempo que se señalaban determinados privilegios fiscales de que gozaría esta ciudad. Era una forma de remarcar que con la municipalización no se había hecho *tabula rasa*¹²⁰⁴.

Sí tenemos, en cambio, un ejemplo de intervención de un gobernador en una *ciuitas libera* de Hispania a finales de la República. Cuando Julio César gobernó la Hispania Ulterior en 61 a.C. la ciudad federada de *Gades* le pidió que interviniese en sus asuntos internos para resolver los conflictos (*controuersiae*) que amenazaban su estabilidad. César accedió y realizó ciertas modificaciones en su ordenamiento (*iura ... statuerit*) que, al parecer, la acercaron al modelo cívico romano, dado que, según Cicerón, alejaron a *Gades* de su tradición púnica¹²⁰⁵. Aunque es excepcional y se refiere a una época en la que los gobernadores tenían más libertad de acción, este caso muestra hasta qué punto podía llegar a ser necesaria la intervención del gobernador no sólo como árbitro, sino como corrector de las deficiencias organizativas internas de una ciudad libre en Hispania.

lista de *oppida libera*), *Aulodes*, *Thugga* y *Thibursicum Bure*. Las cuatro últimas comunidades habrían sido promocionadas al estatuto municipal bajo Septimio Severo o Caracala. Cf. F. Jacques, “*Municipia libera* de l’Afrique proconsulaire”, en *Epigrafia. Actes du colloque international d’épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrossi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988)*, Roma, 1991, pp. 583-606, quien explica verosíblemente su tardía promoción municipal por el hecho de que querían conservar la inmunidad fiscal de su tierra, respetada por los Severos (pp. 589-592). Fuentes epigráficas: *CIL* XII, 686 (*Thysdrus*), *CIL* VIII, 14335 (*Aulodes*); y para *Thugga* y *Thibursicum*: Gascou, *La politique...* cit. pp. 142-143 y 201-202. Nos preguntamos si todos los *oppida libera* plinianos (o la mayoría de ellos) acabaron siendo promocionados a *municipia libera*. Recuérdese que, si no existía un *foedus*, la *libertas* o *inmunitas* de una ciudad podía ser revocada en cualquier momento por Roma; Abbott – Johnson, *Municipal Administration...* cit. p. 41.

¹²⁰³ Plin. *N.H.* III, 10; *CIL* II, 2025. Jacques, “*Municipia libera...*” cit., pp. 588-589.

¹²⁰⁴ Jacques, “*Municipia libera...*” cit., pp. 588-589 y 596.

¹²⁰⁵ Cic. *Pro Balbo* 43: *Omitto quantis ornamentis populum istum C. Caesar, cum esset in Hispania praetor, adfecerit, controuersias sedarit, iura ipsorum permissu statuerit, inueteratam quandam barbariam ex Gaditanorum moribus disciplinaque deleat, summa in eam ciuitatem huius rogatu studia et beneficia contulerit.*

En el Principado el caso mejor conocido de legado especial que no fuese destinado a la provincia en calidad de gobernador es el de Máximo, gracias a una carta que le dirige Plinio en la que define la naturaleza de su misión recurriendo a las palabras oficiales: *missum ad ordinandum statum liberarum ciuitatum* (VIII,24,2). Máximo fue enviado a Acaya con el objetivo de intervenir en los asuntos internos de sus ciudades libres y reestablecer, así, el orden en ellas. Su mando especial, *ex senatoconsulto et ex auctoritate principis*, se deriva de que los procónsules ordinarios no podían intervenir en estas *ciuitates liberae*¹²⁰⁶, y es muy probable que esta decisión imperial fuese la respuesta que el poder central dio a una petición expresa de tales ciudades, una vez que sus magistrados habían comprendido que eran incapaces de resolver sus problemas por sí solos, como le sucedió a Plinio con Apamea¹²⁰⁷.

Estos problemas económicos debían de ser importantes ya en época de Augusto, pues éste, según cuenta Suetonio, decidió privar a algunas ciudades del estatuto de libres a consecuencia de su endeudamiento y de las deficiencias en su funcionamiento interno, mientras que a otras le bastó con liberarlas de sus deudas¹²⁰⁸. No se trataba de un castigo, sino del único modo en que el poder imperial, en ese momento, entendió que podía ayudarlas de manera directa. Así, el gobernador podía intervenir en ellas con sus poderes habituales. En el siglo II, en cambio, se optará por respetar su estatuto pero enviar a un delegado con poderes especiales. Sherwin-White relacionó estos últimos *correctores statum ciuitatum* con los *curatores ciuitatum* que Trajano envió a los municipios de Italia, destacando, con acierto, la actitud paternalista del poder imperial hacia el autogobierno de las comunidades tanto de Italia como de las provincias, y su deseo de protegerlas de su propia mala gestión¹²⁰⁹. En todo caso, estas medidas se explican dentro del contexto de la política del equilibrio de la que hablamos en el capítulo anterior: el poder imperial necesitaba que las ciudades en la que se sustentaba el Imperio estuviesen saneadas económicamente para que no corriesen riesgos de decaer. Era el antiguo principio expuesto por Cicerón de que toda ciudad, toda *res*

¹²⁰⁶ Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 478.

¹²⁰⁷ *Ep.* X, 47.

¹²⁰⁸ Suet. *Diu. Aug.* 47: *Vrbium quasdam, foederatas sed ad exitium licentia praecipites, edere te priuauit, alias aut aere alieno laborantis leuauit (...).*

¹²⁰⁹ Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 478.

publica, debía ser gobernada *ut diuturna sit*¹²¹⁰. Y dejando a un lado las escasas *ciuitates liberae* de Occidente, las finanzas de la gran mayoría de las comunidades de una provincia podían ser revisadas en cualquier momento por sus gobernadores.

Que estos enviados especiales sólo actuasen en provincias proconsulares puede deberse a que en las imperiales la legitimidad del *princeps* para designar a la persona que quisiese era más firme y podía reemplazar al gobernador –o mantenerlo a cargo de la provincia– a su libre arbitrio. No tenemos ningún indicio de ellos en las provincias occidentales, seguramente por el motivo inverso (esto es, el escaso número de ciudades libres, a veces inexistentes, según de qué provincia se tratase). Los gobernadores ordinarios de las provincias se bastarían para atajar los problemas que surgiesen en las comunidades locales, y sólo la franca decadencia de algunas de ellas habría obligado, a partir de la segunda mitad del siglo II, a enviar *curatores rei publicae* específicos a las mismas. De todas formas, como ha mostrado Burton, el número de *curatores* conocido en general, y en particular en Occidente, es muy inferior al número de ciudades existentes, lo que descarta, por un lado, una decadencia generalizada y, por otro, que los gobernadores necesitasen ayuda en esta tarea sistemáticamente.

Conclusiones

En suma, estos datos configuran la imagen de un gobernador que asume grandes responsabilidades en la estabilidad económica de las ciudades de su provincia –sobre todo las privilegiadas– con el fin de garantizar su sostenibilidad. Podía intervenir discrecionalmente en todas ellas, a excepción de las libres, pero su actividad cotidiana en este ámbito se manifestaba habitualmente en dos competencias fundamentales: fijar el máximo que podían alcanzar los préstamos de los municipios en casos que superasen los 50.000 sestericios (como muestra la *lex Irnitana*) y la vista de las causas judiciales relativas a la malversación de fondos públicos, el incumplimiento de legados en beneficio de una comunidad, etc. En ambos casos, su intervención dependía de la iniciativa de los magistrados locales, pues ellos eran quienes debían presentar tales asuntos al gobernador según la ley. En cuanto a su implicación directa en la revisión de

¹²¹⁰ Cic. *De re pub.* I, 41: *Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem exposui, omnis ciuitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit.*

las cuentas públicas, ésta sería menos habitual y, de nuevo, se derivaría de una petición local o de instrucciones que les hubiesen dado los emperadores antes de partir a su provincia¹²¹¹. Para la resolución de estos problemas sería de nuevo inestimable la colaboración de las élites locales y de los miembros cualificados de su *officium*, que conocerían de primera mano la documentación provincial. Con todo, en Hispania la escasa presencia de *curatores rei publicae* a finales del Principado sugiere que los gobernadores provinciales enviados a ella pudieron hacer frente con eficacia a los problemas de sus ciudades, que no llegaron a ser tan graves como en Oriente en este período.

¹²¹¹ Cf. Eck, “Provincial Administration...” cit. p. 272 y 275; Burton, “The Issuing of *mandata*...” cit.

CAPÍTULO 2: SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

Un asunto de primer orden para los municipios y colonias era la construcción y preservación de sus diversos edificios e infraestructuras (vías, caminos, canales, cloacas, acueductos...), y por ello sus leyes constitutivas les prestan especial atención: tanto la *lex* de la *Colonia Genetiua Iulia* como las de los municipios flavios de *Irni* y *Malaca*, coinciden estrechamente en las disposiciones relativas a este ámbito, y en su preocupación por evitar la ruina estética y funcional de la ciudad desde un punto de vista urbanístico. En Urso e Irni un particular sólo podía derribar un edificio si tenía la intención de levantar, en su lugar, otro nuevo, excepto si contaba con el permiso de los decuriones (Irni, *Malaca*) o de éstos o los duoviros (Urso)¹²¹². La contravención de esta norma podía acarrear una dura sanción, establecida en función del valor del edificio, y la persona responsable podía ser denunciada judicialmente¹²¹³. Los edificios particulares eran responsabilidad de sus propietarios, que, sin embargo, no podían decidir qué hacer con ellos con plena autonomía, dado que sus acciones podían afectar al ámbito público. Estas leyes municipales de la Bética atribuyen la dirección de las obras públicas a los duoviros en nombre de la comunidad y no dicen nada de que se requiriese, para ello, el permiso del gobernador. En efecto, la responsabilidad sobre la construcción, reforma o renovación de los edificios públicos estaba repartida entre los magistrados municipales y los notables locales¹²¹⁴. Como es sabido, las ciudades que componían el Imperio Romano y sobre las que descansaba su administración menor a nivel local, tanto en Oriente como en Occidente, dependían en gran medida de los actos evergéticos que en favor de las comunidades realizasen sus ciudadanos económicamente acomodados, que solían pertenecer, al mismo tiempo, a sus curias o senados, e incluso podían ser miembros de los *ordines* senatorial y equestre; sin olvidar a los libertos enriquecidos¹²¹⁵.

¹²¹² *Lex Irnitana*, cap. 62 (= *lex Malacitana*); *lex Vrsionensis*, cap. 75. El precedente de ambos capítulos se halla en la *lex Tarentina* [4]. En general: Curchin, *The Local Magistrates...* cit. pp. 58-59.

¹²¹³ Sobre el procedimiento jurídico: Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit. pp. 86-92.

¹²¹⁴ Curchin, *The Local Magistrates...* cit. pp. 58-63 y 106-109.

¹²¹⁵ En cuanto al resto de sus ciudadanos, estaban obligados a realizar una serie de *munera* también en relación a las construcciones e infraestructuras. En *Irni*, cinco días al año (cap. 83: *De munitione*).

En las ciudades hispanas, según los cálculos de Melchor a partir de las inscripciones conocidas en 1994, el 72,9% de obras las públicas municipales fueron financiadas por evérgetas particulares, mientras que sólo el 11,6% fue asumido por las comunidades. La distancia es enorme, aunque, como ya apuntó este autor, existen muchas construcciones de las que desconocemos quiénes fueron sus financiadores, lo cual le inclinaba a pensar que los porcentajes deberían estar más ajustados en realidad¹²¹⁶. Aun siendo muy relevante desde un punto de vista cuantitativo el aporte financiero de los evérgetas, no era inusual que se invirtiese dinero de las arcas públicas en obras tales como templos, termas, foros o acueductos; ello dependía de la capacidad económica de la ciudad y de sus élites: en el norte de África, por ejemplo, los porcentajes están muy igualados¹²¹⁷. Además, una vez realizada la construcción donada a la comunidad, era ésta en la que debía encargarse de su conservación, lo que conllevaba un importante gasto, salvo que el evérgeta dejase un fondo auxiliar para ello.

Así como los ediles estaban encargados de cuidar del buen estado de los edificios públicos, los duoviros, por ley, debían *'uias, itinera, flumina, fossa, cloacas inmitere, commutare'*¹²¹⁸, y en ello empleaban fondos públicos, motivo por el cual se les exigía, como vimos antes, un aval de su patrimonio antes de asumir su cargo. Aunque no lo contempla la ley, tampoco se debe descartar la posibilidad que ya apuntamos de que notables que no ejerciesen ninguna magistratura local fuesen designados para gestionar alguna obra pública costeada por las ciudades.

Sin embargo, sabemos que en los siglos II y III el poder imperial promulgó normas que prohibían la realización de nuevas obras con cargo a los fondos públicos de las ciudades de todo el Imperio sin el permiso del poder central, tal y como expone el jurista Macro en su tratado *de officio praesidis: Publico uero sumptu opus nouum sine principis auctoritate fieri non licere constitutionibus declaratur*¹²¹⁹.

Esta norma sería sin duda la confirmación de una práctica que comenzó antes y se generalizó al menos desde época de Trajano, pues parece claro que en Bitinia-Ponto no se podía construir nada con la *pecunia communis* sin la aprobación no sólo de Plinio,

¹²¹⁶ Melchor, *Mecenazgo cívico...* cit. pp. 101 y 196.

¹²¹⁷ R. Duncan-Jones, *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge, 1990, pp. 178-183. Algunas ciudades, incluso, sufragaron con fondos públicos la mayoría de sus edificios en determinados períodos; véase el ejemplo estudiado por este autor, Thamugadi, colonia fundada por Trajano en Numidia con veteranos de la *legio III Augusta*.

¹²¹⁸ *Lex Imitana* cap. 82. Lo mismo sucedía en Urso, cap. 77. Precedente: *Lex Tarentina* 5.

¹²¹⁹ *Dig. L, 10, 3, pr.-1 (Macer 2 de off. praes.)*.

sino del propio emperador. Asimismo, en un rescripto Antonino Pío estableció que el dinero recaudado para construir nuevos edificios debía ser destinado a la conservación y renovación de los ya existentes y, en otro, Marco Aurelio remarca que todos los gobernadores debían consultar al emperador siempre que hubiese un proyecto de erección de murallas:

*Pecuniam, quae in opera noua legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt conuertendam, quam ad inchoandum opus erogandam Diuus Pius rescripsit: scilicet si satis operum ciuitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inueniatur.*¹²²⁰

*De operibus, quae in muris uel portis uel rebus publicis fiunt, aut si muri exstruantur, Diuus Marcus rescripsit praesidem aditum consulere principem debere.*¹²²¹

Es más, Dión de Prusa recuerda en sus discursos la necesidad de contar con la aprobación del procónsul de Bitinia para llevar adelante el proyecto de una nueva construcción que fuese costosa¹²²². También debían encargarse de fijar los plazos en que debería ejecutarse los legados en beneficio de las ciudades cuando éstos no hubiesen sido indicados por el benefactor en su testamento y de establecer los intereses que deberían pagar sus herederos o fideicomisarios en caso de no respetarlos, con el fin de evitar que usasen esa laguna para no cumplir con el *beneficium* debido a la comunidad, sobre todo cuando se trataba de una inversión en obras públicas o labores de embellecimiento:

Si legatum uel fideicommissum fuerit ad opus relictum, usurae quae et quando incipiant deberi, rescripto Diui Pii ita continetur. “Si quidem dies non sit ab his, qui statuas uel imagines ponendas legauerunt, praefinitus, a praeside prouinciae tempus statuendum est, et nisi posuerint heredes, usuras leuiores intra sex menses, si minus, semisses usuras rei publicae pendant. si uero dies datus est, pecuniam deponant intra diem, si

¹²²⁰ *Dig. L, 10, 7, pr (Callis. 2 de cogn.).*

¹²²¹ *Dig. L, 10, 6 (Mod. 11 pand.).*

¹²²² *Or. XL, 5-6; XLV, 6.*

*aut non inuenire se statuas dixerint aut loco controuersiam fecerint: semisses protinus pendant”.*¹²²³

Por su parte, Ulpiano especifica en su tratado *de officio proconsulis*:

*Aedes sacras et opera publica circumire insciendi gratia, an sarta tectaque sint uel an aliqua refectiones indigeant, et si qua coepta sunt ut consummentur, prout uires eius rei publicae permittunt, curare debet curatoresque operum diligentes sollemniter praeponere, ministeria quoque militaria, si opus fuerit, ad curatores adiuuandos dare*¹²²⁴.

Este pasaje es muy rico en información y sintetiza los puntos principales que caracterizaban la intervención de los gobernadores en las obras públicas no sólo en siglo III, sino durante todo el Alto Imperio. En primer lugar, establece una diferencia entre los templos y el resto de obras públicas, sin duda por su diferente estatus jurídico y los formalismos que requería una intervención en una construcción o terreno consagrados. Entre esos templos sobresalían en importancia aquellos dedicados al culto imperial –en la difusión del cual los gobernadores tuvieron un papel muy relevante, como veremos en la Tercera Parte– y, por ejemplo, P. Gros ha planteado que la construcción del templo dedicado a los malogrados nietos de Augusto, Gayo y Lucio César, en *Nemausus* –la llamada “Maison Carrée”, que dominaba el foro de la colonia– hubo de ser autorizada y apoyada por el procónsul de la Galia Narbonense¹²²⁵.

Recuérdese que entre las cuestiones a las que el municipio de Irni podía destinar parte de sus fondos públicos, según el capítulo 79 de su ley, se hallaba la conservación de los templos y monumentos (*aedium sacrarum monumentorumque custodiam tuendam*). Esto implica, por tanto, que los gobernadores supervisaban que este cometido no fuese descuidado por los magistrados y decuriones de los municipios de su provincia y allí donde fuese necesario intervendría y podría, incluso, solicitar el consejo o la ayuda del emperador.

¹²²³ Dig. L, 10, 5 (Ulp. 1 *de off. cur. r.p.*). Jacques, “*Ampliatio et mora...*” cit. pp. 160-161, demostró que la mención del *praeses* en el pasaje, a pesar de pertenecer al *de officio curatoris rei publicae*, no es una interpolación, sino que el rescripto de Antonino Pío estaría en un principio dirigido a los gobernadores y más tarde habría sido incluido en entre las instrucciones que tenían los *curatores*.

¹²²⁴ Dig. I, 16, 7, 1 (Ulp. 2 *de off. procos.*).

¹²²⁵ P. Gros, “La ville...” cit. p. 184.

Por ejemplo, sabemos que cuando Tiberio aceptó que se erigiese el templo que las ciudades de Asia le habían ofrecido a él, a su madre Livia y al Senado, encargó de su supervisión al procónsul que por entonces gobernaba la provincia, Marco Emilio Lépido, al que concedió un legado a mayores para que le ayudase en esa tarea¹²²⁶. Por otra parte, en época de Trajano Plinio el Joven se preocupó de buscar una nueva ubicación al templo de la Gran Madre de Nicomedia que iba a quedar a un nivel muy inferior al del resto de edificios a consecuencia del nuevo foro que se estaba constuyendo adyacente al antiguo. Para ver qué podía hacer, Plinio pidió a las autoridades locales el acta de consagración del templo, pero se encontró con que en la provincia no existía la costumbre de realizar acta de ese tipo. Así pues, decidió escribir a Trajano para saber si ese templo podía ser trasladado. Trajano dio el visto bueno al traslado, aduciendo que el suelo de una ciudad extranjera no necesita de consagración como la realizada conforme al derecho religioso romano¹²²⁷. Finalmente, Arriano, en el informe que envió a Adriano sobre el viaje de inspección que realizó por el Ponto Euxino cuando fue gobernador de Capadocia, muestra un especial interés en supervisar el estado de los templos y de las imágenes de los dioses y del propio emperador que halló en los lugares de la costa que visitó¹²²⁸. Estas situaciones serían comunes en todas las provincias del Imperio.

A continuación, Ulpiano usa el verbo *circumire* para referirse al recorrido del gobernador por las ciudades inspeccionando el estado de sus construcciones; y no es una elección de vocabulario aleatoria: recuérdese que *circumire* es el verbo usado por Plinio y otros autores para referirse a su itinerario anual por la provincia, en el marco del sistema conventual¹²²⁹. La frase de Ulpiano – ‘*circumire inscipiendi gratia*’ – parece indicar que los gobernadores debían realizar un recorrido por su provincia solamente dedicado a la inspección de las obras públicas y templos, aunque resultaría más práctico, como expusimos antes, que sólo hiciesen un recorrido al año por las principales ciudades tanto para administrar justicia y presidir otros actos jurisdiccionales como para supervisar las finanzas de las ciudades y sus obras públicas. Evidentemente, esto último los obligaría, en ocasiones, a desplazarse fuera de la sede

¹²²⁶ Tac. *Ann.* IV, 56. Los provinciales de Asia decidieron dedicarles este templo en acción de gracias por haber condenado a un procurador y un gobernador que los habían extorsionado (*Ann.* IV, 15).

¹²²⁷ Ep. X, 49-50.

¹²²⁸ Arrian. *Perip.* 1-2.

¹²²⁹ Vid. Primera Parte.

conventual o capital provincial, como le sucedió a Plinio cuando hubo de buscar un manantial para el nuevo acueducto de Nicomedia. No se ha de descartar, además, que excepcionalmente visitaran ciudades que no fuesen sedes conventuales cuando éstas necesitasen de su intervención personal en una situación de emergencia, por ejemplo una catástrofe causaba daños cuantiosos. Así, Quinto Cicerón, en el primer año que gobernó Asia (60 a.C.), dedicó mucho tiempo y esfuerzos a dirigir y ayudar a la reconstrucción de las ciudades dañadas por un terremoto¹²³⁰. El emperador podía especificar en sus *mandata* que el gobernador visitase personalmente alguna ciudad que no fuese sede conventual o que inspeccionase una determinada región por motivos de seguridad, como en el caso de la misión antedicha de Arriano¹²³¹.

Según Ulpiano, el gobernador debía preocuparse de que las obras iniciadas se concluyeran (*‘si qua coepta sunt ut consummentur’*), con el fin de que no se perdiese el dinero público invertido en ellas y, al mismo tiempo, no se quedasen sin las infraestructuras y edificios que necesitaban para el buen funcionamiento de la vida cívica. Y allí donde fuese necesario, podía recurrir al ejército para llevar a cabo un proyecto o ayudar a los que se encargasen de él (los *curatores*), a realizarlo con garantías.

La labor de Plinio el Joven en Bitinia-Ponto concuerda a la perfección con el pasaje ulpiano. Gran parte de sus cometidos en la revisión de las cuentas públicas estaba relacionada con las obras costeadas por las ciudades de Bitinia-Ponto. Trajano se muestra sumamente interesado en conocer los detalles de todos los proyectos edilicios o de infraestructuras de la provincia no sólo para evaluar, partiendo de los informes de su gobernador, la necesidad de los mismos, sino también en gran medida porque han sido la causa de enormes dispendios de la *pecunia communis* de cada ciudad¹²³². En efecto, las ciudades solían competir entre sí por ver quién de ellas tenía unas construcciones más lujosas, como símbolo de su prosperidad y su poderío. Esta rivalidad, bien atestiguada en Oriente¹²³³, no cabe duda de que también existió en las provincias

¹²³⁰ Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 25: *urbes complures dirutas ac paene desertas, in quibus unam Ioniae nobilissimam, alteram Cariae, Samum et Halicarnassum, per te esse recreatas.*

¹²³¹ En concreto la amenaza que el pueblo de los Sannes suponía para la seguridad de Trapezunte: Arrian. *Perip.* 11, 1-3.

¹²³² Una estimación del coste de diversos tipos de edificios públicos e infraestructuras (a partir de los ejemplos del norte de África) en Duncan-Jones, *The Economy...* cit. pp. 75-78.

¹²³³ A. H. M. Jones, *The Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford, 1937, y *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford, 1940, pp. 170-191 y 236-250.

occidentales¹²³⁴, pues era consustancial a los principios ideológicos de las ciudades del Imperio, sostenidas siempre por gobiernos aristocráticos en los que la competitividad en la carrera de los honores constituía una dinámica favorable a la comunidad –en tanto que se beneficiaba del gasto ejercido por sus notables como forma de auto-representación y prestigio–, pero que podía perjudicarla cuando conducía, bien al endeudamiento de éstos, bien al de la ciudad cuando competía con otras. Las ciudades de Bitinia-Ponto son un ejemplo paradigmático de los problemas que se podían derivar de esta dinámica de gasto conspicuo, y sus problemas de endeudamiento o de malversación de fondos son perfectamente extrapolables, *mutatis mutandis*, a las ciudades de provincias occidentales como las hispanas.

Según nos ha transmitido en su correspondencia con Trajano, Plinio el Joven supervisó, al menos, ocho construcciones de su provincia, repartidas en seis ciudades: unas termas en Prusa¹²³⁵, un acueducto, un canal y un foro en Nicomedia¹²³⁶, otro acueducto en Sinope¹²³⁷, un teatro en Nicea¹²³⁸, un gimnasio en Claudiópolis¹²³⁹ y una cloaca en Amastris¹²⁴⁰. Plinio visitó en persona todas estas ciudades f en su recorrido obligado por la provincia y a la que más tenciones presta en este ámbito es precisamente la capital de Bitinia, Nicomedia¹²⁴¹. Como comentamos en el capítulo relativo al sistema conventual, la presencia del gobernador en una ciudad permitía que sus magistrados y notables tuviesen la posibilidad de acceder a él durante los días que se detuviese en ella y de exponerle tanto los problemas de la comunidad que necesitasen de su intervención como sus peticiones particulares. Y esto situaba a estas sedes conventuales en una posición muy ventajosa respecto al resto.

¹²³⁴ Como prueba la proliferación en todas las ciudades de teatros y anfiteatros monumentales en las provincias occidentales más desarrolladas, como la Bética o la Narbonense, aunque en otras con un desarrollo urbano más desigual como la Hispania Citerior o las Tres Galias hay importantes restos de teatros y anfiteatros, a veces en comunidades que no distan entre sí más de 10 km. Por otro lado, es muy elocuente que el foro más grande de Occidente no se halle en Roma, sino en la localidad de Tours-Mirandes, en la Aquitania. Cf. P. Gros, “La ville comme symbole. Le modèle central et ses limites”, en H. Inglebert (dir.), *Histoire de la civilisation romaine*, París, 2005, pp. 155-232, esp. p. 211.

¹²³⁵ Plin. *Ep.* X, 23-24 y 70-71.

¹²³⁶ *Ep.* X, 37-38 (acueducto); 41-42 y 62-63 (canal que conectase un lago con el mar); 49 (foro y templo de la Gran Madre).

¹²³⁷ *Ep.* X, 90-91.

¹²³⁸ *Ep.* X, 39-40.

¹²³⁹ *Idem.*

¹²⁴⁰ *Ep.* X, 98-99

¹²⁴¹ Cf. Sherwin-White, *The Letters...* cit. pp. 530-533.

Toda la actividad vinculada a la supervisión y promoción de las obras públicas que llevó a cabo Plinio en Bitinia-Ponto tiene precedentes tardo-republicanos¹²⁴² y cuenta con paralelos en la labor de los gobernadores de otras provincias orientales y occidentales, principalmente transmitidos por la epigrafía¹²⁴³. Desafortunadamente, el número de testimonios epigráficos referidos a las provincias hispanas –como las del resto de las occidentales a excepción de África Proconsular– es menor que el relativo a las orientales, lo que ha hecho que los estudios realizados hasta ahora acerca de las competencias de los gobernadores provinciales se hayan volcado en estas últimas.

No obstante, esto no quiere decir que los gobernadores de la parte occidental del Imperio dedicaran menos tiempo a la supervisión de las obras públicas. La conservación de las inscripciones está sujeta a los avatares del tiempo y de la acción humana ejercida durante siglos sobre los monumentos a los que pertenecen y, por tanto, las estadísticas establecidas en base a los hallazgos han de ser siempre relativizadas. A esto hay que añadir, además, que el hábito epigráfico estaba mucho más desarrollado en Oriente que en Occidente como resultado del diverso desarrollo cívico alcanzado por las provincias de ambas partes del imperio, al menos en el primer siglo y medio del Principado¹²⁴⁴. Todas las construcciones en las que intervino Plinio el Joven están atestiguadas en las ciudades de Hispania en el período altoimperial, así que su ejemplo resulta muy útil para hacernos una idea de los problemas a los que los gobernadores de nuestras provincias debían hacer frente, a pesar de tratarse de dos tradiciones cívicas diversas. Si en el caso de Bitinia-Ponto la situación de las construcciones realizadas por las ciudades era más grave, ello sin duda fue consecuencia de la negligencia de los procónsules que precedieron a Plinio en el control del coste y ejecución de las mismas.

Un último problema en el estudio de la intervención de los gobernadores en las obras públicas radica en que desde el siglo II d.C. una disposición imperial prohibió que los gobernadores provinciales dedicasen ninguna obra pública en su provincia:

¹²⁴² Quinto Cicerón se preocupó por dirigir la reconstrucción de las ciudades de Asia dañadas por un terremoto (Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 25), y sabemos que César, poco antes de cruzar el Rubicón en 49 a.C., estuvo supervisando en Rávena los planos de una escuela de gladiadores que se iba a construir allí (Suet. *Diu. Iul.* 31,1).

¹²⁴³ Burton, “The Roman Imperial State...”, cit., p. 328.

¹²⁴⁴ R. MacMullen, “The Epigraphic Habit in the Roman Empire”, *AJPh* 103/3, 1982, pp. 233-246; S. E. Clearly, “The City as Preferred Written Space: the Case of Aquitania”, en G. Sears – P. Keegan – R. Laurence (eds.), *Written Space in the Latin West, 200 BC to AD 300*, Londres, 2013, pp. 217-230; L. Revell, “The Written City: Political Inscriptions from Roman Baetica”, en *Idem*, pp. 231-245.

*Inscribi autem nomen operi publico alterius quam principis aut eius, cuius pecunia id opus factum sit, non licet.*¹²⁴⁵

*Nec praesidis quidem nomen licebit superscribere.*¹²⁴⁶

Esta disposición hay que ponerla en relación, sin duda, con las otras medidas con las que los emperadores buscaron limitar la influencia política de los gobernadores en sus provincias como la que prohibía que durante su mandato fuesen nombrados patronos de las comunidades provinciales o se casasen con una mujer oriunda de la provincia¹²⁴⁷. En efecto, los diversos alzamientos provinciales que se produjeron durante el Alto Imperio convencieron a los emperadores de la necesidad de restringir en la medida de lo posible los recursos que podían fortalecer el poder de los gobernadores y poner en riesgo la conservación del trono. Con todo, la epigrafía provincial revela que los gobernadores no dejaron de ser honrados como patronos¹²⁴⁸ y, como señaló Jacques a propósito de la casuística africana presentada por Kolendo, el hecho de que la mayor parte de las menciones epigráficas del procónsul se produzca en inscripciones edilicias revela que la norma antedicha no fue respetada siempre. No es de extrañar, por tanto, que los juristas Macro y Modestino se preocuparan tanto de insistir en esa interdicción. Según el estudioso francés, estas menciones epigráficas, sin embargo, “ne sont sans doute pas à proprement parler illégales; mais il me semble que la loi est tournée. La dédicace par le proconsul ou la datation par le proconsulat pouvaient être des biais trouvés pour honorer –malgré la loi– le gouverneur ou pour l’associer à la construction en pérennisant son nom *in titulo*”¹²⁴⁹. Es decir, a partir del siglo II la mención del gobernador en la dedicación de un edificio se debió, en general, a una decisión de la comunidad afectada más que a una iniciativa del primero, que tenía demasiado que perder si se saltaba una prohibición que estaba dirigida a él: se arriesgaba ciertamente a sufrir un proceso *de maiestate* a su regreso a Roma.

En las provincias hispanas, precisamente, las menciones epigráficas de los gobernadores provinciales en las construcciones públicas que conocemos no van más

¹²⁴⁵ Macer 2 *de off. praes.* (Dig. L, 10, 3, 2).

¹²⁴⁶ Modest. 11 *pand.* (Dig. L, 10, 4).

¹²⁴⁷ P. López Barja, “Patronato y clientela: el gobernador provincial romano”, en *Rapports de subordination personnelle et pouvoir politique dans la Méditerranée antique et au-delà. XXXIVe Colloque International GIREA*, 2013, pp. 141-160.

¹²⁴⁸ Como veremos en la Tercera Parte.

¹²⁴⁹ J. Kolendo, “L’activité des proconsuls d’Afrique d’après les inscriptions”, en *Epigrafia e ordine senatorio 1, Tituli 4*, Roma, 1982, pp. 351-367, esp. p. 366.

allá del siglo I d.C. y, en concreto, se concentran en los períodos augusteo y flavio, en los cuales, no por casualidad, se produjo una importante política de promoción cívica de las comunidades hispanas. Como veremos, salvo dos excepciones (tres si tomamos al senador de Panóias como gobernador), todas estas inscripciones están relacionadas con sus funciones oficiales, y de ellas se deduce que la obra fue supervisada o promovida directamente por el gobernador, bien siguiendo instrucciones del emperador, bien contando con su aquiescencia, aunque fuese sufragada con dinero de la comunidad o comunidades beneficiadas. En la presentación de los testimonios conservados seguiremos un orden cronológico, empezando por la intervención de los gobernadores en las obras públicas de ciudades concretas para luego pasar a aquéllas que tenían una incidencia más amplia, de tipo regional.

Intervención en las obras públicas de comunidades concretas:

En la Hispania Citerior tenemos constancia epigráfica de que bajo Augusto el gobernador Lucio Domicio Ahenobarbo¹²⁵⁰ se ocupó de la construcción de las murallas y la puerta del *municipium Ilunitanum* (Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete):

Imp(erator) Caesar Augustus [diui f(ilius) pont(ifex) max(imus) imp(erator) XIII trib(unicia)] / potestate XV c[o(n)s(ul) XI murum et portam / municipii Iluni]tani s(- - -) o(- - -) [- - - fecit / L(ucius) Domitius Ahe]nobarbu[s leg(atu)s pr(o) pr(aetore) prou(inciae) H(ispaniae) C(iterioris) f(aciendum) c(urauit)] / Ner[one Cla]udio Druso [et T(ito) Quinctio Crispino co(n)s(ulibus)]¹²⁵¹

Esta labor del gobernador en nombre del *princeps*, que es quien aparece como responsable último de esta construcción y, por ende, como único benefactor, está relacionada, sin duda, con la promoción de esta comunidad al estatuto de municipal¹²⁵². Como ha señalado P. Zanker, Augusto y Tiberio donaron los recursos económicos para la erección de murallas con puertas monumentales a numerosas ciudades, pues eran un

¹²⁵⁰ Habría gobernado la Hispania Citerior en 10-7 a.C. según Alföldy, “Fasti und Verwaltung...” cit. pp. 339-341.

¹²⁵¹ *HEp* 5, 1995, 8 y 6, 1996, 14. Anexo II: nº 23.

¹²⁵² L. Abad, “La epigrafía de Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) y un nuevo municipio romano del conventus Carthaginiensis”, *AEspA* 69, 1996, pp. 77-108; Abascal, “Los tres viajes...” cit. p. 74, que data su promoción en la estancia de Augusto en Hispania en 15-13 a.C.

importante medio de representación del poderío de éstas, que, a su vez, recordaba el del propio imperio¹²⁵³. Esta intervención de los gobernadores en la construcción de murallas cuenta con precedentes tardo-republicanos: una inscripción fragmentaria de *Carthago Noua* ha sido interpretada como un indicio de la intervención del legado de Pompeyo Marco Calpurnio Bíbulo en la reforma de las murallas de la ciudad alrededor del 51 a.C., en el contexto de su promoción al estatuto de colonia, que habría propiciado su desarrollo urbanístico¹²⁵⁴. Otros paralelos se hallan en África y en Sicilia, donde sendos *legati pro praetore* participaron en la fortificación de las ciudades de Curubis y Lilibeo respectivamente¹²⁵⁵. Además, nos proporciona un indicio de que la norma recordada por Marco Aurelio en un rescripto de que la erección o modificación de las murallas de una ciudad debiese de contar con el permiso del emperador¹²⁵⁶, no fue sino la confirmación o sanción de una práctica establecida ya en tiempos de Augusto. Es muy probable, por tanto, que las obras de reconstrucción o reparación de las murallas de *Carthago Noua*, Sagunto, *Barcino* y *Pax Iulia* acaecidas en época augustea también hubiesen sido supervisadas por los gobernadores de la Citerior y, en el último caso, de la Lusitania¹²⁵⁷, sobre todo en el caso de *Pax Iulia*, ya que que fueron sufragadas por el propio Augusto, dentro del programa de desarrollo urbanístico de la colonia recién fundada. La erección de las murallas de *Barcino* corrió a cargo de uno de sus duoviros, pero también estuvo relacionada con la fundación de la colonia¹²⁵⁸, hecho que siempre se debía a una decisión imperial. Su deducción, como veremos en otro capítulo, era

¹²⁵³ P. Zanker, *Augusto y el poder de las imágenes*, Madrid, 2005, pp. 378-379.

¹²⁵⁴ Gracias a dos epígrafes pertenecientes a las bañeras de sendas fuentes públicas de tamaño medio, sabemos que Pompeyo promocionó un importante sistema de abastecimiento de agua en la sede conventual de *Carthago Noua* cuando Hispania se hallaba bajo su gobierno (en 55-52 a.C.). De hecho, la epigrafía pública conservada revela que a partir de la década del 70 a.C. los gobernadores de Hispania desarrollaron una importante actividad evergética y de patronazgo en comunidades que mantenían una relación más estrecha con Roma como *Carthago Noua*, *Tarraco* o *Emporiae*, con claro fines políticos personales. Cf. S. Ramallo – A. J. Murcia, “Aqua et lacus en Carthago Nova. Aportaciones al estudio del aprovisionamiento hídrico en época romana”, *ZPE* 172, 2010, pp. 249-258; B. Díaz Ariño, “Epigrafía y gobernadores provinciales en Hispania durante la República romana”, *Chiron* 41, 2011, pp. 149-179, esp. p. 169. Esto concuerda con la noticia que da Suetonio (*Diu. Iul.* 28) de que César sufragó algunos monumentos de las ciudades de las provincias en las que estuvo, entre ellas la Hispania Ulterior, con el fin de ganar el favor de sus élites: *superque Italiae Galliarumque et Hispaniarum, Asiae quoque et Graeciae potentissimas urbes praecipuis operibus exornans*.

¹²⁵⁵ Díaz Ariño, “Epigrafía y gobernadores...” cit. pp. 170-171.

¹²⁵⁶ *Dig.* L, 10, 6 (Mod. 11 *pand.*). *Vid. supra*.

¹²⁵⁷ *Carthago Noua*: *DECAR* pp. 77-81 y 86-113, n°3-11; Sagunto: *CIL* II²/14,361; *Barcino*: *IRC* IV, 57; *Pax Iulia*: Encarnação, “Inscrição monumental...” cit. n° 131.

¹²⁵⁸ *IRC* IV, 57.

supervisada por los gobernadores provinciales siguiendo instrucciones del emperador, máxime si eran legados suyos.

Iluni no era sede conventual, pero Ahenobarbo pudo haberse acercado en persona a esta ciudad para supervisar los trabajos cuando visitó la sede conventual a la que estaba adscrita, *Carthago Noua*. Recordemos que Estrabón señala que los gobernadores de la Citerior pasaban el invierno entre *Tarraco* y *Carthago Noua*, así que Ahenobarbo tuvo tiempo suficiente de visitar el municipio Ilunitano en persona.

En *Pollentia* un epígrafe del siglo I d.C. en estado muy fragmentario nos informa de la existencia de una construcción erigida en el foro de la colonia por iniciativa de un anónimo gobernador de la Citerior. Los restos arqueológicos no son claros, pero han sido interpretados como un templo¹²⁵⁹. De ser esto correcto, tendríamos otro ejemplo de intervención directa en el desarrollo edilicio de una comunidad promocionada por parte de un gobernador de la Hispania Citerior, que, tal y como indica la inscripción, se habría valido de uno de sus subordinados para dedicarlo, seguramente porque sus obligaciones en la península no le permitieron dirigir en persona las obras¹²⁶⁰. Se ignora a qué divinidad estaría dedicado.

Esta intervención edilicia del anónimo gobernador de la Citerior en *Pollentia* ha de relacionarse con la promoción de la ciudad llevada a cabo por el poder imperial, pues la historiografía coincide en atribuir a Augusto –o, como muy pronto, a Julio César– la concesión a *Pollentia* del estatuto de colonia romana. En efecto, Pomponio Mela menciona a *Palma* y *Pollentia* como *coloniae* y Plinio las llama *oppida ciuium Romanorum*¹²⁶¹, y las excavaciones arqueológicas han confirmado que la ciudad experimentó un importante desarrollo urbanístico a inicios del Principado¹²⁶². Estrabón dice que Metelo Baleárico fundó en 122 a.C. las ‘*póleis*’ de *Palma* y *Pollentia* con tres

¹²⁵⁹ Al sureste del Capitolio. Según N. A. Doenges, *Pollentia. A Roman Colony on the Island of Mallorca*, Oxford, 2005, pp. 16-17 no es segura la identificación de esta estructura con un templo. Él la interpreta como la base de un monumento ecuestre. Anexo II: nº 31.

¹²⁶⁰ *HEp* 2, 62: [---] *Aug(usti) leg(atus) pro pr(aetore) f(aciendum) c(urauit) / [---p?]ro leg(ato). dedicauit*. Véase lo dicho respecto al subordinado del gobernador en el Capítulo 2 de la Primera Parte. Otro ejemplo de la necesidad que tenían a veces los gobernadores de delegar en un subordinado la supervisión diaria de la construcción de algún templo vinculado con el poder imperial lo tenemos en Tac. *Ann.* IV, 56: el Senado decidió conceder un legado a mayores al procónsul de Asia del 26 d.C. Manio Emilio Lépido para que lo descargase de la supervisión cotidiana del templo que las ciudades de la provincia habían decidido dedicar a Tiberio, Livia y el Senado.

¹²⁶¹ Mela II, 24; Plin. *N.H.* III, 80.

¹²⁶² Doenges, *Pollentia*... cit.

mil ‘*romaioi*’ procedentes de Iberia, pero, ante la imposibilidad de que en esa época hubiese podido disponer de tal número de ciudadanos romanos de Hispania, sus ‘*romaioi*’ han sido interpretados como un contingente mixto de itálicos que podrían haber formado parte del ejército de Metelo en su campaña contra los piratas. Las evidencias arqueológicas revelan, sin embargo, que este primer asentamiento no habría tenido un verdadero desarrollo cívico y urbanístico hasta los años setenta del siglo I a.C., cuando –según se ha hipotetizado– Metelo Pío habría asentado un importante número de veteranos de sus legiones en *Palma* y *Pollentia* una vez concluido el *Bellum Sertorianum*¹²⁶³. Finalmente, Augusto les habría concedido el estatuto de *coloniae ciuium Romanorum*, hecho que habría provocado un desarrollo urbanístico acorde con el nuevo título. Nuestro anónimo gobernador, por tanto, habría contribuido a la monumentalización de la ciudad en connivencia con el emperador y, quizá, siguiendo sus instrucciones.

En Lusitania contamos con una escueta inscripción de un entablamento que recuerda la dedicación de un templo en su capital, *Augusta Emerita*, por parte de la esposa de un senador que pudo haber gobernado la provincia. Dice lo siguiente:

*Marti sacrum / Vettilla Paculi*¹²⁶⁴

Gracias a una inscripción de Vercelli, la dedicante de este templo de Marte ha sido identificada con Domicia Vetila, esposa del senador Lucio Roscio Eliano Paculo¹²⁶⁵. Ahora bien, la identificación de este último personaje dentro de la *gens Roscia* no está clara. En su momento L. García Iglesias, tras barajar las posibles opciones prosopográficas, se inclinó –no sin reservas– por identificarlo con el cuestor de Adriano que fue honrado por el *concilium* provincial de la Lusitania¹²⁶⁶. Sin embargo, la datación de unos diplomas militares descubiertos *a posteriori* ha revelado

¹²⁶³ Cf. R. C. Knapp, *Aspects of the Roman Experience in Iberia, 206-100 BC*, Valladolid, 1977, p. 138; H. Mattingly, “Roman Pollentia: Coinage and History”, en A. Arribas (ed.), *Pollentia. Estudio de los materiales I*, Palma, 1982, pp. 243-301, esp. p.246; Doenges, *Pollentia...* cit. pp. 1-3.

¹²⁶⁴ *CIL* II, 468. Anexo II: n° 40.

¹²⁶⁵ Inscripción de Vercelli: *CIL* V, 6657: *Domitiae Patruini f(iliae) / Vettillae / L(ucii) Roscii Paculi / co(n)s(ulis) design(ati) / seuiri August(alis). / Socii / cultores Domus / Diuina*.

¹²⁶⁶ L. García Iglesias, “Aportación prosopográfica: los Roscios hispanos”, *Hispania Antiqua* 7, 1977, pp. 91-98, esp. pp. 94-95, quien, tras barajar varias posibilidades, se inclinó por identificar a este *Paculus* con el cuestor de Adriano honrado por el *concilium* de Lusitania (*ERA* 97 = *EE* VIII, 302). Seguido por Panzram, *Stadtbild...* cit. p. 272.

que un Lucio Roscio Eliano Paculo fue cónsul sufecto bajo Antonino Pío, entre los años 155-159¹²⁶⁷. Este cónsul formaría parte de la cuarta generación senatorial de la “rama A” de la *gens Roscia* y sería el esposo de la Domicia Vetila honrada en Vercelli –en vez del cuestor de Adriano, su padre¹²⁶⁸. Esta hipótesis nos parece la más verosímil, dado que coincide con la datación dada al templo por M^a. P. León a partir del análisis de sus relieves¹²⁶⁹. M. González Herrera entiende que la teoría tradicional que identificaba al mardio de Vetila como gobernador de la Lusitania¹²⁷⁰ es improbable, pues, a su parecer, “el formulario utilizado en su consagración [*sc.* del templo] resulta impropio de un acto oficial en el que interviene un gobernador provincial”¹²⁷¹. Empero, discrepamos con esta autora, pues en este caso no se trata de un templo consagrado dentro de las funciones oficiales del gobernador y en nombre del emperador, sino a título particular, y, por tanto, la fórmula utilizada no resulta extraña, a pesar de ser muy escueta. Y, por tanto, sigue siendo factible la hipótesis de que Lucio Roscio Eliano Paculo fuese gobernador de la Lusitania, incluso si su familia residiese en la provincia¹²⁷².

A diferencia del templo de *Pollentia*, el de Marte de *Emerita* no está relacionado con la política imperial de promoción cívica, sino con la actividad munificente del gobernador. A pesar de la legislación cada vez más restrictiva a este respecto que se desarrolló en los siglos II y III d.C. es evidente que los emperadores no fueron capaces de controlar los vínculos establecidos entre los gobernadores y las comunidades provinciales –que podían derivar en el establecimiento de un patronato–. En nuestra opinión, la dedicación del templo de Marte no fue sólo inicitativa de Vetila, sino también de su esposo el gobernador: la mención secundaria de éste (con su *cognomen*

¹²⁶⁷ AE 1998, 1617 y 1627 (procedencia desconocida). Cf. N. Schindel, “Zwei neue Militärdiplome aus der Provinz Moesia superior”, *Tyche* pp.221-227; M. M. Roxan – P. Weiss, “Die Auxiliartruppen der Provinz Thracia. Neue Militärdiplomen der Antoninenzeit”, *Chiron* 28, 1998, pp. 409-420. Estos cónsules serían los mismos de la inscripción de Vettona (*CIL* XI, 5178).

¹²⁶⁸ Roxan – Weiss, *Die Auxiliartruppen...* cit. pp. 412-413, seguidos por M. González Herrero, “Origen familiar y procedencia: El ejemplo de la ‘rama A’ de la familia Roscia”, en *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae* (Barcelona, 3-8 septembris 2002), Barcelona, 2007, pp. 621-627, esp. pp.626- 627.

¹²⁶⁹ M^a. P. León Alonso, “Los relieves del templo de Marte de Mérida”, *Habis* 1, 1970, pp. 181-197, esp. p. 188.

¹²⁷⁰ Aún vigente: J. Andreu Pintado, “Munificencia y munificentes. Riqueza y manifestaciones de riqueza de las élites en la provincia Lusitania” en Gorges – Rodríguez-Martín (ed.) *Économie et territoire...* cit. pp. 453-471, esp. p. 456.

¹²⁷¹ González Herrera, “Origen familiar...” cit. p. 625.

¹²⁷² Véase el caso del senador P. Cornelio Anulino, natural de *Iliberri*, que fue procónsul de la Bética en 170/171 d.C. (*CIL* II²/5, 623).

en genitivo acompañando el de su esposa) era una forma de escapar a la antedicha prohibición de que los gobernadores dedicasen construcciones.

Con todo, la dedicación de templos por parte de los gobernadores no era rara y está bien atestiguada en África Proconsular en los siglos I y II. Así, sabemos que en *Lepcis Magna* Cayo Rubelio Blando dedicó un templo a Ceres en la cavea de teatro en 35/36 d.C., Barea Sorano de otro a los *Dii Augusti* en el pórtico situado detrás de la escena del teatro poco después (41/43) y Quinto Manlio Ancario Tarquitio Saturnino dedicó uno a *Magna Mater* en 71/72; en *Gigithi*, Quinto Voconio Saxa Fido dedicó un *aedes Apollinis* en 161/162, en *Sabratha* Marco Acilio Glabrio Cneo Cornelio Severo en 164/168 intervino en la construcción templo dedicado a los Antoninos, dentro de sus competencias en el fomento y mantenimiento del culto imperial provincial, y en 168/169 en *Thuburbo Maius* Lucio Octavio Cornelio Publio Salvio Juliano Emiliano (famoso jurisconsulto) dedicó el Capitolio *por salute imperatoris* (Marco Aurelio)¹²⁷³. *Lepcis Magna* y *Sabratha* fueron ciudades especialmente beneficiadas por el poder romano, dado que, como vimos, funcionaron como sedes conventuales visitadas anualmente por los procónsules de África en su desempeño de sus competencias jurisdiccionales.

En la Hispania Citerior, además, contamos con el caso de un santuario dedicado por un hombre de rango senatorial: alrededor de finales del siglo II e inicios del III, un tal Calpurnio Rufino, que quizá pudo haber sido gobernador de la provincia¹²⁷⁴, se encargó de establecer y consagrar, a título personal, un santuario rupestre con las instalaciones necesarias para la realización del culto a Serapis en la actual localidad portuguesa de Panóias (Vila Real, Portugal)¹²⁷⁵. En dos de las cinco inscripciones (una de ellas perdida) realizadas sobre la roca del santuario –que están diseminadas a lo largo del circuito que el iniciado en estos misterios infernales debía realizar siguiendo las instrucciones inscritas, con los sacrificios preceptivos en determinadas cavidades en la roca– Rufino dejó constancia de que había erigido un *aedes* dedicado a los *dii seueri*:

¹²⁷³ *IRT* 269, 273, 300; *CIL* VIII, 22691; *IRT* 21; *ILTun* 699. Cf. Kolendo, “L’activité...” cit. pp. 354-355.

¹²⁷⁴ El hecho de no cite su cargo oficial se debería a que se trataba de una dedicación ajena a sus funciones oficiales.

¹²⁷⁵ *HEp* 6, 1996, 1080-1084. Cf. Alföldy, “Inscripciones, sacrificios y misterios: el santuario rupestre de Panóias/Portugal (Informe preliminar)” *Madriider Mitteilugen* 36, 1995, pp. 252-258 y “Die Mysterien von Panóias (Vila Real, Portugal)” *Madriider Mitteilungen* 38, 1997, pp. 176-246.

*Diis seue[r]is in hoc / templo lo[ca]t[i]s / aedem G(aius) [C(---) C]alp(urnius) Ru/finus
u(ir) [c(larissimus)]*¹²⁷⁶

La inscripción del templo de Marte de *Augusta Emerita* y esta de Panóias son los únicos testimonios hispanos de “construcciones” dedicadas por gobernadores fuera de su esfera oficial de competencias. Al margen del consabido componente azaroso del registro epigráfico, el hecho de que una provincia como el África Proconsular –en la que tantas menciones tenemos de los procónsules en las construcciones públicas– también muestre una escasez de las dedicaciones a título privado revela, como ha visto Le Bohec, que los gobernadores se ocupaban relativamente poco de la dedicación de monumentos cuando no estaban directamente ligados a sus funciones oficiales, políticas o religiosas¹²⁷⁷. Parece, además, que las pocas excepciones solían estar vinculadas al ámbito religioso.

El siguiente indicio de la intervención de los gobernadores en el ámbito edilicio en el que hemos de detenernos pertenece a la Bética, en donde se halló un conjunto de *tegulae* procedentes de diversos lugares –en los yacimientos de las antiguas *Carteia*, *Itálica*, *Hasta Regia*, *Ilipa* y *Siarum*– que mencionan a un *M(arcus) Petrucidius M(arci) f(ilius) leg(atus) pr(o) pr(aetore)*. Se han relacionado con la labor de este individuo, identificado como un legado de Augusto que se habría ocupado de la misión de embellecer las ciudades de esta provincia que habían sido favorecidas por César o su hijo adoptivo tras las guerras civiles. Los individuos mencionados en las *tegulae* en genitivo –Marco Licinio en *Carteia*, *Alexandrus* en *Itálica* o Cneo Traquinio en *Siarum*– serían los *tegularii* o los *conductores operarum* que colaboraron con el legado en cada una de estas ciudades. J. González ha propuesto que este legado de Augusto habría actuado en la Bética en torno al 15/13 a.C., en el contexto de la estancia en Hispania del *princeps*, en la que, además de confirmar su reorganización administrativa provincial, parece que habría decidido promocionar a algunas de sus ciudades¹²⁷⁸. Petrucidio, por

¹²⁷⁶ *HEp* 6, 1996, 1081. Anexo II: n° 29.

¹²⁷⁷ Le Bohec, “Les activités des proconsuls...” cit. p. 244.

¹²⁷⁸ J. González, “*M. Petrucidius M. f. legatus pro pr*”, en *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma, 2008, pp. 340-346, donde hace un repaso a la bibliografía sobre estas piezas. Véase también: *HEp*. 15, 2006, n° 144-151. Sobre la promoción jurídica de ciudades realizada por Augusto durante este viaje: Abascal, “Los tres viajes...” cit. Anexo II: n° 53, 56, 58, 64 y 70.

tanto, pudo haber sido el último legado imperial que gobernó la Bética¹²⁷⁹, que pasó a ser una provincia proconsular tras este viaje. Con todo, en nuestra opinión no se puede descartar que Petrucidio desarrollase su cometido un poco más tarde y, por tanto, fuese el legado de uno de los primeros procónsules de la Bética.

Sabemos también que los gobernadores se encargaban de la conservación de su propia residencia en la capital provincial, el *praetorium*. Gracias a una inscripción votiva hallada en Colonia, sabemos que el gobernador de la Germania Inferior Quinto Tarquitio Catulo reconstruyó la arruinada fachada de su pretorio y dedicó este altar a los dioses conservadores en cumplimiento del voto que había hecho por haber salvado con éxito el edificio de un derrumbe o ruina completa¹²⁸⁰. El pretorio era un lugar de gran relevancia simbólica, pues era uno de los centros de la administración imperial en la provincia en el que el gobernador solía recibir a los individuos o particulares que deseaban presentar alguna petición. De hecho, ya desde finales de la República un buen gobernador era aquel que era accesible a los provinciales sin dejar de mantener la distancia que convenía a su dignidad¹²⁸¹. Los gobernadores fueron tan conscientes de la relevancia de su residencia que hasta realizaron votos al Genio del pretorio, como el *legatus Augusti pro praetore* de la Hispania Citerior Tito Flavio Titiano¹²⁸², que parece haberse distinguido por su buena gestión de la provincia¹²⁸³. Dado que era su residencia, los gastos de manutención del pretorio serían sufragados con parte del presupuesto que el poder central asignaba a los gobernadores.

Hasta aquí lo que la epigrafía de las ciudades hispanas nos ha transmitido de forma explícita sobre la intervención de los gobernadores en sus obras públicas. Sin embargo, ésta puede deducirse en otros casos, concretamente en las construcciones donadas por los emperadores a las ciudades y en aquellas cuya realización requiriese de

¹²⁷⁹ C. Castillo, *Prosopographia Baetica*, Pamplona, 1965, p. 216, ya lo contó entre los gobernadores de la Ulterior en época augustea.

¹²⁸⁰ *CIL* XIII, 8170: *Dis Conser/uatorib(us) Q(uintus) Tar/quitius Catul/us leg(atus) Aug(usti) cuiu[s] /5 cura praeto[r]/ium in ruina[m co]/nlapsum ad [no]/uam faciem [est] / restitut[um]*

¹²⁸¹ Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 25 y 1, 16.

¹²⁸² *RIT* 34: *I(oui) O(ptimo) M(aximo) / Iunoni / Mineruae / Genio praetorii / consularis / Diis Penatibus / T(itus) Fl(auius) Titianus / leg(atus) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) / Postumia S[i]ria (?) / eius / dicauerunt*. Titiano gobernó la Hispania Citerior en 199-202 ó 205-208, según Alföldy, *Fasti Hispanienses* p. 45. Anexo II: nº 7.

¹²⁸³ Recuérdese que los miembros de su *officium* le dedicaron una estatua en Tarraco: *CIL* II²/14, 979 = *RIT* 135. Vid. Capítulo 5 de la Primera Parte.

técnicos que sólo podían hallarse en los cuadros de personal del ejército romano, por ejemplo en los puentes monumentales y los acueductos.

Durante el Principado, de Augusto a Heliogábalo, se puede afirmar con seguridad que los emperadores financiaron al menos ocho proyectos constructivos en las ciudades de Hispania. Fueron los siguientes: Augusto pagó la construcción del anfiteatro de *Augusta Emerita*¹²⁸⁴ y la erección de las murallas de *Pax Iulia* (de las que ya hemos hablado)¹²⁸⁵, en la Lusitania, y también hemos de mencionar como parte de la política augustea la donación del teatro de *Emerita* por parte de Agripa¹²⁸⁶; Claudio ayudó a un particular de *Castulo*, en la Citerior, a costear la construcción de un edificio público que no ha podido ser identificado¹²⁸⁷; Domiciano donó a *Corduba* un acueducto nuevo, según se deduce de la inclusión del nombre del emperador en su denominación, *Aqua Nova Domitiana Augusta*¹²⁸⁸; y Adriano costeó la restauración del templo de Augusto de *Tarraco*¹²⁸⁹ y, sobre todo, diseñó y sufragó el inicio de los trabajos de la *Nova Vrbs* de Itálica, patria de su familia, probablemente en el contexto del viaje que hizo por Hispania en 122-123 d.C.¹²⁹⁰. Finalmente, según la complicada reconstrucción de un epígrafe en estado sumamente fragmentario Elagábal habría sumido la restauración del anfiteatro de *Tarraco*¹²⁹¹.

¹²⁸⁴ CIIAE 9-11, tres inscripciones pertenecientes a la tribuna occidental, la oriental y el vomitorio norte, respectivamente. Se hallan en estado muy fragmentario, han de ser restituidas siguiendo a Mérida: *Imp(erator) Caesar Divi f(ilius) Augustus pontif(ex) maxim(us) co(n)s(ul) XI imp(erator) XIII tribunicia potestate XVI* (reconstrucción de Mérida). Las obras se produjeron en el 8 a.C.

¹²⁸⁵ J. d'Encarnação, "Inscrição monumental de Pax Iulia", *Ficheiro Epigráfico* 29, 1988, nº131: *[Imp(erator) Caesar Divi f(ilius) Aug(ustus) pater p(atriciae) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) p]otes(tate) XXI coloni[ae Pac(is)] Iul(iae) / [muros] turres e[st] p[ortas] [- - -]* La dedicación tuvo lugar el 2 a.C.

¹²⁸⁶ CIIAE 2-8, inscripciones halladas en el párodo oeste (nº 2) y este (nº 3) que dan acceso a la *orchestra*, al *aditus maximus orchestram uersus* (nº4) y las restantes aparecidas en excavaciones del teatro llevadas a cabo por Mérida. El nº 2 está completo: *M(arcus) Agrippa L(uci) f(ilius) co(n)s(ul) III trib(unicia) pot(estate) III*. Fecha: 16 a.C.

¹²⁸⁷ CIL II, 3269a = ILS 5513; *Ti(berius) Claudius Ca[esar] Aug(ustus) [Germanicus p(ater) p(atriciae) et / P(ublius) Cornelius P(ubli) f(ilius) Gal(eria)] Taurus et V[aleria P(ubli) f(ilia) Verecunda uxor d(e) s(ua) p(ecunia) f(ecerunt) / P(ublius) Cornelius P(ubli) f(ilius) Gal(eria) Taurus f(ilius) ludis impensa sua factis dedicauit]*

¹²⁸⁸ A. U. Stylow, "Apuntes sobre epigrafía de época flavia en Hispania", *Gerión* 4, 1986, pp. 285-311, esp. pp. 285-289; J. Andreu Pintado, "Un capítulo de los gastos en construcción pública en época de Domiciano en las *prouvinciae*. La iniciativa imperial", *DHA* 34/2, 2008, pp. 115-143, esp. pp. 119-120, quien señala que Domiciano aparece especializado en su promoción de obras viarias e hidráulicas (p. 119)

¹²⁸⁹ SHA Hadr. 12, 3.

¹²⁹⁰ Melchor, *Mecenazgo cívico*... cit. p. 89.

¹²⁹¹ CIL II²/14, 921: *[[Imp(erator)] C[aes(ar)]] Diu(i) M[ag]ni [An]to[ni]ni [[f(ilius)]] Diui Seve[r]i [[n]e[p]os [M]a[r]cu[s] A[u]re[l]iu[s] Ant[on]inu[s] [Pi]u[s] Fe[lix] A[u]gu[s]t[us] p[ro]nt[ifex] m[a]x[im]us]] sacer[d]o[s] a[mp]lis[sim]us]] // [[D[ei] I[n]uicti So[llis] Elagab[a]li [t]r[i]b(unicia) [p]o[te]st[ate] IIII c[on]s[ul] III de[s]ignatus IIII p[ater] p[atriae] p[ro]co[n]s[ul]]] [a]m[phit]h[eatru]m [cum] p[or]t[i]s p[ul]pit[o]] g[radib]us [p]o[dio arena restitu]i[t].*

A esto hay que añadir dos hipótesis en torno al teatro de *Emerita*. Por un lado, P. Fernández Uriel ha propuesto que la ornamentación de este edificio –que, como hemos dicho, fue donado por Agripa y luego mejorado por otros miembros de la dinastía Julio-Claudia en diferentes momentos– fue terminada en época de Nerón y, en concreto, bajo la supervisión de Otón, quien compartía el interés por la política de los espectáculos de Nerón. Fernández Uriel también sitúa en su gobierno provincial la finalización de las obras del circo de la capital de la Lusitania¹²⁹².

Por otro lado, también se planteó hace tiempo que Trajano y luego Adriano se hubiesen encargado de reconstruir parte del teatro de *Emerita*. Una serie de fragmentos epigráficos fueron combinados por E. Hübner del tal modo que, en su reconstrucción, hacían referencia a una reparación del *proscenium* y de una parte del graderío (el *cuneus*) de este teatro ordenada por Adriano¹²⁹³. Sin embargo, L. García Iglesias mostró la debilidad de esta lectura, ya que algunos de los fragmentos usados por Hübner eran de mármol y otros de granito, y señaló que no podía afirmarse con seguridad que todos ellos procedieran del entorno del teatro¹²⁹⁴. Según J. L. Ramírez Sádaba, estos fragmentos probablemente formaban parte de cuatro inscripciones distintas.

El poder imperial se preocupaba del bienestar de todas las ciudades del Imperio, pero vemos que de las antedichas ocho obras donadas con seguridad por los emperadores en Hispania que conocemos, seis se produjeron en sus capitales provinciales y las tres restantes en dos colonias, *Pax Iulia* (recién fundada y designada sede conventual, detalle no banal) e Itálica (en la misma época en que fue promocionada a ese estatuto), y una comunidad que gozaba del *Latium uetus*, *Castulo*, importante centro minero¹²⁹⁵. Estas evidencias indican que en Hispania los emperadores se mostraron inclinados a premiar a las ciudades privilegiadas, particularmente a las que jugaban un importante papel administrativo y aquellas que fueron fundadas o promocionadas por ellos –como en el caso de Augusto y Agripa con la colonia de

¹²⁹² P. Fernández Uriel, “El Culto Imperial en la ideología neroniana y su reflejo en Lusitania”, en Nogales – González (ed.) *Culto Imperial...* cit. pp. 597-611, esp. pp. 606-608. Gobierno de Otón en Lusitania: 58-68 d.C.

¹²⁹³ *CIL* II, 478: *Imp(erator) [Caesar Diui Traiani Parth(ici) f(ilius) Diui Neruae n(epos)] / Traia[nus] Hadrianus Aug[ust]us / pont[if(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate)] XVIII [imp(erator) i]teru[m / co(n)s(ul) I]II p(ater) p(atriciae) o[ptimus] princ[eps] / cuneu[m et p]ros[caenium theatri in]cendio / [consumpta restituit editisque ludis scaenicis et] circen[sibus d(ecreto d(ecurionum)]*

¹²⁹⁴ L. García Iglesias, “La hipotética inscripción del teatro de Mérida reconstruida por Hübner”, *Revista de Estudios Extremeños* 31/3, 1975, pp. 591-601.

¹²⁹⁵ Plin. *N.H.* III, 25.

Emerita Augusta— o con las cuales tenían una relación personal, afectiva o familiar — como Adriano con Itálica. Esta conducta imperial parece haber sido común en todo el Imperio, y así, por ejemplo, Septimio Severo monumentalizó y promocionó también su ciudad natal, *Lepcis Magna*.

Aunque no ha quedado rastro de sus nombres en las inscripciones antedichas, es muy probable que los gobernadores provinciales interviniesen de algún modo en estos casos de evergetismo imperial en Hispania¹²⁹⁶, siguiendo instrucciones del emperador y dentro de su esfera de competencias (véase *supra* el pasaje de Ulpiano). Resulta natural que el gobernador velase para que el proyecto financiado con dinero imperial fuese llevado a término cumpliendo con el presupuesto y la calidad previstos. Sabemos que una de los edificios a las que prestó atención Plinio el Joven fue, precisamente, un gimnasio que el poder imperial había donado a la ciudad de Claudiópolis y que se había alzado sobre un terreno inapropiado. Algunas donaciones imperiales también podían producirse por sugerencia de los gobernadores, que conocían de cerca las necesidades locales y podían proponer al emperador proyectos que juzgasen necesarios o beneficiosos para las comunidades locales. Así, por ejemplo, Plinio el Joven planteó a Trajano la posibilidad de que costeara la apertura de un canal que uniese un lago cercano a Nicomedia con el mar, con el fin de favorecer sus comunicaciones y potenciar la vocación comercial de la ciudad, retomando un viejo proyecto de los antiguos reyes de Bitinia.

En el día a día, serían los magistrados locales quienes vigilarían la evolución de las obras, pero no cabe duda de que habrían de dar cuenta al gobernador periódicamente. En las capitales provinciales, éste prestaría más atención aún a la ejecución de las obras, dado que allí se hallaba su residencia oficial. En el caso particular de *Emerita Augusta*, no cabe duda de que los primeros gobernadores de la Lusitania supervisaron con especial cuidado su desarrollo urbanístico y la construcción del teatro y el anfiteatro donados por Agripa, patrono de la colonia, y Augusto. Estos dos edificios se construyeron poco después de su fundación (el teatro en el 16 a.C. y el anfiteatro en el 8 a.C.) con el objeto de monumentalizar a la capital provincial, realizando su centralidad política y su relación privilegiada con el poder central, y en ese momento sus primeros magistrados habrían necesitado más del consejo y el apoyo de

¹²⁹⁶ La única excepción sería el ejemplo de *Castulo*, en el que el emperador se limitó a ayudar económicamente a un évérgeta local a construir un edificio.

los gobernadores. Al igual que Plinio con el teatro de Nicea, éstos se preocuparían de que los costes de ambos edificios no se disparasen y de que su construcción fuese óptima¹²⁹⁷.

En cuanto a los acueductos, éstos eran una infraestructura fundamental para una ciudad, pues garantizaban el abastecimiento hídrico y su salubridad y, por ello, fueron uno de los elementos fundamentales y característicos del desarrollo urbanístico provincial¹²⁹⁸. Asimismo, los capítulos 79 y 100 de la *lex Vrsonensis* muestran el grado de control que las autoridades de la colonia tenían sobre el aprovechamiento de las aguas públicas¹²⁹⁹. En Hispania se conservan notables ejemplos de acueductos: Además de los más conocidos –los acueductos de Mérida (Cornalvo, San Lázaro y el de los Milagros, aún monumental), en la Lusitania, y el de Segovia, en la Citerior– contamos con restos de los que abastecían a las capitales de la Citerior y la Bética, *Tarraco* y *Corduba*. Cada una presenta restos de varios acueductos: en *Tarraco* sobresale el acueducto de les Ferreres, que atraviesa un barranco cerca de la ciudad. *Corduba* contó con tres acueductos – el *Aqua Vetus*, el *Aqua Noua Domitiana* y un tercero anónimo– que funcionaron durante el Alto Imperio¹³⁰⁰. Asimismo, tenemos restos de acueductos en las siguientes ciudades antiguas o localizaciones actuales: en la Hispania Citerior, *Barcino* (dos, o dos ramales de uno), *Caesaraugusta*, *Segobriga*, *Calagurris*, *Uxama*, *Toletum*, Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza, del que sobreviven sus pilares), Tiermes (Soria), Chelva (Valencia), Albarracín-Cella (Teruel); en la Bética, Itálica, *Gades*, *Baelo Claudia* (tres), Almuñécar¹³⁰¹. También hemos de mencionar los restos del acueducto que abastecía a la sede conventual de *Lucus Augusti*, trayendo agua de un altiplano a 1500 metros al noroeste de la ciudad hasta el centro, donde se ha identificado

¹²⁹⁷ Ep. X, 39-40. A Plinio le preocupaba gastar más dinero pues ‘*ne dum seruire uolumus quod impensum est, male impendamus quod addendum est*’ (39, 6).

¹²⁹⁸ J. F. Rodríguez Neila, “*Aqua publica* y política municipal romana”, *Gerión* 6, 1988, pp. 223-252; A. Rogers, *Water and Roman Urbanism. Towns, Waterscapes, Land Transformation and Experience in Roman Britain*, Leiden/Boston, 2013, esp. pp. 1-26 y 217-229.

¹²⁹⁹ Crawford, *Roman Statutes* I, cit. p.

¹³⁰⁰ A. Ventura, *El abastecimiento de aguas a la Córdoba romana II: acueductos, ciclo de distribución y urbanismo*, Córdoba, 1996; Vaquerizo – Murillo – Garriguet, “Novedades de arqueología en *Corduba*...” cit. p. 27.

¹³⁰¹ Un estudio pormenorizado en C. Rubio Bardón, *Acueductos romanos de Hispania*, Madrid, 2008, tesis doctoral on-line, pp. 179-392; <http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=tesisuned:GeoHis-Crubio> (consultado el 05/12/2014).

su *castellum aquae*. Este acueducto fue respetado cuando se levantó la muralla en la segunda mitad del siglo III, lo que muestra la relevancia que tenía para la ciudad¹³⁰².

Como muestra el *Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano*, la construcción de un acueducto, tanto si corría a cargo de los fondos públicos de una comunidad como de un particular, debía ser autorizada por sus decuriones (con un quórum de dos tercios en la curia). La inversión era cuantiosa y era necesario asegurar que no se cometerían excesos presupuestarios con dinero público o bien que, cuando dependía de un particular, éste cumpliera con lo prometido sin perjuicio de la comunidad¹³⁰³. En el primer caso, las obras eran supervisadas por los magistrados locales¹³⁰⁴. También contamos en Hispania con casos de duoviros que costearon a sus expensas la construcción de un acueducto¹³⁰⁵.

En ninguno de los acueductos conservados ha quedado constancia epigráfica de la intervención en su construcción de los gobernadores de sus correspondientes provincias, pero es muy probable que, al menos en aquellos casos más sobresalientes – Segovia y Los Bañales –, así como en los que abastecerían a las capitales provinciales (aunque no hayan dejado huella arqueológica), el gobernador hubiese intervenido controlando el buen proceder de las obras al igual que Plinio el Joven lo hizo sistemáticamente en Bitinia. Concretamente, sabemos que supervisó la construcción de los acueductos de Nicomedia¹³⁰⁶ y Sinope¹³⁰⁷. El de la primera fue especialmente problemático y nos muestra la forma en que podía intervenir un gobernador provincial. La ciudad había intentado construir un acueducto, pero, tras dos obras fallidas en las que se habían gastado ingentes cantidades de dinero público, el asunto requirió la intervención de Plinio. Éste inspeccionó en persona un manantial adecuado y pensaba reaprovechar los sillares de los acueductos abandonados y utilizar ladrillo en la medida que se pudiesen abaratar costes. Asimismo, solicitó a Trajano un *aquilex* (experto en la búsqueda de fuentes acuíferas) o un *architectus* para evitar otra obra deficiente y para

¹³⁰² F. Arias Vilas, “*Lucus Augusti* e o seu contorno. Das orixes á implantación do reino suevo”, en F. Arias Vilas– X. L. Novo Cazón – C. Burgo López – M^a. J. Souto Blanco, *Historia de Lugo*, A Coruña, 2001, pp. 11-70, esp. p. 25, y *A romanización de Galicia*, Vigo, 1992, p. 26.

¹³⁰³ Tenemos ejemplos de acueductos o traídas de agua de cierta entidad sufragados por particulares en *Igabrum* (Cabra, Córdoba, *CIL* II²/5, 316), *Ebusus* (*CIL* II, 3663 = *IBal* 56), *Valentia* (*CIL* II²/14, 33), *Barcino* (*IRC* IV, 30).

¹³⁰⁴ Venafro: *CIL* X, 4842. Supervisión de la construcción de un acueducto por parte de duoviros: *CIL* II, 3541 (Archena, Murcia). Cf. Rodríguez Neila, “*Aqua publica...*” cit. p. 226.

¹³⁰⁵ *Aurgi* (Jaén, *CIL* II²/5, 30), *Mellaria* (Fuente Obejuna, Córdoba, *CIL* II²/7, 798).

¹³⁰⁶ Plin. *Ep.* X, 37-38.

¹³⁰⁷ X, 90-91.

asegurar su utilidad y su belleza como imagen del poder romano que será el acueducto: “*Ego illud unum affirmo, et utilitatem operis et pulchritudinem saeculo tuo esse dignissimam*”¹³⁰⁸. Trajano ve necesario el acueducto, pero también le recalca a Plinio que su deber consiste, asimismo, en ver a dónde ha ido el dinero invertido¹³⁰⁹. Plinio se preocupa por hallar una fuente adecuada y piensa en cómo abaratar costes reaprovechando materiales, sin duda asesorado por miembros de su *officium* que eran expertos en obra de esa índole.

Asimismo, el procónsul de África, Marco Antonio Zeno, dedicó, en 184-185 d.C., el acueducto que abastecía de agua a la ciudad de *Thugga*, cercana a la capital Cartago. Los costes del acueducto fueron asumidos por la ciudad, pero la mención epigráfica del gobernador indica que se encargó de supervisar las obras y de proporcionar personal técnico militar para su construcción:

*[Pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aurelii Commodi Antonini Aug(usti)] Pii
lSarm[atici Ger]manici Max[i]mi Britannici p(atris) p(atriciae) ciuitas Aurelia Thugga
[a]quam Com[modianam per l]oc(a) com[munal(ia) a m]illiarario septimo sua pecunia
induxit, lacum fecit [---] M(arcus) Antonius Zeno proc[o(n)s(ul) dedicauit]*¹³¹⁰

No cabe duda, además, de que los gobernadores se habrían encargado de supervisar los acueductos donados por el propio poder imperial, como el *Aqua Nova Domitiana* de *Corduba* o el de les Ferreres de *Tarraco*, al igual que hicieron sus homólogos de otras provincias. Por ejemplo, una inscripción de la Dacia recuerda que Adriano encomendó al gobernador de esa provincia Gneo Papirio Eliano la construcción de un acueducto que abasteciese de agua a la capital, la colonia de Sarmizegetusa; obras que el gobernador dirigió personalmente:

*Imp(eratori) Caes(ari) diui Traiani Parthici f(ilio) diui Neruae nep(oti) Traian(o)
Hadrian(o) Aug(usto) pont(ifici) máximo trib(unicia) potest(ate) XVI co(n)s(uli) III*

¹³⁰⁸ X, 37, 3.

¹³⁰⁹ X, 38.

¹³¹⁰ *CIL* VIII, 26500. Duncan-Jones, *Structure...* cit. p. 180; M. Corbier, “L’eau à Thugga, d’après les inscriptions”, en M. Khanoussi – L. Maurin (ed.), *Dougga (Thugga). Études épigraphiques*, Paris, 1997, pp. 47-50, esp. p. 49: *[Pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aurelii Commodi Antonini Aug(usti)] Pii Sarm[atici Ger]manici Max[i]mi Britannici p(atris) p(atriciae) ciuitas Aurelia Thugga [a]quam Com[modianam per l]oc(a) com[munal(ia) a m]illiarario séptimo sua pecunia induxit, llacum fecit [---] M(arcus) Antonius Zeno proc[o(n)s(ul) dedicauit]*.

*P(atri) P(atriae) aqua inducta colon(iae) Dacic(ae) Sarmiz(egetusae) per Cn(aeum)
Papirium Aelianum legat(tum) eius pr(o) pr(aetore).*¹³¹¹

Según ha mostrado S. Mitchell en su estudio de los ejemplos de las provincias orientales, la iniciativa y los costes de la construcción de los acueductos solían ser asumidos por el poder imperial y donados a las ciudades como parte de los actos evergéticos del emperador¹³¹². En Hispania, la mayor parte de los epígrafes que hacen alusión a acueductos nos informan de su dedicación por parte de miembros de las élites locales, tanto cuando desempeñaban una magistratura en su ciudad como cuando eran simples particulares¹³¹³. Sin embargo, como muestran los casos antedichos de Nicomedia y Sinope en Bitinia o de Thougga en África, el hecho de que los acueductos sean sufragados por una comunidad local o un particular no es óbice para que el gobernador de la provincia supervisase las obras o, incluso, aportase personal especializado cuando fuese especialmente compleja, sobre todo en los casos de acueductos que abasteciesen a comunidades promocionadas e impulsadas por el poder imperial. La construcción de acueductos podían requerir la intervención del gobernador, bien cuando se construía por vez primera o por iniciativa imperial, bien cuando fuese necesaria una reparación o reconstrucción derivada de su vetustez, de un desastre natural o de deficiencias constructivas que afectasen gravemente a su estructura¹³¹⁴, o bien porque los magistrados municipales hubiesen cometido negligencias en los gastos que conllevaban.

Según la restitución epigráfica propuesta por G. Alföldy, en ambos caras del acueducto de Segovia estaría inscrito lo siguiente:

*[Imp(eratoris) Neruae Traiani Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici) p(ontificis) m(aximi)
tr(ibunicia) p(otestate) II co(n)s(ulis) II patris patriae iussu / P(ublius) Mummius*

¹³¹¹ CIL III, 1446 = E. M. Smallwood, *Documents illustrating the Principates of Nerva, Trajan and Hadrian*, Cambridge, 1966, p. 132, n° 394.

¹³¹² S. Mitchell, "Imperial Building in the Eastern Roman Provinces", *HSCPh* 91, 1987, pp. 333-365, esp. pp. 352-354.

¹³¹³ *Vid. supra.*

¹³¹⁴ Frontin. *De aquaed.* 120: *Nascuntur opera ex his causis: aut impotentia possessorum quid corrumpitur aut uetustate aut ui tempestatum aut culpa male facti operis, quod saepius accidit in recentibus.*

*Mummianus et P(ublius) Fabius Taurus Iuiri munic(ipii) Fl(auii) Segouiensium / aquam restituerunt]*¹³¹⁵

Es decir, por orden del emperador Trajano los duoviros municipales de Segovia restauraron el acueducto. A nuestro juicio, es muy probable que el gobernador de la Hispania Citerior actuase como intermediario entre el poder central y este municipio, habiendo informado al emperador del estado inadecuado del acueducto, transmitiendo las órdenes pertinentes a los antedichos magistrados y proporcionándoles el personal especializado que les ayudara a restaurar la obra. Según Filóstrato, cuando Herodes Ático desempeñó el cargo de legado *ad corrigendum statum ciuitatum liberarum* en Asia, escribió a Adriano acerca de la necesidad de que proporcionase a la ciudad de Troya tres millones de dracmas para dotarla de un abastecimiento de agua suficiente. Adriano decidió que era pertinente y le concedió tomar ese dinero del tributo provincial¹³¹⁶. Aunque Herodes Ático no era el proconsul de Asia –por entonces lo era Antonino Pío–, sus funciones en la tutela de las ciudades libres, como ya se ha dicho, eran muy semejantes a las que éste, como gobernador, realizaba en todas las demás que estaban sometidas a su *imperium*¹³¹⁷.

Los gobernadores, además, podían decidir emplear algunos de los ingresos de una comunidad en beneficio de ésta, por ejemplo en trabajos de acondicionamiento urbano que fuesen necesarios o, incluso, en su monumentalización. Así sucedió, por ejemplo, en Judea, donde Poncio Pilato decidió emplear el tesoro del templo de Salomón para sufragar la construcción de un acueducto que abasteciese a Jerusalén, provocando con ello la ira de los judíos¹³¹⁸; o en *Lepcis Magna*, en la que dos inscripciones han dejado constancia de que el procónsul de África se encargó de la gestión de los trabajos de pavimentación de algunas de sus calles, cubriendo los gastos con los ingresos obtenidos de ciertos impuestos sobre tierras públicas que la ciudad había recuperado:

¹³¹⁵ G. Alföldy, *Die Bauinschriften des Aquäduktes von Segovia und des Amphitheatres von Tarraco*, Berlín, 1997 = *ERSg* 64. Véase también *HEp* 5, 1995, 687.

¹³¹⁶ *Phil. V.S.* II, 1, 548.

¹³¹⁷ Burton, “The Roman Imperial State...” cit. p. 337; Jacques, “*Ampliatio et mora...*” cit. pp. 160-161. *Vid. supra* Capítulo 1.

¹³¹⁸ *Flav. Jos. B.J.* II, 175.

C(aius) Rubellius Blandus q(uaestor) diui Aug(usti) tr(ibunus) pl(ebis) pr(aetor) co(n)s(ul) proco(n)s(ul) pont(ifex) patr[onus] / ex redivibus agrorum quos Le[pc]itanis resti[tui]t ui[a]s om[nis] / ciuitatis Lepcitanae ster[nend]as silic[e curauit] / M(arcus) Etr[i]liu[s] L]upercus leg(atu)s pro [p]r(aetore) patronus sub h[asta] f(aciendum) l(ocauit)]¹³¹⁹.

En el acueducto de Segovia el gobernador de la Citerior no dejó su huella epigráficamente –quizá porque por entonces ya existía la prohibición de que apareciesen nombrados en ninguna obra pública de su provincia–, pero, a nuestro juicio, su participación en las obras era necesaria y, probablemente, como Poncio Pilato o Cayo Rubelio Blando, su conocimiento de las finanzas del municipio de *Segouia* fue decisiva para inclinar a Trajano a decidir que los *segouienses* se hiciesen cargo del coste de la reparación del acueducto.

La conservación cotidiana de los acueductos dependía de las autoridades ciudadanas, así como la realización de reformas que no afectasen a su estructura. Según Frontino, el *curator aquarum de Roma*, contaba con el siguiente equipo de ayudantes: *uili*ci (intendentes), *castellarii* (encargados del *castellum aquae*), *circitores* (supervisores), *silicarii*, *tectores* y otros obreros¹³²⁰. Ninguno de ellos era un especialista altamente cualificado; se trata de vigilantes, supervisores y de albañiles que podían hallarse en cualquier obra edilicia común y, por tanto, cualquier colonia o municipio de las provincias podía contar con ellos.

No sucedía lo mismo, en cambio, con los ingenieros necesarios para proyectar y construir un acueducto o acometer restauraciones estructurales importantes en ellos. Y es ahí donde sin duda se requeriría la intervención del gobernador. Plinio el Joven, como vimos, hubo de intervenir en la construcción del acueducto que necesitaba la ciudad de Nicomedia de Bitinia tras dos proyectos fallidos en los que sus autoridades habían malgastado demasiado dinero. Para ello, solicitó a Trajano un *aquilex* (experto en acueductos) o un *architectus*, sin los cuales no se podría llevar adelante el proyecto con garantías¹³²¹. Es decir, la dificultad técnica del acueducto necesitaba de expertos con los que no contaba ninguna ciudad y ni siquiera el *officium* de Plinio, que,

¹³¹⁹ *IRT* 330-331, inscripciones que pertenecen a sendos arcos de triunfo. El fragmento pertenece al n° 330, cara A, ll. 3-6. Cf. Burton, *Idem*, p. 328.

¹³²⁰ Frontin. *De aquaed.* 117,1.

¹³²¹ X, 37, 3.

recuérdese, gobernaba una provincia que no contaba con ninguna legión. Esos ingenieros y expertos en infraestructuras sólo podían hallarse en las provincias en una legión¹³²². Por ello, cuando Plinio expuso a Trajano la necesidad de contar con un *architectus* y un *topographus* para realizar su proyecto de canal que conectase el lago de Nicomedia con el mar, el *princeps* lo remitió al gobernador de Mesia Inferior, Calpurnio Macro¹³²³, que era el más cercano que contaba con una legión a su mando.

Asimismo, una importante inscripción africana procedente de *Lambaesis* nos ha transmitido el testimonio de uno de estos especialistas militares que trabajó en la construcción de un acueducto para la colonia mauritana de *Saldae* (actual Béjaia, en Argelia)¹³²⁴: en 151-152 d.C., Nonio Dato, *librator* de la *legio III Augusta* asentada, por entonces, en la provincia de Numidia, fue llamado por el procurador que gobernaba la Mauretania Tingitana para dirigir la perforación de un túnel en una montaña que estaba en riesgo de derrumbamiento. Dato empleó como mano de obra a soldados de marina y auxiliares y gracias a sus conocimientos técnicos y sus dotes de mando logró concluir la obra, que fue dedicada por el procurador¹³²⁵. Los conocimientos y pericia en su trabajo de estos ingenieros y especialistas técnicos los volvían muy valiosos, hasta el punto que podían ser requeridos incluso tras su licenciamiento¹³²⁶.

P. Le Roux ha negado que el ejército interviniese a menudo en la construcción de acueductos y otras conducciones de agua, incluso en los casos en que el gobernador aparece como *curator* de las obras, amparándose en los ejemplos de este tipo de infraestructuras que se costearon gracias al evergetismo privado, como los *pontes*, *fistuale et lacus* sufragados por Annia Victoria en el municipio de *Ilugo*, en la Hispania Citerior¹³²⁷. Discrepamos con este autor. En primer lugar, ha de hacerse una distinción:

¹³²² Véase el elenco de técnicos cualificados que Veg. *De re milit.* I, 7, asocia a una legión.

¹³²³ X, 41-42 y 62-63.

¹³²⁴ Sobre el estatuto de *Saldae*: Plin. *N.H.* V, 2, 20.

¹³²⁵ *CIL* VIII, 2728 = 18122. Cf. Y. Le Bohec, *La troisième légion Auguste*, París, 1989, p. 212, nt. 269; J. Palao Vicente, *Legio VII Gemina (Pia) Felix. Estudio de una legión romana*, Salamanca, 2006, pp. 78 y 322; S. Cuomo, “A Roman Engineer’s Tales” *JRS* 101, 2011, pp. 143-165. Discrepamos con Palao en que Dato fuese requerido por los “arquitectos civiles” (p. 78). Como dice Cuomo (p. 159), ninguna autoridad local aparece mencionada en la inscripción y el proyecto y la fuerza de trabajo parece haber dependido enteramente del ejército.

¹³²⁶ *CIL* VI, 2725 = VI, 37189: *C(aius) Vedennius C(ai) f(ilius) / Qui(rina) Moderatus Antio / milit(auit) in leg(ione) XVI Gal(lica) a(nnos) X / tran(s)lat(us) in coh(ortem) IX pr(aetoriam) / in qua milit(auit) ann(os) VIII / missus honesta mission(e) / reuoc(actus) ab Imp(eratore) fact(us) euoc(atus) Aug(usti) / arc(h)itect(us) armament(arius) Imp(eratoris) / euoc(atus) ann(os) XXIII / donis militarib(us) donat(us) / bis ab(!) divo Vesp(asiano) et / Imp(eratore) Domitiano Aug(usto) Germ(anico) / [*

¹³²⁷ *CIL* II, 3240: *Annia L(uci) f(ilia) Victorina ob / memoriam M(arci) Fului Mo(derati) mariti et M(arci) Fului / Victorini f(ili) aquam sua om(ni) impensa perduxit(!) fac(tis) pontibus et fistulis et / lacu(bu)s cum*

las obras de canalización o conducción de aguas menores costeadas por un particular o una comunidad podían ser dirigidas perfectamente por un maestro de obras local –como en el caso de las de *Ilugo* o las de *Barcino* sufragadas, junto con los baños que abastecían, por el poderoso Lucio Minicio Natal y su hijo a principios del siglo II¹³²⁸–, pero el diseño y erección de los grandes acueductos necesitaban de expertos. Ciertamente es que en las provincias (sobre todo las orientales) se podrían hallar “arquitectos” dispuestos a aceptar este tipo de encargos, como los que se habrían encargado de los dos proyectos fallidos del acueducto de Nicomedia de Bitinia¹³²⁹. Pero precisamente el hecho de que Plinio tuviese que intervenir en la construcción de este último indica la dificultad que entrañaban tales obras y la carencia de ingenieros o técnicos expertos y verdaderamente capaces en el diseño de acueductos incluso en las provincias más desarrolladas.

En segundo lugar, el hecho de que una o varias comunidades costeen la construcción de un acueducto no excluye en principio la participación del ejército; y mucho menos si el *curator* es el propio gobernador. Como hemos visto antes, Ulpiano establece que los gobernadores debían velar por que las obras públicas iniciadas en su provincia se concluyeran con éxito, ayudando a los responsables designados de cada comunidad, y, para ello, podían recurrir al ejército¹³³⁰. Asimismo, como ya señalaron en su momento J. Marquardt y C. Hagan, podían decidir utilizar los fondos públicos de una

suis orna/mentis dato epulo / dedicauit. P. Le Roux, “Armées et *operae*: Un état des lieux”, *CCG* 20, 2009, pp. 143-155, esp. pp. 147-148, quien opina que “les soldats n’interviennent guère dans les ouvrages concernant l’adduction d’eau” y que “les unités militaires n’étant pour ainsi dire pas présentes même quand le gouverneur est nommé comme *curator*”. En cambio sí admite que se recurriese a ingenieros militares para las minas (p. 153).

¹³²⁸ IRC IV, 30: *L(ucius) Min(icius) L(uci) f(ilius) Gal(eria) Na(talis) co(n)s(ul) proco(n)s(ul) / prouinc(iae) [Africae sodalis Augus]talis leg(atus) Aug(usti) pr(o) prae(tore) divi Traia(ni) Part(hici) et Imp(eratoris) Traiani Ha(driani) Aug(usti) prouinc(iae) Pan(nonia[e] Superioris) curator a]luei Tiberis et riparum et / cloacar[um] Vrbis leg(atus) Diui Trai(jani) Parthici leg(ionis) III Aug(ustae) leg(atus) Di(ui) Traia(ni) Parthici leg(ionis) VII Cl(audiae) P(iae) F(idelis) ó V Mac(edonicae) doni]s donatus expeditione Dacic(a) / prima a[b] eodem Imperatore] corona uallari murali aurea / has[is] puris III uexillis III] leg(atus) pr(o) pr(aetore) prouinc(iae) Africae pr(o)consularis / trib(unus) pl(ebis) q(uaestor) p[rouinc(iae) - - - IIIIu]ir uiarum curandarum et / L(ucius) Minicius L(uci) f(ilius) [Natalis Quadro]nius Verus f(ilius) augur trib(unus) pl(ebis) / desig(natus) q(uaestor) Aug(usti) et [eodem tempore leg(atus) p]r(o) pr(aetore) patris prouinc(iae) Africae tr(ibunus) / mil(itum) leg(ionis) I Adiut(ricis) P(iae) F(idelis) l[eg(ionis) XI Cl(audiae) P(iae) F(idelis) leg(ionis) XIII Ma]rt(iae) Vic(tricis) IIIvir monetalis a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo) / balineum c[um] port[icibus] solo suo et / du[ctus] aquae] fecerunt.*

¹³²⁹ Plin. *Ep.* X, 37.

¹³³⁰ Dig. I, 16, 7, 1 (Ulp. 2 de off. procos.). Vid. *supra*.

comunidad para realizar obras que ésta necesitase¹³³¹. Un ejemplo de ello es el antedicho puente de Chaves construido en 79 d.C. por soldados de la *legio VII Gemina* dirigidos por el gobernador Festo pero sufragado probablemente por las diez *ciuitates* mencionadas en el monolito conmemorativo.

Así pues, es admisible deducir que en la construcción de todos los acueductos hispanos monumentales habrían participado estos especialistas que servían en el ejército¹³³²; en concreto, serían miembros de la *legio VII Gemina*, que actuarían en todas las provincias hispanas –en la Citerior por defecto y en la Lusitania y la Bética por “préstamo”–. Y si éstos participaron, el gobernador de la Citerior hubo de estar al corriente, al igual que sus homólogos antedichos, pues estos hombres estaban bajo su autoridad y, además, era él quien debía informar al emperador acerca del proyecto y, una vez aprobado, del desarrollo de las obras, pues, junto con el procurador provincial, era el único que disfrutaba del *ius referendi ad principem*¹³³³.

Obras públicas de interés intercomunitario, regional o provincial:

Gracias a la epigrafía, tenemos constancia de la intervención de los gobernadores de Hispania en la construcción de puentes y en la apertura, al menos, de una vía de comunicación terrestre en el Noroeste.

En la Bética, una inscripción conservada en estado muy deteriorado y fragmentario en el pilar central del puente de Alcantarilla (Utrera, Sevilla) podría indicar que su construcción fue supervisada por el procónsul en época de Augusto:

[- - - ?] *Caes(ar) Augustus pontem* [- - -] / [- - -] *AV* [- - -] / [- - -] *pro?*] *O C* [*os?* - - -]¹³³⁴.

De ser correcta esta interpretación, este anónimo gobernador de la Bética habría actuado de la misma manera que su homólogo de África, Cayo Vibio Marso, cuando en

¹³³¹ J. Marquardt, *De l'organisation financière chez les romains. Manuel des Antiquités Romaines* X, París, 1888, p. 112; C. Halgan, *Essai sur l'administration des provinces sénatoriales sous l'Empire romain*, París, 1898, pp. 353-54.

¹³³² A la misma conclusión llega Rogers, *Water and Roman Urbanism...* cit. pp. 27-87, en su estudio de los ejemplos británicos. Véase también Le Bohec, *La troisième...* cit. 533.

¹³³³ Plin. *Ep.* X, 31, 1.

¹³³⁴ *CIL* II, 1285 = *CILA* II, 952. Anexo II: nº 52.

30 d.C. dedicó el puente sobre el río Oued Badja, donado por Tiberio cerca de *Vicus Augusti*:

*Ti(berius) Caesar Diui / Aug(usti) f(ilius) Augustus / Pontif(ex) Max(imus) trib(unicia) / potest(ate) XXXI co(n)s(ul) IIII / dedit / C(aius) Vibius Marsus pro/co(n)s(ul) IIII dedicauit.*¹³³⁵

Estos ejemplos reflejarían no sólo la presencia incipiente del emperador como benefactor en las provincias proconsulares desde los mismos inicios del Principado¹³³⁶, sino la armoniosa cooperación existente entre ellos y los procónsules en el ámbito de la dotación de obras públicas a nivel local. Esto revela, una vez más, que en Hispania tanto los gobernadores de una provincia imperial como los de una proconsular actuaban de manera similar en el ámbito de las obras públicas. No cabe duda, además que con el fin de llevar a cabo estas obras sufragadas por el emperador, estos procónsules hubieron de mantener correspondencia con Augusto y Tiberio, respectivamente, al igual que otros colegas suyos en la misma época¹³³⁷.

Asimismo, en la localidad portuguesa de Chaves, antigua *Aquae Flauiae* (Hispania Citerior), se ha conservado, en un monolito (o columna) situado junto a su puente romano, la siguiente inscripción:

Imp(eratori) Caes(ari) Ve[sp(asiano) Aug(usto) pont(ifici)] / max(imo) trib(unicia) pot(estate) [X imp(eratori) XX p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) IX] / Imp(eratori) Vesp(asiano) Caes(ari) Au[g(usti) f(ilio) pont(ifici) trib(unicia) pot(estate)] / VIII imp(eratori) XIII co(n)s(uli) VII?] / [[[Imp(eratori)? Domitiano? Caes(ari)? Aug(usti)? f(ilio)? ---]]] / [[[-----]]] / G(aio) Calpetano Ra[ntio Quirinali] / Val(erio) Festo leg(ato) A[u(g(usti) pr(o) pr(aetore)] / D(ecimo) Cornelio Ma[eciano leg(ato) Aug(usti)] / L(ucio) Arruntio Max[imo proc(uratori) Aug(usti)] / leg(ioni) VII

¹³³⁵ CIL VIII, 14386.

¹³³⁶ Tema que tratado excelentemente en la monografía de Dalla Rosa, *Cura et tutela...* cit.

¹³³⁷ Véase: *Epistula* de Augusto a los Cnidios (6 a.C.) y el I y II Edictos de Cirene (7/6 a.C.): J. H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors*, Philadelphia, 1989, nº6, 8 (l. 1-40) y 9 (l. 40-55); o la carta que Tiberio envió al procónsul de África Lucio Nonio Asprenas en 14 d.C. con instrucciones de que diera muerte a Sempronio Graco, que se hallaba relegado en la provincia: Tac. *Ann.* I, 53, 6.

*Gem(inae) [Fel(ici)] / ciuitates [X] / Aquiflavien[ses Aobrigenses] / Bibali Coell[erni Equaesii] / Interamic[i Limici Aebisoci?]/ Quarque[r]ni Ta[magani]*¹³³⁸

Como se puede apreciar, diez *ciuitates* de los alrededores de *Aquae Flaviae* – probable municipio latino de época de Vespasiano– hicieron, en 79 d.C., una dedicatoria en honor del emperador Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano, del gobernador de la Hispania Citerior, Cayo Calpetano Rantio Quirinal Valerio Festo, del legado Cornelio Meciano, del procurador imperial Lucio Arruncio y de la legión VII Gémina. Todo lleva a pensar que este homenaje es una acción de gracias de estas comunidades a aquéllos que habían tomado parte en la construcción de un puente que las beneficiaba (potenciando sus comunicaciones y sus relaciones comerciales). No cabe duda de que la mención del emperador y sus hijos es meramente formal y que la realización de la obra se debió al gobernador y sus oficiales, así como su construcción a los ingenieros y soldados de la legión acantonada en León. Es muy probable que el gobernador Festo solicitase la aprobación de este proyecto a Vespasiano, al igual que hizo el gobernador del Ilírico Lucio Junio Rufino Proculiano cuando supervisó la restauración de un puente sobre el río *Hippus* con la aprobación del emperador Cómodo, apareciendo el gobernador como el agente que cumple las decisiones del emperador: *Commodus restituit, curante et dedicante L(ucio) Iunio Rufino Procu-/liano leg(ato) pr(o) pr(aetore)*¹³³⁹. Esta actividad de Valerio Festo y de Proculiano coincide también con lo que nos transmiten las fuentes literarias desde inicios del Principado. Tácito menciona, por ejemplo, que en año 14 d.C., justo antes de que estallasen los movimientos sediciosos de las legiones de Panonia, unos manípulos de éstas fueron enviados por su legado, Junio Bleso, al municipio de Nauporto para que se ocupasen de los caminos, los puentes y otras necesidades relacionadas con las infraestructuras¹³⁴⁰. Asimismo, a inicios del siglo II Plinio el Joven no dejó de pedir consejo y permiso a Trajano para llevar a cabo las obras públicas que estimaba que eran necesarias y necesitaban de su intervención en Bitinia. Tanto Valerio Festo como Proculiano, Junio Bleso y Plinio eran, no olvidemos, legados del emperador y, por tanto, toda acción que realizaban la hacían en nombre de éste.

¹³³⁸ *CIL* II, 2477. Anexo II: nº 17.

¹³³⁹ *CIL* XVII/4, 323 a.

¹³⁴⁰ Tac. *Ann.* I, 20: *Interea manipuli ante coeptam seditionem Nauportum missi ob itinera et pontes et alios usus...*

Al igual que sus homólogos, Valerio Festo se valió del ejército para realizar esta construcción e indica el importante papel de los oficiales militares en la dotación de infraestructuras a la provincia bajo la supervisión del gobernador. El *legatus Augusti* que se menciona a continuación del gobernador, Cornelio Meciano –tomado por Alföldy como un *iuridicus*– estuvo destinado sin duda en el cuadrante noroccidental compuesto por los *conuentus Lucensis, Asturicensis y Bracaraugustanus*. Por tanto, habría estado presente durante todo el proceso, y lo habría supervisado en ausencia del gobernador, al cual, sin embargo, habría mantenido informado puntualmente. Meciano no tomaría ninguna decisión relevante sin consultar al gobernador¹³⁴¹.

Asimismo, el epígrafe funerario del soldado Lucio Elio Céler hallado en *Astigi* (fechado en época flavia) también ha sido tomado como indicio de la participación de la *legio VII Gemina* en la construcción de un puente sobre el río Guadalmazán, cerca de Carlota, en el curso de la Vía Augusta¹³⁴². De ser correcta la hipótesis, sería una prueba más no sólo de la intervención del gobernador en la construcción de estas infraestructuras, sino también de la colaboración entre gobernadores de provincias vecinas y del recurso de los procónsules de la Bética a los técnicos de esta legión.

También sabemos que las legiones *IV Macedonica, VI Victrix y X Gemina* participaron en la construcción de otro puente de la Citerior: el del Diablo de Martorell (Barcelona), levantado, al parecer, en época tiberiana, con el fin de facilitar el paso sobre el río Llobregat siguiendo en el recorrido de la Vía Augusta. Presentaba un sencillo arco de triunfo en su estribo izquierdo parecido al cercano arco de Bará¹³⁴³. La intervención de integrantes de las tres legiones estacionadas en la Citerior es, a nuestro juicio, un indicio claro de que esta obra se realizó bajo la dirección del gobernador provincial, pues sólo él, como general en jefe, pudo haber coordinado la colaboración entre estas legiones.

Un epígrafe hallado Alcolea (Córdoba) recuerda que un puente que atravesaba el río Betis por esta zona, en la vía que unía *Corduba* con *Castulo* pasando por *Obulco*,

¹³⁴¹ Al igual que hacían los legados de Julio César en las Galias. Véase el ejemplo de Publio Craso: Caes. *B.G.* II, 34 y III, 9, 1.

¹³⁴² *CIL* II, 5265; Palao Vicente, *Legio VII...* cit. p. 324.

¹³⁴³ M. Durán, *La construcción de puentes romanos en Hispania*, Santiago de Compostela, 2005, pp. 120-125.

fue reconstruido por iniciativa del emperador Claudio¹³⁴⁴. En nuestra opinión, a pesar de no aparecer mencionado, el ejemplo del puente de Chaves sugiere que el procónsul que por entonces gobernaba la Bética hubo de haber supervisado las obras, dado que debía velar por la correcta ejecución de la política viaria imperial y, como veremos en otro capítulo, la ordenación territorial en su provincia. Además, como en los casos de donaciones de edificios o construcciones por parte del emperador en favor de comunidades concretas, los gobernadores debían asegurarse de que toda aquella construcción que se realizase a cargo del emperador se llevase a término con éxito.

Aunque carecemos de epígrafes que lo confirmen, podemos deducir que los gobernadores de las provincias hispanas intervinieron también en la construcción de otros notables puentes de fábrica conocidos, como los de Mérida, Alcántara, Alconétar, Segura y Cáparra (Cáceres), el Puente Mayor de Salamanca (antigua *Salmantica*), el Puente Viejo de Córdoba, el de Villa del Río (Córdoba), el de Pertusa (Huesca), el del Diablo de Martorell (Barcelona), el de Ponte de Lima y la Ponte Velha de Vila Formosa (Portugal), el de Lugo o los de la provincia de Ourense (entre los que destaca el del Bibei). La monumentalidad de todos ellos obliga a pensar en la intervención de personal militar, como en el caso de los puentes de Chaves y de Martorell. Es improbable que el destacamento que tenían los gobernadores de la Lusitania y la Bética contaran con ingenieros y, por tanto, hemos de pensar en una colaboración entre este gobernador y su homólogo de la Citerior, algo que no era inhabitual: cuando Plinio el Joven solicitó a Trajano que le enviara un *topographus* o un *architectus* para llevar a cabo el proyecto de unir un lago de Nicomedia con el mar a través de un canal, el emperador le indicó que se lo pidiera al *legatus Augusti pro praetore* que por entonces gobernaba Mesia Inferior, Calpurnio Macro¹³⁴⁵. La inscripción conservada en el templo adyacente al puente de Alcántara menciona a su supuesto constructor, *Caius Iulius Lacer*, pero, como ha demostrado H. Gimeno, es muy dudosa la autenticidad de este epígrafe y de los otros conservados en el arco situado sobre el puente (excepto *CIL* II, 759), así como la del

¹³⁴⁴ *CIL* II²/7, 715: *Ti(berius) Claudius / Caesar Aug(ustus) / Germanicus / pontif(ex) max(imus) / trib(unicia) pot(estate) IIII / imp(erator) VIII co(n)s(ul) III / design(atus) IIII p(ater) p(atriciae) / refecit*. Cf. E. Melchor Gil, “El territorio”, en X. Dupré (ed.), *Las capitales provinciales de Hispania 1: Córdoba*. Colonia Patricia Corduba, Roma, 2004, pp. 105-117, esp. p. 111.

¹³⁴⁵ *Ep.* X, 41-42 y 62-63.

propio templete. Éste y su epígrafe parecen ser un producto propio de los círculos humanistas de época de Carlos V¹³⁴⁶.

A esto hay que añadir que, aparte de los puentes que situados a la entrada de una capital (los de Mérida y Córdoba) o sede conventual (el de Lugo), todos ellos se hallaban en el trazado de vías terrestres fundamentales en la vertebración del territorio, uniendo puntos estratégicos económico-administrativos. La mayoría de aquellos que han podido ser datados con cierta precisión nos remiten al siglo I d.C. y, en concreto, al período augusteo-tiberiano y flavio. Ciertamente es que el puente de Alcántara y el del Bibeí son de época de Trajano, pero su construcción parece haberse debido a una continuación de la política viaria flavia¹³⁴⁷. Por tanto, podemos hablar de un programa constructivo fomentado por el poder imperial, dentro de una política general que impulsó el desarrollo de las comunidades hispanas y que se integra en el proceso de municipalización de Hispania. Aunque es probable que muchos de puentes fuesen sufragados por las poblaciones locales, no cabe duda de que los gobernadores de la Citerior, la Lusitania y la Bética intervinieron siguiendo las instrucciones de los emperadores (basadas, sin duda, en informes previos de gobernadores) y empleando para ello personal militar cualificado.

Pero la intervención de los gobernadores en las comunicaciones provinciales no acababa aquí. Gracias a varios miliarios conservados en el norte de Portugal sabemos que en el 81 d.C. precisamente el antedicho gobernador de la Hispania Citerior Cayo Calpetano Rantio Quirinal Valerio Festo intervino en la construcción de la llamada *uia Noua* (la vía XVIII en el *Itinerario de Antonino*), que unía las sedes conventuales de *Bracara Augusta* y *Asturica Augusta*¹³⁴⁸. El texto recogido en todos los miliarios sigue este modelo, con ciertas variaciones¹³⁴⁹:

¹³⁴⁶ H. Gimeno Pascual, “La inscripción del dintel del templo de Alcántara (*CIL* II, 761): Una perspectiva diferente”, *Epigraphica* 57, 1995, pp. 87-145.

¹³⁴⁷ Un elenco y análisis completo en Durán, *La construcción...* cit. pp.111-322. Para el Noroeste: Arias Vilas, “*Lucus Augusti* e o seu contorno...” cit. p. 53.

¹³⁴⁸ *CIL* II, 4838.

¹³⁴⁹ En las abreviaciones y en el lugar que ocupa el nombre del gobernador (a veces antes de la mención de la Vía Nova, a veces después). En todos los casos el nombre de Domiciano ha sufrido la *damnatio memoriae*. Vid. J. M. Solana Sáinz – L. Sagredo San Eustaquio, *La política viaria en Hispania: Siglos I-II d.C.*, Valladolid, 2008, pp. 207-214, n°138-152.

*Imp(eratori) Tito Caesari Diui / Vesp(asiani) f(ilio) Vespasiano Aug(usto) / pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VIII / imp(eratori) XV p(atri) p(atriciae) co(n)s(uli) VIII / Caes(ari) Diui Vesp(asiani) f(ilio) / [Domitiano] / co(n)s(uli) VII / C(aio) Calpetano Rantio / Quirinale Valerio / Festo leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) / Via Noua a Brac(ara) Aug(usta) m(ilia) p(assuum) XXXIII*¹³⁵⁰

Esta participación de Festo en la apertura de la nueva vía se integra, pues, en su labor general de potenciación de las infraestructuras y las comunicaciones en el Noroeste, seguramente derivada de la política flavia en esta región, cuyo desarrollo cívico se había visto favorecido con la concesión del *ius Latii* en la década anterior. Esto prueba, además, no sólo la importante labor de este gobernador en el desarrollo de las obras públicas, sino también su presencia en los *conuentus* del Noroeste. La apertura y renovación de las vías de comunicación y la construcción de infraestructuras relacionadas con ellas formaban parte del mismo cometido de los gobernadores. Así, por ejemplo, dos miliarios de la vía *Hippo Regius-Calama* en África Proconsular atestiguan un paralelo de la doble labor de Festo en la supervisión de las obras públicas vinculadas a las comunicaciones terrestres: las inscripciones recuerdan que el legado imperial que gobernaba Numidia en 152 d.C., Marco Valerio Etrusco, se encargó de supervisar las obras de restauración de la vía y los puentes de la misma (así como de acondicionar el entorno por el que pasaba) que había ordenado Antonino Pío al hallarse muy deteriorados por su antigüedad¹³⁵¹.

Cabe preguntarse, sin embargo, por qué Valerio Festo es el único gobernador no sólo de la Hispania Citerior, sino de todas las provincias hispanas altoimperiales¹³⁵², que aparece mencionado en los miliarios conservados, mientras que en el resto sólo se cita a los emperadores¹³⁵³.

A finales de la República, está atestiguado en miliarios de la vía *Salduie-Ilerda-Martorell-Ausa* con la que conectaba la llamada vía Heraclea, en su paso por localidades

¹³⁵⁰ *Idem* n° 143 (hallado en Portela do Home). Anexo II: n° 36.

¹³⁵¹ *ILAlg* I, 3875: *[Imp(erator) Caes(ar) T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius / pont(ifici) max(imus)] trib[ui]-n(icia) potestate / XV co(n)s(ul) IIII / uiam per Alpes / Numidicas ue-/tustate inter-/r]uptam ponti-/b[us] denuo fac-/t[is] palusibus / siccatis labibus / confirmatis / resstituit / curante M(arco) Valerio / Etrusco leg(ato) suo / pr(o) pr(aetore)*. También: *ILAlg* I, 3876.

¹³⁵² Entre Augusto y Alejandro Severo (27 a.C.-235 d.C.).

¹³⁵³ Una recopilación de las inscripciones aparecidas en estos miliarios durante el Principado en: Solana – Sagredo, *Ibidem*, pp. 141-219 y 319-375 y Solana Sáinz – L. Hernández Guerra, *La política viaria en Hispania. Siglo III d.C.*, Valladolid, 2002, pp. 103-137.

de las actuales provincias de Huesca, Lleida y Barcelona el nombre de dos procónsules que gobernaron la Hispania Citerior, Manio(?) Sergio (ca. 118 a.C.) y Quinto Fabio Labeón (ca. 110 a.C.), señal de que intervinieron en el trazado viario como parte de su supervisión de la ordenación territorial del área pacificada de la Citerior: el primero en la vía que unía Auso con la vía Heraclea (Hodos Herakleion) y el segundo en la de *Salduie – Ilerda – Martorell – Vía Heraclea*¹³⁵⁴. La construcción de esta vía tuvo, entonces, una clara finalidad militar, derivada de la doble necesidad de facilitar los movimientos del ejército entre puntos clave del territorio conquistado y de garantizar su aprovisionamiento y una eficaz transmisión de las órdenes¹³⁵⁵. Sin embargo, no hemos de desdeñar una cuarta utilidad que poco a poco será primordial en los territorios definitivamente pacificados: los desplazamientos que los gobernadores tardorepublicanos realizarán por las principales ciudades de la provincia para rendir justicia, una vez que los indígenas pasaron de ser considerados “gobernados” en vez de meros “conquistados”¹³⁵⁶.

En el Principado, en cambio, la ausencia del nombre de los gobernadores de las provincias hispanas, en nuestra opinión, no indica que dejaran de intervenir en las obras viarias. Esto resulta impensable, dado que el trazado viario afectaba a la ordenación territorial de la provincia –supervisada por el gobernador cuando ésta se constituía– y al sistema del *cursus publicus*, vital para la comunicación de los gobernadores con el poder central¹³⁵⁷: Augusto atendía las cartas que le llegaban de todo el Imperio a

¹³⁵⁴ *ELRH* C3-C7, donde se proponen las fechas que seguimos. Los autores de *IRC* habían situado el gobierno de Labeón en torno al 118/114 a.C. (*IRC* II, 89, p. 130) y el de Manio Sergio en un momento impreciso de la década del 120-110 a.C. (*IRC* I, 175, p. 211). Por su parte, Solana – Sagredo, *Idem*, pp. 137-139, n°1-5, optan por fechar estas inscripciones de manera menos precisa, entre 117-110 a.C. De los dos miliarios de Labeón, uno apareció en Massalcorreig (Lleida) y el otro en Torrente de Cinca (Huesca). Los de Sergio aparecieron todos en localidades de la provincia de Barcelona: S. Eulalia de Riuprimer, Tona y S. Eulalia de Ronçana. La vía Heraclea iba de *Gades* a *Tarraco*, pasando por la cuenca del Guadalquivir (*Hispalis, Corduba*), de ahí a Libisosa y, finalmente, proseguía por la costa levantina hasta *Tarraco*. De allí conectaba con una vía que pasaba por *Barcino* y llevaba hasta *Auso* (en Vic). Cf. Solana – Sagredo, *Idem*, pp. 19-23, que señalan la mención del *Hodos Herakleion* por parte de Strab. III, 4, 11-12.

¹³⁵⁵ P. Sillières, *Les voies de communication de l'Hispanie méridionale*, París, 1990, p. 770.

¹³⁵⁶ R. Olmo López, “*Pacisque imponere morem*: Los gobernadores provinciales y la imposición del orden romano a los conquistados en Occidente (ss. I a.C.-I d.C.)”, en G. Bravo – R. González Salinero (eds.), *Conquistadores y conquistados: relaciones de dominio en el mundo romano*, Madrid, 2014, pp. 459-472, esp. p. 465; Doyle, *Empires*, cit.

¹³⁵⁷ El sistema de *uehiculatio* o *cursus publicus* fue organizado por Augusto: Suet. *Diu Aug.* 49, 5: *Et quo celerius ac sub manum adnuntiari cognoscique posset, quid in prouincia quaque gereretur, iuuenes primo modicis interuallis per militaris uias, dehinc uehacula disposuit. Commodius id uisum est, ut qui a loco idem perferunt litteras, interrogari quoque, si quid res exigant, possint*. Cf. Sillières, *Les voies...* cit. pp. 782-783. Sobre el tránsito de información entre el gobernador y el emperador: Nelis-Clément, “Le

cualquier hora¹³⁵⁸ y Trajano no deja e repetirle a Plinio que le informe constantemente de la evolución de los problemas más relevantes que encuentra en su provincia¹³⁵⁹. La correspondencia, además, era un importante medio de control de la actividad de los gobernadores y demás mandos provinciales por parte del poder central¹³⁶⁰. Y sabemos que en cada provincia era competencia del gobernador el administrar los salvoconductos oficiales (*diplomata*) emanados de la cancillería imperial, que eran necesarios para usar los recursos del *cursus publicus*¹³⁶¹. Por último, los gobernadores y sus legados también resolvían las peticiones o cuestiones que les planteaban las comunidades locales por carta, no sólo mientras se hallaban en la capital, sino incluso cuando estaban en la sede conventual más cercana, como hizo el *legatus iuridicus* Claudio Quartino en época de Adriano¹³⁶².

Además, la planificación y construcción de las vías era competencia del personal técnico del ejército estacionado en cada provincia, que dependía de su gobernador, y los soldados podían ser empleados también como mano de obra en este tipo de obras, como parte de sus munera y dentro de las tareas que coadyuvaban al mantenimiento de la disciplina. En Hispania Citerior con miliarios hallados en el valle del Ebro que recuerdan la intervención de las legiones *IV Macedonica*, *VI Victrix* y *X Gemina* en la construcción de la *via Caesaraugusta-Summum Pyrenaeum* en época de Augusto¹³⁶³, y existen paralelos en otras provincias. En África Proconsular y Numidia, por ejemplo, algunos miliarios fechados entre Tiberio y Pértinax no sólo recuerdan la intervención de una legión (en general, la *III Augusta*) en la construcción de la vía a la que pertenecen, sino que a veces mencionan al propio procónsul en nominativo o ablativo, indicando que éste supervisó los trabajos siguiendo instrucciones del emperador o bajo la autoridad de éste¹³⁶⁴.

gouverneur et la circulation de l'information..." cit.; Crogiez-Pétrequin – Nelis-Clément "La circulation des hommes..." cit. pp. 112-116 y 122-129.

¹³⁵⁸ Suet. *Diu. Aug.* 50: *Ad epistulas omnis horarum quoque momenta nec diei modo sed et noctis, quibus datae significarentur, addebat.*

¹³⁵⁹ Véase, por ejemplo, Plin. *Ep.* X, 40.

¹³⁶⁰ Plinio informa a Trajano incluso de las etapas de su viaje a Bitinia-Ponto y del día de su llegada: *Ep.* X, 15, 16, 17a.

¹³⁶¹ Plin. *Ep.* X, 45-46 y 120-121.

¹³⁶² *CIL* II, 2959. *Vid.* Capítulo 3 de esta Primera Parte.

¹³⁶³ *AE* 1984, 583-584. Sobre la intervención del ejército asentado en Hispania en la construcción de las vías terrestres: Le Roux, *L'armée romaine...* cit. pp. 119-121 y "Armées et *operae*..." cit. pp. 144-145; Palao Vicente, *Legio VII...* cit. pp. 322-323.

¹³⁶⁴ Y. Le Bohec, "Routes et armée dans l'épigraphie de l'Afrique romaine", *CCG* 20, 2009, pp. 185-197, esp. n° 2 (8/9 ó 9/10 d.C., procónsul en ablativo), 3 (14 d.C., Tiberio y procónsul en nominativo), 6 a y b

La “ausencia” de los gobernadores de las provincias hispanas en los miliarios erigidos entre Augusto y Alejandro Severo no significa que fuesen ajenos a la construcción de las vías, sino que es una consecuencia del nuevo ordenamiento que se derivó de la instauración del Principado y del ansia de los emperadores de monopolizar el papel de benefactores universales: En las provincias imperiales, el emperador era su verdadero titular, por eso no es de extrañar que aparezca sólo su nombre y no el de sus legados. Eso no quita que, en ocasiones, el nombre del legado –como en el caso de Valerio Festo o los de Numidia– aparezca en los miliarios, probable indicio de que se trataba de una misión especialmente importante incluida por el emperador en sus *mandata*. Esto viene confirmado por un ejemplo hispano que queda fuera del límite cronológico de este estudio por pocos años: en 238 d.C. el gobernador Quinto Decio Valeriano llevó a cabo una importante labor de restauración de vías y puentes que por su vetustez estaban en un estado ruinoso en el *conuentus Bracarensis* y en el *Caesaraugustanus*, según se desprende del texto epigráfico de los numerosos miliarios hallados. En esta época el gobernador aparece mencionado explícitamente como ‘agente’ que ejecuta las órdenes del emperador Maximino el Tracio y su hijo¹³⁶⁵.

En la Bética, como en otras provincias proconsulares, también la mención de los emperadores, ya desde Augusto, aparece por doquier –a través de las inscripciones monumentales y, también, de las monedas– como padre y patrono de todos los habitantes del Imperio. En lo que respecta a los miliarios, el emperador aparece como la única autoridad mencionada dado que los procónsules, como los legados imperiales, necesitaban de su aprobación para llevar a cabo la apertura de nuevas vías. Un ejemplo temprano de ello lo tenemos en un miliario de África Proconsular de época de Tiberio, en el que se hizo constar que la vía a la que pertenecía había sido construida por el procónsul Lucio Elio Lamia siguiendo órdenes del emperador:

(123 d.C., *imperator fecit* + legado imperial *pro praetore* de Numidia en ablativo), 8 (15/15 d.C., procónsul en nominativo + *imperatoris iussu*), 17 (125-126 d.C., *ex auctoritate imperatoris* + legado de Numidia en ablativo), 18 (151-152 d.C., emperador en nominativo + *curante legato* de Numidia), 19 (125-126 d.C., *legatus Augusti pro praetore* de Numidia en solitario), 20 (193 d.C., *legatus Augusti pro praetore* de Numidia en solitario). Aunque en los nº 2, 19 y 20 no se menciona al emperador, se infiere que estos gobernadores siguieron sus instrucciones como sus homólogos.

¹³⁶⁵ Cf. Solana Sáinz – Hernández Guerra, *La política viaria...* cit. pp. 141-160, nº 89-127.

*Imp(eratoris) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) iussu L(ucius) Aelius Lamia proco(n)s(ul) ab oppido in Mediterraeum direxist m(ilia) p(assum) XLIV.*¹³⁶⁶

A diferencia de los miliarios béticos contemporáneos¹³⁶⁷, en éste, como en otros africanos, se menciona al procónsul, pero ello se debe, sin duda, a la mayor categoría e influencia del de África, de rango consular y no a una diferencia en sus funciones. Desde un punto de vista geoestratégico, la red viaria de la Hispania altoimperial muestra el interés que tenía el poder imperial en establecer y reforzar conexiones terrestres no sólo entre las ciudades y áreas más importantes económicamente, sino también entre las sedes conventuales de cada provincia. La garantía de que el gobernador se desplazase con celeridad entre las sedes conventuales y principales ciudades provinciales con el fin de administrar justicia, supervisar las cuentas municipales o las obras públicas y atender las peticiones de las élites provinciales resultaba tan importante como la propia consecución de una eficaz circulación de los productos obtenidos de la provincia hacia Roma. Esto ha sido puesto en evidencia por J. C. Saquete Chamizo en el caso de la Lusitania, cuyas principales vías terrestres unían sistemáticamente tanto las sedes conventuales entre sí como éstas con los centros económicos más pujantes de la provincia. Ejemplo de esto último es la vía que unía *Scallabis* con *Pax Iulia* sin pasar por *Emerita Augusta*, la cual enlazaba estas sedes conventuales con *Olisipo*, *Caetobriga* y *Salacia*, las dos primeras importantes puertos. Asimismo, aparte de las vías que desde la capital *Emerita* conectaban tanto con la Citerior como con la Bética, existía una vía importante que unía *Olisipo* con *Bracara Augusta*, sede conventual de la Citerior, pasando por *Conimbriga* y el puerto de *Cale* (Oporto) que aseguraba las comunicaciones con las minas de oro y plata de Malhada (Sever do Vouga) y Escádia Grande (Alvares, Gois), así como un vínculo seguro con la provincia vecina al norte. En cuanto a las famosas minas de Vipasca, se hallaban al lado de *Pax Iulia*¹³⁶⁸. Tres

¹³⁶⁶ *IRT* 930. Cf. Dondin-Payre, “L’intervention du proconsul...” cit. p. 336.

¹³⁶⁷ Cf. Solana – Sagredo, *La política viaria...* cit. pp. 163-164, nº 54-57; Sillières, *Les voies...* cit. nº 27, 49, 52 y 53.

¹³⁶⁸ J. C. Saquete Chamizo, “El gobernador provincial de Lusitania y sus actividades: viajes, calzadas, conventus y relaciones sociales” en J. F. Rodríguez Neila – E. Melchor Gil (eds.) *Poder central y autonomía municipal: la proyección de las élites romanas de Occidente*, Córdoba, 2006, pp. 81-111, esp. pp. 93-99.

epígrafes hallados en *Olisipo* nos informan que en la segunda mitad del siglo II d.C.¹³⁶⁹ esta ciudad fue visitada con frecuencia por los gobernadores de Lusitania, sin duda por la relevancia económica de la misma, que se veía favorecida por su situación estratégica en el itinerario conventual. Se ha propuesto incluso que los gobernadores hiciesen su ingreso en la provincia a través de este puerto¹³⁷⁰.

Otro ejemplo evidente es el de la Bética, en la que su principal vía terrestre pasaba por las cuatro sedes conventuales altoimperiales conocidas, *Gades*, *Hispalis*, *Astigi* y *Corduba*, para luego prolongarse hasta *Iliturgis*, y, de allí, a *Acci* y, finalmente, *Carthago Noua*, sede, a su vez, de un *conuentus* de la provincia vecina de Hispania Citerior. Este trazado viario seguramente existió ya a finales de la República, pues sabemos que cuando Julio César fue cuestor de la Ulterior hubo de recorrer la provincia para administrar justicia como delegado de su gobernador, deteniéndose en *Gades*¹³⁷¹. Se podría objetar que bien pudo haber sido al revés; es decir, que la elección de las sedes conventuales dependiese, entre otras cosas, de las conexiones terrestres de que gozase esa ciudad¹³⁷². Empero, el ejemplo del Noroeste vuelve a ser muy elocuente: antes de que existiese su red viaria ya habían sido fundadas las tres sedes conventuales (augusteanas) mencionadas por Plinio, aunque en su elección pesó, claro está, el interés geoestratégico. También las sedes conventuales lusitanas son fundaciones augusteanas. Asimismo, es muy significativo que en época julio-claudia estuviese consolidada una vía que unía *Complutum* y *Segobriga* con *Carthago Noua*, que era la sede del *conuentus* al que pertenecían, sin duda con el fin de facilitar que los habitantes de estas importantes ciudades pudiesen acudir a ella –a pesar de su lejanía– cuando el gobernador de la Citerior la visitara durante el invierno, además de por dar salida hacia Roma a las extracciones de *lapis specularis* de las minas de Segobriga¹³⁷³.

¹³⁶⁹ *CIL* II, 189 (Cuadrato); 258 (Perenne) y 259 (Coeliano); *Fasti Hispanienses* pp. 142-143 y 147. Anexo II: nº 48-50.

¹³⁷⁰ Saquete Chamizo, “Los gobernadores...” cit. p. 92.

¹³⁷¹ Suet. *Diu. Iul.* 7, 1: *Quaestori ulterior Hispania obuenit; ubi cum mandatu praetoris iure dicundo conuentus circumiret Gadisque uenisset, animaduersa apud Herculis templum Magni Alexandri imagine ingemuit...*

¹³⁷² A.J. Marshall, “Governors on move”, *Phoenix* 20/3, 1966, pp. 231-246, esp. pp. 233-234; Bérenger, *Le métier...* cit. p. 201.

¹³⁷³ Seguimos los mapas de Solana – Sagredo, *La política viaria...* cit. pp. 62-67; el mapa 9 presenta una útil panorámica general de toda Hispania.

También es muy probable que uno o varios de los gobernadores de la Citerior interviniesen en la construcción del importante faro de *Brigantium*, y un indicio de ello podría ser la conocida inscripción votiva hallada en las inmediaciones de la “Torre de Hércules” en A Coruña que menciona al arquitecto que se encargó de su construcción:

*Marti / Aug(usto) sacr(um) / G(aius) Seuius / Lupus / architectus / Aeminiensis / Lusitanus ex uo(to)*¹³⁷⁴

Existen dudas en torno al momento en que se erigió este faro que salvaguardaba de la peligrosa costa galaica a las naves que circulaban por el océano Atlántico. Los restos romanos que constituyen el corazón del actual monumento –que es una restauración realizada bajo Carlos III– se han atribuido a época de Trajano, datación con la que coincidimos. Es posible que existiese un primer faro de época augustea (incluso se ha planteado la existencia de uno prerromano, lo cual nos parece harto improbable)¹³⁷⁵, pero la onomástica de Gayo Sevio Lupo, propia de un ciudadano romano, unida a su lugar de procedencia, *Aeminum* (Coimbra), impone un *terminus post quem* en época flavia, cuando se concedió el *ius Latii* a toda Hispania. En época augustea *Aeminum* era todavía una *ciuitas stipendiaria*¹³⁷⁶ y, por tanto, ningún aeminiense podría haber tenido la ciudadanía. Así pues, la labor de este arquitecto en *Brigantium* ha de ser fechada con posterioridad al principado de Vespasiano, a finales del siglo I o, más probablemente, inicios del II d.C, momento en el que el faro habría sido restaurado, modernizado o reconstruido. Al igual que Hübner y Le Roux, entendemos que Cayo Sevio Lupo servía en el ejército en calidad de *architectus*, al igual que en el caso de los *architecti* a los que antes hemos aludimos¹³⁷⁷. Y no cabe duda de que las obras de este importante faro fueron supervisadas por uno o varios de los gobernadores que estuvieron por entonces al frente de la Hispania Citerior, los cuales, en sus visitas anuales al *conuentus Lucensis*, habrían visto la necesidad de restaurar el faro.

¹³⁷⁴ *CIL* II, 2559.

¹³⁷⁵ Arias Vilas, *A romanización de Galicia*, cit. p. 55.

¹³⁷⁶ Plin. *N.H.* IV, 118.

¹³⁷⁷ Es de la misma opinión Le Roux, “Armées et *operae*...” cit. p. 146, nt. 22.

El caso particular de las comunidades del Noroeste: Una hipótesis

En el Noroeste peninsular carecemos de testimonios epigráficos que nos hablen de la intervención de los gobernadores de la Citerior en las obras públicas de sus comunidades, ni siquiera en las sedes conventuales de *Bracara*, *Lucus* y *Asturica*¹³⁷⁸. Sin embargo, sabemos que en los territorios recién asimilados los gobernadores se encargaron de potenciar los nuevos centros territoriales de referencia ya desde finales de la República¹³⁷⁹, y, por ello, es muy probable que hombres como Lucio Sestio Quirinal o Paulo Fabio Máximo, que intervinieron activamente en la integración del Noroeste¹³⁸⁰, se comportaran de un modo similar a como lo hizo Gneo Julio Agrícola en Britania. Éste, según relata Tácito:

*Sequens hiems saluberrimis consiliis absumpta. Namque ut homines dispersi ac rudes eoque in bella faciles quieti et otio per uoluptates adsuescerent, hortari priuatim, adiuuare publice, ut templa fora domos extruerent, laudando promptos, castigando segnis: ita honoris aemulatio pro necessitate erat.*¹³⁸¹

Agrícola aprovechó la inactividad militar del invierno para animar a los miembros de las élites britanas que habían reconocido su autoridad a vivir de un modo pacífico y en un nuevo marco espacial de cuño romano. Para ello, los animaba a que costeasen la construcción de templos, foros o *domus*, felicitando a los que se involucraban en ello –en los primeros pasos del establecimiento del sistema evergético– y amonestando verbalmente a quienes se mostraban remisos, dado que su inactividad

¹³⁷⁸ Aunque sí parece segura la intervención de uno o varios gobernadores de la Citerior en la construcción del puente de *Lucus Augusti*, no sólo por su monumentalidad, sino porque se trataba de una de las sedes conventuales que visitaba en el Noroeste. Los restos romanos de sus pilares han sido datados en la primera mitad del siglo I d.C., poco después del nacimiento de la ciudad, y no cabe duda de que su condición de sede conventual propició su construcción, como parte del impulso dado por el poder central a este centro administrativo. Cf. Arias Vilas, “Lucus Augusti e o río Miño: as termas e o seu contorno” en A. Rodríguez Colmenero (ed.), *Actas Congreso ‘Los orígenes de la ciudad en el Noroeste hispánico’* (Lugo, 1997), Lugo, 1999, pp. 1209-1223, esp. pp. 1216-1220.

¹³⁷⁹ *Vid. supra* nt. 184.

¹³⁸⁰ Actividad de Quirinal: Edicto de Augusto de El Bierzo (Mangas – Sánchez-Palencia, *El Edicto del Bierzo: Augusto y el noroeste de Hispania*, León, 2000) y *Arae Sestianae* (*uid.* cap. 1). Actividad de Fabio Máximo en el Noroeste: *IRPLu* 19-20; *ILER* 1028.

¹³⁸¹ Tac. *Agr.* 21.

frenaba el desarrollo cívico de su comunidad. Los tres tipos de construcciones o espacios que Agrícola anima a construir no han sido elegidos al azar por Tácito, sino que tienen una importante significación, pues, como ha señalado Gros, no están vacías de contenido y se construyen con una funcionalidad concreta¹³⁸². Los templos, foros y *domus* abarcan las esferas principales en que está constituida la ciudad romana: los lugares donde se lleva a cabo el culto a los dioses oficiales; la plaza pública en la que se desarrollan las actividades políticas y económicas y en la que tienen lugar los principales rituales comunitarios; y, finalmente, las casas propias de la aristocracia, lugares de auto-representación de la misma a través de las cuales ésta se diferencia del resto de la población.

Así pues, los notables britanos comenzaron a asumir la organización cívica romana¹³⁸³. Los *templa* implicaban la participación de augures –colegio al que podía pertenecer el propio gobernador, como tenemos atestiguado en Hispania¹³⁸⁴– y el desarrollo del ritual romano de la *inauguratio*¹³⁸⁵, así como la construcción de templos a imitación de los grecolatinos. Todo ello no significaba el abandono de los dioses indígenas, sino su asimilación a dioses romanos, en un proceso natural de sincretismo del que hay numerosos ejemplos en Occidente¹³⁸⁶.

Los foros que se construyeron en los centros poblacionales potenciados por el poder romano en Britania conllevan la construcción de una serie de edificios situados en los mismos con unas funciones muy relevantes. En una colonia o municipio, aparte de los templos y, en concreto, del Capitolio, los foros presentaban una basílica, una curia, un lugar para el mercado. Evidentemente, Tácito está hablando de comunidades no privilegiadas, peregrinas, en las que se están dando los primeros pasos en su urbanización. Aun así, en esos primeros foros había de hallarse un lugar en el que se impartiese justicia y otro en el que se reuniese su élite dirigente, pues ambos espacios le

¹³⁸² Gros, “La ville...” cit. p. 210.

¹³⁸³ Sobre el desarrollo cívico y urbano de las *ciuitates* britanas: D. Mattingly, *An Imperial Possession: Britain in the Roman Empire (54 BC - AD 409)*, Londres, 2006, pp. 255-291; H. H. Scullard, *Roman Britain: Outpost of the Empire*, Londres, 1979, pp. 47-57.

¹³⁸⁴ J. Mangas, “Augurationes y augures en la Hispania romana”, en *Actas del II Congreso de Metodología y Didáctica de la Historia*, Cáceres, 1984, pp. 87-112.

¹³⁸⁵ Valetón, *De templis romanis*,

¹³⁸⁶ Por ejemplo el famoso *Mars Tilenus* de la zona de León o la *Minerua Sulis* de Bath, en Inglaterra. Cf. Mangas, “Cultos minorasiáticos en el Noroeste de la Hispania romana”, *Complutum* nº extra 6 (1), 1996, pp. 483-490, esp. p. 487, en donde también plantea la posibilidad de que Tileno sea una divinidad de procedencia minorasiática; B. Cunliffe, *Roman Bath*, 1969, p. 34, plate II (cabeza de la estatua de bronce de la diosa).

resultaban útiles al gobernador para la realización de dos cometidos de gran importancia: la aplicación de su jurisdicción y la consolidación de la cooperación de los notables locales con los que le convenía estar en buenas relaciones para segurar el control de la provincia. De este modo, la iniciativa del gobernador fue fundamental para la romanización de los indígenas, dado que gracias a sus indicaciones y a su actividad se integraban en el modo de vida romano, entendido éste como la organización jurídica (y, por ende, social) inherente a su sistema cívico¹³⁸⁷.

En las siguientes líneas Tácito continúa diciendo:

Iam uero principum filios liberalibus artibus erudire, et ingenia Britannorum studiis Gallorum anteferre, ut qui modo linguam Romanam abnuebant, eloquentiam concupiscerent. Inde etiam habitus nostri honor et frequens toga; paulatimque discessum ad delenimenta uitiorum, porticus et balinea et conuiuiorum elegantiam. Idque apud imperitos humanitas uocabatur, cum pars seruitutis esset.

Los britanos, siguiendo el consejo de Agrícola, comenzaron a educar a sus hijos en las artes liberales y empezaron a vestir la toga y frecuentar los pórticos y las termas, disfrutando de los placeres de la vida “a la romana”. Con ello, las élites indígenas se imbuían poco a poco del *éthos* aristocrático romano y de la *humanitas*. En Hispania Citerior podríamos tener un ejemplo de gobernador que, al igual que Agrícola, impulsó la construcción de unas termas. Las letras *M AE LEP* inscritas en un ladrillo hallado en el solar de las termas del puerto de *Oiasso* (Irún), se ha interpretado como una mención al Marco Emilio Lépido que gobernó la provincia en torno al 14 d.C., que sería el mismo que fue honrado como patrono en Uxama¹³⁸⁸. Este puerto en un territorio poco romanizado es, pues, otro ejemplo de la política de integración en las dinámicas socio-económicas imperiales. Asimismo, J. Edmonson también entiende que en época augustea los gobernadores de la Lusitania actuarían de forma similar a Agrícola,

¹³⁸⁷ Gros, “La ville...” cit.; P. López Barja de Quiroga, “El gobernador provincial romano de Cicerón a Plinio el Joven”, en M. Campagno – J. Gallego – C. García MacGaw (eds.), *Política y religión en el Mediterráneo antiguo*, Buenos Aires, 2009, pp. 289-304, esp. p. 302; R. Laurence – S. E. Cleary – G. Sears, *The City in the Roman West c. 250 BC – c. AD 250*, Cambridge, 2011, p. 5.

¹³⁸⁸ I. Rodá – M. Urteaga, “*Marcus Aemilius Lepidus* en un ladrillo de Oiasso (Irún)”, en *Ab Aquitania in Hispaniam: Mélanges P. Sillières, Pallas* 82, 2010, pp. 277-289. Para la inscripción de Uxama, desaparecida, ver: *CIL* II 2820. Anexo II: n° 28.

favoreciendo el desarrollo cívico y urbanístico de comunidades preexistentes como, por ejemplo, la *ciuitas Igaeditanorum* (Idanha-a-Velha, Portugal) o *Conimbriga* (Condeixa-a-Nova, Coimbra, Portugal)¹³⁸⁹.

Cierto es que el Noroeste de Hispania fue un territorio dominado por el poblamiento rural y disperso¹³⁹⁰ y que durante el Principado pervivieron los castros como núcleos poblacionales, pero los restos arqueológicos que indican que se produjo un importante desarrollo urbanístico en las tres sedes conventuales concuerdan perfectamente con el ejemplo de Agrícola. Al poder romano le interesaba fundamentalmente crear cabeceras administrativas en las que los gobernadores pudiesen desarrollar sus competencias jurisdiccionales y entablar contacto con las élites locales, que comenzaron a asentarse en ellas¹³⁹¹. Esas sedes conventuales se convirtieron, así, en ejemplos funcionales del nuevo orden romano, de la nueva organización jurídica –y por tanto social– que poco a poco fueron asumiendo los indígenas y que constituyó el pilar maestro de su ‘romanización’¹³⁹². La municipalización de Occidente supuso, pues, la implantación de un modelo organizativo comunitario de cuño romano, independientemente de que luego se viese plasmado en un mayor o menor desarrollo urbanístico¹³⁹³. Esa nueva organización social estuvo acompañada, además, de la asunción de una ideología y unos usos y costumbres cotidianos compartidos por la población de todas las provincias, tanto en las ciudades como en el medio rural, que tuvieron su reflejo en la cultura material y en la arquitectura y organización espacial¹³⁹⁴.

¹³⁸⁹ J. Edmonson, “Romanization and Urban Development in Lusitania”, en Blagg – Milette (ed.) *The Early Roman Empire...* cit. pp. 151-178, esp. pp. 162 y 169.

¹³⁹⁰ Todavía hoy es característico de Galicia.

¹³⁹¹ Véase el caso del *princeps Coporum* que vivía en *Lucus Augusti* (IRPLu 34). Cf. también A. Tranoy, *La Galice romaine*, París, 1981, p. 198.

¹³⁹² A. Tranoy, “Communautés indigènes et promotion juridique dans le nord-ouest ibérique”, en *Ciudad y comunidad cívica en Hispania (Siglos II y III d.C.) / Cité et communauté civique en Hispania*, Madrid, 1993, pp. 27-35, esp. pp. 31-32.

¹³⁹³ G. Pereira Menaut, “Cambios estructurales versus romanización convencional. La transformación del paisaje político en el Norte de Hispania”, en *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid, 1988, pp. 245-258, esp. p. 336; Andreu Pintado, “Construcción pública...” cit. p. 41.

¹³⁹⁴ Los castros sufrieron transformaciones internas, evidentes en la evolución de la planta de las casas, la organización del espacio intramuros (véanse los ejemplos de Viladonga, Sanfins, Briteiros) o, incluso, la erección de templos y mausoleos con esculturas, y el emplazamiento de necrópolis extramuros como en Monte Mozinho. El castro de Viladonga, además, fue creado en época romana. Cf. C. A. Ferreira de Almeida, “O Castrejo sob o domínio romano: a sua transformação”, en G. Pereira Menaut (ed.) *Estudos de cultura castrexa e Historia Antiga de Galicia*, Santiago de Compostela, 1983, pp. 187-198, esp. p. 190 (Monte Mozinho); C. Fernández Ochoa, “El impacto romano sobre el hábitat del NO (estado de la cuestión sobre los fenómenos de transición y articulación del territorio)”, *Actas del I Congreso Peninsular de Historia Antigua*, Santiago de Compostela, 1988, pp. 345-362; Tranoy, “Communautés indigènes...”

J.-M. Roddaz ha expresado con acierto que al final del principado de Augusto “même si la péninsule Ibérique demeurait largement rurale, la physionomie des cités s’était transformée, les relations ville/campagne s’étaient modifiées, les élites avaient évolué et, conscientes des nouvelles valeurs imposées par la conquête, revendiquaient l’adhésion aux moeurs des vainqueurs, transformant des communautés longtemps rétives à la domination de Rome en champ d’expérimentation de la romanisation”¹³⁹⁵.

La concesión de *ius Latii uniuersae Hispaniae* por parte de Vespasiano afectó también al Noroeste, en donde además de promocionar a las tres sedes conventuales, habría dado lugar a municipios como *Aquae Flauiae*, *Bergidum Flauium*, *Iria Flauia o Interamnium Flauium*, que, empero, no tendrían el mismo grado de desarrollo que los municipios flavios de la Bética¹³⁹⁶. Como han resaltado E. García y J. Andreu, el modelo del municipio latino se implantó en el Noroeste adaptado a las circunstancias locales y no debemos caer en el error de pretender hallar una *lex municipalis* como en la Bética, sino un funcionamiento municipal más sencillo. No se trataría, sin embargo, de dos tipos o grados de *municipia*, sino de distintas plasmaciones de un mismo expediente¹³⁹⁷. En Occidente Roma aplicó los mismos expedientes en todas las provincias, pero adaptándolos a las particularidades de cada territorio a fin de hacerlos más eficaces –al igual que había hecho precedentemente en Italia durante la República¹³⁹⁸. Además, la onomástica recogida en la epigrafía muestra la paulatina integración de los indígenas del medio rural y su acceso a la ciudadanía¹³⁹⁹.

cit. p. 31; Arias Vilas, “Lucus Augusti e o seu contorno...” cit.; Andreu Pintado, “Construcción pública...” cit. p. 48.

¹³⁹⁵ J.-M. Roddaz, “De la conquête à la pacification: la mutation des sociétés indigènes”, en Castillo – Rodríguez Neila – Navarro (eds.) *Sociedad y economía...* cit. pp. 15-26, esp. p. 15.

¹³⁹⁶ J. Andreu Pintado, *Edictum, Municipium y Lex: Hispania en época Flavia (69-96 d.C.)*, Oxford, 2004, pp. 141-144, con un análisis exhaustivo de la bibliografía al respecto.

¹³⁹⁷ García Fernández, “Sobre la función de la ‘lex municipalis’”, cit.; “El desarrollo de la municipalización...” cit. pp. 147-164; *El municipio latino...* cit.; Andreu Pintado, *Edictum, Municipium...* cit.

¹³⁹⁸ Cf. M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la Guerre Sociale*, Roma, 1978; E. Gabba, “Il processo di integrazione dell’Italia nel II secolo”, *Storia di Roma 2: L’impero mediterraneo I. La repubblica imperiale*, Turín, 1990, pp. 267-283, y “Dallo stato-città allo stato municipale”, en *Idem*, pp. 697-714; U. Laffi, “Il sistema di alleanze italico”, en *Idem*, pp. 285-304.

¹³⁹⁹ Arias Vilas, *A romanización...* cit.; A. M^a. Suárez Piñeiro, *A romanización en Galicia*, Noia, 2009.

Tácito, sin embargo, parece tirar abajo el carácter benéfico del fomento de la vida “a la romana” entre las élites britanas con la sentencia con la que cierra el capítulo 21:

Idque apud imperitos humanitas uocabatur, cum pars seruitutis esset.

En nuestra opinión, no obstante, esta sentencia no ha de ser entendida como una mera crítica a la dominación romana sobre los indígenas (lectura tradicional), sino como una reflexión más profunda sobre la falsa libertad de la que gozaban las élites en el Imperio hecha a propósito de la integración de los britanos¹⁴⁰⁰. Uno de los temas predilectos de Tácito es el de la libertad, sobre el que no deja de volver en cada una de sus obras: en los *Annales* y las *Historiae* muestra la decadencia de la *libertas* senatorial frente al poder de los emperadores; en el *Dialogus de oratoribus* se cuestiona si tiene sentido cultivar la oratoria cuando el debate político público ha desaparecido con la instauración del Principado¹⁴⁰¹, etc. También en el *Agricola*, obra primeriza que tiene por objeto la exaltación de su protagonista, suegro de Tácito, y no la descripción de la situación de los britanos antes y después de la conquista, a pesar de sus partes de contenido etnográfico. En ella Tácito muestra las dificultades que tuvo su suegro con Domiciano por haber descollado políticamente y cómo, a pesar de vivir bajo un tirano, hizo su carrera dignamente; pero también se vale del ejemplo de los britanos para reflexionar sobre los peligros que encierra el *otium*. Tras la conquista, las élites britanas que se congraciaron con los romanos aceptaron el nuevo contexto político y sus reglas a fin de mantener su preeminencia social, pero a costa de perder su condición guerrera y su soberanía sobre sus antiguas tribus. Asumieron paulatinamente las formas, usos y costumbres de la vida cívica romana y acabaron cayendo en los vicios del *otium*, degradándose al igual que la aristocracia romana bajo los emperadores. Tácito, por tanto, a través del ejemplo britano invita a reflexionar, de manera alusiva, sobre la *seruitus* en que había caído la aristocracia romana¹⁴⁰², salvo honrosas excepciones como la de su suegro Agrícola, cuya actitud “a la antigua” le costó la vida.

¹⁴⁰⁰ W. Liebeschuetz, “The Theme of Liberty in the *Agricola* of Tacitus”, en Ash (ed.), *Tacitus...* cit. pp. 73-94.

¹⁴⁰¹ S. Bartsch, “Praise and Doublespeak: Tacitus’ *Dialogus*”, en Ash, *Tacitus...* cit., pp. 119-154.

¹⁴⁰² Liebeschuetz, “The theme of Liberty...”.

Sin ser el romano un imperio culturalmente represivo, entendió que su perduración se reforzaría superando la mera dominación por la fuerza de las armas e integrando social y culturalmente a las élites de sus poblaciones sometidas¹⁴⁰³. Las élites locales resultantes de las guerras de conquista del territorio en cuestión –principalmente surgidas de las familias que habían apoyado a los romanos, además de los inmigrantes de Italia y otras provincias– participaron activamente, a tenor del desarrollo urbanístico de los centros de poder, pues solían buscar la reafirmación de su preeminencia social a través de los nuevos cauces de prestigio y unas relaciones preferentes con el poder romano, cuyo más alto representante en la provincia era su gobernador. Paralelamente, el modelo evergético se extendió por todas las provincias occidentales.

Conclusiones:

A tenor de las evidencias epigráficas antedichas se puede decir que en las provincias hispanas los gobernadores desempeñaron un papel importante desde época de Augusto en la promoción y construcción de infraestructuras provinciales de diversa índole (murallas, templos, termas, acueductos, puentes, vías), tanto si corrían a cargo de las comunidades locales como si eran sufragadas por el poder imperial. Es más, incluso algunos de ellos dedicaron algún edificio público erigido a sus propias expensas (templos, fundamentalmente). Hay que advertir, además, que si no contamos con más ejemplos epigráficos que mencionen explícitamente la intervención del gobernador en determinadas obras públicas de las ciudades ello no quiere decir que no las supervisase, sino que su labor no tuvo reflejo epigráfico, lo cual se debió en gran parte, al menos desde época severa (pero probablemente ya desde los Antoninos) a la disposición imperial que les prohibía hacer figurar su nombre en ninguna construcción pública. En este sentido, tampoco sabríamos nada acerca de la labor de Plinio en este ámbito si no se hubiesen conservado sus cartas. Paradójicamente, al mismo tiempo que el poder imperial prohibía a los gobernadores dejar constancia epigráfica de su nombre en las construcciones públicas, reafirmó sus competencias en la supervisión de las mismas, que se volvió más sistemática, hasta el punto de constituir uno de los aspectos más

¹⁴⁰³ M. W. Doyle, *Empires*, Ithaca/Londres, 1986.

relevantes y detallados de los abordados por Ulpiano en las partes conservadas de su tratado *de officio proconsulis*.

La diferencia entre las regiones recién asimiladas (como el Noroeste) y aquellas en las que el sistema municipal y el marco jurídico romano estuviesen bien asentados (como la costa tarraconense o el valle del Betis), con unas élites romanizadas, los gobernadores no tendrían que impulsar el desarrollo cívico de sus comunidades, sino supervisar su buen funcionamiento. En el ámbito de las obras públicas, esto se manifestaría en el equilibrio entre una ciudad bien dotada de edificios públicos e infraestructuras –que asegurasen su sostenibilidad, dentro de un ideal que combinaba funcionalidad y belleza– y unas cuentas públicas saneadas. Había que evitar que la ciudad entrase en el círculo vicioso de la decadencia económica y urbana, que podía llevarla a su desaparición.

En todo ello, los gobernadores de Hispania –fuesen *legati Augusti pro praetore* o procónsules– actuaban de acuerdo con la política imperial, siguiendo las instrucciones y resoluciones adoptadas por los emperadores en lo que respecta a la tutela de las ciudades de su provincia. Así, los gobernadores aparecen como ejecutores de las decisiones del poder central y la presencia epigráfica ubicua del nombre del emperador en todas las construcciones públicas no dejaba lugar a dudas a los provinciales acerca de quién era el responsable último del orden y la prosperidad que permitían esa construcción o, en los casos de evergetismo imperial, de su donación. Aun así, los homenajes tributados por algunas ciudades a ex-gobernadores como patronos¹⁴⁰⁴ evidencian que las élites locales eran conscientes de la necesidad y la relevancia de su intervención, bien como intermedarios entre ellos y el emperador, bien en su cometido de tutelar el buen funcionamiento de las comunidades locales, sobre todo colonias y municipios, y, en fin, de asegurar su prosperidad a través del mantenimiento del orden. Al igual que Plinio el Joven en Bitinia-Ponto, los gobernadores de Hispania basarían su supervisión y promoción de las obras públicas de sus provincias en dos principios fundamentales: su necesidad y la posibilidad que tenía cada ciudad de afrontar los gastos que supondría. Como hemos visto en el capítulo anterior, el poder imperial, sobre todo a partir del siglo II en adelante, buscó garantizar la estabilidad económica de las ciudades del Imperio confiriendo una gran responsabilidad en esta tarea a los

¹⁴⁰⁴ Que examinaremos en otro capítulo, en la Tercera Parte.

gobernadores provinciales. Por ello, no es de extrañar que su intervención en las obras públicas de las ciudades esté motivada no sólo por necesidades técnicas, sino también por esta política de control del endeudamiento.

Es muy sintomático que en su respuesta a las obras sobre las que Plinio le consulta Trajano le recuerde insistentemente la necesidad de que su realización se adecue a la capacidad económica de la ciudad en cuestión¹⁴⁰⁵. El emperador también encarga a Plinio que sepa a dónde ha ido a parar el dinero gastado en la obra inconcluso del acueducto de Nicomedia o que se asegure de que no se escatime en el dinero invertido para la construcción de las cloacas de Amastris¹⁴⁰⁶. En todos los casos de la correspondencia pliniana se trasluce una desconfianza del poder imperial –tanto del gobernador, Plinio, como del *princeps*– hacia la fiabilidad de los magistrados y senados locales en la gestión de estos asuntos. Las cuentas no solían estar claras y ya en época tardo-republicana el poder romano responsabilizaba de ello a los magistrados de las ciudades¹⁴⁰⁷.

Sin embargo, la densidad de problemamiento de algunas provincias (sobre todo las orientales), con cientos de ciudades, hacía difícil el cumplimiento de esta misión. Como ha señalado con acierto W. Eck en esos casos los gobernadores no podían proceder a una revisión regular y sistemática de todas las construcciones iniciadas, sino que se ceñirían a supervisar aquellos casos en los que las autoridades locales les hubiesen pedido ayuda o bien en aquéllos que el emperador les hubiese indicado en sus *mandata*. De ese modo, su intervención en tales asuntos sería reactiva más que proactiva, de un modo similar al *modus operandi* propuesto por F. Millar para el emperador¹⁴⁰⁸. En Hispania, como en general en Occidente, la situación sería menos crítica, incluso en la provincia de Hispania Citerior (la más extensa del Imperio), pues excepto en determinadas áreas –los valles del Betis y del *Hiberus*, así como la costa catalana y levantina– la concentración de ciudades era mucho menor y, por tanto, habría menos comunidades (sobre todo menos ciudades privilegiadas) que atender. Además, el propio itinerario conventual de los gobernadores de la Bética, la Citerior y la Lusitania, facilitaba la atención a esas regiones más pobladas, que es donde más intervenciones se

¹⁴⁰⁵ *Ep.* X, 23-24 (termas de Prusa) y 91 (acueducto de Sinope).

¹⁴⁰⁶ *Ep.* X, 38 y 99.

¹⁴⁰⁷ Cic. *Ad fam.* III, 8, 5: *Ego autem, cum hoc suscepissem non solum iustitia, sed etiam misericordia adductus, ut leuarem miseriis perditas ciuitates, et perditas maxime per magistratus suos...*

¹⁴⁰⁸ Eck, “Provincial Administration...” cit. p. 275; Millar, *The Emperor...* cit.

podrían producir. Aun así, como ya dijimos a propósito de la administración de justicia y de la revisión de las *rationes ciuitatum*, las sedes conventuales gozarían de una posición mucho más ventajosa al recibir la visita anual de los gobernadores, mientras que las ciudades más alejadas del itinerario conventual quedarían privadas de la atención de los gobernadores salvo que sus élites decidiesen enviar ante él una embajada, por lo demás bastante costosa, y que ésta fuese admitida en audiencia.

El buen gobernador buscaba en todo momento el bienestar de sus gobernados¹⁴⁰⁹, pero de manera selectiva, atendiendo, en primer lugar, las necesidades de las comunidades privilegiadas (colonias y municipios) o de aquellas que, sin serlo, tenían un importante papel administrativo (como las sedes conventuales del Noroeste a inicios del Principado), que debían ser potenciadas y dotadas de las infraestructuras necesarias para que funcionaran eficazmente como cabeceras territoriales y facilitasen la labor de los propios gobernadores.

¹⁴⁰⁹ Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 13 y 24; E. M. Smallwood, *Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius and Nero*, Bristol, 1983, nº 380 (edicto del procónsul de Asia Paulo Fabio Pérsico).

CAPÍTULO 3: INTERVENCIÓN EN LA ACUÑACIÓN MONETARIA.

Un ámbito vinculado a las finanzas de las ciudades hispanas en el que también intervinieron los gobernadores de sus provincias fue la acuñación monetaria. Su papel en este ámbito podía tener una doble vertiente: la misión de acuñar moneda “imperial”, es decir, aquélla que dependía directamente de la iniciativa del poder central, y la supervisión de las acuñaciones que realizaban en cecas propias determinadas ciudades de su provincia gracias al permiso del emperador. En Hispania tenemos ejemplos de ambos cometidos durante el principado de Augusto.

Desde la época de Sila, se produjo una descentralización de las acuñaciones romanas derivada del contexto político tardo-republicano. Los *imperatores* que se disputaron la hegemonía se hicieron fuertes a partir de sus mandos provinciales, los cuales implicaban, además del mando sobre legiones, el acceso a importantes recursos económicos, dentro de los que se hallaban la posesión de reservas propias de lingotes. Esta descentralización de las acuñaciones alcanzó su punto álgido entre el predominio de César, Pompeyo y Craso y el de los *tresviri rei publicae constituendae* Octaviano, Marco Antonio y Lépido, pero continuó a inicios del Principado, cuando los primeros emperadores sustituyeron a los antiguos dinastas como la autoridad potenciadora de la producción de moneda romana en las provincias. Así, Augusto abrió o mantuvo cecas de oro y plata en diversas ciudades provinciales; en Occidente, en concreto, potenció la producción de moneda “imperial” en dos ciudades fundadas según sus designios, *Augusta Emerita*, capital de la Lusitania, y *Lugdunum*, capital de una de las tres provincias en que se dividió la Galia Comata y santuario interprovincial del culto a Roma y Augusto. Asimismo, hay dos series de monedas de oro y plata que L. Laffranchi y H. Mattingly atribuyeron a cecas hispanas imperiales situadas en *Caesaraugusta* y *Corduba*¹⁴¹⁰. Según M^a. P. García-Bellido antes de la existencia de la

¹⁴¹⁰ RIC² I, pp. 1-2 y 25-27.

fundación de *Caesaraugusta* habría existido una ceca imperial en la colonia de Celsa, que emitió monedas de oro y plata durante el 19-18 a.C.¹⁴¹¹.

A nosotros nos interesan particularmente las acuñaciones que Publio Carisio, *legatus Augusti pro praetore* durante las Guerras Cántabras, realizó en *Augusta Emerita, colonia ciuium Romanorum* que él mismo se encargó de fundar en 25 a.C. por orden de Augusto con un contingente de veteranos (*emeriti*), dentro de la política de control de los territorios hispanos occidentales. A partir de entonces, esta colonia será potenciada por la propia familia imperial, gracias a cuyos *beneficia* alcanzará pronto un desarrollo urbanístico notable y será elegida capital de la provincia de Lusitania surgida de la división de la Hispania Ulterior en 15-13 a.C. A pesar de dedicar su estancia en Hispania casi enteramente a actividades militares vinculadas con el sometimiento del Noroeste, Publio Carisio ha de ser incluido también entre los gobernadores de la Hispania Ulterior, dado que en Roma, ya desde la República, no existió una distinción entre el general y el gobernador (algo propio de nuestra moderna idea de la división de poderes). Los promagistrados enviados a las provincias concentraban en su persona, como hemos visto, tanto la máxima autoridad coercitiva como jurisdiccional en virtud de su *imperium*, y únicamente eran superados por el propio emperador.

Carisio estuvo destinado en Hispania entre 26-22 a.C., en la primera fase de las Guerras Astur-Cántabras¹⁴¹², y dentro de las necesidades militares que lo ocuparon hubo de hacer frente al pago de la soldada a los legionarios y auxiliares que tenía bajo su mando (eran tres legiones). Con ese fin, pues, acuñó, por orden imperial, los ases, denarios y dupondios de *Augusta Emerita* que llevan en el anverso el retrato de Augusto y en su reverso una leyenda que menciona a Carisio con su título de legado imperial, bien sola (los ases y dupondios), bien acompañada de la representación de trofeos de guerra o panoplias (denarios y quinarios de plata)¹⁴¹³. Estas monedas de Publio Carisio son las únicas conocidas de las acuñadas en las provincias hispanas que mencionan el nombre de un gobernador y claramente han de relacionarse con sus funciones militares

¹⁴¹¹ M^a. P. García-Bellido, “El abastecimiento monetario al ejército durante el período augusteo y tiberiano”, en Morillo (ed), *El ejército romano...* cit. pp. 159-189, esp. pp. 164-166.

¹⁴¹² Dio LIII, 25, 8 (25 a.C.); LIV, 5, 1-3 (22 a.C.); Flor. II, 33; Oros. *Hist.* VI, 21, 10. Cf. *Fasti Hispanienses* pp. 131-132.

¹⁴¹³ *RIC*² n°1-25, pp. 41-42. Los denarios presentan al *princeps* en el anverso como IMP CAESAR AVGVSTVS y Carisio aparece en el reverso como LEG PR PR (1-10); en cambio, los ases mencionan en el anverso la potestad tribunicia del emperador, y en el reverso el título de Carisio es simplemente LEG AVG (11-25).

en un contexto bélico. Según García-Bellido, con el inicio de las acuñaciones realizadas en *Emerita Augusta* se abre una nueva etapa en la política monetaria imperial en Hispania: a partir de entonces las cecas de oro y plata permanecerán en las colonias y ya no dependerán de cecas castrenses controladas por generales¹⁴¹⁴. Sin embargo, quizá la moneda acuñada en el Noroeste sea una excepción a esta regla si, como veremos a continuación, su cronología puede ser retrasada unos años.

Existen, en efecto, dos series de monedas (la primera de sestercios, dupondios y ases, la segunda sólo de éstos) vinculadas a las guerras de conquista del Noroeste pero de las que no se sabe con certeza dónde pudieron haber sido acuñadas ni por quién. Se trata de las llamadas “monedas de la *caetra*”, cuya denominación se debe al escudo redondo característico de los pueblos del Noroeste que aparece representado en su reverso, a veces junto con el resto del armamento indígena (dos lanzas, una espada tipo falcata y un puñal). En su anverso aparece el retrato de Augusto acompañado de un caduceo y una palma y con la leyenda IMP AVG DIVI F. Las similitudes estilísticas con las acuñaciones emeritenses de Publio Carisio, así como la ausencia de la mención de la *tribunicia potestas*, han hecho que los especialistas fechen las series entre el 27 y el 23 a.C. y que J. B. Giard y L. Villaronga atribuyan la responsabilidad de su producción al mismo Carisio. Es probable que cada serie fuese acuñada en una ceca diferente, la segunda menor, más bien auxiliar de la primera a tenor de su peor calidad¹⁴¹⁵. No obstante, la paternidad de estas monedas dista de estar resuelta, al igual que su lugar de acuñación.

Recientemente, el numismático P. Núñez Meneses ha revisado toda la problemática que revisten las “monedas de la *caetra*”, realizando un exhaustivo estado de la cuestión al que remitimos. Este autor –siguiendo la línea abierta por diversos autores que lo han precedido– se inclina por la posibilidad de que el principal centro de acuñación de esta moneda se ubicase en el lugar de la futura *Lucus Augusti*, por entonces probablemente ocupado por un campamento. Así lo sugieren, por un lado, el hecho de que sea la ciudad de Lugo donde más ejemplares de esta moneda se han hallado –más cien, que suponen el 54,29 % del total de hallazgos y el 85,7 % del total

¹⁴¹⁴ García-Bellido, “El abastecimiento monetario...” cit. p. 163. El siguiente paso habría sido, según esta autora, la apertura de las cecas de *Corduba* y *Celsa* por parte de Agripa en 19 a.C. (p. 164).

¹⁴¹⁵ J. B. Giard, *Bibliothèque Nationale. Catalogue des Monnaies de l'Empire Romain I*, París, 1976, p. 45; L. Villaronga, *Numismática antigua de Hispania: iniciación a su estudio*, Barcelona, 1979, p. 497; *RPC I/1*, pp. 67-68.

en territorio gallego, según la estimación de Núñez Meneses—, seguida de lejos por Braga —con más de treinta—; y, por otro, el descubrimiento en Lugo de dos cospeles en blanco en la plaza de Santo Domingo (en el centro de la ciudad romana)¹⁴¹⁶. Asimismo, el epígrafe *L VI* hallado en un dintel de granito ha sido interpretado como una referencia a la *legio VI Victrix* y, por ende, a su presencia en el lugar de la futura *Lucus Augusti* durante las Guerras Cántabras¹⁴¹⁷. En efecto, la situación geoestratégica de *Lucus* parece haber sido idónea para utilizarla como base de operaciones durante la guerra de conquista al igual que la convirtió, en tiempos de paz, en el centro elegido por los gobernadores para realizar *conuentus iuridici*. Resulta bastante coherente que los lugares donde se hallarían las sedes conventuales de *Lucus Augusti* y *Bracara Augusta* hubiesen sido ya centros estratégicos durante la conquista y pacificación del Noroeste y que en ellos hubiesen funcionado las cecas que produjeron la caetra, vinculadas al ejército allí destacado.

También es difícil identificar al legado responsable de las acuñaciones. Frente a la tradicional atribución a Carisio¹⁴¹⁸, los autores antedichos que defienden la ceca lucense optan por el legado imperial que intervino en la guerra en los mismo años, Cayo Antistio Veto. Alföldy lo sitúa como el primer gobernador de la Hispania Citerior del Principado, entre el 27 y el 24 a.C., partiendo del testimonio de Dión Casio, que es la fuente que aporta más detalles acerca del desarrollo de las Guerras Astur-Cántabras, aunque no es exhaustiva ni siempre exacta. En concreto, Dión habla de la actuación de Antistio en el año 25, como consecuencia de que Augusto, aquejado de problemas de salud, se hubiera visto obligado a abandonar el frente de guerra y retirarse a *Tarraco*. Según se desprende de su narración, Antistio parece haberse ocupado del frente oriental

¹⁴¹⁶ P. Núñez Meneses, “La moneda lucense de la caetra”, *Omni* 8, 11/2014, pp. 92-117. Ver también: M. Vázquez Seijas, “Posibles emisiones de Augusto en Lugo”, *Numisma* XIV, nº70, 1964, p.37; L. Sagredo San Eustaquio, “Distribución de los ejemplares de bronce de la caetra”, en *Actas VIII Congreso Nacional de Numismática*, Avilés, 1992, pp. 503-549; A. Rodríguez Colmenero – M^a. C. Carreño Gascón, “Sobre Paulo Fabio Máximo y la fundación de *Lucus Augusti*: Nuevos testimonios”, en *Finisterrae. Hom. A. Balil*, Santiago de Compostela, 1992, pp. 389-416, esp. p. 394; S. Ferrer Sierra, “El posible origen campamental de *Lucus Augusti* a la luz de las monedas de la caetra y su problemática”, en *Lucus Augusti I. El amanecer de una ciudad*, A Coruña, 1996, pp. 425-446; García-Bellido, “El abastecimiento monetario...” cit. pp. 159 y 161.

¹⁴¹⁷ M^a. C. Carreño Gascón – A. Rodríguez Colmenero, “La trama urbanística de *Lucus Augusti*: génesis y evolución”, en Beltrán Fortes – Rodríguez Gutiérrez, *Hispaniae urbes...* cit. pp. 295-318, esp. pp. 297-298. Aunque estos autores reconocen que la ausencia de restos arqueológicos del campamento debilita esta argumentación (p. 298).

¹⁴¹⁸ Cf. Núñez Meneses, “La moneda lucense...” cit. pp. 94-99.

al mismo tiempo que Carisio lo hacía desde el sur, tomando en su avance *Lancia*¹⁴¹⁹. Pero de ser correcta esta hipótesis, Carisio, que se ocupaba del frente astur, sería el legado más cercano a *Lucus*.

Sin embargo, no vemos por qué ha de ceñirse la atribución de estas monedas sólo a uno de estos dos legados como ha hecho, en general, la historiografía que se ha ocupado de este problema. Esto se deriva de que muchos autores han asumido como *terminus ante quem* el 23 a.C., partiendo del presupuesto de que un hecho políticamente tan relevante en la evolución del principado como la renuncia al consulado por parte de Augusto y su asunción de la potestad tribunicia sin interrupción (desde entonces se le renovará anualmente), tendría que haberse visto reflejado en la titulatura presente en las leyendas monetales al igual que sucede en una de las series de monedas emeritenses de Carisio a la que hemos aludido antes¹⁴²⁰. No obstante, la titulatura IMP AVG DIVI F (o similar) no desapareció de las leyendas de las monedas con posterioridad al 23¹⁴²¹, pues, aunque renunció a reiterarse en el consulado, Augusto, al hallarse en el monte Albano, no dejó de tener el *imperium consulare* (pronto denominado *proconsulare*), que necesitaba para gobernar sus provincias¹⁴²².

Superada esta innecesaria restricción cronológica, las posibilidades de atribución de estas acuñaciones se amplían, por lo menos, hasta la conclusión definitiva de la guerra en 19 a.C. Precisamente, L. Sagredo San Eustaquio optó por esta fecha al entender la representación del escudo como un trofeo que conmemoraría el sometimiento final de los indígenas¹⁴²³. En nuestra opinión, su interpretación iconológica del motivo del escudo es correcta, pero existe una fecha que también resulta apropiada, el 22 a.C., pues en ese año se produjo la definitiva derrota de los astures, y de ella se derivó una paz permanente también para el territorio galaico. Cuenta Dión Casio que los astures y los cántabros, envalentonados con la llegada de un nuevo gobernador, Gayo Furnio, se volvieron a rebelar, pero éste demostró ser un general muy hábil y no

¹⁴¹⁹ Dio LIII, 25, 7.

¹⁴²⁰ *RPC* I/1, p. 67; Núñez Meneses, “La moneda lucense...” cit.

¹⁴²¹ Véanse las acuñaciones de las cecas provinciales de *Nemausus* (20-10 a.C.) o *Lugdunum* (15-13 a.C.); cf. *RIC* I, pp. 51-54. Aunque no fueron realizadas por gobernadores.

¹⁴²² Dio LIII, 32, 5: καὶ διὰ ταῦθ' ἡ γερουσία δῆμαρχόν τε αὐτὸν διὰ βίου εἶναι ἐψηφίσατο, καὶ χρηματίζειν αὐτῷ περὶ ενός τινος ὅπου ἂν ἐθελήσῃ καθ' ἑκάστην βουλὴν, κἄν μὴ ὑπατεύῃ, ἔδωκε, τήν τε ἀρχὴν τὴν ἀνυπάτον ἐσαεὶ καθάπαξ ἔχειν ὥστε μήτε ἐν τῇ ἐσόδῳ τῇ εἴσω τοῦ πωμηρίου κατατίθεσθαι αὐτὴν μήτ' αὐθις ἀνανεοῦσθαι. Cf. J.-L. Ferrary, “À propos des pouvoirs d'Auguste”, *CCG* 12, 2001, pp. 101-154, esp. pp. 115-116.

¹⁴²³ Sagredo, “Distribución...” cit.

sólo acabó con los focos de rebelión cántabra que afectaban a su provincia, sino que también ayudó a Carisio con los astures, que no volvieron a levantarse en armas¹⁴²⁴. Si Alföldy está en lo cierto y Gayo Furnio y Lucio Sestio Quirinal estuvieron en Hispania en los mismos años (22-19 a.C.)¹⁴²⁵, las acuñaciones de la *caetra*, además de conmemorar la derrota de astures y cántabros –definitiva en el caso de los primeros–, coincidirían con la creación de la provincia Transduriana, de la que Quirinal, como se desprende del Bronce del Bierzo, fue su primer gobernador. A él, por tanto, habría correspondido la acuñación de estas monedas por orden del emperador con el fin de pagar a sus tropas en la nueva *prouincia pacata*. Claro está que esta hipótesis necesita de más indicios para ser confirmada, pero es verosímil y encaja con la labor organizativa de Quirinal en el Noroeste, que, de ser cierta esta posibilidad, habría supuesto también la primera circulación monetaria de cierta entidad en territorio galaico, con la consabida influencia en la economía local¹⁴²⁶.

Las acuñaciones monetales locales que se venían produciendo en Hispania desde el período republicano no perduraron más allá de la dinastía Julio-Claudia. En época de Augusto y Tiberio aún eran bastante numerosas, y se encuadran en dos áreas principalmente: el valle del Ebro –cuyas cecas más importantes estaban en *Caesaragusta*, *Calagurris*, *Emporiae*, *Lepida/Celsa*, *Tarraco*, *Bilbilis* y *Turiaso*– y la Bética –donde destacan la capital provincial, *Corduba*, y las sedes conventuales de *Hispalis* y *Gades*¹⁴²⁷–, aunque hay algunos ejemplos en el sur de la Lusitania. El tipo monetario más abundante es el as, pero se acuñaron también otros tipos en menor grado y, por ejemplo, en *Gades* tenemos dupondios, tresses y sestercios. Bajo Calígula el número de ciudades con ceca se redujo a una en la Bética y siete en la Citerior –*Acci*, *Carthago Noua*, *Ercauica*, *Bilbilis*, *Caesaragusta*, *Oscá*, *Segobriga* y *Ebusus*–, y en tiempos de Claudio sólo seguía produciendo moneda esta última. A partir de este emperador, la moneda que circuló en las provincias hispanas procedía de Roma, aunque este numerario fue complementado con imitaciones locales de las monedas de Claudio,

¹⁴²⁴ Dio LIV, 5, 1-3.

¹⁴²⁵ *Fasti Hispanienses* pp. 6 y 133. Cuando se publicó esta obra (1969) todavía no se había descubierto el Bronce del Bierzo y, por tanto, se desconocía la existencia de la Transduriana. Sin embargo, las fechas del mandato de Quirinal, como vimos en la Primera Parte, se han seguido manteniendo.

¹⁴²⁶ Así lo indica el hallazgo de ejemplares de la “*caetra*” en diversos castros.

¹⁴²⁷ Sobre los tipos de las emisiones monetales béticas de época augustea: A. Padilla Arroba, “Imágenes monetales de las primeras acuñaciones provinciales romanas en el sur peninsular: Un análisis comparativo”, en C. González Román – A. Padilla Arroba (eds.) *Estudios sobre las ciudades de la Bética*, Granada, 2002, pp. 303-314.

que probablemente terminaron de producirse como consecuencia del auge de la ceca de *Lugdunum* a partir de Nerón¹⁴²⁸. Desde la primera mitad del siglo I d.C. en las provincias occidentales se comenzaron a usar exclusivamente monedas que seguían el modelo imperial de Roma. Las razones de este proceso de abandono de las acuñaciones locales resultan aún poco claras, pero actualmente los especialistas tienden a descartar las causas de tipo administrativo o económico y relacionar este proceso con el interés de las élites provinciales occidentales de emular a Roma, potenciado por el propio poder imperial; es decir, con el proceso general de romanización y de la construcción de una identidad común en Occidente¹⁴²⁹.

Desde Augusto, la producción de moneda fue monopolizada por el emperador y sólo de él se podía lograr permiso para realizar acuñaciones tanto en Roma como en las provincias, fuesen éstas imperiales o proconsulares¹⁴³⁰. Las cecas locales dependían, por tanto, del poder central, y era precisamente el gobernador quien actuaba como la autoridad provincial competente en su supervisión¹⁴³¹, siendo así el intermediario entre las comunidades y Roma. Particularmente interesantes para nuestro estudio son varias series de monedas de época augustea y tiberiana procedentes de la Bética y la Lusitania, así como de África Proconsular y Siria, que reflejan este intervencionismo del poder central en su acuñación a través de una leyenda que menciona que la comunidad en cuestión ha recibido ‘permiso’ para realizarla.

En las monedas procedentes de las ciudades de estas dos provincias hispanas –en concreto, las lusitanas *Augusta Emerita* y *Ebora* y las béticas *Corduba*, *Hispalis*, Itálica e *Iulia Traducta*¹⁴³²– es el emperador quien ha dado el permiso, y siempre se trata de

¹⁴²⁸ *RPC* I/1, p. 19. La ceca de *Lugdunum* no estaba destinada, como el resto de las provinciales, a proporcionar moneda localmente, sino que había sido creada con el fin de auxiliar a la ceca central de Roma. No era, por tanto, una ceca “provincial” *stricto sensu*, sino “imperial”; cf. *RIC*² I p. 2.

¹⁴²⁹ C. Howgego, “Coinage and Identity in the Roman Provinces”, en C. Howgego – V. Heuchert – A. Burnett (eds.), *Coinage and Identity in the Roman Provinces*, Oxford, 2005, pp. 1-17, esp. p. 14.

¹⁴³⁰ A. Burnett, *Coinage in the Roman World*, Londres, 1987, pp. 17-18; *RPC* I/1, pp. 1-2, quienes no dudan de la autoridad del emperador en esta materia incluso durante el breve período (23/22 a.C.) en que aparece en la leyenda de ciertas monedas SC, referencia a un *senatus consultum*.

¹⁴³¹ Howgego, “Coinage and Identity...” cit., p. 8.

¹⁴³² Se desconoce la ubicación exacta de *Iulia Traducta*, que estaría situada en la costa vecina a Mauretania. Durante mucho tiempo se identificó con Tarifa, pero hoy ha ganado fuerza su ubicación en la bahía de Algeciras: García y Bellido, “Las colonias romanas de Hispania” cit. pp. 493-494 (Tarifa); E. Gozalbes Cravioto, “*Iulia Traducta* y las colonias de Augusto en el norte de Marruecos”, en González – Saquete Chamizo (eds.), *Colonias...* cit. pp. 249-272, esp. pp. 251-252 (Algeciras); *RPC* I/1, p. 83. N. K. Mackie, “Augustan Colonies in Mauretania”, *Historia* 32/3, 1983, pp. 332-358, esp. pp. 343-348 la situó al otro lado del Estrecho de Gibraltar, en territorio norafricano, pero esa posibilidad ha sido descartada por la historiografía.

Augusto, vivo o divinizado ya bajo Tiberio, siguiendo la fórmula *PERMISSV CAESARIS AVGVSTI*, abreviada o no, y a veces con variantes en el título del *princeps* (*Imperatoris Caesaris Augusti* o simplemente *Augusti*, etc.). Como señalan los autores de *Roman Provincial Coinage*, el permiso imperial sería una *conditio sine qua non* para que funcionasen todas las cecas provinciales, pero cabe preguntarse el porqué de que algunas ciudades decidiesen hacer mención explícita de un “permiso del emperador” en determinados tipos monetales propios. Como han señalado estos autores, se trataría de una forma usada por algunas ciudades para dotar de prestigio a sus acuñaciones¹⁴³³. Sin embargo, en nuestra opinión, es probable que en los ejemplos emeritenses ese permiso se esté refiriendo al tipo monetario concreto que contiene esta leyenda y, por tanto, es necesario relacionarla con las imágenes representadas que acompaña, que podrían reflejar una intervención más directa del poder imperial en su diseño.

En la colonia *Augusta Emerita*, las monedas que presentan en su anverso o reverso la leyenda *PERMISSV CAESARIS AVGVSTI* (o similar) se pueden dividir en tres grupos, todos de ases. El primer grupo presenta en su anverso la representación de una cabeza femenina, indentificada como diosa fluvial (que no puede ser otra que el río Anas), y en el reverso, rodeado de la leyenda antedicha, bien la imagen de un sacerdote que establece el *pomerium* de la nueva colonia guiando una yunta de bueyes, bien un águila entre dos *signa*, aludiendo a los veteranos allí asentados¹⁴³⁴. El segundo grupo presenta en el anverso la cabeza radiada del Divino Augusto, como señala la leyenda, y en el reverso un altar consagrado a la *Providentia* (Augusta) con permiso del emperador¹⁴³⁵. Finalmente, el tercer grupo está dedicado a Livia, cuyo retrato adorna el anverso, mientras que en el reverso aparece una representación de la colonia o la figura sedente de la propia Livia en un trono¹⁴³⁶. En este caso, la leyenda que recuerda el permiso imperial va situada en el anverso. Es muy probable que en las conmemoraciones de la familia imperial hubiese sido necesario que las representaciones que presentan recibiesen la aprobación explícita del emperador Tiberio, puesto que se trataba, por un lado, de los primeros pasos dados en el culto al Divino Augusto en Occidente, y, por otro, de la representación de su viuda, Livia Augusta, en majestad. El legado imperial que gobernaba la Lusitania habría tenido, pues, un claro papel de

¹⁴³³ *RPC* I/1, pp. 2-3.

¹⁴³⁴ *Idem*, n°5-7 (ritual) y 8 (águila) y I/2, pl. 1.

¹⁴³⁵ *Idem*, n°28 y 34-35, pl. 2-3.

¹⁴³⁶ *Idem* n° 46-47, pl. 3.

intermediario del emperador y de supervisor de que el modelo aprobado por él se llevase a efecto sin alteraciones. Así pues, la iniciativa habría partido de la colonia, que querría rendir homenaje al Divino Augusto y a Livia, pero antes de fabricar las monedas habría solicitado la aprobación de Roma a través del gobernador provincial. En la representación del Divino Augusto parece claro que copió un modelo emitido en Roma¹⁴³⁷, lo cual confirmaría la intervención directa del poder central en su elección. No se puede descartar que en los tipos que presentan el altar dedicado al culto imperial el permiso del emperador se refiera también a la consagración de éste.

Augusta Emerita, *Corduba*, *Hispalis* e *Iulia Traducta* eran *coloniae ciuium Romanorum*, Itálica municipio romano y parece que *Ebora* podría haber disfrutado por entonces del *ius Latii*. El hecho de que ninguna de estas comunidades sea peregrina, habiendo por entonces algunas que acuñaban moneda en Hispania, podría indicar que ese *permissus Augusti* se derivó de la atención especial del poder imperial hacia las comunidades por él fundadas o promocionadas. De hecho, salvo algunas excepciones, la gran mayoría de las cecas hispanas conocidas durante el Principado se hallaba en comunidades privilegiadas (municipios o colonias)¹⁴³⁸. Además, *Emerita* y *Corduba* eran las capitales de sus respectivas provincias e *Hispalis* sede conventual, así que la comunicación con el emperador se habría visto favorecido por la presencia de los gobernadores en ellas, sobre todo en las dos primeras –donde tenían su residencia. A pesar de que estas acuñaciones eran responsabilidad de las autoridades de cada ciudad, el modelo de los tipos monetales que representaban al emperador o su familia procedían de Roma y, sin duda, los gobernadores actuaron como intermediarios oficiales y velaron por que se respetaran. En este sentido, no ha de descartarse que los tipos monetales de aquéllas que explicitaron el permiso del emperador hubiesen sido supervisados más de cerca por los gobernadores de sus provincias.

A diferencia de las acuñaciones hispanas, en África y en Siria la autoridad mencionada de la que emana el permiso son los propios gobernadores¹⁴³⁹, aunque el emperador no deja de ser recordado en las monedas que lo mencionan. Los dos

¹⁴³⁷ *RPC* I/1, p. 69, donde se menciona *RIC* 72, datado en 15-16 d.C. (para nº28) y 81, datado en 22/23-30? (para nº 34-35).

¹⁴³⁸ F. Chaves Tristán, “Las amonedaciones hispanas en la Antigüedad”, en J. Andreu Pintado – J. Cabrero Piquero – I. Rodà de Llanza (eds.) *Hispaniae: Las provincias hispanas en el mundo romano*, Tarragona, 2009, pp. 47-97, esp. p. 67.

¹⁴³⁹ *RPC* I/1, p. 2.

ejemplos sirios son ases y se refieren a la actividad del legado imperial M. Junio Silano en su reverso; sin embargo, el *princeps* está muy presente en ambos tipos: en uno, el anverso presenta la cabeza de Augusto con la leyenda IMP AVG, mientras que en el reverso del otro tipo la leyenda AVG está rodeada de la de Silano¹⁴⁴⁰. Todo ello muy natural tratándose de un legado de Augusto que actuaba en su nombre.

En cuanto a los tipos africanos, proceden de la colonia de Paterna y de las *ciuitates liberae* de *Cercina* y *Thaena*. En *Cercina* contamos con un solo tipo de as que indica el permiso del procónsul, en concreto Lucio Volusio Saturnino (7-6 a.C.): éste se menciona en la leyenda del anverso, rodeando la cabeza de Roma/Minerva tocada con un yelmo; en el reverso aparece representado Augusto con un *lituus* a su lado, rodeado de una leyenda con su titulación¹⁴⁴¹. En *Thaena* también sólo contamos con una serie de dupondios que explicitan la obtención del permiso de un procónsul, Aulo Vibio Habito, en 13-17 d.C: presenta en el anverso la cabeza del dios Serapis con la leyenda T'YNT y en el reverso un retrato que no ha sido identificado¹⁴⁴².

Las monedas de la *Colonia Iulia Paterna* que mencionan el permiso del procónsul se encuadran cronológicamente a inicios del principado de Tiberio y se refieren a Lucio Apronio (21 d.C.), Quinto Junio Bleso (22/23 d.C.) y Publio Cornelio Dolabela (23 d.C.). Junto a ellos se menciona también a un magistrado de la colonia. Los sestercios y dupondios de Lucio Apronio están dedicados a Tiberio (con retrato y titulación imperial en la leyenda) en el anverso; los sestercios presentan en el reverso a Mercurio y los dupondios la figura de Livia sedente. Ambos tipos llevan la leyenda PERMISSV L APRONI PROCOS III C SEX POM CELSO, gracias a lo cual sabemos que se realizaron en el tercer año de mandato de este procónsul en África. Con permiso de Lucio Apronio también se acuñó una moneda dedicada a Druso César (presente en el anverso), pero en su reverso sólo comparece el nombre del procónsul en torno a Mercurio. El modelo de los antedichos sestercios y dupondios se volvió a acuñar en el segundo año del proconsulado de Quinto Junio Bleso, sucesor de Apronio y personaje famoso gracias a la atención que le dedica Tácito en sus *Annales*. Finalmente, el

¹⁴⁴⁰ RPC I/1, n° 4541-4542, probablemente procedentes de Berytus.

¹⁴⁴¹ RPC I/1, n° 802; I/2, pl.45.

¹⁴⁴² RPC I/1, n° 810; I/2, pl. 46.

siguiente procónsul de África, Publio Cornelio Dolabela aprobó la acuñación del tipo Tiberio/Livia y Druso César/Mercurio (anverso/reverso)¹⁴⁴³.

Además, a estos casos de acuñaciones '*permissu proconsulis*' hay que sumar las series de monedas precedentes de época augustea en las que aparecen representado en el reverso el retrato de diversos procónsules con la cabeza desnuda, acompañado de una leyenda con su nombre en nominativo: P. Quintilio Varo (8/7 a.C.) en una serie de dupondios *Hadrumentum* y otra de *Achulla*¹⁴⁴⁴; L. Volusio Saturnino (7/6 a.C.) también en una serie de dupondios de *Hadrumentum* y en tres de *Achulla*¹⁴⁴⁵; Fabio Africano (6/5 a.C.) en una moneda de *Hippo Regius* de cronología discutida¹⁴⁴⁶; y A. Pasieno Rufo en otra de *Thaena* (3 d.C.). En época de Tiberio, L. Apronio también es mencionado en una moneda de *Thaena* sin la fórmula '*permissu...*'. Al igual que en los casos que explicitan el permiso del procónsul, en los anversos de todas estas series la presencia de Augusto (en la leyenda y representado) es constante, excepto en la de Saturnino de *Hadrumentum*, en la que el anverso es ocupado por el Sol y una leyenda referida a la ciudad, y en la serie de Fabio Africano de *Hippo Regius*, en cuyo anverso se honra a Tiberio (cabeza desnuda).

La serie de sestercios de *Thaena* en la que aparece representado Lucio Pasieno Rufo, es particularmente interesante por la leyenda referida a éste: L PASS[---]VS RVFVS IMP. Es decir, la ciudad le atribuye el título de *imperator* en lugar del de procónsul, sin duda derivado de sus éxitos militares en la provincia. El anverso, sin embargo, está dedicado a Augusto, retratado con la cabeza desnuda y un *lituus* al lado¹⁴⁴⁷, lo que disminuye el impacto de la presencia del procónsul en el reverso y su título de *imperator*. Con todo, y a pesar de que Rufo era amigo personal de Augusto, semejante homenaje no debía de resultarle cómodo al *princeps* incluso en una fecha avanzada de su principado como el 3 d.C.: el título de *imperator* confería al procónsul Rufo un prestigio en el ámbito militar que podía rivalizar con el del propio Augusto y refleja el poder que aún podían atesorar por entonces los procónsules de África.

¹⁴⁴³ Cf. *RPC* I/1, n° 762-764 (L. Apronio); 765-767 (Junio Bleso); 768-770 (Dolabela). *RPC* I/2, pl. 43.

¹⁴⁴⁴ *RPC* I/1, n° 776 y 798.

¹⁴⁴⁵ *RPC* I/1, n° 778 y 800-801.

¹⁴⁴⁶ *RPC* I/1, n° 710.

¹⁴⁴⁷ *RPC* I/1, n° 808; I/2, pl. 46.

Ante esta casuística, una pregunta se hace inevitable: si Siria y la Lusitania eran ambas provincias imperiales y África y la Bética proconsulares, ¿por qué en las hispanas el permiso de acuñación mencionado en las antedichas series de monedas las vincula directamente con el emperador y en las otras con sus gobernadores? Ciertamente que los gobernadores de Siria y África eran de rango consular y los de estas dos provincias hispanas, pretorio, pero eso no influía en sus funciones, sólo en su prestigio. Además, como dijimos más arriba siguiendo a los autores del *RPC*, el emperador era el único que poseía, desde Augusto, la autoridad para permitir el funcionamiento de cecas en todo el Imperio y, por tanto, todos los gobernadores debían remitirle a él las peticiones de acuñación que se les hiciesen llegar. Puede tratarse de excepciones, sobre todo en el caso único de Silano en Siria, pero no deja de llamar la atención tantas menciones (acompañadas a veces incluso de retratos) de gobernadores en monedas africanas y que tres procónsules sucesivos de África, a finales del principado de Augusto e inicios del de Tiberio, sean mencionados explícitamente como la autoridad a la que se requirió la aprobación.

Estaríamos tentados de atribuir todo esto a la independencia y poder de los procónsules de África en un período temprano del Principado, pero el ejemplo de Silano, legado imperial de Siria, desbarata esa hipótesis. Y, además, en todas estas series de monedas su anverso está dedicado a Augusto, signo de reconocimiento de la autoridad de éste. Por tanto, en nuestra opinión sólo cabe pensar que en esta elección de incluir el nombre o el retrato de los procónsules en determinadas acuñaciones no influyó ninguno de ellos, sino que se derivó de una decisión de las ciudades responsables de las mismas.

A pesar de que los procónsules no podían decidir autónomamente la concesión de la fabricación de moneda, las ciudades, al haber tratado con ellos y no con el emperador, probablemente entendieron que eran la autoridad competente en la provincia; y no erraban, pues sin duda se trataba de la instancia gubernativa superior más cercana y accesible a la que podían recurrir en África. Estamos de acuerdo con J.-P. Martin en que en África tanto las series que mencionan a los procónsules en nominativo como las que presentan la fórmula '*permissu proconsulis*' han de ser interpretadas como una alusión a que esas emisiones se llevaron a cabo con la

acquiescencia de las autoridades romanas, que era obligatoria¹⁴⁴⁸. Además, en nuestra opinión es muy relevante el hecho de que, salvo la *colonia Paterna*, todas estas ciudades africanas –*Hadrumentum*, *Achulla*, *Thaena* e *Hippo Regius*– sean *ciuitates liberae* por entonces¹⁴⁴⁹. Las ciudades libres gozaban de autonomía plena en la gestión de sus asuntos, ajenas a la injerencia del poder imperial, pero la mención del procónsul en el reverso de estas emisiones, junto con el homenaje tributado al emperador en el anverso, busca sin duda un doble objetivo: congraciarse con el poder imperial –al que, al fin y al cabo, debían el respeto de su condición “libre”– y también con los propios procónsules, y buscar un fuerte respaldo para sus emisiones que las dotase de una mayor fiabilidad entre sus posibles usuarios con vistas a favorecer las transacciones comerciales en la provincia, explicitando el apoyo que ambos les habían otorgado. No cabe duda, además, que en la representación y titulación del emperador habrían de ser guiados por los procónsules, que, como ya dijimos, eran los intermediarios utilizados por el emperador para asegurarse de que las emisiones que habían concedido se realizasen según el modelo acordado con la ciudad en cuestión.

En cuanto a la Bética y la Lusitania, la alusión al permiso de Augusto no implica que estas ciudades contactasen directamente con él, sino que se entendía que este *beneficium* se debía solamente al emperador y que la mayor fuente de legitimidad provenía de su mención más que de la de los gobernadores de la Bética y la Lusitania. Quizá influyó en esta decisión el hecho de que toda Hispania había estado bajo su control directo durante un período importante (36-15/13 a.C.). Con todo, de nuevo resultó clave la actuación de los gobernadores como intermediarios entre las comunidades locales y el poder central.

Conclusiones

Las evidencias monetales que antes hemos analizado revelan que en época de Augusto y Tiberio los gobernadores de Hispania tuvieron un importante papel en la

¹⁴⁴⁸ J.-P. Martin, “À propos des monnaies d’Afrique proconsulaire sous Auguste et Tibère”, en B. Cabouret – A. Groslambert – C. Wolff (eds.) *Visions de l’Occident romain. Hommages à Y. Le Bohec* 1, París, 2012, pp. 261-270, esp. pp. 263 y 270.

¹⁴⁴⁹ *Achulla*: Plin. *N.H.* V, 30. *Thaena* no aparece en la *formula prouvinciae* de Plinio el Viejo pero sabemos que se posicionó del lado de César en la guerra civil (*B. Afr.* 62, 2) y fue premiada por éste seguramente con la condición de ciudad libre (*RPC* I/1 p. 203). Para el estatuto de las demás *vid.* Primera Parte, Capítulo 2.

implantación del sistema monetario imperial en sus provincias, manifestándose su intervención en en dos cometidos diferentes.

Por un lado, en los territorios recién conquistados (el Noroeste) o con un desarrollo cívico menor (Lusitania) llevaron a cabo las primeras acuñaciones realizadas en ellos por iniciativa imperial. Así, P. Carisio supervisó las primeras acuñaciones realizadas en *Augusta Emerita*, en las que incluyó su nombre. Las primeras monedas emitidas en la ceca de *Emerita* tuvieron por objeto prestigiar a la nueva colonia augustea y potenciar su despegue económico, y deben relacionarse con el papel que tuvo Carisio en la dirección de su fundación, siguiendo las instrucciones del *princeps*. Asimismo, estas acuñaciones indirectamente también favorecieron el reforzamiento de la circulación de moneda imperial en la Lusitania y, por ende, la potenciación de la región emeritense en los circuitos comerciales peninsulares, sobre todo en relación al suroeste¹⁴⁵⁰.

En el Noroeste, uno de los legados imperiales que tuvo bajo su control el Noroeste se encargó de acuñar las llamadas monedas “de la *caetra*”, probablemente en *Lucus Augusti*, con el fin de pagar a las tropas allí destinadas durante las Guerras Astur-Cántabras. Frente a las teorías que proponen a Publio Carisio o a Cayo Antistio como responsable de la acuñación de la *caetra*, nosotros proponemos la posibilidad de que su emisión corriese a cargo del primer gobernador de la Transduriana, Lucio Sestio Quirinal, en 19 a.C., momento en el que se aseguró la paz definitiva con los astures (de la se beneficiaron también los galaicos) y se procedió a la primera organización provincial de estos territorios. Con todo, fuera quien fuese el gobernador responsable, lo cierto es que la circulación de la *caetra* supuso la primera implantación de un sistema monetario en el Noroeste, coadyuvando a la integración de sus poblaciones en las dinámicas económicas imperiales y a la atracción de comerciantes romanos a los nuevos centros regionales que funcionarán como sedes conventuales, como los que están atestiguados en *Bracara* bajo los Julio-Claudios¹⁴⁵¹. Asimismo, ha de tenerse en cuenta la relevancia de la moneda como elemento identitario que, a la par que la difusión del

¹⁴⁵⁰ J. C. Saquete Chamizo, *Las élites sociales de Augusta Emerita*, Mérida, 1997, pp. 67-68; J.-P. Bost – M. Martín Bueno – J.-M. Roddaz, “L’Aquitaine et le Nord de l’Hispanie sous les empereurs Julio-Claudiens”, en *L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux*, Burdeos, 2005, pp. 17-50, esp. p. 33; Chaves Tristán, “Las amonedaciones...” cit. p. 69.

¹⁴⁵¹ Véase los *ciues qui negotiantur Bracaragustae* en 25-33 d.C.: *CIL* II, 2423.

latín (presente en también en las acuñaciones) constituyó un factor de unidad entre las provincias occidentales¹⁴⁵².

Por otro lado, los gobernadores de Hispania tuvieron un importante papel en la implantación de los modelos monetales de Roma en las cecas que funcionaron en las ciudades de sus provincias durante el período julio-claudio. Desde Augusto, el emperador era el único que podía autorizar nuevas acuñaciones monetales y, con Howgego y los editores de *Roman Provincial Coinage*, entendemos que los gobernadores provinciales de Hispania actuaron como intermediarios entre él y esas ciudades tanto en la difusión de los modelos que éstas querían emular para demostrar su fidelidad al emperador como en lo que se refiere a la autorización de las emisiones que éstas realizaron por entonces. En este sentido son especialmente elocuentes las series de monedas de *Emerita Augusta*, *Ebora*, *Corduba*, *Hispalis*, *Iulia Traducta* e Itálica que presentan en su reverso la leyenda PERMISSV CAESARIS AVGVSTI (o similar). Esto no significa que las series que no mencionan tal permiso no tuvieran necesidad de él, sino que las autoridades locales de estas ciudades privilegiadas –todas colonias, excepto Itálica (*municipium c. R.*) y *Ebora* (comunidad de derecho latino)– quisieron con ello dotar de mayor prestigio estas emisiones aludiendo a la legitimidad que les otorgaba el permiso imperial. El mismo propósito guió en África Proconsular a las *ciuitates liberae* y la colonia Paterna que bajo Augusto y Tiberio mencionan el permiso de la autoridad romana, aunque en su caso se refieran a un procónsul. Ello no quiere decir que el gobernador de África tuviera autonomía en tales decisiones o que gozase de competencias suplementarias, sino que ha de relacionarse con una elección propia de estas ciudades, que con la mención del procónsul en el reverso y la representación del emperador en el anverso buscarían ofrecer a los usuarios de ese numerario las máximas garantías acerca de su fiabilidad. Las *ciuitates liberae* eran plenamente autónomas para escoger sus tipos monetales, pero, con todo, no dejan de incluir el emperador en ellas. En las emisiones realizadas en cecas hispanas, no cabe duda de que las representaciones y titulatura del emperador o de los miembros de la familia imperial habrían debido ser aprobadas por el poder imperial¹⁴⁵³. En nuestra opinión, esa concesión habría necesitado de la mediación del gobernador, en calidad de máxima autoridad romana en la provincia

¹⁴⁵² A. Suspène, “Une monnaie pour un Empire? Approche monétaire de l’Occident romain de la fin de la deuxième guerre punique à la mort de Commode”, en Hurllet (dir.) *Rome et l’Occident...* cit. pp. 229-247, esp. p. 245.

¹⁴⁵³ Ando, *Imperial Ideology...* cit. pp. 215-228.

y enlace privilegiado y directo con el emperador. En nuestra opinión, esta supervisión de los tipos monetales sería más cuidadosa en aquéllos casos que afectasen directamente a puntos fundamentales de la política imperial, como el culto al Divino Augusto. En este sentido, es verosímil que la mención del “permiso del emperador” en las emisiones monetales emeritenses que en época de Tiberio representan al *Diuus Augustus* y las que muestran a Livia sedente en majestad indique una supervisión más controlada desde Roma de las representaciones que las decoraban respecto al resto de tipos más genéricos. Si Tiberio encomendó al procónsul de Asia la supervisión de las obras del templo que le dedicaron sus ciudades a él, a Livia y al Senado en 26 d.C.¹⁴⁵⁴, es verosímil que también confiase a los gobernadores de la Lusitania el control de estas acuñaciones emeritenses con las que la colonia buscaba también demostrar su fidelidad a la familia imperial rindiendo homenaje al Divino Augusto y a su viuda y madre del nuevo emperador.

Así pues, la intervención de los gobernadores de las provincias hispanas en el ámbito de las acuñaciones monetales, bien por iniciativa imperial, bien de las comunidades locales que tenían una ceca, muestran nuevamente el importante papel que desarrollaron como portavoces del emperador e intermediarios entre éste y las comunidades de su provincia, asegurando la comunicación institucional entre el centro del imperio y la periferia y la correcta aplicación de las decisiones imperiales.

¹⁴⁵⁴ Tac. *Ann.* IV, 56.

CAPÍTULO 4: INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA TRIBUTARIO PROVINCIAL.

Desde el período republicano, una de las responsabilidades de los gobernadores provinciales fue la supervisión de la correcta recaudación de los impuestos sobre las comunidades de su provincia que fuesen tributarias, bien a través del control de los publicanos (como en Asia), bien dirigiendo las acciones del personal del ejército en aquellos territorios donde se encargasen de la recaudación¹⁴⁵⁵. Sin embargo, la percepción que la aristocracia romana tuvo de esta misión fue igual en todas las provincias. Los magistrados enviados a provincias como las dos Hispanias, sumidas en un constante ambiente bélico y expansionista, se volcaron durante el siglo II a.C. en la conquista de nuevo territorio y basaron su relación con los indígenas sometidos en el marco del *ius belli* y de la *deditio*, que los dotaba de un poder absoluto. En el plano tributario, esto conllevó abusos de poder y extorsiones sobre las comunidades indígenas e, incluso, sobre las consideradas “aliadas”, lo que empujó a éstas, en una fecha tan temprana como el 171 a.C., a reclamar el amparo del Senado. La audiencia que se les concedió en Roma dio lugar a una de las primeras medidas de control y de condena conocidas sobre la actividad de los gobernadores, y el Senado prohibió que los gobernadores impusiesen prefectos a las comunidades para proceder a la recaudación a nivel local, delegando esta responsabilidad en sus propias autoridades¹⁴⁵⁶. Nótese, sin embargo, que los hispanos eligieron como sus representantes (*patroni*) en el proceso a cuatro senadores que habían sido sus gobernadores, lo cual prueba que los abusos no eran una práctica generalizada¹⁴⁵⁷.

En cambio, en las provincias más desarrolladas y plenamente pacificadas (esto es, la helenófonas), los gobernadores tendieron a establecer una cooperación con las élites y

¹⁴⁵⁵ Por ejemplo en un territorio recién asimilado debían organizar su sistema tributario: *Lex de prouinciis praetoris*, Copia de Cnido, col. IV, l. 5-7. Sigo la edición de Crawford, *Roman Statutes...* cit. p. 241 (texto griego), 250 (traducción latina) y 264 (comentario). En general: A. H. M. Jones, “The Aerarium and the Fiscus”, en *Studies in Roman Government and Law*, Oxford, 1960, pp. 99-114, esp. p. 102.

¹⁴⁵⁶ Liv. XLIII, 2.

¹⁴⁵⁷ Liv. XLIII, 2: *Vocatis in curiam legatis recitatum est senatus consultum, iussique nominare patronos. Quattuor nominauerunt, M. Porcium Catonem, P. Cornelium Cn. F. Scipionem, L. Aemilium L. F. Paulum, C. Sulpicium Gallum*. Cf. Laurence – Cleary – Sears, *The City...* cit. p. 35.

autoridades locales y, sobre todo a partir del siglo I a.C. en adelante, manifestaron una percepción más compleja de los “aliados”, constatando que la seguridad de éstos redundaba en la prosperidad del Imperio. Así, Cicerón, entre las indicaciones que dio a su hermano sobre los puntos principales que debería atender en su gobierno de Asia, menciona reiteradamente la importancia de que se realizase una imposición equitativa sobre los habitantes de las comunidades provinciales¹⁴⁵⁸. A su juicio –que era el de muchos de sus coetáneos senatoriales–, resultaba justo que las provincias cedieran parte de sus riquezas a Roma a cambio de su seguridad y de la paz¹⁴⁵⁹. Ciertamente es que tanto en la República tardía como durante el Principado conocemos casos notorios de gobernadores que se extralimitaron con los provinciales e intentaron lucrarse a su costa, pero, como ha señalado P. A. Brunt, se trató de pocos casos, y sus propios coetáneos senatoriales se avergonzaron y condenaron estos actos cuando los conocieron¹⁴⁶⁰.

El principal tributo provincial que llenaba las arcas de Roma era el *tributum soli* y, según se desprende del testimonio de Cicerón, existían dos opciones en su recaudación: la *decima* –que era un diezmo sobre la producción agraria– y el *stipendium* o *uectigal certum stipendiarium*, en el marco de una fiscalidad no estructurada administrativamente¹⁴⁶¹. Este último era, precisamente, al que estaban sometidas las comunidades de Hispania¹⁴⁶². Como muy bien ha explicado Lo Cascio, la Roma tardo-republicana no contaba con una estructura ‘pública’ para gestionar y controlar la fiscalidad en las provincias, lo que la obligaba a buscar asegurarse directamente la recepción de una suma de dinero o cantidad de bienes (que conformaban el *uectigal certum*), transfiriendo a particulares de probada solvencia económica los riesgos de la recaudación a cambio de que obtuviesen beneficios de la misma¹⁴⁶³. Sin embargo, la actividad de estas *societates publicanorum* no era igual en todas las provincias y, como señaló Muñiz Coello, la Hispania de época tardo-republicana, sumida en continuas guerras entre el poder romano y los indígenas, sería poco atractiva para ellas, lo que

¹⁴⁵⁸ Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 25.

¹⁴⁵⁹ *Ad Q. fr.* I, 1, 34.

¹⁴⁶⁰ La actitud de Plinio el Joven es representativa de la opinión generalizada en el Senado hacia estos asuntos: Plin. *Ep.* I, 7; II, 11; III, 9; VII, 33. Cf. Brunt, “Charges of Provincial...” cit., esp. apéndices de pp. 90-95.

¹⁴⁶¹ Cic. 2 *Verr.* III, 12. E. Lo Cascio, “Le tecniche dell’amministrazione”, en *Il princeps e il suo impero: Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, pp. 13-79, esp. p. 37.

¹⁴⁶² J. France, “Deux questions sur la fiscalité provinciale d’après Cicéron *Ver.* 3.12”, en J. Dubouloz – S. Pittia (dir.), *La Sicile de Cicéron. Lectures des Verrines*, Besançon, 2007, pp. 169-184, esp. p. 170.

¹⁴⁶³ Lo Cascio, *Ibidem*, p. 38.

llevaría a Roma a hacer depender la recaudación de los tributos en sus unidades militares y en la labor del cuestor que acompañaba a cada uno de los gobernadores enviados a las dos Hispanias desde 197 a.C.¹⁴⁶⁴. Todos los tributos de las provincias, junto con el botín de guerra, iban a parar al Erario público de Roma, situado en el templo de Saturno.

Parece que los gobernadores tardo-republicanos también podían decidir acerca de la cuantía o la supresión de algún impuesto en determinadas circunstancias, tal y como hicieron los Cicerones en sus respectivas provincias: Quinto liberó a las ciudades de Asia de un impuesto edilicio y Marco a las de Cilicia de varios tributos indeterminados muy gravosos y de intereses de préstamos que consideraba falsos¹⁴⁶⁵. En sus cartas, Marco Cicerón no dice nada acerca de que él o su hermano hubiesen solicitado la confirmación de Senado, pero resulta difícil pensar que los gobernadores tardo-republicanos gozasen de autonomía plena en ese aspecto tan importante. De todas formas, parece que gozarían de cierto margen de acción. Cuando Cicerón acusa a Cayo Verres, de haber modificado durante su gobiernode Sicilia las condiciones de la recaudación del diezmo sobre las cosechas que regulaba una ley de época del rey Hierón II de Siracusa¹⁴⁶⁶, lo hace por haber buscado el provecho personal, incurriendo en el delito de concusión

En su reorganización administrativa del Imperio, Augusto realizó cambios fundamentales en la gestión de la fiscalidad provincial¹⁴⁶⁷. En primer lugar, desde el 27 a.C. a las provincias imperiales, controladas directamente por el emperador a través de legados *pro praetore*, desapareció la figura del cuestor republicano y, en cambio, se enviaron *procuratores* (procedentes del *ordo equester*) encargados de la administración fiscal, vinculada a una nueva caja, el *Fiscus*, derivada de la personal del *princeps*, que

¹⁴⁶⁴ J. Muñiz Coello, *El sistema fiscal en la España romana (República y Alto Imperio)*, Zaragoza, 1982, pp. 129-130.

¹⁴⁶⁵ Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 26; *Ad fam.* XV, 4, 2.

¹⁴⁶⁶ Cf. J. Carcopino, *La loi de Hiéron et les romains*, Paris, 1914; R. T. Pritchard, “Cicero and the *lex Hieronica*”, *Historia* 19/3, 1970, pp. 352-368; J. Dubouloz, “Autorité romaine, fermiers de l’impôt et contribuables en Sicile dans les années 70 av. J.-C.”, en Dubouloz – Pittia, *La Sicile...* cit., pp. 147-168.

¹⁴⁶⁷ Aunque no partió de cero: ciertos elementos del sistema fiscal provincial altoimperial tienen su germen en la tarda República (en concreto en Asia y Bitinia), según ha mostrado B. Le Teuff, “Les recensements dans les provinces de la République romaine: aux origines de la réforme augustéenne”, en N. Barrandon – F. Kirbihler (dir.), *Administrer les provinces de la République romaine*, Rennes, 2010, pp. 195-211.

pronto tenderá a entenderse como parte del tesoro del Estado¹⁴⁶⁸. En época severa, la distinción entre el Erario y el Fisco se habrá difuminado definitivamente¹⁴⁶⁹. Por tanto, de las tres provincias en las que quedó definitivamente dividida Hispania tras la organización del 16-13 a.C., sólo la Hispania Ulterior Bética conservó el cuadro administrativo heredado de la República, con un procónsul de rango pretorio al frente acompañado de un cuestor¹⁴⁷⁰. Sin embargo, dado que determinadas tierras y, sobre todo, los distritos mineros, entrarán dentro del ámbito de competencias del Fisco imperial, el procónsul y el cuestor de la Bética deberán convivir con un *procurator* que actuará dentro de la provincia en nombre del emperador¹⁴⁷¹. El término *fiscus* ya se usaba desde la República Tardía para referirse al tesoro provincial¹⁴⁷², y bajo Tiberio conocemos un '*fiscus Gallicus prouvinciae Lugdunensis*', en el que presumiblemente se ingresaban impuestos públicos bajo el control del procurador imperial. Así pues, como expuso Brunt, cuando se encuentra *Fiscus* en contexto provincial sin ninguna precisión más, ha de tomarse como una referencia al *Fiscus* provincial al que iban destinadas las contribuciones fiscales de los habitantes de la provincia¹⁴⁷³. Asimismo, ha de tenerse presente que en las provincias imperiales los mismos procuradores se ocupaban de gestionar tanto los fondos públicos como los privados pertenecientes a las propiedades imperiales¹⁴⁷⁴.

¹⁴⁶⁸F. Millar, "The Fiscus in the First Two Centuries", *JRS* 53, 1963, pp. 29-42, mostró que en numerosas ocasiones el durante el siglo I y II el término 'fiscus' se utilizó para hacer referencia a la riqueza privada del emperador, dentro de su *res familiaris*, pero eso no anula su empleo para hablar de la administración financiera controlada por el emperador, como en su día propuso Jones, "The Aerarium..." cit., seguido por P. A. Brunt, "The 'Fiscus' and its Development", *JRS* 56, 1966, pp. 75-91. Ver también: E. Lo Cascio, "*Patrimonium, ratio privata, res privata*" y "*Fiscus principis nostri* (Sc. de Cn Pisone patre, ll. 54-55): ancora sulla configurazione giuridica del fisco imperiale", en *Il princeps e il suo impero...* cit. pp. 97-149 y 163-174, respectivamente.

¹⁴⁶⁹ Lo Cascio, "Le tecniche..." cit., pp. 50-62. Una de las reconstrucciones de la evolución de la gestión y funcionalidad del Fisco y el Erario que han tenido más éxito es la de Jones, "The Aerarium..." cit. pp. 104-114, que pone especial énfasis en las reformas de Vespasiano y de los Severos.

¹⁴⁷⁰ Ejemplos de cuestores del procónsul de la Bética: *CILA* II, 1053 (época augustea); *RIT* 145 (época de Vespasiano); era natural de la Citerior; *CIL* II, 190 (siglo II): era natural de *Olisipo*, en la Lusitania.

¹⁴⁷¹ Tiberio añadirá al *patrimonium* imperial gestionado por el Fisco las minas de Sierra Morena que pertenecían al rico terrateniente de la Bética Sexto Mario, tras haberlo condenado por el cargo de incesto (Suet. *Tib.* 49, 2). Sus bienes pasaron al Fisco en calidad de *bona damnatorum*. A finales del siglo II o inicios del siglo III está constatada una caja propia para el patrimonio imperial en la Bética: *CILA* II, 66 = *CIL* II, 1198 (*Hispalis*).

¹⁴⁷² Cic. 2 *Verr.* III, 197: *Quaternos HS, quos mihi senatus decreuit et ex aerario dedit, ego habeo et in cistam transferam de fisco* (habla Verres, que quiere transferir dinero de la caja provincial a la suya propia).

¹⁴⁷³ *Fiscus Gallicus*: *ILS* 1514. Cf. Brunt, "The Fiscus..." cit. pp. 76-77.

¹⁴⁷⁴ Tac. *Ann.* IV, 6 (a propósito de Tiberio): *at frumenta et pecuniae uectigales, cetera publicorum fructuum societatibus equitum Romanorum agitabantur. Res suas Caesar spectatissimo cuique,*

A pesar de mantenerse el equipo de gobierno republicano en las provincias proconsulares como la Bética –cuyo procónsul de rango pretorio contaba, en concreto, con un cuestor y un legado a su servicio¹⁴⁷⁵– y de que el Senado siguió siendo consultado acerca de la imposición tributaria que correspondía al Erario¹⁴⁷⁶, los emperadores, en su calidad de *principes senatus*, ya desde Augusto hicieron sentir su autoridad sobre ellas, aunque de manera indirecta y más disimulada, y en el ámbito fiscal tuvieron pleno acceso a sus cuentas¹⁴⁷⁷. Por ello Augusto, a su muerte, pudo legar entre sus documentos oficiales un *breuiarium totius imperii* en el que, además de los efectivos militares, se consignaba, según Suetonio, *quantum pecuniae in aerario et fiscis et uectigaliorum residuis*¹⁴⁷⁸. Pocas líneas antes en el mismo pasaje queda claro que Augusto diferenciaba este *fiscus* (entendido como la caja del Estado y administración fiscal pública) que mencionaba en el *breuiarium* de su propia *res familiaris*, de cuya modestia se excusaba en su testamento¹⁴⁷⁹.

En segundo lugar, en el Principado se eliminó del proceso de recaudación a los intermediarios (excepto en casos de impuestos indirectos menores) y se responsabilizó de ella a las comunidades locales, aunque éstas luego podían decidir arrendar la recaudación de esos impuestos a particulares¹⁴⁸⁰. Además, se comenzó a basar la recaudación en un censo provincial¹⁴⁸¹, implantándose, así, un sistema impositivo progresivo. Cada ‘contribuyente’ debía declarar los fundos de los que tenía la *possessio* en el *territorium* de cada ciudad, especificando su localización, dimensiones y la utilización económica que hacía de ellos y realizando una estimación de su valor en

quibusdam ignotis ex fama mandabat, semelque adsumpti tenebantur prorsus sine modo, cum plerique isdem negotiis insenscerent. Sobre el cometido de los procuradores: R. Haensch, “La gestion financière d’une province romaine: les procureurs entre résidences fixes et voyages d’inspection”, en Capdetrey – Nelis-Clément, *La circulation...* cit. pp.161-176.

¹⁴⁷⁵ Strab. III, 4, 20.

¹⁴⁷⁶ Brunt, “The ‘Fiscus’...”, cit. pp. 86.-87, que menciona los siguientes ejemplos: Augusto consultó al Senado acerca del tipo de impuesto que debía exigir a los *ciues* para el *Aerarium militare* y Tiberio pidió su opinión en la cuestión “*de uectigalibus et monopoliis*” (Suet. *Tib.* 30), e incluso Marco Aurelio pidió permiso al Senado para retirar dinero del Erario (Dio LXXI, 33).

¹⁴⁷⁷ Algo ya intuido por Mommsen, *DPR* cit. V, pp. 298-299.

¹⁴⁷⁸ Suet. *Diu. Aug.* 101. Los esclavos y libertos de Augusto debieron de tener acceso al *Aerarium Saturni* para elaborar las “*rationes imperii*” que el emperador tenía en su poder en 23 a.C. y 14 d.C. Cf. Brunt, “The ‘Fiscus’...” cit. p. 90.

¹⁴⁷⁹ *Idem: Reliqua legata uarie dedit perduxitque quaedam ad uicies sestertium, quibus soluendis annum diem finiit, excusata rei familiaris mediocritate...*

¹⁴⁸⁰ Como en el caso de Munigua y Servilio Cepión recogido en la *Ep. Titii ad Muniguenses*, ya vista.

¹⁴⁸¹ Existía un precedente tardo-republicano en Sicilia: Cic. 2 *Verr.* II, 131 y 139. Hablaremos del censo *infra*.

términos monetarios¹⁴⁸². El *tributum soli* se calculaba sobre el valor de la producción agrícola o de la propiedad y se pagaba en especie, en moneda o una combinación de ambas, dependiendo de las condiciones de la región¹⁴⁸³. Sólo estaban exentas de pagarlo aquellas comunidades a las que se les hubiese concedido el *ius italicum*.

Un pasaje del jurista Gayo ha generado un importante debate historiográfico en torno a la existencia, o no, de un tipo de régimen fiscal diferente en las provincias imperiales frente a las proconsulares:

*In eadem causa sunt prouincialia praedia, quorum alia stipendiaria alia tributaria uocamus. Stipendiaria sunt ea, quae in his prouinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intelleguntur, tributaria sunt ea, quae in his prouinciis sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur.*¹⁴⁸⁴

Gayo establece una diferenciación entre el *stipendium*, que se recaudaría en las provincias “del Pueblo Romano” o proconsulares, y el *tributum*, propio de las imperiales. No obstante, es la única fuente que lo hace; el resto tienden a usar indistintamente uno y otro término como si fuesen sinónimos. Como señaló C. Nicolet, en origen *tributum* designaba la “contribución” de los ciudadanos, y *stipendium* el pago para el que esa contribución había sido exigida. Como es sabido, desde el 167 a.C. los ciudadanos estuvieron eximidos del *tributum* como consecuencia de las riquezas que habían llenado el Erario tras la victoria sobre Perseo de Macedonia. En cambio, no existía una palabra para designar la contribución impuesta a los vencidos y para referirse a ella se recurrió indistintamente *tributum* y *stipendium*¹⁴⁸⁵. Según F. Grelle, la aproximación y solapamiento del significado de ambas denominaciones de los fondos provinciales, que se puede retrotraer a finales del siglo I a.C., fue resultado, en época

¹⁴⁸² Dig. L, 15, 4 (Ulp. 3 de censibus). Cf. C. Nicolet, “Centralisation d’État et problème du recensement dans le monde gréco-romain”, en *Censeurs et publicains: Économie et fiscalité dans la Rome Antique*, París, 2000, pp. 196-208, esp. p. 201; E. Lo Cascio, “Le professiones della Tabula Heracleensis e le procedure del census in età cesariana”, *Athenaeum* 78, 1990, pp. 278-318 y “Le techniche...” cit., p. 39; P. López Barja, “El censo en las *ciuitates peregrinae* (con una nota sobre la pizarra de Pelou)” en A. Duplá – M^a. V. Escribano – L. Sancho – M^a. A. Villacampa (eds.) *Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza*, Zaragoza, 2014, pp. 459-464

¹⁴⁸³ A. Béranger, “Le cens et les censeurs en Occident”, en Hurlet (dir.), *Rome et l’Occident...* cit. pp. 189-205, esp. p. 190.

¹⁴⁸⁴ Gai. *Inst.* II, 21.

¹⁴⁸⁵ Nicolet, *Tributum...* cit. p. 2. nt. 2, con mención de fuentes.

imperial, de la exigencia de conciliarlas en el marco sistematizador jurisprudencial¹⁴⁸⁶. Por su parte, F. De Martino, ante la dificultad de alcanzar una conclusión, derivada del estado de las fuentes, optó por analizar la presencia de la dicotomía *tributum-stipendium* en cada provincia individualmente, aceptando la siguiente definición genérica: “*tributum è l'imposizione diretta sui fondi e quindi essa obbliga i singoli possessori, stipendium è quella indiretta, colpisce le città e non i singoli fondi, nei confronti dei quali la città si rivale ripartendo tra di essi l'importo complessivo dell'imposta*”¹⁴⁸⁷. No es nuestra intención profundizar más en esta problemática, pero no deja de ser interesante que la comparación entre las provincias imperiales y proconsulares llevara a De Martino a constatar que no existían diferencias en el régimen fiscal sobre la tierra; en el caso de las provincias hispanas, es muy elocuente que Plinio el Viejo, en su elenco del libro tercero de la *Naturalis Historia*, mencione siempre a todas las comunidades sujetas a tributo como *stipendiariae*¹⁴⁸⁸. Recientemente, Lo Cascio ha expuesto que el pasaje gayano reflejaría una relación diversa entre los contribuyentes de los dos tipos de provincias y el poder central: el *stipendium* es concebido como la contribución de cada comunidad al *Populus Romanus*, mientras que el *tributum* establece una relación directa entre el individuo y la administración central, aun admitiendo la intervención de la administración local¹⁴⁸⁹. Su perspectiva es sugerente, pero la realidad es que la contribución particular de cada individuo se realizaba siempre en el seno de la comunidad provincial para, desde ella, ser enviada a Roma, como él mismo reconoce. Además del *tributum soli*, en época altoimperial tenemos constancia en las provincias del *tributum capitis*, tipo de impuesto personal aún no bien definido que afectaba a los que no eran ciudadanos romanos; también se basaba en el censo y era gestionado por las propias comunidades. Según Muñoz Coello, en los dos primeros siglos del Principado el *tributum soli* y el *tributum capitis* se englobarían bajo la denominación de *stipendium*, que, dependiendo de las posibilidades de la unidad tributaria (la *ciuitas stipendiaria*), se realizaba en metálico o en especie¹⁴⁹⁰, pero, a tenor de la problemática antedicha en la

¹⁴⁸⁶ F. Grelle, *Stipendium vel tributum*, Nápoles, 1963, pp. 17-21.

¹⁴⁸⁷ *Idem*, p. 777, siguiendo a Weber, Marquardt y Luzzatto.

¹⁴⁸⁸ *Idem*, p. 779.

¹⁴⁸⁹ E. Lo Cascio, “Census provinciale, imposizione fiscale e amministrazione cittadine”, en W. Eck (dir.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, Munich, 1999, pp. 197-211, esp. p. 210.

¹⁴⁹⁰ Muñoz Coello, *El sistema fiscal...* cit. pp. 189-194.

conciliación del *tributum* y el *stipendium*, tal explicación resulta demasiado reduccionista.

Asimismo, existían importantes impuestos indirectos como los *portoria* (impuestos aduaneros sobre el tráfico de mercancías)¹⁴⁹¹, la *XX libertatis* (sobre las manumisiones), la *XX hereditatum* (sobre herencias y legados testamentarios), la *centesima rerum uenaliū* (sobre las subastas) y la *XXV uenaliū mancipiorum* (que gravaba las transferencias de propiedad de los esclavos)¹⁴⁹². En un principio los *uectigalia* y estos impuestos indirectos de las provincias proconsulares iban al Erario y los de las imperiales al Fisco. Sin embargo, los límites nunca fueron absolutamente nítidos y, por ejemplo, ya desde Vespasiano los *uectigalia* del *ager* provincial comenzaron a llamarse, en general, *loca fiscalia*¹⁴⁹³. A esto hay que añadir la parte de los impuestos indirectos –fundamentalmente la *uicesima hereditatum* y la *centesima rerum uenaliū*– era destinada al *Aerarium militare*, caja creada por Augusto para cubrir la gratificación económica que recibían los soldados tras su *honesta missio*¹⁴⁹⁴, y la llamada *annona militaris*, contribución en especie para la manutención de los ejércitos provinciales¹⁴⁹⁵.

En este sistema fiscal que hemos esbozado los gobernadores provinciales –tanto procónsules como legados imperiales– se ocupaban de dos cosas principalmente: la elaboración del censo en el que se basaba la tributación provincial (salvo en circunstancias excepcionales, como veremos más adelante)¹⁴⁹⁶ y el empleo de su poder coercitivo, tanto para dar cobertura a las labores de recaudación y controlar que los indígenas que estuviesen obligados a realizar *munera* en beneficio del poder imperial (como en el Noroeste tras la conquista) los cumpliesen, como para evitar que se

¹⁴⁹¹ Véase la *lex portus Asiae*: Merola, *Autonomia locale...* cit. pp. 199-231.

¹⁴⁹² Salvo la *vicesima libertatis*, todas los demás impuestos indirectos comenzaron en el Principado y son creaciones augusteas. Las sumas de la *XX hereditatum* y la *C rerum uenaliū* iban dirigidas al *aerarium militare*, constituido por Augusto para pagar el licenciamiento de los veteranos y la de la *XXV uenaliū mancipiorum* sufragaba el mantenimiento del cuerpo de *uigiles* de la *Vrbs*. Cf. Lo Cascio, “Le tecniche...” cit., pp. 41-42. La información que se tiene acerca de la tasa de imposición del *tributum capitis* procede siempre de las provincias orientales, Bérenger, “Le cens...” cit. p. 190. Un examen exhaustivo de los tributos directos e indirectos en la Hispania altoimperial en Muñiz Coello, *El sistema fiscal...* cit. pp. 169-261. Cf. también Ozcáriz Gil, *La administración...* cit. pp. 204-214.

¹⁴⁹³ Arnold, *The Roman System...* cit. pp. 188-189.

¹⁴⁹⁴ C. Nicolet, “Augustus, Government and the Propertied Classes”, Millar – Segal (ed.), *Caesar Augustus...* cit. pp. 89-128, esp. pp. 109-110.

¹⁴⁹⁵ Arnold, *Ibidem*, pp. 188 y 197.

¹⁴⁹⁶ Lo Cascio, “Census provinciale...” cit. pp. 204-205.

produjesen abusos contra los provinciales por parte de sus subordinados. Asimismo, los gobernadores podían influir en la concesión de exenciones fiscales a comunidades o en la pérdida de estos privilegios a través de las noticias e informes contenidos en la correspondencia que mantenían con el emperador. Como veremos más adelante, la *immunitas perpetua* que Augusto concedió a los *castellani Paemeiobrigenses* de la provincia Transduriana se derivó de los informes de los legados que gobernaron esa provincia.

En las provincias proconsulares, seguramente también supervisaron la recaudación final que se enviaba al Erario de Roma y la labor de su cuestor, al igual que habían hecho sus homólogos tardo-republicanos, como se desprende del testimonio de Dión Casio¹⁴⁹⁷, aunque con el paso del tiempo los procuradores acabaron controlando también la fiscalidad de estas provincias¹⁴⁹⁸.

Respecto al deber de todo gobernador de evitar que se produjeran abusos en la recaudación de tributos, Ulpiano es muy claro:

*Illicitas exactiones et uiolentia factas, et extortas metu uenditiones et cautiones uel sine pretii numeratione prohibeat praeses prouinciae. (...) Illicita ministeria sub praetextu adiuuantium militares uiros ad concutiendos homines procedentia prohibere et deprehensa coercere praeses prouinciae curet, et sub specie tributorum illicitas exactiones fieri prohibeat.*¹⁴⁹⁹

Así pues, todos los gobernadores debían prohibir las exacciones ilícitas o hechas usando la violencia o la intimidación y también era su obligación evitar que el propio personal militar se amparase en su posición para cometer abusos en la recaudación de tributos. Así, cuando el futuro emperador Adriano gobernó Panonia Inferior llegó a castigar (*coercere*) a los procuradores que se habían extralimitado en sus funciones¹⁵⁰⁰. El descontento de las poblaciones locales hacia el poder romano, origen en ocasiones de importantes levantamientos, se debía, como ya se ha dicho, a tres motivos principalmente: los tributos excesivos, las constantes levas para el ejército entre sus

¹⁴⁹⁷ Dio LIII, 15, 3.

¹⁴⁹⁸ Muñiz Coello, *El sistema fiscal...* cit. p. 144. Procuradores imperiales en la Bética en *Idem* pp. 156-157. Algunos ejemplos: *CIL* II²/7, 13; 278; 285.

¹⁴⁹⁹ *Dig.* I, 18, 6, pr. y 3. (Ulp. 1 *opin.*).

¹⁵⁰⁰ *SHA, Hadrianus* 3, 9: *Legatus postea praetorius in Pannoniam inferiorem missus Sarmatas compressit, disciplinam militarem tenuit, procuratores latius euagantes coercuit.*

jóvenes y los abusos de poder coercitivo¹⁵⁰¹. Por ello, era importante que para mantener la paz en la provincia el gobernador controlase que sus subordinados no cometiesen desmanes y que los tributos fuesen equitativos¹⁵⁰². Tácito sintetiza todo esto de manera magistral a propósito de las acciones de su suegro Agrícola, paradigma del buen gobernador:

Ceterum animorum prouinciae prudens, simulque doctus per aliena experimenta parum profici armis, si iniuriae sequerentur, causas bellorum statuit excidere. A se suisque orsus primum domum suam coercuit, quod plerisque haud minus arduum est quam prouinciam regere. Nihil per libertos seruosque publicae rei, non studiis priuatis nec ex commendatione aut precibus centurionem militesue adscire, sed optimum quemque fidissimum putare. Omnia scire, non omnia exsequi; paruis peccatis ueniam, magnis seueritatem commodare; nec poena semper, sed saepius paenitentia contentus esse; officiis et administrationibus potius non peccaturos praeponere, quam damnare cum peccassent. Frumenti et tributorum exactionem aequalitate munerum mollire, circumcisis quae in quaestum reperta ipso tributo grauius tolerabantur. Namque per ludibrium adsidere clausis horreis et emere ultro frumenta ac luere pretio cogeabantur. Diuortia itinerum et longinquitas regionum indicebatur, ut ciuitates proximis hibernis in remota et auia deferrent, donec quod omnibus in promptu erat paucis lucrosum fieret¹⁵⁰³.

Agrícola entendía que la mejor forma de asegurar la paz en Britania radicaba en evitar las injusticias. En primer lugar escogió cuidadosamente a quienes serían los responsables de la administración cotidiana: descartó a los libertos y esclavos y confió en aquellos centuriones y soldados que tuviesen mejores cualidades éticas y aptitud. En segundo lugar, controló que no se cometieran abusos en las exacciones de tributos e impuso un reparto equitativo de las cargas asignadas a la población local, evitando las humillaciones y racionalizando sus esfuerzos. Como señala Tácito, a los indígenas les resultaban más penosas las humillaciones cotidianas sufridas a manos de los soldados que las obligaciones exigidas por el poder romano.

¹⁵⁰¹ Véase Capítulo 5 de la Primera Parte.

¹⁵⁰² *Dig. I, 18, 6, 3 (Ulp. 1 Opin.): ...et sub specie tributorum illicitas exactiones fieri prohibeat.*

¹⁵⁰³ *Agr. 19.*

En lo que respecta a la tributación en sí, los gobernadores altoimperiales no podían decidir autónomamente el aumento de los impuestos o su supresión, sino que se limitaban a escribir al *princeps* cuando creían necesario que se tomase una medida al respecto. Así, ante varias cartas de gobernadores de las provincias en las que se solicitaba un aumento de los tributos, Tiberio les respondió que el buen pastor debía esquilar a su rebaño, no desollarlo¹⁵⁰⁴. El hecho de que Suetonio, al contar esta anécdota, utilice el término genérico de '*praesides*' para referirse a los gobernadores nos hace pensar en que también los procónsules debían pedirle permiso al emperador para tomar una decisión en torno a los tributos que estaban destinados al Erario en una fecha tan temprana. Esto lo confirmaría un texto de Dión en el que, en el contexto de las reformas administrativas augusteas relativas al gobierno provincial, expone que los procónsules no podían decretar una leva ni recaudar más dinero del que solía exigirse a su provincia sin la autorización del Senado o el permiso del emperador¹⁵⁰⁵.

A inicios del siglo III en su tratado *de officio proconsulis* Ulpiano recomienda a los gobernadores abstenerse de ver las causas judiciales relativas al dinero del Fisco, que competían a los procuradores¹⁵⁰⁶, de lo que se deduce que durante los dos siglos anteriores en el ámbito jurisdiccional tuvieron que producirse constantes yuxtaposiciones entre las competencias de los gobernadores y las de los procuradores en asuntos relativos a la fiscalidad, sobre todo en las provincias imperiales. De hecho, algunos procuradores llegaron a extralimitarse en sus funciones, interfiriendo en ámbitos que sólo competían a los gobernadores. Un caso sonado fue el del procurador de Asia Lucilio Capitón, que en 23 d.C. fue acusado por los provinciales ante el Senado y condenado al destierro por haberse extralimitado en sus funciones, usando soldados y actuando como si fuera el procónsul cuando sólo se debía encargar del patrimonio del emperador en Asia, apartándose gravemente de las instrucciones contenidas en los *mandata* de Tiberio¹⁵⁰⁷. “En aquel tiempo”, dice Dion Casio, “quienes estaban encargados de la administración de las propiedades imperiales no estaban autorizados

¹⁵⁰⁴ Suet. Tib. 32, 2: *Praesidibus onerandas tributo prouincias suadentibus rescripsit boni pastoris esse tondere pecus, non deglubere.*

¹⁵⁰⁵ Dio LIII, 15, 6: ἐκεῖνα δὲ ἐπὶ πᾶσιν ὁμοίως ἐνομοθετήθη, μήτε καταλόγους σφᾶς ποιεῖσθαι, μήτ' ἀργύριον ἔξω τοῦ τεταγμένου ἐσπράσσειν, εἰ μὴ ἦτοι ἡ βουλὴ ψηφίσαιτο ἢ ὁ αὐτοκράτωρ κελεύσειεν.

¹⁵⁰⁶ Dig. I, 16, 9 (Ulp. 1 de off. procos).

¹⁵⁰⁷ Tac. Ann. IV, 15, 3: *adeo ut procurator Asiae Lucilius Capito accusante prouincia causam dixerit, magna cum adseueratione principis non se ius nisi in servitia et pecunias familiares dedisse: quod si vim praetoris usurpasset manibusque militum usus foret, spreta in eo mandata sua: audirent socios.* Dio LVII, 23, 4-5.

para otras tareas que para recaudar los tributos fijados y para administrar justicia en los casos de discrepancia, en el foro, de acuerdo a las leyes y en igualdad de condiciones con los ciudadanos particulares”¹⁵⁰⁸. Con el aumento del intervencionismo de los procuradores en las provincias, los conflictos con los gobernadores irían en aumento, creando dificultades de índole práctica que incluso podían llegar a crear graves dificultades al control romano de una provincia: Tácito, por ejemplo, señala que la mala relación entre el gobernador de Britania Suetonio Paulino y el procurador Julio Clasiciano perjudicaron la dirección de la guerra contra Búdica, pues este último no dejó de tramar insidias contra él para conseguir que fuera reemplazado, al parecer en connivencia con Nerón¹⁵⁰⁹. Los procuradores llegaron a ser empleados incluso para eliminar a algunos gobernadores de rango senatorial que podían convertirse en una amenaza para el emperador; por ejemplo, en el 54 d.C. Agripina ordenó al *eques* Publio Céler y al liberto imperial Helio, que se encargaban del Fisco en Asia, que asesinasen al procónsul Junio Silano, temiendo sus vínculos de sangre lejanos con Augusto y su riqueza¹⁵¹⁰. En tiempos de Domiciano, el perspicaz Agrícola decidió no entrar en conflicto con los procuradores de Britania para evitar enfrentamientos inútiles que perjudicasen la administración de la provincia¹⁵¹¹.

En la Hispania Citerior y en la Lusitania está documentado epigráficamente un considerable número de *procuratores* desde época de Tiberio, momento en el que la fiscalidad de las provincias imperiales hubo de estar consolidada¹⁵¹². En la primera, aparte del *procurator Hispaniae Citerioris* que tenía competencias sobre la fiscalidad en toda ella¹⁵¹³, conocemos varios procuradores que en el siglo II se ocuparon de *Asturia et*

¹⁵⁰⁸ Dio LVII, 23, 5: οὐ γὰρ ἐξῆν τότε τοῖς τὰ αὐτοκρατορικὰ χρήματα διοικοῦσι πλέον οὐδὲν ποιεῖν ἢ τὰς νενομισμένας προσόδους ἐκλέγειν καὶ περὶ τῶν διαφορῶν ἐν τε τῇ ἀγορᾷ καὶ κατὰ τοὺς νόμους ἐξ ἴσου τοῖς ἰδιώταις δικάζεσθαι.

¹⁵⁰⁹ Tac. Ann. XIV, 38: *Gentesque praeferoces tardius ad pacem inclina[ba]nt, quia Iulius Classicianus, successor Cato missus et Suetonio discors, bonum publicum priuatis simultatibus impediabat disperseratque novum legatum opperendum esse, sine hostili ira et superbia uictoris clementer deditis consulturum. simul in urbe[m] mandabat, nullum proelio[rum] finem exspectarent, nisi succederetur Suetonio, cuius aduersa prauitati ipsius, prospera ad fortunam referebat.*

¹⁵¹⁰ Tac. Ann. XIII, 1, 1-2. Silano era nieto de Julia la Menor.

¹⁵¹¹ Tac. Agr. 9, 4: *...procul a contentione aduersus procuratores, et uincere inglorium et atteri sordidum arbitrabatur.*

¹⁵¹² Muñiz Coello, *El sistema fiscal...* cit. pp. 147-155.

¹⁵¹³ El primero conocido es Quinto Octavio Sagita, que desempeñó su *procuratela* en Hispania Citerior durante diez años en época de Tiberio (*CIL IX*, 3311). El más famoso *procurator* de la Citerior fue Plinio el Viejo, en 73 d.C., como demuestra su conocimiento de la provincia y su presencia en determinados sucesos relacionados con el legado Larcio Licino (*N.H.* XIX, 35 y XXXI, 23-24). Cf. R. Syme, “Pliny the Procurator”, en *Roman Papers II*, Oxford, 1979, pp. 743-773 (=HSCPh 73, 1969, pp. 201-236).

*Callaecia*¹⁵¹⁴. Como hemos venido diciendo en las páginas anteriores, el Noroeste de Hispania, que en un primer momento tras la conquista fue organizado como una provincia, requirió a lo largo del Principado una atención especial por parte del poder central. En el siglo II, a la vez que se enviaban al Noroeste *legati iuridici* con el fin de descargar al gobernador de la Citerior de su labor jurisdiccional en los *conuentus* noroccidentales, los emperadores decidieron también designar a un procurador específico para este territorio, sin duda con motivo de las deficiencias de la gestión fiscal que se habían constatado en el siglo anterior, agravadas por la dispersión del poblamiento del Noroeste, eminentemente rural. Tanto el *legatus iuridicus* como el *procurator* de *Asturia et Gallaecia* tenían sus competencias perfectamente delimitadas, pero no cabe duda de que se cruzarían en algunos pleitos judiciales relacionados con la economía de las ciudades en aquellos casos que pudiesen afectar a su tributación. Por otro lado, al igual que el *iuridicus* estaba subordinado jerárquicamente al gobernador de rango consular de la Hispania Citerior, el procurador de *Asturia y Gallaecia* lo estaba al procurador de esa provincia y, además, dado que no podía disponer libremente del personal militar provincial, cuando lo necesitara debía contar con la colaboración del legado de la *legio VII Gemina* y, por ende, con la aquiescencia del gobernador.

Estos *procuratores Asturiae et Gallaeciae* tendrán su centro administrativo en *Asturica Augusta*, sede del *conuentus* al que pertenecía, por cierto, las explotaciones mineras de las Médulas. Además de la supervisión de las minas y de la recaudación de los tributos, estos procuradores se habrían ocupado también de los aspectos económicos (como el pago de las tropas) y de intendencia vinculados con la *legio VII Gemina* acantonada en la actual León¹⁵¹⁵.

Las fuentes literarias, como hemos dicho, nos han dejado testimonio tanto del descontento de los provinciales hacia una carga impositiva excesiva como de los abusos de poder cometidos por los gobernadores de las provincias occidentales en ese ámbito. En la Hispania Citerior sabemos que en 25 d.C. el *legatus Augusti pro praetore* que la gobernaba en ausencia de L. Arruncio, Lucio Calpurnio Pisón, fue asesinado por un

¹⁵¹⁴ Muñiz Coello, *El sistema fiscal...* cit. pp. 148-149: Trutedio Clemente (*IRPL* 121), Q. Petronio Modesto (*CIL* V, 534), Marco Bassaeo Rufo (*CIL* VI, 1599), etc.

¹⁵¹⁵ Muñiz Coello, *El sistema fiscal...* cit. pp. 148-152. En general: Arnold, *The Roman System...* cit. p. 198.

indígena termestino en venganza por la excesiva dureza que había empleado con su comunidad en la recaudación de dinero de sus arcas públicas¹⁵¹⁶.

Alföldy, con el fin de ajustar la cronología de sus *Fasti Hispanienses*, catalogó a Pisón como *legatus iuridicus avant la lettre*, aduciendo que por entonces el legado imperial de la Citerior era L. Arruncio *in absentia*¹⁵¹⁷. Es probable que Pisón, dado su rango pretorio, fuese uno de los tres legados que Estrabón menciona para la Citerior en esta época –bien el que se ocupaba del interior de la provincia, bien el que estaba al mando de la *legio IV Macedonica*¹⁵¹⁸, como se deduce del estrecho conocimiento que de él tenían los termestinos–, pero, en nuestra opinión, el hecho de que Tiberio retuviese en Roma a Arruncio por miedo a acrecentar su prestigio al conferirle el mando sobre tres legiones¹⁵¹⁹ prueba que, en realidad, jamás llegó a gobernar efectivamente la Citerior y, por tanto, no puede ser considerado como su gobernador en la práctica. Como dice Paulo, el *imperium* de un gobernador sólo era efectivo dentro de su provincia; si la abandonaba, se convertía en un *priuatus*¹⁵²⁰. Además, Arruncio era él mismo un legado y no podía volver a delegar el *imperium* que había recibido ni, por tanto, gobernar *in absentia* a través de otros. Eso sólo lo podía hacer el titular del *imperium* y los auspicios a éste unidos, esto es, el emperador. Tácito denomina a Pisón *praetor prouinciae*, lo que, a nuestro juicio, no deja lugar a dudas de que actuaba como gobernador en funciones, ya que es una forma antigua de referirse a ese cargo que el historiador latino suele usar. Como en los casos de deceso del gobernador de una provincia, en los que uno de sus ayudantes o legados asumía sus competencias hasta la llegada de su sucesor¹⁵²¹, Pisón, a nuestro juicio, habría sido elegido por Tiberio para gobernar la Citerior con plenos poderes en ausencia de Arruncio, dándole probablemente preeminencia sobre los otros dos legados que estaban en la provincia. Recuérdese que el padre de Pisón era amigo íntimo de Tiberio y, por tanto, éste era un hombre de su confianza.

¹⁵¹⁶ Tac. Ann. IV, 45: *Termestinatorum dolo caesus habetur quippe pecunias e publico interceptas acrius quam ut tolerarent barbari cogebat.*

¹⁵¹⁷ *Fasti Hispanienses* pp. 14 y 67. Seguido por E. Tobalina Oraá, *El cursus honorum senatorial durante la época julio-claudia*, Pamplona, 2007, pp. 188-189.

¹⁵¹⁸ Esta hipótesis ha sido considerada por Gómez-Pantoja, “*Legio IIII Macedonica*” cit. p. 115. El campamento de esta legión, en Herrera de Pisuerga (Palencia) era el más cercano a Termes.

¹⁵¹⁹ Tac. Hist. II, 65, 2 y Ann. I, 80.

¹⁵²⁰ Paul 13 ad Sab. (Dig. I, 18, 3): *Praeses prouinciae in suae prouinciae homines tantum imperium habet, et hoc dum in prouincia est: nam si excesserit, priuatus est.*

¹⁵²¹ Dio LV, 27, 6 y LVII, 14, 4-5.

Esta es, en efecto, una práctica anómala, pero el emperador podía disponer libremente de cuantos legados quisiera, elegirlos según su propio criterio y mantenerlos al frente de una provincia imperial el tiempo que juzgase necesario. El propio Tiberio actuó de la misma manera con el gobernador de Siria¹⁵²². Esto choca, claro está, con la noticia de los diez años que gobernó Arruncio Hispania del 23 al 33¹⁵²³, pero hay que entender que lo fue “de manera oficiosa” –y, por tanto, inocua–, siendo víctima de uno de los comportamientos ambiguos tan característicos de Tiberio. El único legado que estaba en Hispania gobernando era Pisón¹⁵²⁴.

El atentado que acabó con la vida de Pisón demuestra que los provinciales entendían que el responsable último de la administración romana y aquél que debía controlar a los soldados y subalternos imperiales encargados de la recaudación de los tributos era el gobernador provincial¹⁵²⁵. Por ello los terrestinos tomaron represalias contra él. Este hecho no es banal, pues indica que tenían cierto conocimiento de las jerarquías de la administración imperial y del poder y autoridad del gobernador.

Asimismo, en el 9 d.C. los germanos, que hasta entonces, además de aceptar la fundación de colonias de veteranos en su territorio, habían comenzado a asumir unas costumbres de vida pacíficas, se levantaron contra Varo cuando éste los trató como si fueran esclavos y les exigió el pago de los tributos con desprecio:

καὶ στρατιῶται τε αὐτῶν ἐκεῖ ἐχείμαζον καὶ πόλεις συνωκίζοντο, ἔς τε τὸν κόσμον σφῶν οἱ βάρβαροι μετερρυθμίζοντο καὶ ἀγορὰς ἐνόμιζον συνόδους τε εἰρηνικὰς ἐποιοῦντο. οὐ μέντοι καὶ τῶν πατρίων ἡθῶν τῶν τε συμφύτων τρόπων καὶ τῆς αὐτονόμου διαίτης τῆς τε ἐκ τῶν ὀπλῶν ἐξουσίας ἐκλελησμένοι ἦσαν. καὶ διὰ τοῦτο, τέως μὲν κατὰ βραχὺ καὶ ὁδῶν τι μετὰ φυλακῆς μετεμάνθανον αὐτά, οὔτε ἐβαρύνοντο τῇ τοῦ βίου μεταβολῇ καὶ ἐλάνθανόν σφας ἀλλοιούμενοι· ἐπεὶ δ' ὁ Οὐᾶρος ὁ Κυντίλιος τήν τε ἡγεμονίαν τῆς Γερμανίας λαβὼν καὶ τὰ παρ' ἐκείνοις ἐκ τῆς ἀρχῆς διοικῶν ἔσπευσεν αὐτοὺς ἀθροώτερον μεταστῆσαι, καὶ τὰ τε ἄλλα ὡς καὶ δουλεύουσιν σφισιν ἐπέταττε καὶ χρήματα ὡς καὶ παρ' ὑπηκόων ἐσέπρασσε, οὐκ ἠνέσχοντο, ἀλλ' οἱ τε πρῶτοι τῆς πρόσθεν

¹⁵²² Suet. *Tib.* 41 y 63, 2; Tac. *Ann.* VI, 27, 3

¹⁵²³ Tac. *Ann.* VI, 27, 3.

¹⁵²⁴ Syme, *Tacitus*, cit. p. 442, nt. 5, propuso en su momento que Pisón sustituiría a Arruncio, *legatus Augusti pro praetore* de rango consular, como legado imperial de rango pretorio, identificando a este Pisón con *PIR*² C 291, y no con el n° 292 (que es la elección del propio E. Groag), ya que este último fue *consul suffectus* en torno al 22 a.C.

¹⁵²⁵ Y por ello era tan importante rodearse de hombres de confianza y no delegar ciertas acciones en esclavos, libertos u hombres de dudosa moralidad: Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 10-13; Tac. *Agr.* 19.

δυναστείας ἐφιέμενοι, καὶ τὰ πλήθη τὴν συνήθη κατάστασιν πρὸ τῆς ἀλλοφύλου
δεσποτείας προτιμῶντες, ἐκ μὲν τοῦ φανεροῦ οὐκ ἀπέστησαν¹⁵²⁶

En cuanto a los britanos, Tácito comenta que aceptaban de buen grado la leva y el pago de los impuestos mientras no conllevaran injurias por parte del poder romano¹⁵²⁷. Aun así, los abusos de los gobernadores solían vincularse al uso indebido del poder coercitivo, mientras que las exacciones extremas o ilícitas se atribuían más a los procuradores: *Singulos sibi olim reges fuisse, nunc binos imponi, e quibus legatus in sanguinem, procurator in bona saeuiret*¹⁵²⁸. En Hispania, la rebelión de los astures en el 22 a.C. se debió, según Dión Casio, al desprecio y la crueldad con que los trató P. Carisio¹⁵²⁹, quien parece haberse conducido de manera similar a Varo. Lo único que evitó que se produjera un desastre como el que sufriría este último años después fue que el gobernador de la provincia vecina de la Citerior, Cayo Furnio, intervino a tiempo. Las provincias antiguas y plenamente romanizadas como la Bética, Asia o África Proconsular tampoco se libraron de los abusos de algunos gobernadores y los procuradores. En lo que respecta a los primeros, las causas incoadas contra ellos a su regreso a Roma muestran que, aparte del crimen *maiestatis*, las imputaciones más frecuentes estuvieron relacionadas con las extorsiones y la concusión (*repetundae*) y los abusos del poder coercitivo (el crimen *de ui publica*). Estos últimos solían darse en una aplicación arbitraria, ilícita o despótica del *ius gladii*¹⁵³⁰, pero también podían derivarse de una extralimitación de los soldados enviados por el gobernador para asegurar la recaudación tributaria.

¹⁵²⁶ Dio LVI, 18: “Los bárbaros, por su parte, estaban asumiendo el orden romano, frecuentaban los mercados y organizaban reuniones pacíficas. No obstante, todavía no se habían olvidado de sus costumbres ancestrales, de sus modos de comportamiento innatos, de su régimen de vida independiente y de que el poder proviene de sus armas. Y por esa razón, mientras poco a poco, y siguiendo una senda bajo vigilancia, olvidaban sus antiguas costumbres y aprendían las nuevas, no mostraron su descontento por el cambio de régimen de vida y no percibieron que se estaban transformando en otras personas. Pero cuando Quintilio Varo asumió el gobierno de la provincia de Germania y desde aquel cargo se responsabilizó de la administración de los asuntos de aquellas gentes, los apremió a que asumieran los cambios de manera global. Además, les daba órdenes como si fueran esclavos y les exigía dinero como se hace con los súbditos. Y los germanos no lo soportaron. Sus prohombres aspiraban al poder que en otro tiempo tuvieron y la plebe apreciaba más el orden tradicional que la dominación extranjera”. (trad. J. M. Cortés Copete, *Dión Casio, Historia romana. Libros L-LV*, Madrid, 2011).

¹⁵²⁷ Tac. Agr. 13: *Ipsi Britanni dilectum ac tributa et iniuncta imperii munia impigre obeunt, si iniuriae absint: has aegre tolerant, iam domiti ut pareant, nondum ut seruiant.*

¹⁵²⁸ Agr. 15, 2.

¹⁵²⁹ Dio LIV, 5, 1: [...] οἱ τε Ἀστυρες ἐπολέμησαν αὐτοῖς, οὗτοι μὲν διὰ τε τρυφὴν καὶ δι’ ὀμότητα τοῦ Καρισίου [...].

¹⁵³⁰ Vid. Primera Parte.

A ojos de Tácito, sin embargo, los desmanes solían proceder de la conducta inmoderada de los soldados, los oficiales inferiores del ejército (centuriones, prefectos...), de los libertos imperiales o de los procuradores¹⁵³¹. Tácito, como muchos senadores, despreciaba a los plebeyos que servían en el ejército y a los libertos de la administración imperial porque a su juicio carecían de importantes principios éticos y eran esclavos de sus “pasiones” (de la *cupiditas*)¹⁵³², ajenos al ideal de la *sophrosyne* propia del *éthos* aristocrático grecolatino. En cambio, tendía a disculpar a los senadores encargados del gobierno de una provincia alegando que no siempre podían controlar los actos de sus subordinados, sobre todo si no se hallaban presentes¹⁵³³. Los abusos cometidos de forma reiterada por los soldados sobre la población indígena sólo terminaban cuando aparecían lazos de amistad y de parentesco entre ellos¹⁵³⁴; es decir, con la fusión social de conquistadores y conquistados dentro del proceso de romanización.

¹⁵³¹ Por ejemplo: Tac. *Agr.* 19 (Agrícola en Britania); *Ann.* XIV, 31, 2 (a propósito de la rebelión de Búdica en 61).

¹⁵³² *Ann.* XIV, 35, 2: *Eo prouectas Romanorum cupidines ut non corpora, ne senectam quidem aut uirginitatem impollutam reliquant.* Son palabras del discurso que Búdica dirige a sus tropas.

¹⁵³³ Tac. *Hist.* IV, 14, 3.

¹⁵³⁴ Tac. *Hist.* II, 80, 3.

CAPÍTULO 5: EL CENSO Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PROVINCIAL.

Dado que el censo provincial era la base de la tributación y el medio de registro –y, por tanto, de control– de la población, a través del cual el poder imperial conocía los recursos humanos y económicos de cada provincia¹⁵³⁵, su realización solía ser una de las primeras medidas llevadas a cabo por el poder romano en una provincia recién constituida, una vez que se habían reorganizado las tierras y el régimen jurídico de las comunidades locales. Así sucedió cuando Augusto anexionó Judea, Tiberio Capadocia y Trajano Dacia¹⁵³⁶, y es muy significativo que Tácito, al hablar de la rebeldía mostrada por el pueblo capadocio de los ‘*clitae*’ ante la dominación romana, diga que rechazaban someterse al censo y los tributos¹⁵³⁷: ambos eran signos de dominación que iban inextricablemente unidos. En el Occidente altoimperial carecemos de testimonios directos de estos censos que seguían a la creación de una provincia¹⁵³⁸, pero no cabe duda de que se produjeron¹⁵³⁹. Julio César, por ejemplo, ordenó que se realizase uno entre los Helvecios que retornaron a sus tierras en 58 a.C., dentro de las primeras medidas que tomó tras su *deditio*¹⁵⁴⁰.

El primer gobernador de una provincia recién establecida era el encargado de llevar a cabo su organización administrativa, territorial e impositiva básica, y, por tanto, el agente imperial idóneo para ocuparse también del primer censo en ella. Es muy probable que tras la constitución de la provincia Transduriana en el Noroeste de Hispania se llevara a cabo un censo, hecho que podemos deducir a partir del importante

¹⁵³⁵ Esa información de los recursos del Imperio era fundamental para su gestión, tanto desde un punto de vista económico como militar (*dilectus*, etc.). Por ello, en 23 a.C., cuando una grave enfermedad le hizo temer por su vida, Augusto entregó a su amigo Calpurnio Pisón un inventario con las fuerzas militares disponibles y los ingresos públicos; y a su muerte en 14 d.C., el *princeps*, entre los documentos adjuntos a su testamento, había preparado un *breuiarium totius imperii* que contenía un resumen de los recursos del Imperio. Cf. Tac. *Ann.* I, 11, 4; Suet. *Diu. Aug.* 101, 6; Dio LVI, 33, 2.

¹⁵³⁶ P. A. Brunt, “The Revenues of Rome”, *JRS* 71, 1981, pp. 161-171, esp. p. 164.

¹⁵³⁷ Tac. *Ann.* VI, 41: *Per idem tempus Clitarum natio Cappadoci Archelao subiecta, quia nostrum in modum deferre census, pati tributa adigebatur, in iuga Tauri montis abscesit...*

¹⁵³⁸ Béranger, “Le cens...”, cit. p. 192.

¹⁵³⁹ Brunt, “The Revenues...”, cit.

¹⁵⁴⁰ Caes. *B.G.* I, 29, 3: *Eorum qui domum redierunt censu habito, ut Caesar imperauerat, repertus est numerus milium C et X.*

testimonio conocido como “Bronce de Bembibre” o “Edicto del Bierzo”. El texto dice lo siguiente:

Imp(erator) Caesar Diui fil(ius) Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) / VIII{I} et proco(n)s(ule) dicit / castellanos Paemeiobrigenses ex / gente Susarrorum desciscentibus / ceteris permansisse in officio cog(noui ex omnibus legatis meis qui / Transdurianae prouinciae prae/fuerunt. Itaque eos uniuersos im/munitate perpetua dono quosq(ue) agros et quibus finibus possede/runt Lucio Sestio Quirinale leg(ato) / meo eam prouinciam optinente{m} / eos agros sine controuersia possi/dere iubeo. / Castellanis Paemeiobrigensibus ex / gente Susarrorum quibus ante ea(m) / immunitatem omnium rerum dede/ram eorum loco restituo castellanos / Aliobrigiaecinos ex gente Gigurro/rum uolente ipsa ciuitate eosque / castellanos Aliobrigiaecinos om/ni munere fungi iubeo cum / Susarris. / Actum Narbone Martio / XVI et XV K(alendas) Martias / M(arco) Druso Li/bone Lucio Calpurnio Pisone co(n)s(ulibus)¹⁵⁴¹.

En 15 a.C., Augusto, hallándose en Narbona ocupado precisamente en la reorganización de la provincia de la Galia Transalpina (que pasará a conocerse como Narbonense desde entonces), decide premiar a los *castellani Paemeiobrigenses* que habitaban en el Noroeste de Hispania, en virtud de su lealtad, con una exención fiscal plena y perpetua (*immunitas perpetua*), conservando además sus tierras según los límites que tenían desde el gobierno de Quirinal (*quosq(ue) agros et quibus finibus possede/runt Lucio Sestio Quirinale leg(ato) / meo eam prouinciam optinente{m} / eos agros sine controuersia possi/dere iubeo*). Esto prueba que Quirinal se encargó de reorganizar el territorio de las comunidades de la nueva provincia en 22-19 a.C. siguiendo las instrucciones de Augusto y en el marco de la *deditio*. Por ello, a pesar de haber sido aliados de los romanos durante la conquista, estos *Paemeiobrigenses* estaban obligados a pagar los consabidos tributos provinciales (sobre la tierra y sobre las personas), y sólo el emperador –al concederles la *immunitas perpetua*– los liberó de ellos, premiando así la lealtad que habían mostrado hacia Roma en el cumplimiento de

¹⁵⁴¹ Seguimos la lectura establecida en J. Sánchez-Palencia – J. Mangas (coords.), *El edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, León, 2000, pp. 15-19, con la corrección de ‘Aliobrigiaecinos’ establecida por R. Hernando Sobrino, “Nota sobre nota. El Bronce de El Bierzo y la *Tabula* de El Caurel”, *Gerión* 20/2, 2002, pp. 577-584. Por su parte, Alföldy, “Das neue Edikt des Augustus aus El Bierzo in Hispanien.”, *ZPE* 131, 2000, pp. 177–205, lee *Aiiobrigiaecinos*, con –ii- y no –li-. Vid. Anexo II: nº 37.

sus obligaciones con ella (*permansisse in officio*), en contraste con el resto de sus vecinos, que se habían sumado a una insurrección indígena¹⁵⁴². A petición de la *gens Susarorum* (*uolente ipsa ciuitate*), Augusto decidió compensarla haciendo que las obligaciones fiscales del *castellum Paemeiobrigense* dentro de esa *ciuitas* fuesen asumidas por los *castellani Aliobrigiaceni*, que hasta entonces habían contribuido dentro de la *gens Gigurorum*. E. García ha planteado que “en este procedimiento empleado podría ser reconocida una *adtributio*, entendida ésta como un simple mecanismo de agregación de un territorio o una comunidad a otra con el fin principal de contribuir económicamente”, en un sentido menos restrictivo al dado por U. Laffi, el cual, en efecto, señala que, desde un punto de vista técnico, en teoría “il centro cittadino da cui dipendono le comunità *adtributae* è sempre un centro di diritto latino o romano, colonia o *municipium*”¹⁵⁴³. Por su parte, R. López Melero ha propuesto que el procedimiento al que alude el Edicto del Bierzo fuese el de una *contributio*¹⁵⁴⁴, opción, empero, que parece menos probable dado que, como expuso el propio Laffi, la *contributio* se producía siempre entre “comunità cittadine”, mientras que en el caso de comunidades que carecían de un ordenamiento cívico, como las del Noroeste peninsular, el procedimiento usado por Roma era la *adtributio*¹⁵⁴⁵.

Han surgido, también, diferentes interpretaciones del sentido del verbo ‘*restituo*’ en la última cláusula del edicto: mientras que López Melero ha interpretado que se referiría a la operación jurídica por la cual los *Aliobrigiaceni* ocuparían el lugar de los *Paemeiobrigenses* a efectos fiscales (siendo los *Susarri* los “beneficiarios”)¹⁵⁴⁶, López Barja ha propuesto que con ‘*restituo*’ Augusto estaría indicando que levanta la condena

¹⁵⁴² A. Orejas – I. Sastre – F.J. Sánchez-Palencia – D. Plácido, “El edicto de Augusto del Bierzo y la primera organización romana del Noroeste peninsular”, en Sánchez-Palencia – Mangas, *El Edicto del Bierzo...* cit. pp. 63-112, esp. p. 65.

¹⁵⁴³ E. García Fernández, “*Immunitas y adtributio*” en Sánchez-Palencia – Mangas, *El edicto del Bierzo...* pp. 113-122, esp. p. 118; U. Laffi, *Adtributio e contributio: Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa, 1966, pp. 89-90. Por otro lado, esta autora ha señalado con acierto que la expresión “*eorum loco restituo*” (l. 18) ha de ser interpretada de manera figurada: los Aliobrigiacenos asumían las cargas fiscales de los Paemeiobrigenses, pero no se producía ningún desplazamiento de población (pp. 114-115).

¹⁵⁴⁴ R. López Melero, “*Restituere y contribuere* en las disposiciones de la tábula de El Bierzo”, *ZPE* 138, 2002, pp. 185-223, esp. pp. 214-223.

¹⁵⁴⁵ Laffi, *Adtributio...* cit. p. 89 (*adtributio*) y 159 (*contributio*). Como ha señalado P. López Barja, “*Prouincia y restituo* en el Bronce de El Bierzo”, *AEspA* 83, 2010, pp. 175-181, esp. p. 179, César dice explícitamente que empleó la *adtributio* cuando decidió que los boyos estuviesen sometidos a los Eduos: *Gorgobinam, Boiorum oppidum, quos ibi Helvetico proelio uictos Caesar collocauerat Aeduisque attribuerat* (B.G. VII, 9, 6).

¹⁵⁴⁶ López Melero, “*Restituere...*”, cit., pp. 192-213. Esta autora realiza un exhaustivo análisis de las cláusulas del edicto desde un punto de vista jurídico y sintáctico.

que pesaba sobre los *Aliobrigiaecini* por haberse rebelado, restituyéndoles su condición anterior, para que pudiesen hacerse cargo de las obligaciones fiscales que antes competían a los *Paemeiobrigenes*¹⁵⁴⁷. Esta última interpretación tiene mucho sentido si, aparte de los paralelos que se encuentran en otras fuentes¹⁵⁴⁸, se tiene en cuenta que era necesario que los *Aliobrigiaecini* tuviesen los recursos suficientes para sustituir fiscalmente a los *Paemeiobrigenses* y que, hasta entonces, habían estado privados de ellos en el marco de la *deditio* por haber participado en la rebelión. En cambio, la interpretación de López Melero presenta un problema que no consigue resolver de manera rotunda: ¿por qué aparecerían como “beneficiarios” del *restitutio* los *Paemeiobrigenses* si, en realidad, la medida favorecía a los *Susarri*?¹⁵⁴⁹

Al margen de esto, lo cierto es que estamos ante un sistema fiscal bien establecido desde el gobierno de Quirinal, que fue tomado como referencia por Augusto para conocer el *statu quo* de estas comunidades. Según Estrabón, la reordenación de las comunidades del Noroeste conllevó la reducción de algunas *póleis* en *komai* y el sinecismo de otras¹⁵⁵⁰, lo que ha sido interpretado como una referencia a la constitución de estas *ciuitates* con la agrupación de *castella*¹⁵⁵¹. El mecanismo más adecuado para llevar a cabo esa reordenación administrativa y territorial era el censo, que solía realizarse por *ciuitates*. Estas eran las unidades administrativas que funcionaban como domicilio fiscal en todas las provincias y allí acudían sus habitantes a inscribirse y declarar sus bienes, con especial atención a sus tierras¹⁵⁵². En el caso de las colonias y municipios, cada uno hacía el suyo, como ya sucedía en Italia desde finales de la República.

Desde Augusto, la novedad consistió en que se comenzó a realizar un censo con vocación general con el fin de tener información de todas las provincias, aunque no se llevó a cabo en todas al mismo tiempo. Como muy bien ha expresado Lo Cascio, existía un “rapporto organico” entre los censos de *ciues* realizados en los años 28 y 8 a.C. y en

¹⁵⁴⁷ López Barja, “*Prouincia y restituo...*” cit. p. 179.

¹⁵⁴⁸ Liv. XLII, 8, 7; XLIII, 4, 13; Caes. B.G. I, 28, 5; VII, 76, 1.

¹⁵⁴⁹ *Ibidem*, p. 211.

¹⁵⁵⁰ III, 3, 5.

¹⁵⁵¹ M. V. García Quintela – J. M. Vázquez Varela, *A vida cotiá na Galicia castrexa*, Santiago de Compostela, 1998, pp. 126-127.

¹⁵⁵² Aunque la propiedad sobre las tierras debía registrarse en la *ciuitas* a la que éstas perteneciesen, no en la que estuviera adscrito el propietario, si es que era diferente, según Ulpiano, *Dig. L*, 15, 4, 2. Cf. P. López Barja, “El censo provincial, los *populi* y los *castella* de *Gallaecia*”, *Gallaecia* 18, 1999, pp. 347-362, esp. pp. 352-354.

14 d.C.¹⁵⁵³ y aquéllos realizados en las comunidades de Italia y, también, de las provincias. “La novità era il portato del decentramento delle operazioni del *census* in *municipia, coloniae, praefecturae in Italia* introdotto da una norma della *Tabula Heracleensis* (che io credo, nella sua interezza, di età cesariana), una norma che per questo specifico aspetto non doveva essere tralaticia”, a los cuales se añadieron censos efectuados en las comunidades peregrinas¹⁵⁵⁴. Esto no quiere decir que coincidiesen cronológicamente, pero sí que existía entre ellos una conexión innegable¹⁵⁵⁵.

En el Noroeste, en cambio, a causa de su inexistencia, Roma podría haber optado por elegir a uno de los *castella* de cada *populus* como centro al que debería acudir la población adscrita cuando se realizase el censo. Este sería el sistema que aparece reflejado la descripción que hace Plinio el Viejo de los *conuentus* del Noroeste:

*Iunguntur iis Astrum XXII populi diuisi in Augustanos et Trasmontanos, Asturica urbe magnifica. In iis sunt Gigurri, Paesici, Lancienses, Zoelae. Numerus omnium multitudinis ad CCXL liberorum capitum. Lucensis conuentus populorum est sedecim, praeter Celticos et Lemauos ignobilium ac barbarae appellationis, sed liberorum capitum ferme CLXVI. Simili modo Bracarum XXIII ciuitates CCLXXXV capitum, ex quibus praeter ipsos Bracaros Bibali, Coelerni, Callaeci, Equasei, Limici, Querquerni citra fastidium nominantur.*¹⁵⁵⁶

Además, este encuadramiento administrativo será usado por la población local como medio de identificación cuando se hallaban fuera de su comunidad, como está atestiguado epigráficamente; por ejemplo, el *Tillegus Ambati f(ilius) Susarrus / >(castello) Alobrigiaeco* de la *Tabula do Caurel* (que pertenece al mismo *castellum*

¹⁵⁵³ R.G.D.A. 8: *Senatum ter legi, et in consulatu sexto census populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum feci, quo lustrum ciuium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexaginta tria millia. Tum iterum consulari cum imperio lustrum solus feci C. Censorino et C. Asinio cos., quo lustrum censa sunt ciuium Romanorum capita quadragiens centum millia et ducenta triginta tria millia. Et tertium consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Caesare filio meo feci Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos., quo lustrum censa sunt ciuium Romanorum capitum quadragiens centum millia et nongenta triginta et septem millia.*

¹⁵⁵⁴ Lo Cascio, “Census provinciale...” cit. pp. 197-198. Sobre este aspectos de la *Tabula Heracleensis* véase del mismo autor: “Le *professiones*...” cit.

¹⁵⁵⁵ Lo Cascio, “Census provinciale...” cit. p. 199.

¹⁵⁵⁶ Plin. *N.H.* III, 28. La lista es incompleta, pues Plinio no quiere aburrir al lector con nombres “que causa fastidio pronunciar”.

citado en el Bronce del Bierzo, ahora ya incluido en la *gens Susarrorum*)¹⁵⁵⁷; o el *Fuscus Se/veri f(ilius) Lim(icus) / >(castellum) Arguce*¹⁵⁵⁸. En el Edicto del Bierzo Augusto se refiere a las colectividades indígenas siguiendo este mismo sistema de identificación de carácter administrativo –*castellani Paemeiobrigenses ex gente Susarrorum y castellani Aiiobrigiaecini ex gente Gigurrorum* (esta última citada por Plinio el Viejo en el pasaje anterior)–, lo que induce a pensar, como hemos dicho, que ya se había implantado el sistema censual en el Noroeste, elaborado por L. Sestio Quirinal cuando se creó la Transduriana.

Sabemos que se realizó un censo en la provincia de Lusitania en torno al 16-13 a.C., lo que ha llevado a deducir que las otras dos provincias hispanas surgidas de la reorganización augustea que se produjo entonces también lo tuvieron¹⁵⁵⁹. Sin embargo, esto no es óbice para plantear que ya Quirinal hubiese realizado un primer censo en el Noroeste cuando era una provincia. El censo provincial se realizaba por mandato directo del emperador, que designaba un legado senatorial *ad hoc*, de rango pretorio o consular, o delegaba también esta labor en el propio gobernador¹⁵⁶⁰; y en este caso se dan todos los requisitos requeridos: se trataba de una provincia recién creada, controlada directamente por el emperador y su gobernador era un legado de rango consular.

Finalmente, se puede añadir un argumento más a favor del censo de Quirinal por comparación. Sabemos que en el 12 a.C. Druso, dentro de su labor de consolidación del control romano sobre la Galia Comata, realizó un censo en ella¹⁵⁶¹, precisamente en el mismo año que dedicó un altar a Roma y Augusto en *Lugdunum*, fundando, así, el importante santuario del culto imperial al que acudirían representantes de las comunidades de las tres provincias galas recién constituidas. Este altar del culto

¹⁵⁵⁷ Hernando Sobrino, “Nota sobre nota...” cit. quien da un argumento de peso para optar por la lectura *Aliobrigiaecinos* y no la de *Aiiobrigiaecinos* de Alföldy, “Das neue Edikt...” cit.: hay una importante atestación de los nombres derivados del radical Al- en la provincia de León, mientras que los derivados del céltico *Aio/Aius* (usados por Alföldy como apoyo de su lectura) se hayan sólo en Palencia y el único ejemplo del Noroeste sería, precisamente, el de la *Tabula* do Caurel, que ha de ser reinterpretado.

¹⁵⁵⁸ Estela funeraria de Fuscus (procedente de Vila do Touro, Sabugal, Guarda, Portugal; en la antigua Lusitania): *HEp* 12, 2002, 645. Es el sistema de nomenclatura basada en tres elementos: filiación, *castellum* (señalado con la C invertida) y *populus/gens* (*ciuitas*): López Barja, “El censo provincial...” cit. pp. 357-358; A. Tranoy, “Religion et organisation du territoire en Galice au Ier siècle de l’empire romain”, en *L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale...* cit. pp. 119-124, esp. pp. 120-121.

¹⁵⁵⁹ *CIL* X, 680.

¹⁵⁶⁰ Béranger, “Le cens...” cit., p. 196.

¹⁵⁶¹ Liv. *Per.* 138, 3 y 139; *CIL* XIII, 1668. Bajo el principado de Augusto en las Galias hubo otros dos censos: uno anterior (27 a.C.) realizado por Augusto (Liv. *Per.* 134, 2; Dio LIII, 22, 5), y otro posterior, (14 d.C.), obra de Germánico (Tac. *Ann.* I, 31, 2 y 33, 1). Cf. Béranger, “Le cens...” cit., p. 192.

imperial provincial, sin embargo, no fue el primero consagrado a Augusto en Occidente, sino que siguió a los tres que Lucio Sestio Quirinal erigió en la Transduriana¹⁵⁶². Si a Quirinal, a pesar de no formar parte de la familia imperial, se le encomendó la primera organización de esta provincia y el establecimiento del culto imperial en ella, es admisible que, al igual que Druso, su labor también incluyera la realización de un primer censo por orden de Augusto.

Por otro lado, el bronce de El Bierzo nos informa de que los legados que sucedieron a Quirinal en el gobierno de la Transduriana estuvieron en contacto epistolar con el emperador¹⁵⁶³. A diferencia de los procónsules de la Bética o de Plinio cuando gobernó Bitinia-Ponto, la correspondencia de estos legados imperiales de la Transduriana versaría sobre cuestiones eminentemente fiscales o relativas a la ordenación territorial, además de incluir informes favorables o desfavorables acerca de la fidelidad de las comunidades de su provincia. No cabe duda de que la decisión que tomó Augusto de premiar con la *immunitas perpetua* a los *Paemeiobrigenses* se basó en los informes que le habían enviado los gobernadores de la Transduriana¹⁵⁶⁴.

Al margen de ese primer censo que se realizaba en una provincia tras su creación, en todas ellas se llevaron a cabo censos periódicos durante el Principado¹⁵⁶⁵, aunque la frecuencia de los mismos no ha podido ser determinada con exactitud. F. Jacques propuso que en el siglo II y principios del III en las Tres Galias –donde mayor información tenemos– el censo se elaboraría cada quince años más o menos¹⁵⁶⁶, y eso nos puede dar una idea de la periodicidad que tendría en otras provincias occidentales. En las dos Germanias está atestiguada una importante actividad censal en torno al 110 d.C., lo que ha sido explicado como resultado de su separación de la Galia Bélgica en época de Domiciano¹⁵⁶⁷.

¹⁵⁶² Véase la Tercera Parte.

¹⁵⁶³ Il. 5-8: *castellanos Paemeiobrigenses ex / gente Susarrorum desciscentibus / ceteris permansisse in officio cog/noui ex omnibus legatis meis qui / Transdurianae prouvinciae prae/fuerunt*.

¹⁵⁶⁴ G. Alföldy, “Il nuovo editto di Augusto da El Bierzo in Spagna”, *Minima Epigraphica et Papyrologica* 6, 2001, pp. 365-418, esp. pp. 386-389.

¹⁵⁶⁵ F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Nápoles, 1965, vol. IV/2, pp. 779-780.

¹⁵⁶⁶ F. Jacques, “Le cens en Gaule au IIe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle”, *Ktèma* 2, 1977, pp. 285-328, esp. pp. 323-325.

¹⁵⁶⁷ Bérenger, “Le cens...” cit. p. 194.

En Hispania, sabemos que en época augustea se realizó uno en Lusitania y que en los años 73/74, en 189-192¹⁵⁶⁸ y en torno a 214/216 se llevaron a cabo censos en la provincia de Hispania Citerior. Aunque estos testimonios no permiten establecer la periodicidad con la que se producirían los censos en esta última, dos de ellos sí ofrecen una valiosa información: en 73/74 se hizo coincidir el censo de la Citerior con el desempeño de la censura en Roma por parte de Vespasiano y Tito y en 214 se elaboró otra vez como consecuencia de una decisión que afectaba de manera decisiva a la fiscalidad del Imperio: la promulgación de la *Constitutio Antoniniana* en 212. En el primer caso, se encargó del censo el gobernador de la Citerior, Q. Vibio Crispo, que fue enviado a la provincia como *leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) in censibus accipiendis Hispaniae Citerioris*:

Sex(to) Attio L(uci) filio Vol(umnia) / Suburano Aemiliano praef(ecto) / fabr(um) praef(ecto) alae Taurianae tor/quatae adiutori Vibi Crispi leg(ati) / Aug(usti) pro pr(aetore) in censibus accipiendis / Hispaniae Citerioris adiut(ori) Iuli Vrsi / praef(ecti) annonae eiusdem in praefect(ura) / Aegypti proc(uratori) Aug(usti) ad Mercurium / proc(uratori) Aug(usti) Alpium Cottianarum et / Pedatium Tyriorum et Cammun/tiorum et Lepontiorum procur(atori) / prouinc(iae) Iudaeae proc(uratori) prouinc(iae) / Belgicae / Mari Cethegi cornic(ularii) piiss(imi) fratres¹⁵⁶⁹

La decisión de Vespasiano de realizar un censo en la Hispania Citerior en este momento está relacionada muy probablemente con su concesión de *ius Latii* a toda Hispania, con el fin de cuantificar la población que se había beneficiado de ello cuando él mismo y Tito llevaban a cabo el censo en Roma. Vemos que para realizarlo Vibio Crispo recurrió al ejército y se valió de los oficiales de la legión *VII Gemina*. Como veremos a continuación, el poder romano recurrió al ejército para elaborar el censo en

¹⁵⁶⁸ *CIL* II²/14, 984 = *RIT* 139. Quinto Hedio Rufo Loliano Gentiano fue *censitor* cuando gobernó tanto la Galia Lugdunense como la Hispania Citerior, esta última ca. 189-192 d.C. Cf. Alföldy, “Fasti und Verwaltung...” cit. p. 341 (donde corrige la cronología que había propuesto en *Fasti Hispanienses* p. 47: 202-205 d.C.). *Vid. supra* Capítulo 5 de la Primera Parte. La labor y el comportamiento de Gentiano con sus subordinados debieron de ser excelentes a tenor de las dos inscripciones honoríficas que le fueron dedicadas en la capital provincial: una por miembros de su *officium* (*CIL* II²/14, 985 = *RIT* 140), la otra (que es en la que se menciona su cargo de censitor en Hispania Citerior) por parte de un particular. A partir de Septimio Severo se comenzó a usar el título de *censitor/censor* para referirse a los senadores encargados el censo provincial; cf. Jacques “Le cens en Gaule...” cit. pp. 302-303 y 316. Este autor planteó, entre otras posibilidades, la hipótesis de que podría haber realizado el censo de la Hispania Citerior en un momento anterior a su gobierno de la provincia (p. 303, nt. 4).

¹⁵⁶⁹ *AE* 1939, 60.

las zonas menos romanizadas que carecían de estructuras cívicas mínimas para realizarlo. En este caso, el *praefectus fabrum* Sextio Atio Suburano Emiliano actuó como *adiutor* del gobernador, y por ello deducimos que lo ayudaría cotidianamente en tareas administrativas relacionadas con el censo una vez que los datos recopilados en toda la provincia fueron enviados a la capital provincial. El título usado por Vibio Crispo tiene paralelos en otras provincias; por ejemplo, se le concedió uno similar en época de Tiberio al procónsul de la Galia Narbonense Torcuato Novelo Ático¹⁵⁷⁰.

En cambio, en 214/216 Caracala decidió mandar a un enviado especial para elaborar el primer censo en esta provincia tras la extensión de la ciudadanía romana a todos los hombres libres del Imperio que había ordenado dos años antes¹⁵⁷¹. Esta decisión sin duda estuvo dictada por su política de descargar de obligaciones al gobernador de la Hispania Citerior¹⁵⁷², en este caso ante la complejidad de organizar un censo tan relevante en el curso del cual sin duda se hubo de informar a la población de sus nuevos derechos y obligaciones.

Existe también un epígrafe procedente del cabo da Roca, en São Miguel d'Odrinhas, en el antiguo *conuentus Scallabitanus*, cuya difícil lectura, de ser correcta, nos informa acerca de un *legatus missus in Lusitaniam ad census* en época de Antonino Pío:

Soli [---?]lano / C(aius) Iuliu[s] C(ai) f(ilius) Qu[i]r(ina) Celsus / adlec[t]us ab [I]mp(eratore) Antonin[o] / [A]ug(usto) in amplissimum [o]rd[i]n(em) ab eodem / [I]mp(eratore)] / [l]eg(atus) missu[s] i[n] Lusi[t(aniam)] a[d] [censu]s a [l]ibell[is] / [e]t a censib(us) proc(urator) provin(ciarum) [Lugd(unensis)] et [Aquit(anicae)] / [dilecta]tor milit(um) [in] Aqu[it]ania pr[oc(urator) patri]/ [moni] proc(urator) XX [her(editatium) Roma]e pr[oc(urator) N[easpo]/leo[s] et mausole[i Ale]xand[r]iae / pro[c(urator)] XX

¹⁵⁷⁰ ILS 950: *[leg(atus) a]d censum accipiendum et dilect(um) et / proco(n)s(ul) prouinciae Narbon(ensis)*

¹⁵⁷¹ El encargado de esta tarea fue Publio Plotio Romano, *legatus Augusti ad census accipiendos Hispaniae Citerioris* (CIL VI, 322).

¹⁵⁷² Recuérdese que también desgajó la *Gallaecia* de la Hispania Citerior, creando la efímera provincia de *Hispania Superior*: cf. f. Nonnis, "Un patrono..." cit.; Alföldy, *Provincia Hispania Superior*, cit. pp. 13-72. El resto de la provincia fue conocida como provincia *Hispania Noua Citerior*: ERPL 73-74. A. Aichinger, "Zwei Arten des Provinzialcensus? Überlegungen zu publizierten israelischen Papyrusfunde", *Chiron* 22, 1992, pp. 35-45, ha propuesto que los censos que se realizasen por un motivo de relevancia y con carácter excepcional no serían encargados a los gobernadores sino a senadores específicamente designados para ello. Ese sería el caso de P. Plotio Romano en 214.

[h]er(editatium) per pro[ui]n(cias)] N[ar]bon(ensem) et Aq[u]it(anicam)] / cur[at]o[r]u[m]
u[i]ae lig[ariae t]rium[phalis] / d(ono) d(edit)¹⁵⁷³

Se trata de Cayo Julio Celso, que en el ara que dedicó al Sol y otra divinidad en este lugar dejó constancia de su cursus honorum: desempeñó importantes procuratelas en las Galias, Alejandría y Roma que le hicieron ganar la confianza del emperador hasta el punto de admitirlo en el orden senatorial. Según I. Piso, tras esta *adlectio in ordine senatorius*, Celso fue enviado a gobernar la Lusitania, con la misión adicional de realizar el censo dada su experiencia en la administración¹⁵⁷⁴. Sin embargo, el hecho de que en su título no aparezca la fórmula *pro praetore* y, sobre todo, que no hubiese desempeñado antes no sólo la pretura (requisito para ser gobernador de esta provincia), sino ni siquiera alguna magistratura, invita a pensar, en nuestra opinión, que sería un legado especial enviado con la misión específica de elaborar el censo y descargar al gobernador de la Lusitania de esa tarea. Con todo, salvo en casos excepcionales, serían los gobernadores los encargados de llevarlo a cabo, aunque no se reflejase en su título oficial¹⁵⁷⁵.

Se puede apreciar que faltan ejemplos epigráficos referidos a la realización del censo general en las provincias proconsulares como la Bética. Sólo se conocen dos *censitores*, uno en la Narbonense¹⁵⁷⁶, otro en Macedonia, y su carácter extraordinario – sobre todo del segundo, que aparece mencionado como *cens(or uel -itor) prouinc(iae) Mace[d](oniae)* a secas¹⁵⁷⁷ –, ha llevado a Lo Cascio –contra la opinión de Unger y Brunt– a la conclusión de que en las provincias proconsulares no se realizarían censos provinciales dirigidos por los gobernadores u otros enviados de Roma, sino que se dejaría la iniciativa en manos de las autoridades locales (salvo en áreas escasamente urbanizadas)¹⁵⁷⁸. No hay una solución definitiva; sin embargo, con López Barja, entendemos que el argumento *e silentio* no es nunca decisivo¹⁵⁷⁹.

¹⁵⁷³ AE 2008, 641.

¹⁵⁷⁴ AE 2008, 641, donde Le Roux muestra sus dudas acerca de la lectura de las líneas 5-6, en las que aparece el título de Celso en Lusitania.

¹⁵⁷⁵ Eck, "Provincial Administration..." p. 288.

¹⁵⁷⁶ ILS 5955.

¹⁵⁷⁷ ILS 1046.

¹⁵⁷⁸ Lo Cascio, "Census provinciale..." cit. pp. 205-208. Cf. Brunt, "The Revenues..." cit.

¹⁵⁷⁹ López Barja, "El censo en las *ciuitates peregrinae*..." cit. p. 460.

En cuanto a la forma de registro de la población provincial y sus bienes en el censo, la historiografía ha postulado la existencia de dos modelos. Por un lado, el censo de los ciudadanos romanos, que eran registrados individualmente, proporcionando su nombre completo con filiación y tribu (y los libertos, además, el *praenomen* de su patrono), el nombre de sus descendientes *in potestate* y el de su esposa si era *in manu* y la declaración de sus propiedades (fundamentalmente los bienes inmuebles y sus esclavos)¹⁵⁸⁰. Por otro, el de las comunidades peregrinas, en las cuales Roma sólo necesitaría conocer su capacidad fiscal y su número de personas totales (como aparecen en Plin. *N.H.* III, 28), dado que su responsabilidad fiscal sería colectiva. Según se ha admitido desde el estudio clásico de Grelle, esta diferente responsabilidad fiscal estaría reflejada en la categoría gromática que Frontino, en su tratado *de agrorum qualitate*, atribuye a las tierras de la colonias y las *ciuitates peregrinae*, respectivamente: el *ager diuisus et adsignatus* para las primeras, *ager per extremitatem mensura comprehensus* para las últimas¹⁵⁸¹. Según Orejas y Sastre, el modelo del *ager mensura comprehensus* habría sido aplicado en el Noroeste de Hispania¹⁵⁸² al igual que lo fue en las comunidades peregrinas de la Lusitania y la Citerior, como está atestiguado para *Salamanca* y *Palantia* —mencionadas precisamente como ejemplo por Frontino¹⁵⁸³.

Esta teoría ha sido revisada recientemente por López Barja, quien, recurriendo a los documentos censuales egipcios, el archivo de Babatha y las *Makrobioi* de Flegón de Tralles, ha propuesto la hipótesis de que también los peregrinos fuesen censados individualmente con sus datos concretos (nombre, familia, patrimonio). En los documentos censuales conservados en Egipto se recoge el nombre y patronímico del declarante junto con una descripción de su casa y de aquellos que habitaban en ella, seguida de un juramento por el emperador y los dioses, y en la declaración de propiedades realizada por Babatha en Arabia ante un *praefectus equitum* romano cuya copia conservó en su archivo personal. Asimismo, en sus *Makrobioi* Flegón de Tralles

¹⁵⁸⁰ Dig. L, 15, 4, 5; Liv. XXXIX, 44, 4; D. H. IX, 25, 2; Cic. 2 Verr. V, 20. Cf. López Barja, “El censo en las *ciuitates peregrinae*...” cit. p. 459; C. Nicolet, *Le métier du citoyen dans la Rome républicaine*, París, 1976, pp. 92-121, y *Tributum: Recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine*, Bonn, 1976, pp. 27-33. Los ciudadanos romanos dejaron de pagar el *tributum* en 167 a.C.

¹⁵⁸¹ Grelle, *Stipendium*... cit.

¹⁵⁸² A. Orejas – I. Sastre, “Fiscalité et organisation du territoire dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique: civitates, tribut et ager mensura comprehensus”, *DHA* 25/1, 1999, pp. 159-188.

¹⁵⁸³ Frontin. *De agr. qual.* 1 (Th.): *Ager est mensura comprehensus, cuius modus uniuersus ciuitati est adsignatus, sicut in Lusitania Salma<n>ticensibus aut Hispania citeriore Pala<n>tinis et in conpluribus prouinciis tributarium solum per uniuersitatem populis est definitum.*

menciona a individuos hispanos con onomástica claramente peregrina como Ambato, hijo de Dokurio, de *Interamna*, en la Citerior, o Tamphio, hijo de Keltio, de *Conimbriga*, en Lusitania¹⁵⁸⁴. Así, según López Barja, en las provincias imperiales de Hispania se seguiría el mismo proceder que en Egipto y Arabia, consignándose el nombre y edad de los peregrinos, de acuerdo con una de las prescripciones básicas que debían asegurarse en todo censo, según Ulpiano:

*Aetatem in censendo significare necesse est, quia quibusdam aetas tribuit, ne tributo onerentur: ueluti in Syriis a quattuordecim annis masculi, a duodecim feminae usque ad sexagensimum quintum annum tributo capitis obligantur. Aetas autem spectatur censendi tempore.*¹⁵⁸⁵

Como señala López Barja, todo ello no quita que la responsabilidad fiscal fuese colectiva en las *ciuitates peregrinae*, ni que los agrimensores sólo se interesaran por conocer los límites generales del *ager* peregrino según el modelo del *ager per extremitatem mensura comprehensus*. Asimismo, es necesario preguntarse acerca de la categoría gromática que tenían las tierras de los municipios, en los que, sin embargo, parece que se llevaría a cabo un censo individual similar al de las colonias¹⁵⁸⁶.

Esta hipótesis resulta muy sugerente, pero, como su autor reconoce, las evidencias de las que se sirve no son decisivas y sí bastante complejas. En efecto, la información censitaria individualizada de Egipto ha sido vista como el resultado de una “*capitatio*” o impuesto sobre cada persona libre específico de esta provincia, gracias al cual, según Flavio Josefo, se pudo estimar su población total (con la excepción de los alejandrinos) en su época¹⁵⁸⁷. Como ha señalado recientemente A. Jördens, la información que aporta la rica documentación egipcia ha de ser tomada con cuidado, pues, a pesar de que se han hallado similitudes con otras provincias orientales (por ejemplo en el caso de los *beneficiarii*), Egipto cuenta con una tradición institucional propia (ptolemaica) muy particular y presenta una casuística muy variada en lo que respecta, por ejemplo, a la tributación. Todo ello, en palabras de este autor, hace que no

¹⁵⁸⁴ FGH 257 F 37, nº 63 y 67. López Barja, “El censo en las *ciuitates peregrinae*...” cit.

¹⁵⁸⁵ Dig. L, 13, 3, pr.

¹⁵⁸⁶ López Barja, “El censo en las *ciuitates peregrinae*...” cit. pp. 461-464. Estamos de acuerdo con este autor (p. 464) en excluir que la “pizarra del castro de Pelou” en Grandas de Salime, sea un documento censual.

¹⁵⁸⁷ Flav. Jos. B.J. II, 385. Cf. Nicolet, “Centralisation de l’État...” cit. 206.

sea nada fácil determinar “which structural features (if any) may also be observed in other regions in the Roman empire”¹⁵⁸⁸.

Con todo, López Barja muestra la necesidad de llevar a cabo un replanteamiento general de la naturaleza del censo de los peregrinos y una revisión de las implicaciones del *ager per extremitatem mensura comprehensus* –asuntos que, por lo demás, quedan fuera del objeto de nuestro estudio.

Finalmente, existe un pasaje de la *Historia Augusta* referido a Marco Aurelio que debemos analizar:

*Per prouincias tabulariorum publicorum usum instituit, apud quos idem de originibus fieret, quod Romae apud praefectos Aerarii, ut, si forte aliquis in prouincia natus causam liberalem diceret, testationes inde ferret.*¹⁵⁸⁹

Es decir, con el fin de garantizar que se respetase la condición jurídica de los habitantes libres de las provincias, Marco Aurelio implantó en todas ellas el uso de archivos públicos en los que debían conservar los registros oficiales de los nacimientos de los hombres libres según se hacía en Roma. Así, lo que en Roma se realizaba ante los prefectos del Erario de Saturno, en las provincias se llevaría a cabo ante el personal del archivo provincial, el *tabularium publicum*.

Ahora bien, esta noticia debe ser matizada: gracias a los testimonios epigráficos sabemos que existieron *tabularia publica* en las provincias con anterioridad a Marco Aurelio y, en el caso concreto de Hispania, tenemos constancia de que el *tabularium prouvinciae Hispaniae Citerioris*, con sede en *Tarraco*, ya existía probablemente en época Julio-Claudia y, con toda certeza, bajo Adriano¹⁵⁹⁰. Además, en las colonias y en los *municipia ciuium Romanorum* de las provincias hispanas se realizaban censos según el modelo de la *Vrbs* (¿quinquenales?), a lo que hay que sumar que en ellas se aplicaría la medida augustea que obligaba a los *ciues* a declarar el nacimiento de los hijos cuando éste se produjera, recogida en las leyes *Elia Sentia* (ca. 4 d.C.) y *Papia Popea* (9 d.C.),

¹⁵⁸⁸ A. Jördens, “Government, Taxation and Law”, en C. Riggs, *The Oxford Handbook of Roman Egypt*, Oxford, 2012, pp. 56- 67, esp. p. 64.

¹⁵⁸⁹ *SHA, Marcus Aurelius* 9, 8-9. Cf. Lo Cascio, “Census provinciale...” cit. p. 199

¹⁵⁹⁰ *CIL* II²/14, 840 = *RIT* 40 y *CIL* II²/14, 1094 = *RIT* 242.

que legislaban, respectivamente, acerca de las manumisiones y las sucesiones¹⁵⁹¹. Un ejemplo de esta práctica la tenemos en la *Apologia* de Apuleyo, quien, al referirse a la edad de su esposa fallecida, insta a que se consulten las *tabulae* en las que había sido recogida la declaración que el padre de *Pudentilla* había hecho de su nacimiento en el *tabularium publicum*¹⁵⁹². Según Nicolet, estas declaraciones de nacimientos (y probablemente las defunciones), al igual que el censo general, se consignarían en el *tabularium* del gobernador provincial¹⁵⁹³. Así pues, de ser correcta su información, ¿cómo debemos interpretar este pasaje de la Vida de Marco?

Frente a las diversas explicaciones que se dieron a esta noticia de la *Historia Augusta*, J.-P. Lévy, hace medio siglo, mostró que esta disposición de Marco Aurelio no era novedosa, sino que este emperador se habría limitado a confirmar la antedicha disposición augustea con algunas puntualizaciones¹⁵⁹⁴. Con todo, hemos de preguntarnos si estos registros de nacimientos también debían ser realizados por parte de los peregrinos provinciales, pues bien podrían haber sido la fuente de la que Flegón de Tralles obtuvo los datos acerca de los hispanos más longevos.

Al margen de esto, lo cierto es que la decisión de Marco Aurelio revela que en no pocas ocasiones se producirían abusos sobre la población libre más humilde, que podía correr el riesgo de ser sometida fraudulentamente a la esclavitud, como en el caso de los *threptoi* bitinios¹⁵⁹⁵. En la Primera Parte vimos que las causas judiciales que versaban acerca de la condición jurídica de los provinciales se planteaban directamente ante el gobernador, dado que se trataba de un asunto que escapaba a la jurisdicción de las autoridades locales y en la que incluso el gobernador debía consultar al emperador. El gobernador no sólo tenía acceso a los archivos de la provincia, sino que el registro de nacimientos, como el censo en general, era supervisado por los gobernadores provinciales, y no cabe duda de que la disposición de Marco Aurelio fue transmitida a éstos por carta para que la llevaran a efecto.

¹⁵⁹¹ J.-P. Lévy, “Les actes d’état civil romains”, *RHDFE* 1952, pp. 449-486, esp. pp. 450-451 y 457; Nicolet, “Centralisation de l’État...” cit. p. 205.

¹⁵⁹² Apul. *Apol.* 89, 2-3: *Pater eius natam sibi filiam more ceterorum professus est. Tabulae eius partim tabulario publico, partim domo adseruantur, quae iam tibi ob os obiciuntur. (3) Porrige tu Aemiliano tabulas istas: linum consideret, signa quae impressa sunt recognoscat, consules legat, annos computet, quos sexaginta mulieri adsignabat.*

¹⁵⁹³ Nicolet, “Centralisation de l’État...” cit. p. 206.

¹⁵⁹⁴ Lévy, “Les actes...” cit. p. 462, nt. 1 y 2.

¹⁵⁹⁵ Plin. *Ep.* X, 65.

El domicilio fiscal en el que cada habitante de una provincia se debía inscribir y declarar sus bienes era, como hemos dicho, su municipio, colonia o, en el caso de regiones rurales como el Noroeste peninsular, la *ciuitas/populus/gens*, que al igual que la *origo* municipal era hereditaria y, por tanto, no dependía del domicilio de la persona¹⁵⁹⁶. En los municipios y colonias sus propios magistrados se encargaban de elaborar el censo¹⁵⁹⁷, conservando sus resultados en sus archivos y transmitiendo sus resultados *a posteriori* a las autoridades romanas, según el modelo tardo-republicano reflejado en la *tabula* de Heraclea¹⁵⁹⁸. Del capítulo 86 de la *lex Irnitana* –referido a la elección de los jueces del municipio– se deduce, como ha señalado Nicolet, que también en los municipios de derecho latino se realizaba un censo según el modelo romano cuyos resultados eran transmitidos al gobernador de la provincia¹⁵⁹⁹, en este caso el procónsul de la Bética.

En las regiones que carecían del grado necesario de organización cívica, el Imperio Romano optó por enviar a sus propios agentes para realizar el censo¹⁶⁰⁰; y así sucedió con los censos de las comunidades peregrinas hispanas conocidos, que fueron gestionados por el personal militar destacado en la zona. En Lusitania, sabemos que se encargó del censo en un distrito de la provincia un tribuno de la *legio X Gemina*¹⁶⁰¹, que sin duda le fue solicitado al gobernador de la Citerior por su homólogo. En esta última provincia conocemos un *optio censualis* que en época julio-claudia se encargó del censo probablemente en el *conuentus Cluniensis*, como parece deducirse del ara que dedicó a Júpiter Augusto Vengador en su sede, Clunia¹⁶⁰². Asimismo, otra inscripción nos

¹⁵⁹⁶ López Barja, “El censo provincial...”, cit. pp. 355-356.

¹⁵⁹⁷ *Tab. Heracleensis* ll. 142-158, donde se indica que tenía lugar cada cinco años, al mismo tiempo que el de Roma; siglo la edición de Crawford, *Roman Statutes...* cit. nº 24. En Hispania véase el caso del magistrado del municipio bético de *Constantia Iulia* encargado del censo que fue honrado por su labor en esa tarea: *L(ucio) Caesio L(uci) f(ilio) Pollioni / aed(ili) Ilvir(o) censu et / duomviratu bene / et e r(e) p(ublica) acto mun(i)cip(es)* (CIL II, 586 = CIL II, 1256).

¹⁵⁹⁸ Heraclea: ll. 142-156: *nomina praenomina patres aut patronos tribus cognomina et quot annos quisque eorum habe<bit> et rationem pecuniae*. Véase: Nicolet, *L'inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romain*, París, 1988, pp. 145-147; Lo Cascio, “Census provinciale...” cit. p. 198; Cébeillac-Gervasoni, *Les magistrats...* cit. pp. 94-96, donde menciona a Cic. *Pro Cluentio* 14,41 y 44,125.

¹⁵⁹⁹ C. Nicolet, “Les Fastes d’Ostie et les recensements augustéens”, en *Censeurs...* cit. pp. 189-196, esp. pp. 194-195. *Contra*: López Barja, “El censo en las *ciuitates peregrinae*...” cit., que no ve tan clara esta deducción.

¹⁶⁰⁰ Le Teuff, “Les recensements...” cit. p. 199.

¹⁶⁰¹ El tribuno Clodio Próculo (CIL X, 680)

¹⁶⁰² *Eclu* 8: *Ioui Aug(usto) / Vltori sacrum / L(ucius) Valerius Pater[nus] / mil(es) leg(ionis) X Gem(inae) / optio I (centuria) censoris exs(!) / voto*. P. de Palol, “Una nueva inscripción de Clunia” *AEspA* 42, 1969,

informa de que al tribuno laticlavio de la *legio VII Gemina* Cayo Moconio Vero le fue asignada la tarea de realizar el censo de las veinticuatro *ciuitates* de los vascones y várdulos¹⁶⁰³, en una fecha indeterminada –probablemente entre los principados de Adriano y Antonino Pío (117-161) o, como mínimo, siempre con posterioridad al 68¹⁶⁰⁴. Su designación, extraordinaria, se debió sin duda a que era el mando de rango senatorial más cercano a estas poblaciones¹⁶⁰⁵ y a la imposibilidad práctica de que éstas fuesen visitadas por el gobernador.

Esta participación del ejército en la elaboración del censo había de contar siempre con la intervención del gobernador, incluso en los casos en que el emperador decidía enviar un delegado específico para realizarlo, dado que él tenía el mando supremo sobre las tropas acantonadas en su provincia y, al menos, tendría que intervenir para facilitar al legado encargado del censo el personal que necesitara. Así hemos de pensar que en 214 el gobernador de la Hispania Citerior colaboró sin duda con el enviado de Caracala.

Según Lo Cascio, al margen de las exigencias de un censo provincial general, cada comunidad local –gozase de la *ciuitas* romana, del *ius Latii* o fuese peregrina (siempre y cuando estuviese organizada en un sentido timocrático)– habría de realizar un censo propio regular, ya que era necesario para el funcionamiento de sus propias instituciones¹⁶⁰⁶. En efecto, en las colonias y municipios la composición de la curia dependía del censo.

Una vez realizado el censo, los documentos censuales eran depositados en el archivo de la provincia situado en su capital. Tanto en la Citerior y la Lusitania como en la Bética era cuidado por esclavos y libertos del emperador ya desde la dinastía Julio-Claudia. Conocemos cuatro libertos imperiales que fueron *tabularii* de la Hispania Citerior, uno de época de Tiberio o Claudio, dos de Adriano y Antonino Pío y uno de finales del siglo II-inicios del III, gracias a sendas inscripciones tarraconenses¹⁶⁰⁷.

pp. 118-123, pensó en un principio erróneamente que Paterno había desempeñado la censura municipal en Clunia.

¹⁶⁰³ Estas *ciuitates* han de ser entendidas como unidades administrativas básicas, como en el caso noroccidental, sin que implique el desarrollo cívico de esa comunidad.

¹⁶⁰⁴ J. J. Sayas, “*Ad census accipiendos* de ciudades vasconas y várdulas y la *legatio censualis* de un pamplonés”, *ETF II*, 2, 1989, pp. 137-152, esp. p. 138.

¹⁶⁰⁵ Bérenger, “Le cens...” cit. p. 197.

¹⁶⁰⁶ *Idem*.

¹⁶⁰⁷ *CIL* II²/14, 840 = *RIT* 40: *Tib(erius) Claud[ius Aug(usti) lib(ertus) - - -] / tabulariu[s --- p(rouincia) H(ispaniae) c(iterioris) - - -]*; *CIL* II²/14, 1094 = *RIT* 242: *D(is) M(anibus) / P(ubli) Aeli / Aeliani /*

Asimismo, podemos mencionar a dos libertos que ocuparon el puesto de *tabularius prouinciae Lusitaniae* bajo Adriano y, quizá, Antonino Pío: gracias a dos inscripciones funerarias de *Emerita Augusta*: Publio Elio Vital y Publio Elio Alejandro¹⁶⁰⁸. En *Corduba*, tenemos noticia de un liberto imperial que fue *tabularius* provincial en época flavia, Tito Flavio Speudon, a través de la inscripción del monumento funerario que el *ordo decurionum* de la colonia dedicó a su pariente y también liberto imperial Tito Flavio Antonino, que probablemente desempeñó funciones administrativas similares¹⁶⁰⁹. Este honor se deriva, sin duda, de sus labores vinculadas a la fiscalidad imperial y el censo, que los ponían en relación directa con el gobernador y el procurador provinciales y, por ello, les otorgaron una posición preeminente en los círculos de influencia de la capital provincial.

Este esquema es muy funcional, pero cabe preguntarse el papel que jugaron los *conuentus* en ello. A partir de una inscripción fragmentaria que, según la lectura admitida, menciona a un *censitor [conue]ntus Cae[saraugustan]i* y dado que Plinio el Viejo presenta las *formulae prouinciae* hispanas divididas por *conuentus*, L. Sancho planteó hace más de treinta años la posibilidad de que los *conuentus* tuviesen una función fiscal¹⁶¹⁰. Esta hipótesis ha sido seguida por P. Ozcáriz, complementándola con el ejemplo de lo que sucedía en las *dioikeseis* de la provincia de Asia¹⁶¹¹. Esto le ha llevado a proponer que las sedes conventuales de las provincias hispanas funcionarían como “distritos de control” de la percepción de los impuestos directos y también de los indirectos vinculados al tráfico comercial, aduanas, etc., aun admitiendo la carencia de

Successus / Aug(usti) lib(ertus) / tabul(arius) p(rouinciae) H(ispaniae) c(terioris) / et Plaetoria / Annia / parentes / filio / piissimo; CIL II²/14, 853 = RIT 50: Siluano Aug(usto) / sacrum / pro salute Imp(eratoris) / Caesaris Hadriani / Antonini Aug(usti) Pii p(atris) p(atriciae) / et liberorum eius / Atimetus lib(ertus) / tabul(arius) p(rouinciae) H(ispaniae) c(terioris) / d(ono) d(edit); CIL II²/14, 1095: D(is) M(anibus) / Fauoris Aug(usti) lib(erti) / tabul(arii) p(rouinciae) H(ispaniae) C(terioris) / C(aius) Iulius Aquilinus / el Iulia Fauorina / patri pientissimo.

¹⁶⁰⁸ Vital: CIL II²/7, 290: D(is) M(anibus) s(acrum) / P(ublio) Aelio Vitali / Aug(usti) lib(erto) tabul(ario) / prouinc(iae) Lusitan-iae et Vettoniae / Stephanus lib(ertus) / et heres patro-/no fecit. Alejandro: ERAE 117 = CIL II, 486: D(is) M(anibus) s(acrum) / Iuliae Optatae / an(norum) XXIII / P(ublius) Aelius Aug(usti) lib(ertus) / Alexander tab(ularius) / prouinciae Lusit(aniae) / coniugi dulcissimae / fecit.

¹⁶⁰⁹ CIL II²/7, 290: T(ito) Flauio T(iti) f(ilio) Cl(audia) / Antonino / huic ordo c(olonorum) c(oloniae) P(atriciae) funeris / in pensam locum sepulturae / statuam decreuit / Speudon Aug(usti) lib(ertus) tab(ularius) / prouinciae Baetic(ae) / et Antonia Rhodoe(!) / parentes honore usu / piissimo posuerunt.

¹⁶¹⁰ Sancho Rocher, *El convento jurídico...* cit. p. 37.

¹⁶¹¹ Fundamentalmente Habicht, “New Evidence...” cit. pp. 64-91; S. Mitchell, “The Administration of Roman Asia from 133 BC to AD 250”, en Eck (ed.), *Lokale Autonomie...* cit. pp. 17-46.

testimonios que corroboren esta hipótesis¹⁶¹². En nuestra opinión, es posible que tanto los tributos de la *ciuitates* pertenecientes a los *conuentus* del Noroeste como los datos del censo cuando éste se realizara en ellas las diferentes *ciuitates* que estuviesen adscritas a un *conuentus* fuesen concentrados en su sede conventual¹⁶¹³, desde la cual se enviaría una copia a la capital provincial y, de allí, a Roma¹⁶¹⁴. Sabemos que la sede conventual de *Lucus Augusti* contaba en el siglo III con un archivo del que estaba encargado un *tabularius* que sería ciudadano romano –como muestra el epígrafe del ara funeraria de Julio Rufino Leontio, *ciuis Asturicensis* que residía en *Lucus*¹⁶¹⁵– y es probable que el resto de sedes conventuales tuviesen el suyo y que en ellos se conservase una copia del censo y de la documentación fiscal de cada *conuentus* que luego se enviaba a la capital provincial. Así piensan los editores de *IRPLu*, que relacionan este epígrafe, además, con el importante desarrollo de la procuratela de *Asturia et Gallaecia* durante el siglo II¹⁶¹⁶. En ese *tabularium* de la sede conventual de *Lucus Augusti* trabajó, probablemente, el liberto imperial Saturnino, a finales del siglo II e inicios del III, después de haber desempeñado un puesto administrativo que podría haber estado relacionado también con el Fisco en *Emerita Augusta*, capital de la provincia vecina¹⁶¹⁷.

La labor de Moconio Vero entre los vascones y los várdulos parece, en principio, plantear ciertos problemas a esta hipótesis, dado que las *ciuitates* vasconas pertenecían al *conuentus Caesaragustanus* y las várdulas al *Cluniensis*¹⁶¹⁸, pero es muy probable, como planteamos en el capítulo anterior, que los límites conventuales e incluso las sedes variasen en determinadas épocas, y que cuando Moconio Vero desarrolló su labor censual todas estas *ciuitates* perteneciesen al mismo *conuentus*¹⁶¹⁹. Ozcáriz, por su

¹⁶¹² Ozcáriz, *Los conventus...* cit. pp. 88-105.

¹⁶¹³ La *ciuitas/gens Susarrorum*, por ejemplo, probablemente pertenecía al *conuentus Asturum*; cf. Orejas – Sastre – Sánchez-Palencia – Plácido, “El edicto...” cit. pp. 96-99.

¹⁶¹⁴ Haensch, *Capita provinciarum* cit. p. 172. En Egipto, a partir del reinado de Claudio, una copia de los documentos públicos y los contratos privados de propiedad se archivaba en el archivo de la capital provincial, Alejandría, y otra en la metrópolis del *nomos* al que perteneciesen la comunidad o los individuos implicados, cf. Burkhalter, “Archives locales et centrales...”, cit. pp. 192-193 y 208-212.

¹⁶¹⁵ *IRPLu* 28: *D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulio Rufino / Leontio ex tab(ulario) / ciui Asturice(n)si / annorum XXVIII / Rufonius Rufi/nus pater et Ru/fia Paterna mater / filio piissimo*.

¹⁶¹⁶ *IRPLu*, p. 54.

¹⁶¹⁷ *IRPLu* 23, pp. 48-49: *[I(oui) O(ptimo) M(aximo) Cons(eruatori) et / numinibus Augustor(um) / Iunoni Reginae] / Veneri Victrici / Africae Caelesti / Frugifero / Augustae Emeritae / et Larib(us) Callaeciar(um) / Saturninus Aug(usti) lib(ertus)*.

¹⁶¹⁸ Plin. *N.H.* III, 26.

¹⁶¹⁹ Algo que ya planteó López Barja, “El censo...” cit. p. 350.

parte, ha propuesto que aunque Moconio se encargó de gestionar el censo conjunto de estas *ciuitates*, una vez finalizado podría haber enviado los datos de los vascones a *Caesaraugusta* y los de los várdulos a *Clunia*¹⁶²⁰.

Por otra parte, la epigrafía muestra que en el siglo II y III algunos ciudadanos romanos de la Hispania Citerior que desempeñaron el flaminado provincial utilizaron la mención del *conuentus* al que estaban adscritos como parte de la referencia a su *origo*¹⁶²¹. Esto refleja su identificación personal con esta unidad administrativa, y cabe preguntarse si se derivaba en parte de la función de la sede conventual en el marco general en que se organizaba el censo en la Citerior, y particularmente en el Noroeste, pues la mayoría de flámines que usan la fórmula *ex conuentu* procedían de sus tres *conuentus* y del Cluniense¹⁶²².

Con López Barja, pensamos que la concesión de *ius Latii* a toda Hispania por parte de Vespasiano no tuvo por qué afectar al sistema censual del Noroeste de manera inmediata, pues el proceso de municipalización que esta concesión impulsó se desarrolló de manera lenta en esta región. Sólo en el siglo II los efectos del proceso municipalizador y del cambio del tipo de poblamiento serán patentes, comenzándose a abandonar los *castella* y, con ello, a desaparecer la referencia epigráfica de la “C invertida”, ya que el municipio prevalecerá como *origo* y, por tanto, domicilio fiscal¹⁶²³.

Finalmente, hemos de mencionar la intervención de otra institución provincial, el *concilium prouinciae*, en el censo. Una inscripción de *Tarraco* nos informa que pompaelonense Cayo Cornelio Valente viajó, a sus expensas, hasta *Sirmium* para presentarle al emperador Marco Aurelio una petición o reclamación (no lo sabemos) relacionada con el censo provincial en nombre de la Hispania Citerior¹⁶²⁴. El hecho de que la provincia decidiese dedicarle una estatua en la capital provincial invita a pensar que tuvo éxito en su misión y que ésta le fue encomendada por el *concilium prouinciae*, que, dentro de su labor de defensa de los intereses de las comunidades de su provincia,

¹⁶²⁰ Ozcáriz, *Los conventus...* cit. p. 89.

¹⁶²¹ J. Gómez-Pantoja, “*Ex ultima Celtiberia*: Desarrollo municipal y promoción social en las viejas ciudades arévacas”, en Castillo – Rodríguez Neila – Navarro (eds.) *Sociedad y economía...* cit. pp. 231-282, esp. pp. 236-237, donde menciona CIL II, 4203 (*ex conuentu Caesaraugustano*), 4204 (*ex conuentu Bracaraugustano*), 4233 y 6093 (*Cluniensis*).

¹⁶²² Acerca del uso de esta fórmula volveremos en la Tercera Parte.

¹⁶²³ López Barja, “El censo...” cit. pp. 357-358.

¹⁶²⁴ RIT 332: *C(aio) Cornelio / Valenti / Pompaelonensi / ob legationem / censualem gra/tuitam Sirmi pro/[s]pere gestam / [a]put(!) imperator(em) / p(rovincia) H(ispania) c(iterior)*.

en el siglo II parece haber controlado la correcta realización del censo por parte de las autoridades imperiales¹⁶²⁵. Ese control se desarrollaría gracias a la existencia de un archivo propio del *concilium* en el que se conservaría una copia del censo provincial, según se deduce de la inscripción honorífica de Cayo Valerio Arabino, que fue premiado *ob curam tabulari(i) / censualis fideliter / administr(atam)*. En reconocimiento a su eficaz labor, a este aristócrata de *Bergidum Flauium* (Cacabelos, El Bierzo) –que fue *sacerdos Romae et Augusti* (¿en el santuario de las aras sestianas?)– se le concedió la inclusión de su estatua *inter flaminales uiros* en la capital provincial¹⁶²⁶. El resultado de todas estas operaciones debía de ser notificado al gobernador, que, desde la capital de la provincia, enviaba un informe con los datos censitarios a Roma, quedando una copia en los archivos provinciales que podía ser consultada en el caso de que se produjera una reclamación o conflicto en torno a las obligaciones tributarias de cada comunidad.

La ordenación del territorio provincial.

Ya desde época republicana, el poder romano, una vez que había sometido un territorio, decidiese o no convertirlo en provincia, premiaba y castigaba a las comunidades indígenas en función del apoyo o rebeldía mostrados hacia Roma durante la guerra de conquista, fundamentalmente a través de un nuevo reparto de las tierras y de la concesión de determinados privilegios a los aliados¹⁶²⁷. Durante la conquista del territorio peninsular en el siglo II a.C., los magistrados que gobernaban las dos provincias hispanas –que sobre todo se volcaron en el mando de las operaciones militares– fueron quienes tomaron tales decisiones, a veces asesorados por una legación senatorial de diez miembros enviada para controlar sus acciones. Así sucedió tras la caída de Numancia en 133 y en el 95-94 a.C.¹⁶²⁸. También sabemos que los dos

¹⁶²⁵ Muñiz Coello, *El sistema fiscal...* cit. p. 167; Sayas, “*Ad census accipiendos...*” cit. p.

¹⁶²⁶ RIT 333: *C(aio) Val(erio) Arabino / Flauiani f(ilio) Bergido F(lauienti) / omnib(us) hon(oribus) in re p(ublica) / sua func(to) sacerdoti / Romae et Aug(usti) p(rouincia) H(ispania) c(terior) / ob curam tabulari(i) / censualis fideliter / administr(atam) statuam / inter flaminales / uiros positam ex/ornandum univers(i) / censuer(unt)*.

¹⁶²⁷ Sic. Flacc. *De cond. agr.* 7-8. Véase en Hispania el decreto de Emilio Paulo relativo a la *Turris Lascutana* de 189 a.C. (CIL II, 5041) y la *deditio* de Alcántara de 104 a.C. (López Barja, *Epigrafía latina...* cit. n°50).

¹⁶²⁸ F. Pina Polo, “Las comisiones senatoriales para la reorganización de Hispania (App. Iber. 99-100)”, *DHA* 23/2, 1997, pp. 83-104.

primeros pretores enviados para gobernar las Hispanias Citerior y Ulterior en 197 a.C fueron encargados de señalar los límites de sus provincias¹⁶²⁹. En el siglo I a.C. parece que los gobernadores actuaron solos y que el control de sus acciones se produjo a su regreso a Roma: allí podían ser requeridos a rendir cuentas ante el Senado y, a raíz de las sucesivas *leges repetundarum*, a veces ante la *quaestio* preceptiva si eran denunciados por malversación¹⁶³⁰, y sus decisiones debían ser aprobadas por los comicios para tener validez efectiva¹⁶³¹.

Una vez instaurado el Principado, la constitución y organización de una nueva provincia era decidida y controlada siempre por el emperador, que se valía de legados para aplicar sus decisiones sobre el terreno. Estos legados eran sus primeros gobernadores y, en nuestra opinión, es verosímil la hipótesis de que su labor implicase no sólo un nuevo reparto de las tierras provinciales, sino una nueva categorización de ellas en términos jurídicos romanos, de forma que una parte se cedía a los indígenas en régimen de *possessio* y otra pasaba a propiedad del Fisco imperial, como las minas, y por tanto era gestionado por los procuradores¹⁶³²; sin olvidar las tierras vinculadas a una deducción colonial si esta se producía. Asimismo, siempre con la aquiescencia del emperador, estos gobernadores comenzaban a implantar el sistema administrativo provincial, eligiendo y/o potenciando los lugares que usarían como sedes en las que se habrían de

¹⁶²⁹ Liv. XXXII, 28, 11: *Praetoribus in Hispanias octona milia peditum socium ac nominis Latini data et quadringeni equites, ut dimitterent ueterem ex Hispaniis militem; et terminare iussi qua ulterior citeriorue prouincia seruaetur*. La negrita es mía.

¹⁶³⁰ J. A. González Romanillos, *Aspectos procesales del “crimen repetundarum” de los orígenes a Sila*, Madrid, 2003 y *La corrupción política en época de Julio César: un estudio sobre la “lex Iulia de repetundis”*, Granada, 2009.

¹⁶³¹ Recuérdesse que Pompeyo encontró muchas dificultades para hacer aprobar sus *acta* al regreso de Oriente, lo cual lo llevó, en el 60 a.C., a forjar con César y Craso la alianza privada conocida tradicionalmente como “primer triunvirato”: César se comprometía a hacer aprobar todas las medidas adoptadas por Pompeyo en Oriente y a asentar a sus veteranos una vez que hubiese alcanzado el consulado en 59 a.C. con la ayuda de los otros dos “dinastas”. Cf. R. Syme, *The Roman Revolution*, Oxford, 1939, pp. 33-35; E. S. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley, 1995, pp. 83-88.

¹⁶³² Véanse las minas de Cástulo, en Sierra Morena (primero dentro de la Bética y luego, desde el 7 a.C., en la Hispania Citerior), las de Vipasca (Aljustrel, Beja) en el *conuentus Pacensis* de la Lusitania (cuyo distrito estaba regulado por la *lex metallis Vipascensis*, hallada en dos piezas de bronce, *vid: CIL* II, 5181 y AE 1979, 337) y las de Las Médulas, en El Bierzo (Hispania Citerior). Como muestra la *lex metallis Vipascensis*, el *procurator metallorum* se encargaba de arrendar la explotación minera a pequeñas societates dentro del marco de la *locatio-conductio*. Cf. Muñiz Coello, *El sistema fiscal...* cit. pp. 197-209; S. Lazzarini, *Lex metallis dicta: studi sulla seconda tavola di Vipasca*, Roma, 2001. Sobre la minería en el Noroeste: A. Orejas, “Aspectos técnicos y organización del trabajo en la *lex metalli Vipascensis*”, en *Artifex: Ingeniería romana en España*, Madrid, 2002, pp. 255-272; A. Orejas – I. Sastre – E. Zubiaurre, “Organización y regulación de la actividad minera hispana altoimperial”, en M^a. M. Zarzalejos – P. Hevia – L. Mansilla (coords.), *Paisajes mineros antiguos en la Península Ibérica: Investigaciones recientes y nuevas líneas de trabajo*, Madrid, 2012, pp. 31-46.

realizar los *conuentus iuridici*. Finalmente, elaborarían una primera *formula prouinciae* en la que estaría registrado el estatuto, derechos y obligaciones de sus comunidades. Nos podemos hacer una idea de cómo sería este registro gracias a la *Naturalis Historia* de Plinio el Viejo, pues la información que presenta acerca de las comunidades de las provincias hispanas la obtuvo directamente de esa *formula prouinciae* augustea, introduciendo algunas actualizaciones. Los datos acerca del número de *ciuitates* en los tres *conuentus* del Noroeste se deberían al último censo llevado a cabo bajo Vespasiano. En las provincias hispanas altoimperiales contamos con testimonios epigráficos de la intervención del gobernador en la organización territorial de las comunidades de sus provincias gracias al “Edicto de El Bierzo” antedicho y los *termini augustales*, algunos de los cuales mencionan al gobernador como responsable de su disposición. Asimismo, en Hispania podemos constatar la participación de los gobernadores en la fundación de colonias y de cabeceras administrativas siguiendo la tradición ya iniciada durante la República.

En la efímera *prouincia Transduriana*, Lucio Sestio Quirinal se encargó de supervisar el reparto de tierras que realizó el poder romano entre las comunidades locales, bien con el fin de favorecer a sus aliadas, bien para castigar a las que se habían enfrentado a Roma durante la guerra (que, recordemos, aun no se había extinguido en la parte oriental). Augusto es muy claro en su edicto del 15 a.C.:

Itaque eos uniuersos im/munitate perpetua dono quosq(ue) agros et quibus finibus possede/runt Lucio Sestio Quirinale leg(ato) / meo eam prouinciam optinente{m} / eos agros sine controuersia possi/dere iubeo¹⁶³³.

Quirinal, dentro de su misión como primer gobernador enviado a la Transduriana, tuvo que dirigir y sancionar el reparto de las tierras de la nueva provincia entre sus comunidades en nombre del emperador y por mandato suyo. Esta tarea implicaba, fundamentalmente, la delimitación de los territorios de cada comunidad peregrina siguiendo el modelo antedicho del *ager per extremitatem comprehensus*. A Roma, en principio, no le interesaba cómo dividiese estas tierras internamente cada comunidad, sino sólo el total, dentro de sus intereses recaudatorios.

¹⁶³³ Il. 8-12.

Estos límites eran señalados bien con accidentes naturales apropiados (ríos, montes...), bien marcados con diferentes tipos de límites artificiales, entre ellos mojones o hitos en piedra o, según se ha hipotetizado, en madera, en los que a veces se inscribía un texto en el que se recalca la sanción de tales límites por parte del poder imperial¹⁶³⁴. Estos *termini*, según una tradición que los propios autores romanos hacían remontar a los orígenes de Roma –con el culto al dios *Terminus* establecido por el rey Numa Pompilio en el Capitolio– eran sagrados y su remoción conllevaba un castigo, que en la República consistió en una multa económica para el infractor, pero que, desde Adriano, pudo acarrear una pena de destierro o, incluso, una condena a trabajos forzados¹⁶³⁵. Los encargados de erigir estos *termini* eran los agrimensores, que en las provincias se podían hallar en las colonias y municipios o formaban parte de los cuerpos militares asentados en ellas –bien una o varias legiones, como en la Hispania Citerior, bien en destacamentos menores, con los que contaban todas– y a veces podían ser asumidos por el propio gobernador dentro de su *officium*¹⁶³⁶.

Así pues, al margen de los cipos que marcaban las centuriaciones establecidas en el territorio de las colonias, que solían estar plasmadas en planos catastrales (*formae*), como las de *Arausio*, en la Galia Narbonense, e *Ilici*, en la Hispania Citerior¹⁶³⁷, las autoridades romanas también se ocuparon de marcar los límites de las tierras asignadas a las *ciuitates stipendiariae*. En las provincias se han conservado *termini* establecidos con el fin de señalar los límites públicos entre el territorio de comunidades vecinas, peregrinas o de estatuto promocionado (a veces de diferentes provincias), o los de los

¹⁶³⁴ López Paz, *La ciudad...* cit. pp. 3-16, que señala que para la diferenciación de las tierras de colonias vecinas se usó también una diferente orientación de sus respectivas centuriaciones. Para los *termini* del norte de Hispania y su relación con el *ager per extremitatem mensura comprehensus* ver: E. Ariño Gil, “La Hispania Citerior occidental y la Lusitania septentrional entre Augusto y los Flavios: el *ager per extremitatem mensura comprehensus*”, en *L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale...* cit. pp. 95-112.

¹⁶³⁵ República: *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*, Rotondi, *Leges publicae...* cit. pp. 388-389; *lex Iulia agraria*: Dig. LVII, 21, 3; Rotondi, *Idem*, pp. 466-467; Adriano: Dig. LVII, 21, 2-3.

¹⁶³⁶ Cortés Bárcena, *Epigrafía en los confines...* cit. pp. 25-32; P. Arnaud, “Les *mensores* des légions: *mensores agrarii* ou *mensores frumentarii*?”, en Le Bohec, *La hiérarchie...* cit. pp. 251-256, esp. pp. 251-253; M. Mayer, “Ejército y obras públicas. La definición de límites entre pueblos a cargo de soldados de oficio: ¿oficio de soldados?”, en C. Wolff (ed.) *Le métier de soldat dans le monde romain*, Lyon, 2012, pp. 301-309, quien interpreta la presencia de *groma* en estelas de soldados como indicio de que habrían desempeñado la función de *mensores* (p. 302). Está atestiguado, por ejemplo un soldado que sirvió como *agrimensor Praefecti Aegypti*, cf. Haensch, “Le personnel...” cit. p. 99.

¹⁶³⁷ Catastro de Orange: A. Piganiol, *Les documents cadastraux de la colonie romaine d’Orange*, París, 1962; *Lacimurga*: *HEp* 5, 937. Otros catastros de la Narbonense, como los de Béziers o Nîmes, son analizados por A. Perez, *Les cadastres antiques en Narbonnaise occidentale. Essai sur la politique coloniale romaine en Gaule du Sud (Ile s. av. J.-C. – Ile s. ap. J.-C.)*, París, 1995. Sobre los catastros y centuriaciones en general: M. Clavel-Lévêque (dir.), *Cadastres et espace rural: Approches et réalités antiques (Table ronde de Besançon, mai 1980)*, París, 1983; López Paz, *La ciudad...* cit.

dominios imperiales, En la Hispania Citerior contamos también con restos de *termini* que delimitaban los *prata* asignados a las legiones o cuerpos del ejército asentados en Hispania Citerior. En concreto se conservan los *termini pratorum* de la *legio IV Macedonica*, asentada en el campamento de Herrera de Pisuerga (Palencia), que fueron erigidos en época Augusto y los que bajo Claudio se establecieron para delimitar los *prata* de la *legio X Gemina* y los de la *cohors IV Gallorum*, hallados en León –esta última cohorte parece haber tenido su sede al sur de *Asturica Augusta*¹⁶³⁸. Hispania es el área del Imperio en la que se conocen más *termini publici* (51), y sólo en sus provincias son denominados *termini augustales*¹⁶³⁹. En la Citerior, además, se conserva un precedente republicano (datad en el siglo II a.C.), procedente de Fuente de Ebro (Zaragoza), en el que un procónsul anónimo supervisó la delimitación de las tierras de dos comunidades vecinas siguiendo las instrucciones del Senado, según la reconstrucción, y actuando de manera similar a procónsules de la Galia Cisalpina¹⁶⁴⁰.

Tal y como ha mostrado C. Cortés Bárcena en su reciente estudio sobre los *termini publici*, en Hispania presentan todos ellos un texto similar, de carácter formulario, que, aunque presenta variaciones en su redacción, suele estar encabezado por la sanción del emperador seguida por la mención de las comunidades afectadas. En tres casos (uno lusitano y dos béticos) se menciona, a continuación, que ese *terminus* es el resultado de una sentencia judicial de un gobernador, como hemos visto en la Primera Parte. En el ejemplo lusitano el gobernador Lucio Articuleyo Régulo, en época augustea, decidió que este hito terminal se erigiera (probablemente con otros gemelos) con el fin de marcar físicamente el límite definitivo que fijó entre el territorio de dos comunidades desconocidas, quizá *ciuitates stipendiariae*, en su sentencia judicial¹⁶⁴¹. En la Bética, el primer *terminus*, fechado en el 84 d.C., informa que la delimitación que este marca es el resultado de un decreto del procónsul Lucio Antistio Rústico que afecta únicamente al municipio flavio de *Cisimbrium*, del *conuentus Cordubensis*:

¹⁶³⁸ Cortés Bárcena, *Epigrafía en los confines...* cit. pp. 85-133.

¹⁶³⁹ *Idem*, p. 215.

¹⁶⁴⁰ *ELRH* 94: [-----] / pro co(n)s(sule) t[erminos] / inter agr[um ---] / interque [agrum? ---] / anum ex [sen(atus) cons(ulto)]. Ejemplos similares de procónsules de la Galia Cisalpina en el siglo II a.C.: Lucio Cecilio llevó a cabo la *terminatio* de las tierras de las comunidades de Ateste y Patauium siguiendo las instrucciones de Senado (*ILS* 5944) y, poco después, hará lo mismo Sexto Acilio Sarano con las tierras de *Atestini* y *Vicentini* (*ILS* 5945).

¹⁶⁴¹ Cortés Bárcena, *Epigrafía en los confines...* cit. pp. 66-69, nº12.

*Imp(eratore) Domitiano Ca[es(are) Aug(usto)] / Aug(usti) f(ilio) X co(n)s(ule) term[inus] / Augustalis municipi[pi Fla]-ui Cisimbrensis [ex] / decreto L(uci) Antisti [Rus]-tici pro co(n)s(ulis)*¹⁶⁴².

En este caso, todo apunta a que la nueva delimitación del territorio de *Cisimbrium* se derivó de su estuto recién adquirido de municipio latino a raíz de la concesión que Vespasiano hizo en 73-74 a toda Hispania, mencionada por Plinio el Viejo. Como hemos visto en la Primera Parte, Cortés Bárcena opina verosíblemente que esta decisión del procónsul es el resultado de un proceso judicial que habría enfrentado a *Cisimbrium* con otra comunidad (probablemente *Ipolcobulcula*)¹⁶⁴³. Con todo, en nuestra opinión no se puede descartar que el decreto del procónsul pudiese ser también el resultado de una petición realizada por esta comunidad a los diez años de gozar del estatuto municipal, bien requiriendo más tierras para su sustento (al igual que los *Saborenses* le pidieron nuevos *uectigalia* a Vespasiano en la *epistula* conservada), bien la delimitación de las que ya le correspondían con el fin de evitar problemas limítrofes y dentro del proceso de asimilación de la implantación municipal en el territorio. Como muestra las leyes municipales de la Bética, Domiciano prestó especial atención a los municipios latinos de esta provincia.

El otro *terminus* bético es el resultado de un *trifinium* que realizó en los límites del territorio de tres municipio flavios siguiendo la resolución de Julio Próculo, quien, de ser correcta la hipótesis de Alföldy, habría gobernado la Bética extraordinariamente por decisión de Adriano ante la súbita muerte del procónsul que la regía mientras el emperador realizó su visita a la península en 122-123:

*Trifinium / in[t]er Sacilienses, Eporense[s] / Solienses ex sentent[ia] / Iuli Proculi iudic(is) / confirmatu(m) ab / Imp(eratore) Caesar(e) / Hadriano / Aug(usto)*¹⁶⁴⁴.

El resto de *termini* conservados no menciona a ningún gobernador de las provincias hispanas altoimperiales, pero ello no impide pensar en que interviniesen en todos estos procesos de delimitación de los territorios de esas comunidades. Cortés

¹⁶⁴² *CIL* II²/5, 302. Véase Primera Parte, Capítulo 3.

¹⁶⁴³ Cortés Bárcena, *Epigrafía en los confines...* cit. p. 74. Véase también: López Paz, *La ciudad...* cit. p.

16

¹⁶⁴⁴ *CIL* II²/7,776.

Bárcena entiende que “aunque el formulario no nos aporte información concreta, por el momento y las circunstancias en que fueron erigidos los hitos, podemos deducir si fueron resultado de una revisión o se establecieron en la *terminatio* original”, concluyendo que, salvo el conjunto referido a los *prata* de las *legio IV Macedonica*, el resto de inscripciones pertenecen al primer grupo y su revisión se debió en general a “conflictos territoriales”¹⁶⁴⁵. Esto, a nuestro juicio, era siempre competencia del gobernador o de los legados que tenía a su mando, dado que se trataba de conflictos entre comunidades o entre un particular y una comunidad, e implicaría, por tanto, que a pesar de no ser mencionados, los gobernadores intervenían siempre¹⁶⁴⁶. ¿Pero por qué en algunos casos se especificaba que el límite territorial se derivaba de una sentencia judicial del gobernador? El único cauce para resolver estos conflictos parece haber sido la vía judicial, a no ser que pensemos en que el gobernador podía evitar el proceso con la realización de un arbitraje entre las partes, del cual, empero, no tenemos noticia.

Otra posibilidad es que estos *termini* no sean siempre el resultado de conflictos territoriales entre comunidades, sino que se deriven de una política imperial destinada a delimitar con mayor precisión las tierras que correspondían a cada comunidad provincial con el fin de dotar a sus agentes en las provincias de una información más rigurosa que les facilitase el cálculo y control de la correcta tributación de cada comunidad. Se tratarían, por tanto, de medidas “correctoras” suscitadas por las deficiencias que se descubrirían en la praxis administrativa cotidiana. En ese caso, de nuevo, entendemos que sería necesaria la supervisión del gobernador provincial con la aquiescencia del emperador.

Esta intervención en la ordenación territorial de una comunidad provincial podía limitarse a la ejecución de las decisiones imperiales relativas a la concesión de nuevas tierras o *uectigalia*, como en el caso ya mencionado del municipio de *Sabora*, en la Bética. El emperador era el único que podía decidir acerca de cualquier variación de las tierras públicas y de los *uectigalia* de una comunidad, pero la colaboración del gobernador de la provincia en cuestión era necesaria, tanto en calidad de informador de las circunstancias de cada caso como de ejecutor de las decisiones imperiales, independientemente de su categoría: el procónsul de la Bética, como su homólogo de la

¹⁶⁴⁵ Cortés Bárcena, *Epigrafía en los confines...* cit. pp. 273-276

¹⁶⁴⁶ Mommsen, *DPR* V, p. 287, nt. 2.

Narbonense, no se diferenciaron en su labor de los legados imperiales que gobernaban provincias¹⁶⁴⁷.

Lo cierto es que la concesión del *ius Latii* a toda Hispania por parte de Vespasiano y la conversión en municipios latinos de comunidades hasta entonces peregrinas bajo sus hijos (sobre todo bajo Domiciano) conllevó, como señaló P. Guichard, una reconfiguración del paisaje urbano y político y, paralelamente, una revisión de la ordenación territorial. Los nuevos municipios hubieron de dotarse de un territorio suficiente que asegurase su subsistencia, lo que sin duda hubo de generar conflictos con colonias y municipios antiguos vecinos que se intentaron resolver o prevenir a través de la fijación de límites oficiales¹⁶⁴⁸. Es muy probable que los gobernadores de las provincias hispanas supervisaran todo este proceso siguiendo las directrices del poder central y que se preocupasen de actualizar las *formulae* de sus provincias. Como hemos visto antes, la *Epistula Vespasiani ad Saborenses* no sólo nos informa de la preocupación de una comunidad (*Sabora*) recién promocionada al estatuto de municipio latino por asegurarse unos ingresos suficientes para su supervivencia, sino que revela el importante papel jugado por los gobernadores —en este caso el procónsul de la Bética— en asuntos relativos a la ordenación territorial que se como consecuencia de la extensión generalizada del *ius Latii* en Hispania bajo los Flavios. Los gobernadores, de nuevo, habrían sido los agentes imperiales encargados de aplicar la política del poder central en sus provincias.

En el caso particular de los *termini pratorum* de *legio X Gemina* y de la *cohors IV Gallorum*, la sanción imperial es aún más explícita, pues va encabezada, en general, por la fórmula '*ex auctoritate Ti(berii) Claudi(i) Caesari(s) Aug(usti) imp(eratoris)*' y no sólo por el nombre y titulación de éste en nominativo o dativo como en los *termini augustales* de los límites entre comunidades o los referidos a los *prata* de la *legio IV Macedonica* de época de Augusto. Esa fórmula es, pues, una característica del principado de Claudio.

De los 19 *termini pratorum* de la *legio IV Macedonica*, cuyo campamento se hallaba en *Pisoraca* (Herrera de Pisuerga, Palencia), 18 marcan los límites entre sus

¹⁶⁴⁷ Christol, "Le *census* dans les provinces..." cit. p. 250.

¹⁶⁴⁸ P. Guichard, "Les effets des mesures flaviennes sur la hiérarchie existant entre les cités de la Péninsule ibérique", en *Ciudad y comunidad cívica...* cit. pp. 67-84, esp. pp. 67 y 74-75.

prata y la tierra correspondiente a la *ciuitas stipendiaria* de *Iuliobriga*¹⁶⁴⁹ siguiendo este modelo: *Ter(minus) august(alis) di/uidit prat(a) leg(ionis) / III et agrum Iuliobrig(ensium)*. La erección de estos mojones son la consecuencia de la fundación de *Iuliobriga* (en Retortillo, Reinosa, al sur de Cantabria), que se produjo probablemente durante el viaje de Augusto a Hispania en 15-13 a.C., y con las operaciones de delimitación del *agrum per extremitatem comprehensus* propio de las comunidades peregrinas¹⁶⁵⁰. El hito que falta se refiere a *Segisama* (Sasamón, Burgos), también *ciuitas stipendiaria* nacida en época augustea¹⁶⁵¹.

De los 10 *termini* relativos a los *prata* que abastecían a la *cohors IV Gallorum*¹⁶⁵², 5 se refieren a sus límites con respecto a la *ciuitas Bedunensium* –al igual que el único conservado de la *legio X Gemina*–, dos respecto a la *ciuitas Luggonum* y en tres casos se ha perdido el nombre de la comunidad vecina. Ambas son *ciuitates stipendariae* de la *Asturia*. Los *termini* se habrían dispuesto con motivo del traslado de la *legio X Gemina* de *Asturica Augusta* (desde donde había actuado durante las Guerras Astur-Cántabras) al campamento de *Petauonium* (Rosinos de Vidriales, Zamora), y del asentamiento de la *cohors IV Gallorum* al sur de la sede conventual¹⁶⁵³, que, a nuestro juicio, se produjo con el fin de seguir manteniendo una unidad en el entorno de *Asturica*.

En nuestra opinión, en todas estas operaciones de delimitación territorial vinculadas al asentamiento y abastecimiento de unidades militares fueron supervisadas por los gobernadores de la Hispania Citerior siguiendo las instrucciones de los emperadores. De ser correcta la hipótesis de que *Iuliobriga* y *Segisamo* fueron fundadas durante el viaje de Augusto a Hispania en 15-13 a.C. esas órdenes pudieron haber sido dadas *in situ*, en el contexto de la reorganización administrativa general de Hispania que el *princeps* aprobó entonces¹⁶⁵⁴ siguiendo, a nuestro juicio, los informes de Agripa. En cambio, los *termini pratorum* de época de Claudio representan el cumplimiento de las instrucciones que este emperador habría consignado en el conjunto de los *mandata* que

¹⁶⁴⁹ J. M. Abascal, “La epigrafía de los límites e las ciudades romanas de Hispania. Una revisión”, en J.M. Iglesias Gil (ed.), *Actas de los XVIII cursos monográficos sobre el Patrimonio Histórico (Reinosa, julio 2007)*, Santander, 2008, pp. 77-94, esp. pp. 79-80, ha propuesto que gozase de estatuto municipal ya desde su fundación.

¹⁶⁵⁰ Cortés Bárcena, *Epigrafía de los confines...* cit. nº 29-36 (véase esp. el comentario del nº29).

¹⁶⁵¹ *Idem*, nº47.

¹⁶⁵² *Idem*, nº 18-27.

¹⁶⁵³ *Idem*, pp. 132-133, nº48.

¹⁶⁵⁴ Abascal, “Los tres viajes...” cit. p. 73.

entregó a uno o varios de los legados que envió a gobernar la Hispania Citerior antes de que partiesen de Roma, como se deduce de la fórmula ‘*ex auctoritate ... imperatoris*’¹⁶⁵⁵. Ésta también es utilizada en Numidia en época de Vespasiano y, sobre todo, de Trajano en los hitos que señalaban los límites entre los territorios de comunidades vecinas supervisados por los legados de la *legio III Augusta*¹⁶⁵⁶. Estos eran independientes del procónsul de África desde Calígula¹⁶⁵⁷, lo que confirma que era la máxima autoridad romana en la región la que se encargaría de llevar a cabo la delimitación de las tierras según las instrucciones recibidas del poder central.

Lo cierto es que en Hispania, ya desde la República –como prueba la inscripción de Fuentes de Ebro–, la delimitación de los territorios de las comunidades de la provincia –manifestada en la erección de *termini*– era competencia de sus gobernadores. Ahora bien, estos se limitarían, en un principio, a ejecutar una decisión del poder central –el Senado durante la República, el *princeps* en nuestro período¹⁶⁵⁸–, salvo en los casos en que la colocación del hito se derivase de una sentencia judicial vista por el propio gobernador: entonces éste podría tomar una decisión por sí mismo si la controversia era lo suficientemente clara como para no tener que recurrir al emperador. La mención del emperador no siempre implica su intervención real en la delimitación territorial. En el *terminus* de *Cisimbrium*, por ejemplo, la mención de Domiciano es, en nuestra opinión, meramente simbólica: el procónsul Lucio Antistio Rústico la utiliza para recordar que actuaba en nombre del *princeps*, dotando de mayores garantías a su decreto. En cambio, en el *trifinium* de *Sacili, Epora y Solia*, la alusión a la confirmación del emperador revela bien una reclamación de una de las partes afectadas por la sentencia de Julio Próculo, bien que éste vio que su autoridad era frágil y necesitaba contar con el apoyo del propio Adriano, pidiéndole probablemente a través de una carta que le confirmase su sentencia por escrito.

¹⁶⁵⁵ Desgraciadamente, los ‘*fasti*’ de la Citerior presentan una laguna en este período. Cf. *Fasti Hispanienses* pp. 15-16.

¹⁶⁵⁶ *Idem*, pp. 141-176, n°52-68.

¹⁶⁵⁷ Tac. *Hist.* IV, 48: *Mox G. Caesar, turbidus animi ac Marcum Silanum obtinentem Africam metuens, ablatam proconsuli legionem misso in eam rem legato tradidit. aequatus inter duos beneficiorum numerus, et mixtis utriusque mandatis discordia quaesita auctaque prauo certamine. Legatorum ius adoleuit diuturnitate officii, uel quia minoribus maior aemulandi cura, proconsulum splendidissimus quisque securitati magis quam potentiae consulebant*; Dio LIX, 20, 7.

¹⁶⁵⁸ Mommsen, *DPR* V, p. 289.

En lo que respecta a las colonias, las modificaciones o confirmaciones en los límites de sus tierras públicas y la división interna de estas en centurias podían ser encomendadas por el emperador al gobernador de su provincia, como sucedió en *Arausio* (Orange). El conjunto de documentos epigráficos conocido como “Catastro de Orange” nos informa que Vespasiano, en 77 d.C., encomendó al procónsul de la Galia Narbonense Lucio Valerio Umidio Baso la elaboración de un nuevo catastro (*forma agrorum*) en el que se recogiese detalladamente la división de las tierras públicas en centurias y los *uectigalia* exigibles a cada una, tras haber confirmado la titularidad pública de las tierras que Augusto había donado a la colonia de *Arausio* cuando había asentado en ella a veteranos de la *legio II Gallica*¹⁶⁵⁹. Asimismo, diversos cipos hallados en África, al sur de la vía que unía Tacape y Capsa, recuerdan la intervención del procónsul Cayo Vibio Marso (27-30 d.C.) en la centuriación del territorio, que llevaron a cabo miembros de la *legio III Augusta*¹⁶⁶⁰.

Resulta muy natural que los gobernadores asumiesen esa revisión y supervisión de la centuriación del territorio de las colonias de su provincia, pues sabemos que el poder imperial solía delegar en ellos la ejecución sobre el terreno de las fundaciones de las colonias que decidían establecer en cada provincia. Esta participación activa de los gobernadores en la fundación de colonias o ciudades con población indígena o mixta ya se dio durante la República. A propósito de Hispania, las fuentes nos han transmitido noticias acerca algunos magistrados o promagistrados de renombre enviados a gobernar sus provincias que procedieron a fundar ciudades, siguiendo el ejemplo de Escipión el Africano, quien en 205 a.C. –en el contexto de las operaciones de la Segunda Guerra Púnica– asentó en Itálica a un contingente de soldados itálicos de su ejército que estaban heridos¹⁶⁶¹. Así, en el siglo II a.C. Tiberio Sempronio Graco fundó en la Citerior la ciudad de *Gracchurris* con población celtíbera (179 a.C.), Marco Claudio Marcelo *Corduba*, futura capital de la Hispania Ulterior Bética, con un contingente mixto de ‘romanos’ (probablemente fuesen, en realidad, itálicos) e iberos que conformaron una

¹⁶⁵⁹ AE 1999, 1023: [*Imperator Cae*]sar Ve[spasianus A]ug(ustus) po[ntifex] max(imus) trib(unicia) potestate VIII im[p(erator) XVIII] p(ater) p(atriciae) co(n)s(ul) VII, censor / [*ad restituenda pub*]lica qu[ae] *Diuus Augustus militibus l*eg(ionis) II *Gallicae dederat*, po[ssessa a priua]tis per aliquod annos / [*formam agrorum pro*]poni [iussit adnotat]o in sin[gulis centuriis] annuo uectigali agente curam L(ucio) V[alerio Um]idio Basso proco(n)s(ule)] prou[inciae]

¹⁶⁶⁰ CIL VIII, 22786: leg(io) III A[ug(usta)] / leimitauit / C(aio) Vibio Marso / pro co(n)s(ule) III d.d.

LXX / u.k. CCLXXX; Hurlet, *Le proconsul...* cit. pp. 150-151.

¹⁶⁶¹ App. *Iber.* 38.

primera colonia latina (¿en 153 a.C.?) y Décimo Junio Bruto Galaico asentó en *Valentia* a los guerreros lusitanos que habían sobrevivido tras la derrota de Viriato (137 a.C.)¹⁶⁶². Ya en el siglo I a.C., en el contexto de las guerras civiles, fueron fundadas en territorio lusitano *Metellinum* (Medellín) y *Norba Caesarina* (Cáceres), la primera por decisión del *optimatus* Metelo Pío probablemente tras el *Bellum Sertorianum*, la segunda por el cesariano Cayo Norbano Flaco en 34 a.C., siendo ambos procónsules de la Ulterior¹⁶⁶³. En la Hispania Ulterior, C. Asinio Polión llevó a efecto la deducción de la colonia *Genetiua Iulia Vrsionensis* en la Hispania Ulterior siguiendo los planes de César, y en la Citerior el triunviro Marco Emilio Lépido dedujo la colonia *Iulia Victrix Lepida* (43 a.C.), luego rebautizada como Celsa (nombre tomado del asentamiento prerromano) tras su caída en desgracia¹⁶⁶⁴.

Esta intervención de los gobernadores de Hispania en la fundación de ciudades y, en particular, en la deducción de colonias, prosiguió en época augustea¹⁶⁶⁵. Gracias a la numismática sabemos que la deducción de la colonia de *Augusta Emerita* fue dirigida sobre el terreno por el legado imperial Publio Carisio, que gobernó la Hispania Ulterior en 26-22 a.C. Siguiendo las órdenes directas de Augusto, en 25 a.C. se asentó en este enclave situado en la ribera del río Anas a un grupo de veteranos que participaron en la primera fase de las Guerras Astur-Cántabras, justo después de las primeras victorias que dieron la impresión engañosa de haber resuelto el conflicto¹⁶⁶⁶. En esa colonia Carisio procedió a acuñar una serie de monedas que, como hemos visto en el Capítulo 3 de esta Segunda Parte, son los únicos ejemplares hispanos altoimperiales que mencionan a un gobernador¹⁶⁶⁷. Una serie de emisiones monetales posteriores (2 a.C.) han revelado que los primeros colonos procedían, en concreto, de las legiones *V Alaudae* y *X Gemina*. A éstos se sumó una nueva remesa de veteranos asentada por Agripa tras la victoria definitiva sobre los cántabros en 19 a.C.¹⁶⁶⁸. Entre las tareas de Carisio, por tanto, se

¹⁶⁶² Fundación de *Gracchurris*: Liv. *Per.* 41; fundación de *Corduba*: Strab. II, 3, 1; cf. García Fernández, “Estrabón (III, 2, 1) y la fundación de Córdoba...” cit.; *Valentia*: Liv. *Per.* 55.

¹⁶⁶³ García y Bellido, “Las colonias romanas de Hispania” cit. pp. 458-459 y 478-481; Laurence – Clearly – Sears, *The City...* cit.

¹⁶⁶⁴ Caballos Rufino, *El nuevo bronce...* cit. pp. 338-341.

¹⁶⁶⁵ Según Caballos Rufino, *El nuevo bronce...* cit. p. 368: “En el Imperio ya serían sistemáticamente los gobernadores quienes se encargasen del proceso de las deducciones coloniales”.

¹⁶⁶⁶ Dio LIII, 26, 1.

¹⁶⁶⁷ Vide *supra* Capítulo 3.

¹⁶⁶⁸ Saquete Chamizo, *Las élites sociales...* cit. pp. 21-52; Panzram, *Statdtbild...* cit. p. 233; J. Arce, “Introducción histórica”, en Mérida. Colonia Augusta Emerita. *Las capitales provinciales de Hispania* 2, Roma, 2004, pp. 7-13.

hallaría la supervisión del proceso de fundación de la colonia. Como ha expresado A. Caballos, este proceso complejo se desarrollaba en un “doble frente: había que componer y deducir un cuerpo de colonos y había asimismo que organizar y distribuir las tierras donde se asentarían”¹⁶⁶⁹. Esta última tarea se correspondía con la *limitatio* del territorio de la colonia, su centuriación interna, señalándose las tierras comunes y aquellas parcelas que se asignarían por sortitio a cada colono¹⁶⁷⁰. Todo ello quedaba reflejado en la *forma coloniae*, que también era responsabilidad del *deductor* o en el agente en quien éste delegase la tarea: en este caso, Augusto se la encargó a Carisio. Además, Carisio hubo de controlar la *adscriptio* y organización del cuerpo de ciudadanos y seguramente supervisó la elaboración del primer álbum colonial, la composición del primer senado local, el traslado de los colonos y la puesta en funcionamiento de las instituciones coloniales¹⁶⁷¹.

Los paralelismos existentes entre *Emerita* y *Caesaraugusta* son notorios: esta última también era una colonia fundada con veteranos de las legiones que habían participado en las Guerras Astur-Cántabras, estaba situada en el valle de un importante curso fluvial (en este caso el Ebro) que vertebraba el territorio, y, como *Emerita*, estaba dotada de un considerable *hinterland* agrario¹⁶⁷². Asimismo, algunas de las emisiones monetales de la colonia que conmemoran su fundación presentan en su reverso la imagen de los estandartes de las legiones que aportaron colonos –la IV Macedónica, la VI *Victrix* y la X *Gemina*– asociadas a motivos como el del sacerdote guiando la yunta de bueyes¹⁶⁷³. La única diferencia radica en que *Caesaraugusta* ocupó el antiguo emplazamiento de la *Salduie* ibera y *Emerita* se fundó sobre un solar que no había sido habitado, pero eso no resta validez a las similitudes de su deducción colonaria.

¹⁶⁶⁹ Caballos Rufino, *El nuevo bronce...* cit. p. 362.

¹⁶⁷⁰ Hyg. 194 L = 133 Th; *Lex Vrsonensis*, cap. 97

¹⁶⁷¹ Sobre el proceso de deducción colonial en Italia en esta época: L. Keppie, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy, 47-14 B.C.*, Londres, 1983, pp. 87-97; sobre las deducciones colonarias en las provincias occidentales y, en concreto, en el caso de Urso: Caballos Rufino, *El nuevo bronce...* cit. pp. 341-342 y 366-370. Véase también: E. T. Salmon, *Roman Colonization under the Republic*, Londres, 1969, pp. 13-28 y López Paz, *La ciudad...* cit., pp. 35-163, donde analiza pormenorizadamente todas las medidas llevadas a cabo en el proceso de *limitatio* y centuriación siguiendo las indicaciones de los gromáticos.

¹⁶⁷² F. Beltrán Lloris, “Introducción histórica”, en *Ciudades romanas de Hispania 4...* cit. pp. 4-8; Sobre la gran *pertica* de *Emerita*: Frontin. *De con. agr.* 51, 20-52, 1-4 La; Hyg. Grom. *De lim. const.* 170, 17-171, cf. López Paz, *La ciudad...* cit. pp. 103-105. Saquete, *Las élites sociales...* cit. pp. 48-52, interpreta este gran tamaño de la *pertica* no como un premio hacia sus colonos (pues procedían de legiones ligadas con anterioridad a Antonio), sino a “una circunstancia puramente coyuntural”, la abundancia de tierra disponible (p. 50);

¹⁶⁷³ *RPC* I, n° 325-326.

Tampoco el hecho de que probablemente la colonia se fundó en 15-13 a.C., en el contexto de la reorganización que llevó a cabo Augusto en Hispania durante su segundo viaje a la península. Así pues, todo esto lleva a pensar que al igual que Carisio uno de los legados que tuvieron asignada la Citerior en ese período¹⁶⁷⁴ supervisó la deducción de *Caesaraugusta* y el primer desarrollo de la colonia, hubiese sido fundada en persona o no por Augusto¹⁶⁷⁵.

Teniendo en cuenta el ejemplo emeritense y *caesaraugustano*, resulta verosímil que los gobernadores de Hispania también hubiesen participado en la fundación de otras colonias augusteas como *Acci Iulia Gemella* (Guadix) o *Astigi Augusta Firma* (Écija). Ambas habrían recibido veteranos de las legiones que participaron en las Guerras Astur-Cántabras: *Acci*, de la I y la II¹⁶⁷⁶; *Astigi*, de las legiones IV Macedónica, VI Victrix y II Pansiana/Augusta, según se deduce de tres inscripciones¹⁶⁷⁷. Además, el hecho de que esta última fuese poco después designada sede conventual reforzaría la idea de que los gobernadores de la Ulterior le prestaron especial atención. Según señaló hace tiempo García y Bellido, la presencia de símbolos militares en algunas acuñaciones de *Ilici* (Elche) invita a pensar que también en ella se habría producido un asentamiento de veteranos, aunque se ignora de qué legiones se trataría¹⁶⁷⁸.

En cuanto a la fundación de comunidades no privilegiadas, no cabe duda de que o bien Lucio Sestio Quirinal y sus sucesores en el gobierno de la efímera provincia Transduriana, o bien los gobernadores de la Citerior que se encargaron de este territorio a partir del 16-13 a.C. supervisaron la creación de las tres sedes conventuales conocidas del Noroeste, *Bracara Augusta*, *Lucus Augusti*¹⁶⁷⁹, *Asturica Augusti*, cuyo estatuto

¹⁶⁷⁴ Proponemos a estos legados puesto que sus gobiernos se correspondieron con momentos decisivos en la pacificación del Noroeste. Antistio gobernó la Citerior en 27-24 a.C. y Furnio en 22-19 a.C. Cf. *Fasti Hispanienses* pp. 3-7.

¹⁶⁷⁵ En la cronología seguimos a Beltrán Lloris, “Introducción histórica” cit. p. 5, que piensa que Augusto fundó en persona la colonia.

¹⁶⁷⁶ Véanse los símbolos de unidades de las legiones I y II presentes en acuñaciones monetales de la ciudad de época de Augusto, Tiberio y Calígula: C. González Román, “*Colonia Iulia Gemella Acci* (Guadix, Granada)”, en González – Saquete Chamizo (eds.), *Colonias...* cit. pp. 297-331, esp. p. 312.

¹⁶⁷⁷ González, “De nuevo en torno a la fundación...” cit. que fecha su deducción en 25 a.C.; S. García-Dils de la Vega, “*Colonia Augusta Firma Astigi*. La estructura urbana de una fundación romana en la Bética”, en González – Saquete Chamizo (eds.) *Colonias...* cit. pp. 99-128, esp. p. 105, quien ya incluye el epígrafe referente a la *legio II Pansiana*. En cuanto a la fecha fundacional este autor no se decide y propone dos períodos posibles: 25-19 o 16-13 a.C.

¹⁶⁷⁸ García y Bellido, “Las colonias romanas...” cit. p. 492.

¹⁶⁷⁹ Rodríguez Colmenero – Carreño, “Sobre Paulo Fabio Máximo...” cit., han atribuido a Paulo Fabio Máximo la fundación de *Lucus Augusti*, identificando las tres inscripciones dedicadas por éste a Augusto como cipos fundacionales. Al igual que otros autores, pensamos que tal interpretación de estos

jurídico original desconocemos, pero que probablemente desde un inicio contaron con una población mixta, romana e indígena, de forma similar a la *Corduba* de Marcelo, dado su carácter de cabeceras administrativas. Como hemos visto, estas tres ciudades atrajeron a la población circundante y, lo que más interesaba al poder romano, a sus élites, propiciando su colaboración e integración. La concesión de *ius Latii* a toda Hispania en época de Vespasiano no haría sino regular definitivamente las relaciones jurídicas entre sus habitantes, uniformizando su acceso al derecho civil romano y a la ciudadanía *per magistratuum*.

Toda esta labor de ordenación territorial se plasmaba en unas herramientas fundamentales para el gobierno provincial: la información contenida en los archivos provinciales acerca del estatuto o régimen jurídico de las tierras provinciales (la *formula prouinciae*) y los documentos que recogían datos acerca del territorio de sus comunidades, siendo los más exhaustivos los catastros de las colonias.

Estos datos estaban recogidos por escrito en las *formae coloniarum* (que también presentaban figuras, además de texto) y en otros *instrumenta publica* como *tabulae* o *libri*¹⁶⁸⁰, así como en las leyes de colonias, municipios y *praefecturae*¹⁶⁸¹. Asimismo, en el archivo provincial de los gobernadores se conservaban copias de sus sentencias judiciales, entre ellas las resoluciones de estas controversias confinarias, los estatutos reguladores de determinadas instituciones que afectaban al usufructo del territorio – como la llamada *lex riui Hiberiensis*– y también del informe final (*commentarium*) que cada gobernador realizaba al final de su mandato y copias de la correspondencia mantenida con los emperadores y las *constitutiones* imperiales que afectaban a la provincia (como el Edicto de Augusto de El Bierzo)¹⁶⁸², además de la de su propio

testimonios epigráficos es muy débil. No cabe duda de la gran relevancia que tuvo la actividad de Fabio Máximo en el impulso de *Bracara* y *Lucus* como centros regionales, pero ello no es suficiente para atribuirle su fundación, que resultaría, además, algo tardía (4-1 a.C.).

¹⁶⁸⁰ Hyg. Grom. *De lim. const.* 202, 15, 17 (La.). Cf. C. Moatti, *Archives et partage de la terre dans le monde romain (IIe siècle avant J.-C. – Ier siècle après J.-C.)*, Roma, 1993, pp. 32-59; López Paz, *La ciudad...* cit. pp. 27-28.

¹⁶⁸¹ Sic. Flacc. *De cond. agr.* 291-292: *De quibus, id est territoriis, si quando quaestio mouetur, respiciuntur leges ciui<tati>bus datae, id est colonias, municipiisque et praefecturis. Nam inuenimus saepe in publicis instrumentis significanter descripta territoria: uocabulis enim aliquorum locorum comprehensis incipiunt ambire territoria.*

¹⁶⁸² Alföldy, “Il nuovo editto...” cit. p. 390.

edicto jurisdiccional¹⁶⁸³. Este archivo provincial está confirmado epigráficamente en la Hispania Citerior, la Lusitania y la Bética, gracias a diversas inscripciones de los libertos imperiales que trabajaban en él¹⁶⁸⁴. Así pues, el *corpus* documental no dejó de ir en aumento a lo largo del período altoimperial, ofreciendo a los sucesivos gobernadores una serie de precedentes y regulaciones en los que apoyarse para tomar decisiones¹⁶⁸⁵. Como ya se ha mencionado, la documentación provincial consultada o generada por el gobernador era organizada por parte del personal de su *officium*, como los *commentarienses*, *adiutores*, *exacti*, *notarii*, etc., quienes, a pesar de su número reducido, conformaban un cuerpo de funcionarios de probada eficacia que tenían no sólo el cometido de consignar por escrito, clasificar y archivar los documentos emanados de las funciones del gobernador con ayuda de libertos y esclavos imperiales destinados en la provincia, sino también la responsabilidad de evitar las falsificaciones¹⁶⁸⁶.

En lo que respecta a los catastros hemos de añadir que, frente a la teoría tradicional que atribuía la parcelación interna del territorio solamente a las colonias, desde finales de los años sesenta del siglo XX, ciertos indicios de parcelaciones en el territorio de antiguos municipios de Italia y de diversas provincias (hallados por medio de la fotografía aérea) se han interpretado como restos de centuriaciones y han sido datadas, incluso, a finales de la República¹⁶⁸⁷. Estos indicios, empero, no son

¹⁶⁸³ Haensch, “Das Statthalterarchiv” cit. pp. 221-223 y 248-254, donde define ese “archivo del gobernador” como el conjunto de documentos escritos relacionados con las funciones del gobernador y conservado en la provincia para su uso y el de sus sucesores (pp. 211-212).

¹⁶⁸⁴ *Tabularius Hispaniae Citerioris: CIL* II, 4181, 4183, 4184; *tabularius prouvinciae Baeticae: CIL* II²/7, 290; *tabularius prouvinciae Lusitaniae: ILS* 1492.

¹⁶⁸⁵ A. Béranger, “Gouverneurs de province, bibliothèques et archives”, en Y. Perrin (ed.), *Neronia VIII: Bibliothèques, livres et culture écrite dans l’empire romain de César à Hadrien*, Bruselas, 2010, pp. 182-191, esp. pp. 187-191 y *Le métier de gouverneur dans l’Empire romain de César à Dioclétien*, París, 2014, pp. 160-169.

¹⁶⁸⁶ Burkhalter, “Archives locales et centrales...”, cit. esp. pp. 192-197. Rankov, “The Governor’s Men...” cit. pp. 20-21; Haensch, “Le rôle...” cit. p. 274. *Vide supra* Primera Parte.

¹⁶⁸⁷ A. Balil, “Centuriatio: Observaciones sobre la parcelación y la agrimensura romanas y su reconocimiento”, *Estudios clásicos*, t. 5, nº 30, 1969, pp. 346-359, esp. p. 365, quien, sin embargo, no deja de exponer la dificultad en la identificación de determinados indicios de parcelaciones con centuriaciones romanas y no posteriores; P. Tozzi, *Storia padana antica. Il territorio fra Adda e Mincio*, Milán, 1972, pp. 79 y 115, relaciona una primera centuriación en *Brixia* y *Bergomun* con la concesión de *ius Latii* en el 89 a.C. a la Transpadana; López Paz, *La ciudad...* cit. p. 106, que sostiene que “la cuadrícula rural no es exclusiva de las colonias. Tal procedimiento de estructuración del territorio es independiente del estatuto jurídico de las comunidades a las que afecta”, y presenta ejemplos de Italia (p. 82, donde sigue a Tozzi, y 93-94) y de la Galia Narbonense y África (p. 94-95); A. Orejas *et alii*, “La vallée moyenne du Guadalquivir. Paysage et territoire”, en P. N. Doukellis – L. G. Mendoni (eds.),

definitivos. Un bronce hallado al noroeste de la provincia de Badajoz que recoge una *forma* catastral menciona en su encabezamiento al municipio de *Lacimurga*, lo que ha hizo que en un primer momento se plantease la hipótesis de que la centuriación se habría producido en el territorio de éste. Sin embargo, esta interpretación ha sido descartada, proponiéndose la adscripción de esa centuración al territorio vecino de colonias como *Emerita*, *Metellinum* o, incluso, *Vcubi*¹⁶⁸⁸.

Sin entrar en el debate acerca de este problema, que excede los límites de este estudio, sí nos interesa señalar que probablemente el territorio rural de todas las comunidades provinciales fue objeto de una suerte de catastro, entendido como “tous démembrement foncier établi par l’État et comportant plusieurs opérations distinctes: 1° opération d’arpentage, de levés de plans destinée à établir une carte parcellaire du sol; 2° opération d’assiette fiscale, par laquelle le fisc donne une base fixe à la répartition de l’impôt foncier; 3° opération de définition juridique qui permet de préciser le statut des terres et de déterminer les droits et devoirs des occupants, propriétaires ou non”¹⁶⁸⁹. Ahora bien, las diferencias en el estatuto jurídico de unas y otras comunidades influirían en el grado de complejidad de la operación catastral –o, si se prefiere, de registro y categorización del territorio– llevada a cabo en su territorio y en el tipo de documento resultante: en el caso de las peregrinas las operaciones se corresponderían sólo con una *termitatio* básica de los límites generales del territorio de la comunidad y estaría recogido en una *tabula* (nombre genérico), mientras que en el de las colonias estaría *diuisus et adsignatus* internamente y reflejado en una *forma*. Además, en estas últimas la forma debía registrar los tipos de tierras y lugares –*loca publica* (como *pascua*, *siluae*, etc); *loca sacra*; *subseciua* (esto es, tierras centuriadas pero no

Perception and evaluation of Cultural Landscapes. Proceedings of an International Symposium (Zakhynthos, december 1997), Atenas, 2005, pp. 41-57; M. Rubio Valverde, “Estudio preliminar de una posible parcelación rural romana en el territorio de Carmo (Carmona, Sevilla)”, *@rqueología y Territorio.Revista electrónica del Máster de Arqueología*, http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_10.htm (19/11/2014). Sobre la nueva metodología aportada por la llamada “arqueología del paisaje”: A. Orejas, “Territorio, análisis territorial y arqueología del paisaje”, *Studia Historica. Historia Antigua*, 13-14, 1995-1996, pp. 61-68.

¹⁶⁸⁸ *HEp* 6, 1996, 1006; P. Sáez Fernández, “Nuevas perspectivas en relación a la ordenación territorial del sur de la Lusitania española” *Studia Historica. Historia Antigua* 10-11, 1992-1993, pp. 99-108, esp. pp. 105-106; C. González Román, *Roma y la urbanización de Occidente*, Madrid, 1997, pp. 74-75; M^a. C. Santapau Pastor, “Organización y gestión del territorio hispano”, en Andreu Pintado – Cabrero Piquero – Rodà de Llanza (eds.) *Hispaniae...* cit. pp. 453-464, esp. pp. 458-459, con bibliografía específica.

¹⁶⁸⁹ Definición de A. Déléage retomada por F. Favory, “Propositions pour une modélisation des cadastres ruraux antiques”, en Clavel-Lévêque, *Cadastres...* cit. pp. 51-135, esp. p. 52. Ver también: López Paz, *La ciudad...* cit. p. 94.

asignadas)–, su superficie (*modum*) e indicaciones acerca de sus cualidades (*speciem*)¹⁶⁹⁰. Con todo, como ha señalado Moatti respecto a las colonias, en un principio la *forma* no era un mapa o plan parcelario, sino que sólo recogía “le découpage général de la terre” por centurias; sólo en época de Trajano las *formae* de las colonias de veteranos que se fundaron en Panonia comenzaron a recoger un “plan parcellaire proprement dit”, según la noticia transmitida por el gromático Higinio¹⁶⁹¹.

La existencia de un tipo de documentos públicos que recogían los límites del territorio de cada comunidad, peregrina o privilegiada, viene confirmado por la llamada *Tabula de Esterzili* de Cerdeña. Como vimos en el Capítulo Primero, en el 69 d.C. el procónsul de Sardinia Lucio Helvio Agripa tuvo que ver la causa que enfrentaba desde hacía tiempo a dos comunidades peregrinas, los *Galillenses* y los *Patulcenseses Campani*: los primeros habían ocupado ilegalmente el territorio de los segundos y, a pesar de haber sido condenados con anterioridad por un procurador imperial, se mostraron contumaces, argumentando que existía en los archivos imperiales de Roma un documento (*tabula*) diverso al del archivo de la provincia que les daría la razón. El procónsul que precedió a Helvio Agripa les había dado tres meses de plazo para demostrarlo, tiempo en el que fue sustituido por Agripa, que les concedió un poco más. Al cabo de todo este tiempo, los *Galillenses* no pudieron aportar ninguna prueba a su favor y fueron condenados, tal y como se explica en la sentencia recogida en este bronce.

Conclusiones

La epigrafía hispana nos proporciona ricas evidencias de que los gobernadores de sus provincias asumieron entre sus competencias la elaboración del censo y la ordenación del territorio de las comunidades de la provincia, tanto en el momento de su constitución (como en momentos posteriores, siguiendo un *modus operandi* similar al de sus homólogos de otras provincias. Sólo en casos de censos particularmente problemáticos en cuya realización hubiese que invertir más tiempo del habitual (como el del 214 en la Citerior) el poder imperial designó legados especiales con ese cometido, siempre con el fin de descargar de trabajo al gobernador, no de restarle poder.

¹⁶⁹⁰ Frontin. *De con. agr.* 46, 11-13 La. Cf. Moatti, *Archives et partage...* cit. pp 33-36.

¹⁶⁹¹ Hyg. p. 121, 7-24 L; cf. Moatti, *Idem*, p. 33.

El poder romano implantó, desde Augusto, el censo en las provincias con el fin de mejorar el conocimiento que tenía –y, por ende, su control y administración– de sus recursos económicos y humanos, pero su implantación favoreció al mismo tiempo el encuadramiento social de los provinciales en el seno del Imperio, bien reforzando la estructura municipal allí donde ya existiese, bien creando un nuevo referente identitario en los territorios recién conquistados como el Noroeste peninsular: el domicilio fiscal, que pronto será utilizado epigráficamente por los peregrinos para autodefinirse. Asimismo, la nueva ordenación y categorización jurídica y gromática de las tierras, que facilitó el cálculo de la tributación de cada comunidad a Roma, trajo consigo también un fortalecimiento del nuevo marco de convivencia implando por Roma y una nueva forma de encauzar las relaciones intercomunitarias y de cada comunidad con el poder imperial. El Bronce de El Bierzo es un buen ejemplo de ello.

Los gobernadores de las provincias hispanas aparecen también en este ámbito como una figura tutelar, que busca asegurar control de los recursos de las comunidades provinciales en las zonas subdesarrolladas y, en las regiones más romanizadas, evitar que se dañe la integridad de las tierras de cada municipio y colonia, erigiendo *termini* que la salvaguardasen donde fuese necesario, fuese como resultado de un proceso judicial visto por él o de una decisión tomada preventivamente. Asimismo, aparte de controlar directamente a través del personal militar la elaboración del censo de las *ciuitates peregrinae*, supervisarían el correcto funcionamiento del censo de las colonias, puesto que sus resultados eran enviados a los archivos provinciales y, de allí, a Roma. El gobernador tenía el deber de informar al emperador acerca del estado general de la provincia y de contar con su aprobación en toda decisión que afectase a la integridad de una comunidad o su capacidad tributaria. Sin embargo, también el emperador dependía de los gobernadores, pues a pesar de ser el único que podía decidir acerca de cualquier variación sobre las tierras de una comunidad y sus obligaciones tributarias, basaba sus decisiones en los informes o consultas que los gobernadores le hacían llegar periódicamente y contaba con ellos para ejecutar la decisión que hubiese tomado al respecto.

REFLEXIONES FINALES

Hasta ahora, la visión que se ha tenido de la intervención de los gobernadores en la supervisión de las finanzas de las ciudades y las obras públicas en las provincias hispanas, ha sido, en general, la de que se trataba de un cometido excepcional e incluso episódico. Esta idea se fundamentaba, por un lado, en la aparente ausencia de testimonios que probasen la injerencia en estos asuntos de los gobernadores y, por otro, en la capacidad de autogestión que tenían las colonias y municipios en virtud de los poderes y competencias otorgados a sus magistrados en estos ámbitos, como se recoge en las leyes municipales y la ley colonial que conocemos gracias a los bronce de la Bética¹⁶⁹². Sin embargo, la combinación de la información recogida en estas propias leyes y de otros testimonios epigráficos como las *epistulae* imperiales béticas y el *senatusconsultum de pretiis gladiatoribus* de Itálica con las cartas plinianas y el Digesto arrojan una imagen diferente: los gobernadores de las provincias hispanas, como máximos representantes del poder central en ellas, al igual que en otras partes del Imperio tendieron a supervisar las cuentas municipales y las construcciones sufragadas con dinero público en beneficio de la comunidad. Asimismo, buscaron evitar que los magnates locales se empobreciesen a causa del endeudamiento en que podían caer por culpa de embarcarse en proyectos edilicios o *beneficia* demasiado costosos, ya que su solvencia económica era vital para que se mantuviese el modelo evergético a nivel local. Como en el ámbito judicial, en la supervisión de las finanzas de las ciudades y de las obras públicas los gobernadores se guiaban por lo que hemos denominado la política del equilibrio; es decir, el justo compromiso entre los intereses particulares y los de la comunidad, de modo que la supervivencia de ésta y su capacidad de autosostenimiento no corriesen peligro.

Las ciudades de todo el Imperio adolecían de una serie de problemas endémicos derivados del sistema cívico autosuficiente por el que se regían: eran demasiado dependientes del evergetismo de las élites y las fuentes de ingresos que llenaban sus

¹⁶⁹² Rodríguez Neila, “*Pecunia communis municipum...*” cit. p. 115.

arcas públicas muchas veces no fueron suficientes para hacer frente a sus necesidades constructivas, o para satisfacer tanto sus ansias de grandeza –reflejadas en la competición que cada ciudad establecía con sus vecinas en magnificencia (fenómeno que alcanzó sus máximas cotas en Oriente)– como sus deseos de demostrar su fidelidad a la familia imperial y los cargos imperiales, u honrar a los notables locales destacados¹⁶⁹³. Las ciudades hispanas no fueron una excepción, aunque, a diferencia de las ciudades de las provincias orientales –que arrastraban estos problemas de endeudamiento ya durante el período republicano¹⁶⁹⁴– en ellas tales dificultades económicas y negligencias en la gestión de sus ingresos y obras públicas no se manifestaron con fuerza hasta el siglo II, cuando el sistema municipal estuvo plenamente implantado en toda la Península Ibérica. Evidentemente, este desarrollo cívico fue desigual entre las diferentes provincias hispanas e, incluso, entre algunas regiones de una misma provincia (como entre la costa tarraconense y el Noroeste), y, así, la Bética –la más romanizada y urbanizada de Hispania– aparece como la provincia occidental en la que más testimonios se tienen de evergetismo después de África, consecuencia de su desarrollo urbano y municipal¹⁶⁹⁵.

El poder imperial no dejó de preocuparse por el peligroso endeudamiento de sus ciudades, en las que estaba depositada la administración cotidiana del territorio en su nivel básico, hallando como única solución un mayor intervencionismo de sus representantes en ellas y en particular de los gobernadores. En las propias leyes municipales flavias de la Bética se incluyen medidas a este respecto: es muy significativo que la *lex Irnitana* exponga que los préstamos de cierta entidad debían ser aprobados por el gobernador.

En un principio, durante el siglo I los gobernadores de las provincias hispanas intervendrían sólo en aquellas ciudades que presentasen problemas financieros graves o malversaciones de capitales públicos, bien a partir de una petición de las mismas, bien siguiendo las instrucciones del poder central. Pero a partir del siglo II, en vista de que el problema del endeudamiento no sólo no se resolvía sino que tendía a aumentar, ese intervencionismo de los gobernadores se habría vuelto sistemático, como muestran las

¹⁶⁹³ R. K. Sherk, *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo, 1970, pp. 74-79.

¹⁶⁹⁴ Quinto Cicerón, a decir de su hermano Marco, había asegurado la estabilidad de Asia, entre otras cosas, salvándolas de sus deudas y evitando que contrajeran otras nuevas, así como reconstruyendo las que habían sufrido alguna catástrofe; Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 25.

¹⁶⁹⁵ Melchor, *El mecenazgo cívico...* cit. p. 212.

instrucciones recogidas por los juristas Macro y Ulpiano¹⁶⁹⁶. Con el paso del tiempo, el poder central parece haber desconfiado cada vez más de la capacidad de los magistrados locales para resolver esos problemas e, incluso, de su honestidad. Así, los gobernadores debían velar por que las disposiciones imperiales que restringían los gastos, como el *SC de pretiis gladiatoribus* de Itálica, fuesen respetadas. La supervisión de las cuentas públicas por parte de los gobernadores pasó, entonces, de ser una tarea común pero derivada de estados de necesidad, a habitual e imprescindible. Ciertamente es que las noticias que tenemos acerca del endeudamiento de las ciudades proceden, en su mayoría, de la parte oriental del Imperio, pero la aplicación general en todas las provincias de las disposiciones imperiales relativas al control de las obras públicas y las finanzas (como confirma su elevación a norma en los juristas de época severa antes citados), hacen extensibles estos problemas a las provincias occidentales, o al menos nos indican que el poder imperial entendía que se podían dar también en ellas en el grado en que se producían en la parte oriental.

La política imperial del siglo II en torno al capítulo de gastos de las ciudades fue más rigurosa sobre todo en dos puntos: las obras públicas y las embajadas dirigidas a Roma. A partir de Antonino Pío, los gobernadores fueron definitivamente colocados como el filtro por el que todas las embajadas cívicas debían pasar con el fin de que realizar una criba y conseguir que sólo las verdaderamente pertinentes llegasen a partir hacia Roma. Con ello no sólo se evitaba un gasto superfluo para las arcas de sus comunidades, sino que se evitaba que el emperador se viera sobrecargado de trabajo.

La *epistula Titi ad Muniguenses* y la *epistula Antonini Pii ad Obulculenses* muestran no sólo que los emperadores buscaron mantener un equilibrio entre los intereses de las comunidades y los de sus ciudadanos —de forma que la supervivencia de unos y otros no se viese amenazada— sino también que para ello confiaron mucho en el poder resolutorio de los gobernadores —en estos casos, procónsules— en su labor de árbitros entre las partes. Ciertamente es que en estos ejemplos el gobernador actúa dentro de sus funciones jurisdiccionales, pero no por ello dejan de refrendar su atención por las finanzas municipales, pues en numerosas ocasiones los conflictos derivados de un incumplimiento contractual entre un particular y una ciudad, sobre todo a propósito del arriendo de sus impuestos públicos sobre sus tierras o legados, daba lugar a un proceso

¹⁶⁹⁶ Dig. I, 16, 7, 1 (Ulp. 2 de off. procos.); Millar, *The Roman Empire...* cit. p. 66.

judicial que conducía a la revisión de las cuentas públicas. En el caso de legados de particulares en beneficio de comunidades como *Obulcula*, vemos que el poder central tendió a evitar que las comunidades perdiesen fuentes de ingresos adicionales cuando estuviesen ya asentados por la costumbre a pesar de que hubiese ciertas dudas acerca de sus condiciones.

Desgraciadamente, el intervencionismo de los gobernadores provinciales en las cuentas de las ciudades, sus obras públicas y los litigios surgidos en torno a sus recursos económicos no fue suficiente para corregir su tendencia al endeudamiento y a la malversación de fondos públicos durante el Alto Imperio. Y no fue por falta de pericia: se trataba de un mal endémico de la propia ciudad antigua que, junto con otras causas de índole externa que agravaron la coyuntura económica, sumado a un cambio en la mentalidad de las élites, hicieron caer el sistema evergético, y llevaron a la decadencia del sistema municipal en Occidente.

En el ámbito concreto de las obras públicas, los gobernadores de las provincias hispanas siguieron en su actividad las pautas generales que se evidencian en otras provincias durante el Principado. La correspondencia de Plinio el Joven con Trajano desde Bitinia-Ponto es una fuente decisiva para calibrar el grado y la relevancia del intervencionismo de los gobernadores en las finanzas municipales y las obras públicas ligadas a éstas. En ocasiones, se ha sostenido que la actividad de Plinio en estos ámbitos respondía a necesidades y problemas concretos de su provincia, negando, con ello, la posibilidad de extrapolar su ejemplo a otras partes del Imperio¹⁶⁹⁷. Sin embargo, como los propios casos hispanos muestran, su *modus operandi* como gobernador fue muy similar al de sus homólogos de otras provincias.

En el caso particular de las provincias hispanas, además de la supervisión de las las construcciones más relevantes y costosas llevadas a cabo por iniciativa de las ciudades que competía a todos los gobernadores según recoge Ulpiano, la epigrafía conservada nos revela que los gobernadores de Hispania intervinieron sobre todo en dos ámbitos. Por un lado, la potenciación de los centros de referencia regionales, que solían ser comunidades promovido jurídicamente por el poder imperial. Sabemos que tanto

¹⁶⁹⁷ La última, Béranger, *Le métier...* cit., p. 314, aunque luego reconoce que las preocupaciones que muestra Plinio en su correspondencia “étaient présentes dans l’action de la majorité des gouverneurs” (p. 315).

los procónsules de la Bética como los legados imperiales que gobernaron las otras provincias hispanas, ya desde época de Augusto impulsaron el desarrollo urbano de algunas ciudades como L. Domicio Ahenobarbo en el *municipium Ilunitanum* y M. Emilio Lépidio en el puerto de *Oiasso*, en la Citerior, o Petrucidio en *Carteia*, Itálica, *Hasta Regia*, *Ilipa* y *Siarum*¹⁶⁹⁸. Esto supone, por tanto, que los gobernadores no sólo propiciaban la integración de las poblaciones locales a través de la difusión del derecho romano y el marco jurídico derivado de él con su actividad jurisdiccional, sino que también se preocupaban, como Agrícola en Britania, de que las comunidades promocionadas por el poder central desarrollasen un marco físico en el que pudiesen desarrollar plenamente el modo de vida que el nuevo marco jurídico implantado por Roma les ofrecía.

Por otro, la supervisión y promoción de infraestructuras sufragadas bien por las comunidades locales, bien por el poder imperial, pero siempre dentro una política de potenciación de las comunicaciones (puentes, calzadas, etc.) y de los servicios básicos de las ciudades (acueductos, etc.). Aunque no siempre se menciona en las inscripciones a los gobernadores, la intervención en ellas de personal militar (como los *architecti*) hace inevitable su participación, aunque sólo fuese para dar el visto bueno a las obras e informar acerca de su estado al emperador.

La documentación epigráfica conservada no es muy numerosa, pero su concentración en dos períodos clave del desarrollo de la municipalización en Hispania, el augusteo y el flavio, no parece casual: la implicación de los gobernadores en el desarrollo cívico y económico de las comunidades provinciales y en las infraestructuras locales o regionales vinculadas a él estaba directamente relacionado con la política imperial. Tanto los legados imperiales como los procónsules de la Bética actuaron de acuerdo con las líneas generales de la política provincial marcada por los emperadores ya desde el siglo I. Sin embargo, no se limitaron a cumplir órdenes u instrucciones, sino que contribuyeron decisivamente a la configuración de la política provincial, pues los emperadores basaban gran parte de sus decisiones en la correspondencia que mantenían con los gobernadores y otros agentes imperiales destinados en las provincias¹⁶⁹⁹.

¹⁶⁹⁸ Tanto da si Petrucidio fue legado del procónsul de la Bética, pues sin duda habría actuado por orden y bajo la supervisión de éste.

¹⁶⁹⁹ Millar, *The Emperor...* cit.

Los gobernadores de las provincias hispanas también tuvieron un papel importante en la organización del sistema tributario provincial. En la Bética, como en otras provincias proconsulares, se continuó con la tradición republicana y fue el cuestor del procónsul el que ocupó de gestionar los asuntos vinculados a la tributación, bien controlando a los publicanos, bien a través de sus propios agentes. En las provincias imperiales, en cambio, la recaudación pasó a manos de los procuradores, y los gobernadores no interferían en su ámbito de competencia excepto en casos de litigio, lo que produjo ciertos conflictos de autoridad¹⁷⁰⁰. Ahora bien, el caso del Pisón asesinado en la Citerior por un terrestino que lo responsabilizaba de la brutalidad empleada en las exacciones, nos indica que también en estas provincias los gobernadores estaban involucrados en cierto modo en la recaudación, dado que podían proporcionar personal militar que ayudase al procurador en su cometido. Lo cierto es que a lo largo del Principado, como muestra Ulpiano, la delimitación de competencias en la gestión de los tributos entre procuradores y gobernadores estuvo cada vez más definida.

Sin embargo, su intervención más relevante en la implantación y funcionamiento del sistema tributario provincial fue su papel principal en la elaboración del censo, bien el primero que se llevaba a cabo en una provincia recién creada –como pudo ser versísimilmente el caso de la Transduriana bajo Quirinal–, bien los censos periódicos de los que tenemos noticia en las provincias de Hispania Citerior y Lusitania durante los tres primeros siglos del Principado. El gobernador, como máxima autoridad del poder central en la provincia, era el responsable de gestionar la elaboración del censo¹⁷⁰¹, excepto en casos en que el emperador decidiese enviar a un legado especial a causa de la magnitud del mismo y con el fin de no apartar al gobernador del resto de sus funciones habituales; es el caso del *legatus Augusti ad censos accipiendos* por Caracala en 214 para elaborar el primer censo en la Citerior tras la promulgación de la *Constitutio Antoniniana*¹⁷⁰². Aun así, también entonces el gobernador de esta provincia habría participado en tales asuntos, al proporcionar personal de su *officium* y de la *legio VII Gemina* al enviado de Roma.

El gobernador a través de sus subordinados, sólo intervenía directamente en la elaboración del censo en las comunidades peregrinas. En los municipios y colonias eran

¹⁷⁰⁰ Que llevaron a Ulpiano a recomendar que los gobernadores se abstuvieran de conocer las causas fiscales.

¹⁷⁰¹ En 73/74: *AE* 1939, 60.

¹⁷⁰² *CIL* VI, 322

sus propios magistrados lo que asumían esa función, aunque luego transmitían los resultados a la capital provincial. Es posible que las sedes conventuales funcionasen como centros en los que se recogían el censo de cada comunidad, sobre todo en aquellas áreas de escasa municipalización y con predominio del poblamiento rural como el Noroeste. En *Lucus Augusti* está documentado epigráficamente un *tabularius* en el siglo III¹⁷⁰³; el archivo donde trabajaba seguramente existió con anterioridad y en él habría desempeñado sus funciones el liberto imperial *Saturninus* a finales del siglo II-inicios del III, probablemente vinculado al procurador¹⁷⁰⁴.

En la Bética no tenemos noticias de ningún censo realizado por iniciativa del procónsul o de otros agentes imperiales, pero un ejemplo de la Galia Narbonense –a pesar de haber sido discutido¹⁷⁰⁵– nos ofrece un indicio verosímil de lo que pudo haber acontecido en ella: En época de Tiberio Torcuato Novelo Ático fue *[leg(atus) a]d censum accipiendum et dilect(um) et / proco(n)s(ul) prouvinciae Narbon(ensis)*¹⁷⁰⁶. Esta solución pudo haber sido también aplicada en la Bética, pues a través de ella el emperador lograba un justo equilibrio: sólo él podía decidir que se llevase a cabo un censo y para realizarlo en las provincias imperiales delegaba este cometido en legados (en general los propios gobernadores, como hemos dicho). En las provincias proconsulares –y sobre todo en una época tan temprana del Principado en la que la presencia en ellas del poder imperial era incipiente pero todavía tímido¹⁷⁰⁷– ello habría representado una injerencia demasiado evidente en la *prouincia* del procónsul, lo cual hubiera chocado con la política de moderación y respeto de las instituciones republicanas mostrada por Augusto e imitada –aunque de manera menos sutil– por Tiberio. Así pues, éste optó por delegar la misión de realizar el censo en el propio procónsul de la Narbonense, que así veía acrecentada su posición en la provincia con el respaldo del emperador. Con el tiempo, es probable que los emperadores enviaran delegados suyos también a provincias proconsulares con la misión de elaborar el censo, como parece ser el caso del *censor* o *censitor* de Macedonia a inicios del siglo II¹⁷⁰⁸.

¹⁷⁰³ *IRPLu* 25.

¹⁷⁰⁴ *IRPLu* 23.

¹⁷⁰⁵ Lo Cascio, *vid. supra*.

¹⁷⁰⁶ *ILS* 950.

¹⁷⁰⁷ Dalla Rosa, *Cura et tutela...* cit.

¹⁷⁰⁸ *ILS* 1046.

Por otra parte, los gobernadores también intervenían en la ordenación territorial de su provincia. Como muestra el Bronce de El Bierzo, cuando se constituía una provincia su primer gobernador se encargaba de ejecutar las decisiones tomadas por el emperador en lo que respecta a los premios y castigos dirigidos a cada una de las comunidades locales en función de su posicionamiento hacia Roma durante la conquista o durante las revueltas posteriores que pudiesen producirse, asignándoles más territorio, concediéndoles ciertas exenciones o, por el contrario, imponiéndoles fuertes imposiciones fiscales e, incluso, haciéndolas dependientes de otras comunidades, todo dentro del marco de la *deditio in fidem*.

También se encargarían de supervisar todo el proceso que conllevaba una fundación colonial, desde la *limitatio* y centuriación de las tierras (y demás operaciones catastrales) hasta la supervisión del asentamiento de colonos romanos cuando el emperador hubiese decretado una deducción o de aplicar las decisiones imperiales que afectaban a los bienes fundiarios de una colonia ya preexistente, como en el caso del procónsul de la Galia Narbonense Umidio Baso, que supervisó el catastro de la colonia *Arausio* siguiendo las instrucciones de Vespasiano. La mención de Publio Carisio en las primeras acuñaciones de la colonia *Augusta Emerita* indican, por tanto, que él habría sido el responsable en el que Augusto, como *deductor*, delegó las tareas fundacionales de la colonia, al igual que Asinio Polión hizo en Urso siguiendo el plan de Julio César. Esto nos hace plantear que los gobernadores de Hispania participaron activamente en la supervisión de las deducciones de todas las colonias creadas en la península en época de Augusto, sobre todo cuando tenemos constancia de que en ellas predominaron los veteranos en la conformación de sus respectivos cuerpos de ciudadanos.

En ninguna circunstancia, tanto los procónsules como los *legati Augusti pro praetore* podían decidir autónomamente acerca de la fundación de una nueva colonia, sobre la ampliación o disminución de sus ingresos (*uectigalia* fundamentalmente), o sobre las obligaciones tributarias de una comunidad provincial. Todos ellos eran asuntos de competencia exclusiva del emperador. Aun así, éste podía delegar ciertas decisiones en un gobernador por mero pragmatismo, cuando le fuese imposible pronunciarse por no tener acceso a los documentos contenidos en los archivos municipales. Así, Vespasiano, ante la petición de los Saborenses de contar con nuevos *uectigalia*, les remitió al

procónsul de la Bética¹⁷⁰⁹. No cabe duda, sin embargo, que el procónsul, una vez visto el caso, pediría una confirmación del emperador.

En las provincias consolidadas, los gobernadores debían atender un importante número de causas judiciales derivadas de conflictos territoriales, de límites sobre todo, que enfrentaban a comunidades o a éstas con particulares. En la Primera Parte de este estudio, a propósito de los poderes y funciones jurisdiccionales de los gobernadores, hemos visto la casuística al respecto que nos ha transmitido la epigrafía hispana. Ahora nos interesa señalar que en su sentencia el gobernador podía incluir la orden de erigir mojones públicos que señalasen los límites territoriales en disputa. En efecto, aunque en los *termini publici* conservados en las provincias hispanas comparece en pocas ocasiones el nombre del gobernador, todo parece indicar que intervendría en su erección habitualmente y no siempre como consecuencia de un proceso judicial. Los *termini pratorum* hallados en la Citerior vinculados con la legio *IV Macedonica*, la *X Gemina* y la *cohors IV Gallorum* parecen haber sido levantados con motivo del asentamiento en la zona —la primera legión en Herrera de Pisuerga bajo Augusto; en la provincia de León la otra legión y la cohorte, en época de Claudio— de esos cuerpos del ejército por orden imperial y con el fin de que no hubiese dudas acerca de qué tierras eran del ejército y cuáles de las comunidades vecinas —especialmente en el caso de la *IV Macedonica* e *Iuliobriga*.

La información catastral relativa a cada comunidad, privilegiada o peregrina, estaría recogida en los archivos de la provincia. El catastro de las colonias era más exacto, pues reflejaría su *ager diuisus et adsignatus* (las centuriaciones), mientras que el de las *ciuitates peregrinae* parece que sólo reflejaría su extensión global, al tener la categoría de *ager per extremitatem comprehensus*. No está clara, en cambio, la categoría gromática del *ager* de los municipios, aunque parece que también habría sufrido una centuriación, lo que implicaría una división interna que habría de estar recogida en el catastro. Sea como fuere, la elaboración de toda esta información catastral, junto con la *formula prouinciae* que recogía el elenco de comunidades de la provincia con su estatus jurídico, era supervisada por gobernador y su archivación en la capital provincial y, probablemente, en la sedes conventuales, supuso una importante herramienta para el gobierno provincial y central.

¹⁷⁰⁹ *CIL* II, 1423; *FIRA* I, p. 242, n°76.

Así pues, los gobernadores de las provincias hispanas tuvieron una intervención decisiva en la vida y desarrollo de las comunidades de su provincia, supervisando las cuentas públicas y las obras realizadas en municipios y colonias con el fin de asegurar su sostenibilidad y autosuficiencia; y en las áreas menos desarrolladas, ocupándose, por un lado, de dotarlas de infraestructuras –sobre todo en relación con las comunicaciones terrestres– y, por otro, potenciando su desarrollo cívico, aunque sólo fuera en sus principales centros territoriales (la sedes conventuales del Noroeste): la presencia de Paulo Fabio Máximo en las sedes conventuales de *Lucus Augusti* y *Bracara Augusta* conllevó, sin duda, su consolidación como cabeceras administrativas y polos de atracción de la población circundante, coadyuvando a su desarrollo cívico y urbano. El ejemplo de Agrícola en Britania es un paralelo muy elocuente. Asimismo, su papel como responsable último del censo y de la aplicación territorial decidida por el poder central lo dotaban de una capacidad de influencia decisiva en la estabilidad de las provincias, el control de sus recursos humanos y económicos y en la integración de su población en el encuadramiento social de cuño romano.

TERCERA PARTE

EL GOBERNADOR Y LOS PROVINCIALES: DEL FOMENTO DE LA FIDELIDAD AL PODER IMPERIAL AL PATRONATO

CAPÍTULO 1: EL PAPEL DE LOS GOBERNADORES EN EL DESARROLLO DEL CULTO IMPERIAL PROVINCIAL

El culto imperial jugó un papel fundamental en el conjunto de las provincias romanas por dos motivos principales. En primer lugar, su implantación y difusión coadyuvó decisivamente a consolidar y legitimar la novedosa posición del *princeps* Augusto –y, a partir de él, de sus sucesores en el trono imperial– como cabeza del Estado encastrada en las instituciones republicanas, *primus inter pares* en el Senado y ‘padre’ y patrono de todos los habitantes del Imperio Romano, en virtud del reconocimiento de sus virtudes y filiación divinas –hijo del *Diuus Iulius*– que lo convertían en digno sucesor de los *summi uiri* de la historia de Roma, *exemplum uirtutum* vivo y descendiente directo de los fundadores Eneas y Rómulo a través de la *gens Iulia*. Fiel transmisor de esta ideología es el programa de imágenes que Augusto desarrolló durante su principado, plasmado en la iconografía que inundó la *Vrbs* –cuyos ejemplos más elocuentes se hallan en el *Ara Pacis Augustae* y el Foro de Augusto– y los numerosos municipios y colonias de las provincias que siguieron el modelo capitalino, así como también fue exaltado en las obras de los poetas del círculo de Mecenas, siendo la *Eneida* virgiliana la culminación épica del mensaje augusteo, transformado en ideal patriótico y universal¹⁷¹⁰. Augusto se presentaba como el mejor de los hombres, que, gracias a su *pietas* –como la del Eneas virgiliano–, había recuperado la *pax deorum*, poniendo orden no sólo en los asuntos humanos al acabar con las guerras civiles, sino también en la relación de su pueblo con los dioses, renovando su tradicional protección¹⁷¹¹.

¹⁷¹⁰ Cf. Syme, *The Roman Revolution* cit. pp. 440-458; Zanker, *Augusto y el poder...* cit. esp. pp. 128-280; P. Hardie, *Virgil's Aeneid: Cosmos and Imperium*, Oxford, 1986; K. Galinsky, *Augustan Culture: An Interpretative Introduction*, Princeton, 1996; R. Olmo López, “La idea imperial en Virgilio”, *ETF II*, 21, 2008, pp. 259-273.

¹⁷¹¹ Su *pietas* se expresaba en tres esferas: la piedad filial, que lo llevó a vengar a su padre César; la piedad cívica, como portador de la paz y benefactor del pueblo romano y del orbe; y la piedad religiosa, prestando especial atención a la recuperación y mantenimiento de los cultos tradicionales.

En segundo lugar, el culto al emperador dotó a los provinciales de un símbolo identitario común, de un vínculo que reforzaba la unidad del imperio. En un imperio culturalmente heterogéneo como el romano, la figura del emperador y el culto ligado a ésta fueron la principal referencia común de sus habitantes y funcionaron como elemento aglutinador¹⁷¹². Se puede decir que lo que en el plano jurídico representó la difusión del derecho romano y de la ciudadanía, en el simbólico e identitario le correspondió al culto imperial, junto con el resto de actos de demostración de fidelidad al emperador, figura que ya desde Augusto se tendió a confundir con la propia Roma. El *princeps* encarnaba la unidad del imperio y al realizar una serie de cultos en torno a su figura todos los habitantes de las provincias se igualaban al reconocerse en él y formaban parte de una comunidad única¹⁷¹³. Como expresó Asinio Galo en la sesión del Senado del 14 d.C. en la que se confirmó como *princeps* a Tiberio, si el cuerpo de la *res publica* era uno, sólo una debía ser su cabeza¹⁷¹⁴. El imperio y el emperador eran un binomio inseparable, y la prosperidad y estabilidad del primero dependían de la salud y del buen hacer del segundo. Por ello las comunidades e individuos de todo el imperio, a la vez que rendían culto al *Genius* y al *Numen* del emperador vivo y a los *diui* con el fin de honrarlos y gozar de su protección, realizaban votos *pro salute principis*¹⁷¹⁵. Y por ello el rechazo de los cristianos a realizar los sacrificios debidos a los dioses romanos y, en concreto, a participar en el culto al emperador fueron entendidos como un acto de insubmisión que socavaba los cimientos del orden imperial, dando lugar a procesos que, como hemos visto, solieron traer quebraderos de cabeza a los gobernadores provinciales¹⁷¹⁶.

A diferencia de las provincias orientales, cuyas ciudades habían conocido bajo la dominación de las monarquías helenísticas un culto al soberano que las empujó de manera natural a ofrecer en seguida honores divinos a Octaviano tras Accio¹⁷¹⁷, en la

¹⁷¹² H. Inglebert, “Les processus de romanisation”, en *Histoire de la civilisation romaine*, París, 2005, pp. 421-449, esp. p. 447.

¹⁷¹³ R. Turcan, “Culte impérial et sacralisation du pouvoir dans l’Empire romain”, en J. Ries (ed.), *Les civilisations méditerranéennes et le sacré*, Trunhout, 2004, pp. 311-342, esp. p. 320; “La promotion du sujet par le culte du souverain”, en A. Small (ed.), *Subject and Ruler: The Cult of the Ruling power in Cassical Antiquity*, Ann Arbor, 1996, pp. 51-62, esp. pp. 52-57; Hopkins, *Conquerors...* cit. p. 242.

¹⁷¹⁴ Tac. Ann. I, 12: ...*unum esse rei publicae corpus atque unius animo regendum*.

¹⁷¹⁵ G. Alföldy, “Subject and Ruler, Subjects and Methods: an Attempt at a Conclusión”, en Small (ed.), *Subject and Ruler...*, cit., pp. 254-261, esp. p. 255.

¹⁷¹⁶ Cf. Capítulo 1.

¹⁷¹⁷ En el invierno del 30/29 a.C. los *koina* de Asia y Bitinia enviaron cada uno una embajada a Octaviano para ofrecerle honores. Octaviano les dio permiso para instituir un culto provincial en su honor,

parte occidental del imperio el poder romano hubo de actuar como promotor del culto al emperador. D. Fishwick, en su extenso y detallado estudio del culto imperial en el Occidente latino, hoy referencia indiscutible, ha destacado que, salvo en dos excepciones –precisamente hispanas–, la fundación de este culto partió siempre de una iniciativa del poder central y, en concreto, de miembros de la familia imperial u hombres cercanos a Augusto¹⁷¹⁸. Así, como ha demostrado R. Turcan, en contra de la teoría establecida desde F. Cumont, el culto imperial en las provincias occidentales no helenófonas, como en Roma, no se deriva de modelos orientales, sino que entronca con la tradición romana ancestral, siendo la traslación a la esfera pública, política, del culto al *Genius* del *paterfamilias* y a los antepasados, en tanto que el emperador era *Pater Patriae*¹⁷¹⁹. Además, en Occidente el culto imperial sirvió para integrar a las poblaciones recién sometidas: no es una casualidad que sus primeros ejemplos se dieran en los territorios recién conquistados del Noroeste de Hispania, la Galia Comata o Germania.

El desarrollo del culto imperial en las provincias occidentales comenzó en la primera década del principado de Augusto. En contraste de nuevo con la parte oriental, no se hicieron diferencias entre romanos y no romanos (en las zonas recién asimiladas había muy pocos *ciues Romani*) y, además, el poder imperial hubo de dotar de una estructura *ex nouo* a la organización del culto, creando centros regionales expresamente dedicados a él. La responsabilidad de esa labor recayó sobre la máxima autoridad

indicándoles que los ciudadanos romanos residentes en esas provincias debían rendir culto a Roma y *Diuus Iulius*, mientras que los no romanos lo harían a *Dea Roma* y él mismo. Al primer culto se dedicará un santuario en Éfeso y en Nicea; al segundo, en Pérgamo y Nicomedia. Cf. Suet. *Diu. Aug.* 52; Tac. *Ann.* IV, 37; Dio LI, 20, 6-7. Como ha señalado S. R. F. Price, *Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge, 1984, p. 235, los griegos buscaron vincular al emperador con su sistema simbólico. Véase también: Zanker: *Augusto y el poder...* cit. pp. 343-344.

¹⁷¹⁸ Fishwick, *The Imperial Cult* p. 214.

¹⁷¹⁹ R. Turcan, “Culte impérial et tradition romaine”, *Histria Antiqua* 4, 1998, pp. 99-106, esp. pp. 99 y 194. En cuanto a Hispania, R. Étienne, *Le culte impérial dans la péninsule ibérique d'Auguste à Dioclétien*, Paris, 1958, pp. 75-115, vinculó el florecimiento del culto imperial con la llamada *deuotio* ibérica. En nuestra opinión, esto pudo facilitar su implantación, pero el erudito francés le da una relevancia excesiva como signo distintivo del caso hispano. El culto al jefe es una característica propia de todos los pueblos indoeuropeos y, por ello, a nuestro juicio no puede usarse para explicar la precocidad del culto imperial en Hispania, cuyo establecimiento, además, como ha mostrado Fishwick, partió de la iniciativa romana, no de la indígena. Por su parte, J. Alvar, “Discusión sobre las instituciones ibéricas”, en M. Garrido-Hory – A. Gonzales (eds.), *Histoire, espaces et marges de l'Antiquité. Hommages a M. Clavel-Lévêque*, vol 3, Besançon, 2004, pp. 11-31, rechaza de plano cualquier vinculación entre el surgimiento del culto imperial en Hispania y la *deuotio* ibérica, tomando ésta por una construcción historiográfica propia de la literatura propagandística de conquista; idea seguida también en F. Lozano – J. Alvar, “El culto imperial y su proyección en Hispania”, en J. Andreu – J. Cabrero – I. Rodá (eds.), *Hispaniae: Las provincias hispanas en el mundo romano*, Tarragona, 2009, pp. 425-437, esp. p. 430.

romana en la provincia, bien –como hemos dicho– miembros de la familia imperial, bien gobernadores que eran hombres de confianza del *princeps*. Sin duda, la actividad en este ámbito del hijastro de Augusto Druso el Mayor destaca con luz propia, pues a él se debe la consagración en 12 a.C. del llamado altar de las Tres Galias (por entonces y hasta época flavia aún llamada *Gallia Comata*) en *Lugdunum* y la fundación del santuario que se desarrolló a partir de ella, que es el mejor conocido de Occidente¹⁷²⁰. Asimismo, también erigió en 12-9 a.C. un *ara* en la ribera renana, en donde se hallaba el *oppidum Vbiorum*, futura *Colonia Claudia Ara Agrippinensis*¹⁷²¹. Sin embargo, la importante labor de Druso no ha de hacernos olvidar que tanto las primeras aras conocidas dedicadas a Augusto en Occidente como la difusión y consolidación del culto imperial provincial ya desde el período augusteo dependieron de la acción de los gobernadores. Como veremos en las siguientes páginas a través del caso concreto de las provincias hispanas (aunque siempre en comparación con otras) tanto los *legati Augusti pro praetore* como los procónsules dirigieron la difusión del culto imperial en las provincias occidentales y se encargaron de presidir y afirmar los más importantes actos y símbolos de fidelidad al emperador¹⁷²².

La consagración más antigua conocida de aras dedicadas al culto provincial de Augusto se debe al gobernador de la efímera provincia Transduriana, en el Noroeste de Hispania, Lucio Sestio Quirinal¹⁷²³. Como nos han transmitido Mela, Plinio y Ptolomeo, Quirinal consagró entre los años 22 y 19 a.C. en un lugar de la costa noroccidental

¹⁷²⁰ Liv. *Per.* 139; Strab. IV, 3, 4; Dio LIV, 32, 1. Para la información epigráfica, numismática y arqueológica del culto en este santuario: Fishwick, *The Imperial Cult* I/1, pp. 102-135 y III/1, pp. 9-17, 150-156, 172, 203-204.

¹⁷²¹ Dado que Agripina la Menor, madre de Nerón, había nacido allí en 15 d.C., durante el mando de su padre Germánico en Germania. Para lo antedicho sobre la labor de Druso *vid.* Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, pp. 9-20.

¹⁷²² Adviértase que quedarán fuera de nuestro estudio, por razones obvias, los testimonios del culto imperial que son fruto de iniciativas particulares y aquellos pertenecientes al ámbito municipal o colonial en los que no se tenga noticia alguna de la intervención del gobernador o ésta no se presuponga.

¹⁷²³ Puede que el *ara* dedicada a Augusto por *Tarraco* fuese anterior, pero se correspondería con un culto municipal, no provincial, como se desprende de las palabras Quintiliano, *Inst.* VI, 3, 77, única fuente que hace referencia a ella en vida de Augusto: *Et Augustus nuntiatibus Terraconensibus palmam in ara eius enatam, "apparet" inquit "quam saepe accendatis"*. Cf. Étienne, *Le culte impérial...* cit., pp. 370-371. Este autor relacionó su erección con la embajada que Mitilene envió a Augusto para entregarle una copia del decreto por el que habían decidido dedicarle un templo. Augusto atendió a esta embajada, encabezada por Crinágoras, en *Tarraco* en 26-25 a.C., y su ejemplo sería seguido por los tarraconenses (p. 365-367). Étienne también plantea la posibilidad de que se produjera una inauguración de este altar en 15 a.C. durante la segunda estancia de Augusto en la Hispania Citerior (p. 370).

galaica –probablemente en la Costa da Morte¹⁷²⁴– tres altares dedicados a Augusto¹⁷²⁵. Se trataba –no por azar– de una provincia recientemente constituida, tras el definitivo sometimiento de su población en el contexto de las Guerras Astur-Cántabras¹⁷²⁶. Quirinal, en calidad de *legatus Augusti pro praetore*, fue su primer gobernador y le correspondió la organización de la nueva provincia; misión que se le asignó por ser senador de rango consular y amigo personal de Augusto¹⁷²⁷. Su labor se plasmó, sobre todo, en la nueva repartición de los territorios entre las comunidades locales en función de su apoyo a Roma durante la conquista¹⁷²⁸ y en la dotación de un primer centro regional de referencia para la población destinado a fomentar su familiarización con el poder central, el santuario fundado en torno a las tres aras que dedicó a Augusto. Al margen de su situación geográfica (cuestión ya tratada en el Capítulo Primero), estas aras plantean dos interrogantes: por un lado, la razón de que sean tres, caso único en época augustea; por otro, si estaban dedicadas sólo al emperador o a éste y Roma, como en el caso lugdunense posterior.

R. Étienne, en su estudio clásico sobre el culto imperial en la Península Ibérica, relacionó el número de las aras sestianas con las tres legiones presentes en Hispania Citerior por entonces: la IV Macedónica, la VI *Victrix* y la X Gémina¹⁷²⁹. Empero, no aporta ninguna argumentación que sostenga esta hipótesis excepto que la existencia de unas “diócesis” en la Hispania Citerior se derivaría de la presencia de estas legiones en ella y, según él, también sucedería lo mismo con los altares. Como ya mostramos en el Capítulo 2 de la Primera Parte de este estudio, la teoría de las “diócesis” de la Hispania Citerior es un constructo historiográfico, hoy desechado, que parte de una lectura incorrecta del pasaje de Estrabón III, 4, 20. Esta posibilidad, por tanto, ha de ser

¹⁷²⁴ En concreto se han situado estos altares en el entorno del cabo Finisterre: Tranoy, *La Galice...* cit. p. 327; Grüner, “Die Altäre...” cit., seguido por G. Alföldy en *CIL* II²/14,1145.

¹⁷²⁵ Plin. *N.H.* IV, 111: *Neri et Supertamar(i)ci, quorum in paeninsula tres arae Sestianae Augusto dicatae*; Mela, 3, 13: *In Astyrum litore Noega est oppidum, et tres arae quas Sestianas uocant in paeninsula sedent et sunt Augusti nomine sacrae inlustrantque terras ante ignobiles*; Ptol. II, 6, 3.

¹⁷²⁶ Los cántabros aún se levantaron una última vez y no fueron sometidos plenamente hasta el 19 a.C., gracias a la intervención de Agripa; cf. Dio LIV, 11, 2-6.

¹⁷²⁷ Aunque no siempre fue así: durante la guerra civil, Quirinal apoyó a Bruto y fue proscrito, pero acabó por ser perdonado y llegó a pertenecer al grupo de amigos de Augusto, sin duda dentro de la política de éste de recuperar para su causa a los miembros destacados del Senado. Nunca dejó de admirar a Bruto y hasta tenía un retrato de él en su casa. Cf. App. *B.C.* IV, 51.

¹⁷²⁸ *Edicto de El Bierzo*, ll. 8-14: *Itaque eos uniuersos im/munitate perpetua dono quosq(ue)/ agros et quibus finibus possede/runt, Lucio Sestio Quirinale leg(ato) / meo eam prouinciam optinente{m}, / eos agros sine controuersia possi/dere iubeo*. Sigo la edición presente en Mangas –Sánchez Palencia (eds.), *El bronce de El Bierzo...* cit.

¹⁷²⁹ Étienne, *Le culte impérial...* cit. p. 383.

descartada. La otra alternativa la ha propuesto A. Tranoy, quien entendía que cada uno de los altares reflejaba la visión romana de los tres grandes pueblos del cuadrante noroccidental: los *Callaeci Bracari*, los *Callaeci Lucenses* y los *Astures*¹⁷³⁰. Esta teoría ha sido seguida por Fishwick, que observa que en la fundación de las aras sestianas se habría seguido un patrón similar al del altar de *Lugdunum*, al que se vinculó a las sesenta tribus que representaban a la población indígena de las tres provincias en que se dividió la *Gallia Comata*, tal y como refleja su mención en una inscripción y la representación alegórica de cada una junto al altar. En el caso del Noroeste hispano, también el santuario de las aras sestianas sería el centro regional de referencia para las poblaciones indígenas que estarían adscritas a los tres *conuentus iuridici* del Noroeste que conocemos durante el Principado¹⁷³¹. En nuestra opinión, es verosímil que Quirinal realizase los primeros *conuentus* en el Noroeste, aunque el funcionamiento estable de las sedes de *Lucus*, *Bracara* y *Asturica* parece que se habría dado después de la reorganización provincial augustea del 16-13 a.C. y, aun entonces, el sistema, como vimos anteriormente, no sería tan rígido como se ha querido ver¹⁷³².

En cuanto a los destinatarios del culto, Fishwick sostiene que, desde un principio, Augusto aparecería asociado a Roma. Prueba de ello sería que los primeros sacerdotes conventuales atestiguados en el Noroeste, a partir de época de Vespasiano, son *sacerdotes Romae et Augusti*¹⁷³³ y, por tanto, parece lógico deducir que fue así desde un principio, al igual que en las Tres Galias¹⁷³⁴. Si bien es cierto que Mela y Plinio sólo dicen, respectivamente, que estas aras están *Augusto dicatae* y *Augusto nomine sacrae*, la argumentación de Fishwick parece ser acertada, sobre todo si tenemos en cuenta que la reciente relectura de una inscripción bracarense ha hecho que se date un sacerdote de Roma y Augusto en época augustea: *[Ca]malo Melg[aeci fī/li]o Bracara[u]/gustano / [s]acerdoti / [Ro]mae Aug(usti) Caesa[ris?] / conuentus / [Bra]car[au]g[ustanus]*¹⁷³⁵. La omisión de la *Dea Roma* por parte de Mela y Plinio

¹⁷³⁰ Tranoy, *La Galice...* cit. pp. 149-150 y 327, lo cual pondría en relación las aras con la división conventual, que habrían respetado la división de los tres grandes pueblos del Noroeste. De la misma opinión respecto a esto último es Alföldy, "Spain" *CAH*² X cit. p. 462.

¹⁷³¹ Fishwick, *The Imperial Cult* I/1, p. 143 y III/1, p. 9.

¹⁷³² Véase el Capítulo Primero.

¹⁷³³ Cf. Étienne, *Le culte impérial...* cit. p. 182.

¹⁷³⁴ Fishwick, *The Imperial Cult* I/1, p. 144; Étienne, *Le culte impérial...* cit., pp. 177-184.

¹⁷³⁵ Cf. *HEp.* 13 2003/2004, 819. La inscripción corregida es *CIL* II, 2426. El nuevo desarrollo propuesto de la abreviación *Aug* y la palabra *Caesa* mutilada de la quinta línea en singular, en vez de en plural, redirigen a época augustea en vez de la flavia.

probablemente se deba a que les interesaba resaltar, en pocas palabras, la centralidad de primer emperador en ese culto. Además, no ha de olvidarse que cuando ambos autores escribieron sus obras, *Diuus Augustus* estaba plenamente asentado en el panteón divino romano y tanto a Claudio como a Vespasiano y Tito les interesaba recalcar su ascendencia –de sangre o simbólica y *de iure*– divina. Es natural que la dedicación a *Roma* careciera de importancia para ellos, que, de todas formas, no pretendían ser exhaustivos en su descripción de las aras, ya que su discurso era de índole geográfica.

Quirinal, por tanto, consagró tres aras a Roma y Augusto con el fin de poner en contacto a los indígenas de la provincia recién creada con el emperador, encarnación del poder central que, de esta manera, se les hacía presente. El simbolismo de estas aras era muy fuerte, pues vinculaba a los indígenas con la religión romana, la cabeza del imperio y el destino del mismo; los integraba en su unidad, los romanizaba, dotándolos de nuevas señas de identidad. Por ello, la elección del lugar que escogió el gobernador para fundar el santuario provincial fue premeditada: la Costa da Morte representaba uno de los límites del mundo conocido y demostraba que el *princeps* había logrado que el Pueblo Romano dominase todo el orbe¹⁷³⁶, culminando la vocación universal que el programa augusteo de imágenes –plásticas y literarias– anunciaba¹⁷³⁷. Era, pues, un homenaje al primer hombre del imperio que certificaba que bajo su guía Roma conocía una nueva prosperidad. Además, para el propio Augusto este acto de Quirinal tuvo que suponer un importante signo de afirmación, dado que se realizó inmediatamente después de la crisis del 23 a.C., superada con su renuncia a la reiteración en el consulado –aunque siguió gozando de un *imperium* proconsular, superior al de cualquier gobernador provincial en todo el imperio, manteniendo su mando sobre las provincias que tenía adjudicadas, y recibió la *potestas tribunicia* vitalicia, así como el *ius primae relationis* en las sesiones del Senado¹⁷³⁸.

Esta labor de difusión y consolidación del culto al emperador en el Noroeste fue proseguida por Paulo Fabio Máximo en 4-1 a.C., cuando fue *legatus Augusti pro*

¹⁷³⁶ Grüner, “Die Altäre...” cit.

¹⁷³⁷ Virg. *Aen.* VI, 791-796. Virgilio compuso su *Eneida* entre el 29 y el 19 a.C., año de su muerte, que coincide con el final del gobierno de Quirinal en la Transduriana. Todos eran partícipes de la misma idea de vivir una época de nuevo esplendor.

¹⁷³⁸ Dio LIII, 32, 5. Cf. Ferrary, “À propos...”, pp. 116-117, magistral estudio que es hoy referencia ineludible. Sobre el *imperium maius* de Augusto frente a los procónsules ver los recientes estudios de F. Hurlet, *Le proconsul...* pp. 177-195 y Dalla Rosa, *Cura et tutela...* cit.; ambos repasan la historiografía que ha abordado el tema y ofrecen importantes críticas y puntualizaciones.

praetore de la Hispania Citerior¹⁷³⁹, provincia en la que se integró la efímera Transduriana tras la reorganización de Hispania que, como vimos, habría sido realizada por Augusto –con el asesoramiento de Agripa– en el viaje que hizo a la península en 16-13 a.C. Fabio Máximo era amigo íntimo de Augusto¹⁷⁴⁰ y un hombre de gran prestigio que había sido cónsul ordinario el año 11 y procónsul de Asia en 10/9 a.C. Precisamente en Asia Fabio Máximo había sido el impulsor de que el *koinon* de la provincia reformase su calendario tomando como primer día del año el 23 de septiembre, natalicio de Augusto¹⁷⁴¹. Con ello se señalaba la coincidencia entre el nacimiento del emperador y el inicio de una nueva era de prosperidad para la provincia de Asia como parte del imperio, al igual que sucedía en Roma ese mismo día cuando el obelisco egipcio que funcionaba como *gnomon* del *horologium* gigante construido en el Campo de Marte señalaba con su sombra el *Ara Pacis Augustae*¹⁷⁴².

Siendo gobernador de la Hispania Citerior, Paulo Fabio Máximo realizó una (o varias) visita/s a las sedes conventuales del Noroeste, no sólo con el fin de ejercer su jurisdicción superior entre sus habitantes, sino con el objeto de fortalecer su adhesión al poder imperial. Una inscripción de *Bracara Augusta* nos indica la labor de difusión del culto al emperador que desarrolló este gobernador:

*Imp(eratori) Caesari Diui f(ilio) Aug(usto) / pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XXI / sacrum / Bracaraugustani / Paulli Fabi Maxsimi leg(ati) pro pr(aetoris) / natali dedicata est*¹⁷⁴³.

Esta inscripción contiene información de suma importancia. En primer lugar, tanto el soporte (un ara) como la fórmula de la dedicación (*Imperatori Caesari ... Augusto sacrum*) no dejan lugar a dudas de que se trata del culto al emperador, que parece que arraigó rápido en *Bracara*, como se desprende de una dedicación al *Genius*

¹⁷³⁹ *Fasti Hispanienses* pp. 9-10.

¹⁷⁴⁰ Hasta el punto de acompañarle en su última visita (hecha en secreto) a Agripa Póstumo, condenado al exilio en la isla de Planasia: Tac. *Ann.* I,5.

¹⁷⁴¹ En las inscripciones conservadas, el decreto del *koinon* viene precedido por la versión griega y latina del edicto de este procónsul sobre la reforma del calendario: U. Laffi, “Le iscrizioni relative all’introduzione nel 9 a.C. del nuovo calendario della provincia d’Asia”, *Studi Classici e Orientali* 16, 1967, pp. 5-98. Véase también: Ehrenberg – Jones n° 98; Magie, *Roman Rule*... cit. p. 480.

¹⁷⁴² Zanker, *Augusto y el poder*... cit.

¹⁷⁴³ *ILER* 1028; *RAP* 477.

*Augusti*¹⁷⁴⁴. Ahora bien, según Fishwick, cuando el nombre del emperador en dativo va seguido de *sacrum* no significa que se le tome por un dios *stricto sensu*, sino que se le trataba como si fuera uno y, por tanto, esas dedicaciones han de entenderse como el mayor homenaje formal que se le podía tributar. Precisamente ese importante matiz es el que llevó a asociar a Augusto siempre con *Roma*¹⁷⁴⁵.

En segundo, la elección de la fecha de dedicación del ara, el cumpleaños del gobernador, más allá de la mera coincidencia de fechas, muestra, a nuestro parecer, que para los habitantes de *Bracara* existía una conexión directa entre Fabio Máximo y Augusto, lo que supone no sólo un reconocimiento de la condición de aquél como representante del emperador, sino también como encarnación del poder imperial en la región. Asimismo, este honor que recibe Fabio Máximo seguramente está motivado por algún *beneficium* que hubiera concedido a la comunidad *bracaraugustana*, bien el mero hecho de honrarla con su presencia, bien algo de índole más material (el sufragio de alguna construcción, etc). Este honor escondería tras de sí, por tanto, un patronazgo del gobernador sobre esta comunidad. Finalmente, es muy importante para la valoración del grado de integración de los indígenas que en una fecha tan temprana desde su fundación los habitantes de esta comunidad ya se autodenominen *bracaraugustani*, identificándose, con ello, con su encuadramiento puramente romano.

De igual modo se condujo Paulo Fabio Máximo en *Lucus Augusti*, donde gracias al registro epigráfico sabemos que dedicó tres inscripciones a Augusto. El texto es el mismo en los tres casos, siempre inscrito sobre granito:

Caesari / Paullus Fabius / Maxumus / legat(us) Caesaris.

Sólo uno de estos soportes tiene una forma clara, de monolito rectangular en disposición vertical con un remate curvo trabajado en su parte superior¹⁷⁴⁶. Los otros dos, hallados insertos en la muralla de mediados del siglo III que abraza el centro de la actual ciudad de Lugo, presentan un mal estado de conservación. Tres han sido las propuestas que han pretendido completar el texto: F. Arias, A. Tranoy y P. Le Roux, cuando aún no se había hallado la inscripción del monolito, optaron por restituir

¹⁷⁴⁴ *CIL* II, 5123.

¹⁷⁴⁵ Fishwick, *The Imperial Cult* II/1, pp. 438-444.

¹⁷⁴⁶ Anexo II: nº 15.

[*Romae et Augusto*] en la primera línea del texto epigráfico, que suponían perdido en vista del estado de las inscripciones conocidas entonces¹⁷⁴⁷. Cuando fue descubierto el monolito, A. Rodríguez Colmenero y C. Carreño propusieron la sorprendente reconstrucción [*V(rbis) c(onditori) [---] m(onumentum)*] para el encabezamiento del texto¹⁷⁴⁸, hipótesis que no encuentra paralelos y que no ha tenido seguimiento en la historiografía¹⁷⁴⁹. Finalmente, L. Gasperini corrigió a los anteriores y ofreció la siguiente lectura de las marcas que se intuyen encima de *Caesari* en el monolito: *I(oui) O(ptimo) M(axumo)*¹⁷⁵⁰.

Por nuestra parte, tras haber realizado varias autopsias de la pieza, hemos podido constatar que, con esfuerzo, se intuyen unas marcas que se parecerían a una O seguida de una M, pero por desgracia no es posible afirmar con vehemencia que se trate de letras. No obstante, es evidente que las tres inscripciones representan un acto de homenaje a Augusto realizado por el gobernador de la Hispania Citerior dentro de una política de exaltación de la figura del *princeps* como medio de agregación de los habitantes de un territorio recién asimilado. Tanto los editores del *corpus* de *Inscriptions romaines de la province de Lugo* como Gasperini han relacionado estas dedicaciones con el culto imperial y, aunque el encabezamiento de estos epígrafes permanece aún en el terreno de lo hipotético, es muy probable que tal homenaje a Augusto estuviese revestido de un carácter sagrado o religioso, al igual que en *Bracara*.

Resulta extraño que se le mencione sólo como “César”, sin el acompañamiento de los títulos habituales¹⁷⁵¹, y no como “Augusto”, dada la relevancia que este apelativo tenía para el emperador al dotarle de un carácter sagrado y el hecho de que lo llevase usando desde hacía veinte años. Asimismo, es excepcional que Fabio Máximo se autodenomine *legatus Caesaris* y no *Augusti*. La única explicación que encontramos a la ausencia del nombre de “Augusto” en la referencia al emperador es el hecho de que Fabio Máximo, como su amigo íntimo, estaba más habituado a llamarlo César,

¹⁷⁴⁷ *IRPLu* n° 19-20. Anexo II: 13-14.

¹⁷⁴⁸ Rodríguez Colmenero – Carreño, “Sobre Paulo Fabio Máximo...” cit. p. 390.

¹⁷⁴⁹ Excepto por J. Gómez Vila en *ERPLugo* n° 126, que, sin embargo, acepta (en n° 96 y 102) la hipótesis de los autores del *IRPLu* en los otros dos epígrafes gemelos de Paulo Fabio Máximo hallados con anterioridad.

¹⁷⁵⁰ L. Gasperini, “Dal luco sacro al luco con insedimento humano”, en A. Rodríguez Colmenero (coord.). *Los orígenes de la ciudad en el Noroeste hispánico (Actas Congreso Internacional, Lugo 15-18 mayo 1996)*, Lugo, 1998, t. I, pp. 309-324.

¹⁷⁵¹ Algo que ya señaló en su momento R. Syme, “A Governor of Tarraconensis”, en *Roman Papers*, II, 1979, p. 732.

cognomen por el que Octaviano insistió vehementemente en ser conocido desde el 44 a.C. con el fin de resaltar su condición de verdadero heredero no sólo testamentario, sino también político de Julio César en el contexto de la guerra civil¹⁷⁵².

Más difícil resulta explicar la ubicación de estas tres inscripciones idénticas. El soporte de dos de ellas es informe y el de la tercera, el monolito, sólo recuerda a una suerte de mojón. Si todos los soportes fuesen idénticos¹⁷⁵³, ¿se trataría, quizá, de hitos que delimitarían un espacio sagrado dedicado al culto imperial en la sede conventual? Hasta que se obtengan nuevos datos arqueológicos, poco más se puede plantear.

Hemos de mencionar también un epígrafe lucense hoy perdido que presentaba un encabezamiento similar a la inscripción antedicha de *Bracara Augusta: Imp(eratori) Cae[sari] Diui f(ilio)] / Aug[usto pontifici] / max[imo ---] / [-----]*¹⁷⁵⁴. Esta similitud nos induce a pensar que pudo tratarse también de un ara consagrada en honor de Augusto por los lucenses y que de nuevo podría hallarse detrás de ello Paulo Fabio Máximo. Sin embargo, estamos de acuerdo con los editores de *IRPLu* en que hay que tomar las noticias que tenemos de esta inscripción con cautela.

Estas dedicaciones a Augusto reflejan que *Lucus Augusti* fue potenciado por entonces como centro territorial de referencia del norte de la *Gallaecia*, y que, además de funcionar como sede judicial, se desarrolló su carácter de polo de agregación y de asimilación de la población a él adscrita dentro de la esfera religiosa: su propio nombre, *Lucus Augusti*, “el bosque sagrado de Augusto”, es muy elocuente. De las tres sedes conventuales conocidas para el Noroeste, a diferencia de *Bracara Augusta* y *Asturica Augusta*, el nombre de *Lucus Augusti* no hace referencia a la población indígena que a esta sede estaría adscrita, sino al lugar de reunión en sí mismo y, además, este nombre no va acompañado de una forma adjetival derivada del nombre del emperador, sino de su genitivo, lo que supone una vinculación más estrecha y evidente con el *princeps*. Es decir, desde su elección como centro territorial del poder romano en la zona, *Lucus*

¹⁷⁵² Syme, *The Roman Revolution*, cit. pp. 112-122. En cuanto al título de *legatus Caesaris*, a pesar de ser raro tenemos otros ejemplos de época julio-claudia, cuando la titulación aún no se había fijado. Véase el *Iusiurandum Aritensium* del 37 d.C., en el que el gobernador Umidio Cuadrato aparece como “*legatus Cai Caesaris*” (*CIL* II, 172).

¹⁷⁵³ Antes de que se hallara el monolito, los editores de *IRPLu* pensaron verosíblemente que estas inscripciones podían pertenecer a sendos pedestales de estatuas dedicadas a Augusto, vinculadas al desarrollo del culto imperial (p. 44). A pesar de que la aparición del monolito ha debilitado esta hipótesis, aún no puede ser refutada: no todas estas inscripciones tenían que hallarse obligatoriamente en un soporte similar.

¹⁷⁵⁴ *IRPLu* 21.

Augusti tuvo un claro carácter de centro religioso a la vez que administrativo, al igual que sucede con *Lugdunum* en la Galia. Es posible que esto se deba, como han propuesto algunos autores, a que con anterioridad a la dominación romana este lugar tuviera connotaciones religiosas para los indígenas y que el poder romano se valiera de ello en su favor, dotándolo de un nuevo contenido¹⁷⁵⁵. Paulo Fabio Máximo no haría sino fortalecer esta condición con sus dedicaciones a Augusto, probablemente vinculadas a la erección de un altar.

En lo que respecta a la parte oriental del Noroeste, la *Asturia*, también tenemos noticia de la difusión entre su población del culto al emperador en una fecha temprana gracias, de nuevo, a una inscripción, en este caso de finales del principado de Augusto:

*Imp(eratori) Caesari Augusto divi f(ilio) / co(n)s(uli) XIII imp(eratori) XX pont(ifici) max(imo) / patr(i) patriae trib(unicia) pot(estate) XXXII / [[- - - / - - -]] sacrum*¹⁷⁵⁶

R. Syme reconstruyó la penúltima línea y el inicio de la última –que fueron borradas deliberadamente– revelando que el dedicante fue Cneo Calpurnio Pisón, el hombre que años más tarde fue acusado de haber urdido la muerte de Germánico en Oriente cuando fue gobernador de Siria. Tras su condena, su nombre fue sometido a la *damnatio memoriae* y borrado de todos los monumentos en los que aparecía¹⁷⁵⁷. Sin embargo, hasta su caída en desgracia, había sido –al igual que Paulo Fabio Máximo– un destacado senador de rango consular, amigo personal de Augusto y Tiberio¹⁷⁵⁸ y, por ello, el hombre idóneo para garantizar la fidelidad de los nuevos territorios e introducir entre su población el culto imperial. Pisón habría gobernado la Hispania Citerior en 9-10 d.C.¹⁷⁵⁹ y en el curso de una visita a *Asturia* consagró este altar a Augusto en el Cabo Torres, señalando con ello, al igual que Quirinal años antes, que el *princeps* había conseguido someter todo el orbe hasta sus límites físicos. La fijación de un límite del mundo o de una frontera entre el territorio del Imperio Romano y el de sus vecinos solía quedar señalada, simbólicamente, con la dedicación de un altar dedicado al emperador.

¹⁷⁵⁵ *IRPLu*, p. 8; Arias Vilas, *A romanización...* cit. p. 57 y “*Lucus Augusti* e o seu contorno...” cit. pp. 20-24; Gasperini, “*Dal luco sacro...*” cit.

¹⁷⁵⁶ *CIL* II, 2703. Anexo II: n° 18.

¹⁷⁵⁷ Syme, “*A Governor...*” cit. p. 737. Sobre su condena, la difusión y aplicación de ésta en las provincias véase el *Senatusconsultum de Cneo Pisone patre* hallado en la Bética.

¹⁷⁵⁸ *Idem*, pp. 738-739.

¹⁷⁵⁹ *Fasti Hispanienses* pp. 10-11.

Así sucede en el primer caso con de las aras erigidas por Quirinal y Pisón; y, en el segundo, con la dedicada a Augusto por Lucio Domicio Ahenobarbo en la ribera derecha del Elba (1 a.C.-1 d.C.)¹⁷⁶⁰. Asimismo, podemos incluir como ejemplo de culto a los emperadores en un lugar fronterizo un episodio sucedido en la parte oriental del imperio: reinando Calígula, el gobernador de Siria Lucio Vitelio desbarató con el rápido movimiento de sus tropas los inicios de una ofensiva parto, obligando al rey Artábano a solicitar entrar en la *amicitia* de Roma en una posición de desigualdad. El acuerdo se formalizó en una entrevista que sostuvieron el rey y el legado imperial en la ribera izquierda del Éufrates. Allí, para simbolizar su sometimiento a Roma, Artábano tuvo que ofrecer sacrificios a las imágenes del Divino Augusto y de Calígula¹⁷⁶¹.

Así pues, la inscripción bracarense, las tres lucenses y la del Cabo Torres, unidas a los testimonios literarios referidos a las aras sestianas, muestran que el culto imperial en el Noroeste fue implantado de forma inmediata y extensa tras su definitiva dominación en época augustea a través de la acción de los gobernadores, dentro de una política que buscaba asegurar la fidelidad de las poblaciones recién integradas¹⁷⁶². A tenor de los testimonios antedichos, se observa una evolución en la elección de los lugares en los que se realizaba el culto imperial. Cuando el Noroeste fue organizado como una provincia, la Transduriana, el santuario de las *arae Sestianae* sería el único centro dedicado al culto imperial. Diez años después de pasar a formar parte de la Hispania Citerior, las sedes conventuales de *Lucus* y *Bracara* comenzaron a ser usadas también como centros del culto imperial, papel en el que cobrarían cada vez más importancia durante el Principado¹⁷⁶³. Al igual que en Asia, el fiel Paulo Fabio Máximo desarrolló un programa de exaltación de la figura del emperador que en el recién asimilado Noroeste tenía también el objeto de potenciar los nuevos centros territoriales, sedes del sistema conventual provincial, y hacer que funcionaran como polos de agregación de la población indígena a ellos adscrita, fomentando su adhesión al imperio por medio de su vinculación a su cabeza, el emperador. Así como para la civilizada Asia

¹⁷⁶⁰ Dio LV, 10, 2. Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, p. 23, lo relaciona con el *Ara Vbiorum* y deduce que estaría dedicada también a *Dea Roma*.

¹⁷⁶¹ Dio 59, 27, 2-3; Suet. *Calig.* 14, 3, que dice que Artábano *Caesarumque imagines adoravit*. Véanse las connotaciones religiosas del verbo '*adorare*'.

¹⁷⁶² En contra de lo que pensaba Étienne, *Le culte impérial...*, cit. pp. 185-189, seguido hasta ahora por la historiografía.

¹⁷⁶³ J. Mangas, "El culto imperial en el noroeste de Hispania", en T. Nogales – J. González (eds.) *Culto Imperial: política y poder*, Roma, 2007, pp. 705-720, esp. pp. 709-711 y 713-714.

el comienzo de una nueva era se vio reflejado en un nuevo calendario que reorganizaba su ‘tiempo’, en el Noroeste, carente de una tradición cívica, ‘el nuevo comienzo’ vino representado por la potenciación de nuevos centros territoriales que, a través del culto imperial, se convirtieron en nuevos lugares simbólicos para su población.

Por otro lado, si a los *sacerdotes Romae et Augusti conuentus*... conocidos desde época flavia –gracias a una serie de inscripciones honoríficas presentes en pedestales de estatuas dedicadas a *flamines* provinciales y erigidas en el denominado ‘foro provincial’ de Tarraco– sumamos la nueva lectura de la de *Camalus* (CIL II, 2426), que la resitúa en época augustea, se puede decir que el uso que entonces se hizo de las sedes conventuales como focos del culto imperial en el Noroeste fue el germen del que nació el llamado ‘culto conventual’ –característica particular de la Hispania Citerior frente al resto de las occidentales–, que estuvo plenamente consolidado y extendido a toda la provincia en época flavia¹⁷⁶⁴. El sacerdocio conventual de Roma y Augusto –que desde los Flavios precedió, en el *cursus honorum* que seguían las élites provinciales occidentales, al flaminado provincial que lo culminaba– está atestiguado epigráficamente en cinco de los siete *conuentus* de la provincia: el Bracaraugustano, el Lucense, el Asturicense, el Cluniense y el Cartaginense¹⁷⁶⁵. Suponemos que también existiría en los dos *conuentus* restantes.

De manera similar a lo que aconteció en el santuario de las Tres Galias y en el del *Ara Vbiorum* germana, los primeros *sacerdotes* de este culto en el Noroeste –tanto en el santuario de las aras sestianas como en las sedes conventuales– fueron miembros de las élites indígenas locales, dentro del programa de fortalecimiento de la colaboración e integración de las mismas. En el caso lugdunense, el indígena era también ciudadano romano, el eduo Cayo Julio Vercondaridubno. En Germania, el sacerdote más antiguo que conocemos es el querusco Segismundo, hijo del pro-romano Segestes¹⁷⁶⁶, pero nada dicen las fuentes de su estatuto jurídico. El hecho de que su padre fuera aliado de los romanos no implica de forma automática que le hubiesen concedido la ciudadanía. En cambio, en lo que se refiere al culto conventual de la Hispania Citerior, el caso del bracarense *Camalus, Melgaeci filius*, indica que, al menos en el Noroeste, los primeros sacerdotes serían peregrinos. Aun así, como en la antedicha

¹⁷⁶⁴ Étienne, *Le culte impérial*... cit. pp. 177-178.

¹⁷⁶⁵ Étienne, *Le culte impérial*... cit. pp. 179-180.

¹⁷⁶⁶ Tac. *Ann.* I, 57.

inscripción *ILER* 1028, ésta revela también que los indígenas adscritos a *Bracara* habían asumido plenamente la nueva identidad de *bracaraugustani* derivada del encuadramiento administrativo y cívico romano, prueba de su romanización. En época flavia, como resultado de la concesión de *ius Latii* a toda Hispania efectuada por Vespasiano, todos los sacerdotes conventuales que conocemos son ciudadanos romanos¹⁷⁶⁷.

En cuanto al sacerdocio de las aras sestianas, gracias a una inscripción honorífica de *Tarraco* se deduce que su desempeño se mantuvo al menos hasta época de Septimio Severo, pues en ella se menciona que el *flamen* provincial honrado, natural del *conuentus Lucensis*, había sido con anterioridad (bajo Cómodo) *sacerdos Romae et Aug[usti (conuentus) Lu]censis Aris [Augustanis]*¹⁷⁶⁸. La reconstrucción del texto es problemática, pero ha sido admitida como la única solución posible por G. Alföldy en el nuevo *CIL* II, y con él pensamos que esas ‘aras augustanas’ no pueden ser otras que las sestianas. Por tanto, este aristócrata lucense, Sereniano, habría sido sacerdote de Roma y Augusto del *conuentus Lucensium* en el santuario de las *Arae Augustae/Augustanae*. Esta especificación se debe a que existiría un sacerdote dedicado a este culto en la propia sede conventual –seguramente en el recinto sagrado fundado por Fabio Máximo– y, por tanto, era necesario diferenciarlos. Así, este santuario nacido con vocación provincial en la Transduriana, tuvo una adscripción conventual a partir de la integración de esta provincia en la Hispania Citerior.

La elección del *sacerdos Romae et Augusti* del santuario de las aras sestianas, al menos durante la vida de la Transduriana, se realizaría en una reunión de los representantes de las principales comunidades de la provincia, presidida por el gobernador en el propio santuario, tal y como sucedió con la elección del antedicho Segismundo en Germania bajo el gobierno de P. Quintilio Varo¹⁷⁶⁹. Estas reuniones de los *principes* indígenas presididas o supervisadas por el gobernador provincial en el marco del culto imperial serán el germen de los *concilia* de las provincias occidentales, de los que hablaremos más adelante.

¹⁷⁶⁷ Étienne, *Le culte impérial...* cit. p. 182.

¹⁷⁶⁸ *CIL* II²/14, 1145.

¹⁷⁶⁹ Tac. *Ann.* I, 57.

Cuando Augusto falleció, el Senado decidió tributarle honores divinos e instituir un culto al *Diuus Augustus* en Roma. Poco después, en 15 d.C., la provincia de Hispania Citerior solicitó permiso para dedicar un templo al Divino Augusto en su capital, Tarraco, y cuenta Tácito que su ejemplo fue seguido por el resto de provincias¹⁷⁷⁰. En Hispania, la Lusitania no tardó en construir su propio templo en *Augusta Emerita*. Con ello se abría la segunda fase del desarrollo del culto al emperador en las provincias occidentales, caracterizado por la erección de templos en honor del Divino Augusto y la creación de la figura del *flamen* provincial –elegido anualmente entre la élite provincial en el *concilium prouinciae*– que se encargaba del culto¹⁷⁷¹. Como ha señalado Fishwick, este caso de la Citerior, junto con el de la Bética del 25 d.C. del que hablaremos en seguida, son los únicos dos ejemplos de inicio del culto al emperador en una provincia occidental por iniciativa de sus habitantes. Aun así, no hay que descartar que detrás de la decisión de los provinciales –seguramente ya reunidos en *concilium*– estuviese el propio gobernador, pues él sería el primero en conocer las decisiones senatoriales y a él competía proceder a su divulgación y ejecución en la provincia, como en el caso del *Senatus consultum de Cneo Pisone patre*. Por ello, para organizar el culto de acuerdo con el modelo de Roma, los provinciales estaban obligados a recurrir a su máximo representante en la provincia.

Gracias a dos series de sestercios y otra identificada con dupondios (según Villaronga) acuñadas en Tarraco bajo Tiberio en las que se conmemora este hecho sabemos que el templo (terminado bajo Claudio o Nerón) era octástilo y estaba dedicado al Divino Augusto¹⁷⁷². La primera serie de sestercios presenta en el anverso la cabeza radiada del emperador con la leyenda *DIVVS AVGVSTVS PATER*, y reproduce el templo en el reverso con la leyenda *C(olonia) V(rbs) T(riumphalis) T(arraco) AETERNITATIS AVGVSTAE*. En la segunda serie de sestercios, en cambio, el anverso está configurado por la leyenda *DEO AVGVSTO* y la imagen sedente de éste que porta una Victoria sobre un globo en la mano derecha y un cetro en la izquierda. Los dupondios siguen este último modelo con variantes (el Divino Augusto no está sentado sobre un trono sino sobre una silla curul y no tiene en la mano una Victoria)¹⁷⁷³. La

¹⁷⁷⁰ Tac. *Ann.* I, 78.

¹⁷⁷¹ Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, p. 41 ss.

¹⁷⁷² *RPC* I, pp. 102-104. Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, p. 43.

¹⁷⁷³ *RPC* I n° 219, 222 y 224, respectivamente. Los autores de *RPC* fechan la serie de dupondios en un momento posterior a las dos de sestercios, después del 22 d.C.

variación en el título dado a Augusto – *Diuus/Deus*– muestra que los provinciales eran ajenos a las sutilezas teológicas que tanto primaban en Roma a la hora de rendir honores divinos y culto a los emperadores fallecidos, al menos a inicios del Principado.

La ubicación de este templo dedicado al Divino Augusto ha sido una de las grandes incógnitas de la arqueología tarraconense, pero recientes excavaciones en la Parte Alta de la ciudad de Tarragona, en el lugar ocupado por la catedral, y la reinterpretación paralela de restos arquitectónicos ya conocidos ha comenzado a arrojar luz sobre ello. Se ha reconocido la existencia de dos series diferenciadas de elementos decorativos realizados en mármol de Luni-Carrara (capiteles, cornisas y frisos), una de época tiberiana, otra de la vespasiana, que se corresponderían con dos fases constructivas diferentes. La primera serie de elementos (en concreto el friso con roleos y motivos vegetales y los capiteles corintios) pertenecerían al templo dedicado al Divino Augusto bajo Tiberio; en cuanto a la segunda, habría que reinterpretarla como una reforma de la plaza del *témenos* que lo albergaría en época de Vespasiano¹⁷⁷⁴. Así, hoy los principales expertos en la urbanística de la *Tarraco* romana se inclinan por situar el templo del *Diuus Augustus* en el lugar donde se halla la catedral de la actual Tarragona¹⁷⁷⁵. A todo ello hay que sumar, además, los restos arquitectónicos (en concreto *clipei* con cabezas de Júpiter Amón) que muestran que el foro provincial de *Tarraco*, como el de *Emerita*, imitaron el modelo del Foro de Augusto de Roma¹⁷⁷⁶. Sabemos que cuando Adriano pasó el invierno en Tarraco durante uno de sus viajes por las provincias occidentales mandó restaurar el templo provincial del Divino

¹⁷⁷⁴ R. Mar – J. Ruiz de Arbulo – D. Vivó – A. J. Beltrán-Caballero, *Tarraco: Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana. Vol. I: De la Tarragona ibérica a la construcción del templo de Augusto*, Tarragona, 2012, pp. 348-349 y 352-359. Véase también: P. Pensabene – R. Mar, “Dos frisos marmóreos en la Acrópolis de Tarraco, el Templo de Augusto y el complejo provincial de culto imperial”, en J. Ruiz de Arbulo (ed.), *Simulacra Romae. Roma y las capitales provinciales del Occidente europeo*, Tarragona, 2004, pp. 72-86; P. Pensabene, “Nuovi ritrovamenti di fregi marmorei dall’acropoli di Tarraco e i complessi monumentali di culto imperiale”, en X. Lafón – G. Sauron (eds.) *Théorie et pratique de l’architecture romaine. Études offertes a Pierre Gros*, Aix-en-Provence, 2005, pp. 233-246. J. L. Jiménez Salvador, “Presentación: El conjunto provincial emeritense en el contexto del culto imperial en Hispania”, en P. Mateos Cruz (ed.), *El “Foro Provincial” de Augusta Emerita: Un conjunto monumental de culto imperial*, Madrid, 2006, pp. 11-27, esp. pp. 14-15;

¹⁷⁷⁵ Mar – Ruiz de Arbulo et alii, *Tarraco...* cit., pp. 362-370.

¹⁷⁷⁶ X. Aquilué, “Arquitectura oficial” en Dupré (ed.), *Las capitales provinciales de Hispania* 3 cit. pp. 41-53; esp. pp. 49-50; J. L. Jiménez Salvador, “Presentación: El conjunto provincial emeritense en el contexto del culto imperial en Hispania”, en P. Mateos Cruz (ed.), *El “Foro Provincial” de Augusta Emerita: Un conjunto monumental de culto imperial*, Madrid, 2006, pp. 11-27, esp. p. 14-15; Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, pp. 50-51.

Augusto¹⁷⁷⁷, pero a tenor de los antedichos restos conservados, parece que estos trabajos no supusieron una modificación arquitectónica y decorativa notoria, sino un adecentamiento del monumento.

En Lusitania el culto al Divino Augusto comenzó también en época de Tiberio, siguiendo la estela de la Citerior y, al igual que en *Tarraco*, de nuevo una serie de monedas de bronce (sestercios y dupondios) documentan la existencia de un templo dedicado al *Diuus Augustus*, en este caso tetrástilo. Coinciden también con la primera serie de sestercios tarraconenses en sus leyendas: *DIVVS AVGVSTVS PATER* en el anverso, acompañando a su cabeza radiada, y *AETERNITATIS AVGVSTAE* – más *C(olonia) A(ugusta) E(merita)*– en el reverso, en el que se halla la representación del templo¹⁷⁷⁸. Asimismo, este templo vuelve a aparecer, junto con la antedicha leyenda, en el reverso de ases que en el anverso presentan la cabeza laureada del emperador Tiberio y la leyenda *Ti(berius) CAESAR AVG(ugustus) PON(tifex) MAX(imus) IMP(erator)*¹⁷⁷⁹.

Las importantes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la actual Mérida han identificado unos restos como el probable templo dedicado al Divino Augusto, que presidiría el llamado ‘foro provincial’ de la capital de la Lusitania. Este complejo monumental estaría delimitado por un pórtico, cuya puerta de acceso estaba situada en el lado sur (el llamado “Arco de Trajano”) y presentaba tres vanos, siguiendo el modelo de los arcos con apertura central y accesos laterales secundarios. En este arco desembocaría el *kardo maximus* de la colonia, dirigiendo, así, la vista del caminante al templo del Divino Augusto, que se vería a través del vano central de la puerta de entrada al ‘foro provincial’ dada su posición dominante en el centro del recinto¹⁷⁸⁰. El templo se alzaba sobre un podio, era hexástilo y de “*cella barlonga*”; es decir, su *cella* estaba dispuesta de forma transversal en relación con el *pronaos*, de menor anchura. El modelo de este templo fue el de la Concordia de Roma, muy vinculado con Tiberio y la ideología imperial: había sido dedicado a la *Concordia Augusta* por el hijastro de Augusto –en su nombre y en el de su hermano, el malogrado Druso– el 16 de enero del 10 d.C., aniversario de la concesión a Octaviano de los diversos honores con los que el

¹⁷⁷⁷ SHA, *Hadrianus* 12, 3: *Post haec Hispania petit et Tarracone hiemavit, ubi sumptu suo aedem Augusti restituit.*

¹⁷⁷⁸ RPC I, n° 29.

¹⁷⁷⁹ RPC I, n° 47 y 48.

¹⁷⁸⁰ P. Mateos Cruz, “El culto imperial en el llamado ‘foro provincial’ de *Augusta Emerita*”, en *Idem* (ed.), *El “foro provincial”*... cit. pp. 315-354, esp. pp. 328-336 y pp. 251-276.

senado había confirmado su posición de *princeps* en 27 a.C. (entre ellos el apelativo de Augusto)¹⁷⁸¹.

La condición de hexástilo de este templo hallado en la calle Holguín de Mérida entra en contradicción con el testimonio numismático que lo presenta como tetrástilo, pero, a diferencia de quienes a causa de esta divergencia refutan la vinculación entre esos restos y la imagen de la moneda¹⁷⁸², nosotros nos inclinamos por entender que se trata del mismo templo. Los templos representados en las monedas no siempre eran reflejados fielmente, sino de manera esquemática o simbólica, y a veces se trataba del proyecto del mismo que, *a posteriori*, sufría modificaciones¹⁷⁸³. En verdad, el templo de la moneda emeritense, a tenor de las leyendas que acompañan a su imagen en el anverso y el reverso, no puede ser otro que el del *Diuus Augustus*.

En época julio-claudia *Augusta Emerita* habría erigido también el templo al culto imperial propio de la colonia. Éste se correspondería con el llamado “templo de Diana”, hexástilo, cuyos restos aún se yerguen en el centro de la actual Mérida¹⁷⁸⁴. La relación de este templo con el culto al emperador se debe a diferentes testimonios aparecidos en sus inmediaciones: un epígrafe fragmentario que menciona a un *flamen* o seviro augustal, una cabeza de *Genius* del emperador, la efigie del *Genius Senatus* y la estatua sedente de un emperador divinizado indeterminado. La datación de los restos arquitectónicos del propio edificio se ha situado en época julio-claudia e, incluso, augustea¹⁷⁸⁵.

¹⁷⁸¹ Vid: *Fasti Praenestini* (Ins. It. XIII, 2, 115) y *Fasti Verulani* (Ins. It. XIII, 2, 161). J. C. Saquete Chamizo, “L. Fulcinus Trio, Tiberio y el gran templo de culto imperial”, *Epigraphica* 67, 2005, p. 279-308, esp. p. 296, quien también señala que este templo es el único que aparece en las acuñaciones de Tiberio.

¹⁷⁸² P. Mateos Cruz, “El templo: la traslación de los modelos metropolitanos a la capital de la provincia lusitana”, en *Idem* (ed.), *El “foro provincial”...* cit. pp. 251-276.

¹⁷⁸³ P. V. Hill, *The Monuments of Ancient Rome as Coin Types*, Londres, 1989, pp. 6-8; en pp. 9-39 se exponen los tipos monetales en los que aparecen templos y altares de la *Vrbs*, señalándose las variaciones en su representación. Este autor es seguido por Saquete Chamizo, “L. Fulcinus Trio...”, cit. p. 295 cuando defiende la identificación del templo tetrástilo con el del culto imperial provincial emeritense.

¹⁷⁸⁴ R. Étienne, “Du nouveau sur les débuts du culte impérial municipal dans la péninsule Ibérique”, en *Itinera hispanica: Recueil d'articles de Robert Étienne*, Burdeos, 2006, pp. 93-107, esp. p. 97, propuso que se habría dedicado poco después de la fundación de la colonia, en concreto en 16-15 a.C., relacionándolo con la creación de la provincia Lusitania.

¹⁷⁸⁵ P. Mateos – F. Palma, “Arquitectura oficial”, en X. Dupré (ed.), *Las capitales provinciales de Hispania 2. Mérida: Colonia Augusta Emerita*, Roma, 2004, pp. 41-53, esp. pp. 43-44.

A esto hay que sumar que, frente a la Citerior –en la que desconocemos *flamines* provinciales hasta época flavia¹⁷⁸⁶– en la Lusitania el registro epigráfico nos ha transmitido la existencia de un *flamen Augustalis*, Lucio Papirio de Conímbriga, seguramente de época tiberiana –pues su título es exactamente igual al de Germánico (primer *flamen* del *Diuus Augustus* en Roma)–, y de dos *flamines Diui Augusti et Diuae Augustae* de época de Claudio, uno honrado en la capital provincial, *Augusta Emerita*, y el otro en la sede conventual de *Scallabis*, confirmando el arraigo y la organización del culto al *Diuus* y, luego, también a la *Diua* en esta provincia¹⁷⁸⁷.

Las fuentes guardan silencio en tono a la implicación de los gobernadores de la Hispania Citerior y la Lusitania en todo este proceso de implantación del culto al *Diuus Augustus* en las capitales de sus provincias, pero existen razones fundadas para pensar que habrían de estar involucrados en estas cuestiones. En primer lugar, a pesar de que en el caso tarraconense la iniciativa partió de los provinciales (algo excepcional en Occidente, como ya se ha señalado), es impensable que los gobernadores fuesen ajenos a la puesta en marcha de los trabajos de construcción que siguieron al *placet* del emperador. Como vimos en la Segunda Parte, la supervisión de las obras públicas era uno de los principales cometidos de los gobernadores, y Ulpiano, en su tratado *de officio proconsulis*, señala claramente que debían prestar atención especialmente a la erección y conservación de los templos de su provincia¹⁷⁸⁸. Así, por ejemplo, la responsabilidad de supervisar los trabajos del templo dedicado a Tiberio, Livia y el Senado en Esmirna por parte de la provincia de Asia recayó en su procónsul, al cual se le asignó un legado más para ayudarle en esta tarea¹⁷⁸⁹. Asimismo, sabemos que Plinio el Joven se ocupó de cuestiones relacionadas con los templos o lugares consagrados en las ciudades de Bitinia-Ponto. En concreto, escribió a Trajano acerca de la necesidad de trasladar el templo de la *Magna Mater* de Nicomedia a otro lugar dentro de la ciudad

¹⁷⁸⁶ G. Alföldy, *Flamines provinciae Hispaniae citerioris*, Madrid, 1973, p. 61; Fishwick, *The Imperial Cult* III/2, pp. 73 y 104.

¹⁷⁸⁷ *CIL* II, 41* = *HEp* 12, 2002, 631 (Conimbriga); *CIL* II, 473 (*Augusta Emerita*); *ILER* 5540 (*Scallabis*). Dedicaciones votivas oficiales a Augusto y Livia divinizados en *Augusta Emerita*: *CIIAE* 20-21. Sobre el segundo epígrafe citado véase la reconstrucción de J. Edmondson, “Two Dedications to *Divus Augustus* and *Diva Augusta* from *Augusta Emerita* and the Early Development of the Imperial Cult in Lusitania re-examined”, *Madridener Mitteilungen* 38, 1997, pp. 89-105. Cf. también Fishwick, *The Imperial Cult* III/2, p. 151.

¹⁷⁸⁸ Ulp. 2 *de off. procos.* (*Dig.* I, 16, 7, 1).

¹⁷⁸⁹ *Tac. Ann.* IV, 56.

(dado que las obras del nuevo *forum adiectum* lo habían dejado en un nivel inferior)¹⁷⁹⁰, y para pedirle consejo acerca de si podía usar para la construcción de unos baños en Prusa un solar en el que se hallaba una casa en ruinas que antiguamente había sido donada por un tal Claudio Polyaneo al emperador Claudio con la condición de que en el peristilo se erigiese un templete en honor del *princeps* y que el resto se alquilase y sus beneficios fuesen para la ciudad¹⁷⁹¹.

Por otra parte, el hecho de que los gobernadores de la Hispania Citerior y la Lusitania fuesen *legati Augusti pro praetore* refuerza su posición de ejecutores directos de las decisiones imperiales, pues actuaban bajo los auspicios de éste y en su nombre. A diferencia de los procónsules, los legados imperiales no sólo eran la máxima autoridad romana en la provincia, sino también representantes directos del emperador en ella. Por tanto, su aprobación de los trabajos de construcción del templo y, sobre todo, de los ritos vinculados a su inauguración, eran fundamentales, pues al gozar de los auspicios del *princeps* estaban actuando en su lugar, como si él mismo estuviera presente. Además, no existía en estas provincias ningún magistrado o promagistrado con los poderes, autoridad y experiencia suficientes para supervisar y ejecutar la primera consagración de un templo y de un culto nuevos y según el modelo recién establecido en Roma. Los legados de la Citerior y la Lusitania habrían recibido instrucciones directas del emperador acerca de cómo se debía proceder a la inauguración y consagración del espacio sagrado y de cómo se habría de organizar el nuevo culto.

Finalmente, es razonable deducir que se produjo una continuidad en la implicación de los gobernadores en la difusión del culto imperial, siguiendo la conducta establecida por sus predecesores en el Noroeste peninsular. Si en vida de Augusto la responsabilidad de implantar el culto a Roma y Augusto en los territorios recién asimilados recayó en sus legados, resulta natural que Tiberio siguiera confiando en los suyos la supervisión de la erección de templos al Divino Augusto.

Gracias a la labor de G. Alföldy podemos conocer a algunos de los gobernadores de la Citerior y la Lusitania que sin duda supervisaron la construcción de estos templos y la organización del culto provincial al *Diuus Augustus* en sus primeros pasos. En ambas provincias desconocemos el o los legados que las gobernaron en los primeros

¹⁷⁹⁰ Plin. *Ep.* X, 49-50.

¹⁷⁹¹ *Ep.* X, 70-71. Trajano quiere saber si existió o no el templo dedicado a Claudio, pues de ser cierto se trataría de un lugar aún sagrado que debía ser respetado.

años del principado de Tiberio. El primer gobernador ‘tiberiano’ conocido de la Lusitania es Lucio Fulcinio Trío, cuyo mandato se extendería probablemente desde el 21 al 31 d.C.¹⁷⁹², es decir, la década crucial en la implantación del nuevo culto. No existe testimonio alguno que pruebe su labor en esta cuestión, pero, como ha mostrado Saquete Chamizo, su participación parece incuestionable no sólo porque entraría dentro de las funciones propias de un gobernador, sino por la fidelidad de Fulcinio Trío al propio emperador¹⁷⁹³. La puesta en marcha del templo y culto al *Diuus Augustus* en *Emerita* finalizaría bajo el gobierno de su sucesor, Cayo Umidio Cuadrato, en 31-39.

Asimismo, la influencia del gobernador en la difusión y organización del culto imperial no sólo se reflejó en la capital de su provincia y las sedes conventuales, sino que afectó también a las comunidades peregrinas, como se desprende de la mención al gobernador que se hace en la inscripción en la que se consigna que la *ciuitas Ammaiensis* (São Salvador de Aramenha, Marvão, Portugal), adscrita al *conuentus Pacensis*, realizó el voto anual preceptivo en honor del emperador Claudio:

*Tib(erio) Claudio / Caesari Aug(usto) / Germanico imp(eratori) III / pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) / IIII co(n)s(uli) III desig(nato) IIII / ciuitas · Ammaiensis / ex uoto annuo / L(ucio) Caluentio Vetere / Carminio leg(ato) / Tib(eri) Claud(i) Caesaris Aug(usti) / Proculo Pisiri f(ilio) / Omuncione Cilai f(ilio)*¹⁷⁹⁴.

El hecho de que se hable de un *uotum annuum* es muy relevante, pues indica periodicidad y, por tanto, que se llevaba realizando desde hacía tiempo de manera habitual. Es decir, que este ritual estaba asentado en el seno de una comunidad

¹⁷⁹² *Fasti Hispanienses* pp. 135-136, aunque Alföldy mantiene sus dudas acerca de la fecha de inicio de su mandato. De hecho, los autores que con anterioridad a él trabajaron acerca de este gobernador la retrasaron algunos años: S. Lambrino “L. Fulcinus Trio, gouverneur de Lusitanie, sur une *tabula patronatus* de Juromenha”, *O Arqueólogo Português*, nova série 1, 1951, pp. 151-169, esp. pp. 160-163 al 27/28 y A. Balil, “Los legados de la Lusitania”, *Conimbriga* 4, 1965, pp. 43-57, esp. p. 45, al 26/27. El inicio de su gobierno de Lusitania depende de la interpretación de Tac. *Ann.* II, 32, en el que se dice que Tiberio concedió la pretura extraordinaria a aquéllos de los cuatro acusadores de Libón que eran senadores. Fulcinio Trío era uno de ellos, pero para Lambrino era por entonces un *eques*; para Alföldy, en cambio era ya senador. Balil no se decanta, pero parece aceptar que fue cuestor en torno al 21. Todos coinciden en que su gobierno de Lusitania finalizó en 31 d.C., año en que aparece como *consul designatus* (*CIL* VI, 93).

¹⁷⁹³ Véase su actividad como delator y los favores con que lo distinguió Tiberio (Tac. *Ann.* II, 27 y 32; III, 191; Dio LVIII, 25, 2); Saquete Chamizo, “L. Fulcinus Trio...” cit. pp. 280-282 y 300-308; *Idem* – J. M. Álvarez Martínez, “Culto imperial en *Augusta Emerita*: Complejos monumentales y documentos epigráficos”, en Nogales – González (eds.) *Culto Imperial...* cit. pp. 395-414, esp. pp. 407-408.

¹⁷⁹⁴ *IRCP* 615. Anexo II: n° 42.

peregrina. Es muy interesante, además, el uso de la fórmula ‘*ex uoto*’ junto con el nombre del emperador, similar a las inscripciones votivas dedicadas a divinidades. Con ello se establece un tratamiento ambiguo en la consideración de la naturaleza del emperador vivo por parte de la *ciuitas Ammaiensis*.

La alusión al gobernador en ablativo, junto con los representantes de la comunidad, con onóastica indígena, revela, a nuestro juicio, que supervisó de algún modo que este voto se llevó a cabo. Es posible, como piensa D’Encarnaçao, que Carminio presidiese en persona la realización del ritual¹⁷⁹⁵, lo cual se vería favorecido por la buenas comunicaciones que unían la *ciuitas* con *Emerita* o *Scallabis*¹⁷⁹⁶. Como ha señalado Saquete Chamizo, las posibilidades que los *Ammaienses* y los antedichos *Aritienses* tenían de acceder al gobernador de Lusitania eran altas, dado que pasaba muy cerca de sus *ciuitates* cuando se dirigía a la sede conventual de *Scallabis* desde la capital provincial¹⁷⁹⁷. Sin embargo, es imposible que hubiera podido asistir a todas las comunidades cada vez que realizasen votos en honor del emperador, pues carecería de tiempo para ello. Por tanto, hemos de entender que en el caso de *Ammaia*, su presencia se derivó de una petición expresa de los representantes de esta comunidad, que habrían acudido al encuentro de Carminio a la cercana capital provincial. Las relaciones de las élites locales *Ammaienses* y el gobernador se vieron favorecidas por los intereses que tenía el poder imperial en las minas del territorio de esta comunidad y su cercanía a *Emerita*, lo que propiciaría probablemente algunas visitas cortas del gobernador. En este caso, se hizo coincidir la visita de Carminio con la realización del voto, lo cual sin duda representó un honor para la comunidad y por ello habrían realizado excepcionalmente esta inscripción en mármol, con el fin de conmemorar este hecho. Así, este epígrafe, junto con el *iusiurandum Aritiensium* (que analizaremos más adelante), muestra que bajo Calígula y Claudio se produjeron importantes manifestaciones de fidelidad hacia el poder imperial –revestidas de un carácter sagrado– en la Lusitania; si no en todas sus comunidades, al menos en aquéllas situadas en áreas estratégicas desde un punto de vista económico que estaban situadas a lo largo del trazado de las principales vías de comunicación terrestre. Y en esos rituales tuvieron un importante papel los gobernadores.

¹⁷⁹⁵ *Idem*, p. 677.

¹⁷⁹⁶ De hecho, resulta bastante extraño que la *ciuitas Ammaiensis* estuviese adscrita al *conuentus Pacensis*. De las tres sedes conventuales, la de *Pax Iulia* era precisamente la que era más distante.

¹⁷⁹⁷ Saquete Chamizo, “El gobernador provincial...” cit. pp. 88-89

En lo que respecta a la identificación de los gobernadores de la Citerior que intervinieron en la organización del culto provincial en *Tarraco*, en cambio, apenas podemos decir algo. Entre los años 23 y 33 d.C. el gobierno de la provincia estuvo asignado a Lucio Arruncio, el cual, sin embargo, no llegó a abandonar Roma por decisión de Tiberio, que temía acrecentar el prestigio del que este hombre gozaba gracias a su alcurnia¹⁷⁹⁸. Las fuentes no dicen quién ocupó su lugar al frente de Hispania, excepto en un caso recogido por Tácito: Lucio Calpurnio Pisón, que fue asesinado en 25 d.C. por un terrestino a causa de la excesiva dureza que había empleado en la recaudación de impuestos¹⁷⁹⁹. En el capítulo anterior ya expusimos las razones por las que pensamos que Pisón actuó en calidad de gobernador de la Citerior. Si esta hipótesis es correcta, no cabe duda de que Pisón supervisó los trabajos de construcción del templo y el inicio del funcionamiento del flaminado dedicado al Divino Augusto en la capital de su provincia. De hecho, el carácter extremadamente severo y expeditivo que le atribuye Tácito lleva a pensar que habría controlado de cerca y de manera personalista todo lo relacionado con el culto imperial. Además, formaba parte de una familia estrechamente vinculada con Augusto y Tiberio, los *Calpurnii Pisones*, y ya su tío Cneo había erigido el ara del Cabo Torres durante su gobierno de la Citerior. Por todo ello, Lucio Pisón era la persona idónea para dirigir los primeros pasos del culto al *Diuus Augustus*. La caída en desgracia de su tío no afectó a la carrera de su padre¹⁸⁰⁰ ni a la suya¹⁸⁰¹.

Por su parte, la Bética –en la que carecemos de cualquier indicio de culto provincial al *Diuus Augustus*– solicitó en 25 d.C. dedicar un templo a Tiberio, Livia y el Senado, al igual que lo había hecho la provincia de Asia dos años antes en agradecimiento por la condena de un procónsul y un procurador que habían cometido

¹⁷⁹⁸ Tac. *Hist.* II, 65, 2 y *Ann.* I, 80.

¹⁷⁹⁹ *Ann.* IV, 45.

¹⁸⁰⁰ Lucio Calpurnio Pisón padre, cónsul ordinario en 15 a.C., llegó a ser *Praefectus Vrbi* con Augusto y Tiberio, del que era amigo íntimo de Tiberio (Suet. *Tib.* 42, 1). Según Séneca, *Ep. ad Luc.* 83,14-15, cuando Tiberio se retiró a Campania en 26 d.C. le entregó unas instrucciones secretas para que vigilara determinados asuntos de la *Vrbs* que preocupaban al emperador: *L. Piso, urbis custos, ebrius ex quo semel factus est fuit. Maiorem noctis partem in convivio exigebat; usque in horam sextam fere dormiebat: hoc eius erat matutinum. Officium tamen suum, quo tutela urbis continebatur, diligentissime administravit. Huic et diuus Augustus dedit secreta mandata, cum illum praeponeret Thraciae, quam perdomuit, et Tiberius proficiscens in Campaniam, cum multa in urbe et suspecta relinqueret et inuisa.*

¹⁸⁰¹ Para conocer en detalle las carreras de ambos: *PIR*² C 289, pp. 61-67 (el padre, de carrera brillantísima) y n° 292, p. 68-69 (el hijo).

abusos en ella durante sus mandatos¹⁸⁰². Paradójicamente, Tiberio, que había aceptado el honor ofrecido por los asiáticos, rechazó la petición de la Bética. Las razones que lo llevaron a actuar con los béticos de diversa forma no dependen de que la Bética sea una provincia proconsular – frente a la Citerior y Lusitania, imperiales –, pues Asia también lo era. Tiberio solía guiarse en todo por el ejemplo de Augusto, y probablemente le pareció exagerado que se le dedicara a él, a su madre y al Senado un templo sin ir acompañados de la *Dea Roma*. En cambio, en Asia existía una larga tradición no sólo de divinización de reyes, sino de dedicación de templos a los propios procónsules romanos que la gobernaron a finales de la República¹⁸⁰³; práctica que el precavido Augusto prohibió¹⁸⁰⁴. Todo ello pesó en el ánimo de Tiberio, que, además, quería mantener una imagen de moderación que una posible avalancha de peticiones de ese tipo podía comprometer. Era un mortal y lo correcto era que sólo se decidiese su divinización una vez que hubiese muerto¹⁸⁰⁵. La misma moderación mostró en su respuesta a la ciudad de Gitio, en el Peloponeso, a la que animó a rendir culto al Divino Augusto, exhortando a sus ciudadanos que a él mismo sólo le tributaran los honores adecuados para un mortal¹⁸⁰⁶. Así pues, el inicio de la organización del culto imperial provincial en la Bética hubo de esperar a época flavia¹⁸⁰⁷. El primer testimonio conocido del culto imperial provincial se corresponde con el de su *flamen* más antiguo: se trata de una inscripción honorífica dedicada a éste en su ciudad natal, *Mellaria* (Fuente Obejuna, Córdoba), en el 98 d.C.¹⁸⁰⁸

En efecto, la dinastía Flavia dio un nuevo impulso al culto imperial y le imprimió una serie de características nuevas. Fishwick ha resumido excelentemente estas reformas en cuatro puntos fundamentales: 1) Los Flavios instauraron el culto imperial en las provincias antiguas y más romanizadas de Occidente, la Galia Narbonense, el África Proconsular y la Hispania Ulterior Bética. 2) En el culto, se situó

¹⁸⁰² Tac. *Ann.* IV, 37 (Bética) y 15, 3 (Asia).

¹⁸⁰³ Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 26 y 2, 14.

¹⁸⁰⁴ Suet. *Diu. Aug.* 52.

¹⁸⁰⁵ Tac. *Ann.* IV, 38.

¹⁸⁰⁶ SEG 11, 922, ll. 16-20. También han señalado la moderación de Tiberio Lozano – Alvar, “El culto imperial...” cit. p. 431.

¹⁸⁰⁷ J. González, “El origen del Culto Imperial en la Bética según la documentación epigráfica”, en Nogales – González (eds.) *Culto Imperial...* cit. pp. 173-189, esp. pp. 175.

¹⁸⁰⁸ CIL II²/7, 799; S. Panzram, “Los *flamines provinciae* de la *Baetica*: autorrepresentación y culto imperial”, *AEspA* 76, 2003, pp. 121-130, esp. pp. 122.

al emperador vivo junto a los *Diui*. 3) Se sancionó una ley reguladora de la posición, elección y competencias de los *flamines prouinciae*, cuyo único ejemplo conocido pertenece a la Narbonense. Las cláusulas de esta ley se habrían aplicado en todas las provincias, con adaptaciones locales, provocando modificaciones del culto en aquéllas en las que se había implantado con anterioridad; esto es, la Hispania Citerior, la Lusitania y las Tres Galias. Así, en la Hispania Citerior, por ejemplo, el emperador vivo recibirá culto junto a los *Diui* y Roma. 4) Hay, por tanto, una tendencia hacia un modelo estándar en todo Occidente que, sin embargo, tiene su excepción en las *Arae Flaviae* de los *Agri decumates* del sur de Germania, que siguen la estela de las aras consagradas a Augusto en los territorios recién conquistados o fronterizos. En ellas se da culto a Vespasiano y sus dos hijos, Tito y Domiciano¹⁸⁰⁹.

Toda esta reorganización del culto imperial estuvo motivada por la necesidad que tenía la nueva dinastía de dotarse de legitimidad, dado que hasta entonces –dejando a un lado los efímeros reinados de Galba, Otón y Vitelio en un contexto de guerra civil– el poder imperial había estado vinculado a una única *gens*, la Julia¹⁸¹⁰. La posibilidad de optar a la púrpura imperial sólo estuvo al alcance de otras familias tras la muerte de Nerón, último miembro de la dinastía fundada por Augusto al haber eliminado a los restantes descendientes de éste por miedo a tener rivales. Para paliar este déficit y la imagen de advenedizos, Vespasiano y sus hijos desarrollaron un importante programa ideológico que los vinculaba directamente con el modelo de los emperadores precedentes no condenados por el Senado (es decir, Augusto, Tiberio, Claudio), presentándose como los continuadores de su obra. Este programa penetró en todos los ámbitos vinculados al poder, desde el jurídico –expresado en la *lex de imperio Vespasiani*¹⁸¹¹– hasta el urbanístico e iconográfico –véase el *Templum Pacis*¹⁸¹², que hacían de Vespasiano y sus hijos los artífices del fin de la guerra y el comienzo de una nueva *pax*, al igual que hiciera Augusto cien años antes. En ese empeño de los Flavios

¹⁸⁰⁹ Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, pp. 95-98.

¹⁸¹⁰ La dinastía es conocida hoy como Julio-Claudia, pero sus emperadores debían su legitimidad “sanguínea” a la *gens Iulia*.

¹⁸¹¹ Sobre este importante documento se ha escrito mucho. Remitimos a la última obra colectiva que la ha tratado: L. Capogrossi-Colognesi – E. Tassi Scandone (cura), *La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavii* (*Atti Conv. 20-22 nov. 2008*), Roma, 2009, y, dentro de ella, al análisis jurídico de D. Mantovani, “*Lex «regia» de imperio Vespasiani, il vagum imperium e la legge costante*”, pp. 125-156.

¹⁸¹² Para una descripción detallada de este complejo arqueológico: F. Coarelli, *Roma. Guide Archeologiche Laterza*, Roma/Bari, 2008, p.

por vincularse con el modelo augusteo y revestir su autoridad de un halo divino el culto imperial jugó un papel fundamental.

Por todo ello, la planificación del culto imperial provincial estuvo totalmente dirigida desde Roma, siendo la plasmación más evidente de esto la *lex de flamonio prouvinciae Galliae Narbonensis*, recogida en un bronce en estado fragmentario hallado en la capital provincial, *Narbo Martius*, fechado a inicios del principado de Vespasiano (ca. 70-72 d.C.)¹⁸¹³. Gracias a ella podemos saber que tanto los honores como las funciones del *flamen* y la *flaminica* elegidos anualmente por el *concilium prouvinciae* para encargarse del culto al emperador estaban regulados al detalle.

Fishwick ha demostrado que varias de las cláusulas de esta ley fueron aplicadas en otras provincias occidentales. Así, por ejemplo, por las mismas fechas en que se promulgó la *lex de flamonio* narbonense, comenzaron a erigirse estatuas en honor de los *flamines* salientes en las capitales de África Proconsular e Hispania Citerior –Cartago y Tarraco, respectivamente–, cumpliendo precisamente con una de las disposiciones contenidas en la antedicha ley: Cada año, el nuevo *flamen* había de proponer en el *concilium prouvinciae* que se votase la concesión de tal honor a su predecesor¹⁸¹⁴. En África Proconsular y la Citerior esta costumbre se mantendrá de manera ininterrumpida hasta época severa¹⁸¹⁵.

De las disposiciones que conforman lo que se ha conservado de la *lex de flamonio*, nos interesa particularmente la información que aporta en torno a la función del gobernador provincial en el funcionamiento del culto. En concreto, una cláusula prescribía que el gobernador debía controlar lo que se gastaba de los fondos públicos provinciales de que disponía el concilio y que eran manejados por el *flamen* anual en la dedicación de estatuas e imágenes al emperador¹⁸¹⁶. Y contamos con un ejemplo de su aplicación en la Lusitania y de la intervención del gobernador en ello.

Se trata de una inscripción perteneciente a un pequeño pedestal hallado en Mérida que recuerda que la provincia –es decir, su *concilium*– dedicó un objeto de oro

¹⁸¹³ CIL XII, 6038 = ILS 6964.

¹⁸¹⁴ ll. 11-13. Usamos la edición de Williamson, “A Roman Law...”, cit.

¹⁸¹⁵ Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, pp. 106-107.

¹⁸¹⁶ ll. 26-28.

en honor de Tito –identificado con una estatuilla o un busto suyo– en la capital, *Augusta Emerita*, en el 77 d.C.¹⁸¹⁷:

*T(ito) Caesari Aug(usti) f(ilio) / Vespasiano pontif(ici) / imp(eratori) XII trib(unicia) pote(state) VII / co(n)s(uli) VI / prouincia Lusitania / C(aio) Arruntio Catellio / Celere leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) / L(ucio) Iunio Latrone / Conimbrigense flamine / prouvinciae Lusitaniae / ex auri p(ondo) V*¹⁸¹⁸

Tras la mención en dativo del emperador aparecen citados sucesivamente en ablativo el gobernador de la Lusitania, Cayo Arruncio Catelio Céler, y el *flamen* provincial. A nuestro juicio, esta circunstancia no se puede atribuir solamente a una mera forma de fechar cronológicamente la dedicación, sino que indica inequívocamente que ambos personajes estuvieron presentes en la sesión del concilio provincial que decidió dedicar el busto o estatuilla que representaría a Tito¹⁸¹⁹. Según Fishwick, esta *imago* se llevaría en procesión durante los rituales del culto imperial provincial y es una prueba más de la nueva fase que entonces se abrió en su evolución, introduciéndose en él a los emperadores vivos –en este caso Vespasiano y Tito, que había sido asociado al trono– junto a los *Diui*¹⁸²⁰. La mención del peso de la imagen de Tito en el epígrafe (cinco libras de oro) no es inusual¹⁸²¹, pero en este caso estaría relacionado con la antedicha cláusula de la *lex de flamonio* y la rigurosa supervisión del gasto en estos objetos. El *flamen* provincial presidía el *concilium* como máxima autoridad del culto imperial de la provincia, pero el gobernador estaba presente y debía dar su visto bueno a estos gastos¹⁸²².

Esto entronca con la función de supervisión de las finanzas públicas que hemos tratado en la Segunda Parte, mostrando, una vez más, el importante papel regulador de la estabilidad económica de la provincia que tenía el gobernador. En este caso, había de

¹⁸¹⁷ Para la cronología de su gobierno: *Fasti Hispanienses* pp. 139-140 y Eck, “Jahres- und Provinzialfasten... (1)” cit. pp. 296-299. Sobre el objeto en cuestión: D. Fishwick, “A Gold Bust of Titus at Emerita” *AJAH* 6/1, 1981, pp. 89-93, esp. p. 89; *CIIAE* p. 60.

¹⁸¹⁸ *CIIAE* 24 = *CIL* II, 5264. Anexo II: n° 38.

¹⁸¹⁹ Fishwick, “A Gold Bust...” cit. pp. 89-92.

¹⁸²⁰ Fishwick, “A Gold Bust...” cit. p. 92; *The Imperial Cult* III/1, pp. 166-167; y “Imperial Processions at *Augusta Emerita*”, en Nogales – González (eds.) *Culto Imperial...* cit. pp. 30-47, esp. pp. 32-33

¹⁸²¹ Véase, en la propia Lusitania, la estatua de diez libras de oro que el *ordo decurionum* de *Norba Caesarina* dedicó a Septimio Severo: *CIL* II, 693; Saquete Chamizo, *Las élites...* cit. p. 109.

¹⁸²² Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, p. 167.

ocuparse de revisar las cuentas no de una comunidad, sino del *concilium* en el que estaban representadas todas ellas. La ley es muy restrictiva en su estipulación de qué capítulos de gasto relacionados con el culto (las imágenes del emperador) debe controlar el gobernador y, a primera vista, resulta extraño que no requiera, además, que éste supervise los gastos de las celebraciones vinculadas al culto, que tanta centralidad tenían en una religión como la romana que expresaba su teología a través del ritual y del ‘hacer’¹⁸²³. Pero hay que tener en cuenta que se ha conservado sólo una pequeña parte de la ley. La explicación de que la ley especifique tanto acerca de esta cuestión se debería a la previsión de que se produjera un aumento de gasto en la erección de estatuas e imágenes en honor del nuevo emperador como demostraciones de fidelidad hacia su persona. Vespasiano prefirió controlar estas muestras de adulación con el fin, por un lado, de evitar un endeudamiento de las provincias y, por otro, de mantener su imagen de *ciuilis princeps* frente al mal ejemplo del déspota Nerón¹⁸²⁴. Los mismos motivos llevarán a Trajano a aprobar la idea de Plinio de liberar a la ciudad de Bizancio de enviar anualmente embajadas a Roma con el fin de presentarle sus respetos¹⁸²⁵.

Asimismo, en estos fragmentos de la *lex de flamonio* se menciona al *concilium prouinciae*, en el que era elegido el *flamen* provincial y ante el que tenía que rendir cuentas al final del año¹⁸²⁶. Este órgano tuvo un papel muy relevante en las relaciones periferia-centro, entre las provincias y el poder imperial, y fue uno de los principales interlocutores de los gobernadores en las relaciones que éstos solían entablar con las élites provinciales.

El concilium prouinciae.

El *concilium prouinciae* es una institución que existe en todas las provincias del imperio (su paralelo en Oriente es el *koinon*), pero que, dada la heterogeneidad existente entre ellas —es decir, en la tradición política de sus comunidades)—, no tuvo las mismas

¹⁸²³ J. Scheid, *Quando fare è credere: I riti sacrificali dei romani*, Roma-Bari, 2011.

¹⁸²⁴ A. Wallace-Hadrill, “Civilis Princeps...” cit.

¹⁸²⁵ Plin. *Ep.* X, 43-44.

¹⁸²⁶ Según deduce Williamson, “A Roman Law...” cit. p. 189 de las ll. 25-26 comparándolas con el cap. 65 de la *lex Vrsonensis*. Menciones del *concilium prouinciae* en ll. 23-24.

características en todas¹⁸²⁷. En Asia, por ejemplo, el ‘*koinon* de los helenos’ ya existía a finales de la República, tenía un lugar de reunión fijo (Éfeso) y era el órgano a través del cual las ciudades de esta provincia dirigían embajadas al Senado¹⁸²⁸. Por el contrario, en Occidente, los *concilia prouinciae* se crearon durante el Principado por iniciativa del poder romano y su surgimiento estuvo ligado al desarrollo del culto imperial. En efecto, el principal cometido de los *concilia* era la elección anual del sacerdote responsable de este culto¹⁸²⁹. A finales de la República sabemos que, al menos en la Galia, existía un *concilium* en el que se reunían los *principes* de los principales pueblos con el fin de tratar cuestiones que afectaban a las relaciones establecidas entre ellos. Según nos cuenta Julio César en su *De bello gallico*, los líderes galos solían pedirle permiso para celebrar estos *concilia Galliae* y, una vez finalizados, le informaban acerca de los temas tratados y las resoluciones a las que habían llegado¹⁸³⁰. En ocasiones, el propio César los convocaba¹⁸³¹. Estos *concilia* fueron sin duda el precedente en el que Druso el Mayor se basó cuando instituyó el culto a Roma y Augusto para las Tres Galias en *Lugdunum*.

En la misma época, los gobernadores de las provincias recién constituidas como la Transduriana o Germania actuaron de la misma manera, consagrando un ara (o aras) dedicadas a Roma y Augusto. El gobernador de cada una de ellas convocaba anualmente en su santuario a los representantes de las comunidades vinculadas a él para elegir al nuevo *sacerdos* de entre las élites indígenas. Así, lo que cuenta Tácito acerca de la elección, bajo el gobierno de Varo en Germania, del querusco Segismundo en el santuario del ara que estaba junto al *oppidum Vbiorum*¹⁸³² es, pues, perfectamente extrapolable a las otras provincias. En el caso del *sacerdos Romae et Augusti* del

¹⁸²⁷ Cf. P. Guiraud, *Les assemblées provinciales dans l'Empire romain*, París, 1887, pp. 38-39; D. Vaglieri, s.v. “Concilium”, en *Diz. Epig.* II/1 p. 567; J. Deininger, *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit*, Munich-Berlín, 1965; Millar, *The Emperor...* cit. pp. 385-394, hace un repaso de los diferentes tipos de concilios y ligas provinciales y analiza sus funciones, centrándose en los ejemplos de la parte oriental; F. Lozano, “Los concilios ciudadanos y el culto imperial”, en J. M. Blázquez – P. Ozcáriz (coord.), *La administración de las provincias en el Imperio Romano*, Madrid, 2013, pp. 177-198, esp. pp. 180-183.

¹⁸²⁸ Millar, *The Emperor...* cit. p. 386, que señala que este *koinon* pronto se implicó en el culto imperial: En 29 a.C. envió embajadores a Roma para ofrecerle honores a Octaviano, entre ellos la creación de una fiesta religiosa y un templo a él dedicados.

¹⁸²⁹ Guiraud, *Les assemblées...* cit. p. 50; Abbott –Johnson, *Municipal Administration...* cit. pp. 166 y 174.

¹⁸³⁰ Caes. *B.G.* I, 30, 4: *Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere idque Caesaris facere uoluntate liceret: sese habere quasdam res quas ex communi consensu ab eo petere uellent.*

¹⁸³¹ *B.G.* I, 19, 2-5.

¹⁸³² *Vid. supra.*

santuario de las Tres Galias en *Lugdunum*, desconocemos cómo se coordinarían los tres gobernadores de Aquitania, Bélgica y la Lugdunense, y, sobre todo, cuál de ellos presidiría la ceremonia, todos ellos eran *legati Augusti pro praetore* de rango pretorio. No obstante, esta incógnita no impide afirmar que ellos controlarían todo el proceso. La noticia de que el futuro emperador Claudio nació en *Lugdunum* el día del aniversario de la consagración del altar por parte de su padre Druso nos indica que estas reuniones tendrían lugar en esa fecha todos los años¹⁸³³.

Cuando el culto al Divino Augusto se implantó en la Hispania Citerior y la Lusitania, provincias estables, las capitales provinciales de *Tarraco* y *Augusta Emerita* pasaron a tener un papel religioso central, reflejado en la construcción de un templo dedicado al *Diuus Augustus* y en la realización en ellas de un *concilium prouvinciae* en el que se elegía al *flamen* recién creado para el culto. Pero, ¿qué comunidades estaban representadas en el *concilium* y cómo se elegía a sus representantes? Guiraud entendía que todas aquéllas que gozasen del estatuto de colonia romana y municipio romano o latino¹⁸³⁴. Sin embargo, sabemos que, en un principio (al menos en época de Augusto), los primeros concilios occidentales (o sus precursores) tuvieron lugar en provincias recién asimiladas y estaban constituidos por miembros de las élites indígenas locales, de los cuales sólo algunos pocos habían recibido la ciudadanía¹⁸³⁵. En las Tres Galias las comunidades representadas serían las mismas 60 que contribuyeron a la construcción del altar y su santuario, pero es difícil saber qué criterios se adoptaron en su elección, así como en el de las comunidades de las otras provincias occidentales. Lo cierto es que con el tiempo los concilios provinciales estuvieron formados por ciudadanos romanos, una vez que las élites locales tuvieron una vía segura de acceso la ciudadanía romana como resultado de la promoción jurídica de sus comunidades de origen tras la extensión a toda Hispania del *ius Latii* bajo Vespasiano.

En la Hispania Citerior conocemos la ciudad de origen de algunos de sus *flamines* provinciales gracias a las inscripciones presentes en los pedestales de las estatuas que les fueron dedicadas en el foro ‘provincial’ de *Tarraco* a partir de época flavia¹⁸³⁶. En algunos casos el marco de referencia mencionado es el *conuentus*¹⁸³⁷, y

¹⁸³³ Suet. *Diu. Claud.* 2,1. Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, p. 17.

¹⁸³⁴ Guiraud, *Les assemblées...* cit. p.

¹⁸³⁵ Véase el antedicho pasaje de Dión Casio donde se habla de la reunión en el *Ara Vbiorum* convocada por Varo.

¹⁸³⁶ Alföldy, *Flamines...* cit. p. 61.

éste quizá pudo haber sido también la circunscripción utilizada para representar a ciertas comunidades provinciales en el *concilium prouvinciae*, en concreto las del Noroeste; en esa región las sedes conventuales tenían una mayor relevancia si cabe a efectos administrativos dado el poco desarrollo cívico de gran parte de sus comunidades y su poblamiento de carácter eminentemente rural¹⁸³⁸. Hay muchas incógnitas a este respecto y tampoco está claro cuántos representantes enviaría cada comunidad o grupo de comunidades¹⁸³⁹. Por otro lado, Guiraud propuso que, en lo que atañe a las colonias romanas y los municipios romanos y latinos, los representantes enviados al *concilium* se regirían por las normas que atañían a las embajadas, según aparecen recogidas en la ley colonial de Urso y las de los municipios flavios de la Bética¹⁸⁴⁰, y serían elegidos entre los decuriones¹⁸⁴¹. De lo que no cabe duda es que todos los *concilia* provinciales estarían constituidos por miembros de las élites locales.

Por su parte, E. Carette, basándose en el ejemplo del álbum decurional bajoimperial de la ciudad africana de Thamuggadi, propuso que los miembros de los *concilia prouvinciae* estarían divididos en tres categorías: *patroni*, *sacerdotes prouvinciae* y *legati*. La segunda categoría estaría mencionada en la *lex de flamonio* narbonense: [i]n curia sua et concilio prouvinciae Narbonensis inter sui ordinis secundum L [---] / sententiae dicendae signandique ius esto¹⁸⁴². Este orden formado por los que hubiesen sido sacerdotes provinciales –y según este autor, también los *patroni*– gozaría, pues, de dos derechos: el *ius sententiae dicendae* (derecho de expresar la propia opinión verbalmente), y el *ius signandi*, de naturaleza más oscura, que podría referirse a que a ellos les correspondía sellar formalmente los documentos oficiales del *concilium*. Tanto los *patroni* como los sacerdotes provinciales serían miembros vitalicios del *concilium*, mientras que los *legati* serían los únicos elegidos anualmente por sus comunidades de

¹⁸³⁷ Véase la fórmula *ex conuentu...*: CIL II²/14, 1111 (*conuentus Carthaginensis*); 1121 (*c. Carthaginensis*); 1125 (*c. Caesaraugustanus*); 1126 (*c. Bracaraugustanus*); 1118 (*c. Lucensium*); 1168 (*c. Bracaraugustanus*); 1174 (*c. Lucensium*); 1185 (*c. Carthaginensis*). Cf. Alföldy, *Flamines prouvinciae...* cit.

¹⁸³⁸ Arias Vilas, *A romanización...* cit. Obsérvese la preponderancia de los *conuentus* del Noroeste y del *Carthaginensis* en el uso de esta fórmula *ex conuentu...* para referirse al *origo* del *flamen* en cuestión. En el caso del extenso territorio adscrito al *conuentus Carthaginensis*, su poblamiento era disperso en el interior y sólo estaba concentrado en la costa levantina, a la que le gobernador prestaba atención en invierno, como vimos en el Capítulo 2 de la Primera Parte.

¹⁸³⁹ Guiraud. *Les assemblées...* cit. p. 64-65.

¹⁸⁴⁰ Vid. Segunda Parte.

¹⁸⁴¹ *Idem*, p. 65.

¹⁸⁴² I. 14-15. Cf. E. Carette, *Les assemblées provinciales de la Gaule romaine*, París, 1895, pp. 106-115.

origen, al igual que los miembros de una legación cualquiera¹⁸⁴³. Dentro del *concilium*, la posición de estos últimos sería similar a la de los *senatores pedarii* de Roma o los decuriones *pedani* de los municipios¹⁸⁴⁴. La hipótesis de Carette resulta muy atractiva, pero es frágil, ya que depende en gran medida de testimonios relativos al Senado de Roma o a los municipios de las provincias, que eran órganos de naturaleza diferente a los *concilia* provinciales.

La relevancia de estos concilios, en su condición de órganos en los que estaban representadas, a través de sus élites, las comunidades de la provincia, fue *in crescendo* rápidamente. Sabemos que en época flavia –una vez que, junto con el culto imperial, funcionaron en todas las provincias occidentales, entre ellas la Bética– los *concilia* fueron utilizados por las élites provinciales como medio de contacto con el poder central de manera similar a como venían actuando los *koina* de las provincias orientales desde finales de la República. Así, los concilios enviaron legaciones a Roma para solicitar beneficios para la provincia, para exponer determinados problemas y, sobre todo, para reclamar justicia si habían sufrido abusos por parte de algún gobernador o procurador¹⁸⁴⁵. De todas formas, su capacidad de maniobra dependía siempre de la supervisión del gobernador¹⁸⁴⁶, que, como en el caso de las simples comunidades, actuaba de filtro juzgando la pertinencia o no de una embajada dirigida al emperador, con el fin de descargar a éste de trabajo y evitar un gasto superfluo de los provinciales¹⁸⁴⁷.

En el Capítulo 1 de la Segunda Parte ya comentamos las dificultades a las que se enfrentaban las embajadas enviadas por las ciudades al emperador, cuya accesibilidad era limitada. Lo mismo sucedería con las embajadas de los *concilia* provinciales, aunque estas gozarían de más fuerza al representar a toda una provincia y unir los recursos económicos de sus comunidades. Aun así, era necesario adoptar medidas complementarias que pudiesen favorecer el éxito de la embajada, como el recurso a la influencia de uno o varios de los patronos de la provincia –sobre todo antiguos

¹⁸⁴³ *Idem*, p. 122.

¹⁸⁴⁴ *Idem*, pp. 109-110.

¹⁸⁴⁵ En Hispania sobresale en esto último la Bética: las fuentes literarias nos han transmitido que denunció los abusos de cinco de sus procónsules durante el Alto Imperio: Brunt, “Charges...” cit. Sobre las cuestiones generales presentadas ante el emperador por las embajadas: Millar, *The Emperor...* cit. pp. 390-392; Lozano, “Concilios ciudadanos...” cit. p. 188.

¹⁸⁴⁶ Dio LII, 30.

¹⁸⁴⁷ *Vid.* Segunda Parte.

gobernadores o procuradores–, o la realización de votos a los dioses. Gracias a una inscripción de un ara marmórea de Dertosa (hoy Tortosa, en Tarragona), sabemos que el *concilium prouvinciae Hispaniae Citerioris* se encomendó, con éxito, a las divinidades de *Tutela* y *Pantheo* –una forma ésta de hacer referencia conjunta a todos los dioses– para garantizar el buen discurrir de las legaciones que envió a Antonino Pío¹⁸⁴⁸.

Carecemos de testimonios que nos describan con detalle cómo se desarrollaban las sesiones del *concilium prouvinciae*. Empero, las fuentes literarias ofrecen pinceladas sobre su funcionamiento a partir de las cuales Guiraud reconstruyó algunas de las disposiciones de su “reglamento” interno. Este autor destaca que todos los miembros de esta asamblea tenían derecho de iniciativa y podía realizar propuestas en ella¹⁸⁴⁹. Así lo deduce de un pasaje de Tácito en el que se refiere que Nerón decidió en 62 que nadie pudiese proponer en un *concilium* provincial que se realizara una acción de gracias en favor de ningún gobernador en el Senado, con el fin de evitar, como había señalado Trásea Peto antes, no sólo que aquellos que fuesen enviados a gobernar una provincia cometiesen abusos sino que cayesen también en la adulación de sus gobernados para obtener luego honores en Roma: *mox auctore principe sanxere, ne quis ad concilium sociorum referret agendas apud senatum pro praetoribus prove consulibus grates, neu quis ea legatione fungeretur*¹⁸⁵⁰. El genérico ‘*ne quis...*’ usado por el emperador en su disposición, según la transmite Tácito, indicaría que cualquier miembro del *concilium prouvinciae* podía proponer tal cosa.

A pesar de esta probable igualdad entre los miembros del *concilium*, la *auctoritas* personal de algunos de ellos sin duda les otorgaría gran influencia sobre la asamblea. Y la opinión del individuo que desempeñara el cargo de *flamen* o *sacerdos* provincial tendría un peso importante, ya que era el ‘presidente’ de esta asamblea y poseía, como vimos, el *ius sententiae dicendae signandique*¹⁸⁵¹. Por otro lado, no cabe duda de que existirían, al igual que en el propio Senado de Roma, vínculos de patronato y clientela entre los miembros del *concilium* y entre algunos de éstos (o de sus comunidades) y antiguos gobernadores de la provincia que podían jugar un importante papel como medio de intervención o control de las decisiones de la asamblea provincial.

¹⁸⁴⁸ CIL II/14, 784: *Pantheo Tutelae / ob legationes in / concilio p(rouvinciae) H(ispaniae) C(terioris) / apud Antoninum / Aug(ustum) prospere / gestas / M[-6?-] +IS+*.

¹⁸⁴⁹ Guiraud, *Les assemblées...* cit. p. 107.

¹⁸⁵⁰ *Ann.* XV, 22.

¹⁸⁵¹ Vaglieri, “Concilium”, cit. p. 567.

Así sucedió a inicios del siglo III en el Concilio de las Tres Galias, según sabemos a través de las cartas de dos ex gobernadores de la Galia Lugdunense copiadas en el llamado ‘Mármol de Thorigny’, pedestal de una estatua dedicada por la *ciuitas Vinducassium* (Vieux, Normandía) en 238 d.C. a su ciudadano y benefactor más importante, Tito Sennio Solemne, el primero de su comunidad en desempeñar el sacerdocio en el santuario de las Tres Galias, que fue cliente de dos gobernadores¹⁸⁵². Pero en este testimonio nos detendremos más adelante, en el capítulo dedicado al patronato ejercido por los gobernadores en Hispania.

En cuanto a los votos de cada miembro del *concilium*, parece que unas veces serían públicos y otros secretos, dependiendo del asunto tratado. Lo cierto es que cuando la decisión tomada era unánime, este hecho se publicitaba, plasmándose en los documentos oficiales¹⁸⁵³. En las provincias hispanas, los testimonios epigráficos que recogen esta unanimidad siempre están relacionados con la erección de una estatua, bien en honor un sacerdote del culto imperial, bien de un gobernador. Así actuó el *concilium* de la Hispania Citerior cuando decidió erigir una estatua en honor de diversos *flamines* provinciales “*consensu concilii prouvinciae...*”¹⁸⁵⁴. La fórmula con la que se expresaba esta unanimidad podía variar, como en el caso del honor concedido al *sacerdos Romae et Augusti* de la provincia, Cayo Valerio Arábico, al que se le erigió una estatua excepcionalmente entre las de los *flamines* en el foro provincial: en la última línea del texto epigráfico de la peana de su estatua se hizo constar que *uniuers(i) censuer(unt)*¹⁸⁵⁵. Otro tanto sucede en la capital de la Bética, *Corduba*¹⁸⁵⁶. Y en un pedestal se recuerda también que el *flamen* honrado, Cayo Sempronio Sperato, fue elegido por unanimidad: *hic prouvinciae Baeticae consensu flaminis munus est consequutus*¹⁸⁵⁷. Todos estos testimonios muestran que la elección de los *flamines* y la concesión de honores a éstos cuando hubiesen dejado el cargo dependían de la votación de los miembros del *concilium*. Sin embargo, los gobernadores podían condicionar la elección. Según Elio Arístides, el *koinon* de Asia elegía a su asiarca de una lista de candidatos confeccionada

¹⁸⁵² CIL XIII, 3162, el llamado ‘Mármol de Thorigny’.

¹⁸⁵³ Guiraud, *Les assemblées...* cit. p. 108.

¹⁸⁵⁴ CIL II²/7, 291; 293; 295. También en el caso de una *flaminica*: RIT 327 = CIL II, 4246.

¹⁸⁵⁵ CIL II²/14, 1194, que corrige la lectura precedente de su cognomen –‘Arabino’– de RIT 333 = CIL II, 4248.

¹⁸⁵⁶ CIL II²/7, 799 (Fuente Obejuna, Córdoba): *prouvinciae Baeticae consensu* (l. 6); CIL II²/7, 295 (Córdoba): *consensu concili uniuersae prou(inciae) Baet(icae) / decreti sunt honores* (ll. 6-7).

¹⁸⁵⁷ CIL II, 2344.

previamente por el procónsul de la provincia¹⁸⁵⁸, y es posible que en las provincias hispanas sucediera lo mismo con los aspirantes al flaminado provincial.

No se sabe con exactitud cuántas veces al año se reuniría el *concilium*. Tradicionalmente se ha pensado que sus sesiones tendrían una periodicidad anual, ya que debían elegir cada año un nuevo *flamen*¹⁸⁵⁹. Esa elección se produciría en un momento diferente en cada provincia, siempre el año anterior al de la entrada en el cargo del elegido. En las Tres Galias, el *sacerdos Romae et Augusti* sería elegido el día del aniversario de la consagración del ara; y probablemente sucedería lo mismo tanto de santuarios similares (el del *Ara Vbiorum* o el de las *Arae Sestianae*), como en los surgidos a partir del culto al *Diuus Augustus*. En *Tarraco* y *Emerita* (y más tarde en *Corduba*), el *concilium prouinciae* se reuniría durante las celebraciones del aniversario de la consagración de sus respectivos templos dedicados al culto a los *Diui*.

Sin embargo, no se debe descartar que el *concilium* se reuniese en otras fechas señaladas en el calendario provincial que estaban relacionadas con el culto al emperador. Por ejemplo, al comienzo del año¹⁸⁶⁰ y en la celebración del *dies imperii* del *princeps* reinante, momentos en los que se realizaban votos *pro salute principis*. Gracias a la correspondencia pliniana, se sabe con certeza que los gobernadores estaban presentes en estas celebraciones y participaban en la realización de los votos que se llevaban a cabo. Plinio, en su segundo y tercer año al frente de Bitinia-Ponto, notificó a Trajano que, con motivo del año nuevo, se habían cumplido los votos realizados un año antes *pro salute principis* y se habían renovado correctamente:

*Sollemnia uota pro incolumitate tua, qua publica salus continetur, et suscepimus, domine, pariter et soluimus precati deos, ut uelint ea semper solui semperque signari*¹⁸⁶¹.

Vota, domine, priore anno nuncupata alacres laetique persoluimus nouaque rursus certante commilitonum et prouincialium pietate suscepimus, precati deos

¹⁸⁵⁸ Vaglieri, “Concilium”, cit. p. 568.

¹⁸⁵⁹ Véanse la línea 12 de la *lex de flamonio*. Cf. Guiraud, *Les assemblées...* cit. pp. 78-79, que adopta una postura cauta, dada la diversidad entre las provincias orientales y occidentales; Carette, *Les assemblées...* cit. p. 133, no tiene duda alguna acerca de la periodicidad anual de los concilios en las Galias, a partir de Dio LIV, 22, 1; Vaglieri, “Concilium”, cit. p. 567, sigue a Guiraud.

¹⁸⁶⁰ En la provincia de Asia, como hemos visto, desde la reforma del calendario efectuada por el procónsul Paulo Fabio Máximo en 9 a.C., el año comenzaba el día del nacimiento de Augusto (23 de septiembre).

¹⁸⁶¹ Plin. *Ep.* X, 35.

*ut te remque publicam florentem et incolumem ea benignitate seruarent, quam super magnas plurimasque uirtutes praecipua sanctitate obsequio deorum honore meruisti*¹⁸⁶².

Asimismo, en esos dos años le escribió también al emperador para comunicarle que se había celebrado correctamente el aniversario de su aclamación imperial (*dies imperii*), el 28 de enero¹⁸⁶³, informándole de que se habían realizado los habituales votos por su salud y, además, que el ejército destacado en Bitinia-Ponto y los provinciales habían realizado sendos juramentos de fidelidad al *princeps*:

*Diem, domine, quo seruasti imperium, dum suscipis, quanta mereris laetitia celebrauimus, precati deos ut te generi humano, cuius tutela et securitas saluti tuae innisa est, incolumem florentemque praestarent. Praeuimus et commilitonibus ius iurandum more sollemni, eadem prouincialibus certatim pietate iurantibus*¹⁸⁶⁴.

*Diem, quo in te tutela generis humani felicissima successione translata est, debita religione celebrauimus, commendantes dis imperii tui auctoribus et uota publica et gaudia*¹⁸⁶⁵.

Al igual que Plinio, todos los gobernadores provinciales enviarían notificaciones de este tipo al emperador durante el año, pues eran una señal del estado de la provincia, su estabilidad interna y de la fidelidad de los provinciales y las tropas o cuerpos del ejército acantonados en ellas. Asimismo, con ello también mostraban su propia lealtad y, en el caso de que se produjera una sucesión en el trono, era un signo de reconocimiento. Sin embargo, ha de tratarse de manera diferenciada los votos *pro salute principis* y el juramento de los provinciales y las legiones, pues son rituales diferentes; aunque, como nos transmite Plinio en X, 52, podían producirse simultáneamente. En esta carta, Plinio nos habla primero de las plegarias realizadas a los dioses por la salud, tutela y protección de Trajano, de las que dependía el destino del imperio, y, luego, de

¹⁸⁶² Ep. X, 100.

¹⁸⁶³ Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 633. El *dies imperii* del *princeps* se correspondía con el día en que por vez primer había sido aclamado *Imperator* por el ejército.

¹⁸⁶⁴ Ep. X, 52.

¹⁸⁶⁵ X, 102. En este último caso el texto es más escueto que el de la primera carta: *Diem, quo in te tutela generis humani felicissima successione translata est, debita religione celebrauimus, commendantes dis imperii tui auctoribus et uota publica et gaudia*.

que tanto los soldados como los provinciales realizaron sendos *ius iuranda*. Pero de estos últimos hablaremos más adelante, remitiéndonos a dos importantes ejemplos hispánicos.

Votos pro salute principis.

Los *uota pro salute principis*, ya desde época de Augusto¹⁸⁶⁶, se realizaban en Roma y en los municipios y colonias provinciales en días señalados de la vida del *princeps* y, por ende, del imperio, así como en festividades propias de cada comunidad. Asimismo, el culto provincial tenía su centro en un santuario propio, que en Hispania estaba situado en las capitales de sus respectivas provincias. En su condición de cabeza de la *res publica*, los días de nacimiento y de acceso a la púrpura del emperador cobraban gran relevancia, dado que a él estaba vinculada la prosperidad del imperio. Era, pues, justo celebrarlo y rogar por que el emperador gozara de salud y del favor de los dioses, con el fin de que su principado siguiese aumentando la gloria de Roma, basada en la *pax deorum*. Mientras en la *Vrbs* estos votos eran realizados en el Capitolio por los *fratres Aruales*, en las provincias los rituales se llevarían a cabo ante el templo o ara del culto imperial provincial¹⁸⁶⁷, que en las hispanas se hallaba en el llamado “foro provincial” de cada una de sus capitales (*Tarraco*, *Emerita* y *Corduba*)¹⁸⁶⁸.

En el santuario de la capital provincial, los *flamines* y *flaminicae* de la Hispania Citerior, la Lusitania y la Bética dirigirían los rituales, que, como muestra el testimonio de Plinio, estaban presididos por los gobernadores, que ocupaban el lugar que en Roma correspondía a los cónsules en la realización de los *uota publica pro salute rei publicae et principis* al comienzo del año¹⁸⁶⁹. En efecto, entre el otoño del 31 y finales del 30 a.C., un senadoconsulto prescribió que se introdujeran votos por Octaviano entre los que se realizaban por la salud de la república¹⁸⁷⁰. Según ha expuesto J. Scheid, a partir

¹⁸⁶⁶ RG 9: *Vota pro ualeitudine mea suscipi per consules et sacerdotes quinto quoque anno senatus decreuit. Ex iis uotis saepe fecerunt uiuo me ludos aliquotiens sacerdotum quattuor amplissima collegia, aliquotiens consules. Priuatim etiam et municipatim uniuersi ciues unanimiter continenter apud omnia puluinaria pro ualeitudine mea supplicauerunt.*

¹⁸⁶⁷ Vaglieri, “Concilium”, cit. p. 567.

¹⁸⁶⁸ Fishwick, *The Imperial Cult* III/2, pp. 185-198 y 247-254.

¹⁸⁶⁹ J. Scheid, “Les activités religieuses des magistrats romains”, en Haensch – Heinrichs (Hg.) *Herrschen und Verwalten...* cit. pp. 126-144, esp. p. 141.

¹⁸⁷⁰ Dio LI, 19, 7. Véase el comentario de J. Scheid, *Romulus et ses frères: Le collège des frères aruales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs*, Roma, 1990, pp. 298-300, quien señala con agudeza

del 27 a.C. se produjo un desdoblamiento del ritual y, mientras que la *solutio* de los *uota pro salute principis* se daba en las *kalendas*, la *nuncupatio* de los mismos se realizaba después, quedando fijada definitivamente el día 3 de enero desde el año 41 (como mínimo) en adelante¹⁸⁷¹. En cambio, en las ciudades de las provincias el ritual completo se producía el 3¹⁸⁷², que es la fecha a la que Plinio hace referencia en X, 35 y 100.

Cabe preguntarse qué sucedió con el santuario de las *Arae Sestianae* del Noroeste con posterioridad al período augusteo. Por el testimonio de Plinio el Viejo y de Ptolomeo, sabemos que estas aras siguieron existiendo tanto en época flavia como durante el siglo II, y es probable que dos inscripciones hagan referencia a sendos sacerdotes de este santuario en esa época¹⁸⁷³. Desde que la provincia Transduriana fue integrada en la Citerior, el santuario había pasado a tener un carácter regional, pero carecemos de fuentes que nos hablen de su organización y del culto realizado en él. En nuestra opinión, probablemente el sacerdote del culto de las aras sestianas fuese elegido entre los aritócratas pertenecientes a las comunidades adscritas las tres sedes conventuales del Noroeste que habían formado parte en un principio de la provincia Transduriana. Teniendo en cuenta el ejemplo del santuario de las Tres Galias de *Lugdunum*, en el que se introdujo el culto a los *Diui* en época flavia, se puede esperar que sucediera lo mismo en el de las *Arae Sestianae*. Empero, el título de sus sacerdotes habría debido sufrir también una modificación, cosa que no sucedió, pues siguieron llamándose *sacerdotes Romae et Augusti*. Es muy probable que en este santuario se realizaran *uota pro salute principis* en las mismas fechas antes señaladas y que el gobernador, ocupado con las celebraciones en la capital, enviase a un sustituto en su

que esta medida no era sino la continuación de una práctica establecida en 44 a.C., cuando se decretó que fuesen realizados votos en honor de Julio César cada año (Dio XLIV, 61).

¹⁸⁷¹ Plut. *Cic.* 2, 1 menciona que el tercer días tras la *calendas* de enero (según el cómputo inclusivo) estaba reservado a las súplicas y los sacrificios realizados por los magistrados en honor del emperador.

¹⁸⁷² Scheid, *Romulus et ses frères...* cit., pp. 304-309.

¹⁸⁷³ CIL II²/14, 1114: *L(ucio) Anto[ni]o Paterni / filio Quir(ina) / Modesto Inter-/catiensi ex gen-/[te V]accaeorum / Cluniensi / [o]mnibus hono-/r[ib]us [in r(e)] p(ublica) sua / functo sacerdo-/ti Romae et Aug(usti) Ar(arum) Aug-/stanar(um), fl(amini) p(rouinciae) H(ispaniae) C(iterioris). P(rouincia) H(ispania) C(iterior); CIL II²/14, 1145: *M(arco) Iulio Qu[ir(ina) Se]-/renianao Ado[pti]-/uo ex <conuentu> Lucen[sium] / omnib(us) ho[norib(us)] / in re publi[ca] sua / functo sa[cerdoti] / Romae et Au[g(usti)] <conunetus> Luc-/censium Aris [Aug(ustanis) ad]-/lecto in quin-/que decuri(as) eq[ui]tum / Romanor(um) a [Diuo] / Commodo fl(amini) p(rouinciae) H(ispaniae) C(iterioris)] / P(rouincia) H(ispania) C(iterior) patrono m[erentissimo]*. Quizá también fuese sacerdote de este santuario el *sacerdos Romae et Augusti* honrado en Tarraco en el siglo II con una estatua entre las de los *flamines*, Cayo Valerio Arábico, natural de *Bergido Flauium*, comunidad adscrita al *conuentus Asturicensis* (CIL II²/14, 1194).*

lugar, quizá el propio legado de la legión acuartelada en León. Lamentablemente, la carencia absoluta de fuentes nos impide ir más allá de meras suposiciones.

La descripción que Plinio hace del ritual y los votos realizados en su provincia es somera, pero podemos hacernos una idea de las divinidades a las que se dirigían los votos y las víctimas que en su cumplimiento se sacrificaban anualmente en todas las provincias gracias a dos importantes testimonios: el *feriale Duranum* (en papiro) y, sobre todo, los valiosos *commentarii fratrum Arualium* hallados en Roma, cuyos votos serían similares a los desarrollados en el resto del imperio¹⁸⁷⁴.

El siguiente extracto de uno los ejemplos epigráficos del ritual de los Arvales (el del 78 d.C.) nos puede servir de muestra:

*...col-/legi fratrum Arualium nomine uota nuncupauerunt pro salute / Imp(eratoris) Vespasiani Caesaris Aug(usti), trib(unicia) pot(estate), co(n)s(ulis) VIII et T(ito) Caesaris, Aug(usti) f(ili), / Vespasiani, co(n)s(ulis) VI, uictimis immolatis in Capitolio, quas superio-/ris anni magister uouerat persoluit et in proximum annum nun-/cupauit ... / Ioui opt(imo max(imo) bouem marem, Iuoni Reginae uaccam, Mineruae uacc(am), Saluti uaccam. (vacat) / Item pro T(ito) Imp(eratore) Vespasiano Caesare, Aug(usti) f(ilio), i<s>dem uerbis, q(uae) s(ub) s(cripta) [sunt]: Ioui opt(imo) maxim(o) / bouem marem, Iunoni reginae uaccam, Mineruae uaccam, Saluti uacc(am).*¹⁸⁷⁵

Este cumplimiento y renovación de los votos hechos a la tríada capitolina y *Salus* por la salud de Vespasiano y Tito se realizó el 3 de enero (l. 3), fecha importante también en las provincias como hemos venido diciendo. El ritual se llevó a cabo en el Capitolio de Roma y se sacrificó un buey a Júpiter y sendas vacas a las otras tres divinidades. Los votos a la tríada capitolina eran muy oportunos pues tradicionalmente a ellos se había encomendado la *res publica* y, además, Júpiter Óptimo Máximo era el señor de los dioses y simbolizaba la soberanía universal, que en el orbe era encarnada por el *princeps*. A esta idea de la soberanía también hace referencia el epíteto atribuido a su consorte Juno, ‘*Regina*’. La adición de *Salus* es muy congruente con el propósito de

¹⁸⁷⁴ J. M. Reynolds, “Vota pro salute principis”, *PBSR* 30 1962, pp. 33-36.

¹⁸⁷⁵ J. Scheid, *Recherches archéologiques à La Magliana. Commentarii fratrum Arualium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie arvale (21 av. – 304 ap. J.-C.)*, Roma, 1998, n° 44, I, ll. 5-13 (p. 116).

garantizar, a un tiempo, la salud del emperador y su hijo asociado al poder imperial y la del imperio, inextricablemente unidas.

Como decíamos antes, también se producirían votos similares (aunque a menor escala) en el resto de municipios y colonias de la provincia –dentro de sus gastos previstos para ceremonias religiosas¹⁸⁷⁶– e, incluso, en comunidades no privilegiadas. La *ciuitas Ammaiensis* realizó los votos anuales preceptivos por la salud del emperador Claudio en 44/45 d.C. Como expusimos más arriba, resulta muy significativo que el texto epigráfico se cierre con la mención en ablativo del gobernador de la Lusitania, Lucio Calventio Véter Carminio, seguido del de los dos supuestos magistrados de esta *ciuitas*, que presentan una onomástica indígena. Estuviese presente o no, lo cierto es que la mención del gobernador indica su intervención en la realización del voto, por lo menos animando a esta comunidad, como probablemente al resto de las peregrinas, a integrarse en estos rituales a imagen de los municipios y colonias provinciales, con el fin de que comenzasen a compartir los principios que dotaban de cohesión e identidad a las diferentes poblaciones provinciales. Es probable que el propio Carminio haya proporcionado a los *Ammaienses* el lapicida que se encargó de fijar por escrito el texto epigráfico con el fin de conmemorar esta demostración de su fidelidad hacia el poder imperial.

Cuando un nuevo emperador comenzaba su principado, los sacerdotes y magistrados realizaban votos en su honor tanto en Roma como en las provincias¹⁸⁷⁷. También comunidades ajenas a la religión romana como la judía: Filón, con el fin de ganarse la voluntad del emperador, le recuerda que fueron los primeros de la provincia en realizar votos por él cuando accedió al trono, siguiendo las indicaciones de su gobernador Vitelio¹⁸⁷⁸. Esos votos tenían una especial significación en el proceso de investidura del *princeps* si éste no había sido asociado al poder imperial antes de la muerte de su predecesor. Por ejemplo, sabemos que los *fratres Aruales* realizaron, en el *dies imperii* de Vitelio, sacrificios a las siguientes divinidades: en el Capitolio, a la

¹⁸⁷⁶ Vid. Segunda Parte, Capítulo 1.

¹⁸⁷⁷ En Roma, los *uota pro salute principis* se tomarían alrededor de doce o quince días después de su proclamación, como muestra el caso de Pértinax y de Heliogábalo. Scheid, *Romulus et ses frères...* cit. p. 310-311.

¹⁸⁷⁸ Phil. *Leg. ad Gaium* 231-232.

tríada capitolina, *Iuppiter Victor*, *Salus*, *Felicitas* y al *Genius Populi Romani*; en el Foro de Augusto, a *Mars Vltor* y a su *Genio*¹⁸⁷⁹.

El *Feriale Duranum* –calendario por el que se regía la *cohors XX Palmyrenorum* acuartelada a principios del siglo III en *Dura Europos*, en la ribera derecha del Éufrates– revela que los votos y sacrificios realizados por las unidades militares de las provincias en honor del emperador y los *Diui* eran similares a los de los *fratres Aruales*, y, en concreto, los *uota pro salute* u *ob salutem principis* que se llevaban a cabo el 3 de enero:

[*Hi nonas Ianuarias quod soluantur ac nuncupentur u*]ota et ob salutem / [*domini nostri M(arci) Aureli Seueri Alexandri Aug(usti) et ob aetern*]itatem / [*impe*]ri p[*(opuli)*]*[R(omani) Ioui O(ptimo) M(aximo) b(ouem) m(arem) Iunoni Reginae b(ouem) f(eminam) Mineruae b(ouem) f(eminam) Ioui Victori] b(ouem) m(arem) / [----]. S .[ca. 12 Marti patri taurum, Marti Victori ta]urum / [Vict]oriae b(ouem) [f*¹⁸⁸⁰

El *Feriale Duranum* ha sido datado en época de Severo Alejandro (ca. 227), pero sería fruto de una regulación de época augustea destinada probablemente a todas las unidades militares del imperio. En el calendario no se menciona ninguna divinidad local de Dura, sino solamente festividades relacionadas con dioses romanos y el culto imperial y, por tanto, es extrapolable a otras provincias¹⁸⁸¹; y junto con los *commentarii fratrum Arualum* nos ofrece una idea de cómo sería el ritual presidido por el gobernador en cada provincia.

En las capitales provinciales hispanas se realizarían votos y sacrificios similares el 3 de enero y el *dies imperii* de cada emperador, añadiéndose votos a las divinidades que se creyese pertinentes, además de a la tríada capitolina y *Salus*. Y gracias a varias inscripciones de Cirene sabemos que en las provincias se usaban fórmulas similares a las de los votos de los Aruales¹⁸⁸². A diferencia de Roma, donde existían diferentes santuarios y lugares de representación del poder imperial en los que celebrar estas

¹⁸⁷⁹ Scheid, *Commentarii fratrum...* cit. n° 40, I, ll. 86-88; *Idem, Romulus et ses frères...* cit. pp. 385-388, donde señala que ningún otro sacrificio ni los *uota pro salute* poseen una referencia al *imperium* en sentido técnico como los sacrificios *ob imperium* u *ob diem imperii*, claro en estos últimos a causa de la ofrenda a Marte Vengador (p. 388).

¹⁸⁸⁰ Col. I, 1-6. Cf. R. O. Fink – A. S. Hoey – W. F. Snyder, “The Feriale Duranum”, p. 1-222, *Yale Classical Studies* 7, 1940; D. Fishwick, “Dated Inscriptions and the Feriale Duranum”, *Syria* 65/3-4, 1988, pp. 349-361, esp. p. 354.

¹⁸⁸¹ Fishwick, *idem*, p. 350-353.

¹⁸⁸² Reynolds, “Vota...” cit. p. 35.

ofrendas, en las capitales hispanas el santuario del “foro provincial” gozaría del monopolio para albergar los nuevos votos y los sacrificios con los que se cumplían los viejos al inicio del año. Los gobernadores de Hispania, como Plinio en Bitinia-Ponto, presidirían esos rituales¹⁸⁸³, reconociendo de ese modo la legitimidad del nuevo *princeps* y mostrando su fidelidad hacia él. Así, cuando llegó a Panonia la noticia de la proclamación de Pértinax como emperador en 193, su gobernador, el futuro emperador Septimio Severo, no tardó en realizar *uota pro salute principis*, así como el juramento preceptivo de lealtad al emperador¹⁸⁸⁴.

Ahora bien, esta era la costumbre ordinaria, pero existen pruebas de que los gobernadores de Hispania realizaron personalmente votos *pro salute principis* en otras partes de la provincia fuera de los preceptivos del inicio del año y del *dies imperii*. En concreto, contamos con cuatro inscripciones que recogen tres votos *pro salute principis* realizados por gobernadores (dos por el mismo).

El primero cronológicamente se halló en Vegaquemada (León): se trata de un epígrafe votivo que recoge una dedicación del gobernador de la Hispania Citerior Quinto Junio Rústico a Júpiter Óptimo Máximo por la salud de Antonino Pío:

[I(oui)] O(ptimo) M(aximo) / [p]ro salute Imp(eratoris) Caes(aris) / [T(iti)] Aeli Hadriani Anto/[nini] Aug(usti) Pii domuiq(ue) / [ei]us Q(uintus) Iunius Rus/[tic]us co(n)s(ul) leg(atus) Aug(u)s(ti) / [pr(o)] pr(aetore) prouinciae / [Hisp(aniae) Citerioris(?)]¹⁸⁸⁵

El bloque de caliza en el que se halla esta inscripción fue reutilizado en la fábrica de la esquina sur de la iglesia parroquial de La Losilla y San Adrián, en Vegaquemada, lugar situado a unos treinta kilómetros al noreste de León¹⁸⁸⁶. Esto nos induce a pensar que Junio Rústico realizó esta dedicación durante su estancia en el campamento de la *legio VII* y en relación al voto anual *pro salute principis* que presidía

¹⁸⁸³ Scheid, “Les activités...” cit. p. 141.

¹⁸⁸⁴ Herod. II, 9, 5. Todos estos rituales eran públicos y probablemente el día que él realizó su juramento lo hicieron también las legiones que tenía a su mando.

¹⁸⁸⁵ *HEp* 9, 1999, 409. Junio Rústico habría gobernado la provincia en un momento imprecisable entre 145 y 161 d.C. Anexo II: n° 24.

¹⁸⁸⁶ *HEp* 9, 1999, 409; P. Le Roux, “Les dévotions des gouverneurs de province dans la péninsule Ibérique au Haut-Empire”, en A. Vigourt – X. Lorient – A. Bérenger – B. Klein (dir.) *Pouvoir et religion dans le monde romain, en hommage à J.-P. Martin*, París, 2006, pp. 367-385, esp. pp. 371.

ante sus tropas, al igual que sucedió con el voto realizado por un gobernador posterior de época de Caracala, del que dejó testimonio en dos epígrafes gemelos.

Se trata de dos inscripciones gemelas (una de ellas fragmentaria) aparecidas en León –de las que ya hemos hablado a propósito del juramento del ejército¹⁸⁸⁷. La que está completa dice lo siguiente:

*Iunoni Re[ginae] / pro salute et im[peri(i)] / diuturnita[te imp(eratori)] / M(arci) Aureli
Anto[nini] / Pii Fel(icis) Aug(usti) et Iu[liae] / Piae Fel(iciae) Aug(ustae) ma[tris] /
Antonini Aug(usti) [cas]-/trorum senat[us] / ac patriae. / C(aius) Iul(ius) Cerealis
co(n)s(ul) [leg(atus)] / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) pr(ouinciae) H(ispaniae) N(ouae)
C(iterioris) An[toni]-/niana post diui[sam] / prouinc(iam) primus ab eo [mi(ssus)]¹⁸⁸⁸*

Como se puede observar, Cayo Julio Cereal, *legatus Augusti pro praetore* de la *Hispania Noua Citerior Antoniniana* –nombre que recibió la Citerior bajo Caracala tras la creación de la provincia Hispania Superior en la *Gallaecia*, de ser correcta la hipótesis de Alföldy–, deja constancia epigráfica del voto que realizó a Juno Reina “por la salud, el imperio y la eternidad del emperador” Caracala y su madre, Julia Domna, en el campamento de la *legio VII Gemina*. La elección del lugar no es casual: Cereal, como comandante en jefe de esta legión, debía asegurar su lealtad al *princeps*, al que él representaba directamente como su legado *pro praetore*.

Como hemos señalado en la Primera Parte, este voto realizado ante la legión de su provincia es especialmente significativo, pues la aceptación de Caracala, que había inaugurado su reinado con la ejecución sumaria de su hermano Geta y sus seguidores bajo la dudosa acusación de traición, era aún un tanto incierta; necesitaba evitar sublevaciones en las provincias y reforzar su posición en el trono. Por ello Cereal, seguramente hombre de su confianza, no dudó en hacer este voto en el campamento de su legión, quizá el día en que presidió el juramento de fidelidad de las tropas a Caracala. Además, incluyó en sus votos a Julia Domna, muy querida por las legiones como viuda de Septimio Severo (de ahí su título honorífico de *mater castrorum*), reivindicando así a Caracala como único sucesor legítimo de su padre. El culto al emperador fue, de nuevo, la mejor vía para asegurar la fidelidad al *princeps*, en este caso de los soldados.

¹⁸⁸⁷ Vid. Capítulo 5 de la Primera parte

¹⁸⁸⁸ *ERPL* 73. La n° 74 se ha conservado en estado fragmentario. Anexo II: n° 26-27.

La vinculación del ejército con estos votos por la salud del emperador y la presidencia de los mismos por parte de los gobernadores provinciales está atestiguada en las fuentes literarias¹⁸⁸⁹ y en la epigrafía de otras provincias. En lo que se refiere a esta última, resultan especialmente iluminadoras las dedicciones vinculadas con la *legio III Augusta* asentada en África. Y. Le Bohec ha señalado la importancia que tenía la intervención de los gobernadores provinciales en las dedicciones en honor de los emperadores que realizaba esta legión. En 1989, este autor constató que de las 102 dedicciones en honor de los emperadores (vivos o divinizados) que hasta entonces habían dejado rastro en la epigrafía de esta legión entre el 72 y el 284 d.C., 69 contaron con la participación del gobernador provincial¹⁸⁹⁰. Las nuevas dedicciones imperiales halladas desde entonces no hicieron sino confirmar esta tendencia¹⁸⁹¹. Asimismo, el protagonismo de los *legati Augusti pro praetore* de Numidia vuelve a ser muy recurrente en las inscripciones que a partir de Adriano recuerdan la realización de un voto por la salud de los emperadores en el contexto del campamento de *Lambaesis*¹⁸⁹². Esto, sumado a la escasez de dedicciones al emperador realizadas por soldados a título individual, ha llevado al historiador francés a concluir que, en el seno de la *legio III Augusta*, el culto imperial está estrechamente vinculado con la legión como conjunto y dependía de la iniciativa del gobernador¹⁸⁹³. Es decir, los testimonios revelan que los soldados prestaban poca atención al culto imperial a nivel particular, pero mucho como colectivo, dado que formaba parte fundamental de su vida profesional. En nuestra opinión, este esquema es igualmente válido para la *legio VII Gemina* y evidencia la relevancia de la intervención de los gobernadores de la Citerior en la consolidación de los rituales que conformaban el culto imperial y su papel en el fomento de la fidelidad al emperador y la cohesión del imperio tanto entre los soldados que estaban a sus órdenes como entre los civiles provinciales.

El tercer ejemplo fue anterior al de Cereal. Se trata de un voto realizado por el gobernador de la Lusitania Coeliano en *Olisipo*, entre el 200 y el 209 d.C.:

¹⁸⁸⁹ Véase una descripción del *sacramentum* de las legiones de Germania en Tac. *Hist.* I, 55, pasaje al que ya nos hemos referido en el Capítulo 5 de la Primera Parte.

¹⁸⁹⁰ Le Bohec, *La troisième...* cit. pp. 560-562; y “Le culte impérial et l’armée romaine d’Afrique”, en Vigourt – Lorient – Bérenger – Klein (dir.) *Pouvoir et religion...* cit. pp. 389-400, esp. p. 390.

¹⁸⁹¹ Le Bohec, “Le culte impérial...” cit. p. 392.

¹⁸⁹² Le Bohec, *La troisième...* cit. pp. 563-565. Véase, por ejemplo: *CIL* VIII, 2680 (125-126 d.C.); 2527 (198); 2528 (198); 2437 (199); 2528 (198-201); 4323 (208). En los tres primeros ejemplos las divinidades invocadas son, respectivamente, *Iuppiter Dolichenus*, el *Genius legionis* y el *Genius Lambaesis*.

¹⁸⁹³ Le Bohec, “Le culte impérial...” cit. pp. 390-392, 397 y 400.

*Soli aeterno / Lunae / pro aeternitate im/peri(i) et salute Imp(eratoris) [C]ae<s>(aris) L(uci) / Septimi(i) Seueri Aug(usti) Pii et/ [Imp(eratoris)] Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini / Aug(usti) Pii [[[et P(ubli) Septimi Getae nob(ilissimi)]]] / Caes(aris) et [Iu]liae Aug(ustae) matris c[a]s[tr]orum / D(ecimus) Iun[ius (?)]----] Coelianus / u(ir) [c(larissimus) legatu]s Augustorum / cum Vale[r]ia Iu[?]ni[ana uxor(e)] sua et / Q(uintus) Iulius Satur[ninus et] / Q(uintus) Val[erius] Antoni[nus ----]*¹⁸⁹⁴

Este epígrafe presenta importantes problemas de lectura que afectan sobre todo al *praenomen* y *nomen* del gobernador y a la interpretación de la parte final conservada. En el nombre del gobernador seguimos con reservas a Alföldy, que lo identificó como *D(ecimus) Iun[ius (?)] Coelianus*¹⁸⁹⁵, teniendo presente la importante revisión reciente de este epígrafe llevada a cabo por A. Canto, que ha optado por seguir la lectura de un viajero británico del siglo XVIII, que recogió el nombre de *Drusus Valerius Caelianus*¹⁸⁹⁶. Estas incógnitas no están cerradas todavía, pero, por fortuna, no influyen en nuestro análisis.

Resulta muy interesante que durante su estancia en *Olisipo* un gobernador de la Lusitania –acompañado de unos *comites*– realizase un voto a Sol eterno y Luna por la eternidad del *imperium* y la salud de Septimio Severo, de sus hijos Caracala y Geta y de su esposa, Julia Domna, acompañado de algunos *comites*. Ya hemos mencionado la relevancia de esta ciudad en el contexto de la Lusitania, gracias a su papel económico como puerto principal de la provincia y a su situación estratégica en el marco de las comunicaciones terrestres. Ha quedado constancia epigráfica de tres gobernadores de la Lusitania que a finales del siglo II la visitaron y, precisamente, otro de ellos, Sexto Acidio/Tigidio? Perenne, también hizo una dedicatoria a Sol y Luna, aunque ligada a intereses personales¹⁸⁹⁷. De esta coincidencia se deduce que en *Olisipo* existía un culto importante a ambas divinidades. Tenemos constancia de gobernadores de otras provincias que, ya desde época republicana, visitaron sus santuarios más importantes y realizaron votos y sacrificios en nombre del Pueblo Romano, a veces motivados por

¹⁸⁹⁴ *HEp*, 14, 2005, 448 b. Anexo II: n° 50.

¹⁸⁹⁵ También lo sigue Saquete Chamizo, “El gobernador provincial...” cit. p. 92.

¹⁸⁹⁶ Así mencionado en *CIL* II, 259, p. 31, aunque en p. 693 se propone una variante.

¹⁸⁹⁷ *CIL* II, 258: *Soli et Lunae / Sext[i]us [Ti]gidius (?) / Perennis / leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / prouvinciae Lusitaniae. Fasti Hispanienses* p. 143, fecha su gobierno en torno al 185 d.C. En *HEp* 14, 2005, 448 a la lectura del *nomen* es Acidius.

circunstancias excepcionales¹⁸⁹⁸. En el caso del voto de Coeliano, la fama del culto olisiponense a Sol y Luna lo habría llevado a encomendar a ellas la salud y el *imperium* de Septimio Severo, que acaba de tomar el trono, y el futuro de la dinastía, demostrando su fidelidad hacia ella y ayudando a que se difundiese entre los olisiponenses y el resto de habitantes de la Lusitania. Además, como puerto *Olisipo* ofrecía una gran publicidad a esta manifestación de lealtad, pues era frecuentado por numerosas personas.

Estos dos últimos ejemplos de época severa se insertan dentro de una dinámica general que Fishwick ha encontrado en el conjunto del imperio: desde Septimio Severo se produce un énfasis en el culto al emperador vivo, que ya venía creciendo desde el período flavio y, sobre todo, durante el siglo II. Bajo Septimio Severo el poder imperial se volvió abiertamente autoritario como prueba tanto su purga del Senado como la implantación de la fórmula '*dominus noster*' en el ceremonial de la corte. En las dedicaciones realizadas en honor de la dinastía Severa se insiste en la alabanza a las virtudes imperiales y se tiende a establecer vínculos con ciertos emperadores anteriores, particularmente el *Diuus Marcus Aurelius* (del que el propio Septimio Severo se decía descendiente), Pértinax e incluso Cómodo. En las provincias, se hace hincapié en el *numen* del emperador y el carácter divino de sus virtudes y acciones. Además, la *domus* imperial ocupa un lugar central, jugando un papel más relevante que nunca las esposas y madres de los emperadores¹⁸⁹⁹. En los ejemplos que hemos visto, ese protagonismo corresponde a Julia Domna, que es mencionada con el epíteto de '*mater castrorum*', uno de los que se le atribuyeron con más frecuencia.

Conclusiones

Los gobernadores de las provincias hispanas desarrollaron un doble papel crucial en el establecimiento del culto al emperador en ellas. En primer lugar, en época augustea fueron los máximos responsables de la difusión del culto en las zonas recién conquistadas y poco romanizadas de su provincia. Concretamente, en el Noroeste peninsular impulsaron personalmente la implantación del culto a Roma y Augusto y de otros homenajes al *princeps*: Lucio Sestio Quirinal fue el primer gobernador occidental

¹⁸⁹⁸ Scheid, "Les activités..." cit. pp. 141-142; Haensch, *Capita provinciarum* cit. pp. 109-110, que menciona a las visitas que realizaron los gobernadores de Macedonia a un santuario de Samotracia a finales de la República y durante el Principado. Cf. Tac. *Ann.* II, 54.

¹⁸⁹⁹ Fishwick, *The Imperial Cult* III/1, pp. 197-198.

que erigió altares en honor de Augusto, en la efímera provincia Transduriana, y, una vez que ésta se integró en la Hispania Citerior, su testigo fue tomado por hombres pertenecientes al círculo íntimo del prínceps, Paulo Fabio Máximo y Gneo Calpurnio Pisón; el primero impulsando el culto y los homenajes a Augusto en dos las sedes conventuales de la *Gallaecia* –*Bracara Augusta* y *Lucus Augusti*–, el segundo dedicando un altar al emperador en la costa astur. A través de estos altares y homenajes dedicados a Augusto buscaron, por una parte, reforzar simbólicamente la política augustea que anunciaba la extensión del Imperio Romano hasta los confines del orbe; por otro, desarrollar un elemento aglutinador de las poblaciones conquistadas que consolidase su fidelidad hacia Roma a través de la fidelidad hacia su cabeza.

En segundo lugar, los gobernadores se encargaron de encauzar el modo en que debía organizarse el culto imperial a nivel provincial, siguiendo las instrucciones del poder central. Como ha mostrado Fishwick, al margen de las manifestaciones espontáneas de la colonia de *Tarraco*, la difusión e implantación del culto al emperador en el Occidente latino fue dirigida desde Roma, a diferencia de lo que sucedió en Oriente. En virtud de su situación privilegiada como intermediarios entre el poder central y las comunidades locales provinciales, los gobernadores eran los responsables de transmitir las decisiones tomadas en Roma que afectaban a su provincia, también en el ámbito del culto imperial. En las tres provincias hispanas, la evolución del culto imperial a nivel provincial estuvo supervisada por sus gobernadores, que se encargaron de dar a conocer las novedades que fueron apareciendo, sobre todo desde época flavia: la regulamentación rigurosa de la organización del sacerdocio dedicado a este culto y las atribuciones del *concilium prouvinciae* (esto es, la *lex de flamonio*), los emperadores que eran divinizados tras su muerte, los votos que debía realizar el conjunto de la provincia en su capital anualmente y las tropas asentadas en ella, las fórmulas empleadas (que también sufrieron cambios entre los siglos I y III), etc.

Al igual que sus homólogos de otras provincias de todo el imperio, los gobernadores de las provincias hispanas supervisaban el funcionamiento del *concilium prouvinciae*, controlando, por ejemplo, el gasto realizado en las estatuas erigidas en honor de sus *flamines* y del emperador en virtud de la *lex de flamonio*. Así, por ejemplo, el gobernador de la Lusitania Cayo Arruncio Catelio Céler supervisó la dedicación de una imagen al emperador Tito por parte del concilium de su provincia en 77 d.C.

Asimismo, los gobernadores presidían las ceremonias oficiales vinculadas al culto imperial provincial más importantes que se celebraban cada año coincidiendo con el inicio del año, el *dies imperii* de cada *princeps*, su natalicio y otras fechas señaladas, en las que se realizaban votos por la salud del emperador, de su familia y el bienestar y seguridad del imperio –cuestiones que formaban un binomio indisoluble.

Los gobernadores de la Hispania Citerior, además, podían ocuparse ellos mismos de realizar votos *pro salute principis* similares en los campamentos de las tropas que tuvieron a su cargo. En concreto, dejaron constancia de la realización de estos votos en el campamento de la *legio VII Gemina* en León un gobernador de época de Antonino Pío, Quinto Junio Rústico, y otro de Caracala, Cayo Junio Cereal. Finalmente, algunos gobernadores realizaron a título personal votos *pro salute principis* en santuarios señalados de su provincia, como hizo el gobernador de la Lusitania Coeliano, que dedicó a Sol y Luna en *Olisipo* un voto por la salud de Septimio Severo, sus hijos Caracala y Geta y su mujer Julia Domna.

CAPÍTULO 2: LA INTERVENCIÓN DE LOS GOBERNADORES EN LAS OTRAS MANIFESTACIONES DE LEALTAD HACIA EL EMPERADOR Y SU FAMILIA.

Los gobernadores provinciales también desempeñaron un importante papel en la realización de otros actos a través de los que las poblaciones provinciales mostraban su fidelidad al emperador. En las provincias hispanas altoimperiales contamos con ejemplos epigráficos de gran valor que nos han transmitido diversos tipos de demostraciones de fidelidad hacia el poder imperial, tales como *iusiuranda*, dedicciones honoríficas a miembros de la familia imperial o la difusión de decisiones relevantes del poder central (concretamente en forma de senadoconsultos relativos a los honores concedidos a Germánico y a la condena del responsable de su muerte, Pisón). Estos documentos son testimonios de gran valor para calibrar el grado de penetración de la ideología imperial en las provincias, los cauces oficiales usados por los emperadores para afirmar su posición en ellas y la fidelidad de sus habitantes, la circulación en el conjunto del Imperio Romano de las decisiones tomadas en su centro y el modo en que éstas se publicitaban y se ejecutaban. En todo ello, como veremos, los gobernadores de Hispania asumieron un papel importante como intermediarios entre el centro y las comunidades periféricas y como garantes de la correcta articulación de este tipo de dinámicas políticas.

Ius iuranda

Antes hemos visto que en dos de sus cartas Plinio el Joven informó a Trajano no sólo acerca de la correcta celebración de los votos por su salud en conmemoración de su *dies imperii*, sino también que tanto los soldados como los habitantes de su provincia habían procedido a hacer los juramentos de fidelidad pertinentes hacia su persona, que él

denomina *ius iuranda*¹⁹⁰⁰. Contamos con dos importantes ejemplos de estos *ius iuranda* realizados por comunidades locales en Hispania –uno en la Bética en época de Augusto y otro en Lusitania a inicios del reinado de Calígula–, que, además, son los únicos ejemplos epigráficos de este tipo de juramentos en las provincias occidentales. El resto de los conocidos han sido hallados en la parte oriental del imperio, concretamente en Samos y *Phazimon* (Paflagonia), ambos de época de Augusto; *Palaipaphos* (Chipre) fechado a inicios del principado de Tiberio; y *Assos* (Misia), dedicado a Calígula también en el 37¹⁹⁰¹.

En la provincia de la Bética, la comunidad estipendiaria de *Conobaria* (cerro de La Palmilla, Las Cabezas de San Juan, Sevilla¹⁹⁰²), realizó, probablemente en 6/5 a.C., un juramento *pro salute, honore, uictoria* de Augusto y sus nietos e hijos adoptivos Cayo y Lucio César y Agripa Póstumo:

*P(ublio) Petronio T(iti) f(ilio) T(urpiliano proco(n)s(ule)) / M(arco) Alfio G(ai) f(ilio) Lachete [quaestore (o legato pr(o) pr(aetore))] / T(itus) Quinctius T(iti) f(ilius) Silo p(o) D) [--- magistri et] / senatus et populus Co[nobariensium] / in ea ue[rba] iurauerunt] / [e]x mei animi sententia ut eg[o pro salute] / honore uictoria imp(eratoris) Caesa[r]is diui f(ili) / Augusti pontu[fi]cis maxum[i et G(ai) Caesaris] / [A]ugusti f(ili) princip[is] iu<u>entutis c[o(n)s(ulis) design(ati)] / pontuficis et pro L(ucii) Caesaris Aug[usti] f(ili) et M(arci)] / Agrippae Augusti nepotis seten[tiam] / faciam arma capiam eosdem [amicos] / sociosque quos eis esse intel[lexero] / habebo eosdemque inimicos m[eos] esse] / statuam quos eorum partibus [animad-]/uertero et si quis aduersus [eos aliquid] / fecerint senserint eos terr[a marique usque] / ad internicionem persequa[r---]*¹⁹⁰³

Como todo juramento, este *ius iurandum* tenía connotaciones religiosas y, al igual que los votos a los que antes nos hemos referido, incluyó la salud del *princeps* y sus hijos entre los propósitos del mismo, junto con el honor y la victoria. Como mostró

¹⁹⁰⁰ Plin. *Ep.* X, 52 y 102. En la primera: *Praeiuiumus et commilitonibus ius iurandum more sollemni, eadem prouincialibus certatim pietate iurantibus.*

¹⁹⁰¹ P. Herrmann, *Der römische Kaisereid: Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung*, Göttingen, 1968, pp. 14-15 y 122-126.

¹⁹⁰² No existe consenso en la ubicación de la antigua *Conobaria*. Nosotros seguimos la hipótesis de J. González en *CILA* II, 990, p. 348. Un resumen del resto de teorías con bibliografía en pp. 345-345 del mismo volumen.

¹⁹⁰³ *CILA* II, 990. Anexo II: n° 55.

J. González, este juramento, que sigue la tradición establecida en Occidente desde el 32 a.C. —cuando Italia y las provincias de esta parte del imperio le juraron lealtad antes del enfrentamiento definitivo contra Antonio en *Actium*¹⁹⁰⁴— se llevó a cabo con motivo de la introducción en la vida política de Cayo César en 6 a.C.¹⁹⁰⁵. Este juramento tenía, pues, un carácter militar y, en cierto modo, “clientelar” a un tiempo¹⁹⁰⁶. Los formulismos que se emplean en él, comenzando por el uso de la expresión ‘*iurare in uerba*’, lo vinculan con un contexto militar, mientras que se refrenda la posición subordinada de esta comunidad respecto al *princeps* a través de la mención expresa de que combatirá contra sus enemigos por tierra y por mar junto con el resto de aliados del emperador (líneas 12 ss.).

No cabe duda de que este juramento, como la *coniuratio* del 32 a.C., fue promovida por el poder imperial. En 6 a.C. se dieron los primeros pasos con los que Augusto pretendía asegurar la continuidad dinástica de su régimen, a través de Cayo y Lucio César, y, con el fin de refrendar el *consensus uniuersorum* en el que Augusto había fundado su principado, resultaba necesario contar con una demostración de fidelidad de las provincias hacia la casa imperial. Como ha señalado González, cada comunidad provincial reflejaría su lealtad a su manera, bien con la consagración de votos, bien con fiestas, bien con juramentos como el de *Conobaria*. En todo caso, el gobernador de cada provincia era el supervisor de estos actos —como en el caso de los *uota pro salute principis* realizados por los provinciales y los juramentos militares antedichos— y por ello no es de extrañar que el *iusiurandum Conobariensium* aparezca encabezado en su datación no con el nombre de los cónsules de aquel año, sino con el del procónsul de la Bética, Publio Petronio Turpiliano, y su cuestor o legado, Marco Alfio Laches.

¹⁹⁰⁴ RGDA 25: *Iurauit in mea uerba tota Italia sponte sua, et me belli quo uici ad Actium ducem depoposcit; iurauerunt in eadem uerba prouinciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia*. Cf. Syme, *The Roman Revolution* cit. pp. 288-292, quien remarca que tanto en Italia como en las provincias occidentales tuvieron un papel fundamental en el juramento del 32 a.C. las colonias deducidas con veteranos del ejército afectos a Octaviano (pp. 289 y 292). Véase también el comentario de P. A. Brunt — J. M. Moore (ed.) *Res Gestae Divi Augusti. The Achievements of the Divine Augustus*, Oxford, 1967, pp. 67-69.

¹⁹⁰⁵ J. González, “The First Oath *pro salute Augusti* found in Baetica”, *ZPE* 72, 1988, pp. 113-127, esp. pp. 118-122, en donde señala que la *coniuratio* del 32 a.C., a su vez, tenía un precedente en el que tributaron a César en 44 a.C.

¹⁹⁰⁶ Como en la *coniuratio* del 32 a.C. Syme, *The Roman Revolution* cit. p. 288, lo explicó concisamente de manera magistral: “The oath embraced all orders of society and attached a whole people to the *clientela* of a party-leader, as clients to a patron, as soldiers of an *imperator*.”

A pesar de que en época augustea los procónsules aún mantenían cierta independencia frente al emperador, ya estaba en marcha el proceso de su subordinación efectiva a éste, así que es muy pertinente la presencia de Turpiliano en estos actos, que, al fin y al cabo, representaban una forma de reconocimiento del orden existente en el imperio. La relevancia del papel del procónsul vendría remarcada en el bronce por el tamaño de las letras de su nombre, mayor con diferencia al del resto del texto epigráfico. Estamos de acuerdo con González en que la coincidencia de este juramento de fidelidad con la *deductio in forum* de Gayo César –al igual que el de Samos– indica que fue promovido por el propio poder imperial con el fin de asegurar la lealtad de los provinciales –tanto de comunidades privilegiadas como peregrinas– a la casa imperial y, por ende, una sucesión tranquila en el futuro¹⁹⁰⁷. El procónsul de la Bética Turpiliano, al igual que sus homólogos de las provincias hispanas y del resto del imperio, se ocuparía de ejecutar los deseos del *princeps*, animando a los notables de las principales comunidades de su provincia a realizar el juramento y demostrar su lealtad al emperador y su reconocimiento de la política dinástica. Como ha señalado González, en estos casos hispanos, como en los de Samos o *Phazimon* en Paflagonia, las comunidades provinciales estarían actuando de acuerdo con los deseos del emperador, aunque, según este autor, los actos concretos con los que se demostraría la adhesión serían decisión de cada comunidad¹⁹⁰⁸. En nuestra opinión, es muy probable que así sucediera en Oriente, cuyas ciudades estaban habituadas desde hacía varios siglos a realizar diferentes tipos de manifestaciones de fidelidad o ensalzamiento de los reyes helenísticos¹⁹⁰⁹, pero en Occidente los gobernadores probablemente tuvieron una mayor influencia, aconsejando el modo exacto, según fórmulas puramente romanas, en que las comunidades de su provincia debían jurar lealtad a Augusto y a sus hijos adoptivos, sobre todo en el caso de las *ciuitates stipendiariae* como *Conobaria*, dado que carecían de un desarrollo cívico y de una tradición jurídica en la que basarse. Como muestra el epígrafe

¹⁹⁰⁷ González, “The First Oath...” cit. pp. 119-121; *CILA* II, 990, p. 349; C. Castillo, “El nuevo juramento a Augusto encontrado en la Bética”, en Y. Le Bohec (ed.) *L’Afrique, la Gaule, la Religion à l’époque romaine. Mélanges M. Le Glay*, Bruselas, 1994, pp. 681-686.

¹⁹⁰⁸ González, “The First Oath...” cit. p. 121; *CILA* II, 990, p. 349.

¹⁹⁰⁹ Herrmann, *Der römische Kaisereid...* cit. pp. 21-49 y 90-99, veía una raíz helenística en el origen de los juramentos al emperador (*Kaisereid*), el cual atribuía más a la iniciativa de las ciudades que a la de Augusto. Sin embargo, González, “The First Oath...” cit. p. 120 ha demostrado, a nuestro juicio, que ya en época de Augusto tanto los juramentos conocidos en Oriente como los de Occidente (*Conobaria*) estaban vinculados a la política dinástica y su realización habría sido fomentada por las autoridades romanas en las provincias siguiendo los deseos del *princeps*.

fragmentario que recoge el juramento de *Sentinum* (Umbria), se utilizaría el mismo modelo que en Italia, muy similar al que, según Livio, realizó el joven Escipión tras la batalla de Cannas¹⁹¹⁰. Resulta improbable que el procónsul Petronio Turpiliano se acercara en persona a *Conobaria* para presidir el juramento. Nos inclinamos por pensar que los representantes de los conobarienses fueron llamados a la capital provincial o bien a la sede conventual a la que estaban adscritos, *Hispalis*, para recibir las instrucciones pertinentes. Los elegidos como delegados fueron Tito Quinctio Silo y otro hombre cuyo nombre se ha perdido (muy probablemente magistrados de su comunidad). Ellos mismos se habrían encargado de dirigir el juramento y de comunicar al procónsul –bien directamente, bien a través de su cuestor (o legado), Marco Alfio Laches–, que se había realizado según la fórmula establecida, la cual se plasmó en este bronce como símbolo de su perennidad y con el objetivo de que estuviese expuesto públicamente en la propia *Conobaria*.

También en un momento de gran relevancia política realizó su juramento la comunidad lusitana de *Aritium* (Alvega, Abrantes, Portugal): en el 37 d.C., año en que Calígula accedió al trono:

C(aio) Vmmidio Durmio Quadrato / leg(ato) C(ai) Caesaris Germanici imp(eratoris) / pro praet(ore) / Iusiurandum Aritiensium: // Ex mei animi sententia ut ego iis inimicus / ero quos C(aio) Caesari Germanico inimicos esse / cognouero et si quis periculum ei salutiq(ue) eius inferit intuleritue armis bello interneciui / terra mariq(ue) persequi non desinam quo ad / poenas ei persoluerit neque liberos meos / eius salute cariores habebo eosq(ue) qui in / eum hostili animo fuerint mihi hostes ese / ducam si sciens fallo fefelleroue tum me / liberosq(ue) meos Iuppiter Optimus Maximus ac / Diuus Augustus ceteriq(ue) omnes di immortales / expertem patria incolumitate fortunisque / omnibus faxint a(nte) d(iem) V idus Mai in / Aritiense oppido ueteri Cn(eo) Acerronio / Proculo,

¹⁹¹⁰ *CIL* XI, 5998a. Este juramento presenta importantes paralelismos con el de *Aritium* y por ello fue datado por los editores del *CIL* en 37 d.C. Sin embargo, el plural ‘*eorum*’ usado para referirse a los destinatarios del juramento (‘*qui in eorum quem hostili animo erunt*’) supone un escollo para aceptar esa hipótesis y ha llevado a algunos autores a encuadrarlo en época augustea. Cf. Herrmann, *Der römische Kaisereid...* cit. p. 53; Castillo, “El nuevo juramento...” cit. p. 685. Juramento presidido por Escipión: Liv. XXII, 53, 10. Castillo, *Idem*, p. 684, piensa que el juramento citado por Livio “parece responder más bien al uso establecido en la época en que vivía el historiador que a la realidad ocurrida doscientos años antes”. Con todo, es un ejemplo más de su vigencia en época augustea.

*C(aio) Petronio Pontio Nigrino co(n)s(ulibus), / mag(istratibus) / Vegeto, Tallici -----
ibio --- Arioni*¹⁹¹¹

Los paralelismos entre este *ius iurandum* y el de *Conobaria* son evidentes. En primer lugar, se trata de *ciuitates stipendiariae*. El juramento aparece encabezado por el nombre del gobernador —en este caso el legado imperial de Lusitania— y se menciona a los magistrados de la comunidad peregrina que en representación de ella acudieron ante el gobernador para recibir las instrucciones acerca de los pasos que debía seguir su comunidad en la realización del juramento. Como en el de *Conobaria*, la comunidad asume como propios a los enemigos del emperador y se compromete a combatirlos *terra marique*.

Sin embargo, este juramento sólo está dirigido al emperador, dado que acababa de acceder al trono y todavía no contaba con sucesores. La práctica de que los gobernadores provinciales se encargasen de que las comunidades provinciales pronunciaran un juramento de fidelidad al emperador al inicio de su reinado comenzó con Tiberio: sabemos que Germánico se aseguró en persona de que las *ciuitates* belgas lo llevaran a cabo¹⁹¹². Era un complemento del juramento tomado por los senadores, los caballeros y la plebe de Roma¹⁹¹³. El juramento de *Aritium*, sin embargo, sí podría haber incluido a Gemelo, que había sido nombrado heredero por su abuelo Tiberio en su testamento en igualdad de condiciones con Calígula, a pesar de no haber asumido todavía la toga viril. Su ausencia no sólo se debería a esta circunstancia, sino que indica la voluntad de Calígula de gobernar en solitario. El prefecto del pretorio, Macro, se encargó de anular el testamento de Tiberio y de ganar para Calígula el respaldo de todos los gobernadores y de sus provincias. Los juramentos realizados en *Assos* y *Aritium* serían resultado de este empeño¹⁹¹⁴.

Los Aritienses juraron por Júpiter Óptimo Máximo y el Divino Augusto, introduciendo con ello no sólo la idea de soberanía universal refrendada por el más importante de los dioses del panteón romano tradicional sino la ascendencia divina del nuevo emperador. Esta costumbre de mencionar al Divino Augusto acompañando a

¹⁹¹¹ *CIL* II, 172. Anexo II: n° 43.

¹⁹¹² Tac. *Ann.* I, 34, 1. Cf. Brunt – Moore (ed.), *Res Gestae*... cit. p. 67, que señalan que estos juramentos de fidelidad al emperador al inicio de su principado fueron renovados anualmente a partir de Calígula.

¹⁹¹³ Tac. *Ann.* I, 7, 3.

¹⁹¹⁴ A. A. Barrett, *Caligula. The Corruption of Power*, Londres, 1989, p. 54.

otros dioses comenzó también en época de Tiberio como atestigua el juramento hallado en Chipre datado en 14 d.C.¹⁹¹⁵. El *iusiurandum Aritiensium*, por tanto, entronca directamente con el culto imperial, que en ese momento, como hemos visto, estaba bien asentado a nivel provincial en la Lusitania¹⁹¹⁶ y su realización se habría visto acompañada de los antedichos votos *pro salute principis*.

Es muy importante señalar que el papel del gobernador de la Lusitania fue el mismo que el del procónsul de la Bética. Su condición de legado imperial, por tanto, no influyó en su participación en estos actos y ambos gobernadores representaron al emperador en esos juramentos, sin que su subordinación o autonomía auspicial respectivas los condicionaran. Sin embargo sí parece que la intervención de los gobernadores de la Bética y la Lusitania fue más activa en la realización de estos juramentos respecto a la de los de Oriente. No parece fruto de la casualidad o de una decisión arbitraria el hecho de que los gobernadores de la Bética y la Lusitania aparezcan mencionados en el encabezamiento de estas inscripciones de *Conobaria* y *Aritium* mientras que sus homólogos de las provincias orientales estén ausentes en las de Samos, *Phazimon*, *Palaipaphos* y *Assos*. En nuestra opinión, esta diferencia se debe a que en el ámbito griego los gobernadores se limitarían a transmitir los deseos imperiales y asegurarse de que el juramento se realizara, dado que las ciudades conocían perfectamente los pasos a seguir gracias a su larga tradición políada y a la experiencia acumulada en este tipo de homenajes bajo las monarquías helenísticas. En cambio, en Occidente las comunidades locales se enfrentaban a una práctica novedosa y necesitaban de una guía; con más razón en los dos ejemplos conocidos, pues tienen como protagonistas a dos *ciuitates stipendiariae*. Por ello, los gobernadores de la Bética y la Lusitania habrían dirigido todo el proceso. Ellos se habrían encargado de entregar a los representantes de estas comunidades el modelo de juramento y las instrucciones pertinentes que debían seguir en la ceremonia solemne en su comunidad y también les habrían proporcionado los eneicidas que dejaron constancia en sus respectivos bronces de que lo habían cumplido rigurosamente. Aunque no existen pruebas, no podemos descartar que se conservase una copia de estos juramentos en los archivos provinciales.

¹⁹¹⁵ T. B. Mitford, "A Cypriot Oath of Allegiance to Tiberius" *JRS* 50, 1960, pp. 75-79.

¹⁹¹⁶ Castillo "El nuevo juramento..." cit. p. 685, quien también vincula el de *Conobaria* con el desarrollo del culto imperial.

Como hemos visto antes a propósito de los votos *pro salute principis*, estas demostraciones de fidelidad hacia el emperador, tanto cuando accedía al trono como al inicio de cada nuevo año, se establecieron en todas las provincias y acabaron siendo realizadas en nombre de toda la provincia por su *concilium* o *koiné* en una sesión presidida por el gobernador provincial¹⁹¹⁷. La realización de los *ius iuranda* era un importante símbolo de adhesión de las élites locales al emperador, especialmente necesario cuando éste acababa de acceder al trono.

Como ha señalado E. Flaig, la posición del titular del poder imperial se fundamentaba no sólo en la legitimidad jurídica de sus poderes, sino también en la “aceptación” de su posición por parte de los diferentes colectivos sociales que actuaban como actores principales en la política romana. Flaig señala, en concreto, al Senado y la plebe de Roma y al ejército¹⁹¹⁸. En nuestra opinión a este esquema ha de añadirse un último grupo de presión: el formado por las aristocracias provinciales, cuyas demostraciones de “aceptación” o consenso hacia los emperadores fueron cada vez más importantes a lo largo del Principado, sobre todo desde el 68 d.C. Los dos *ius iuranda* hispanos muestran que a inicios del Principado los gobernadores de sus provincias tuvieron un importante papel, que se manifestó no sólo en que controlaban su realización y el estado de la lealtad de los provinciales —como sucedía en la parte oriental del imperio—, sino en que, además, el emperador les confió la misión de introducir el modelo de juramento de cuño romano que debía seguirse, asesorando a las élites locales sobre cómo realizarlo y animándolas a demostrar su fidelidad al emperador.

Dedicaciones en honor del emperador o de miembros de su familia

Aparte del culto imperial, los *uota pro salute principis* y los juramentos de lealtad hacia su persona, los gobernadores provinciales también intervinieron de diversas formas en los homenajes rendidos a los emperadores en su provincia. La lealtad de una comunidad, un colectivo determinado o una provincia en su conjunto hacia el

¹⁹¹⁷ Tac. *Hist.* II, 81: Muciano presidió el concilio en el que la provincia de Siria juró lealtad a Vespasiano en 69.

¹⁹¹⁸ E. Flaig, *Den Kaiser herausfordern: die Usurpation im Römischen Reich*, Frankfurt am Main, 1992; “How Emperor Nero...” cit. p. 275 ss.; “A Coherent Model to understand the Roman Principate: ‘Acceptante’ instead of ‘Legitimacy’ and the Problem of Usurpation”, en Ferrary – Scheid (cura) *Il princeps romano...* cit. pp. 81-100.

emperador y su familia solía manifestarse a través de la dedicación de estatuas u otros monumentos honoríficos (arcos, por ejemplo). En Hispania sólo contamos con un testimonio que menciona explícitamente la intervención del gobernador como dedicante, pero en nuestra opinión los gobernadores de las provincias hispanas podrían haber intervenido en otras de las dedicaciones honoríficas que las comunidades hispanas dedicaron a los emperadores y los miembros de la familia imperial, sobre todo a inicios del Principado.

El epígrafe que menciona explícitamente a un gobernador procede de la colonia de *Metellinum* (Medellín), adscrita al *conuentus Emeritensis*. Se trata del pedestal de una estatua que el gobernador de la Lusitania, Marco Porcio Catón, dedicó al emperador Claudio en 46 d.C.¹⁹¹⁹:

[Ti(berio) Claudi]o Caesari A[u]g(usto) Germanico] / [pont(ifici) max(imo)
tr]ib(unicia) potest(ate) VI co(n)s(uli) d[esign(ato) IIII p(atri) p(atriciae)] / [M(arcus)
Porcius M(arci?)] f(ilius) Cato leg(atus) Caes[aris - - -]¹⁹²⁰

La dedicación de este gobernador de nombre ilustre, a pesar de que la realizó a título personal, hubo de tener un importante impacto entre los habitantes de *Metellinum* como ejemplo a seguir. No existe noticia alguna de que esta colonia hubiese funcionado en algún momento como sede conventual, así que la presencia de Catón en ella hubo de deberse a alguna petición específica presentada en *Augusta Emerita*, su sede conventual, reclamando su presencia. *Metellinum* distaba poco de *Emerita* y estaba conectada con ella a través de una vía en la que confluían dos importantes rutas citadas en el Itinerario de Antonino (la XI y la XXIX), que unían *Emerita* con *Corduba* y con *Caesaraugusta*, respectivamente¹⁹²¹. Por tanto, existían las condiciones necesarias para que Catón pudiese desplazarse hasta *Metellinum* con facilidad sin invertir demasiado tiempo en su estancia. De ser cierta esta hipótesis, sería una prueba más de que los gobernadores podían visitar otras ciudades al margen de las sedes conventuales y, por tanto, variar sobre la marcha, durante ciertos días, su programa de trabajo en su itinerario por la

¹⁹¹⁹ *Fasti Hispanienses* p. 138.

¹⁹²⁰ *CIL* II, 608. Anexo II: n° 47.

¹⁹²¹ Saquete Chamizo, “El gobernador provincial...” cit. p. 90.

provincia –aunque seguramente no se alejarían mucho de la sede más cercana. En nuestra opinión, la erección de esta estatua podría esconder tras de sí el patronazgo de este gobernador sobre la colonia o, al menos, una estrecha relación con las élites de la colonia. Si no, carecería de sentido que Catón dedicase una estatua al emperador de su propio peculio fuera de la capital provincial, que era el lugar donde más publicidad podría tener tanto a nivel provincial como en la propia Roma.

El resto de inscripciones honoríficas dedicadas a los emperadores o los miembros de su familia halladas en la Península Ibérica se deben a la iniciativa de las comunidades o particulares provinciales. Sin embargo, en nuestra opinión, es posible deducir la intervención en ellas de los gobernadores de estas provincias como actores secundarios en las regiones menos romanizadas, asesorando a sus comunidades acerca del modo en que debían producirse los homenajes al emperador y su familia cuando deseaban realizarlos. Asimismo, los representantes de cualquier comunidad – privilegiada o no– necesitarían acudir a ellos para conocer la titulación oficial precisa vinculada al personaje homenajeado. Finalmente, dentro de su misión de proteger la majestad imperial, los gobernadores se preocupaban de que se respetasen las estatuas y las otras imágenes que representaban al emperador¹⁹²². Atentar contra ellas se equiparaba a atacar al propio *princeps* y el responsable podía ser acusado del *crimen maiestatis*¹⁹²³.

Entre las inscripciones conocidas en 1996, F. J. Navarro contabilizó 177 dedicadas a emperadores o familiares de éstos en Hispania entre Augusto y Cómodo. De ellas, destacan en número las realizadas bajo Augusto y Tiberio, 65, de las cuales 47 se refieren no a ellos, sino a miembros de su familia: Agripa y sus hijos, Tiberio antes de ser emperador, su hijo Druso, etc. Con posterioridad a este período los homenajes se concentran en la figura del emperador, sobre todo en los siglos II y III¹⁹²⁴. Como bien ha observado Hurlet, estas dedicaciones se derivan de la importante política dinástica

¹⁹²² Arrian. *Perip.* 1, 3-4.

¹⁹²³ Suet. *Tib.* 58; Tac. *Ann.* I, 74, 3 y III, 70. Cf. Ando, *Imperial Ideology...* cit. p. 221.

¹⁹²⁴ F. J. Navarro, “La presencia del emperador en las ciudades de la Hispania romana”, en C. Castillo – F. J. Navarro – R. Martínez (eds.) *De Augusto a Trajano. Un siglo en la historia de Hispania*, Pamplona, 2001, pp. 33-55, esp. pp. 43-44.

desarrollada por Augusto con la que pretendía asegurar el consenso general en torno a sus sucesores¹⁹²⁵.

Sin poner en cuestión la espontaneidad y sinceridad de la iniciativa local en estos homenajes –en general, estatuas honoríficas–, no cabe duda de que estas manifestaciones fueron incentivadas por parte del poder central. Y es ahí donde intervendrían los gobernadores.

En las regiones menos romanizadas, como el Noroeste peninsular o el interior de la Lusitania, se encargarían de guiar a los notables locales en la forma conveniente de honrar al emperador y su familia; por ejemplo, en las dedicaciones en honor de Cayo César¹⁹²⁶ y su hermano menor Agripa Póstumo¹⁹²⁷ que se realizaron en *Bracara Augusta*; o en la que la *ciuitas Igaeditana* (Lusitania) realizó en honor del primero¹⁹²⁸. Teniendo en cuenta que estos homenajes se produjeron en el contexto de la potenciación de ambos lugares como centros territoriales¹⁹²⁹ –sobre todo en el caso de *Bracara*, designada sede conventual–, los gobernadores de la Hispania Citerior y la Lusitania, respectivamente, pudieron haber asesorado a los indígenas locales acerca de cómo realizar estos homenajes según la costumbre romana, al igual que sucedió con la difusión del culto imperial y los *ius iuranda*. En concreto, la dedicación a Cayo César por parte de la *Gallaecia* pudo haberse producido bajo el gobierno de Paulo Fabio Máximo (4-1 a.C.), amigo íntimo de Augusto que, como hemos visto, fue especialmente activo en la difusión del culto imperial en el Noroeste y, por tanto, no sería de extrañar que auspiciase otras manifestaciones de adhesión de las poblaciones locales a la casa imperial.

Sin embargo, esta inscripción presenta varios problemas. En primer lugar, sólo la conocemos a través de la transmisión textual. En segundo, contiene una anomalía: el título de augur, sacerdocio que no desempeñó Cayo sino su hermano Lucio¹⁹³⁰. Esto, y el hecho de que la dedicante sea una región que carecía de categoría jurídico-administrativa en esa época, han llevado recientemente a A. M. S. Tarrío a señalar que

¹⁹²⁵ Hurlet, *Les collègues...* cit. pp. 446-448.

¹⁹²⁶ *CIL* II, 2422: *C(aio) Caesari Aug(usti) f(ilio) / pontif(ici) auguri / Gallaecia*.

¹⁹²⁷ *AE* 1974, 392: *M(arco) Agrippae M(arci) f(ilio) / nepoti Aug(usti) Caesar[is] / Bracaraugustan[i]*.

¹⁹²⁸ *AE* 1961, 246 y 350: *C(aio) Caesari Augusti f(ilio) / pontif(ici) co(n)s(uli) imp(eratori) / principi iuuentutis / Ciuitas Igaedit(anorum)*.

¹⁹²⁹ P. C. Carvalho, “O *forum* dos *Igaeditani* e os primeiros tempos da *Civitas Igaeditanorum* (Idanha-a-Velha, Portugal)”, *AEspA* 82, 2009, pp. 115-131.

¹⁹³⁰ *CIL* VI, 898; *AE* 1980, 448 (*Rusellae*, Italia).

se trataría de una manipulación del Renacimiento propia del ambiente humanista portugués. Sin embargo, como señala *Hispania Epigraphica*, a pesar de ser muy sugerente, esta teoría ha de ser tomada con cautela, teniendo en cuenta los paralelos bracarenses de este tipo de homenajes y que esta misma inscripción sigue estando documentada en el siglo XVIII¹⁹³¹. A nuestro juicio, sobre todo resulta extraño el error en la mención del augurado, pero, teniendo en cuenta que esta dedicación pudo ir acompañada de otra a Lucio César, el error podría deberse al lapicida que se habría encargado de ambas. De ser auténtica la inscripción, hemos de entender que bajo el nombre de *Gallaecia* se hallan representadas las principales comunidades de los *conuentus* lucense y bracarense, que no pudieron haber acordado ese homenaje sino en una reunión común a la que habrían asistido sus notables. Es decir, en un *concilium* que habría sido convocado en *Bracara* por el gobernador en las fechas en que habría visitado el Noroeste.

En cuanto a la realizada en honor de Agripa Póstumo, dado que sin duda es anterior a su adopción por parte de Augusto, nos inclinamos por fecharla en el momento de su nacimiento (12 a.C.). De ser correcta esta hipótesis, el gobernador que podría haber animado a los bracaraugustanos a realizar este homenaje sería Marco Licinio Craso Frugi, que gobernó la Citerior en 13-10 a.C.¹⁹³². Desafortunadamente, no es posible realizar ninguna hipótesis acerca de quién gobernaba la Lusitania en 5 a.C., pues existen importantes lagunas en lo que respecta a sus *fasti* en tiempos de Augusto¹⁹³³.

No pretendemos negar el protagonismo de las comunidades indígenas en estas dedicaciones, pero existe un condicionante que no debemos olvidar: sólo las autoridades romanas de su provincia y, en particular, el gobernador —en tanto que senador y gracias a su relación directa con el emperador—, conocían de primera mano las noticias de los acontecimientos ligados a la familia imperial y la titulación que debía emplearse en cada momento en los homenajes tributados a cada uno de sus miembros. Por tanto, sólo a través de los gobernadores las élites indígenas podían acceder a esa información, cuyo contenido, además, les era absolutamente ajeno en una fase tan temprana del Principado y de su propia integración en el mundo romano.

¹⁹³¹ *HEp.* 19, 2013, 466.

¹⁹³² *Fasti Hispanienses* p. 8-9.

¹⁹³³ Véase el vacío existente en el Apéndice I y en *Fasti Hispanienses* pp. 133-134 y 218-219.

En las colonias y municipios del imperio es donde se ha hallado mayor número de dedicaciones a miembros de la familia imperial. En Hispania tenemos constancia de dedicaciones realizadas en honor de Cayo César, Lucio César, Agripa Póstumo o Tiberio en época de Augusto y durante el Principado de su sucesor de Germánico y Druso el Joven¹⁹³⁴. En particular destacan las realizadas en *Caesaraugusta*, Sagunto y Ulia, donde se erigieron importantes grupos estatuarios en los que estos personajes estuvieron representados junto a Augusto. El grupo de la colonia de *Caesaraugusta* se ha podido conocer gracias a una serie de dupondios acuñados en ella en 4/3 a.C. Se trata de un conjunto formado por tres estatuas que representaban a Augusto (*capite uelato*) acompañado de Gayo y Lucio César, y estaría situado probablemente en el foro de la colonia¹⁹³⁵. En Sagunto y Ulia es la epigrafía la que ha conservado el recuerdo de estos homenajes. En el municipio de Sagunto se ha hallado cinco epígrafes dedicados a miembros de la familia imperial bajo Augusto y Tiberio. Las más antiguas están dedicadas a Augusto y Gayo César en sendos pedestales coetáneos, datados también entre julio del 4 y junio del 3 a.C. gracias a la mención de la vigésima potestad tribunicia del *princeps*. Este grupo estaría ubicado en el *aedes Augusti* de la basílica de la ciudad¹⁹³⁶. Finalmente, el municipio romano bético de Ulia es precisamente conocido por la serie de dedicaciones a la dinastía Julio-Claudia que se hallaron en él, en honor de Augusto, Agripa, sus tres hijos –Cayo César, Lucio César y Agripa Póstumo–, Tiberio (antes de su adopción por parte de Augusto) y Antonia la Menor. Lamentablemente, la mayoría de estas inscripciones han desaparecido y existen dudas acerca de cómo era su soporte, lo cual, como bien señala Hurlet, pone en duda la existencia de un conjunto bien articulado como sugería Mommsen¹⁹³⁷. Además, las dedicaciones son muy concisas y, a excepción de Agripa Póstumo (por entonces un *pupus*), todos ellos son honrados en calidad de patronos, sin que se especifique ninguna titulación¹⁹³⁸.

¹⁹³⁴ Han dejado huella epigráfica las de Ulia, Sagunto, *Anticaria* y *Segobriga*. Cf. Hurlet, *Les collègues...* cit. pp. 595-598. Véase también el grupo escultórico formado por Augusto *capite uelato*, Tiberio y Druso el Mayor que se hallaba en el aula sacra del peristilo del teatro de *Emerita Augusta*.

¹⁹³⁵ *RPC* 319; Hurlet, *Les collègues...* cit. p. 459 y fig.9.

¹⁹³⁶ Hurlet, *Les collègues...* cit. pp. 460 y 596.

¹⁹³⁷ *CIL* II, 1525. Según el sabio prusiano, este conjunto dinástico se habría levantado poco después de la muerte de Agripa.

¹⁹³⁸ Hurlet, *Les collègues...* cit. pp. 461 y 595-596.

Estos grupos estatuarios fueron dedicados por estas comunidades en demostración de su fidelidad hacia la dinastía imperial. En este sentido, algunas ciudades del imperio, como *Nemausus* en la Galia Narbonense, establecieron lazos muy estrechos con los *principes iuuentutis* y llegaron a tomar partido políticamente. Cuenta Suetonio que tras la marcha de Tiberio a Rodas, los ciudadanos de *Nemausus* tiraron sus retratos y estatuas en los lugares públicos donde se hallaban¹⁹³⁹.

La intervención de los gobernadores en estas manifestaciones de lealtad se reduciría, a nuestro juicio, a anunciar a través de edictos puntuales los principales acontecimientos en la vida de la familia imperial (nacimientos, defunciones, adopciones...), resolver dudas en torno al título apropiado que debía llevar cada miembro de la familia imperial en cada momento cuando las autoridades de las ciudades desearan plasmarlas, y también supervisar el estado de las estatuas y su verosimilitud con los homenajeados.

La existencia de un limitado número de modelos usado en los retratos de los emperadores prueba que sus representaciones partían de una serie de modelos oficiales aprobados por el poder imperial, que a veces fueron combinados por los artistas que los realizaron o adaptados a la calidad de los materiales que tuvieron a su disposición¹⁹⁴⁰. El conocimiento del modo en que comenzaron a extenderse los modelos de los retratos imperiales en las provincias es aún limitado, pero la historiografía se inclina por atribuir su dispersión mayoritaria, al menos a inicios del Principado, al mercado artístico: existirían prototipos en terracota sacados de los retratos oficiales aprobados por el emperador que se ofrecerían a las comunidades provinciales. A tenor de las copias conservadas de las estatuas y retratos imperiales, y de los testimonios epigráficos y literarios acerca de tales homenajes, se observa que este mercado sería muy productivo. Existiría una gran demanda, dado que las comunidades también competirían en sus manifestaciones de lealtad hacia el poder imperial¹⁹⁴¹. Además, las representaciones del emperador y los miembros de su familia pronto fueron imitadas por las élites locales en su propia autorrepresentación¹⁹⁴². Sin embargo, los retratos de los emperadores no

¹⁹³⁹ Suet. *Tib.* 13, 1.

¹⁹⁴⁰ Zanker, *Augusto y el poder...* cit. pp. 346-349; D. Boschung, "L'esempio del ritratto imperiale", en J. Arce – S. Ensoli – E. La Rocca (cura), *Hispania romana. Da terra di conquista a provincia dell'impero*, Roma, 1997, pp. 239-243, esp. p. 239.

¹⁹⁴¹ J. Pollini, *The Portraiture of Gaius and Lucius Caesar*, Nueva York, 1987, pp. 2-3.

¹⁹⁴² Zanker, *Augusto y el poder...* cit. p. 349. Como ha señalado T. Nogales, "Autorrepresentación de las élites provinciales: el ejemplo de *Augusta Emerita*", en Navarro Caballero – Demougin (ed.) *Élites*

siempre tendrían la misma calidad y los gobernadores de Hispania, al igual que hizo Arriano en Trapezunte, probablemente se preocuparon de hacer cambiar aquellas situadas en los espacios públicos que fuesen de escasa calidad o no fuesen apropiadas con el fin de que todas se adecuasen a unos cánones mínimos dignos de la majestad imperial. A partir de Domiciano los emperadores procuraron controlar más la forma y el estilo de las estatuas imperiales que se erigían en Roma¹⁹⁴³. En las provincias, como hemos visto, los gobernadores debían dar el visto bueno a las estatuas que el concilio provincial dedicaba a los *Diui* y al emperador vivo, según se establece en la *lex de flamonio* narbonense de época flavia –cuyas disposiciones, como hemos dicho, se aplicaron en las provincias hispanas. No parece que existiese un control sistemático similar del resto de estatuas honoríficas erigidas en las colonias y municipios provinciales, pero es probable que los gobernadores –sobre todo a partir de Domiciano– velasen por la correcta representación del emperador y su familia y su adecuada disposición y cuidado en los monumentos que hallaban en las ciudades que visitaban en su itinerario conventual¹⁹⁴⁴.

Estos testimonios, por tanto, aportan pruebas de la implicación de los gobernadores de las provincias hispanas en el reforzamiento de la política dinástica en época augustea, presentándolos, de nuevo, como intermediarios fundamentales entre el centro y la periferia.

La difusión de los documentos oficiales relativos a honores o sucesos relacionados con la dinastía imperial

Los gobernadores provinciales contribuían de una última forma no menos importante a reforzar los vínculos entre las poblaciones de la periferia y el centro del imperio y, paralelamente, a afirmar la lealtad de los provinciales hacia el emperador y

hispaniques cit. pp. 121-138, esp. pp. 128-134, en *Augusta Emerita* tanto las representaciones del emperador y su familia (como el famoso grupo de Augusto-Tiberio-Druso del *aula sacra* del peristilo del teatro) como la serie de estatuas de togados que forman parte de un ciclo “oficial” (quizá representando a los *summi uiri* del Foro de Augusto de Roma) producidas por el taller de *C. Aulus*, fueron tomados como patrón para las estatuas con las que se autorrepresentaron las élites emeritenses.

¹⁹⁴³ Suet. *Domit.* 13, 2; Dio LXVIII, 2; Plin. *Ep.* X, 8. Sherwin-White, *The Letters...* cit. p. 572-573, señala que este fue un proceso gradual, que comenzó con la costumbre de invitar al *princeps*, como a otros ciudadanos notables, a aceptar honores cívicos en las ciudades.

¹⁹⁴⁴ Plin. *Ep.* X, 81-82.

su familia: supervisando la difusión de las *constitutiones* imperiales o senadoconsultos que afectaban a su provincia¹⁹⁴⁵ y de las noticias relativas a acontecimientos políticos de primer orden, sobre todo aquéllos que estaban relacionados la dinastía imperial y que el emperador juzgaba que debían ser conocidas en todo el imperio (nacimientos, defunciones, victorias militares, adopciones o promociones políticas de los herederos, etc.).

En Occidente, la Bética sobresale entre el resto de provincias precisamente por las *epistulae* imperiales y los senadoconsultos que, grabados en *tabulae* de bronce, han sido hallados en lo que fue su antiguo territorio (en la actual Andalucía). Entre estos documentos ahora hemos de detenernos en dos que están íntimamente relacionados entre sí: los llamados *Senatus consulta de honoribus Germanici decernendis*¹⁹⁴⁶ y de *Cneo Pisone patre*, que recogen, respectivamente, los honores que el Senado acordó tributar al recientemente fallecido Germánico (19 d.C.) y los cargos imputados a Gneo Calpurnio Pisón por esta muerte y la sentencia que lo condenaba a él y a algunos de sus colaboradores pero exoneraba a su mujer Plancina y sus hijos (20 d.C.)¹⁹⁴⁷.

La muerte por envenenamiento de Germánico en Siria y el juicio contra el que fue tenido como principal responsable de ella, Gneo Calpurnio Pisón, fue uno de los episodios críticos del principado de Tiberio, que conocemos con detalle gracias a la narración detenida que hace Tácito en sus *Annales*¹⁹⁴⁸. La muerte de Germánico no sólo

¹⁹⁴⁵ Véase, por ejemplo, el *Senatus consultum de pretiis gladiatoribus* de Itálica, que hemos analizado en la Segunda Parte.

¹⁹⁴⁶ Cuya copia bética es conocida también como *Tabula Siarensis*, denominación que se deriva de la identificación del lugar de su hallazgo con la antigua ciudad de *Siarum*.

¹⁹⁴⁷ Existe una considerable bibliografía dedicada a ambos documentos. Nos limitaremos a citar aquí las ediciones y estudios de referencia. Sobre el *S.C. de honoribus Germanici decernendis*: CILA II, 927; Crawford, *Roman Statutes* I cit. pp. 507-543; A. Sánchez-Ostiz, *Tabula Siarensis. Edición, traducción y comentario*, Pamplona, 1999; J. González, “*Tabula Siarensis*”, en *Epigrafía jurídica...* cit. pp. 185-249. Hace años, esta pieza fue objeto de dos importantes encuentros científicos, recogidos en sendos volúmenes colectivos: J. González – J. Arce (eds.) *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid, 1988, esp. pp. 9-74; A. Fraschetti (ed.), *La commemorazione di Germanico sulla documentazione epigráfica. (Convegno Internazionale, Cassino, 21-24 ottobre 1991)*, Roma, 2000. Sobre el *S.C. de Cn. Pisone patre*: A. Caballos Rufino – W. Eck – F. Fernández, *El senadoconsulto de Gneo Pisón padre*, Sevilla, 1996, y su versión alemana, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, Munich, 1996. Estos volúmenes, a pesar de tener la misma autoría, presentan cambios en el contenido (en la edición española se presta más relevancia al contexto arqueológico y en la alemana a su relación con los *Annales* taciteos). Véase también: *HEp* 6, 1996, 881; J. González, *Tácito y las fuentes documentales: SS.CC. de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis) y de Cn. Pisone patre*, Sevilla, 2002 (ha republicado la edición, la traducción y el comentario de segundo documento en “*S.C. de Cnaeo Pisone patre*”, en *Epigrafía jurídica...* cit. pp. 259-290).

¹⁹⁴⁸ Tac. *Ann.* II, 55-58 (desencuentros entre Pisón y Germánico en Siria), 69-84 (envenenamiento y muerte de Germánico, actitud y ambición de Pisón); III, 1-19 (funeral de Germánico en Roma y juicio de Pisón en el Senado).

supuso la desaparición de uno de los dos posibles sucesores de Tiberio y el miembro de la familia imperial que era más querido por el pueblo de Roma y respetado por los *ordines* senatorial y ecuestre, sino porque entonces Tiberio fue el blanco de la opinión pública por primera vez. Existían rumores de que el emperador había designado a Pisón como gobernador de Siria dándole instrucciones de que vigilase de cerca a Germánico e, incluso, contuviese el enorme poder de que había sido investido por ley para intervenir en los asuntos de Oriente –un *imperium maius* superior al de cualquier gobernador y sólo inferior al de Tiberio¹⁹⁴⁹. Durante el proceso, Pisón solía tener entre las manos unos documentos que, según cuenta Tácito, sus amigos identificaban con las cartas y *mandata* en las que Tiberio le había dado las instrucciones relativas a su misión de contener a Germánico. Sólo la rápida acción de Sejano evitó su divulgación, y el suicidio de Pisón terminó por acallar las especulaciones¹⁹⁵⁰. Con todo, Tiberio vio la necesidad de desmarcarse de su amigo Pisón, proponiendo al Senado un castigo ejemplar de su memoria. Asimismo, como muestran ambos broncees béticos, quiso que se diera la mayor divulgación posible a los honores concedidos a Germánico por el Senado y refrendados mediante la ley Valeria Aurelia¹⁹⁵¹, y a la condena de su asesino. En las provincias, esa misión recayó, en primer lugar, en sus gobernadores.

En efecto, al final del texto epigráfico de la *Tabula Siarensis* se especifica lo siguiente:

Itemque hoc s(enatus) c(onsultum) in aere incideretur cum eo s(enatus) c(onsulto) quod factum est a(n)te d(iem) XVII kal(endas) Ian(uarias) idque aes in Palatio in / porticu quae est ad Apollinis in templo, quo senatus haberetur, figeretur. Item senatum uel-/le atque aequom censere, quo facilius pietas omnium ordinum erga domum Augustam et consen-/sus uniuersorum ciuium memoria honoranda Germanici Caesaris appareret, uti co(n)s(ules) hoc / s(enatus) c(onsultum) sub edicto suo proponerent iuberentque

¹⁹⁴⁹ Germánico era procónsul “*de quo / lex ad populum lata esset, ut in quamcumq(ue) prouinciam uenisset maius ei imperium / quam ei qui eam prouinciam proco(n)s(ule) optineret esset...*” (S.C. de Cn. Pisone patre, ll. 33-35). Pisón era *legatus Augusti pro praetore* de Siria y se le había encomendado actuar como *adiutor* de Germánico (ll. 29-30; Tac. Ann. II, 43, 2-4). Seguimos la edición de Eck – Caballos – Fernández, *Das senatus consultum...* cit. p. 40 = *Idem, El senadoconsulto...* cit. p. 123.

¹⁹⁵⁰ Tac. Ann. III, 16, 1.

¹⁹⁵¹ La *rogatio* Valeria Aurelia fue presentada por los cónsules del año 20, Marco Valerio Mesala y Marco Aurelio Cota Máximo siguiendo la disposición del Senado. Vid. *Tabula Siarensis* Frag. II, col. B, ll. 27-30. La llamada *Tabula Hebana* recoge las disposiciones de esta *rogatio*. Cf. J. S. Richardson, “The rogatio Valeria Aurelia: Forma and Content”, en González – Arce (eds.) *Estudios...* cit. pp. 35-41; W. D. Lebek, “Intenzione e composizione della ‘Rogatio Valeria Aurelia’”, en Fraschetti (ed.) *La commemorazione...* cit. pp. 45-67.

*mag(istratus) et legatos municipiorum et coloniar-/um descriptum mittere in municipia et colonias Italiae et in eas colonias quae essent in / prouinciis, eos quoque qui in prouinciis praessent recte atque ordine facturos si hoc s(enatus) c(onsultum) de-/disse<n>t operam ut quam celeberrumo loco figeretur.*¹⁹⁵²

Aparte de la *Vrbs*, el senadoconsulta acerca de los honores otorgados a Germánico debía exponerse públicamente en todos los municipios y colonias de Italia y en las colonias de las provincias. En Italia, esta misión fue encargada directamente a los magistrados de estas comunidades, que debían enviar legados a Roma para hacerse con una copia del senadoconsulta. En las provincias, en cambio, el primer responsable de distribuir el texto eran los gobernadores, que debían velar, además, por su exposición pública *celeberrumo loco*, es decir, en el lugar más frecuentado de estas colonias.

Asimismo, en el *S.C. de Cn. Pisone patre* se dispone de manera más genérica que una copia del mismo fuese expuesta en el *celeberrimus locus* de la ciudad más frecuentada (*urbs celeberruma*) de cada provincia, así como en los campamentos de invierno de las legiones, junto a sus estandartes (*signa*).

*Et quo facilius / totius actae rei ordo posterorum memoriae tradi posset atque hi scire<nt>, quid et / de singulari moderatione Germ(anici) Caesa(ri)s et de sceleribus Cn(aei) Pisonis patris / Senatus iudicasset, placere uti oratio, quam recitasset princeps noster / itemq(ue) haec senatus consulta in {h}aere incisa, quo loco Ti(berio) Caes(ari) Aug(usto) uide-/retur ponere<n>tur item hoc s(enatus) c(onsultum) {hic} in cuiusque prouinciae celeberruma{e} / urbe eiusque i<n> urbis ipsius celeberrimo loco in aere incisum figere-/tur itemq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in hibernis cuiusq(ue) legionis at signa figeretur.*¹⁹⁵³

La intervención directa en la difusión de esta copia del procónsul que por entonces gobernaba la Bética, Numerio Vibio Sereno, viene confirmada por su mención

¹⁹⁵² Frag. II, col. B, ll. 20-27. Seguimos la lectura de la última edición de González, *Tácito y las fuentes...* cit. p. 308. Anexo II: n° 71.

¹⁹⁵³ Il. 165-172. Seguimos la lectura de la edición de Caballos – Eck – Fernández, *El senadoconsulta...* cit. p. 127 = *Das senatus consultum...* cit. p. 50 = *HEp* 6, 1996, 881, p. 301. En la copia B en lugar del *item* de la línea 170 aparece un *utiq(ue)*, cf. *El senadoconsulta...* cit. pp. 110 y 121; González, *Tácito y las fuentes...* cit. p. 370, opta por seguir en su reconstrucción la segunda opción. Anexo II: n° 69.

en la primera línea de su texto, que es, sin duda, una adición al texto original procedente de Roma realizada en la capital provincial por expreso deseo del gobernador:

S(enatus) c(onsultum) de Cn(aeo) Pisone patre propositum N(umerio) Vibio Sereno proco(n)s(ule).

A estos dos documentos hay que añadir otros dos en estado muy fragmentario. Por un lado, un pequeño fragmento bronceo identificado con una copia de la *lex Valeria Aurelia* que sancionó los honores tributados al difunto Germanico hallada en el yacimiento de la antigua *Carissa Aurelia*, probablemente una comunidad latina del *conuentus Gaditanus*¹⁹⁵⁴. Por otro, un bronce procedente de la vecina Hispania Citerior, la llamada *Tabula Ilicitana*: se trata de unos fragmentos en bronce identificados como la *rogatio* –o, quizá, la propia ley– relativa a los honores fúnebres concedidos al hijo de Tiberio, Druso el Menor, tras su muerte en 23 d.C. Según Tácito, el Senado decretó que se le tributaran los mismos honores que a Germánico y, efectivamente, el texto conservado en este epígrafe muestra paralelismos con el de la *lex Valeria Aurelia*¹⁹⁵⁵. Esta evidencia, junto con el hecho de que estuvo expuesto en *Ilici, colonia ciuium Romanorum* ya por entonces, nos permite deducir que el Senado habría dispuesto su divulgación en los municipios y colonias de Italia y en las colonias de las provincias al igual que en el caso del *senatus consultum* relativo a Germánico, y que en estas últimas se habrían encargado de ello también sus gobernadores.

Los dos fragmentos bronceos del *S.C. de honoribus Germanicis decernendis* fueron hallados en el yacimiento arqueológico de La Cañada (sureste de Utrera, Sevilla), que, a partir de evidencias numismáticas y epigráficas allí encontradas, ha sido identificado como la antigua ciudad de *Siarum*¹⁹⁵⁶. Sin embargo, Plinio el Viejo –que menciona dos comunidades con ese nombre pertenecientes al *conuentus Hispalensis*, *Siarum* y la comunidad de los *Siarenses Fortunales*, esta última en la Beturia céltica–

¹⁹⁵⁴ J. González, “Un nuevo fragmento de la *lex Valeria Aurelia*”, en *Bronces jurídicos...* cit. pp. 251-257. Se trataría, por tanto, de un paralelo de la *Tabula Hebana*.

¹⁹⁵⁵ La llamada *Tabula Ilicitana*: Crawford, *Roman Statutes I* cit. p. 545. Cf. J. González, “*Tabula Siarensis, Fortunales Siarenses et Municipia Ciuium Romanorum*”, *ZPE* 55, 1984, pp. 55-100, esp. pp. 85-86, quien se decanta por identificar estos fragmentos con la *lex Asinia Sertoria*.

¹⁹⁵⁶ En el yacimiento fue hallado un notable grupo de monedas cuya leyenda cita a esta ciudad y varias inscripciones que mencionan un *ordo Siarensium*. Cf. González, “*Tabula Siarensis...*” cit. pp. 83-84; *Idem*, “Epigrafía del yacimiento de La Cañada”, en González – Arce (ed.), *Estudios...* cit. pp. 91-126.

no especifica su estatuto jurídico¹⁹⁵⁷. La historiografía, en general, se inclina por identificar el yacimiento de La Cañada con *Siarum Fortunarium* y por la hipótesis de que fuese un *municipium ciuium Romanorum* en esta época¹⁹⁵⁸. En efecto, una inscripción honorífica dedicada a un notable local –miembro de la poderosa familia de los *Messii Rustici*– fue realizada por el *[ordo] sp(lendidissimus) municipi / [Sia]rensis* y otra votiva hallada en La Cañada está dedicada a la *Fortuna Augusta* y al *Genius Municipii*. Además, está constatada la existencia de duoviros a inicios del Principado¹⁹⁵⁹.

A primera vista podría parecer que el estatuto municipal de *Siarum* entra en conflicto con la disposición del senadoconsulto que indicaba solamente que se expusiera una copia en las colonias de las provincias. Empero, no existe ninguna contradicción, pues o bien el escriba que realizó la copia omitió por error a los municipios –confundido por haber mencionado justo antes a los de Italia–, o bien simplemente hemos de interpretar que en las provincias sólo las colonias tenían la obligación de publicar el senadoconsulto, pero que los municipios podían hacerlo si así lo decían sus magistrados y decuriones o, en nuestra opinión, el propio gobernador¹⁹⁶⁰. Lo mismo puede decirse de la copia de la *lex Valeria Aurelia* hallada en *Carissa Aurelia*¹⁹⁶¹. La intención del Senado y de Tiberio fue dar la máxima publicidad a los honores concedidos a Germánico para mostrar, como se expresa en el senadoconsulto, el respeto de los órdenes senatorial y ecuestre y de la plebe hacia la familia imperial y el consenso de todos los ciudadanos hacia los honores otorgados a la memoria del difunto¹⁹⁶². Con todo, es natural que se diese preeminencia a las colonias romanas, dado que eran consideradas *quasi effigies paruae simulacraeque* de Roma en las provincias y, por ende, las comunidades que mejor representaban a los *ciues Romani* provinciales¹⁹⁶³. Sin embargo, el hecho de que en ambos senadoconsultos se reitere que las copias han de estar situadas en los lugares más frecuentados (*celeberrimi loci*) de las colonias (*Tabula*

¹⁹⁵⁷ Plin. *N.H.* III, 11 y 14.

¹⁹⁵⁸ P. Le Roux, “*Siarum* et la *Tabula Siarensis*: statut politique et honneurs religieux en Bétique sous Tibère”, en González – Arce (eds.) *Estudios...* cit. pp. 21-33; H. Galsterer, “The *Tabula Siarensis* and Augustan Municipalization in Baetica”, en González – Arce (eds.), *Estudios...* cit. pp. 61-74.

¹⁹⁵⁹ González, “Epigrafía del yacimiento...” cit. pp. 92, 96-97 y 108-109.

¹⁹⁶⁰ Es de la misma opinión Sánchez-Ostiz, *Tabula Siarensis...* cit. p. 320.

¹⁹⁶¹ González, “Un nuevo fragmento...” cit. p. 255.

¹⁹⁶² *Tab. Siarensis*, Frag. II, col. B, ll. 22-23: *quo facilius pietas omnium ordinum erga domum Augustam et consen-/sus uniuersorum ciuium memoria honoranda Germanici Caesaris appareret*.

¹⁹⁶³ Au. Gell. *N.A.* XVI, 13, 4. Cf. González, “Un nuevo fragmento...” cit. p. 255.

Siarensis) o de la *celeberrima urbs* de la provincia (*S.C. de Cn. Pisone patre*) indica una voluntad de que fuese visto por el mayor número de personas, fuesen o no ciudadanos romanos. Por tanto, en nuestra opinión las directrices del Senado pretendían señalar a los gobernadores la mínima difusión que debía tener el documento en las provincias. No se trataría de una disposición de carácter restrictivo sino orientativo y es verosímil que los gobernadores decidiesen enviar copias no sólo a las colonias de sus provincias sino a los principales municipios y, en particular, a los que eran sedes conventuales. En este sentido, tampoco se puede descartar que las sedes conventuales del Noroeste de la Hispania Citerior recibiesen una copia a pesar de que probablemente no se trataba de comunidades privilegiadas.

Respecto al *S.C. de Cn. Pisone patre*, se tienen noticias muy vagas acerca de la procedencia de los fragmentos de las seis copias béticas reconocidas. De las copias mejor conservadas es de las que más se sabe. La persona que depositó los fragmentos de la denominada “copia A” en el Museo Arqueológico de Sevilla declaró que el hombre que se las vendió en el mercado clandestino le dijo que procedían del mismo lugar en el que se había hallado la *lex Irnitana*, es decir en el actual municipio de El Saucejo. Sin embargo, al igual que los estudiosos que ha abordado esta pieza, pensamos que hay que tomar con gran cautela esta noticia, pues *Irni* era una pequeña comunidad peregrina poco importante por entonces¹⁹⁶⁴. En cuanto a la “copia B” se han manejado dos posibilidades: que perteneciese al yacimiento de Monte Hachillo (identificado con la antigua *Olaurum*) en Lora de la Estepa (Sevilla); o al de “Nido del Grajo”, cerca de El Tejar (al sur de Benamejía, Córdoba), siendo hallado durante las obras de la N-331 Córdoba-Málaga. La segunda opción es la que más seguimiento tiene hoy en día, y tal emplazamiento ha sido identificado con el de en el de la *colonia Gemella Tucci* por los editores del *CIL* II²/5, 900¹⁹⁶⁵.

Recientemente se ha identificado un fragmento de una copia de este senadoconsulto en Ginebra, que fue hallado en 1992 durante las excavaciones que se realizaron en su catedral. Se desconoce su procedencia, pero se ha propuesto que hubiese pertenecido a la cercana Nyon, antigua *Colonia Iulia Equestris Nouodunum*. En efecto, el territorio de esta colonia se extendía casi hasta el *uicus* de *Genaua* y las

¹⁹⁶⁴ Caballos – Eck – Fernández, *El senadoconsulto...* cit. pp. 15-16 (= *Das senatus consultum...* cit. pp. 1-3); González, “Nuevo fragmento...” cit. pp. 255-256.

¹⁹⁶⁵ Caballos – Eck – Fernández, *El senadoconsulto...* cit. pp. 66-68 (= *Das senatus consultum...* cit. pp. 1-6); *HEp* 6, 1996, 881, esp. p. 292; González, “Nuevo fragmento...” cit. p. 256.

investigaciones arqueológicas han revelado que numerosos materiales constructivos procedentes de Nyon fueron reutilizados en Ginebra en un período posterior cuando esta ciudad sufrió un importante crecimiento y, en cambio, Nyon decayó. Como han señalado otros autores, si esta hipótesis es correcta, sería una prueba de que el senadoconsulto fue difundido no sólo en la capital provincial y en los cuarteles de invierno –como indicaba el Senado–, sino también en otras ciudades privilegiadas frecuentadas. *Nouodunum*, en concreto, se hallaba en un enclave estratégico de las comunicaciones entre la Galia, el Rhin, Retia y los Alpes. Se ha barajado también la posibilidad de que la copia procediera del campamento legionario de *Vindonissa* (Windisch, Cantón de Argovia, Suiza), donde sin duda hubo una expuesta¹⁹⁶⁶, pero la lejanía de este enclave respecto a Ginebra invitan a descartarla.

A nuestro juicio la difusión del *S.C. de Cn. Pisone patre* fue similar a la del *de honoribus Germanici decernendis*, a lo que hay que sumar su exposición en los campamentos de las tres legiones que por entonces se hallaban en Hispania. En nuestra opinión, la decisión de exponer la sentencia de Pisón en los cuarteles de invierno era una medida disuasoria que tenía como objetivo advertir a los soldados y suboficiales de las peligrosas consecuencias para la estabilidad del imperio que podían derivarse de su apoyo a un gobernador que actuase contra la disciplina y con independencia de las órdenes recibidas del poder central como había hecho Pisón, y también recordarles los castigos que esperaban a quienes participasen en el *crimen maiestatis*. Probablemente Tiberio, como cabeza del ejército imperial, influyó mucho en esta decisión del Senado. En Hispania, no cabe duda de que el gobernador de la Citerior se encargó de que llegase una copia en bronce de este texto a los cuarteles de la legiones *IV Macedonica*, *VI Victrix* y *X Gemina*, delegando probablemente en los legados que tenía a su mando la supervisión de su fijación al lado de los *signa* de estas unidades.

Los gobernadores provinciales de Hispania, al igual que sus homólogos de otras provincias, procedieron a divulgar estos importantes documentos oficiales relacionados con graves acontecimientos que afectaban a la dinastía Julio-Claudia y al orden del imperio siguiendo las directrices marcadas por el poder central. Esto confirma nuevamente el papel de intermediarios entre el centro del imperio y las comunidades de la periferia, en este caso no sólo en la difusión de las decisiones tomadas por el poder

¹⁹⁶⁶ Crogiez-Pétréquin – Nelis-Clément, “La circulation des hommes...” cit. p. 119-120.

imperial sino de una “doctrina” o visión de los hechos oficial sobre un acontecimiento grave¹⁹⁶⁷ que había supuesto la primera crisis del principado de Tiberio. No en vano los principales destinatarios de ese mensaje eran las élites de las colonias y municipios y los legionarios, dos grupos sociales fundamentales en el mantenimiento de la cohesión del imperio y los únicos en las provincias con el grado de alfabetización suficiente para leer entero el documento. Aun así, en las provincias occidentales más romanizadas existiría un porcentaje de la población compuesto por artesanos, comerciantes y pequeños propietarios agrícolas suficientemente alfabetizados para leer estos documentos¹⁹⁶⁸. La mayoría de la población, empero, conocería su contenido a través de la lectura pública que realizarían los *praecones* una vez expuesta su copia en su ciudad¹⁹⁶⁹.

Las instrucciones contenidas en estos documentos acerca de su difusión prueban que a inicios del principado de Tiberio los mecanismos que caracterizaron las relaciones entre el centro y la periferia del imperio, entre Roma y las provincias, estaban asentadas y que en ellas jugaban un papel esencial los gobernadores provinciales. También revela que el papel rector del emperador en las decisiones del Senado –como su miembro con mayor *auctoritas* y poder fáctico–, era una realidad consolidada y admitida por sus miembros. Aparte de la mención reiterada del *princeps noster* en el senadoconsulto, es muy elocuente que el texto de la copia se cierre con una *subscriptio* escrita por el propio Tiberio en la que ordena, valiéndose de su potestad tribunicia, que la copia del senadoconsulto –realizada en catorce tablillas por su cuestor Aulo Plaucio– sea trasladada a los archivos públicos de Roma¹⁹⁷⁰.

Los procónsules sirvieron a la dinastía imperial del mismo modo que el resto de gobernadores, coadyuvando a afirmar la lealtad de los provinciales hacia ella y, por ende, fortaleciendo la presencia de la autoridad del emperador en las provincias incluso en decisiones que, *de iure*, emanaban de la autoridad del Senado.

¹⁹⁶⁷ M. Corbier, *Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome ancienne*, París, 2006, p. 185.

¹⁹⁶⁸ W. V. Harris, *Ancient Literacy*, Harvard, 1989, pp. 216-218 y 267-273; Corbier, *Donner à voir...* cit. pp. 77-90.

¹⁹⁶⁹ Harris, *Ancient Literacy* cit. p. 208; Corbier, *Donner à voir...* cit. p. 86; Oliver, *Greek Constitutions...* cit. n° 19.

¹⁹⁷⁰ Il. 174-176: *Ti(berius) Caesar Aug(ustus) trib(unicia) potestate XII manu mea scripsi: uelle me h(oc) s(enatus) c(onsultum), quod / e<s>t factum IIII Idus Decem(bres) Cotta et Messalla co(n)s(ulibus) referente me scriptum manu Auli q(uaestoris) mei in tabellis XIII, referri in tabulas pub<l>icas.*

Conclusiones

Al margen de la difusión y supervisión del culto imperial provincial, los gobernadores de Hispania llevaron a cabo una serie de cometidos estrechamente vinculados con aquél a través de los que contribuyeron a la consolidación de la fidelidad de los habitantes de sus provincias hacia el poder central personificado en el emperador y su familia. A este respecto, las provincias hispanas se destacan entre el resto de las occidentales por proporcionar un rico elenco de testimonios epigráficos de las diferentes manifestaciones de fidelidad hacia el poder imperial protagonizadas por los provinciales bajo la guía de los gobernadores.

En primer lugar, contamos con dos ejemplos –únicos en Occidente– de *ius iuranda* realizados por comunidades peregrinas: *Conobaria* (Bética) en honor de Augusto y sus hijos adoptivos Cayo y Lucio César y Agripa Póstumo, y *Aritium Vetus* (Lusitania), en honor de Calígula con motivo de su acceso al trono. Ambos testimonios pertenecen a momentos especialmente importantes en la consolidación del régimen del Principado y, con él, de la dinastía Julio-Claudia en el poder –tuvieron lugar en el 6/5 a.C. y el 37 d.C. respectivamente– y revelan la relevancia que tuvo el consenso de los provinciales y su aceptación del emperador y sus herederos en el discurso legitimista del nuevo régimen. A nosotros nos interesa sobre todo resaltar la participación crucial de los gobernadores de la Lusitania y la Bética en estos juramentos. Tanto P. Petronio Turpiliano como C. Umidio Durmio Cuadrato presidieron este ritual solemne y, en nuestra opinión, sin duda se encargaron de transmitir a estas comunidades las fórmulas preceptivas de que se debía componer según las directrices del emperador –de forma similar al juramento del 32 a.C.– y de proporcionar al escriba que lo plasmase por escrito con el fin de que quedase constancia de la adhesión de estas comunidades a los beneficiarios del juramento. Es especialmente significativo que el procónsul de la Bética actúe del mismo modo que el legado imperial de la Lusitania, pues revela que ya desde Augusto los procónsules de esa provincia aceptaron su subordinación efectiva al *princeps*, recibieron instrucciones de él –aunque no fuesen *mandata* como los de los legados imperiales– y coadyuvaron a la consolidación del nuevo régimen del Principado. Además, el procónsul que presidió el juramento de los conobarienses, Petronio Turpiliano, al igual que el otro gobernador de la Bética conocido en época de Augusto, A. Cotio, eran *noui homines* procedentes de familias de origen itálico que

debían su promoción a Augusto, lo que cual sin duda reforzó su vinculación con el emperador y determinó su apoyo a la consolidación de su supremacía¹⁹⁷¹.

Asimismo, los mismos gobernadores de las provincias hispanas dieron ejemplo del modo en que debía honrarse en las ciudades al emperador reinante. El ejemplo del gobernador de la Lusitania Marco Porcio Catón –que en 46 d.C. dedicó una estatua al emperador Claudio en la colonia de *Metellinum*– no es un caso aislado, sino una entre muchas manifestaciones de lealtad hacia el poder imperial que los gobernadores realizaban en su provincia y que estimuló la emulación de las élites locales tanto en las colonias y municipios como en las comunidades peregrinas. Es más, es muy probable que tras algunos homenajes realizados en honor de los hijos adoptivos de Augusto en las comunidades de las regiones menos romanizadas se halle un impulso del gobernador. Sin negar la espontaneidad o sinceridad de las dedicaciones realizadas en *Bracara Augusta* en honor de Cayo César (de autenticidad dudosa) y Agripa Póstumo o en la *ciuitas Igaeditanorum* al primero, sí que parece muy probable y necesario que los gobernadores de la Citerior y la Lusitania (respectivamente) mostrasen a los miembros de estas comunidades indígenas el modo y los términos correctos en que debían realizarse tales homenajes.

También es muy probable, a nuestro juicio, que los gobernadores de las provincias hispanas supervisasen la correcta representación de los emperadores y miembros de la familia imperial en las estatuas que las comunidades provinciales les dedicaban, así como que fuesen erigidas en lugares adecuados, respetando en todo momento la majestad imperial. En las colonias de *Caesaraugusta* y *Augusta Emerita* y en los municipios de Sagunto y Ulia se han conservado importantes grupos estatuarios relacionados con la dinastía Julio-Claudia erigidos en época de Augusto y de Tiberio. El mundo de las imágenes tuvo una gran relevancia para la joven dinastía gobernante como medio de autorrepresentación y difusión del programa político en que fundamentaba su legitimidad y Augusto se preocupó desde un principio de fijar los modelos que debían seguirse en los retratos de su familia. Por ello, en nuestra opinión es muy probable que los gobernadores de la Citerior, la Lusitania y la Bética se encargasen de transmitir a estas comunidades los modelos a los que se debían adecuar las estatuas que pretendían

¹⁹⁷¹ P. Petronio Turpiliano: *PIR*² P 314, p. 122, donde se le identifica con el triunviro monetario homónimo y como hijo del P. Petronio que fue *Praefectus Aegypti* en 25-22/21 a.C. (Dio LIV, 5, 4 ss); A. Cotio: *Fasti Hispanienses* p. 149. Sobre la presencia de itálicos y provinciales en la composición del Senado augusteo: Syme, *The Roman Revolution* cit. pp. 349-350 y 358-368.

erigir. Este cometido entraba dentro de su responsabilidad de velar por el respeto hacia las imágenes del *princeps*, que también se manifestaba en su supervisión de las estatuas del culto imperial votadas en los *concilia prouinciae*.

Por último, los gobernadores fueron los responsables de la difusión de las noticias y decisiones sancionadas oficialmente relativas a acontecimientos importantes en la vida de la familia imperial que afectaban al futuro del imperio (nacimientos de herederos o defunciones, asociaciones al trono, etc.). En la Bética conservamos las copias en bronce de dos documentos coetáneos de gran valor: los senado consultos que sancionaron los honores que debía recibir Germánico tras su trágica muerte y la condena del senador condenado por haber conspirado para provocarla, Gneo Calpurnio Pisón. El propio texto de estos documentos muestra que el Senado, con el refrendo final del emperador Tiberio, encargó a los gobernadores de las provincias que hiciesen publicar una copia de estos senadoconsultos en todas las colonias de las provincias y, en el caso de *SC de Cn. Pisone patre*, también en los campamentos de las legiones –en Hispania, las tres que entonces se hallaban en la Citerior. El hecho de que la copia del *SC de honoribus Germanici decernendis* se hallase en el lugar identificado con el municipio de *Siarum* y de que una copia de la *lex Valeria Aurelia* se encontrase en Carissa Aurelia, invitan a pensar que también se habría publicitado estos documentos en algunos municipios a elección de cada gobernador en función de la relevancia de los mismos como núcleos poblacionales y centros regionales. Todo ello muestra, nuevamente, la relevancia de los gobernadores como intermediarios entre el centro y la periferia del imperio y transmisores y ejecutores de las decisiones tomadas por el poder imperial, en este caso con la sanción del Senado.

CAPÍTULO 3: LAS RELACIONES PERSONALES DEL GOBERNADOR CON LAS COMUNIDADES E INDIVIDUOS DE SU PROVINCIA. EL PATRONATO Y OTROS HONORES.

“A côté de la conquête, de la *deductio coloniae*, de l’accomplissement de certaines missions de caractère civil ou militaire et de la défense en justice, l’exercice d’une magistrature provinciale pouvait aboutir à la conclusion d’un contrat de patronat. (...) en principe, tout gouverneur, tout subordonné même du gouverneur, est susceptible de devenir patron”¹⁹⁷².

En este párrafo L. Harmand expresó con gran acierto las numerosas oportunidades que existían de que los gobernadores fuesen elegidos como patronos por parte de las comunidades o de particulares de la provincia que gobernaban como consecuencia del contacto que mantenían con sus élites en el ejercicio de sus competencias. El patronato puede definirse como la relación asimétrica entre dos partes (dos individuos o un particular y una comunidad) de *status* y recursos desiguales basada en el compromiso de carácter moral y sagrado –regido por la idea de la *fides*– de garantizarse ayuda, “servicios” o beneficios mutuos: el patrono tutela y ampara al cliente, que a cambio realiza para él diversos servicios y le tributa honores. El compromiso no es puntual, sino que tiene vocación de continuidad, extendiéndose durante el resto de la existencia de ambas partes y siendo heredado por sus descendientes¹⁹⁷³. Ahora bien, como ha señalado J. Nicols, la desigualdad entre las partes, clara en el patronato personal, se desdibuja en el patronato de un individuo sobre una comunidad, pues una comunidad y un individuo forman parte de escalas diferentes y no pueden ser comparados en el mismo plano. Además, a diferencia del patronato personal, la elección de patrono por parte de una comunidad privilegiada estuvo

¹⁹⁷² L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire*, París, 1957, p. 39.

¹⁹⁷³ Saller, *Personal Patronage...* cit. p. 1; J. Nicols, *Civic Patronage in the Roman Empire*, Leiden-Boston, 2014, pp. 2-3.

regulada legalmente de manera rigurosa¹⁹⁷⁴, como veremos a propósito de la *lex coloniae Genetiuae Iuliae*.

La institución del patronato ofrecía a las comunidades provinciales la posibilidad de contar con la protección de un hombre poderoso que no sólo la favoreciese con actos evergéticos, sino que velase por sus intereses en la provincia y, sobre todo, en Roma, velando por sus intereses en el centro del imperio ante el Senado o el propio emperador. Del mismo modo, un particular podía medrar socialmente si contaba con el apoyo de un senador en la capital del imperio. En este propósito, los gobernadores provinciales de Hispania eran patronos en potencia especialmente deseables en virtud de su rango senatorial y su cercanía al poder imperial. Por su parte los gobernadores, aceptando el patronato de una comunidad importante o de un miembro pujante de la élite de su provincia veían acrecentado su prestigio en Roma y podían esperar que el poder de influencia de su familia siguiese aumentando.

No es de extrañar, por tanto, que de entre las inscripciones hispanas conservadas relacionadas con los gobernadores de sus provincias, sean las más numerosas aquéllas vinculadas a las relaciones de patronato que establecieron con comunidades o particulares, seguidas de las relativas a sus competencias jurisdiccionales. Ciertamente es que la conservación y el descubrimiento de los epígrafes están sujetos al azar y que por ello las estadísticas acerca del porcentaje de uno u otro tipo de contenido han de ser relativizadas; sin embargo, no dejan de revelar una tendencia en las prácticas sociales imperantes.

Patronato sobre comunidades y otros testimonios de relaciones estrechas entre los gobernadores y ellas:

En el territorio de la antigua Hispania se han hallado siete epígrafes en los que un ex gobernador aparece mencionado explícitamente como patrono de una comunidad, a los que hay que sumar nueve inscripciones dedicadas por comunidades hispanas a Lucio Elio Lamia en Roma. Asimismo, existen dos epígrafes dedicados a hijos de dos gobernadores de la Citerior que fueron patronos de sendas comunidades (Segobriga y

¹⁹⁷⁴ Nicols, *Civic Patronage*... cit. pp. 16-17.

Sagunto) sin haber desempeñado ningún cargo oficial en Hispania, de lo que se puede deducir que heredaron el patronato de sus padres.

Las comunidades hispanas de las que sabemos con seguridad que eligieron como patrono a un senador que fue gobernador de su provincia durante el Principado son las siguientes: En la Hispania Citerior, *Ilici*, una de las *ciuitates* del pueblo de los *Carietes* (adscritas al *conuentus Cluniensis*), *Ercauica*, *Carthago Noua*, la *ciuitas Bocchoritana*, Segóbriga, Uxama y *Valentia*; en la Lusitania, *Augusta Emerita*. A ellas podemos añadir con bastante certeza a Sagunto (Citerior) e *Iliberri* (Bética). F. J. Navarro ha sostenido que el título de patrono atribuido a ex gobernadores en monumentos honoríficos erigidos por las comunidades de su antigua provincia podía ser una fórmula vacía con la que sólo se pretendía halagar al honrado al igual que sucedía con otros títulos honoríficos usados por las ciudades griegas de Oriente¹⁹⁷⁵. Empero, no nos resulta convincente esta propuesta, pues en nuestra opinión precisamente la ausencia del título de patrono en una parte de los epígrafes honoríficos dedicados a benefactores indicaría que ese término se empleaba rigurosamente, cuando el patronato existía oficialmente. Además, la mención del título de patrono en una inscripción honorífica dedicada a un antiguo gobernador no sólo lo honraba a él, sino que dotaba de prestigio a la propia comunidad provincial. Por último, en vista del control que, como veremos, el poder imperial quiso imponer sobre la concesión de honores a los gobernadores en sus provincias, es difícil pensar que tal título fuese usado a la ligera por los provinciales.

Sin embargo, los vínculos que podían unir a una comunidad provincial con un gobernador no se ceñían sólo a la institución del patronato, sino que podían permanecer en ese ámbito difuso de los favores y la tutela recibidos del gobernador que eran reconocidos por la comunidad beneficiada con la concesión de honores a cambio; esto es, lo que se podría definir —si se nos permite la expresión— como una suerte de protección oficiosa, que a veces era preferida al patronato por ambas partes dado que no conllevaba ulteriores obligaciones una vez que el gobernador abandonaba la provincia. Contamos con varios epígrafes de los que se pueden deducir, como mínimo, esa clase de vínculos de los gobernadores con las comunidades dedicantes: uno procedente de Sagunto, otro de las cercanías de *Metellinum* y otro de *Bracara Augusta*, y tres hallados en Italia que están relacionados con *Emerita*, *Hispalis* y *Nertobriga*, respectivamente.

¹⁹⁷⁵ F. J. Navarro, “Senadores y ciudades en el Occidente mediterráneo”, en Castillo – Rodríguez Neila – Navarro (eds.), *Sociedad y economía...* cit. pp. 45-72, esp. p. 56.

Con todo, al igual que sucede con las dedicatorias realizadas por particulares a gobernadores que no ofrecen indicios explícitos de una relación de patronato, no se puede descartar totalmente que tras alguno de estos homenajes se hallasen tales vínculos de patronato-clientela¹⁹⁷⁶.

En total, se trata de 24 inscripciones (todas honoríficas excepto la bracarense) que configuran un importante *corpus* de los vínculos establecidos por los gobernadores de las provincias hispanas con comunidades locales, la mayoría de las cuales a través de la institución del patronato. Sin embargo, siete de las inscripciones relacionadas con Elio Lamia halladas en Roma no serán analizadas *in extenso* puesto que se desconocen las comunidades dedicantes.

El primer ex gobernador conocido que fue honrado durante el Principado como patrono por una comunidad hispana fue Tito Estatilio Tauro, uno de los colaboradores y amigos más estrechos de Augusto que gobernó Hispania en 29 a.C., momento en el que consiguió el triunfo por sus victorias en el Noroeste contra los vacceos, astures y cántabros¹⁹⁷⁷. Su relevancia política no pasó desapercibida a los provinciales y llevó a la colonia de *Ilici* a elegirlo como patrono, decisión que fue acompañada de dedicaciones en su honor de las que se conserva una inscripción perteneciente al pedestal de una estatua de Estatilio Tauro:

*T(ito) Statilio / Tauro imp(eratori) / III co(n)s(uli) II / patrono*¹⁹⁷⁸

El título de *imperator* recuerda su triunfo sobre los pueblos del Noroeste y, sumado a la ausencia del cargo oficial desempeñado por Estatilio Tauro en Hispania como gobernador, nos indica el impacto que tuvo en las comunidades provinciales sus éxitos militares y, como dijimos, el motivo que llevó a los ilicitanos –y seguramente a otras comunidades– a buscar su *patrocinium*. A pesar de que esta colonia se hallaba en

¹⁹⁷⁶ R. Duncan-Jones, “Patronage and Civic Privileges: The Case of Giufi”, *Epigraphische Studien* 9, 1972, pp. 12-16; J. Mangas, “*Hospitium* y *patrocinium* sobre colectividades públicas: ¿términos sinónimos? (De Augusto a fines de los Severos)”, *DHA* 9, 1983, pp. 165-183; Saller, *Personal Patronage...* cit. p. 200: “...these ‘patronage inscriptions’ represent only the tip of the iceberg. Behind the hundreds of other simple dedications there may stand patron-client relationships, but the stones do not provide sufficient information for us to be certain”.

¹⁹⁷⁷ Dio LI, 20, 5.

¹⁹⁷⁸ *CIL* II, 3556. Anexo II: n° 22.

el extremo opuesto de la península, las operaciones militares de Tauro garantizaron el fin de las incursiones de estos pueblos aún no dominados y, por ende, la paz para el conjunto de la provincia. La mención de su segundo consulado ofrece un buen *terminus* cronológico *post quem* a este homenaje: el 26 a.C., fecha en que Tauro fue de nuevo cónsul¹⁹⁷⁹. Ahora bien, el patronato pudo haberse instituido mientras gobernó Hispania.

El siguiente gobernador de la Citerior que recibió un homenaje por parte de las comunidades de las que era patrono fue Lucio Elio Lamia, quien siendo *legatus Augusti pro praetore* en 24-22 a.C., se destacó, como hemos visto, por su intervención en la segunda fase de las Guerras Astur-Cántabras¹⁹⁸⁰. En el área arqueológica de Largo Argentina, en Roma, han sido hallados fragmentos de nueve epígrafes dedicados a él como patrono, que siguen el siguiente modelo:

*L(ucio) Aelio L(uci) f(ilio) Lamiae pr(aetori) / XVuir(o) sacr(is) fac(iundis) leg(ato) pro pr(aetore) / [nombre de la comunidad dedicante] patrono*¹⁹⁸¹

Se trata de placas de mármol que, según la reconstrucción de G. Marchetti Longhi compartida por W. Eck¹⁹⁸² y G. Alföldy formaban parte de un único monumento. La naturaleza del mismo no está clara, pero nos inclinamos por aceptar la hipótesis de Alföldy, quien lo identifica con la *Porticus ad Nationes* construida en el campo de Marte por Pompeyo, precisamente al norte de los templos del área sacra hoy visible. Según el sabio húngaro, este pórtico fue erigido con el objeto de que importantes hombres de la aristocracia romana fuesen honrados con estatuas por parte de las comunidades provinciales, siendo también ocupado con homenajes a miembros la familia imperial a partir de Augusto¹⁹⁸³.

Alföldy sólo ha podido reconstruir el nombre de dos de las comunidades hispanas que realizaron estas dedicaciones, los *Carietes* V[---] y los

¹⁹⁷⁹ Harmand, *Le patronat...* cit. p. 288.

¹⁹⁸⁰ Dio LIII, 29, 1-2. Lamia castigó con dureza la sublevación de astures y cántabros del 24 a.C., cortando las manos a todos los enemigos que tomó prisioneros. Cronología: *Fasti Hispanienses* pp. 5-6.

¹⁹⁸¹ A veces el cargo de *legatus pro praetore* aparece mencionando antes que el sacerdocio. Cf. G. Alföldy, "Le iscrizioni del senatore L. Aelius Lamia nell'area sacra di Largo Argentina", en *Studi sull'epigrafia augustea e tiberiana di Roma*, Roma, 1992, pp. 113-123, esp. pp. 116-119, n° 1-8.

¹⁹⁸² W. Eck, "Emperor and Senatorial Aristocracy in Competition of Public Space", en Ewald – Noreña (ed.), *The Emperor and Rome...* cit. pp. 89-110, esp. p. 94.

¹⁹⁸³ Alföldy, "Le iscrizioni del senatore L. Aelius Lamia..." cit. pp. 121-123.

[*Erca*]uicen[*ses*]¹⁹⁸⁴. Los primeros eran un pueblo asentado en el actual territorio vasco que, según Plinio el Viejo, junto con los *Vennenses* estaba constituido por cinco *ciuitates stipendiariae* adscritas al *conuentus Cluniensis*¹⁹⁸⁵. Esto llevó a Marchetti Longhi a reconstruir la última línea de su inscripción como *Carietes V[ennenses patrono]*¹⁹⁸⁶. Alföldy, empero, echa en falta la conjunción *et* entre ambos pueblos y opta por interpretar *V[---]* como un apelativo de los *Carietes*¹⁹⁸⁷. Siguiendo este razonamiento, J. J. Cepeda ha propuesto que podría tratarse de los *Carietes V[elienses]*, esto es de la *ciuitas Veliensis* –la única de las cinco mencionada en el pasaje pliniano¹⁹⁸⁸, opción que nos parece muy verosímil.

Ercauica (Cañaveruelas, Cuenca) era uno de los *oppida Latinorum ueterum* que a partir de Augusto estuvieron adscritos al *conuentus Caesaraugustanus*¹⁹⁸⁹. Según la hipótesis recientemente planteada por D. Espinosa, esta comunidad celtibérica podría haber conocido una promoción al estatuto de colonia latina en torno al 72-71 a.C., siendo premiada por Pompeyo por su apoyo contra Quinto Sertorio¹⁹⁹⁰.

Ha sido imposible para los investigadores lograr la reconstrucción del nombre de las otras siete comunidades que honraron en Roma como patrono a Lamia, pero como ha señalado Alföldy se puede suponer con ciertas garantías que pertenecerían a la Hispania Citerior, puesto que no sólo siguen el mismo modelo textual, sino que ninguno de los otros cargos desempeñados por Lamia que son mencionados –la pretura y el *XVuirato sacris faciundis*– ofrecían la ocasión a una comunidad del imperio de honrar a un senador como patrono¹⁹⁹¹. Al igual que en el caso de Estatilio Tauro, estas comunidades de la Citerior habrían decidido escoger a Lamia como patrono a raíz de sus éxitos militares, como pacificador de la provincia y, sin duda, gracias al trato que

¹⁹⁸⁴ Alföldy, “Le iscrizioni del senatore...” cit. n° 3: *L(ucio) A(elio) L(uci) f(ilio) Lamiae pr(aetori)] / XVuir(o) [sacr(is) fac(iundis) leg(ato) pr]o pr(aetore)] / Carietes V[--- patrono]*; n° 5: *[L(ucio) A]eli[o L(uci) f(ilio) Lamiae pr(aetori)] / [leg(ato) p]ro [pr(aetore) XVuir(o) sacr(is) fac(iundis)] / [Erca]ui[enses patrono]*.

¹⁹⁸⁵ Plin. *N.H.* III, 26: *In eundem conuentum (sc. Cluniensem) Carietes et Vennenses V ciuitatibus uadunt, quarum sunt Velienses.*

¹⁹⁸⁶ Hipótesis seguida por R. Szramkiewicz, *Les gouverneurs de province à l'époque augustéenne* I, París, 1976, p. 396.

¹⁹⁸⁷ Alföldy, “Le iscrizioni del senatore...” cit. p. 117, n° 3.

¹⁹⁸⁸ J. J. Cepeda, *La romanización en los valles cantábricos alaveses. El yacimiento arqueológico de Aloria*, Vitoria-Gasteiz, 2001, p. 22; F. Fernández Palacios, “*Carietes* y *caristios*”, *Veleia* 22, 2005, pp. 165-172, esp. p. 167.

¹⁹⁸⁹ Plin. *N.H.* III, 24.

¹⁹⁹⁰ D. Espinosa, *Plinio y los ‘oppida de antiguo Lacio’: el proceso de difusión del Latium en Hispania Citerior*, Oxford, 2014, pp. 56-57.

¹⁹⁹¹ Alföldy, “Le iscrizioni del senatore...” cit. p. 120.

sus élites mantuvieron con él en los años que estuvo en la península, favorecidas probablemente por las levás que hubo de hacer entre la población local para formar las tropas auxiliares que acompañaban a sus legiones y que tan importantes fueron en la lucha de guerrillas que caracterizó la guerra contra cántabros y astures. En tiempo de paz una *ciuitas stipendiaria* como la de los Carietes e, incluso, una colonia latina como *Ercauica* tendrían difícil el acceso al gobernador. *Ercauica*, en concreto en 24-22 a.C. estaba muy alejada de las sedes conventuales que por entonces funcionarían –*Tarraco*, *Carthago Noua*; la colonia de *Caesaraugusta* aún no habría sido fundada– y de los centros de operaciones usados durante la guerra.

El siguiente ejemplo de la Hispania Citerior procede de un pedestal hallado en la colonia de *Carthago Noua*:

*P(ublio) Silio leg(ato) pro / pr(aetore) patrono / colonei.*¹⁹⁹²

Este legado ha sido identificado con Publio Silio Nerva, que habría gobernado la Citerior en 19-16 a.C.¹⁹⁹³. Según nos informa Velejo Patérculo, Silio Nerva tomó parte en la última fase de la guerra contra los cántabros¹⁹⁹⁴, y en los dos años siguientes debió ocuparse de aplicar sobre el terreno las decisiones tomadas por Agripa tras concluir la guerra en la reordenación territorial de las áreas recién dominadas, de manera similar a lo que Lucio Sestio Quirinal había hecho en los años anteriores en la Transduriana. Asimismo, Nerva habría sido el primer gobernador de la Citerior que se ocupó por completo de sus competencias administrativas y que habría dedicado más tiempo a la realización de los conuentus en *Tarraco* y *Carthago Noua* y a la potenciación de estos centros regionales. De estas actividades habría nacido un vínculo estrecho con la élite dirigente de esta colonia que propició su elección como patrono, al que honraron con una estatua.

Pocos años después, en 10 a.C., el gobernador Marco Licinio Craso Frugi se convirtió en patrono de la *ciuitas Bocchoritana*, situada cerca de la colonia de *Pollentia*, en la isla de Mallorca. Ha llegado hasta nosotros la *tabula patronatus* con las condiciones del mismo:

¹⁹⁹² *DECAR* 45 = *CIL* II, 3414. Anexo II: nº 11.

¹⁹⁹³ *Fasti Hispanienses* p. 7.

¹⁹⁹⁴ *Vell.* II, 90, 4.

[Iul]o Ant[oni]o Fabio Africano / [a(n)te] d(iem)] XVII K(anlendas) Apriles. / Ciuitas Bocchoritana ex / insula Baliarum Maiorum / patronum co<o>ptauit M(arcum) / Crassum Frugi leiberos / posterosque eius. / M(arcus) Crassus Frugi eos in / suam suorumque / clientelam recepit. / Egerunt C(aius) Coelius C(ai) f(ilius) et / C(aius) Caecilius T(iti) f(ilius) legati¹⁹⁹⁵

Marco Licinio Craso Frugi gobernó, según Alföldy, la Hispania Citerior en 13-10 a.C.¹⁹⁹⁶ Por tanto, este pacto de patronato se produjo en su último año en la península, posiblemente a raíz de una visita que habría realizado a la isla de Mallorca, quizá con el objeto de realizar un *conuentus* en una de sus dos colonias, *Pollentia* o *Palma* o para supervisar el estado general de la isla. Ahora bien, tampoco se puede descartar que la ciudad enviara a sus dos legados a la sede conventual a la que estaban adscritas las comunidades baleáricas, *Carthago Noua*.

Plinio el Viejo indica que *Bocchoris* era una *ciuitas foederata*¹⁹⁹⁷; es decir, una comunidad que disfrutaba de una relación especial con Roma en virtud de un tratado de alianza –aunque no en términos de igualdad– que probablemente se firmó durante la conquista de las Baleares a finales del siglo II a.C. El *patrocinium* de Craso Frugi y de sus descendientes (*leiberos posterosque eius*) podía reportarle una consolidación de su posición como ciudad federada y una relación más fluida con Roma en un momento de transición política; no olvidemos que el Principado se acababa de instaurar sólo diecisiete años antes y los magistrados de *Bocchoris*, a pesar de que seguramente juraron lealtad a Octaviano junto con el resto de Occidente en la *coniuratio* del 32 a.C., tendrían ciertas incertidumbres en torno a cómo afectaría su triunfo a sus relaciones con el centro del poder. Los legados que representaron a la ciudad presentan *praenomen*, *nomen* y filiación latinos. A pesar de la ausencia de la tribu en su onomástica, es probable que se trate de ciudadanos romanos o latinos, aunque no se puede descartar que, como ha señalado P. Balbín Chamorro, que se tratase de peregrinos que habrían

¹⁹⁹⁵ La lectura que presentamos es propia, pero sólo pudimos realizarla a partir de una foto en color; véase: Anexo II: nº 30. Variantes de lectura: *EJER* 16; *CIBal* 21; Balbín Chamorro, *Hospitalidad y patronato...* cit. nº 64.

¹⁹⁹⁶ *Fasti Hispanienses* pp. 8-9. Ya habían apuntado la posibilidad de que hubiese gobernado la Citerior A. D'Ors en *EJER* 16 y R. Syme, "Piso Frugi and Crassus Frugi", *JRS* 50, 1960, pp. 12-20, esp. p. 14, pues en *Tarraco* se halló una inscripción funeraria de un *Faustus / Crassi / Frugi ser(uus)* (*CIL* II, 4364) que ha sido identificado como un esclavo de este gobernador.

¹⁹⁹⁷ Plin. *N.H.* III, 77: (...) *et foederatum Bocchorum fuit*.

adoptado una onomástica romanizada¹⁹⁹⁸. Con todo, su romanización parece clara y los situaba como los mejores interlocutores que los *Bocchoritani* podían enviar ante el gobernador. Es importante señalar, con J. Nicols, que la mayoría de las *tabulae patronatus* de comunidades peregrinas conservadas datan de época augusteo-tiberiana y se han hallado solamente en Hispania y África Proconsular¹⁹⁹⁹.

Tenemos un indicio de que este mismo Craso Frugi podría haber aceptado la clientela de otra comunidad de la Hispania Citerior, Segóbriga. En efecto, se conserva una inscripción honorífica en el pedestal de una estatua ecuestre dedicada por este *municipium ciuium Romanorum* a su hijo homónimo:

*M(arco) Licinio Crasso / Frugi pont(ifici) sodal(i) / Aug(ustali) co(n)s(uli) patrono / d(ecreto) (vac.) (vac.) d(ecurionum)*²⁰⁰⁰

Como han señalado sus editores, no hay constancia de que el hijo del cónsul del 14 a.C. hubiese ejercido algún cargo oficial en la Hispania Citerior como su padre y, por ende, los segobrigenses no habrían tenido la oportunidad de establecer una relación clientelar con él. Por tanto, lo más probable es que hubiese heredado esta clientela que su padre había aceptado mientras estuvo en la península, siguiendo lo establecido en el pacto de patronato. Este homenaje hacia su patrono pudo haber estado motivado por su consecución del consulado en 27 d.C.²⁰⁰¹

Esta vinculación de Segóbriga con gobernadores no termina aquí. Gracias a otra inscripción honorífica descubierta recientemente sabemos que el senador Cayo Calvisio Sabino fue elegido también como patrono:

*C(aio) Caluisio Sabino / co(n)s(uli) VII uiro epulo(num) / leg(ato) pro pr(aetore) / patrono ex d(ecreto) d(ecurionum)*²⁰⁰²

¹⁹⁹⁸ López Barja, *Epigrafía latina...* cit. pp. 47-48; Balbín Chamorro, *Hospitalidad y patronato...* cit. p. 232.

¹⁹⁹⁹ J. Nicols, “*Tabulae patronatus*: A Study of the Agreement between Patron and Client-Community”, *ANRW* II/13, pp. 535-561, esp. p. 542-543.

²⁰⁰⁰ G. Alföldy – J. M. Abascal – R. Cebrián, “Nuevos monumentos epigráficos del foro de Segóbriga. Parte primera: inscripciones votivas, imperiales y de empelados del Estado romano”, *ZPE* 143, 2003, pp. 255-274, esp. pp. 265-266, nº 6.

²⁰⁰¹ *Idem*, p. 266.

²⁰⁰² Alföldy – Abascal – Cebrián, “Nuevos monumentos...” cit. pp. 261-265, nº 5. Anexo II: nº 33.

El epígrafe pertenece también al pedestal de una estatua ecuestre erigida en honor de Calvisio Sabino por decisión oficial de los decuriones de la ciudad. Según los editores de la inscripción, su análisis paleográfico lleva a encuadrarla en época augustea y el gobierno de este Cayo Calvisio Sabino habría que situarlo entre el de Paulo Fabio Máximo y el de Calpurnio Pisón, esto es, entre el 1 a.C. y el 9 d.C.²⁰⁰³.

Respecto a Paulo Fabio Máximo, es posible que hubiese establecido una relación de patronato sobre la comunidad de los *bracaraugustani*, en el Noroeste peninsular. Nos induce a plantear esta hipótesis el hecho de que en la inscripción del ara que dedicaron a Augusto —que hemos visto más arriba— se preocupasen de señalar que en ella que la consagración se realizó el día del cumpleaños de este gobernador. Esto indica no sólo la presencia de Paulo Fabio Máximo en esta sede conventual y su importante papel en la difusión del culto imperial en el Noroeste, sino también la estrecha relación personal que estableció con las élites locales. Es muy probable que la consagración de esta ara se realizara en presencia del gobernador precisamente en el aniversario de su natalicio, pero, aunque así fuese, parece que la comunidad local quiso honrar a Fabio Máximo incluyéndolo en el epígrafe votivo. Como hemos dicho en capítulos anteriores, la labor de este gobernador en el Noroeste puede compararse a la de Agrícola en Britania, pues los testimonios epigráficos que lo mencionan en *Lucus Augusti* y *Bracara Augusta* revelan que llevó a cabo una importante actividad en el impulso de estas sedes conventuales y de esa actividad pudo haber nacido una relación clientelar como sucedió en los ejemplos antedichos. A las élites indígenas no pasaría desapercibido la alta posición ocupada por Paulo Fabio Máximo como gobernador y las oportunidades que se derivarían para ellos de su protección.

El último gobernador de la Citerior que sabemos con seguridad que fue cooptado como patrono por alguna de sus comunidades durante el período augusteo fue Marco Emilio Lépido, que gobernó en torno a 10/12-14 d.C.²⁰⁰⁴. El dedicante fue el municipio de Uxama (Burgo de Osma, Soria), que estaba adscrito al *conuentus Cluniensis*:

*M(arco) Aemilio / Lepido / patrono / d(ecreto) d(ecurionum)*²⁰⁰⁵

²⁰⁰³ *Idem*, p. 264.

²⁰⁰⁴ *Fasti Hispanienses* pp. 12-13.

²⁰⁰⁵ *CIL* II 2820 = *ERPSO* 130. Anexo II: n° 34.

Lamentablemente, este epígrafe se ha perdido y sólo lo conocemos gracias a un dibujo. Con todo, la dedicatoria es muy clara y nos indica, como en el caso de segobrigense de Sabino, que los decuriones de este municipio lo eligieron como patrono sin duda durante su gobierno provincial. Es posible que le presentaran la propuesta cuando Lépidio se hallaba realizando el *conuentus* en *Clunia*, pues, como hemos indicado en reiteradas ocasiones, las sedes conventuales eran lugares especialmente proclives para el encuentro con los gobernadores.

Asimismo, a partir de una inscripción de Sagunto Alföldy –según expone en el nuevo *CIL* II– ha deducido verosímilmente que Lépidio también se convirtió en patrono de esta ciudad:

*Paullo Aemilio / Paulli f(ilio) Pal(atina) / Regillo uir(o) / sacris faciendis / praefecto
Vrb(is) / iuri dicundo / quaestori / Ti(beri) Caesaris Aug(usti) / patrono*²⁰⁰⁶

El patrono homenajeado en este epígrafe ha sido identificado como el hijo del gobernador de la Citerior del año 14 d.C. y, dado que no desempeñó ningún cargo provincial en Hispania, habría heredado de su padre el patronato sobre Sagunto, al igual que sucedió con Craso Frugi padre e hijo en Segóbriga.

Por último, la primera lectura de una inscripción fragmentaria de *Emporiae* hizo que se atribuyera a este mismo Marco Emilio Lépidio el patronato sobre esta ciudad²⁰⁰⁷, pero en una revisión ulterior de esta y de otra inscripción que se halla en la otra cara de la misma placa ampuritana los autores de *IRC* III han reconstruido el nombre del homenajeado como Paulo Emilio Lépidio, inclinándose por identificarlo con el cónsul del 34 a.C. Este homenaje, por tanto, habría de fecharse en época triunviral²⁰⁰⁸. Recientemente, sin embargo, Navarro ha dado por buena la primera lectura, dado que el gobernador augusteo Marco Lépidio se distinguió como patrono de otras ciudades de la Citerior²⁰⁰⁹.

²⁰⁰⁶ *CIL* II²/14, 329.

²⁰⁰⁷ *HEp* 2, 1990, 400: [*M(arco) Aemilio*] / [*Le*]pid[o] / [*pat*]ro[no]

²⁰⁰⁸ *IRC* III, 31 = *HEp* 4, 1992, 403 a: [*Paullo L(uci) f(ilio)*] / [*Ae*]m(ilio) [*Lepido*] / [*p*]atr[ono]; *IRC* III, 32 = *HEp* 4, 1992, 403 b: [*Paullo Aemilio*] / [*Le*]pid[o] / [*pat*]ro[no]. Ambas inscripciones se hallan en la misma placa, cada una en una cara.

²⁰⁰⁹ F. J. Navarro, “Los gobernadores de la provincia Citerior como agentes de la romanización”, en *Idem* (ed.), *Pluralidad e integración...* cit. pp. 189-205, esp. pp. 195 y 197.

A estos testimonios hay que sumar dos epígrafes, uno de época augustea; el otro fechado en época de Augusto o Tiberio. El primero procede de Italia y está dedicado al senador Cayo Vibio Póstumo, que fue homenajeado por la colonia de *Hispalis* en su tierra natal. En efecto, conocemos una inscripción dedicada por la *colonia Romulensis* a este senador en su ciudad natal *Larinum* (en el Lacio):

*C(aio) Vibio C(aii) f(ilio) / Postumo / co(n)s(uli) VIIuir(o) epul(onum) / colonia Romulensis*²⁰¹⁰

G. Camodeca mostró en su momento dudas razonables en torno a la identificación de esta colonia²⁰¹¹, pero nos parece que la argumentación de F. J. Navarro en favor de *Hispalis* es la más verosímil. Además, su propuesta de que este personaje desempeñó un proconsulado en la Bética con anterioridad al 5 d.C. (año en que fue *consul suffectus*) encaja bien en su *cursus honorum* y cubre un vacío en los *Fasti* de esta provincia²⁰¹². En la dedicatoria los hispalenses no mencionaron que fuese su patrono, pero resulta difícil pensar que decidiesen invertir la importante suma de dinero que exigía enviar una legación a Italia y dedicar una estatua a Vibio Póstumo si éste no lo fuera, simplemente por haber sido un buen gobernador. Además, la condición de sede conventual habría facilitado el establecimiento del patronato, dado que los magistrados de la colonia tuvieron la oportunidad de tratar personalmente con él mientras se detuvo en su ciudad durante el año que gobernó la Bética, momento en que haría demostrado a sus ojos ser una persona idónea para defender los intereses de la colonia en Roma o proclive a beneficiarla de algún modo. Con todo, como hemos dicho a propósito de homenajes similares, lo cierto es que esta dedicatoria revela el establecimiento de una relación estrecha entre este probable procónsul de la Bética y las élites de una sede conventual y el establecimiento de redes de influencia incluso si no existía un patrono formalizado oficialmente.

El segundo epígrafe se halló en la localidad de Mengabril (Badajoz) y parece corresponderse con el pedestal de una estatua ecuestre:

²⁰¹⁰ *AE* 1966, 74.

²⁰¹¹ G. Camodeca, “Problemi di storia sociale in Alife romana. Le gentes senatorie deglo Aedii e dei Granii e i ceti dirigente del primo principato”, en L. Di Cosmo – A. M. Villucci (cura), *Il territorio alifano: archeologia, arte, storia (Convegno 26 aprile 1987)*, Sant’Angelo di Alife, 1990, pp. 123-143.

²⁰¹² Navarro, “Nuevos magistrados...” cit. pp. 444-445.

*L(ucio) Caecilio L(uci) f(ilio) / Sca(ptia) Rufo / legato pro(praetore) pr(ouvinciae)*²⁰¹³

A partir del análisis paleográfico y del título oficial usado, Stylow ha fechado esta inscripción en el período augusteo o tiberiano. La cercanía de la antigua *Metellinum* (Medellín) respecto al lugar del hallazgo de esta pieza (4 km.) invita a pensar en que el dedicante podría haber sido esta colonia. Es muy probable que Cecilio Rufo visitase *Metellinum* al igual que lo hizo su homólogo de época de Claudio Marco Porcio Catón (*vid. supra*). Como hemos dicho anteriormente, los gobernadores de las provincias hispanas prestaron especial atención a los asuntos y problemas de las comunidades privilegiadas, y la situación de la colonia de *Metellinum* –muy cercana a la capital provincial de *Emerita* y en el curso de una vía de comunicación terrestre importante– habrían favorecido la visita de los gobernadores de la Lusitania. Saquete Chamizo ha propuesto verosímilmente que la presencia de los gobernadores de la Lusitania en *Metellinum* podría deberse a la riqueza minera de esta región, la Beturia túrdula²⁰¹⁴. En este caso, este costoso homenaje se debió, sin duda, a algún importante beneficio recibido de Cecilio Rufo, y no se puede descartar que éste hubiese sido cooptado como patrono a su marcha de la provincia.

Durante los principados del resto de emperadores Julio-Claudios no ha sobrevivido ningún testimonio directo acerca del establecimiento de relaciones de patronato entre un gobernador y una comunidad hispana. Sin embargo, de una inscripción honorífica hallada en *Tusculum* se podría deducir, si no el patronato, sí una relación estrecha entre un importante gobernador de la Lusitania y la capital de la provincia, *Augusta Emerita*. Nos referimos a la inscripción que los emeritenses dedicaron a la mujer del influyente senador de época tiberiana Lucio Fulcinio Trío:

*Sulpiciae Gali filiae) Ser(ui) n(epoti), Ser(ui) pro[n(epoti)] / Trionis (uxori) / ex prouinc(ia) Lusitania colonia / Augusta Emerita agentib(us) leg(atis) / T(ito) Furio Ocriculano et L(ucio) Flauio Vrso.*²⁰¹⁵

²⁰¹³ *HEp.* 4, 1994, 195. Anexo II: nº 46.

²⁰¹⁴ Saquete Chamizo, “El gobernador provincial...” cit. pp. 90-91.

²⁰¹⁵ *AE* 1999, 417.

La inscripción tusculana dedicada a su esposa Sulpicia por la colonia de *Augusta Emerita*, a pesar de que no lo menciona explícitamente, lleva a pensar que Fulcinio Trío fue elegido como patrono por esta comunidad o que éste buscaba convencerlo para que la aceptase en su clientela. Aunque no todos los homenajes tributados en Italia a ex gobernadores por parte de comunidades de su antigua provincia implicaban que existiese un patronato oficial, en este caso no faltaron razones y oportunidades para ello: gobernó durante un largo período de tiempo la Lusitania, lo que le proporcionó una familiarización con las élites locales –en particular las de la capital– con las que sin duda estrechó lazos de *amicitia*. Además, era *vox populi* que se trataba de un hombre que gozaba de la confianza de Tiberio y que era escuchado por éste, revelándose el individuo más idóneo para representar los intereses emeritenses en Roma, reforzando la tradicional vinculación predilecta de esta colonia con la dinastía imperial. Por último, no parece que los emeritenses hubiesen enviado una embajada hasta *Tusculum* para honrar a la mujer de un ex gobernador si no hubiese en juego grandes intereses.

Cronológicamente, el siguiente ejemplo de un gobernador honrado por una comunidad hispana nos lo proporciona una inscripción honorífica de Sagunto datada entre finales de época flavia y el período trajane:

[Cn(aeo) Baebio (?) ---] / Silano [----] / Iusto Anto[nio (?) ---] / Cn(aei) Lepidi f(ilio) [---] / seuiro equit[um Romanor(um) quaestori]] / urbano tribu[no pleb(is) praet(ori) proco(n)s(uli)] / sortito p(rouinciae) H[isp(aniae) Vlt(erioris) Baeticae] / Sagu[ntini]²⁰¹⁶

El mayor interés de este epígrafe radicaba en el hecho de que se trataba de un ex procónsul de la Bética que fue honrado por un municipio de la provincia vecina de Hispania Citerior. Esta circunstancia tiene paralelos en otras regiones²⁰¹⁷, pero suponía un desafío proponer una hipótesis acerca de las relaciones entre un procónsul de la Bética y Sagunto que pudieron llevar a esta comunidad a homenajearlo. A pesar de su estado fragmentario, en la nueva edición de este tomo del *CIL* II, Alföldy logró

²⁰¹⁶ *CIL* II²/14, 330. Anexo II: n° 32.

²⁰¹⁷ Harmand, *Le patronat...* cit. pp.297-298.

reconstruir verosíblemente el nombre del gobernador, relacionando este personaje con un Baebio que es mencionado en un epígrafe de Roma como *proconsul sortitus Hispaniae Vltioris Baeticae* y que él ya había catalogado en sus *Fasti Hispanienses* de 1969, pero como un individuo diverso del de nuestra inscripción²⁰¹⁸: [*Cn(aeo) Baebio (?) ---*] / *Silano [----]* / *Iusto Anto[nio (?) ---]*. Se trataría de un miembro de la poderosa familia saguntina de los *Baebii*²⁰¹⁹, y, por tanto, los *beneficia* que habría concedido a la ciudad se debería no a sus actividades como procónsul de la Bética, sino que es anterior y se derivaría de su vinculación familiar con ella y de su posición como senador en Roma. El hecho de que se diga que ha sido elegido como procónsul de la Bética revela que los saguntinos decidieron realizar este homenaje con el fin de conmemorar este importante avance de este notable local en el *cursus honorum* y, también, que lo tuviesen convenientemente cerca. Sagunto, adscrito al *conuentus Carthaginensis*, era una comunidad cercana a la Bética y, por tanto, tendría facilidades para enviar embajadas a Baebio Silano cuando quisiesen proponerle alguna petición. Según Alföldy, este hombre habría sido admitido en el Senado por Vespasiano y habría desempeñado el proconsulado a finales de época flavia o inicios del siglo II, pues el título de *Hispania Vltior Baetica* se usó oficialmente hasta época de Adriano.

Este mismo argumento ha llevado a Navarro a fechar en el mismo período y antes del principado de Adriano una inscripción muy fragmentaria hallada en *Tusculum* en la que el municipio de *Nertobriga*, perteneciente a la Bética, rindió homenaje a un desconocido, que, según este autor, hubo de ser un senador y, probablemente, un ex procónsul²⁰²⁰:

[-----] / [-----] / *ex Hispania Vltiore prouincia / Baetica municipium Concordia / Iulia Nertobrigenses publice*²⁰²¹.

La hipótesis de Navarro es verosímil y tiene un paralelo en la inscripción de *Larinum* relativa a Cayo Vibio Póstumo. Sin duda, la realización de un homenaje en la ciudad natal del honrado por parte de un pequeño municipio bético como *Nertobriga* hubo de deberse a un gran *beneficium* recibido del mismo. Ahora bien, es difícil saber

²⁰¹⁸ CIL VI, 1361; *Fasti Hispanienses* pp. 172.

²⁰¹⁹ Sobre esta familia: Alföldy, *Los Baebii...* cit.

²⁰²⁰ Navarro, “Nuevos magistrados...” cit. 450-451.

²⁰²¹ CIL XIV, 2613.

qué cargo oficial ocupaba este individuo, que pudo ser legado o cuestor del procónsul e, incluso, un senador miembro de la *cohors amicorum* del gobernador.

En época de Marco Aurelio recibió un homenaje en su ciudad natal de *Iliberri* (Granada) un notable local y senador, que gobernó la Bética:

*P(ublio) Cornel(io) P(ubli) filio Gal(eria) Anullino / Iliber(ritano) praef(ecto) Vr[b]i
co(n)s(uli) proco(n)s(uli) / prou(inciae) Africae p[ra]et(ori) trib(uno) / pleb(is)
q(uaestori) leg(ato) prou(inciae) Nar(bonens(is) proco(n)s(uli) pro]u(inciae) /
[Ba]etic(ae) leg(ato) l[e]g(ionis) VII Gem(inae) / [P(iae) F(elicis) le]g(ato) Aug(usti)
pr(o) pr(aetore) prou(inciae) / [Ra]et(iae) curat(ori) aluei Ti[be]/[ris et riparum - - -] /
- - - - -²⁰²²*

De este personaje ya hemos hablado en un capítulo precedente, pues, como ha planteado Alföldy, participó en la represión de la invasión de los *mauri* que acaeció en 171-172 d.C. Como vimos, el grave peligro que supuso esta invasión llevó al poder imperial a concentrar el gobierno de la Bética y la Hispania Citerior en un solo hombre, Cayo Aufidio Victorino. Anulino acaba de ser procónsul de la Bética y Marco Aurelio decidió, según se desprende de su *cursus honorum*, nombrarlo legado de la *legio VII Gemina* con el fin de ofrecer a Aufidio Victorino un subordinado de gran relevancia que fuese un buen conocedor de la Bética, que era la provincia más afectada por la invasión²⁰²³.

Al igual que en el caso del antedicho Bebio Silano, Cornelio Anulino tenía ya unos vínculos previos con el municipio de *Iliberri* que fueron los que llevaron a su ciudad a honrarle. El final de la inscripción se ha perdido, lo que deja la puerta abierta a que fuese patrono de su municipio, quizá por “herencia” familiar. Fuese así o no, es muy probable que durante su gobierno de la Bética prestase especial atención a su ciudad, que no era sede conventual, aprovechando su posición al frente de la provincia.

Por último, en época severa sabemos que fueron patronos de comunidades hispanas un gobernador de la Citerior y otro de la Lusitania coetáneos que estuvieron en la península aproximadamente en los mismos años. Nos referimos a Marco Numio

²⁰²² *CIL* II²/5, 623. Anexo II: n° 57.

²⁰²³ *Vid.* Primera Parte, Capítulo 5.

Seneción Albino, que gobernó la Citerior entre 207/208-211/212, y a Sexto Furnio Juliano, que estuvo en Lusitania en torno a 210-213²⁰²⁴.

El primero fue honrado como patrono por la colonia de *Valentia*:

*M(arco) Nummio / Senecioni Al/bino c(larissimo) u(iro) pont(ifici) / leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) / pr(aetore) Valentini / Veterani et / Veteres patrono / cur(antibus) Brin(nio) Marco et Lic(inio) Quinto*²⁰²⁵

Valentia estaba adscrita al *conuentus* que se realizaba en la capital de la provincia, *Tarraco*, así que el contacto de las autoridades locales con Seneción Albino hubo de producirse en ella o bien en la cercana *Carthago Noua*, aunque no se puede descartar que el gobernador se acercase a la colonia expresamente para resolver alguna cuestión que requiriese de su intervención personal –revisión de las cuentas públicas, alguna infraestructura sufragada por el poder imperial, algún pleito territorial que requiriese la inspección del terreno... No olvidemos que las comunidades privilegiadas recibieron una atención especial de parte de los gobernadores provinciales, como vimos en la Segunda Parte.

El segundo lo fue en la propia capital de la Lusitania, la colonia de *Augusta Emerita*:

*... Sex(to) Furnio / ... Iuliano / ... [l]eg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prou(inciae) / ... [L]usitaniae, c(larissimo) u(iro) co((n)s(uli) / ... [or]do splendidissimus / ... [E]meritensium / ... [pra]esidi innocentissimo / ... [pa]trono optimo / ... ob merita / ... io modest...*²⁰²⁶

Es natural que los magistrados de la capital provincial decidiesen elegir como patrono al gobernador, pues eran los que tenían más oportunidades de acceder a él durante el año y trabar relaciones personales, de hospitalidad, colaborar con él en sus actividades, etc. Como ha señalado Saquete Chamizo, del uso de la expresión *ob merita* se puede deducir que Furnio Juliano habría hecho honor a su *patrocinium* sobre la colonia, favoreciéndola bien a través de la defensa de sus derechos en Roma, bien con la

²⁰²⁴ *Fasti Hispanienses* pp. 48 y 147-148.

²⁰²⁵ *CIL* II²/14, 21 = *IRPV* V, 32. Anexo II: n° 35.

²⁰²⁶ *ERAE* 100 = *AE* 1952, 116. Anexo II: n° 41.

realización de actos evergéticos, y por ello los emeritenses habrían decidido erigir en su honor una estatua²⁰²⁷.

Resulta sorprendente que del resto de los ejemplos conservados de patronato de un gobernador sobre una comunidad provincial ninguno esté protagonizado por una de las capitales. Evidentemente, esto no niega que ese patronato existiese, sino que revela que las oportunidades de elegir como patrono al gobernador estaban abiertas a otras comunidades. De hecho, de los 11 casos en que se puede afirmar con seguridad que el gobernador fue patrono oficial de una comunidad hispana²⁰²⁸, sólo dos estuvieron protagonizados por sedes conventuales (*Carthago Noua* y el mencionado de *Emerita*). Lamentablemente, el desconocimiento de las comunidades que dedicaron los otros siete epígrafes de Largo Argentina a Elio Lamia nos impide realizar un cálculo proporcional más exacto.

Todas estas relaciones establecidas entre los gobernadores y las comunidades locales fueron objeto de intentos de regulación por parte del poder imperial. Durante Principado los emperadores continuaron con la política de control sobre los gobernadores iniciada a finales de la República, preocupándose de fortalecer las regulaciones de los cauces por los que un magistrado provincial podía convertirse en patrono de una comunidad local. En particular, en los municipios y colonias el procedimiento legal venía explicitado detalladamente en la ley constitutiva de estas comunidades, como muestran los ejemplos conservados, que proceden precisamente de una provincia hispana, la Bética.

La *lex coloniae Genetiuae Iuliae* y las *leges* de los municipios flavios de *Irni* y *Malaca* nos proporcionan información muy valiosa acerca de las condiciones y mecanismos que los decuriones de ambas comunidades debían seguir para elegir un nuevo patrono. La primera dedica dos capítulos a la regulamentación del patronato sobre la colonia: el 97 trata las normas generales que debían seguir los decuriones para elegir un patrono y el 130 especifica las condiciones que habían de cumplirse cuando quisiesen elegir como patrono a un senador o a su hijo. Asimismo, el capítulo 131

²⁰²⁷ Saquete Chamizo, *Las élites...* cit. p. 157.

²⁰²⁸ Teniendo en cuenta también los epígrafes de Segobriga y Sagunto de Craso Frugi hijo y Paulo Emilio Regilo.

estuvo dedicado a la regulación del *hospitium*, cuestión íntimamente vinculada al patronato²⁰²⁹. En cambio, en la *leges* de los municipios flavios el patronato sólo ocupa un capítulo (el 61).

La mayor insistencia en el control del patronato en Urso ha de relacionarse con la legislación cesariana. Según D’Ors, estas medidas buscaban acabar con la red clientelar pompeyana en Hispania, pero, como ha mostrado López Barja, existen indicios importantes de que se trató de una norma de alcance general para todo el imperio. En efecto, en las *Pauli Sententiae* se indica que la *lex de repetundis* estipulaba que serían castigados aquéllos que en la curia municipal o en el *concilium prouvinciae* propusieran que se decretasen honores en favor del gobernador provincial o de sus colaboradores que formasen parte de su séquito (*comites*)²⁰³⁰, y la romanística ha admitido tradicionalmente que se estaba refiriendo precisamente a la ley que Julio César logró aprobar cuando fue cónsul en 59 a.C.²⁰³¹, que fue la más completa y estricta de todas las *leges repetundarum* promulgadas desde el 149 a.C., hasta el punto de que continuó estando vigente durante el Principado²⁰³². Ya desde un principio el poder imperial buscará reafirmar este control de los honores tributados a los gobernadores, como muestra el decreto de Augusto del 11 d.C.

En concreto, de todos los honores posibles la *lex Vrsonensis* se centra en el que era más relevante políticamente, el patronato, estableciendo lo siguiente en su capítulo 130:

Ne quis Iluir aed(ilis) praef(ectus) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) quicumque erit ad decurion(es) c(oloniae) G(enetiuae) referto neue decurion(es) / consulito neue d(ecretum) d(ecurionum) facito neue d(e) e(a) r(e) in tabulas p(ublicas) referto neue referri iubeto / neue quis decur(io) d(e) e(a) r(e), q(ua) d(e) r(e) a(getur), in decurionib(us) sententiam dicito neue d(ecretum) d(ecurionum) scri-/bito, neue in

²⁰²⁹ Nicols, “*Tabulae patronatus...*” cit. p. 549.

²⁰³⁰ *Pauli Sent.* V, 28, 2: *lege repetundarum te[netur q]uicumque in curia uel concili[o] auctor fueri[t h]onoribus praesidi comitibusque eius edecern[en]tis decretumue su[per] ea re fecerit faciendumue curauerit.* Cf. Crawford, *Roman Statutes* cit. II, p. 771, Ch. B.

²⁰³¹ Nicols, *Civic Patronage...* cit. pp. 211-212; P. López Barja, “Patronato y clientela: el gobernador provincial romano”, en M. Campagno – J. Gallego – C. García MacGaw (dir.) *Rapports de subordination personelle et pouvoir politique dans la Méditerranée antique et au-delà. XXXIVe Colloque International GIREA-III Coloquio Internacional PEFSCA*, Besançon, 2013, pp. 141-160, esp. p. 148; Lamberti, *Tabulae Irnitanae...* cit. p. 133; D’Ors, *EJER* p. 270; De Martino, *Storia de la costituzione...* cit. III, p. 172, nt. 97; Crawford, *Roman Statutes* II, cit. pp. 769-772.

²⁰³² González Romanillos, *La corrupción política...* cit.

tabulas publicas referto, neue referendum curato, quo quis / senator senatorisue f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetiuae) patronus atoptetur sumatur fiat, nisi de tri- / um partium (decurionum) senten[t(ia)] per tabellam fac{i}t<a> et nisi de eo homine de quo / tum referetur consuletu[r, d(ecretum)] d(ecurionum) fiat, qui, cum e(a) r(es) a(getur), in Italiam sine imperio priuatus / erit. Si quis aduersus ea ad [dec]urion(es) rettulerit d(ecretum)ue d(ecurionum) fecerit faciendumu<e> / curauerit inue tabulas p[ublicas] rettul<er>it referriue iusserit siue quis in decurionib(us) / sententiam di[x]erit d(ecretum)ue [d(ecurionum) scrips]erit, in tabulas publicas rettulerit referendumue / curauerit, in res sing(ulas), quo[tienscu]mque quit atuersus ea fecerit, <is> (sestertium) (centum milia) c(olonis) c(oloniae) <G(enetiuae)> I(uliae) / d(are) d(amas) e(sto), eiusque pecuniae cui [eor(um) uole]t rec(iperatorio) iudic(io) apud Iuir(um) interregem praef(ectum) actio / petitio persecutioqu[e ex h(ac) l(ege) i(us) pot]est(as)que e(sto).²⁰³³

La ley es muy clara: estaba prohibido que los decuriones de la colonia aprobasen la elección de un senador o su hijo como patrono de la colonia hasta que regresasen a Italia y volviesen a ser *priuati sine imperio*. No cabe duda que el legislador tiene *in mente* sobre todo a los gobernadores provinciales, que solían hacerse acompañar de alguno de sus hijos adultos a la provincia, utilizándolos a menudo como legados. Además, para evitar que alguna de las facciones políticas en que se dividían los miembros del *ordo decurionum* pudiesen hacer caer a la colonia bajo la influencia de un senador afín, este capítulo estipula que era necesario un quórum de tres cuartos en la curia para proceder a esta elección del patrono senatorial, en la que debía usarse el voto *per tabellam*. Quien infringiese alguna de estas normas sería castigado con una multa de 100,000 sestercios, cifra muy elevada que funcionaría como una poderosa medida disuasoria. El proceso (*reciperatorium iudicium*) se realizaría en sede local, ante los duoviros o, en su defecto, ante un *interrex* o un prefecto.

En cuanto al *hospitium*, el capítulo que lo regula (131) presenta las mismas regulaciones que el precedente, aunque la multa es inferior (10,000 sestercios), lo que indica que el *hospitium* era considerado una cosa diferente del *patrocinium*²⁰³⁴. El *hospitium* implicaba en origen una relación igualitaria entre ambas partes, pero E. Badian planteó la hipótesis de que cuando una de ellas era un individuo romano

²⁰³³ Seguimos la edición de Crawford, *Roman Statutes* I cit. pp. 415-416. Anexo II: n° 73.

²⁰³⁴ López Barja, “Patronato...” cit. pp. 148-149. Anexo II: n° 74.

poderoso esa relación se desequilibraba a favor de éste, mezclándose con el concepto de clientela²⁰³⁵. A este respecto, Nicols ha constatado que las evidencias conservadas son ambiguas²⁰³⁶. Lo cierto es que eran instituciones diferentes y que, a tenor de la multa exigida en comparación a la del capítulo 130 de Urso, el *hospitium* tenido por algo menos importante²⁰³⁷. Es decir, se consideraba que suponía un peligro menor para la estabilidad política –pues dotaba de menos influencia política a los senadores que lo obtuviesen– y para la seguridad de los provinciales. Según Nicols, el *hospitium* puede ser definido como una institución social a través de la cual miembros de diferentes comunidades, individualmente o como grupo, llegaban a un acuerdo con otros que ofreciese ventajas para ambas partes. Dependiendo de quiénes fuesen las partes, se puede hablar de un *hospitium priuatum* (entre individuos) y de un *hospitium publicum* (en el que al menos una de las partes es una comunidad), que es al que se refiere la *lex Vrsonensis*²⁰³⁸.

Según se deduce de las fuentes, hasta época de Julio César fue habitual que las comunidades provinciales estableciesen un *hospitium* con los gobernadores y otros enviados senatoriales cuando éstos las visitaban y podía llegar a suponer un importante desembolso económico²⁰³⁹. La recepción y acogida del gobernador en una ciudad implicaba una serie considerable de actos de deferencia y prebendas: recepción oficial, banquetes²⁰⁴⁰, sacrificios, espectáculos²⁰⁴¹, a lo que hay que sumar otros gastos adicionales generados por el gobernador durante su estancia y la carga que su alojamiento podía suponer para el notable que lo hospedara²⁰⁴². Ya desde finales de la República las autoridades romanas fueron conscientes de que este esfuerzo económico

²⁰³⁵ E. Badian, *Foreign Clientelae, 264-70 BC*, Oxford, 1958, pp. 12 y 154.

²⁰³⁶ Nicols, “*Tabulae patronatus...*” cit. p. 549, seguido por Balbín Chamorro, *Hospitalidad y clientela...* cit. pp. 23-38.

²⁰³⁷ López Barja, “*Patronato...*” cit. p. 149.

²⁰³⁸ J. Nicols, “*Hospitality among the Romans*”, en Peachin (ed.) *The Oxford Handbook of Social...* cit. pp. 422-437, esp. pp. 422-423.

²⁰³⁹ Cic. 2 *Verr.* IV, 145:

²⁰⁴⁰ Béranger, *Le métier...* cit. pp. 345-353 (entrada del gobernador en una ciudad) y 362-365 (banquetes).

²⁰⁴¹ En el capítulo 127 de la *lex Vrsonensis* se especifica el lugar que debía ocupar en los *ludi scaenici* el gobernador provincial si visitaba la colonia.

²⁰⁴² Estos anfitriones podían sufrir abusos dentro de su propia casa: Cic. 2 *Verr.* II, 83; otros ejemplos en Nicols, “*Hospitality...*” cit. pp. 434-435. A veces el notable local más relevante podía rechazar acoger al gobernador: Así le sucedió al propio Antonino Pío cuando fue procónsul de Asia. En una visita que realizó a la ciudad de Esmirna fue alojado en la casa más lujosa de la ciudad, propiedad del notable Polemón, cuando éste se hallaba de viaje. Al regresar esa medianoche, Polemón, indignado con esta decisión tomada sin su consentimiento, echó de malos modos a Antonino de su casa (Phil. V.S. I, 25, 534).

ineludible podía ser oneroso para las ciudades provinciales y, por ello, algunos gobernadores como Cicerón decidieron ahorrarles tales desembolsos²⁰⁴³. El capítulo 131 de la *lex Vrsonensis* sería, por tanto, resultado de esta evolución en la regulación del *hospitium*; con esta medida preventiva Julio César buscaría, por un lado, frenar los abusos que los futuros gobernadores de la Hispania Ulterior pudiesen cometer en su visita en las nuevas colonias de veteranos como la de Urso y, por otro, evitar que se formasen vínculos estrechos entre estas comunidades clave en el control del territorio provincial y magistrados romanos ambiciosos.

Durante el Principado se siguieron estableciendo relaciones de hospitalidad y patronato entre comunidades provinciales occidentales y senadores en el ejercicio de un cargo oficial (procónsules, legados imperiales, cuestores)²⁰⁴⁴. En Hispania tenemos un ejemplo de *hospitium* y patronato simultáneos en el pacto que el cuestor de la Hispania Ulterior Sexto Curvio Silvino estableció en época augusteo-tiberiana con Munigua (por entonces una *ciuitas stipendiaria*)²⁰⁴⁵. También continuará siendo evidente la tendencia al gasto conspicuo de las comunidades derivado del *hospitium publicum* y por ello Ulpiano, en su tratado *de officio proconsulis*, reiterará: *Obseruare autem proconsulem oportet, ne in hospitiiis praebendis oneret prouinciam*²⁰⁴⁶. Asimismo, los emperadores insistirán en que los gobernadores muestren mesura en la aceptación de regalos ofrecidos por los provinciales²⁰⁴⁷.

Por su parte, la *lex Irnitana* es menos minuciosa, limitándose a dedicar un capítulo a la normativa que regía el procedimiento de designación de los patronos del municipio en general, sin ulteriores precisiones acerca de ellos:

*Ne quis patronum public((a))e municipibus municipi Flauī Irnitani / cooptato patrociniūm c((i))ui deferto, nisi ex maioris par-/tis decurionum decreto, quod decretum factum erit, cum / duae partes non minus decurionum adfuerint et iurati / per tabellam se[n]tentiam tulerint. Qui aliter aduersus / ea patronum public((a))e municipibus municipi Flauī Irni-/tani cooptauerit patr*o*cinium cui detulerit, is HS*

²⁰⁴³ Cic. *Ad Att.* V, 21, 5.

²⁰⁴⁴ Mangas, “*Hospitium y patrociniūm...*” cit. p. 171; B. Díaz Ariño, “Las tábulas de hospitalidad y patronato del Norte de África”, *MEFRA* 124-1, 2012, pp. 205-229, esp. pp. 211-214 y 226-227, n° 2-17.

²⁰⁴⁵ La ausencia de datación consular plantea problemas para aproximar su datación. Cf. Balbín Chamorro, *Hospitalidad y patronato...* cit. pp. 243-244; *Fasti Hispanienses* pp. 182-183; Nicols, “*Hospitality...*” cit. pp. 430-431.

²⁰⁴⁶ *Dig.* I, 16, 4, pr. (*Ulp. 1 de off. procos.*). Vid. Capítulo 1, Segunda Parte.

²⁰⁴⁷ Vid. *infra*.

(sestertium) X (milia) in pub-/licum municipibus municipi Flauī Irnitani d(are) d(amnas) e(sto), isque qui / aduersus h(anc) l(egem) patronus cooptatus cuiue patrociniū dela-/tum erit, ne magis ob eam rem patronus municipium mu-/nicipi Flauī Irnitani esto.²⁰⁴⁸

El procedimiento es similar al contemplado en Urso tanto en los capítulos 97 y 130 –aunque con adaptaciones, por ejemplo en el quórum, que en la curia irnitana debía de ser de dos tercios– y, al igual que en la colonia cesariana, en Irni la contravención de estas normas acarreaba una multa pecuniaria, que estaba establecida en 10.000 sestercios, seguramente ajustada a la capacidad económica de los decuriones de Irni. Es, por tanto, una cantidad superior a la exigida a los colonos de Urso cuando infringían las normas a propósito del patronato de quien no fuera senador (5,000 sestercios), pero muy inferior a la impuesta en el capítulo 130, lo que demuestra que a finales de la República los individuos que más ambiciones depositaban en las clientelas provinciales y más podían presionar a sus comunidades para lograrlas eran los gobernadores. La ausencia de un capítulo específico dedicado al patronato de los senadores como en la *lex Vrsonensis* no quiere decir que el control del mismo hubiese decaído en época flavia; tampoco que no se realizase en los municipios latinos. Como ha señalado López Barja, el testimonio de las *Pauli Sententiae* demuestra que las disposiciones en torno al control de los honores otorgados a los gobernadores y demás magistrados senatoriales por parte de las comunidades provinciales no cayó en desuso durante el Principado, y es posible que tal cuestión estuviese contemplada en uno de los capítulos perdidos de la ley irnitana²⁰⁴⁹. Pero aun en el caso de que nada se dijese acerca de esto en ellos, existían, como vimos, decretos imperiales que afectaban a todas las comunidades (excepto las libres) de todas las provincias.

Sin embargo, la vigencia de la *lex de repetundis* no significa que ésta fuese respetada y, de hecho, existen ejemplos de sus disposiciones acerca de la concesión de honores a los gobernadores fueron contravenidas desde época augustea²⁰⁵⁰. De los ejemplos hispanos sólo en uno de ellos podemos afirmar con seguridad que el pacto se realizó durante el gobierno del senador, el de Marco Licinio Craso Frugi con la *ciuitas*

²⁰⁴⁸ Seguimos la edición de Lamberti, *Tabulae Irnitanae*... cit. pp. 316-318.

²⁰⁴⁹ López Barja, “Patronato...” cit. p. 149.

²⁰⁵⁰ López Barja, “Patronato...” cit. p. 149.

Bocchoritana, del que conservamos la *tabula aenea* en el que se plasmó, siguiendo el modelo característico de estos pactos. En este caso, la presencia de Craso Frugi en la provincia –bien en la península, bien en la propia isla de Mallorca– se deduce no sólo de la fecha (17 de marzo), sino también del empleo de la fórmula *M(arcus) Crassus Frugi eos in / suam suorumque / clientelam recepit* (ll. 8-10), pues, como ha explicado J. Nicols, revela que el patrono desempeñó un papel activo en este pacto, confirmando de palabra que recibía a la comunidad en su clientela²⁰⁵¹.

En el resto de ejemplos de patronato de un gobernador sobre una comunidad hispana que antes hemos visto, no podemos saber si el patronato se estableció antes o después de la partida del gobernador de la provincia. Pero aunque el patronato se oficializase tras su marcha no cabe duda de que se forjó mientras se hallaba en la provincia, favorecido por la intervención de los gobernadores en los asuntos de las comunidades locales. Y, a nuestro juicio, este es el punto de mayor interés.

Como ha señalado López Barja, el poder central romano intentó distanciar a los gobernadores de las élites locales con el fin de evitar que concentrasen excesivo poder e influencia en sus manos, pero sus esfuerzos lograron un éxito relativo²⁰⁵². Las prohibiciones respecto a los honores se limitaban al tiempo que duraba su mandato en la provincia pero no evitaban que las relaciones de patronato se estableciesen oficiosamente y que los gobernadores obtuviesen la promesa de recibir honores una vez que hubiesen abandonado la provincia. Así actuó el predecesor de Cicerón en Cilicia, Apio Claudio Pulcro, y sólo la decisión del Arpinate de regular las embajadas provinciales a Roma buscando ahorrarles gastos superfluos a sus ciudades evitó que se realizasen²⁰⁵³. Además, las propias funciones de los gobernadores los llevaban a cooperar constantemente con los magistrados locales²⁰⁵⁴ y el sistema conventual estaba pensado, precisamente, para acercar al gobernador a las élites locales.

A finales de la República existió una fuerte competencia entre los senadores por hacerse con clientelas en las provincias²⁰⁵⁵, situación que precisamente la *lex Iulia de*

²⁰⁵¹ Nicols, “*Tabulae patronatus...*” cit. pp. 550-551.

²⁰⁵² López Barja, “*Patronato...*” cit. p. 150.

²⁰⁵³ Cic. *Ad fam.* III, 7, 2-3 y 8, 2-4. Cicerón evitó que las ciudades de Cilicia realizasen las embajadas a Roma previstas para honrar a Apio Claudio.

²⁰⁵⁴ Nicols, *Civic Patronage...* cit. p. 233.

²⁰⁵⁵ La obra de referencia sigue siendo la de Badian, *Foreign Clientelae...* cit., aunque en los últimos años sus teorías han sido revisadas y matizadas. En la historiografía española cf. F. Pina Polo, “Los Cornelio Balbo: clientes en Roma, patronos en Gades”, en A. Sartori – A. Valvo (coords.), *Identità e autonomie nel*

repetundis trató de controlar. Durante el Principado, el interés de la aristocracia senatorial por agrandar sus clientelas con individuos o comunidades provinciales no cesó y fue, además, emulada por los miembros del *ordo equester* que hicieron carrera política, pero la concurrencia se desarrolló sin dramatismo y estuvo condicionada por la alargada sombra del *princeps*, que se presentaba como el padre y patrono universal, así como un juez mucho más severo que el resto de miembros del Senado²⁰⁵⁶. En su *Panegírico* dedicado a Trajano, Plinio el Joven llega a desear, incluso, que los ex gobernadores que aspiraban a desempeñar nuevas magistraturas no fundamentasen sus esperanzas en las recomendaciones de amigos y las alianzas con otros senadores, sino en los honores que las colonias y el resto de ciudades les hubiesen decretado en reconocimiento de su buena labor²⁰⁵⁷. Con todo, los emperadores fueron conscientes de los riesgos que entrañaba para ellos que los senadores tejiesen importantes redes de patronato en provincias. No nos referimos solamente al peligro que suponía para el emperador, sino a los problemas que podían afectar al funcionamiento de la administración provincial.

Los gobernadores podían ser presa del chantaje de los notables locales, que, valiéndose del *concilium prouvinciae*, podían conseguir su procesamiento en Roma imputándole desde abusos menores sobre los habitantes y comunidades de su provincia hasta el haber caído en el *crimen maiestatis*. Esto podía inducir a los gobernadores a actuar en favor de determinados notables e incurrir en prevaricaciones administrativas, dejando a la provincia a merced de los intereses de algunos particulares.

Un testimonio ya mencionado nos ofrece un buen ejemplo de estos riesgos. Cuenta Tácito que en 63 d.C. hubo un importante debate en el Senado acerca de la peligrosa influencia que podían jugar los magnates locales a través del *concilium prouvinciae*. Tuvo lugar en el curso del juicio que se llevó a cabo contra el notable cretense Claudio Timarco, quien, aparte de por haber cometido abusos sobre la

mondo romano occidentale: Iberia-Italia Italia-Iberia. III Conv. Int. Epigrafia e Storia Antica, Faenza, 2011, pp. 335-353; y “Generales y clientelas provinciales: ¿qué clientelas?”, en Santos Yanguas – Cruz Andreotti (eds.) *Romanización, fronteras...* cit. pp. 55-79; E. García Fernández, “Clientela y difusión onomástica en Hispania: algunas observaciones sobre la documentación de Sagunto”, en A. Beltrán – I. Sastre – M. Valdés (dir.), *Los espacios de la esclavitud y la dependencia en la Antigüedad. Homenaje Domingo Plácido. XXXV Coloquio GIREA*, Beçançon, 2015, pp. 589-605.

²⁰⁵⁶ Syme, *The Roman Revolution* cit. p. 386; Saller, *Personal Patronage...* cit. p. 2; J. Mangas, “Clientela privada en la Hispania romana”, *Memorias de Historia Antigua* 2, 1978, pp. 217-226, esp. p. 218.

²⁰⁵⁷ Plin. *Paneg.* 70, 9: *Volo ego, qui prouinciam rexerit, non tantum codicillos amicorum, nec urbana coniuratione eblanditas preces, sed decreta coloniarum, decreta ciuitatum alleget.*

población de su provincia, fue llamado a Roma por haberse jactado en repetidas ocasiones de que él controlaba a qué antiguos procónsules la provincia de Creta debía decretarles acciones de gracias²⁰⁵⁸. Para evitar los posibles chantajes o acuerdos ilícitos entre los gobernadores y los notables locales, Trásea Peto propuso que el Senado prohibiese que se decretasen acciones de gracias a los primeros por parte de las provincias²⁰⁵⁹. La propuesta fue muy bien acogida por sus pares, pero no llegó a elaborarse un senadoconsulto ya que los cónsules objetaron que no estaba en el orden del día de esa sesión. Sin embargo, por iniciativa de Nerón se estableció que en los *concilia prouinciae* nadie propusiera el envío ante el Senado de una embajada para presentar acciones de gracias hacia los gobernadores, fuesen procónsules o legados imperiales²⁰⁶⁰.

El *concilium prouinciae* era uno de los escenarios principales en los que se desarrollaba el juego político que tenía lugar en una provincia, puesto que en él se reunían los notables locales más poderosos en representación de sus comunidades y allí decidían quién ocuparía el flaminado del culto imperial provincial, qué notable provincial y qué agente imperial debía ser honrado, y cuándo se debía denunciar en Roma a alguno de ellos. Como hemos dicho anteriormente, los gobernadores provinciales solían presidir las reuniones del *concilium*, en las que podían ejercer el veto, como hemos visto, en ciertos gastos honoríficos que considerasen excesivos. Su presencia, sin embargo, no era meramente arbitral, sino que también podía implicarlos en la política local²⁰⁶¹.

Como mencionamos más arriba, el ‘Mármol de Thorigny’ (238 d.C.)²⁰⁶² contiene información muy interesante acerca de la influencia que podían tener las relaciones de patronato establecidas entre los gobernadores provinciales y los notables locales en el seno del *concilium*. Tito Sennio Solemne era uno de los notables de la Galia Lugdunense más influyentes, pues había alcanzado el sacerdocio provincial y era cliente de dos senadores que gobernaron la provincia, Tiberio Claudio Paulino (que gobernó en época de Severo Alejandro) y Edino Juliano. En los lados izquierdo y

²⁰⁵⁸ Tac. *Ann.* XV, 20, 2.

²⁰⁵⁹ Tac. *Ann.* XV, 21.

²⁰⁶⁰ *Ann.* XV, 22.

²⁰⁶¹ Algunos ejemplos del papel jugado por gobernadores en la política local de las provincias orientales en Kokkinia, “Ruling...” cit. pp. 45-55 y 57.

²⁰⁶² *CIL* XIII, 3162.

derecho del pedestal dedicado a Solemne los miembros de su comunidad hicieron que se reprodujesen dos cartas en las estos gobernadores muestran su *amicitia* hacia él y elogian su comportamiento. En concreto, Juliano, en una carta al procurador de la Lugdunense (copiada en el lado derecho del pedestal), alaba a Solemne por haber evitado que el *concilium Tres Galliae* llevara adelante las acusaciones que algunos de sus miembros querían presentar contra su predecesor Paulino²⁰⁶³. Éste, por su parte, siendo ya gobernador de Britania escribió una carta a Solemne (lado izquierdo del pedestal) en la que no escatima elogios en agradecimiento por su fidelidad y le promete el nombramiento como tribuno militar de rango ecuestre en la legión que tenía a su mando en Britania²⁰⁶⁴. Paulino escapó a un juicio en el Senado gracias a la acción de Solemne, que parece que por entonces, además de ser un hombre rico y de gran autoridad en el *concilium Tres Galliae*, desempeñaba precisamente el sacerdocio del culto imperial provincial y lideraría un influyente grupo de opinión en esta asamblea²⁰⁶⁵.

Según se desprende de su carta, Juliano, a pesar de estar presente en la sesión del *concilium*, no parece haber tomado la palabra en favor de su colega senatorial Paulino, sin duda porque no quiso enemistarse con nadie y prefirió limitarse a ejercer la labor arbitral que le competía. La salvación de Paulino dependió por completo de la intervención de Solemne y los *boni uiri* que le siguieron. Ahora bien, si se hubiera aprobado la propuesta de enviar una embajada a Roma para presentar una acusación formal contra Paulino, Juliano habría tenido la posibilidad de obstaculizar su partida, bien haciendo valer su autoridad, bien con amenazas, valiéndose de su poder coercitivo, al igual que habían hecho, por esa misma época más o menos, los gobernadores de las provincias orientales²⁰⁶⁶. Claro está que esta última práctica no era correcta ni estaba admitida por el poder imperial, pero sí era común, y refleja el ascendiente que los gobernadores podían tener sobre los *concilia* y la importancia de que las decisiones

²⁰⁶³ Il. 14-26: *His accedit, quod, cum Cl(audio) Paulin[o], / decessori meo in concilio / Galliarum instinctu quorund[am], / qui ab eo propter merita sua laes[i] / uidebantur, quasi ex consensu prouin[c(iarum)] / accusationem instituere temtar[ent], / Sollemnis iste meus proposito eor[um] / restitit, prouocatione scilicet inte[rpo]-/[s]ita, quod patria eius cum interce[ter(os)] / legatum eum creasset, nihil de actione / mandassent, immo contra laud[as] -/[se]nt, qua ratione effectum est, ut [omnes] / [a]b accusatione desisterent.*

²⁰⁶⁴ Saller, *Personal Patronage...* cit. p. 132; Woolf, *Becoming Roman...* cit. pp. 24-26 y 34-35.

²⁰⁶⁵ Sacerdote del culto provincial en el santuario de las Tres Galias: *eodem tem[po]re sacerdos[s] / R[om]ae [et Augusti ad aram (cara principal, Il. 5-6). Sobre el grupo de influencia que lideraría: In prouincia / Lugduness(i) quinquefascal(is) / cum agerem, plerosq(ue) bonos / uiros perspexi, inter quos / Sollemnem istum oriundum / ex ciuitate Viduc(assium) sacerdote[m]* (cara derecha, Il. 6-11). En este último texto se vuelve a mencionar que era *sacerdos*.

²⁰⁶⁶ Oliver, *Greek Constitutions...* cit. n° 276 (= *P. Oxy.* XVII 2104).

conciliares contasen con su aprobación²⁰⁶⁷. Con todo, los *concilia prouvinciae* podían ser un arma de doble filo para los gobernadores provinciales, pues les podían reportar tanto homenajes que acrecentasen su prestigio como graves acusaciones en Roma que pudiesen acabar con su carrera o, incluso, poner en peligro su vida²⁰⁶⁸.

En Hispania el *concilium* provincial que parece haber jugado un papel político más activo fue el de la Bética, en concreto a finales del principado de Domiciano y a comienzos del de Trajano. Por entonces logró que se llevara a juicio ante el Senado de Roma a dos ex procónsules, Bebio Masa (en 93) y Cecilio Clásico (en 100, habiendo ya fallecido éste), y que en ambos casos su causa fuese defendida por senadores de la talla de Plinio el Joven que consiguieron la condena de los acusados. Según cuenta Plinio en sus cartas, la culpabilidad de Masa y Clásico era evidente, pero al menos en el caso del segundo se advierte que cometió sus abusos valiéndose de la colaboración de provinciales –de los cuales dos fueron encausados también, Bebio Probo y Fabio Hispano²⁰⁶⁹– y que su acusación fue promovida por algunos notables béticos que se habían enemistado con él durante su proconsulado. En concreto, se distinguió dentro de la delegación enviada a Roma por el *concilium* Norbano Liciniano, que había sido condenado por Cecilio Clásico a la *relegatio* de la Bética. Como comentamos en un capítulo anterior, la fiereza con que Liciniano buscó la condena no sólo de Clásico, sino también de su mujer, reveló su rencor e hizo que el Senado abriese una causa contra él por prevaricación, proceso del que salió condenado²⁰⁷⁰. El hecho de que Liciniano fuese un famoso delator al servicio de Domiciano invita a pensar que si fue condenado por el procónsul es porque existían pruebas irrefutables de que había cometido algún acto criminal. De no ser así, Clásico habría podido haberse jugado la vida al volver a Roma.

Por lo demás, el resto de actuaciones de los *concilia* de la Hispania Citerior, la Bética y la Lusitania que han dejado constancia se reducen a la dedicación de estatuas en honor de antiguos *flamines* provinciales o del emperador²⁰⁷¹. También sabemos que el concilio provincial de la Citerior y el de la Lusitania decretaron que se dedicaran sendas estatuas a dos senadores, pero ninguno de ellos fue gobernador de estas provincias ni parece que hubiesen desempeñado un cargo oficial en ellas, lo que induce

²⁰⁶⁷ Guiraud, *Les assemblées...* cit. p. 112.

²⁰⁶⁸ Kokkinia, “Ruling...” cit. pp. 57-58.

²⁰⁶⁹ *Ep.* III, 9, 15.

²⁰⁷⁰ *Ep.* III, 9, 31. Véase Capítulo 1 de la Segunda Parte.

²⁰⁷¹ Véase por ejemplo: *CIL* II²/7, 291, 293, 295; *RIT* 252, 253, 255, 256, 260; *CIAE* 24.

a pensar que se trataba de notables locales²⁰⁷². Sin embargo, no cabe duda de que, al igual que en las Tres Galias o en Creta, los *concilia* de las provincias hispanas eran uno de los principales interlocutores de los gobernadores y de que las relaciones que éste estableciese con las élites allí presentes condicionaban la forma en que discurriría su gobierno.

Patronato personal:

En la magnífica monografía que dedicó al patronato personal, R. Saller demostró el importante peso que esta práctica tenía en las relaciones sociales y, por ende, en la vida política romana durante el Principado. Al igual que en el período tardorrepblicano, la aristocracia senatorial siguió valiéndose de estos vínculos personales para progresar en el *cursus honorum* y aumentar su influencia política, con la salvedad de que ahora estas cuestiones dependían en gran medida del grado de acceso al emperador que se tuviese²⁰⁷³. En las provincias, las élites locales asumieron plenamente esta práctica social y, emulando a pequeña escala a la aristocracia capitalina, buscaron el *patrocinium* de los senadores y *equites* que ejercieron algún cargo oficial en su tierra para consolidar su posición preeminente en el seno de sus comunidades y tener una conexión con el centro del imperio que les permitiese aspirar a ellos mismos o a sus descendientes a una promoción social. Con el tiempo, esas élites provinciales acabaron accediendo al Senado, desempeñaron magistraturas provinciales y se convirtieron a su vez en patronos de notables locales.

Como hemos visto, en una provincia el agente imperial que más poder concentraba era el gobernador, lo que hacía de él el centro del poder en ella y, por tanto, la persona de cuyo patronato un provincial podían esperar obtener más beneficios. Esta

²⁰⁷² Se trata de Lucio Septimio Manno en *Tarraco*: RIT 146, donde es mencionado sólo como *u(ir) c(larissimus)*; y Lucio Roscio Paculo? en *Augusta Emerita*: ERAE 97. A este último Alföldy, *Fasti Hispanienses* p.148, ya descartó la posibilidad de que este individuo hubiese sido gobernador de la Lusitania, identificándolo con un senador natural de la provincia; Saquete Chamizo, *Las élites...* cit. pp. 95-99; *HEp* 15, 2006, 59, donde se sintetiza la propuesta de identificación de este personaje planteada por A. Masier, “Il questore di Adriano *L. Roscius [---]cius Celer M[---] Postumus Mam[---] Vergilius Staberia[---]*”, *Epigraphica* 68, 2006, pp. 101-115. Hasta el momento en que se realizó el homenaje, L. Roscio había sido cuestor del emperador Adriano, pretor peregrino y *leg(atus) leg(ionis) XIII G(eminae) M(artiae) [V(icticis)]*. La no mención de su legación en Lusitania anula la posibilidad de que hubiese sido por entonces su gobernador como propuso W. Eck, “Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 (2)”, *Chiron* 13, 1983, pp. 147-237, esp. p. 198, nt. 2.

²⁰⁷³ Saller, *Personal Patronage...* cit. pp. 119-143 y 206.

tendencia se ve corroborada por la epigrafía, que muestra que los gobernadores son el colectivo que domina porcentualmente el patronato constatado en el conjunto del imperio²⁰⁷⁴. A diferencia del patronato sobre comunidades provinciales, no se conoce la existencia de ninguna ley o disposición oficial que prohibiese explícitamente a los gobernadores establecer relaciones de patronato con individuos de la provincia que tenían asignada mientras la gobernaban²⁰⁷⁵. Sin embargo, esto contrasta con otras restricciones impuestas a los gobernadores y otros oficiales senatoriales y ecuestres, como la de no adquirir nada ni hacer préstamos en su provincia, la de no aceptar todos los regalos que les ofreciesen los provinciales o la prohibición de contraer matrimonio con una mujer que residiese en su provincia, excepto en el caso de fuese la patria del propio gobernador²⁰⁷⁶.

La prohibición de adquirir nada en su provincia proviene de las *leges repetundarum* de época republicana. Como se observa en el testimonio de Cicerón, se entendía que tras esas transacciones en favor del gobernador podía hallarse la sombra de la coerción o del soborno, que perjudicaban gravemente al gobierno de la provincia²⁰⁷⁷. Durante el Principado se buscó perfeccionar este control, promulgándose disposiciones imperiales que prohibían que los gobernadores hiciesen cualquier tipo de negocio en la provincia (en particular que comprasen tierras) o realizasen préstamos a los provinciales²⁰⁷⁸. Dentro de estas medidas destinadas a evitar que los gobernadores fuesen “comprados” por las élites provinciales y, por tanto, manipulados por ellas, o bien que extendiesen sus redes de influencia en la provincia, hay que situar también la

²⁰⁷⁴ Saller, *Personal Patronage...* cit. p. 150.

²⁰⁷⁵ López Barja, “Patronato...” cit. p. 149.

²⁰⁷⁶ Dig. XXIII, 2, 65, pr. (Paul. 7 resp.): *Eos, qui in patria sua militant, non uideri contra mandata ex eadem prouincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri.*

²⁰⁷⁷ Cic. 2 Verr. IV, 10: *Quae fuit causa cur tam diligenter nos in prouinciis ab emptionibus remouerent? Haec, iudices, quod putabant ereptionem esse, non emptionem, cum uenditori suo arbitratu uendere non liceret. In prouinciis intellegebant, si is qui esset cum imperio ac potestate quod apud quemque esset emere uellet, idque ei liceret, fore uti quod quisque uellet, siue esset uenale siue non esset, quanti uellet auferret. Dicit aliquis: 'Noli isto modo agere cum Verre, noli eius facta ad antiquae religionis rationem exquirere; concede ut impune emerit, modo ut bona ratione emerit, nihil pro potestate, nihil ab inuito, nihil per iniuriam.' Sic agam: si, quod uenale habuit Heius, id quanti aestimabat tanti uendidit, desino quaerere cur emeris.*

²⁰⁷⁸ Dig. XII, 1, 33 (Modest. 10 pand.): *Principalibus constitutionibus cauetur, ne hi qui prouinciam regunt quique circa eos sunt negotientur mutuamue pecuniam dent faenusue exerceant*; Dig. XVIII, 1, 46, pr. (Marc. l.S. de delator): *Non licet ex officio, quod administrat quis, emere quid uel per se uel per aliam personam: alioquin non tantum rem amittit, sed et in quadruplum conuenitur secundum constitutionem Seueri et Antonini: et hoc ad procuratorem quoque Caesaris pertinet. Sed hoc ita se habet, nisi specialiter quibusdam hoc concessum est*; Dig. XVIII, 1, 62, pr. (Modest. 5 reg.): *Qui officii causa in prouincia agit uel militat, praedia comparare in eadem prouincia non potest, praeterquam si paterna eius a Fisco distrahantur.*

restricción en la aceptación de regalos²⁰⁷⁹. En este sentido, Ulpiano menciona un rescripto de Severo y Caracala muy interesante en el que establecen que los gobernadores no deben rechazar los regalos que las élites locales les ofrezcan, pero siempre con moderación. No era conveniente que los notables provinciales se sintiesen despreciados, pero tampoco que los gobernadores aceptasen todo de todo el mundo, pues podía disminuir la dignidad del cargo. Severo y Caracala recurren a un proverbio griego muy elocuente: “Ni todos, ni siempre, ni de todos”²⁰⁸⁰.

La prohibición de contraer matrimonio con una mujer de la provincia está constatada en época de Septimio Severo y Caracala, pero los estudiosos piensan que se habría establecido con anterioridad –quizá a finales del siglo I d.C.– dado que, según se deduce del testimonio de Marciano, estos emperadores no instituyeron una nueva norma, sino que hubieron de hacer frente en un rescripto a la contravención de disposiciones oficiales expresadas en anteriores *mandata*, preocupándose de recordar que el marido y los hijos nacidos de esa unión no tenían ningún derecho hereditario²⁰⁸¹.

Si el poder imperial temía que el vínculo matrimonial o los negocios y préstamos condicionasen negativamente la actividad del gobernador, es extraño que no se pensase lo mismo del patronato personal, que podía llevarlo a que se decantase igualmente por favorecer a particulares o familias, cayendo en la prevaricación. Con todo, aunque existiese alguna disposición al respecto que no haya sobrevivido hasta nosotros, lo cierto es que el patronato de los gobernadores sobre individuos de la provincia fue una realidad habitual extendida en todo el imperio. En Hispania se ha conservado sólo un ejemplo epigráfico en el que un gobernador –en concreto de la Lusitania– aparece mencionado explícitamente como patrono de particulares. Sin embargo, existen varias dedificaciones honoríficas tributadas por particulares a gobernadores de la Hispania Citerior y dos dedicadas respectivamente a un gobernador de la Lusitania y a otro de la Bética tras las que quizá pudieran hallarse relaciones de patronato. Los testimonios son escasos, pero, en nuestra opinión, eso no significa que en Hispania los particulares no

²⁰⁷⁹ Cf. López Barja, “Patronato...” cit. p. 151.

²⁰⁸⁰ *Dig. I, 16, 6, 3 (Ulp. 1 de off. procos.).*

²⁰⁸¹ *Dig. XXXIV, 9, 2, 1 (Marcian. 11 inst.): Item si quis contra mandata duxerit uxorem ex ea prouincia, in qua officium aliquid gerit, quod ei ex testamento uxoris adquisitum est Diui Severus et Antoninus rescripserunt retinere eum non posse, tamquam si tutor pupillam contra decretum amplissimi ordinis in domum suam duxisset. Vtroque ergo casu etsi ex asse heres institutus adierit hereditatem, fisco locus fit: nam quasi indigno ei aufertur hereditas. Cf. Marotta, *Mandata principum* cit. p. 141; López Barja, “Patronato...” cit. p. 146.*

buscasen el patronato personal de los gobernadores, sino que éste dejó menos huella en la epigrafía que el que establecieron sobre comunidades. En este sentido, resulta muy esclarecedor que, por ejemplo, se hayan conservado pocas menciones epigráficas tanto en Hispania como en la propia ciudad de Roma de clientes privados (al margen de los libertos), a pesar de que es innegable su existencia y las fuentes literarias nos muestran que las relaciones clientelares gozaron de una gran vitalidad durante el Principado²⁰⁸².

El testimonio que recoge explícitamente una relación de patronato entre un gobernador y unos particulares provinciales es la *tabula patronatus* hallada en Juromenha (Alandroal, Évora, Portugal), en la que se recoge el pacto realizado el 21 de enero del 31 d.C. por tres hermanos que parecen ser *ciues Romani*²⁰⁸³ con el gobernador de la Lusitania Lucio Fulcinio Trío, siguiendo la fórmula más extendida:

*Ti(berio) Caesare V L(ucio) Aelio Seiano / co(n)s(ulibus) / XII K(alendas) Febr(uarias) / Q(uintus) Stertinius Q(uinti) f(ilius) Bassus / Q(uintus) Stertinius Q(uinti) f(ilius) Rufus / L(ucius) Stertinius Q(uinti) f(ilius) Rufinus / hospitium fecerunt cum L(ucio) Fulcinio / Trione leg(ato) Ti(berii) Caesaris liberis / posterisque eius / L(ucius) Fulcinius Trio leg(atus) Ti(berii) Caesaris Q(uintum) / Stertinium Q(uinti) f(ilium) Bassum Q(uintum) Stertinium / Q(uinti) f(ilium) Rufum L(ucium) Stertinium Q(uinti) f(ilium) Rufinum libe/ros posterosq(ue) eorum in fidem clientelamq(ue) / suam liberorum posterorumq(ue) suorum / recepit.*²⁰⁸⁴

La actividad de este gobernador y su mujer en la Lusitania parece haber sido importante. Como vimos antes, es verosímil que Fulcinio Trío, según ha propuesto Saquete Chamizo, se encargara de supervisar las obras del templo dedicado al Divino Augusto en *Emerita*, y es probable que también se preocupara de apoyar el desarrollo cívico de la colonia en otros aspectos. Por ello no es de extrañar que, además de estos tres hermanos que buscaron su *patrocinium*, las élites de la capital de la provincia, *Augusta Emerita*, estableciesen importantes vínculos con él y su mujer hasta el punto de decidir homenajear a esta última en *Tusculum*, como hemos visto antes. Si Alföldy está

²⁰⁸² Mangas, “Clientela privada...” cit. pp. 219-220.

²⁰⁸³ Balbín Chamorro, *Hospitalidad y patronato...* cit. p. 236. Esta autora ha planteado que, a pesar de su apariencia, este pacto no fuese personal, sino que los tres hermanos estuviesen actuando en representación de su comunidad. En nuestra opinión, no existen motivos para dudar que el patronato sea privado.

²⁰⁸⁴ Lambrino, “L. Fulcinus Trio, gouverneur...” cit. p. 155 = Balbín Chamorro, *Hospitalidad y patronato...* cit. p. 235. En *IRCP* 479, J. D’Encarnação leyó erróneamente *posterorum* en vez de *posterorumq(ue)* en l. 14. Anexo II: n° 45.

en lo cierto y Fulcinio Trío estuvo alrededor de diez años en Lusitania²⁰⁸⁵, de acuerdo con la política de Tiberio de prolongar los gobiernos provinciales²⁰⁸⁶, su dilatado gobierno habría provocado de forma natural el establecimiento de relaciones de *amicitia* y probablemente también de patronato con algunos notables locales, fruto del contacto cotidiano durante una década y de la atención especial que parece que este gobernador demostró por la capital provincial en el desempeño de sus funciones oficiales²⁰⁸⁷. Además, Fulcinio Trío era un hombre cercano a Tiberio, hecho que en el largo período que estuvo en Lusitania sin duda hubo de divulgarse entre las élites emeritenses y de otras comunidades, como los tres miembros de la familia de los *Sertinii*, quizá ciudadanos de un municipio adscrito al *conuentus Pacensis* –según se deduce del lugar del hallazgo de este bronce²⁰⁸⁸.

Las estrechas relaciones entre Fulcinio Trío y los *Sertinii* probablemente se fueron fraguando en las visitas anuales que el gobernador realizó a la sede conventual de *Pax Iulia*, en una de las cuales se acabaría estableciendo el patronato oficial –aunque tampoco se puede descartar la posibilidad de que los *Sertinii* acudiesen a *Emerita*, pues ambas partes conservaban una copia en bronce del pacto y la llevaban consigo allí adonde fueran. En este pacto se emplearon tres conceptos estrechamente vinculados: *hospitium*, *fides* y *clientela*.

Como ha señalado Saller, el ingreso en la clientela de un gobernador provincial (*in fidem clientelamque suam*) podía proporcionar grandes ventajas a sus beneficiarios tanto durante su mandato como *a posteriori*. En primer lugar, la posibilidad de tener un acceso preferente al gobernador a través del cual sus clientes le podían hacer llegar peticiones propias o de terceros, aumentando, así, su influencia dentro de su comunidad e, incluso, en la provincia. En el caso de que se vieses inmersos en un proceso judicial, su patrono sin duda les daría preferencia frente a otros demandantes²⁰⁸⁹. Como hemos visto en la Primera Parte, los gobernadores tendieron a practicar una selección de los procesos judiciales que veían en cada *conuentus*, bien como consecuencia de la

²⁰⁸⁵ *Fasti Hispanienses* pp. 135-136.

²⁰⁸⁶ Recuérdese que Tiberio tendió a mantener a los gobernadores en las provincias durante largos períodos (Tac. *Ann.* I, 80), sobre todo al final de su principado (Suet. *Tib.* 41). Cf. Szramkiewicz, *Les gouverneurs...* I, p. 341, nt. 3.

²⁰⁸⁷ Saquete Chamizo, “El gobernador provincial...” cit. pp. 101-102.

²⁰⁸⁸ Estamos de acuerdo con Mangas, “Clientela privada...” cit. p. 223, en que estos hermanos eran miembros de la oligarquía local. En cuanto a su pertenencia a un municipio de esta zona lleva razón D’Encarnaçao (*IRCP* 479, p. 557) en que no existen evidencias epigráficas que confirmen tal hipótesis.

²⁰⁸⁹ Saller, *Personal Patronage...* cit. pp. 151-152.

sobrecarga de trabajo, bien como resultado de su tendencia a favorecer a las élites y a establecer una discriminación entre los encausados en función de su *status* jurídico y de su *dignitas*. Ulpiano insiste en que los gobernadores han de atender del mismo modo a todos sus gobernados, fuesen notables locales o personas humildes, demostrando que en su época este tipo de discriminaciones seguían sin corregirse²⁰⁹⁰.

En segundo lugar, el gobernador podía influir en la elección de algunos notables locales que fuesen clientes suyos para importantes cargos dentro de su comunidad o en el *concilium prouvinciae*. Los gobernadores supervisaban las listas de jueces de los municipios de su provincia²⁰⁹¹ y velaban por que el *ordo decurionum* de cada una estuviese compuesto por los más dignos²⁰⁹². Ulpiano nos informa de que, al menos en su época, los gobernadores solían escribir a los *ordines decurionum* de los municipios y colonias para recomendar a algún candidato a una magistratura o a alguna misión²⁰⁹³ y hemos visto que Plinio el Joven se ocupó de resolver el problema de la composición de los senados locales en las ciudades de Bitinia²⁰⁹⁴. Asimismo, los gobernadores podían posicionarse a favor de algún candidato al flaminado provincial en las sesiones del *concilium prouvinciae* y, a través de la regulación de los gastos que esta asamblea votaba para honrar a algún antiguo *flamen* o a un aristócrata, podían contribuir a impulsar o cercenar la progresión política de éstos. Por último, sus cartas de recomendación (*commendationes*) podían ser cruciales en el ascenso de sus clientes provinciales en la administración imperial y en su acceso a escalafones del *cursus honorum* ecuestre, que podía acabar, en el mejor de los casos, en un ingreso en el Senado²⁰⁹⁵.

En el caso de los *peregrini* el patronato de un gobernador o el establecimiento de relaciones de hospitalidad con él les ofrecía no sólo la posibilidad de consolidar su posición social en el seno de su comunidad y de abrir una vía de acceso al poder romano, sino que podía llegar a facilitarles la concesión de la ciudadanía romana por parte del emperador gracias a una *commendatio* del gobernador.

²⁰⁹⁰ *Dig.* I, 16, 9, 4.

²⁰⁹¹ *Lex Imitana*, cap. 86.

²⁰⁹² Ya durante la República: Cic. *Ad Q. fr.* I, 1, 25. Cf. López Barja, “El gobernador provincial...” cit. p. 296.

²⁰⁹³ Ulp. *1 de appellat.* = *Dig.* XLIX, 4, 1, 3: *Solent plerumque praesides remittere ad ordinem nominatum ut Gaium Seium creent magistratum uel alius quis honor uel munus in eum conferatur.*

²⁰⁹⁴ Plin. *Ep.* X, 79-80. Cf. Sherwin-White, *The Letters...* cit. pp. 669-675.

²⁰⁹⁵ Saller, *Personal Patronage...* cit. pp. 158-159.

Un excelente ejemplo de la crucial mediación de un gobernador en este tipo de peticiones se halla en el importante documento epigráfico conocido como *Tabula* de Banasa, que recoge dos respuestas favorables de la cancillería imperial del 168-169 y del 177, respectivamente, a sendas peticiones de ciudadanía. En 168-169 el gobernador de la Mauretania Tingitana Coyedio Máximo escribió a Marco Aurelio y Lucio Vero para solicitar la concesión de la ciudadanía romana al aristócrata perteneciente a la tribu beréber de los Zegrenses, Juliano, a su mujer Ziddina y sus cuatro hijos Juliano, Máximo, Maximino y Diogeniano. Los emperadores concedieron la ciudadanía a Juliano y su familia por los méritos de éste y, sin duda, por su romanización –evidenciada en el antropónimo que había adoptado y en los que había dado a sus hijos–, pero sin que ello supusiera una merma del *ius gentium* necesario para desarrollar su vida en su comunidad de origen peregrina como hasta entonces²⁰⁹⁶. Pasados los años, uno de los hijos de Juliano, Aurelio Juliano –*princeps Zegrensium*–, solicitó de nuevo la ciudadanía para su esposa Faggura e hijos buscando sin duda formalizar su unión según la ley romana y garantizar los derechos sucesorios a sus herederos presentes y futuros. En este caso fueron dos gobernadores los que actuaron como intermediarios: Epidio Quadrato fue el que envió la petición a Roma y su sucesor Valio Maximiano²⁰⁹⁷ el que recibió la respuesta favorable de Marco Aurelio y Cómodo a ella en los primeros meses del 177, decidiendo que se transcribiera en la *tabula* broncea que conocemos junto con la carta del 168-169 y el elenco de los doce ciudadanos romanos que actuaron como testigos. En la segunda carta, Marco Aurelio y Cómodo conceden la ciudadanía a Juliano, sus esposa y sus hijos especificando que ello no implicaba ningún cambio en sus obligaciones tributarias: *his ciuitatem romanam de-/dimus, saluo iure gentis, sine diminutione tributorum et uect[i]gali-/um populi et fisci*²⁰⁹⁸.

Aunque se trata de gobernadores ecuestres, este papel mediador que ejercieron es perfectamente extrapolable a aquéllos de rango senatorial como los de Hispania. El título de *princeps Zegrensium* nos lleva a pensar inmediatamente en un paralelo del Noroeste de la Hispania Citerior: el *princeps Coporum* que se asentó en *Lucus Augusti*

²⁰⁹⁶ A. N. Sherwin-White, “The Tabula of Banasa and the Constitutio Antoniniana”, *JRS* 63, 1973, pp. 86-98.

²⁰⁹⁷ El mismo que intervino en la Bética para sofocar la segunda invasión de *mauri* y fue honrado por *Singilia Barba* e Itálica.

²⁰⁹⁸ W. Seston – M. Euzennat, “Un dossier de la chancellerie romaine: La *Tabula Banasitana*. Étude diplomatique”, *CRAI* 115/3, 1971, pp. 468-490, esp. pp. 471-473; y “La citoyenneté romaine...” cit. pp. 317-318.

poco después de la fundación de este centro regional potenciado por los gobernadores de la Citerior como sede conventual y polo de atracción de las élites indígenas. Como hemos venido diciendo a lo largo de este estudio, las relaciones establecidas entre los sucesivos gobernadores de la Hispania Citerior con las élites del Noroeste o de los de la Lusitania con las de las zonas interiores de su provincia menos romanizadas en las sedes conventuales a las que fueron adscritas y en las que se asentaron fue fundamental en su integración en el las estructuras de gobierno y las nuevas reglas que condicionaron las relaciones sociales durante el Principado. Los gobernadores necesitaban la cooperación de las élites locales peregrinas para controlar las zonas recién asimiladas o menos romanizadas y, por ello, en el momento crítico que siguió al desastre de Varo, Augusto decidió prolongar el mando a todos los gobernadores provinciales, pues al ser expertos en el trato de los aliados sabrían mejor cómo actuar para contenerlos en caso de que se produjesen desórdenes²⁰⁹⁹. El mismo principio sigue Filóstrato cuando hace que Apolonio de Tiana recomiende a Vespasiano elegir gobernadores que conociesen las costumbres y la lengua corriente (latín o griego) de su provincia²¹⁰⁰. Por su parte, estos notables locales buscaron reafirmar su preeminencia social en el seno de sus comunidades a través de las relaciones exclusivas con los máximos representantes del poder imperial y de la asunción de las nuevas prácticas sociales. En esa dinámica, el *hospitium* y el patronato jugaron un papel muy importante.

Ahora bien, aunque desde finales de la República, el poder romano fue consciente de la necesidad de contar con la colaboración de las élites locales en el gobierno de la provincia, también entendió que era necesario filtrar esas relaciones para no disminuir la dignidad de sus agentes designados al frente de una provincia o permitir que fuesen objeto de manipulaciones o habladurías. Cicerón insiste con vehemencia a su hermano Quinto en que no confíe demasiado en los griegos, pues todos tienden a ser “amigos de los pretores”²¹⁰¹, y concluye: *Quos ego uniuersos adhiberi liberaliter, optimum quemque hospitio amicitiaque coniungi dico oportere*²¹⁰². Es decir, el buen gobernador debía mostrarse generoso con todos los provinciales pero ofrecer hospitalidad y *amicitia* sólo a los mejores.

²⁰⁹⁹ Suet. Aug. 23: *Hac nuntiata excubias per urbem indixit, ne quis tumultus existeret, et praesidibus prouinciarum propagauit imperium, ut a peritis et assuetis socii continerentur.*

²¹⁰⁰ Phil. V.A. V, 36, 5.

²¹⁰¹ *Ad Q. fr. I, 1, 15.*

²¹⁰² *Ad Q. fr. I, 1, 16.*

Durante el Principado siguieron estando vigentes estas precauciones. Los gobernadores debían mostrarse accesibles a los provinciales pero sin permitir que se rebajase su autoridad. En los *mandata* los emperadores señalaban a los gobernadores que se guardasen de caer en una excesiva familiaridad con los provinciales, dado que en el trato entre iguales podría derivar en un desdén hacia la dignidad que representaban²¹⁰³. Las mismas recomendaciones circulaban en el ambiente senatorial: Cuando Calestrio Tirón estaba a punto a hacerse cargo del proconsulado de la Bética su amigo Plinio el Joven le aconsejó que mantuviese una posición ecuánime en la provincia, siendo afable con los poderosos y haciéndose querer por los humildes. La cooperación con los primeros no debía perjudicar a los segundos, pero el gobernador debía tratar a cada uno teniendo en cuenta las diferencias entre los *ordines* y las dignidades (*ut discrimina ordinum dignitatumque custodias*)²¹⁰⁴.

Como hemos dicho, al margen de la *tabula patronatus* de Juromenha no se ha conservado ningún otro testimonio directo acerca del establecimiento del patronato u *hospitium* de un gobernador de Hispania con particulares. Sin embargo, existen varias inscripciones honoríficas dedicadas a gobernadores por parte de particulares que, en nuestra opinión, al igual que sucedía con algunas dedicadas por comunidades (*vid. supra*) si no esconden un patronato al menos demuestran la existencia de profundos vínculos entre las partes. Una procede de *Emerita Augusta*, otra de *Bracara Augusta* y cinco de *Tarraco*.

En *Emerita Augusta* se halló la base de un herma mutilado que presentaba esta inscripción en su estípite:

*Q(uintus) Acutius Faienanus / Leg(atus) pr(o) pr(aetore)*²¹⁰⁵

Se trata, sin lugar a dudas, de un gobernador de la Lusitania, pero la datación de su mandato ha sido objeto de discrepancias. A. Balil se inclinó por situarlo en la primera mitad del siglo I y Alföldy lo ubicó entre el 19/13 y el 1 a.C., siendo ésta la datación

²¹⁰³ Dig. I, 18, 19 (Callist. 1 de cogn.): *Obseruandum est ius reddenti, ut in adeundo quidem facilem se praebeat, sed contemni non patiatur. Unde mandatis adicitur, ne praesides prouinciarum in ulteriorem familiaritatem prouinciales admittant: nam ex conuersatione aequali contemptio dignitatis nascitur.*

²¹⁰⁴ Plin. Ep. IX, 5. Cf. Sherwin-White, *The Letters...* cit. pp. 484-485.

²¹⁰⁵ ERAE 104. Anexo II: nº 39.

más seguida²¹⁰⁶. Sin embargo, Stylow ha reexaminado la pieza, mostrando que las características paleográficas de esta inscripción llevan a datarla como mínimo a mediados del siglo I d.C.²¹⁰⁷, lo que le induce a situar el gobierno de Faienano entre finales del siglo I e inicios del II. Precisamente, en los *Fasti* de Lusitania existe un vacío entre el 77/78 y el 121 d.C. y su gobierno podría situarse, por tanto, tras el de Catelio Céler²¹⁰⁸. A pesar de que fue hallado en las excavaciones realizadas en el teatro emeritense, estamos de acuerdo con Stylow y Saquete Chamizo en que es probable que este herma estuviese colocado originariamente en un ambiente privado luego reutilizado en obras de restauración del área del teatro²¹⁰⁹. En nuestra opinión, el comitente de este herma con su retrato sólo pudo haber sido un miembro de la élite de la colonia y es posible que tras este gesto de admiración hacia Faienano se hallasen vínculos clientelares o, al menos, un *hospitium* establecido mientras gobernó la Lusitania²¹¹⁰.

Stylow ha relacionado este herma con otro de un procónsul de la Bética de época augusteo-tiberiana –o, como mínimo, anterior al 68 d.C.²¹¹¹–, [T(itus) Fiscilius?] *Proculus*²¹¹², que fue hallada en Cannara (Umbria, Italia)²¹¹³. Stylow piensa que este herma-retrato fue realizado en la Bética y que *Proculus* se lo llevó consigo a su ciudad de origen en Italia²¹¹⁴. Empero, en nuestra opinión parece más probable fuese encargado directamente en la ciudad donde apareció, el antiguo municipio de *Vruinum Hortense*, donde se han hallado otros fragmentos epigráficos que parecen indicar que varios miembros senatoriales de la familia de los *Fiscilii*? *Proculi* fueron honrados por la comunidad bajo la dinastía Julio-Claudia²¹¹⁵.

²¹⁰⁶ Balil, “Los legados...” cit. p. 48; Alföldy, *Fasti Hispanienses* pp. 133-134, seguido por Saquete Chamizo, *Las élites...* cit. p. 108.

²¹⁰⁷ A. U. Stylow, “Más hermas”, *Anas* 2-3, 1989-1990, pp.195-205, esp. pp. 199-201.

²¹⁰⁸ *Idem* p. 201.

²¹⁰⁹ Stylow, “Más hermas” cit. p. 201; Saquete Chamizo, *Las élites...* cit. p. 108.

²¹¹⁰ Saller, *Personal Patronage...* cit. p. 200.

²¹¹¹ *Fasti Hispanienses* pp. 154-155.

²¹¹² L. Sensi en M. Matteini Chiari (cura) *Raccolta di Cannara. Materiali archeologici. Monete. Dipinti e sculture*, Perugia, 1992, n° 58, pp. 98-100; L. Pons Pujol, “*Proculus*, legado en la *Narbonensis* y procónsul de la Bética (*CIL* XI, 7173, 5172)” en *Idem* (ed.) *Gallia et Hispania: dos provincias del Occidente romano*, Barcelona, 2010, pp. 153-163, esp. pp. 157-160.

²¹¹³ *CIL* XI, 5172: *Hispania hanc / Proculus / pro consule / optinuit*.

²¹¹⁴ Stylow, “Más hermas” cit. p. 201.

²¹¹⁵ Sensi, *Idem*.

En *Bracara Augusta* se encontró un pedestal dedicado, según Alföldy, a inicios del principado de Claudio por los ciudadanos romanos que desarrollaban negocios o actividades comerciales en esta sede conventual:

*C(aio) Caetronio C(ai) [f(ilio)] / Cam(ilia) Miccioni tri(buno) / pl(ebis) pr(aetori) legato Aug(usti) [Hisp(aniae)] / C[ite]rioris leg(ato) Aug(usti) legi[o]/ni[s] II A[ugu]st(ae) proco(n)[s(uli)] / pr[ouin]ci(ae) B[ae]ticae / p[raef]ecto aerar(ii) mil[i]/t[aris] prae]fecto reliquo/rum exigendorum popul[i] / Romani. / Ciues Romani qui nego/tiantur Bracaraugust[ae]*²¹¹⁶

Como se deduce de su *cursus honorum*, en el momento en que se realizó el homenaje Cayo Caetronio Miccio era prefecto del Erario militar (fechado en 39-42 d.C.), pero fue el resultado de su actividad oficial en Hispania en dos períodos diferentes: cuando fue, primero, *legatus Augusti* al servicio del gobernador de la Citerior bajo Tiberio y, después, cuando fue procónsul de la Bética bajo Calígula (37/38 d.C.)²¹¹⁷. Según Alföldy, habría sido legado en la Citerior entre el 25 y el 33 d.C., precisamente en el período en que Lucio Arruncio, a pesar de haber sido nombrado por Tiberio oficiosamente gobernador de esta provincia no pudo abandonar Roma ni, por tanto, ejercer la función de gobernador. Como expusimos en páginas anteriores, es verosímil que el Calpurnio Pisón asesinado por un termostino en 25 d.C. fuese el legado que sustituyó en sus funciones como gobernador a Arruncio²¹¹⁸. ¿Qué papel pudo haber jugado este Caetronio Miccio en este período? Es posible que Tiberio decidiera no ascender jerárquicamente a ninguno de los legados posteriores a Pisón por encima de sus pares, tratando directamente por carta con cada uno de los tres legados encargados de un área de la provincia.

Sea como fuere, lo cierto es que sólo conocemos la presencia de Caetronio en Hispania por esta inscripción bracarense, que indica que influyó decisivamente a favor del asentamiento y actividad de *negotiatores* romanos en la sede conventual. Con ello coadyuvó al desarrollo económico de la ciudad y a su confirmación como centro regional, actividad que, como hemos visto, solía ser asumida por los gobernadores

²¹¹⁶ *CIL* II, 2423. Anexo II: nº 10.

²¹¹⁷ *Fasti Hispanienses* pp. 67-70 y 153.

²¹¹⁸ *Vid.* Capítulo 4 de la Segunda Parte.

ordinarios dentro de su misión de promover y tutelar el desarrollo cívico de los centros administrativos regionales. Caetronio sin duda estableció contacto con los *negotiatores* de *Bracara* mientras realizó el *conuentus* en la ciudad, probablemente a raíz de una audiencia en la que le habrían solicitado que interviniera en determinados asuntos vinculados a sus negocios.

Ahora bien, en nuestra opinión el hecho de que este pedestal y la estatua que seguramente sostenía fuesen dedicados a Caetronio tras su proconsulado en la Bética indica que estos *negotiatores* se vieron beneficiados por él sobre todo mientras gobernó esta última. Es verosímil que algunos de ellos fuesen originarios de la Bética y que se hubiesen beneficiado de los vínculos establecidos con Caetronio en su segunda estancia en la península o bien que fuesen naturales de *Bracara Augusta* y que Caetronio favoreciese los intereses comerciales que tenían en la Bética. Si no, no se explica por qué habrían esperado tantos años a agradecerle los *beneficia* que les brindó mientras fue legado en la Citerior. Aunque no lo mencionan como patrono, es innegable la existencia de estrechos vínculos personales entre estos *negotiatores* y Caetronio Miccio, y no se puede descartar que hubiesen establecido una relación de patronato-clientela.

Por último, en *Tarraco* se han hallado cinco inscripciones honoríficas en pedestales de estatuas dedicadas por particulares a gobernadores de la Hispania Citerior entre finales del siglo II y época severa. Se trata de los homenajes tributados a Quinto Hedio Rufo Loliano Gentiano (dos), Tito Flavio Titiano y Tiberio Claudio Cándido y Quinto Atrio Clonio. Excepto en uno de los pedestales de Gentiano, las cuatro inscripciones honoríficas restantes fueron dedicadas por miembros de los *officia* de cada uno de estos gobernadores, bien colectivamente, bien por parte de un solo miembro, como vimos en el Capítulo 5 de la Primera Parte²¹¹⁹.

La otra inscripción honorífica dedicada a Gentiano también la hemos mencionado a propósito de la intervención de este gobernador en el censo provincial en la Segunda Parte. Fue dedicada por un tal Fabio Marcelo:

*Q(uinto) Hedio L(uci) f(ilio) Pol(lia tribu) / Rufo Lolliano / Gentiano auguri,
co(n)s(uli), / proco(n)s(uli) Asiae, censitori / prou(inciae) Lugd(unensi) item Lugdu-*

²¹¹⁹ La de Gentiano (*CIL* II²/14, 985) y Titiano (*CIL* II²/14, 979) por varios miembros de sus respectivos *officia*, la de Cándido por un *strator* (*CIL* II²/14, 975) y la de Q. Atrio Clonio por un centurión (*CIL* II²/14, 972).

/nensium, comiti Seueri et / Antonini Augg(ustorum) ter, leg(ato) Augg(ustorum) / prou(inciae) H(ispaniae) C(iterioris) item censitori / H(ispaniae) C(iterioris), cur(atori) c(iuitatis) splend(idissimae) Pu-/teolanor(um) et Veliter-/nor(um), quaest(ori) cand(idato), praet(ori) / cand(idato), leg(ato) leg(ionis) VII G(eminae) P(iae) F(elicis) III/uiro a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo), / Fab(ius) Marcellus.²¹²⁰

No se sabe nada acerca de Fabio Marcelo. Alföldy pensaba que formaría parte del *officium* del gobernador²¹²¹, pero es extraño que no haga alusión a su cargo en el epígrafe al igual que hicieron los *officiales* que dedicaron la otra inscripción a Gentiano y los que hicieron lo mismo con Flavio Titiano en *Tarraco*. También podría tratarse de un ciudadano romano natural de la Citerior sin ninguna vinculación oficial a Gentiano, pero que hubiese establecido contacto con él de otro modo y se hubiese visto beneficiado por alguna actuación de éste. A tenor del desembolso económico que tuvo que hacer para honrar con una estatua al gobernador, se deduce que gozaría de una posición relativamente acomodada. Parece que los *officiales* mejor pagados podrían llegar a disponer del dinero suficiente para hacer un desembolso de este calibre, pues Claudio Cándido y Atrio Clonio fueron honrados con sendas estatuas por un solo miembro de su *officium* respectivamente. Resulta muy difícil ir más allá de meras hipótesis en torno a Fabio Marcelo.

Al margen de este epígrafe, resulta muy significativo que todos los demás homenajes tributados en *Tarraco* a gobernadores fuesen dedicados por miembros de sus *officia*, de lo que se puede deducir que entre finales del principado de Cómodo (ca. 192) y el de Alejandro Severo en la Hispania Citerior existió una tendencia a que se estableciesen vínculos estrechos entre ambas partes que, si bien no podemos afirmar que implicasen una relación de patronato-clientela, indican que la colaboración cotidiana en las tareas administrativas durante varios años creó unos fuertes lazos entre los homenajeados y sus dedicantes de los que éstos pudieron haber obtenido o esperaban obtener algún *beneficium*. Esto no quiere decir que estas dedicaciones honoríficas no fuesen sinceras, pero no hemos de olvidar que la progresión en la carrera administrativa imperial a cualquier nivel podía depender de una *commendatio* realizada por alguien

²¹²⁰ *CIL* II²/14, 984 = *RIT* 139.

²¹²¹ *RIT* 139.

influyente en el momento oportuno²¹²². Estos homenajes pudieron deberse, por tanto, a que estos gobernadores promocionaron a algunos de los dedicantes de estas estatuas al puesto que ocuparon en su *officium* y a las ambiciones futuras que les hacía albergar su buena relación con ellos²¹²³.

Conclusiones

Los datos proporcionados por los epígrafes que hemos analizado antes dan pie a unas conclusiones interesantes. En lo que respecta a la comunidades provinciales, en primer lugar se evidencia que la mayoría de las que buscaron el *patrocinium* de los gobernadores de Hispania y de aquéllas que –sin que sepamos si llegaron a establecer una relación clientelar con ellos– los homenajearon públicamente por haber recibido algún beneficio de ellos, no tenían ninguna función administrativa oficial y, por tanto, los vínculos establecidos con los gobernadores que honraron se dieron como resultado de su intervención excepcional en ellas fuera del itinerario conventual o bien para atraer su atención dado que no eran visitadas sistemáticamente por ellos una vez al año. El patronato fue utilizado por estas comunidades como un canal alternativo de comunicación con los gobernadores que les garantizase su atención especial mientras se hallaban en la provincia –por ejemplo en la revisión de sus finanzas y obras públicas, o en la pronta admisión de los pleitos que les incumbiesen– y, tras su partida, una defensa de sus intereses en Roma, compensando la desventaja que suponía no ser sede conventual²¹²⁴.

En segundo lugar, la mayoría de los testimonios que hemos visto pertenecen a época augustea y están relacionados con comunidades de la Hispania Citerior. Dejando a un lado el consabido margen de responsabilidad atribuible al azar en los hallazgos epigráficos, la concentración de testimonios durante el principado de Augusto concuerda bien con uno de los principales momentos de desarrollo del proceso de municipalización en Hispania, que, como vimos en la Segunda Parte, fue impulsado por el poder central y supervisado por los gobernadores. Esa implicación personal de los gobernadores favoreció el establecimiento del patronato sobre las comunidades que

²¹²² Saller, *Personal Patronage...* cit. p. 162.

²¹²³ Saller, *Personal Patronage...* cit. pp. 158-159, quien llega a la misma conclusión en las dedicaciones hechas al gobernador por miembros del ejército en el Norte de África.

²¹²⁴ Harmand, *Le patronat...* cit. pp. 397-399 y 411-413.

tutelaron de cerca, garantizando a sus élites la continuidad de su apoyo una vez que hubiesen abandonado la provincia. El predominio de los gobernadores de la Hispania Citerior puede deberse a que, frente a los de la Lusitania y la Bética, los titulares de este gobierno eran senadores de rango consular que gozaban de mucha más influencia en Roma y, en algunos casos, fueron muy cercanos al propio *princeps*. A esto hay que añadir, como piensa Navarro, que la mayor representación epigráfica de los gobernadores de la Citerior respecto a los de la Lusitania y la Bética se puede deber a su mayor implicación en los asuntos provinciales²¹²⁵.

En tercer lugar, hay que destacar que salvo dos, todas estas comunidades gozaban de un estatuto privilegiado (*coloniae ciuium Romanorum* y municipios romanos o latinos) en el momento en que realizaron sus dedicaciones. Este predominio de las comunidades privilegiadas merece una doble lectura. Por un lado, se debe a que en Occidente eran las colonias y municipios los que resultaban más atractivos para los gobernadores como clientes, pues conferían mayor prestigio a su patrono en Roma, le proporcionaban la posibilidad de contar con el apoyo de sus élites tanto en la periferia como en el centro del imperio si éstas llegaban a desarrollar un *cursus honorum* ecuestre o incluso senatorial, y ofrecían más visibilidad a sus beneficios y a los honores que, en agradecimiento, les tributaban.

Las provincias hispanas se insertan en una tendencia general constatada en todo el imperio por Nicols: a partir del 11-12 d.C. las evidencias epigráficas indican que la gran mayoría de las comunidades que establecieron un *patrocinium publicum* con senadores y, en concreto, ex gobernadores fueron colonias y municipios. Según este autor, esto sería una consecuencia del decreto de Augusto del 11 d.C. que prohibió que los habitantes de una provincia concediesen cualquier tipo de honor a un gobernador durante su mandato y hasta sesenta días después de que la hubiese abandonado²¹²⁶. Tras esa fecha las evidencias epigráficas muestran que las comunidades peregrinas cesaron de elegir patronos senatoriales, mientras que las comunidades de ciudadanos romanos

²¹²⁵ Navarro, “Los gobernadores...” cit. pp. 192-193.

²¹²⁶ Con la justificación de evitar que los gobernadores cometiesen abusos sobre ellos para obtener honores. Dio LVI, 25, 6. Según J. Nicols, “Patrons of Greek Cities in the Early Principate”, *ZPE* 80, 1990, pp. 81-100, esp. p. 85 y *Civic Patronage...* cit. pp. 213-214, este decreto estaría dirigido sólo a las comunidades peregrinas, pues Dión Casio se refiere a los “pueblos sometidos” (*hupekoi*) y, además, las colonias tendrían especificado estas cuestiones en sus leyes, como el caso de Urso (capp. 130-131). La propuesta de Nicols es sugerente pero la *lex Vrsonensis* no regula otros honores que, sin duda, sí abordaba el decreto augusteo, por lo que es posible que éste se refiriese en parte también a las colonias y municipios.

continuaron con tal práctica. En efecto, los dos casos únicos ejemplos de una comunidad peregrina hispana con un ex gobernador se dieron antes del cambio de Era. En números absolutos el patronato fue cada vez menos frecuente en la parte oriental del imperio en contraste con el Occidente, invirtiéndose la dinámica existente en el período republicano. A pesar de que durante el Principado las provincias orientales tuvieron índices más altos de urbanización que las occidentales, la proporción de testimonios de patronato es mucho mayor en estas últimas a partir del período julio-claudo en adelante. Por ello, Nicols concluye acertadamente que esta desproporción entre una y otra parte del imperio sólo puede explicarse por la mayor concentración de comunidades privilegiadas en las provincias occidentales²¹²⁷, de lo que deduce que el patronato quedó reducido a éstas o a aquéllas comunidades peregrinas que hubiesen adoptado regulaciones de cuño romano en torno a esta institución (*ius cooptandi*, etc.). En opinión de Nicols, las comunidades peregrinas, al menos en Oriente, habrían perdido interés en obtener el *patrocinium* de senadores que no tenían ninguna ligazón familiar o patrimonial en su provincia, entendiendo que podrían sacar poco provecho de los demás en Roma.

En Hispania, como señaló Mangas, las comunidades no privilegiadas tendieron a relacionarse con altos miembros de los *ordines* romanos a través de la institución del *hospitium*²¹²⁸. Esta elección resulta lógica si tenemos en cuenta que el *hospitium* fue una práctica social propia del derecho natural de los pueblos indoeuropeos, conocida, pues, tanto por los indígenas²¹²⁹ como los romanos y, por tanto, fue visto por ambas partes como el mejor cauce para su interrelación. A este respecto hay que señalar que, a pesar de que en los pactos de hospitalidad conservados entre una comunidad indígena y un ciudadano romano es innegable que se produjo una *interpretatio* romana en la formulación del *hospitium* dentro de su propia tradición jurídica —en algunos casos mezclándose con el patronato—, ello no significa que el sentido de esos pactos fuese unívoco ni que la comunidad indígena fuese un sujeto pasivo en el proceso²¹³⁰. Estos

²¹²⁷ Nicols, “Patrons of Greek Cities...” cit. p. 92.

²¹²⁸ Mangas, “*Hospitium* y *patrocinium*...” cit. p. 172.

²¹²⁹ Los autores antiguos hablan de la existencia del *hospitium* entre los celtíberos (Diod. V, 34), los galos (Caes. B.G. VI, 23, 9) o los germanos (Tac. Germ. 21, 2). Cf. Balbín Chamorro, *Hospitalidad y patronato*... cit. pp. 44-47.

²¹³⁰ Balbín Chamorro, *Hospitalidad y patronato*... cit. pp. 44-55, que matiza la visión excesivamente unívoca de M^a. D. Dopico Caínzos, “El *hospitium* celtibérico: un mito que se desvanece”, *Latomus* 48, 1989, pp. 19-35.

pactos de hospitalidad fueron el fruto de una voluntad recíproca de establecer lazos de unión y de ayuda mutua entre ambas partes. No ha de olvidarse que si por algo destacó el poder romano fue por el pragmatismo de que hizo gala en las relaciones que establecía con las comunidades indígenas y por la capacidad que tuvo de adaptarse a las realidades locales.

En las colonias y municipios, sin embargo, el poder imperial se preocupó de controlar las relaciones de patronato que podían establecerse con los gobernadores provinciales y otros senadores investidos de *imperium*, introduciendo capítulos específicos en las leyes coloniales y municipales, de las que son un valioso ejemplo la *lex* de la *colonia Genetiua Iulia Vrsonensis* y la *lex Irnitana* halladas en la Bética. Normas similares tuvieron vigencia en los municipios y colonias de las otras provincias hispanas. El patronato de los gobernadores sobre comunidades de su provincia era una práctica extendida desde época republicana que estaba muy asentada y podía resultar beneficiosa para el desarrollo de las comunidades provinciales, pero que también podía suponer un riesgo para la seguridad del emperador si un senador extendía demasiado sus redes clientelares mientras desarrollaba su gobierno provincial, sobre todo si, además, tenía legiones a su mando —en Hispania, sólo el de la Citerior.

En cuanto al patronato personal, la relevancia de éste no ha de ser minusvalorada en función de los pocos testimonios que se han conservado. Saller ha demostrado la relevancia que tenían las relaciones clientelares en la sociedad romana y en el funcionamiento de la administración durante el Principado como medio de promoción personal y de interrelación entre individuos de diferente *status* e incluso entre los miembros de la aristocracia. Pero si no fuese por las fuentes literarias, no quedaría ni rastro de estas relaciones de patronato entre las élites. No cabe duda de que en las provincias hispanas las relaciones de patronato-clientela establecidas con los gobernadores jugaron un importante papel, al igual que en otras provincias.

Los interlocutores con los que el gobernador debía tratar en el cumplimiento de sus funciones eran las élites dirigentes de cada comunidad y ambas partes estaban muy interesadas en cooperar de manera que la misión del primero se desarrollase sin contratiempos y las ambiciones de los segundos y las necesidades de sus comunidades se viesan colmadas. El contacto personal cotidiano entre los gobernadores y las élites locales propició el surgimiento lazos de amistad y abrió la puerta a algunos aristócratas

provinciales al ascenso social. Para los peregrinos, el objetivo pronto fue la consecución de la ciudadanía romana, y para los notables de los municipios y colonias lo fue el salto a puestos de la administración imperial a través del acceso a círculos de influencia en la capital del imperio. El apoyo de los senadores que gobernaron las provincias hispanas podía resultar muy valioso y solía plasmarse en forma de *commendationes*. Así, por ejemplo, el joven *eques* Voconio Romano, natural de Sagunto²¹³¹, tras haber sido *flamen* de la Hispania Citerior pidió a su amigo y protector Plinio el Joven que le consiguiera un puesto administrativo en el equipo de algún gobernador y éste escribió a su amigo Prisco, *legatus Augusti pro praetore* que tenía varias legiones a su mando²¹³². También era posible que ese mismo senador se acordase de algún cliente provincial mientras ocupaba otro gobierno provincial y lo llamara a formar parte de su séquito o, si tenía legiones a su mando, lo designase directamente para un puesto de oficial menor, como en el caso de Tito Sennio Solemne²¹³³.

Por tanto, estas relaciones de patronato hicieron que la influencia de estos senadores en la vida de las élites provinciales perdurase más allá de sus años de gobierno en las provincias y que tendiesen durante el resto de su vida un puente entre el centro y la periferia del imperio, favoreciendo el conocido proceso de integración de las élites provinciales en los órdenes senatorial y ecuestre que se produjo durante el Principado.

²¹³¹ *CIL* II²/14, 366-367. Su nombre completo era Cayo Licinio Marino Voconio Romano.

²¹³² Plin. *Ep.* II, 13. El destinatario no ha podido ser identificado con seguridad. Sólo se conserva su *cognomen*, Prisco, que hace que existan dos posibilidades: Javoleno Prisco, gobernador de Siria en 94-101, o Neracio Prisco, legado en Panonia en 102-103. Cf. Sherwin-White, *The Letters...* cit. pp. 174 ss. Plinio no especifica el cargo que tenía *in mente* para Voconio, pero seguramente se trataría de un puesto de tribuno militar ecuestre como piensa Saller, *Personal Patronage...* cit. p. 132.

²¹³³ Saller, *Personal Patronage...* cit. pp. 131-132; G. E. M. de St. Croix, “*Suffragium: From Vote to Patronage*”, *British Journal of Sociology* 5, 1954, pp. 33-48, esp. p. 40.

REFLEXIONES FINALES

En Occidente el culto al emperador ofreció un valioso recurso al poder central para difundir y afianzar la lealtad de los provinciales al emperador reinante y su familia y, por ende, al imperio que encabezaba y, a la vez, paulatinamente dotó de un elemento identitario común a todos los habitantes del imperio por encima de las diferentes tradiciones regionales. Precisamente, en época augustea el culto imperial se comenzó a implantar en las áreas recién conquistadas o poco romanizadas con el fin de afirmar la presencia de Roma y de su cabeza entre las poblaciones que estaban en vías de ser integradas, como una pieza más del proceso de implantación del nuevo marco cívico en que se encuadraría su vida y de las nuevas reglas que regirían el juego de poder. Los notables indígenas comprendieron que para conservar su posición social preeminente habían de establecer relaciones exclusivas con el poder romano y demostrar su fidelidad hacia el mismo; el culto imperial encauzó esa necesidad. En este sentido, el caso del Noroeste de Hispania resulta paradigmático: fue el primer lugar de Occidente en que un enviado del poder central, el gobernador Lucio Sestio Quirinal, instituyó el culto a Roma y Augusto —en concreto a través de la consagración de un santuario en torno a unas aras, como luego sucederá en *Lugdunum*— dentro de su labor de organización de la nueva provincia Transduriana. Poco después, cuando este territorio pasó a integrarse en la Hispania Citerior, los legados imperiales Paulo Fabio Máximo y Gneo Calpurnio Pisón consolidaron este culto, el primero de ellos en dos de las sedes conventuales que actuarían desde entonces como principales centros regionales: *Bracara* y *Lucus Augusti*.

En las áreas o provincias occidentales más romanizadas el protagonismo correspondió a las colonias y municipios, y sus élites pronto dominaron los concilios provinciales. En Hispania, las tres capitales provinciales centralizaron el desarrollo de los rituales y celebraciones vinculados al culto imperial provincial, que eran presididos por los gobernadores. Estos también supervisaban el buen funcionamiento de las sesiones de los concilios provinciales y, por ejemplo, debían aprobar las estatuas que éstos decidían erigir en honor de sus *flamines* o de los emperadores y los *diui* —como

muestra la *lex de flamonio* narbonense de época flavia. El culto pronto abrió un camino al ascenso social de las élites provinciales. El flaminado provincial se convirtió en la cúspide del *cursus honorum* de un notable y su participación en el *concilium* una forma de acceso preferente no sólo a los sucesivos gobernadores sino a la propia Roma. Podían enviar embajadas a Roma para presentar peticiones al emperador o para denunciar los abusos de sus antiguos gobernadores, lo que suponía un valioso instrumento de control de estos últimos. En época de Domiciano y Trajano el concilio de la Bética se distinguió por presentar importantes acusaciones en el Senado contra dos ex procónsules que fueron condenados con el apoyo de influyentes senadores como Plinio el Joven.

Al margen del culto imperial, desde los comienzos del Principado tanto los *legati Augusti pro praetore* que gobernaban la Hispania Citerior y la Lusitania como los procónsules de la Bética buscaron consolidar la autoridad imperial a través de otros cauces. En primer lugar, presidiendo juramentos de fidelidad de carácter religioso con connotaciones militares al *princeps* y sus herederos o sólo al emperador, como muestran respectivamente el *ius iurandum* de *Conobaria* en la Bética (de época augustea) y el de *Aritium* en Lusitania (bajo Calígula). Asimismo, los gobernadores de las provincias hispanas se ocuparon de supervisar que los emperadores fuesen honrados del modo correcto –sobre todo en las áreas menos romanizadas–, y que sus representaciones plásticas se adecuasen a los modelos admitidos por el poder central y a la majestad imperial. Finalmente, se hubieron de ocupar de transmitir las decisiones emanadas del poder central y las noticias que atañían a la familia imperial y, por ende, al destino del imperio que el emperador –a veces asecundado por el Senado– entendía que debían ser publicitadas en las provincias. En este aspecto, la Bética nos ofrece dos ejemplos de gran valor: los senadoconsultos referentes a los honores tributados a Germánico tras su muerte y a la sentencia del culpable de la misma, Gneo Calpurnio Pisón. En todos estos cometidos, los gobernadores de las tres provincias hispanas actuaron siguiendo instrucciones del poder central, coadyuvando a forjar la adhesión de las comunidades de Hispania y de sus élites al emperador. De ahí nació la imagen de Hispania como fiel sostenedora del Principado.

Por último, la integración de las élites dirigentes de las comunidades provinciales hispanas también se produjo a través de la institución del patronato. Los

gobernadores de Hispania asumieron el papel de patronos de determinadas comunidades de sus provincias (casi todas privilegiadas) y de algunos particulares. La mayoría de los testimonios se refieren al *patrocinium publicum*, que tenía una gran relevancia para el progreso cívico de una ciudad al garantizar una atención preferente del gobernador mientras se hallase en la provincia y la protección de sus intereses en Roma una vez que la hubiese abandonado. La ley de la colonia de Urso indica que sus decuriones tenían prohibido elegir al gobernador provincial como patrono hasta que hubiese abandonado la provincia y cesado en sus funciones, pero no cabe duda de que esa elección sería el resultado de unas relaciones establecidas durante su estancia. Esta disposición formaría parte de una *lex de repetendis* cesariana general destinada a controlar el poder de los magistrados enviados a provincias que era válida para todo el imperio y fue mantenida por Augusto. Ahora bien, a pesar de que durante el Principado el control de los gobernadores fue más férreo y su rendición de cuentas al regresar a Roma podía ser más exhaustiva, esta disposición no siempre fue respetada. Sabemos, por ejemplo, que el gobernador de la Hispania Citerior, Marco Licinio Craso Frugi realizó durante su mandato un pacto con la *ciuitas Bocchoritana* de la isla de Mallorca.

Pero dejando esto a un lado, lo verdaderamente relevante es que el patronato demostró ser una institución muy eficaz para canalizar las relaciones sociales entre las comunidades provinciales (sobre todo las privilegiadas) y sus élites y los principales representantes del poder central, al igual que ya lo habían sido en Italia a fines de la República. Al margen del riesgo para su persona que el emperador adivinaba en la configuración de redes clientelares extensas por parte de los senadores destinados en las provincias, lo cierto es que las relaciones centro-periferia se vieron fortalecidas por el establecimiento de relaciones de patronato-clientela entre los gobernadores y las comunidades o individuos de sus provincias. El patronato de un senador suponía tener un valedor de los propios intereses en Roma y un posible acceso a los beneficios imperiales y, en el caso de los particulares, la mejor posibilidad de acceder a la carrera equestre y, de ahí, a la senatorial. El buen funcionamiento de estos canales de influencia dio salida a las ambiciones de la aristocracia de las provincias hispanas y reforzó, así, el sentimiento de pertenencia de pleno derecho al imperio y el acceso a los beneficios que se derivaban del mismo.

Así pues, el Imperio Romano logró aglutinar a la población que vivía dentro de sus fronteras gracias al culto imperial, que la dotaba de un elemento identitario común que superaba la diversidad cultural provincial sin eliminarla, y garantizó su unidad, su estabilidad interna y la perdurabilidad de su régimen político gracias a que satisfizo las aspiraciones sociales y políticas de las élites periféricas, tanto a través del flaminado y del concilio provincial como del patronato que les abrió una vía de acceso al centro del imperio y a los más altos círculos de poder. En todo este proceso de integración, los gobernadores de Hispania tuvieron un gran protagonismo, colaborando decisivamente a la consolidación del Principado y facilitando las relaciones centro-periferia a través de los cauces oficiales y de una institución social tan enraizada en la cultura romana como el patronato.

CONCLUSIONES FINALES

*Prouinciam circumire, adiuuare publice, hortari priuatim...*²¹³⁴ Tres frases que definen la centralidad que tuvieron los gobernadores en la vida cotidiana de las comunidades de Hispania durante el Principado. Las evidencias de distinta naturaleza que hemos analizado a lo largo de este estudio muestran que intervinieron decisivamente en los ámbitos más relevantes de la vida de sus comunidades, tanto en lo que atañe al desarrollo y funcionamiento de sus instituciones cívicas como en la configuración de la sociedad provincial.

En primer lugar, su intervención en los asuntos internos de las comunidades de Hispania se produjo en el ámbito jurisdiccional. Eran de su competencia las causas penales –teniendo *ius gladii*, a nuestro juicio, sobre todos los habitantes de la provincia– y las no criminales de mayor cuantía. De entre éstas, las más abundantes fueron las relativas a los conflictos territoriales, bien entre dos comunidades, bien entre una comunidad y un particular. Los gobernadores atendieron las reclamaciones de las comunidades tanto si eran privilegiadas como si no, pero mostraron una preocupación especial por asegurar el sostenimiento de las colonias y municipios, siguiendo en todo momento lo que hemos denominado como “la política del equilibrio”, es decir, el justo compromiso entre una estabilidad económica que garantizase la supervivencia a las comunidades y los derechos de los individuos. Asimismo, pertenecían a su jurisdicción las causas que pudiesen afectar al *status* jurídico y la libertad de un individuo –cuestiones que solían requerir la confirmación del emperador–, así como las manumisiones *uindictae* de esclavos de ciudadanos romanos, y las adopciones y emancipaciones de un *filius familias* romano. También podían proceder a la *tutoris datio*, a pesar de que los magistrados de las colonias y municipios tenían esa potestad. En todo ello tuvo una importancia capital la publicación de su edicto jurisdiccional anual, donde exponían las normas y el programa que seguirían en la aplicación de sus poderes jurisdiccionales. Las cláusulas del edicto debían ser acatadas por todos los habitantes de la provincia, peregrinos o *ciues Romani*, y, como prueban las leyes

²¹³⁴ La primera frase es usada por Plinio y Ulpiano, mientras que las dos últimas provienen de Tácito, *Agr.* 21. En conjunto sintetizan bien la extensión y el calado social de la actividad de los gobernadores provinciales.

béticas, los magistrados de las comunidades privilegiadas debían adecuar su actuación a ellas.

En las áreas menos romanizadas de la península como el Noroeste de la Citerior o el interior de la Lusitania, estos grandes poderes jurisdiccionales de los gobernadores tuvieron una profunda repercusión social. A través de la difusión de su edicto jurisdiccional y de su presencia en las sedes conventuales de estas regiones los gobernadores desempeñaron un papel decisivo en la transformación de sus comunidades, dado que consolidaron el nuevo marco jurídico en el que se desarrollarán las relaciones sociales y la convivencia. Su actividad jurisdiccional, por tanto, fue crucial en el proceso de “romanización” de los indígenas; como decía Aristóteles, un cambio de *politeía* implicaba una transformación de la comunidad que lo experimentaba²¹³⁵. En este sentido se puede decir que la publicación del edicto provincial de los gobernadores de Hispania fue un símbolo de la superación de su consideración de “conquistados” y de la mera dominación militar y suponía un hito en la paulatina integración de los peregrinos en el imperio. Ya Floro señaló en su época: *Sed difficilior est provincias optinere quam facere; uiribus parantur, iure retinerentur*²¹³⁶.

Ahora bien, no todos los habitantes de las provincias hispanas se beneficiaron por igual del sistema judicial implantado por el poder imperial a través de sus gobernadores. El Imperio Romano buscó ofrecer un gobierno provincial que satisficiera, ante todo, las necesidades de las élites, cuya colaboración tanto necesitaba para mantener el orden y la prosperidad en las provincias. Los gobernadores provinciales contaban con un *officium* formado por un número considerable de expertos en tareas administrativas, que procedían de los cuadros de las legiones que tuviesen a su mando o, en su defecto, de las estacionadas en provincias vecinas. En Hispania los únicos gobernadores que tuvieron legiones a sus órdenes fueron los de la Citerior –primero varias, pero desde época flavia sólo la *legio VII Gemina*–; los gobernadores de la Lusitania y la Bética hubieron de recurrir a él para cubrir algunos puestos de su *officium*. Sin embargo, el tiempo que se detenían en cada sede conventual durante su itinerario anual por la provincia no bastaba para atender todas las causas judiciales y

²¹³⁵ Arist. *Pol.* III, 1276b; Woolf, *Becoming Roman...* cit. p. 72; López Barja, “El gobernador provincial...” cit. p. 303; Olmo López, “*Pacisque...*” cit. pp. 485-486 y 495-496.

²¹³⁶ Flor. *Epit.* II, 30, 29.

peticiones que se les presentasen y, por ello, los gobernadores tendieron a seleccionar las más relevantes para el orden provincia: esto es, las penales más graves y aquéllas que afectasen seriamente a la sostenibilidad económica de las comunidades o a los intereses de las élites. El resto de causas las derivaban a sus legados o a *iudices pedanei*. En las provincias hispanas tuvieron un gran protagonismo en el sistema de *conuentus iuridici* las colonias y municipios romanos, no sólo por tratarse de comunidades de *ciues* sino porque el poder romano tendió a elegir sus sedes entre ellas desde inicios del Principado. Las únicas excepciones parecen haber sido las tres desde conventuales del Noroeste –*Asturica, Lucus Augusti y Bracara*– pero su estatuto no está claro. El sistema de *conuentus iuridici* fue eficaz en el objetivo de acercar el gobernador a las principales comunidades provinciales, pero de él se beneficiaron sobre todo las élites. Para desgracia de los más humildes, eso le bastaba al imperio para mantener el orden interno.

En segundo lugar, la “política del equilibrio” se tradujo en una implicación directa de los gobernadores en el mantenimiento de la estabilidad económica de las ciudades privilegiadas a través del control de sus finanzas públicas y, en particular, de sus gastos en obras públicas. Como recuerda Ulpiano, los gobernadores debían inspeccionar las obras públicas más relevantes y velar por que fuesen concluidas, tanto si se realizaban con cargo a fondos públicos como a expensas de notables particulares que las hubiesen prometido. Asimismo, los gobernadores eran los responsables de la ejecución de los proyectos constructivos sufragados por el poder imperial, por ejemplo la dotación de murallas en los municipios –como hizo el gobernador de la Citerior Ahenobarbo en *Iluni*–, los grandes puentes o los acueductos. Aunque contamos escasos testimonios epigráficos de la intervención de los gobernadores de Hispania en las obras pública, se puede deducir su participación en aquellas infraestructuras en donde fuese necesaria la intervención del ejército, pues no podían movilizarse tropas o pedirse prestadas a otras provincias sin su permiso y control, como se observa en paralelos de otras provincias occidentales. Además, hemos de recordar que probablemente desde el siglo II y, con seguridad, en época severa, una disposición imperial prohibía que los gobernadores dedicasen ningún edificio público.

En las áreas menos romanizadas los gobernadores dirigieron las principales obras de construcción de infraestructuras tales como puentes, vías y acueductos echando mano del personal técnico militar. Aunque sólo conservemos la huella epigráfica de

Cayo Calpetano Rantio Quirinal Valerio Festo (79-81 d.C.) en el puente de *Aquae Flaviae* y en los miliarios de la *uia Noua Bracara-Asturica*, su ejemplo resulta paradigmático en la labor de los gobernadores en el Noroeste, que se puede comparar con la de Gneo Julio Agrícola en Britania: Desde época de Augusto los gobernadores de la Transduriana y de la Hispania Citerior contribuyeron a consolidar los nuevos centros regionales (las sedes conventuales), animando a las élites indígenas a asentarse en ellos –véase el *princeps Coporum* de un epígrafe de *Lucus Augusti*. Al vivir en estas ciudades los aristócratas locales podían tener un contacto directo periódico con el máximo representante provincial del poder imperial y pronto comenzaron a adoptar un modo de vida a la romana buscando aproximarse a las prácticas y símbolos sociales que distinguían a la élite romana con el fin de reforzar su propia preeminencia social. Al igual que Agrícola, Lucio Sestio Quirinal, Paulo Fabio Máximo o Cayo Calpetano –en dos momentos cruciales de la evolución cívica del Noroeste: los dos primeros en el período posterior a su reorganización tras la conquista; el tercero en el momento que siguió a la extensión del *ius Latii* a toda Hispania– coadyuvaron a la integración de las élites tanto con el ejemplo de su comportamiento social como con su apoyo al desarrollo urbano de las sedes conventuales.

Los gobernadores de Hispania, como hemos visto, tuvieron también una intervención decisiva en la ordenación territorial de sus provincias –bien a través de decisiones judiciales, bien supervisando el establecimiento de mojones de delimitación en confines– y en el encuadramiento de la población local a través del censo. Es decir, tuvieron de nuevo una gran responsabilidad en un sistema ordenado de gestión de los recursos provinciales en dos ámbitos que afectaban decisivamente a la vida de las comunidades locales: los recursos de la tierra –sobre todo agrícolas– y los recursos humanos. En las comunidades indígenas el censo supuso un cambio paulatino en los referentes colectivos de sus habitantes.

Además, el censo condicionaba el sistema tributario provincial y, por tanto, se puede decir que a pesar de que la fiscalidad fue competencias de los procuradores en las provincias imperiales (y más tarde también en las proconsulares), los gobernadores de la Citerior y la Lusitania tuvieron un papel en ella. Aunque en las colonias y municipios los censos eran elaborados por sus magistrados, los gobernadores los supervisaban y se

preocupaban especialmente de que se garantizase que sus curias estuviesen compuestas por los mejores de sus ciudadanos.

Finalmente, hemos visto que la introducción de la economía monetaria en el Noroeste peninsular se vio favorecida por la acuñación de la llamada moneda de la *caetra* en *Lucus Augusti* con el fin de pagar a las tropas que intervinieron en las Guerras Astur-Cántabras. Al igual que Publio Carisio en *Augusta Emerita*, es muy probable que otro gobernador hubiese dirigido esas acuñaciones. Hemos planteado la hipótesis de que las *caetra* lucenses fuesen acuñadas por el primer gobernador de la efímera Transduriana, Lucio Sestio Quirinal, pues encaja bien cronológicamente y con su misión: es el momento en que los astures fueron definitivamente derrotados y la paz permitió la constitución de esta provincia, de la que Quirinal se ocupó. Por otro lado, es posible que hasta que perduraron las acuñaciones monetales propias en algunas ciudades hispanas los gobernadores supervisasen algunos tipos relacionados con la representación de los emperadores.

En tercer lugar, los gobernadores de las provincias hispanas contribuyeron a la evolución hacia una sociedad provincial a través de su intervención en la difusión del culto imperial y de todos los otros actos de demostración de fidelidad al emperador –*ius iuranda*, *uota pro salute principis*, homenajes públicos, etc.– que desde Augusto reforzaron los vínculos de las comunidades de la periferia con el centro del imperio. Todo ello dotó a los habitantes de todas las provincias, independientemente de su *status* jurídico, de unos principios identitarios compartidos, haciéndolos partícipes de la ideología imperial. Este proceso fue paulatino: lo que en un principio comenzó siendo una forma de consolidar la autoridad del emperador y del régimen del Principado en las provincias ayudó, poco a poco, a cohesionar al imperio en torno a su figura. Todos los regímenes de carácter personalista sufren un momento crítico a la muerte de su fundador. En el caso del Principado romano, ese momento se produjo en el 14 d.C. y el propio Tiberio admitió en el Senado –en una declaración más sincera de lo que Tácito sugiere– que se veía en apuros para ocupar el vacío dejado por Augusto²¹³⁷. Una vez superado ese difícil reto –y, sobre todo, a partir del acceso al trono del primer senador ajeno a la dinastía Julio-Claudia, Galba– la figura del emperador se volvió impersonal y ello dotó de mayor solidez al imperio. Éste se personificaba en su cabeza y cuanto más

²¹³⁷ Tac. *Ann.* I, 11, 1.

fuerte fue el poder imperial y más dejó sentir su amparo sobre las provincias, más sólida fue la adhesión de sus habitantes hacia el imperio. Se podía cuestionar al titular del Principado, pero no al régimen en sí mismo.

El culto imperial, además, ofreció un camino a las ambiciones políticas de las élites provinciales gracias al flaminado y al hecho de que los participantes en las sesiones del *concilium prouinciae* disfrutaban de un acceso privilegiado a los gobernadores provinciales y a la propia Roma. Los interlocutores de los gobernadores en sus provincias fueron los notables locales –tanto en representación de sus comunidades como a título personal– y ello no sólo situó a los senadores enviados a gobernar las provincias hispanas como intermediarios oficiales entre las comunidades locales y el centro del imperio, sino que les otorgó un importante papel en el juego político de su provincia y, en particular, como promotores del ascenso social de sus más poderosos notables. Como señaló Syme, una de las claves de la perduración del imperio fue que satisfizo las ambiciones de las élites de sus provincias y les ofreció cauces a través de los cuales no sólo acceder a la ciudadanía plena, sino a los más altos puestos del gobierno del imperio e, incluso, al propio trono imperial a partir del siglo II²¹³⁸. Es decir, los beneficios del imperio llegaron también a las élites de la periferia, que cada vez fueron más influyentes en su centro. En esa búsqueda de la promoción social y política, las élites provinciales vieron en los gobernadores provinciales su mejor oportunidad para tener acceso a los círculos de poder de Roma.

Las actividades de los gobernadores y su constante trato con las élites locales ofrecían numerosas oportunidades para establecer vínculos de patronato-clientela entre ellos. La escasez de testimonios epigráficos acerca del patronato personal del gobernador con individuos hispanos no nos debe llevar a engaño. Aparte del propio azar que siempre rige los hallazgos epigráficos, hemos de tener en cuenta que no todos los patronos eran honrados públicamente por sus clientes ni los aristócratas dejaban constancia epigráfica de su condición de clientes de otros, a diferencia de los libertos. En cambio, las numerosas inscripciones que recogen el patronato de gobernadores sobre comunidades hispanas –casi en su totalidad, colonias y municipios– no sólo indican aquéllos les concedieron algún tipo de beneficio o protección, sino que de ellos se deduce una estrecha relación con sus élites dirigentes, pues el título de patrono era

²¹³⁸ Syme, *Colonial Élites...* cit.

concedido por la cámara decurional. Así como el homenaje y la elección del gobernador como patrono debían producirse, según la ley, cuando éste hubiese abandonado el cargo, pero se derivaban de relaciones previas con la comunidad, también podemos deducir que el patronato sobre comunidades implicaba estrechos lazos con algunos miembros de su aristocracia que también beneficiarían del patronato del gobernador a título personal. Las fuentes literarias contienen, como hemos visto, evidencias de los importantes beneficios que podían conceder los gobernadores provinciales –sobre todo si mandaban legiones– a los provinciales que querían hacer carrera en la administración.

En todas estas competencias oficiales y actividades sociales cotidianas no se observa ninguna diferencia en las ocupaciones y el *modus operandi* de los *legati Augusti pro praetore* enviados a la Hispania Citerior y la Lusitania y los procónsules de la Bética, salvo en el poder militar de que dotaba las legiones que tuvieron a su mando los gobernadores de la Citerior. Eso los convirtió en los verdaderos custodios de la defensa de la península frente a las amenazas externas e internas y en los suministradores de personal militar técnico para los *officia* de sus colegas de las otras provincias y para la construcción de las infraestructuras públicas en Hispania.

La red de *conuentus iuridici* extendida a toda la península por Augusto fue crucial para que los gobernadores cumplier su misión, acercándolos a la población local o, mejor dicho, a sus élites. A pesar de que el sistema privilegiaba a las ciudades que eran sedes conventuales, los testimonios epigráficos referidos a la actividad jurisdiccional del gobernador hallados en comunidades que no lo eran –por ejemplo, *Sabora*, *Cisimbrium* u *Obulcula* en la Bética; *Emporiae* en la Citerior, Guardão en la Lusitania, etc.– muestran la eficacia del sistema en atender las peticiones de otras, sobre todo a las privilegiadas. La epigrafía también muestra la centralidad que tuvieron en la actividad de los gobernadores de las provincias Citerior y Lusitania sus capitales, pues tanto en *Tarraco* como en *Augusta Emerita* es donde se encuentran más homenajes a sus gobernadores. Las sedes conventuales de la Hispania Citerior son las que únicas que han conservado vestigios epigráficos de la presencia de sus gobernadores. En la Lusitania, sólo *Augusta Emerita*; tras ella, destaca el paso de sus gobernadores por el puerto de *Olisipo*, municipio en el que no se tienen noticias de que se realizasen *conuentus iuridici* pero que ocupaba un lugar estratégico en el itinerario del gobernador por la provincia. Su presencia, en cambio, sí ha dejado huella en localidades menores en

ámbito rural. En la Bética, sólo contamos con un testimonio epigráfico de uno de sus procónsules en *Corduba*: se trata del epígrafe griego en forma métrica de un ara votiva dedicado a Ártemis por un tal Ἀρριανὸς ἀνθύπατος que se ha identificado como el escritor de época de Adriano Flavio Arriano²¹³⁹. Ninguna sede conventual de la Bética conserva epígrafes relacionados con sus gobernadores, pero no cabe duda del funcionamiento del sistema conventual en ella: el importante número de epígrafes que recogen resoluciones jurídicas de sus procónsules en otras ciudades muestra su amplia actividad jurisdiccional y, lo que es más importante, el acceso que los provinciales tenían a ellos en las sedes conventuales. La información epigráfica ha de ser relativizada siempre.

Por lo demás, las únicas diferencias entre ambos tipos de gobernadores son formales: los procónsules tenían *imperium* y *auspicia* propios y los legados imperiales los recibían por delegación del *princeps*; aquéllos contaban con seis lictores, éstos con cinco; y, por último, que los procónsules gozaban de su *imperium* y su *iurisdictio* voluntaria desde que salían de Roma y hasta su regreso, mientras que los *legati Augusti pro praetore* solamente dentro de su provincia.

A esto hay que añadir que desde época de Augusto y Tiberio los procónsules de la Bética no sólo asumieron su subordinación efectiva al *princeps* sin ofrecer ningún motivo de quebranto para él, sino que coadyuvaron a la consolidación de su poder. Estas circunstancias se vieron favorecidas sin duda por el rango pretorio y la condición de *noui homines* de los senadores que gobernaron la Bética. En cambio, los *legati Augusti pro praetore* de la Citerior eran consulares y hombres con importantes conexiones familiares y políticas como muestra el papel protagonista que tuvieron en las guerras civiles que se dieron en este período. El mando sobre legiones y el *status* personal dentro del *ordo senatorius* tuvieron más peso en la política del imperio que la posesión de *imperium* y *auspicia* propios.

Finalmente, es momento de hacerse una última pregunta: ¿Qué nos dice todo esto acerca de la naturaleza del Imperio Romano bajo el Principado? Ya comentamos al inicio de la Introducción, siguiendo las útiles categorías de Doyle, que se trataba de un

²¹³⁹ SEG 26, 1976-77, 1215. Vid. Anexo I (procónsules Bética) y Anexo II: nº 51.

“imperio formal”, pero ¿qué significa esto en su plasmación cotidiana sobre el terreno que dejan entrever las evidencias que hemos manejado?

En nuestra opinión, el grado de influencia de los gobernadores de las provincias hispanas en los diversos ámbitos en que se sustentaba el sistema municipal y en la articulación de canales de comunicación bidireccionales entre el poder imperial y las élites de las comunidades locales revela una política imperial “intervencionista” y tutelar que optimizó los recursos humanos y jurídico-políticos de que disponía para asegurar su estabilidad interna de sus provincias.

La relativamente escasa burocratización del imperio fue suplida en Hispania no sólo con un sólido sistema municipal que permitía a las comunidades promocionadas auto-gestionarse y resolver la administración del territorio a un nivel básico, sino también con una figura clave enviada desde el centro del imperio, el gobernador, investido de unos poderes que lo dotaban de una amplia capacidad de intervención en las comunidades de su provincia. Augusto comprendió que necesitaba la colaboración de los senadores en la administración del vasto imperio y supo exprimir las posibilidades del ordenamiento procedente de la República, introduciendo los cambios que posibilitaron tanto el mantenimiento de su supremacía política como alcanzar una mayor eficacia del papel de la aristocracia senatorial en el gobierno del imperio. Al igual que en el ejército, en su sistema administrativo provincial el imperio apostó por la calidad y la selección frente a la cantidad.

Durante el Principado, el poder imperial no persiguió simplemente la explotación de los recursos materiales y humanos de las provincias. La crisis de la República ofrecía una clara lección en torno a las graves consecuencias que podía acarrear una dominación que sólo beneficiase a una pequeña oligarquía y que ignorase las ambiciones de las aristocracias de los pueblos sometidos. La puerta hacia la integración del vencido que se abrió definitivamente tras el *Bellum Sociale* fue un instrumento de gobierno solamente aprovechado durante el Principado y en Occidente tuvo unas consecuencias mucho más importantes que el mero orden interno: la creación de una sociedad provincial plenamente integrada en el marco cívico y jurídico de convivencia romano y la conformación de una élite senatorial y ecuestre diversificada. Como hemos visto en los ejemplos hispanos, en ambos procesos la actividad de los gobernadores provinciales tuvo unas repercusiones decisivas.

La pérdida de protagonismo político de los senadores su alejamiento casi generalizado de los gobiernos provinciales desde mediados del siglo III en adelante no debe condicionar nuestra visión de su papel durante el Principado ni hacernos caer en la teleología de interpretar este período en función de los acontecimientos posteriores. Las evidencias hispanas muestran la gran capacidad de acción e intervención que tuvieron los gobernadores de rango senatorial en las provincias y la influencia social de que gozaron en Roma durante todo el Principado. Las limitaciones que fue imponiéndoles el poder central para evitar el acrecentamiento de su poder –como las cuestiones que debían remitir al emperador o sobre las que tenían que consultarle, las restricciones en torno a la dedicación de edificios o el patronato, etc.– revelan precisamente que éste fue grande; no en vano varios emperadores accedieron al trono desde su gobierno provincial.

Durante todo el período del Principado los gobernadores romanos de la Hispania Citerior, la Lusitania y la Bética fueron una pieza fundamental del engranaje de la administración provincial y se revelaron actores decisivos en la interacción del poder imperial con las comunidades locales. A través de ellos el poder romano se hizo presente para las comunidades locales y bajo su tutela el proceso de municipalización progresó y se consolidó. Ningún asunto relevante escapaba a su conocimiento y fueron siempre los más altos representantes del imperio que los habitantes de una provincia –y, en particular, las élites– podían conocer e incluso tratar en persona cotidianamente. Al margen de las imágenes del emperador repartidas por todas las ciudades y de sus ocasionales visitas, quienes personificaban con sus actos y presencia en toda su majestad al imperio de Roma en las provincias fueron los gobernadores. Se puede decir, por tanto, que ellos eran el centro en la periferia.

CONCLUSIONI FINALI

*Prouinciam circumire, adiuuare publice, hortari priuatim...*²¹⁴⁰ Tre frasi che definiscono la centralità che ebbero i governatori nella vita quotidiana delle comunità di *Hispania* durante il Principato. Le evidenze di diversa natura che abbiamo analizzato in questo studio mostrano che intervenirono decisamente negli ambiti più rilevanti della vita delle sue comunità, tanto nello sviluppo e funzionamento delle sue istituzioni civiche quanto nella configurazione della società provinciale.

In primis, il suo intervento negli affari interni delle comunità di *Hispania* si manifestò nell'ambito giurisdizionale. Fra le sue competenze si trovavano le cause penali –avendo lo *ius gladii*, secondo noi, su tutti gli abitanti della provincia– e le cause non criminali di importo superiore. Fra queste, le più abbondanti furono quelle relative ai conflitti territoriali, sia fra due comunità, sia fra una comunità ed un privato. I governatori giudicarono le reclamazioni di tutte le comunità, privilegiate e no, ma mostrarono una preoccupazione speciale per garantire il sostenimento delle colonie e *municipia*, seguendo sempre quello che abbiamo denominato come “la politica dell’equilibrio”; e cioè, il giusto compromesso fra la stabilità economica che garantisse la sopravvivenza delle comunità e i diritti dei privati. Nello stesso tempo, appartenevano alla sua giurisdizione le cause che potessero provocare un mutamento nello status giuridico e la libertà di una persona –questioni che di solito esigevano la conferma dell’imperatore–, ed anche le *manumissiones uindictae* di schiavi di cittadini romani e le adozioni ed emancipazioni di un *filius familias* romano. Potevano anche procedere a la *tutoris datio*, anche se i magistrati delle colonie e dei *municipia* avevano anche quel potere. In tutto questo ebbe un’importanza capitale la pubblicazione del loro editto giurisdizionale annuale, dove esponevano le norme ed il programma di riferimento nell’applicazione dei loro poteri giurisdizionali. Le clausole dell’editto dovevano essere rispettate per tutti gli abitanti della provincia, peregrini o *ciues Romani*, e, come dimostrano le leggi municipali betiche, i magistrati delle comunità privilegiate dovevano adattare a queste le sue azioni.

Nelle regioni meno romanizzate della Penisola Iberica come il Nordovest de la *Hispania Citerior* o l’interno della Lusitania, questi grandi poteri giurisdizionali dei

²¹⁴⁰ La prima frase è usata per Plinio e Ulpiano. Le altre due a provengono di Tacito, *Agr.* 21.

governatori ebbero una profonda ripercussione sociale. Attraverso la diffusione del loro editto giurisdizionale e della loro presenza nelle sedi conventuali di queste regioni i governatori ebbero un ruolo decisivo nella trasformazione delle comunità, perché consolidarono il nuovo marco giuridico in cui si svilupperanno i rapporti sociali e la convivenza. La loro attività, quindi, fu decisiva nel processo di “romanizzazione” degli indigeni; come diceva Aristotele, un cambiamento nella *politeía* coinvolgeva un mutamento nella comunità che lo provava²¹⁴¹. In questo senso, si può dire che la pubblicazione dell’editto provinciale dei governatori di *Hispania* era un simbolo del superamento della considerazione di “conquistati” e del semplice dominio militare e significava una pietra miliare nella graduale integrazione dei peregrini nell’impero. In questo senso, Floro segnalò nel suo tempo: *Sed difficilior est prouincias optinere quam facere; uiribus parantur, iure retinerentur*²¹⁴².

Non tutti gli abitanti delle province ispaniche, però, poterono accedere ai vantaggi del sistema giudiziario stabilito per il potere imperiale attraverso i suoi governatori. L’Impero Romano cercò d’offrire un governo provinciale che soddisfacesse in primis i bisogni delle élites, che considerava indispensabili per mantenere l’ordine interno ed il benessere nelle province. I governatori provinciali avevano un *officium* composto per un considerevole numero di esperti in compiti amministrativi che provenivano dei corpi delle legioni che comandassero o, in mancanza di queste, di quelle insediate nelle province vicine. In *Hispania* gli unici governatori che comandarono legioni furono quelli della *Citerior* –prima varie, ma dal periodo flavio in poi soltanto la *legio VII Gemina*–; i governatori della Lusitania e della Betica dovettero richiedere a essi il personale legionario del suo *officium*. Tuttavia, il tempo che si fermavano in ogni sede conventuale nel suo itinerario annuale per la provincia non bastava per risolvere tutte le cause giudiziarie e le petizioni che i provinciali le volevano far arrivare e, per questo motivo, i governatori di solito sceglievano le più rilevanti per l’ordine della provincia: le cause penali più gravi e quelle che potevano avere serie ripercussioni sulla sostenibilità delle comunità o sugli interessi delle élites. Il resto di cause potevano derivarle ai suoi legati o a *iudices pedanei*. Nelle province ispaniche ebbero un grande protagonismo nel sistema di

²¹⁴¹ Arist. *Pol.* III, 1276b; Woolf, *Becoming Roman...* cit. p. 72; López Barja, “El gobernador provincia...” cit. p. 303; Olmo López, “*Pacisque...*” cit. pp. 485-486 y 495-496.

²¹⁴² Flor. *Epit.* II, 30, 29.

conuentus iuridici le colonie e i *municipia* romani, non solo perché erano comunità di *ciues*, ma perché il potere romano le scelse come sedi conventuali dal inizio del Principato. Le uniche eccezioni sembrano essere stati le tre sedi conventuali del Nordovest –*Asturica, Lucus Augusti* e *Bracara*– ma il suo statuto non è ancora chiaro. Il sistema di *conuentus iuridici* fu efficace nell’obiettivo di avvicinare il governatore alle principali comunità provinciali, ma i suoi vantaggi furono approfittati soprattutto dalle élites. Purtroppo per i più umili, quello bastava a l’impero per mantenere l’ordine interno.

In secondo luogo, la “politica dell’equilibrio” si manifestò nel intervento diretto dei governatori nel sostegno della stabilità economica delle comunità privilegiate attraverso il controllo delle finanze pubbliche e, particolarmente, delle loro spese in opere pubbliche. Come ricorda Ulpiano, i governatori dovevano ispezionare le opere pubbliche più importanti e velare per la loro conclusione, tanto se venivano fatte con carico al tesoro pubblico quanto alle spese di privati. I governatori erano anche i responsabili della esecuzione dei progetti costruttivi suffragati dal potere imperiale, per esempio la dotazione di mura ai *municipia* –come fece il governatore della *Hispania Citerior* Ahenobarbo a *Iluni*–, i grandi ponti o gli acquedotti. Anche se abbiamo scarse testimonianze epigrafiche del intervento dei governatori di Hispania nelle opere pubbliche, si può dedurre la loro partecipazione in quelle infrastrutture dov’era necessario l’intervento dell’esercito, che no potevano agire nella provincia o in altre vicine senza il loro permesso e controllo, come si osserva nei paralleli di altre province occidentali. Per di più, dobbiamo ricordare che probabilmente dal II e, con sicurezza, nel periodo severiano, una norma imperiale vietava ai governatori di dedicare nessun edificio pubblico a nome suo.

Nelle regioni meno romanizzate i governatori diressero le principali opere di costruzione delle infrastrutture, come ponti, vie e acquedotti, costruiti con personale tecnico militare. Anche se solo conserviamo l’impronta epigrafica di Caio Calpetano Rantio Quirinale Valerio Festo nel ponte di *Aquae Flaviae* e nei miliari della *uia Noua Bracara-Asturica* (79-81 d.C.), il suo esempio è paradigmatico dell’attività dei governatori nel Nordovest, che si può paragonare a quella di Gneo Giulio Agricola in *Britannia*: Dal tempo di Augusto i governatori della *Transduriana* e della *Hispania Citerior* contribuirono a consolidare i nuovi centri regionali (le sedi conventuali),

esortando alle élites indigeni ad asentarsi in essi –per esempio il *princeps Coporum* di un epigrafe di *Lucus Augusti*. Vivendo in queste città, gli aristocratici locali potevano avere un contatto diretto periodico con il massimo rappresentante del potere imperiale e, così, presto cominciarono ad adottare un *modus vivendi* alla romana, cercando di avvicinarsi alle pratiche e simboli sociali che differenziavano all'élite romana al fine di rafforzare la sua propria preminenza sociale. Come Agricola, Lucio Sestio Quirinale, Paulo Fabio Massimo o Caio Calpetano –in due momento decisivi nell'evoluzione civica del Nordovest: i due primi nel periodo posteriore alla riorganizzazione dopo la conquista; il terzo nel momento seguente alla estensione dello *ius Latii* a tutta Hispania– aiutarono all'integrazione delle élites locali tanto con lo esempio del loro comportamento sociale quanto con il loro sostegno allo sviluppo urbano delle sedi conventuali.

I governatori di *Hispania*, come abbiamo visto, ebbero anche un intervento decisivo nell'ordinamento territoriale delle sue province –sia attraverso le sue sentenze giudiziarie, sia sorvegliando lo stabilimento di cippi di delimitazione confinaria– e nel registro della popolazione locale nel *census*. Ebbero, quindi, nuovamente una grande responsabilità in un sistema ordinato di gestioni delle risorse provinciali in due ambiti che influivano decisamente sulla vita delle comunità locali: le risorse della terra – soprattutto agricole– e le risorse umane. Nelle comunità agricole il censo significò un mutamento paulatino nei riferimenti collettivi dei suoi abitanti.

Il censimento condizionava anche il sistema tributario provinciale e, quindi, si può dire che anche se la fiscalità fu una competenza dei procuratori nelle province imperiali (e, più tardi, anche nelle proconsolari), i governatori della *Hispania Citerior* e la Lusitania ebbero un ruolo in essa. Anche se nelle colonie e i *municipia* i censimenti venivano adoperati per i suoi magistrati, i governatori sorvegliavano queste operazioni e si impegnavano specialmente in garantire che le curie fossero integrate dei “migliori” cittadini.

Finalmente, abbiamo visto che l'introduzione dell'economia monetaria nel Nordovest fu favorita dalla coniazione della c.d. moneta della *caetra* a *Lucus Augusti* al fine di pagare alle truppe che fecero le Guerre Astur-Cantabre. Come Publio Carisio a *Augusta Emerita*, molto probabilmente altro governatore controllò queste coniazioni. Noi abbiamo proposto l'ipotesi che le *caetra lucenses* fossero coniate per ordine del

primo governatore dell'efimera provincia Transduriana, Lucio Sestio Quirinale, in base alla cronologia e alla sua missione: è il momento in cui gli asturi furono definitivamente sconfitti e la pace permise la costituzione di questa provincia, della quale si occupò Quirinale. D'altra parte, è possibile anche che fino a quando perdurarono le coniazioni monetali proprie in alcune città di Hispania, i governatori controllassero certi tipi monetali che rappresentavano agli imperatori.

In terzo luogo, i governatori delle province di *Hispania* contribuirono allo sviluppo di una società provinciale attraverso del suo intervento nella diffusione del culto imperiale e di tutti gli altri atti di dimostrazione di fedeltà all'imperatore –*ius iuranda*, *uota pro salute principis*, omaggi pubblici, ecc.– che da Augusto in poi rafforzarono i vincoli delle comunità della periferia con il centro dell'impero. Tutto ciò dotò agli abitanti di tutte le province, indipendentemente del suo status giuridico, di principî identitari condivisi, facendoli partecipi dell'ideologia imperiale. Questo processo fu paulatino: quello che all'inizio cominciò come una forma di consolidamento dell'autorità imperiale e del regime del Principato nelle province aiutò, pian piano, a coesionare l'imperio attorno alla sua figura. Tutti i regimi di carattere personalistico subiscono un attimo critico alla morte del suo fondatore. Nel caso del Principato romano, quel momento ebbe luogo nel 14 d.C. e lo stesso Tiberio ammise nel Senato – in una dichiarazione più onesta di quello che Tacito suggerisce– che si sentiva in difficoltà per occupare il vuoto lasciato da Augusto²¹⁴³. Sorpassata questa difficile sfida –e, soprattutto, dal momento in cui ottenne il trono il primo senatore alieno alla dinastia Giulio-Claudia, Galba– la figura dell'imperatore diventò impersonale e questo dotò di più solidità all'impero. Questo si personificava nella sua testa e quanto più forte fu il potere imperiale e più fece sentire la sua cura sulle province, più solida fu l'adesione dei suoi abitanti verso l'impero. Si poteva mettere in dubbio al titolare del Principato, ma non al regime stesso.

Il culto imperiale offrì una strada alle ambizioni politiche delle élites provinciali grazie alla istituzione del flaminato e al fatto che i partecipanti nelle sessioni del *concilium prouinciae* godevano di un accesso privilegiato ai governatori provinciali e alla stessa Roma. Gli interlocutori dei governatori nelle province furono gli aristocratici locali –in rappresentanza delle sue comunità o nella sua propria– e questo fatto fece

²¹⁴³ Tac. *Ann.* I, 11, 1.

diventare ai senatori inviati a governare le province di *Hispania* intermediari ufficiali fondamentali fra le comunità locali ed il centro dell'impero ed anche gli concesse un importante ruolo nel gioco político della sua provincia, particolarmente come attori della promozione sociale dei più potenti dei suoi aristocratici. Come disse Syme, una delle ragioni della lunga durata dell'impero fu che le ambizioni delle élites delle sue furono soddisfatte, offrendogli canali per accedere alla cittadinanza completa ed anche alle più alte cariche del governo dell'impero, compreso lo stesso trono imperiale dal II secolo in avanti²¹⁴⁴. Cioè, i benefici dell'impero arrivarono anche alle élites della sua periferia, che furono sempre più influenti nel suo centro. In questa ricerca di una promozione sociale e política, le élites provinciali videro nei governatori la migliore occasione di accedere ai circoli di potere di Roma.

Le attività dei governatori e il loro rapporto costante con le élites locali offrivano numerose occasioni di stabilire vincoli di patronato-clientela fra di loro. La mancanza di testimonianze epigrafiche del patronato personale del governatore con ispani non ci deve ingannare. Lasciando da parte il caso che sempre regge i ritrovamenti epigrafici, dobbiamo considerare che non tutti i patroni erano onorati pubblicamente per i suoi clienti né gli aristocratici ricordavano la sua condizioni di clienti di altri potenti, diversamente dei liberti. Tuttavia, le numerose iscrizioni che ricordano il patronato dei governatori sulle comunità di *Hispania* –quasi tutte colonie e *municipia*– non mostrano soltanto che i governatori le concessero qualche tipo di protezione o beneficio; del fatto che la nomina come patrono dipendeva dei decurioni possiamo anche dedurre che questo patronato su comunità nasconde stretti vincoli con alcuni membri della sua aristocrazia che si beneficiarono anche del patronato dei governatori nei suoi affari privati. Le fonti letterarie contengono, come abbiamo visto, testimonianze degli importanti benefici che potevano concedere i governatori provinciali –soprattutto se comandavano legioni– ai provinciali che volevano fare carriera nell'amministrazione.

In tutte queste competenze ufficiali e attività sociali quotidiane non si osserva nessuna differenza nei compiti e *modus operandi* dei *legati Augusti pro praetore* inviati in *Hispania Citerior* e la Lusitania e i proconsoli della Betica, eccetto nel potere militare che avevano quelli della *Citerior* grazie alle sue legioni. Questo li fece diventare i veri custodi della difesa della penisola contro le minacce esterne ed interne e anche i

²¹⁴⁴ Syme, *Colonial Élités...* cit.

fornitori di personale militare tecnico per gli *officia* dei loro colleghi delle altre province e per la costruzione delle infrastrutture pubbliche in *Hispania*.

La rete di *conuentus iuridici* estesa a tutta la penisola per Augusto fu decisiva e permise ai governatori eseguire la loro missione, avvicinandoli alla popolazione locale, in particolare alle sue élites. Anche se il sistema privilegiava alle città che erano sedi dei *conuentus*, le testimonianze epigrafiche che riguardano, per esempio, l'attività giurisdizionale dei governatori trovate in altre comunità –per esempio, *Sabora*, *Cisimbrium* u *Obulcula*, nella Betica; *Emporiae* nella Citerior; Guardão nella Lusitania, ecc.– mostrano la efficacia del sistema per attendere le richieste di altre, principalmente le comunità di statuto privilegiato. L'epigrafia mostra anche la centralità che ebbero nell'attività dei governatori delle province di *Hispania Citerior* e Lusitania le loro capitali: a *Tarraco* e a *Augusta Emerita* è dove si trovano più omaggi ai governatori. Le sedi di *conuentus iuridici* della *Hispania Citerior* sono le uniche che hanno conservato tracce epigrafiche della presenza dei suoi governatori. Nella Lusitania, solo *Emerita*; dopo questa, è noto il passo dei governatori per il porto di *Olisipo*, municipio in cui non abbiamo notizie che si fecessero *conuentus iuridici* ma che occupava un luogo strategico nell'itinerario del governatore per la provincia. La sua presenza, invece, ha lasciato testimonianze in luoghi rurali minori. Nella Betica, soltanto abbiamo una testimonianza epigrafica di uno dei suoi proconsoli a *Corduba*: l'epigrafe greco in forma métrica di un ara votiva dedicata a Artemide dedicato da un Ἀρριανὸς ἀνθύπατος che è stato identificato come lo scrittore del tempo di Adriano Flavio Arriano²¹⁴⁵. Nessuna sede di *conuentus* della Betica conserva epigrafi sui suoi governatori. Ma non c'è dubbio del funzionamento del sistema conventuale in questa provincia: l'importante numero di epigrafi che raccolgono sentenze giudiziarie dei suoi proconsoli in altre città mostra la sua larga attività giurisdizionale e, quello che è più importante, l'accesso che avevano a loro i provinciali nelle sedi di *conuentus iuridici*. L'informazione epigrafica deve essere relativizzata sempre.

Del resto, le uniche differenze fra i due tipi di governatori di rango senatoriale sono formali: i proconsoli avevano *imperium* e *auspicia* proprii e i legati imperiali li ricevevano per delega del *princeps*; i primi avevano sei littori; i secondi, cinque; e, finalmente, il fatto che i proconsoli avevano l'*imperium* e la loro *iurisdictio* volontaria

²¹⁴⁵ SEG 26, 1976-77, 1215. Vid. Anexo I (procónsules Bética) y Anexo II: n° 51.

dal momento che partivano di Roma, mentre che i *legati Augusti pro praetore* soltanto dentro la loro provincia.

Bisogna aggiungere che dal tempo di Augusto e Tiberio i proconsoli della Betica assunsero la loro subordinazione al *princeps* senza offrire nessun motivo di preoccupazione ad egli ed aiutarono al consolidamento del suo potere. Queste circostanze furono favorite indubbiamente per il rango pretorio e la condizioni di *noui homines* dei senatori che governarono la Betica. Invece, i *legati Augusti pro praetore* della *Hispania Citerior* erano consulari ed uomini con importanti collegamenti familiari e politici, come rivela il ruolo protagonista che ebbero nelle guerre civili di questo periodo. Il comando di legioni e lo *status* personale dentro al *ordo senatorius* ebbero più importanza nella politica dell'imperio del possesso di *imperium* e *auspicia* indipendenti.

Finalmente, è il momento di farsi una ultima domanda: Che ci dice tutto questo sulla natura dell'Impero Romano sotto il Principato? Abbiamo già detto al inizio dell'Introduzione, seguendo le utili categorie di Doyle, che era un "impero formale", ma che significa questo nel suo insediamento quotidiano sul terreno che rivelano le evidenze che abbiamo usato?

Secondo noi, il grado d'influenza dei governatori delle province di *Hispania* sui diversi ambiti in cui si sostentava il sistema municipale e sull'articolazione di canali di comunicazione bidirezionali fra il potere centrale e le élites delle comunità locali rivela una politica imperiale "intervenzionista" e tutelare che ottimizzò le sue risorse umane e giuridico-politiche che aveva per garantire la stabilità dentro le sue province. La relativamente piccola burocratizzazione dell'imperio fu sostituita in *Hispania* non solo con un solido sistema municipale che permetteva alle comunità promosse l'auto-gestione e risolvere l'amministrazione del territorio ad un livello minimo, ma anche con una figura fondamentale inviata dal centro dell'imperio, il governatore, investito di poteri che lo dotavano di una grande capacità d'intervento nelle comunità della sua provincia. Augusto capì che aveva bisogno della collaborazione dei senatori nell'amministrazione del vasto impero e seppe esprimere le possibilità dell'ordinamento proveniente della Repubblica, e introdusse le modifiche che fecero possibile tanto il sostenimento della sua supremazia politica quanto raggiungere una maggiore efficacia del ruolo della aristocrazia senatoriale nel governo dell'imperio. Come nell'esercito, nel

suo sistema amministrativo provinciale l'impero scelse la qualità e la selezione alla quantità.

Nel Principato, il potere imperiale non cercò semplicemente di sfruttare le risorse materiali e umane delle province. La crisi della Repubblica offriva una chiara lezione sulle gravi conseguenze che poteva portare un dominio che solo beneficasse a una piccola oligarchia ed ignorasse le ambizioni delle aristocrazie dei popoli sottomessi. La porta verso l'integrazione del vinto che si aprì definitivamente dopo il *Bellum Sociale* fu uno strumento di governo solo sfruttato nel Principato, ed in Occidente ebbe conseguenze molto più importanti che il semplice ordine interno: la formazione di una società provinciale pienamente integrata nel marco civile e giuridico di convivenza romano e l'apparizione di una élite senatoriale ed equestre diversificata. Come abbiamo visto negli esempi iberici, in ambedue i processi l'attività dei governatori ebbe una ripercussione decisiva.

La perdita del protagonismo politico da parte dei senatori ed il suo allontanamento quasi generale dei governi provinciali dalla metà del III secolo in poi non deve condizionare la nostra visione del loro ruolo nel Principato né farci cadere nella teleologia di interpretare questo periodo secondo gli avvenimenti posteriori. Le testimonianze dei governatori di *Hispania* mostrano la grande capacità d'azione e d'intervento che ebbero nelle loro province e la loro influenza sociale a Roma durante il Principato. Le limitazioni che il potere imperiale gli impose pian piano per evitare la crescita del loro potere –come le questioni che dovevano rimandare o consultare al princeps o le restrizioni attorno la dedica di edifici o sul patronato– rivelano appunto che questo potere fu grande; non per caso vari imperatori arrivarono al trono imperiale grazie al suo governo provinciale.

Durante tutto il periodo del Principato i governatori romani di *Hispania Citerior*, Lusitania e Betica furono elementi fondamentali della macchina amministrativa provinciale e si rivelarono attori decisivi nell'interazione del potere imperiale con le comunità locali. Attraverso i governatori il potere romano si fece presente per le comunità locali e con la loro tutela il processo di municipalizzazione avanzò e si consolidò. Nessuna questione importante fuggiva alla loro conoscenza e furono sempre i più alti rappresentanti dell'impero che gli abitanti di una provincia –e, in particolare, le élites– potevano conoscere e anche trattare di persona quotidianamente. Lasciando da

parte le immagini del *princeps* diffuse per tutte le città e le sue occasionali visite, chi personificava con i suoi atti e presenza in tutta la sua maestà al impero di Roma nelle province furono i governatori. Si può dire, quindi, che loro erano il centro nella periferia.

BIBLIOGRAFÍA

[Nota: No se mencionan las obras ya citadas al inicio de este estudio bajo el epígrafe “Abreviaciones”. Tampoco las ediciones críticas de las fuentes literarias antiguas utilizadas (véase Introducción). En los pocos casos en que se utiliza una traducción de un texto la edición se cita en nota a pie de página]

Abad, L. “La epigrafía de Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) y un nuevo municipio romano del conventus Carthaginiensis”, *AEspA* 69, 1996, pp. 77-108.

Abascal, J. M. “Los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con la promoción jurídica de ciudades”, *Iberia* 9, 2006, pp. 63-78.

- “La epigrafía de los límites e las ciudades romanas de Hispania. Una revisión”, en Iglesias Gil, J. M. (ed.), *Actas de los XVIII cursos monográficos sobre el Patrimonio Histórico (Reinosa, julio 2007)*, Santander, 2008, pp. 77-94
- “La administración itinerante en la Hispania citerior. El funcionamiento y su familia”, en Iglesias, J. M. – Ruiz, A. (eds.), *Viajes y cambios de residencia en el mundo romano*, Santander, 2011, pp. 289-317.

Abbott, F. F. – Johnson, A. C. *Municipal Administration in the Roman Empire*, New York, 1968 (1ª 1926).

Aichinger, A. “Zwei Arten des Provinzialcensus? Überlegungen zu publizierten israelischen Papyrusfunde”, *Chiron* 22, 1992, pp. 35-45.

Aja Sánchez, J. R. – Cisneros Cunchillos, M. – Ramírez Sádaba, J. L. (coords.) *Los cántabros en la Antigüedad: La Historia frente al mito*, Santander, 2008.

Albanese, B. “Riflessioni sul *ius honorarium*”, en *Estudios Hernández-Tejero II*, Madrid, 1992, pp. 1-18.

Albertini, E. *Les divisions administratives de l’Espagne romaine*, París, 1923.

Alföldy, G. *Flamines provinciae Hispaniae citerioris*, Madrid, 1973.

- *Konsulat und Senatorenstand unter der Antoninen*, Bonn, 1977.
- *Los Baebii de Saguntum*, Valencia, 1977.
- “*Bellum Mauricum*”, *Chiron* 15, 1985, pp. 91-109.
- “Hispanien und das römische Herr. Bemerkungen zu Patrick Le Roux: *L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion de 409*”, *Gerión* 3, 1985, pp. 379-410.
- “Epigraphica Hispanica XIII. Eine Inschrift aus Emerita Augusta: Rätsel oder Steinmetzirrtum?” *ZPE* 87, 1991, pp. 168–172.
- “Le iscrizioni del senatore L. Aelius Lamia nell’area sacra di Largo Argentina”, en *Studi sull’epigrafia augustea e tiberiana di Roma*, Roma, 1992, pp. 113-123.
- “Spain”, en *CAH²* X, pp. 449-463.
- “Subject and Ruler, Subjects and Methods: an Attempt at a Conclusion”, en Small, A. (ed.), *Subject and Ruler: The Cult of the Ruling Power in Classical Antiquity*, Ann Arbor, 1996, pp. 254-261.
- “Trajano padre y la inscripción del ninfeo de Mileto” en González, J. (ed.) *Trajano, emperador de Roma*, Roma, 2000, pp. 7-24.
- “Das neue Edikt des Augustus aus El Bierzo in Hispanien”, *ZPE* 131, 2000, pp. 177-205 (= “Il nuovo editto di Augusto da El Bierzo in Spagna”, *Minima Epigraphica et Papyrologica* 6, 2001, pp. 365-418).
- *Provincia Hispania Superior*, A Coruña, 2002 (Heidelberg, 2000).
- “Introducción histórica”, en Dupré, X. (dir.) *Las capitales provinciales de Hispania 3: Tarragona*. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Roma, 2004, pp. 7-14.
- “El ejército romano en Tarraco”, en Morillo, A. (ed.), *El ejército romano en Hispania. Guía arqueológica*, León, 2007, pp. 503-521.

- “Fasti und Verwaltung der hispanischen Provinzen”, en Haensch, R. – Heinrichs, J. (Hg.), *Herrschen und Verwalten: der Alltag des römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, Colonia-Weimar-Viena-Böhlau, 2007, pp. 325-356.
- *Nueva historia social de Roma*, Sevilla, 2012 (Stuttgart, 2011).

Alföldy, G. – Abascal, J. M. – Cebrián, R. “Nuevos monumentos epigráficos del foro de Segóbriga. Parte primera: inscripciones votivas, imperiales y de empleados del Estado romano”, *ZPE* 143, 2003, pp. 255-274.

Alvar, J. “Discusión sobre las instituciones ibéricas”, en Garrido-Hory, M. – Gonzales, A. (eds.), *Histoire, espaces et marges de l’Antiquité. Hommages a M. Clavel-Lévêque*, vol 3, Besançon, 2004, pp. 11-31.

Amarelli, F. “Il *conuentus* come forma di partecipazione alle attività giudiziare nelle città del mondo provinciale romano”, en *Idem* (ed.) *Politica e partecipazione nelle città dell’Impero Romano*, Roma, 2005, pp. 1-12.

Ando, C. *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley-Los Angeles-Londres, 2000.

- *L’Empire et le droit: Invention juridique et réalités historiques à Rome*, París, 2013.
- “Petition and Response, Order and Obey: Contemporary Models of Roman Government”, en Baker, H. D. – Jursa, M. – Palme, B. – Procházka, S. – Tost, S. (eds.), *Governing Ancient Empires*, Viena, 2015, e.p.

Andrés Santos, F. J. “Poderes jurisdiccionales del Gobernador Provincial en la Hispania de los Antoninos”, en Hernández Guerra, L. (ed.), *Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua: La Hispania de los Antoninos*, Valladolid, 2004, pp. 11-20.

Andreu Pintado, J. “Munificencia y munificentes. Riqueza y manifestaciones de riqueza de las élites en la provincia *Lusitania*” en Gorges, J.-G. –Rodríguez-Martín, F. G. (ed.) *Économie et territoire en Luistanie romaine*, Madrid, 1999, pp. 453-471.

- *Edictum, Municipium y Lex: Hispania en época Flavia (69-96 d.C.)*, Oxford, 2004.
- “Construcción pública y municipalización en la Provincia Hispana Citerior: la época Flavia”, *Iberia* 7, 2004, pp. 39-75
- “Un capítulo de los gastos en construcción pública en época de Domiciano en las *prouvinciae*. La iniciativa imperial”, *DHA* 34/2, 2008, pp. 115-143.
- “*Imperium* del magistrado provincial: límites administrativos, réditos políticos, conquistas territoriales. El caso hispano”, en Santos Yanguas, J. – Cruz Andreotti, G. (eds.) *Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: El caso hispano*, Vitoria, 2012, pp. 32-54.

Andreu Pintado, J. – Cabrero Piquero, J. – Rodá de Llanza, I. (eds.), *Hispaniae: Las provincias hispanas en el mundo romano*, Tarragona, 2009.

Aquilué, X. “Arquitectura oficial” en Dupré, X. (ed.) *Las capitales provinciales de Hispania 3: Tarragona*. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Roma, 2004, pp. 41-53.

- (ed.), *Ciudades romanas de Hispania 6: Empúries, Municipium Emporiae*, Roma, 2012.

Arangio-Ruiz, V. “Due nuove tavolette di Ercolano relative alla nomina di tutori muliebri”, en *Studi De Francisci* 2, Milán, 1956, pp. 3 ss.

- *Storia del diritto romano*, Nápoles, 1977.
- “Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell’Impero Romano”, en *Scritti di diritto romano* IV, Camerino, 1977, pp. 165-181.

Arce, J. “Inestabilidad política en Hispania durante el siglo II d.C.” *AEspA* 54, 1981, pp. 101-115.

- “Introducción histórica”, en *Mérida. Colonia Augusta Emerita. Las capitales provinciales de Hispania 2*, Roma, 2004, pp. 7-13.

Arias Vilas, F. *A romanización de Galicia*, Vigo, 1992.

- “Lucus Augusti e o río Miño: as termas e o seu contorno” en Rodríguez Colmenero, A. (ed.), *Actas Congreso ‘Los orígenes de la ciudad en el Noroeste hispánico’ (Lugo, 1997)*, Lugo, 1999, pp. 1209-1223.
- “*Lucus Augusti* e o seu contorno. Das orixes á implantación do reino suevo”, en Arias Vilas, F. – Novo Cazón, X. L. – Burgo López, C. – Souto Blanco, M^a. J. *Historia de Lugo*, A Coruña, 2001, pp. 11-70.

Ariño Gil, E. “La Hispania Citerior occidental y la Lusitania septentrional entre Augusto y los Flavios: el *ager per extremitatem mensura comprehensus*”, en *L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux*, Burdeos, 2005, pp. 95-112.

Arnaud, P. “Les *mensores* des légions: *mensores agrarii* ou *mensores frumentarii*?”, en Le Bohec, Y. (ed.) *La hiérarchie (Rangordnung) de l’armée romaine sous le Haut-Empire. Actes Con. Lyon (15-18 sept. 1994)*, París, 1995, pp. 251-256.

Arnold, W. T. *The Roman System of Provincial Administration till the Accession of Constantine the Great*, Chicago, 1979 (Londres, 1879).

Ash, R. (ed.) *Tacitus. Oxford Readings in Classical Studies*, Oxford-Nueva York, 2012.

Assenmaker, P. *De la victoire au pouvoir: Développement et manifestations de l’idéologie impériatoriale à l’époque de Marius et Sylla*, Bruselas, 2014.

Auliard, C. – Bodiou, L. (eds.), *Au jardin des Hespérides: Histoire, société et épigraphie des mondes anciens. Mélanges A. Tranoy*, Rennes, 2004.

Austin, N. J. – Rankov, B. *Exploratio. Military and Political Intelligence in the Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianople*, Londres, 1995.

Badel, C. “La spécialisation régionale des gouverneurs romains: le cas de l’Orient au Haut-Empire (27 av. J.-C.-235 ap. J.-C.)”, *DHA* 30/2, 2004, pp. 57-99.

Badian, E. *Foreign Clientelae, 264-70 BC*, Oxford, 1958.

Balbín Chamorro, P. *Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante Antigüedad*, Salamanca, 2006.

Balil, A. “Los procónsules de la Bética”, *Zephyrus* 13, 1962, pp. 75-89.

- “Los legados de la Lusitania”, *Conimbriga* 5, 1965, pp. 13-57.
- “Los gobernadores de la Hispania Tarraconense durante el Imperio Romano”, *Emerita* 32, 1964, pp. 19-34.
- “*Centuriatio*: Observaciones sobre la parcelación y la agrimensura romanas y su reconocimiento”, *Estudios clásicos*, t. 5, nº 30, 1969, pp. 346-359.

Bang, P. F. “Antiquity between ‘primitivism’ and ‘modernism’”, <http://www.hum.au.dk/ckultur/f/pages/publications/pfb/antiquity.htm> (última consulta: 07/04/2015).

Barnes, T. D. “The Victories of Augustus”, *JRS* 64, 1974, pp. 21-26.

Barrandon, N. “Les modalités des échanges épistolaires entre les gouverneurs et le Sénat de la deuxième guerre punique à 43 av. J.-C.”, en Barrandon, N. – Kirbihler, F. (dir.) *Administrer les provinces de la République romaine*, Rennes, 2010, pp. 77-98.

Barrandon, N. – Kirbihler, F. (dir.) *Administrer les provinces de la République romaine*, Rennes, 2010

- (dir.) *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, Rennes, 2011.

Barrett, A. A. *Caligula. The Corruption of Power*, Londres, 1989.

Bartsch, S. “Praise and Doublespeak: Tacitus’ *Dialogus*”, en Ash, R. (ed.) *Tacitus. Oxford Readings in Classical Studies*, Oxford-Nueva York, 2012, pp. 119-154.

Bayet, J. *La religion romaine: Histoire politique et psychologique*, París, 1976.

Beard, M. – North, J. – Price, S., *Religions of Rome*, vol. 1, Cambridge, 1998.

Beaujeu, J. “Les apologistes et le culte du souverain”, en Den Boer, W. (ed.) *Le culte des souverains dans l’Empire Romain*, Ginebra, 1973, pp. 103-136.

Behr, C. A. *Aelius Aristides and the Sacred Tales*, Amsterdam, 1968.

Beltrán Fortes, J. “Sobre la cronología del ara cordobesa del procónsul Arriano”, *Mainake* 19, 1988, pp. 91-100.

- “Arriano de Nicomedia y la Bética, de nuevo”, *Habis* 23, 1992, pp. 171-196.

Beltrán Fortes, J. – Rodríguez Gutiérrez, O. (eds.) *Hispaniae urbes: Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas*, Sevilla, 2012.

Beltrán Lloris, F. “An Irrigation Decree from Roman Spain: the *Lex riui Hiberiensis*”, *JRS* 96, 2006, pp. 147-197.

- “Rural Communities and Civic Participation in Hispania during the Principate”, en Marco, F. – Pina, F. – Remesal, J. (eds.), *Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo*, Barcelona, 2006, pp. 257-272.
- (ed.), *Ciudades romanas de Hispania 4: Zaragoza, Colonia Caesar Augusta*, Roma, 2007.
- “*Vltra eos palos*. Una nueva lectura de la línea 7 de la *tabula Contrebiensis*”, en *Espacios, usos y formas de la epigrafía hispana en épocas antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr. A. Stylow, (=Anejos de AEspA XLVIII)*, Madrid, 2009, pp. 33-42.
- “(C.) Mi[nicio Fund]ano y [¿C. Minicio?] Fundano Augustano Alpino, gobernador y legado jurídico de la Hispania Tarraconense en época de Adriano”, en Caldelli, M. L. – Gregori, G. L. (cura) *Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo*, Roma, 2014, pp. 727-734.
- “The ‘Epigraphic Habit’ in the Roman World”, en Bruun, C. – Edmonson, J. (ed.) *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Oxford, 2015, pp. 131-148.

Beltrán Lloris, F. – Magallón, M^a. A. “El territorio”, en Beltrán, F. (ed.), *Ciudades romanas de Hispania 4: Zaragoza, Colonia Caesar Augusta*, Roma, 2007, pp. 97-107

Bénabou, M. “Proconsul et légat: le témoignage de Tacite”, *Antiquités Africaines* 6, 1972, pp. 129-136.

- *La résistance africaine à la romanisation*, París, 1976.

Benoist, S. “*Princeps et legati*, de la conception impériale de la délégation de pouvoir: nature, fonction, devenir, d’Auguste au IV^e siècle de notre ère” en Béranger, A. – Lachaud, F. (eds.) *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l’Antiquité et au Moyen Âge*, Metz, 2012, pp. 135-159.

Beramendi, J. *La historia política: Algunos conceptos básicos*, Santiago de Compostela, 1999.

Béranger, A. “Formation et compétences des gouverneurs de provinces dans l’Empire romain”, *DHA* 30/2, 2004, pp. 35-56.

- “Le gouverneur de province, la veuve et l’orphelin”, en Molin, M. (dir.), *Les régulations sociales dans l’Antiquité (Actes du colloque d’Angers, 23-24 mai 2005)*, Rennes, 2006, pp. 239-250.
- “Le cens et les censiteurs en Occident”, en Hurlet, F. (dir.), *Rome et l’Occident (II^e siècle av. J.-C.-II^e siècle apr. J.-C.): Gouverner l’Empire*, Rennes, 2009, pp. 189-205.
- “Gouverneurs de province, bibliothèques et archives”, en Perrin, Y. (ed.), *Neronia VIII: Bibliothèques, livres et culture écrite dans l’empire romain de César à Hadrien*, Bruselas, 2010, pp. 182-191.
- “Les relations du gouverneur avec les notables provinciaux: cérémonial et sociabilité”, en N. Barrandon – F. Kirbihler (dir.) *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, Rennes, 2011, pp. 171-187.
- “Le gouverneur de province et ses légats: délégations de pouvoirs et de compétences sous le Haut-Empire romain”, en Béranger, A. – Lachaud, F. (eds.) *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l’Antiquité et au Moyen Âge*, Metz, 2012, pp. 179-198.
- *Le métier de gouverneur dans l’empire romain. De César à Dioclétien*, Paris, 2014.

Béranger, A. – Lachaud, F. (eds.) *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l’Antiquité et au Moyen Âge*, Metz, 2012.

Birks, P. – Rodger, A. – Richardson, J. S. “Further aspects of the Tabula Contrebiensis”, *JRS* 74, 1984, pp. 45-73.

Birley, A. R. *Septimius Severus. The African Emperor*, Londres, 1971.

- *The Roman Government of Britain*, Oxford, 2005.

Birley, E. “Before Diplomas, and the Claudian Reform”, en Eck, W. – Wolff, H. (ed.) *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Colonia-Viena, 1986, pp. 249-257.

Biundo, R. “Terre di pertinenza di colonie e municipi fuori del loro territorio: gestione e risorse”, *CCG* 14, 2003, pp. 131-142.

Blagg, T. – Millett, M. (ed.) *The Early Roman Empire in the West*, Oxford, 1990.

Blanch Nougés, J. M. *El edicto de los magistrados en el lenguaje de la jurisprudencia romana* (‘pars edicti’ – ‘clausula’ – ‘edictum’), Madrid, 1998.

Blázquez, J. M^a. – Ozcáriz, P. (coord.), *La administración de las provincias en el Imperio Romano*, Madrid, 2013.

Boffo, L. “La libertà delle città greche sotto i romani (in epoca repubblicana)”, *Dike* 6, 2003, pp. 227-249.

Boschung, D. “L’esempio del ritratto imperiale”, en Arce, J. – Ensoli, S. – La Rocca, E. (cura), *Hispania romana. Da terra di conquista a provincia dell’impero*, Roma, 1997, pp. 239-243.

Bost, J.-P. – Martín Bueno, M. – Roddaz, J.-M. “L’Aquitaine et le Nord de l’Hispanie sous les empereurs Julio-Claudiens”, en *L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux*, Burdeos, 2005, pp. 17-50.

Bowman, A. K. – Thomas, J. D. *Vindolanda: The Latin Writing-Tablets*, Londres, 1983.

- *The Vindolanda Writing-Tablets (Tabulae Vindolandenses II)*, Londres, 1994.

- *The Vindolanda Writing-Tablets (Tabulae Vindolandenses III)*, Londres, 2003.

Breeze, D. J. "The Organisation of the Career Structure of the *immunes* and *principales* of the Roman Army", en Breeze, D. J. – B. Dobson, B. *Roman Officers and Frontiers*, Stuttgart, 1993, pp. 11-58 (= *Bonner Jahrbücher* 174, 1974, pp. 245-292).

- "Agricola the Builder" en Breeze, D. J. – B. Dobson, B. *Roman Officers and Frontiers*, Stuttgart, 1993, pp. 271-281 (= *Scottish Archaeological Forum* 12, 1981, pp. 14-24).

Breeze, D. J. – Dobson, B. *Roman Officers and Frontiers*, Stuttgart, 1993.

Brélaz, C. *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIème s. ap. J.-C.). Institutions municipales et institutions impériales dans l'Orient romain*, Basilea, 2005.

Briand-Ponsart, C. "Summa honoraria et ressources des cités d'Afrique", en *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xe rencontré franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome, mai, 1996)*, Roma, 1999, pp. 217-234.

Brunt, P. A. "The 'Fiscus' and its Development", *JRS* 56, 1966, pp. 75-91.

- "The Revenues of Rome", *JRS* 71, 1981, pp. 161-171.
- "The Revolt of Vindex and the Fall of Nero", en *Roman Imperial Themes*, Oxford, 1990, pp. 9-32 (= *Latomus* 18, 1959, pp. 531-559).
- "Tacitus on the Batavian Revolt", en *Roman Imperial Themes*, Oxford, 1990, pp. 33-52 (= *Latomus* 19, 1960, pp. 494-517).
- "Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate", en *Roman Imperial Themes*, Oxford, 1990, pp. 53-95 (= *Historia* 1961, pp. 189-227).
- "The Romanization of the Local Ruling Classes in the Roman Empire", *Roman Imperial Themes*, Oxford, 1990, pp. 267-281 (= *Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien*, Bucarest-Paris, 1976, pp. 161-173).

- “*Laus Imperii*”, *Roman Imperial Themes*, Oxford, 1990, pp. 288-323 (= P. Garnsey – F. Whittaker (eds.). *Imperialism in the Ancient World*, Cambridge, 1978, pp. 159-191).

Brunt, P. A. – Moore, J. M. (ed.) *Res Gestae Divi Augusti. The Achievements of the Divine Augustus*, Oxford, 1967.

Buckland, W. W. “L’Edictum provinciale”, *RHDFE* 1934, pp. 81-96.

Bueno, F. “Las constituciones imperiales de Hispania”, en González, J. (ed.) *Roma y las provincias: Realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid, 1994, pp. 169-188.

Burkhalter, F. “Archives locales et centrales en Egypte romaine”, *Chiron* 20, 1990, pp. 191-216.

Burnett, A. *Coinage in the Roman World*, Londres, 1987.

Burton, G. P. *The Powers and Functions of Proconsuls in the Roman Empire 70-260 AD*, PhD thesis inédita, Oxford, 1973.

- “Proconsuls, Assizes and the Administration of Justice under the Empire”, *JRS* 65, 1975, pp. 92-106.
- “The Issuing of *mandata* to Proconsuls and a New Inscription from Cos”, *ZPE* 21, 1976, pp. 63-68.
- “The Curator Rei Publicae: Towards a Reappraisal”, *Chiron* 9, 1979, pp. 465-487
- “The *lex Irnitana*, ch. 84, the Promise of *Vadimonium* and the Jurisdiction of Proconsuls”, *Classical Quarterly* 46/1, 1996, pp. 217-221.
- “The Resolution of Territorial Disputes in the Provinces of the Roman Empire”, *Chiron* 30, 2000, pp. 197-215.
- “The Roman Imperial State (A.D. 14-235): Evidence and Reality”, *Chiron* 32, 2002, pp. 249-280.

Buti, I. *Il 'praetor' e le formalità introduttive del processo formulare*, Nápoles, 1984.

Caballos Rufino, A. “Los recursos económicos de los notables de la Bética”, en Navarro Caballero, M. – Demougin, S. (eds.) *Élites hispaniques*, París, 2001, pp. 69-87.

- *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla, 2006.
- (ed.) *Ciudades romanas de Hispania 7: Itálica-Santiponce, Municipium y Colonia Aelia Augusta Italicensium*, Roma, 2010.

Caballos Rufino, A. – Eck, W. – Fernández, F., *El Senadoconsulto de Gneo Pisón padre*, Sevilla, 1996.

Caballos Rufino, A. – Lefebvre, S. *Roma generadora de identidades. La experiencia hispana*, Madrid-Sevilla, 2011

Cabouret, B. – Gros Lambert, A. – Wolff, C. (eds.) *Visions de l'Occident romain. Hommages à Y. Le Bohec 1*, París, 2012.

Cagnat, R. *Cours d'épigraphie latine*, París, 1914.

Camacho-Evangelista, F. “La epistula de Claudio Quartino y el proceso de contumacia en las provincias (provincia Tarraconense)”, *RIDA* 11, 1964, pp. 299-319.

Camodeca, G. “Problemi di storia sociale in Alife romana. Le gentes senatorie degli Aedii e dei Granii e i ceti dirigenti del primo principato”, en Di Cosmo, L. – Villucci, A. M. (cura), *Il territorio alifano: archeologia, arte, storia (Convegno 26 aprile 1987)*, Sant'Angelo di Alife, 1990, pp. 123-143.

Campbell, J. B. *The Emperor and the Roman Army, 31 BC-AD 235*, Oxford, 1984.

Cannata, C. A. *Profilo istituzionale del processo privato romano II, Il processo formulare*, Turín, 1982.

Canto, A. “La *Tabula Lougeiorum*. Un documento a debate”, *CuPAUAM* 17, 1990, pp. 267-275.

- “*De situ Siarensium Fortunaliium: Corrección a Plinio N.H. III, 13-14 (Baeturia Celticorum)*”, *CuPAUAM* 20, 1993, pp. 171-183.

- “*Frugifer Augustae Emeritae*. Algunas novedades sobre el epígrafe del procurador imperial Saturninus y el gran mitreo de Mérida”, en García Ruiz, M^a. P. – Alonso del Real Montes, C. – Torres Guerra, J. B. – Sánchez Ostiz, A. (coords.), *Urbs aeterna. Actas y colaboraciones del Coloquio Internacional “Roma entre la Literatura y la Historia”*. Hom. Carmen Castillo, 2003, pp. 303-307.
- “El testamento del cerdito Corocotta”, <http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1149> publicado febrero 2005 (última visita 14/04/2015).

Capdetrey, L. – Nelis-Clément, J. (dir.), *La circulation de l’information dans les états antiques*, Burdeos, 2006.

Capogrossi-Colognesi, L. – Tassi Scandone, T. (cura), *La Lex de Imperio Vepasiani e la Roma dei Flavii (Atti Conv. 20-22 nov. 2008)*, Roma, 2009.

Carcopino, J. *La loi de Hiéron et les romains*, París, 1914.

Cardoni, E. “La *Tabula* bronzea di Esterzili (CIL X 7852 = ILS 5947)”, en Mastino, A. (ed.), *La Tavola di Esterzili. Conflitti tra pastori e contadini nella Barbaria sarda: convegno di studi 13 giugno 1992, Esterzili (Italia)*, Sassari, 1993, pp. 77-98.

Carette, E. *Les assemblées provinciales de la Gaule romaine*, París, 1895.

Carreño Gascón, M^a. C. – Rodríguez Colmenero, A. “La trama urbanística de Lucus Augusti: génesis y evolución”, en Beltrán Fortes, J. – Rodríguez Gutiérrez, O. (eds.) *Hispaniae urbes: Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas*, Sevilla, 2012, pp. 295-318.

Carvalho, P. C. “O *forum* dos *Igaeditani* e os primeiros tempos da *Civitas Igaeditanorum* (Idanha-a-Velha, Portugal)”, *AEspA* 82, 2009, pp. 115-131.

Castillo, C. *Prosopographia Baetica*, Pamplona, 1965.

- “El nuevo juramento a Augusto encontrado en la Bética”, en Le Bohec, Y. (ed.) *L’Afrique, la Gaule, la Religion à l’époque romaine. Mélanges M. Le Glay*, Bruselas, 1994, pp. 681-686.

- “La Hispania de Adriano: nuevos datos”, en Navarro, F. J. (ed.) *Pluralidad e integración en el mundo romano*, Pamplona, 2010, pp. 9-14.

- Castillo, C. – Navarro, F. J. – Martínez, R. (eds.) *De Augusto a Trajano. Un siglo en la historia de Hispania*, Pamplona, 2001.

- Castillo, C. – Rodríguez Neila, J. F. – Navarro, F. J. (eds.) *Sociedad y economía en el Occidente romano*, Pamplona, 2003.

- Cébeillac-Gervasoni, M. *Les magistrats des cités italiennes de la Seconde Guerre Punique à Auguste*, Roma, 1996.

- Cepeda, J. J. *La romanización en los valles cantábricos alaveses. El yacimiento arqueológico de Aloria*, Vitoria-Gasteiz, 2001.

- Chalon, G. *L’édit de Tiberius Julius Alexander*, Olten-Lausana, 1964.

- Charbonnel, N. “À propos de l’inscription de Kymé et des pouvoirs d’Auguste dans les provinces au lendemain du règlement de 27 av. n. è.”, *RIDA* 26, 1979, pp. 177-225.

- Chaves Tristán, F. “Las amonedaciones hispanas en la Antigüedad”, en Andreu Pintado, J. – Cabrero Piquero, J. – Rodà de Llanza, I. (eds.) *Hispaniae: Las provincias hispanas en el mundo romano*, Tarragona, 2009, pp. 47-97.

- Chevreau, E. “*Liberum corpus nullam recipit aestimationem*: une insuffisance de la procédure civile romaine?”, en Hoareau-Dodinau, J. – Métairie, G. – Texier, P. (ed.) *Procéder. Pas d’action, pas de droit ou pas de droit, pas d’action?*, Limoges, 2006, pp. 23-34.

- Christol, M. “La carrière de Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus”, *REA* 33, 1981, pp. 75-84.

- *Essai sur l’évolution des carrières sénatoriales dans la seconde moitié du IIIe siècle ap. J.-C.*, París, 1986.

- “Ressources des colonies, ressources de l’état” en Demougin, S. – Scheid, J. (eds.), *Colons et colonies dans le monde romain*, Roma, 2008, pp. 65-86.

- “Le census dans les provinces, ses responsables et leurs activités”, en Chausson, F. (dir.), *Occidents romains. Sénateurs, chevaliers, militaires, notables dans les provinces d’Occident (Espagnes, Gaules, Germanies, Bretagne)*, Paris, 2009, pp. 247-275.
- “‘Statum corrigere’ ‘statum ordinare’. Remarques sur l’activité de Pline en Bithynie”, en Lamoine, L. – Berrendonner, C. – Cébeillac-Gervasoni, M. (dir.) *La praxis municipale dans l’Occident romain*, Clermont-Ferrand, 2010, pp. 93-105.

Cisneros Cunchillos, M. – Marco Simón, F. – Pina Polo, F. – Ramírez Sádaba, J. L. “La situación de los pueblos cántabros antes de la conquista romana”, en Aja Sánchez, J. R. – Cisneros Cunchillos, M. – Ramírez Sádaba, J. L. (coords.) *Los cántabros en la Antigüedad: La Historia frente al mito*, Santander, 2008, pp. 49-100.

Clavel-Lévêque, M. (dir.), *Cadastrés et espace rural: Approches et réalités antiques (Table ronde de Besançon, mai 1980)*, Paris, 1983.

Clearly, S. E. “The City as Preferred Written Space: the Case of Aquitania”, en Sears, G. – Keegan, P. – Laurence, R. (eds.), *Written Space in the Latin West, 200 BC to AD 300*, Londres, 2013, pp. 217-230.

Clément, V. “Le territoire du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique à l’époque romaine. Du concept au modèle d’organisation de l’espace”, en Gorges, J.-G. – Rodríguez Martín, F. G. (eds.) *Économie et territoire en Lusitanie romaine*, Madrid, 1999, pp. 109-120.

Coarelli, F. *Roma. Guida Archeologica*, Roma, 2008.

Coma Fort, J. M^a. “Sobre los límites de la potestad jurisdiccional de los magistrados romanos”, *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña* 5, 2001, pp. 269-288.

Corbier, M. “L’eau à Thugga, d’après les inscriptions”, en Khanoussi, M. – Maurin, L. (ed.), *Dougga (Thugga). Études épigraphiques*, Paris, 1997, pp. 47-50.

- *Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome ancienne*, París, 2006.

- Corbier, P. – Griesheimer, M. *L'Afrique romaine, 146 av. J.-C.-439 ap. J.-C.*, París, 2005.

- Cortés Bárcena, C. *Epigrafía en los confines de las ciudades romanas: Los Termini Publici en Hispania, Mauretania y Numidia*, Roma, 2013.

- Cosme, P. *L'armée romaine, VIIIe s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.*, París, 2007.

- Costabile, F. – Licandro, O. *Tessera Paemeiobrigensis: un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana Provincia e l'imperium proconsolare del princeps*, Roma, 2000.

- Costa García, J. M. *Exército e territorio no Noroeste peninsular durante o período imperial romano*, Concello de Valga, 2011.

- *Arqueología de los asentamientos militares romanos en la Hispania altoimperial (27 a.C.-ca. 280 d.C.)*, Santiago de Compostela, 2013 (tesis doctoral inédita).

- Coudry, M. – Kirbihler, F. “La lex Cornelia, une lex provinciae de Sylla pour l'Asie” en Barrandon, N. – Kirbihler, F. (dir.), *Administrer les provinces de la République romaine*, Rennes, 2010, pp. 133-169.

- Crawford, M. “The lex Irnitana: a New Flavian Municipal law”, *JRS* 76, 1986, pp. 239-241.

- (cura), *L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, Como, 1986.

- “The Laws of the Romans: Knowledge and Diffusion”, en González, J. – Arce, J. (eds.) *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid, 1988, pp. 127-140.

- “Origini e sviluppi del sistema provinciale romano”, en *Storia di Roma, vol. 2, L'impero mediterraneo I: La repubblica imperiale*, Torino, 1990, pp. 91-121.

- (dir.) *Roman Statutes I*, Londres, 1996.

Crogiez-Pétrequin, S. – Nelis-Clément, J. “La circulation des hommes et de l’information”, en Hurlet, F. (dir.) *Rome et l’Occident (IIe siècle av. J.-C.-IIe siècle ap. J.-C.): Gouverner l’Empire*, Rennes, 2009, pp. 107-139.

Cuomo, S. “A Roman Engineer’s Tales” *JRS* 101, 2011, pp. 143-165.

Curchin, L. A. *The Local Magistrates of Roman Spain*, Toronto-London, 1990.

- *Roman Spain: Conquest and Assimilation*, Londres-Nueva York, 1991.
- “Juridical Epigraphy and Provincial Administration in Central Spain”, en González, J. (ed.) *Roma y las provincias: Realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid, 1994, pp. 87-102.
- “L’administration romaine dans la vallée du Douro”, en Navarro Caballero, M. – Palao Vicente, J. J. (eds.), *Villes et territoires dans le bassin du Douro à l’époque romaine*, Burdeos-Paris, 2007, pp. 91-96.

Dalla Rosa, A. “Sulle fonti relative a dispute confinarie nelle province romane”, *ZPE* 160, 2007, pp. 235-246.

- “Dominating the Auspices: Augustus, Augury and the Proconsuls”, en Richardson, J. H. – Santangelo, F. (ed.) *Priests and State in the Roman World*, Stuttgart, 2011, pp. 243-269.
- “Praktische Lösungen für praktische Probleme: Die Gruppierung von *conventus* in der Provinz *Asia* und die Bewegungen des Prokonsuls C. Iulius Severus (*procos.* 152/53)”, *ZPE* 183, 2012, pp. 259-276.
- “Non seulement les empires. Un bref regard critique sur les plus récentes études d’histoire comparée de l’Antiquité”, *Anabases* 15, 2012, pp. 101-114.
- *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart, 2014.

Darquenne, E. – Davio, Y. – De Leener, R. – Devigne-Squilbin, R. – Leclercq, R. “Les Gouverneurs de la Lusitanie et leur administration”, *Latomus* 2/4, 1938, pp. 256-278

De Alarcão, J. “*Scallabis e o seu território*”, en *De Scallabis a Santarém*, Lisboa, 2002, pp. 37-46.

- “Notas de arqueologia, epigrafia e toponímia-IV”, *Revista Portuguesa de Arqueologia* vol. 7/2, 2006, pp. 131-147.
- *L’Antiquité romaine au Portugal*, París, 2008 (Warminster, 1988).

De Francisci, P. *Sintesi storica del diritto romano*, Roma, 1965, pp. 304-305.

Deininger, J. *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit*, Munich/Berlín, 1965.

Del Castro-Camero, R. “*Ordo decurionum y legaciones municipales. Estudio palinológico de D. 50, 7 de legationibus*”, en Melchor Gil, E. – Pérez Zurita, A. – Rodríguez Neila, J. F. (eds). *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, Sevilla-Córdoba, 2013, pp. 69-95.

De Martino, F., *La giurisdizione nel diritto romano*, Padua, 1937.

- *Storia della costituzione romana*, Nápoles, 1958-1972.
- “I ‘supplicia’ dell’iscrizione di Pozzuoli”, *Labeo* 21, 1975, pp. 211-214.

Demougin, S. – Scheid, J. (eds.), *Colons et colonies dans le monde romain*, Roma, 2008

Den Boer, W. (ed.) *Le culte des souverains dans l’Empire Romain*, Ginebra, 1973.

De Palol, P. “Una nueva inscripción de Clunia” *AEspA* 42, 1969, pp. 118-123.

De Ste. Croix, G. E. M. “*Suffragium: From Vote to Patronage*”, *British Journal of Sociology* 5, 1954, pp. 33-48.

- “¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos?”, en Finley, M. I. (ed.) *Estudios sobre Historia Antigua*, Madrid, 1981, pp. 233-274. (Londres, 1974).
- “¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos? Una réplica”, en Finley, M. I. (ed.) *Estudios sobre Historia Antigua*, Madrid, 1981, pp. 281-314 (Londres, 1974).

Díaz Ariño, B. “Epigrafía y gobernadores provinciales en Hispania durante la República romana”, *Chiron* 41, 2011, pp. 149-179.

- “Las tábulas de hospitalidad y patronato del Norte de África”, *MEFRA* 124-1, 2012, pp. 205-229.

Dickie, M. W. “Magic in the Roman Historians”, en Gordon, R. L. – Marco Simón, F. (ed.) *Magical Practice in the Latin West*, Leiden-Boston, 2010, pp. 79-103.

Dise Jr., R. L. “Trajan, the Antonines and the governor’s staff”, *ZPE* 116, 1997, p. 273-283.

- “Variation in roman administration practice: the assignments of *beneficiarii consularis*”, *ZPE* 116, 1997, p. 284-299.

Di Stefano Manzella, I. “Accensi: Profilo di una ricerca in corso. (A propósito dei “poteri colaterali” nella società romana)”, *CCG* 11, 2000, pp. 223-257.

Doenges, N. A. *Pollentia. A Roman Colony on the Island of Mallorca*, Oxford, 2005.’

Dondin-Payre, M. “L’intervention du proconsul d’Afrique dans la vie des cités”, en *L’Afrique dans l’Occident romain (Ier s. av. J.-C.-IVe s. ap. J.-C.). Actes coll. Rome (3-5 décembre 1987)*, Roma, 1990, pp. 333-349.

Dondin-Payre, M. – Raepsaet-Charlier, M.-T. (eds.) *Cités, municipes, colonies: les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut-Empire romain*, París, 2009.

Dopico Caínzos, M^a. D. “Los *conventus iuridici*: Origen, cronología y naturaleza histórica”, *Gerión* 4, 1986, pp. 265- 283.

- *La Tabula Lougeiorum: Estudios sobre la implantación romana en Hispania*, Vitoria, 1988.
- “El *hospitium* celtibérico: un mito que se desvanece”, *Latomus* 48, 1989, pp. 19-35.

D’Ors, A. *Derecho privado romano*, Pamplona, 1968.

- “Las fórmulas procesales del ‘Bronce de Contrebia’”, *Anuario de Historia del Derecho Español* 50, 1980, pp. 1-20.

D’Ors, A. – D’Ors, X. *Lex Irnitana (Texto bilingüe)*, Santiago de Compostela, 1988.

Doyle, M. W. *Empires*, Ithaca-Londres, 1986.

Dubouloz, J. “Autorité romaine, fermiers de l’impôt et contribuables en Sicile dans les années 70 av. J.-C.”, en Dubouloz, J. – Pittia, S. (eds.) *La Sicile de Cicéron. Lectures des Verrines*, 2007, pp. 147-168.

Dubouloz, J. – Pittia, S. (eds.) *La Sicile de Cicéron. Lectures des Verrines*, 2007.

Duncan-Jones, R. “Patronage and Civic Privileges: The Case of Giufi”, *Epigraphische Studien* 9, 1972, pp. 12-16.

- *The Economy of the Roman Empire: Quantitative Studies*, Cambridge, 1974.
- *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge, 1990.

Dupré, X. (ed.), *Las capitales provinciales de Hispania 1: Córdoba*. Colonia Patricia Corduba, Roma, 2004.

- (ed.) *Las capitales provinciales de Hispania 2: Mérida*. Colonia Augusta Emerita, Roma, 2004.
- (ed.) *Las capitales provinciales de Hispania 3: Tarragona*. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Roma, 2004.

Dyson, S. L. “Native Revolt Patterns in the Roman Empire”, *ANRW* II/3, pp. 138-175.

Eck, W. “La decentralizzazione parziale della giurisdizione della città di Roma con gli *iuridici*”, en *L’Italia nell’Impero Romano: Stato e amministrazione in época imperiale*, Bari, 1999, pp. 253-275 (Munich, 1979).

- “Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139”, *Chiron* 12, 1982, pp. 281-362.
- “Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 (2)”, *Chiron* 13, 1983, pp. 147-237.

- “Prokonsul und militärisches Kommando. Folgerungen aus Diplomen für prokonsulare Provinzen”, en Eck, W. – Wolff, H. (ed.) *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Colonia-Viena, 1986, pp. 518-534.
- “Provincial Administration and Finance”, en *CAH²* XI, pp. 266-292.
- (dir.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, Munich, 1999.
- “Emperor and Senatorial Aristocracy in Competition”, en Ewald, B. C. –Noreña C. F. (ed.) *The Emperor and Rome: Space, Representation and Ritual*, Cambridge, 2010, pp. 89-110.

Eck, W. – Caballos Rufino, A. – Fernández, F. *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, Munich, 1996.

Eck, W. – Wolff, H. (ed.) *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Colonia-Viena, 1986.

Edmondson, J. “Romanization and Urban Development in Lusitania”, Blagg, T. – Milet, M. (ed.) *The Early Roman Empire in the West*, Oxford, 1990, pp. 151-178.

- “Two Dedications to Divus Augustus and Diva Augusta from Augusta Emerita and the Early Development of the Imperial Cult in Lusitania re-examined”, *Madri der Mitteilungen* 38, 1997, pp. 89-105.
- “Les fondements économiques de la puissance des élites hispaniques”, en Navarro Caballero, M. – Demougín, S. (eds.) *Élites hispaniques*, París, 2001, pp. 63-67.

Eich, W. *Zur Metamorphose des politischen Systems in der römischen Kaiserzeit. Die Entstehung einer ‘personal Bürokratie’ im langen dritten Jahrhundert*, Berlín, 2005.

Elliott, T. *Epigraphic Evidence for Boundary Disputes in the Roman Empire*, PhD Thesis, Chapel Hill, 2004.

Espinosa, D. *Plinio y los 'oppida de antiguo Lacio': el proceso de difusión del Latium en Hispania Citerior*, Oxford, 2014.

Espinosa, U. “*Iuridici* de la Hispania citerior y *patroni* en Calagurris”, *Gerión* 1, 1984, pp. 305-325.

Étienne, R. *Le culte impérial dans la péninsule Ibérique d'Auguste à Dioclétien*, París, 1958.

- “Du nouveau sur les débuts du culte impérial municipal dans la péninsule Ibérique”, en *Itinera hispanica: Recueil d'articles de Robert Étienne*, Burdeos, 2006, pp. 93-107.

Fabião, C. “El ejército romano en Portugal”, en Morillo, A. (ed.) *El ejército romano en Hispania. Guía arqueológica*, León, 2007, pp. 113-134.

Fanizza, L. *L'amministrazione della giustizia nel Principato. Aspetti, problemi*, Roma, 1999.

Faoro, D. *Praefectus, procurator, praeses: genesi delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero romano*, Florencia, 2011.

Fatás, G. *Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). Vol. 2: Tabula Contrebiensis*, Zaragoza, 1980.

Favory, F. “Propositions pour une modélisation des cadastres ruraux antiques”, en Clavel-Lévêque, M. (dir.), *Cadastres et espace rural: Approches et réalités antiques (Table ronde de Besançon, mai 1980)*, París, 1983, pp. 51-135.

Fernández Barreiro, A. – Paricio, J. *Fundamentos de derecho privado romano*, Madrid, 2011.

Fernández de Buján, A. “El problema de la naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria a la luz de la experiencia histórica”, *Revista General de Derecho Romano* 5, 2005.

Fernández Nieto, F. J. “El trofeo de Augusto en Occidente”, en García Ruiz, M^a. P. – Alonso del Real Montes, C. – Torres Guerra, J. B. – Sánchez Ostiz, A. (coords.), *Vrbs*

aeterna. Actas y colaboraciones del Coloquio Internacional “Roma entre la Literatura y la Historia”. Hom. Carmen Castillo, 2003, pp. 43-63.

Fernández Ochoa, C. – Morillo Cerdán, A. “El Convento Araugustano y las Aras Sestianas: reflexiones sobre la primera organización administrativa del noroeste hispano”, *Latomus* 61/4, 2002, pp. 889-910.

Fernández Palacios, F. “*Carietes y caristios*”, *Veleia* 22, 2005, pp. 165-172.

Fernández Uriel, P. “El Culto Imperial en la ideología neroniana y su reflejo en Lusitania”, en Nogales, T. – González, J. (ed.) *Culto Imperial: política y poder*, Roma, 2007, pp. 597-611.

Ferrary, J.-L. “Le statut des cités libres dans l’Empire romain à la lumière des inscriptions de Claros”, *CRAI* 135/3, 1991, pp. 557-577.

- “*Lex Cornelia de sicariis et veneficiis*”, *Athenaeum* 77, 1991, pp. 417-434.
- “La liberté des cités et ses limites à l’époque républicaine”, *Mediterraneo Antico* 2/1, 1999, pp. 69-84.
- “À propos des pouvoirs d’Auguste”, *CCG* 12, 2001, pp. 101-154.
- “Rome et les monarchies hellénistiques dans l’Orient méditerranéen: le légat et le proconsul”, en Fr. Prost (ed.), *L’Orient méditerranéen de la mort d’Alexandre aux campagnes de Pompée. Cités et royaumes à l’époque hellénistique (Actes du Colloque international de la SOPHAU, Rennes, avril 2003)*, Rennes-Toulouse, 2003, pp. 403-412.
- “La législation comitiale en matière de création, d’assignation et de gouvernement des provinces”, en Barrandon, N. – Kirbihler, F. (dir.). *Administrer les provinces de la République romaine*, Rennes, 2010, pp. 33-44

Ferrer Sierra, S. “El posible origen campamental de Lucus Augusti a la luz de las monedas de la caetra y su problemática”, en *Lucus Augusti I. El amanecer de una ciudad*, A Coruña, 1996, pp. 425-446.

Finer, S. P. *The History of Government from the Earliest Times*, vol. I, Oxford, 1997.

Fink, R. O. – Hooey, A. S. – Snyder, W. S. “The Feriale Duranum”, *Yale Classical Studies* 7, 1940, pp. 1-222.

Fishwick, D. “A Gold Bust of Titus at Emerita” *AJAH* 6/1, 1981, pp. 89-93

- *The Imperial Cult in the Latin West: Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire*, Leiden-Boston-Colonia, 1987-2005.
- “Dated Inscriptions and the Feriale Duranum”, *Syria* 65/3-4, 1988, pp. 349-361.

Flaig, E. *Den Kaiser herausfordern: die Usurpation im Römischen Reich*, Frankfurt am Main, 1992.

- “How Emperor Nero lost Acceptance in Rome”, en Ewald, B. C. – Noreña, C. (eds.), *The Emperor and Rome: Space, Representation and Ritual*, Cambridge, 2010, p. 275-288.
- “A Coerent Model to understand the Roman Principate: ‘Acceptante’ instead of ‘Legitimacy’ and the Problem of Usurpation”, en Ferrary, J.-L. – Scheid, J. (cura) *Il princeps romano, autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavía, 2015, pp. 81-100.

Fontana, J. *La historia de los hombres*, Barcelona, 2001.

Forni, G. *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milán-Roma, 1953.

Fournier, J. *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l’Empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)*, Paris – Atenas, 2010.

- “L’apport de l’oeuvre de Cicéron à la connaissance du système judiciaire provincial au Ier siècle av. J.-C.”, en Barrandon, N. – Kirbihler, F. (dir.), *Administrer les provinces de la République romaine*, Rennes, 2010, pp. 181-194

France, J. “Les revenus douaniers des communautés municipales dans le monde romain”, en *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Atti della Xa conferenza franco-italiana sull’epigrafia del mondo romano (Roma, mai, 1996)*, Roma, 1999, pp. 95-113.

- “Deux questions sur la fiscalité provinciale d’après Cicéron *Ver.* 3.12”, en Dubouloz, J. – Pittia, S. (dir.), *La Sicile de Cicéron. Lectures des Verrines*, Besançon, 2007, pp. 169-184.

Fraschetti, A. (ed.), *La commemorazione di Germanico sulla documentazione epigrafica (Convegno Internazionale, Cassino, 21-24 ottobre 1991)*, Roma, 2000.

Frei-Stolba, R. “Recherches sur les institutions de Nyon, Augst et Avenches”, en Dondin-Payre, M. – Raepsaet-Charlier, M.-T. (eds.) *Cités, municipes, colonies: les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut-Empire romain*, Paris, 2009, pp. 29-95.

Frei-Stolba, R. – Speidel, M. A. (eds.) *Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit*, vol. 2, Basel, 1998.

Fuenteseca, P. “La necesidad de retomar el estudio del edicto pretorio”, en *Investigaciones de derecho procesal romano*, Salamanca, 1969, pp. 67-92

Gabba, E. “Il processo di integrazione dell’Italia nel II secolo”, *Storia di Roma 2: L’impero mediterraneo I. La repubblica imperiale*, Turín, 1990, pp. 267-283.

- “Dallo stato-città allo stato municipale”, en *Storia di Roma 2: L’impero mediterraneo I. La repubblica imperiale*, Turín, 1990, pp. 697-714.

Galinsky, K. *Augustan Culture: An Interpretative Introduction*, Princeton, 1996.

Galsterer, H., “Roman Law in the Provinces: Some Problems of Transmission”, en M. Crawford (cura), *L’impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, Como, 1986, pp. 13-27.

- “The Tabula Siarensis and Augustan Municipalization in Baetica”, en González, J. – Arce, J. (eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid, 1988, pp. 61-74.
- “*Municipium Flavium Irnitum*: A Latin Town in Spain”, *JRS* 78, 1988, pp. 78-90.
- “The Administration of Justice”, *CAH*² X, pp. 397-413.

Galsterer-Kröll, B. “Zu den spanischen Städtelisten des Plinius”, *AEspA* 48, 1975, pp. 120-128.

García-Bellido, M^a. P. “El abastecimiento monetario al ejército durante el período augusteo y tiberiano”, en Morillo, A. (ed), *El ejército romano en Hispania. Guía arqueológica*, León, 2007, pp. 159-189.

García-Dils de la Vega, S. “*Colonia Augusta Firma Astigi*. La estructura urbana de una fundación romana en la Bética”, en González, J. – Saquete Chamizo, J. C. (eds.) *Colonias de César y Augusto en la Andalucía romana*, Roma, 2011, pp. 99-128.

García Fernández, E. “Sobre la función de la ‘*lex municipalis*’”, *Gerión* 13, 1995, pp. 141-153.

- “El desarrollo de la municipalización latina: la Bética y el Noroeste”, en Rebores, S. – López Barja, P. (eds.), *A cidade e o mundo: romanização e cambio social*, Xinzo de Limia, 1996, pp. 147-164.
- “*Immunitas y adtributio*” en Sánchez-Palenci, F. J. – Mangas, J. *El edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, León, 2000, pp. 113-122.
- *El municipio latino: Origen y desarrollo constitucional*, Madrid, 2001.
- “Estrabón (III,2,1) y la fundación de Córdoba. Una nueva propuesta de interpretación”, en Chiabà, M. (cura), *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste, 2014, pp. 173-187
- “Clientela y difusión onomástica en Hispania: algunas observaciones sobre la documentación de Sagunto”, en A. Beltrán – I. Sastre – M. Valdés (dir.), *Los espacios de la esclavitud y la dependencia en la Antigüedad. Homenaje Domingo Plácido. XXXV Coloquio GIREA*, Beçançon, 2015, pp. 589-605.

García Garrido, M. J. *Diccionario de jurisprudencia romana*, Madrid, 2000.

García Marcos, V. – Vidal, J. “*Asturica Augusta y Castra legionis VII Geminae* en la antigua Asturia cismontana”, en *Astures. Pueblos y culturas en la frontera del Imperio Romano*, Gijón, 1995, pp. 222ss.

- García Quintela, M. V. *Mitología y mitos de la Hispania prerromana III*, Madrid 1999.
- García Quintela – Vázquez Varela, J. M. *A vida cotiá na Galicia castrexa*, Santiago de Compostela, 1998.
- García Riaza, E. – Sánchez León, M^a. L. *Roma y la municipalización de las Baleares*, Palma de Mallorca, 2000.
- García y Bellido, A. “Las colonias romanas de Hispania”, *AHDE* 29, 1959, pp. 447-512.
- Garnsey, P. “The *lex Iulia* and Appeal under the Empire”, *JRS* 56, 1966, pp. 167-189.
- “The Criminal Jurisdiction of Governors”, *JRS* 58, 1968, pp. 51-59.
 - *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970.
- Garnsey, P. – Saller, R. *The Roman Empire: Economy, Society and Culture*, Londres, 1987.
- Garrido-Hory, M. – Gonzales, A. (eds.), *Histoire, espaces et marges de l'Antiquité. Hommages a M. Clavel-Lévêque*, vol 3, Besançon, 2004.
- Gascou, J. *La politique municipale de l'Empire romain en Afrique Proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère*, Roma, 1972.
- “La Tabula Siarensis et le problème des municipes hors d'Italie”, *Latomus* 45, 1986, pp. 541-
- Gasparini, L. “Dal luco sacro al luco con insedimento humano”, en Rodríguez Colmenero, A. (coord.). *Los orígenes de la ciudad en el Noroeste hispánico (Actas Congreso Internacional, Lugo 15-18 mayo 1996)*, Lugo, 1998, t. I, pp. 309-324.
- Gaudemet, J. “La juridiction provinciale d'après la correspondance entre Pline et Trajan”, *RIDA* 1964, pp. 335-353.
- Giard, J. B. *Bibliothèque Nationale. Catalogue des Monnaies de l'Empire Romain I*, París, 1976.
- Giardina, A. (cura) *L'uomo romano*, Roma-Bari, 1989.

Gil, L. *Censura en el mundo antiguo*, Madrid, 1961.

Gioffredi, C. *Contributi allo studio del processo civile romano*, Milano, 1947.

Giovannini, A. *Consulare imperium*, Bâle, 1983.

Girard, P. F. “La date de la loi Aebutia “, *ZSS* 14, 1893, pp. 11 ss.

- *Histoire de l'organisation judiciaire des romains*, Paris, 1901.
- *Textes de droit romain*, París, 1921.

Giuffrè, V. *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Nápoles, 1998.

Goffaux, B. “Municipal Intervention in the Public Construction of Towns and Cities in Roman *Hispaniae*”, *Habis* 32, pp. 257-270.

Gómez-Iglesias, A. “Lex Ursonensis Cap. 109. La tutela en la Lex Ursonensis y en la Ley Municipal”, *Studia Historica. Historia Antigua* 15, 1997, pp. 247-266.

Gómez-Pantoja, J. “La estación de *Segisamo*”, *Gerión* 10, 1992, pp. 259-273.

- “*Legio IIII Macedonica*”, en Le Bohec, Y. (ed.) *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, Lyon, 2000, pp. 105-117.
- “*Legio X Gemina*”, en Le Bohec, Y. (ed.) *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, Lyon, 2000, pp. 169-190.
- “*Ex ultima Celtiberia: Desarrollo municipal y promoción social en las viejas ciudades arévacas*”, en Castillo, C. – Rodríguez Neila, J. F. – Navarro, F. J. (eds.) *Sociedad y economía en el Occidente romano*, Pamplona, 2003, pp. 231-282.
- *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Romano: VII. Baetica, Tarraconensis, Lusitania*, Roma, 2009.

González, J. “La *lex municipii Flavii Basiliponensis*”, *SDHI* 49, 1982, pp. 395-399.

- “*Tabula Siarensis, Fortunales Siarenses et Municipia Ciuium Romanorum*”, *ZPE* 55, 1984, pp. 55-100.

- “The lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law”, *JRS* 76, 1986, pp. 147-243.
- “Epigrafía del yacimiento de La Cañada”, en González, J. – Arce, J. (eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid, 1988, pp. 91-126.
- “The First Oath *pro salute Augusti* found in Baetica”, *ZPE* 72, 1988, pp. 113-127.
- (ed.) *Roma y las provincias: Realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid, 1994.
- “Cohors V Baeticae”, *Habis* 25, 1994, pp. 179-188.
- “De nuevo en torno a la fundación de la colonia *Astigi Augusta Firma*”, *Habis* 26, 1995, pp. 281-293.
- (ed.) *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano*, Sevilla, 1999.
- (ed.) *Trajano, emperador de Roma*, Roma, 2000.
- *Tácito y las fuentes documentales: SS.CC. de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis) y de Cn. Pisone patre*, Sevilla, 2002.
- “El origen del Culto Imperial en la Bética según la documentación epigráfica”, en Nogales, T. – González, J. (eds.), *Culto Imperial: política y poder*, Roma, 2007, pp. 173-189.
- “*Tabula Siarensis*”, en *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma, 2008, pp. 185-249.
- “Un nuevo fragmento de la lex Valeria Aurelia”, en *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma, 2008, pp. 251-257.
- “*S.C. de Cnaeo Pisone patre*”, en *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma, 2008, pp. 259-290.
- “*Epistula de Antonino Pío*”, en *Epigrafía jurídica romana de la Bética*, Roma, 2008, pp. 293-295.

- “*M. Petrucidius M. f. legatus pro pr*”, en *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma, 2008, pp. 340-346.

González, J. – Arce, J. (eds.) *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid, 1988.

González, J. – Saquete Chamizo, J. C. (eds.), *Colonias de César y Augusto en la Andalucía romana*, Roma, 2011.

González Fernández, M^a. L. “Origen militar y desarrollo urbano de Asturica Augusta”, en Beltrán Fortes, J. – Rodríguez Gutiérrez, O. (eds.) *Hispaniae urbes: Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas*, Sevilla, 2012, pp. 257-294.

González Herrero, M. “Origen familiar y procedencia: El ejemplo de la ‘rama A’ de la familia Roscia”, en *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae (Barcelona, 3-8 septembris 2002)*, Barcelona, 2007, pp. 621-627.

González Román, C. *Roma y la urbanización de Occidente*, Madrid, 1997.

- “El proceso de *Caecilius Classicus*, procónsul de la Bética, a comienzos del reinado de Trajano”, en González, J. (ed.) *Traiano emperador de Roma*, Roma, 2000, pp. 179-201.
- “*Colonia Iulia Gemella Acci* (Guadix, Granada)”, en González, J. – Saquete Chamizo, J. C. (eds.), *Colonias de César y Augusto en la Andalucía romana*, Roma, 2011, pp. 297-331.

González Román, C. – Padilla Arroba, A. (eds.) *Estudios sobre las ciudades de la Bética*, Granada, 2002.

González Romanillos, J. A. *Aspectos procesales del “crimen repetundarum” de los orígenes a Sila*, Madrid, 2003.

- *La corrupción política en época de Julio César: un estudio sobre la “lex Iulia de repetundis”*, Granada, 2009.

Gorges, J.-G. – Rodríguez Martín, F. G. (eds.) *Économie et territoire en Lusitanie romaine*, Madrid, 1999.

Gozalbes Cravioto, E. “*Iulia Traducta* y las colonias de Augusto en el norte de Marruecos”, en González, J. – Saquete Chamizo, J. C. (eds.), *Colonias de César y Augusto en la Andalucía romana*, Roma, 2011, pp. 249-272.

Grelle, F. “Datio tutoris e organi cittadini nel Basso Impero” *Labeo* 6, 1960, pp. 216-225.

- *Stipendium vel tributum*, Nápoles, 1963.
- *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Nápoles, 1972.

Gros, P. “La ville comme symbole. Le modèle central et ses limites”, en Inglebert (dir.), *Histoire de la civilisation romaine*, París, 2005, pp. 155-232.

Gruen, E. S. *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley, 1995 (1ª 1974).

Grüner, A. “Die Altäre des L. Sestius Quirinalis bei Kap Finisterre. Zur geopolitischen Konstruktion des römischen Herrschaftsraums”, *Madridener Mitteilungen* 46, 2005, pp. 247-266.

Guarino, A. *Diritto privato romano*, Nápoles, 1981.

- *Storia del diritto romano*, Nápoles, 1987.
- “Edictum Perpetuum”, en *Pagine di diritto romano* IV, Nápoles, 1994, pp. 211-217 (= *Digesto. Discipline privatistiche* 7, 1991, pp. 362 ss.).
- “La pretesa codificazione dell’editto”, *Pagine di diritto romano* IV, Nápoles, 1994, pp. 218-252 (= en *Studi in onore di Albertario*, 1953, pp. 1623 ss.)
- “La leggenda sulla codificazione dell’Editto e la sua genesi”, *Pagine di diritto romano* IV, Nápoles, 1994, pp. 253-266 (= *ACIV* 2, 1953, pp. 167 ss.).
- “Gaio e l’edictum provinciale”, en *Pagine di diritto romano* IV, Nápoles, 1994, pp. 279-295 (= *Iura* 20, 1969, pp. 154 ss.)

Guey, J. “Au théâtre de Lepcis Magna. Le Proconsulat de Lollianus Avitus et la date de l’Apologie d’Apulée”, *REL* 29, 1951, pp. 307-317.

Guichard, P. “Les effets des mesures flaviennes sur la hiérarchie existant entre les cités de la Péninsule ibérique”, en *Ciudad y comunidad cívica en Hispania (Siglos II-III d.C.) / Cité et communauté civique en Hispania (Actes colloque Madrid, 25-27 janvier 1990)*, Madrid, 1993, pp. 67-84.

Guiraud, G. *Les assemblées provinciales dans l'Empire romain*, Paris, 1887.

Habicht, C. “New Evidence on the Province of Asia”, *JRS* 65, 1975, pp. 64-91.

Haensch, R. “Das Statthalterarchiv”, *ZSS* 109, 1992, pp. 209-317.

- “A *commentariis* und *commentariensis*: Geschichte und Aufgaben eines Amtes im Spiegel seiner Titulaturen”, en Le Bohec, Y. (ed.) *La hiérarchie (Rangoordnung) de l'armée romaine sous le Haut-Empire. Actes Con. Lyon (15-18 sept. 1994)*, Paris, 1995, pp. 267-283.
- *Capita provinciarum: Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz, 1997.
- “Le rôle des *officiales* de l'administration provinciale dans le processus de decisión”, *CCG* 11, 2000, pp. 259-276.
- “La gestion financière d'une province romaine: les procureurs entre résidences fixes et voyages d'inspection”, en Capdetrey, L. – Nelis-Clément, J. (dir.) *La circulation de l'information dans les états antiques*, Burdeos, 2006, pp. 161-176.
- “‘Dans tout le prétoire...’ Le personnel du préfet d'Égypte sous le Haut-Empire”, *CCG* 18, 2007, pp. 93-100, esp. pp. 99-100.
- “Des empereurs et des gouverneurs débordés. À propos des lettres d'Hadrien aux technites dionysiaques récemment publiées”, *CCG* 19, 2008, pp. 177-186.

Halgan, C. *Essai sur l'administration des provinces sénatoriales sous l'Empire romain*, Paris, 1898.

Hardie, P. *Virgil's Aeneid: Cosmos and Imperium*, Oxford, 1986.

Harmand, L. *Le patronage sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire*, Paris, 1957.

- *L'Occident romain: Gaule-Espagne-Bretagne-Afrique du Nord*, París, 1960.
- Harris, W. V. *War and Imperialism in Republican Rome, 327-70 BC*, Oxford, 1985.
- *Ancient Literacy*, Harvard, 1989.
- Heller, A. “*Les bêtises des Grecs*”. *Conflits et rivalités entre cités d'Asie et de Bithynie à l'époque romaine (129 a.C.-235 p.C.)*, Bordeaux, 2006.
- Henderson, M. I. “Julius Caesar and *Latium* in Spain”, *JRS* 32, 1942, pp. 1-13.
- Hermon. H. (dir.) *Pouvoir et Imperium (IIIe av. J.-C. – Ier ap. J.-C.)*, Nápoles, 1996.
- Hernández Guerra, L. (ed.), *Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua: La Hispania de los Antoninos*, Valladolid, 2004, pp. 11-20.
- Hernando Sobrino, R. “Nota sobre nota. El Bronce de El Bierzo y la *Tabula* de El Caurel”, *Gerión* 20/2, 2002, pp. 577-584.
- Herrmann, P. *Der römische Kaisereid: Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung*, Göttingen, 1968.
- Hill, P. V. *The Monuments of Ancient Rome as Coin Types*, Londres, 1989.
- Hobsbawm, E. J. *Bandits*, Londres, 1969.
- Howgego, C. “Coinage and Identity in the Roman Provinces”, en Howgego, C. – Heuchert, V. – Burnett, A. (eds.), *Coinage and Identity in the Roman Provinces*, Oxford, 2005, pp. 1-17.
- Howgego, C. – Heuchert, V. – Burnett, A. (eds.), *Coinage and Identity in the Roman Provinces*, Oxford, 2005.
- Honoré, T. *Emperors and Lawyers*, Londres, 1981.
- Hopkins, K. *Conquerors and Slaves*, Cambridge, 1978.
- Hoyos, B. D. “Lex provinciae and governor's Edict”, *Antichthon* 7, 1973, pp. 47-53.
- Hübner, E. s.v. “*Arae Sestianae*”, *RE* II, 1, 1895, col. 340-345.

Humbert, M. *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la Guerre Sociale*, Roma, 1978.

Hurlet, F. *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique*, Roma, 1997.

- "Le proconsul d'Afrique d'Auguste à Dioclétien", *Pallas* 68, 2005, pp. 145-167.
- *Le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien*, Burdeos, 2006.
- (ed.) *Les Empires: Antiquité et Moyen Âge. Analyse comparée*. Rennes, 2008.
- (dir.) *Rome et l'Occident (IIe siècle av. J.-C.-IIe siècle ap. J.-C.): Gouverner l'Empire*, Rennes, 2009.
- "Tra giurisdizione cittadina e giurisdizione imperiale: La sfera di competenza del proconsole", *Studi Classici e Orientali*, 56, 2010, p. 231-253.
- "Pouvoirs et autorépresentation du prince a travers la correspondance impériale d'Auguste à Trajan (27 av. J.-C. – 117 apr. J.-C.)", en Cogitore, I. – Savalli-Lestrade, I. (eds.), *Des rois au prince. Pratiques du pouvoir monarchique dans l'Orient hellénistique et romain (fin IVe a.C. – Ier p.C.)*, Grenoble, 2010, pp. 139-140.
- "(Re)penser l'Empire romain. Le défi de la comparaison historique", *DHA* suppl. 5, 2011, pp. 107-140.
- "Les modalités de la hiérarchie et de la délégation. Les rituels de médiation entre le prince et le gouverneur sous le Haut-Empire romain", en Béranger, A. – Lachaud, F. (eds.) *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge*, Metz, 2012, pp. 161-177.
- "Les ambassadeurs dans l'Empire romain. Les légats des cités et l'idéal civique de l'ambassade sous le Haut Empire", en Becker, A. – Drocourt, N. (dirs.), *Ambassadeurs et ambassades au coeur des relations diplomatiques. Rome – Occident médiéval – Byzance (VIIIe s. av. J.-C. – XIIIe s. apr. J.-C.)*, Metz, 2012, pp. 101-126.

Hurlet, F. – Suspène, A., “Le proconsul et le prince. À propos des portraits monétaires des proconsuls d’Afrique et d’Asie sous le Principat d’Auguste”, en *La société romaine et ses élites. Hommages à E. Deniaux*, Paris, 2012, p. 73-90.

Iglesias, J. *Derecho romano. Instituciones de derecho privado*, Madrid, 1969.

Iglesias Gil, J. M. (ed.), *Actas de los XVIII cursos monográficos sobre el Patrimonio Histórico (Reinosa, julio 2007)*, Santander, 2008.

Iglesias, J. M. – Ruiz, A. (eds.), *Viajes y cambios de residencia en el mundo romano*, Santander, 2011.

Inglebert, H. (dir.) *Histoire de la civilisation romaine*, Paris, 2005.

- “Le droit romain”, en *Histoire de la civilisation romaine*, Paris, 2005, pp. 113-154.
- “Les processus de romanisation”, en *Histoire de la civilisation romaine*, Paris, 2005, pp. 421-449.

Jacques, F. “*Ampliatio et mora*: Évergètes récalcitrants d’Afrique romaine”, *Antiquités Africaines* 9, 1975, pp. 159-180.

- “Le cens en Gaule au II^e siècle et dans la première moitié du III^e siècle”, *Ktèma* 2, 1977, pp. 285-328.
- *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain (161-244)*, Roma, 1984.
- “*Municipia libera* de l’Afrique proconsulaire”, en *Epigrafia. Actes du colloque international d’épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988)*, Roma, 1991. pp. 583-606.

Jashemski, W. M. F. *The Origins and History of the Proconsular and the Propraetorian Imperium to 27 B. C.*, Chicago, 1950.

Jiménez Salvador, J. L. “Presentación: El conjunto provincial emeritense en el contexto del culto imperial en Hispania”, en Mateos Cruz, P. (ed.), *El “Foro Provincial” de Augusta Emerita: Un conjunto monumental de culto imperial*, Madrid, 2006, pp. 11-27.

Johnston, D. “Three Thoughts on Roman Private Law and the lex Irnitana”, *JRS* 77, 1987, pp. 62-77

Jones, A. H. M. “I Appeal unto Caesar”, en *Studies in Roman Government and Law*, Oxford, 1960, pp. 53-54.

- “Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate”, en *Studies in Roman Government and Law*, Oxford, 1960, pp. 69-98.
- “The Aerarium and the Fiscus”, en *Studies in Roman Government and Law*, Oxford, 1960, pp. 99-114.
- *Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford, 1971.

Jördens, A. “Government, Taxation and Law”, en Riggs, C. *The Oxford Handbook of Roman Egypt*, Oxford, 2012, pp. 56- 67.

Kallet-Marx, R. M. *Hegemony to Empire: The Development of the Roman Imperium in the East from 149 to 62 B.C.*, Berkeley, 1995.

Kaser, M. v. *Römische Rechtsgeschichte*, Gottingen, 1978.

Katzoff, R. “The provincial edict in Egypt”, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review* 37, 1969, pp. 415-437.

Keppie, L. *Colonisation and Veteran Settlement in Italy, 47-14 B.C.*, Londres, 1983.

Khanoussi, M. – Maurin, L. (ed.), *Dougga (Thugga). Études épigraphiques*, Paris, 1997.

Kirbihler, F. “Les lois provinciales en Occident: état de la question”, en Hurlet, F. (dir.), *Rome et l'Occident (IIe siècle av. J.-C.-IIe siècle ap. J.-C.): Gouverner l'Empire*, Rennes, 2009, pp. 25-34.

Kokkinia, C. “Ruling, Inducing, Arguing: How to Govern (and Survive) a Greek Province”, en De Ligt, L. – Hemelrijk, E. A. – Singor, H. W. (eds.), *Roman Rule and*

Civic Life: Local and Regional Perspectives, Impact of Empire 4 (Leiden June 25-28 2003), Amsterdam, 2004, pp. 39-58.

Kolendo, J. “L’activité des proconsuls d’Afrique d’après les inscriptions”, en *Epigrafia e ordine senatorio I, Tituli 4*, Roma, 1982, pp. 351-367.

Kornemann, E. s.v. ‘Dioecesis’, *RE* 5, 1905, p. 716 y ss

Kreiler, B. M. *Statthalter zwischen Republik und Prinzipat*, Frankfurt-am-Main, 2006.

Laffi, U. *Adtributio e contributio: Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa, 1966.

- “Le iscrizioni relative all’introduzione nel 9 a.C. del nuovo calendario della provincia d’Asia”, *Studi Classici e Orientali* 16, 1967, pp. 5-98.
- “Il sistema di alleanze italico”, en *Storia di Roma 2: L’impero mediterraneo I. La repubblica imperiale*, Turín, 1990, pp. 285-304.

Lafón, X. –Sauron, G. (eds.) *Théorie et pratique de l’architecture romaine. Études offertes a Pierre Gros*, Aix-en-Provence, 2005.

Lamberti, F. “*Tabulae Irnitanae*”: *Municipalità e “ius romanorum”*, Napoli, 1993.

Lambrino, S. “L. Fulcinius Trio, gouverneur de Lusitanie, sur une *tabula patronatus* de Juromenha”, *O Arqueólogo Português*, nova série 1, 1951, pp. 151-169.

Lamoine, L. *Le pouvoir local en Gaule romaine*, Clermont-Ferrand, 2009.

Lamoine, L. – Berrendonner, C. – Cébeillac-Gervasoni, M. (dirs.) *La praxis municipale dans l’Occident romain*, Clermont-Ferrand, 2010.

Lassère, J.-M. *Manuel d’épigraphie romaine*, Paris, 2005, p. 797.

Laurence, R. – Cleary, S. E. – Sears G. *The City in the Roman West c. 250 BC – c. AD 250*, Cambridge, 2011.

Lauria, M. “*Iurisdictio*” en *Studi in memoria di P. Bonfante nel XL anno d’insegnamento*, II, Milano, 1930, pp. 479-538.

Lazzarini, S. *Lex metallis dicta: studi sulla seconda tavola di Vipasca*, Roma, 2001.

Lebek, W. D. “Intenzione e composizione della ‘Rogatio Valeria Aurelia’”, Frascchetti, A. (ed.), *La commemorazione di Germanico sulla documentazione epigrafica (Convegno Internazionale, Cassino, 21-24 ottobre 1991)*, Roma, 2000, pp. 45-67.

Le Bohec, Y. *La troisième légion Auguste*, Paris, 1989.

- (ed.) *L'Afrique, la Gaule, la Religion à l'époque romaine. Mélanges M. Le Glay*, Bruselas, 1994.
- (ed.) *La hiérarchie (Rangoordnung) de l'armée romaine sous le Haut-Empire. Actes Con. Lyon (15-18 sept. 1994)*, Paris, 1995.
- (ed.) *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, Lyon, 2000.
- *Histoire de l'Afrique romaine (146 av. J.-C. – 439 ap. J.-C.)*, Paris, 2005.
- *El ejército romano*, Barcelona, 2006 (Paris, 1989).
- “Le culte impérial et l'armée romaine d'Afrique”, en Vigourt, A. – Lorient, X. – Béranger, A. – Klein, B. (dir.) *Pouvoir et religion dans le monde romain, en hommage à J.-P. Martin*, Paris, 2006, pp. 389-400.
- “Les activités des proconsuls d'Afrique de Trajan à Antonin le Pieux d'après l'épigraphie”, *Epigraphica* 70, 2008, pp. 229-245.
- “Routes et armée dans l'épigraphie de l'Afrique romaine”, *CCG* 20, 2009, pp. 185-197.
- *La guerre romaine, 58 avant J.-C. – 235 après J.-C.*, Paris, 2014.

Leifer, F. *Die Einheit des Gewaltgedankes im römischen Staatsrecht*, Munich-Leipzig, 1914.

Lemosse, M. *Cognitio. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès civil antique*, Paris, 1944.

Lenel, O. *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig, 1927 (1^a 1888).

- *Essai de reconstitution de l'édit perpétuel*, París, 1901.

León Alonso, M^a. P. “Los relieves del templo de Marte de Mérida”, *Habis* 1, 1970, pp. 181-197.

Lepelley, C. “Les sièges des *conventus* judiciaires de l’Afrique Proconsulaire”, en *Aspects de l’Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme*, Bari, 2001, pp. 55-68.

Le Roux, P. *L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion de 409*, París, 1982.

- “Provincialisation et recrutement militaire dans le N.O. hispanique”, *Gerión* 3, 1985, pp. 283-308.
- “*Siarum* et la *Tabula Siarensis*: statut politique et honneurs religieux en Bétique sous Tibère”, en González, J. – Arce, J. (eds.) *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid, 1988, pp. 21-33.
- “L’armée romaine dans la Péninsule Ibérique sous l’Empire: bilan pour un décennie”, *REA* 94, 1992, pp. 231-248.
- “*Vectigalia* et revenus des cités en Hispanie”, en *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xe rencontré franco-italienne sur l’epigraphie du monde romain (Rome, mai, 1996)*, Roma, 1999, pp. 155-173.
- “La question des *conventus* dans la péninsule Ibérique d’époque romaine”, en Auliard, C. – Bodiou, L. (eds.), *Au jardin des Hespérides: Histoire, société et épigraphie des mondes anciens. Mélanges A. Tranoy*, Rennes, 2004, p. 337-356.
- “Les dévotions des gouverneurs de province dans la péninsule Ibérique au Haut-Empire”, en Vigourt, A. – Lorient, X. – Bérenger, A. – Klein, B. (dir.) *Pouvoir et religion dans le monde romain, en hommage à J.-P. Martin*, París, 2006, pp. 367-385.

- “L’*edictum de Paemeiobrigensibus* un document fabriqué?”, en *Le toge et les armes: Rome entre Méditerranée et Océan*, Rennes, 2011, pp. 113-131.

Letta, C. – Segenni, S. (cura), *Roma e le sue province. Dalla Prima Guerra Punica a Diocleziano*, Roma, 2015.

Le Teuff, B. “Les recensements dans les provinces de la République romaine: aux origines de la réforme augustéenne”, en Barrandon, N. – Kirbihler, F. (dir.), *Administrer les provinces de la République romaine*, Rennes, 2010, pp. 195-211.

Levick, B. “Domitian and the Provinces”, *Latomus* 41, 1982, pp. 50-73.

Lévy, J.-P. “Les actes d’état civil romains”, *RHDFE* 1952, pp. 449-486.

Liddell, H. G. – Scott, R. *A Greek English Lexicon*, Oxford, 1968.

Liebeschuetz, W. “The Theme of Liberty in the *Agricola* of Tacitus”, en R. Ash (ed.), *Tacitus. Oxford Readings on Classical Studies*, Oxford, 2012, pp. 73-94.

Liebs, D. “Das *ius gladii* der römischen Provinzgouverneure in der Kaiserzeit”, *ZPE* 43, 1981, pp. 217-223.

Lo Cascio, E. “Le *professiones* della *Tabula Heracleensis* e le procedure del *census* in età cesariana”, *Athenaeum* 78, 1990, pp. 287-318.

- “Census provinciale, imposizione fiscale e amministrazione cittadine”, en Eck, W. (dir.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, Munich, 1999, pp. 197-211.
- “Le tecniche dell’amministrazione”, en *Il princeps e il suo impero: Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, pp. 13-79.
- “*Patrimonium, ratio privata, res privata*”, en *Il princeps e il suo impero: Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, pp. 97-149.
- “*Fiscus principis nostri* (Sc. de Cn Pisone patre, ll. 54-55): ancora sulla configurazione giuridica del fisco imperiale”, en *Il princeps e il suo impero: Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, pp. 163-174.

Lomas Salmonte, F. J. *Asturia prerromana y altoimperial*, Gijón, 1989.

López Barja de Quiroga, P. *Epigrafía latina: las inscripciones romanas desde los orígenes al siglo III d.C.*, Santiago de Compostela, 1993.

- “Estructura compositiva de la *lex Ursonensis*”, *Studia Historia. Historia Antigua* 15, 1997, pp. 47-61.
- “El censo provincial, los *populi* y los *castella* de *Gallaecia*”, *Gallaecia* 18, 1999, pp. 347-362.
- “La triple venta del *filius familias* (*XII Tablas* 4, 2)”, en Myro, M. M. –Casillas, J. M. –Alvar, J. –Plácido, D. (eds.) *Las edades de la dependencia durante la Antigüedad. XXIVe colloque du GIREA (Madrid 1997)*, Madrid, 2000, pp. 211-221.
- “La provincia Transduriana”, en Sánchez-Palencia, J. F. – Mangas, J. (eds.) *El edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, León, 2000, pp. 31-45.
- *Historia de la manumisión en Roma: de los orígenes a los Severos*, Madrid, 2007.
- “El gobernador provincial romano de Cicerón a Plinio el Joven”, en Campagno, M. – Gallego, J. – García MacGaw, C. (eds.), *Política y religión en el Mediterráneo antiguo*, Buenos Aires, 2009, pp. 289-304.
- “*Prouincia* y *restitutio* en el Bronce de El Bierzo”, *AEspA* 83, 2010, pp. 175-181.
- “Patronato y clientela: el gobernador provincial romano”, en Campagno, M. – Gallego, J. – García MacGaw, C. (dir.) *Rapports de subordination personelle et pouvoir politique dans la Méditerranée antique et au-delà. XXXIVe Colloque International GIREA-III Coloquio Internacional PEFSCEA*, Besançon, 2013, pp. 141-160.
- “El censo en las *ciuitates peregrinae* (con una nota sobre la pizarra de Pelou)” en Duplá, A. – Escribano, M^a. V. – Sancho, L. – Villacampa, M^a. A. (eds.) *Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza*, Zaragoza, 2014, pp. 459-464.

- “La reorganización de la Hispania citerior bajo Augusto” e.p.

López Melero, R. “*Restituere y contribuere* en las disposiciones de la tábula de El Bierzo”, *ZPE* 138, 2002, pp. 185-223.

López Melero, R. – García Jiménez, S. – Sánchez Abad, J. L., “El bronce de Alcántara: una *deditio* del 104 a.C.”, *Gerión* 2, 1984, pp. 265-323.

López Paz, P. *La ciudad romana ideal I. El territorio*, Santiago de Compostela, 1994.

Lozano, F. “Los concilios ciudadanos y el culto imperial”, en Blázquez, J. M^a. – Ozcáriz, P. (coord.), *La administración de las provincias en el Imperio Romano*, Madrid, 2013, pp. 177-198.

Lozano, F. – Alvar, J. “El culto imperial y su proyección en Hispania”, en Andreu Pintado, J. – Cabrero Piquero, J. – Rodá de Llanza, I. (eds.), *Hispaniae: Las provincias hispanas en el mundo romano*, Tarragona, 2009, pp. 425-437.

Luzzatto, G. I. *Procedura civile romana II*, Bolonia, 1948.

- “In tema di processo provinciale e autonomia cittadina”, *RIDA* 11, 1964, pp. 355-362.
- *Il problema d’origine del processo extra ordinem. I. Premesse di método dei cosiddetti rimedi pretori*, Bolonia, 1965.
- *Roma e le province I: Organizzazione, economia e società*, Bolonia, 1985.

Mackie, N. *Local Administration in Roman Spain, AD 14-212*, Oxford, 1983.

- “Augustan Colonies in Mauretania”, *Historia* 32/3, 1983, pp. 332-358.
- “Urban Munificence in Roman Spain”, en Blagg, T. – Millett, M. (ed.) *The Early Roman Empire in the West*, Oxford, 1990, pp. 179-192.

MacMullen, R. “The Epigraphic Habit in the Roman Empire”, *AJPh* 103/3, 1982, pp. 233-246.

Maganzani, L. “Jurisdiction romaine et autonomie locale dans les provinces au dernier siècle de la République”, *RHDFE* 85/3, 2007, pp. 353-373.

- “L’editto provinciale alla luce delle *Verrine*: profili strutturali, criteri applicativi”, en Dubouloz, J. – Pittia, S. (eds.) *La Sicile de Cicéron. Lectures des Verrines*, 2007, pp. 127-146.

Magie, D. *Roman Rule in Asia Minor, to the End of the Third Century after Christ*, Princeton, 1950.

Manfredini, A. D. “Municipii e città nella lotta ai latrones”, en González, J. (ed.) *Roma y las provincias: Realidad administrative e ideología imperial*, Madrid, 1994, pp. 147-167.

Mangas, J. “El papel de la diplomacia en la conquista de la Península Ibérica”, *Hispania* 116, 1970, pp. 485-514.

- “Clientela privada en la Hispania romana”, *Memorias de Historia Antigua* 2, 1978, pp. 217-226.
- “*Hospitium* y *patrocinium* sobre colectividades públicas: ¿términos sinónimos? (De Augusto a fines de los Severos), *DHA* 9, 1983, pp. 165-183.
- “Dioses y cultos en *Asturica Augusta* antes de su cristianización”, en *Actas del Primer Congreso Internacional Astorga Romana*, Astorga, 1986, pp. 55-58.
- *Aldea y ciudad en la Antigüedad hispana*, Madrid, 1996.
- *Leyes coloniales y municipales de la Hispania romana*, Madrid, 2001.
- “El culto imperial en el noroeste de Hispania”, en Nogales, T. – González, J. (eds.) *Culto Imperial: política y poder*, Roma, 2007, pp. 705-720.

Mantovani, D. “L’editto come codice e da altri punti di vista”, en *La codificazione del diritto dall’antico al moderno*, Nápoles, 1998, pp. 129-178.

- “Il diritto da Augusto al Theodosianus”, en Gabba, E. – Foraboschi, D. – Mantovani, D. – Lo Cascio, E. – Troiani, L. *Introduzione alla storia di Roma*, Milán, 1999, pp. 490-503.
- “*Lex «regia» de imperio Vespasiani*, il *vagum imperium* e la legge costante”, en Capogrossi-Colognesi, L. – Tassi Scandone, T. (cura), *La Lex de Imperio*

Vepasiani e la Roma dei Flavii (Atti Conv. 20-22 nov. 2008), Roma, 2009, pp. 125-156.

Mantovani, D. – Pellecchi, L. (cura), *Eparcheia, autonomia e civitas Romana: Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. – II d.C.)*, Pavía, 2010.

Mar, R. – Ruiz de Arbulo, J. – Vivó, D. – Beltrán-Caballero, A. J. *Tarraco: Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana. Vol. I: De la Tarragona ibérica a la construcción del templo de Augusto*, Tarragona, 2012.

Marchetti, M. s.v. “*Hispania*”, *Dizionario Epigrafico*, p. 811 ss

Marotta, V. *Multa de iure sanxit. Aspetti della política del diritto de Antonino Pio*, Milán, 1988.

- *Mandata principum*, Turín, 1991.

Marquardt, J. *De l'organisation financière chez les romains. Manuel des Antiquités Romaines X*, París, 1888 (Alemania, 1884).

- *Organisation de l'Empire romaine. Manuel d'Antiquités romaines IX*, París, 1892.

Marshall, A. J. “*The Structure of Cicero's Edict*” *AJPh*, 85, 1964, pp. 185-191

- “*Governor's on Move*”, *Phoenix* 20/3, 1966, pp. 231-246.

Martin, J.-P. “*À propos des monnaies d'Afrique proconsulaire sous Auguste et Tibère*”, en Cabouret, B. – Gros Lambert, A. – Wolff, C. (eds.) *Visions de l'Occident romain. Hommages à Y. Le Bohec 1*, París, 2012, pp. 261-270.

Martini, R. *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milán, 1969.

- “*Su un preteso 'katholikon diatagma' egizio*”, en *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Nápoles, 1998, pp. 179-189

Masier, A. “*Il questore di Adriano L. Roscius [---]cius Celer M[---] Postumus Mam[---] Vergilius Staberia[---]*”, *Epigraphica* 68, 2006, pp. 101-115.

Massoneau, E. *La magie dans l'antiquité romaine: La magie dans la littérature et les mœurs romaines, la répression de la magie*, Paris, 1934.

Mateos Cruz, P. (ed.) *El "Foro Provincial" de Augusta Emerita: Un conjunto monumental de culto imperial*, Madrid, 2006.

- "El templo: la traslación de los modelos metropolitanos a la capital de la provincia lusitana", en *El "Foro Provincial" de Augusta Emerita: Un conjunto monumental de culto imperial*, Madrid, 2006, pp. 251-276.
- "El culto imperial en el llamado 'foro provincial' de Augusta Emerita", en *El "Foro Provincial" de Augusta Emerita: Un conjunto monumental de culto imperial*, Madrid, 2006, pp. 315-354

Mateos Cruz, P. – Palma, F. "Arquitectura oficial", en Dupré, X. (ed.), *Las capitales provinciales de Hispania 2. Mérida: Colonia Augusta Emerita*, Roma, 2004, pp. 41-53.

Matteini Chiari, M. (cura) *Raccolta di Cannara. Materiali archeologici. Monete. Dipinti e sculture*, Perugia, 1992.

Mattingly, D. *An Imperial Possession: Britain in the Roman Empire (54 BC - AD 409)*, Londres, 2006.

Mayer i Olivé, M. "Ejército y obras públicas. La definición de límites entre pueblos a cargo de soldados de oficio: ¿oficio de soldados?", en Wolff, C. (ed.) *Le métier de soldat dans le monde romain*, Lyon, 2012, pp. 301-309.

Mayer, M. – García, R. – Abásolo, J. A. – Rodríguez Almeida, E. "El Bronce de Fuentes de Ropel (Zamora)", *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 64, 1998, pp. 161-174.

McElderry, R. K. "Vespasian's Reconstruction of Spain", *JRS*, 8, 1918, pp. 53-102

- "Addenda" *JRS* 9, 1919, pp. 86-94.

Melchor Gil, E. *El mecenazgo cívico en la Bética: La contribución de los evergetas al desarrollo de la vida municipal*, Córdoba, 1994.

- “Evergetismo testamentario en la Hispania romana: legados y fundaciones”, *Memorias de Historia Antigua* 15-16, 1994-1995, pp. 215-228.
- *La munificencia cívica en el mundo romano*, Madrid, 1999.
- “Consideraciones sobre la munificencia cívica en la Bética romana”, en Navarro, M. – Demougin, S. (eds.), *Élites hispaniques*, París, 2001, pp. 157-171.
- “Aportaciones de los notables locales a las finanzas municipales”, en Castillo, C. – Rodríguez Neila, J. F. – Navarro, F. J. (eds.) *Sociedad y economía en el Occidente romano*, Pamplona, 2003, pp. 199-230.
- “Élites supralocales en la Bética”, en Caballos Rufino, A. – Lefebvre, S. *Roma generadora de identidades. La experiencia hispana*, Madrid-Sevilla, 2011, pp. 267-300

Mellano, L. D. *Sui rapporti tra governatore provinciale e giudici local alla luce delle Verrine*, Milán, 1977.

Mennen, I. *Power and Status in the Roman Empire, AD 193-284*, Leiden-Boston, 2011.

Mentxaka, R. “*Lex riui Hiberiensis*, derecho de asociación y gobernador provincial”, *Revista Internacional de Derecho Romano* 2, 2009, pp. 1-46.

- “Aproximación a la personalidad jurídica de las *civitates* romanas en época imperial”, *Revista Vasca de Administración Pública* 99-100, 2014, pp. 2055-2082.

Merola, G. D. *Autonomia locale – governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari, 2001.

Metro, A. “La *lex Cornelia de iurisdictione* alla luce di Dio Cass. 36.40.1-2”, *IURA* 20, 1969, pp. 500-524

Meyer-Zwiffelhofer, E. *Politikos archein. Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen*, Stuttgart, 2002.

- *Storia delle province romane*, Bolonia, 2011 (Munich, 2009).

Mierow, H. E. *The Roman Provincial Governor as he appears in the Digest and Code of Justinian*, Colorado, 1925.

Migliorini, R. *La giurisdizione criminale romana tra principato e dominato. Gli atti dei martiri come testimonianze processuali*, Città del Vaticano, 2008.

Millar, F. "The Fiscus in the First Two Centuries", *JRS* 53, 1963, pp. 29-42.

- *A Study of Cassius Dio*, Oxford, 1964.
- "The Emperor, the Senate and the Provinces", *JRS* 56, 1966, pp.156-166.
- "Triumvirate and Principate", *JRS* 63, 1973, pp. 50-77.
- "The Imperial Cult and the Persecutions", en Den Boer, W. (ed.) *Le culte des souverains dans l'Empire Romain*, Ginebra, 1973, pp. 145-165.
- *The Emperor in the Roman World*, Londres, 1977.
- "The World of The Golden Ass", *JRS* 71, 1981, pp. 63-75.
- "Empire and City, Augustus to Julian: Obligations, Excuses and Status", *JRS* 73, 1983, pp. 76-96.
- "State and Subject: the Impact of Monarchy", en Millar, F. – Segal, C. (eds.) *Caesar Augustus: Seven Aspects*, Oxford, 1984, pp. 37-60.
- "Senatorial Provinces. An Institutionalized Ghost", *Ancient World* 20, 1989, pp. 93-97.
- *The Roman Empire and its Neighbours*, Londres, 1993 (Frankfurt am Main, 1966).
- "*Civitates liberae, coloniae* and Provincial Governors under the Empire", *Mediterraneo Antico* 2, 1999, pp. 95-113.
- "Trajan: Government by Correspondance", en González, J. (ed.), *Trajano emperador de Roma*, Roma, 2000, pp. 363-388.

Mitchell, S. “The Administration of Roman Asia from 133 BC to AD 250”, en Eck, W. (ed.), *Lokale Autonomie und römischen Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen von 1 bis 3 Jahrhundert*, Munich, 1999, pp. 17-46.

Mitford, T. B. “A Cypriot Oath of Allegiance to Tiberius” *JRS* 50, 1960, pp. 75-79.

Moatti, C. *Archives et partage de la terre dans le monde romain: IIe siècle avant – Ier siècle après*, Roma, 1993.

Mommsen, Th. *Étude sur Pline le Jeune*, París, 1873 (Alemania, 1869).

- *Le droit public romain*, París, 1891-1892 (Leipzig, 1887-1888).
- *Le droit pénal romaine*, París, 1907 (Leipzig 1899).

Morillo Cerdán, A. “La *legio IIII Macedonica* en la península Ibérica. El campamento de Herrera de Pisuerga (Palencia)”, en Le Bohec, Y. (ed.) *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, Lyon, 2000, pp. 609-624.

- (ed.), *El ejército romano en Hispania: Guía arqueológica*, León, 2007.
- “El ejército romano en España”, en Morillo, A. (ed.) *El ejército romano en Hispania: Guía arqueológica*, León, 2007, pp. 87-112.
- “Los campamentos romanos de Astorga y León”, en Navarro Caballero, M. – Palao Vicente, J. J. (eds.), *Villes et territoires dans le bassin du Douro à l’époque romaine*, Burdeos-París, 2007, pp. 59-90.

Morillo Cerdán, A. – García Marcos, V. “Nuevos testimonios acerca de las *legiones VI Victrix* y *X Gemina* en la región septentrional de la península Ibérica”, en Le Bohec, Y. (ed.) *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, Lyon, 2000, pp. 589-607.

Münckler, H. *Empires. The Logic of World Domination from Ancient Rome to United States*, 2007.

Muñiz Coello, J. *El sistema fiscal en la España romana (República y Alto Imperio)*, Zaragoza, 1982.

- “Empleados y subalternos de la administración romana, 2. Los praecones”, *Habis* 14, 1983, pp. 117-145.
- *Cicerón y Cilicia. Diario de un gobernador romano del siglo I a.C.*, Huelva, 1998.

Murga, J. L. “La *addictio* del Gobernador en los litigios provinciales”, *RIDA* 30, 1983, pp. 151-183.

Navarro, F. J. “*Tituli honorarii*: vínculos intensos entre senadores y comunidades en el Imperio Romano”, *Veleia* 14, 1997, pp. 255-293.

- “Nuevos magistrados senatoriales en la Península Ibérica. Un complemento a los *Fasti Hispanienses*”, en González, J. (ed.) *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano*, Sevilla, 1999, pp. 443-465.
- “La presencia del emperador en las ciudades de la Hispania romana”, en Castillo, C. – Navarro, F. J. – Martínez, R. (eds.) *De Augusto a Trajano. Un siglo en la historia de Hispania*, Pamplona, 2001, pp. 33-55.
- “Senadores y ciudades en el Occidente mediterráneo”, en Castillo, C. – Rodríguez Neila, J. F. – Navarro, F. J. (eds.) *Sociedad y economía en el Occidente romano*, Pamplona, 2003, pp. 45-72.
- “Los legados del procónsul de la Bética durante el Imperio Romano”, en Mayer i Olivé, M. – Baratta, G. – Guzmán Almagro, A. (eds.) *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae*, Barcelona, 2007, pp. 993-998.
- “Los gobernadores de la provincia Citerior como agentes de la romanización”, en Navarro, F. J. (ed.), *Pluralidad e integración en el mundo romano*, Pamplona, 2010, pp. 189-205.

Navarro Caballero, M. – Demougin, S. (eds.) *Élites hispaniques*, París, 2001.

Navarro Caballero, M. – Palao Vicente, J. J. (eds.), *Villes et territoires dans le bassin du Douro à l'époque romaine*, Burdeos-París, 2007.

Nelis-Clément, J. *Les beneficiarii: Militaires et administrateurs au service de l'Empire (Ier s. a.C. – Ve s. p. C.)*, Burdeos, 2000

- “Le gouverneur et la circulation de l’information dans les provinces romaines sous le Haut-Empire”, en Capdetrey, L. – Nelis-Clément, J. (dir.), *La circulation de l’information dans les états antiques*, Burdeos, 2006, p.141-159.

Nicolet, C. *Le métier du citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, 1976.

- *Tributum: Recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine*, Bonn, 1976.
- *Rome et la conquête du monde méditerranéen*, Paris, 1979.
- “Augustus, Government and the Propertied Classes”, en Millar, F. – Segal, C. (eds.) *Caesar Augustus: Seven Aspects*, Oxford, 1984, pp. 89-128.
- *L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain*, Paris, 1988.
- “Les Fastes d’Ostie et les recensements augustéens”, en *Censeurs et publicains: Économie et fiscalité dans la Rome Antique*, Paris, 2000, pp. 189-196.
- “Centralisation d’État et problème du recensement dans le monde gréco-romain”, en *Censeurs et publicains: Économie et fiscalité dans la Rome Antique*, Paris, 2000, pp. 196-208.

Nicols, J. “*Tabulae patronatus*: A study of the Agreement between Patron and Client-Community”, *ANRW II/13*, pp. 535-561.

- “Patrons of Greek Cities in the Early Principate”, *ZPE* 80, 1990, pp. 81-100.
- “Hospitality among the Romans”, en *The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World*, Oxford, 2011, pp. 422-437.
- *Civic Patronage in the Roman Empire*, Leiden-Boston, 2014.

Nogales, T. “Autorrepresentación de las élites provinciales: el ejemplo de *Augusta Emerita*”, en Navarro Caballero, M. – Demougin, S. (ed.) *Élites hispaniques*. Burdeos, 2001, pp. 121-138.

Nogales, T. – González, J. (eds.), *Culto Imperial: política y poder*, Roma, 2007.

Nonnis, D. “Un patrono dei dendrofori di *Lauinium*. Onori e munificenza in un dossier epigrafico di età severiana”, *Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Serie III. Rendiconti* 68 (anno accademico 1995-1996), 1999, pp. 1235-1262.

Novás Castro, M^a. M. *El discurso de la tortura en las Actas de los Mártires*, Santiago de Compostela, 1995.

Nörr, D. *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatzeit*, Munich, 1966.

- “Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis” *ZSS* 125, 2008, pp. 108-188.

Núñez Meneses, P. “La moneda lucense de la caetra”, *Omni* 8, 11/2014, pp. 92-117.

Oliver, J. H. *Greek Constitutions of Early Roman Emperors*, Philadelphia, 1989.

Olmo López, R. “La idea imperial en Virgilio”, *ETF II*, 21, 2008, pp. 259-273.

- “*Pacisque imponere morem*: los gobernadores provinciales y la imposición del orden romano a los conquistados en Occidente (siglos I a.C. - I d.C.)”, en Bravo, G. – González. Salinero, R. (eds.) *Conquistadores y conquistados: Relaciones de dominio en el mundo romano. XI Coloquio AIER*, Madrid, 2014, pp. 485-498.
- “Nuevas perspectivas en torno al edicto provincial en época republicana”, *Latomus*, e.p.

Ordóñez Agulla, S. – González Acuña, D. “*Colonia Romula Hispalis*. Líneas esenciales de su dinámica histórica y arqueológica”, en González, J. – Saquete Chamizo, J. C. (eds.), *Colonias de César y Augusto en la Andalucía romana*, Roma, 2011, pp. 47-97.

Orejas Saco del Valle, A. *Estructura social y territorio: El impacto romano en la cuenca noroccidental del Duero*, Madrid, 1996.

- “Territorio, análisis territorial y arqueología del paisaje”, *Studia Historica. Historia Antigua*, 13-14, 1995-1996, pp. 61-68.
- “Aspectos técnicos y organización del trabajo en la *lex metalli Vipascensis*”, en *Artifex: Ingeniería romana en España*, Madrid, 2002, pp. 255-272.

Orejas, A. – Cepas, A. – Plácido, D. – et alii, “La vallée moyenne du Guadalquivir. Paysage et territoire”, en Doukellis, P. N. – Mendoni, L. G. (eds.), *Perception and evaluation of Cultural Landscapes. Proceedings of an International Symposium (Zakynthos, december 1997)*, Atenas, 2005, pp. 41-57.

Orejas, A. – Sastre, I. “Fiscalité et organisation du territoire dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique: civitates, tribut et ager mensura comprehensus”, *DHA* 25/1, 1999, pp. 159-188.

Orejas, A. – Sastre, I. – Sánchez-Palencia, F.J. – Plácido, D. “El edicto de Augusto del Bierzo y la primera organización romana del Noroeste peninsular”, en Sánchez-Palencia, F.J. – Mangas, J. *El edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, León, 2000, pp. 63-112.

Orejas, A. – Sastre, I. – Zubiaurre, E. “Organización y regulación de la actividad minera hispana altoimperial”, en Zarzalejos, M^a. M. – Hevia, P. – Mansilla, L. (coords.), *Paisajes mineros antiguos en la Península Ibérica: Investigaciones recientes y nuevas líneas de trabajo*, Madrid, 2012, pp. 31-46.

Orestano, R. “La ‘cognitio extra ordinem’: una chimera”, *SDHI* 46, 1980, pp. 236-247.

Osland, D. *The Early Roman Cities of Lusitania*, Oxford, 2006.

Ozcáriz Gil, P. *Los conuentus de la Hispania Citerior*, Madrid, 2006.

- “Los *iuridici* de la provincia *Hispania citerior*: cuestiones acerca de su origen y naturaleza”, *ETF II* 19-20, 2006-2007, pp. 525-533.
- “Algunas consideraciones acerca de la provincia *Hispania superior* y su administración”, *Pyrenae* 38/2, 2007, pp. 33-46.

- “The ‘dioceses’ of Hispania citerior in the High Empire: A Historiographical Invention”, *Studia Humaniora Tartuensia* 12, 2011, pp. 1-18.
- *La administración de la provincia Hispania citerior durante el Alto Imperio romano*, Barcelona, 2013.

Padilla Arroba, A. “Imágenes monetales de las primeras acuñaciones provinciales romanas en el sur peninsular: Un análisis comparativo”, en González Román, C. – Padilla Arroba, A. (eds.) *Estudios sobre las ciudades de la Bética*, Granada, 2002, pp. 303-314.

Palao Vicente, J. J. *Legio VII Gemina (Pia) Felix: Estudio de una legión romana*, Salamanca, 2006.

- (coord.) *Militares y civiles en la antigua Roma: dos mundos diferentes, dos mundos unidos*, Salamanca, 2010.
- “Augusto y el ejército romano en la provincia de Hispania Citerior. ¿Nuevas respuestas a viejos interrogantes?”, *Veleia* 31, 2014, pp. 53-78.

Palazzolo, N. “La ‘propositio in albo’ degli ‘edicta perpetua’ e il ‘plebiscitum Cornelium’ del 67 a.C.”, en *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, V, Nápoles, 1984, pp. 2434-2437.

Panero Oria, P. “La *datio tutoris* en la *Lex Irnitana* cap. 29”, *AHDE* 81, 2011, pp. 973-995.

Panzram, S. *Stadtbild und Elite: Tarraco, Corduba und Augusta Emerita zwischen Republik und Spätantike*, Stuttgart, 2002.

- “Los *flamines provinciae* de la *Baetica*: autorrepresentación y culto imperial”, *AEspA* 76, 2003, pp. 121-130.

Peachin, M. (ed.) *The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World*, Oxford, 2011.

- “Augustus’ Emergent Judicial Powers, the *crimen maiestatis* and the Second Cirene Edict”, en Ferrary, J.-L. – Scheid, J. (cura), *Il princeps romano*,

autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo, Pavía, 2015, pp. 497-554.

Pellecchi, L. “L’accusa contro Apuleio: linee retoriche e giuridiche”, en Mantovani, D. – Pellecchi, L. (dirs.) *Eparcheia, autonomia e civitas Romana: Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. – II d.C.)*, Pavía, 2010, pp. 171- 334.

Pensabene, P. “Nuovi ritrovamenti di fregi marmorei dall’acropoli di Tarraco e i complessi monumentali di culto imperiale, en Lafón, X. –Sauron, G. (eds.) *Théorie et pratique de l’architecture romaine. Études offertes a Pierre Gros*, Aix-en-Provence, 2005, pp. 233-246.

Pensabene, P. – Mar, R. “Dos frisos marmóreos en la Acrópolis de Tarraco, el Templo de Augusto y el complejo provincial de culto imperial”, en Ruiz de Arbulo, J. (ed.), *Simulacra Romae. Roma y las capitales provinciales del Occidente europeo*, Tarragona, 2004, pp. 72-86.

Peppe, L. “Note sull’editto di Cicerone in Cilicia”, *Labeo* 37, 1991, pp. 14-93.

Perea Yébenes, S. “Reflexiones sobre la inscripción del *beneficiarius consularis* de *Carthago Nova*”, *Hispania Antiqua* 37-38, 2013-2014, pp. 165-192.

Pereira Menaut, G. *Munera civitatum: La vida de la ciudad romana ideal*, Sevilla, 2011.

Perez, A. *Les cadastres antiques en Narbonnaise occidentale. Essai sur la politique coloniale romaine en Gaule du Sud (IIe s. av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.)*, París, 1995.

Pflaum, H. G. *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut Empire romain*, París, 1960.

- “Le *consilium* du préfet d’Egypte. Sa composition”, en *Scripta varia II: Gaule et Empire Romain*, París, 1981.

Piganiol, A. *Les documents cadastraux de la colonie d’Orange*, París, 1962.

Pina Polo, F. “Las comisiones senatoriales para la reorganización de Hispania (App. Iber. 99-100)”, *DHA* 23/2, 1997, pp. 83-104.

- “Los Cornelio Balbo: clientes en Roma, patronos en Gades”, en Sartori, A. – Valvo, A. (coords.), *Identità e autonomie nel mondo romano occidentale: Iberia-Italia Italia-Iberia. III Conv. Int. Epigrafia e Storia Antica*, Faenza, 2011, pp. 335-353.
- “Generales y clientelas provinciales: ¿qué clientelas?”, en Santos Yanguas, J. – Cruz Andreotti, G. (eds.) *Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: El caso hispano*, Vitoria, 2012, pp. 55-79.

Piso, I. (ed.), *Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung*, Cluj-Napoca, 2008.

Plácido, D. “*Graecia capta*, integradora de la romanidad”, *Studia Historica. Historia Antigua* 8, 1990, pp. 97-106.

- *Las provincias hispanas durante el Alto Imperio romano*, Madrid, 2008.

Price, S. R. F. *Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge, 1987.

Pritchard, R. T. “Cicero and the *lex Hieronica*”, *Historia* 19/3, 1970, pp. 352-368.

Pollini, J. *The Portraiture of Gaius and Lucius Caesar*, Nueva York, 1987.

Pons Pujol, L. “*Proculus*, legado en la *Narbonensis* y procónsul de la *Baetica* (CIL XI, 5173, 5172)”, en Pons Pujol, L. (ed.), *Hispania et Gallia: dos provincias del Occidente romano*, Barcelona, 2010, pp. 153-163.

Pugliese, G. *Appunti sui limiti dell'imperium nella repressione penale. A proposito della llex Iulia de vi publica*, Turín, 1939.

- *Il processo civile romano*, Roma, 1961-1963.
- “Riflessioni sull’editto di Cicerone in Cilicia”, en Synteleia Arangio-Ruiz, Nápoles, 1964, pp. 972-986.

Purcell, N. “The *apparitores*: a Study in Social Mobility”, *PBSR* 51, 1983, pp. 125-173.

Raggi, A. “*Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*”, *ZPE* 135, 2001, pp. 73-115.

Ramallo, R. – Murcia, A. J. “Aqua et lacus en Carthago Nova. Aportaciones al estudio del aprovisionamiento hídrico en época romana”, *ZPE* 172, 2010, pp. 249-258.

Rankov, B. “The Governor’s Men: the *officium consularis* in Provincial Administration”, en Goldsworthy, A. – Haynes, I. (eds.), *The Roman Army as a Community*, Portsmouth-Rhode Island, 1999, pp. 15-34.

Rankov, B. “Les *frumentarii* et la circulation de l’information entre les empereurs et les provinces”, en Capdetrey, L. – Nelis-Clément, J. (eds.), *La circulation de l’information dans les états antiques*, Burdeos, 2006, p. 129-140.

Reinmuth, O. W. “The Edict of Tiberius Julius Alexander”, *TAPhA.* 65, 1934, pp. 248-259.

Reiss, W. “The Roman Bandit (*latro*) as Criminal and Outsider”, en Peachin, M. (ed.) *The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World*, Oxford, 2011, pp. 693-714.

Revell, L. “The Written City: Political Inscriptions from Roman Baetica”, en Sears, G. – Keegan, P. – Laurence, R. (eds.), *Written Space in the Latin West, 200 BC to AD 300*, Londres, 2013, pp. 231-245.

Reynolds, J. M. “Vota pro salute principis”, *PBSR* 30, 1962, pp. 33-36.

- “Hadrian, Antoninus Pius and the Cyrenaican Cities”, *JRS* 68, 1978, pp. 111-121.

Rich, J. “The *fetiales* and Roman International Relations”, en Richardson, J. H. – Santangelo, F. (ed.) *Priests and State in the Roman World*, Stuttgart, 2011, pp. 187-242.

Richardson, J. H. – Santangelo, F. (ed.) *Priests and State in the Roman World*, Stuttgart, 2011.

Richardson, J. S. “The *Tabula Contrebiensis*: Roman Law in Spain in the Early First Century B.C.”, *JRS* 73, 1983, pp. 33-41.

- “The rogatio Valeria Aurelia: Forma and Content”, en González, J. – Arce, J. (eds.) *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid, 1988, pp. 35-41.

Riggs, C. *The Oxford Handbook of Roman Egypt*, Oxford, 2012.

Roddaz, J.-M. *Marcus Agrippa*, Roma, 1984.

- “Les triumvirs et les provinces”, en Hermon, H. (dir.), *Pouvoir et Imperium (IIIe av. J.-C. – Ier ap. J.-C.)*, Nápoles, 1996, pp. 77-96.
- “De la conquête à la pacification: la mutation des sociétés indigènes”, en Castillo, C. – Rodríguez Neila, J. F. – Navarro, F. J. (eds.) *Sociedad y economía en el Occidente romano*, Pamplona, 2003, pp. 15-26.
- “Le Douro: Ligne de frontière ou lieu de contact”, en Navarro Caballero, M. – Palao Vicente, J. J. (eds.), *Villes et territoires dans le bassin du Douro à l’époque romaine*, Burdeos-París, 2007, pp. 15-25.

Rodger, A. “The Jurisdiction of Local Magistrates: Chapter 84 of the Lex Iritana”, *ZPE* 84, 1990, pp. 147-161.

Rodríguez Colmenero, A. “La nueva *tabula hospitalitatis* de la *Civitas Lougeirorum*. Problemática y contexto histórico”, *ZPE* 117, 1997, pp. 213-225.

- (coord.). *Los orígenes de la ciudad en el Noroeste hispánico (Actas Congreso Internacional, Lugo 15-18 mayo 1996)*, Lugo, 1998
- “Las nuevas *stationes lucensis et brigantina* en el Finisterre ibérico del Imperio Romano”, *Palaeohispanica* 5, 2005, pp. 873-892.

Rodríguez Colmenero, A. – Carreño Gascón, C. “Sobre Paulo Fabio Máximo y la fundación de Lucus Augusti”, *Finis Terrae. Estudios en lembranza do Prof. Dr. Alberto Balil*, Santiago de Compostela, 1992, pp. 389-415.

Rodríguez González, J. *Historia de las legiones romanas*, Madrid, 2003.

Rodríguez Gutiérrez, O. “Edificios de espectáculos”, en Caballos Rufino, A. (ed.), *Ciudades romanas de Hispania 7: Itálica-Santiponce, Municipium y Colonia Aelia Augusta Italicensium*, Roma, 2010, pp. 67-80.

Rodríguez Neila, J. F. “*Aqua publica* y política municipal romana”, *Gerión* 6, 1988, pp. 223-252.

- “*Apparitores* y personal servil en la administración local de la Bética”, *Studia Historica. Historia Antigua* 15, 1997, pp. 197-228.
- “*Pecunia communis municipum*. Decuriones, magistrados y gestión de las finanzas municipales en Hispania”, en Castillo, C. – Rodríguez Neila, J. F. – Navarro, F. J. (eds.) *Sociedad y economía en el Occidente romano*, Pamplona, 2003, pp. 111-198.
- “Introducción histórica”, en Dupré, X. (dir.) *Las capitales provinciales de Hispania 1: Córdoba*. Colonia Patricia Corduba, Roma, 2004, pp. 7-20.

Rodríguez Neila, J. F. – Melchor Gil, E. (eds.), *Poder central y autonomía municipal: la proyección pública de las élites romanas de Occidente*, Córdoba, 2006.

Roldán Hervás, J. M. *Itineraria Hispana: Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la península Ibérica*, Valladolid, 1975.

- *Hispania y el ejército romano: contribución a la historia social de la España antigua*, Salamanca, 1976.

Romanelli, P. *Roma e l’Africa*, Roma, Roma, 1943.

- *La Cirenaica romana (96 a.C.-642 d.C.)*, Verbania, 1943.
- *Storia delle province romane dell’Africa*, Roma, 1959.

Rossignol, B. “Entre le glaive et le stylet. Armée et administration des provinces dans l’Occident romain (197 av. J.-C.-192 ap. J.-C.)”, en Hurlet, F. (dir.) *Rome et l’Occident (Ile siècle av. J.-C.-Ile siècle apr. J.-C.): Gouverner l’Empire*, Rennes, 2009, pp. 77-106.

Rotondi, R. *Leges Publicae Populi Romani*, Milán, 1912.

Roxan, M. M. “Observations on the Reasons for Changes in Formula in Diplomas circa AD 140”, en Eck, W. – Wolff, H. (ed.) *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Colonia-Viena, 1986, pp. 265-292.

Roxan, M. M. – Weiss, P. “Die Auxiliartruppen der Provinz Thracia. Neue Militärdiplomen der Antoninenzeit”, *Chiron* 28, 1998, pp. 409-420.

Rubio Valverde, M. “Estudio preliminar de una posible parcelación rural romana en el territorio de Carmo (Carmona, Sevilla)”, @rqueología y Territorio. *Revista electrónica del-Máster-de-Arqueología*,

http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_10.htm (19/11/2014).

Ruiz de Arbulo, J. (ed.), *Simulacra Romae. Roma y las capitales provinciales del Occidente europeo*, Tarragona, 2004.

Sáez Fernández, P. “Nuevas perspectivas en relación a la ordenación territorial del sur de la Lusitania española” *Studia Historica. Historia Antigua* 10-11, 1992-1993, pp. 99-108.

Sagredo San Eustaquio, L. “Distribución de los ejemplares de bronce de la caetra”, en *Actas VIII Congreso Nacional de Numismática*, Avilés, 1992, pp. 503-549.

Salinas de Frías, M. *El gobierno de las provincias hispanas durante la República romana (218-27 a.C.)*, Salamanca, 1995.

Saller, R. *Personal Patronage under the Early Empire*, Cambridge, 1982.

Salmon, E. T. *Roman Colonization under the Republic*, Londres, 1969.

Sancery, J. *Galba ou l'armée face au pouvoir*, París, 1983.

Sánchez-Lafuente Pérez, J. “Quintus Iunius Rusticus, Gobernador de Hispania Citerior bajo Antonino Pío”, en Nieto Ibáñez, J. M. (coord.), *Lógos hellenikós. Homenaje al profesor Gaspar Morocho Gayo*, vol. 1, León, 2003, pp. 557-578.

Sánchez-Ostiz, A. *Tabula Siarensis. Edición, traducción y comentario*, Pamplona, 1999

Sánchez-Palencia, F.J. – Mangas, J., *El edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, León, 2000.

Sancho Rocher, L. *El convento jurídico caesaraugustano*, Zaragoza, 1981.

Santalucia, B. *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milán, 1998.

- “*Praeses provideat*. Il governatore provinciale fra *iudicia publica* e *cognitiones extra ordinem*”, en Mantovani, D. –Pellecchi, L. (dirs.), *Eparcheia, autonomia e*

civitas Romana: Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. – II d.C.), Pavía, 2010, pp. 69-88.

Santapau Pastor, M^a. C. “Organización y gestión del territorio hispano”, en Andreu Pintado, J. –Cabrerero Piquero, J. – Rodá de Llanza, I. (eds.), *Hispaniae: Las provincias hispanas en el mundo romano*, Tarragona, 2009, pp. 453-464.

Santos Yanguas, J. – Cruz Andreotti, G. (eds.) *Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: El caso hispano*, Vitoria, 2012.

Santos Yanguas, N. “La conquista romana del Noroeste de la Península Ibérica”, *Latomus* 41, 1982, pp. 5-49.

- “El testimonio de Floro y la romanización de Asturias”, *Studia Historica. Historia Antigua* 4-5, 1986-1987, pp. 37-51.
- *El ejército y la romanización de Galicia: conquista y anexión del noroeste de la Península Ibérica*, Oviedo, 1988.

Saquete Chamizo, J. C. *Las élites sociales de Augusta Emérita*, Mérida, 1997.

- “L. Fulcinius Trio, Tiberio y el gran templo de culto imperial de Augusta Emérita”, *Epigraphica* 67, 2005, pp. 279-308.
- “El gobernador provincial de Lusitania y sus actividades: viajes, calzadas, ‘conventus’ y relaciones sociales”, en Melchor Gil, E. – Rodríguez Neila, J. F. (eds.), *Poder central y autonomía municipal: la proyección pública de las élites romanas de Occidente*, Córdoba, 2006, pp. 81-111.

Saquete Chamizo, J. C. – Álvarez Martínez, J. M. “Culto imperial en Augusta Emerita: Complejos monumentales y documentos epigráficos”, en Nogales, T. – González, J. (eds.) *Culto Imperial: política y poder*, Roma, 2007, pp. 395-414.

Saquete Chamizo, J. C. – Márquez Pérez, J. “Nuevas inscripciones romanas de Augusta Emerita: La necrópolis del Disco”, *Anas* 6, 1993, pp. 51-75.

Sartori, A. T. “Sulla repressione penale nelle province”, *Acmé* 13/3, 1970, pp. 349-358.

Sastre, I. – Orejas, A. “Fiscalité et organisation du territoire dan le NO de la Péninsule Ibérique: *ciuitates*, tribut et *ager mensura comprehensus*”, *DHA* 25/1, 1999, pp. 159-188.

Sayas, J. J. “*Ad census accipiendos* de ciudades vasconas y várdulas y la *legatio censualis* de un pamplonés”, *ETF II*, 2, 1989, pp. 137-152.

Scheid, J. *Romulus et ses frères: Le collège des frères arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs*, Roma, 1990.

- *Recherches archéologiques à La Magliana. Commentarii fratrum Arualium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie arvale (21 av. – 304 ap. J.-C.)*, Roma, 1998.
- “Les activités religieuses des magistrats romains”, en Haensch, R. – Heinrichs, J. (Hg.) *Herrschen und Verwalten: der Alltag des römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, Colonia-Weimar-Viena-Böhlau, 2007, pp. 126-144.
- *Quando fare è credere: I riti sacrificali dei romani*, Roma-Bari, 2011 (París, 2005).

Schiavone, A. “Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell’editto fra tarda Repubblica e primo Principato”, en *La codificazione del diritto dall’antico al moderno*, Nápoles, 1998, pp. 51-72.

Schindel, N. “Zwei neue Militärdiplome aus der Provinz Moesia superior”, *Tyche* pp.221-227.

Schulten, A. s.v. “*Larensis*”, *RE* XII, 1924, col. 805.

- *Los cántabros y astures y su guerra con Roma*, Madrid, 1943.

Scullard, H. H. *Roman Britain: Outpost of the Empire*, Londres, 1979.

Sears, G. – Keegan, P. – Laurence, R. (eds.), *Written Space in the Latin West, 200 BC to AD 300*, Londres, 2013.

Seston, W. – Euzennat, M. “La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Comode, d’après la Tabula Banasitana”, *CRAI* 105/2, 1961, pp. 317-324.

- “Un dossier de la chancellerie romaine: La *Tabula Banasitana*. Étude diplomatique”, *CRAI* 115/3, 1971, pp. 468-490.

Sherk, R. K. *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo, 1970.

Sillières, P. *Les voies de communication de l’Hispanie méridionale*, Paris, 1990.

Simshäuser, W. “La juridiction municipale a la lumière de la lex Irnitana” *RHDFE* 67, 1989, pp. 619-650.

Shaw, B. D. “Il bandito”, en Giardina, A. (cura) *L’uomo romano*, Roma-Bari, 1989, pp. 336-384.

Sherwin-White, A. N. “*Coercitio, Cognitio, and Imperium* in the First Century A.D.”, en *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford, 1963, pp. 1-21.

- *The Letters of Pliny: A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966.
- *The Roman Citizenship*, Oxford, 1973.
- “The Tabula of Banasa and the Constitutio Antoniniana”, *JRS* 63, 1973, pp. 86-98.
- “¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos? Un corrección”, en Finley, M. I. (ed.) *Estudios sobre Historia Antigua*, Madrid, 1981, pp. 275-280. (Londres, 1974).

Small, A. (ed.), *Subject and Ruler: The Cult of the Ruling Power in Classical Antiquity*, Ann Arbor, 1996.

Smallwood, E. M. *Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius and Nero*, Bristol, 1983.

Solana Sáinz, J. M. – Hernández Guerra, L. *La política viaria en Hispania. Siglo III d.C.*, Valladolid, 2002.

Solana Sáinz, J. M. – Sagredo San Eustaquio, L. *La política viaria en Hispania: Siglos I-II d.C.*, Valladolid, 2008.

Solazzi, S. “Sulla competenza dei magistrati municipali nella costituzione del tutore durante l’Impero Romano”, en *Scritti di Diritto Romano II*, Nápoles, 1957, pp. 221-228.

Spagnuolo-Vigorita, T. “*Imperium mixtum*’. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria”, *Index* 18, 1990, pp. 113-166.

Spinelli, M. (ed.), *Minucio Felice, Octavius / Atti e Passioni dei martiri africani*, Roma, 2012.

Splitz, T. *Lex municipii Malacitani*, Munich, 1984.

Starr, C. G. *The Roman Imperial Navy, 31 BC-AD 324*, Londres, 1960.

Stevenson, G. H. *Roman Provincial Administration till the Age of the Antonines*, Westport, 1975 (Oxford, 1939).

Stylow, A. U. “Apuntes sobre epigrafía de época flavia en Hispania”, *Gerión* 4, 1986, pp. 285-311.

- “Más hermas”, *Anas* 2-3, 1989-1990, pp.195-205.
- “Apuntes sobre la arqueología de la *lex Ursonensis*”, *Studia Historica. Historia Antigua* 15, 1997, pp. 35-45.

Suárez Piñeiro, A. M^a. “O desenvolvemente territorial dunha cidade con 2000 anos de historia: Lucus Augusti”, *Boletín do Museo Provincial de Lugo* 13, 2006-2008, pp. 311-323.

- *A romanización en Galicia*, Noia, 2009.

Suspène, A. “Une monnaie pour un Empire? Approche monétaire de l’Occident romain de la fin de la deuxième guerre punique à la mort de Commode”, en Hurlet, F. (dir.) *Rome et l’Occident (IIe siècle av. J.-C.-IIe siècle apr. J.-C.): Gouverner l’Empire*, Rennes, 2009, pp. 229-247.

Syme, R. *The Roman Revolution*, Oxford, 1939.

- *Tacitus*, Oxford, 1958.
- “Consulates in Absence”, *JRS* 48, 1958, pp. 1-9.

- “Piso Frugi and Crassus Frugi”, *JRS* 50, 1960, pp. 12-20.
- “Proconsuls d’Afrique sous Antonin le Pieux”, *Roman Papers* I, Oxford, 1979, pp. 461-469 (= *REA* 61, 1959, pp. 310-319).
- “A Governor of Tarraconensis”, *Roman Papers* II, Oxford, 1979, pp. 732-741 (= *Epigraphische Studien* 8, 1969, pp. 125-133).
- “Pliny the Procurator”, en *Roman Papers* II, Oxford, 1979, pp. 743-773 (= *HSCPh* 73, 1969, pp. 201-236).
- “The Conquest of North-West Spain”, *Roman Papers II*, Oxford, 1979, pp. 824-854 (= *Legio VII Gemina*, Madrid, 1970, pp. 83-107).
- “Rival Cities, Notably Tarraco and Barcino”, *Roman Papers* IV, Oxford, 1988, pp. 74-93 (= *Ktèma* 6, 1981, pp. 271-285).
- *Colonial Élites: Rome, Spain and the Americas*, Oxford, 1970.

Szramkiewicz, R. *Les gouverneurs de province à l’époque augustéenne: contribution à l’histoire administrative et sociale du Principat*, Paris, 1975-1976.

Talamanca, M. “Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici” en Archi, G. G. (cura) *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero (III-V sec. d.C.)*, Milán, 1976, pp. 95-246.

Talbert, R. J. A. *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984.

Thomasson, B. E. *Legatus: Beiträge zur römischen Verwaltungsgeschichte*, Estocolmo, 1991.

- *Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian*, Estocolmo, 1996.

Thouvenot, R. *Essai sur la province romaine de Bétique*, Paris, 1940.

Tondo, S. *Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della manumissio vindicta*, Milán, 1967.

Tranoy, A. *La Galice romaine. Recherches sur le nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité*, Paris, 1981.

- "Religion et organisation du territoire en Galice au Ier siècle de l'empire romain", en *L'Aquitaine et l'Hispanie septentrionale à l'époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux*, Burdeos, 2005, pp. 119-124.

Tremoleda, J. "Edificios de espectáculos", en Aquilué, X. (ed.), *Ciudades romanas de Hispania 6: Empúries, Municipium Emporiae*, Roma, 2012, pp. 55-68.

- "Communautés indigènes et promotion juridique dans le nord-ouest ibérique", en *Ciudad y comunidad cívica en Hispania (Siglos II-III d.C.) / Cité et communauté civique en Hispania (Actes colloque Madrid, 25-27 janvier 1990)*, Madrid, 1993, pp. 27-35.

Trisciuglio, A. "*Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare*". *Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Nápoles, 1998.

Tobalina Oraá, E. *El cursus honorum senatorial durante la época julio-claudia*, Pamplona, 2007.

Torrent, A. *La iurisdictio de los magistrados municipales*, Salamanca, 1970.

- "Consideraciones jurídicas sobre el Bronce de Contrebia", *Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma* 15, 1981, pp. 95-104.

Tovar, A. "Un nuevo epigrama griego de Córdoba: ¿Arriano de Nicomedia, procónsul de la Bética?", *Estudios sobre la obra de Américo Castro*, Madrid, 1971, pp. 401-412.

Tozzi, P. *Storia padana antica. Il territorio fra Adda e Mincio*, Milán, 1972.

Turcan, R. "La promotion du sujet par le culte du souverain", en Small, A. (ed.), *Subject and Ruler: The Cult of the Ruling Power in Classical Antiquity*, Ann Arbor, 1996, pp. 51-62.

- "Culte impérial et tradition romaine", *Histria Antiqua* 4, 1998, pp. 99-106.

- “Culte impérial et sacralisation du pouvoir dans l’Empire romain”, en Ries, J. (ed.), *Les civilisations méditerranéennes et le sacré*, Trunhout, 2004, pp. 311-342.

- Vaglieri, D. s.v. “Concilium”, en *Diz. Epig.* II/1 p. 567.

- Valiño, E. *El comentario de Gayo al edicto provincial*, Valencia, 1979.

- Vázquez Seijas, M. “Posibles emisiones de Augusto en Lugo”, *Numisma* XIV, nº70, 1964, pp.

- Velaza, J. “La provincia Transduriana et l’organisation augustéenne des Hispanies”, en Piso, I. (ed.), *Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung*, Cluj-Napoca, 2008, pp. 107-121.

- Veyne, P. “Y a-t-il eu un impérialisme romain?”, *MEFRA* 87, 1975, pp. 793-855.

- *Le pain et le cirque: Sociologie historique d’un pluralisme politique*, París, 1976.

- *L’Empire greco-romain*, París, 2005.

- Vidman, L. *Étude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan*, Praga, 1960.

- Vigourt, A. – Lorient, X. – Bérenger, A. – Klein, B. (dir.) *Pouvoir et religion dans le monde romain, en hommage à J.-P. Martin*, París, 2006.

- Villaronga, L. *Numismática antigua de Hispania: iniciación a su estudio*, Barcelona, 1979.

- Wallace-Hadrill, A. “*Civilis Princeps*: Between Citizen and King”, *JRS* 72, 1982, pp. 32-48.

- Watson, G. T. *The Roman Soldier*, Bristol, 1969.

- Weber, M. *Economía y sociedad*, Madrid, 1967.

- Williams, W. “Antoninus Pius and the control of provincial embassies”, *Historia* 16, 1967, pp. 470-483.

Williamson, C. H. “A Roman Law from Narbonne”, *Athenaeum* 65, 1987, pp. 173-189.

Winsbury, R. *Pliny the Younger: A Life in Roman Letters*, Londres-Nueva York, 2014.

Wlassak, M. *Römische Prozessgesetze*, I, Leipzig, 1888.

Wolff, C. (ed.) *Le métier de soldat dans le monde romain*, Lyon, 2012.

Woolf, G. “World-systems Analysis and the Roman Empire”, *JRA* 3, 1990, pp. 44-58.

- *Becoming Roman: The Origins of Provincial Civilization in Gaul*, Cambridge, 1998.
- “Pliny’s Province”, en Bekker-Nielsen, T. (ed.) *Rome and the Black Sea Region: Domination, Romanisation, Resistance*, Aarhus, 2006, pp. 93-108.

Zanker, P. *Augusto y el poder de las imágenes*, Madrid, 2005 (Munich, 1986).

Zarzalejos, M^a. M. – Hevia, P. – Mansilla, L. (coords.), *Paisajes mineros antiguos en la Península Ibérica: Investigaciones recientes y nuevas líneas de trabajo*, Madrid, 2012.

Zucca, R. *Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto il dominio romano*, Roma, 1998.

ANEXO I: *FASTI* DE LOS GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS HISPANAS
DURANTE EL PRINCIPADO (27 A.C.-235 D.C.)

Este elenco pretende ser una actualización general de los *Fasti Hispanienses* de G. Alföldy en lo que se refiere a los gobernadores. En él recogemos las novedades que han aportado los nuevos descubrimientos epigráficos que se han producido desde su publicación en 1969, algunas de las cuales fueron asumidas o propuestas por el propio sabio húngaro en una de sus últimas contribuciones²¹⁴⁶. Sin embargo, no se trata de una revisión exhaustiva, lo cual merecería una monografía. Aceptamos, en general, la cronología propuesta por Alföldy para cada gobernador y su teoría de que los mandatos de los *legati Augusti pro praetore* de las provincias imperiales durarían una media de tres años. Pero no siempre coincidimos con su interpretación de ciertos testimonios –por ejemplo el Edicto de El Bierzo y la nueva provincia Transduriana– y, por tanto, el lector hallará algunos cambios en la composición de las listas. También se introducen otras modificaciones –de fechas o nombres– aceptadas hoy por la historiografía y alguna propuesta propia. Los cambios con respecto a los *Fasti Hispanienses* de 1969 están remarcados en negrita y van acompañados de una nota a pie de página en la que se remite a la edición o a los estudios de referencia utilizados. Sólo mencionamos a los gobernadores cuyo nombre propio se ha preservado, aunque sea parcialmente. Cuando uno de estos personajes gobernó varias de las provincias hispanas se indica a continuación de su nombre entre corchetes.

Apunte sobre la cronología:

Las fuentes no nos permiten conocer con seguridad la fecha en que los gobernadores de Hispania llegaban a su provincia, hecho que estaría, además, sujeto a variaciones causadas tanto por los imprevistos del viaje como por los acontecimientos políticos. Sin embargo, como ha señalado R. J. A. Talbert, lo más probable es que se produjera en general a mediados del verano, aunque no existía una norma estricta²¹⁴⁷.

²¹⁴⁶ G. Alföldy, “Fasti und Verwaltung der hispanischen Provinzen”, en R. Haensch – J. Heinrichs (Hg.), *Herrschen und Verwalten: der Alltag des römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, Colonia-Weimar-Viena-Böhlau, 2007, pp. 325-356; G. Alföldy – J. M. Abascal – R. Cebrián, “Nuevos monumentos epigráficos del foro de Segóbriga. Parte primera: inscripciones votivas, imperiales y de empleados del Estado romano”, *ZPE* 143, 2003, pp. 255-274, nº5.

²¹⁴⁷ R. J. A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, pp. 497-498. Agrícola llegó a Britania a mediados del verano: *Hunc Britanniae statum, has bellorum uices media iam aestate transgressus Agricola inuenit* (Tac. Agr. 18, 1). En cambio, Plinio el Joven entró en Bitinia el 17 de septiembre:

LEGATI AVGVSTI PRO PRAETORE PROVINCIAE HISPANIAE CITERIORIS

| <u>Cronología</u> | <u>Nombre</u> |
|---|--|
| 27-24 a.C. | <i>Caius Antistius Vetus</i> |
| 24-22 a.C. | <i>Lucius Aelius Lamia</i> |
| 22-19 a.C. | <i>Caius Furnius</i> |
| 19-16 a.C. | <i>Publius Silius Nerua</i> |
| --- | --- |
| Aprox. 13-10 a.C. | <i>Marcus Licinius Crassus Frugi</i> |
| Aprox. 10-7 a.C. | <i>Lucius Domitius Ahenobarbus</i>²¹⁴⁸ |
| Aprox. entre 7-4 a.C. (con muchas dudas) | <i>Caius Asinius Gallus</i> |
| Aprox. 4-1 a.C. | <i>Paullus Fabius Maxumus</i> |
| Entre 1 a.C. y 9 d.C. | <i>Caius Calvisius Sabinus</i>²¹⁴⁹ |
| 9/10 d.C. | <i>Cnaeus Calpurnius Piso</i> |
| ¿11/12? | <i>Aulus Caecina Seuerus</i> |

Rursus, cum transissem in orarias nauculas, contrariis uentis retentus aliquanto tardius quam speraueram, id est XV Kal. Octobres, Bithyniam intraui (Ep. X, 17a, 2).

²¹⁴⁸ G. Alföldy, “Fasti und Verwaltung...” cit. pp. 339-341.

²¹⁴⁹ Alföldy – Abascal – Cebrián, “Nuevos monumentos...” cit. pp. 261-265, nº 5.

| | |
|-------------------------------|---|
| 10/12-14 | <i>Marcus Aemilius Lepidus</i> |
| --- | --- |
| 23?-25 d.C. | <i>Lucius? Calpurnius Piso</i> |
| --- | --- |
| 40-41 d.C. | <i>Caius Appius Silanus</i> |
| --- | --- |
| 60-68 d.C. | <i>Lucius Liuius Ocella Seruius Sulpicius Galba</i> |
| 68-69 d.C. | <i>Cluius Rufus</i> [mando extraordinario sobre toda Hispania] |
| 70?-73 d.C. | <i>Tiberius Plautius Siluanus Aelianus</i> |
| 73-75? | <i>Quintus Vibius Crispus</i> |
| 75-78 | <i>Titus Aurelius Fulvus</i> |
| 78?-81 ²¹⁵⁰ | <i>Caius Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus</i> |
| 81?-84? | <i>Marcus Arrecinus Clemens</i> |
| 85/86-89/90 | <i>Lucius Pompeius Vopiscus Caius Arruntius Catellius Celer</i> ²¹⁵¹ |

²¹⁵⁰ W. Eck, "Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 (1)", *Chiron* 12, 1982, pp. 281-362, pp. 302-304, acepta la fecha propuesta por Alföldy para el final de su mandato, pero retrasa al 78 su inicio.

| | |
|-------------------------------|---|
| | [Antes fue gobernador de la Lusitania] |
| --- | --- |
| 100-103 ²¹⁵² | <i>Aulus Cornelius Palma Frontonianus</i> |
| --- | --- |
| Bajo Adriano | <i>Marcus Lollius Paullinus Decimus Valerius Asiaticus Saturninus</i> ²¹⁵³ |
| Entre 123 y 133 aprox. | <i>Caius Minicius Fundanus</i> ²¹⁵⁴ |
| Ca. 133 | <i>Iunius Homullus</i> |
| --- | --- |
| ?-145 | <i>Cornelius Priscianus</i> |
| Entre 145 y 160 | <i>Quintus Iunius Rusticus</i> ²¹⁵⁵ |
| Entre 145 ó 155 y 161 | <i>Lucius Venuleius Apronianus Octavius Priscus</i> |

²¹⁵¹ Eck, “Jahres- und Provinzialfasten... (1)” cit. pp. 310-316 y nt. 310, identifica al Céler mencionado por Marcial (*Epig.* VII, 52) con el que fuera gobernador de la Lusitania en 75-77, corrigiendo la interpretación de Alföldy, *Fasti Hispanienses* pp. 76-78, que lo había catalogado como *iuridicus*, identificándolo con (M. Maecius?) Celer. Cayo Arruncio Catelio Céler fue cónsul sufecto en 77/78 d.C.

²¹⁵² Eck, “Jahres- und Provinzialfasten... (1)” cit. pp. 332-338, nt. 204, sitúa su gobierno entre mediados del 99 (justo en el año de su consulado ordinario) y el 102.

²¹⁵³ Eck, “Jahres- und Provinzialfasten... (2)”, cit. p. 197, nt. 543 y p. 220.

²¹⁵⁴ F. Beltrán Lloris, “(C.) Mi[nicio Fund]ano y [¿C. Minicio?] Fundano Augustano Alpino, gobernador y legado jurídico de la Hispania Tarraconense en época de Adriano”, en M. L. Caldelli – G. L. Gregori (cura) *Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo*, Roma, 2014, pp. 727-734, esp. p. 732. Véase también C. Castillo, “La Hispania de Adriano: nuevos datos”, en F. J. Navarro (ed.) *Pluralidad e integración en el mundo romano*, Pamplona, 2010, pp. 9-14, esp. pp. 11-13.

²¹⁵⁵ *HEp* 9, 1999, 409. Véase también: J. Sánchez-Lafuente Pérez, “Quintus Iunius Rusticus, Gobernador de Hispania Citerior bajo Antonino Pío”, en J. M. Nieto Ibáñez (coord.), *Lógos hellenikós. Homenaje al profesor Gaspar Morocho Gayo*, vol. 1, León, 2003, pp. 557-578, aunque no precisa ninguna fecha dentro del principado de Antonino Pío.

| | |
|----------------------------------|---|
| | |
| 161-164 | <i>Lucius Octavius Cornelius Saluius Iulianus Aemilianus</i> ²¹⁵⁶ |
| 164-167 | <i>Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio</i> |
| 171-172 | <p><i>Caius Aufidius Victorinus Mul[uius ---- Mar]cellinus Rhesius Pel[---- Nu]m[i]sius Rufus Arrius Paul[inus? ---- Camil]lus (?) Iust[inus Co]cceius Gall[us]</i></p> <p>[Gobernó la Hispania Citerior conjuntamente con la Bética para hacer frente a la invasión de <i>mauri</i>]</p> |
| Ca. 189-192 | <i>Quintus Hedi Rufus Lollianus Gentianus</i> ²¹⁵⁷ |
| 192?-197 | <i>Lucius Nouius Rufus</i> |
| 197-198/200 | <i>Tiberius Claudius Candidus</i> |
| 198/200-208/209 | <i>Titus Flavius Titianus</i> |
| 198/200-208/209 | <i>Marcus Maecius Probo</i> |
| 208/209-211/212 | <i>Marcus Nummius Vmbrius Primus Senecio Albinus</i> |
| Finales s. II-inicios III | <p><i>Caius? Calpurnius Rufinus</i>²¹⁵⁸</p> <p>[Existen dudas acerca de si este senador fue gobernador]</p> |
| --- | --- |

²¹⁵⁶ Se trata del famoso jurista.

²¹⁵⁷ Alföldy, “Fasti und Verwaltung...” cit. p. 341, corrigió la cronología que había propuesto en *Fasti Hispanienses* p. 64 (202-205), aceptando la hipótesis de M. Christol, “La carrière de Q. Hedi Rufus Lollianus Gentianus”, *REA* 33, 1981, pp. 75-84, esp. pp. 77-78.

²¹⁵⁸ *HEp* 6. 1996, 1080-1084. Cf. Alföldy, “Inscripciones, sacrificios y misterios: el santuario rupestre de Panóias/Portugal (Informe preliminar)” *Madrider Mitteilugen* 36, 1995, pp. 252-258 y “Die Mysterien von Panóias (Vila Real, Portugal)” *Madrider Mitteilungen* 38, 1997, pp. 176-246.

| | |
|---|--|
| | |
| 214-217 | <i>Caius Iulius Cerealis</i> ²¹⁵⁹ |
| --- | --- |
| Bajo Heliogábalo (218-222) | <i>Caius Iunius Faustinus Placidus Postumianus</i> |
| Bajo Alejandro Severo (222-235) | <i>Quintus Atrius Clonius</i> |
| Finales del principado de Alejandro Severo | <i>(Tiberius Iulius?) Pollienius Auspex</i> |

LEGATI AVGVSTI PRO PRAETORE PROVINCIAE TRANSDURIANAЕ (22-15/13 a.C.)

| | |
|-------------------|--|
| <u>Cronología</u> | <u>Nombre</u> |
| 22-19 a.C. | <i>Lucius Sestius Quirinalis</i> ²¹⁶⁰ |
| 19-15 a.C. | |
| 15-14/13 a.C. | |

PROVINCIA HISPANIA SVPERIOR (214-235?)

²¹⁵⁹ Primer gobernador conocido de la provincia *Hispania Noua Citerior Antoniniana*; es decir, de la Hispania Citerior sin la *Gallaecia* (convertida en la provincia Hispania Superior). La epigrafía muestra que la provincia recuperó su vieja denominación (Hispania Citerior) tras la muerte de Caracala, a pesar de que la *Gallaecia* no parece haber vuelto a formar parte de ella hasta Maximino el Tracio (235 d.C.).

²¹⁶⁰ P. López Barja, “La provincia Transduriana”, en F. J. Sánchez-Palencia – J. Mangas, *El edicto del Bierzo: Augusto y el noroeste de Hispania*, León, 2000, pp. 31-45.

LEGATI AVGVSTI PRO PRAETORE PROVINCIAE HISPANIAE VLTERIORIS

| <u>Cronología</u> | <u>Nombre</u> |
|-------------------|---|
| 27?-22 a.C. | <i>Publius Carisius</i> |
| --- | --- |
| ¿15-13 a.C.? | <i>Marcus Petrucidius</i> ²¹⁶¹ |

LEGATI AVGVSTI PRO PRAETORE PROVINCIAE LVSITANIAE

| | |
|-------------------------------|---|
| Época augustea Post 2 a.C. | <i>Quintus Articuleius Regulus</i> |
| --- | --- |
| Época augustea o tiberiana | <i>Lucius Caecilius Rufus</i> ²¹⁶² |
| 21-31 d.C. | <i>Lucius Fulcinus Trio</i> |
| 31-39 | <i>Caius Vmmidius Durmius Quadratus</i> |
| 39?-44/45 | <i>Lucius Caluentius Vetus Carminius</i> |
| 46-? | <i>Marcus Porcius Cato</i> |
| --- | --- |

²¹⁶¹ J. González, “M. Petrucidius M. f. legatus pro pr”, en *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma, 2008, pp. 340-346; *HEp.* 15, 2006, nº 144-151. Ya tomado como gobernador de la Bética por C. Castillo, *Prosopographia Baetica*, Pamplona, 1965, p. 216.

²¹⁶² *HEp.* 4, 1994, 159 (Mengabril, Badajoz): *L(ucio) Caecilio L(uci) f(ilio) / Sca(ptica) Rufo / legato pro(praetore) pr(ouincia)*.

| | |
|---|---|
| | |
| 58-68 | <i>Marcus Saluius Otho</i> |
| 68-69 | <i>Cluvius Rufus</i> [mando extraordinario sobre toda Hispania] |
| --- | --- |
| 75-77 ²¹⁶³ | <i>Lucius Pompeius Vopiscus Caius Arruntius Catellius Celer</i> |
| Finales de época flavia Post 78 d.C. | <i>Quintus Acutius Faienanus</i> ²¹⁶⁴ |
| Finales s. I-101 d.C. | <i>Lucius Arruntius Stella</i> ²¹⁶⁵ |
| --- | --- |
| 119?-121 | <i>Caius Calpurnius Flaccus</i> |
| --- | --- |
| 128 | <i>Caius Oppius Sabinus Iulius Nepos Manius Vibius Sollemnis Seuerus</i> [Años después fue procónsul de la Bética] |
| --- | --- |

²¹⁶³ Fechas seguidas por Eck, “Jahres- und Provinzialfasten... (1)” cit. pp. 296-299, quien entiende, sin embargo, que o bien abandonó su provincia en septiembre del 77 (como muy tarde) o bien pudo haber sido *consul in absentia* en 77/78 (p. 296, nt. 58). Esta última hipótesis resulta extraña y por ello optamos por situar el fin de su mandato a finales del 77 d.C. Los tres años en el gobierno de una provincia son sólo una estimación orientativa.

²¹⁶⁴ A. U. Stylow, “Más hermas”, *Anas* 2-3, 1989-1990, pp.195-205, esp. pp. 199-201.

²¹⁶⁵ J. C. Saquete Chamizo – J. Márquez Pérez, “Nuevas inscripciones romanas de Augusta Emerita: La necrópolis del Disco”, *Anas* 6, 1993, pp. 51-75, nº 11.

| | |
|-------------------------|--|
| | |
| Bajo Antonino Pío | <i>Caius Iauolenus Caluinus Geminius Kapito Cornelius Pollio Squilla Quintus Vulkacius Scuppidius Verus</i> [Años después fue procónsul de la Bética] |
| 154 | <i>Aulus Auillius Vrinatius Quadratus</i> |
| Antes de 155-159 | <i>Lucius Roscius Aelianus Paculus</i>²¹⁶⁶ |
| --- | --- |
| ?-185? | <i>Sextus Tigidius? Perennis</i> ²¹⁶⁷ |
| 185-188 | <i>Cornelius Repentinus?</i> |
| 188-191 | <i>Publius Septimius Geta</i> |
| --- | --- |
| 194-197 | <i>Caius Caesonius Macer Rufinianus</i> |
| 197-200 | <i>Caius Iunius Faustinus Placidus Postumianus</i> |
| 200/209 | <i>D. [Iun]ius? Coelianus</i> ²¹⁶⁸ |
| 210-213 | <i>Sextus Furnius Iulianus</i> |

²¹⁶⁶ CIL II, 468 y CIL V, 6657. Cf. M. González Herrero, “Origen familiar y procedencia: El ejemplo de la ‘rama A’ de la familia Roscia”, en *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae* (Barcelona, 3-8 septembris 2002), Barcelona, 2007, pp. 621-627.

²¹⁶⁷ Lectura problemática: *HEp* 14, 2005, 448 a.

²¹⁶⁸ Sobre la problemática de la lectura del *praenomen* y *nomen* de este personaje: *HEp* 14, 2005, 448 b, donde A. Canto propone *Drusus [Valer]ius Coelianus*.

| | |
|----------|----------------------------------|
| 225-227? | <i>Rutilius Pudens Crispinus</i> |
| --- | --- |

PROCONSVLES PROVINCIAE HISPANIAE VLTERIORIS BAETICAE

| <u>Cronología</u> | <u>Nombre</u> |
|--|--|
| Época augustea | <i>Aulus Cottius</i> |
| 7/6 a.C. | <i>Publius Petronius Turpilianus</i>²¹⁶⁹ |
| --- | --- |
| Antes del 5 d.C. | <i>Caius Vibius Postumus</i>²¹⁷⁰ |
| --- | --- |
| 20/21 ó 21/22 | <i>Numerius Vibius Serenus</i> |
| 22/23 | <i>Marcus Granus Marcianus</i>²¹⁷¹ |
| --- | --- |
| ¿Período augusteo-tiberiano?²¹⁷² | <i>[T(itus) Fiscilius?] Proculus</i>²¹⁷³ |

²¹⁶⁹ *Iusiurandum Conobariensium*: González, “The First Oath...” cit.

²¹⁷⁰ F. J. Navarro, “Nuevos magistrados senatoriales en la Península Ibérica. Un complemento a los Fasti Hispanienses”, en J. González (ed.) *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano*, Sevilla, 1999, pp. 443-465, esp. pp. 444-445.

²¹⁷¹ *AE* 1990, 222; G. Camodeca, “Problemi di storia sociale in Alife romana. Le gentes senatorie degli Aedii e dei Granii e i ceti dirigenti del primo principato”, en *Il territorio alifano: archeologia, arte, storia (Convegno 26 aprile 1987)*, Minturne, 1990, pp. 123-143; Navarro, “Nuevos magistrados...” cit. pp.453-454.

²¹⁷² Propuestas de datación: época augustea: Castillo, *Prosopographia Baetica*, cit. p. 217, y L. Sensi en M. Matteini Chiari (cura) *Raccolta di Cannara. Materiali archeologici. Monete. Dipinti e sculture*, Perugia, 1992, n° 58, pp. 99-100; época augusteo-tiberiana: A. Balil, “Los procónsules de la Bética”, *Zephyrus* 13, 1962, pp. 75-89, esp. p. 77; época julio-claudia: Alföldy, *Fasti Hispanienses* pp. 154-155; 35/36 d.C.: L. Pons Pujol, “*Proculus*, legado en la *Narbonensis* y procónsul de la Bética (*CIL* XI, 7173,

| | |
|--------------------------------------|---|
| 37/38 | <i>Caius Caetronius Miccio</i> |
| --- | --- |
| 43/44 | <i>Vmbonius Silo</i> |
| --- | --- |
| ca. 64/65 ó 65/66 | <i>Marcus Vlpius Traianus</i> ²¹⁷⁴ |
| --- | --- |
| 67/68 | <i>Obultronus Sabinus</i> |
| 68/69 | <i>Cluius Rufus</i> [mando extraordinario sobre toda Hispania] |
| --- | --- |
| 78/79 | <i>Marcus Sempronius Fuscus</i> |
| 79/80 | <i>Caius Cornelius Gallicanus</i> |
| --- | --- |
| 83/84 u 84/85 ²¹⁷⁵ | <i>Lucius Antistius Rusticus</i> ²¹⁷⁶ |
| --- | --- |
| 91/92 ²¹⁷⁷ | <i>Baebius Massa</i> |

5172)” en *Idem* (ed.) *Gallia et Hispania: dos provincias del Occidente romano*, Barcelona, 2010, pp. 153-163, esp. p. 160.

²¹⁷³ Reconstrucción de L. Sensi, *Idem*. Pons Pujol, “*Proculus...*” cit. pp. 157-159, la juzga muy débil.

²¹⁷⁴ G. Alföldy, “Trajano padre y la inscripción del ninfeo de Mileto” en J. González (ed.) *Trajano, emperador de Roma*, Roma, 2000, pp. 7-24, esp. p. 21; “Fasti und Verwaltung...” cit. p. 326, t. 8.

²¹⁷⁵ Según Eck, “Jahres- und Provinzialfasten...(1)” cit. p. 307: 83/84.

²¹⁷⁶ *CIL* II²/5, 302; Cortés Bárcena, *Epigrafía en los confines...* cit. p. 74.

²¹⁷⁷ Alföldy, *Fasti Hispanienses*, p. 161, propuso 92/93, pero a nuestro parecer resulta más natural la corrección de Eck, “Jahres- und Provinzialfasten...(1)” cit. p. 319, que lo sitúa en 91/92, dado que el juicio contra Masa tuvo lugar en agosto del 93. A. N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny: A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966, p. 445, ya señaló en su momento que “his proconsulship cannot have been later than 92-93, and might have been a year or two earlier; delay was posible as in the cases of Marius and Classicus”.

| | |
|---|---|
| --- | --- |
| 96/97 | [...] <i>Gallus</i> |
| 97/98 | <i>Caecilius Classicus</i> |
| --- | --- |
| Ca. 99/100 ²¹⁷⁸ | <i>Galeo Tettienus Seuerus Marcus Eppuleius Proculus Tiberio Caepio Hispo</i> |
| 100/101 | <i>Quintus Baebius Macer</i> |
| 101/102 | <i>Instanius Rufus</i> |
| --- | --- |
| 107/108 | [T(itus?)] <i>Calestrius Tiro</i> |
| Finales de época flavia-inicios siglo II | [Cn(aeus) Baebius?] Silanus Iustus Anto[nius?]²¹⁷⁹ |
| 122/123 | <i>Caius Iulius Proculus</i> ²¹⁸⁰ |
| 123/124 ²¹⁸¹ ó 124/125 | <i>Publius Tullius Varro</i> |
| --- | --- |
| Antes del 129?²¹⁸² | <i>Lucius? Flavius? Arrianus</i>²¹⁸³ |

²¹⁷⁸ Eck, “Jahres- und Provinzialfasten...(1)” cit. pp. 324-325, nt. 174, propone adelantar su proconsulado al 95/96 y situar su *praefectura aerarii militaris* entre éste y el consulado suffecto del 101 ó 102. Sin embargo, eso supondría saltarse el orden de honores seguido en la inscripción.

²¹⁷⁹ *CIL* II²/14, 330. En esta nueva edición del *CIL* Alföldy señala acertadamente que podría tratarse del mismo personaje de *CIL* VI, 1361, que él ya había catalogado en *Fasti Hispanienses* pp. 172 y 272 pero sin relacionarlo con esta inscripción.

²¹⁸⁰ De ser correcta la hipótesis de Alföldy, *Fasti Hispanienses* pp. 166-167, este consular habría gobernado de forma extraordinaria la Bética al haber fallecido súbitamente el procónsul ordinario de esa provincia. Su designación se debería a que Próculo formaría parte del séquito de Adriano en su viaje por Hispania y era un hombre de confianza del emperador (como revelan los mandos especiales que se mencionan en *cursus honorum*: *CIL* X, 6658).

²¹⁸¹ Fecha por la que se decanta W. Eck, “Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 (2)”, *Chiron* 13, 1983, pp. 147-237, esp. p. 158, nt. 375.

²¹⁸² Sobre su cronología véase: Eck, “Jahres- und...” cit. p. 190, nt. 499.

| | |
|-------------------|--|
| | [Identificación poco segura ²¹⁸⁴] |
| Ca. 128/129 | <i>Cassius Agrippa</i> |
| --- | --- |
| 130/131 | <i>Caius Oppius Sabinus Iulius Nepos Manius Vibius Sollemnis Seuerus</i> [Antes fue gobernador de Lusitania] |
| Bajo Adriano | <i>Egnatius Taurinus</i> |
| Bajo Antonino Pío | <i>Caius Iauolenus Caluinus Geminius Kapito Cornelius Pollio Squilla Quintus Vulkacius Scuppidius Verus</i> [Antes fue gobernador de Lusitania] |
| Bajo Antonino Pío | <i>Aelius Marcianus</i> |
| Mediados s. II | <i>Publius Statius Paullus Postumius Iunior</i> |
| 159 | <i>Lucilius Africanus</i> ²¹⁸⁵ |
| --- | --- |
| 170/171 | <i>Publius Cornelius Anullinus</i> |
| 171-172 | <i>Caius Aufidius Victorinus Mul[uuius ---- Mar]cellinus</i> |

²¹⁸³ Se trata del Ἀρριανὸς ἀνθύπατος mencionado como autor de un epigrama griego grabado en un ara dedicada a Ártemis en Corduba: SEG 26, 1976-77, 1215; AE 1974, 370; HEp 7, 1997, 288. Fue identificado como el famoso Lucio Flavio Arriano por A. Tovar, “Un nuevo epigrama griego de Córdoba: ¿Arriano de Nicomedia, procónsul de la Bética?”, *Estudios sobre la obra de Américo Castro*, Madrid, 1971, pp. 401-412. Mantiene esta identificación Navarro, “Nuevos magistrados...” cit. p. 450, quien menciona un epígrafe de Capadocia en estado fragmentario en el que, dentro del *cursus honorum* de este importante senador, podría mencionarse su gobierno de una provincia hispana.

²¹⁸⁴ J. Beltrán Fortes, “Sobre la cronología del ara cordobesa del procónsul Arriano”, *Mainake* 19, 1988, pp. 91-100, y “Arriano de Nicomedia y la Bética, de nuevo”, *Habis* 23, 1992, pp. 171-196, ha mostrado la debilidad de los argumentos a favor de la identificación de este procónsul como Lucio Flavio Arriano. Según este autor, la tipología del altar y la paleografía de su epígrafe permiten fecharlo en la primera mitad del siglo III d.C., aunque admite la posibilidad de que podría ser una copia de una dedicación precedente. En nuestra opinión, no existe una solución definitiva acerca de la identificación de este procónsul.

²¹⁸⁵ CIL II²/5, 1322: *Epistula Antonini Pii ad Obulculenses*.

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p><i>Rhesius Pel[---- Nu]m[i]sius Rufus Arrius Paul[inus? ---- Camil]lus (?) Iust[inus Co]cceius Gall[us]</i></p> <p>[Gobernó la Hispania Citerior conjuntamente con la Bética para hacer frente a la invasión de <i>mauri</i>]</p> |
| --- | --- |
| 183 | <i>Caius Memmius Fidus Iulius Albius</i> |
| Siglo II | <i>Marcus Acenna Saturninus</i> |
| 2ª mitad s. II-inicios III | <i>Quintus Caecilius Laetus</i> |
| 2ª mitad s. II-inicios III | <i>Lucius Sempronius C[----] Celsus Seruilianus Fabianus</i> |
| Bajo Caracalla (215?) | <i>Caecilius Aemilianus</i> |
| Siglo III (<i>ante</i> 235?) | <i>Lucius Claudius Pollio Iulianus Iulius Gallicanus</i> |

ANEXO II: EPIGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS HISPANAS RELATIVA A SUS
GOBERNADORES

En este apéndice recogemos todos los testimonios epigráficos hallados en la Península Ibérica y las islas Baleares que mencionan a los gobernadores de las provincias hispanas; es decir, los epígrafes que han aparecido en el territorio que éstas englobaban. Quedan fuera, por tanto, las inscripciones relativas a sus gobernadores que hemos usado en nuestro estudio pero que proceden de otras provincias del imperio, de Italia o de Roma. También se han excluido aquellos epígrafes hallados en los territorios de la antigua Hispania de los que se deduce la intervención de sus gobernadores pero que no la explicitan –por ejemplo, las dos inscripciones dedicadas por parte de Sagunto y Segóbriga a los hijos de sendos gobernadores de los que habrían heredado el patronato por el que son honrados. En cambio, sí hemos decidido incluir los epígrafes en los que la mención del gobernador es dudosa pero admisible (como en la del puente de Alcantarilla) y aquéllos en que su protagonista ha sido identificado verosímilmente como tal pero no se ha podido confirmar (por ejemplo, Julio Próculo en el *terminus* de Villanueva de Córdoba).

En la presentación de estos testimonios el orden adoptado es el siguiente: En cada provincia primero se mencionan los epígrafes hallados en la capital, luego en las sedes conventuales y, finalmente, en el resto de ciudades por orden alfabético en función del topónimo antiguo, excepto en aquéllas localizaciones que no se correspondan con ninguna ciudad antigua conocida (por ejemplo, el Cabo Torres). En los casos de ciudades en las que hayan sido hallados varios epígrafes éstos han sido ordenados cronológicamente. Los capítulos citados de la *lex Vrsonensis* y la *lex Irnitana* han sido dispuestos por separado con el fin de facilitar su consulta. En el caso de los capítulos de las leyes de los municipios flavios hemos optado por recoger solamente el texto de la copia de *Irni* –por ser la más completa y la que hemos tratado en detalle– e indicar, cuando corresponde, su paralelo con las otras leyes municipales béticas conocidas. En cuanto a los miliarios del gobernador C. Calpestano... por pragmatismo hemos optado por recoger sólo la inscripción mejor conservada de uno de ellos dado que todos responden al mismo modelo, pero mencionamos todos los lugares en que aparecieron.

En cada epígrafe citamos sólo la edición seguida. En los casos en que haya dos lecturas de una misma pieza que presenten variantes reseñables sin que exista consenso en torno a la más probable se recogen ambas.

PROVINCIA HISPANIA CITERIOR

Tarraco

1.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción funeraria |
| Lugar: | <i>Tarraco</i> (Tarragona), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| Soporte: | Lápida |
| Datación: | 13-10 a.C. |
| Lectura: | Faustus / Crassi Frugi seruus |
| Edición: | <i>RIT</i> 131 = <i>CIL</i> II, 4364. |

2.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción jurídica |
| Lugar: | <i>Tarraco</i> (Tarragona), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| Soporte: | <i>Tabula</i> de bronce. |
| Datación: | Reinado de Pértinax (193). |
| Lectura: | Imp(eratore) Caes(are) P(ublio) Heluio / Pertinace princip(e) / senatus, patre patriae / co(n)s(ule) II / Q(uinto) Sosio Falcone, / C(aio) Iulio Eruci- / o Claro co(n)s(ulibus) III Idus Febr(uarias). / Sententiam, quam tulit / L(ucius) Nouius Rufus leg(atus) Aug(usti) pr(o) / pr(aetore) u(ir) c(larissimus) inter compaganos ri-/ui Larensis et Val(eriam) Fauentinam / descriptam et propositam pr(idie) Non(as) / Nouembr(es) in u(erba) i(nfra) s(cripta). Rufus leg(atus) c(um) c(onsilio) c(ollocutus) / decretum ex tilia recitauit: / Congruens est intentio mea qua / [---]tus proximae argumentis / [---] parte prolatis rei / [---] aput me actu<m> est de / [---] i]nspectio itaq[ue] / [---q]ui in priua[t---] / [---]a mox [---] / ----- |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /14, 989. |

3.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | <i>Tarraco</i> (Tarragona), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| Soporte: | Pedestal de estatua. |
| Datación: | Gentiano habría sido gobernador de la Citerior en ca. 189-192. |
| Lectura: | Q(uinto) Hedio L(uci) f(ilio) Pol(lia tribu) / Rufo Lolliano / Gentiano auguri, co(n)s(uli), / proco(n)s(uli) Asiae, censitori / prou(inciae) Lugd(unensi) ítem Lugdu-/nensium, comiti Seueri et / Antonini Augg(ustorum) ter, leg(ato) Augg(ustorum) / prou(inciae) H(ispaniae) C(iterioris) ítem censitori / H(ispaniae) C(iterioris), cur(atori) c(iuitatis) splend(idissimae) Pu-/teolanor(um) et Veliter-/nor(um), quaest(ori) cand(idato), praet(ori) / cand(idato), leg(ato) leg(ionis) VII G(eminae) P(iae) F(elicis) III/uiro a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo), / Fab(ius) Marcellus. |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /14, 984 = <i>RIT</i> 139 |

4.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | <i>Tarraco</i> (Tarragona), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| Soporte: | Pedestal de estatua. |
| Datación: | Gentiano habría sido gobernador en 189-192. |
| Lectura: | Q(uinto) Hedio [L(uci) f(ilio) Pol(lia tribu)] / Lolliano [Genti]ano leg(ato) [Augg(ustorum duorum)] / pr(o) pr(aetore) p(rouinciae) [H(ispaniae) C(iterioris)] / praesidi o[ptimo] / cornicula[rii] / eius et com[mentar(ienses)] / et specul[atores] / leg(ionis) VII Gem(inae) [P(iae) F(elicis)]. Lado izquierdo del pedestal: Cornicul(arii): / Pompeius Agri[ppa], / Iulius Auitus. / |

| | |
|----------|---|
| | Comm(entarienses): / C(aius) Iulius Crassus / T(itus) Publius Lupus / Specul(atores):/ Q(uintus) Alfius Ianuarius, / C(acius) Valerius Marcianus, / L(ucius) Maenaius Sementinus, / C(aius) Caecilius Restitutus, / C(aius) Aurelius Octavius, / C(aius) Aufidius Hilarus, / L(ucius) Aurelius Phileterus, / L(ucius) Alfidius Urbanus, / C(aius) Iulius Florentinus, / L(ucius) Sempronius Firmanus. |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /14, 985 = <i>RIT</i> 140 |

5.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción honorífica. |
| Lugar: | <i>Tarraco</i> |
| Soporte: | Pedestal |
| Datación: | Cándido fue gobernador en ca. 197-198/200 |
| Lectura: | Tib(erio) Cl(audio) Candido co(n)s(uli) / XVuir(o) s(acris) f(aciundis) leg(ato) Augg(ustorum) / pr(o) pr(aetore) prouinc(iae) H(ispaniae) C(iterioris) / et in ea duci terra marique / aduersus rebelles hh(ostes) pp(ublici) / item Asiae item Noricae / duci exercitus Illyrici / expeditione asiana item parthica / ítem gallica logistae ciuitatis / splendidissimae Nicomedensium / ítem Ephesiorum leg(ato) pr(o) pr(aetore) prouinc(iae) / Asiae cur(atori) ciuitatis Teanensium / allecto inter praetorios ítem / tribunicios proc(uratori) XX hered(itatium) per / Gallias Lugdunensem et Bel/gicam et utramq(ue) Germaniam / praeposito copiarum expediti/onis germanicae secundae / trib(un)o mil(itum) leg(ionis) II Aug(ustae) praefecto / coh(o)rtis secundae ciuium / Romanorum / Silius Hospes hastatus leg(ionis) X / Geminae strator eius / optimo praesidi. |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /14, 975 |

6.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | <i>Tarraco</i> (Tarragona), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| SopORTE: | Pedestal de estatua. |
| Datación: | Época severiana. Titus Flavius Titianus habría sido gobernador en 199-202, o bien en 205-208. |
| Lectura: | <p>T(ito) Fl(auido) Titiano / leg(ato) Augg(ustorum) nn(ostorum) / pr(o) pr(aetore) c(larissimo) u(iro) / proconsuli / prou(inciae) Africae / praesidi / prou(inciae) Hisp(aniae) / Citerioris / M(arcus) Aurelius / Modestinus / [---]</p> <p>En el lado izquierdo del pedestal hay dos listas de personas pertenecientes al <i>officium</i> del gobernador:</p> <p>a)</p> <p>[---] (<i>vacat</i>) [---]on / [Val]erius(?) (<i>vacat</i>) Restitutus / [C]aecilius (<i>vacat</i>) Dexter / Granus (<i>vacat</i>) Sabinianus / Aurelius (<i>vacat</i>) Tyrannus / Laberius (<i>vacat</i>) Marcianus / Flavius (<i>vacat</i>) Atimetus? / Manlius (?) (<i>vacat</i>) Cornelius / Valerius (<i>vacat</i>) Adiutor / [Ca]ssiu[s] (?) (<i>vacat</i>) Suau[i]s / Cornelius (<i>vacat</i>) [Fel]ix / Aelius (<i>vacat</i>) [---]r[.]sta / Titu[leiu]s (?) (<i>vacat</i>) Vio[le]n[s] / [---] (<i>vacat</i>) IOI[---] / [---] (<i>vacat</i>) IV[---]S / [---] (<i>vacat</i>) [.I]I[---]S / [---] (<i>vacat</i>) [---] / [---] (<i>vacat</i>) [---] / [---].</p> <p>b)</p> <p>Aelius(?) (<i>vacat</i>) [---]an[i]anus / Peduc(a)eus (<i>vacat</i>) Pr(a)epos[i]tus / Calidius (<i>vacat</i>) Melior / Annaeus (<i>vacat</i>) [Secu]ndus / [---]us (<i>vacat</i>) Melepo[n]us(?) / [---]s (<i>vacat</i>) Satyrius / Ael[ius] (?) (<i>vacat</i>) Philotimus / Valerius (<i>vacat</i>) Maximinus / Au[reliu]s (?) (<i>vacat</i>) Restitutus / [---] (<i>vacat</i>) Aurelianus / [---] (<i>vacat</i>) [---]ianus / [---] (<i>vacat</i>) Va[le]n[s] / [---] (<i>vacat</i>) Celsus / [---] (<i>vacat</i>) Hilarianus / [---] (<i>vacat</i>) Barbarus / Minius (?) (<i>vacat</i>) Rufus / Valerius (<i>vacat</i>) Iulius / [---] (<i>vacat</i>) Domitianus / [---].</p> |

| | |
|----------|---|
| | |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /14, 979 = <i>RIT</i> 135. |

7.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción votiva. |
| Lugar: | <i>Tarraco</i> (Tarragona), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| Soporte: | Ara? |
| Datación: | 198/200-208/209? |
| Lectura: | I(oui) O(ptimo) M(aximo) / Iunoni / Mineruae / Genio praetorii / consularis / Diis Penatibus / T(itus) Fl(auius) Titianus / leg(atus) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) / Postumia S[i]ria (?) / eius / dicauerunt. |
| Edición: | <i>RIT</i> 34 |

8.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | <i>Tarraco</i> (Tarragona), <i>colonia c. R.</i> , capital provincial |
| Soporte: | Pedestal? |
| Datación: | Principado de Alejandro Severo (222-235 d.C.) |
| Lectura: | Q(uinto) Atrio Clonio / leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / prouinciarum / Thraciae Cappadociae / Syriae Maioris / Hispaniae Citer(ioris) / Claudius Iustus (centurio) / leg(ionis) VII Gemin(ae) P(iae) Fel(icis) / Seuerianae / [[Alexandrianae]] / praesidi absti/nentissimo. |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /14, 972 = <i>RIT</i> 128. |

Bracara Augusta

9.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción votiva |
| Lugar: | <i>Bracara Augusta</i> (Braga), sede conventual. |
| Soporte: | Altar? |
| Datación: | 4-1 a. C. |
| Lectura: | Imp(eratori) Caesari diui f(ilio) Aug(usto) / pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XXI / sacrum / Bracaraugustani / Paulli Fabi Maxsimi leg(ati) pro pr(aetoris) / natali dedicata est |
| Edición: | <i>ILER</i> 1028 = <i>RAP</i> 477. |

10.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | <i>Bracara Augusta</i> (Braga), sede conventual. |
| Soporte: | Pedestal |
| Datación: | 39-42? |
| Lectura: | C(aio) Caetronio C(ai) [f(ilio)] / Cam(ilia) Miccioni tri(buno) / pl(ebis) pr(aetori) legato Aug(usti) [Hisp(aniae)] / C[ite]rioris leg(ato) Aug(usti) legi[o]/ni[s] II A[ugu]st(ae) proco(n)[s(uli)] / pr[ouin]ci(ae) B[ae]ticae / p[raef]ecto aerar(ii) mil[i]/t[aris prae]fecto reliquo/rum exigendorum popul[i] / Romani. / Ciues Romani qui nego/tiantur Bracaraugust[ae] |
| Edición: | <i>CIL</i> II, 2423. |

Carthago Noua

11.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica. |
| Lugar: | <i>Carthago Noua</i> (Cartagena), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , sede conventual. |
| Soporte: | Pedestal. |
| Datación: | Post 16 a.C. |
| Lectura: | P(ublio) Silio leg(ato) pro / pr(aetore) patrono / colonei. |
| Edición: | <i>DECAR</i> 45 = <i>CIL</i> II, 3414. |

12.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción jurídica |
| Lugar: | <i>Carthago Noua</i> (Cartagena), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , sede conventual. |
| Soporte: | Incierto. |
| Datación: | 133 d.C. (Alföldy, <i>Fasti Hispanienses</i> p. 26). |
| Lectura: | c]lausula / [- - -]a q(- - -) s(- - -) p(- - -) / [- - -]us quibus / [- - -]V reditum a / [- - - Ho]mulli leg(ati) Aug(usti) / [pr(o) pr(aetore) - - -] se praestare |
| Edición: | <i>DECAR</i> 46. |

Lucus Augusti

13.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Dedicación al emperador |
| Lugar: | <i>Lucus Augusti</i> (Lugo), sede conventual. |
| Soporte: | Fragmento de bloque de granito. |
| Datación: | 4-1 a. C. |
| Lectura: | [Romae et Augusto] / Ca[esari] / Paullus Fabius / Maxumus / legat(us) Caesaris. |
| Edición: | <i>IRPLu</i> 19 |

14.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción religiosa/honorífica |
| Lugar: | <i>Lucus Augusti</i> (Lugo), sede conventual. |
| Soporte: | Fragmento de bloque de granito. |
| Datación: | 4-1 a. C, cuando fue gobernador de la Tarraconense Paulo Fabio Máximo. |
| Lectura: | [Romae et Augusto] / Cae[sari] / Paullus F[abius] / Maxum[us] / legat(us) Caesaris. |
| Edición: | <i>IRPLu</i> 20. |

15.

| | |
|----------------------|--|
| Fuente: | Inscripción religiosa/honorífica |
| Lugar: | <i>Lucus Augusti</i> (Lugo), sede conventual. |
| Soporte: | Monolito de granito. |
| Datación: | 4-1 a. C. |
| Lectura propia: | Caesari / Paullus Fabius / Maxumus / legat(us) Caesaris |
| Lectura alternativa: | I(oui) O(ptimo) M(axumo) / Caesari / [P]aullus Fabius / Maxumus / legat(us) Caesaris. L. Gasperini, “Dal luco sacro al luco con insedimento humano”, en A. Rodríguez Colmenero (coord.). <i>Los orígenes de la ciudad en el Noroeste hispánico (Actas Congreso Internacional, Lugo 15-18 mayo 1996)</i> , Lugo, 1998, t. I, pp. 309-324. |

Agón

16.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Lex riui Hiberiensis</i> , col. III, ll. 29-33 y 44-47. |
| Lugar: | Agón (Zaragoza), <i>conuentus Caesaraugustanus</i> . |
| Soporte: | Bronce |
| Datación: | Principado de Adriano. |
| Lectura: | <p>ll. 29-33:</p> <p><i>[Si (?) quis (?) ab (?) aliquo (?) p]oenam ex hac lege petet, is a quo poe- /[na petita (?) fuerit (?)] uadimonium ad eum qui proxumae / [iurisdictio]ni (?) municipi aut coloniae praeerit / [promittat (?) --- pr]oxumae (?) rationis habita ex edicto Mi/[nici (?) Fund(?)]ani (?) leg(ati) Aug(usti) clarissimi uiri</i></p> <p>ll. 44-47:</p> <p><i>[Hanc legem -c. 4- Fu(?)]ndanus Augustanus Alpinus leg(atus) / [pr(o) (?) pr(aetore)? Imp(eratoris) Caes(aris) Tra]iani Hadriani Aug(usti) aditus a magis-/[tro pagi pagano]rum Caesaraugustanorum L(ucio) Man-/[lio (?) L(uci) f(ilio) (?) Ani(ensi tribu) (?) Mate(?)]rno sancxit(!) ratamque esse iussit.</i></p> |
| Edición: | F. Beltrán Lloris, “An Irrigation Decree from Roman Spain: The <i>Lex riui Hiberiensis</i> ”, <i>JRS</i> 96, 2006, pp.147-197, esp. p. 157; complementada con <i>Idem</i> , “(C.) Mi[nicio Fund]ano y [¿C. Minicio?] Fundano Augustano Alpino, gobernador y legado jurídico de la Hispania Tarraconense en época de Adriano”, en M. L. Caldelli – G. L. Gregori (cura) <i>Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo</i> , Roma, 2014, pp. 727-734 |

Aquae Flaviae

17.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción conmemorativa/honorífica |
| Lugar: | <i>Aquae Flaviae</i> (Chaves, Portugal), <i>conuentus Bracarensis</i> |
| Soporte: | Columna |
| Datación: | 79 d.C. |
| Lectura: | Imp(eratori) Caes(ari) Ve[sp(asiano) Aug(usto) pont(ifici)] / max(imo) trib(unicia) pot(estate) [X imp(eratori) XX p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) IX] / Imp(eratori) Vesp(asiano) Caes(ari) Au[g(usti) f(ilio) pont(ifici) trib(unicia) pot(estate)] / VIII imp(eratori) XIII co(n)s(uli) VII? / [[[Imp(eratori)? Domitiano? Caes(ari)? Aug(usti)? f(ilio)? ---]]] / [[[-----]]] / G(aio) Calpetano Ra[ntio Quirinali] / Val(erio) Festo leg(ato) A[ug(usti) pr(o) pr(aetore)] / D(ecimo) Cornelio Ma[eciano leg(ato) Aug(usti)] / L(ucio) Arruntio Max[imo proc(uratori) Aug(usti)] / leg(ioni) VII Gem(inae) [Fel(ici)] / ciuitates [X] / Aquiflavien[s(es) Aobrigenses] / Bibali Coel[erni Equaesii] / Interamic[i Limici Aebisoci?]/ Quarque[r]ni Ta[magani] |
| Edición: | <i>CIL</i> II, 2477 |

Cabo Torres

18.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción votiva. |
| Lugar: | Cabo Torres (Asturias), <i>conuentus Asturicensis</i> |
| Soporte: | Ara |
| Datación: | 9-10 d.C. |
| Lectura: | Imp(eratori) Caesari Augusto diui f(ilio) / co(n)s(uli) XIII, imp(eratori) XX, pont(ifici) max(imo) / patr(i) patriae, trib(unicia) pot(estate) XXXII / ----- / --- sacrum |
| Edición: | <i>CIL</i> II, 2703. |

Emporiae

19.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Tabella defixionis.</i> |
| Lugar: | <i>Emporiae</i> , (Ampurias, Gerona), <i>municipium</i> , <i>conuentus Tarraconensis</i> . Procedente de la necrópolis Ballesta, al oeste de la ciudad. |
| Soporte: | Lámina de plomo |
| Datación: | 75/78 d.C. |
| Lectura: | Cara a: Fuluus legatus Au-/gusti Rufus legatus / Augusti Maturus / proquator Augusti / legati atuocati ind[i]-/cetanroum Cara b: Consilium Fului / legati Olossi-/tani Campanus / Fidentinus Aug(usti) / [- --] o [---] |
| Edición: | <i>IRC III</i> , 172 (forma un grupo con 173 y 174; <i>vd. infra</i>). |

20.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Tabella defixionis</i> |
| Lugar: | <i>Emporiae</i> , (Ampurias, Gerona), <i>municipium</i> , <i>conuentus Tarraconensis</i> . Procedente de la necrópolis Ballesta, al oeste de la ciudad. |
| Soporte: | Lámina de plomo |
| Datación: | 75/78 d.C. |
| Lectura: | Cara a: Olossita[ni] / Titus Aurelius / Fuluus lega-/tus Augusti / Rufus legatus Au-/gus[ti] Cara b: Maturus proqura-/tor Augusti consi-/lium legati / legati Indiceta-/norum / {Indicetanoru[m]} |
| Edición: | <i>IRC III</i> , 173. |

21.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Tabella defixionis.</i> |
| Lugar: | <i>Emporiae</i> , (Ampurias, Gerona), <i>municipium</i> , <i>conuentus Tarraconensis</i> . Procedente de la necrópolis Ballesta, al oeste de la ciudad. |
| Soporte: | Lámina de plomo |
| Datación: | 75/78 d.C. |
| Lectura: | Cara a: [Ful]uus legatus / [Aug]usti Rufus lega-/ [tus Aug]usti Matu-/ [rus] procurator / [Aug]usti consilium / legati atuoca-/ ti Indicetano-/ {ti indicetano}/rum. Cara b: [Oloss]itani / Sempronius / Campanus Fi-/ dentinus atue-/ {ue]rsari / mei inique / ne int[er]sint. |
| Edición: | <i>IRC</i> III, 174. |

Ilici

22.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción honorífica. |
| Lugar: | <i>Ilici</i> , <i>colonia ciuium Romanorum</i> , <i>conuentus Carthaginiensis</i> . |
| Soporte: | Pedestal de mármol. |
| Datación: | <i>Post</i> 26 a.C. |
| Lectura: | T(ito) Statilio / Tauro imp(eratori) / III co(n)s(uli) II / patrono |
| Edición: | <i>CIL</i> II 3556 |

Iluni

23.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción conmemorativa |
| Lugar: | <i>Iluni</i> (Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete), <i>municipium c. R., conuentus Carthaginiensis</i> . |
| Soporte: | Sillar de la muralla |
| Datación: | 10-7 a.C. |
| Lectura: | Imp(erator) Caesar Augustus [diui f(ilius) pont(ifex) max(imus) imp(erator) XIII trib(unicia)] / potestate XV c[o(n)s(ul) XI murum et portam / municipii Iluni]tani s(- - -) o(- - -) [- - - fecit / L(ucius) Domitius Ahe]nobarbu[s leg(atus) pr(o) pr(aetore) prou(inciae) H(ispaniae) C(iterioris) f(aciendum) c(urauit)] / Ner[one Cla]udio Druso [et T(ito) Quintio Crispino co(n)s(ulibus)] |
| Edición: | <i>HEp</i> 5, 1995, 8 y 6, 1996, 14. |

Legio

24.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción votiva. |
| Lugar: | Vegaquemada (León). <i>Conuentus Asturum</i> . |
| Soporte: | Bloque de piedra caliza |
| Datación: | Entre 145 y 160 d.C. |
| Lectura: | [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / [p]ro salute Imp(eratoris) Caes(aris) / [T(iti)] Aeli Hadriani Anto/[nini] Aug(usti) Pii domuiq(ue) / [ei]us Q(uintus) Iunius Rus/[tic]us co(n)s(ul) leg(atus) Aug(u)s(ti) / [pr(o)] pr(aetore) provinciae / [Hisp(aniae) citerioris(?)] |
| Edición: | <i>HEp</i> 9, 1999, 409. |

25.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Inscripción votiva.</i> |
| Lugar: | <i>Legio (León), conuentus Asturum.</i> |
| Soporte: | Lápida votiva. |
| Datación: | 164-167 d.C. |
| Lectura: | Nymphis / T(itus) Pomponius / Proculus / Vitrasius / Pollio co(n)s(ul) / pontif(ex) proco(n)s(ul) / Asiae leg(atus) Aug(usti) pr(o) / pr(aetore) prouinciar(um) / Moesiae Infer(ioris) et / Hisp(aniae) Citer(ioris) / et Faustina eius. |
| Edición: | <i>ERPL</i> n° 55 |

26. (Hispania Nova Citerior Antoniniana)

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción votiva. |
| Lugar: | <i>Legio (León), conuentus Asturum.</i> |
| Soporte: | Ara de mármol. |
| Datación: | Principado de Caracala (211-217 d.C.). |
| Lectura: | Iunoni Re[ginae] / pro salute et im[peri(i)] / diurnita[te imp(eratori)] / M(arci) Aurelli Anto[nini] / Pii Fel(ici)s Aug(usti) et Iu[lia]e / Pia[e] Fel(iciae) Aug(ustae) ma[tris] / Antonini Aug(usti) [cas]-trorum senat[us] / ac patriae. / C(aius) Iul(ius) Cerealis co(n)s(ul) [leg(atus)] / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) pr(ouinciae) H(ispaniae) N(ouae) C(iterioris) An[toni]-niana[e] post diui[sam] / prouinc(iam) primus ab eo [mi(ssus)]. |
| Edición: | <i>ERPL</i> 73 |

27. (Hispania Nova Citerior Antoniniana)

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción votiva. |
| Lugar: | <i>Legio (León), conuentus Asturum.</i> |
| Soporte: | Ara de mármol. |
| Datación: | Principado de Caracala (211-217 d.C.). |

| | |
|----------|---|
| Lectura: | ----- / senat[us ---?] / C(aius) Iul(ius) C[erealis --- ?] / leg(atus) Aug(usti) [pr(o) pr(aetore) pr(ouinciae) H(ispaniae) N(ouae) C(iterioris)] / Anton[iniana post] / diuisam [prouinciam] // primu[s ab eo missus]. |
| Edición: | <i>ERPL</i> 74 |

Oiasso

28.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción conmemorativa |
| Lugar: | <i>Oiasso</i> (Irún), <i>conuentus Caesaragustanus</i> . |
| Soporte: | Ladrillo |
| Datación: | Ca. 14 d.C. |
| Lectura: | M(arcus/-i) Ae(milius/-i) Lep(idus/-i) |
| Edición: | I. Rodá – M. Urteaga, “Marcus Aemilius Lepidus en un ladrillo de Oiasso (Irún)”, en <i>Ab Aquitania in Hispaniam: Mélanges P. Sillières, Pallas</i> 82, 2010, pp. 277-289. |

Panóias

29.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción votiva. |
| Lugar: | Santuario de Panóias (Vila Real, Portugal), <i>conuentus Bracarensis</i> . |
| Soporte: | Inscripción rupestre. |
| Datación: | Finales siglo II-inicios siglo III |
| Lectura: | Diis seue[r]is in hoc / templo lo[ca]t[i]s / aedem G(aius) [C(---) C]alp(urnius) Ru/finus u(ir) [c(larissimus)] |
| Edición: | <i>HEp</i> 6, 1996, 1081. |

Pollentia

30.

| | |
|-----------------------|--|
| Fuente: | <i>Tabula patronatus</i> |
| Lugar: | <i>Pollentia</i> (Polensa, Mallorca), <i>colonia c. R., conuentus Carthaginiensis</i> |
| Soporte: | Bronce. |
| Datación: | 17 de marzo de 10 a.C. |
| Lectura propia: | [Iul]lo Ant[oni]o Fabio Africano / [a(n)te] d(iem)] XVII K(an)endas Apriles. / Ciuitas Bocchoritana ex / insula Baliarum maiorum / patronum co<o>ptaui M(arcum) / Crassum Frugi leiberos / posterosque eius. / M(arcus) Crassus Frugi eos in / suam suorumque / clientelam recepit. / Egerunt C(aius) Coelius C(aii) f(ilius) et / C(aius) Caecilius T(iti) f(ilius) legati. |
| Variantes de lectura: | <i>CIBal</i> 21: l. 5: coptaui; l. 11: C(ai). Balbín Chamorro, <i>Hospitalidad y patronato...</i> cit. n° 64: l. 11: C(ai). |

31.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Inscripción conmemorativa</i> |
| Lugar: | <i>Pollentia</i> (Polensa, Mallorca), <i>colonia c. R., conuentus Carthaginiensis</i> |
| Soporte: | Bloque de mármol |
| Datación: | Siglo I d.C. |
| Lectura: | [---] Aug. leg. pro pr(aetore) f(aciendum) c(urauit) / [---p?]ro leg(ato). <i>dedicauit.</i> |
| Edición: | <i>HEp</i> 2, 62. |

Sagunto

32.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | Sagunto, <i>municipium c. R., conuentus Tarraconensis</i> |
| Soporte: | Pedestal. |
| Datación: | Finales de época flavia-inicios siglo II |
| Lectura: | [Cn(aeo) Baebio (?) ---] / Silano [----] / Iusto Anto[nio (?) ---] / Cn(aei) Lepidi f(ilio) [----] / seuiro equit[um Romanor(um) quaestori] / urbano tribu[no pleb(is) praet(ori) proco(n)s(uli)] / sortito p(rouinciae) H[isp(aniae) Vlt(erioris) Baeticae] / Sagu[ntini] |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /14, 330. |

Segobriga

33.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | Segóbriga, <i>municipium c. R. conuentus Carthaginiensis</i> |
| Soporte: | Pedestal de piedra caliza para posible estatua ecuestre |
| Datación: | Poco precisa: Posterior al gobierno de Sabino, que se produjo prob. entre 1 a.C.-9 d.C. |
| Lectura: | C(aio) Caluisio Sabino / co(n)s(uli) VII uiro epulo(num) / leg(ato) pro pr(aetore) / patrono ex d(ecreto) d(ecurionum). |
| Edición: | G. Alföldy – J. M. Abascal – R. Cebrián, “Nuevos monumentos epigráficos del foro de Segóbriga. Parte primera: inscripciones votivas, imperiales y de empleados del Estado romano”, <i>ZPE</i> 143, 2003, pp. 255-274, nº 5 (esp. pp. 261-265). |

Vxama

34.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica. |
| Lugar: | <i>Vxama</i> (Burgo de Osma, Soria), <i>conuentus Cluniensis</i> . |
| Soporte: | ¿Mármol? Desaparecida, esta inscripción sólo la conocemos gracias a un dibujo. |
| Datación: | <i>Post</i> 14 d.C. (cuando finalizó su gobierno en la provincia). |
| Lectura: | M(arco) Aemilio / Lepido / patrono / d(ecreto) d(ecurionum) |
| Edición: | <i>CIL</i> II 2820 = <i>ERPSo</i> 130. |

Valentia

35.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | <i>Valentia</i> (Valencia), <i>colonia c. R.</i> , <i>conuentus Tarraconensis</i> |
| Soporte: | Pedestal. |
| Datación: | <i>Post</i> 207/208-211/212 |
| Lectura: | M(arco) Nummio / Senecioni Al/bino c(larissimo) u(iro) pont(ifici) / leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) / pr(aetore) Valentini / Veterani et / Veteres patrono / cur(antibus) Brin(nio) Marco et Lic(inio) Quinto |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /14, 21 = <i>IRPV</i> V, 32. |

36. Miliarios

[Los ejemplares fueron hallados en los siguientes lugares: En Portugal, dentro del distrito de Braga: Portela do Homem; Amares; Santa Cruz (Souto, Terras do Bouro); Nazaret (Chorense, Terras do Bouro); Lagodos Chorense, Terras do Bouro); Padroes da Cal (Terras do Bouro); Ponte do Prado (Braga). En España, dentro de la provincia de Ourense: Campo das Mouragas; Montealegre; Ribera de Folgoso; San Xusto de

Cabanillas; Río Bibei (Póboa de Tribes); Ponte Návea (Póboa de Tribes); Os Fontaos (San Xoán do Río).]

| | |
|-----------|---|
| Lugar: | Portela do Homem |
| Soporte: | Miliario |
| Datación: | 81 d.C. |
| Lectura: | Imp(eratori) Tito Caesari Diui / Vesp(asiani) f(ilio) Vespasiano Aug(usto) / pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VIII / imp(eratori) XV p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) VIII / Caes(ari) Diui Vesp(asiani) f(ilio) / [[Domitiano]] / co(n)s(uli) VII / C(aio) Calpetano Rantio / Quirinale Valerio / Festo leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) / Via Noua a Brac(ara) Aug(usta) m(ilia) p(assuum) XXXVIII |
| Edición: | J. M. Solana Sáinz – L. Sagredo San Eustaquio, <i>La política viaria en Hispania: Siglos I-II d.C.</i> , Valladolid, 2008, pp. 207-214, nº143. Los demás miliarios de esta serie siguen este modelo. Remitimos a la lectura presente en los nº 138-152 de la obra citada. |

PROVINCIA TRANSDURIANA

El Bierzo

37.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción jurídica |
| Lugar: | El Bierzo (León) |
| Soporte: | Bronce |
| Datación: | 15 de febrero de 15 a.C. |
| Lectura: | Imp(erator) Caesar Diui fil(ius) Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) / VIII{I} et proco(n)s(ule) dicit / castellanos Paemeiobrigenses ex / gente Susarrorum desciscentibus / ceteris permansisse in officio cog/noui ex omnibus legatis meis qui / Transdurianae prouinciae prae/fuerunt. Itaque eos uniuersos im/munitate perpetua dono quosq(ue) agros et quibus finibus possede/runt Lucio Sestio Quirinale leg(ato) / meo eam prouinciam optinente{m} / eos agros sine controuersia possi/dere iubeo. / Castellanis Paemeiobrigensibus ex / gente Susarrorum quibus ante ea(m) / immunitatem omnium rerum dede/ram eorum loco restituo castellanos / Aliobrigiaecinos ex gente Gigurro/rum uolente ipsa ciuitate eosque / castellanos Aliobrigiaecinos om/ni munere fungi iubeo cum / Susarris. / Actum Narbone Martio / XVI et XV K(alendas) Martias / M(arco) Druso Li/bone Lucio Calpurnio Pisone co(n)s(ulibus) |
| Edición: | Sánchez-Palencia – Mangas (coords.), <i>El edicto del Bierzo...</i> cit. pp. 15-19, con la corrección de ‘Aliobrigiaecinos’ establecida por Hernando Sobrino, “Nota sobre nota...” cit. pp. 577-584. |

PROVINCIA LUSITANIA

Augusta Emerita

38.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | <i>Augusta Emerita</i> (Mérida), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| Soporte: | Peana para una estatuilla de oro. |
| Datación: | 77 d.C. |
| Lectura: | T(ito) Caesari Aug(usti) f(ilio) / Vespasiano pontif(ici) / imp(eratori) XII trib(unicia) pote(state) VII / co(n)s(uli) VI / prouincia Lusitania / C(aio) Arruntio Catellio / Celere leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) / L(ucio) Iunio Latrone / Conimbrige(n)se flamine / prouinciae Lusitaniae / ex auri p(ondo) V |
| Edición: | <i>CIIAE</i> 24 = <i>CIL</i> II 5264. |

39.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica. |
| Lugar: | <i>Augusta Emerita</i> (Mérida), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| Soporte: | Herma |
| Datación: | Post 78 d.C. |
| Lectura: | Q(uintus) Acutius Faienanus / Leg(atus) pr(o) pr(aetore) |
| Edición: | <i>ERAE</i> 104. |

40.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción votiva. |
| Lugar: | <i>Augusta Emerita</i> (Mérida), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| Soporte: | Entablamento de un templete. |
| Datación: | Antes del 155-159? |
| Lectura: | <i>Marti sacrum / Vettilla Paculi</i> |
| Edición: | <i>CIL</i> II, 468. |

41.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | <i>Augusta Emerita</i> (Mérida), <i>colonia ciuium Romanorum</i> , capital provincial. |
| Soporte: | Placa de mármol. |
| Datación: | Post 210-213 d.C. |
| Lectura: | ... Sex(to) Furnio / ... Iuliano / ... [l]eg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prou(inciae) / ... [L]usitaniae, c(larissimo) u(iro) co((n)s(uli) / ... [or]do splendidissimus / ... [E]meritensium / ... [pra]esidi innocentissimo / ... [pa]trono optimo / ... ob merita / ... io modest... |
| Edición: | <i>ERAE</i> 100 = <i>AE</i> 1952, 116. |

Ammaia

42.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción votiva. |
| Lugar: | <i>Ciuitas Ammaiensis</i> (São Salvador de Aramenha, Marvão, Portugal), <i>conuentus Pacensis</i> |
| Soporte: | Bloque de mármol (¿base de estatua?) |
| Datación: | 44/45 d.C. |
| Lectura: | Tib(erio) Claudio / Caesari Aug(usto) / Germanico imp(eratori) III / |

| | |
|----------|--|
| | pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) / III co(n)s(uli) III desig(nato) III / ciuitas Ammaiensis / ex uoto annuo / L(ucio) Caluentio Vetere / Carminio leg(ato) / Tib(eri) Claud(i) Caesaris Aug(usti) / Proculo Pisiri f(ilio) / Omuncione Cilai f(ilio) |
| Edición: | IRCP 615. |

Aritium Vetus

43.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Bronce. Juramento de fidelidad a Calígula. |
| Lugar: | <i>Aritium Vetus</i> (Alvéga, Abrantes, Portugal), <i>conuentus Scallabitanus</i> . |
| Soporte: | Bronce |
| Datación: | 37 d.C., con motivo del acceso al trono de Calígula. |
| Lectura: | C(aio) Vmmidio Durmio Quadrato / leg(ato) C(ai) Caesaris Germanici imp(eratoris) / pro praet(ore) / Iusiurandum Aritiensium: //5 Ex mei animi sententia ut ego iis inimicus / ero quos C(aio) Caesari Germanico inimicos esse / cognouero et si quis periculum ei salutiq(ue) eius inferit intuleritue armis bello interneciui / terra mariq(ue) persequi non desinam quo ad /10 poneas ei persoluerit neque liberos meos / eius salute cariores habebo eosq(ue) qui in / eum hosotili animo fuerint mihi hostes ese / ducam si sciens fallo fefelleroue tum me / liberosq(ue) meos Iuppiter optimus maximus ac /15 diuus Augustus ceteriq(ue) omnes di inmortales / expertem patria incolumitate fortunisque / omnibus faxint a(nte) d(iem) V idus Mai in / Aritiense oppido ueteri Cn(eo) Acerronio / Proculo, C(aio) Petronio Pontio Nigrino co(n)s(ulibus), / mag(istratibus) / Vegeto, Tallici -----ibio --- Arioni. |
| Edición: | CIL II, 172. |

Guardão

44.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Resolución judicial |
| Lugar: | Freguesia de Guardão, Concelho de Tondela, distrito de Viseu, Portugal. |
| Soporte: | <i>Terminus</i> en piedra. |
| Datación: | Entre 2 a.C. y 14 d.C. |
| Lectura: | Imp(erator) Caesar Diu[i f(ilius) Augustus co(n)s(ul)] / XIII trib(unicia) potest(ate) [--- p(ater) p(atriciae) terminus] / august(alis) inter [--- et ---] ieses Q(uintus) Artic <u>u</u> le[ius Regulus leg(atus) Aug(usti)] causa cogni[ta] [---] |
| Edición: | Cortés Bárcena, <i>Epigrafía en los confines...</i> cit. pp. 66-69, nº12. |

Juromenha

45.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Tabula patronatus.</i> |
| Lugar: | Juromenha, Alandroal, Évora, Portugal. <i>Conuentus Pacensis.</i> |
| Soporte: | Placa de bronce |
| Datación: | 21 de enero del 31 d.C. |
| Lectura: | Ti(berio) Caesare V L(ucio) Aelio Seiano / co(n)s(ulibus) / XII K(alendas) Febr(uarias) / Q(uintus) Stertinius Q(uinti) f(ilius) Bassus / Q(uintus) Stertinius Q(uinti) f(ilius) Rufus / L(ucius) Stertinius Q(uinti) f(ilius) Rufinus / hospitium fecerunt cum L(ucio) Fulcinio / Trione leg(ato) Ti(berii) Caesaris liberis / posterisque eius / L(ucius) Fulcinius Trio leg(atus) Ti(berii) Caesaris Q(uintum) / Stertinium Q(uinti) f(ilium) Bassum Q(uintum) Stertinium / Q(uinti) f(ilium) Rufum L(ucium) Stertinium Q(uinti) f(ilium) Rufinum libe/ros posterosq(ue) eorum in fidem clientelamq(ue) / suam liberorum posterorumq(ue) suorum / recepit |

| | |
|----------|---|
| Edición: | S. Lambrino, “L. Fulcinius Trio, gouverneur de Lusitanie, sur une <i>tabula patronatus</i> de Juromenha”, <i>O Arqueólogo Português</i> , nova série 1, 1951, pp. 151-169, esp. p. 155. Véase también <i>IRCP</i> 479 |
|----------|---|

Metellinum

46.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | Hallado en Mengabril (Badajoz), cerca de la antigua <i>Metellinum</i> (Medellín), <i>colonia c. R., conuentus Emeritensis</i> |
| Soporte: | Pedestal de estatua ecuestre |
| Datación: | Período augusteo o tiberiano |
| Lectura: | L(ucio) Caecilio L(uci) f(ilio) / Sca(ptia) Rufo / legato pro(praetore) pr(ouinciae) |
| Edición: | <i>HEp</i> 4, 1994, 159. |

47.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción honorífica. |
| Lugar: | <i>Metellinum</i> (Medellín), <i>colonia c. R., conuentus Emeritensis</i> |
| Soporte: | Pedestal |
| Datación: | 46 d.C. |
| Lectura: | [Ti(berio) Claudi]o Caesari A[ug(usto) Germanico] / [pont(ifici) max(imo) tr]ib(unicia) potest(ate) VI co(n)s(uli) d[esign(ato) IIII p(atri) p(atriae)] / [M(arcus) Porcius M(arci?)] f(ilius) Cato leg(atus) Caes[aris - -] |
| Edición: | <i>CIL</i> II, 608. |

Olisipo

48.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción demasiado fragmentaria |
| Lugar: | <i>Olisipo</i> (Lisboa), <i>municipium c. R., conuentus Scallabitanus</i> |
| Soporte: | ¿? |
| Datación: | Ca. 154 |
| Lectura: | [----]tius Quadratus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) [----] |
| Edición: | <i>CIL</i> II, 189. |

49.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | Inscripción votiva |
| Lugar: | <i>Olisipo</i> (Lisboa), <i>municipium c. R., conuentus Scallabitanus</i> |
| Soporte: | Ara |
| Datación: | Principado de Septimio Severo |
| Lectura: | Soli et Lunae / Cest(ius) Acidius? / Perennis / leg(atus) Aug(usti) / pr(o) pr(aetore) / prou(inciae) / Lusitaniae |
| Edición: | <i>HEp</i> 14, 2005, 448 a. l. 2: <i>CIL</i> II, 258: [Ti]gidius (?) |

50.

| | |
|-------------|--|
| Fuente: | Inscripción votiva |
| Lugar: | <i>Olisipo</i> (Lisboa), <i>municipium c. R., conuentus Scallabitanus</i> |
| Soporte: | Ara |
| Datación: | Entre 200 y 209. |
| 1ª lectura: | Soli Aeterno / Lunae / pro aeternitate im/peri(i) et salute Imp(eratoris) · Ca[es(aris) L(uci)] / Septimi Severi Aug(usti) Pii et / [Imp(eratoris)] Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini / Aug(usti) Pii [[[et P(ubli) Septimi Getae nob(ilissimi)]]] / Caes(aris) et [Iu]liae Aug(ustae) matris · c[a]s[tr(orum)] / Drusus Valer(ius) Coelianus / [- - -]VSI[- - -] |

| | |
|-------------|---|
| | Augustorum / CVMV[- - -]SVALE[- - -]NI[- - -]SVAET / Q(uintus) · Iulius Satur(ninus?) Q(uintus) Val(erius) et Anto/nius [- - -] |
| Edición: | <i>CIL</i> II, 259 |
| 2ª lectura: | Soli Aeterno / Lunae / pro aeternitate im/peri(i) et salute Imp(eratoris) · Ca[es(aris) L(uci)] / Septimi Severi Aug(usti) Pii et / [Imp(eratoris)] Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini / Aug(usti) Pii [[[et P(ubli) Septimi Getae nob(ilissimi)]]] / Caes(aris) et [Iu]liae Aug(ustae) matris · c[a]s[tr(orum)] / Drusus Valer(ius) Coelianus / [- - -]VSI[- - -] Augustorum / cum Vale[r(ia) Iu?]ni[ana? uxor(e) sua / Q(uintus) · Iulius Satur(ninus?) Q(uintus) Val(erius) et Anto/nius [- - -] |
| Edición: | <i>HEp</i> 14, 2005, 448 b. |

PROVINCIA HISPANIA ULTERIOR BÉTICA

Corduba

51.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción votiva en forma de epigrama |
| Lugar: | <i>Colonia Patricia Corduba</i> (Córdoba), capital provincial. |
| Soporte: | Ara de mármol. |
| Datación: | Antes del 129 d.C.? |
| Lectura: | Κρέσσωνα σοι χρυσοῖο καὶ / ἀργύρου ἄμβροτα δῶρα / Ἄρτεμι καὶ Θηρῆς πολλὸν / ἀρειότε[ρα] / Μουσάων. Ἐ[χ]θρῶ δὲ κερήατι / δῶρα κομῖ[ζ]ειν. / εἰς θεὸν οὐχ ὀσίη δαίσπορας / ἄλλοτρίων. / Ἀρριανὸς ἀνθύπατος. |
| Edición: | <i>SEG</i> 26, 1976-77, 1215. |

Alcantarilla

52.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción conmemorativa |
| Lugar: | La Alcantarilla, Utrera, Sevilla |
| Soporte: | Piedra caliza integrada en el pilar central de un puente |
| Datación: | ¿Época augustea? |
| Lectura: | <i>[- - -?] Caes(ar) Augustus pontem [- - -] / [- - -]AV[- - -] / [- - -pro?]O C[os? - - -]</i> |
| Edición: | <i>CILA</i> II, 952 = <i>CIL</i> II, 1285 |

Carteia

53.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Tegulae</i> |
| Lugar: | <i>Carteia</i> (San Roque, Cádiz), <i>conuentus Gaditanus</i> . |
| Soporte: | <i>Tegulae</i> |
| Datación: | 15-13 a.C. |
| Lectura: | M(arcus) Petrucidius M(arci) f(ilius) / leg(atus) pro pr(aetore) M(arci) Lici(nii) |
| Edición: | <i>HEp</i> 15, 2006, 144-150. Reproducimos aquí la reconstrucción “limpia” de esta serie de inscripciones. En cada ejemplar conservado algunas letras han desaparecido. |

Cisimbrium

54.

| | |
|----------------------|--|
| Fuente: | Inscripción administrativa. |
| Lugar: | <i>Cisimbrium</i> (Zambra, Córdoba), municipio flavio de derecho latino, <i>conuentus Astigitanus</i> . |
| Soporte: | <i>Terminus</i> en piedra. |
| Datación: | 83 u 84 d.C. |
| Lectura: | Imp(eratore) Domitiano Ca[es(are) Aug(usto)] / Aug(usti) f(ilio) X co(n)s(ule) term[inus] / Augustalis munici[pi Fla]-/ui Cisimbrensis [ex] / decreto L(uci) Antisti [Rus]-/tici pro co(n)s(ulis). |
| Edición: | CIL II ² /5, 302. |
| Lectura alternativa: | <p>Imp(eratore) Domitiano Ca[es(are) /Aug(usto) IX co(n)s(ule) term[inus] / augustalis munici[pi fla]-/ui Cisimbrensis [ex] / decreto L(uci) Antistii [Rus]-/tici pro co(n)s(ulis).</p> <p>F.J. Navarro, “Nuevos magistrados senatoriales en la península Ibérica. Un complemento a los <i>Fasti Hispanienses</i>”, en J. González(ed.), <i>Ciudades privilegiadas en el Occidente romano</i>, Sevilla, 1999, p. 443-463, esp. p. 454. Este autor es quien ha propuesto el 83 d.C.</p> <p>Seguido por A. Canto en <i>HEp</i> 9, 1999, 295.</p> |

Conobaria

55.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Bronce. Juramento de fidelidad a Augusto y sus hijos. |
| Lugar: | <i>Conobaria</i> (Cerro de Las Palmillas, Las Cabezas de San Juan, Sevilla). <i>Ciuitas stipendiaria</i> (Plin. <i>N.H.</i> 3.3.11), <i>conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | Placa de bronce. |
| Datación: | 6/5 a.C., con motivo de la <i>deductio in forum</i> de Gayo César. Coetáneo del de Samos. |

| | |
|----------|---|
| Lectura: | <p>P(ublio) Petronio T(iti) f(ilio) T[urpiliano proco(n)s(ule)] / M(arco) Alfio G(ai) f(ilio) Lachete [quaestore (o legato pr(o) pr(aetore)] / T(itus) Quinctius T(iti) f(ilius) Silo p(o D) [--- magistri et] / senatus et populus Co[nobariensium] /5 in ea ue[rba iurauerunt] / [e]x mei animi setentia ut eg[o pro salute] / honore uictoria imp(eratoris) Caesa[ris diui f(ilii)] / Augusti pontu[fic]is maxum[i et G(ai) Caesaris] / [A]ugusti f(ili) princ[ip]is iu<u>entutis c[o(n)s(ulis) design(ati)] /10 pontuficis et pro L(ucii) Caesaris Aug[usti f(ilii) et M(arci)] / Agrippae Augusti nepotis seten[tiam] / faciam arma capiam eosdem [amicos] / sociosque quos eis esse intel[lexero] / habebō eosdemque inimicos m[eos esse] /15 statuam quos eorum partibus [animad-] / uertero et si quis aduersus [eos aliquid] / fecerint senserint eos terr[a marique usque] / ad internicionem persequa[r- --]</p> |
| Edición: | CILA II, 990. Con corrección mía en l. 9: design(ati) por design(atii) |

Hasta Regia

56.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Tegulae</i> |
| Lugar: | <i>Hasta Regia</i> (Mesas de Asta, Cádiz), <i>municipium, conuentus Gaditanus</i> . |
| Soporte: | <i>Tegulae</i> |
| Datación: | 15-13 a.C. |
| Lectura: | M(arcus) Petrucidius M(arci) f(ilius) / [leg(atus) pr]o pr(aetore) M(arci) Lici(nii) |
| Edición: | J. González, “M. Petrucidius M. f. legatus pro pr”, en <i>Epigrafía jurídica de la Bética</i> , Roma, 2008, p. 341. |

Iliberri

57.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción honorífica |
| Lugar: | <i>Iliberri</i> (Granada), <i>municipium c. R. conuentus Astigitanus</i> . |
| Soporte: | Pedestal de mármol |
| Datación: | Principado de Marco Aurelio |
| Lectura: | P(ublio) Cornel(io) P(ubli) f(ilio) Gal(eria) Anullino / Iiber(ritano) praef(ecto) Vr[b]i co(n)s(uli) proco(n)s(uli) / prou(inciae) Africae p[ra]et(ori) trib(un)o / pleb(is) q(uaestori) leg(ato) prou(inciae) Nar/bonens(is) proco(n)s(uli) pro]u(inciae) / [Ba]etic(ae) leg(ato) l[e]g(ionis) VII Gem(inae) / [P(iae) F(elicis) le]g(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prou(inciae) / [Ra]et(iae) curat(ori) aluei Ti[be]/[ris et riparum -- -] / - - - - - |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /5, 623 |

Ilipa

58.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Tegula</i> |
| Lugar: | <i>Ilipa Ilia</i> (Alcalá del Río, Sevilla), <i>municipium, conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | <i>Tegula</i> |
| Datación: | 15-13 a.C. |
| Lectura: | a) [Pe]trucidius [M(arci) f(ilius)] / [leg(atus)] pro pr(aetore) b) pr? pr? |
| Edición: | J. González, “ <i>M. Petrucidius M. f. legatus pro pr</i> ”, en <i>Epigrafía jurídica de la Bética</i> , Roma, 2008, p. 340. |

Irni

59.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Lex Irnitana</i> , capítulo 70, (tab. VIII, col. A). |
| Lugar: | <i>Irni</i> , municipio flavio de derecho latino (El Saucejo, Sevilla), <i>conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | Plancha bronce |
| Datación: | Época flavia; probl. 91 d.C |
| Lectura: | R(ubrica). De actore municipum constituendo <deque> praemio mercede- /ue eius. / Quoi quibusque mandetur permittaturue ut nomine munici- /p((i))um municipi Flauī Irnitani agant petantue quit is, aut, si cum iis agetur petetur<ue> quit ab <ii>, nomine eorum iudicium / accipiat, decurionum conscriptorumue cognitio consti-/tutioque esto, cum eorum non minus quam duae tertiae / partes ader[u]nt, d[um e]um el*i*gant cui per edictum eius qu*i* prouin-/ciae praeit [p]rocu[rat]ori aut cognitōri esse licebit, idemque conti-/tu<u>nto quantu[m ei ei]((u))sue, qui municipibus municipi Flauī Irni-/tani petet pet[en]t petiturus petituriue erunt petierit <petierintue> iudicium-/ue eorum nom[i]ne acceperit acceperint accepturus erit acce[e]p-/turiue erunt, p[r]aemi opere((ue)) nomine dari oportet((b))at. |
| Edición: | F. Lamberti, <i>Tabulae Irnitanae: Municipalità e "ius romanorum"</i> , Napoli, 1993, pp. 329-330. |

60.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Lex Irnitana</i> , capítulo 80 (tab. IX, col. A) |
| Lugar: | <i>Irni</i> , municipio flavio de derecho latino (El Saucejo, Sevilla), <i>conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | Plancha de bronce |
| Datación: | Época flavia; probl. 91 d.C |
| Lectura: | R(ubrica). De pecunia public((a))e mutua sumenda. S[i] quas pecunias mutuas in usus rei publicae municipi Flauī Irnitani su- |

| | |
|----------|--|
| | /m[en]das esse decuriones conscriptiue eius municipi, cum eorum / non [mi]nus [t]res partes adfuerint, iurati per tabellam decreuerint, ea-/eque pecuniae expensae municipibus latae erunt, dum ne plura in an-/nos singulos quam HS (sestertium) L (milia) expensa((s)) ferantur nisi ex auctoritate eius qui / ei prouinciae praerit, ea*e* pecunia*e*, quae ita expensae latae((que)) erunt muni-/cipe municipi Flauii Irnitani d(ari) debe<n>to. |
| Edición: | Lamberti, <i>Tabulae Irnitanae</i> ... cit. p. 344. |

61.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Lex Irnitana</i> , cap. 84 entero (tab. IX, col. B) |
| Lugar: | <i>Irni</i> , municipio flavio de derecho latino (El Saucejo, Sevilla), <i>conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | Plancha de bronce |
| Datación: | Época flavia; probl. 91 d.C |
| Lectura: | <p>R(ubrica). Quarum rerum et ad quantam pecuniam in eo municipio i(uris) d(ictio) sit.</p> <p>Qui eiu*s* municipi municipes incolaeue erunt q(ua) de(e) r(e) ii inter se suo alte-/riu[s]ue nom*i*n<e> qui munic*eps* incola((e))ue sit priuatim intra fines eius / municipi agere petere persequi uolent, quae res HS (sestertium) ∞ (mille) minorisue / erit, neque ea res diuidua quo fraus huic legi fieret facta sit fiatue / aut de capite libero, deue maiore pecunia quam HS (sestertium) ∞ (mille) praeiudicium / futurum erit sponsiue (([s]ponsioneue)) facta futuraue erit, neque / ea res agetur qua in re u*i * factum sit quod non ((eius)) ex interdicto / decretoue iussuue eius qui iure dicundo praerit factum sit, ne-/que de libertate, neque pro socio aut fiduciae aut mandati qu-/od d(olo) m(alo) factum esse dicatur, aut depositi, aut tutelae cum quo / qui((s)) suo nomine [q]uid earum rerum fecisse dicatur, aut lege / Laetoria, aut de sponsione quae in probrum facta<m> esse dic*a*-/tur, aut d(e) d(olo) m(alo) et fraude, aut furto cum homine libero libera-/ue, aut cum seru[o] d[um i]d <furtum> ad dominum</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>dominamue perti-/nebit, aut iniuri[aru]m cum homine libero libera((m))ue / agetur, eaue de re [nullum] praeiudicium futurum sit de ca-/pite libero: de is re[bus etia]m, si uterque, inter quos ambige((re))tur, / uolet, de ceteris quo[que o]mnibus de quibus priuatim age-/tur neque in iis prae[iudici]um de capite libero futurum / erit, et omnium rerum q[uoqu]e de uadimonio promittendo in eum / [locum in] quo is erit qui [e]i prouinciae praerit futurusue esse ui-/debitur eo die in quem ut uadimonium promittatur postula-/bitur, Iuir(i) qui ibi i(ure) d(icundo) praerit iuris dictio iudicis arbitri / recuperatorum ex is qui ibi propositi erunt, iudici datio / addictio, it[e]m eadem condicione, de eo quod HS (sestertium) ∞ (mille) minoris-/ue erit, aedilis qui ibi erit iuris dictio, iudicis arbitri re-/ciperatorum ex eodem genere iudicique datio addictioq(ue) / esto.</p> |
| Edición: | Lamberti, <i>Tabulae Irnitanae</i> ... cit. pp. 348-350. |

62.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Lex Irnitana</i> , cap. 85 (tab. IX, col. B) |
| Lugar: | <i>Irni</i> , municipio flavio de derecho latino (El Saucejo, Sevilla), <i>conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | Plancha de bronce |
| Datación: | Época flavia; probl. 91 d.C |
| Lectura: | <p>R(ubrica). Magistratus ut in publico habeant album eius qui prouinciam optinebit, exque eo ius dicant. / Quaecumque edicta, quasue formulas iudiciorum, quasque spon-/siones, stipulationes, satis acceptiones, ((praescriptiones)) ex-/ceptiones, praescriptiones, quaeque interdicta ((i))is qui ei pro-/uinciae praerit in ea prouincia proposita habebit, quae eo-/rum ad iuris dictionem eius magistratus qui <in> municipio Fla-/uio Irnitano* i(ure) d(icundo) p(raerit) pertinebunt, ea omnia is in eo munici-/pio, in suo magistratu, quotidie maiorem partem cuiusque di-/ei proposita proscriptaque habeto ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint), et ad ea inter-/dicta, edicta, easque formulas, sponsiones, stipulationes, satis</p> |

| | |
|----------|---|
| | ac-/ceptiones, ((esceptiones)) exceptiones, praescriptiones in eo municipio ius dicatur, iudicia dentur fiant exerceanturue, et / it quod aduersus h(anc) l(egem) non fiat utique ex hac lege licebit / [fieri sine] d(olo) m(alo). |
| Edición: | Lamberti, <i>Tabulae Irnitanae</i> ... cit. pp. 350-352. |

63.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Lex Irnitana</i> , cap. 86 (tab. IX col. B, líneas 42-52; tab. IX, col. C, ll. 1-28) |
| Lugar: | <i>Irni</i> , municipio flavio de derecho latino (El Saucejo, Sevilla), <i>conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | Plancha de bronce |
| Datación: | Época flavia; probl. 91 d.C |
| Lectura: | R(ubrica). De iudicibus legendis proponendis. / Qu[i II]uiri in [e]o municipio i(ure) d(icundo) praerunt de communi sententia, / aut, si u[ter eo]rum aberit, aliaue quae causa ei inciderit quo / minus [eam] rem agere possit, alter, in diebus quinque proxi-/ [mis qui]bus iure dicundo praesse coeperit poteritque, iudi-/ [ces legi]to ex decurionibus conscriptisue tot quod ei uidebi-/ [tur qui ei] prouinciae praerit, qui eo anno non debebunt / [munere alio simul fu]ngi, ex reliquis municipibus qui praeter / [dec]urion[es conscriptosu]e ingenui erunt tot quod ei uidebitur / [q]ui ei pro[u]inciae praerit, non minores quam XXV annorum, / quibus ip[s]is quorumu[e] cui[u]s patri auoue paterno proauoue / patern*o* aut patri cuius in potestate erit non minor quam HS (sestertium) V (milia)/ res sit, quos maxime idoneos arbitratur l[e]gique iudices pro <re> com-/muni municipum eius municipi ((ese)) iurauerint coram decurionibus conscriptisue non paucioribus quam decem; dum ne quem legat cui morbus causa erit quo minus rebus [i]u[di]candis / eo anno operam dare possit, quiue LXV annorum maiorue erit, qu[i]-/ue aedilis quest[or]u[e] er[i]t, quiue rei publicae causa aberit, quiue / rei communi[s mu]n[i]cipum eius municipi causa aberit, quiue / in ea regione [si]ne |

| | |
|----------|---|
| | <p>d(olo) m(alo) non erit et ob eam rem eo anno rebus / iudicandis ope[r]am d[a]re non poterit, quive in earum qua cau-(sa eirt ex qua eum in [un]merum decurionum conscriptorum-/ue legi inue eo num[e]ro ese non oportebit, nisi ob eam rem / ese legiue [non o]p[ort]ebit quot minore i patri auo paterno / proa[u]ou[e paterno] aut patri in cuius potestate sit res erit, / ut quam eum in numerum decurionum conscriptorumue / leg[i] esseue in eo n[u]m[er]o o[p]ortea[t]. Eosque quam aequalis / summa[e i]n d[e]cu[ri]as tres discribito. Q[ui] ita iudices lec[ti] / discriptiue erunt, ii [eo] anno iudices rerum priuatarum / in eo municipio h(ac) l(ege) sun[t]o, eorumque ómnium i[s] qui i(ure) d(icundo) p(raerit) / praenomina nomina item patrum praenom[i]na et ipso-/rum tribus cognomina in tabulis scripta aput tribunal / suum per omnes reliquos eius anni diez maiorem partem / cuiusque die[i pr]oposit[a h]a[b]eto, ita u[t] d(e) p(lano) [r(ecte)] l(egi) p(ossint). Deque iis i[u]-/dicibus in eas res, [de] qu[ibus] rebu[s r]ecuperatores dari non / oportebit, iudi[cem arbitru]m<ue> quem ex h(ac) l(ege) oportebit da-/ri <dato> addic<i>to iudica[re] iubeto; nue quem alium iudicem ne[ue] / arbitrum dato neue iudi[care] iubeto inuito alterutro [aut] / si plures erunt aliquo eorum inter quos quid [amb]ibetu[r].</p> |
| Edición: | Lamberti, <i>Tabulae Irnitanae</i> ... cit. pp. 352-356. |

Itálica

64.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Tegula</i> |
| Lugar: | Itálica (Santiponce, Sevilla), <i>colonia c. R., conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | <i>Tegula</i> |
| Datación: | 15-13 a.C. |
| Lectura: | [M(arcus) Petr]ucidius M(arci) f(ilius) / [leg(atus) pr]o pr(aetore) Alex(ander) st(ruxit?) |

| | |
|----------|---|
| Edición: | J. González, “ <i>M. Petrucidius M. f. legatus pro pr</i> ”, en <i>Epigrafía jurídica de la Bética</i> , Roma, 2008, pp. 340-346, esp. pp. 340-341. |
|----------|---|

65.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Senatusconsultum de pretiis gladiatoribus</i> , ll. 40-42. |
| Lugar: | Itálica, <i>colonia c. R., conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | Placa de bronce. |
| Datación: | Ca. 177 d.C., bajo M. Aurelio y Cómodo. |
| Lectura: | <p>ll. 40-42:</p> <p>Vtque ea opseruat<i><i>o</i> a lanistis quam diligentissime exigatur, iniungendum / his qui prouinciae praesidebunt et legatis uel quaestoribus uel legatis legionum uel iis qui ius dicunt c(larissimis) u(iris) aut procuratores maximorum / principum quibus prouinciae rector mandauerit, is etiam procurator (!) qui prouinciae praesidebunt.</p> <p>ll. 47-55 :</p> <p>Quod si quibus ciuitatibus / res publica tenior est, non eadem seruentur quae aput fortiores ciuitates scripta sunt, nec supra modum uirium onerent, sed hactenus in eundem ut qu<a>e in publicis priuatisque rationibus repperientur pretia summa ac media ac postrema, si quidem prouinciarum eae ciuitates sunt ab eo / qui praesidebit prouinciae opseruentur, ceterarum autem iuridico uel curatore {pro}ui{nci}ae uel classis praetoriae praefecto uel procuratori / maxumorum principum uel cuiusque ciuitatis potestas qu<a>e ibi prima erit. Atque ita rationibus decem retrouersum annorum inspectis exemplis / munerum in quaque ciuitate editorum consideratis constit[uan]tu ab eo cuius arbitratus erit de tribus pretis uel, si melius ei uidebitur / ex eo modo quem peraequ[e] fie[r]i legit et trifariam pretia diducantur, eaque forma etiam in posterum seruetur. Sciantque u(iri) c(larissimi) qui procon-/sules paulo ante profecti sunt intra suum quisque annum it negotium exequi se oportere, <e>t ii etiam qui non sortito prouincias / regunt intra annum.</p> |

| | |
|----------|---|
| Edición: | J. Gómez-Pantoja, <i>Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Romano: VII. Baetica, Tarraconensis, Lusitania</i> , Roma, 2009, nº 3. (ver también <i>CILA</i> II, 339). |
|----------|---|

Munigua

66.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Epistula Titi ad Muniguenses</i> |
| Lugar: | <i>Munigua</i> (Villanueva del Río y Minas, Sevilla), municipio Flavio del <i>conuentus Hispalensis</i> . |
| Soporte: | Plancha de bronce |
| Datación: | 7 de septiembre del 79 d.C. |
| Lectura: | Imp(erator) Titus Caesar Vespasianus Aug(ustus), pontif(ex) max(imus), / trib(unicia) potest(ate) VIII, imp(erator) XIII, co(n)s(ul) VII, P(ater) P(atriciae) salutem / dicit (<i>vacat</i>) IIIuir(is) et decurionibus Muniguens(ium) / Cum ideo appellaueritis, ne pecuniam, quam debebatis Seruilio / Pollioni ex sententia Semproni Fusci, solueretis, poenam iniustae / appellationis exsigi a uobis oportebat, sed ego malui cum in- /dulgencia mea quam cum temeritate uestra loqui et sester-/tia quingenta millia nummorum tenuitati publicae / quam praetexitis, remisi. Scripsi autem Gallicano, amico / meo, proco(n)su(uli), pecuniam, quae adiudicata est Pollioni, nume-/rassetis ex die sententiae dictae, usurarum uso computa-/tione{m} liberaret (<i>uacat</i>) / redditus uectigaliorum uestrorum, quae conducta habuisse Pol-/lionem indicatis, in rationem uenire aequom est, ne quid / hoc nomine rei publicae apsit (<i>vacat</i>) uale<te> / dat(um) VII idus septembr(es). |
| Edición: | <i>CILA</i> II, 1052. |

Obulcula

67.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Primera <i>Epistula Antonini Pii ad Obuculenses</i> |
| Lugar: | <i>Obulcula</i> , (La Moncolava, Fuentes de Andalucía, Sevilla) municipio Flavio del <i>conuentus Astigitanus</i> . |
| Soporte: | Plancha de bronce |
| Datación: | Principado de Antonino Pío. |
| Lectura: | [Imp(erator) Caesar Diui Hadriani filius Diui Traiani ne]pos Diui Neruae pronepos T(itus) Aelius Hadrianus A[ntoninus] / [Aug(ustus) Pius pontifex maximus tribunicia potestate X]XII co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) salutem dicit IIIIvir(is) et d[ecurionibus Obulculensium?] / [--- a] Lucilio Africano proco(n)s(ule) c(larissimo) u(iro) aduersus ++[---] / [--- exempl]um decreti mei subici iussi. Haec legato [---] / [--- bene] ualete. (vac. 4?) Quintillo et Prisco co(n)s(ulibus) ++[---] / [--- be]neficio cuius auctor non probat[us esset ---] / [--- Obulcu]lensium et longa huius exaction[is consuetudine? ---] / [--- uice?]simam exigi. Post quae adiecit ++[---] / [---?] (vac.) / [Imp(erator) Caesar Diui Hadriani filius Diui Traiani nepos Diui Neruae pr]onepos T(itus) Aelius Had[rianus Antoninus Aug(ustus) Pius] / [pontifex maximus tribunicia potestate --- co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) salutem dicit II]IIuir(is) et de[curionibus Obulculensium?. ---] |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /5, 1322. |

Sabora

68.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Epistula Vespasiani ad Saborenses</i> |
| Lugar: | <i>Sabora</i> (Cañete la Real, Málaga), municipio flavio latino, <i>conuentus Astigitanus</i> . |
| Soporte: | Plancha de bronce |
| Datación: | 29 de julio del 77 d.C. |
| Lectura: | <i>Imp(erator) Cae(sar) Vespasianus Aug(ustus) Ponti-/fex Maximus tribuniciae / potestatis VIII Imp(erator) XIX consul / VIII P(ater) P(atriciae) salutem dicit IIIIuiris et / decurionibus Saborensium / Cum multis difficultatibus infirmita-/tem uestram premi indicetis per-/mitto uobis oppidum sub nomine meo ut / uoltis in planum extruere uecti-/galia quae ad Diuo Aug(usto) accepisse dici-/tis custodio si qua noua adicere uol-/tis de his proco(n)s(ulem) adire debebitis ego / enim nullo respondente constitu-/ere nil possum. Decretum uestrum / accepi VIII ka(lendas) Aug(ustas) legatos dimi-/si IIII ka(lendas) easdem ualete. / IIuiri C(aius) Cornelius Seueruset M(acus) Septimi-/us Seuerus publica pecunia in aere / inciderunt.</i> |
| Edición: | <i>CIL II²/5, 871.</i> |

Sevilla provincia.

69.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Senatus consultum de Cnaeo Pisone patre</i> |
| Lugar: | Provincia de Sevilla. |
| Soporte: | Bronce |
| Datación: | 20 d.C. |
| Lectura: | l. 1: |

| | |
|----------|---|
| | <p><i>S(enatus) c(onsultum) de Cn(aeo) Pisone patre propositum N(umerio) Vibio Sereno proco(n)s(ule).</i></p> <p>ll. 165-172:</p> <p><i>Et quo facilius / totius actae rei ordo posteriorum memoriae tradi posset atque ho scire<nt>, quid et / de singulari moderatione Germ(anici) Caesa(ris) et de sceleribus Cn(aei) Pisonis patris / Senatus iudicasset, placere uti oratio, quam recitasset princeps noster / itemq(ue) haec senatus consulta in {h}aere incisa, quo loco Ti(berio) Caes(ari) Aug(usto) uide-/retur ponere<n>tur item hoc s(enatus) c(onsultum) {hic} in cuiusque prouinciae celeberruma{e} / urbe eiusque i<n> urbis ipsius celeberrimo loco in aere incisum figere-/tur itemq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in hibernis cuiusq(ue) legionis at signa figeretur.</i></p> |
| Edición: | <p>A. Caballos – F. Fernández – W. Eck, <i>El senadoconsulto de Gneo Pisón padre</i>, Sevilla, 1996, p. 127 = <i>Das senatus consultum de Cn. Pisone patre</i>, Munich, 1996, p. 50.</p> |

Siarum

70.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Tegula.</i> |
| Lugar: | <i>Siarum</i> (La Cañada, Utrera, Sevilla), <i>municipium</i> , <i>conuentus Hispalensis</i> |
| Soporte: | <i>Tegula</i> |
| Datación: | 15-13 a.C. |
| Lectura: | <p>a) M(arcus) Petrucidi]us M(arci) f(ilius) / leg(atus) pro pr(aetore)</p> <p>b) Cn(aei) Tarq(uinii?)</p> |
| Edición: | J. González, “ <i>M. Petrucidius M. f. legatus pro pr</i> ”, en <i>Epigrafía jurídica de la Bética</i> , Roma, 2008, p. 343. |

71.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Senatusconsultum de honoribus Germanici decernendis</i> (“ <i>Tabula Siarensis</i> ”), Frag. II, col B, ll. 20-27. |
| Lugar: | <i>Siarum</i> (La Cañada, Utrera, Sevilla), <i>municipium, conuentus Hispalensis</i> |
| Soporte: | Bronce |
| Datación: | 19 d.C. |
| Lectura: | <i>Itemque hoc s(enatus) c(onsultum) in aere incideretur cum eo s(enatus) c(onsulto) quod factum est a(nte) d(iem) XVII kal(endas) Ian(uarias) idque aes in Palatio in / porticu quae est ad Apollinis in templo, quo senatus haberetur, figeretur. Item senatum uel-/le atque aequom censere, quo facilius pietas omnium ordinum erga domum Augustam et consen-/sus uniuersorum ciuium memoria honoranda Germanici Caesaris appareret, uti co(n)s(ules) hoc / s(enatus) c(onsultum) sub edicto suo proponerent iuberentque mag(istratus) et legatos municipiorum et coloniar-/um descriptum mittere in municipia et colonias Italiae et in eas colonias quae essent in / prouinciis, eos quoque qui in prouinciis praessent recte atque ordine facturos si hoc s(enatus) c(onsultum) de-/disse<n>t operam ut quam celeberrumo loco figeretur.</i> |
| Edición: | <i>CILA</i> II, 927; J. González, <i>Tácito y las fuentes documentales: SS.CC. de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis) y de Cn. Pisone patre</i> , Sevilla, 2002, p. 308. |

Vrso

72.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Lex Vrsonensis</i> , cap. 127. |
| Lugar: | <i>Colonia Iulia Genetiua Vrsonensis</i> (Osuna, Sevilla), <i>colonia c.R., conuentus Astigitanus</i> . |
| Soporte: | Plancha bronce |
| Datación: | La ley es del 44 a.C., pero la copia conservada se realizó en época flavia. |

| | |
|----------|---|
| Lectura: | <p>Quicumque ludi scaenici c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) fient, ne quis in or-//chestram ludorum spectandor(um) causa praeter mag(istratum) / proue mag(istratu) p(opuli) R(omani), quiue i(ure) d(icundo) p(raerit) [e]t si quis senator p(opuli) R(omani) est erit / fuerit, et si quis senatoris f(ilius) p(opuli) R(omani) est erit merit, et si / quis praef(ectus) fabrum eius mag(istratus) proue magistrat(u), / qui prouinc(iarum) Hispaniar(um) ulteriorem {Baeticae para-/erit}optinebit, erunt, et quos ex h(ac) l(ege) decurion(um) loco / <d(ecreto)> decurion(u)m sedere oportet oportebit, praeter eos / qui s(upra) s(cripti) s(unt) ne quis in orchestram ludorum spectan-/ dorum causa sedeto, neue quisque mag(istratus) proue mag(istratu) / p(opuli) R(omani) q(ui) i(ure) d(icundo) p(raerit) v ducito, neue quern quis sessum ducito, / neue in eo loco sedere sinito, uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) (u(olet)) s(ine) d(olo) m(alo).</p> |
| Edición: | M. Crawford, <i>Roman Statutes I</i> , Londres, 1996, p. 414. |

73.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | <i>Lex Vrsonensis</i> , cap. 130. |
| Lugar: | <i>Colonia Iulia Genetiua Vrsonensis</i> (Osuna, Sevilla), <i>colonia c. R., conuentus Astigitanus</i> . |
| Soporte: | Plancha bronce |
| Datación: | La ley es del 44 a.C., pero la copia conservada se realizó en época flavia. |
| Lectura: | <p>Ne quis Iluir aed(ilis) praef(ectus) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) quicunque erit ad decurion(es) c(oloniae) G(enetiuae) referto neue decurion(es) / consulito neue d(ecretum) d(ecurionum) facito neue d(e) e(a) r(e) in tabulas p(ublicas) referto neue referri iubeto / neue quis decur(io) d(e) e(a) r(e), q(ua) d(e) r(e) a(getur), in decurionib(us) sententiam dicito neue d(ecretum) d(ecurionum) scri-/bito, neue in tabulas publicas referto, neue referundum curato, quo quis / senator senatorisue f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetiuae) patronus atoptetur sumatur fiat, nisi de tri-/um partium (decurionum) senten[t(ia)] per</p> |

| | |
|----------|---|
| | <p>tabellam fac{i}t<a> et nisi de eo homine de quo / tum referetur consuletu[r, d(ecretum)] d(ecurionum) fiat, qui, cum e(a) r(es) a(getur), in Italiam sine imperio priuatus / erit. Si quis aduersus ea ad [dec]urion(es) rettulerit d(ecretum)ue d(ecurionum) fecerit faciendumu<e> / curauerit inue tabulas p[ublicas] rettul<er>it referriue iusserit siue quis in decurionib(us) / sententiam di[x]erit d(ecretum)ue [d(ecurionum) scrips]erit, in tabulas publicas rettulerit referendumue / curauerit, in res sing(ulas), quo[tienscu]mque quit atuersus ea fecerit, <is> (sestertium) (centum milia) c(olonis) c(oloniae) <G(enetiuae)> I(uliae) / d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui [eor(um) uole]t rec(iperatorio) iudic(io) aput Iluir(um) interregem praef(ectum) actio / petitio persecutioqu[e ex h(ac) l(ege) i(us) pot]est(as)que e(sto).</p> |
| Edición: | Crawford, <i>Roman Statutes</i> I, cit. pp. 415-416. |

74.

| | |
|-----------|--|
| Fuente: | <i>Lex Vrsonensis</i> , cap. 131. |
| Lugar: | <i>Vrso</i> (Osuna, Sevilla), <i>colonia c. R., conuentus Astigitanus</i> . |
| Soporte: | Plancha bronce |
| Datación: | La ley es del 44 a.C., pero la copia conservada se realizó en época flavia. |
| Lectura: | <p>Neue quis Iluir aed(ilis) praef(ectus) [c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) quicu]mque erit ad decuriones c(oloniae) G(enetiuae) referto neue d(ecuriones) con-//sulito neue d(ecretum) d(ecurionum) facito neue d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas referto neue referri iubeto / neue quis decurio d(e) e(a) r(e) in decurionib(us) sententiam dicito neue d(ecretum) d(ecurionum) scribito ne-/ue in tabulas publicas referto neue referundum curato, quo quis s<e>nator / senatori[s]ue f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) hospes atoptetur, hospitium tessera{s}ue hospi<tali>s cum / quo fi[at, n]isi de maio<r>is p(artis) decurionum sententia per tabellam fac{i}t<a> et nisi / de eo [h]omine, de quo turn referetur consuletur, d(ecretum) d(ecurionum) fiat, qui, cum e(a) r(es) a(getur), in Italiam / sine imperio priuatus erit. si quis aduersus ea ad</p> |

| | |
|----------|--|
| | decuriones rettulerit d(ecretum)ue / d(ecurionum) fe[c]erit faciendumue curauerit inue tabulas publicas rettulerit re-/f[e]rriue iusserit siue quis in decurionibus sententiam dixerit d(ecretum)ue d(ecurionum) / scripserit, in tabul(as) public(as) rettulerit referendumue curauerit, / is in res sing(ulas) quotienscumque quit aduersus ea fecerit, (sestertium) (decem milia) c(olonis) c(oloniae) / G(enetiuae) luliae d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui eorum uolet recu(peratorio) iudic(io) (vacat) / aput Iluir(um) pr(a)ef(ectum)ue actio petitio persecutioque h(ac) l(ege) ius potest(as)que esto. |
| Edición: | Crawford, <i>Roman Statutes</i> cit. p. 416. |

Villanueva de Córdoba

75.

| | |
|-----------|---|
| Fuente: | Inscripción administrativa. |
| Lugar: | Villanueva de Córdoba (Córdoba). |
| Soporte: | <i>Terminus augustalis</i> en piedra. |
| Datación: | 122/123 d.C. |
| Lectura: | Trifinium / in[t]er Sacilienses Eporense[s] / Solienses ex sentent[ia] / Iuli Proculi iudic(is) / confirmatu(m) ab / Imp(eratore) Caesar(e) / Hadriano / Aug(usto). |
| Edición: | <i>CIL</i> II ² /7,776. |

RESUMEN

Esta tesis doctoral persigue una revalorización del papel jugado por los senadores que gobernaron las provincias hispanas a lo largo de un período crucial de la historia de Roma, el Principado, cuando se convirtió en un imperio que aseguró su perduración con la progresiva integración socio-política de los provinciales, en particular de las élites. Los gobernadores de rango senatorial eran los más poderosos “men on the spot” del Imperio en su periferia, pero los estudios dedicados a ellos son parciales o tienen una perspectiva demasiado amplia, y generalmente tienden a favorecer los ejemplos ofrecidos por las provincias orientales –a causa de sus más abundantes fuentes de sus ciudades.

Este estudio busca analizar la influencia de los gobernadores en las relaciones centro-periferia en Occidente a través del caso específico de Hispania, un caso de estudio especialmente apropiado porque permite comparar el *modus operandi* y las relaciones sociales de gobernadores de dos provincias imperiales (Hispania Citerior y Lusitania) y de una proconsular (Bética) y analizar su influencia en la vida de las comunidades de algunas de las áreas más romanizadas de Occidente – el valle del Betis y la costa levantina– y en aquéllas de una región conquistada al inicio del Principado: el Noroeste.

La metodología de este estudio está condicionada por la naturaleza de las fuentes: literarias (Plinio el Joven, Tácito, Dión Casio, Floro, Orosio...), epigráficas (leyes municipales, *epistulae* imperiales, senadoconsultos, sentencias judiciales, inscripciones votivas y honoríficas), los autores clásicos jurisprudenciales del Digesto (*de officio proconsulis* de Ulpiano...) y, en menor medida, numismáticas (particularmente la *caetra*). La aproximación a ellas se basa en la crítica filológica y sociológica de los textos complementada con el registro arqueológico. Hago un acercamiento a las actividades de los gobernadores romanos en Hispania en tres ámbitos cruciales diferentes que están estrechamente unidos y se complementan: su jurisdicción, su intervención en las otras estructuras y esferas que definen a la vida de las ciudades

(finanzas, edificios públicos, acuñaciones, tributos, censo y organización territorial) y, finalmente, su relación con las élites locales, expresada en dos manifestaciones diferentes: el culto imperial y otros actos de lealtad provincial hacia el emperador, y el patronato de los gobernadores sobre comunidades e individuos. Cada tema ocupa uno de los capítulos en que se dividen estas tres partes.

La información de las leyes de los municipios de la Bética y los diferentes registros epigráficos de las sentencias de los gobernadores de las provincias hispanas (en *Munigua*, *Cisimbrium*, Vilanueva de Córdoba, *Tarraco*, Guardao...) muestran que los grandes poderes jurisdiccionales que tenían los convertían en los únicos jueces de las causas penales, de los más graves asuntos locales y de los conflictos territoriales. Su edicto jurisdiccional tuvo una gran repercusión como marco normativo provincial y como símbolo de la integración de los provinciales en el modo romano de vida. Gracias a su mando de varias legiones y, desde época flavia, de la *legio VII Gemina* los gobernadores de la Hispania Citerior fueron los verdaderos defensores de la península.

Respecto al papel de los gobernadores en la “tutela del sistema municipal” –i.e. su misión de supervisar y proteger la estabilidad económica de las colonias y municipios y el progreso de la evolución cívica de las comunidades poco romanizadas– la epigrafía hispana revela que ellos debían supervisar las finanzas de las ciudades privilegiadas con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de sus instituciones. El ámbito en el que los gobernadores hicieron una intervención más profunda fue la supervisión de las construcciones públicas: aquellas pagadas con fondos públicos y aquéllas necesarias para el bienestar de la comunidad que eran prometidas por sus élites. También promovían el desarrollo urbano de las comunidades menos romanizadas y coordinaban a los legionarios expertos que tenían que proyectar y construir las infraestructuras provinciales donadas por el poder imperial (puentes, carreteras, acueductos...). Aunque tenemos escasas pruebas epigráficas de estas intervenciones, el ejemplo de Cayo Calpetano en el Noroeste es paradigmático: supervisó la construcción de un puente en *Aquae Flaviae* y de la *uia Noua* (79-81). Como Agrícola en Britania, ayudó al desarrollo de las comunidades locales. Los gobernadores contribuyeron también a extender la economía monetaria (con la *caetra*, en época augustea) y fueron los supervisores de dos estructuras que cambiaron la vida provincial y la forma en la cual sus habitantes se veían a sí mismos: la ordenación territorial (*termini*), y el censo.

Respecto al culto provincial, las fuentes muestran que fue introducido en Hispania por los gobernadores: primero en la recién creada provincia Transduriana del Noroeste (22-19 a.C.): las aras dedicadas a Augusto (y Roma) por Sestio Quirinal fueron la primera consagración del culto imperial en Occidente. Tras la muerte de Augusto y especialmente desde período flavio, el culto provincial fue institucionalizado en todas las provincias gracias a ellos y los *concilia prouinciae* lo tenía como primer interlocutor. Los gobernadores de las tres provincias intervinieron personalmente en otros actos de lealtad provincial: *iusiuranda* (ejemplos de *Conobaria*, en Bética, y *Aritium*, Lusitania), *uota pro salute principis* (*Legio*, *Olisipo*), honores públicos...

En estas páginas se ha revelado una clara imagen de los gobernadores provinciales romanos de Hispania durante el Principado: Por un lado, tuvieron un gran poder y capacidad de acción para intervenir en los ámbitos estratégicos de las colonias y municipios para garantizar su estabilidad y auto-gestión, y promovieron el desarrollo cívico de las comunidades menos romanizadas y la integración de sus élites. Por otro, los gobernadores fueron los agentes imperiales más influyentes en las dinámicas centro-periferia, implantando las políticas del poder central en sus provincias y como mediadores entre las élites de las comunidades privilegiadas y el emperador. Una consecuencia de esto fue que las comunidades provinciales buscaron su patronato. No hay diferencias entre las competencias y *modus operandi* de los *legati Augusti pro praetore* de Hispania Citerior y Lusitania y los procónsules de la Bética. Pero el gobernador de la Citerior tenía un verdadero poder militar gracias a su legión, que le otorgaba la preeminencia política y administrativa en Hispania.

RIASSUNTO

Il centro nella periferia: Le competenze e attività dei governatori romani nelle province iberiche durante il Principato (27 a.C.-235 d.C.)

Questa tesi di dottorato cerca di rivalutare il ruolo giocato dai senatori che governarono le province iberiche lungo un periodo decisivo della storia di Roma, il Principato, quando divenne un impero che garantì la sua persistenza con la progressiva integrazione socio-politica dei provinciali, in particolare le élites. I governatori di rango senatorio erano i più potenti “men on the spot” dell’Impero nella sua periferia, ma gli studi dedicati a loro sono parziali o hanno una prospettiva troppo larga, e generalmente mettono più attenzione sugli esempi forniti dalle province orientali –perché le sue città hanno più testimonianze.

Questo studio cerca analizzare l’influenza dei governatori sui rapporti centro-periferia nell’Occidente attraverso il caso specifico di *Hispania*, un caso di studio particolarmente appropriato perché permette di comparare il *modus operandi* e i rapporti sociali dei governatori di due province imperiali (*Hispania Citerior* e Lusitania) e di una proconsolare (Betica) e analizzare il suo intervento nella vita delle comunità di alcune delle regioni più romanizzate dell’Occidente –la valle del Betis e la costa mediterranea– e in quelle di una regione appena conquistata all’esordio del Principato: il Nordovest.

La metodologia di questo studio è condizionata dalla natura delle fonti: letterarie (Plinio il Giovane, Tacito, Dione Cassio, Floro, Orosio...), epigrafiche (leggi municipali, epistulae imperiali, senatusconsulta, sentenze giudiziarie, iscrizioni votive e onorifiche), gli autori classici giurisprudenziali del Digesto (*de officio proconsulis* di Ulpiano...) e, meno importante, numismatiche (particolarmente la *caetra*). L’approssimazione parte della critica filologica e sociologica dei testi combinate col registro archeologico. Faccio una approssimazione alle attività dei governatori romani

in *Hispania* in tre ambiti decisivi differenti che stanno strettamente collegati e si complementano: la loro giurisdizione, il loro intervento nelle altre strutture e ambiti che definiscono la vita delle città (finanze, costruzioni pubbliche, coniazioni, tributi, censimento e organizzazione territoriale) e, finalmente, il loro rapporto con le élites local, espressa in due manifestazioni differenti: il culto imperiale e altri atti di lealtà provinciale verso l'imperatore, e il patronato dei governatori sulle comunità e gli individui. Ogni tema occupa uno dei capitoli in cui si dividono queste tre parti.

L'informazione delle leggi dei *municipia* della Betica e i differenti registri epigrafici delle sentenze dei governatori delle province ispaniche (a *Munigua*, *Cisimbrium*, Vilanueva de Córdoba, *Tarraco*, Guardao...) mostrano che i grandi poteri giurisdizionali che avevano li facevano diventare gli unici giudici delle cause penali, dei più gravi affari locali, e i regolatori dei critici conflitti territoriali. Il loro editto giurisdizionale ebbe una grande ripercussione come marco normativo provinciale e come simbolo dell'integrazione dei provinciali nel *modus vivendi* romano. Grazie al loro comando di varie legioni e, dal periodo flavio, della *legio VII Gemina*, i governatori della *Hispania Citerior* furono i veri difensori della penisola.

Quello che riguarda il ruolo dei governatori nella "tutela del sistema municipale" –i.e. la loro missione di soprintendere e proteggere la stabilità economica delle colonie e *municipia* ed il progresso dello sviluppo civico delle comunità poco romanizzate– l'epigrafia ispana rivela che dovevano sorvegliare le finanze delle città privilegiate al fine di garantire il corretto funzionamento delle sue istituzioni. L'ambito nel quale i governatori fecero un intervento più profondo fu la sorveglianza delle costruzioni: quelle pagate con fondi pubblici e quelle indispensabili per il benessere delle comunità che erano state promesse dalle loro élites. Potevano anche promuovere lo sviluppo urbano delle comunità meno romanizzate e coordinavano agli esperti tecnici legionari che dovevano progettare e costruire le infrastrutture provinciali donate dal potere imperiale (ponti, vie, acquedotti...). Anche se abbiamo scarse testimonianze epigrafiche di questi interventi, l'esempio di Caio Calpetano nel Nordovest è paradigmatico: controllò la costruzione di un ponte a *Aquae Flaviae* e della *vía Noua* (79-81). Come Agricola in Britannia, aiutò allo sviluppo delle comunità local. I governatori contribuirono anche a diffondere l'economia monetaria nel Nordovest (con la *caetra* nel periodo augusteo), e furono i soprintendenti di due strutture che cambiarono la vita

provinciale e la forma nella quale i suoi abitanti si vedevano a se stessi: l'ordinamento territoriale (termini) ed il censo.

Quello che riguarda al culto provinciale, le testimonianze mostrano che fu introdotto in *Hispania* per i governatori: prima nella appena creata provincia Tranduriana nel Nordovest (22-19 a.C.): le are dedicate a Augusto (e Roma) da Sestio Quirinale furono la prima consacrazioni del culto imperiale in Occidente. Dopo la morte di Augusto e particolarmente dal periodo flavio in poi il culto provinciale fu istituzionalizzato in tutte le province grazie a loro e i *concilia prouinciaae* l'avevano come primo interlocutore. I governatori delle tre province intervennero personalmente negli altri atti di lealtà provinciale all'imperatore: *iusiuranda* (esempi di *Conobaria*, nella Betica, e *Aritium*, nella Lusitania), *uota pro salute principis* (*Legio*, *Olisipo*), onori pubblici...

In queste pagine si è rivelata una chiara immagine dei governatori provinciali romani di *Hispania* durante il Principato: Da una parte, ebbero un grande potere e capacità d'azione per intervenire negli ambiti strategici delle colonie e dei *municipia* al fine di garantire la loro stabilità e auto-gestione, e promossero lo sviluppo civile delle comunità meno romanizzate e l'integrazione delle loro élites. Dall'altra, i governatori furono gli agenti imperiali più influenti nelle dinamiche centro-periferia, svolgendo le politiche del potere centrale nelle loro province e come mediatori fra le élites delle comunità privilegiate e l'imperatore. Una conseguenza di questo fu che le comunità provinciali cercarono il loro patronato. Non ci sono differenze fra le competenze e *modus operandi* dei *legati Augusti pro praetore* di *Hispania Citerior* e Lusitania ed i proconsoli della Betica. Ma il governatore della *Citerior* aveva un vero potere militare grazie alla sua legione, che le offriva la preminenza política e amministrativa in *Hispania*.

ABSTRACT

The Center in the Periphery: The Duties and Activities of Roman Governors in the Spanish Provinces during the Principate (27 B.C.-AD 235)

This PhD thesis is a reassessment of the role played by the senators who governed the Spanish provinces throughout a pivotal period of Roman history, the Principate, when it became an empire that guaranteed its persistence with the progressive socio-political integration of the provincials, especially the élites. The governors of senatorial rank were the most powerful “men on the spot” of the Empire in its periphery, but the studies dedicated to them are partial or have a too large perspective, and generally tend to favour the examples provided by the eastern provinces –because of the more abundant sources of their cities.

This study aims to analyse their influence in the center-periphery relationship in the West through the specific case of *Hispania*, a very appropriate case study because it allows us to compare the *modus operandi* and the social relations of governors of two imperial provinces (*Hispania Citerior* and Lusitania) and one proconsular (Baetica) and analyse their influence in the life of communities of some of the most romanised areas of the West –the Baetis valley and the Mediterranean coast– and in those of a region conquered at the beginning of the Principate: the North-West.

The methodology of this study is determined by the nature of the sources: literary (Pliny the Younger, Tacitus, Dio Cassius, Florus, Orosius...), epigraphic (*leges municipales*, imperial *epistulae*, *senatus consulta*, legal sentences, honorific and votive inscriptions), classic legal authors of *Digest* (Ulpian’s *de officio proconsulis*...) and, less important, numismatic (specially the *caetra* type). The approach to them is based on the philological and sociological analysis of the texts, with the complementary archaeological record. I make an approach to the activities of the Roman governors in *Hispania* in three different decisive spheres that are closely linked and are complement each other: their jurisdiction, their intervention in the other structures and spheres that define the civic life (finances, public constructions, mints, tributes, *census* and territorial

organization) and, finally, their relationship with the local élites, express in two different features: the imperial cult and other acts of provincial loyalty towards the emperor, and the patronate of governors upon communities and privates. Each theme occupies one of the chapters that composed the three parts of the study.

The information of the *leges* of the *municipia* of *Baetica* and the different records of sentences of governors of all the spanish provinces (at *Munigua*, *Cisimbrium*, Villanueva de Córdoba, *Tarraco*, Guardao...) show that the great jurisdictional and coercitive powers they had made them the most important judge of criminal cases, of local affairs and the regulators of the critical territorial conflicts. Their jurisdictional edict had a great impact as a normative provincial setting and as symbol of integration of the provincials in the roman civic way of life. Thanks to their command of various legions and, from Flavian period, the *legio VII Gemina* the governors of Hispania Citerior were the true defenders of the peninsula.

Concerning the role of the governors in the “*tutela* of the municipal system” – i.e., their mission of supervise and protect the economic stability of *coloniae* and *municipia* and the progress of civic evolution of less romanized communities– the spanish epigraphy reveals that they must supervise the finances of privileged communities in order to guarantee its persistence. The sphere in which the governors made a deeper intervention was the supervision of the public constructions: those payed with public funds and those necessary for the welfare of the community that were promised by their élites. They promoted the urban development of the less romanized communities and managed the legionary experts who had to project and build the provincial infrastructures donated by the imperial power (bridges, highways, aqueducts...). Although we have little epigraphic record of these interventions, the exemple of Caius Calpetanus in the North-West is paradigmatic: he supervised the construction of a bridge in *Aquae Flaviae* and of the *uia Noua*. Like Agricola in *Britannia* he helped to the development of local communities. In the augustan period, the governors helped to extend the monetary economy in the Northwest (with the *caetra*), and were the supervisors of two structures that changed the provincial life and the way in which their inhabitants saw themselves: the territorial organization (*termini*) and the *census*.

Concerning the provincial cult, the sources show that it was introduced in Hispania by the governors: first in recent Transduriana provincia in the North-West (22-19 B.C.): the *arae* dedicated to Augustus (and Rome) by Sestius Quirinalis were the first consecration to the imperial cult in the West. After the death of Augustus and especially from the Flavian period the provincial cult was institutionalized thanks to them and the *concilium provinciae* had them as their first interlocutors. The governors of the three provinces intervened personally in the other acts of provincial loyalty: *ius iuranda* (examples of *Conobarta*, in Baetica, and *Aritium*, in Lusitania), *uota pro salute principis* (*Legio, Olisipo*), public honors...

This pages have revealed a clear image of the roman provincial governors of Hispania during the Principate: On the one hand, they had a great power and capacity of action to intervene in the strategic spheres of the *coloniae* and *municipia* in order to guarantee their stability and self-management, and they promoted the civic development of the less romanized communities and the integration of their élites. On the other hand, the governors were the most influent imperial agents in the center-periphery dynamics, implementing the policies of central power in their provinces and as mediators between the élites of the privileged communities and the emperor. A consequence of this fact was that provincial communities looked for their patronate. There are no differences between the duties and *modus operandi* of *legati Augusti pro praetore* of Citerior and Lusitania and the proconsuls of *Baetica*. But the governor of Hispania Citerior had a true military power thanks to his legion that offers to him the political and administrative preeminence in *Hispania*.

